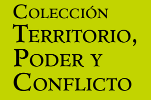
¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL NEGOCIAR CON EL ELN?

Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020



Andrés F. Aponte González y Fernán E. González González (editores)

Prólogo de Socorro Ramírez

¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?

Desde 1991, el ELN ha incursionado en diálogos de paz con todos los gobiernos, esto equivale a decir que más de la mitad de su vida se la ha pasado intentando una salida política y negociada al conflicto armado en el que participa, sin mayores éxitos, salvo el acumulado que significa el Preacuerdo del Palacio de Viana con el gobierno de Ernesto Samper, los Acuerdos de Maguncia o de Puerta del Cielo con la sociedad a comienzos del gobierno de Andrés Pastrana, el Acuerdo Base con el gobierno de Álvaro Uribe, la Agenda de Caracas y el Acuerdo de Cese el Fuego Bilateral Temporal y Nacional con el gobierno de Juan Manuel Santos; acumulado que es una impronta en la historia, pero que no ha servido para consolidar una salida definitiva de esta organización insurgente de la guerra.

Son múltiples factores los que han incidido para que cada intento de hacer las paces con el ELN sea un fracaso casi que anunciado con anticipación, al punto que se ha creado un mito: el de la dificultad, lo cual deriva en un impedimento mayor, porque no deja de ser un prejuicio justificado, pero prejuicio al fin y al cabo. Aun resuena en mi memoria la frase de Enrique Santos Calderón: "los elenos enredan hasta un aplauso", al explicar por qué el presidente Santos no abría negociaciones con esta guerrilla al mismo tiempo que conversaba con las FARC.

Indagar en las razones o causas de la dificultad obliga a escudriñar desde los orígenes mismos de esta insurgencia, ahondando en los vericuetos de su trasegar, por los distintos territorios y los protagonismos de sus personajes que hacen parte de su historia, para encontrar claves que ayuden a descifrar la palabra y el hacer tan disperso, tan heterogéneo y a veces tan intemporal de una organización insurgente que está enclavada en le corazón de la historia colombiana del último medio siglo.

Este libro da cuenta de la mayor investigación académica intentada, juiciosa y documentada, con unos resultados sorprendentes y esclarecedores, pero que no pone punto final, sino todo lo contrario, abre puertas para mayores indagaciones en la búsqueda de una comprensión más acertada, más cercana a la realidad sobre qué son los elenos, y más distante de "esa realidad" que creemos que son.

Este libro es el resultado de un esfuerzo colosal de jóvenes investigadores, que como contrapunto a otras publicaciones y otros actores, ofrecen valiosas perspectivas a la hora de buscar entender la mentalidad y actuaciones de un actor de primer orden, con el que se tendrá que contar en el propósito de pretender cerrar el conflicto armado interno, con mayores posibilidades de no morir en el intento.

Carlos Arturo Velandia Jagua
Promotor de Paz

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL NEGOCIAR CON EL ELN?

Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL NEGOCIAR CON EL ELN?
Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020

Andrés F. Aponte González
y Fernán E. González González
(editores)

Daniel Ricardo Amaya Alba
Andrés F. Aponte González
Juan Diego Forero Pineda
Fernán E. González González
Valentina González Ramírez
Charles Larratt-Smith
Henry Ortega Palacio



¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?
Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020

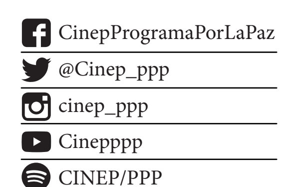
Cra 5ª n.º 33B-02
PBX: (+57 1) 245 6181
www.cinep.org.co

Esta publicación se realizó con el apoyo de Diakonía.

Editor general de la colección Territorio, Poder y Conflicto: Fernán E. González González
Edición: Andrés F. Aponte González y Fernán E. González González
Coordinación editorial: Edwin Parada Rodríguez
Corrección de estilo: Azucena Martínez Alfonso y Fabio Leonardo Rodríguez
Diagramación, diseño de cubierta y elaboración de mapas: Juanita Giraldo Polanco
Fotografía de cubierta: Lena Mucha
Impresión: DGP Editores S.A.S

Primera edición, marzo de 2021
Bogotá, D. C., Colombia
ISBN (impreso): 978-958-644-292-3

Impreso en Colombia – *Printed in Colombia*





Contenido

Agradecimientos

Este libro es el resultado del esfuerzo colectivo de personas, comunidades, organizaciones, instituciones e investigadores que lo hicieron posible, gracias a que desde su rol pusieron en juego capacidades, voluntad política, talentos investigativos y recursos financieros de cooperación, con el fin de entregarle al país, elementos de análisis para comprender las complejas realidades sobre porqué es diferente y difícil la negociación de la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La dirección del Cinep/Programa por la Paz quiere empezar agradeciendo a la embajada de Suecia en Colombia, que mediante el acompañamiento de Diakonia, en cabeza de su director César Grajales y Sandra Pacheco, ofrecieron el apoyo e impulso incondicional al trabajo de investigación realizado por el equipo de Conflicto y Paz del Cinep/Programa por la Paz. Sin duda alguna, sin este acompañamiento, sin el decidido apoyo político y sin los recursos financieros, este esfuerzo investigativo no hubiera sido posible.

Asimismo, la dirección del Cinep/PPP agradece a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), quienes, en cabeza de Carlos González, Edelma Gómez y Victoria Figueroa no solo nos abrieron un espacio de discusión, sino que también ayudaron a nutrir y validar las diversas lecturas territoriales. También, debemos un alto agradecimiento a las organizaciones y plataformas sociales regionales por sus aportes, en concreto al “Foro Interétnico Solidaridad Chocó” —FISCH—, al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y a la Fundación Progresar en Norte de Santander, con quienes no solo intercambiamos ideas y realizamos el trabajo de campo, sino que, de igual forma, contribuyeron a una mejor comprensión de las realidades regionales en cada territorio indagado.

La dirección del Cinep/PPP reconoce, de manera especial, la contribución a esta obra de la profesora Socorro Ramírez Vargas, quien no solo

prologa este trabajo, también le brindó un apoyo y acompañamiento decidido a su realización. Fueron innumerables las conversaciones, críticas y consejos durante el desarrollo del trabajo investigativo. Gran parte del resultado expuesto en estas páginas se debe a ella. También, debemos resaltar y visibilizar la generosidad en la dedicación de tiempo y las contribuciones hechas por Carlos Velandia. Las largas conversaciones sostenidas por miembros del equipo de Conflicto y Paz del Cinep/PPP sobre su vivencia al interior del ELN no solo permitieron a los investigadores comprobar ciertas intuiciones e ideas fuerza de este texto, sino que, de igual forma, su conocimiento nos permitió cuestionar ciertos supuestos que teníamos, así como profundizar en otros temas que el equipo de investigadores no consideraba tan importantes, pero que a fin de cuentas eran cruciales para entender las dinámicas organizacionales y territoriales del ELN. Igualmente, debemos mencionar a Elkin Gutiérrez de la Fundación Corpotepas quien ofreció aportes significativos de su experiencia de vida, y nos abrió paso en los territorios para permitir conocer y dialogar con excombatientes y exmandos medios de las FARC, de tal manera que se conocieran las dinámicas territoriales de las zonas que estábamos indagando.

Especial mención se debe hacer a las críticas y comentarios realizados por los colegas investigadores Juan Diego Prieto y Camilo Acero, los cuales resultaron muy pertinentes para reenfocar la parte introductoria de este libro y el marco analítico. Además, se agradecen los comentarios de Javier Revelo, John Jairo Rincón García, Ingrid Bolívar Ramirez y Javier Benavides Torres, al hacernos un llamado sobre las dinámicas particulares del ELN en las diversas regiones del país, así como por el cuidado a tener mayor atención por el heterogéneo vínculo que tiene este grupo con las organizaciones sociales. También, debemos resaltar el apoyo dado por parte del profesor Francisco Gutiérrez y sus críticas al lente interpretativo; a la profesora Elizabeth Wood y sus recomendaciones para comprender la dimensión organizacional; y a la profesora Arlene Tickner por sus aportes cuidadosos en este esfuerzo.

Al investigador Kyle Johnson le reconocemos su aporte por la gran cantidad de fuentes documentales que sirvieron como insumos para gran parte de los capítulos de esta publicación. Igual mención se merece el profesor Alejo Vargas Velásquez, quien realizó una lectura juiciosa a la parte conclusiva y contribuyó con valiosos comentarios; asimismo, a Luis Eduardo Celis, con quien existió un intercambio de fuentes documentales, numerosas conversaciones y de su mano se construyó un espacio de diálogos e intercambios denominado Seminario Estado-ELN, donde se discutían con rigor diversos elementos de la interacción entre el grupo insurgente y el Estado colombiano, y que se recoge, de manera particular, en la parte introductoria de esta obra.

Finalmente, la dirección del Cinep/PPP agradece al equipo de Conflicto y Paz, orientado académicamente por Fernán E. Gonzalez G., S. J., quien escribió el amplio y rico capítulo final de conclusiones y recomendaciones de este libro. A quienes en varias etapas de la elaboración de la investigación y fueron sus coordinadores: la investigadora Camila Carvajal Oquendo, quien al inicio estuvo al frente del proyecto de investigación y luego colaboró con el trabajo de campo en zonas del Catatumbo y Chocó, además de aportar también pensando y discutiendo la estructura de las lecturas territoriales. Sus reportes y análisis de las realidades territoriales fueron vitales para alimentar las lecturas territoriales del presente libro; al investigador Andrés F. Aponte González, quien coordinó durante un largo año la etapa final de la investigación, escribió y editó varios capítulos del libro, en especial la introducción y la región chocoana. Igualmente, un reconocimiento a los investigadores Henry Ortega Palacio y Daniel R. Amaya Alba, quienes aportaron a los análisis de la acción política, social y armada del ELN en las regiones de Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y Cauca-Nariño. A Charles Larratt-Smith, investigador visitante del Cinep/PPP entre 2014 y 2018, por su participación en este volumen con un capítulo sobre el ELN en la región de Arauca, un valioso aporte que recoge años de trabajo de campo e investigación en esta zona como parte de su disertación doctoral presentada con éxito en la Universidad de Toronto. Y, de manera significativa, la dirección del Cinep/PPP agradece al investigador Víctor Barrera Ramírez, responsable de la línea de Estado y Paz, sus aportes y comentarios no solo ayudaron a cuestionar ciertas presunciones y lugares comunes para leer al ELN, sino que aportó un importante acervo de la literatura internacional para leer a esta insurgencia desde otras experiencias en otras latitudes del mundo.

La dirección del Cinep/PPP cierra estos agradecimientos diciendo que esta investigación quiere ayudar a comprender las dinámicas y complejidades del conflicto y la violencia en que aún se encuentra inmerso nuestro país. Luego de más de cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz es evidente que se hace más que necesario abrir nuevos espacios de diálogos para terminar con la confrontación armada en las regiones de la Colombia profunda. En efecto, esta obra se inscribe en el esfuerzo ético de recordarles a las organizaciones sociales, a la academia, a la insurgencia, a la institucionalidad pública y social, así como a toda la sociedad, que la confrontación armada persiste, con nuevas dinámicas, agentes y lógicas, pero, al fin al cabo, con los mismos impactos perversos y dolorosos: masacres, desplazamientos, asesinatos, desapariciones, amenazas, eliminación de líderes y lideresas sociales, etc. Y que, por eso mismo, tenemos que buscar incansablemente nuevas estrategias,

ser creativos en las alternativas y persistentes en construir caminos de diálogo y de transformación contra la reedición de las nuevas violencias en Colombia.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General
Cinep/Programa por la Paz

Prólogo

¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Aportes desde una investigación académica

Socorro Ramírez

Son múltiples los aportes de este libro construido en un esfuerzo investigativo interdisciplinario, desde el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Empezando por su mirada de largo plazo y amplio espectro con una fuerte base documental cualitativa y cuantitativa, que el equipo de este centro revisó o construyó en diálogo tanto con quienes han tenido que ver o han estudiado la problemática relacionada con el ELN como con sectores sociales de los territorios afectados.

La forma como está estructurado permite asimilar sus enormes aportes. Arranca con un capítulo crucial para el desarrollo de todo el texto, en el que, con una mirada histórica, examina cómo se ha organizado y actuado ese grupo a escala local-regional, y cómo sus diversos emprendimientos armados territoriales se posicionaron ante el proyecto ELN nacional. Así, trata de descifrar al ELN actual, sus posibilidades y limitaciones tanto para hacer la guerra como para construir la paz. Sigue con los casos de las cinco regiones con mayor presencia de esa guerrilla, nutridos con recorridos y entrevistas en viajes a esos territorios. Al final, hace una síntesis de las tendencias regionales-nacionales, ubica ahí la comparación de los casos locales para, finalmente, sacar conclusiones que se transforman en recomendaciones a tener en cuenta por las organizaciones sociales y por las instituciones, en materia de seguridad y de construcción de Estado con las comunidades periféricas, si se quiere abrirle paso a la negociación de paz.

Contexto y etapas

Esa mirada general, específica y comparativa del primer capítulo del libro permite examinar el contexto en que ese grupo surge a mediados de los años sesenta y sus diversas etapas posteriores.

Como demuestra su autor, esa guerrilla arranca por el voluntarismo de personas de origen urbano, ideologizadas y radicalizadas, que asumen como agotadas las vías democráticas y reformistas, y se aferran al peor camino posible, la guerra, para hacerle frente con las armas a un período histórico crítico. Colombia salía del sangriento período llamado La Violencia y del bipartidismo del Frente Nacional, que controlaba el régimen político, excluía sectores, no avanzaba en reformas ni en el desarrollo rural. Todo eso generó movimientos estudiantiles, sindicales, campesinos, que, además de protestar, hicieron no pocas propuestas de cambio. Esas personas que dieron origen al ELN, en lugar de fortalecer la iniciativa social que se manifestaba incluso desde las áreas periféricas, actuaron como foco guerrillero, trataron y siguen procurando radicalizar y aprovechar el descontento, desgastar las fuerzas estatales y, alegando un nacionalismo antioligárquico-antiimperialista, creyeron que podían seguir el camino de la guerrilla castrista que había llegado al poder en Cuba.

Ese contexto le permite al autor revisar grandes etapas del ELN, que muestran sus momentos de despegue y derrota, su capacidad de adaptación y recomposición, las recurrentes diferencias y divisiones entre frentes y organismos de dirección. Una etapa estuvo marcada por tensiones entre comandantes urbanos y rurales, por el mando caudillista de Vásquez Castaño, por fusilamientos y ajusticiamientos de opositores para zanjar contradicciones políticas, y por la derrota en Anorí. Otra etapa fue de fragmentación e intento de reagrupamiento, con el liderazgo del cura Pérez y "Gabino", a partir de emprendimientos regionales, expansión a áreas estratégicas y generación de una estructura confederada cambiante que aumentó la autonomía de los frentes, sin lograr frenar las fuerzas centrífugas ni las disidencias. A esta etapa la denomina un salto al vacío con retroceso y marginalización territorial. Una más, muestra —salvo en Arauca— un ELN agazapado en las retaguardias de sus retaguardias para evadir la acción contrainsurgente estatal y la expansión paramilitar, y para tratar de recomponerse por marginalización y vinculación con las economías territoriales. Aparecen nuevas contradicciones entre frentes respecto a su coordinación con el Comando Central (COCE) y la Dirección Nacional (DN), que generan desequilibrio interno de fuerzas. La hegemonía militarizada del frente Domingo Laín propicia reacomodos y nuevos procesos territoriales en el Pacífico colombiano y a ambos lados de la frontera colombo-venezolana. Los frentes y comandantes

asumen, a discreción, posiciones ante directrices de la DN y del COCE, por ejemplo, sobre vínculos con economías territoriales legales e ilegales —petróleo, minería, contrabandos, drogas—, pero también sobre si participan en conversaciones con el gobierno colombiano para buscar una salida negociada al conflicto armado.

Así, el autor *muestra una guerrilla* moralista en sus fines y criminalizada en sus medios, derrotada táctica y estratégicamente, pero no de espíritu. Y se pregunta si se está abriendo otra etapa, con nuevos líderes más autónomos, con una guerrilla federada, con problemas de acción colectiva, asentada sobre bases sociales heterogéneas y anclada en economías territoriales legales, semilegales e ilegales, y que cada vez más utiliza medios criminales para perseguir sus fines políticos.

Papeles regionales diferenciados

Para caracterizar las regiones y el tipo de papel que ha impuesto el ELN donde se ha establecido, los autores de la segunda parte del libro revisaron la ubicación geográfica y las condiciones topográficas, los ocupantes originales indígenas o mestizos, los momentos de colonización desde regiones del interior país, y la falta de apoyo institucional significativo a esos procesos, las organizaciones y movilizaciones sociales que se generaron y su exigencia de actuación eficaz del Estado.

Las tres partes del libro ofrecen una mirada de conjunto y de largo plazo que ayuda a examinar, desde la geografía y la historia, más de medio siglo de actuación del ELN a nivel territorial y organizacional, la heterogeneidad de sus estructuras, sus articuladores ideológicos y militares. Eso les permite a los autores analizar en qué medida el proceso de configuración regional facilitó o no la inserción del ELN; comparar sus frentes de guerra en cuanto a trayectoria y desarrollo militar, tipo de violencia desplegada, orden territorial configurado con la imposición de su regulación forzada, uso y abuso de las conflictividades sociales, y vínculo con las economías ilegales y de extracción de recursos. Y al libro le otorga el valor de mostrar las enormes diferencias, en todo sentido, entre las guerrillas que han actuado en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, incluida la forma en que han hecho la guerra y han decidido poner fin a la confrontación armada.

Al examinar los frentes del ELN y sus impactos locales, el estudio ofrece en la segunda parte una caracterización y un análisis comparativo de las cinco regiones más representativas y relevantes en que ese grupo se ha concentrado. Al frente guerrillero en Arauca lo cataloga como un actor estructurante en lo social, económico, político y con capacidad militar, que, además, ayudó al ELN a sobrevivir o recomponerse, y con el cual ha emprendido nuevos procesos de reacomodo territorial y acción armada

dentro y fuera del país. En el Catatumbo, define la actuación del ELN como actor determinante sin ser estructurante, así como los enormes costos locales que genera su disputa por la hegemonía militar, económica, política y social. En Cauca-Nariño muestra cómo ha sido marginal en lo militar pero con capacidad de interferir procesos organizativos locales. En Chocó, señala que el ELN prioriza el vínculo con economías ilegales del oro, coca y madera, y actúa como ejército de ocupación que trata de impedir a las comunidades locales resistir, negociar, avanzar y les genera altos daños. En el sur de Bolívar, precisa que actuó, inicialmente, como actor estructurante de la sociedad regional, pero, luego, la militarización de sus relaciones con los pobladores, los esfuerzos por controlar la vida política local y la extracción de recursos, afectaron la articulación social territorial.

Ante esa diversidad de actuación y con los problemas de articulación que ha mostrado, el libro lleva a preguntarse qué mantiene unido al ELN, cuando la recomposición federalista se desdibuja por el desequilibrio de fuerzas producido por el diferente desempeño de los frentes en lo militar y financiero. Ahí ubica el creciente papel del frente Domingo Laín. Mira también el lugar de lo ideológico, así como de las motivaciones locales según su ubicación en zonas de colonización periférica, limítrofes entre el mundo caribe y el andino, en la proximidad al Caribe y al Pacífico, en zonas fronterizas con Venezuela, Ecuador y Panamá.

El examen de toda esa variedad de situaciones les permite a los autores hacer un acercamiento diferenciado al desempeño militar y financiero de los frentes de guerra, a sus relaciones con las problemáticas de cada región y con sus redes de poder, así como a los intentos de esa guerrilla de suplir, a su manera, las funciones estatales en la regulación de muchos procesos y hasta de la convivencia local.

¿Una guerrilla binacional?

El libro muestra cómo desde los años ochenta el frente Oriental usaba poblaciones de Apure, ámbito fronterizo del lado venezolano colindante con Arauca, como refugio y retaguardia, y desde el Catatumbo traspasaba otras zonas de frontera como la del Perijá. Además, atacó el puesto militar entre el departamento del Cesar y el estado Zulia, alegando que lo hacía en defensa de los campesinos colombianos reprimidos o expulsados por la Guardia venezolana. Y llevó a cabo otro tipo de acciones supuestamente en defensa de migrantes colombianos que, según sus denuncias, eran tratados como esclavos en Venezuela. Fueron muchos los impactos en ambos lados que suscitaron las acciones del ELN en la frontera de Colombia con Venezuela, entre los que se destacan el desplazamiento de poblaciones, los daños ambientales a ecosistemas

estratégicos compartidos por los dos países y la afectación del mutuamente ventajoso entrecruzamiento de las dos economías que se dio bajo la integración andina.

El libro alude, aunque no desarrolla, una dimensión actual muy problemática, que bien ameritaría esfuerzos investigativos como los de este estudio impulsado desde el Cinep. Se trata del empeño del ELN en ampliar su presencia y acción político-militar transnacionalizándola. Por intereses ideológicos, políticos y económicos, trata de repetir en Venezuela lo que ha hecho sobre todo el frente Oriental desde Arauca, esto es, imponer un dominio territorial, control y regulación social para mostrar alguna legitimidad del otro lado de la frontera.

Son muchas las denuncias y testimonios desde unos diez estados venezolanos que muestran cómo en los últimos años el ELN amplió su injerencia en Venezuela ya no solo como espacio de refugio para huir de la acción estatal o de ofensivas paramilitares, ni solo como retaguardia para descanso, reabastecimiento y protección, sino actuando como guerrilla binacional. Han crecido los campamentos fijos no solamente en los estados vecinos de Apure, Zulia y Táchira, donde ha ampliado su presencia y actividad, sino también en los estados Amazonas (en Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo) y Bolívar. En el Arco Minero del Orinoco cobra extorsiones donde predominan actores armados ilegales en enclaves de explotación de oro, coltán y tierras raras. Esa extracción ha sido incrementada por el régimen de Nicolás Maduro ante la crisis económica y de la industria petrolera, así como ante las sanciones de Estados Unidos. Muchos estudios[1] muestran que el ELN ha sido de cierta forma invitado por algunos poderes locales o nacionales a esos territorios venezolanos, recogiendo su experiencia y estrategia de imposición de órdenes paralelos o sustitutivos a los estatales, para ayudar a que el régimen recoja recursos mineros a cualquier costo y sin importar los efectos sobre la población civil.

---

1 Por ejemplo, International Crisis Group: (2017) Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz. Latin America & Caribbean (63), https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace; (2018) La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas. Latin America & Caribbean (68), https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/68-missing-peace-colombias-new-government-and-last-guerrillas; https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/eln-en-venezuela/; (2019) Calming the restless Pacific: Violence and crime on Colombian's coast. *Latin America & Caribbean* (76), https://www.ecoi.net/en/file/local/2014211/076+Calming+the+Restless+Pacific.pdf
Human Rights Watch. (2020). "*Los guerrilleros son la policía*". *Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure*. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/colombia0120sp_web.pdf
Ideas para la Paz. (2020). ¿*Qué hacer con el ELN*? *Opciones ante una derrota militar lejana y un diálogo improbable*. http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_QuehacerELN_Final.pdf

Así, el ELN estaría multiplicando su presencia ya no solo en zonas fronterizas, sino también del interior de Venezuela, donde disputa o ejerce control social y dominio territorial, o sobre economías y mercados ilegales, en especial en zonas de extracción minera, con graves riesgos para esas poblaciones y para la seguridad binacional. Al ampliar y prolongar la confrontación armada, y hacerla más compleja por su acción trasnacional, el ELN reduce la posibilidad de negociar un cese al fuego y de hostilidades, y un acuerdo que termine su acción armada en Colombia, e involucra al régimen de Nicolás Maduro como un actor central en cualquier perspectiva con esa guerrilla.

Intentos de diálogo entre el Gobierno colombiano y el ELN

Además de analizar la evolución y presencia actual del ELN, el libro ofrece otro significativo aporte desde el contexto nacional y territorial para entender lo que pasó en los cuatro primeros intentos de diálogo del gobierno colombiano con esa guerrilla. Muestra, entre otras cosas, cómo la falta de acuerdo y de conexión entre los frentes con el ELN nacional ha llevado al discurso de explorar la paz no para negociar el fin del conflicto armado, sino como oportunidad política para oxigenar su proyecto, mientras avanza en su expansión territorial evitando la ruptura con los reacios a las negociaciones en ese sentido. Además, relata lo que ocurrió en cada territorio en momentos en que esa guerrilla ha participado en diálogos de paz, y cómo las dinámicas de algunos frentes han afectado los intentos con diversos gobiernos. También expone la respuesta paramilitar y de otros grupos armados irregulares, así como la actuación del Estado, situaciones que aumentaron los daños a la población local y terminaron de diluir la perspectiva de paz.

Con el gobierno de César Gaviria, en Caracas y Tlaxcala (1991-1993), el ELN participó como integrante de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en diálogos de paz, aunque sin acuerdo interno para poner fin al levantamiento armado. Mientras tanto creaba o desdoblaba estructuras armadas para dar el anhelado salto estratégico, con lo que llamaron en ese momento el Plan Vuelo de Águila. Así, obstaculizó el avance de esos diálogos de paz, pues más que nunca reivindicaba la lucha armada. El ataque a bienes civiles en territorios donde querían implantarse sus frentes, el aumento de secuestros, el uso minas quiebrapatas y el control social de los territorios donde hacía presencia, aumentó la violación del derecho internacional humanitario (DIH); esos daños a las poblaciones fueron reforzados por la acción paramilitar y la respuesta estatal.

En el gobierno de Ernesto Samper, en febrero de 1998, delegados del gobierno y del ELN firmaron lo que se conoció como preacuerdo del

Palacio de Viana, en Madrid, que convocaba una convención nacional para la paz, la democracia y la justicia social, con el fin de estructurar un acuerdo cuyo desarrollo se diera en todas las instancias legislativas y espacios posibles, inclusive con una asamblea nacional constituyente o un referendo con amplia participación. Y convocaba una reunión preparatoria en junio, pero al estar en medio de las dos vueltas para la elección presidencial y de acciones armadas del ELN hubo presión para su aplazamiento.

El gobierno de Andrés Pastrana desarrolló conversaciones con las FARC para negociar una solución política al conflicto armado, lo que llevó a un sector del ELN a buscar un espacio de diálogo y visibilidad política similar al del Caguán. Pero varios frentes, entre ellos el Domingo Laín, se alejaron de esa posición del COCE. Con ataques entre octubre de 1998 y el 2000 (la masacre de Machuca; sucesivos secuestros de feligreses en una iglesia cerca de Cali, de excursionistas en la ciénaga de El Torno junto a Barranquilla, y de un avión con tripulación y 46 pasajeros) el ELN impidió la realización de la convención en una zona desmilitarizada en el Magdalena Medio, y suscitó la reacción paramilitar. El gobierno aplicó el Plan Colombia desde 1999.

El IV Congreso del ELN, realizado en 2006, adoptó la idea de resistencia armada y dio lineamientos en torno a la estrategia y táctica armada, y sobre las fuentes de financiamiento. Participó en siete rondas de diálogos de paz, hecho que generó la misma división de siempre sobre la validez de seguir en la guerra. Y, como muestra el libro, eran momentos de confrontación entre el ELN y las FARC por el control de territorios. El gobierno de Álvaro Uribe, por su parte, aplicaba la llamada Política de Seguridad Democrática.

Una agenda y una Mesa de Negociación

Bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, el foco del gobierno y de sectores de la opinión pública estuvo puesto sobre las FARC por las negociaciones en La Habana (2012-2016), aunque también con la expectativa de que el ELN se vinculara a ese proceso. Desde enero de 2014, el gobierno de Santos envió sus delegados para unos diálogos exploratorios con el ELN. Como recuerda el libro, en su V Congreso, celebrado en 2015, ese grupo delineó una estrategia ante la salida de las FARC de la guerra, consistente en aprovecharla para su expansión territorial y repunte militar, integrando la lucha armada con el uso de la movilización social y otorgando un papel crucial a las ciudades y espacios suburbanos para visibilizarse y presionar su inclusión en las conversaciones de paz.

Pactar entre los delegados del gobierno y del ELN resultaba difícil: la agenda de negociación solo se pudo lograr en marzo de 2016, mientras que hasta en febrero de 2017 se inició la fase pública de negociaciones formales. La Mesa acordó un cese al fuego bilateral —del 1 de octubre de 2017 al 9 de

enero de 2018— que fue afectado, entre otros hechos realizados por el ELN, por secuestros y el asesinato de un gobernador indígena en Chocó. El V ciclo de la Mesa no pudo arrancar por el atentado, el 27 de enero, contra una estación de la Policía en Barranquilla. El 15 de marzo se reanudó la Mesa en Quito, pero los atentados, secuestros y asesinatos en Ecuador, realizados, entre otros, por disidentes de las FARC, llevaron a ese país a renunciar a ser sede y garante de la negociación del gobierno colombiano y el ELN. En mayo, la Mesa reanudó sus sesiones en La Habana, las cuales se extendieron hasta comienzos de agosto cuando se posesionó el nuevo gobierno colombiano.

Como lo muestra el libro, en medio también de estas últimas conversaciones de paz, el ELN estaba en un proceso de reacomodo y de expansión territorial que implicó el desarrollo de acciones militares, la vinculación con economías territoriales y el seguimiento de su *hoja de ruta para la construcción de lo que llamó poder popular,* a partir de la toma de organizaciones sociales. Una constante al interior de ese grupo, en los intentos de diálogo con distintos gobiernos, ha sido la falta de acuerdo entre la urgencia sobre terminar su acción armada y apostarle realmente a la construcción de la paz, la democracia y la inclusión social. *Fuerzas centrífugas han mostrado capacidad de boicotear cualquier negociación, mientras que la falta de unidad y cohesión han dificultado que fuera exitosa una desmovilización y la implementación de un acuerdo de paz.*

Esos impulsos expansionistas fueron estimulados por algunos frentes para aprovechar y tratar de ocupar áreas de antigua presencia fariana, adyacentes a las de acción elena (en particular en Antioquia, Chocó, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y Cauca). Ese repunte militar estuvo relacionado también con el interés del ELN de hacerse visible para negociar, oxigenándose políticamente, mientras sus frentes se expandían territorialmente en antiguos dominios farianos para controlar poblaciones y recursos de las economías territoriales.

Recogiendo el llamado clave que hacen los autores del libro a persistir en la búsqueda de la paz, hay que señalar que otro intento de negociación para poner fin a la resistencia armada del ELN exige no replicar el formato y lo logrado con las FARC, y pensar ejes de un proceso y posible acuerdo específico, puesto que se trata de guerrillas muy distintas, con *motivaciones, estructuras organizacionales,* estructura de comando o control jerárquico, *tipo de miembros* y *capacidades muy diferentes.* La parte del ELN que le interesaría una negociación, por ejemplo, no estaría dispuesta a reagruparse territorialmente para el proceso de reincorporación de los excombatientes, ni aceptaría curules para sus dirigentes, entre otras cosas, por su rechazo a la vía electoral y a los órganos legislativos. *De no incluir a todas sus estructuras territoriales, la parte que no quiere negociar terminaría, como en intentos anteriores, saboteando el proceso.*

Un nuevo esfuerzo de diálogo entre el gobierno y el ELN, para que sea una negociación definitiva, debe examinar y partir del acumulado generado en todos los intentos anteriores, en particular en el último que tuvo avances en la Mesa y construyó propuestas; comenzar por analizar lo que ha sido la constante en todos los intentos con este grupo; y evaluar el papel que en ese proceso jugaría la sociedad civil organizada que deberá nutrir el desarrollo de la agenda de negociación. Por la necesidad que el estudio sustenta de realizar una negociación que ponga fin a este conflicto armado, vale la pena recoger ese acumulado de avances sustanciales construidos con participación social.

En efecto, en los seis ciclos desarrollados en 2017 y el primer semestre de 2018, hubo avances, ante todo, sobre la construcción de protocolos para un cese al fuego y de las hostilidades. Además, la Mesa oyó y recogió el llamado de las comunidades sobre la necesidad de cumplimiento del DIH, afectado por las minas antipersona, el reclutamiento de menores, el secuestro, el desplazamiento y el confinamiento de poblaciones. También trabajó sobre el camino participativo que debe nutrir la negociación de la agenda, con el desarrollo de procesos muy significativos como los siguientes:

1. La Mesa oyó a centenares de organizaciones sociales que propusieron, en las audiencias en Tocancipá, cómo concretar el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad para nutrir la negociación.
2. La Mesa se reunió varias veces con las comunidades negras e indígenas del Chocó agrupadas en el Acuerdo Humanitario Ya, quienes, entre otras cosas, reiteraron su exigencia de que la delegación del ELN para la negociación tuviera una representación del frente que actúa en esa región, lo que no se logró.
3. En un taller con redes de mujeres, la Mesa trabajó sobre cómo abordar un enfoque diferencial en la negociación y en el acuerdo para que las problemáticas étnicas, de género y territoriales fueran tomadas en cuenta.
4. La delegación del gobierno, cada vez que regresaba a Colombia en pausas de las sesiones de la Mesa en Quito y La Habana, realizaba consultas sistemáticas con comunidades afectadas por la confrontación, y reuniones con diversas organizaciones y sectores sociales que apoyaban la negociación de paz.
5. La delegación del gobierno que actuó en la Mesa en 2018 procesó todas las conversaciones desarrolladas por los cuatro gobiernos anteriores con el ELN, analizó la idea de la convención nacional que ese grupo reclamaba en esos intentos de diálogo, estudió las experiencias y propuestas recogidas en las audiencias, y examinó los mensajes recibidos de la sociedad civil y de las comunidades.

6. Nutrida con esa rica interlocución con organizaciones sociales, comunitarias y sectoriales, la delegación gubernamental fue estructurando propuestas que fueron llevadas a la Submesa de Participación para que las dos partes aprobaran cómo darle forma y arranque al primer punto de la agenda. Esto permitía a la Mesa ir examinando las propuestas de la sociedad para sustentar la negociación. La última de esas propuestas contenía un plan para poner en marcha la participación de la sociedad con encuentros territoriales y regionales, temáticos y sectoriales/poblacionales, con base en los cuales avanzar en los puntos de la agenda: democracia, transformaciones y reparación de las víctimas, Y, al final, en un gran encuentro nacional, las entidades que habían organizado el proceso de participación social entregarían a la Mesa las propuestas de la sociedad civil, para que las dos delegaciones hicieran su respectivo procesamiento y pasaran a negociar los dos últimos puntos de la agenda: la terminación del conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz.

Aunque ese esfuerzo logró un primer consenso en la Mesa sobre los fundamentos de la participación de la sociedad, hubo desacuerdo acerca de su alcance. El ELN reiteró su propuesta de un gran diálogo nacional de tiempo indefinido, que reemplazaría a la Mesa en la concreción de temas, duración, encuentros y participantes, y cuyas definiciones serían vinculantes para el Estado, que quedaba obligado a implementarlas. En contrapartida, prometía "reciprocidad", es decir, a cada transformación efectiva que el Estado realizara, el ELN correspondería con alguna concesión. Además, exigía que la Mesa solo pasaría al V punto (el final del conflicto armado) y al VI (la implementación del acuerdo de paz) cuando el Estado hubiera realizado todas las transformaciones propuestas por la sociedad en los cuatro puntos anteriores de la agenda. Eso equivalía a usar la participación social para prolongar indefinidamente su resistencia armada y condicionar la paz a la realización de las reformas que exigía: sería como "una revolución por decreto", que el acuerdo entre las dos partes negociadoras imponían al resto del país.

Con todo el esfuerzo documental y analítico realizado, los autores del libro llaman a persistir en la concreción de una negociación de paz, de ahí que haya sido elaborado con el fin de ayudar a entender esa guerrilla y estimular así la búsqueda de una real terminación de ese conflicto armado. Un nuevo intento de diálogo le plantearía a cada lado exigencias muy concretas. Para que las asuman el gobierno y el ELN, resulta crucial la presión de la sociedad civil y la opinión nacional, así como de la comunidad internacional.

ELN, a poner fin a su acción armada

Resolver las diferencias que saltaron en el último intento, cuando se avanzó en una Mesa de conversación y en propuestas sobre cómo desarrollar la agenda, requiere que el ELN decida internamente que no puede prolongar más esa guerra dañina ante todo para la sociedad, y acuerde negociar para terminar el conflicto armado.

Tanto en la Mesa que sesionó en el gobierno de Juan Manuel Santos como en los intentos de diálogos con los gobiernos anteriores, la delegación guerrillera no contó con la autorización para ir más allá de explorar posibilidades de poner fin a su resistencia armada. Como muestra el libro, esa ambigua decisión del COCE, adoptada ante la imposibilidad de lograr acuerdo interno para ponerle fin a su acción violenta, está dirigida a prolongar de forma indefinida las conversaciones de paz y aprovecharlas para hacer presencia en la opinión nacional e internacional, lograr contactos con entidades y gobiernos extranjeros, obtener recursos, presentar denuncias ante los países acompañantes y garantes, etc., mientras los frentes que no están de acuerdo con negociar tratan de ampliar su acción militar y financiera.

En el libro se plantea que para cualquier tipo de conversaciones es necesario tener en cuenta, en especial, al frente oriental y al nuevo grupo de líderes que está emergiendo, con el fin de lograr un consenso más general de los frentes y comandantes del ELN que se han mostrado más interesados en lo local y en responder a las tensiones endógenas de sus territorios que en un proyecto político de orden nacional. Para eso, es preciso poner los aportes del libro a disposición de las poblaciones locales y de las instituciones encargadas de atender las problemáticas específicas de cada región.

Resulta fundamental que las comunidades y la sociedad civil exijan al ELN sentarse a una real negociación sobre la terminación de su levantamiento y resistencia armada, para que por fin Colombia supere ese acumulado de violencias que le han hecho tanto daño al país y, en especial, al pueblo más marginado. Eso supone un deslinde total de las luchas sociales frente a cualquier opción y acción armada, o de combinación de formas de lucha. Como el libro destaca, de formas diferenciadas los distintos frentes del ELN se relacionan con actores o dinámicas sociales y políticas locales, y usan distintas estrategias y vías para construir sus anclajes territoriales, interferir e instrumentalizar la protesta social. El ELN tiene que reconocer que su actuación genera fuerte impacto y daño en las iniciativas ciudadanas, *más aún al tratar de controlar o abrogarse la representación de la sociedad local*. Por eso, resulta crucial la presión social y de la opinión nacional e internacional para que esa guerrilla se decida a negociar el fin de su levantamiento y resistencia armada.

La generación de capacidades de organización de los pobladores en regiones de colonización y periféricas, que a veces logran suplir funciones estatales y regular su propia convivencia —lo que el libro documenta en las cinco zonas de mayor actuación de esa guerrilla—, resulta crucial en la presión social para que el ELN por fin se decida a negociar la terminación del conflicto armado y reconozca que, en lugar de hacer avanzar las transformaciones que requiere este país, genera enormes daños y costos, en especial a los sectores sociales que dice defender. La presión debe ejercerse, en particular, sobre el frente de guerra oriental que, como lo muestra el libro, aumentó su presencia ya no solo en Arauca, Boyacá y Casanare (ABC), sino en el Catatumbo, el Chocó, el suroccidente y el Vichada donde incrementó su intervención. También en Venezuela, donde cada vez más crece su acción, haciendo más compleja la relación binacional y el papel de ese país en un proceso de negociación y construcción de una paz sostenible en Colombia.

Estado colombiano: a persistir en el esfuerzo por la paz

El libro muestra que las instituciones estatales, antes que ver cómo su ausencia o distorsionada presencia es aprovechada por grupos armados ilegales, de oír o entender ese drama social y de tramitar los reclamos de las movilizaciones de esas zonas periféricas, optan por incumplir los acuerdos que a veces esas protestas logran con el gobierno central, departamental o municipal; por estigmatizar la población que sufre la presencia de grupos como el ELN, y lo que logran es convertirla en objetivo de represión estatal y violencia paramilitar, asesinato de líderes y destrucción de organizaciones sociales. En ese sentido, es crucial el llamado para que el Estado en todos sus niveles revise su relación con esas poblaciones marginadas y se juegue con ellas por la transformación de esas realidades de las que se alimenta la violencia y la criminalidad.

Persistir en el esfuerzo de hacer realidad una negociación de paz con el ELN requiere también que el Estado se disponga a priorizar la creación de condiciones que la hagan viable. En agosto de 2018, al momento de llegar a la Presidencia, Iván Duque no se interesó por los acumulados del proceso que estaba en curso. Le exigió a esa guerrilla el cese unilateral del fuego y de hostilidades, parar sus acciones violentas —secuestros, reclutamiento de menores—, y sus asesores han mostrado rechazo a la agenda de negociación pues la consideran inviable.

En enero de 2019, luego del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía "General Francisco de Paula Santander", Duque decidió terminar las conversaciones de paz que se encontraban paralizadas desde su llegada al gobierno, e incumplió los protocolos firmados por el

Estado colombiano sobre qué hacer ante un levantamiento de la Mesa. Adicionalmente, generó tensiones con Cuba —cuyo papel ha sido crucial en los esfuerzos de paz para Colombia— por no entregarle los guerrilleros que se hallaban en la isla como delegados para la negociación. A pesar de que los intereses de Colombia frente a su mayor vecino, Venezuela, que vive graves crisis, son distintos de los de Estados Unidos, el gobierno de Duque se alió con el impredecible y aventurero Donald Trump para decidir qué hacer ante el régimen de Maduro. Así, justo cuando es crucial la colaboración de Cuba y de Venezuela para una negociación de paz con el ELN, las relaciones con ambos países están en su peor momento.

A esa situación, que cierra posibilidades de negociación, se le agregan las trabas y los ataques del partido de gobierno, el Centro Democrático, a la implementación del Acuerdo con la exguerrilla FARC —ahora partido Comunes—, lo que se convierte en un desestímulo para los dirigentes y miembros del ELN dispuestos a negociar. Tampoco el Estado concentra esfuerzos institucionales, económicos y sociales en regiones afectadas por el conflicto armado. Antes que apostar por sus poblaciones, las estigmatiza porque en ellas el ELN trata de mimetizarse y aprovechar las demandas y acciones de diversos sectores sociales. El Estado colombiano tampoco ha logrado redoblar esfuerzos y hacerlos efectivos para impedir el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC que le han apostado a la paz.

El problema es más amplio que la sola actuación del gobierno actual. Hace referencia a la manera inadecuada como muchas instituciones públicas enfrentan la situación de los territorios periféricos, que termina vulnerándolos aún más. A esto se suma, como lo consigna el libro, que el sistema político colombiano no solo tiene una dificultad histórica para oír y tramitar las demandas sociales, en especial las de los pobladores de los territorios y regiones más marginadas, sino que señala a las comunidades y organizaciones que viven y actúan en zonas periféricas como cómplices o aliadas de grupos guerrilleros, con lo cual las criminaliza y lleva a reprimir la protesta social, en lugar de atender la exigencia de una presencia directa de las entidades del Estado central que no esté mediada por poderes locales y regionales controlados por los partidos tradicionales y sus facciones.

Hoy más que nunca resulta crucial una mirada desde la sociedad y las instituciones públicas, que revise tanto los factores estructurales del conflicto armado como las motivaciones subjetivas de los actores, tratando de ver la relación que ha tenido el desarrollo de hechos violentos con el complejo proceso de construcción del Estado, en especial en lo que tiene que ver con integración territorial y articulación política.

Por eso, cualquier proceso de paz debe tener un enfoque diferenciado a partir de las realidades concretas de cada territorio y según el tipo de

relaciones que los diferentes grupos armados han construido con esas regiones, para así precisar los caminos necesarios en la rearticulación de las organizaciones locales y las instituciones estatales sin mediaciones armadas ni clientelistas. En el libro los autores hablan, por ejemplo, de consejerías territoriales de paz encargadas de la construcción de intervención integral del Estado en territorios étnicos, veredas, corregimientos, municipios, con el propósito de intentar responder de manera articulada a los problemas concretos de cada sitio en lo concerniente a administración de justicia, salud, educación, infraestructura vial, etc. Piden que el Estado garantice el cumplimiento del reconocimiento constitucional de lo étnico, así como la necesaria participación y representación ciudadana de zonas periféricas, que asuma como legitimo y positivo que las poblaciones señalen las deficiencias en el funcionamiento del Estado a todos los niveles y ejerzan control de las instituciones públicas en el territorio. Proponen que el Estado propicie la articulación de las regulaciones comunitarias a las estatales, en lugar de imponer formas de participación pensadas solo desde el centro nacional. Ese cambio de actuación estatal reduciría las oportunidades para que guerrilleros o cualquier otro actor armado irregular trate de aprovechar o manipular la organización social local.

En suma, en respuesta a la pregunta por qué es tan difícil hablar de paz con el ELN, el libro ofrece un acumulado novedoso y documentado que ayuda a entender esa guerrilla, con el fin de que el país persista hasta cerrar ese nefasto capítulo de la historia colombiana de violencia y acción política armada. Ojalá sean muchos y se multipliquen los lectores que, desde los territorios y desde el Estado, aprovechen este esfuerzo académico puesto al servicio de la acción social e institucional en favor de la paz.

El rompecabezas del ELN

Andrés F. Aponte González

Mientras que el Estado colombiano logró disminuir militarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta llevarlas a una mesa de negociación y a la firma de un acuerdo de paz (2016), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla con menor capacidad militar y presencia territorial, ha permanecido activa y ha demostrado una importante capacidad de desestabilización regional, a pesar de los reiterados esfuerzos por encontrar una salida negociada a este conflicto.[1]

Los diversos fracasos en los diálogos entablados han suscitado un largo debate sobre su cohesión y "real" voluntad política para sentarse a hablar de paz. ¿A qué se debe dicha dificultad? *¿Por qué ha sido tan difícil negociar con el ELN?*

Este libro no hace un recuento o un análisis de las diversas rondas fallidas,[2] solo quiere explicar la importancia de las condiciones organizacionales y territoriales del ELN para poder entender la incidencia que estas han tenido en los espacios de diálogo. Además, pretende responder los anteriores interrogantes a partir de la siguiente premisa: una de las

---

1 Se puede señalar como primer intento los acercamientos que existieron con el gobierno de Alfonso López Michelsen luego de la Operación Anorí (1973). Un segundo intento fue el de Caracas-Tlaxcala con la administración de César Gaviria (1990-1994). El tercero se dio con el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), en la ciudad de Maguncia (Alemania). Un cuarto intento corresponde a los diálogos entablados con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), en Ginebra (Suiza) y Caracas (Venezuela). Una nueva tentativa ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe, en la ciudad de México D. F. (2006-2008); y, el último, fue durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2016-2019), con las rondas de diálogo en Quito (Ecuador) y La Habana (Cuba).

2 Sobre estas se recomienda consultar la obra de Luis Eduardo Celis (2019), Víctor de Currea-Lugo (2014, 2015, 2019) o Carlos Medina Gallego (2009), quienes hacen un examen juicioso sobre los diversos intentos de negociación.

principales fallas de las estrategias de guerra y paz para superar el conflicto armado con el ELN ha sido la de replicar los modelos que fueron "exitosos" con las FARC, cuando se trata de dos organizaciones muy disímiles entre sí. Mientras el ELN es una organización federada, las FARC demostraron tener una estructura jerárquica de comando y control.[3] Asimismo, las motivaciones fundacionales de cada proyecto armado, la estructura organizacional configurada y desarrollada, el tipo y calidad de sus combatientes, la capacidad y potencia de fuego difieren.

Por eso, una de las primeras tareas de este libro es señalar que no estamos frente a las extintas FARC y que no es posible leer al ELN a través de la experiencia de estas. Ahora bien, la trayectoria del ELN no ha sido monolítica, pues la organización del presente no conserva muchos de los rasgos de su etapa fundacional con Fabio Vásquez Castaño (1962-1975), y tampoco se ha mantenido exactamente igual al momento de recomposición y transformación que le imprimió Manuel, el cura Pérez, (1977-1981). En efecto, este grupo ha mostrado diversos rostros territoriales en temporalidades distintas.

Esto no es un asunto menor, pues estas diferencias, en específico la naturaleza organizacional y su variada fisionomía territorial, implican que si queremos una negociación exitosa con el ELN se deben replantear los esquemas bajo dos premisas: (I) incluir a todas las estructuras territoriales en la mesa, sobre todo las saboteadoras de la negociación; y, (II) la receta de tierras y curules, que fue bastante exitosa con las FARC, no responde a las demandas ni al discurso del ELN. Para esta guerrilla es central el tema de los recursos naturales, las formas de participación y representación en el juego democrático de la llamada sociedad civil y las formas de integración territorial, entre otros.

Para entender mejor los puntos de partida de estas diferencias y orientar estrategias de negociación apropiadas, esta obra se ocupa de ayudar a comprender el origen[4] y la evolución de la estructura organizacional elena. Para ello ofrece una mirada de conjunto en la que su interpretación no esté sustentada en una realidad específica que, de manera inconveniente, termine generalizando a toda la organización, pues ello opacaría

---

3 Esta misma impresión la refrenda Juan Camilo Restrepo (2012, p. 9):

El ELN no cuenta con una organización monolítica y vertical como es la de las FARC. Pudiera decirse que el ELN más que un grupo alzado en armas es una federación, a menudo difusa, de diversos frentes en los cuales la capacidad de definición y de orden por parte de los órganos de dirección central como el COCE está mucho más difuminada que lo que sucedía por ejemplo en el caso del Secretariado de las FARC. Y este fenómeno se expresa a menudo en dificultades.

4 El ELN surge de la iniciativa de jóvenes urbanos radicalizados, provenientes de organizaciones estudiantiles y sindicales, que se van distanciando del reformismo gradual y de la aceptación de la vía electoral, ideas preconizadas por el Partido Comunista ligado al internacionalismo moscovita.

su particularidad organizacional y territorial. Esto lleva a cuestionar algunos lugares comunes, como el excesivo recurso a la experiencia del frente araucano para explicar su estructura nacional, o su denominación como una organización político-militar para diferenciarse de otras insurgencias, y a buscar complementar dimensiones esclarecidas parcialmente, como el hecho de que adolece de problemas de acción colectiva y de una amplia variación en su expresión territorial.

Analizar la estructura organizativa del ELN es crucial para la comprensión de su naturaleza, debido a que la comandancia nacional no exhibe un poder infraestructural para darle coherencia y cohesión a las acciones y apuestas que desarrollan sus frentes territoriales. No por nada, su historia expone una impronta organizacional federalizada, en la cual las tensiones no pasan por la presencia de un hegemón (centro de poder) que discipline y alinee a las diversas organizaciones regionales con la comandancia. Todo lo contrario, muestra más una serie de luchas y tensiones en torno a la forma como se han posicionado y articulado los diversos frentes territoriales al proyecto nacional.

Esta estampa organizacional enmarca las posibilidades que han tenido los diversos frentes de guerra para asumir posturas selectivas frente a las directrices nacionales en torno a la paz, la distribución de recursos o el tipo de vinculación con las economías territoriales, pues estos responden más a las dinámicas y lógicas de sus bases sociales que al proyecto nacional: cada frente "representa" luchas y reivindicaciones de sectores sociales heterogéneos. Por eso, un valor añadido de este trabajo es su intento de responder la pregunta: *¿Por qué el Eln permanece unido si tiene todos los factores para atomizarse?*

Lo que vincula a todos estos emprendimientos armados es un discurso bipolar (Estado vs. sociedad), que sirve como paraguas y pegamento de los diversos frentes, pues la adscripción nominal al proyecto nacional le da un sentido concreto al trabajo político-organizativo y articula los diversos intereses territoriales y materiales de las distintas organizaciones que lo componen. En esta línea, el ELN nacional tiene dos funciones mutuamente vinculadas: una interna, en la cual los frentes de guerra llenan de sentido y contenido el trabajo político armado que realizan en sus zonas de influencia; y, otra externa, según la cual la organización nacional opera como intermediador entre un Estado homogéneo y monolítico que representa un bloque de poder claro y duro, y un pueblo personificado en una sociedad civil bastante organizada y también suficientemente homogénea, que cuestiona la forma como el poder central articula a los territorios.[5] De ahí que para caracterizarlo no basta con tener en cuenta

5 Esta retórica no solo es amplia, sino, también, bastante difusa, porque en el discurso Estado vs. sociedad caben todos los representantes de la llamada "sociedad organizada". En esta diada,

solo sus dimensiones ideológicas, militares y organizacionales, sino que, de igual forma, es necesario analizar sus anclajes sociales (bases sociales y políticas) y el tipo de vínculo entablado con las economías territoriales (coca, minería, petróleo, contrabando, etc.), puesto que la variación que presenta cada uno de sus frentes en estas aristas enmarca los diversos rostros territoriales en el relacionamiento con las masas y con la comandancia nacional (Comando Central [COCE] y Dirección Nacional [DN]).

¿Cómo entender y explicar la textura organizacional del ELN y sus variados rostros territoriales?

La tesis central que se plantea en este libro es que la estructura nacional del ELN y de sus variados anclajes territoriales es producto de una oposición entre la unidad y la multiplicidad que caracterizan a esta insurgencia, antagonismo que le generó constreñimientos para homogeneizarse e integrarse para actuar colectivamente.

Los comienzos del ELN estuvieron marcados por el choque del liderazgo personalista de Fabio Vásquez Castaño con sus aliados originales (1962-1975); luego, en un segundo momento, esta tensión trató de ser equilibrada por la propuesta federalizante del cura Pérez y compañía (1977-1991). La recomposición y crecimiento se dio bajo un estilo organizativo de adhesión de emprendimientos armados autónomos, que se sustentaron en bases sociales heterogéneas, con demandas y reivindicaciones igualmente diversas. Esto configuró una dependencia en la trayectoria, porque los emergentes frentes de guerra se fueron agregando al proyecto nacional de forma poco consistente y desarticulada (la homogeneización e integración de las estructuras locales fue parcial y frenada por ellas mismas); además, el ELN nacional tuvo problemas para darles a los frentes la representatividad que realmente les correspondía en proporción a los capitales territoriales concretos que tenían: tipo de base social, vinculación con las economías, etc.

La distribución de poder al interior de la comandancia es un asunto central para entender estas dinámicas, el presente del ELN y la posible trayectoria que puede tomar. Al final de los años noventa, luego de ser duramente golpeado por los paramilitares y las fuerzas estatales, y patentada su

la posición del ELN sería la de un catalizador y potencializador de los procesos organizativos y de la configuración de mecanismos de autogestión comunitaria, lo que, en el fondo, le supondría una cierta renuncia o aplazamiento de su propósito de acceder a instancias de poder, pues sencillamente sería intermediario de unos procesos territoriales, mas no el representante de la sociedad. Esta postura muestra cierta cercanía a un tipo de populismo anarquista o una significativa proximidad al socialismo utópico de la Francia del siglo XIX de Fourier y De Saint Simon. Ahora bien, este discurso homogeneizante también tiene su revés, ya que puede ir en contravía de la autogestión de las llamadas comunidades u organizaciones sociales,

derrota estratégica (1996-2002), sus líderes tomaron la decisión deliberada de marginarse del tablero nacional de la guerra[6] y recomponer las estructuras sobrevivientes a través de las economías territoriales de sus zonas de influencia: coca, minería, contrabando, extorsión, secuestro, etc.

Este suceso profundizó los problemas de acción colectiva, y a la vez, por paradójico que suene, posibilitó la emergencia de un nuevo tipo de federalismo, con un hegemón más claro y mejor posicionado: el Sol de Oriente.[7] Lo anterior reflejaría una nueva distribución de fuerzas, ya no en función del aprendizaje traumático de la dirección caudillista de Fabio Vásquez Castaño, expresado en el miedo a concentrar el poder en una persona (Gutiérrez, 2018), sino de los recursos concretos de cada constelación territorial. Este "nuevo" ELN es un poco más integrado, más representativo de las fuerzas que lo componen, y con nuevos liderazgos nacionales que están dejando atrás a los referentes tradicionales ("Gabino", el cura Pérez, Camilo Torres, etc.); sumado, a que es una insurgencia más militarizada y criminalizada, lo que no oculta ni permite afirmar que sea menos política, pues sigue ordenando y gobernando los territorios de su influencia.[8]

La prueba de lo expuesto hasta acá está contenida en los dos grandes bloques en que se divide esta obra. En el primero se presenta la nueva narrativa nacional del ELN bajo un foco organizacional y territorial; y, en el segundo, se exponen cinco escenarios regionales (Arauca, con acento en el Sarare;[9] Catatumbo,[10] norte de Santander; Cauca-Nariño;[11] Chocó; y sur de Bolívar[12]) donde esta organización tiene presencia y se perfila como un actor relevante y decisivo en diversas dimensiones: militar, social, política y económica.

---

6 Esta decisión no se puede entender sin el anhelado salto estratégico que quisieron dar con el Plan Vuelo del Águila, apuesta que generó diversas tensiones en las localidades donde tenían presencia los frentes; a esto se sumó la dinámica de expansión nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la cual golpeó de forma sistemática los desarrollos organizativos sobre los que se anclaba el ELN e hizo extremadamente vulnerable a su estructura. La excepción a este proceso nacional fue Arauca, en concreto la zona del Sarare.

7 Nombre con el que los miembros de esta guerrilla se refieren al frente de guerra oriental para resaltar su importancia en la historia del ELN: *"No se les olvide, que el sol nace por el oriente"*. (Entrevista 1).

8 Los diversos frentes de guerra usufructúan, en ciertas áreas, la dificultad que tiene el Estado para hacer presencia (dominio indirecto, ausencia de servicios públicos básicos, no monopolización de la coerción, etc.) y ofrecen sus servicios regulatorios a cambio de incidir, articular o infiltrar los poderes locales preexistentes y las organizaciones sociales.

9 Tame, Arauquita, Fortul y Saravena.

10 Esta subregión está compuesta por los siguientes municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, La Playa, Tibú, San Calixto, Sardinata y Teorama.

11 Territorio comprendido, en el entender de este libro, por Almaguer, Bolívar, El tambo, La Vega, Mercaderes, Patía (El Bordo), Popayán, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa (Cauca); Barbacoas, Cumbitara, El Charco, La Llanada, La Unión, Leiva, Los Andes, Samaniego y Túquerres (Nariño).

12 Subregión constituida por Achí, Arenal, Cantagallo, Montecristo, Morales, San Jacinto del Cauca, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Tiquisio y Río Viejo (Bolívar).

La intención es dar una explicación sencilla, pero potente, del porqué de las cualidades y atributos que se le imputan al ELN, por lo cual es preciso interpelar ciertos lugares comunes y dimensiones esclarecidas de forma parcial, que ayudan a entender mejor la naturaleza de esta insurgencia. Además, se plantea que frente a una posible negociación, el novedoso marco analítico construido permite entender su génesis y cómo han interactuado las diversas unidades que lo componen.

Con estos acumulados, se ofrecen algunas recomendaciones para pensar estrategias de negociación innovadoras que, se espera, rompan con el ciclo de esfuerzos fallidos de paz: la idea es que este examen del pasado ayude a vislumbrar el futuro.

Los vacíos interpretativos

La apuesta comprensiva y la narrativa que plantea este libro requieren complementar y cuestionar algunos elementos señalados en trabajos previos que son, en la actualidad, la base para dilucidar al ELN.

En la literatura especializada hay dimensiones esclarecidas parcialmente y dos lugares comunes. Dentro de las dimensiones esclarecidas parcialmente están: 1. La tendencia a señalar que el ELN es una guerrilla federada;[13] 2. las razones que explican sus problemas de acción colectiva;[14] y 3. su variación territorial.[15] No obstante, poco se ha dicho sobre los puntos de partida de estos elementos, ni cuál ha sido su desarrollo y trayectoria. Lo anterior requiere un análisis sistemático sobre sus atributos organizacionales, armados y político-sociales.

En cuanto a los lugares comunes:

1. Hay un excesivo recurso al relato araucano para analizar y describir la trayectoria nacional y territorial del ELN. Una cosa es que haya apalancado en esta experiencia su proceso expansivo y que haya sobrevivido las últimas dos décadas gracias a los acumulados que detenta el Sol de Oriente, y otra, muy distinta, que se expliquen a partir de este el proceso de enraizamiento territorial y la estrategia de relacionamiento con los pobladores de otras regiones. La génesis de los

---

13 Véanse: Medina (1996, 2007, 2012), Aguilera (2006), Aponte y Vargas (2011), Restrepo (2020), entre muchos más.

14 Estos se expresan en una incapacidad del COCE y la DN para desplegar un verdadero poder infraestructural y evitar que sus directrices y mandatos se distorsionen o sean acatados discrecionalmente. Al respecto: Mann (2006, 2012), Garzón y Espejo (2005), Aguilera (2006), Rodríguez (2006), Medina (1996, 2007, 2012).

15 Sobre este aspecto pueden consultarse: Fundación Ideas para la Paz (2020), Aponte y Vargas (2011), Fundación Paz y Reconciliación (2020), entre otros.

diversos frentes varió[16] y cuando intentaron replicar la experiencia araucana, la trayectoria se reprodujo con diferencias (tabla 1).

Tabla 1. Los frentes del ELN, sus apoyos sociales y momentos emblemáticos

Frente	Región	Punto de partida: grupos fundacionales	Año de inserción y fundación del frente
Darío Gómez Castro	Sur de Bolívar, oriente antioqueño y Bajo Cauca.	Guerrillas liberales, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), campesinos y colonos mineros, sectores del Partido Comunista Colombiano (PCC) y sindicatos.	Inicio de trabajo político: 1966. Fundación: 1976.
Oriental	Arauca, Casanare, Vichada y frontera colombo-venezolana.	Sectores campesinos organizados (ANUC y juntas de acción comunal [JAC]) y estudiantes.	Inicio de trabajo político: 1972. Fundación: 1978.
Suroccidental	Cauca y Nariño	Estudiantes, profesores, campesinos afiliados a las Jac, acumulados previos del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y del M-19.	Inicio de trabajo político: 1978 Fundación: 1982-1983.
Nororiental	Norte de Santander, Cesar y frontera colombo-venezolana	Colonos petroleros, campesinos agremiados y organizados en las JAC.	Inicio de trabajo político: 1977. Fundación: 1986.
Occidental	Chocó, Risaralda y Valle del Cauca	DN, frentes de guerra norte, oriental y Carlos Alirio Buitrago, y acumulados previos del FARIC y del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG).	Inicio de trabajo político: 1987. Fundación: comienzo del 2000

Fuente: elaboración propia, con base en las cinco lecturas territoriales del libro.

16 A veces emergieron a partir de acumulados previos de partidos de izquierda o de algunas insurgencias, y de experiencias particulares que se desarrollaron por sí mismas, etc.

2. La etiqueta del ELN como una organización político-militar[17] es una trampa autodenominativa y elude todo ejercicio comparativo,[18] pues no explica en qué sentido y de qué forma se materializa concretamente. Asimismo, que un proyecto armado se declare nacionalista, foquista, secesionista, no implica que dicho título determine su textura organizacional. Y, como corolario, todo proyecto armado es de por sí una organización político-militar: basta mirar las relaciones entabladas por las FARC con los campesinos cocaleros; las de los paramilitares con sectores de la agroindustria en Córdoba o Cesar; o las de ciertas organizaciones sociales en el Urabá antioqueño, entre otros casos.[19]

El tratamiento de estos huecos interpretativos posibilita explicar el federalismo eleno, para lo cual la premisa de Maurice Duverger (1951): "Dime cómo te organizas y te diré quién eres", que utilizó Francisco Gutiérrez (2017) para estudiar la República Liberal y al Partido Liberal en los años treinta, sirve para caracterizar su estructura organizacional y su desarrollo en el tiempo. El objetivo es exponer:

1. Cómo se fueron articulando los diversos emprendimientos territoriales al proyecto nacional y el modelo de acción que tomaron.
2. De qué manera influyeron las bases sociales que estas organizaciones configuraron en sus áreas de influencia, en su trayectoria y posicionamiento en el proyecto nacional.
3. Qué tecnologías institucionales desarrolló el ELN nacional para homogeneizar y centralizar estos emprendimientos armados.

Además, la premisa duvergerniana permite darle un giro territorial: "Dime cómo ordenas, con quiénes y te diré que fisionomía tienes", pues

---

17 Tema tratado, entre otros, por Medina (1996, 2007, 2012), De Currea-Lugo (2018), Pérez (2016) y Gruber y Pospisil (2015).

18 En términos de pie de fuerza, capacidad de desplegar violencia, formas de relacionamiento y regulación de la población, entre otras dimensiones.

19 Quienes aluden que el ELN es una organización político-militar y que esa es una nota distintiva e irrepetible rememoran un poco el mito del exotismo colombiano que reinó por varias décadas en las ciencias sociales: Colombia no solo era bastante particular, sino que por estar en los márgenes de los procesos sociales del mundo no tenía referente alguno para comparar; de ahí, según algunos expertos, el evidente y existente desbalance con la producción en las ciencias sociales en países como Argentina, México y Brasil, para dar varios ejemplos. Sin embargo, en los años recientes este lugar común ha quedado desvirtuado con estudios comparados en diversas áreas como los procesos de paz (Nasi, 2007), el narcotráfico (Duncan, 2015), los microfundamentos de las guerras civiles y los órdenes que se derivan de la relación entre armados y locales (Arjona, 2016), los procesos de formación estatal y del sentido nacional (Centeno, 2002; González, 2014), etc.

da pistas sobre qué tanto enraizamiento social posee, y el tipo y la lógica del despliegue de violencia que realiza.

El lente utilizado permitirá explicar las posibilidades y las limitaciones que ha tenido la organización nacional para homogeneizar y cohesionar los diversos emprendimientos armados cooptados, y cómo las bases sociales en las que se apalancan los frentes de guerra condicionaron este proceso y su expresión territorial. En efecto, la federalización elena no es un resultado mecánico del contexto, sino también es producto de las decisiones contextuales de sus integrantes, de los retos y limitaciones que afrontan, así como de las presiones externas y las estrategias del adversario (Gates, 2002). Por eso, se utilizarán algunos aportes de la literatura internacional para construir un marco analítico mucho más amplio y comparable, considerando que la comprensión de esta guerrilla ha tendido a ser bastante "parroquial": sin comparación alguna con otras experiencias del mundo y bajo marcos analíticos endémicos.

Marco analítico

El juego de las bases sociales, la importancia del andamiaje organizacional y el foco territorial

En esta sección se expone el marco analítico construido para dar pistas sobre el federalismo eleno y sus variaciones territoriales. Para esto se abordan, de acuerdo con la literatura especializada, primero el rol que tienen las bases sociales en la estructuración de un proyecto armado; luego, las implicaciones y constreñimientos que genera la convergencia de distintas organizaciones territoriales, sustentadas y apalancadas en bases sociales heterogéneas, en una organización nacional. Dicho marco analítico también se apoya en la reciente y prolífica producción académica internacional que se ha interesado en los procesos de institucionalización y socialización al interior de los grupos armados. Y, finalmente, se resalta la importancia del foco territorial: el juego de los factores endógenos de las localidades y su incidencia en la emergencia del tipo de estructura armada.

La importancia de las bases sociales

Se suele creer que solo la ideología (marxista, nacionalista, etc.) y la estrategia (foquismo, maoísmo, por ejemplo) determinan la naturaleza y la estructura de un grupo armado, al ser tomadas como indicios robustos para explicar las dimensiones organizacionales y el tipo de relacionamiento que establece con las masas.

Paul Staniland (2012, 2014) ha demostrado, con su estudio en la región de Cachemira y Sri Lanka, que estos aspectos importan menos de lo que se les considera, y que es más conveniente posar el lente sobre las redes preexistentes[20] y las bases sociales en las que se asentó y desarrolló un grupo armado, para tener idea de su organización interna y la textura de las relaciones con los pobladores (2014).

Para Staniland (2012, 2014), toda base social tiene como cimiento un núcleo de organizadores, móviles social y geográficamente, que conectan a la gente entre sí, agrupando a una población local (villas, vecindarios, etc.) en un espacio geográfico delimitado. Esta base está compuesta por lazos horizontales[21] entre los organizadores, y verticales[22] entre estos y los pobladores. Así, dependiendo de la variación en los lazos verticales y horizontales,[23] la acción colectiva, la información y las normas son distribuidas entre la base. En estos lazos tiene mucha importancia si los agravios que maneja la masa son homogéneos o no, y el vínculo de estas demandas con las proclamas del proyecto armado (Mosinger, 2018; Breslawski, 2020). En esta línea, las bases sociales, que son bastante dinámicas, determinan la naturaleza de la organización armada que se construye (fragmentada, cohesionada e integrada, etc.), porque estructuran la acción colectiva y la interacción social según el contexto (Staniland, 2012, 2014; Parkinson, 2013; Sarbahi, 2014).

Una base social no siempre es visible: puede permanecer a la sombra o puede crear nuevas sociabilidades o limitarlas (Pearlman, 2020; Parkinson, 2013). Efectivamente, esta puede constreñir la inserción de un actor armado en un área de acuerdo a su estructura y densidad (Larratt-Smith, 2020; Sarbahi, 2014). Un gobierno bastante restringido o los actos de resistencia son prueba de este tipo de interacciones (Barter, 2014; Arjona, 2017; Kaplan, 2017).

Según Timothy Wickham-Crowley (2015), en Centroamérica los Estados facilitaron o constriñeron la adhesión de una población a un proyecto armado, dependiendo de cómo este la integró y el tipo de dominio que ejerció: indirecto o con un poder infraestructural real (Mann, 2006, 2012). Si el proyecto armado tenía un dominio directo era mucho más

20 Estas pueden ser grupos de estudio, de confianza, de estudiantes, partidos políticos, cultos religiosos, etc., que si bien no son configuradas para la guerra, pueden ser desplegadas para el uso de la violencia.

21 Estos conectan a los líderes del grupo entre sí, a través del espacio y el tiempo, y son los que hacen posible una visión política compartida en el nivel regional y nacional.

22 Las relaciones cotidianas de confianza y creencias que unen al grupo con los pobladores, son un ejemplo.

23 Algunas bases sociales ligan fuertemente al grupo armado en un territorio a través de los lazos horizontales, pero tienen lazos verticales muy débiles con los civiles; otras tienen lazos verticales fuertes, pero débiles entre los organizadores (horizontales).

difícil el éxito; en cambio, cuando "prefería no gobernar", en particular, no administrar directamente las poblaciones de las llamadas zonas sin dios ni ley o de frontera, la situación fue a otro precio: las variaciones en las prácticas de gobernanza y la posibilidad de darles trámite a las demandas y reclamos de los locales incidieron en la capacidad estatal de gobernar y en sus estrategias para controlar[24] (Slater y Kim, 2015). Por ello la emergencia de tipos de dominio indirectos, tales como las llamadas gobernanzas híbridas[25] o una gobernanza *de iure*[26] (Naseemullah y Staniland, 2016), en las cuales los actores armados encuentran ventanas de oportunidad para consolidar una base social y desarrollar acciones armadas.

En lo que atañe a la postura de la población, esta puede restringir o facilitar la inserción de los actores armados. Ejemplo del primer caso es Arauca, con acento en el piedemonte, donde las AUC nunca pudieron ingresar por el fuerte enraizamiento social y político del ELN (Larratt-Smith, 2021). Sin embargo, las bases sociales también pueden ser dinamizadas, infiltradas, impulsadas o cooptadas por un grupo armado (Ramírez, 2001; Parkinson, 2013; Larratt-Smith 2020). En particular, esto sucede cuando este busca insertarse en las luchas preexistentes de las masas con el fin de cooptar sus agravios y agendas reivindicativas. Así, se posiciona como un tipo de "correa de transmisión" entre el Estado y los pobladores, a la vez que instrumentaliza ciertos procesos organizativos. Ejemplo de este segundo caso pueden ser las marchas cocaleras del sur del país, el paro del nororiente, entre otros. Este último punto plantearía algunos interrogantes a la teoría de Staniland (2012, 2014), visto que las bases sociales pueden ser tanto determinantes como habilitantes de una organización armada, debido a que se puede instrumentalizar a las organizaciones existentes para consolidar la gobernanza y un orden dado.

Ahora bien, la calidad y el tipo de vínculo establecido estaría en función de diversas variables: el horizonte temporal del actor armado, el tipo de instituciones desarrolladas, su ideología, la violencia ejercida, los procesos de socialización, etc. (Metelist, 2009; Gutiérrez y Wood 2017; Green, 2016; Wood, 2018; Balcells, 2011). La interacción de estos elementos determina la forma de inserción y la posibilidad que tiene un grupo armado de

---

24 De acuerdo con Slater y Kim (2015), puede haber cuatro mecanismos de integración que el Estado pone en marcha cuando su imperio está en entredicho, en particular cuando hay presencia de insurgencias: gobierno indirecto, dividir y conquistar, pacificación militar y expulsión forzosa.

25 En este tipo de dominio indirecto el Estado comparte explícitamente la autoridad con los actores sociales, en esferas superpuestas de control y coerción (Naseemullah y Staniland, 2016).

26 En esta segunda forma, el Estado mantiene el dominio directo *de iure* sobre un territorio, pero en realidad la coerción es aplicada localmente por élites políticas intermedias; el marco legal es el mismo que el de la gobernanza weberiana, pero su implementación real no se asemeja a la regla (Naseemullah y Staniland, 2016).

apropiarse e incidir en las dinámicas territoriales; en particular, esta es más profunda cuando logra incrustarse en los procesos económicos y organizativos (Larratt-Smith, 2020; Aponte, 2020; Breslawski, 2020).

Hay dos casos abordados en este libro que ilustran el dinamismo de esta relación. Por un lado, está el del sur de Bolívar, donde de acuerdo con Juan Diego Forero y Daniel Amaya el ELN se consolidó y posicionó como un actor estructurante de la vida territorial (p. 199). Aun así, su conexión con los locales se quebró por una excesiva militarización en las relaciones, sus intentos de mayor control de la vida política local, y la directriz nacional de incrementar la extracción de recursos para dar el anhelado salto estratégico y financiar el proceso expansivo de mediados de los noventa. Fue tal la debacle, que lo que era un bastión insurgente se convirtió en una "distopía" y gran parte de los acumulados políticos y sociales logrados se fueron al traste. Esto fue bastante evidente con la inserción paramilitar (1996) y la marginalización militar y política de dicha estructura. Por otro lado, está el metarrelato araucano. Allí el ELN no solo se tornó en un actor estructurante del territorio, sino que también le brindó impulso a los procesos organizativos y le dio claridad a la vida de las masas. Según expresa Charles Larratt-Smith en esta obra (p. 261), esto le valió la posibilidad de construir un *gobierno anidado* en el que muchos de los aspectos de la vida del piedemonte cuentan con su regulación e injerencia, debido a que su orden y proclamas tienen una buena sintonía con las reivindicaciones de los pobladores.

Lo dicho hasta acá permite señalar que los no combatientes también moldean el tipo de control territorial establecido y la forma que toma el gobierno de los armados[27] (Rubin, 2019; Arjona, 2017). Por eso, el modelo de base social importa, y mucho: de ella se obtiene información, y es una instancia básica para llegar a acuerdos, generar confianza entre los miembros y construir significados políticos compartidos (Staniland, 2014; Daly, 2016). Así, dependiendo de la calidad de lazos que esta genere, se tiene idea de la fortaleza del control organizacional al interior del grupo armado y de la localidad, cuando los comandantes se movilizan para la guerra (Staniland, 2014). De ahí que entre más diversas e inconexas sean las bases sociales, más vulnerables son a las presiones externas y hay mayor dificultad para homogeneizarlas, cohesionarlas e institucionalizarlas (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2018).

---

27 En esto también hay que tener en el panorama ciertas coyunturas críticas (actores y planes contrainsurgentes, las disputas territoriales, etc.), las cuales resultan del todo cruciales, porque visibilizan y son la verdadera y mejor prueba para saber realmente qué tanto y cómo está incrustada una organización armada en la vida y los procesos de los habitantes de un territorio dado.

Esto explica las singularidades del ELN, pues contrario a las FARC[28] que contaron con un nicho claro (campesinos colonos y cocaleros), este se apalancó en redes estudiantiles, sindicales, gremiales, campesinas, y de partidos y movimientos políticos (Movimiento Revolucionario Liberal [MRL], Partico Comunista [PC], PCML).

Por lo anterior, de acuerdo con la tipología de Paul Staniland (2012, 2014), el ELN es un grupo de vanguardia[29] que adolece de problemas en su acción colectiva y en su cohesión, porque su comandancia tiene dificultades para alinear y disciplinar a las bases sociales regionales en las que se soportan sus frentes de guerra, los cuales se mueven más bajo una lógica territorial que en sintonía con el proyecto nacional; esta condición organizacional se explica por la estrategia de recomposición por adhesión de diversos emprendimientos armados locales y regionales.

El andamiaje organizacional: la importancia de los procesos de institucionalización

El lente analítico de Paul Staniland (2012, 2014) permite tipificar al ELN, sin embargo, se queda corto al explicar por qué emergen y cómo se sostienen las variaciones en su interior.

Toda organización armada necesita aglutinar y homogeneizar sus redes y bases sociales territoriales para desafiar al Estado. No obstante, este esfuerzo oculta la dramática variación que hay entre las distintas organizaciones

---

28 Este puede ser un punto de amplio de debate, si se tiene en cuenta que las FARC ejercieron algo de influencia en redes sociales estudiantiles, sindicales, agrarias e indígenas, para dar algunos ejemplos. No obstante, si se observa la composición demográfica tanto de las extintas FARC como de sus zonas de mayor influencia, nos topamos con alto componente campesino, que siempre se ubicó en las áreas de frontera agrícola del país, y que se articuló con la política nacional y el mundo integrado a través del Partido Comunista Colombiano.

29 Para Paul Staniland (2014), aparte de los grupos de vanguardia están los grupos integrados, caracterizados por una unidad de mando y una férrea disciplina interna que va desde los comandantes, pasando por los mandos medios, hasta los combatientes rasos y los civiles. Esta coherencia y cohesión se basa en la existencia de controles que garantizan la disciplina, el adoctrinamiento y la socialización de los recién llegados mediante reglamentos y estatutos internos, entre otros. Por eso, los integrantes de este tipo de grupo armado se encuentran conectados a través de instituciones que operan de forma similar en el tiempo y en el espacio, y mantienen una unidad en los objetivos. Los grupos parroquiales son los que tienen una disciplina laxa a nivel de comandancia, pero en el plano local logran un fuerte control y regulación de la vida cotidiana de los pobladores; no se encuentran enmarcados por una institución central que les dé coherencia y les facilite una acción coordinada en el nivel nacional, hecho que explica que los diferentes líderes de las facciones persigan diversas estrategias y políticas al interior del grupo. Finalmente, están los grupos fragmentados, los cuales se definen como organizaciones que no tienen control ni a nivel de cúpula ni local, comparten pocos valores y normas, tienen escasa capacidad coercitiva para desplegar decisiones organizacionales y poca unidad en las metas de sus líderes.

subnacionales que componen a un proyecto armado (Sarbahi, 2014; Larratt-Smith, 2020). Para analizar y explicar las variadas expresiones territoriales de una insurgencia como el ELN se requieren dos estrategias mutuamente vinculantes: (1) Examinar cómo los procesos de institucionalización y los cambios organizacionales del orden nacional influyen en las estructuras territoriales; y, (2) analizar cómo estos lineamientos y apuestas se ven constreñidos, limitados o potencializados por los factores contextuales de cada espacio geográfico, aspecto del que trata el siguiente acápite.

Un primer llamado es a dejar de ver a los actores armados como entes y bloques unitarios. Estos son entidades compuestas de diferentes modos organizacionales y estructuras de cohesión que integran a diversos grupos sociales, los cuales tienen una importante influencia en su comportamiento externo e interno (Bakke, Cummimgham y Symour, 2012; Bultmann, 2018; Gutiérrez, 2019). Todo grupo armado está integrado por un conjunto cambiante de actores que comparten una identidad central, pero que tienen lealtades maleables e intereses potencialmente divergentes (Bakke, Cummimgham y Symour, 2012). En el ELN esto es palpable en el rol aglutinante que tienen su discurso bipolar (Estado vs. sociedad) y la idea de construcción de poder popular, sin embargo, cada frente desarrolla su propio trabajo de masas y despliega violencia según su contexto territorial.

La identidad, los intereses y los límites del grupo deben ser vistos como un resultado contencioso, producto de las interacciones sociales que se dan en el seno de la organización armada y con los no combatientes (Wood, 2008, 2018),[30] y del hecho de ser un sistema dinámico de interacciones sociales (roles, vinculados por relaciones que reproducen comportamientos), que está en constante proceso de reproducción y cambio (Parkinson y Zacks, 2018; Wood, 2008; Daly, 2012; Parkinson, 2013; Plank, 2017). La estructura orgánica,[31] así como las decisiones que toman sus líderes[32] y las bases sociales[33] son determinantes en la trayectoria del grupo, debido a que su interacción encuadra el desarrollo y éxito/fracaso del proyecto armado (CICR, 2018; Gutiérrez, 2008; Bultman, 2018; Humphreys y Weinstein, 2006; Weinstein, 2007, Gates, 2002).

---

30 Hay otros autores que concuerdan con esta idea, tales como Zachariah Mampilly (2011), Sarah Parkinson y Sherry Zacks (2018) y Breslawski (2020).

31 Referida al tipo de institucionalidad desarrollada, la ideología y la doctrina, las redes sociales preexistentes, las fuentes de financiamiento, los procesos de reclutamiento, entre otras.

32 Lógicas y dinámicas extractivas de recursos, las apuestas armadas que desarrollan para perseguir sus objetivos, los espacios donde se insertan, son ejemplo.

33 Para Jeremy Weinstein (2007), las bases sociales y económicas de los grupos armados determinan no solo el éxito o fracaso de estos, sino también su proclividad al uso de violencia y, por extensión, podría argumentarse, su disposición a meterse en un proceso de paz.

El éxito de una organización armada está dado por estas condiciones: a) tener combatientes fiables, lo que exige realizar reclutamientos; b) recibir suministros periódicos de alimentos y municiones, lo cual requiere dinero y logística; y c) tener un control sobre sus miembros, lo que implica que estos deben obedecer las normas y seguir las directrices de sus líderes (disciplina militar, lealtad de grupo, etc.). De ahí que la manera como la organización tramite estos asuntos determina su estructura: esta puede ir desde jerarquías centralizadas y una disciplina aplicada desde los niveles superiores hacia los inferiores, hasta grupos tan descentralizados que cada cual conserva un papel en la comunidad entre estallidos de violencia (CICR, 2018).

Por estas razones, todo proceso de crecimiento representa serios retos y dilemas para la comandancia, pues de acuerdo con los niveles y grados de institucionalización desarrollados (manuales internos, reglamentos, códigos, socialización y formas de reclutamiento), se deben implementar, a la par, esfuerzos para mantener la cohesión, la unidad[34] y configurar una cúpula representativa de poder.

Estos dos asuntos no son nada triviales. Primero, dependiendo de cuán bien se configuren y solidifiquen los mecanismos internos de coordinación y cohesión, se puede tener idea de la capacidad y el poder infraestructural que tiene la cúpula para desarrollar acciones coordinadas entre las diversas estructuras que conforman al grupo (Bakke, Cummimgham y Symour, 2012). En el ELN, el desarrollo de algunos frentes se produjo de forma autónoma al proyecto nacional, por lo cual estos implementaron su propia estrategia de construcción de poder popular y cimentación de su base social, de socialización intrafilas y fuera de ellas, de desplegar violencia y de extraer recursos. Incluso, tienen sus propios plenos, himnos, simbologías y órganos de comunicación. Esto refleja que el proceso de recomposición y crecimiento de su comandancia tuvo pocas posibilidades de cohesionar a cabalidad todas las organizaciones regionales e imprimirles un sentido unitario a sus acciones.

Segundo, la distribución de poder a lo largo de la organización nacional es crucial para entender la emergencia y el carácter de los problemas de acción colectiva y de cohesión. Todo depende de si hay una organización tipo *hegemón*, si hay organizaciones en términos relativos igualmente poderosas y si las organizaciones poderosas participan en la sombrilla institucional o son hostiles a ella (Bakke, Cummimgham y Symour, 2012). En el caso del ELN, lo dicho por estos autores tiene una potencia explicativa importante para develar (1) su realidad

---

34 La cohesión y la unidad están vinculadas y definidas por el número de organizaciones en un proyecto armado, el grado de institucionalización entre ellas y la distribución de poder (Bakke, Cummimgham y Symour, 2012).

organizacional, en razón de que ejemplifica los límites que ha padecido el proyecto nacional para cohesionar y homogeneizar a sus frentes; y, (2) para entender la nueva trayectoria.

Respecto al primer punto, el mando colegiado[35] se ideó para que cada una de las organizaciones regionales tuviera representación y voz dentro del grupo. Sin embargo, esta cúpula terminó no siendo representativa de los acumulados endógenos de cada emprendimiento, en particular del Sol de Oriente (frente de guerra oriental), pues este se autoexcluyó para evitar ser controlado y homogeneizado. Así, todo impulso centralizador y unificador que realizó el ELN nacional en materia política y de distribución de recursos fue frenado e incluso cuestionado de forma directa por esta estructura y sus aliados de turno, lo que impidió que el COCE institucionalizara la manera como los diversos frentes de guerra podrían y habrían de dominarse unos a otros.

En lo que atañe al segundo punto, el "nuevo ELN" muestra un posible cambio organizacional, producto de una condición que no es señalada por Paul Staniland (2014) en las organizaciones de vanguardia. Según este autor, hay dos formas para entender el paso de una organización de vanguardia a una integrada: por medio de alianzas con grupos locales[36] y por imposición a la fuerza del grupo nacional sobre la organización local.[37] Sin embargo, la transformación que estaría experimentando muestra una nueva variante, en la cual los factores endógenos del poder de cada constelación que compone un grupo armado tienen juego en dicho proceso. En la actualidad, el Sol de Oriente, gracias a los recursos militares (pie de fuerza y potencia de fuego), sociales (anclajes territoriales) y políticos (mejor y mayor representación en las instancias nacionales de comando) que posee no solo se ha reposicionado al interior del proyecto armado, sino que, igualmente, está cumpliendo el papel de hegemón, y como tal está aglutinando a los demás emprendimientos armados en torno al proyecto nacional y sus apuestas armadas y políticas, algo que torna al ELN en un grupo más integrado y cohesionado.

Pensando a través de los estudios del federalismo (Riker, 1964, 1987; Gibson y Falleti, 2007), como se señaló atrás, los problemas de cohesión y acción colectiva del ELN no son producto de una lucha de cómo el centro (el COCE) buscó dominar los emprendimientos regionales (en este caso al

---

35 Dirección Nacional Provisional, Dirección Nacional y Comando Central.

36 La configuración de alianzas locales ocurre cuando los líderes nacionales de un grupo armado se incrustan en las dinámicas y tensiones territoriales para articularlas con la escisión maestra que los armados promueven.

37 Esta estrategia implica la articulación violenta de los grupos preexistentes al proyecto nacional, tal y como hicieron las AUC con grupos regionales y locales de autodefensas en su proceso de expansión nacional, a mediados de los años noventa.

Domingo Laín y otros frentes), sino más de cómo los diversos emprendimientos armados regionales se posicionaron al interior de la comandancia[38] y evitaron ser integrados y homogeneizados.

Así como las provincias o estados en países como Argentina o Estados Unidos han puesto límites (*boundary control*) a los intentos democratizadores del nivel central en los espacios subnacionales (Gibson, 2012), algunos frentes del ELN establecieron y mantuvieron esos límites en el tiempo para evitar ser integrados y perder autonomía frente al proyecto nacional.[39] Si le damos un giro organizacional a los planteamientos de William Riker (1964, 1987), la federalización elena y los procesos de institucionalización desarrollados fueron más jalonados por dinámicas políticas internas que por amenazas u oportunidades militares exógenas (Gibson y Falleti, 2007): el traumático caudillismo de Vásquez Castaño y la forma como tramitó las fricciones y tensiones intestinas llevaron a Pérez & Cía. a federalizar y a colegiar el mando para evitar repetir los males y traumas iniciales.[40]

El meollo del asunto está en que cada emprendimiento armado se integró a partir de sus propios acumulados, pero el sistema y la estructura organizacional configurada nunca los homogeneizó; y, como corolario, el sistema representativo y de toma de decisiones no reflejó el poder concreto de cada constelación armada territorial, por lo cual el Sol de Oriente —la estructura más fuerte en términos de anclajes sociales, de pie de fuerza, recursos, etc.—, siempre tuvo la capacidad de cuestionar, frenar e incluso boicotear todo intento centralizador y cohesionador. Ahora bien, en el presente esta condición organizacional puede estar transformando al ELN en un grupo más integrado y cohesionado, por la mejor y mayor representatividad del frente oriental en la comandancia nacional.

En resumidas cuentas, el número y el carácter de las organizaciones que componen un proyecto armado, así como las tecnologías y mecanismos de homogeneización, disciplinamiento y control, son cruciales para entender los problemas de acción colectiva: la ausencia, debilidad o fortaleza de las instituciones (normas, rutinas, códigos, costumbres, etc.) y la

---

38 Estas interacciones y emplazamientos internos se pueden leer en clave de entramados de interdependencia, que terminan por afectar, condicionar y configurar organizacionalmente al ELN de acuerdo a las alianzas y fricciones establecidas entre las distintas facciones (Elías, 2012).

39 Por paradójico que suene, este proceso visibiliza que el ELN replica los problemas y males de la sociedad colombiana que dice combatir, en particular el sistema político y la falta de democratización en niveles territoriales como las localidades (municipios) y sublocalidades (veredas y corregimientos).

40 Una analogía similar se puede realizar con el pacto consocionalista del Frente Nacional, debido a que el sistema político de ese entonces y sus intríngulis eran reflejo de la desigual articulación e integración de las fuerzas políticas locales y regionales (caciquismo) al interior de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador), lo que afectó su cohesión y la disciplina de sus integrantes (Gutiérrez, 2007).

distribución de poder (armas, dinero, combatientes, legitimidad, ideología o vínculos con las bases sociales) tienen serias repercusiones en la forma como se comportan los subcomandantes y comandantes territoriales, al darles mayor o menor discrecionalidad para interpretar y desarrollar las directivas centrales (CICR, 2018).

Las coyunturas críticas, como los momentos de recomposición o expansión, exponen a todo tenor el poder infraestructural que tiene todo grupo armado, a la vez que lo lanza a un ejercicio de equilibrismo vertiginoso: al tiempo que se expande y acumula poder, debe configurar e institucionalizar sus procesos de cohesión y coordinación interna,[41] y desarrollar y desplegar acciones armadas que le den sentido a su existencia. Si un grupo armado solo se perfila a la extracción de recursos, en vez de pelear con su oponente militar o defender a una población en específico, el sentido colectivo organizacional puede verse reducido y la cohesión afectada (Kenny, 2010); si una organización armada crece de forma poco institucionalizada corre el riesgo de fragmentarse o de adolecer de graves problemas de acción colectiva, etc.

En el caso del ELN, sus paros armados y las campañas que desarrolla contra la infraestructura nacional se pueden leer como acciones que tienen dos direcciones sustantivas: la primera hacia el interior de la guerrilla para fortalecer sus elementos identitarios y su unidad; y, la segunda, hacia el exterior, para mostrar su capacidad de desestabilización y resistencia armada.[42] Sin embargo, algunos frentes de esta guerrilla también realizan acciones armadas que, en vez de darle cohesión al grupo, dejan en evidencia sus grietas y fisuras organizacionales. El mejor ejemplo son las acciones unilaterales que han desplegado algunos frentes para romper los exiguos consensos que lograron el COCE y la DN en torno a la paz. El llamado "debate en caliente",[43] (que es más una acción que incendia el debate), es lo que mejor ejemplifica este tipo de sucesos.

41 Formas de reclutamiento, tipo de entrenamiento y adoctrinamiento, instancias de coordinación, etc.

42 Estas dimensiones pueden verse afectadas o impactadas por las figuras militares, los bienes materiales y las capacidades para extraer recursos, los procesos expansivos, las políticas contrainsurgentes, el tipo de reclutamiento, la emergencia de nuevos liderazgos, los tipos de apoyo social, los grados de legitimidad y de apoyos externos, etc. (Bakke, Cummimgham y Symour, 2012).

43 Este es un término que utilizan los integrantes de esta guerrilla en momentos de álgidos litigios internos. Frente a la imposibilidad de llegar a consensos, algunos frentes de guerra han desarrollado acciones que tienen un impacto a nivel nacional y repercuten sobre la posición adoptada por la comandancia. El mejor ejemplo de esto es la bomba instalada en la Escuela de Cadetes General Santander (2019) por el frente de guerra oriental, en demostración de su desacuerdo con la forma como se estaba llevando la negociación en La Habana (Cuba) con el Estado colombiano. Con este hecho no solo mostró su desacuerdo con los diálogos, sino que también inclinó la balanza a su favor al interior del ELN, al cerrar toda posibilidad de diálogo con el gobierno de Iván Duque.

Por ello, cuando desde la comandancia nacional se han tomado decisiones que afectan los intereses territoriales concretos de los frentes, es cuando han emergido los dilemas y divisiones. Los ejemplos abundan desde su génesis hasta el presente: el grupo de los urbanos vs. rurales[44] (años sesenta y setenta); el Grupo Replanteamiento[45] (años setenta); la escisión de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), antiguo MIR Patria Libre[46] (años noventa); la disidencia del Ejército Revolucionario del Pueblo o el Ejército Revolucionario Guevarista[47] (años noventa); o las acciones unilaterales del frente oriental, desde el asesinato del obispo de Arauca (1989) hasta la instalación del carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander (2019).

El foco territorial

Si a la baja capacidad de institucionalizar y cohesionar los diversos grupos que componen al ELN nacional le sumamos los factores contextuales y endógenos de los territorios, tenemos el rompecabezas de su variación territorial.

La recomposición elena (1977-1981) implicó un proceso de articulación territorial de diversos emprendimientos armados. Esto ratificó que las diversas estructuras que lo componían no emergieron por una directriz central del COCE, que enviaba una comisión dada a un territorio específico, sino por el voluntarismo y emprendimiento particular de una persona o un grupo que se adscribía al discurso bipolar, y una vez tenía los acumulados necesarios era reconocido y agregado a la etiqueta nacional.

Esta dinámica explica por qué los frentes elenos tienden a atender más a los factores endógenos de sus territorios que al paraguas nacional, y es consecuente con el hecho de que sus fisionomías y estructuras organizativas se configuraron, de forma específica, según las condiciones contextuales y de las poblaciones presentes.

---

44 Esta fue una división que emergió en los años sesenta y setenta a nivel de la comandancia por ciertos debates en torno a las verdaderas vías revolucionarias. Los rurales estaban integrados por Esteban Fabio Vásquez, José Ayala, Luis José Solano Sepúlveda y Julio Portocarrero. Y los urbanos por Víctor Medina Morón, Juan de Dios Aguilera, Heliodoro Ochoa y Julio Cesar Cortés.

45 Este abdicó frente a la lucha armada como verdadera vía de cambio. Estaba integrado por Alonso Ojeda, Medardo Correa y el P.J. de Bogotá, y algunos sectores de Barranquilla, Cali, Medellín y Cartagena.

46 Esta fue una guerrilla que se integró al ELN a mediados de los años ochenta. Con la caída del Muro de Berlín y la Constituyente de 1991, sus líderes condenaron la vía armada como verdadera instancia de cambio y se acogieron a un proceso de desmovilización en 1994.

47 Este grupo fue fundado, en 1992, por los hermanos Jesús Sánchez Caro y Lizardo Sánchez Caro, quienes se escindieron del ELN, específicamente del frente Ernesto "Che" Guevara, por choques ideológicos y desacuerdo en temas en torno a la paz.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que si un frente de guerra ha tenido la destreza y la oportunidad para implantar un orden y ser un agente clave en el territorio, se debe a que su agenda de trabajo político, sus formas de regulación y su estructura organizacional se adecuaron y estuvieron en sintonía con las condiciones socioeconómicas (tipo y forma modelo de desarrollo, estructura agraria, etc.), políticas (forma y grado de integración territorial) y simbólicas (marginalidad-integrado, medianamente integrado) de ese espacio. Y donde no logró conectarse, bien por imposibilidad de la estructura armada o por su desinterés, este tomó formas variadas y particulares de acuerdo a esos elementos contextuales, las apuestas armadas propias del frente y los apoyos conseguidos.

Dicho de otra forma: el éxito, el fracaso o la mediana incrustación de un frente en los procesos territoriales ha estado marcada por los procesos organizativos endógenos de los pobladores; por la calidad de las redes sociales e instituciones preexistentes, sus agravios, intereses, entre otros (Barter, 2014; Arjona, 2016; Kaplan, 2017; Breslwaski, 2020); así como por su desarrollo durante el tiempo (Aponte, 2020; Arjona, 2016). En otras palabras: la guerra se libra en el terreno humano, y por esta condición la población local influye en los intereses de los armados para apoderarse del territorio, en los costos para hacerlo y en la capacidad de ganar y retener el control (Rubin, 2019; Breslwaski, 2020).

He ahí la razón por la cual el ELN tiene diversos rostros territoriales: algunas veces se materializa más como un ejército de ocupación, con visos criminales; en otras aparece como un ente estructurante de la sociedad regional, con fuertes apoyos sociales y una importante capacidad de fuego; y en otras es más fantasmagórico, porque se remite a tratar de influir en los procesos sociales y las demandas de tramitación, pero con una presencia militar limitada.

En suma, al ELN hay que entenderlo desde las variadas bases sociales a partir de las cuales se catapultó, y que le dieron la fisionomía y textura que tiene en la actualidad. Como se ha dicho, cada frente difiere en cuanto a su aproximación a las redes sociales locales y a sus mecanismos de socialización (CICR, 2018), y hay que entender que estos procesos son resultado de una interacción entre la agenda voluntarista de los líderes, los cuales representan anclajes territoriales variados (bases sociales), y la movilización de las agendas que promueven las diferentes organizaciones que componen a esta insurgencia.

Visto así, el marco analítico propuesto no solo complementa el vacío dejado por la apuesta comprensiva de Paul Staniland (2012, 2014), sino que, de igual manera, permite categorizar los diversos elenes que se han configurado de acuerdo a su materialización territorial concreta, es decir: i) el tipo de estructura armada presente —si está inclinada por el uso

de la violencia para disciplinar y alinear a los habitantes o más abocada al trabajo político, y si esta es histórica o no—, y ii) su relación y capacidad para ordenar a los pobladores, las actividades económicas, y así sucesivamente. Además, con este lente, se logran comprobar dos cosas: una, el ELN no siempre ha sido exitoso a la hora de replicar su modelo araucano de relacionamiento y de regulación;[48] y, dos, su autodenominación como una organización político-militar es más una etiqueta que cualquier otra cosa, dado que esta no explica ni determina ni homogeneiza su expresión territorial, como se deduce de la siguiente categorización:

- *Sur de Bolívar*: "La distopía elena". Marginal en lo militar, con cierto grado de influencia política y de capacidad de regulación sobre ciertas actividades económicas (oro y coca).
- *Arauca*: "El metarrelato *eleno*". Un actor estructurante social, económica y políticamente, con una importante capacidad militar.
- *Catatumbo:* "Un ELN determinante sin ser estructurante". Un actor decisivo, pero no hegemónico en al ámbito militar, económico, político y social.
- *Cauca y Nariño: "Un* ELN *fantasmagórico*". Un actor decisivo, pero no hegemónico en el ámbito militar, económico, político y social.
- *Chocó:* "La *distorsión elena*". Un actor marginal que se tornó relevante por su vinculación con las economías territoriales (oro, coca y extracción maderera) y un alto impacto humanitario, que muestra una lógica de ejército de ocupación.[49]

La metodología

Este libro fue construido a partir de una metodología mixta, la cual integró y puso en interacción diversas estrategias de recolección de fuentes cualitativas (prensa, entrevistas, informes del sistema de alertas tempranas, cartografía, etc.) y cuantitativas (bases de datos sobre desplazamiento, acciones bélicas, cultivos de coca, secuestros, etc.).

---

48 Sus logros fueron más producto del olfato de algunos de sus integrantes, quienes leyeron de forma acertada las tensiones y problemas que emergieron en ciertos escenarios durante su proceso de configuración y territorialización, nada más.

49 Con esta última categoría se hace referencia a la actitud predatoria y violenta que puede exhibir un grupo armado, bien porque no le interesa desarrollar anclajes sociales, bien porque no tiene la capacidad para lograrlos. En este orden, el tipo de presencia tiene el atributo de ser una anexión temporal de un territorio, por lo cual no hace reclamación de la soberanía, o si lo hace es bajo altos niveles de violencia, lo cual le deja muy poco margen a los pobladores para negociar, resistir o adaptarse.

En primera instancia, hay que señalar que se trató de realizar un barrido general de la literatura existente (informes, textos diagnósticos, trabajos académicos, relatos biográficos, etc.), para identificar no solo los hallazgos y las narrativas con las cuales se ha abordado a esta guerrilla, sino también para escrutar los vacíos y las vetas investigativas.

El ELN, a diferencia de las FARC, tiene una producción de literatura menos amplia, pero cuenta con una ventaja comparativa: los líderes elenos, y la misma guerrilla, han sido más proclives a brindar entrevistas, a realizar encuentros con periodistas y escritores, y a desarrollar órganos y estrategias comunicativas (revistas, comunicados, etc.) donde exponen sus visiones, percepciones e interpretaciones de los procesos sociales en los que estaban o están insertos.[50]

Todas estas fuentes proveyeron una rica y amplia información primaria, que permitió compensar la imposibilidad de entrevistarlos y citarlos en primera persona, bien porque ya están muertos, bien por las limitaciones para contactarlos o bien porque las condiciones de orden público y seguridad no lo permitieron. La única excepción a este caso fue el frente de guerra Noroccidental, al que gracias a su amplia y activa participación en algunas redes sociales se pudo acceder a su comandancia y enviarles un cuestionario por medios virtuales, para conocer sus percepciones e interpretaciones sobre su desarrollo. De esa forma, se tuvo la fortuna de que no solo respondieron a cabalidad, sino que también se pudo conocer, de primera mano, el revés de los procesos territoriales que acontecen en el Chocó.

El equipo de investigación se basó en las entrevistas publicadas en libros y en algunos medios de difusión política y propagandística del ELN (*Colombia Rebelde, Voces de Simacota, Resistencia*, etc.), para entender los marcos cognitivos elenos y poner a prueba el argumento transversal que propone este libro: dilucidarlo territorial y organizacionalmente.

Los relatos testimoniales de comandantes como Manuel "el Cura" Pérez, Nicolás Rodríguez Bautista, "Antonio García", "Milton Hernández", entre otros, permitieron explorar sus percepciones e interpretaciones de la realidad colombiana y sus perspectivas revolucionarias; de igual forma, dieron pistas para entender y explicar los dilemas, los retos, y las limitaciones de las soluciones y estrategias utilizadas para redirigir el proyecto armado durante su dirección. Sus narraciones fueron especialmente útiles para establecer el punto de inicio y comprender el desarrollo de los constreñimientos organizacionales, y, en general, la manera como fue adecuándose la estructura organizacional a las apuestas nacionales para la supuesta toma del poder. Basta con señalar las entrevistas

---

50 Cabría preguntarse si en esta necesidad de micrófonos y cámaras tiene que ver el importante componente urbano en sus líderes y cuadros.

otorgadas y publicadas en los libros de María López de Vigil (1989), Martha Harnecker (1988, 1988a), Víctor De Currea-Lugo (2018) o de Carlos Medina Gallego (1996), para dar unos ejemplos.

Esta labor detectivesca se complementó con una serie de entrevistas a expertos o conocedores del tema: se conversó con exguerrilleros de esta insurgencia, con académicos, con personas vinculadas a procesos organizativos donde el ELN tiene presencia,[51] con personas delegadas o de apoyo en las mesas de negociación con esta guerrilla e incluso con excombatientes de las FARC. Cada uno de los entrevistados, de acuerdo con su vivencia, expertticia y experiencia, proveyó información sobre aspectos específicos del ELN, tales como la naturaleza de su organización interna, las transformaciones de las cuales fue objeto, los debates que tenían lugar al interior en ciertas coyunturas, las finalidades y objetivos de las apuestas armadas y los contextos en que transcurrieron los procesos esgrimidos, entre muchas otras aristas, y de esa manera brindó al estudio no solo un relato situado espacial y temporalmente, sino también variado en términos de escalas: unos hablaron del ELN nacional, otros de un frente de guerra en particular y otros de una estructura específica (una compañía o comisión, por ejemplo).

Por otro lado, las lecturas territoriales que integran la segunda parte de la obra fueron construidas con base en un trabajo de campo desarrollado en los últimos tres años (2016-2020). Los autores de cada una de ellas se desplazaron a la respectiva zona de estudio (Arauca, Catatumbo, Cauca-Nariño, Chocó, sur de Bolívar) como mínimo cuatro veces, para empaparse de primera mano de su vida y su dinámica territorial.

Como estas lecturas fueron realizadas por personas distintas, para evitar que la información se recolectara de forma desperdigada y sin norte alguno se estableció como parámetro básico una estructura de texto que sirviera para indagar temas análogos y tener claros los límites y dimensiones de interés. Esto significó un gana-gana para los autores, pues no solo les facilitó el ejercicio comparativo, sino que, de la misma forma, les simplificó la captura y recolección de la información. La definición de este esqueleto de temas y dimensiones permitió, así mismo, ahondar en los diversos rostros territoriales del ELN y realizar un ejercicio comparativo entre las diferentes estructuras. Por eso, dependiendo de las condiciones contextuales de cada zona (seguridad, accesibilidad, tipos de contactos, etc.), unas lecturas presentan mayor grado de profundidad en el trabajo de campo que otras.

51 Líderes de procesos organizativos de bases, agremiaciones, cooperativas, Juntas de Acción Comunal, etc., de plataformas de segundo nivel, con miembros de consejos comunitarios, grupos indígenas, entre otros.

La estrategia adoptada implicó que no se desarrollara un cuestionario como tal para el trabajo de campo en cada uno de los territorios abordados, y le concedió mayor libertad al entrevistado para contar sus experiencias e interpretaciones sobre la expresión territorial concreta de cada frente de guerra.[52] Así pues, las lecturas territoriales apuntaron a cubrir las siguientes dimensiones: primera, cómo el proceso de configuración regional facilitó o no la inserción del ELN; segunda, cuál fue la trayectoria y el desarrollo del frente de guerra en términos militares, el tipo de violencia desplegada, etc.; tercera, cuál fue el tipo de orden configurado (modos, formas, instancias y dimensiones de regulación); cuarta, cuál fue el vínculo con las economías territoriales presentes y el tipo de regulación para la extracción de recursos; y, finalmente, qué papel tiene actualmente el ELN en las conflictividades sociales de las áreas donde hace presencia.

Sin distingo de la zona, en cada territorio fueron consultados líderes y miembros de organizaciones sociales de base; autoridades, maestros y académicos locales; personas que trabajan en ONG nacionales y organismos de cooperación internacional, entre otros. Cada uno, de acuerdo a su posición en estas sociedades, dio un relato en torno a todos los temas o a uno de ellos. Esta diversidad de fuentes exigió a los autores procesar y articular, en varios frentes y en un solo relato, las experiencias e interpretaciones de los sucesos narrados por tan variados protagonistas. Además, es importante remarcar que no siempre se pudo acceder ni cubrir la totalidad de los territorios proyectados, pues el trabajo de campo se vio constreñido por las realidades y factores contextuales de estos.

Algunos podrán señalar esto como un talón de Aquiles; no obstante, este posible vacío se subsanó con fuentes de información que recolectan de primera mano y describen ciertas dinámicas de las zonas donde tiene presencia el ELN. Tal es el caso del uso sistemático de los reportes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, y de las sesiones de intercambio de información y retroalimentación con los miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos durante el año 2020 para validar el trabajo realizado.[53]

A todo este trabajo se le sumó una revisión de prensa (1990-2019) del archivo digital del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep),

---

52 Como ganancia, el no uso de cuestionario permitió acceder y crear un espacio donde las personas relataran, de la forma más fidedigna posible, sus percepciones y formas de representar los procesos sociales territoriales.

53 En estos espacios de intercambio de conocimiento y experiencias se pusieron a prueba y se enriquecieron las lecturas territoriales con las interpretaciones y percepciones que tenían los expertos de esta organización sobre las zonas de presencia del ELN que este estudio aborda.

base de datos que recoge y sistematiza información sobre Colombia publicada en diarios nacionales y regionales, y en portales de información (*El Espectador, El Tiempo, El Colombiano,* Revista *Semana, La Opinión, Verdad Abierta,* etc.). También se estudió y analizó una amplia documentación del ELN resultante de sus congresos, plenos, cartas a los militantes, y medios de difusión y propaganda de su proyecto revolucionario: *Insurrección, Voces de Simacota, Colombia Rebelde*, por ejemplo. Esto permitió conocer y explicar temas relacionados con los dominios territoriales, el tipo de orden impuesto, la clase de violencia desplegada, los momentos de continuidades y rupturas, para citar algunos.

Para los datos duros (cuantitativos) se utilizó la Base de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia (1990-2018), del Cinep. La información allí recaudada y sistematizada posibilitó comprender y trazar las fluctuaciones en el despliegue de violencia por parte del ELN, sus lógicas (momentos de impulso militarista y expansivo, de repliegue y defensa, etc.) y dinámicas (contra un grupo armado enemigo, contra la población, tipo de acciones armadas, etc.), en una perspectiva temporal. Estas dos dimensiones hablan de su comportamiento individual y visibilizan la relación con sus oponentes. Además, las infracciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos indican cuándo sus frentes estaban trenzados en luchas por la población civil y su control, debido a que otra cuestión son las confrontaciones armadas que hacen referencia al combate explícito entre dos actores definidos.

También se consultó la base de datos sobre campos minados construida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), para ver y refrendar sus lógicas violentas. Como es bien sabido, esta guerrilla se ha caracterizado por el uso sistemático de este tipo de explosivos, los cuales exponen las apuestas armadas de esta organización, y cómo y de qué forma buscan defender sus dominios territoriales. Adicionalmente, se consultó la base de datos de secuestros del CNMH, de cultivos de coca de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y de producción aurífera del Sistema de Información Minero Colombiano y de la Unidad de Planeación Minero Energética, lo que permitió profundizar y analizar los variados vínculos territoriales que tienen los frentes de guerra, y exponer cómo esta guerrilla ha cambiado temporalmente su portafolio tributario. Todo esto para hacer visibles los comportamientos y respuestas del ELN en los escenarios regionales donde tiene presencia, y cómo estos están vinculados con su condición organizacional: una guerrilla federada, con capacidades limitadas para cohesionar y coordinar las acciones de sus frentes de guerra, como consecuencia de unos grados y niveles de institucionalización restringidos por la estrategia de recomposición adoptada.

Estructura de la obra

El texto está dividido en tres partes. En la primera se hace un recuento histórico, de amplia duración (1964-2020), sobre la trayectoria militar y organizacional del ELN, para trazar y entender la génesis y el desarrollo de los constreñimientos organizacionales que padece. Además, para mostrar que su mismo desarrollo y ruta de acción permiten descifrarlo en la actualidad, y juzgar sus posibilidades y limitaciones para hacer tanto la guerra como la paz.

Conocer estos aspectos organizacionales elenos permite entender que los problemas fundacionales, y otros que emergieron en su posterior etapa de recomposición, crearon una dependencia en el ser y el hacer de esta organización armada, que redundó en dificultades para disciplinar, coordinar y llevar a actuar colectivamente a sus frentes de guerra. En efecto, el hecho de exponer el juego de estos elementos organizacionales, que para algunos son su fortaleza (ser una guerrilla federada y tener combatientes de medio tiempo, para dar dos ejemplos), también los eleva como su talón de Aquiles en ciertos escenarios y coyunturas críticas.

En la segunda parte se expone, de forma concreta, cómo se materializa esta guerrilla territorialmente. Por ejemplo, Juan Diego Forero y Daniel Amaya, en el capítulo "El ELN en el sur de Bolívar: la pérdida de un bastión militar", muestran cómo esta insurgencia, luego de ser un actor estructurante de la sociedad local, se tornó en un actor armado marginal e irrelevante en lo militar, con cierto grado de influencia política y de capacidad de regulación de algunas actividades económicas (oro y coca), nada más. Esto se explica por la manera como buscó regular la vida política y extraer recursos en los años noventa, en que empezó a ser percibido por algunos pobladores como un obstáculo para la integración territorial y política de esta subregión del país. De ahí que esta experiencia armada, que se erigía hace más de tres décadas como un estandarte de la construcción de poder popular, hoy en día se perciba como una práctica distópica que cuestiona el metarrelato eleno.

Luego, Charles Larratt-Smith, en "El ELN en Arauca: el fortín guerrillero en la sombra de los Andes", muestra cómo este se constituye en la metanarrativa elena. En esta parte del país, el frente de guerra Oriental es mucho más que un actor estructurante del territorio (social, económica y políticamente) con una importante capacidad militar. De ahí el concepto de gobierno anidado que acuñó el autor, sobre la base de que en Arauca se cumplen a cabalidad todas las premisas de poder popular y de acumulación de fuerzas, porque el Domingo Laín se incrustó de tal forma en el proceso de configuración regional que la génesis del Estado y su

desarrollo, de las élites, de los procesos organizativos y del modelo de desarrollo contaron con su influencia e incidencia.

Por su parte, Henry Ortega, en su trabajo en la zona del Catatumbo hace que nos topemos con un ELN determinante mas no estructurante. Su capítulo "Un ELN entre lo societal y militar: dinámicas y lógicas territoriales del conflicto en el Catatumbo", expone a una insurgencia decisiva en términos militares, pero no hegemónica en el ámbito militar, económico, político y social. Esto porque no pudo encuadrar todo el proceso de configuración regional ni el embate paramilitar (años noventa), y por la presencia de otras insurgencias que también tienen allí sus propias bases sociales, entre otras aristas.

"El frente de guerra Suroccidental: entre el arraigo social y la reconfiguración militar", capítulo sobre la zona de Cauca y Nariño, del que es autor Daniel Amaya, muestra a un actor marginal en lo militar, con influencia en los procesos organizativos, aunque con fuertes impactos sociales, circunstancias que llevaron a calificarlo como un ELN fantasmagórico, por cuanto se remite más al trabajo de masas y político que a cualquier otra cosa.

Finalmente llegamos al caso chocoano: el frente de guerra Occidental. Según exponen Andrés F. Aponte y Valentina González en el capítulo "Un poder popular distorsionado: madera, oro y coca como determinantes organizacionales y armados del ELN chocoano", esta estructura es un actor marginal que adquirió relevancia por su vinculación con las economías territoriales (oro, coca y extracción maderera) y el alto impacto que genera, lo cual muestra una lógica de ejército de ocupación y poca conexión con los habitantes locales, salvo en sus zonas de presencia tradicional (alto Atrato y alto San Juan). Con estos acumulados (mayores recursos y capacidad de desplegar más violencia) se ha convertido en una estructura importante dentro del ELN nacional y, como tal, significativa al momento de hablar sobre el tema de la paz.

Cada lectura territorial indaga las siguientes dimensiones: una, de qué estructura armada estamos hablando, su momento de inserción, y en qué acumulados y apoyos sociales se ancló. Dos, la clase de orden social impuesto, las capacidades y posibilidades de regulación que tiene tanto de la vida social como de las actividades legales, semiilegales o ilegales. Tres, el papel del ELN en las conflictividades sociales que han emergido en las zonas donde tiene presencia en los años recientes.

El libro cierra con unas conclusiones generales y una serie de recomendaciones en materia de paz y seguridad. En las conclusiones se realiza una síntesis de los hallazgos expuestos y de cuáles son las implicaciones comprensivas que tienen los argumentos planteados; y en las recomendaciones se ofrecen insumos en materia de política pública para una eventual reanudación de los diálogos con esta guerrilla, así como sobre las

estrategias de seguridad. Esta parte, autoría de Fernán González, es una apuesta de síntesis que expone cómo la larga duración incide en los rostros territoriales del ELN, las implicaciones que tiene esta condición organizacional para hablar de paz con esta guerrilla y las posibles estrategias de seguridad que se deben adoptar.

Debilidades de la apuesta investigativa

Como toda labor investigativa, este trabajo tiene una serie de limitaciones y vacíos que no fueron subsanados, bien porque no hacen parte de la pregunta en cuestión, bien por imposibilidades de otra índole. Sin embargo, ninguna de estas limitaciones le resta potencia y contundencia a los hallazgos y a la propuesta explicativa planteada.

En primer lugar, no habla ni examina, a profundidad ni a cabalidad, el desarrollo del *ethos* eleno: si bien era interesante para este estudio entender sus cimientos y el ideal del guerrero, solo se alude a los procesos de socialización de forma tangencial, pues el principal interés y los interrogantes planteados permiten pasar de lado por este tema, por considerar que trasciende su foco.

Segundo, contiene escasa referencia a la historia de sus ideas, pero al igual que en el anterior punto, este tampoco era el propósito. Si bien se hacen referencias a ellas y a quienes instituyeron formas y marcos cognitivos, la alusión obedece estrictamente a entender lo organizacional, nada más.

Tercero, la cobertura geográfica no abarcó la totalidad de los espacios donde hace presencia esta insurgencia. Ciertamente, faltó trabajar y examinar territorialidades como el bajo Cauca, la costa Caribe y al otro lado de la frontera colombo-venezolana los vecinos estados de Táchira, Apure y Amazonas. Respecto a la ausencia de trabajo de campo en las dos primeras zonas, puede señalarse que con el estudio y análisis del frente Darío Ramírez Castro (sur de Bolívar) y los frentes Oriental y Nororiental de guerra se dan luces acerca de las estructuras y dinámicas bajo las cuales se mueven las organizaciones que hacen presencia en la costa Caribe (Cesar y La Guajira) y el bajo Cauca (Tarazá, Remedios, Segovia); de igual forma, hay que señalar que la incidencia de estas insurgencias en estos espacios es bastante marginal y su incursión en ellas muy reciente (2016 en adelante), luego de haber sido expulsadas de ellas al filo e inicio del milenio. En cuanto a las áreas de presencia y dominio eleno en el territorio venezolano hay que advertir que las pistas y señales de las dinámicas de lo que en ellas ha acontecido en el pasado reciente están basadas en información recopilada por diversos estudios diagnósticos que contienen trabajo de campo en el área del vecino país, así como en los relatos de algunos pobladores del lado colombiano. Además, no sobra

recordar que las condiciones actuales y el tipo de relación establecida entre los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro hacen casi imposible realizar cualquier actividad distinta a las habituales. De todos modos, la lectura territorial de Charles Larratt-Smith sobre el ELN en Arauca brinda importantes indicios sobre el tipo de inserción, orden y vinculación con las economías territoriales en las áreas del vecino país.

Hechas estas salvedades, es justo afirmar que el presente estudio permite tener "entre los dedos" a todas las estructuras del ELN nacional, para, así, dilucidarlo organizacional y territorialmente. En otras palabras, ninguna de las debilidades o vacíos identificados le quitan el peso explicativo y la potencia que tiene la propuesta narrativa planteada, en orden a comprender al ELN del presente.

Descifrando al ELN: un federalismo insurgente, génesis y desarrollo de sus constreñimientos organizacionales, 1964-2020

Andrés F. Aponte González[1]

La apuesta central de este apartado es mostrar la trayectoria inicial del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y evidenciar la forma en que sus constreñimientos organizacionales han marcado su camino hasta el presente.

Este relato inicia con el momento fundacional del proyecto armado (1964) y finaliza en 2020, justo cuando se desata la crítica coyuntura mundial de pandemia de la COVID-19, situación en la cual esta guerrilla siguió exhibiendo una importante capacidad de desestabilización regional y una clara intención de copar territorios de antiguo dominio fariano[2] (Catatumbo, bajo Baudó, Arauca, sur de Bolívar, bajo Cauca, Cauca, para dar algunos ejemplos).

El objeto de este recuento es exponer cómo los avatares del momento fundacional, en cabeza del caudillismo de Fabio Vásquez Castaño, y el posterior tratamiento deliberado de estos, generaron unos constreñimientos organizacionales impremeditados, que explican su textura actual: una guerrillerada federada, con problemas de acción colectiva, asentada sobre bases sociales heterogéneas (con demandas y reivindicaciones variadas) y anclada en economías territoriales (legales, semiilegales e ilegales), que le dan múltiples caras.

Este primer y largo apartado se divide en cinco momentos claves que descifran organizacional y territorialmente al ELN. En el primero, que va desde la creación del proyecto (1962) hasta la gran crisis (1977), se expone la forma y el desarrollo inicial del ELN, sus vicisitudes, las tensiones y

---

1 Investigador y coordinador del equipo de Conflicto y Paz y de la presente investigación, en el marco del proyecto Derechos, conflicto y paz, de Diakonia.

2 Relativo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

la forma como unas y otras fueron tramitadas. Este primer momento es un eje fundamental del argumento explicativo: el liderazgo caudillista y draconiano de Fabio Vásquez Castaño fue el catalizador para que se diera la reingeniería del proyecto revolucionario.

En el segundo acápite se muestra cómo Manuel Pérez Martínez, el cura Pérez, y Nicolás Rodríguez Bautista "Gabino" reconstruyen y recomponen al ELN desde las cenizas, al punto que esta insurgencia fue la que más creció en pie de fuerza y en presencia territorial en los años ochenta (1978-1990). No obstante, este proceso no fue nada virtuoso y tuvo su revés o lado oscuro; en respuesta a la traumática dirección de Fabio Vásquez, los nuevos líderes le dieron un giro organizacional al ELN: federalizaron la insurgencia y colegiaron el mando, cambiaron de estrategia armada, etc., pero más importante aún fue que la recomposición del proyecto nacional no centralizó ni homogeneizó los diversos emprendimientos armados que integraron al ELN nacional.

Justamente, esta estrategia de centralización por cooptación o adhesión de los emprendimientos armados locales al proyecto nacional explica las limitaciones organizacionales e institucionales de esta guerrilla: este grupo no fortaleció ni consolidó unas instancias reguladoras, coordinadoras ni cohesionadoras bastante fuertes para darle sentido organizacional y alinear a todas las constelaciones armadas que lo componían. Y, como corolario, las instancias nacionales —Comando Central (COCE) y Dirección Nacional (DN)— no fueron representativas de los acumulados y la distribución de fuerzas reales y concretas de cada emprendimiento armado territorial. Particular atención merece el frente de guerra Oriental, el cual se posicionó como el hegemón del proyecto nacional, ya que en torno a él se apalancó el proceso de reconstrucción y de expansión territorial, y se elaboró toda una narrativa heroica que ha tendido a simplificar la historia del ELN: no todo empezó ni termina en Arauca. Además, esto trajo como contraparte negativa el que esta estructura se apostó como un obstáculo en los intentos centralizadores y cohesionadores de la cúpula, para no perder autonomía en términos políticos (centralización), militares (combatientes) y económicos (recursos provenientes del petróleo).

Un tercer momento es el que en este estudio se denomina un salto al vacío (1991-1998), pues si bien el ELN creía tener todos los acumulados y recursos necesarios para dar un "brinco" estratégico y cambiar la correlación de fuerzas con el Estado, los resultados de sus apuestas derivaron en todo lo contrario: nunca dio el anhelado salto estratégico y sí fue testigo de cómo sus apuestas armadas crisparon los ánimos y sus relaciones con ciertas élites locales y regionales. En esta trayectoria tuvieron un considerable peso sus constreñimientos organizacionales: cada estructura territorial desplegó a su manera, en términos militares y de extracción de

recursos, la estrategia nacional Plan Vuelo de Águila; y, de igual modo, se hicieron visibles nuevamente las flaquezas de la comandancia para centralizar y cohesionar al grupo en los temas de siempre: la paz y la distribución de recursos.

De tal forma, este salto fue un brinco a su retroceso y marginalización territorial, pues los aspectos señalados atrás, más el creciente protagonismo fariano y el embate paramilitar en sus áreas de presencia, terminaron por relegarlo y convertirlo en un actor de segundo plano en el tablero nacional de la guerra.

El cuarto período (1999-2009) presenta a un ELN agazapado en las retaguardias de sus retaguardias, salvo en Arauca, para evadir el desgaste militar que suponían la campaña contrainsurgente estatal de la política de Seguridad Democrática y la expansión paramilitar. Esta decisión deliberada de sus jefes nacionales y territoriales dificultó la comunicación entre las dos instancias, a la vez que les dio rienda suelta a algunas estructuras en el tema de extracción de recursos (cobro del gramaje a la coca). Respecto al primer punto, el frente de guerra Oriental se erigió como la estructura armada que logró mantener en pie al ELN, pues en todos los otros lugares del país cuando esta insurgencia no fue derrotada militarmente experimentó sendos retrocesos. El segundo punto es de suma importancia, porque la estrategia de recomposición por marginalización y vinculación con las economías territoriales (minería, contrabando, coca, etc.), les permitió a los diversos frentes de guerra recomponerse militar, social y políticamente. Sin embargo, esto agravó los problemas de cohesión interna y minó el poder infraestructural del ELN nacional.

Finalmente, el último período expone cómo estamos asistiendo a una etapa que puede ser disruptiva en la trayectoria militar y organizacional elena. Primero, todo indica que el frente de guerra Oriental ha decidido insertarse de forma definitiva en las instancias de dirección nacional para incidir de fondo en la toma de decisiones del ELN nacional. Por eso, contrario a lo que otros plantean, aquí se advierte que el ELN puede estar ganando una mayor cohesión y coordinación por el nuevo papel del Sol de Oriente.[3] Segundo, este reposicionamiento del frente de guerra oriental se plasma en una mayor comunicación y coordinación con otras estructuras del territorio nacional. Tercero, la vinculación con las economías territoriales de algunos frentes, así como su comunicación con el Sol de Oriente permiten pensar que se está frente a un relevo generacional de mandos, que en poco o nada beneficia a la línea tradicional de la etapa fundacional y del momento de recomposición. Cuarto, nos hallaríamos

3 Nombre con el que se refieren al frente de guerra oriental dentro de las filas insurgentes.

frente a una insurgencia derrotada estratégicamente, pero cada vez más criminalizada en sus medios para proseguir con sus fines políticos: la resistencia armada. Y, quinto, su presencia territorial en Venezuela es una variable cada vez más pronunciada y determinante, al punto que algunos la apelan una guerrilla binacional.

Del aprestamiento revolucionario al replanteamiento estratégico y organizacional, 1962-1977

> El ELN se fundó en 1964. Es decir, aparece un no relato en las décadas del 70 y del 60. Sólo empieza a aparecer como un ELN importante, un ELN contundente, con armas, con recursos, que se expande, a partir de los 80. (…) la década del 70, para el ELN es una década perdida. Es la década de los fusilamientos, es la década de las derrotas militares, es la década de la crisis, es la década de la dispersión, es la década de la mierda para el ELN. No es una década heroica. (Entrevista 1).

Este epígrafe sintetiza los procesos y dinámicas del período inicial: expone los traumas y miedos que se desarrollaron en el momento fundacional, al punto que poco o nada se suele hablar de los primeros pasos de esta guerrilla y de las implicaciones que tuvo de cara al futuro del proyecto revolucionario. No por nada, en estos primeros años, el ELN no solo estuvo a punto de desaparecer, sino que detrás de sí dejó una estela de sangre, producto de las purgas internas y el mando caudillista y draconiano de Fabio Vásquez Castaño (1940-2019), lo cual provocaría, en el siguiente período (1978-1991), toda una reingeniería organizacional que daría fisonomía al ELN que conocemos, y que se constituiría en su segundo momento fundacional.

El inicio del ELN no se puede entender sin el contexto interno (instauración del pacto consocionalista del Frente Nacional) e internacional (revolución Cubana), y sin el voluntarismo de Fabio Vásquez Castaño y Cía., quienes bajo la idea de focos guerrilleros[4] buscaron transformar con las armas la idea del Estado y de la sociedad colombiana (Vargas, 1992; Vargas et al., 2011; Hernández, M., 2006; Aguilera, 2006; Medina, 2007).

La elección del lugar fue de acuerdo a las lecturas de los manuales revolucionarios y a las posibilidades que tenían para conectarse con el mundo rural. Los lugares escogidos como sitios posibles fueron tres: la

---

4 Esta idea revolucionaria fue inspirada en la experiencia del Ché Guevara en Cuba y desarrollada por Régis Debray. Parte del supuesto de que *no es siempre necesario esperar a que estén dadas o desarrolladas todas las condiciones para la revolución, pues el centro insurreccional puede crearlas*. Para dicho objeto, un objetivo inicial es insertar grupos móviles en puntos estratégicos de un país, con acento en las zonas campesinas y lugares próximos a pequeñas ciudades, para emprender acciones armadas de desgaste militar y psicológico contra las fuerzas armadas regulares. Los focos guerrilleros serían grupos armados poco numerosos y esencialmente móviles.

serranía de San Lucas (Bolívar), Miraflores (Valle de Tenza) y Magdalena medio, siendo este último el elegido, porque reunía los factores objetivos para el emprendimiento armado[5] (Harnecker, 1988; Vargas, 1992; Medina, 2001, 2007, 2012; Arenas, 1971; Hernández, M., 2006; Aguilera, 2006) y porque tenía ciertos acumulados organizacionales desarrollados durante la época de La Violencia (1948-1962), concretamente, unas redes sociales preexistentes que sustentaron y apoyaron las guerrillas liberales de Rafael Rangel (Daly, 2012).

Antes de la toma de Simacota (1965), Fabio y sus amigos realizaron un trabajo político y acumularon recursos para emprender su evento fundacional[6] (Menéndez, 1967). En esta apuesta las redes preexistentes de las guerrillas liberales fueron cruciales, pues Vásquez y Cía. aprovecharon los agravios campesinos creados por el Estado colombiano años atrás y su demanda de tierra (Medina, 2000; Rodríguez y García, 2017), para trabajar con las masas y desplazarse en el monte.

De manera escueta, y analizado de forma comparada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el inicio de este proyecto armado estuvo marcado por unos líderes y una ideología que estaban en búsqueda de una base social. No en vano son tres los rasgos que lo distinguen de las FARC:

Uno, su génesis no es resultado de procesos concretos de mediana y larga duración (no resolución del problema agrario y cerramiento del sistema político), sino del voluntarismo armado y la lectura subjetiva del contexto nacional e internacional de unos urbanos iluminados (de extracción social y política bastante variada), en su mayoría estudiantes entre los 25-30 años, que veían en *El manual de táctica guerrillera* y *El código guerrillero,* el camino a tomar (América Libre, 2009; Harnecker, 1988; Medina, 2000). Las palabras de Jaime Arenas (1971, p. 43), son esclarecedoras:

> Con mínimos recursos, pobre vestimenta, armamento deficiente y gran moral, aprendieron a conocer el terreno, a subsistir con sus propios

5 Los criterios de selección de esta zona fueron: uno, tenía una tradición de lucha armada (guerrilleros liberales) y de protesta social (obreros, artesanos, campesinos, etc.); dos, había un campesinado (colono) receptivo a la opción armada (en los cauces del río Lebrija y Catatumbo); tres, era montañosa, de difícil acceso y con buenas provisiones (Vargas, 1992; Medina, 1996, 2012; Arenas, 1971; Hernández, M., 2006; Rodríguez y García, 2017); y, cuarto, su ubicación en el territorio nacional era estratégica: "permitía" dominar el tren, el río Magdalena y la carretera al mar (Claudio León Mantilla, citado en Vargas, 1992); además, tenía cierta proximidad con la frontera venezolana (Vargas, 1992).

6 Este evento significó: uno, poner en práctica (para ese momento el ELN tenía 26 personas en armas) las lecciones aprendidas en el Cerro de los Andes; dos, forjar un discurso radical que sirvió de pegamento ideológico y para publicitar su proyecto armado en el país: y, tres, hacer emerger las primeras tensiones entre la comandancia y los cuadros por la forma de actuar (Rodríguez y García, 2017; Medina, 2012).

> medios (…), a manejar su precario armamento, a practicar rígidamente reglas de disciplina y medidas de seguridad, a conocer los principios elementales de la guerra irregular y de la teoría política.

Dos, su fundación no fue liderada por un personaje emblemático ni carismático, ni menos aún tuvo un mito fundacional como el de Marquetalia (1964).

Tres, y más importante, sus organizadores no eran homogéneos desde el punto de vista de su extracción social y política: había militantes del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) (González, 2014; Medina, 1996; Aguilera, 2006; Ugarriza y Pabón, 2017); estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS); miembros del Frente Unido (FU), liderado por Camilo Torres, y de la Asociación de Universitarios de Santander (AUDESA) (Arenas, 1971; Vargas, 1992; Medina, 2001, 2012; Hernández, M., 2006; Acevedo, 2017); incluso, disidentes del Partido Comunista Colombiano (PCC), en su mayoría de la Juventud Comunista Colombiana (JUCO), y sectores radicalizados del sindicalismo, como el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (Vargas, 1992; Medina, 2012; Arenas, 1971; González, 2014). Esta heterogeneidad en sus cuadros enmarcó los problemas y tensiones que experimentó el ELN en su etapa inicial, ya que ni Fabio Vásquez ni las estructuras organizacionales desarrolladas homogeneizaron a estos grupos humanos.

Las palabras de Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino", son dicientes de las dificultades que enfrentaban los urbanos para relacionarse con la masa:

> Pedro David anota que no ve en Andrés (Víctor Medina Morón) la capacidad necesaria para ser el segundo del Estado Mayor; y esa inquietud la compartimos todos los presentes y argumentamos que no tiene la capacidad para dirigir un combate, que no camina con agilidad en el monte, que no se orienta bien en el terreno, (…) varias de sus ideas no logramos entenderlas, y que además de ser despreocupado es torpe en los entrenamientos. (Rodríguez y García, 2017, p. 68).

Para ese entonces, producto de la preeminencia urbana, el discurso tomó como base los siguientes puntos, los cuales denotan, desde su inicio, una visión bipolar del mundo y unos marcos cognitivos guiados por un fervor anarco popular: (1) el reclamo y reivindicación del carácter social de la confrontación, como única vía para cambiar la idea del Estado. Para eso, (2) se cerraron frente a la vía electoral: "El que escruta elige", y asumieron una postura claramente antiimperialista, con unos principios programáticos[7] que muestran más una inclinación democrática popular que socialista (Arenas, 1971; Medina, 2000, 2007; Harnecker, 1988; Cubides, 2005).

---

7 Primero, se planteó la toma del poder por las clases populares como requisito básico para la formación de un gobierno democrático; segundo, una revolución agraria; tercero, una visión del desarrollo económico industrial nacional, mediante una política proteccionista y la

El desarrollo inicial del ELN fue lento y en medio de grandes dificultades. De ahí la importancia de la entrada de Camilo Torres,[8] quien con su aureola mesiánica y la incorporación de la tesis del Frente Unido[9] le dio a la guerrilla, a pesar de ciertos recelos con Fabio Vásquez Castaño, un impulso para superar su excesivo localismo,[10] dado que alcanzaron las 60 o 70 personas en armas (Medina, 2012; Broderick, 2013; Vargas, 1992; González, 2014; Vargas et al, 2011). Así, al discurso nacionalista y antioligárquico se le agregó el de la teología de la liberación,[11] cuyas facciones más radicales partían de la existencia de una violencia estructural para justificar, por la década del 70, el derecho a la toma de las armas (Aguilera, 2006; Vargas et al., 2011; López, 1989).

El aventón de Camilo Torres duró poco: su muerte en el primer y único combate que entabló (1966) rompió ciertos lazos y creó algunas tensiones internas. No obstante, su espíritu revolucionario inspiró a nuevos reclutas, entre los cuales se destacan algunos sacerdotes, monjas y seminaristas (1969) del grupo Golconda.[12] Tales son los casos de Manuel Pérez

---

confiscación de intereses extranjeros; cuarto, la nacionalización del subsuelo y su adecuada explotación en beneficio de la economía nacional; quinto, una reforma urbana y un plan de vivienda; sexto, la creación de un sistema popular de crédito que elimine a los usureros y a los agiotistas; séptimo, la organización de un plan nacional de seguridad pública; octavo, un plan vial que sirva para articular la economía; noveno, promover la educación en los espacios rurales y una reforma a los programas de estudio; y, décimo, la defensa, difusión y desarrollo de la cultura nacional, en cabeza del Estado (Medina, 2000).

8 Este personaje se erigió como un símbolo que le dio al Proyecto estabilidad, permanencia y proyección sobre la edificación de sus propias leyendas, rituales y mártires (Medina, 2012).

9 Así se le denominó al movimiento liderado por Camilo Torres en los años sesenta. Uno de sus fundamentos políticos fue estar en abierta oposición al pacto bipartidista del régimen frentenacionalista y al tal vez principal mecanismo de legitimación de este: el proceso electoral. También fue innovador, porque este movimiento político abrió la posibilidad de diálogo y confluencia entre cristianos y marxistas en la conformación de un proyecto político ideológico, lo cual era a todas luces una ruptura importante con la tradicional relación dogmática que sostenían estos dos sectores.

10 Según un entrevistado, la llegada de Camilo se interponía en los planes de Fabio Vásquez, quien creía que él era quien verdaderamente encarnaba la revolución: "Fabio creía que la revolución empezaba y terminaba por él. Fabio pensaba que la revolución era él, no eran las masas, y mucho menos lideradas por un cura. Pero como el cura resultó siendo simpatizante de las luchas guerrilleras del ELN, lo manda llamar y lo enchuspa" (Entrevista 1). Todo indica que Fabio Vásquez no valoraba mucho la dimensión del trabajo político de Camilo, ni percibía la importancia de su liderazgo, como aparece en las críticas de Jaime Arenas (1971).

11 La teología de la liberación no constituía una tendencia homogénea en favor de la lucha armada; en su interior existían varias corrientes con énfasis distintos: cultura popular, trabajo educativo y variadas referencias teológicas. Conviene recordar que los textos iniciales de esta corriente solo aparecen en los años setenta, con referencias a la teoría de la dependencia, la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968, la educación de Paulo Freire, Mariáteguí y el Che, cuando el ELN había nacido en 1965 y Camilo había muerto en 1966.

12 Grupo de sacerdotes que durante los años sesenta y setenta decidieron trabajar bajo las orientaciones de la teología de la liberación. No obstante, este tampoco era homogéneo. Aunque en

Martínez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez Comín (Villamizar, 2016; Medina, 2012; Harnecker, 1988). Manuel Pérez, cuando llegó a ser comandante del ELN, fue el artífice del mito camilista:

> Camilismo aquí en Colombia, no existe, ni en el ELN. Repetir un par de frases, no hace camilista a nadie, pero todos creen que sí. (…). Y los que más se reclaman camílistas, son los elenos. (…) los menos camilistas que hay en el país, son los elenos. Es decir, el tránsito por la vida, la impronta de Camilo en las filas guerrilleras, de una guerrilla muy, muy militarizada, para el momento en el que él se fue para la guerrilla, fue casi que ninguna. Sin embargo, en el ELN, figura: Comandante en Jefe, Camilo Torres Restrepo. ¡Qué despropósito! y se le rinden honores al comandante en jefe. Camilo Torres no pasó de ser un combatiente, es más, no llegó a ser un combatiente, nunca llegó a disparar un arma, no sabía cómo desarmar una granada ni hacer una trampa, no sabía de tácticas guerrilleras, estuvo cuatro meses en la guerrilla y se murió. (Entrevista 1).

Los primeros intentos de inserción en nuevas áreas resultaron infructuosos, pues sus comisiones fueron golpeadas por la fuerza pública cuando no lograron conectarse con los pobladores (1966-1968). En el Opón (1966), el trabajo fue desarticulado en una operación militar (Medina, 1996), empero es catalogado como la primera experiencia en la que trabajaron de verdad con el campesinado, lo que evidencia las dificultades iniciales: "Por primera vez, se logra una dinámica de trabajo estrechamente relacionada con la base campesina. Se organizan colectivos y la guerrilla se esfuerza por generar articulación" (Nicolás Rodríguez Bautista, miembro del Comando Central, citado en Medina, 1996, p. 82). También se dio el caso de la Comisión Camilo Torres, en la zona limítrofe de Cesar y Santander,[13] la cual nunca pudo conectarse con los campesinos de la zona y fue rápidamente desarticulada (Medina, 1996, 2012; Ugarriza y Pabón, 2017).

Estos tropiezos y el exiguo avance sumieron al ELN, poco a poco, en una crisis interna y en su aislamiento de las masas, cuyo único resultado fue militarizar más sus relaciones con las bases y fraccionarse internamente (Medina, 2012). La dirigencia se dividió en dos: urbanos[14] vs. rurales[15]

---

su origen tuvo mucho que ver el pensamiento y trabajo de Germán Zabala, quien se dedicaba inicialmente a reclutar militantes para el ELN, este evolucionó hacia una idea de revolución cultural basada en la educación liberadora, precisamente a raíz del encuentro con los curas radicalizados que dieron lugar al grupo Golconda. Como cuenta Javier Darío Restrepo (1995), el cura Pérez, Laín y otros respondieron por escrito a sus preguntas sobre su ruptura con la mayoría de los curas de Golconda, más partidarios de una revolución cultural y educativa.

13 La región de Sogamoso, Lebrija, Los Chorros, Patuna, La Muzanda, Bocas del Rosario.

14 Integrado por Víctor Medina Morón, Juan de Dios Aguilera, Heliodoro Ochoa y Julio César Cortés.

15 Compuesto por Fabio Vásquez Castaño, José Ayala, Luis José Solano Sepúlveda y Julio Portocarrero.

(Medina, 1996) y emergió, por la estructura cognitiva de los comandantes, un desprecio hacia el campesinado por sus prácticas y costumbres (Aguilera, 2006; Arenas, 1971; Medina, 2012; Hernández, M., 2006). La imposibilidad de darle trámite a las tensiones y de conectarse con sus supuestas bases, dio lugar a intrigas y complots que desembocaron en una serie de fusilamientos. Las asambleas de Campo Concentración (1970) y Campo Línea (1973)[16] son la evidencia (Velandia, 2012; González, 2014; Aguilera, 2006; Medina, 2012; Arenas; 1971); entre los ajusticiados cayeron militantes de base y dirigentes, muchos de ellos fundadores y cofundadores del grupo.[17] Así se inauguró, en cabeza de Fabio Vásquez, una tradición en la cual las contradicciones políticas eran solucionadas por la vía militar (Medina, 2000, 2012; Harnecker, 1988a).

Entre 1969 y 1972, el ELN intentó un nuevo proceso expansivo. Se insertó en el sur de Bolívar (Santa Rosa y Simití), en los límites del bajo Cauca antioqueño (Nechí y El Bagre), en el nordeste antioqueño (Amalfi, Segovia, Remedios, Zaragoza y Yondó) y en Santander, en San Vicente de Chucurí (Medina, 1996, 2012; Ugarriza y Pabón, 2017). Esta estrategia no solo le demandó mayores esfuerzos de coordinación y nuevos recursos materiales (implementaron el secuestro y el robo como forma de conseguir recursos), sino que también expuso a la estructura armada por los pocos lazos que tenían con los pobladores de esos territorios.

Desde 1972, las cosas pasaron de castaño a oscuro. Para ese año, fueron desarticuladas sus redes urbanas con la detención de 210 personas en Aguachica (Cesar); Charta, Bucaramanga, El Socorro, San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja (Santander); Bogotá y Medellín (ELN, 2002; Medina, 1996, 2000). Un año después tuvo lugar la Operación Anorí, la cual casi llevó al exterminio militar a esta guerrilla, porque en ella murieron dos importantes comandantes (Manuel y Antonio, hermanos de Fabio Vásquez) y varias decenas de combatientes; luego, en 1974, cayeron en acción: José Solano Sepúlveda, Armando Correa y Domingo Laín Sáenz (Harnecker, 1988). Además, se dio la deserción, por desmoralización, de Ricardo Lara Parada, segundo al mando del ELN nacional. Este creó la tendencia Camilo Torres Restrepo, la cual desconoció la

---

16 Esta tuvo como actor central a Ricardo Lara Parada y su grupo, por los errores y desaciertos en temas de disciplina, relacionamiento con la base campesina y la tropa. Estos elementos llevaron a su destitución como segundo al mando.

17 Por estos años fueron fusilados o asesinados: Jaime Arenas Reyes, Ricardo Lara Parada, Víctor Medina Morón, Julio César Cortés, Heliodoro Ochoa, Hermídas Ruiz, Jaime Correa, Enrique Granados, Juan de Dios Aguilera, Salvador Afanador, Samuel Martínez, Pedro Vargas, Orlando Romero, “René” y “Toño”, y los Bertulfos: Armando Montaño, Orlando Romero y Carlos Uribe Gaviria

comandancia de Vásquez Castaño (Hernández, M., 2006). Sus palabras no pueden ser más exactas para entender el estado del proceso:

> Mi decisión compañeros es, participar en este movimiento amplio que lógicamente tiene que ser una postura política, una ideología, un planteamiento, donde tenemos que enfrentarnos al bipartidismo y tenemos que enfrentarnos también no al movimiento revolucionario tradicional, que quede claro eso, sino a los errores. Nosotros hemos sido muy sectarios, hegemonistas y le hemos planteado realmente dentro del proyecto de izquierda una posibilidad socialista a nuestro pueblo. Son muchos los años en los que hemos manejado esta propuesta, y la realidad es que el pueblo no se ha acogido, no ha participado masivamente en este proyecto. (Lara, s.f.).

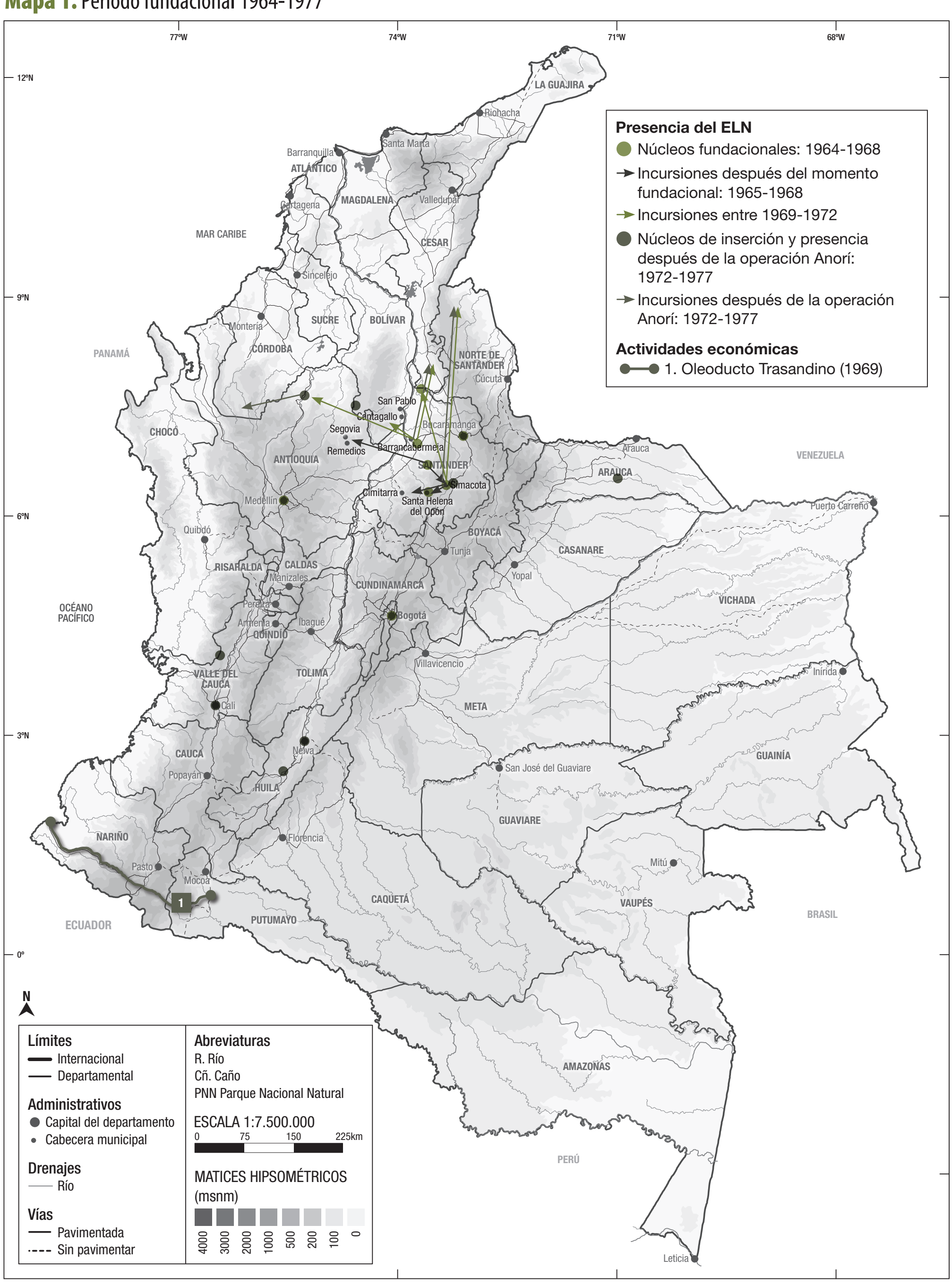
Fabio Vásquez, como líder natural, intentó recomponer la marcha, pero todas las estructuras rurales y urbanas quedaron bastante dispersas y poco articuladas con la comandancia (Medina, 1996) luego de una nueva serie de purgas internas, producto de las recriminaciones mutuas por el desastre de Anorí en 1973[18] y las decisiones de la Asamblea de Anacoreto (1974) en Remedios, Antioquia (Aguilera, 2006; Vargas et al., 2011; Arenas, 1971). Finalmente, la situación tocó fondo con el Febrerazo (1977), cuando la inteligencia estatal logró desarticular la red urbana de la capital del país (Medina, 2000; Harnecker, 1988).

El mapa 1 muestra todos los movimientos e intentos de inserción fallidos que tuvo el proyecto armado en este primer período. No solo expone el excesivo localismo en el que estuvo enfrascado el ELN, sino los movimientos dubitativos de las diversas comisiones creadas, las cuales estaban buscando consolidar y configurar la anhelada base social. Además, visibiliza que el ELN sobrevivió más por los apoyos y los sectores que había consolidado en los espacios urbanos del país, que por el andamiaje rural, algo que corresponde mucho a su importante origen y componente urbano.

Estos reveses tienen que ver tanto con la precariedad militar y poca pericia de sus integrantes como con la continua lectura ideologizada de los contextos y el encapsulamiento de sus líderes en la teoría foquista. La Asamblea de Campo Línea (1973) y la de Anacoreto (1974) exhibieron unos debates internos sobre la forma como se estaba llevando a cabo el trabajo político. Entre los críticos se señalaba como culpables a aquellos comandantes que habían cometido abusos contra el campesinado y presentaban casos de indisciplina, pues estaban erosionando las relaciones

18 Esto enmarca el fusilamiento de Víctor Medina Morón, Heliodoro Ochoa, Juan de Dios Aguilera, Julio César Cortés y Salvador Afanador.

Mapa 1. Periodo fundacional 1964-1977



Fuente: elaboración propia, con base en el relato y entrevistas 1, 2 y 22.

con las masas[19] (Medina, 1996, 2012; Aguilera, 2006; Vargas et al., 2011). Las siguientes palabras sintetizan las limitaciones y problemas señalados:

> En el arranque lo que se hizo fue buscar el mínimo apoyo para crear el foco inicial y hasta ahí llegó el trabajo. Cuando se dio el intento de consolidarnos en una zona, duramos un año en eso y buscamos cómo crear algunas formas comunitarias (…). Pero nunca logramos asentarnos… También en la zona donde nacimos tratamos de hacer lo que el Ché plantea en su libro: grupos campesinos que de día son trabajadores normales y en la noche se clandestinizan y son guerrilleros. Pero eso también requería una base fija. Y no logramos tenerla. Finalmente vimos que podíamos dedicarnos a la organización campesina y solo planteábamos a los campesinos que nos apoyaran. (Manuel Pérez, miembro del Comando Central, citado en López, 1989, p. 139).

De ahí que, para el final de este período, todas las estructuras rurales y urbanas quedaron bastante dispersas, poco articuladas con la comandancia (Medina, 1996) y en precarias condiciones. En cuanto a las rurales, se distribuyeron de la siguiente forma: un grupo en el sur de Bolívar (sin número específico de personas), a cargo de Rovira, el cual siguió realizando trabajo comunitario. Otro, a cargo de Fabio, ubicado en los límites de Remedios con Segovia (también sin un número determinado de integrantes); un tercero, a cargo de Román, que se desarticuló completamente después de la Operación Anorí y ciertas deserciones posteriores, quedando solo su líder; y, finalmente, otros dos grupos de los cuales no había información precisa de su presencia: el primero, en cabeza de José Solano Sepúlveda, el cual terminó a la deriva con 14 personas, luego de la muerte de este y la deserción de "Ramiro" y de otros combatientes; y el segundo, a cargo de "René", el cual luego de combates y deserciones pasó a tener 12 guerrilleros (Medina, 1996, 2000).

De todo este proceso, la figura de Fabio Vásquez no salió bien librada. Su actuar militarista y draconiano hizo mella en su liderazgo, por lo cual otros comandantes y cuadros medios del grupo no solo empezaron a desconocer su jefatura —Manuel, el cura Pérez, casi cae fusilado por Fabio Vásquez (Hernández, s.f.; Medina, 1996, 2012; Arenas, 1971) —, sino que también, con su viaje a Cuba por una enfermedad (1974), aprovecharon la ocasión y lo relevaron[20] (1975). Este suceso marcó un rumbo distinto

---

19 Era común la ingesta desmesurada de alcohol, la pérdida de secuestrados, casos de indisciplina de los combatientes, y amedrentamiento y fusilamientos del campesinado sin causas suficientemente claras.

20 Todo indica que la megalomanía de Fabio llegó a tal punto que él mismo creía que encarnaba la revolución. En palabras de Milton Hernández (2006, p. 254):
Dado el alto reconocimiento como dirigente y máximo comandante de la Organización, alrededor de su figura e imagen se creó el mito del intocable e infalible, llenándolo de poderes

en el ELN, porque el cura Pérez y "Gabino", como líderes de la organización, tomaron una serie de decisiones en materia organizacional, militar y política para darle un giro al proyecto armado; sin embargo, estas mismas decisiones fueron las que configuraron los constreñimientos organizacionales que adolece en la actualidad el ELN.

La Meca araucana: petróleo y federalización como estrategia de recomposición, 1978-1991

El relevo en el liderazgo, encabezado por el cura Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino",[21] no es un hecho menor: con el cambio el ELN tomó una nueva trayectoria organizacional, militar y política, para corregir los males causados por la dirección caudillista y draconiana de Fabio Vásquez Castaño.

En consecuencia, la Operación Anorí (1973) fue resignificada por la comandancia, al ser explicada por Pérez & Cía. como un evento de oportunidad que llenó de significado la lucha armada elena:

> Anorí fue un importante golpe militar de carácter táctico, pero aún quedaban cuatro grupos y todas las redes urbanas. Anorí terminó convirtiéndose en un símbolo de lucha, pero, contrario, a lo que se suele pensar, Anorí no trae a la memoria de los revolucionarios del ELN la derrota, sino, el recuerdo de sus combatientes como símbolo de la entrega incondicional. (Pérez, citado en Medina, 2006, p. 189; Harnecker, 1988a).

Más allá de las cómodas palabras retrospectivas del comandante Pérez, la situación del ELN fue sumamente crítica y muestra los retos que asumieron los nuevos líderes:

> Se inicia un proceso, pudiéramos decir como de búsqueda, de cómo resolver salir de esta crisis, de esta fragmentación, porque el ELN era eso, un cristal roto en 1000 pedazos. (…). Cada pedacito, es un pedazo del todo, pero no lo es el todo… pero todos se reclaman ser el auténtico. Entonces ese era el fenómeno y era el momento en que surge el Frente Domingo Laín, en los años ochenta. (Entrevista 1).

Salvo el discurso bipolar para comprender el Estado y la sociedad, muchas cosas cambiaron: emergió la arenga ecologista de defensa y nacionalización de los recursos naturales y de humanización de la guerra; se forjó y elevó la imagen camilista como tipo ideal del guerrero eleno

personales que, con la vida, degeneraron en un alto ego, manifiesto en decisiones a todas luces unipersonales y caudillistas.

21 Estas eran las dos figuras más visibles, pero estuvieron acompañados, en los años setenta, por José Manuel Martínez Quiroz, Edgar Amílkar Grimaldo "Rafael" y Diego Cristóbal Uribe Escobar (Hernández, M, 2006).

y pegamento del proyecto, en lo cual tuvo mucho que ver el cura Pérez (Hernández, s.f.; Gruber y Pospisil, 2015). Un cambio trascendental fue la democratización y colectivización del liderazgo

> para corregir el mando unipersonal de los primeros años, esa es la autocrítica. Nadie ejerce el mando unipersonal. Entonces hay dos principios: uno, democracia, es decir: mayoría y minoría; y dos, dirección colectiva. Eso es lo que gobierna al ELN (…) ¿Sabe cuál es la bobada más grande que hemos votado? El número de botones que debía tener la camisa del uniforme. (De Currea-Lugo, 2018, p. 64).

A la par de este cambio organizacional en la cúspide, se propuso una reestructuración orgánica en la concepción política y en el trabajo de masas, bajo el concepto del poder popular,[22] al igual que se redefinieron las áreas estratégicas y transformaciones organizacionales que se resumen en la tabla 1, entre otras cosas (López, 1989; Medina, 2012). Este nuevo reposicionamiento tuvo una importancia cardinal, pues las estructuras armadas existentes buscaron dejar de lado las áreas de colonización, para insertarse en las de interés socioeconómico como las de explotación petrolera (Arauca-Catatumbo) y espacios atravesados por importantes vías (Medina, 2012; Aguilera, 2006), con el objeto de extraer más recursos[23] (Peñate, 1998; Medina, 2012; Aguilera, 2006).

22 Esta idea y estrategia se acuñó en 1986 en la Asamblea Nacional “Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo”. La táctica de construcción de poder popular partía del supuesto de que no era necesario esperar a tomar el poder total, cuando se podía empezar a construirlo “desde ya”; es decir, a partir de las zonas donde hacían presencia. En este orden, la inclusión del “pueblo” (las masas) fue fundamental, pues la consigna de “El pueblo habla, el pueblo manda” contiene toda una disposición que da el más alto valor posible a las decisiones populares, en un claro ejercicio de soberanía popular. Una estrategia que plasmó de excelente forma esta consigna nebulosa fue la promoción de cabildos abiertos en los municipios y el llamado a procesos asamblearios populares en Arauca en los años ochenta. En ese momento (1987), tuvieron lugar las marchas del nororiente colombiano (Velandia, 2012). En otras palabras, basaron su estrategia en impulsar y fortalecer instancias organizativas de base como las agremiaciones, juntas de acción comunal, asociaciones de productores, etc. Aguilera (2006, 2014) sostiene que el frente Domingo Laín se convirtió en la mejor expresión de la estrategia de poder popular, adoptada como parte medular del proyecto insurgente del ELN, ya que consiguió influir sobre el poder local por fuera y por dentro de la institucionalidad, cumpliendo un papel fundamental como intermediario político y social.

23 En efecto, esta apuesta marcó su posterior recuperación y crecimiento como aparato militar, a través del desdoblamiento de sus frentes gracias a la nueva ola de recursos y un papel más activo en la vida comunitaria como ente regulador.

Tabla 1. Transformaciones organizacionales e institucionales del ELN, luego de la Operación Anorí (1974-1980)

Dimensión militar organizacional	• Uso de autodefensas campesinas y milicias populares. • Proceso de formación ideológica, política y militar del recluta. • Mejoramiento de los criterios de selección y mecanismos de ascenso de los militantes y combatientes hacia la dirección. • Adopción de democracia interna para evitar el verticalismo de la dirección.
Logística	• Fortalecer y modernizar la comunicación. • Definir el ambito rural como principal campo de acción (construcción del ejército, acumulación de fuerzas y recursos, etc.) y de retaguardia. • Clarificar los criterios de concentración y dispersión de la fuerza guerrillera. • Realizar acciones de contrainsurgencia para conocer el desarrollo técnico, militar y operativo de las fuerzas militares.
Relación con las masas	• Crear verdaderos vínculos con la población a través de la infiltración. • Desarrollar un incesante trabajo con las masas para "organizarlas y concientizarlas".
Marcos cognitivos	• No desestimar la capacidad de fuego y reacción de las fuerzas militares.

Fuentes: ELN (s.f., p. 41, citado en Medina 2000, p. 334), Harnecker (1988).

Los cambios implementados no estuvieron exentos de debates ni fricciones: el liderazgo del cura Pérez y "Gabino" no estaba plenamente sedimentado, pero más importante aún para el argumento de este libro fue que la nueva comandancia no reflejaba los acumulados y la distribución de poder real y concreta de los diversos frentes territoriales. Los resultados de este proceso de recomposición fueron: uno, unas enormes dificultades para articular y cohesionar los diversos emprendimientos armados existentes, ya que estaban bastante desperdigados y tenían importantes niveles de autonomía (Harnecker, 1988); dos, esta condición organizacional facilitó el comportamiento discrecional y belicoso que ostentó a lo largo del período, en particular, el frente Domingo Laín; y, tres, enmarca la emergencia de ciertas deserciones, fraccionamientos y ejecuciones de los considerados disidentes (Aguilera, 2006; Medina, 2007; Ugarriza y Pabón, 2017). Este último asunto se retrató, una vez más, con la *línea ficial* y el *grupo replanteamiento.*[24]

Para 1977, el ELN contaba con tres estructuras reconocidas oficialmente: una en el Catatumbo, otra sin ubicación precisa y una tercera entre el nordeste antioqueño y el bajo Cauca; entre todas ellas no pasaba de

24 Integrado por Alonso Ojeda, Medardo Correa, y Pedro y José (PJ), de Bogotá; y de algunos sectores de Barranquilla, Cali, Medellín y Cartagena (Medina, 1996).

30 personas en armas (Medina, 1996). De ahí que, para ese entonces, los trabajos de masas en el ámbito rural y urbano emergieron de forma espontánea y poco articulada con el ELN nacional. Tal fue el caso del Sarare (Arauca), y más precisamente en las zonas de colonización de campesinos boyacenses y santandereanos promovidas por el Estado colombiano (Entrevista 1; Celis y Gutiérrez, 2015); o los de las redes urbanas, las cuales estaban sueltas y sin dirección:

> A dos años del Febrerazo ya había 36 grupos del ELN en Bogotá: El Jaime Andrade Sosa, el 10 de diciembre, el 16 de febrero; una cantidad de grupos con estructuras, trabajo político, trabajo de barrio, armamento, recursos, hombres y mujeres, trabajo obrero. Y como Bogotá es grande, las organizaciones no se relacionaban entre ellas y, además, la mayoría no tenía relación con los frentes rurales.
>
> Bogotá no lo organizaba nadie porque cada cual se consideraba República Federal del ELN, cada cual era su grupo, con vehículos, armamento; había competencia por el trabajo político, por quién tuviera más trabajo de barrio o universitario, (…) una cosa seria y todo mundo buscando relación con el campo (De Currea-Lugo, 2018, pp. 41-42).

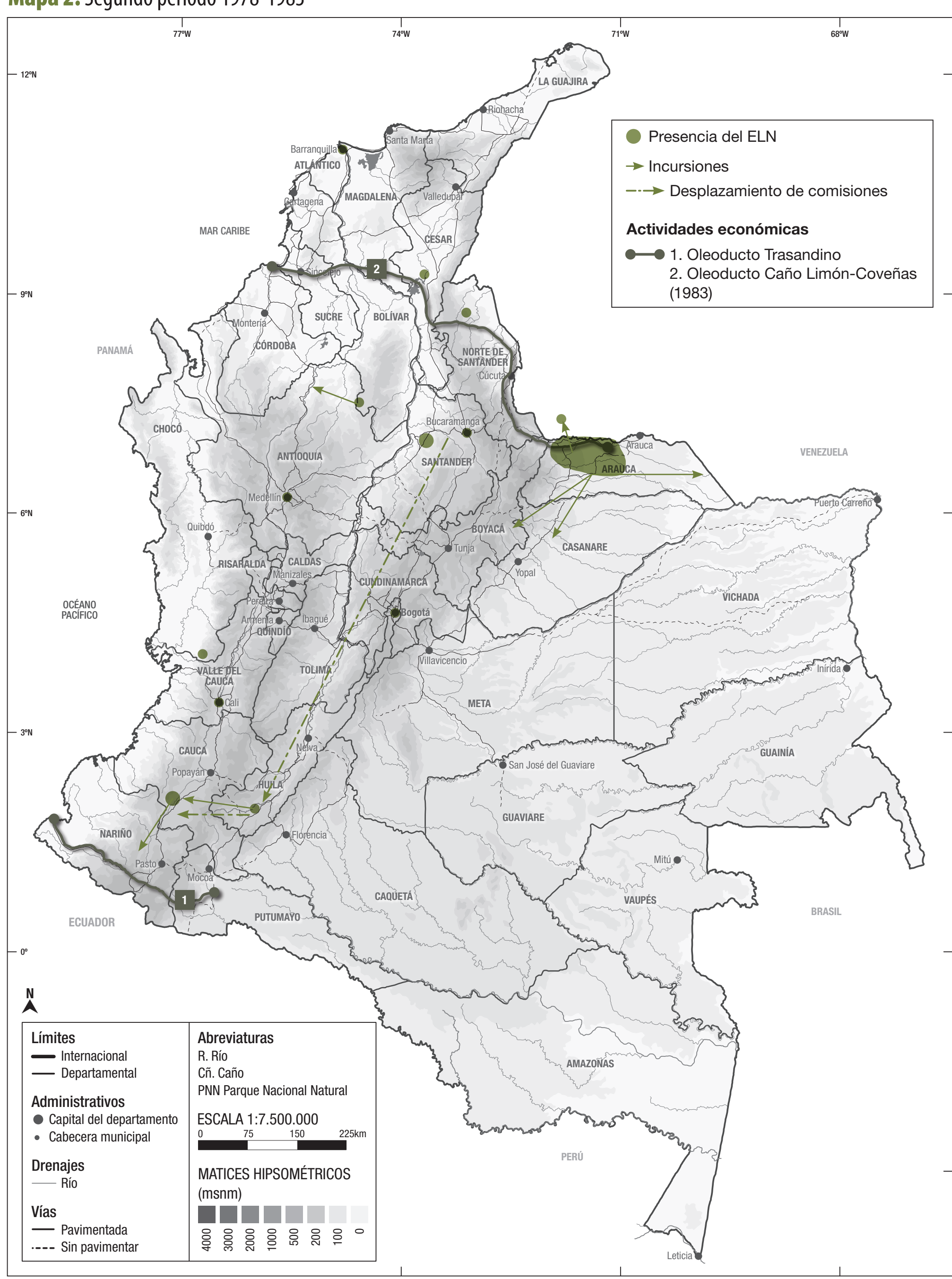
Esta lógica federal fue la que primó a lo largo de este período, y con base en ella se dio el proceso de recomposición y crecimiento; además, enmarca los incesantes y poco exitosos esfuerzos del ELN nacional para frenar toda fuerza autonomista y centrífuga en las estructuras existentes[25] (Medina, 1996, 2012); más importante aún fueron los infructuosos intentos de la cúpula, desde la Segunda Reunión de Responsables (1978) hasta el Segundo Congreso (1989), para cohesionar y homogeneizar las diversas organizaciones articuladas al proyecto nacional. Los temas de centralización organizativa y económica estaban en el centro, pues cada estructura manejaba sus propias finanzas y recursos (hombres, armas, bases, etc.), y desarrollaba su propio discurso, sus formas de socialización, su tipo de trabajo político, entre otros, lo cual ponía sobre la mesa una precariedad en la dirección (Harnecker, 1988; Medina, 2007) y en los procesos de institucionalización.

El mapa 2 representa los diversos emprendimientos que emergieron y los movimientos que desarrollaron en los espacios de su influencia. Llama la atención la consolidación de la experiencia araucana y su temprano despliegue a territorio venezolano, así como la del Valle del Cauca, sur de Bolívar, Catatumbo (Norte de Santander), nordeste antioqueño y sur del Cesar, y los despliegues que se dieron desde el Magdalena medio hacia el Huila, Cauca y Nariño.

---

25 Para tal objeto se creó, de forma provisional, el Comité Ejecutivo Central y un equipo asesor denominado Comisión Coordinadora Nacional.

Mapa 2. Segundo periodo 1978-1983



Fuente: elaboración propia, con base en el relato y entrevistas 1, 2 y 3.

En contra de esos intentos de coordinación y control por parte de la Dirección Nacional, las estructuras que se fueron articulando al ELN alegaban, para ese entonces, que su emergencia, desarrollo y supervivencia no se debían a la comandancia nacional, sino a los esfuerzos realizados por sus líderes en los territorios. Esto significó que, desde su misma incorporación al ELN nacional, estos emprendimientos armados estuvieran más marcados y signados por los factores contextuales de los espacios donde se insertaron y emergieron, que por las proclamas y directrices de la organización nacional: cada uno había desarrollado su propio discurso, demandas y lógicas político militares de acuerdo a los procesos organizativos preexistentes y sus agravios. El cura Pérez no pudo ser más preciso al definir el frente Domingo Laín: "Un proyecto que se hizo solo" (Medina, 2006, p. 201). No en vano, los primeros llamados de los líderes araucanos fueron poco atendidos por Pérez y "Gabino", y debieron esperar hasta el inicio del ochenta cuando sus acumulados territoriales se volvieron dignos de ser escuchados:

> Ellos son [en referencia a los primeros organizadores] los que comienzan a buscar contacto con los frentes del ELN que habían sido creados en la zona y en esa época, del Magdalena medio, Barranca y Bucaramanga para decir: "miren, aquí tenemos este proyecto, estas armas, queremos ser del ELN".
> Los de esa época no les mostraron mucho interés y luego se perdieron algunos contactos; sin embargo, ellos siguieron con el proyecto, se organizaron, desarrollaron las primeras acciones e iniciaron con ese proceso en la región. (De Currea-Lugo, 2018, p. 50).

Una versión similar brinda "Danielito", fundador del frente:

> Mientras estábamos preparando nuestro arranque, la Dirección Nacional Provisional (…), no nos paraba muchas bolas. Atilano estuvo en una reunión en la que Gabino proponía que los que estuviéramos en Arauca, lo que hubiera acá, lo recogiéramos y lo repartiéramos entre el frente Camilo Torres, (…), y el José Antonio Galán, (…). Que porque esos dos frentes necesitaban fortalecerse y que nosotros allá tan lejos (…). Él estuvo mucho tiempo con la misma idea. (Citado en Celis y Gutiérrez, 2019, p. 47).

La experiencia araucana ilustra dos cosas de suma importancia: una, cómo la trayectoria y articulación de un emprendimiento armado con los agravios y procesos territoriales incidió en el discurso nacional del ELN, ya que fue en esos años cuando emergió la retórica de defensa de los recursos naturales y su nacionalización[26] (ELN, 1988, citado en Hernández, s.f., pp. 153-154); dos, muestra la lógica y la dinámica general del proceso de recomposición organizacional de esta insurgencia: cada estructura que se fue adhiriendo al mando central lo hizo a partir de sus propios

26 El libro que escribió Milton Hernández (s.f., pp. 151-170) en homenaje a Manuel Pérez Martínez, muestra cómo se fue forjando esta retórica.

acumulados, lo que incidió en la forma como se fue integrando y posicionando en el ELN nacional, pues más allá de hacer parte de un paraguas ideológico y armado, no se homogeneizaron e integraron las estructuras de comando y, menos aún, el lenguaje ni las proclamas políticas, al punto que estas aristas se volvieron una impronta y un sello en las relaciones de poder entre los diversos emprendimientos armados (Entrevista 1).

Las experiencias de Nariño, Cauca, la costa Caribe, Huila y Caquetá, entre otras, siguieron esta ruta, lo que evidencia que más que una particularidad fue la generalidad:

> Si bien es cierto la organización "oficial", por llamarla de alguna manera, se encontraba disminuida, comenzaba de forma espontánea a producirse crecimiento en distintas regiones del país de grupos que habían abrazado la causa del ELN y por algún motivo habían quedado sueltos. Para ese momento se comenzaron a sentir signos muy revitalizadores. (Pérez, citado en Medina, 2006, p. 201).

Por ello, no era raro que quienes demandaban la etiqueta del ELN nacional tuvieran un escaso o nulo vínculo y comunicación con la comandancia, pues más que el envío de comisiones desde el nivel central guerrillero, las estructuras que emergieron fueron producto del voluntarismo o la acción particular de personas o grupos que se identificaban con el discurso nacional eleno:

> Nosotros les explicábamos que no sabíamos de su existencia, pero que, ya que estaban dispuestos a trabajar, que habláramos. Recogimos muchos grupos pequeños que se habían sostenido al margen de la organización durante la época de crisis, sintiéndose y comportándose, con la esperanza de encontrar algún día la organización (…). Eso ayudó a que muchos compañeros se fueran reagrupando alrededor nuestro y nos concedieran algún grado de autoridad. (Medina, 2006, pp. 202-203).

Estas palabras son muy dicientes del proceso de centralización por cooptación del ELN nacional, pues estos emprendimientos armados, a cambio de entrar al paraguas elenoide, cedían cierta autoridad; sin embargo, lo que sucedía en la práctica era que ese grado de autoridad quedaba más en el papel que en la realidad concreta, pues los nacientes frentes de guerra siempre terminaban atendiendo más a las dinámicas territoriales y a los marcos de sus comandantes que a las apuestas nacionales. La imposibilidad organizativa que exhibía el COCE para coordinar las acciones de sus frentes, estaba vinculada a que cada proyecto armado no tuvo el mismo punto de partida y, menos aún, se asentó en grupos poblacionales ciertamente homogéneos, ya que los procesos de configuración regional incidieron, como se señaló atrás, en las demandas, reclamos y necesidades de integración y reconocimiento territorial, así como de regulación. Esta intuición queda demostrada porque cada estructura armada que se

asentó en ciertas áreas del país configuró y consolidó bases sociales diferenciadas espacial, sociológica, demográficamente, etc., lo que encuadra el marcado parroquialismo de los ELN regionales:

> Ese proceso no se da en tierras desiertas, sino se da en terrenos abonados. En terrenos abonados por el mismo ELN. El viejo ELN que había pasado y había hecho contactos y había dejado unos contactos, lo que llamábamos unas bases, allí quietas, (…). Luego con el tiempo y cuando ya había recursos, ya se dispusieron de comisiones. "Usted trasládese para tal lugar, y allí están unas bases que son fulano en tal vereda, a orillas de tal quebrada e incluso aquí está el mapita y va con alguien conocido", era la manera como de establecer un núcleo y a partir de allí desarrollar un trabajo mayor. Eso fue una modalidad. Otra modalidad fue, por ejemplo, como la del Carlos Alirio Buitrago. Unos muchachos de trabajo cristiano, trabajo desarrollado por el padre Bernardo López Arroyabe, en aquellos territorios, que empiezan a ser perseguidos por fuerzas del Estado y por narcotraficantes (…). Hubo también la experiencia del Domingo Laín. (…), en el pie de monte, encima de Saravena, y entonces dicen: "No, pues trepémonos la cordillera y vámonos para la provincia García Rovira, que la provincia de García Rovira tiene mucha tradición de lucha en la época de La Violencia. (…), allí hay fierros y no sé qué… y entonces se sube una comisión guerrillera y allí fundan un frente, el Efraín Pabón (…), entonces son distintas maneras. Ahora, cada grupo va y empieza a consolidarse y extenderse sobre la base de unos mínimos orgánicos, se tiene una idea de qué es un frente, un frente eleno, y qué es también una base organizada, (…) debe tener unas comisiones de trabajo político organizativo y una fuerza militar permanente. Pero que, al mismo tiempo, el grupo guerrillero debe satisfacer todas sus necesidades y si tiene más recursos, cooperar o contribuir para el desarrollo de otros, de otros proyectos. En cierta forma cada frente, cada frente es autónomo desde el comienzo. (…) cada frente tiene que valerse por sí mismo. (Entrevista 1).

Bastan unos ejemplos de zonas donde estos emprendimientos armados se dedicaron a infiltrar, impulsar, cooptar o influenciar los procesos organizativos de base en sus áreas de presencia, tales como sociedades de colonos, juntas de acción comunal, agremiaciones, comunidades indígenas y negras, etc., y que evidencian que los proyectos armados no solo se catapultaron desde las bases sociales, sino que también se direccionaron y perfilaron de acuerdo a sus intereses y apuestas. En el bajo Cauca, el naciente emprendimiento intervino y reguló las explotaciones de los campesinos mineros, y de acuerdo a esas posibilidades configuró una estructura armada. En el Valle del Cauca se insertaron en las zonas cafeteras de Trujillo, Primavera y Bolívar para trabajar sobre un campesinado pauperizado. En el Cauca, trabajaron de la mano con un campesinado

andino que se fue asentando en el piedemonte, y que estaba en fricción con los territorios colectivos indígenas y negros. En Arauca se enraizaron de la mano de los colonos campesinos que demandaban cumplimiento al Estado en su proceso colonizador. En Cesar, buscaron terciar en los pliegos de peticiones de los trabajadores palmeros y de los campesinos expropiados por el Cerrejón. En el sur de Bolívar, se vincularon con los procesos organizativos comunitarios y la minería artesanal de pobladores antioqueños y santandereanos recién llegados. Y en Catatumbo se vincularon a las demandas de las familias colonas de los obreros petroleros y de la gente que venía del mundo andino huyendo de la violencia (Hernández, M., 2006; Barrera, 2014; Gutiérrez, 2012; Echandía, 2013; Rincón, 2009; Espejo y Garzón, 2005; Vargas et al., 2011; Aponte, 2012).

Por otro lado, de todos los emprendimientos armados referenciados, el más sobresaliente fue el araucano. Esta experiencia es del todo disruptiva, por dos razones. Primera, la organización nacional encontró en este territorio un oasis o su meca: descubrió la base que llevaba años buscando, y sus apuestas armadas y políticas nacionales se materializaban de acuerdo a su discurso revolucionario. El Domingo Laín[27] se estaba elevando poco a poco como un agente estructurante del territorio: incidía en los procesos organizativos[28] (*El Espectador*, 2014), en el tipo de orden social y político, e incluso, la emergencia de las élites políticas y económicas, y del mismo Estado, fueron de su mano (Peñate, 1998; Celis y Gutiérrez, 2015; Larratt-Smith, 2018; Gutiérrez, 2012). Segunda, fue la tabla de salvación del proyecto nacional, ya que unos pocos lustros atrás se había planteado la desmovilización del ELN, en una nueva escisión interna, para volcarse al trabajo legal en vista de las pocas perspectivas revolucionarias:

> Cuando Julio Leguizamón ordena la desmovilización en 1976 en el área de Yondó, y se le plantea al Frente Camilo Torres que la organización se estaba desmovilizando, unos compañeros de Arauca llegan a recibir instrucción a esa estructura. Al darse cuenta que Julio Leguizamón está orientando la desmovilización, los compañeros regresan para Arauca y,

---

27 Con la toma a Betoyes (1980) se dio el evento fundacional de esta estructura. Inicialmente estaba compuesta por Pablo Mateus, Arturo Mateus, Arturo Quiroz, el Viejo Atilano, el indio Dumar, Heliodoro, los tuertos Sepúlveda, Jairo, Sergio, Ezequiel el único universitario de la UIS, Óscar que pertenecía a la columna urbana Miguel Pimienta Cotes de Bucaramanga y afuereño del grupo, junto con una veintena más de guerrilleros (Velandia, 2020).

28 Se calcula que eran 5000 familias para 100 000 hectáreas (*El Espectador*, 2014). Con esta base, el ELN impulsó los procesos organizativos que demandaban el cumplimiento de la política colonizadora, a la vez que incidió en asuntos de la vida cotidiana de los colonos, como administración de justicia, definición de linderos, etc. (Medina, 2012; Aguilera, 2006; Celis y Gutiérrez, 2015). Con el trabajo político, los colonos se tornaron en actores "independientes" gracias a las formas "comunitarias autónomas" gestadas por el ELN, pues este "acomodó" sus objetivos a las reivindicaciones de los colonos frente al Estado central (Gutiérrez, 2012; Larrat-Smith, 2020).

> prácticamente con las uñas, le dan origen al grupo guerrillero de esa área, en plena crisis y prácticamente solos, con los pocos contactos que tenían y sin poder recibir orientación de la organización, porque en ese momento se está dando la crisis. (Nicolás Rodríguez Bautista, citado en Cubides, 2005 p. 61; Harnecker, 1988a).

De tal forma, esta experiencia regional se elevó y posicionó en el ELN nacional como el hegemón sobre el cual no solo se apalancó el proceso de reconstitución, sino que también se convirtió en una hoja de ruta, de cara al futuro, sobre cómo una estructura armada debía insertarse e incrustarse en los procesos territoriales. Su denominación, Sol de Oriente, es muy diciente de la notoriedad y prevalencia que adquirió (Entrevista 1). Pero esto no es todo, con los recursos acumulados, el ELN nacional amplió el pie de fuerza e inició un proceso de consolidación y expansión en diversas zonas del territorio nacional; de igual manera, implementó e institucionalizó la estrategia de cooptación por centralización de diversos proyectos armados, para tratar de tornar al ELN en un proyecto armado con alcance nacional. De ahí la emergencia y preeminencia de la narrativa araucana para explicar todo el desarrollo de esta guerrilla por estos años:

> Surge el Frente Domingo Laín en Arauca, y para ese momento el Frente José Antonio Galán, que era el grupo más grande, tenía apenas 12 guerrilleros. Imagínense, y el Frente Camilo Torres tenía 14; y en Bogotá había 18 grupos; por ejemplo, había un grupo que se llamaba el PJ, y eran Pedro y José. Se llamaba el PJ, pero tenían influencia, y hablaban y sacaban documentos, (…). Así había era una fragmentación impresionante. Juntar toda esta gente, juntar nuevamente al ELN, fue todo un proyecto colosal, que se aquilató y alcanzó unas dimensiones con unos recursos del Frente Domingo Laín. (Entrevista 2).

Ahora bien, una cosa eran las condiciones de Arauca y otra la realidad concreta de otros espacios, por eso, si bien se intentó replicar la fórmula del Sol de Oriente, con lo que esta guerrilla se topó fueron variantes de esta trayectoria. Respecto a esto son muy dicientes las palabras de "Danielito", uno de sus fundadores: "¡La historia del ELN de Arauca es muy diferente al resto del ELN del país! Hay unas razones muy concretas por las que sucede eso. Indudablemente que no surge porque a alguien se le antojó" (citado en Celis y Gutiérrez, 2019, p. 37).

En Catatumbo, el ELN compartió espacio y bases sociales con las FARC y el Ejército Popular de Liberación (EPL); además, no pudo abarcar todas las oleadas de colonización por factores temporales y demográficos, y porque estas fueron jalonadas por aspectos variados: auges extractivos (petróleo), procesos violentos (La Violencia) y la coca (ver capítulo de Henry Ortega; Aponte, 2012; Ávila, 2012; Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2018; Vega y Aguilera, 2005). Desde esa

zona y el Magdalena medio, el ELN incursionó en el sur del Cesar, tratando de influir en los trabajadores de la palma aceitera y en el trabajo de recuperación de tierras (Sierra Nevada, Chiriguaná, El Paso y La Jagua), de ciertas familias expulsadas hacia la serranía del Perijá por el inicio de la explotación carbonífera en el Cerrejón. Así, a través del frente Camilo Torres (sur del Cesar), del cual emergieron el Armando Cacua y el José Manuel Martínez Quiroz, infiltró los procesos organizativos que reclamaban inclusión frente al modelo de desarrollo agroindustrial y carbonífero (Barrera, 2014; De Currea-Lugo, 2018).

En Cauca-Nariño tuvo limitadas posibilidades de inserción, porque solo logró asentarse en algunas zonas campesinas de colonos desplazados por La Violencia, que estaban en busca de tierras. Esto fue posible por el desplazamiento a la zona de las comisiones presentes en el Huila, y porque cooptó el trabajo político del Partido Comunista Marxista Leninista, el cual era liderado, en ese entonces, por Juan Carlos Cuéllar (Corporación Nuevo Arco Iris, 2008). Así, nunca tuvo una buena conexión con las comunidades indígenas y, menos aún, con las negras. En esto incidió que las proclamas elenas no se conectaban con los agravios y demandas relacionadas con un proceso de configuración regional de largo aliento, reinante desde la Colonia (ver el capítulo de Daniel Amaya; Duarte, 2015; González, 2014), que había limitado a los indígenas y negros del reconocimiento, integración y autonomía judicial, educativa y cultural que esperaban.

En el sur de Bolívar, si bien varias estructuras hicieron presencia casi desde la misma fundación del grupo, por la cercanía de la zona con el Magdalena medio santandereano (Medina, 2007; Vargas, 1992), el ELN solo consolidó su presencia en los años ochenta. Para ese momento, estaba teniendo lugar un proceso de migración paisa y santandereana, que llegó atraída por la disponibilidad de tierras y oro. El hecho de terciar y tramitar las tensiones entre los nativos (costeños-anfibios) y los recién llegados, le confirió cierta legitimidad y ascendencia política sobre los segundos. Con estos acumulados infiltró e influyó en la vida comunitaria y reguló la minería artesanal, a la vez que incentivó los procesos organizativos e impulsó el trabajo comunal para suplir las carencias estatales en materia de servicios y regulación[29] (García, 2019; Romero, s.f.; ver capítulo de Juan Diego Forero y Daniel Amaya). Con esta labor reclutó personas

29 El comandante llamado “Viejón” expone estas labores comunitarias desarrolladas por el ELN: “Él iba a las comunidades a reunirse con ellas, a escuchar sus necesidades: que la escuela, que el colegio, que el puente, que la carretera; (…) Rejuntábamos los materiales, el cemento, el hierro, la arena y la gasolina; íbamos por la maquinaria y manos a la obra. Lo mismo era en la agricultura o la ganadería, trabajaba junto con las comunidades. Más de las dos terceras partes de las vías del sur de Bolívar las abrió el Viejón (García, 2019, p. 53).

nativas y cooptó guerrilleros de otros grupos, que más tarde llegaron a la comandancia del frente[30] (ELN, 2011; Medina, 2020; García, 2019).

En los límites entre Antioquia y Córdoba (bajo Cauca) y el nordeste antioqueño, expandió su influencia sobre las zonas de colonización y las explotaciones auríferas en la primera subregión; en la segunda, lo hizo sobre un campesinado pauperizado, a través de las estructuras denominadas José Antonio Galán, Compañero Tomás, Héroes de Anorí y Compañía Anorí. Además, se consolidó en el norte del Valle del Cauca y en el Chocó con el frente Luis Carlos Cárdenas. En la primera zona, sobre un campesinado cafetero que estaba en depresión, y en la segunda, sobre unas poblaciones indígenas bastante marginales (CNMH, 2014; ver capítulo de Andrés Aponte y Valentina González). También se insertó en zonas de la Sierra Nevada y en las sabanas de Bolívar, donde buscó influenciar los procesos organizativos y de toma de tierras, y se fortaleció en todo el Magdalena medio (Hernández, M. 2006). Finalmente, ubicó algunas estructuras urbanas en los Santanderes, Boyacá, Huila, Caquetá, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla[31] (Ugarriza y Pabón, 2017; Medina, 1996).

Lo descrito comprueba que estos espacios eran bastante diversos, y de ahí las variadas trayectorias de cada emprendimiento armado; sin embargo, todas estas denotan una generalidad: los lugares escogidos eran zonas con una importante cantidad de recursos minerales, que estaban conectadas de forma natural o por vías terciarias (corredores de movilidad) con zonas de retaguardia. Es decir, todas tenían un componente estratégico y logístico (zonas de fácil acceso, y con presencia de poderes económicos y políticos), y económico: recursos naturales, agroindustriales, petróleo, etc. (Espejo y Garzón, 2005; Millán, 2011; Medina, 2007). Sobre esta base, el ELN empezó a adelantar una campaña sistemática de extracción de recursos, pues a diferencia de la década pasada, cuando esta guerrilla secuestraba una que otra persona, su posicionamiento territorial le permitió ubicarse como el principal grupo secuestrador (27% del total de la muestra, según se observa en la figura 2). Áreas de importante

30 "Viejón", apodo de Lino Mercedito Ballesta Chacón, "Mocho e Tierra" o "Ezequiel" son ejemplos de lugareños que llegaron a ser comandantes de los frentes.

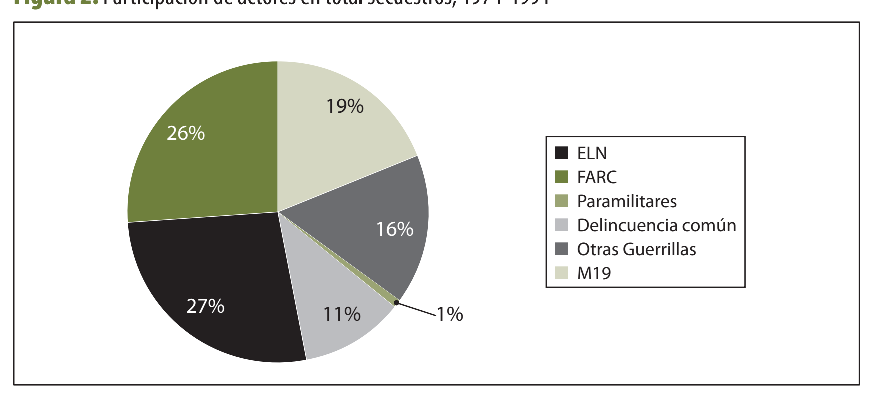
31 Evidencia de la diversidad de estas y sus interconexiones son la existencia de más de cinco estructuras por lugar. En Barranquilla estaban los núcleos guerrilleros Armando Montaño, Domingo Biohó y Rubén Ardila; en Medellín, Columna Uno, Comité Regional, Capital Franco, Ramiro Vargas Mejía, núcleos Ernesto Che Guevara y Sector Dos; en el Valle del Cauca, Camilo Torres Restrepo, Manuel Vásquez Castaño, Domingo Laín Sáenz, José Manuel Martínez Quiroz, Ricardo Cerón Muñoz, Sinforoso Navarro; en Bucaramanga, las columnas Miguel Pimiento y Henry Serrano Gómez; y en Bogotá, los comandos y sectores Luis Carlos Cárdenas, Jaime Andrade Sossa, 16 de Marzo, Orlando Romero, Eleuterio Ortiz, Frank Jácome, 23 de Diciembre y Pedro Gordillo. Eso, sin contar las que existían en Pasto, Cúcuta, Barrancabermeja y Tunja.

desarrollo agrícola, comercial o minero de Antioquia, Bolívar, Cesar, Cauca, Arauca, Norte de Santander y Santander fueron las más afectadas por los secuestros; en particular, los propietarios rurales de zonas caracterizadas por una mediana inserción a la vida nacional, pero con un claro proceso de sedimentación (figuras 1 y 2).

Figura 1. Secuestro en el tiempo por responsable, 1970-1991

Fuente: CNMH. Elaboración propia.

Figura 2. Participación de actores en total secuestros, 1974-1991



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

En medio de este proceso expansivo, el ELN nacional creó nuevas instancias coordinadoras y cohesionadoras para buscar vincular las diversas experiencias armadas territoriales. En 1982, en el contexto de la Segunda Reunión Nacional, surgió la DN (Medina, 2012) para: 1. darle coherencia a la política interna de la organización, 2. reestructurarla orgánicamente, y 3. dotar la estructura de fundamentos organizativos, y formas y

métodos de dirección, pues seguían vigentes los problemas de coordinación interna y centralización política y económica[32] (Vargas et al., 2011; Aguilera, 2006; Medina, 2012), los cuales se socializaron y buscaron institucionalizarse con la Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí (1983), donde también se redefinieron los criterios de militancia y se formuló un reglamento interno (Medina, 2007) para el proceso expansivo. Mas una cosa es lo escrito en el papel y otra la realidad. Un militante, en entrevista con Martha Harnecker (1988), reconoció que ni la Dirección Provisional ni la DN tenían la autoridad y el poder infraestructural suficiente para implementar estos objetivos, y menos aún para evitar que siguieran aflorando fuerzas centrífugas como el Matriz Eleno Autocrítico (ELN, 2011) y el colectivo 16 de Marzo,[33] el cual se sentía subrepresentado (Hernández, M., 2006; Medina, 2001, 2006).

¿Cómo explicar esta imposibilidad infraestructural y organizacional?

Uno, el hecho de que cada emprendimiento armado se hubiera articulado bajo la estrategia señalada páginas atrás, empezó a generar una serie de tensiones y fricciones internas, pues más allá de que compartieran un pasado común basado en un ideario algo homogéneo y la figura de Camilo Torres (Vargas et al., 2011), había otros elementos que los diferenciaban y terminaban desbordando a la institucionalidad nacional, ya que cuando la comandancia empezó a demandar coherencia y sincronía las estructuras adoptaron posturas selectivas en el tema de centralización y redistribución de recursos:

> Rafael: Hay un montón de grupos en diferentes partes: en Bogotá, por ejemplo, hay 14 grupos que se identifican como del ELN, cada uno por su lado; en Medellín hay 8 grupos; en Barranquilla llega a haber 4 grupos; en Cali, 6 grupos.
>
> Nuestra tarea fue ir a visitar a cada uno de ellos, para conocer en el terreno mismo qué fuerza representaban, cuáles eran sus planteamientos, con qué recursos contaban y, a partir de esos datos, ver cómo podía articular su proyecto con el proyecto nacional del eln y centralizar los recursos.
>
> Felipe: El problema de tener grupos dispersos, a nivel urbano y en los frentes guerrilleros, se tradujo en que cada uno publicaba un periodiquito, una revista teórica, como se hizo en Bogotá, en Antioquia, en Bucaramanga, en la Columna 1, el Sector 3… Cada uno con una posición teórica diferente, pero todos buscando una salida… Una vida política interna que antes de la crisis no existía en el ELN. (Apartes de la entrevista a

32 Un ejemplo es el secuestro de Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente de entonces, sin previa autorización de la DN (Medina, 2007, 2013).

33 Según Manuel Pérez, este colectivo propuso el asesinato de Luis Carlos Galán y realizó el secuestro de Jaime Betancur Cuartas, sin autorización del ELN (Medina, 2001).

> Rafael Ortiz, miembro del Comando Central, y a Felipe Martínez, miembro de la Dirección Nacional, realizada por Harnecker, 1988, pp. 77-78).

Además, lo que el COCE hacía con una mano lo borraba con la otra, pues a la par que buscaba institucionalizar y cohesionar la organización, su crecimiento se seguía fundamentando en la misma lógica de cooptación de emprendimientos armados territoriales. Tal vez el mejor ejemplo fue la adhesión del Movimiento de Integración Revolucionario (MIR)-Patria Libre (1986), con el cual el ELN amplió su presencia a zonas de Córdoba, Sucre y Bolívar, en específico sobre una masa de campesinos organizados previamente en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), los cuales demandaban una mejor distribución de la tierra (Harnecker, 1988a; Porras, 2014).

Dos, como corolario, la conformación de la cúpula y de los órganos de dirección nacional no era representativa de las organizaciones y sus acumulados reales y concretos en términos de poder (recursos, armas, anclajes sociales, etc.), bien porque las instituciones recién creadas no encarnaban estas fuerzas, bien porque algunas estructuras armadas se excluyeron para evitar perder autonomía y poder. En efecto, el Sol de Oriente leyó los intentos centralizadores en esta clave, y desde un inicio voluntariamente no solo evitó hacer parte de las instancias y los organismos de dirección nacional, sino que siempre mostró una predilección por mantener su poder y autonomía, y desde allí buscó generar influencia e incidir en las decisiones y apuestas nacionales de la insurgencia (Entrevista 2). En el caso del Domingo Laín, fue tal el recelo de sus integrantes a ocupar puestos en las instancias de dirección nacional, que cuando su fundador, "Danielito", fue designado miembro de la DN, los comandantes territoriales de este frente desconocieron su jefatura y fue casi excomulgado:

> En la Reunión Nacional del ELN de 1983, Daniel fue elegido como miembro (…), función que desempeñó con denuedo y capacidad, aunque terminó por enfrentarlo al Frente Domingo Laín, al que había fundado y había dirigido; toda vez que el Frente Domingo Laín tomaba distancia de la Dirección Nacional en la que, según ellos, "el cura Manuel Pérez llevaba al ELN de la ternilla por las sendas del cristianismo". Este distanciamiento terminó por inhabilitar al Viejo Daniel para actuar frente al Domingo Laín. Aquí se puede aplicar el aforismo de: "No hay cuña que más apriete, que la del mismo palo". (Velandia, 2020, p. 4).

Este detalle profundizó los problemas de acción colectiva al interior del ELN, y, de la misma forma, les mostró a otras estructuras qué rumbo debían tomar si querían mantener sus poderes y su postura discrecional:

> El peso de unas estructuras respecto de otras, ha sido determinante en el momento de componer o participar en los organismos de dirección. Pero en el ELN, ha habido también una situación muy, muy curiosa, y es

> que quien se siente fuerte, es decir, quien es fuerte y se siente fuerte y es consciente de su fuerza, evita participar en estos equipos de conducción porque son una conducción… porque son conducciones, que también limitan su poder. (Entrevista 2).

Para algunos comandantes territoriales, sobre todo los más militaristas y radicales, entrar a un órgano de dirección nacional no solo era un síntoma de aburguesamiento y burocratización, sino que, igualmente, se constituía en una manera de perder el poder real que detentaban:

> Cuando yo fui comandante guerrillero, fui un hombre muy poderoso; muy poderoso porque tuve muchas armas a mi disposición y tuve muchas personas, hombres y mujeres bajo mi mando y en un territorio y con un… un presupuesto; (…) de modo pues que yo tenía un peso específico al interior del ELN, ese peso lo perdí cuando me eligieron como miembro de la Dirección Nacional. Cuando me eligieron miembro de la Dirección General, escalé en el nivel organizativo, pero perdí poder, me convertí en un funcionario muy importante, con mucha autoridad, pero con poco poder… o sin ningún poder, de tal modo pues que, ahí hay una relación que es muy interesante; entonces, resulta que Felipe Torres, de la noche a la mañana, que era el comandante que hablaba duro y golpeaba duro en la mesa, se convirtió en un conciliador, en un negociador y ya nadie me hacía caso, antes yo daba órdenes, ahora tenía que buscar era como tramitar… o cómo me hacían caso más bien; (…) esto llevaba a que muchas estructuras y dirigentes de estructuras fuertes evitaran llegar a la Dirección Nacional. (Entrevista 2).

La forma de recomposición y crecimiento del ELN, y la constitución de organismos de dirección poco representativos de las fuerzas y los poderes concretos de las estructuras territoriales permiten entender, para esta década, las restricciones de la comandancia para darle trámite y solución a las principales urgencias de este grupo en materia organizacional, pues los temas y asuntos que buscaron resolver en la Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí (1983) y sus dos Congresos (1986 y 1989), bascularon alrededor de los mismos asuntos: la idea y tipo de estructura militar, que confluyó en los frentes de guerra;[34] la homogeneidad ideoló-

34 Para el ELN, un frente de guerra no está solo conformado por el núcleo armado propiamente dicho. Lo conciben como una estructura concéntrica, compuesta por varios aros, que tiene como eje la parte armada, y esta a su vez está rodeada de diversas apuestas organizativas de sectores de la sociedad (campesinos, estudiantes, sindicatos, etc.), los cuales amplifican el trabajo político organizativo para articular la guerra con la movilización social:
Cuando hablamos de guerrilla queremos decir: hombres en la guerrilla y en armas. Pero cuando hablamos de un frente guerrillero el concepto se extiende más allá del núcleo armado. El frente guerrillero tiene, además de guerrillas, una organización política de base y un área geográfica determinada de actividades político-organizativas y militares. Durante varios meses, muchos guerrilleros, en las comisiones que te hablé, se dedican a organizar a la población. Un frente guerrillero nuestro es un grupo de hombres en armas, pero también una

gica y política; el tipo de trabajo político y de relación con las masas, decantados en la idea de poder popular para dinamizar la relación con los no combatientes; el tipo de guerrero;[35] la creación de instancias de dirección nacional para centralizar las decisiones políticas y económicas;[36] y la creación y unificación de íconos, emblemas y símbolos[37] (ELN, 1986, 1990; Hernández, M., 2006; Harnecker, 1988a).

En efecto, para estos años únicamente se pueden registrar tres novedades que en poco o nada incidieron en la estructura organizacional: una, al discurso bipolar sociedad-Estado se le fue incorporando el discurso de defensa de los recursos naturales y su proclama de nacionalización, y una serie de demandas transformadoras en materia de educación, vivienda, salud, cultura, entre otras; dos, se consensuó a nivel nacional una postura prohibicionista, bastante moralista en sí, en relación con la coca[38] (ELN, 1986; Aguilera, 2006; Medina, 2007; Vargas et al., 2011); y, tres, se acuñó el perfil de organización político militar, que más que responder a cómo se materializaba esta insurgencia, estaba vinculada a debates internos sobre cómo ligar lo armado con lo político y lo organizacional, nada más. Según un entrevistado:

> ¿Qué es lo político-militar? lo político militar es una entelequia que nos inventamos en el año 1983, (…) para poner punto final a un debate. Porque el debate era: "oiga, somos una fuerza guerrillera pero aquí lo que se necesita es una fuerza política que conduzca lo armado" (…) y surgió (…) quienes echaron mano de la tesis de las tres varitas mágicas que planteaba el maoísmo: el Partido, el Frente Patriótico Popular y el Ejército.

---

serie de grupos, más o menos 100, de colectivos de militantes y premilitantes, donde hay milicias, donde hay diversos núcleos de trabajo de la organización en una zona dada. El frente guerrillero sería la estructura básica de un área geográfica dada, que permite el desarrollo integral de los planes de la organización a nivel local. (Entrevista a Rafael Ortiz, miembro del Comando Central; Harnecker, 1988, pp. 125-126).

35 Se definió, en consonancia con su idea de trabajo político y su autodenominación, como una organización político-militar, pues al estipularse que debían estar en permanente contacto con la masa, este tenía que estar imbuido en la vida comunitaria, por lo cual se tendían a confundir con las redes logísticas y los apoyos sociales (ELN, 2000; Medina, 2012). Así, muchos guerrilleros elenos son "civiles" durante el día y de noche combatientes.

36 En el Congreso de 1986 nació el COCE y quedó estipulado que estaría integrado por cinco personas que deberían tener un perfil militar, político y financiero, elegidas de los diversos frentes. También se quiso que esta estructura organizativa se replicara en cada uno de los frentes territoriales, aunque también fueron contempladas como colegiadas (Vargas et al., 2011).

37 Estos incluían: himno, escudo, logotipo, juramento, uniforme, cultura popular y la revolución (Medina, 2007).

38 Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (2018), esto tiene que ver con una cuestión ideológica que lo condujo a una trayectoria diferente a la de las FARC y, en última instancia, a un comportamiento distinto. La prohibición moralista del ELN respecto a la coca hizo que esta insurgencia renunciara a un financiamiento extraordinario que las FARC-EP utilizaron para solventar su expansión y alcanzar una estructura similar a la de un ejército.

> Eran las tres herramientas con las cuales podíamos organizar a toda la sociedad, (…) Cómo lo resolvió el ELN. Dijo: "No, todo es una sola cosa. No hay tres varitas mágicas. Somos una sola cosa, porque, es que somos político-militares. (…) algo así como la Santísima Trinidad.
> (…) esto ha llevado a que se construya del ELN un mito. (...) el ELN es una organización fundamentalmente política; es una organización política que echa tiros. ¡Eso! Esta es la gran diferencia que teníamos con FARC, que FARC era un ejército que hace política. (Entrevista 1).

Para bien o para mal, al final de la década (1989), el ELN sentía que podía tomar el poder por las armas, para lo cual sus líderes se propusieron formar un ejército a partir de cuatro pasos secuenciales, que a su modo de ver marcarían el compás de su desarrollo: primero, la acumulación de fuerzas; luego, llegar a un equilibrio dinámico de fuerzas; a continuación, pasar a una ofensiva general y la toma del poder; para, finalmente, una vez detentado el control del Estado, iniciar una defensa de la Revolución. La hoja de ruta transversal a esta secuencia era la siguiente: primero, desarrollar al interior de la población acciones de *propaganda armada* para la fase de acumulación, y así potencializar la presencia y el accionar de la guerrilla rural; segundo, con estos acumulados, formar una estructura armada de masas bajo una concepción de insurrección popular (ELN, 1986).

En este proceso, el énfasis se pondría en la guerra rural como retaguardia estratégica y centro esencial de acumulación de fuerzas (Medina, 2007). En este orden, la campaña "Despierta Colombia… Nos están robando el petróleo" (1986) era la punta de lanza, acompasada de un impulso a la movilización social: el paro del nororiente (1987), el paro de mayo del 88 y la promoción del movimiento A Luchar (1984)[39] ilustran el radicalismo que caracterizaba, por estos años, al ELN y su llamada sociedad civil (Harnecker, 1988, 1988a; Jaramillo y Harnecker, 1989). De cara al futuro, este tipo de acciones terminaron por vincular, a los ojos del Estado y de las nacientes estructuras paramilitares, a múltiples procesos sociales y la insurgencia con un solo actor: el ELN. De ahí los resultados nefastos de los años noventa y el "éxito" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) cuando incursionaron en las zonas de dominio eleno:

> En aquella época hubo una gran epopeya de la lucha de masas, que se juntó también con la lucha militar guerrillera… cuando se juntaron las

39 Por estos años lanza sus pliegos políticos, que constaban de los siguientes puntos: construir una asamblea nacional popular, que no planteaba entre sus demandas la reforma de la Constitución, sino la lucha por la soberanía nacional, por el no pago a la deuda externa, por el cese de la militarización y por el derecho a la vida (Jaramilo y Harnecker, 1989, p. 62). Este grupo emergió con los acumulados de movimientos y sindicatos tales como los Colectivos de Trabajo Sindical, el Movimiento Pan y Libertad, la Corriente de Integración Sindical y el Partido Socialista de los Trabajadores (Jaramilo y Harnecker, 1989).

> marchas del nororiente colombiano impulsadas por "A Luchar" con la operación "Vuelo del Águila" del ELN. Allí se pensaba que ambas acciones debían dirigirse en un mismo sentido; esto... pudiéramos decir, dirección o codirección… o unificación, llevó pues a emparentar estrechamente el movimiento social, político social, dirigido hacia las guerrillas, con las mismas guerrillas. (Entrevista 2).

El caso, para retomar el hilo, era que los líderes elenos estaban obnubilados por los logros de esta década. Sus "éxitos y avances" eran mayúsculos: en 1983, tenían redes urbanas en 16 departamentos y cuatro frentes rurales, con unos 200 integrantes en las ciudades y 150 en el campo (Ugarriza y Pabón, 2017; ELN, 2002). Para 1985, tenían seiscientos combatientes, agrupados en ocho frentes rurales y doscientos más en sus regionales urbanas (Ugarriza y Pabón, 2017; Medina, 2006). Un año más tarde, estimaban un crecimiento de un 350% y un 500% para 1989 (Aguilera, 2006; Vargas et al., 2011; Bolaños et al., 2012; Espejo y Garzón, 2005; Harnecker, 1988, 1988a).[40] Así, para 1990, el ELN contaba con 60 estructuras conformadas por 18 frentes guerrilleros, 8 proyectos de frentes, 4 estructuras militares en el campo (compañías), 18 estructuras urbanas, 3 estructuras especiales, 8 comisiones nacionales, la DN y el COCE (Medina, 2012, 2007; Aguilera, 2006; Ortiz, 2006; Vargas et al., 2011).

El crecimiento de la organización y su expansión se pueden apreciar en el mapa 3, el cual muestra varios aspectos interesantes del proceso aludido en este apartado. Ahora bien, este proceso se concentró, más que todo, en el oriente del país, en particular en todo el eje de la frontera venezolana desde La Guajira, pasando por el Cesar y Norte de Santander (Catatumbo), hasta llegar a Arauca. Además, esta insurgencia consolidó su presencia en territorio venezolano, con el cual configuró todo un corredor de movilidad en el vecino país. Adicionalmente, ya constituido el frente Domingo Laín, dio inicio a un proceso expansivo a zonas vecinas del piedemonte araucano, como la parte norte del Casanare y la región nororiental de Boyacá, al tiempo que configuró un corredor de movilidad hacia la capital del país, conocido como "La ruta bolivariana" (mapa 1). También, los dominios del sur de Bolívar se vincularon con los del nordeste antioqueño y el bajo Cauca, y consolidaron la presencia en el piedemonte nariñense y en el sur del Cauca, luego del desplazamiento de la comisión creada en Pitalito; finalmente, se dio la primera incursión en los departamentos del Chocó y Tolima.

---

40 Ahora, la nota singular de estas cuentas es que en ellas sus líderes no solo contemplan el brazo armado puro y duro, sino también los apoyos sociales y enlaces logísticos del ELN. Esto ayuda a matizar estas cuentas, porque del total contabilizado solo el 25% correspondía a personas armadas (Harnecker, 1988).

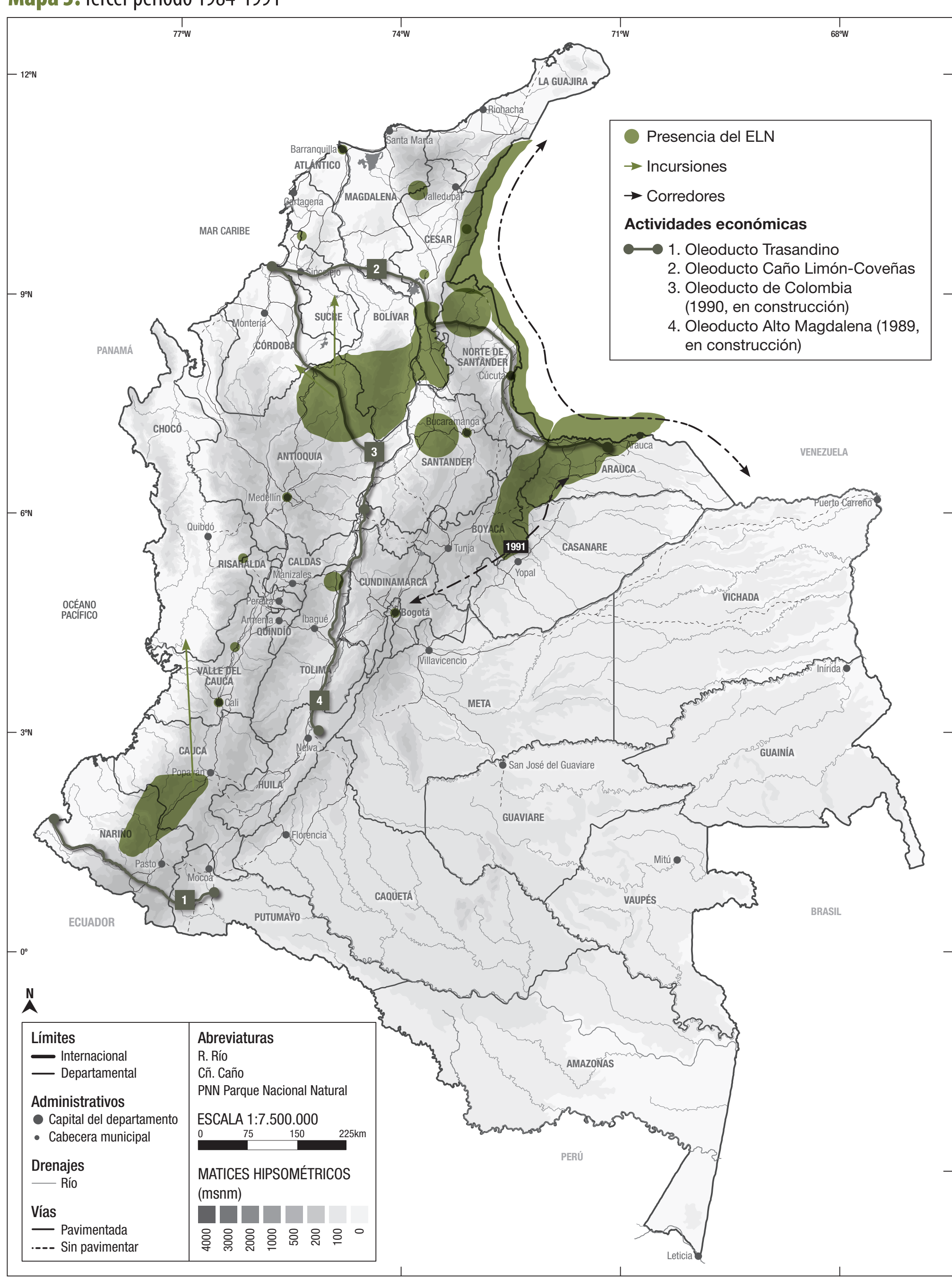
El cura Pérez se ufanaba de estos acumulados, al señalar que tenían un "aparato militar maduro políticamente" (citado en Medina, 2007), el cual había logrado recolectar los recursos necesarios para dar una serie de saltos estratégicos para la toma del poder, por lo que la estrategia armada iba viento en popa. Mas, una cosa era el papel, las ideas y el discurso, y otra la realidad. Durante el II Congreso del ELN (1989), se elevaron voces de autocrítica por lo incompleto que estaba el proceso de unidad y homogeneización ideológica y política del proyecto insurgente, lo cual afectaría en el futuro cercano sus apuestas armadas. No es casualidad, que en el documento *Los problemas y deficiencias y limitaciones en nuestra estructura* haya todo un apartado sobre el tema, que deja entrever que el ELN nacional no tenía un poder real sobre sus estructuras territoriales y comandantes regionales, ya que estos acataban selectivamente sus directrices:

> En el aspecto de los recursos materiales (…), también se ha ido a veces a los extremos. Unas veces se ha considerado que los recursos de una organización son para su uso exclusivo y se igualan los aportes a todos los participantes en una alianza, sin tener en cuenta las posibilidades de cada uno. Otras veces se ha recargado el aporte en una sola organización, tomando las demás una actitud incorrecta al respecto, inspirados en que "los recursos son del proceso" (…).
> Debemos estar atentos a aportar de acuerdo a las necesidades del movimiento, sin perder de vista la exigencia a todas las fuerzas con que trabajamos, que lo hagan de acuerdo a sus posibilidades reales (…). En este contexto se deben ubicar nuestros recursos al servicio de la revolución, sin que el hecho de aportar más recursos nos dé la prelación para fijar las pautas a nombre de todos, siendo esto, una actitud hegemonista. (ELN, 1990, p. 52).

Además, lo que no dice Pérez en sus declaraciones, bien por omisión o por dolo, es que estas capacidades y posturas discrecionales estaban relacionadas con la distribución endógena del poder al interior del COCE y la DN. Para ese entonces, los líderes del frente Domingo Laín habían aprendido que, al mantener distancia del COCE y la DN, podían conservar su autonomía. Mas, esto no era todo, también quedó en evidencia que estas dos instancias no tenían la capacidad de intervenir directamente a las estructuras que componían al proyecto nacional. No por casualidad, durante este encuentro fue el propio Congreso y no el COCE el que sancionó al Domingo Laín por la muerte de monseñor Jaramillo:

> En 1989, en el Congreso, (…) el Domingo Laín fue sancionado a raíz del asesinato de Monseñor Jaramillo, el de Arauca. El Domingo Laín fue sancionado, y parte de la sanción es no participar en ningún organismo de dirección, ni regional, ni nacional. Segundo aspecto de la sanción fue: el Domingo Laín quedaba intervenido por la Dirección Nacional y estas decisiones fueron tomadas por el Congreso. No fueron tomadas por la Dirección Nacional, ni

Mapa 3. Tercer periodo 1984-1991



Fuente: elaboración propia, con base en el relato y entrevistas 1, 2 y 3.

> por el COCE, (…) De modo pues, que fue un Congreso el que sancionó al Domingo Laín. La Dirección Nacional no se habría atrevido a sancionarlo, no habría tenido el poder suficiente para sancionarlo. (Entrevista 2).

Lo dicho atrás no es un asunto menor, pues los problemas y limitaciones remarcados visibilizan la precariedad institucional y organizacional de este nuevo ELN a la hora de contener las fuerzas centrifugas en su interior, así como al tratar de darle coherencia y unidad a sus estructuras en variados temas. Por ejemplo, en las áreas urbanas señalaron como principales problemas la falta de ligazón y enraizamiento con las masas, evidenciada en los métodos de acumulación,[41] la calidad del militante,[42] aspectos organizativos[43] y militares,[44] y la propuesta política,[45] por lo cual no estaban logrando la acumulación de fuerzas que esperaban (ELN, 1990, pp. 125-132).

En el espacio rural la situación era aún más compleja. El inusitado crecimiento de estos años visibilizó la falta de cuadros medios, al lado de un proceso de promoción de líderes con base en parámetros subjetivos. Además, el hecho de ser espontáneo y por cooptación repercutió en que la organización fuera poco colectivizada y que hubiera problemas en la centralización y disciplina como estructura nacional. En adición, el poco control sobre las estructuras regionales incidía en que cada una no tuviera un seguimiento y evaluación de sus políticas, y la precariedad de la comunicación entre la cúpula y la base incidía en el desarrollo de operativos militares de gran envergadura, y en la administración y distribución de recursos (ELN, 1990, pp. 183-186). En cierta forma, las directrices nacionales eran reinterpretadas y desarrolladas de acuerdo a los marcos y experiencias de cada frente de guerra:

> A mí me tocó atender las estructuras del frente Domingo Laín por una razón. Era al único que admitían. Ellos no recibían a nadie más. (…) Entonces me mandaban a mí. Entonces llegaba yo con el Plan Nacional a decir: "Oigan que este es el plan nacional" y entonces allá llegaban, lo

---

41 Respecto a este punto identificaron dos problemas: uno, las prácticas están alejadas de las masas y viciadas de "aparatismo", lo que no permite nutrirse de la organización obrera y de los sectores más explotados, algo en lo que tiene que ver el uso excesivo del manual para entender la realidad y problemas internos en la conducción de estos lineamientos; dos, los trabajos son espontáneos y no planificados.

42 Este se encuentra lejos de la dirección, y muchos de ellos presentan prácticas liberales, conservadoras e indisciplina política. Recomendaron mejorar los criterios de la militancia.

43 Así como la relación con la masa es débil, la relación dirección-bases es lejana. Hay problemas para sortear dilemas de seguridad, estructuras que se manejan al capricho personal, problemas en la utilización de recursos humanos y rechazo al control de las direcciones.

44 Precaria formación del militante, planes nacionales que van más allá de la capacidad de las estructuras, deficiente articulación de la línea militar de masas a la dinámica política, etc.

45 Limitada, poco conectada con las masas y con problemas de enfoque.

> miraban ¿no? (…) para terminar diciendo: "Bueno, sí, ese plan lo desarrollamos de acuerdo a nuestras condiciones", lo cual equivale a aquella famosa frase (…) en la época de la Colonia, cuando llegaban las directrices o las órdenes del rey don Fernando VII y aquí se decía: "Aquí obedecemos, pero no acatamos. (Entrevista 1).

Estos problemas identificados sacan a la luz cómo la forma de recomposición y el crecimiento de los años ochenta desbordó la institucionalidad elena, debido a que las adecuaciones hechas por sus líderes no pudieron atajar a las diversas fuerzas centrífugas que componían al ELN, ni encuadrar el comportamiento de sus integrantes. Eran recurrentes los casos de indisciplina, la ausencia de buenos relevos generacionales, y la poca pericia y experiencia militar:

> No hemos trabajado con suficiente fuerza en la diferenciación de los niveles en los miembros de la Organización y a la vez nos hemos quedado cortos en el impulso a un proceso de formación dirigido y planificado, presentándose problemas con la reproducción de nuestros mandos medios, que acompasen el crecimiento de nuestra Organización. (ELN, 1990, p. 79).

Estas limitaciones y problemas impactaron el mundo externo eleno, concretamente en cuanto a la posibilidad de sentir y leer las masas con las que se relacionaba:

> Las contradicciones internas no son abordadas con madurez y persisten los métodos incorrectos de tratar las dificultades internas, propios de un trabajo no colectivo, de una mala comunicación en los organismos de conducción y de la ausencia de relación directa de las direcciones con sus bases. (ELN, 1990, p. 64).

Este último punto merece especial atención, pues a pesar de la aplicación del lente sociológico para insertarse en un espacio y vincularse con los pobladores de un territorio (Harnecker, 1988; Cubides, 2005), el cambio en las estrategias utilizadas y todas las nuevas denominaciones que crearon para el trabajo político, persistía un problema de su etapa fundacional: la lectura de los contextos a partir de los manuales:

> Nuestra relación con la realidad es superficial, nos sentimos externos a esa realidad y solo llegamos a conocerla teóricamente, tomamos conciencia de la necesidad de transformarla, pero no somos capaces de generar una práctica transformadora. La débil articulación con las masas nos priva de contar con mecanismos más concretos de conocimiento de esa realidad y a la vez de salidas específicas que desde las masas se puedan vislumbrar. (ELN, 1990, p. 64).

Todos estos elementos organizacionales e institucionales repercutían tanto al interior como al exterior del ELN, en que cada estructura, mando, milicia, etc., hiciera trabajos dispersos e inconexos, los cuales casi siempre terminaban siendo estériles y sin perspectiva alguna:

> La acumulación estratégica en la ciudad no ha estado planificada y los diferentes trabajos de organización han surgido de manera espontánea sin contemplar la importancia de los sectores sociales o de su ubicación geográfica (…). De la dispersión en el trabajo político-organizativo hay que pasar a la concentración de esfuerzos (…), configurando de esta forma bases revolucionarias de masas capaces de responder y dinamizar las luchas de las masas urbanas, preparándolas desde ya para desarrollar respuestas concretas de organización y lucha militar (…).
> Así como nuestra relación con las masas es débil, la relación dirección-bases es lejana, impidiendo con esto a los organismos de conducción tener un conocimiento directo de las diferentes situaciones que se presentan. (ELN, 1990, p. 65).

Una situación análoga sucedió con la lógica violenta del ELN y sus frentes, ya que acuñó y puso en práctica la idea de autonomía táctica, que no era más que desarrollar acciones y operaciones discrecionales al proyecto nacional. El mejor ejemplo fue el asesinato de monseñor Jesús E. Jaramillo, en Arauca (1989). Además, como corolario, esta incapacidad del COCE para direccionar el aparato armado dio génesis al llamado debate en caliente y al recurso a algunas acciones armadas para romper los exiguos consensos logrados por la DN respecto a ciertos temas:

> La autonomía táctica (…), se puede definir como desarrollar técnicas de combate, (...), sin necesidad de contarlo, sin necesidad de que esté conectado a un plan nacional o consultarlo con las estructuras superiores, o el mando superior (…). Pero esta autonomía táctica se juntó con el debate político interno, entonces cada vez que una estructura quería hacer sentir su punto de vista, salía a la calle y ponía una bomba; (…). Y a eso se le denominó "debate en caliente". Entonces la democracia y el desarrollo de aspectos de lo armado, están íntimamente relacionados; de tal forma pues de que, cualquier grupo puede hacer una acción de repercusión nacional y ese grupo puede ser algo muy pequeño orgánicamente, pero quiere apuntalar o darle fuerza a sus tesis en el debate interno (…) hace cualquier locura. (Entrevista 2).

De ahí que el discurso del cura Pérez y Cía. se deba tomar con pinzas, pues este aparente éxito eleno estaba anclado y encerrado en unas dinámicas nada virtuosas, que exhibían unos graves problemas de coordinación y cohesión interna, los cuales no habían podido ser subsanados. No en vano, al cierre de este período se produjeron dos nuevas escisiones que dieron cuenta de los problemas organizacionales e institucionales que padecía el ELN en su supuesto momento dorado.

En 1990 se consumó la ruptura con la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y la facción guevarista:

> En 1990 surge el fenómeno de la corriente de Renovación Socialista; surge del fenómeno de que un frente que se llamaba Ernesto Che Guevara

> se fracciona, y su grupo militar de ese frente, su estructura militar, termina separándose del ELN porque lo consideraba muy blando; porque lo consideraba muy débil frente al Estado, porque creía que debía ir de lleno para la toma del poder y porque no creía que el ELN debiera meterse en cosas de diálogo y negociación. Entonces se separa, y funda el Frente Guevarista de Liberación Nacional. (Entrevista 2).

Para cerrar, en esta temporalidad quedó trazado el punto de inicio del ELN y se expusieron los actores y el desarrollo de los constreñimientos organizacionales que tiene en la actualidad. Además, una explicación clara y parsimoniosa de su génesis y desarrollo, al señalar el papel que tuvieron los nuevos liderazgos en su interior, para explicar los problemas de acción colectiva y cohesión que padece desde entonces.

Resulta claro cómo la decisión de federalizar la dirección y reconstituirse militar y políticamente, a través de unos emprendimientos armados inconexos y autónomos, le acarreó a la comandancia unos problemas de acción colectiva bastante serios, pues el COCE nunca consideró ni desarrolló unos mecanismos institucionales sólidos para integrar y homogeneizar a cabalidad a todos los proyectos armados locales sobre los que apalancó su crecimiento. De ahí se derivaron las principales problemáticas y limitaciones señaladas en su II Congreso (1989), pero también explica las dificultades que experimentó cuando intentó hablar de paz, de darle un salto estratégico a la guerra (pasar a ser un actor crucial en el ajedrez nacional) o de decidir sobre la vinculación o no de ciertos frentes de guerra con discutibles economías territoriales (en especial la coca).

Finalmente, el desarrollo de este relato interpela los estudios y la misma narrativa sobre el supuesto período dorado del ELN, que ha tendido a ser descrito por parte de sus líderes y de algunos estudios como un momento que muestra solo un crecimiento exponencial y de total armonía; es decir, su cenit. Empero, lo expuesto acá plantea todo lo contrario, o al menos matiza dicha narrativa, al poner en evidencia que durante esta década hubo un revés del asunto, un lado oscuro, que dio génesis a los problemas y limitaciones organizacionales de esta guerrilla y su persistente imposibilidad de unificar y cohesionar la acción de sus diversas estructuras armadas.

La década perdida: un brinco al vacío y la imposibilidad de dar el salto estratégico, 1991-1998

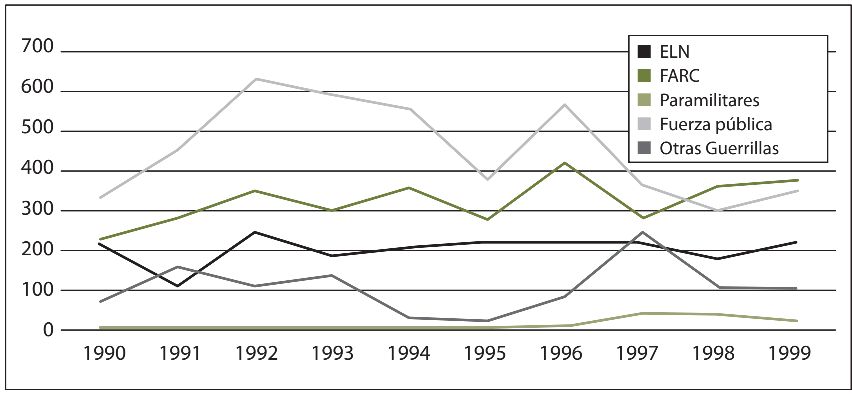
> El ELN (…), hace una lectura del estado de maduración de las luchas políticas y sociales en el país. (…). El ELN siempre ha tenido una manera de mirarse a sí mismo y se mira como en los espejos de feria: que el gordo se ve delgado y el delgado se ve gordo. Eso le pasa al ELN. El ELN, cuando se mira a sí mismo, se mira en un espejo de feria. De modo pues que se ve,

> por lo general más agrandado de lo que es, tiene una mirada sobrevalorada de sí mismo. (Entrevista 1).

El desmoronamiento eleno no sucedió de un año para otro. Este fue un proceso lento, pero constante, aunque al inicio de este período seguía exhibiendo cierta vigorosidad y crecimiento militar, el cual se reflejó en el desdoblamiento de sus frentes y en una decidida apuesta por escalar la confrontación armada (figura 3).

Según estimaciones de algunos analistas, al inicio de la década de los noventa esta guerrilla era la que ostentaba mayor presencia territorial y pie de fuerza, por lo cual tenía un lugar privilegiado en el ajedrez nacional de la guerra y podía llegar a ser considerada la principal amenaza para el Estado colombiano en materia de seguridad y orden público (Ortiz, 2006; Aguilera, 2006, entre otros). Esta iniciativa y protagonismo militar nacional tuvieron su correlato territorial en las operaciones que caracterizaron las zonas que aborda este estudio: combates en Arauca (91%), Catatumbo (90%) y sur de Bolívar (95%), y una arremetida militar en Cauca-Nariño. La única excepción a esta tendencia se dio en el Chocó, donde debido a que no se había asentado allí del todo, fue utilizado solo como escampadero militar y área de reabastecimiento.

Figura 3. Acciones bélicas por actor armado a nivel nacional, 1990-1999



Fuente: SIG-Cinep. Elaboración propia.

Este protagonismo militar no pudo ocultar sus problemas de falta de cohesión y acción colectiva. Por el contrario, estos se hicieron más protuberantes y terminaron impactando, en ciertos escenarios regionales, a algunos frentes de guerra, los cuales se mostraron más endebles de lo que se creía en términos militares, sociales y políticos. La siguiente expresión, adaptada de la entrevista que introduce este apartado, retrata de excelente manera la realidad elena: "era un flaco que en los espejos de feria se veía

robusto y grande". Esta imagen proyectada y autoconfirmada explica por qué el ELN nunca pudo dar el anhelado salto estratégico; y, como corolario, hay que decir que su apuesta nacional armada no solo demandó más recursos humanos y materiales, sino que terminó generando serias rupturas en ciertas localidades de importante influencia estratégica.

Por otro lado, el hegemón Sol de Oriente no fue el único que adoptó y mostró posturas discrecionales frente al COCE y la DN; de igual manera, otros frentes y estructuras revelaron las serias limitaciones de los órganos de dirección, y la imposibilidad de tratar y tramitar los problemas de siempre: centralización política, manejo de recursos y perspectivas revolucionarias (Medina, 2012; Aguilera, 2006; Espejo y Garzón, 2005). Al Domingo Laín se le endilgaba haber profundizado su caudillismo y regionalismo interno —por entonces no reconocía a "Danielito", dirigente histórico que hacía parte del COCE — (Entrevista 2; Celis y Gutiérrez, 2015); además, y de mayor importancia, empezó a desarrollar su propio trabajo político y militar en la capital a espaldas del COCE, creó un mando político militar estratégico para evitar ser controlado y asimilado por este, y en materia de dirección y centralización ya tenía una estructura y una militancia:

> En 1990 me mandan a mí a Bogotá, a dirigir Bogotá, y me encuentro con que en Bogotá ya está ahí el Frente Domingo Laín que tiene estructura, que tiene colectivos, que tiene militancia, que tiene organización. Inicialmente la camuflaban con que "no, son los apoyos logísticos que necesitan nuestros frentes, que necesita la compañía Simacota, que necesita el Pabón, que necesita el Domingo Laín, (…)". Era organización de base, era un núcleo de base y grupos que empezaban a operar militarmente en Bogotá. Empezaban y esto era algo inaceptable. Segundo, crearon una estructura de mando de nivel superior y lo denominaron Mando Político Militar Estratégico. Eso no existe en el ELN, sino solamente en el Domingo Laín. Crearon un Mando Político Militar Estratégico, cuando el único Mando Político Militar Estratégico que existe es el Comando Central. Ellos crearon un COCE a su imagen y semejanza y lo denominaron así. (Entrevista 22).

El frente José Solano Sepúlveda (sur de Bolívar) no se acogía a la centralización económica y no reconocía a la dirección del frente de guerra norte, por diferencias en torno al funcionamiento interno y al enfoque, estilo y criterios de trabajo político-organizativo (García, 2019). Además, en ese mismo frente, el Alfredo Gómez Quiñones tenía contradicciones con la dirección regional y se mostraba bastante belicoso en el tema de recursos; el José Antonio Galán y la compañía Anorí, que operaban en Antioquia, tenían problemas de democracia interna (Medina, 2012). Asimismo, se produjo la escisión de la CRS y del frente Astolfo González (Urabá), los cuales cuestionaban la vigencia de la lucha armada, en el contexto de la caída de

la cortina de hierro (1989) y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (Medina, 2012; Hernández, M., 2006; Vargas et al., 2011).

En la escisión de la CRS hubo, además, cuatro aspectos de fondo: uno, las tensiones producto de lecturas contextuales del manual continuaban más que vigentes; dos, el ELN seguía exhibiendo lógicas centralizadoras como las del Estado, muy bien descritas por Michael Mann (2006, 2012); tres, el cuestionamiento a la postura abstencionista del ELN Nacional:

> Para las elecciones surgieron también discrepancias, ellos [en referencia a la CRS] entran a plantear que es necesario superar la política que manejamos al respecto, a eso nosotros les decimos, listo (sic). Nosotros respetamos los procesos electorales que quieren emprender las bases, pero nuestra militancia no le dice a la gente que vote ni que no lo haga (…). Consideramos que no podíamos entrar a quemarle esfuerzos a esa actividad, dejando de lado tareas más urgentes para el proceso revolucionario. (Nicolás Rodríguez Bautista, citado en Cubides, 2007, pp. 59-60).

Y, cuatro, este evento muestra e ilustra la incapacidad organizacional e institucional infraestructural de la comandancia para homogeneizar y alinear a los emprendimientos armados locales que se fueron sumando en los años ochenta. En palabras del cura Pérez:

> Me inclino a pensar que lo que confluye allí, es un acumulado de contradicciones que se dan luego de ella… Eso tiene otros ingredientes, (…) entre ellos, que algunas de las contradicciones que había cargado el ELN, sin resolver, aparecen nuevamente en la UC-ELN (…). Además, existe una situación que caracteriza el proceso de unidad y es que el ensanchamiento, la expansión de la organización hacia algunas regiones del país, como la Costa, por ejemplo, no modificaron estructuras que existían en esas regiones. (Citado en Medina, 2006, pp. 216-217).[46]

Estos problemas y limitaciones en la institucionalización y homogeneización del ELN durante la etapa de crecimiento se manifestaban de diversas maneras: (a) en la ausencia de una instancia nacional real y concreta que coordinara y unificara las directrices de trabajo con las masas; (b) en constantes actos de indisciplina de los comandantes y combatientes territoriales; y (c) en un escaso relacionamiento y conexión con los procesos organizativos, bien porque había un excesivo apego a los manuales y guías revolucionarias, bien porque el trabajo organizativo carecía de innovación en materia de contenidos, pedagogía y estilo (Medina, 2012). Por

46 Años después, en el marco del V Congreso (2006), el ELN hizo un nuevo autoexamen, y en referencia a este momento señaló: “Este proceso tuvo dificultades, la metodología para la unidad fue incompleta, faltaron etapas intermedias. La voluntad unitaria no fue plena y las costumbres frente a la unidad y la convivencia no lograron remontar las tendencias grupistas, que afectaron el proceso unitario” (ELN, 2006).

eso, no debe extrañar que algunos frentes de guerra no hubieran podido consolidar anclajes sociales más o menos sólidos. Por ejemplo, en Montes de María, Cesar, sur de Córdoba, Magdalena y sur del Chocó, fueron escasas las bases sociales consolidadas, y las estructuras armadas eran bastante precarias (Aguilera, 2006; Medina, 2012; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011; Ortiz, 2006; González, 2014; Espejo y Garzón, 2005).

Se puede pensar que los problemas en la institucionalización y cohesión elena eran llanamente endémicos; no obstante, lo que se deduce por la trayectoria militar expuesta es que también se vio afectada por el mundo exterior: en las zonas de reciente inserción no se incrustaron en los procesos territoriales, como se describió atrás; y en las de presencia "tradicional", las directrices nacionales o el actuar de los comandantes generaron fricciones inéditas por los cambios en las reglas de juego respecto a las relaciones con los pobladores, reflejadas en un mayor control de la política local (el sur de Bolívar es el ejemplo por excelencia) y la extracción de recursos (Romero, s.f.; Gutiérrez, 2003).

Pero esto no es todo. Al lado de estos problemas, el ELN nacional sufrió importantes reveses en el campo militar, los cuales trataba de demeritar,[47] al tiempo que mostraba cierta debilidad. Se dio la captura o dada de baja de importantes cuadros y comandantes como Mario Pieschacón "Francisco Galán", cuarto al mando de esta guerrilla (Rubio, 1992); "Orlando", jefe político del norte del país; "Carlos Adolfo", jefe político de la dirección del Carlos Alirio Buitrago; y "Jerónimo", jefe militar del Capitán Parmenio; ocurrió también la muerte accidental, en Cauca, de "Ramón", miembro de la DN, entre otros (Hernández, M., 2006).

Por tal razón, los diálogos de Caracas-Tlaxcala (1991-1993) deben verse y analizarse como un espacio pensado estratégicamente por los líderes elenos para oxigenar políticamente el proyecto armado y ordenar los frentes de guerra para dar el anhelado salto estratégico con el Plan Vuelo de Águila (1993). En aras de este interés, no solo aceptó sentarse a hablar de paz después de décadas, sino que también, al tiempo que dialogaba, emprendió un proceso de expansión territorial.

---

47 La DN sacaba pecho diciendo que los golpes señalados y publicitados por el Gobierno no habían menguado ni frenado sus apuestas, ya que habían creado o reconstruido el frente Manuel Hernández y la compañía Compañero Fercho (Urabá); los Bolcheviques del Líbano (Tolima) y La Gaitana (Huila); el Jesús María Becerra, en el occidente de Cali y Comuneros del Sur (Nariño); el Ramón Emilio Arcila (nororiente antioqueño); el Cacique Calarcá (Eje Cafetero); el Jaime Bateman Cayón (Sucre); el Capitán Mauricio (nordeste antioqueño); el Guillermo Bernal (Santander); y los destacamentos y posteriores compañías José María Córdoba (oriente antioqueño), Cimarrones (nordeste de Antioquia); Héroes de Santa Rosa (sur de Bolívar); y, finalmente el Elizabeth Serpa (bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar); y Comuneros, en el Magdalena medio (Espejo y Garzón, 2005; Hernández, 2006; Aponte, 2013; García y Aramburo, 2011; Vásquez, 2006; Medina, 2012; Escobedo y Echandía, 2003).

En lo que atañe a los diálogos de Caracas-Tlaxcala, a pesar del optimismo inicial la mesa de negociación fue frágil desde el comienzo, porque las dos partes creyeron llegar mejor posicionadas política y militarmente de lo que estaban. Por un lado, el Gobierno se sentía fortalecido y deslegitimaba la lucha con base en hechos del contexto internacional —fin de la cortina de hierro (1989)— y nacional —apertura de la Asamblea Nacional Constituyente (1991)—. Y, por el otro, no todo el ELN estaba convencido de la conveniencia de este espacio, además de que el consenso interno en torno a la paz era bastante precario (Entrevistas 1 y 2; González, 2014; García, 1993, 2006). En efecto, la inserción en la mesa de diálogos estuvo guiada más por un sentido de oportunidad política para figurar en el debate, que por un real convencimiento de la necesidad de terminar el conflicto armado; de hecho, algunos frentes como el Domingo Laín desarrollaron una férrea oposición a la determinación del COCE, porque reivindicaban más que nunca la vigencia de la lucha armada y la favorable correlación de fuerzas con el Estado. Se comenta que este episodio generó tal tensión, que el Domingo Laín planteó escindirse del ELN y el cura Pérez pensó en desmovilizarse (Entrevista 1; *Semana*, 1993).

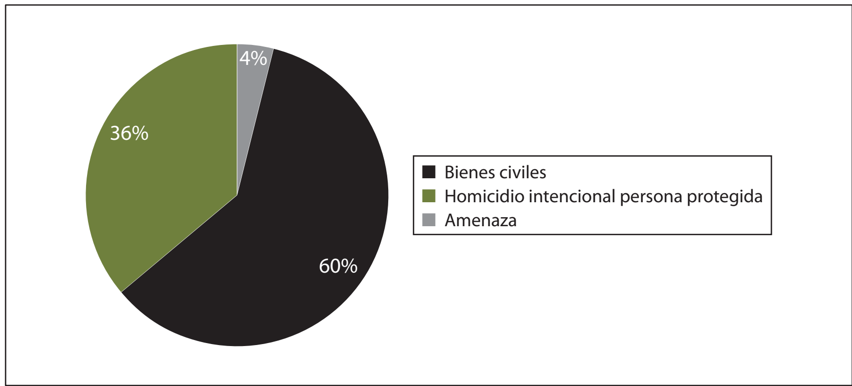
Respecto al proceso de expansión territorial, como lo evidencia la figura 4, el ELN proseguía con sus planes armados mientras hablaba de paz. Desde 1991, el COCE fue aprobando la creación o el desdoblamiento de nuevas estructuras armadas para la supuesta toma del poder, lo que explica el posicionamiento de esta guerrilla como un actor relevante en la escala nacional de la guerra, ya que sus estructuras armadas mostraban una iniciativa militar importante: durante este período registraron el 19% del total de las acciones bélicas para la serie de tiempo de la figura 4. No obstante, esta campaña militar también descubría otro revés: que la violencia del ELN no se desplegaba con la precisión necesaria o sus apuestas terminaban por infringir el derecho internacional humanitario (DIH), debido a que el ataque a bienes civiles fue el de mayor registro, con un 60% del total de la cuenta (figuras 3, 4 y 5).

Figura 4. Infracciones al DIH y a los DD. HH. Por actor, 1990-1998

Número de infracciones y violaciones
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
DDHH/IDH - ELN
DDHH/IDH - FARC
DDHH/IDH - Paramilitares
DDHH/IDH - Fuerza pública
DDHH/IDH - Otras Guerrillas

Fuente: Sig-Cinep. Elaboración propia.


Figura 5. Infracciones del ELN en zonas de studio*, 1990-1998



Fuente: Sig-Cinep. Elaboración propia. * Arauca, Cauca-Nariño, Catatumbo, Chocó y sur de Bolívar.

En este contexto se desarrolló el Plan Vuelo de Águila, el cual tomó como base la experiencia vietnamita contra el ejército estadounidense (Entrevista 1). Su apuesta era intensificar los ataques a las brigadas móviles y a los batallones de contraguerrilla del Ejército, a través de métodos pocos convencionales de guerra[48] (Ospina, 1993). Adicionalmente, estas acciones se complementaron con un trabajo de "veeduría" armada en las administraciones municipales, para realizar un control directo de la política local (Ospina, 1993; Aguilera, 2006; Hernández, M., 2006; Medina, 2012; González, 2014). Con los acumulados desarrollados, el ELN pretendía

48 Uso de explosivos y trampas como el sombrero chino, minas quiebrapatas, minas abanico, emboscadas con escopetas y colocación de autodefensas o milicias en zonas estratégicas en aspectos logísticos, militares y políticos.

llegar a 25 frentes que distribuiría a lo largo y ancho del territorio nacional[49] (Ospina, 1993), para formar compañías que serían el embrión de los "batallones" responsables de la labor de poner en práctica la guerra móvil (Ortiz, 2006; Aguilera, 2006; Vargas et al., 2011; Espejo y Garzón, 2005).

Sin embargo, a solo un año de haber iniciado dicho plan (1994) empezó a ser evidente la incapacidad para llevar a cabo todas las directrices en él consignadas: había un estancamiento militar y una cierta marginalización en el tablero nacional de la guerra frente al creciente protagonismo militar de las FARC (figura 3). Y un año más tarde esta inercia se confirmó, pues se calculaba que solo tenía 2460 personas en armas, lo cual era insuficiente para sus apuestas nacionales y para alcanzar el equilibrio estratégico (Aguilera, 2006; Ugarriza y Pabón, 2017). Las palabras de un exintegrante de esta guerrilla no pueden ser más dicientes de ese momento:

> En unas partes tuvo más desarrollo que en otros, en otras partes fue más exitoso que en otras, pero el balance en términos generales fue insatisfactorio. Al punto pues, que algunos decían: "Oiga, esto del Vuelo del Águila no fue tan. No, no. Fue el vuelo del pollo. Fue el vuelo del pájaro Uyuyui". (…) Lo cierto es que no colmó las expectativas que se tenían frente a todo el esfuerzo que se hizo. (Entrevista 1).

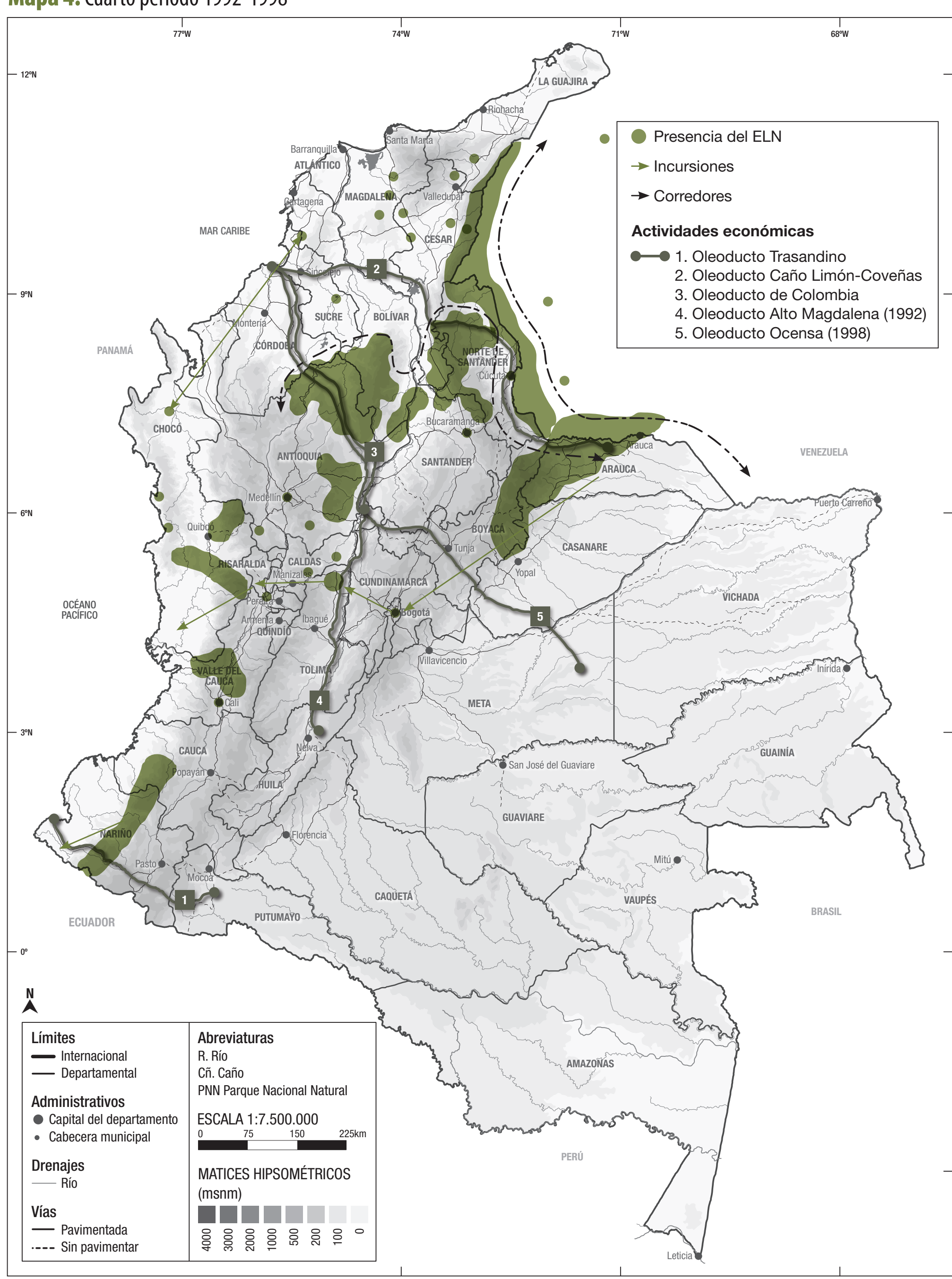
En este contexto de estancamiento se desarrolló la Primera Conferencia Militar Nacional (1995), la cual buscó fortalecer el ala militar para recomponer el camino (figura 4); redefinir las áreas estratégicas (Garzón y Espejo, 2005; Vargas et al., 2011) para adquirir mayor protagonismo en las tensiones sociales de sus zonas; y extraer más recursos de las economías territoriales (minería, agroindustria, petróleo, etc.), a través de la imposición de tributos, el secuestro y la extorsión[50] (figura 3). La idea era que los territorios costearan el surgimiento o la expansión de las estructuras (Echandía, 2013; Millán, 2011; Espejo y Garzón, 2005; Solarte, 2003; Rodríguez, 2012).

En la zona bananera del Magdalena buscó intervenir en las luchas y tensiones de las plantaciones y extraer recursos de élites agrarias samarias. En el suroccidente del país, el frente de guerra sur trató de consolidar su presencia en el Valle del Cauca, para asediar y extraer recursos de las zonas agroindustriales y recuperar terreno en el norte; en Cauca, pretendió terciar en las luchas étnico territoriales, con acento en las zonas

49 Concretamente en Cesar, La Guajira, Santander, Sucre, Bolívar, Córdoba, Chocó, Arauca, Huila, Valle del Cauca y Antioquia, entre otros.

50 Esto se dio en zonas de Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Magdalena y Valle del Cauca. También, en ciertas áreas de producción agroindustrial como las zonas algodoneras y ganaderas de Cesar, los ingenios y fincas del valle del río Cauca, en el Valle del Cauca. Finalmente, en zonas donde tenía fuerte influencia la guerrilla se volvió más predatoria, siendo el caso más representativo el sur de Bolívar, donde Santa Rosa del Sur y San Pablo tienen registros bastante importantes de secuestros.

Mapa 4. Cuarto periodo 1992-1998

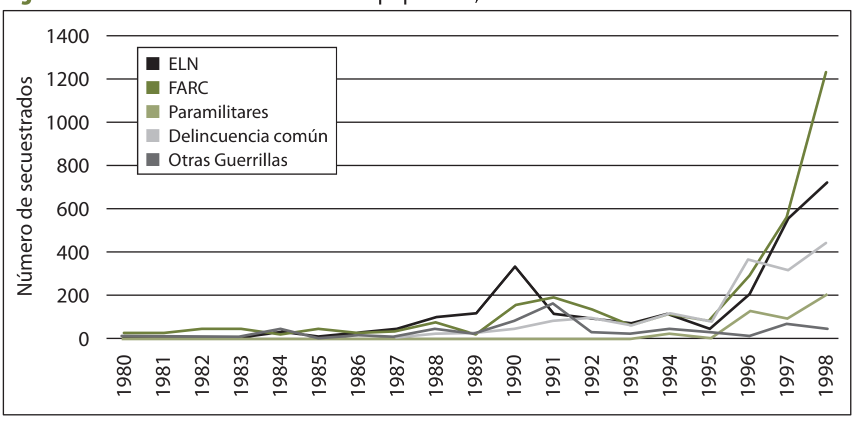


Fuente: elaboración propia, con base en el relato y entrevistas 1, 2 y 3.

campesinas de El Tambo; en Nariño, persiguió influir en las áreas mineras circundantes de Samaniego, como La Llanada; en Putumayo, quiso aprovechar los problemas de los trabajadores petroleros; en Caldas, Risaralda, Quindío y Huila buscó insertarse en las tensiones y problemáticas de un campesinado cafetero en depresión; en Urabá, creó el frente Manuel Hernández "el Boche" y la compañía Compañero Fercho para recuperar la presencia perdida con la salida del Astolfo González; y en el sur del Chocó creó dos nuevos frentes para infiltrar los procesos étnico territoriales. Finalmente, en las ciudades quiso fortalecer las redes urbanas en Cali, Popayán, Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Pasto y Bogotá (ver el capítulo de Daniel Amaya, y el de Andrés Aponte y Valentina González; Hernández, M., 2006; CNMH, 2014; Vargas et al., 2011).

El proceso descrito (desdoblamiento de algunas estructuras armadas, envío de comisiones exploratorias a otras latitudes del país y la ampliación de los dominios territoriales) muestra que este período fue el de mayor presencia territorial en la historia de esta insurgencia. No obstante, como lo ilustra el mapa 4, esta permaneció y siguió concentrada en el oriente colombiano, a lo que habría que agregar la ampliación de su presencia en el territorio venezolano, donde ya no solo se limitaba a las zonas de frontera, sino que llegó hasta las principales ciudades de los estados vecinos del Zulia, Táchira, Anzoátegui, Mérida y Apure (mapa 4).

Figura 6. Número de secuestrados en el tiempo por actor, 1980-1998



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

Pasados tres años (1997) no se había recompuesto el rumbo. El Plan Vuelo de Águila no mostraba los resultados esperados: la guerra móvil para escalar posiciones no se logró, solo había establecido 17 "compañías" y ningún "batallón", al tiempo que la expansión territorial quedó reducida al noreste del país (Aguilera, 2006). A esto se sumó un duro revés militar:

en 1996 cayó capturado Carlos Velandia "Felipe Torres", quien era considerado pieza clave en el ELN, porque había sido el encargado de organizar todo el trabajo en la capital (Entrevista 2), además, era un importante cuadro militar que se había entrenado en Vietnam (1984) y fue quien trajo a Colombia la técnica de las minas quiebra patas, cazabobos y caza matas (*El Tiempo*, 1996). También, fueron dados de baja el comandante "Rafael" (Edgar Grimaldos Barón) y el "capitán Ubaldo" (Carlos Reyes Niño) en 1995, dos piezas claves del ELN nacional (Hernández, s.f.; ELN, 2011).

Como corolario de esta situación, la estrategia de captación de recursos, sobre todo el secuestro y la extorsión, generó una resistencia armada en ciertas áreas del país[51] y puso color de hormiga la relación con algunas de sus bases sociales (figura 6), pues algunos frentes militarizaron y fiscalizaron, aún más, la vida política de las localidades donde tenían presencia. Este viraje empezó a ser inadmisible para ciertas élites políticas y económicas locales, a la vez que les hizo vislumbrar la obsolescencia de las formas elenas de intermediación y de tramitación de conflictos. No es gratuito que para 1997 y 1998, algunas localidades y sus élites le abrieran la puerta al proyecto paramilitar para ganar autonomía política y para proseguir con la integración de sus conflictivos territorios a la vida nacional (Gutiérrez, 2003; Bolívar, 2006; Aponte, 2013).

Sin duda alguna, el sur de Bolívar es el caso que mejor representa estas fricciones y cómo las cosas se salieron de madre. Ahí, el frente de guerra había descuidado el trabajo político y los procesos organizativos (Entrevista 3); además, a su intento de controlar la vida política local se sumó "la imposición de mucha vacuna, eso empezó a molestar a la gente, y si a eso le suma el secuestro, la gente se cansó" (Entrevista 4). Esta situación le abrió las puertas a las AUC, organización que incursionó en la zona y le asestó duros golpes —recordemos que Castaño dijo que iba a colgar su hamaca en la teta de la serranía de San Lucas— (*Semana*, 1998), debido a que su orden fue percibida como un obstáculo para la integración a la vida nacional, como muy bien lo expresó el Movimiento No al Despeje[52] (Bolívar, 2006).

---

51 El pico de los años ochenta fue superado con creces con la nueva campaña de secuestros que emprendió el ELN por estos años. Este repunte se enmarca en la introducción de retenes y pescas milagrosas (20% del total de la muestra 1980-1998, de acuerdo con la gráfica 5) para sistematizar y hacer más efectivo este tipo de esfuerzos. Así, esta guerrilla ocupó el honroso segundo lugar, después de las FARC, en el período 1992-1998.

52 Esta asociación se puede entender como una liga de sectores económicos, sociales y políticos con las AUC, conformada por habitantes de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Simití, etc. Este movimiento, liderado por la Asociación Civil para la Paz de Colombia (ASOCIPAZ), se negó a que las municipalidades de Yondó (Antioquia), Cantagallo y San Pablo (Bolívar) fueran contempladas como posibles escenarios de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN durante el año 2000, a través de una serie de movilizaciones y bloqueos de vías.

Este suceso se elevaría como la experiencia distópica del ELN, pues tenía ciertos paralelos con el trabajo de Arauca. No obstante, por los factores reseñados atrás, se puede explicar la trayectoria territorial del ELN en esta área del país. Las palabras de "Danielito" no pueden ser más esclarecedoras:

> Comparemos con lo que sucedió en el sur de Bolívar. Llega un momento en el que hay una colonización muy parecida a la de Arauca. Están colonos santandereanos, boyacenses, conservadores, liberales y el ELN acompaña el proceso de poblamiento de la serranía de San Lucas. Pero allá hay un momento en que la gente decide jugársela con los paramilitares y generan un pensamiento y una reacción contra el ELN. ¿Sabe cuál es la diferencia? Son diversos los grados de capacidad de la organización para dirigir procesos. Se podría pensar que es un problema o es un asunto o un tema que tiene que ver con el liderazgo, o tiene que ver con distintas propuestas que se manejaban, porque es que, en principio, las dos experiencias son muy similares. (Citado en Celis y Gutiérrez, 2019, p. 68).

Situaciones análogas se vivieron en el norte del Valle del Cauca, Montes de María (Sucre), sur de Córdoba, oriente antioqueño, bajo Cauca antioqueño, Urabá y Barrancabermeja, por ejemplo (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR]-Grupo de Memoria Histórica [GMH], 2011; Aguilera, 2006; Echandía, 2013; Gutiérrez, 2012; García, 1996; Vásquez, 2006; CNMH, 2014). Los paramilitares, el Estado, o una combinación de fuerzas entre estos dos, lograron diezmar el dominio territorial del ELN.[53] La única excepción a esta tendencia fue Arauca, pues esta guerrilla al convertirse en un agente estructurante del Sarare no solo era fuerte militarmente, sino robusta en términos sociales y económicos; por tal razón, fue menos vulnerable a las acciones contrainsurgentes del Estado y de los paramilitares (ver el capítulo de Charles Larrat-Smith).

La imposibilidad del ELN para dar el salto estratégico y su paulatino retroceso militar encuadraron el III Congreso, realizado en 1996 bajo el eslogan "Somos revolución, construimos poder y triunfaremos". Los temas tratados oscilaron entre las usuales discusiones acerca de los principios organizativos e institucionales (centralismo democrático, tipo de trabajo con las masas y ciertas acciones para tratar de alinear a todas las estructuras armadas bajo un horizonte armado y político común); las "nuevas y utópicas apuestas para la toma del poder"; y un alistamiento para repeler la ofensiva paramilitar (ELN, 1996, 1997a).

En cuanto al embate paramilitar, el ELN estaba viendo que sus anclajes sociales territoriales eran menos sólidos de lo pensado, porque sus fuerzas estaban bastante expuestas al accionar armado (masacres) de las AUC.

---

53 Por estos años, se calculaba la tropa en 15 000 persona en armas (*El Tiempo*, 2016a).

Para algunos, estas limitaciones tenían que ver con el excesivo voluntarismo político de la comandancia, pues, en su opinión, sus jefes se obnubilaron con los acumulados logrados en los años ochenta (ELN, 1997, pp. 51-52, citado en Medina, 2012, p. 649).

Igualmente, frente a los temas organizacionales, la institucionalidad elena se mostró endeble y con escaso poder infraestructural para incidir en sus frentes de guerra: el Domingo Laín siguió con sus resabios autonomistas y posturas selectivas respecto a la comandancia, en particular con el tema de los recursos. Esto sacaba a la luz que las decisiones tomadas durante el II Congreso (1989) y en la cumbre de finanzas de 1992 no fueron efectivas, pues los cuestionamientos a la DN siguieron más que vigentes (*El Tiempo*, 1995). En efecto, en estos años el hegemón Sol de Oriente se siguió posicionando como el principal contradictor del COCE en temas de recursos, la paz, la estrategia armada, la organización interna y los mecanismos institucionales para darle coherencia a los frentes, etc. En entrevista a *El Tiempo*, el cura Pérez respondió así a la pregunta: ¿En qué consisten las contradicciones con el Domingo Laín?:

> En el Tercer Congreso (Édgar Amílkar GrimaIdos Barón), de Julio de 1996, declaramos: «La delegación del Frente Domingo Laín y la Dirección Nacional ratificamos nuestro compromiso revolucionario y la cohesión interna hoy, mañana y siempre. Construimos la política en debate democrático y derecho a criticar y ser criticado". Se discutió sobre métodos de lucha, táctica, estrategia y los diferentes temas de la revolución. Los diálogos, la negociación, como tantos otros temas, fueron objeto de trabajo. (ELN, 2000, pp. 120-121).

El caso más sobresaliente fue la escisión del frente Alfredo Gómez Quiñonez (1996) y su comandante, quienes rompieron con el ELN nacional (*Semana*, 2000b), porque consideraban inadmisibles las políticas en torno a la redistribución de recursos:

> Es doloroso encontrar que las separaciones o desviaciones se den sobre la base de formas casi caprichosas de organizar sus estructuras, con criterios propios, con pragmatismo rayano en la improvisación permanente y organizando el propio poder. Considerando como personal lo que se haya construido en su estructura, y con base a ello abrogándose cada cual el poder de decisión absoluto (…).
>
> La debilidad de la fuerza expresada en fracciones y descohesiones, se da en los cuadros a partir de que se supeditan los intereses de la Organización y la revolución a los propios intereses particulares. (…) Podemos analizar que lo que más pesó para la separación fue el hecho de que les informaran al Frente, que la Dirección Nacional se iban a llevar 130 hombres armados del AGQ; o que el ELN estaba mal, porque los Frentes son de poquitos compañeros, unos de 7, 10, ó 40 apenas. (ELN, 2000, pp. 127-128).

El diagnóstico dado por Manuel brinda un panorama amplio de los problemas que aquejaban a la organización nacional por ese entonces; además, estas limitaciones y dificultades incidieron en la forma de relacionamiento con la masa, en la estrategia revolucionaria y en los golpes militares sufridos:

> 1. Débil atención política por parte de los cuadros nacionales o de Área. 2. Prevenciones, resentimientos y reyertas entre estructuras por zonas, recursos, compañeros de base, etc. O por disputas entre miembros de una misma Dirección. 3. Ambiciones personales de reconocimiento y de poder (…). 4. Diferencias en cuanto a criterios de funcionamiento (…): criterios de incorporación, criterios de salida de la guerrilla, criterios de impuestación. (ELN, 2000, p. 126).

Para cerrar este período, la situación de estancamiento y retroceso del ELN se vio profundizada por algunos golpes militares y por la muerte del máximo comandante (Manuel, el cura Pérez),[54] (1998), quien, en cierta manera, representaba el último de los mohicanos del grupo Golconda. Su figura no solo era asociada con la del mítico Camilo Torres, sino que también su quehacer guerrillero lo entremezclaba con la labor pastoral. Eso le permitía estar en permanente contacto con la masa y le remembraba a los combatientes y comandantes la figura del finado cura:

> Él casaba gente, bautizaba, hacía misas populares. Eso no es contradictorio. Para mí como cristiano fue una experiencia muy grata de conocer a Manuel, después de haber estudiado a Camilo; ahí está la continuidad de Camilo, en el ELN está presente el cristianismo. (De Currea-Lugo, 2018, p. 97).

La ausencia de Pérez posibilitó que los ánimos discrecionales del Sol de Oriente tomaran vuelo y peso, pues de los personajes fundacionales solo quedaba "Gabino", quien tenía que compartir la comandancia con "Antonio García", considerado representante de la línea más dura, y con otros personajes como "Pablo Beltrán" y "Ramiro Vargas", quienes representaban posiciones distintas (International Crisis Group, 2007). En efecto, estas diversas tendencias se hicieron sentir en el V Pleno de la Dirección Nacional (1998), a la hora de analizar la situación del proceso revolucionario, sus dificultades y principales urgencias por los retrocesos militares experimentados (Medina, 2012); pero más importante aún fue la emergencia de posiciones que cuestionaron la actitud abstencionista frente a los cultivos de uso ilícito (algo inédito hasta el momento) y al tema de la paz.

---

54 Ese no fue el único golpe, ese mismo año o unos meses posteriores fueron dados de baja algunos comandantes del frente de guerra nororiental, entre ellos Reinaldo Ardila Gómez "Rubén" o "Ito Ardila" y Felipe, y se dio la muerte natural de Carmelito Ballestas, el comandante Eliseo (Hernández, M., 2006).

Respecto a la coca y la amapola, algunos frentes del Cauca empezaron a vincularse insubordinadamente al COCE por obligación, codicia, pragmatismo o por una conjunción de los tres, so pena de generar tensiones y ser desechados por las organizaciones de las áreas donde tenían presencia:

> Una vez el ELN tomó decisiones en contra de la comunidad, fue cuando se quiso, de manera abierta, meterse a controlar la expansión de los cultivos de coca y amapola; eso en algunas comunidades era contrario a los intereses de ellos. Además, por un lado, nosotros intentando evitar que eso se expandiera y, por el otro lado, FARC impulsando la siembra. Hubo muchas comunidades que se nos fueron en contra por eso. Hasta que, en última opción, no porque compartamos con eso, pero entendiendo la situación de abandono del campo, nos tocó aceptarla. (De Currea-Lugo, 2018, pp. 83-84).

En cuanto a la paz, en vista de la desfavorable correlación de fuerzas y la coyuntura que representaban los diálogos entre el gobierno de Andrés Pastrana con las FARC, un sector del ELN estimó necesario seguir trabajando por la solución política al conflicto armado, y buscar un espacio de diálogo y de visibilidad política como el del Caguán. No obstante, el Domingo Laín, el Carlos Alirio Buitrago y el Bernardo López Arroyave se alejaron de esta tendencia del COCE y de los voceros presos en Itagüí: "Felipe Torres" y "Francisco Galán" (González, 2014; Ortiz, 2006), mostrando, una vez más, la capacidad y discrecionalidad de ciertos frentes para distanciarse de las directrices del ELN nacional.

En suma, este corto pero intenso período pone de relieve que el proceso de expansión territorial y militar del ELN se concentró en la zona nororiente del país, en franca lógica con los acumulados materiales, sociales y políticos que había consolidado el Sol de Oriente en los años ochenta. En efecto, esta estructura, como se verá más adelante, será el sostén del ELN nacional en los siguientes lustros, cuando todo pasó a ser retroceso y marginamiento militar.

Por otro lado, las adecuaciones institucionales y organizacionales implementadas por líderes nacionales quedaron cuando más en el papel, pues las estructuras armadas y los diversos frentes de guerra seguían desarticulados y operando bajo lógicas endémicas, muchas veces atadas a los intereses de los comandantes regionales y sus bases sociales. Y es que la estrategia de recomposición, que fue un éxito en los años ochenta, se convirtió en un constreñimiento organizacional en los noventa, al punto que el ELN nunca pudo dar el salto estratégico y se convirtió en un actor de segundo plano en el tablero nacional de la guerra.[55]

---

55 Por paradójico que suene, estos problemas de articulación y cohesión no son muy diferentes de los que tuvo Carlos Castaño con las AUC, en los años noventa, o los desafíos y problemáticas

El proceso descrito resalta, también, que los costos de tener unos anclajes sociales bastante heterogéneos e inconexos fueron palpables. Si se mira comparativamente su trayectoria con la de las FARC, es indiscutible que el ELN nunca pudo consolidar una base social ni un control territorial a semejanza del ejército de Manuel Marulanda. No obstante, esto también le representó, en ciertas ocasiones, una ventaja comparativa con la extinta guerrilla, pues las bases farianas nunca lograron tener la misma relación con la insurgencia que las "representaba"; de ahí el quid fariano: su alta capacidad militar y de control territorial opacaba su relacionamiento con los civiles, al punto de ser catalogada como muy militarista. Otro punto de diferencia fue la vinculación con la economía cocalera (Vásquez, 2015; Aponte, 2020; Ramírez, 2001); esta representó, en términos políticos y económicos, un gana-gana para las FARC: amplió su base social, amplió sus nichos de reclutamiento, y modernizó y amplió la tropa, algo que no permitió el petróleo, el secuestro ni la minería artesanal[56] (CNMH, 2017; Vásquez, 2017; Ortiz, 2006).

Las palabras del siguiente entrevistado ilustran a la perfección la trayectoria de cada una de estas guerrillas, al resaltar que los acumulados militares, sobre los que se estaban apalancando, eran más inconsistentes de lo que creían; algo en lo que tienen que ver, y mucho, los procesos de socialización, de institucionalización, y el poder real y concreto de las estructuras (armas, combatientes, etc.):

> Entra en un proceso de introspección, (…), en tanto que las FARC se lanzan a la epopeya militar en momentos de crisis del país y ellos sí sacaron el mejor partido. (…), ahí es cuando las FARC protagonizan la batalla de Puerres, la toma de Miraflores, la toma de Mitú, la de Mocoa. Bueno, todas estas, la batalla del Billar. Se montan en una epopeya militar la cual les resulta exitosa y el ELN cae en un ensimismamiento y en una reflexión muy profunda, al punto de decir: "oiga, todo eso que estamos haciendo se nos escapa, como agua entre los dedos".
>
> (…) las compañías de ejército que habíamos construido y que yo había comandado, ya no existían. No duraron cuatro años. Imagínate, y no porque nos hubieran derrotado, todas las peleas las ganamos en el terreno militar, pero era que no había cómo soportar políticamente este esfuerzo

---

que han debido afrontar los partidos tradicionales y las agencias del Estado central en su proceso de formación, proyección y articulación a diferentes ámbitos regionales del país, cuando han tenido que negociar con las redes preexistentes de poder, ya que casi siempre han solido condicionar la manera de materializar la batería estatal y la toma de decisiones políticas.

56 Claro está que este punto es bastante debatible, pues, también, las deslegitimó políticamente a los ojos de la comunidad internacional y la opinión pública nacional.

> que estábamos haciendo. Nos habíamos equivocado, no estábamos en ningún periodo prerevolucionario. (Entrevista 1).

Estos factores, más el grado de solidez estructural de cada una de las guerrillas, explican sus trayectorias contrapuestas, y comprueban que la mayor o menor fortaleza de la estructura de un grupo armado determina su capacidad para gestionar el incremento de los recursos a su disposición, para absorber las tensiones que acarrea este proceso y para proyectar los recursos disponibles en términos de influencia política y militar (Ortiz, 2006).

Marginalización como estrategia de conservación: inserción en las periferias de las periferias y vinculación con economías territoriales, 1999-2009

El retroceso militar y territorial, 1999-2005

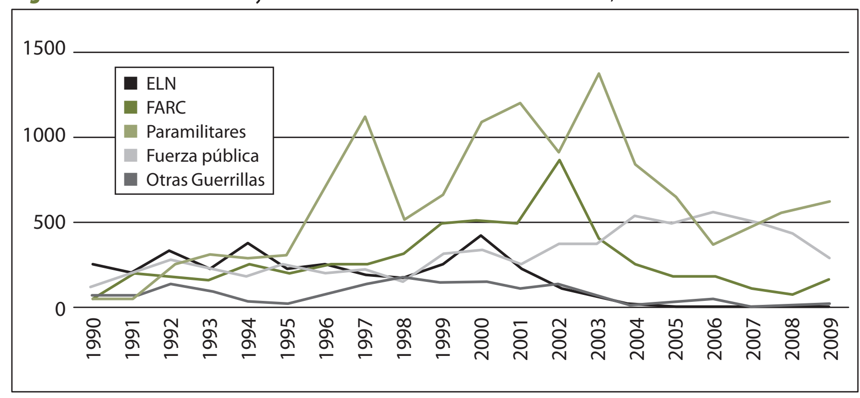
Al declive eleno se le sumó, por estos años, que su imagen de guerrilla híper "politizada" y respetuosa de los derechos humanos (figura 7) se empañó por los métodos y estrategias de guerra empleados, pues los planes trazados por la dirección implicaron que acentuara su ala militar. Esto le trajo más dificultades a los frentes en las localidades donde tenían presencia, y el supuesto perfil humanitario y político[57] que había construido cuidadosamente el cura Pérez durante su liderazgo llegó a su fin (ELN, 1997; Hernández, s.f.; Ramírez, 2018).

En este proceso tuvo un peso importante la irrefutable evidencia de que los frentes de guerra no respetaban la normatividad internacional para humanizar los conflictos internos (figura 7): el reclutamiento de personas menores de edad no cesó, los parámetros para las prácticas de secuestro no se "estandarizaron" (prometieron excluir de ella a menores de edad y ancianos), no terminaron los atentados contra los oleoductos ni frenaron la siembra de minas antipersona y la instalación de artefactos no convencionales (ELN, 1998, 1998a; *El Tiempo*, 1998).

---

57 En esto tuvieron mucho peso la acogida unilateral de esta guerrilla al Protocolo II de Ginebra y los compromisos adquiridos en la reunión Puerta del Cielo. Respecto al primero, en atención a las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional, organismo que en su informe de 1994 sobre Colombia señalaba que los actores armados no respetaban los derechos de los menores de edad ya que los reclutaba, esta guerrilla sostuvo que no iba a ejercer más dicha práctica, Y, en cuanto a la segunda, sus líderes aceptaron suscribir una serie de acuerdos para humanizar la guerra: se comprometieron a ponerle freno a los secuestros y a liberar a todos los secuestrados menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Figura 7. Infracciones al DIH y violaciones a los DD. HH. Por actor armado, 1990-2009



Fuente: SIG-Cinep. Elaboración propia.

Pruebas de lo dicho atrás son: la voladura, en 1998, del oleoducto central en Segovia (Antioquia), hecho que intentaron negar inicialmente[58] (Rendón, 2018; Ó Loingsigh, 2017); la continuidad en el reclutamiento de personas menores de edad, a pesar de la directriz nacional del COCE (ELN, s.f., 1997, 2000; CNMH, 2017); y los secuestros masivos de la iglesia La María[59] (1999), del kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura[60] (2000), de la ciénaga del Torno, cerca de Barranquilla (1999), y el del vuelo 9463 de Avianca[61] (1999).

Especial atención merecen estos secuestros masivos, ya que revelan dos cosas: primera, una acción desesperada para ganar oxigeno político, pues intentaron presionar al Estado colombiano por la vía militar, para lograr lo que no habían podido en el campo político, dado que no tenían la misma visibilidad de las FARC con El Caguán, y, menos aún, habían conseguido una zona de distensión (*Vanguardia*, 2017); segunda, dar una falsa demostración de fuerza al Estado colombiano y a la opinión pública (Hernández, 2006).

58 Integrantes de la compañía Cimarrón (frente José Antonio Galán), dinamitaron un tramo del oleoducto central en el corregimiento de Machuca, jurisdicción de Segovia. Con esta acción ocasionaron el vertimiento de petróleo sobre el río Pocuné, y una chispa que se generó por los explosivos causó una explosión que dio como resultado la muerte de 34 personas.

59 Hecho realizado por el frente José María Becerra, el 30 de mayo de 1999, en la iglesia La María del barrio Ciudad Jardín, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

60 Hombres del frente Comuneros del ELN ingresaron a dos restaurantes y una hacienda en el kilómetro 18 de la vía a Buenaventura, y secuestraron a cerca de 70 personas.

61 Este vuelo tenía como ruta Bucaramanga-Bogotá. Fue secuestrado con sesenta pasajeros a bordo, para hacerlo aterrizar en una pista improvisada en El Piñal, corregimiento de Vijagual, entre los municipios de Simití y San Pablo, en el sur de Bolívar. Entre los secuestrados estaban el presidente de la época de la empresa Ecogas; el entonces senador Juan Manuel Corzo; el alcalde de El Zulia, Juan A. López Carrero; y el asesor del Congreso Gerardo Flórez Gómez.

Por otro lado, el deterioro en la imagen elena estuvo acompañado por un retroceso territorial y militar a manos de la fuerza pública y las AUC. La nota singular de estas interacciones armadas fueron los secuestros y bloqueos, la instalación de campos minados, y ciertas emboscadas y combates (figura 8). El caso más emblemático es el del sur de Bolívar, como se señaló atrás, pero también esta insurgencia vivió algo parecido en Antioquia (nororiente y bajo Cauca), la Costa Caribe (Cesar, Magdalena, Montes de María), Catatumbo (Norte de Santander) y en el suroccidente del país (Farallones de Cali, Norte del Valle, Cauca, Nariño) (Echandía, 2013; Millán, 2011; Aguilera, 2014; García y Aramburo, 2011; Aponte, 2012; Gutiérrez, 2003; Barrera, 2014).

Figura 8. Acciones bélicas por actor armado, 1990-2009

Fuente: SIG-Cinep. Elaboración propia.

En Antioquia, el ELN mantuvo en vilo los intercambios económicos y la comunicación entre Bogotá y Medellín durante el año 2000. Esta vía nacional era la más temida por los turistas colombianos, especialmente en el trayecto Cocorná-San Luis, lugar predilecto del Carlos Alirio Buitrago para instalar los retenes y hacer secuestros con fines económicos (*EL Tiempo,* 2000b), los cuales justificaban bajo el argumento de que esta era una ruta turística y de intercambio burguesa (Ejército Nacional, 2000b, citado en Ugarriza y Pabón, 2017, pp. 254-255). Esto enmarca el pico en la tasa de secuestros en Antioquia y a nivel nacional que visibiliza la figura 10. Y, en el oriente y occidente del departamento, esta guerrilla libró una batalla con el Estado por el control de las carreteras y las torres de energía, la cual derivó en una campaña de atentados contra la infraestructura eléctrica (*El Tiempo*, 2000c; *Semana,* 2000; ELN, 2011).

La exposición de fuerzas del ELN por la vía de la campaña armada y las acciones del Estado en defensa de los proyectos infraestructurales

(complejo hidroeléctrico del oriente antioqueño) y de la carretera Bogotá-Medellín con la Operación Marcial (2003), debilitaron a los frentes guerrilleros que operaban en esa zona: en tres meses fueron abatidos 122 guerrilleros del ELN y de las FARC, otros 115 se habían desmovilizado y 80 campamentos habían sido desmantelados (*El Tiempo*, 2003a). En el ELN, el Carlos Alirio Buitrago fue el más golpeado, pues más de la mitad de los desertores pertenecían a esta estructura, entre ellos el jefe de escuadra (*El Tiempo,* 2003b) y "Timoleón", miembro de la dirección de frente (2008) (ELN, 2011).

La desestructuración de este frente no debe pasar desapercibida, porque con ella el frente de guerra oriental perdió un aliado de su cruzada radical. Esta estructura fue una de las que más se opuso durante los noventa a cualquier intento de negociación, en parte por los marcos cognitivos de sus comandantes, así como por su vínculo con el Sol de Oriente, algo que también explica la postura saboteadora del frente de guerra central durante este mismo período, antes de ser desarticulado:

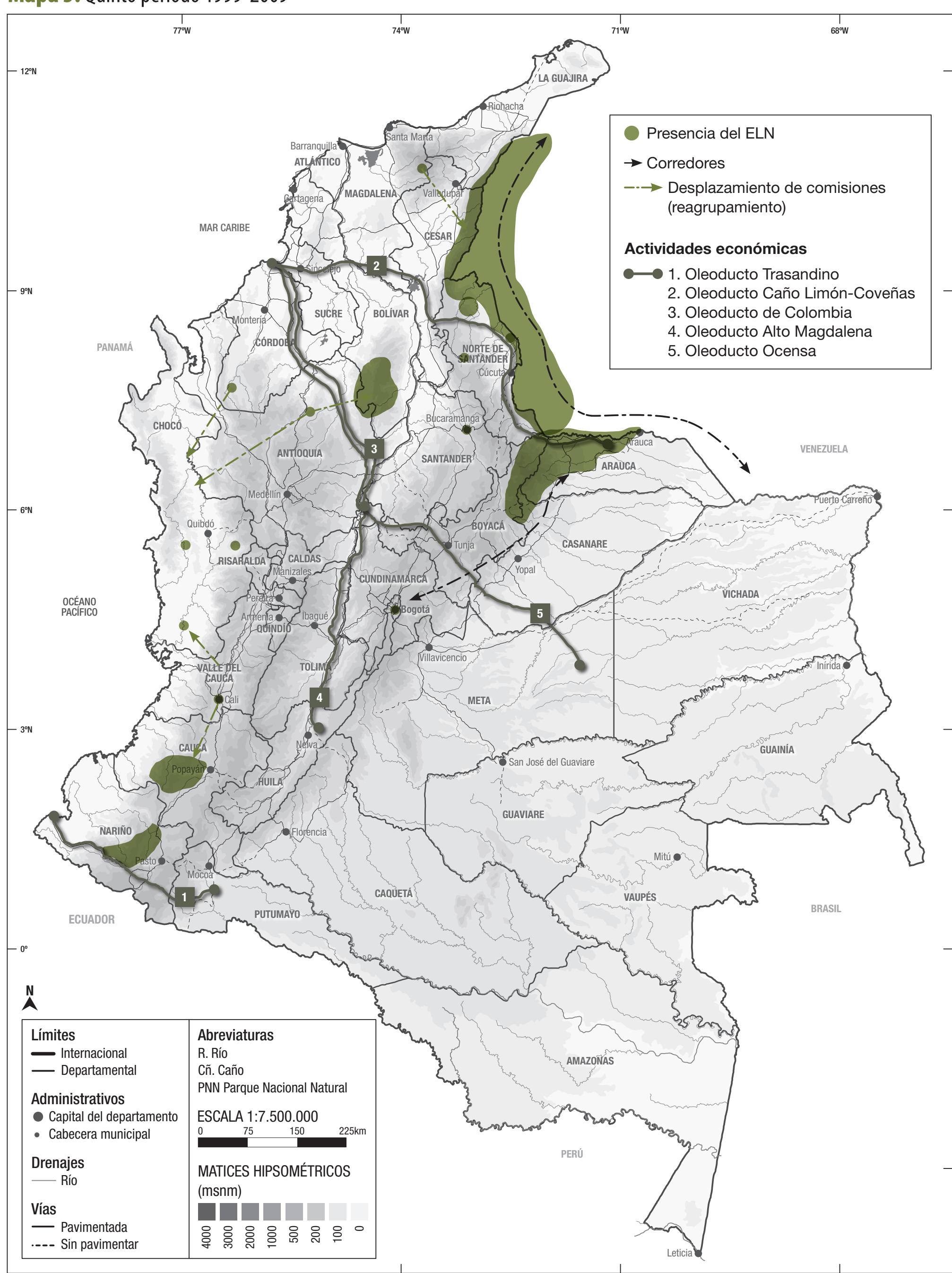
> Tú me dices que el Carlos Alirio Buitrago, pero antes del Carlos Alirio Buitrago había saltado al Tolima [en referencia el Domingo Laín] y en el Tolima había estado apoyando un proyecto que se llama "El Proyecto Cimarrón" y hubo un proyecto propio de ellos. Habían saltado al Tolima y estaban desarrollando eso y allí se encontraron con una estructura de lo que se llamaba el Frente de Guerra Central, que era del Frente Bolcheviques del Líbano y ellos se encontraron y allí se apoyaron y eran los mismos del Laín. El Frente Domingo Laín a través de una Columna Compañía Cimarrón, que inicialmente la llamaban así, terminaban encontrándose y apoyándose. (Entrevista 22).

Retomando el hilo de las dinámicas en Antioquia, en Anorí, Campamento y Yarumal, la acción del ejército y de los paramilitares debilitó al frente Héroes de Anorí, el cual había llegado a contar con más de un millar de personas en armas. En tres años tuvo 1279 bajas entre muertos, heridos y capturados. Estos golpes enmarcan la desmovilización voluntaria de Ramiro Ruíz y el repliegue de lo que quedaba de esa estructura al sur de Bolívar:

> Contacté al segundo al mando, llamé al resto y les hablé de que esto ya no tiene ningún sentido; que dentro del monte lo único que hacemos es desgastarnos, encontrar la muerte e inclusive accidentarnos con las mismas minas quiebrapatas que sembramos. (*El Tiempo*, 2005).

De todos los frentes activos y relativamente grandes, solo sobrevivieron el Héroes de Anorí y el Carlos Alirio Buitrago. Con estos remanentes, desgastados políticamente, se replegaron a los espacios más apartados e inaccesibles del oriente antioqueño, al sur de Bolívar y a los intersticios de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por el occidente (*Semana*, 2000a; *Verdad Abierta*, 2011; International Crisis Group, 2007).

Mapa 5. Quinto periodo 1999-2009



Fuente: elaboración propia, con base en el relato y entrevistas 1, 2 y 22.

En Cesar, luego de una campaña de atentados contra la infraestructura que incluyó voladura de puentes y vías férreas o ataques a alcaldías (*El Tiempo*, 2000, 2000a), y una estrategia intensiva de extracción de recursos, los frentes elenos fueron expulsados por el bloque Norte de las partes planas del departamento: La Jagua, Aguachica, Gamarra y La Gloria. Las estructuras sobrevivientes se agazaparon en las partes más altas de la serranía del Perijá, por el municipio de González, y utilizaron las minas antipersona como forma de protección (Barrera, 2014; International Crisis Group, 2007). En el Magdalena, donde habían logrado en la década de los ochenta una fuerte presencia militar, social y política, la combinación de la acción contrainsurgente del ejército y la consolidación paramilitar llevó a los frentes sobrevivientes a recluirse en la Sierra Nevada (*Verdad Abierta*, 2015a).

En el occidente del Caribe, específicamente en el sur de Córdoba, La Mojana y Montes de María, se retiró de las áreas donde tenía presencia (Aponte, 2014; Echandía, 2013; Ugarriza y Pabón, 2017) y se recluyó en el bajo Cauca antioqueño, en límites con el sur de Bolívar. En el Catatumbo (Norte de Santander), las estructuras presentes perdieron presencia en Tibú y El Tarra, dos bastiones históricos, para recluirse en las partes altas y más apartadas del alto Catatumbo, como son Hacarí, San Calixto y Convención (Aponte, 2012; ver el capítulo de Henry Ortega). En el suroccidente colombiano perdieron espacio en el Valle del Cauca y Nariño (Echandía, 2013; CNMH, 2014). En la primera zona, perdieron presencia en el norte del Valle y los Farallones (Dagua, Jamundí y Cali), para replegarse en el Cauca (El Tambo y algunas áreas de Argelia y Patía) (ver capítulo de Daniel Amaya; Noguera, 2000. Finalmente, en Nariño, perdieron presencia en el piedemonte y en el andén del Pacífico con la incursión de las AUC y la entrada de las FARC a Sotomayor, La Llanada, Barbacoas, Tumaco, etc., para recluirse en las partes rurales de Samaniego (Amaya y Ortega, 2019; Rodríguez, 2015; ver capítulo de Daniel Amaya).

En correlato con esta situación de los espacios rurales, esta guerrilla también retrocedió en las zonas urbanas: la toma paramilitar de Barrancabermeja, en 1998, fue más que emblemática, pues como resultado el ELN perdió un bastión social y político del que alardeó por décadas, aunque también influyeron, en parte, procesos inconsistentes en el reclutamiento, los cuales alteraron las formas de relacionamiento con sus bases sociales y las expuso al fuego enemigo (García Velandia, 2006); en 1999 perdió el control de las comunas de la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta (*La Opinión*, 2019; Aponte, 2012; Quiroga, 2010) y se dio la expulsión del frente urbano José Manuel Becerra de Cali (1999), y en el 2002, la conquista, por parte de las fuerzas militares y elementos

paramilitares, de la Comuna 13 de Medellín, con la Operación Orión[62] (Peñaranda, 2015; Hernández, M., 2006).

El mapa 5 ilustra el retroceso militar descrito. De hecho, las siguientes palabras no pueden ser más explícitas sobre dicho proceso: "Lo que fue adelgazamiento en territorio colombiano, fue ensanchamiento en territorio venezolano" (Entrevista 22), porque esta guerrilla se replegó a las zonas de frontera con Venezuela para conservar sus fuerzas. Otra cuestión importante fue la pérdida de presencia en zonas urbanas del país en las cuales tenían una influencia histórica (mapa 5). La presencia en la costa Caribe quedó reducida a su mínima expresión, con el repliegue a las partes más altas de la serranía del Perijá, y en esa dinámica de retroceso es que se dio la inserción definitiva en el Chocó. Por último, queda en evidencia que, salvo el frente de guerra oriental, el resto de estructuras armadas fueron diezmadas, acabadas o reducidas a sus mínimas proporciones; de allí que el Sol de Oriente fuera el bastión sobre el que apuntaló la supervivencia y desde donde se dio una nueva recomposición en años futuros (mapa 5).

Lo que revelan estos sucesos, más allá de la derrota militar pura y dura, fue que el ELN descuidó la forma como se había incrustado y socializado dentro de las llamadas masas, y que sus filtros de reclutamiento y sus procesos de socialización resultaron insuficientes y bastante limitados para darle un norte claro a la acción de sus integrantes. Por eso, más allá de las limitaciones infraestructurales que tenían las comandancias territoriales y nacionales para direccionar el tipo de violencia desplegada, y las formas de relacionamiento con las llamadas bases sociales, también incidió el tipo de recluta incorporado, como consecuencia de filtros y mecanismos de socialización bastante precarios:

> Fue recogido en su totalidad, fundamentalmente en los años noventa, cuando tuvo ese fenómeno de expansión las milicias urbanas (…). Hubo una proliferación tremenda, pero esto se salió de control. Se salió de control al punto pues de que, se conformaban milicias y eran unas organizaciones delincuenciales del lumpen, (…) y muchachos consumiendo vicio, drogas, secuestrando niños. (…). El ELN terminó recogiendo esas milicias. Sobre todo, las milicias urbanas en Medellín. Las milicias que se promovieron en Barranca, en su mayoría todas terminaron en el otro bando, huyendo o dándole información al enemigo. Esto sobre todo por cimiento y por

62 Denominación del operativo militar que tuvo lugar bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en la ciudad de Medellín, con el objeto de recuperar el control de la Comuna 13. En esta operación se conjugaron fuerzas del Ejército, Policía Nacional y Fuerza Aérea, con algunos elementos de las AUC. El objetivo era acabar con las milicias de las FARC y el ELN. Se habla que el operativo arrojó como saldo: 80 civiles heridos y 17 homicidios cometidos por la fuerza pública; 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias (*Agencia de Prensa*, 2018).

> la conformación miliciana, era muy descriteriado. Como no eran una organización de cuadros, como no había un filtro (Entrevista 1).

Estos eventos dejan evidencia de que la estrategia militar fundamentada en secuestros masivos, bloqueos, instalación de campos minados y ciertas emboscadas y combates; y las apuestas implícitas de oxigenarse políticamente y reposicionarse en el tablero nacional de la guerra fueron inútiles para frenar o alterar el retroceso militar que estaba experimentando esta insurgencia. Este reflujo se manifestó en una reducción importante de su pie de fuerza: si para 1998 se calculaba su tropa en 15 000 personas en armas (*El Tiempo*, 2016a), ya en 2005 se estimaba en 4500 personas (Espejo y Garzón, 2005; International Crisis Group, 2007), situación que comenzó a evidenciarse en el lenguaje y el discurso eleno, pues los líderes exaltaban su capacidad de resistencia y tesón frente al contexto adverso (ELN, 2000).

En síntesis, el proceso descrito pone en evidencia seis elementos que condensaban los problemas organizacionales y territoriales del ELN. Primero, la debilidad organizacional, institucional, militar y de los mecanismos de socialización internos y externos, los cuales encuadran su imposibilidad para defender y repeler el avance de las AUC y del Estado en los territorios que ocupaba. Segundo, la calidad de medio tiempo de sus combatientes los hizo vulnerables respecto a las AUC: muchos fueron eliminados cuando se encontraban desarrollando actividades "civiles" o de trabajo político (Ortiz, 2006). Tercero, el agotamiento de su modelo de guerra: la organización no pudo canalizar sus recursos y poderes de forma equitativa para que todos sus frentes dieran el salto estratégico y, como agravante, jamás pudo disciplinar ni direccionar el actuar de sus integrantes de manera efectiva.[63] Cuarto, la fuerte vinculación y dependencia del respaldo social contribuyó para que fuera incapaz de proteger a sus bases sociales de las incursiones paramilitares, pues en ellas cobijaba su aparato armado[64] (Ejército Nacional, 1998e, citado por Ugarriza y Pabón, 2017, p. 252). Quinto, las apuestas armadas y la militarización en las relaciones con los no combatientes generaron fricciones y rupturas con algunos de sus apoyos sociales territoriales, o pusieron en evidencia

---

63 Los mecanismos existentes para alinear a sus integrantes eran débiles y laxos, de ahí que cada vez fueron más frecuentes los casos de milicianos o mandos medios que cayeron bajo fuego enemigo o que cambiaron de bando y lo proveyeron de nueva y rica información para atacarlo. Muchos de estos cuadros y mandos medios dieron este salto para salvar su vida o por simple reacomodo; esto les posibilitó a los bloques "paras" y a las agencias del Estado focalizar el despliegue de violencia y asestar golpes a las estructuras armadas y a los enlaces logísticos elenos.

64 En efecto, esta apuesta de trabajar infiltrando las organizaciones de masas lo único que hizo fue exponer a las organizaciones sociales y a sus líderes a las balas de los paramilitares, pues en los marcos cognitivos de los comandantes de las AUC quedaron integrados los armados y los procesos organizativos de base en un solo imaginario.

la obsolescencia de su orden. Sexto, el petróleo y los secuestros demostraron unas desventajas comparativas frente a la coca.

Todas estas aristas encuadran el retroceso militar y la marginalización elena en el tablero nacional de la guerra. Atrás quedaron los combates, los intentos de toma de pueblos y todo tipo de acción que mostrara una decidida voluntad de emprender acciones armadas para la toma del poder. Y, en adición, revelan por qué fue la agrupación armada que más terreno cedió durante estos lustros (1999-2005).

El repliegue eleno, salvo el frente de guerra oriental, consistió: uno, en internarse en las periferias de las periferias de sus zonas de influencia, para evitar el embate paramilitar y la política de Seguridad Democrática; dos, llevar la guerra a las ciudades; tres, adoptar una postura de conservación de fuerzas; y, cuatro, dedicarse al trabajo político y de infiltración de los procesos organizativos, es decir, persistir en la idea de construcción de poder popular y de infiltración, de acuerdo a los marcos cognitivos de cada frente de guerra que registra la tabla 3 (ELN, 2004, pp. 1-15). Así, quedó en el pasado toda acción que mostrara una decidida voluntad por tomar el poder.

Prueba de este último punto es la preeminencia que adquirieron las minas antipersona, así como las acciones armadas de baja intensidad que demandan pocos recursos materiales y humanos, como son la instalación de artefactos explosivos, los atentados a la infraestructura petrolera o vial, el uso de trampas, etc. Es por ello que en las cinco áreas de estudio que aborda este libro, así como en la información que circula a nivel nacional, se registra un incremento importante, desde el año 2002, en el recurso de esta insurgencia a la instalación de minas antipersona y un significativo descenso en sus acciones bélicas, tal como lo muestran las gráficas 7 y 8.[65]

---

65 Si bien las estadísticas y tendencias departamentales pueden dar pocas luces sobre las dinámicas locales, estas inercias quedan confirmadas con los registros municipales, pues el incremento de la instalación de minas, así como la detonación de estas, tuvieron lugar en las zonas donde el ELN se recluyó por estos años. Para los años 1999-2009, los lugares donde mayor registro de minas hubo fue en Arauca, concretamente en Tame, Arauquita y Saravena, con el 84% del total de la muestra. Esta concentración se explica por dos procesos: uno, la estrategia contrainsurgente que enfrentó el ELN en esta parte del país, con los planes de consolidación y un importante despliegue de pie de fuerza del Estado; y, dos, la interacción armada que tuvo esta guerrilla con las FARC. En el caso del Catatumbo, los municipios con mayor registro de minas fueron Teorama, Convención, San Calixto y El Tarra, zonas donde no solo se recluyó el ELN por el embate paramilitar, sino que llegaron a tener 435 minas antipersonales del total de la subregión. En esa misma tendencia se inscriben también Cauca-Nariño, en el territorio denominado el Macizo, pues las zonas donde se recluyó el ELN fueron objeto de un proceso sistemático de instalación de minas. En esta subregión, quizás, el caso más emblemático es el de Samaniego, por haber sido muy documentado por la prensa nacional (*Verdad Abierta*, 2009), pero también están los Andes, Ricaurte, Cumbitara, Cumbal y Santa Cruz (Nariño), donde el ELN le estaba haciendo resistencia al avance paramilitar y la entrada de las FARC al Pacífico nariñense. Igual situación

Tabla 3. Cambios en el despliegue, las modalidades, las funciones y las formas de construcción del ELN, 2004

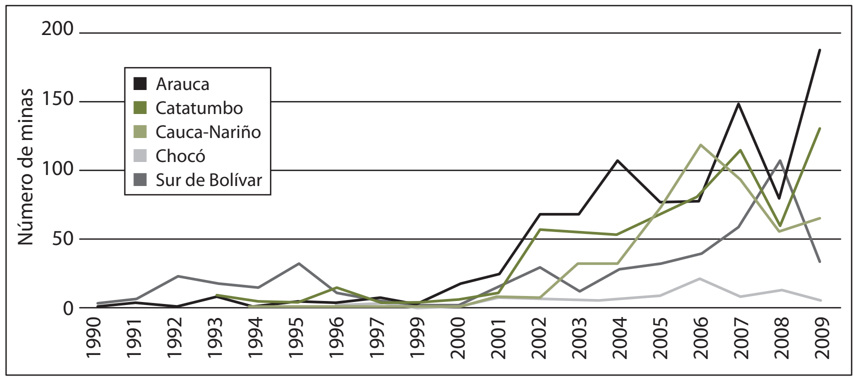
Denominación del plan o estrategia	Directrices
Doble acción	Encomienda a los frentes de guerra continuar con las tareas político militares tradicionales, de acuerdo con el sexto pleno de la DN. Además, trabajar sobre los mandos y combatientes para que hagan suyo este doble cambio y desaprendan las costumbres inapropiadas.
Presencia diluida, normalizada y móvil (PDNM)	Recomienda tener una "guerrilla invisible" en el territorio. Para eso se estipula hacer presencia con unidades guerrilleras pequeñas, con armas no visibles y sin uniformes. Asimismo, importante movilidad y continuar con el trabajo político camuflándose entre los civiles. Textualmente se lee: Para ello se requiere que su manera de vivir y de actuar sea lo más normal y natural en el escenario urbano. La presencia diluida es clave en la actuación política y militar en la ciudad, pues no se trata de esconderse, sino de actuar y vivir de tal manera que no seamos detectados.
Despliegue territorial amplio	Esta idea parte del supuesto de que el despliegue territorial depende de la ampliación de los espacios de formación, los cuales estarán en cabeza de los mandos sobresalientes de cada estructura, con el fin de capacitar, reentrenar y promover los mandos medios buscando así ampliar su red de despliegue (capacidad de incidencia) en los territorios.
Retaguardia secreta	Las retaguardias de las estructuras armadas deben ser secretas y la tropa móvil, sin fijarse al terreno, sin perder una base de operaciones para mantener los servicios y apoyos que ella suministra.
De "afuera para adentro"	Estipula que debe haber una coordinación y conexión entre los frentes rurales y urbanos, para la acción y presencia de la guerrilla, y volver a hacer presencia en las zonas suburbanas. Pide buscar construir zonales con militancia clandestina de base, insertados en las actividades y luchas populares.

sucedió en algunas subregiones del Cauca y Valle del Cauca, donde el ELN se había replegado por sus derrotas militares. Así, para defender sus dominios territoriales de los paramilitares y de las FARC, el ELN se dedicó a sembrar estos artefactos explosivos en El Tambo, Patía y Argelia, municipios que suman el 29% del total departamental (figura 9). En Chocó se replicó la misma tendencia, ya que la presencia de minas se focalizó en zonas donde el ELN se había replegado desde Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca. Tales son los casos del Carmen de Atrato, San José del Palmar, Nóvita y Sipí, los cuales registran el 40% del total de las minas (figura 9). Finalmente, en el sur de Bolívar, los municipios de Santa Rosa del Sur, Cantagallo y San Pablo concentraron el 23% del total departamental, algo que no es casualidad, pues el ELN se había replegado hacia las zonas más altas de estos municipios, por estar ubicados en la serranía de San Lucas (figura 9).

Denominación del plan o estrategia	Directrices
Nueva modalidad operativa	De acuerdo a las experiencias de años pasados, se estipuló un nuevo manual contentivo de la modalidad operativa y la manera en que se desarrollarán los próximos reentrenamientos de toda la fuerza.

Fuente: ELN (2004).

Figura 9. Minas antipersona en el tiempo por departamentos, 1990-2009



Fuente: OCHA. Elaboración propia.

Si se analizan con detenimiento este reposicionamiento geográfico y las zonas de trabajo político, sale a la luz que los diversos frentes de guerra se estaban apostando bajo un principio de movilidad constante, en zonas fronterizas vinculadas entre sí a través de corredores estratégicos y que tienen en su interior economías territoriales que generan importantes recursos (coca, oro, coltán, madera, etc.). Basta dar unos ejemplos: la compañía móvil Héroes de Sindagua consolidó su presencia sobre el corredor Samaniego-Tumaco (Nariño); la compañía móvil Capitán Francisco Bossio se asentó y buscó controlar la ruta de la zona central del Catatumbo y la frontera venezolana, cerca de Cúcuta; la compañía móvil Simacota controló el corredor que atraviesa Tame y algunas vías fluviales que conducen a la frontera venezolana (International Crisis Group, 2007); y el frente de guerra occidental se insertó en el Chocó.

Con este apostamiento territorial consolidó un proceso que impactó profundamente la dimensión organizacional del ELN nacional, pues la estrategia adoptada de marginalización y recomposición a través de las economías territoriales explicará, en el futuro mediato, el presente del ELN no solo respecto a la profundización de sus problemas de acción colectiva, sino que, de igual forma, va a enmarcar el reposicionamiento interno del Sol de Oriente, el único frente que no retrocedió en términos de dominios territoriales, ni en apoyos sociales y políticos. Así

las cosas, el hegemón de oriente consolidaba todas las condiciones necesarias para reposicionarse al interior de la organización nacional, y en virtud de ello empezó: a ampliar sus tentáculos e influencia sobre otros frentes de guerra, en otras latitudes del país; a incidir en la balanza de poder y en las instancias de representación nacional, al reconsiderar su postura abstencionista; y a generar el impulso y emergencia de una nueva camada de guerreros territoriales mucho más criminalizados, pero con importantes ínfulas políticas.

Recomposición autonomizada y vinculación con las economías territoriales: las bases de la "resistencia armada", 2006-2009

En este contexto de retroceso militar y marginalización territorial ocurrieron dos eventos importantes, de diferentes escalas, que se interrelacionaron entre sí. Uno, el IV Congreso "Por un Nuevo Gobierno de Nación, Paz y Equidad" (2006), en el cual se dieron una serie de lineamientos militares y organizacionales que repercuten en su actual naturaleza; dos, unas interacciones armadas y ciertos pactos territoriales que fueron concretando el ELN con otras organizaciones armadas.

Las discusiones y los acuerdos para el IV Congreso giraron en torno a la paz, la estrategia y la táctica armada, y las nuevas fuentes de financiamiento. La paz generó la misma división de siempre y explica lo truncos que fueron los diálogos con el gobierno Uribe (2002-2010). Francisco Galán fue relevado de su cargo por condenar la lucha armada y nunca pudieron establecer un consenso claro sobre las bases para sentarse a dialogar:

> En el comando central hay contradicciones internas, está dividido y no estoy de acuerdo con muchas de las alternativas que plantean. Las diferencias son por la posibilidad de dialogar o no con el gobierno Uribe, la validez de seguir en la guerra, los mecanismos para encontrar verdad, el fin o no de los secuestros e incluso sobre qué se entiende por un verdadero cambio democrático. (*El Tiempo*, 2008).

En la estrategia y táctica, lo más destacable fue la adopción de la idea de resistencia armada (ELN, 2006a; entrevista a comandante José del Carmen, en *América Libre*, 2009, p. 68; ELN, 2009), la cual muestra la pérdida de toda perspectiva de toma del poder, las disonancias cognitivas y los tiempos surrealistas que sustentaban el voluntarismo armado eleno:

> Resistir no siempre es pelear. Ni confrontar. Puede ser simplemente ocultarse en medio del follaje o de la vida y sobrepasar el momento de la aniquilación, recuperándose para poder existir y continuar. Se puede pelear por momentos, mimetizarse otros, difuminarse y no ofrecer líneas de encuentro ni puntos de confrontación. La resistencia tiene que ver con la resiliencia, con la fortaleza para soportar la fuerza del otro sin rendirnos,

> para convencer a otros en el camino. (ELN, Colombia Rebelde, Revista internacional del ELN, Edición 5, agosto-octubre / 2013).

Bajo esta premisa posicionaron como prioridad los espacios urbanos (donde está concentrado el poder político), porque la ruralidad se había despoblado. Para esto, en el IV Congreso crearon el frente de guerra urbano nacional (FGUN)[66] con el objeto de coordinar las milicias, realizar ataques de alto impacto y apoyar a la movilización social, bajo una táctica diluida para mimetizarse en las organizaciones sociales. En palabras de un comandante del frente de guerra oriental: "Que nos clandestinicemos, que nos diluyamos. Pero corrijo: que no se entienda que desaparece el ELN. Diluirnos, meternos, mimetizarnos, para que nuestra política fluya, al interior de la lucha campesina, al interior de la lucha estudiantil, de los obreros" (ELN, 2009).

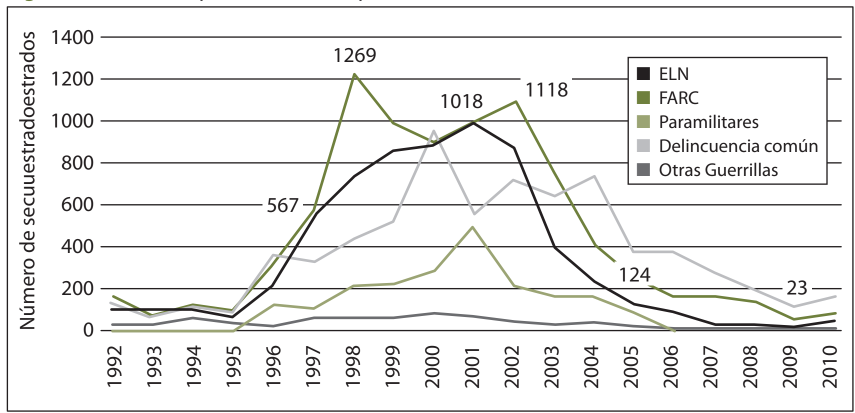
Finalmente, el tema de las fuentes de financiación, principalmente la coca, derivó en una fuerte controversia por el evidente involucramiento de algunas estructuras con esta economía, a pesar de la directriz prohibicionista del COCE (Bonilla, 2014), poniendo de manifiesto una ampliación del portafolio tributario, la pérdida de peso del petróleo y el secuestro como fuente de financiación (figura 10). Las palabras de "Gabino" recogen las fricciones y tensiones generadas por el tema:

> Este Cuarto Congreso Nacional del ELN (…) reafirma la política de deslinde con el narcotráfico. No estamos ni hemos estado comprometidos en rutas, laboratorios, comercialización ni lavado de activos. Dentro de la política tributaria del ELN, que se aplica a todos los sectores económicos del país, en las áreas en donde haya cultivos de uso ilícito, nos seguiremos limitando al recibo de impuestos, establecidos en acuerdo con las comunidades productoras. (ELN, 2006a p. 53).

---

66 Sus integrantes debían ser propiamente urbanos, y respondería a un proceso de cuatro fases: 1. conformación de organizaciones fuertes, estables y sostenibles, a partir de un trabajo en la legalidad, la construcción de una agenda política y el posicionamiento en barrios o sectores sociales y políticos; 2. un ejercicio de radicalización de esas bases sociales para que contemplaran el uso de la violencia como medio legítimo; 3. la formación militar de estos cuadros; y 4. la formulación y puesta en marcha de una estrategia de guerra.

Figura 10. Secuestros por actor en el tiempo, 1992-2010



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

Sin embargo, a pesar de este discurso, la importancia que estaba adquiriendo la economía cocalera en algunos frentes permite entender que, si bien la postura prohibicionista se ratificó a nivel nacional (ELN, 2006f), los diversos elenes la acataron a discreción (Millán, 2011; Vargas et al., 2011; Núñez y Vargas, 2013; Echandía, 2015), pues las estructuras del Catatumbo, Cauca y Nariño, como se aprecia en la gráfica 10, se involucraron en el negocio más allá de la simple tributación del cultivo o gramaje (Aponte, Arboleda y Barrera, 2016; ver el capítulo de Daniel Amaya).

Ahora bien, las vinculaciones de los frentes con la coca variaban y basculaban de acuerdo a sus anclajes sociales y las dinámicas territoriales de sus áreas. En un extremo estaba el Domingo Laín, el cual mantuvo su postura prohibicionista y radical de no involucrarse con la coca, en lo cual tuvo que ver mucho su interacción armada con el frente XXX de las FARC, como se describe más adelante. En un ala intermedia estaban las estructuras de Chocó, Cauca y Sur de Bolívar, que se relacionaron de manera tangencial, de acuerdo a sus posibilidades y alianzas con otros actores armados, con el cobro del gramaje. Y, finalmente, un grupo que se empezó a meter de lleno en esta actividad regulando cultivos, las etapas de transformación y ofreciendo seguridad a las rutas de Nariño y Catatumbo.[67]

67 Para ampliar esta información, consultar los capítulos de Daniel Ricardo Amaya; Charles Larrat-Smith; Andrés Aponte y Valentina González; y el de Juan Diego Forero y Daniel Amaya. Igualmente, el texto de Guarín, Celis y Velandia (2018).

Figura 11. Hectáreas de coca en el tiempo, 1999-2009

Fuente: OCD. Elaboración propia.

La ampliación del portafolio tributario eleno no se limitó a la coca. Poco se habla, dentro de los estudios que abordan y analizan el conflicto armado colombiano, del papel que tienen ciertas economías territoriales legales (extracción maderera, agricultura, comercio, etc.) o semilegales (minería, prostitución, mototaxismo, préstamo gota a gota, entre otras) en la financiación de la guerra.[68] Por ejemplo, el ELN capta recursos con su regulación y control de los yacimientos auríferos en Chocó, sur de Bolívar y bajo Cauca; de la explotación carbonífera en Catatumbo o de coltán en Guainía, Vichada y Vaupés (*Semana*, 2009b; Amaya y Ortega, 2019; Aponte, Arboleda y Barrera, 2016; también ver el capítulo de Daniel Amaya, y el de Juan Diego Forero y Daniel Amaya). Lo mismo hace con la extracción maderera en Chocó (ELN, s.f.a); en Catatumbo tiene un rol importante en la comercialización de gasolina ilegal (*pataegrillo*) en zonas cocaleras, e incluso regula y controla las rutas y trochas de migrantes y contrabando que comunican el territorio venezolano con el nacional (ver los capítulos de Andrés Aponte y Valentina González; Daniel Amaya; y Juan Diego Forero y Daniel Amaya). Y, en Arauca, tiene tal músculo tributario que le permite exigir un gravamen sobre los pasos fronterizos para el contrabando de víveres y la llegada de migrantes venezolanos, lo mismo que sobre la producción agrícola, el comercio, etc. (ver capítulo de Charles Larrat-Smith).

El comandante "Uriel" patenta esta diversificación en el portafolio tributario, en una entrevista concedida a *Contacto*:

> Si en un territorio hay ganado, minería, madera, gran comercio, transporte o las diferentes etapas de la producción de coca, cobramos impuestos sin distinción. La legalidad o ilegalidad de cada actividad es una

68 Una excepción es el trabajo de Angelika Rettberg, Ralf J. Leiteritz, Carlo Nasi y Juan Diego Prieto (2018).

> definición circunstancial y conveniente del Estado que consideramos corrupto e ilegítimo. (Carvalho, 2020).

En cierta manera, la ampliación descentralizada y autonomizada del portafolio tributario de los frentes les representó un gana-gana. A la vez que obtenían mayores recursos, pudieron ampliar su base social, al ser unos agentes tramitadores y garantes de los problemas propios de estas actividades económicas, debido a que establecieron unas reglas de juego claras en torno a la convivencia, la explotación y la comercialización. El comandante "José del Carmen" señala de forma aguda este proceso, al vincular este rol bienestarista a la idea de construcción de Poder Popular. La siguiente cita resulta crucial porque sintetiza tanto la mentalidad como el enfoque del ELN en la coyuntura reciente, al presentar la construcción conjunta, con la comunidad, de normas guerrilleras y comunitarias como "embriones de Estado", para regular la convivencia:[69]

> Que no hemos logrado máximos objetivos, eso es real, pero sí que hay expresiones de liberación, hay expresiones de socialismo en nuestras economías, (…). Hemos ido construyendo normas, normas comunitarias, normas guerrilleras. Entonces, es un proceso en el cual debemos seguir manteniendo esos embriones de liberación, de sociedad alternativa, de nuevos gobiernos. Porque también hemos legislado. Y cuando me refiero a que hemos legislado, no me refiero al ELN, sino al proceso que hemos venido construyendo donde estamos. Con las comunidades, (…), hemos legislado normas de convivencia, incluso códigos de la guerra…" (Entrevista al comandante José del Carmen, en El Colectivo-América Libre, 2009, p. 88).

Esto se compaginaba perfectamente con lo aprobado en el IV Congreso (2006), ya que no solo les permitía infiltrar las organizaciones sociales y potencializarlas según sus marcos cognitivos, sino que les proporcionaba un componente militar indispensable para evadir el poder de fuego del Estado. No obstante, esta línea gris entre civiles y armados tuvo unas consecuencias importantes, en términos de estigmatización e impacto humanitario, para sus integrantes y representantes en las regiones donde el ELN tiene presencia. La anterior cita es también reveladora porque muestra, de acuerdo a los marcos cognitivos de los líderes nacionales, el momento de adopción de la idea de resistencia armada, bajo los esquemas señalados, para mantener la vigencia de su lucha armada.

De otra parte, Arauca fue la otra zona donde el ELN fue blanco de la política de Seguridad Democrática, porque tenía un alto grado de control territorial, un importante poder de fuego y unos apoyos sociales

69 La siguiente cita resulta crucial porque sintetiza tanto la mentalidad como el enfoque del ELN en la coyuntura reciente, al presentar la construcción conjunta, con la comunidad, de normas guerrilleras y comunitarias como "embriones de Estado", para regular la convivencia.

sólidos (Larratt-Smith, 2018; Gutiérrez, 2012). Para diezmar este bastión el Estado desplegó diversas acciones militares como la Operación Dignidad,[70] una serie de acciones judiciales (*Semana*, 2003) y el Plan de Consolidación[71] (*El Tiempo*, 2002, 2003).

Los resultados de esta estrategia son controversiales, como muestra el capítulo de Charles Larratt-Smith relativo al ELN en Arauca: al lado de la supuesta recuperación efectiva del territorio hubo una importante victimización de la población,[72] con detenciones masivas, restricciones a su circulación y poco impulso al desarrollo social (*Semana,* 2002). Esto permitió que el ELN siguiera reinando en el piedemonte araucano, pues la política contrainsurgente refrendó la idea del Estado colombiano como victimario, y como corolario, los programas impulsados no erosionaron las ofertas bienestaristas de regulación guerrillera ni sus bases sociales y materiales (Larratt-Smith, 2016, 2018, 2020; Echandía, 2013).

Y, en cuanto a las relaciones que entabló el ELN con otros actores armados, estas variaron dependiendo de los factores endógenos y las percepciones en los balances de poder, desde el establecimiento de acuerdos tácitos, pasando por alianzas, hasta confrontaciones directas; todas ellas respondieron a su relación con las FARC en los escenarios territoriales, en específico a la competencia que desarrollaron por el control de población, recursos y territorios.

En Cauca (2007), la compañía Milton Hernández se alió con los Rastrojos para controlar la economía cocalera en detrimento del frente VIII de las FARC, alianza que funcionó entre 2006-2009 (*El Tiempo*, 2007). Lo mismo sucedió en el piedemonte y el andén del Pacífico nariñense[73] (International Crisis Group, 2007, 2014; Ávila y Núñez, 2013; Fundación Paz y Reconciliación [Pares], 2013; Guarín, Celis y Velandia, 2018), pues la inserción de las FARC produjo varios roces armados que se buscaron evitar con un acuerdo de repartición territorial entre las dos guerrillas (Entrevista 8; ver capítulo de Daniel Amaya). Sin embargo, este fue muy inestable por el involucramiento de los elenos con la coca (figura 11) y la alianza con sus

---

70 Nombre de las dos redadas del ejército en el 2003, en Arauca. La primera en la tradicional feria de exposición agropecuaria, donde fueron sorprendidas por unidades militares más de cuatro mil personas que luego se comprobó que no tenían vínculos con el ELN. En octubre de ese mismo año se dio otra redada contra candidatos a las elecciones regionales y contra funcionarios públicos del nororiente del país.

71 Este fue una estrategia contrainsurgente que se desarrolló en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Con esta quedaron focalizados cerca de 27 municipios de los departamentos de Arauca, Bolívar y Sucre. La idea de este plan era recuperar socialmente el territorio, romper los corredores de movilidad que tenían las insurgencias y acabar con su accionar en materia armada y de extracción de recursos.

72 El ELN se retiró a zonas de difícil acceso y el Estado ganó presencia en las cabeceras municipales de Arauquita, Saravena, Arauca y las principales vías.

73 Las disputas acá eran por los cultivos de hoja de coca y las rutas del narcotráfico.

supuestos enemigos ideológicos (*Semana*, 2009a). Las trayectorias en cada localidad variaron: en el Cauca, el ELN ganó la guerra y se hegemonizó en zonas de El Tambo y las áreas circundantes (ver capítulo de Daniel Amaya); en Nariño, la historia fue otra: el ELN fue derrotado y adoptó una postura de marginalización, replegándose a Samaniego[74] (*Semana,* 2007).

En el Catatumbo la confrontación se dio de forma indirecta, a través de las organizaciones sociales sobre las que influían tanto las FARC como el ELN. Fueron recurrentes los casos de victimización de algunos líderes sociales, de acuerdo a su filiación organizativa (ver capítulo de Henry Ortega; Entrevista 9; ELN, 2006b). Finalmente, el caso más emblemático es el de Arauca por la intensidad que adquirió la espiral violenta: si bien buscaron evitar la confrontación, la muerte de "el Che", viejo combatiente y miembro del estado mayor del décimo frente de las FARC, y el señalamiento de las FARC al ELN de tener contactos con el ejército y los paramilitares para combatirlas, desató la guerra entra las dos guerrillas (FARC-EP, 2007; *El Tiempo,* 2007a).

Luego de años de confrontación, que tuvieron como vencedor al ELN, los dos grupos realizaron un pacto local de paz que se replicó a nivel nacional, en las áreas donde estas guerrillas confluían (Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo y sur de Bolívar). El objeto era aprovechar las fortalezas de cada organización,[75] aumentar las fuentes de financiación y realizar acciones armadas contra la fuerza pública (*Verdad Abierta*, 2011a). De acuerdo con un comandante fariano desmovilizado, "si se pudo hacer la paz en Arauca, donde corrieron ríos de sangre, en otras zonas del territorio nacional la cuestión era mucho más sencilla, porque no tuvo las magnitudes ni las dimensiones del Sarare" (Entrevista 10).

La paz quedó sellada con una repartición territorial clara,[76] y un manual de convivencia que integró las matrices y marcos cognitivos de cada grupo a la hora de ordenar y regular dimensiones y ámbitos de la vida cotidiana:[77] porte de armas, temas ambientales y productivos, economías ilícitas, etc. (ELN/FARC-EP, 2013).

---

74 Luego de haber asesinado a "Ramírez", jefe del octavo frente de las FARC, en una aparente trampa, estas respondieron con todo: realizaron una emboscada a un grupo del ELN en la región del río Mira (Nariño), donde dieron de baja a cuatro guerrilleros, incluido "José Luis", uno de los más respetados jefes de ese grupo, con lo cual esta guerrilla perdió la guerra en esta parte del país.

75 Concretamente, la capacidad militar de las FARC, conjugada con la influencia social del ELN.

76 El ELN se ubicaría en los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y Arauca en el norte, mientras que las FARC quedaron con el control de la zona sur, comprendida por los municipios de Tame, Puerto Rondón, el sur de Arauca y Cravo Norte.

77 Es más que perceptible en el manual conjunto, la preocupación de la comandancia del ELN por regular ámbitos de la vida cotidiana de los civiles de acuerdo a las habilidades y experiencia de cada organización guerrillera. Las espacios que señalaban eran: las normas de convivencia, los cultivos ilícitos, las prácticas religiosas, los temas ambientales o temas relacionados

Tabla 5. Definiciones de las pautas de trabajo político y relacionamiento con las masas, establecidas en el Manuel de Convivencia del ELN y las FARC en Arauca

Dimensiones	Descripción
Comportamiento con las masas	• Todo comportamiento de la guerrillerada debe partir de los intereses del pueblo. • Respeto por la cultura y autonomía de los pobladores: campesinos, indígenas y otras minorías étnicas. • Ni impedir ni obligar al ejercicio de votar. • Mantener la postura de denuncia frente al actuar de la fuerza pública. • Prohibición del asesinato de pobladores. • Aplicación del DIH por parte de mandos y combatientes. • Cada organización guerrillera procesa a sus militantes. • Los ajusticiamientos solo pueden ser por delitos graves y previa aprobación de la dirección de cada organización. • Prohibición del consumo de drogas, el exceso de alcohol y el robo.
Normas éticas para la unidad	• Aplicar el principio de unidad en pro de la revolución. • Fomentar el respeto y la camaradería entre las organizaciones. • En eventos de formación y en las escuelas se deben mostrar los aportes de cada organización en el trabajo revolucionario. • No hacer campañas de proselitismo ni reclutamiento a costa de la otra. • No ser parcializados en la administración de justicia. • El trabajo político no debe lesionar los intereses del otro. Ninguna organización puede ni debe decidir sobre la vida de militantes o combatientes de otra organización.

Fuente: elaboración propia con base en ELN/FARC-EP (2013).

¿Qué revelan todas estas luchas locales y regionales por ciertos territorios entre estas dos guerrillas?

Tres cosas. Una, el solapamiento entre sus jurisdicciones generó tensiones entre las comandancias regionales y nacionales, porque cada organización imponía y ejercía un tipo de gobierno y orden que terminaban por competir entre sí en temas de extracción de recursos y tributación, y el tipo de normas y reglas que debían seguir los pobladores. Dos, diferencias cognitivas, organizacionales y en el accionar armado. Y, tres, el malestar de la comandancia fariana con el ELN, porque este manejaba varios registros en las relaciones con las FARC: mientras decía combatir al Estado a su lado, a la hora de la verdad le dejaba a las FARC todo el peso de la guerra; y, como corolario, el ELN mantuvo ciertas comunicaciones con las fuerzas del Estado para golpear a su enemigo de forma indirecta (Entrevista 17; *Semana*, 2009). Según Manuel Marulanda Vélez:

con el uso y usufructo de la tierra, y asuntos relacionados con las masas y el trabajo político (ELN/FAR-EP, 2013).

> La estrategia según la concepción ideológica y política de cada organización por falta de acuerdos permanentes e intercambios de opiniones sobre la actualidad política, donde cada que sea necesario nos digamos verdades para mejorar nuestros métodos de trabajo, trae malas interpretaciones de acciones militares en áreas del vecino; diálogos oficiales sean ellos buenos o malos si su aliado no tiene conocimiento cabal del enfoque de lo que realizó el otro, reclutamiento en áreas de ambas organizaciones despierta celos, igual cosa ocurre con finanzas, la organización de masas, la compra de armas (…), siembra de minas en todas partes, trabajo internacional no para difundir sus programas sino para sindicar a la otra organización, (…), hurto de ganados a campesinos en sus áreas, retención de amigos y de vehículos, el puritanismo contra los campesinos cultivadores de coca, los cobros de impuestos por ambas organizaciones a una misma persona, el cuestionamiento a normas internas de las FARC; los acuerdos efectuados entre jefes de frentes de las FARC y frentes del ELN al cabo de varios meses son desconocidos por quienes deben reemplazar un Mando; cuando la situación militar en una región es grave donde viven ambas fuerzas el ELN desaparece del área con el argumento de preservar su fuerza (FARC-EP, 2005).

Lo narrado hasta acá permite interpelar a quienes señalaron, en la pasada década, que el ELN estaba o terminaría subordinado a las FARC, por el simple hecho de que había una coincidencia territorial o porque realizaban operaciones conjuntas (Vargas et al., 2011). Lo que expone el relato realizado es que por estos años se dieron una serie de acuerdos tácitos y concretos en algunos territorios, para operar de forma conjunta en materia militar, política y económica, nada más (*El Tiempo,* 2006). Según Antonio García:

> *El Colombiano: ¿Cómo están las relaciones Farc-eln? Algunos analistas dicen que las Farc en ocasiones impiden que el eln haga un acuerdo de paz...*
> Antonio García: Cuando las situaciones operativas lo permiten tenemos buenas comunicaciones entre las Comandancias nacionales, y en algunas regiones mantenemos coordinaciones a nivel político y militar. Es elemental que en política todos interactuamos, (…), eso no quiere decir que el ELN esté supeditado a FARC. Ambas organizaciones somos autónomas y soberanas (*Colprensa*, 2005).

Otra posición por interpelar es que, dado el declive militar eleno y su marginalización en el tablero nacional de la guerra, algunos analistas llegaron a afirmar que esta insurgencia estaba *ad portas* de su fin. Sin embargo, como bien señalan Aguilera (2006) y Vargas et al. (2011), los efectos de este tipo de acciones no se mostraron lo suficientemente contundentes como para provocar la desarticulación de sus mandos y las estructuras político-militares.

Las cifras de desmovilización, capturas y muertes revelan su capacidad de adaptación y recomposición. Sumadas las capturas, deserciones,

dadas de baja, etc., el ELN ya sería una agrupación extinta, pues para el 2001 reportaba entre todos estos guarismos más de 4000 personas y para 2010 más de 5000. En total, en menos de 10 años, esta guerrilla según datos oficiales sufrió 9000 bajas (Vargas et al., 2011). No obstante, para 2009 se calculaba que tenía presencia en trece departamentos del territorio nacional (Arauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Nariño, Cauca, etc.), desde los cuales sus estructuras se empezaron, lentamente, a reposicionar en las zonas periféricas donde solían estar presentes, y en nuevas áreas como las zonas fronterizas con Venezuela por la subregión del Catatumbo o en la frontera con Arauca; en partes del bajo Cauca antioqueño y del piedemonte nariñense (La Llanada); o en zonas del Cauca y Chocó (Vargas et al., 2011; Núñez y Vargas, 2013; Aponte, Arboleda y Barrera, 2016; Gutiérrez, 2012; también, ver los capítulos de Henry Ortega, de Daniel Amaya y de Charles Larrat-Smith).

El inicio de este período estuvo marcado por un ELN moribundo que, paulatinamente, gracias a las decisiones de su comandancia, se recluyó en las periferias de sus periferias para evitar la embestida paramilitar y los planes contrainsurgentes del Estado colombiano. Con el paso del tiempo, el ELN le supo encontrar "la comba al palo", pues configuró un clima favorable para su recomposición. Este lento, pero consistente proceso de adaptación y restauración, se explica por la combinación de varios factores como los pactos territoriales con las FARC después de ciertas interacciones armadas, el hecho de que casi toda la artillería del Estado se dirigiera contra los farianos; y la diversificación en su portafolio tributario: coca, minería, extracción maderera, control de pasos fronterizos, etc.

Este proceso de recomposición mediante la marginalización territorial y la vinculación con las economías territoriales les permitió a sus estructuras armadas, concretamente: (i) desarrollar y profundizar su trabajo político (*poder popular* en su jerga) en las periferias de sus periferias; (ii) ganar poder político y ampliar su base social, al darle orden y trámite a los problemas derivados de esas actividades económicas, y con la atención y gestión de los problemas de la vida cotidiana de los pobladores de estos espacios; y, (iii) finalmente, recomponer sus estructuras armadas.

Ahora bien, este proceso tuvo su revés porque no todo fue virtuoso. La falta de conexión de los frentes de guerra con el ELN nacional, y la vinculación discrecional de algunas estructuras con ciertas economías territoriales (en concreto la coca) profundizaron sus problemas de coordinación y de acción colectiva. Algunas estructuras territoriales ganaron mayor autonomía frente al COCE y hubo una mayor parroquialización de sus apuestas armadas, pues cada vez respondieron más a sus lógicas territoriales que a las nacionales. En efecto, el debate en torno a la coca y el tipo de estrategia armada, la cual enfrentó a dos sectores: el tradicional

de "Gabino", Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, etc. vs. una nueva camada de guerreros con raíces sociales y una maduración ideológica distinta, son las mejores evidencias (Hernández, M., 2006).

Así, todos estos elementos explicarán en el futuro mediato el ELN del presente: una guerrilla federalizada dominada, de hecho, por su frente relativamente hegemónico, a través de una nueva generación de comandantes territoriales guiados por sus tentáculos. Ahora bien, que el Sol de Oriente haya adquirido esta preeminencia no quiere decir que se haya llevado a cabo un nuevo proceso de institucionalización que cohesionara e integrara a todos los frentes en una sola organización tipo FARC. Como veremos adelante, cada frente de guerra continuó más arraigado a sus lógicas territoriales que al ELN nacional, y esto explica que los elenes regionales tengan capacidades diferenciadas de ordenamiento y una vinculación, igualmente variada, con las economías territoriales.

Justamente, esto lleva a considerar que esta guerrilla empezó por estos años a funcionar como un paraguas ideológico, que vincula distintos reclamos y reivindicaciones de "sus organizaciones sociales" en torno a la forma como el Estado las ha integrado y vinculado a la vida nacional. Por lo tanto, en el último período nos toparemos con una organización nacional mucho más compleja, más descentralizada y más variopinta.

¿Hacia un nuevo ELN? ¿Adiós a los guerreros y a las bases fundacionales?, 2010-2019

> "Ese personaje [en referencia a "Pablito"] lo que le da al ELN es una mayor cohesión en términos de unidad de mando y una mayor consistencia para la toma de decisiones en el ámbito de un posible proceso de paz." (*Verdad Abierta*, 2015b)
>
> "Hoy se estima que el 60 por ciento del ELN está bajo el mando militar" (Medina, 2019a).

Este último período refrenda el argumento general de este estudio y abre las puertas a las lecturas territoriales de las zonas donde el ELN hace presencia en el presente: Arauca, Catatumbo, Cauca-Nariño, Chocó y Sur de Bolívar.

Al inicio de este corte temporal, a pesar de que el foco de la opinión pública estaba posado sobre las FARC por las negociaciones de La Habana (2012-2016), el contexto nacional fue bastante fructífero para el ELN, porque emprendió un proceso de reacomodo y expansión territorial tras bambalinas. Justamente, los tiempos de paz enmarcan las dinámicas territoriales donde ha mostrado una mayor vigorosidad militar e impulsos expansionistas, ya que en su mayoría son áreas de antiguo dominio fariano, las cuales tenían la particularidad de ser adyacentes a sus

dominios; basta ver los casos de Antioquia, Chocó, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y Cauca, entre otros.

Para algunos, este repunte militar estuvo relacionado con el interés del ELN nacional de visibilizarse y de presionar su inclusión en las negociaciones de paz (2012-2018) con la administración Santos (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2020); a lo que se agregaría que los líderes de esta guerrilla percibieron en esta coyuntura un posible gana-gana para su organización: a la vez que negociaban y se oxigenaban políticamente, sus frentes se expandían territorialmente para copar los antiguos dominios farianos y regular las poblaciones y recursos vinculados a las economías territoriales. Esta apuesta se vio favorecida por los acuerdos previos entre estas dos guerrillas en todas las zonas donde coincidían, ya que la directriz nacional fue un mandato de coexistencia (*El Tiempo,* 2010).

En este clima favorable y distendido (2010-2015), los diversos frentes de guerra elenos se reorganizaron y se fortalecieron; sin embargo, cada uno de estos exhibió trayectorias y lógicas diferenciadas en términos militares, de enraizamiento social y de vinculación con las economías territoriales: algunas estructuras mostraron más una mayor vocación por el trabajo de masas que cualquier otra cosa, porque se dedicaron a "consensuar" las normas comunitarias y a ser una tercera instancia, pero su portafolio tributario continuó siendo acotado. Así, la incidencia y presencia territorial de este ELN se pueden catalogar como fantasmagóricas (ver capítulo de Daniel Amaya).

Una trayectoria análoga experimentó el frente de guerra Darío Martínez. Su escasa actividad militar, por estar replegado en su retaguardia, lo ha hecho casi que imperceptible. En sus lugares de influencia se dedicó a ordenar y a gestionar ciertas economías territoriales (minería y gramaje a la coca) y a hacer algo de trabajo político. En el sur de Bolívar y el bajo Cauca, se mantuvo en las partes altas de la serranía de San Lucas, en la continuidad geográfica que tienen los departamentos de Bolívar y Antioquia, especialmente en El Bagre, Santa Rosa del Sur y Montecristo, entre otros (Echandía, 2013; International Crisis Group, 2017, 2018; ver el capítulo de Juan Diego Forero y Daniel Amaya).

Un camino distinto fue el del frente de guerra occidental, el cual, gracias a su mayor involucramiento con la coca, los recursos obtenidos de la minería criminal y artesanal,[78] y la tala maderera, empezó a figurar de

78 Desde finales de 2008, con la coca y la minería aurífera, la cual tenía importantes precios en los mercados internacionales para inicios de la década (International Crisis Group, 2014). En la actividad aurífera se ha dedicado a establecer cuotas de contribución a los mineros artesanales y de mediana escala. Estos últimos son tributados de acuerdo con el número y tipo de maquinaria introducida ilegalmente en las áreas bajo su control (ver capítulo de Andrés F. Aponte González y Valentina González). Cabe recordar que esta experiencia regulatoria y tramitadora minera del ELN no era una destreza adquirida en ese momento, pues desde los años setenta ha mantenido

forma inédita al interior del ELN y en el Chocó, donde se asentó definitivamente en zonas del alto y medio San Juan, Atrato y Baudó (medio San Juan, El Carmen, medio Atrato, Quibdó y Sipí). La particularidad de este creciente protagonismo, fundamentado en mayor pie de fuerza y modernización de la estructura, ha tenido un lamentable impacto humanitario, exponiendo unos visos criminales y predatorios bastante marcados y una mayor conexión con el Sol de Oriente[79] (Entrevistas 10 y 11).

Un caso intermedio entre Chocó y el suroccidente de Colombia es el del nororiente. Las estructuras de esta área mostraron cierta revitalización militar, una vez descendieron de las partes altas del Catatumbo y se vincularon más con la economía cocalera y otras actividades económicas que se desprenden de la dinámica fronteriza: *pataegrillo*,[80] contrabando, control a los pasos y trochas clandestinas, explotación carbonífera, etc. Con esta labor, ampliaron su base social más allá de los tradicionales procesos organizativos, al incidir y tramitar los problemas que se derivan de ellas (Fiscalía General de la Nación [FGN], 2011; ver capítulo de Henry Ortega).

Finalmente, están las zonas donde las cosas siguieron iguales en términos militares y de ascendencia social y política, como en Arauca. Ahí, el frente de guerra oriental siguió demostrando que era la estructura más fuerte y de mayor protagonismo militar en el tablero nacional con sus acciones armadas: combates, ataques a la infraestructura y convoyes militares (Macías, 2010; *Verdad Abierta,* 2015). Además, ostentaba una amplia e intensiva gama de tributación y control social: gravamen a distintas actividades comerciales legales (ganadería, comercio, transporte, producción petrolera,[81] etc.) e ilegales (contrabando), y, de la misma manera, ha exhibido un amplio control social (Human Rights Watch [HRW], 2020; ver capítulo de Charles Larrat-Smith; FGN, 2013).

Lo descrito atrás se puede visualizar en el mapa 6, siendo los más resaltables los del frente de guerra oriental, el cual se adentra de forma importante

---

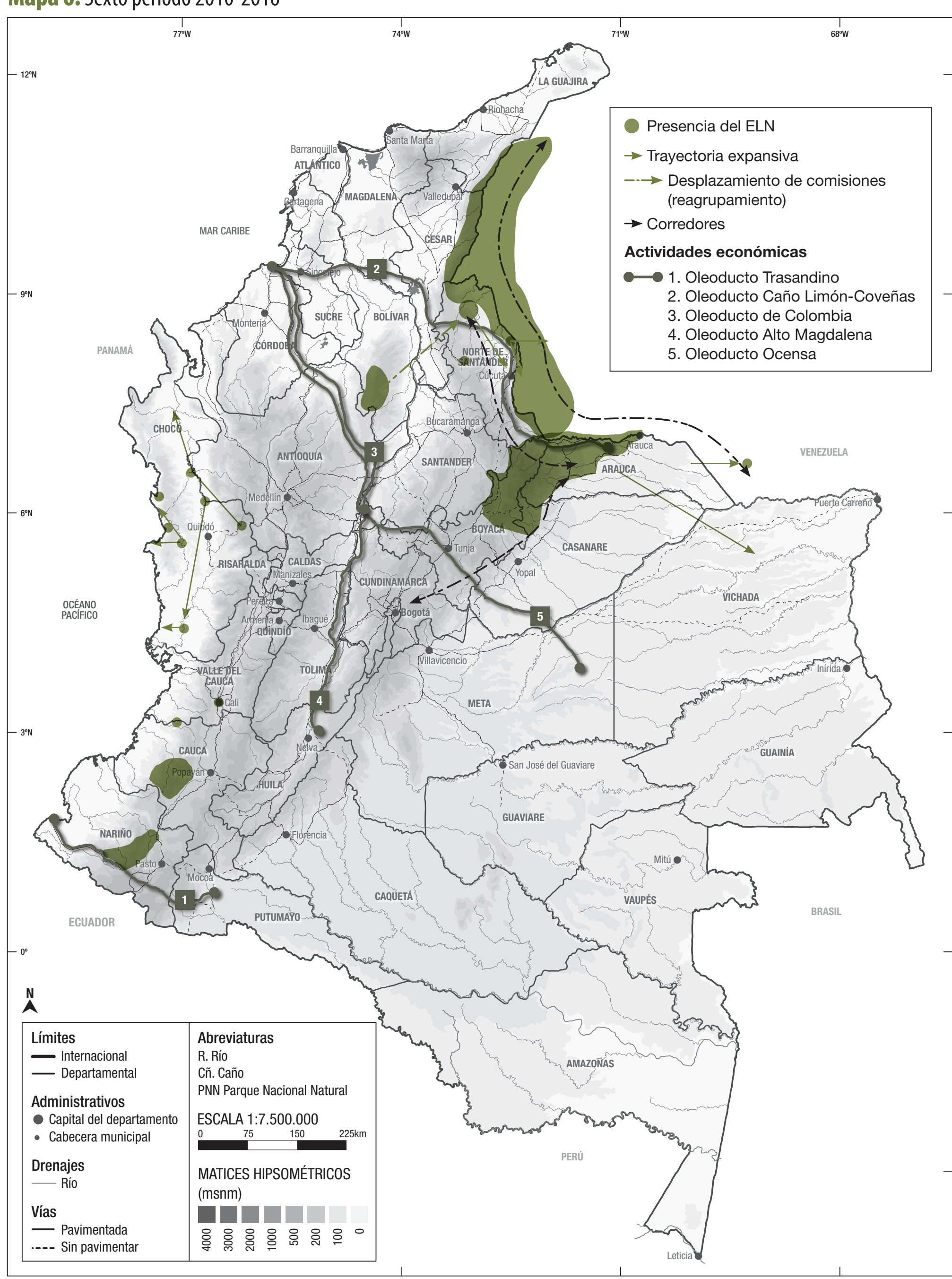
esta práctica en el nororiente de Antioquia y en Santa Rosa, sur de Bolívar, con la mediación en las formas de explotación artesanales existentes en estas áreas, a raíz de los conflictos que se produjeron entre los nativos y los migrantes (Aponte, 2013). Así, se podría decir que el ELN tenía una experticia desarrollada organizacionalmente para ordenar esta actividad, tal y como fue el caso de las FARC con la coca. Por eso, estos grupos fueron exitosos replicando estas técnicas en nuevas zonas donde tenía lugar este tipo de actividades económicas (Aponte, 2020).

79 Se comenta que han recibido armas, combatientes y están aliados en una estrategia de reposicionamiento político y militar al interior del ELN nacional, que trata de vincular al Chocó con los corredores de movilidad que salen desde Arauca, pasan por Santander para llegar al Catatumbo, y de ahí bajan al Magdalena medio (sur de Bolívar) para atravesar el bajo Cauca y finalmente llegar al Chocó y algunas zonas de Antioquia.

80 Gasolina no procesada ni refinada, que se extrae directamente de los tubos que transportan el crudo, y con ella se realiza el proceso de transformación de la hoja de coca a clorhidrato de cocaína.

81 Se comenta que la construcción del oleoducto Bicentenario fue gracias a un acuerdo que se logró con el ELN.

Mapa 6. Sexto periodo 2010-2016



Fuente: elaboración propia, con base en el relato y entrevistas 1, 2 y 22.

en el territorio venezolano; pero también empezó su incursión al sur oriente del país, en zonas del Vichada. Algo análogo, pero con otras magnitudes, es el reagrupamiento y los desplazamientos, que se materializan en inserción de algunas estructuras en nuevas zonas del Chocó. Esta serie de cambios y apuestas van a explicar, en los siguientes lustros, la presencia territorial que tiene el frente de guerra occidental en esta zona del país (mapa 6). Para cerrar, otra de las cosas destacables que visibiliza el mapa 6 es la presencia territorial elena en zonas del sur de Bolívar, nordeste antioqueño y bajo Cauca, la cual se redujo a sus mínimos históricos, al punto que algunas estructuras migraron para el Catatumbo con el objeto de recomponer sus fuerzas y no caer presas de los operativos contrainsurgentes del Estado.

¿Qué revelan estas diversas trayectorias territoriales y cuál es la lógica militar y estratégica?

Uno: este reposicionamiento lento y seguro del ELN, el cual se ha manifestado en una mayor actividad militar, no implica que esta insurgencia se haya tornado nuevamente en una amenaza para la vida nacional. Todo lo contrario, su pie de fuerza, su actuar militar (figura 12) y la refrendación de su idea de resistencia armada en el V Congreso denotan su derrota estratégica y su capacidad circunscrita de desestabilización.[82]

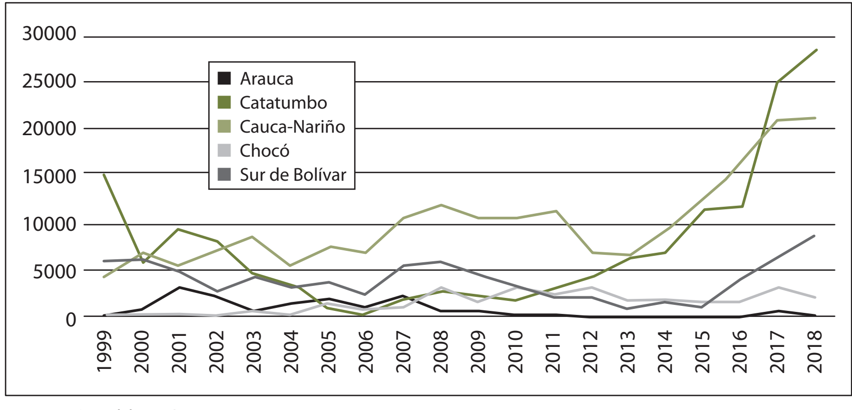
Dos: el proceso de diversificación del portafolio tributario de los frentes de guerra se profundizó. En algunos casos, se confirmaron las tradicionales fuentes de financiación (Arauca, con la extorsión petrolera o sur de Bolívar con la minería); y, en otros, quedó en evidencia el desarrollo de nuevos frentes de extracción de recursos, desde los cuales varias estructuras apalancaron su recomposición. Tal es el caso de la coca, el control de la frontera colombo-venezolana, el *pataegrillo*, el contrabando de víveres, la extracción carbonífera o de coltán, etc. Esto no es asunto menor por dos aspectos: (i) este proceso expone la destreza del ELN para vincularse y catapultarse desde las economías territoriales donde tiene presencia; y (ii) el carácter complementario del portafolio tributario de los diversos frentes (economía cocalera, manejo de fronteras, secuestros, extorsiones, explotación maderera, minería, etc.) con sus lógicas armadas (*El Espectador*, 2016), gracias a

82 La expresión de resistencia tiene una impronta muy clara, lo que no es clara es la forma como esto afecta la relación entre los frentes y el COCE: si cada frente resiste como puede, es prácticamente imposible una acción colectivamente coordinada. Su contenido es bastante claro: es un reconocimiento de su derrota estratégica en el ámbito nacional y de sus limitaciones en ese terreno, que condena a sus estructuras a una presencia en las periferias, que se irá diluyendo a medida que esas regiones se vayan integrando al conjunto de la nación, al lado de acciones esporádicas de terrorismo en el país más integrado, para mostrar que todavía siguen vigentes.

las cuales pudieron recuperar o ganar presencia en municipalidades de siete departamentos del país[83] (International Crisis Group, 2014).

Tres: el papel protagónico que adquirió la economía cocalera en algunas estructuras, a excepción del frente de guerra oriental, fue cada vez más patente (ELN, 2019). Respecto a la postura prohibicionista de este frente se pueden decir dos cosas: una, posee una amplia y sólida base tributaria que le permite prescindir de la coca; y, dos, la experiencia de otras zonas y la guerra con las FARC pudo haberle hecho inferir a sus líderes que esta economía alteraba los patrones de poblamiento, su capacidad regulatoria y el orden implantado en sus localidades.[84] En cuanto a los frentes que sí profundizaron su vinculación con la coca, todos exhiben una relación diferenciada con esta economía. Algunas estructuras solo cobran el gramaje o establecen el impuesto a la hoja de coca; otras llegan hasta la provisión de seguridad a los laboratorios y rutas de comercialización, a veces en forma monopólica y en otras entablando pactos concretos con otros grupos armados (figura 12).

Figura 12. Hectáreas de coca en el tiempo, 1999-2018



Fuente: OCD. Elaboración propia.

83 En Norte de Santander (Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta), La Guajira (Serranía del Perijá), el sur de Bolívar (Simití, Montecristo, etc.) y algunas zonas del norte de Antioquia (Remedios, Segovia), Chocó (Alto San Juan), Cauca (El Tambo y López de Micay), Nariño (La Llanada, Samaniego o Barbacoas) para dar algunos ejemplos.

84 Esta cita confirma tal inferencia:

En el 2007, el F.G.O. define erradicar la coca en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Boyacá y Casanare, en las zonas donde tenemos influencia. Esta iniciativa ha contado con la aceptación de las comunidades campesinas, cansadas de padecer la persecución estatal, y quienes han adelantado la autoerradicación manual. A la fecha del 2010, el 80 por ciento de la coca está erradicada, en el territorio que influencia el F.G.O. (ELN, 2010).

En Chocó, desde 2009, el frente Cimarrón buscó imponer tributación y prestar seguridad a zonas de cultivos o laboratorios (Molina, 2013; Núñez y Vargas, 2013; International Crisis Group, 2014, 2017). En Catatumbo, gracias a los acuerdos entablados con "Megateo", líder del EPL y con las FARC, el ELN quedó encargado de la provisión de insumos químicos para los laboratorios, en especial del *pataegrillo*. Sin embargo, la salida de las FARC del tablero de la guerra (2016) y las ínfulas monopolizadoras del EPL y del ELN detonarán, en el futuro cercano, una guerra entre estas dos insurgencias (ver capítulo de Henry Ortega; PARES, 2020). En el sur de Bolívar, luego de la desmovilización paramilitar (2006) y la repartición territorial con los frentes de las FARC (2011), el ELN convino con las FARC el cobro al gramaje[85] (Díaz, 2012; ver capítulo de Juan Diego Forero y Daniel Amaya; Entrevistas 12, 13 y 14).

En Cauca la situación fue más compleja, pues los acuerdos entablados con "los Comba" para el cuidado de laboratorios en los municipios de Balboa, Argelia y del corregimiento El Plateado, así como de las rutas que se desprenden de esas áreas hacia Tumaco y Buenaventura, llevaron a fricciones tanto al interior del frente como con las FARC (*El Tiempo*, 2012). A las FARC le ganaron la guerra, quedando con el control de Huisito, La Paloma, Playa Rica y el corregimiento San Juan de Micay (El Tambo), al tener mejor acogida por parte de los pobladores (ver capítulo de Daniel Amaya). No obstante, esta victoria fue pírrica, pues la coca generó fricciones al interior del frente por los arreglos hechos con sus supuestos enemigos, que se tradujeron en purgas internas y en la desmovilización voluntaria de Irley Ernedis Collazos Sánchez, alias "el Tigre", presunto segundo cabecilla del frente de guerra suroccidental, quien vio agotadas las perspectivas revolucionarias de esta insurgencia (International Crisis Group, 2014; *Semana*, 2013), como se deduce de los siguientes apartes de la entrevista en *El País* de Cali (2013):

> *El País*: ¿Cómo es la relación de ustedes con el narcotráfico?
>
> Entrevistado: La gente vive de la coca. Los sembrados son de la población, no de la organización. Pero, sí se cobran impuestos por arroba, por kilo.
>
> *El País*: ¿Cuál era la orden en los últimos meses?
>
> Entrevistado: Al interior de la organización se habla lo de la paz. Hace tiempo planteamos la solución política al conflicto. Somos conscientes de que militarmente no vamos a tomarnos el poder.

Estas realidades territoriales contrastan con la retórica del COCE, el cual tampoco se mostró homogéneo y expuso la escasa coherencia organizacional.

85 De acuerdo a información manejada por la policía, la producción minera para los grupos subversivos se traduce en 40 libras de oro semanalmente, lo que equivale a 1600 millones de pesos y un total de 6400 millones mensuales. Esto hace a esta actividad un negocio mucho más rentable que los cultivos de coca (*Semana*, 2014, 2014a)

Las posiciones oscilaban entre un negacionismo que ocultaba retóricamente cualquier involucramiento con el narcotráfico y una postura pragmática que justificaba el cobro del gramaje. La primera, representada por Rafael Sierra Granados, comandante "Ramiro Vargas", se resume en estos apartes:

> Un elemento central de nuestra política es el DESLINDE CATEGÓRICO CON EL NARCOTRÁFICO. Se entiende por deslinde LA PROHIBICIÓN a la militancia elena de comprometerse en cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico. Esta decisión la tomamos desde 1986.
> Primero, ninguna estructura del ELN impulsa, patrocina los cultivos de uso ilícito, ni la refinación, transporte y la distribución de drogas ilícitas.
> Segundo, evita la ampliación de los cultivos de coca en las zonas de influencia (…).
> Tercero, en zonas de nuestra influencia, donde existen cultivos ilícitos, hemos adelantado campañas para la erradicación, (…). (ELN, 2014, p. 12) [Mayúsculas en el original].

La segunda, liderada por "Antonio García", quien no solo matizó la posición de "Ramiro Vargas", sino que también equiparó el cultivo de coca a cualquier otra actividad agrícola, y como tal podía ser gravada:

> El ELN no tiene ni cultivos, ni laboratorios, ni rutas, ni negocia con los productos, no tiene pistas, ni alquila seguridad a nadie, como tampoco tiene nada que ver con el negocio de precursores químicos. Lo único que hace en algunas zonas es cobrar un impuesto como a cualquier actividad económica. (ELN, 2012, p. 32)

El contraste solapado entre una prohibición discursiva y una vinculación mesurada le permitió mostrar al ELN que estaba más vivo que nunca, pues logró así emprender, en 2015, un proceso expansivo y le sirvió como base para que el COCE decidiera reunirse, una vez más, para acordar y pactar nuevas directrices en materia política y militar. En relación con el primer punto, variados frentes exhibieron una actividad militar, inédita en años (figura 13), en zonas de Chocó, Cauca, La Mojana (Sucre), Catatumbo, bajo Cauca antioqueño y Nariño[86] (Llorente y Garzón, 2020; Defensoría del Pueblo, 2017).

En el V Congreso (2015), titulado *eln 50 años: raíces, luchas y esperanzas junto al pueblo,* los líderes elenos buscaron delinear el horizonte de acción de la organización nacional y plantear una posición frente a la nueva

---

86 En el sur del Chocó emprendió una disputa armada con "los Rastrojos" y las "Águilas Negras". En esta interacción el ELN consolidó su presencia en el bajo Tadó, San José del Palmar y Bagadó (Chocó), Pueblo Rico (Risaralda), en las zonas de la Mojana (Montecristo, Achí y Tiquisio) y Loba (Norosí y Río Viejo); y en el Magdalena medio (Arenal). Lo mismo ocurrió en Antioquia, sobre todo en el bajo Cauca y el nordeste (Llorente y Garzón, 2020). En Cauca y Nariño el ELN ha buscado fortalecer su rol regulador sobre la extracción de recursos naturales. Allí influye en la economía cocalera y en el desarrollo de la minería ilegal, cobrando dinero por el gramaje y regulando los precios (Defensoría del Pueblo, 2017, 2017a; Llorente y Garzón, 2020).

coyuntura marcada por la inminente salida de las FARC de la guerra.[87] Por eso, salvo este punto, este nuevo encuentro más que dar nuevos horizontes y apuestas revolucionarias, profundizó las estrategias militares y políticas de años pasados, plasmadas en los documentos Táctica de masas 2012-2014[88] y Plan 11-16[89] (Laverde, 2015).

En lo que concierne a las directrices del V Congreso del ELN, siguieron pensando en cambiar la idea de Estado y sociedad, esta vez integrando la lucha armada con la movilización social, para así generar una crisis que les permitiera adelantar la revolución (ELN, 2015b). Para esto, designaron al Estado Mayor Nacional como instancia básica de coordinación nacional-regional del plan militar para la conducción y ejecución de misiones (ELN, 2015b). En esta apuesta, nuevamente, las ciudades y los espacios suburbanos tendrían un papel crucial, por lo que ampliarían su radio de acción a diez ciudades,[90] bajo la coordinación del frente de guerra urbano nacional (ELN, 2015b).

Estas consideraciones tuvieron como base su particular lectura del contexto nacional (2012-2015) y el auge de la movilización social, encarnada en la movilización estudiantil y el Paro Agrario (Barrera, García, Coronado, Hoyos y Guzmán, 2016), pues los dirigentes elenos no solo percibieron estas expresiones colectivas como sucesos que revestían de legitimidad su lucha armada —¡incluso las equipararon al Paro Cívico del 77!—, sino que creyeron que podrían estar *ad portas* de una "tercera situación" prerrevolucionaria[91] (ELN, 2015b). De suma importancia fue que en este Congreso integraron a la Dirección Nacional del COCE a "Pablito" y a un par de miembros del frente de guerra oriental, lo que patentaba una nueva redistribución de poder en las instancias nacionales, que confirmaba y favoreció la posición del hegemón Sol de Oriente (Entrevista

---

87 En esto, se logró un exiguo consenso y mayoría respecto a la posibilidad de buscar una salida negociada, algo que se aborda en el siguiente acápite.

88 En este reconocen que los golpes militares recibidos en los últimos años han impactado parte de su conducción estratégica, al tiempo que han generado una opinión desfavorable a la insurgencia. La correlación de fuerzas sigue siendo desfavorable al campo popular. Para cambiar esta condición, propusieron la construcción de un movimiento político, con nuevos liderazgos sociales y políticos que innoven en sus discursos y estilos de comunicación, a través de acciones de propaganda armada, recuperar la relación con los intelectuales y las universidades" e iniciar "la reconstrucción de los proyectos cooperativos regionales", entre otras cosas.

89 En este documento propusieron concientizar, organizar y movilizar a la población; cogobernar instituciones estatales a partir del control social generado con la democracia participativa en sus zonas de influencia; estrechar lazos con sus amigos, socios y aliados; y establecieron los porcentajes de las fuentes de ingresos: "impuestos, 35%; producción propia, 30%; recuperaciones, 15%; retenciones, 15% y palma, 5%".

90 Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán y Neiva.

91 Lo mismo dijeron del Paro Cívico del 77 y del Paro del Nororiente de 1987.

2). Además, trataron dos aspectos centrales que dejaban atrás la constante imposibilidad institucional y organizacional del COCE para centralizar y redistribuir los recursos, y para trazar una política coherente frente a las economías ilícitas, la cual se resume en la tabla 6.

Un análisis descarnado de estas políticas de orden nacional muestra poca conexión con la forma bajo la cual el ELN se recompuso en los años 80 y la década pasada, pues no se tuvo en cuenta la diversidad regional, sino que exhiben una lógica más jacobina de centralización que buscaría aprovechar la supuesta situación prerrevolucionaria. De ahí que el nuevo plan parece remitir al ideal del mito fundacional, antes que a la realidad concreta del ELN realmente existente, pues sigue siendo evidente la carencia de una estructura nacional de finanzas, la imposibilidad de adoptar una postura unificada frente a la coca y de desmarcarse de todas las economías ilícitas.

Tabla 6. Ejes estratégicos de lucha y acumulación consagradas en el V Congreso

Ámbito	Apuestas y estrategias
Movimiento social y político	• Ampliar y potenciar la movilización y acción de masas con sentido de insurgencia popular, al lado de la contienda electoral, para facilitar condiciones de las que emerjan movilizaciones de alcance nacional.
Lucha armada revolucionaria e insurgencia popular	• Confrontar, desgastar, empantanar, neutralizar y romper el diseño enemigo de campañas contrainsurgentes, tanto en el campo como en la ciudad. • Recuperar áreas perdidas. • Diseñar planes regionales que correspondan a la recomposición integral y estructural de la fuerza. • Desfocalizar la confrontación, golpeando objetivos estratégicos del enemigo, mediante un diseño estratégico regional, con énfasis en lo urbano. • Accionar orientado a aumentar la legitimidad de la organización, a partir de la idea de construcción de poder popular.
Economía y finanzas	• Desarrollar una base económica propia, como expresión de una construcción de Poder Popular para sustentar los planes del ELN y sus masas. • Centralización económica plena. • Desarrollar un fuerte trabajo ideológico en los militantes y mandos, para superar la mentalidad consumista. • Construir una estructura nacional de finanzas que contemple criterios nacionales de tributación, para ayudar a tramitar los líos entre regiones en materia de economía. • Líneas de consecución de finanzas: 1. Ingresos por tareas de privación de la libertad. 2. Tributación guerrillera. 3. Expropiación. 4. Ingresos por aportes y donaciones. 5. Ingresos por proyectos propios rentables y autogestión.

Ámbito	Apuestas y estrategias
Territorio, hábitat y naturaleza	• Objetivo general: generar procesos territoriales para el ejercicio pleno de soberanía y autonomía de los pueblos, en armonía con la naturaleza, con base en los siguientes puntos: • Defender y preservar el agua como bien común y público. • Soberanía y autonomía alimentaria, en defensa de la economía campesina y comunitaria. • Ordenamiento popular del territorio y construcción de planes de vida alternativos, bajo un nuevo ordenamiento territorial nacional. • Preservar y defender los bienes de la naturaleza, haciendo uso racional y soberano de ellos. • Lucha político-jurídica por los derechos de la naturaleza. • Necesidad de una reforma agraria integral y participativa, y una reforma urbana. • Apoyar y respetar las distintas expresiones de territorialidad étnica, cultural y campesina. • Generar líneas de integración regional frente a los monocultivos y los megaproyectos minero energéticos. • Continuar el deslinde con el narcotráfico.
Internacional	• Visibilización del conflicto armado a través de: • Creación de retaguardia internacional. • Construcción de diplomacia institucional y popular. • Lucha contra la injerencia gringa. • Apoyo y articulación con las luchas de los pueblos que pelean por su liberación y soberanía. • Apoyo a la solución política del conflicto. • Política de fronteras. • Trabajo diplomático en EE. UU.

Fuente: ELN, 2015b. Elaboración propia.

Negociar para copar y crecer: el reencauche militar eleno signado por la preeminencia araucana, dentro de una diversidad territorial, 2015-2020

Los últimos años de este período patentaron el reacomodo del frente de guerra oriental, conocido como Sol de Oriente al interior de la organización nacional, y el proceso de expansión que emprendieron varios frentes con su ayuda, al capitalizar la coyuntura de negociación entre el Estado colombiano y las FARC (2012-2016) en La Habana (Cuba).

Al interés de visibilizarse y de presionar su inclusión en las negociacione con Juan Manuel Santos (Llorente y Garzón, 2020), hay que sumar los tiempos y la decisión del ELN de sentarse para hablar de paz de la mano de las dinámicas regionales, ya que los frentes de guerra que mostraron una mayor fortaleza armada se alinearon o deslindaron del tema de acuerdo con sus intereses territoriales y con la correlación de fuerzas a

su interior.[92] En otras palabras, el proceso expansivo eleno debe ser visto territorial y organizacionalmente.

Respecto a un nuevo intento de hallar una salida negociada al conflicto, hay que señalar que este grupo no solo se montó tarde al bus, sino que también hizo muy lento y lleno de impases el transcurrir de la negociación, por el precario consenso interno que construyó en torno a la paz, por la demora en la definición de una agenda, por las desmesuradas y maximalistas expectativas de negociación y por su insistente demanda de inclusión de la sociedad civil. Estos temas evidencian, nuevamente, sus problemas de acción colectiva, pues no todas las organizaciones al interior del ELN están dispuestas a jugársela de lleno para entrar al ruedo democrático.

Tras varias rondas confidenciales y exploratorias, los diálogos iniciaron formalmente con la firma de la Agenda de Diálogos, en el año 2016. Los primeros se desarrollaron de manera pública en 2017 y 2018 en Quito (Ecuador) y La Habana (Cuba).[93] Para el Gobierno, el proceso con el ELN significaba conseguir la anhelada y promocionada paz, y para el ELN una oportunidad para no dejar pasar el bus y oxigenarse políticamente, en el sentido de recordarle a la opinión pública nacional que seguía vivito y coleando. Una nota singular de estos acercamientos fue la condición del Gobierno de que los diálogos se dieran en medio del conflicto armado, al igual que con las FARC, con lo cual el ELN no estuvo del todo de acuerdo (Mouly y Hernández, 2020; Guerra, 2020). De ahí que, la mayor parte del proceso transcurrió en medio de la guerra: de un lado, el gobierno Santos buscando asestarle golpes importantes al ELN para limar a los sectores más duros, y, por el otro, el ELN respondiendo con ataques unilaterales en centros urbanos y con atentados contra la infraestructura; además, en medio de la confrontación empezó a librar combates con otros grupos armados por las zonas de donde las FARC se estaban retirando (Chocó, Catatumbo, etc.). Este tipo de dinámica mostró que lo que las dos partes no lograban en el terreno político, lo buscaban obtener en el plano militar (Mouly y Hernández, 2020).

El transcurrir de los diálogos estuvo atravesado por problemas de lado y lado. Para el Estado colombiano, el proceso con las FARC era más que prioritario y relevante que con el ELN (Guerra, 2020; Guarín, Celis y Velandia, 2018; Mouly y Hernández, 2020); además, los esquemas de

92 Este variado accionar frente a las directivas nacionales y el afán de protagonismo autónomo de algunos frentes han afectado las posibilidades de negociación del COCE tanto con el gobierno de Juan Manuel Santos como con el de Iván Duque.

93 El cambio de sede estuvo relacionado con el asesinato de tres periodistas ecuatorianos a manos de "Guacho", un disidente de las FARC que tomó como radio de operación el municipio de Tumaco y la frontera colombo ecuatoriana (BBC, 2018).

negociación no eran los adecuados y no tenía totalmente clara la naturaleza de esta guerrilla y sus reivindicaciones políticas (Aponte y Amaya, 2019). Por el lado del ELN, este construyó un exiguo consenso interno frente a la paz en su V Congreso (Entrevista 1), por lo cual no todos los frentes estaban alineados respecto a la entrada al ruedo democrático; sumado a lo anterior, algunas de sus estructuras estaban más pendientes de las dinámicas territoriales de su zona de influencia que del proceso (Guerra, 2020), y más interesadas en la defensa y reivindicación del secuestro como medio político (fiscalización) y de financiación de sus estructuras armadas (*El Espectador*, 2018a).

Luego de más de tres años, las dos partes acordaron una agenda y unas reglas de funcionamiento que servirían como hoja de ruta de la mesa de conversaciones durante su fase pública. En este espacio convinieron un temario de seis puntos[94] que mostraba no solo una generalidad bastante amplia y ambigua, sino que correspondía mucho más a la visión del ELN que a la del Gobierno (Guerra, 2020; Ramírez, 2018; Celis, 2019). Esto le dio importancia a las mesas regionales en las que se buscó incluir sectores sociales de territorios donde esta guerrilla tuviera presencia, lo que hizo que el desarrollo de estas fuera más que lento. Finalmente, el punto más crítico lo constituyó la insistencia del Gobierno de dejar consignada de manera explícita en el acuerdo marco la dejación de las armas por parte de la guerrilla, como condición indispensable para pactar un acuerdo de paz, asunto con el que el ELN no estuvo de acuerdo y que terminó por extender más allá de lo previsto la etapa exploratoria del proceso (Ramírez, 2018; Guerra, 2020).

En esta dinámica ninguna de las dos partes salió beneficiada y la mesa de negociación fue la más golpeada, puesto que la opinión pública consideraba que se estaba negociando mucho frente a una guerrilla menor. Dentro de los logros más prometedores están el cese al fuego bilateral, las acciones humanitarias y la liberación de unos secuestrados por parte del ELN, lo que posibilitó cierta construcción de confianza entre las partes (Mouly y Hernández, 2020).

Sin embargo, este buen ambiente se fue diluyendo por varias razones. Primera, la alta rotación de los miembros del equipo negociador del Gobierno o la falta de apoyo técnico; segunda, la derrota del gobierno

94 Los tres primeros: participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz y transformaciones para la paz, eran fiel reflejo de la aspiración y postura populista y asambleísta del ELN, ya que en sus marcos cognitivos y discurso se posiciona como un simple intermediario entre la sociedad civil y el Estado colombiano, y no entre el Gobierno y los alzados en armas. El punto cuatro, sobre las víctimas, no presentó mayor discordia, mientras el quinto, "fin el conflicto armado", desató la más ardua discusión. El sexto punto recogía la necesidad de acordar, durante el proceso de diálogos, un cronograma, un plan de ejecución y unos mecanismos de verificación y monitoreo para la etapa de "implementación" (Guerra, 2020).

Santos en el plebiscito del 2016; tercera, la agenda ambigua y maximalista, que no permitía mostrar avances; cuarta, los asesinatos de líderes sociales, que fueron interpretados por el ELN como una continuación de la guerra sucia, aunque el asunto es más complejo (*Europa Press*, 2017); quinta, la lenta implementación de los acuerdos, sobre todo en lo concerniente a la instalación de los espacios transitorios, y la captura de Jesús Santrich hicieron dudar al ELN del proceso;[95] sexta, cada vez sus estructuras se mostraban más interesadas en sus dinámicas territoriales y de reposicionamiento al interior de la guerrilla que en la paz; y séptima, su autopercepción como una guerrilla no derrotada, sustentada en la idea de resistencia armada.

La estocada final fue la llegada al poder del sector opositor al gobierno de Santos, porque este no solo promulgaba la necesidad de cambiar las condiciones de los diálogos, sino también el sometimiento de esta guerrilla y una serie de inamovibles, como dejar de secuestrar, dejar de reclutar personas menores de edad, cese al fuego unilateral, etc. La mesa de diálogos fue desbaratada por una acción del frente de guerra oriental, que haciendo uso del debate en caliente y su fortalecida posición, utilizó el atentado de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá (2019) como una forma de acabar de zanjar las tensiones al interior del ELN y con el nuevo Gobierno:

> La bomba contra la Escuela General Santander, (…) provino de una acción planeada y dirigida desde el Oriente, pero que tuvo una repercusión en el orden nacional y se atravesó en una política de carácter Nacional del ELN (…). El V Congreso dijo: "Que estaremos en una mesa de diálogo donde eventualmente haremos dejación del uso de las armas". Eso no les gustó a las estructuras del Oriente, que en ese V Congreso quedaron en minoría, pero ganaron unas mayorías exiguas; el 50% o el 51% de los votos dijeron: "Estaremos en una mesa, y el 49% dijo: No", entre los que estaban las estructuras de Chocó y las estructuras del Oriente. Y la manera de romper la mesa, fue con un bombazo". (Entrevista 1).

Las "minorías" que perdieron en el terreno deliberativo estaban compuestas por el Sol de Oriente y los frentes de guerra nororiental y occidental. Estos dos últimos son los que mayor apoyo han recibido en armas y recursos por parte de la estructura de la ABC.[96] La gente de Arauca envió

95 Esto se fue confirmando con la refrendación de los compromisos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo final de paz) en el Congreso de la República, pues la correlación de fuerzas políticas en el legislativo había cambiado y los primeros obstáculos para implementar el Acuerdo final de paz llevaron a que el ELN desconfiara de cuál podría ser el resultado de un proceso similar con ellos (International Crisis Group, 2017; Mouly y Hernández, 2020).

96 Así se llama la zona de influencia que tiene esta guerrilla en Arauca, Boyacá y Casanare.

a Alirio Sepúlveda para informar a los comandantes sobre los puntos pactados con el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras que el frente de guerra occidental se marginó completamente del asunto:

> El V Congreso en donde se tomó esa decisión, el Domingo Laín, las estructuras del Chocó y las estructuras del Catatumbo perdieron. Perdieron y no pudieron imponer su punto de vista que era, no negociar. El resto del ELN dijo: "Sí, vamos a negociar y donde eventualmente hagamos dejación del uso de las armas". Esa fue la definición".
>
> (…) a Alirio Sepúlveda lo mandan a hacer parte de la delegación y la misión que le dan es: "Usted va allá es a explorar", es decir, a hacer una exploración (…) Es decir, tampoco lo mandan a "vaya allá y comprometa el nombre del frente Domingo Laín". No, es un poco, "vaya allá y vigile a ver qué es lo que están negociando en últimas". Con esa actitud llega Alirio Sepúlveda y los del Chocó se negaron del todo. Se pararon en las pestañas para decir: "Nosotros no mandamos allá a nadie, porque allá, negocien o no negocien, no nos hacemos responsables. Nosotros siempre dijimos que no estamos de acuerdo". (Entrevista 22).

Para cerrar, cabría decir que no es del todo audaz desechar ciertos acumulados logrados, pues como nunca antes se avanzó en una negociación con esta guerrilla (Ramírez, 2018; Mouly y Hernández, 2020). Habría que agregar que más allá de la llegada del uribismo al poder, la coyuntura nacional impidió alcanzar un acuerdo con esta insurgencia, a lo que se sumó que el ELN no encontró incentivos reales y sustantivos para dejar las armas, dada su naturaleza federalizada y la nueva distribución de poder en su interior. La reedición de los problemas de coordinación y cohesión expuestos sobre esta coyuntura crítica estuvo estrechamente vinculada con las exiguas mayorías que consolidó el V Congreso (2015), con las apuestas territoriales que tenían algunos frentes de guerra en sus zonas de presencia, y cómo estos objetivos incidieron en los balances de poder al interior del COCE.

Ahora bien, a pesar de estas trayectorias diferenciadas se hacen patentes las siguientes aristas: la derrota estratégica del ELN; el carácter circunscrito de la violencia que sus frentes despliegan y su objetivo, ya que la mayoría de las veces no confrontan a las fuerzas del Estado sino, más bien, a otros grupos armados con los cuales compiten por el territorio (figura 13) afectando a los pobladores; una mayor criminalización de sus estructuras, lo que no oculta el carácter político del grupo; y la continuidad en su discurso bipolar sociedad-Estado. Este discurso se conecta de forma particular, cuando logra hacerlo, con las apuestas de cada frente de guerra, ya que cada uno de ellos desarrolla la resistencia armada, la construcción de poder popular, etc., de acuerdo a los territorios donde están insertos.

Figura 13. Acciones bélicas por actor armado, 1990-2017

Fuente: SIG-Cinep. Elaboración propia.

Es pertinente decir que en los últimos cinco años no ha habido una mayor alteración en los frentes de guerra que constituyen al ELN. En algunas ocasiones, es palpable que parte de ellos tienen una estructura más compleja que otros, pues están compuestos por una diversidad de organizaciones tales como columnas, compañías, comisiones, etc. Esto no solo habla de la importante presencia que tiene el ELN en determinados territorios, sino también del grado y nivel de especialización que ha adquirido un determinado frente para atender y tramitar los problemas de sus bases sociales, el tipo de violencia que despliega o la forma y grado de vinculación con las economías territoriales que regula y clarifica. En esa línea, se procede a hacer una descripción de la trayectoria de cada uno de ellos en el pasado reciente, para entender sus posibilidades actuales y cómo se articulan con el ELN nacional.

Tabla 7. Estructuras armadas que componen a los frentes de guerra del ELN

Frente de guerra	Estructura: frentes, compañías, columnas, comisiones comandos, batallones
Occidental	Frente Cacique Calarcá Frente Manuel Hernández "El Boche" Frente Resistencia Cimarrón Frente Ché Guevara

Frente de guerra	Estructura: frentes, compañías, columnas, comisiones comandos, batallones
Oriental	Frente Adonay Ardila Pinilla Columna Camilo Cienfuegos Frente Efraín Pabón Batallón Héroes Y Mártires Frente José David Suárez Columna Centauros Del Pueblo Frente Domingo Laín Comando Fuerzas Especiales Frente Rafael Blanco Flórez Comisión Fronteras Comisión Martha Elena Barón Compañía Simacota
Suroccidental	Frente Manuel Vásquez Castaño Columna Celio Cienfuegos Frente Comuneros Del Sur Compañía Jaime Tono Obando Frente Guerreros Del Sindagua Compañía Lucho Quintero
Darío Jesús Martínez	Frente Amilkar Grimaldos Frente Luis Guillermo Ariza Frente Héroes Y Mártires De Anorí Frente José Antonio Galán Frente José Solano Sepúlveda Frente Compañero Tomás
Nororiental	frente Camilo Torres frente Capitán Parmenio frente Capitán Francisco frente Carlos Armando Cacua Guerrero frente Capitán Mauricio compañía Comandante Diego frente Héroes del Catatumbo

Fuente: elaborado con base en *El Espectador* (2016) e información propia.

El Chocó ha visto cómo el frente de guerra occidental tomó, desde 2015, un protagonismo inusitado por cuenta de la guerra que libra con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la fuerza pública por el control de cada metro cuadrado del departamento. La apuesta de este frente ha sido copar las antiguas zonas de control de los frentes 57 y 34 de las FARC para controlar las economías territoriales y las poblaciones que esta guerrilla ordenaba (Entrevista 6), en particular las zonas medias y bajas del Atrato y Baudó, las cuales pretende conectar con los dominios tradicionales que ostenta en el litoral de San Juan, para, así, crear todo un corredor de movilidad a lo largo de este departamento y ciertas zonas del

norte del Valle del Cauca como El Dovio y Buenaventura (Defensoría del Pueblo, 2017, 2017a; Llorente y Garzón, 2020).

Esta apuesta concreta posiciona a este frente como el principal generador de las conflictividades sociales en el departamento, dado que su adverso impacto humanitario es incontrovertible: amenazas, extorsiones, confinamiento, reclutamientos forzados, asesinatos selectivos, atentados, bombardeos, casos de violencia sexual y desplazamientos (*Verdad Abierta*, 2018; Guarín, Celis y Velandia, 2018).

La forma de operar resalta la imposibilidad o el desinterés de esta estructura para enraizarse en la vida de los locales. Justamente, es bastante diciente que algunos habitantes anhelen el regreso de las FARC, porque con ellas no solo concertaban el tipo de orden impuesto y las normas que lo sustentaban, sino que le daban claridad y certidumbre a actividades como la coca y la minería, que solo beneficiaban a intereses foráneos o criminales (Entrevistas 6 y 10; ver capítulo de Andrés Aponte y Valentina González). Trabajos como el de International Crisis Group (2018) señalan que las economías territoriales de la coca y la minería son las que marcan el compás de los marcos cognitivos de los comandantes de esta estructura. Idea que, también, fue señalada por una entrevistada que afirmó: "Lo que me dice la gente en Chocó es dramático, dramático por el interés en regular el negocio ilegal y poder ser un actor clave. Más que una gran iniciativa ideológica" (Entrevista 11). Por otro lado, para bien o para mal, este reacomodo territorial le ha permitido a esta estructura dos cosas: reposicionarse al interior del ELN nacional, pues no solo dejó de ser el "patito feo" al que nadie miraba ni consultaba, sino que en el presente se ha tornado en una estructura crucial para sentar al ELN a hablar de paz (*El Tiempo*, 2019). Prueba de ello es el manejo que le dieron al secuestro de Odín Sánchez Montes de Oca:

> Entrevistador: Nosotros interpretábamos mucho la cuestión del secuestro de Odín como una estrategia de reposicionamiento de ese frente [en referencia al frente occidental] al interior de la estructura armada por su condición de marginalidad histórica.
>
> Entrevistado: En parte eso, en parte porque están en una dinámica de crecimiento significativo y querían mostrar en el país también su nueva significación, también de cara a poner reglas en la región y a "aconductar" a comunidades. Los indígenas y comunidades negras han estado muy incómodos con su presencia porque ellos no regulan la explotación minera, no de cara a los dueños del territorio ni de cara a la biodiversidad, sino de cara a quien más les genere beneficios, incluso si es a costa de las comunidades. (…), eso al ELN no le importa. (Entrevista 11).

En cierta manera, no es aventurado señalar que el frente de guerra occidental puede estar replicando la estrategia del Domingo Laín, gracias a

un aprendizaje que ha tenido de parte de este respecto a sus interacciones con los organismos de dirección nacional para hacer pesar su posición:

> El Chocó no tiene a nadie en la Dirección Nacional y no tiene a nadie en el COCE. De tal manera que ellos no quieren estar, no quieren participar en estos órganos de dirección porque terminan comprometiéndolo. De la manera como están en la actualidad, ellos se mantienen aparte, (…) Y ellos dicen que acatan, ellos dicen, dicen, dicen, que atacan, pero terminan haciendo las cosas a su modo y a su ritmo. (Entrevista 2).

Finalmente, en el último tiempo se ha hecho evidente que su proceso expansivo no es tan consistente como se suele creer: las AGC han ganado la guerra en el bajo y medio Atrato, han estado incursionando en sus zonas de retaguardia y recientemente se dio la baja, por parte del Estado, a Uriel, un comandante bastante reconocido a nivel nacional por su figuración pública (ver capítulo de Andrés Aponte y Valentina González; Aponte, 2020a).

El frente de guerra suroccidental (Cauca-Nariño) muestra cierta similitud con el anterior, por cuanto busca copar puntos clave en el negocio de la coca, y controlar los corredores de movilidad y las rutas del narcotráfico, bajo una estrategia de vinculación de sus dominios territoriales en Cauca y Nariño, sin embargo, exhibe una trayectoria mucho más matizada en el proceso expansivo de sus frentes.

En Cauca, las estructuras que se insertaron en zonas del norte, sur y la parte costanera gracias a los acuerdos entablados con las FARC y la no sustitución de los órdenes erosionados, han retrocedido en el último tiempo y han dejado en evidencia que no lograron implantarse del todo. Su trabajo político, destinado a infiltrar los movimientos indígenas y campesinos a través de su tradicional estrategia de concertar las normas comunitarias (International Crisis Group, 2018) para erigirse como una tercera instancia tramitadora (ver capítulo de Daniel Amaya), al igual que la regulación de la minería artesanal y criminal, y los cultivos de coca, no fue del todo acogido por los locales y se ha visto impactado por la llegada de las disidencias (*Semana*, 2020a).

En contraste, las estructuras que descendieron del piedemonte hacia el andén pacífico nariñense muestran un relativo éxito. La fuerza que se desplegó desde Cumbitara hacia los municipios que colindan con el Cauca y que son atravesados por el río Patía (Santa Bárbara, Iscuandé, La Tola, El Charco y Magüí Payán, para dar unos ejemplos), han logrado cierto éxito en su inserción; no obstante, las estructuras que se desplazaron desde Samaniego hacia los municipios fronterizos del piedemonte y del andén pacífico, entre los que están Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, no han tenido la mejor suerte (ver capítulo de Daniel Amaya; *Semana*, 2019a).

En Barbacoas y Tumaco (Alto Mira y Frontera, y en las poblaciones de Llorente y La Guayacana), el ELN buscó incursionar y exigir tributación

sobre el negocio de la coca, pero sus intentos resultaron infructuosos al ser expulsados por el frente Oliver Sinisterra (FOS) y otros grupos de narcotraficantes (Entrevista 18; International Crisis Group, 2018, 2019), y todo indica que esta situación continuará de la misma manera por la llegada de la disidencia Alfonso Cano (Johnson, 2020; *RCN Radio*, 2020).

Hacia las zonas colindantes con el Cauca y el río Patía el ELN ha sido un poco más exitoso, ya que le ha podido plantar cara al frente Estiven González (FEG), a las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y al FOS. Con esto ha logrado cierto control sobre el río Patía, concretamente en algunos puertos fluviales que son importantes para el transporte de la coca, y ha establecido cierta comunicación con sus dominios territoriales de áreas del Cauca. De esta forma ha conseguido imponer tributación a la minería de aluvión (Llorente y Garzón, 2020) y ampliar su injerencia en la comercialización cocalera (Duque, 2019).

Lo que exponen tanto el frente de guerra occidental como el suroccidental, es el esfuerzo deliberado de establecer vasos comunicantes a lo largo de todo el litoral pacífico y controlar ciertos o todos los eslabones de la coca.[97] Sin embargo, estas apuestas se han visto posibilitadas o limitadas por los factores endógenos de cada territorio y el tipo de enraizamiento social, lo que, a su vez, explica los diversos rostros que adquiere esta insurgencia en el terreno, en materia de pautas de relacionamiento con los pobladores y el tipo de violencia que despliega:

En el Chocó es otra cosa. Ahí es una presencia reciente, no muy ligada a dinámicas de ocupación del territorio y, en alguna medida, en los sitios del Pacífico colombiano, han llegado recientemente. Esa es una apuesta más del control de las dinámicas territoriales que les permitan convertirse en actores regionales significativos. Entonces en el Chocó, y también lo he visto en el sur del Pacífico nariñense, en el Pacífico caucano, es una lucha por ocupar espacios, territorios, hacer regulaciones, reemplazar lo que hacían las FARC o disputarle a los GAO espacios y funciones, y ahí el nivel de operación es menos ideológico. (Entrevista 11).

En el otro extremo del país, en el Catatumbo, el ELN se ha posicionado como el actor más relevante del área, luego de una disputa armada con el EPL (2017-2019) a raíz de los desacuerdos entre las comandancias de las insurgencias. En particular, después de la muerte de “Megateo”,[98] (2015), y más recientemente con los intentos de estos grupos de copar los espacios

97 International Crisis Group (2019) estima que el 45% de la coca que sale del territorio nacional lo hace por el Pacífico colombiano, lo que explica el posicionamiento del ELN en áreas del Cauca, Chocó y Nariño, y las interacciones armadas que tiene con las disidencias de las FARC, los grupos sucesores del paramilitarismo y con grupos de narcotraficantes.

98 Víctor Ramón Navarro Serrano, máximo líder de esta insurgencia hasta el 2015.

y cooptar las bases sociales ubicadas en zonas cocaleras de otrora dominio fariano (International Crisis Group, 2018).

La interacción violenta que se desató arrojó intensos combates, desplazamientos, confinamientos y asesinatos selectivos por doquier, hasta que en 2019 el EPL se vio en la necesidad de retirarse hacia Convención, Sardinata y la frontera (Sánchez, 2019). Esta victoria parcial del ELN, gracias al importante apoyo del frente de guerra oriental con hombres y armas (Medina, 2019), lo posicionó como el actor más importante del lugar; a pesar de ello, las recientes movidas del EPL llevarían a pensar que las dinámicas del 2017-2019 pueden reeditarse, pero con agravantes: el EPL se ha aliado con ciertos grupos sucesores del paramilitarismo (GSP), y hay claros indicios de que la confrontación armada se ha extendido a lo largo de toda la frontera del departamento de Norte de Santander, con especial acento en el área metropolitana de Cúcuta (*El Espectador*, 2020a; *La Opinión*, 2019).

Esta preeminencia territorial les ha permitido a las estructuras del frente nororiental aumentar su participación en el tráfico de drogas y en el control de las rutas de tráfico hacia Venezuela (International Crisis Group, 2017, 2018), tener un mayor control sobre las actividades mineras ilegales (carbón) y sobre los cruces fronterizos informales por donde pasan migrantes, víveres e insumos químicos (PARES, 2020). Además, han ampliado su capacidad de regulación y ordenamiento: controlan los desplazamientos de los inmigrantes venezolanos y de los locales, y administran justicia en la frontera, al punto que han llegado a prestar servicios bienestaristas propios de un Estado, como es la entrega de mercados a personas vulnerables (Macías, 2018).

La trayectoria del ELN en el sur de Bolívar, bajo Cauca y una porción del nordeste antioqueño podría calificarse como distópica. Si bien el frente de guerra Darío Jesús Ramírez se recompuso luego del embate paramilitar, de la mano de la minería aurífera y del pacto que entabló con las FARC en torno a la coca (Aponte, Arboleda y Barrera, 2016; ver capítulo de Juan Diego Forero y Daniel Amaya), su actividad militar e incidencia en la vida social y política es bastante marginal, lo que hace de esta estructura la más débil del ELN nacional.

Prueba de ello es que, desde 2014, son múltiples los golpes militares que ha recibido de la fuerza de tarea conjunta Marte, en los cuales han sido dados de baja o capturados un buen número de combatientes y comandantes de alto rango de los frentes José Solano Sepúlveda, Amilkar Grimaldos y Héroes de Anorí, siendo la caída de "Samuelito" y "Gallero" las más resonadas por ser miembros de la DN[99] (*El Espectador*, 2018, 2019; *El Tiempo*, 2019a).

99 En momentos de la redacción final de este texto, la fuerza militar dio un nuevo golpe a esta estructura con el bombardeo a un campamento del frente Darío Rodríguez, en zona rural de

Por tales razones, esta estructura exhibe una escasa actividad militar, por no decir nula, y explica los esfuerzos liderados por el COCE para recomponer su andar con la llegada de una nueva camada de cuadros y comandantes venidos del frente de guerra oriental para enderezar el rumbo (Entrevista 20). Este refuerzo implicaría un aumento de la proyección del Domingo Laín en el conjunto del ELN, que alteraría aún más el equilibrio de fuerzas favorable a las negociaciones. Se remarca que la supervivencia de este frente es vital por tres razones: una, está incrustado en pleno corazón del país y al lado de polos económicos e industriales (Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga y Bogotá); dos, para las apuestas del ELN nacional y del frente de guerra oriental es crucial el dominio de esta zona que haría las veces de corredor móvil para combatientes y recursos entre la parte occidental y oriental del país (Entrevistas 20 y 2); tres, de esta zona se extrae una importante cantidad de oro, recurso que contrasta con la coca, y su función reguladora y de seguridad se ha visto disminuida por la inexperiencia que ha mostrado en comparación con las FARC (ver capítulo de Juan Diego Forero y Daniel Amaya; Aponte, Arboleda y Barrera, 2016).

Finalmente, está el frente de guerra oriental, el cual no solo consolidó su presencia en el piedemonte araucano, sino que, de igual manera, fortaleció su rol como agente estructurante del territorio gracias a su importante capacidad de fuego y de desestabilización. Pero, más relevante aún: sus tentáculos siguen influyendo y potencializando los procesos organizativos de base, lo cual le brinda un amplio respaldo y legitimidad en el orden armado configurado.[100] Además, cuenta con un amplio músculo tributario que trasciende el petróleo: las administraciones locales y departamentales cogobiernan con el ELN, con lo cual este grupo accede a recursos estatales; regula e impone tributos al contrabando de gasolina, las rutas de coca, los pasos fronterizos y el flujo de migrantes; extrae recursos de la agricultura, la ganadería y el contrabando de bienes como autopartes, cigarrillos, divisas y alimentos, tráfico que se ha visto favorecido con

---

Montecristo (Bolívar). En este operativo murieron "Mocho Tierra" y 20 presuntos guerrilleros (*El Colombiano*, 2020).

100 En este tienen mucho peso las normas unitarias de comportamiento y convivencia creadas por las FARC y esta insurgencia en el año 2010, en el manual que rige tanto para los civiles como para los guerrilleros, y que regula la pesca; prohíbe la violencia sexual, el robo, los homicidios; determina las horas de cierre de bares y el cumplimiento de las deudas. También obliga a tareas comunitarias e impone castigos como la muerte, el trabajo comunitario, amenazas y desplazamiento. Estas reglas se comunican a través de los afamados "vikingos", desde donde se convoca a reuniones para dar a conocer las determinaciones. Este caso es excepcional, porque vemos que un acuerdo previo está teniendo continuidad en la actualidad y da cierta claridad y garantía a los actores armados de que no escale la violencia, a semejanza de lo que está sucediendo en Chocó, Nariño, etc. (HRW, 2020; ELN/ FARC-EP, 2013).

el cierre de la frontera (Llorente y Garzón, 2020; PARES, 2020; HRW, 2020; International Crisis Group, 2018).

Estos acumulados le han permitido a este frente consolidar su influencia en el área ABC e iniciar un proceso expansivo hacia nuevas áreas del territorio nacional y del lado venezolano; y, más importante aún, reposicionarse al interior del ELN nacional: ganó mayor representatividad en el COCE y la DN, y estableció mejores y mayores comunicaciones con los frentes de guerra occidental, nororiental y suroccidental, con lo cual se convirtió en el grupo hegemónico que hace gravitar en torno suyo a las otras constelaciones armadas bajo el paraguas eleno. Así que, si se quiere hablar de paz con esta insurgencia hay que sentar a sus representantes en la mesa (*El Tiempo*, 2016; ver capítulos de Daniel Amaya, de Henry Ortega, y de Andrés F. Aponte González y Valentina González).

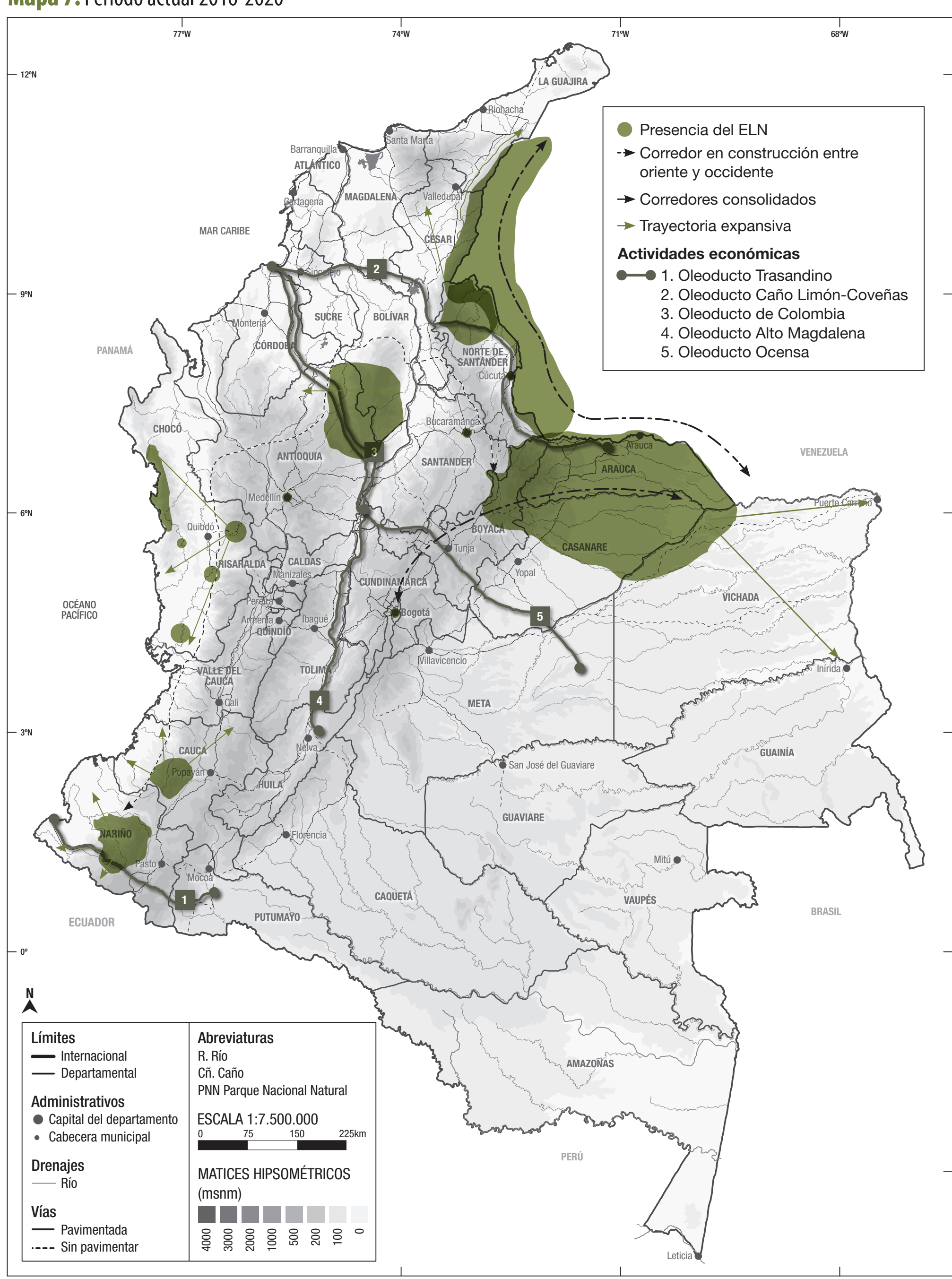
Respecto al proceso expansivo, desde 2016 este grupo se insertó y consolidó en nuevas áreas del Casanare y Vichada (Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño), a través de una regulación social y un trabajo organizativo de las poblaciones, que fue de la mano de la tributación sobre actividades mineras, rutas del narcotráfico y extorsión a comerciantes (Llorente y Garzón, 2020). Del otro lado de la frontera ha consolidado su presencia con campamentos fijos en el vecino estado venezolano de Apure, y de ahí se ha insertado en poblaciones del estado de Amazonas (como Puerto Ayacucho y San Fernando de Atapabo) sobre el río Orinoco, para regular las explotaciones auríferas (Larratt-Smith, 2020; PARES, 2020). Se comenta que es tal la relevancia de este reposicionamiento, que "Pablito" tiene como sede a Puerto Carreño:

> Hoy Pablito todas las citas que está dando las da en Puerto Carreño, y están metidos en el arco minero-energético jugando el papel de reguladores de la extracción del oro, del coltán y de las tierras raras, que de alguna manera facilita a Maduro captar divisas con la cantidad dramática de producción, no solo de precio, del petróleo. (Entrevista 11).

De esta forma, el frente de guerra Oriental ya no solo es el Sol de Oriente al cual se mira como referencia, sino que se ha tornado en un grupo hegemónico que hace gravitar a su alrededor los demás frentes por la fuerza magnética que posee:

> La letalidad del ELN, es decir su capacidad de hacer daño, quizás entre un 60% y un 70%, está en la letalidad de las fuerzas que se agrupan en el Frente de Guerra Oriental, que es más o menos lo que se denomina la ABC: Arauca, Boyacá, Casanare. Esa trilogía territorial. Allí la letalidad del ELN, su globalidad se mide es a partir de lo que ellos puedan hacer. Pero al mismo tiempo, también, la fortaleza económica del ELN, está soportada por esas estructuras que están dadas ahí. Al mismo tiempo

Mapa 7. Periodo actual 2016-2020



Fuente: elaboración propia, con base en el relato y entrevistas 1, 2 y 22.

> también, por lo que dicen y por lo que hacen, pero también, por lo que se atreven a impedir que se haga nacionalmente. (Entrevista 1).

Como se observa, el frente de guerra oriental ha cimentado su liderazgo en su capacidad militar, y sus posturas radicales han impregnado a toda la organización nacional:

> Si usted mira la calidad, el contenido de los planteamientos, quien más hace planteamientos ya sea para retar al Estado o para decirle a las masas qué hacer, (…). Es decir, el liderazgo de esas estructuras respecto a los otros, al resto de la organización es innegable, (…). De modo que ya no tienen necesidad de irse para ningún lado. Ellos son el ELN y hoy por hoy están al mando. Es decir, esta fuerza radical y esta manera de pensar y de ser como piensa el Laín, es lo que está al mando. (Entrevista 22).

Esta estructura es el *metafrente* de la narrativa revolucionaria elena: en Arauca se cumplen a cabalidad todas las premisas de poder popular y de acumulación de fuerzas, pues el ELN se incrustó de tal forma en el proceso de configuración regional, que la génesis del Estado y su desarrollo, de las élites, de los procesos organizativos, para dar unos ejemplos, han ido de su mano (*El Tiempo*, 2020a). Por eso, la fortaleza que ostenta no solo es militar, sino también social, económica y política. Es por ello que, para algunos, esta experiencia concreta y los acumulados desarrollados se perfilan en el horizonte como una barrera que impide que el frente de guerra oriental se incline por la paz, pues sus guerrilleros son un actor incrustado en el orden regional y tienen mucho más por perder que por ganar con una eventual desmovilización:

> Ellos son de los más renuentes al camino de la negociación. Y la respuesta que yo tengo a eso es, porque ellos hacen parte de un orden regional en el cual se sienten cómodos, o sea ellos no están pensando en qué van a ganar, porque ya todo lo que pueden ganar, lo tienen. ¿No sé si se entiende esa afirmación? Ellos son unos ganadores, o sea, ellos son un cogobierno en el territorio (…) o sea, ellos en la variable negociación, no van a ganar poder, sino que van a perder poder. (Entrevista 23).

Lo descrito hasta esta altura queda ilustrado en el mapa 7, el cual muestra varios aspectos y procesos de primordial interés respecto a los diversos frentes de guerra.

¿Qué se puede concluir de este recuento? Y, ¿qué nos dice del ELN del presente?

Primero: el ELN es una organización de organizaciones políticas alzadas en armas, cada vez más criminalizada en sus medios. Su retórica y apuestas armadas, visiones de sociedad y Estado, el trabajo político en los territorios, etc., contrastan con los repertorios criminales que utiliza para perseguir dichos objetivos (Trejos, 2020). Por

consiguiente, cada vez son más patentes las contradicciones que existen entre el relato del ELN nacional con el actuar de sus frentes de guerra: el mejor ejemplo de estas son las fricciones alrededor de la vinculación con la economía cocalera.

Segundo: las trayectorias variadas de sus diversos frentes de guerra no solo interpelan la narrativa que sostiene que su accionar, como el de otros grupos armados, está llanamente guiado por una lógica de copamiento de espacios vacíos, sino que evidencian que la cosa es más compleja y hay más factores que entran en juego.

Tercero: el papel del frente de guerra oriental fue importante para el primer momento de recomposición y sigue siéndolo en la temporalidad reciente, pues ha sido el sostén del proyecto revolucionario, de la conexión establecida con otros frentes del país, y les ha ayudado a reposicionarse y acomodarse en sus escenarios regionales. Los mejores ejemplos de este soporte son los frentes de guerra occidental y nororiental.

Cuarto: este proceso permite aludir a una trama de recomposición de fuerzas al interior del ELN nacional, lo que tendría importantes implicaciones de cara al futuro, porque se está dando un relevo generacional en la comandancia que plasma y representa de mejor forma las fuerzas territoriales que componen a esta guerrilla. En lo que atañe a la recomposición, se ha perfilado en su interior una nueva camada de comandantes y cuadros medios que no están tan conectados con la dirigencia histórica y no responden a la organización nacional, sino a las lógicas territoriales de sus estructuras armadas. El caso más emblemático es el de "Pablito", quien se negó por largos años a ser parte del COCE para evitar estar vigilado y perder su estatus militar; también son ejemplo "Uriel" y otros cuadros medios que se están acomodando en el seno guerrillero por sus nuevas y audaces perspectivas. Prueba de lo dicho son las palabras de saludo del comandante "Antonio García" al frente de guerra oriental:

> Esta fecha es también para reflexionar sobre los errores que a veces se nos presentan entre nosotros, que nos distraen y nos debilitan. Siempre los problemas entre compañeros debemos solucionarlos con el diálogo, el intercambio, estar unidos nos hace más fuertes y nos permite hacer mejor las tareas que debemos cumplir y, por tanto, enfrentar mejor a nuestros enemigos. (ELN, (2015a).

La reciente figuración y ascendiente de estos comandantes, excepto "Antonio García", lleva a pensar que referentes fundacionales como "Gabino" y el cura Pérez, o la figura de Camilo Torres y las experiencias de la Operación Anorí y el Febrerazo podrían no tener ya el mismo peso como elementos identitarios. En efecto, la figura de "Gabino", último emblema de la etapa fundacional, está dando paso a nuevos relevos y

cuadros que están poco familiarizados con la experiencia inicial, y son los que se muestran más reacios a los diálogos de paz:[101]

> El ELN, hoy por hoy, tiene una dirigencia vieja; imagínate, en el año 1983 fueron elegidos nueve miembros para la dirección Nacional. De esos nueve miembros, seis todavía siguen dirigiendo al ELN en esta época. Estaba… bueno, murió Manuel, murió Milton Hernández, murió Óscar Sánchez, que venían desde esa época, pero se mantiene Pablo Beltrán, se mantiene Antonio García, se mantiene Gabino, se mantiene Ramiro Vargas, son cuatro de cinco miembros del COCE y fueron elegidos en 1984… en 1983. Entonces es una organización que ha crecido, se ha desarrollado; obviamente su dirigencia también se ha cualificado, pero también se ha envejecido. (Entrevista 22).

En lo que atañe a la segunda arista, este nuevo proceso de reacomodo, apalancado nuevamente en los combatientes y recursos de Arauca, le está abriendo camino a esta estructura para que adquiera, de una vez por todas, la representatividad que nunca ha podido ni querido tener. Se comenta que, en el presente, "Pablito" hace parte del COCE y que comandantes del frente oriental o de otros frentes de guerra hacen parte de la DN. No obstante, esta composición del COCE y la DN todavía no es del todo representativa del poder que tiene este grupo respecto a toda la organización.

Esta mejor y mayor representatividad pueden ayudar a contrarrestar los problemas de acción colectiva, al influir en la cohesión del ELN nacional y la toma de decisiones en torno a la guerra, la paz, los recursos, etc., y corresponderá más a la relación de fuerzas realmente existentes. Y es que, por paradójico que suene, los problemas de representatividad del ELN se asemejan más de lo que creen a lo que dicen combatir: el sistema político colombiano, donde hay regiones y sectores más y mejor representados que otros. Ahora bien, algunos podrían pensar que a "Pablito" le puede terminar sucediendo lo que le pasó a "Danielito" en los años ochenta, cuando su dirección y mando fue desconocido. No obstante, en esta ocasión hay una diferencia bastante importante, y es que al ser nombrado en el COCE no fue desarraigado de Arauca, y mucho menos dejó de tener contacto con sus bases.

Quinto: esta guerrilla es más un paraguas ideológico que aglutina y bebe de diversos emprendimientos armados, bastante particulares entre sí por lo variado de sus anclajes sociales, a través de un discurso bipolar de la sociedad y por el factor araucano. Este último no solo ha sido el sostén de la organización guerrillera, sino que de igual manera le brinda sentido a la existencia de otras experiencias armadas. De ahí su denominación Sol del Oriente (Entrevista 2).

---

101 Este punto requeriría una investigación paralela que abarque y haga un análisis de la cualificación de cuadros y su reciente inserción a las comandancias rurales, algo que hasta el momento no se ha realizado.

Sexto: la referencia a la criminalización de los medios elenos alude específicamente a que su proceso de recomposición se dio con base, principalmente, en actividades legales o semiilegales de minería y coca, para dar dos ejemplos. En cuanto a la primera, hay indicios de que han sistematizado y estandarizado nacionalmente el cobro de las contribuciones en las zonas mineras en un 5% de la producción diaria[102] (Defensoría del Pueblo, 2017; Llorente y Garzón, 2020); y, respecto a la coca, es muy diciente que esta guerrilla tenga presencia en siete de los diez municipios con mayor número de hectáreas del país en 2018, concentrando en su conjunto el 44% del total nacional (Llorente y Garzón, 2020).

Ahora bien, el rol de cada frente en la economía cocalera varía caso a caso y no es nada estático en el tiempo. En Cauca y Nariño, ha pasado de cobrar el gramaje a tratar de intervenir en la transformación y comercialización[103] (Entrevista 21). En Catatumbo ha ensanchado su rol, pasando de la trasformación y provisión de insumos químicos al cultivo y la comercialización (*El Tiempo*, 2018); en el bajo Cauca, solo cobraban el gramaje y ahora tienen injerencia en el cultivo y proveen de seguridad a laboratorios, en alianza con GSP (Hernández, 2019; Entrevista 15); en Chocó, están buscando monopolizar toda la cadena (Entrevistas 11 y 16). Como se aprecia en la figura 12, la única excepción sigue siendo el frente de guerra oriental, que solo cobra por el paso de droga hacia Venezuela (International Crisis Group, 2014; PARES, 2020; HRW, 2020).

Lo anterior no quiere decir que el portafolio eleno se haya simplificado, sino, todo lo contrario, lo que se dio fue su diversificación: diversos frentes han ampliado la regulación y extracción de recursos de actividades legales, ilegales o semiilegales. En Chocó está la extracción maderera (Entrevista 11; *Semana*, 2020c); en Catatumbo y Arauca tributan y controlan el comercio, el contrabando de víveres, el mototaxismo, los pasos ilegales fronterizos, la comercialización de la gasolina venezolana y del *pataegrillo.*

102 Esto lo realiza en zonas del sur de Bolívar (Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Tiquisio, Simití y Norosí), Nariño (Ricaurte, Santa Bárbara y los municipios del Telembí, conformado por Barbacoas, Magüí y Roberto Payán) y sur del Cauca (Almaguer). Según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, tanto el ELN como el Clan del Golfo cobran un porcentaje por el ingreso de maquinaria para la explotación aurífera en diferentes regiones del país (Llorente y Garzón, 2020; Defensoría del Pueblo, 2017).

103 Un buen ejemplo es el laboratorio hallado en Cumbal (Nariño), donde uniformados se encontraron con una gran estructura compuesta por siete módulos que abarcaban 2000 metros cuadrados en construcción y 410 kilogramos de clorhidrato de cocaína listos para ser embalados. Pero, lo más sorprendente es que descubrieron que ese laboratorio contaba con la infraestructura y los insumos para producir mensualmente cuatro toneladas de cocaína. El conjunto le pertenecía al frente Comuneros del Sur del ELN. "Ellos aprovechaban la zona limítrofe y los ríos para sacar la droga hacia el mar Pacífico", explicó el oficial (*Semana,* 2016).

Séptimo: la diferenciada vinculación de los frentes con las economías territoriales explican (a) el tipo de violencia que cada estructura despliega; (b) las luchas territoriales de esta guerrilla en Chocó, Catatumbo, bajo Cauca y Cauca-Nariño; y (c) la forma como se materializa territorialmente el ELN: en unas zonas como ejército de ocupación, en otras tiene una fisionomía fantasmagórica y en otras es un actor determinante.

Octavo: en el proceso de recomposición y reacomodo territorial fueron muy importantes los pactos de división territorial con las extintas FARC.

Noveno: la figuración de frentes de guerra que no estaban en el radar. Tal es el caso del frente occidental, cuyo involucramiento con la economía cocalera le permitió no solo crecer y modernizar su fuerza, sino también reposicionarse al interior del ELN (Aldana, 2017).

Décimo: para dilucidar al ELN del presente hay que incluir en la ecuación al territorio venezolano, pues si bien esta guerrilla había utilizado zonas de su frontera desde décadas atrás, hoy en día su establecimiento en los vecinos estados de Apure y Amazonas le dio un ingrediente de mayor complejidad al asunto. No en vano algunos se atreven a comentar que estamos ante una organización binacional.

Undécimo: sigue siendo patente la derrota estratégica del proyecto armado. A pesar de que sus estructuras persisten en la idea de resistencia armada, su iniciativa militar no muestra una vocación real de poder en el ámbito nacional, pues mientras evita cualquier contacto armado con la fuerza pública, se enfrenta con quienes comparten territorio regional o local. Como resultado de esta lógica diferenciada en lo nacional y lo regional-local, el repertorio violento que despliega raya en hechos terroristas[104] (*Semana*, 2018; *EFE Noticias*, 2019). Así, este contraste nacional-regional-local expresa bastante bien el funcionamiento concreto del ELN y su real objetivo.

Los dos paros armados realizados en el último tiempo (2016 y 2019), se caracterizaron por el uso de artefactos explosivos contra la infraestructura, el uso de francotiradores, grafitis, sabotajes, campos minados y no mucho más (*Espectador*, 2016, 2020b, 2020c). En consecuencia, hay que coger con pinzas este nuevo repunte militar y verlo en una temporalidad más amplia, para entender que el ELN no presenta una amenaza real para el Estado colombiano, pero sí tiene una importante capacidad de desestabilización e impacto humanitario regional, y una clara ligazón con las pretensiones de los frentes de guerra de controlar y regular ciertas economías territoriales.

Negar que el proceso descrito no haya tenido su rédito para esta insurgencia es una falacia. Si para el 2018 se calculaba que estaba compuesta

---

104 Uso de minas antipersona, atentados contra la infraestructura, instalación de artefactos explosivos para truncar los intercambios comerciales regionales, desplazamientos o asesinatos de pobladores. Todos estos hechos muestran un doloroso impacto humanitario.

por cerca de 2000 combatientes organizados en seis frentes de guerra regionales, 29 frentes rurales, 22 compañías y el frente de guerra urbano nacional (International Crisis Group, 2018), las más recientes estimaciones señalan que tiene cerca de 4000 personas en armas (Llorente y Garzón, 2020; Ministerio de Defensa, 2019), distribuidas en los cinco frentes de guerra con los cuales hace presencia "efectiva" en aproximadamente el 10% del territorio nacional (tabla 7), es decir, en cerca de 110-120 municipios de los 1103 que tiene el país (González, 2020), y que se caracterizan por ser zonas fronterizas con Venezuela, Ecuador, Panamá y el océano Pacífico, salvo las áreas del bajo Cauca y sur de Bolívar que hacen de puente entre el occidente y oriente colombiano (Entrevista 1).

Los hechos permiten concluir que la expansión geográfica del ELN en este período final (2011-2020), ha estado claramente vinculada con los anhelos discrecionales de ciertas estructuras de ganar o hegemonizar su presencia en zonas con actividades económicas de las cuales se derivan importantes recursos materiales. En todos los territorios abordados atrás, en particular las estructuras que hacen presencia en Chocó, Catatumbo y Cauca-Nariño se han fortalecido de forma dispar en los ámbitos militar, político y social; esto ha propiciado cambios en su interior, los cuales están vinculados con las fuerzas centrífugas que lo componen en la actualidad, ya que la estrategia de recomposición ha estado direccionada por el frente de guerra oriental, el hegemón de oriente.

Por otro lado, pero vinculada con la anterior idea, es que la estrategia de recomposición por marginalización y vinculación con las economías territoriales concretas le ha restado poder al ala tradicional de la dirigencia elena representada en Nicolás Rodríguez, Antonio García, Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, etc., y exhibe, cada vez más, a esta guerrilla como una confederación de diversos emprendimientos armados que se articulan frente a un discurso bipolar de la sociedad. Esto explica por qué cada frente desarrolla y despliega sus propias estrategias armadas, concibe la idea de poder popular de acuerdo a sus marcos cognitivos y se vincula de forma discrecional con las economías territoriales donde tiene presencia.

Dadas estas condiciones, no es desatinado pensar que el carácter federado del ELN nos hace topar en el presente con una insurgencia compuesta por varias organizaciones aglutinadas bajo un paraguas ideológico, que tienen como principal pegamento al frente de guerra oriental, las cuales utilizan medios criminales para mantener con vigencia sus proclamas revolucionarias y la resistencia armada que pregonan. En efecto, este paraguas disfraza y camufla las diversas apuestas armadas y económicas de la nueva camada de comandantes, quienes se muestran más criminalizados, con referentes ideológicos más difusos, pero con ínfulas de gobernar y ordenar los territorios donde tienen

presencia. De ahí la paradoja actual de esta insurgencia: ya que sus medios en poco o nada corresponden a sus tesis ideológicas, cuando no las desvirtúan, refuerzan sus proclamas políticas y visiones de sociedad. A pesar de ello, el frente de guerra oriental parece haber tenido una transformación ideológica, al menos implícita, que significa el regreso a un enfoque más jacobino de la lucha, que no respeta mucho los acumulados anteriores ni mucho menos la autonomía de los grupos regionales, a los cuales impone sus decisiones a la fuerza o por chantaje.

Apuntes conclusivos

Esta primera parte del libro tuvo como finalidad desarrollar los cuatro elementos planteados en el problema central de la investigación, para enmarcar, en un relato general, los desarrollos de los análisis territoriales de los frentes de guerra que componen el ELN y, de esta forma, exponer los diversos rostros que exhibe.

Una primera tarea fue presentar cómo y por qué se fueron configurando y desarrollando los constreñimientos organizacionales que ha padecido y padece, y cuáles podrían ser las implicaciones que en este aspecto tiene su reciente vinculación con las economías territoriales. Respecto a este último punto, la intuición evidencia que estamos presenciando una nueva etapa en el proyecto armado de esta insurgencia: cada vez hay una mayor autonomía de sus frentes de guerra en relación con los organismos de dirección federal, la cual está siendo aupada por un relevo generacional en los mandos y por un papel cada vez más protagónico del frente de guerra oriental, que insinúan el surgimiento de una nueva hegemonía dentro del conjunto de los frentes al margen de esa dirección: el Sol de Oriente se ha tornado en el cuerpo celeste con la suficiente fuerza gravitacional para mantener los diversos emprendimientos armados territoriales bajo una sigla, y que impide, de hecho, una acción colectiva propicia a las negociaciones de paz.

Otra de las tareas cumplidas es la interpelación sobre la llamada narrativa araucana: no solo se expusieron sus limitaciones para entender la trayectoria particular que cada frente de guerra ha tenido en la zona donde se ha insertado, desarrollado y recompuesto, sino que se constató la excepcionalidad de esta experiencia, ya que no ha tenido en la historia del ELN un caso que se aproxime a ella.

Además, una cosa es que el ELN se haya recompuesto con base en la experiencia araucana en los años ochenta y que haya podido sobrevivir, a inicios del milenio, como proyecto armado por los acumulados en este territorio, y otra cosa muy distinta, para dar un ejemplo, que el trabajo político organizativo de las otras estructuras sea una fiel réplica del trabajo del

Sol de Oriente. En efecto, no todos los emprendimientos armados regionales replicaron, incluso cuando quisieron, las habilidades y destrezas de los líderes araucanos, pues los factores contextuales de los territorios donde se insertaron siempre condicionaron sus posibilidades. No es lo mismo introducirse en zonas de reciente colonización por un campesinado andino que hacerlo en territorios étnicos; tampoco son iguales las condiciones en áreas del mundo caribe, previamente organizado en la ANUC, y vinculado de manera subordinada a la hacienda como estructura de poder; y qué decir del Catatumbo, región que ha recibido diversas oleadas colonizadoras de gentes de varias zonas del país, para dar algunos ejemplos.[105]

Para completar el complejo cuadro descrito, estas condiciones contextuales de los territorios se conjugaron con los diversos momentos y trayectorias de los distintos emprendimientos armados que se fueron integrando al ELN nacional. Unos emergieron durante la etapa fundacional (1965-1977) y luego fueron recogidos por el COCE en la década del ochenta; otros surgieron producto de la radicalización de la movilización social en los años setenta y ochenta; también se dieron casos de cooptación de experiencias armadas previas o de movimientos políticos de izquierda; e, incluso, hubo trabajos desarrollados a título personal, sin conexión alguna con el ELN excepto por el discurso, que luego fueron integrados al proyecto nacional.

La anterior condición explica que, si bien todas las estructuras armadas tenían un "manual" para insertarse en la vida social de sus territorios con la idea de construcción de Poder Popular como hoja de ruta, la forma como se concretó el trabajo político y la fisionomía que tomó la base social sobre la que se asentaron fue algo muy endógeno y concreto, y por lo mismo de acuerdo a los grupos poblacionales presentes, sus demandas y grados de integración a la vida nacional. Así, las distintas reivindicaciones y reclamos que esos diversos ELN territoriales decían representar se fueron articulando de forma particular en su discurso nacional, y más que el despliegue de comisiones armadas desde el centro, el desarrollo del ELN nacional se dio a partir de una lógica de centralización por cooptación, a semejanza de lo que pasaba con el bipartidismo tradicional de la segunda mitad del siglo XX (Gutiérrez, 2007). Esto explica que la dirigencia nacional tuviera limitaciones para reflejar la verdadera correlación de fuerzas territoriales, al igual que las posturas selectivas de algunos frentes respecto a la toma de decisiones alrededor de temas como la distribución de recursos, la paz, etc.

---

105 A pesar de que los diversos emprendimientos regionales son distintos del modelo de la experiencia araucana, la creciente hegemonía del Domingo Laín hace que, de alguna manera, la mayoría de los frentes estén girando, de hecho, en torno a esa referencia por convicción, chantaje o necesidad de supervivencia.

De la narrativa construida es posible señalar qué aspectos definen al ELN, *ya que los dos factores, de temporalidades distintas (constreñimientos organizacionales-marginalización de la guerra y recomposición a partir de las economías territoriales), no solo se reforzaron entre sí en su desarrollo histórico organizacional; también, permiten precisar cómo es percibido al finalizar este estudio*:

- Es una guerrilla federada, con cierta unidad y cohesión para desplegar violencia, pero que solo tiene una capacidad de desestabilización regional, nada más.
- No es una agrupación organizada nacionalmente, dado que posee una impronta bastante regional y marginal: está en su mayoría apostada en zonas de frontera.
- Es una guerrilla criminalizada en sus medios, pero, paradójicamente, con un discurso marcadamente moralista en sus fines.
- Está compuesta por diversas organizaciones que adoptan posturas selectivas frente a la comandancia, en temas ligados a la paz, la guerra y la distribución de recursos, etc.
- Es una organización armada que, de acuerdo a los contextos regionales (anclajes sociales y tipo de vínculo con economías territoriales), muestra variados rostros y diversas formas concretas de materialización.
- Esta variedad incide en su discurso por la defensa y nacionalización de los recursos naturales y en su visión bipolar del mundo: Estado vs. "su" sociedad civil organizada.[106]
- Un rasgo central son las contradicciones y problemas de coordinación que se presentan, producto de un control robusto a nivel nacional por parte de los comandantes y un frágil control de sus miembros en lo regional y local.
- Es una organización derrotada táctica y estratégicamente, pero fuerte de espíritu.
- Por eso, el tipo de violencia que despliega, salvo con otros actores armados, radica en acciones y operaciones que no requieren de grandes acumulados materiales y humanos.

Por otro lado, también se interpela la reiterada referencia que ha habido dentro de la literatura a los problemas de acción colectiva que padece este grupo, en relación con la escasa explicación y descripción de su desarrollo. Este recuento no solo prueba empíricamente su emergencia,

---

106 En referencia a los procesos organizativos de base con la influencia, impulso y apoyo del ELN.

sino que, de la misma manera, expone cómo se fueron desarrollando en el tiempo sus estructuras y cuáles han sido las implicaciones e impactos sobre la organización nacional, y los problemas que esto generó tanto al interior como al exterior de esta guerrilla.

En este asunto tuvo un gran peso la etapa y proceso de recomposición de los años setenta y ochenta, pues la decisión deliberada de Manuel, el cura Pérez, y de Nicolás Rodríguez Bautista ("Gabino") de ir cooptando y articulando diversos emprendimientos armados no solo convirtió al ELN en una organización de organizaciones, sino que, de igual forma, los procesos de institucionalización y de estructuración que se dieron con el crecimiento del grupo nunca pudieron homogeneizar ni disciplinar las experiencias armadas regionales; y, como corolario, la distribución de fuerzas y los acumulados reales territoriales de cada frente de guerra no se veían reflejados en la composición de la comandancia nacional, bien por desinterés o por una decisión deliberada de algunos frentes de no hacer parte de ella, bien porque estos líderes territoriales fueron integrados pero no obtuvieron representación en el ELN nacional.

El mejor ejemplo de esos problemas de representación al interior del ELN es el frente Domingo Laín, ya que, si bien este emprendimiento armado fue el que sustentó el proceso de recomposición y expansión territorial, por decisión propia o del COCE siempre se vio marginado de la toma de las grandes decisiones de la organización nacional, sobre todo en temas relacionados con la redistribución de la fuerza, los recursos y la paz. De ahí su constante comportamiento beligerante y discrecional frente a la dirigencia nacional, pero, también, en términos de unidad y cohesión:

> Hoy por hoy, creo yo, para mantener la cohesión y la unidad se han tenido que hacer concesiones y se han tenido que hacer fuertes negociaciones internas, y parte de esas negociaciones internas, es que el Domingo Laín tenga no solamente el poder, sino que también tenga una representación en los organismos de conducción. Por eso es… de ahí viene la presencia de Pablito en el Comando Central y desde ahí viene también la presencia de Alirio Sepúlveda en la delegación. Primera vez que el Domingo Laín va a un escenario de negociación con el gobierno, es decir, esto fue negociado. (Entrevista 2).

Vinculado con lo anterior, también se demuestran los efectos que ha tenido esta condición en materia organizacional. La estrategia de recomposición por marginalización y vinculación con las economías territoriales (2006-2020) consolidó la fisionomía federalizada de esta guerrilla, pues no solo adquirieron más vigor las fuerzas centrífugas, sino que no es desatinado afirmar que están *ad portas* de una nueva etapa, en la que les estaríamos diciendo adiós a referentes y sucesos fundacionales que sirvieron como pegamento de los emprendimientos armados que componen al ELN.

De gran importancia es el perfilamiento nacional del frente de guerra oriental como el grupo hegemónico en torno al cual están orbitando las demás estructuras armadas. Si bien se puede aludir que esto no es nuevo, lo que sí tiene de extraordinario es que esta preeminencia militar y política se ha traducido en tres nuevas aristas: una, mayor y más amplia representatividad de esta estructura en el COCE y la DN; dos, incentivó la emergencia de una nueva camada de comandantes regionales que cuestionan directamente al COCE tradicional; y, tres, la generación de una fuerte y más amplia conexión con los otros frentes de guerra del territorio nacional. El aporte materializado en el traslado de hombres y recursos le ha permitido extender sus tentáculos, lo que puede llevar a intuir que este es uno de los principales factores, al lado del discurso bipolar sociedad-Estado, que mantiene unido a este grupo guerrillero. De acuerdo con un entrevistado:

> Ellos son una fuerza que en muchos momentos resuelven cosas, prestan plata, mueven combatientes, han mandado muchos mandos de ellos a otras regiones, o sea, eso les da ese poder internamente, quizás que son una estructura que puede resolver cosas. (Entrevista 23).

Es posible que este reposicionamiento del Sol de Oriente tenga unas consecuencias para las eventuales negociaciones de paz, ya que los diálogos pasados fueron liderados por un grupo de comandantes del orden nacional que habían venido perdiendo peso en el conjunto de los frentes, al haberse separado del mando directo de los combatientes. Esta ruptura entre jefes nacionales crecientemente separados de sus bases y nuevos comandantes de frentes deslumbrados o subordinados a un frente más radicalizado, llevaría a la casi imposibilidad de recomponer el consenso interno para emprender una negociación de paz que involucre a todos los frentes. No obstante, si se quiere que cualquier diálogo avance y llegue a "algún Pereira" es necesario sentar al Sol de Oriente en las negociaciones:

> El eje de poder hoy en el ELN es el frente Domingo Laín; o sea que digamos que es la estructura que tiene más poder, (…). y que siempre ha tenido un carácter expansionista, o sea no es un tema nuevo. (…) ellos han sido una estructura muy, digámoslo sí, como muy autónoma en muchos sentidos. Y yo creo que hoy, pues son un jugador muy importante al interior del ELN. Entonces yo sí creo que, digámoslo, que pensar en un proceso exitoso de negociación con el ELN, parte de que esa estructura se convenza de ese camino. (…), no quiere decir que ellos tengan todo el poder, o que ellos sean la única voz, pero sí son una voz muy importante y muy determinante. (Entrevista 23).

En efecto, estos dos elementos son las bases vertebrales del ELN a la hora de mantener su unidad, ya que, si bien tiene múltiples factores para fragmentarse no lo ha hecho, pues el frente occidental se ha convertido, desde la década del ochenta, en el sostén de este proyecto armado derrotado

estratégicamente. Este punto interpela a quienes sostienen que la identidad elena o el llamado "ser eleno" es lo que le ha permitido sobrevivir (Gruber y Pospisil, 2015). Hay otros factores, con mayor peso, que han contribuido a que se haya mantenido en el tiempo, e incluso, el "ser eleno",[107] como identidad compartida, no garantiza que no haya una fragmentación en su interior. El mejor ejemplo son las fricciones que ha tenido a raíz del tema de la paz, pues las fuerzas centrífugas han mostrado sus posibilidades de boicotear cualquier acercamiento. Además, la identidad no garantiza, de por sí, que haya una unidad y cohesión para que una desmovilización sea exitosa; hay cuestiones más concretas y reales que explican la trayectoria, como son sus bases sociales, los aspectos organizacionales, etc.

Por otro lado, la condición organizacional y las limitaciones en los grados de institucionalización, que se generaron por la forma cómo se recompuso el ELN, permitieron demostrar que cada emprendimiento armado desarrolló su propia base social, unas formas propias de construcción de poder popular, y unas particulares tácticas armadas, así como las lógicas en el tipo de violencia desplegada. En la actualidad, el mejor ejemplo de lo dicho atrás es cómo se materializa de forma diferenciada la idea de resistencia armada.

De ahí que cada frente de guerra no solo tiene una textura y fisionomía propias, sino que también, desde esos acumulados, suele interactuar con el ELN nacional. Esto es señalado por un histórico líder del frente de guerra oriental: "La guerrilla, más allá de los combates y la guerra, ha sido un actor que permitió que muchos de estos territorios se construyeran, se poblaran, se organizaran, se integraran incluso a la Nación. ("Danielito", citado en Celis y Gutiérrez, 2019).

Otro elemento que se controvierte es el mito y la etiqueta de ver y distinguir al ELN como una organización político-militar. Esta autodenominación resulta ser una entelequia, según resaltó uno de los entrevistados; además, habla poco de cómo se dilucida el ELN territorialmente, no solo porque no capta sus variaciones territoriales, sino porque tampoco dice mucho de la textura de las relaciones con los no combatientes. Sobre tal denominación hay que puntualizar varios aspectos. Primero, de por sí toda guerrilla es una organización político militar, porque no solo extrae recursos de una base social, sino porque, para bien o para mal, ordena y regula la vida de sus integrantes; basta ver a las FARC y sus vínculos con las organizaciones

107 Para estos autores, esta identidad está constituida por eventos y mártires célebres (Camilo Torres es el mejor ejemplo) dentro de la organización, la cual le ha dado asiento a un discurso interno que sobresalta la tenacidad y la capacidad de adaptación, sin importar las coyunturas adversas que tienen sus integrantes. Es todo un modelo cognitivo para entender y explicar la existencia de dicha insurgencia (Gruber y Pospisil, 2015).

de campesinos cocaleros en Caquetá, Putumayo y Guaviare; a los paramilitares en algunas zonas del Urabá o Córdoba y sus promotores sociales; incluso a GSP como los Caparrapos en el bajo Cauca con sectores mineros y cocaleros de sus áreas de influencia. Segundo, esta es una invención que ha tomado fuerza en las últimas décadas para evitar cualquier ejercicio comparativo con otras insurgencias y para mostrar aparentes fortalezas donde no las hay. El ELN, como cualquier otra guerrilla, hace trabajo político, despliega violencia y tiene unas apuestas claras en materia de Estado y sociedad. Tercero, si aterrizamos los hechos, esta categoría se muestra más que vacía: poco o nada explica las variaciones en la textura de las relaciones de los diversos elenes regionales con los procesos organizativos y, menos aún, habla de los distintos énfasis que adquiere el trabajo político de los frentes de guerra, pues en unos la relación tiende a ser más militarizada, en otros más política y en algunos una combinación de las dos anteriores. Cuarto, esta etiqueta da la impresión de responder a un intento de encubrimiento y diferenciación frente a las FARC, por la evidente y desventajosa correlación de fuerzas que tuvo el ELN: no solo nunca pudo desplegar el tipo de operaciones militares que desarrolló las FARC en los años noventa, sino que menos aún logró contar nunca con el pie de fuerza que ostentaron los hombres de Manuel Marulanda Vélez.

En la actualidad, el ELN es marginal, federalizado y no tiene un proyecto político nacional (Entrevista 1); además, utiliza repertorios violentos acordes con la distribución endógena de poder en las localidades donde tiene presencia, y en pro de sus propios intereses territoriales: control de corredores de movilidad, bases sociales ligadas a actividades económicas, etc. Así, el principal objetivo de su batería armada no es combatir al Estado, sino a otros grupos armados con los cuales compite por territorio y bases sociales. Además, la diversidad de sus anclajes sociales y la forma como se fueron integrando los diversos emprendimientos armados explican varios aspectos estructurales de esta insurgencia: uno, problemas endémicos y crónicos de acción colectiva, en parte porque su cúpula no refleja la distribución de poder real y concreta de cada frente, y en parte porque su proceso de institucionalización y homogeneización resultó limitado para poner en cintura los diversos proyectos armados que lo componen; dos, lo variopinto de cada una de sus organizaciones expresa su diversidad territorial, sus diferenciadas capacidades de regulación y ordenamiento de los no combatientes, el tipo y calidad de vinculación con las economías territoriales, por ejemplo. Además, estos acumulados definen las posturas selectivas de algunos frentes respecto al ELN nacional, en torno a temas de recursos, la paz, etc.

Finalmente, el actual estado del ELN lo muestra como un pastiche que entrelaza elementos de varias tradiciones políticas radicales,

incluidas el socialismo, el anarquismo, el comunismo y la teología de la liberación cristiana. También lanza sus opiniones sobre una variedad de temas políticos, sociales, culturales, educativos, etc., pero su enfoque principal es la oposición a las políticas económicas neoliberales y a las industrias extractivas, especialmente la minería, y la exploración y producción de petróleo. Este énfasis en el tema de los recursos naturales es crucial para hablar con esta guerrilla, pues considera que la élite política y económica de Colombia es un bloque homogéneo, títere del imperialismo estadounidense, que se dedica y cimienta su poder político y económico contra las actividades y procesos organizativos que son desarrollados por la clase popular que ellos dicen representar y defender (International Crisis Group, 2018).

Para cerrar, es válido sostener que con este recuento se cumplen dos tareas aparentemente sencillas, pero nada fáciles en el papel: i) descifrar y definir al ELN para que el lector tenga a la mano una conceptualización de esta insurgencia y los atributos que la definen; y ii) aportar los insumos necesarios para avanzar en los estudios de caso y dilucidar concretamente cómo se materializa esta organización en el presente. Para algunos, este apartado conclusivo puede no recoger toda la riqueza de lo narrado hasta acá, pero para eso habrá unas conclusiones finales y unas recomendaciones de política pública en materia de paz y seguridad. No obstante, el objetivo sí se cumplió, sobre todo al exponer y trazar cómo ha sido el desarrollo organizacional de esta guerrilla, para definirla no solo en términos de su naturaleza y ethos, sino también para explicar la trayectoria reciente que ha tomado. De ahí la importancia en orden a la siguiente sección, donde se expone caso a caso cómo cada frente de guerra se materializa territorialmente, y muestra que el ELN tiene varias manos y pies con los cuales echa polo a tierra.

Referencias

Documentos oficiales del ELN

Ejército de Liberación Nacional [ELN]. (1986). *I Congreso. Asamblea Nacional Camilo Torres*.

Ejército de Liberación Nacional. (1990). *II Congreso Nacional. Poder Popular y Nuevo Gobierno.*

Ejército de Liberación Nacional. (1996). *III Congreso Nacional. "Comandante Édgar Amílkar Grimaldos Barón" Somos revolución, construimos poder y triunfaremos.*

Ejército de Liberación Nacional. (1997). *Código de guerra*.

Ejército de Liberación Nacional. (1997a). *Principios organizativos*.

Ejército de Liberación Nacional. (1997b). *Plan estratégico 1997-2007*.

Ejército de Liberación Nacional. (1997c). *Táctica para el período: por una nueva legitimidad. Presentación a manera de balance.*

Ejército de Liberación Nacional. (1998). *Acuerdos de la Puerta del Cielo*.

Ejército de Liberación Nacional. (1998a). *Que este proceso no termine ni en desmovilización ni en desarme*.

Ejército de Liberación Nacional. (2000). *Declaración política. Para los revolucionarios no hay tiempos difíciles.*

Ejército de Liberación Nacional. (2000a). *Memorias. Manuel Pérez Martínez.* Editorial Nueva Colombia.

Ejército de Liberación Nacional. (2002). *Algunos hitos de construcción urbana*.

Ejército de Liberación Nacional. (2004). *Carta Militante. Sexto Pleno de la Dirección Nacional.*

Ejército de Liberación Nacional. (Julio 4 de 2005). *Nuestra Voz*. Intervención radial del primer comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista.

Ejército de Liberación Nacional. (2006). *Estatutos*.

Ejército de Liberación Nacional. (2006a). IV Congreso Nacional. Por un nuevo gobierno de Nación, Paz y Equidad. *Revista Simacota*, 54-62. Recuperado de http://www.cedema.org/uploads/simacota.pdf

Ejército de Liberación Nacional. (2006b). *Hay que evitar conflictos entre los revolucionarios.*

Ejército de Liberación Nacional. (Julio 4 de 2006c). Palabras de clausura al IV Congreso. *Revista Insurrección* (066). Recuperado de http://www.cedema.org/uploads/INSURRECCION066.pdf

Ejército de Liberación Nacional. (30 de mayo de 2006d). *Comunicado del Comando Central del eln al pueblo araucano. Estamos comprometidos en detener este desangre inútil*. Recuperado de http://www.cedema.org/ver.php?id=1384

Ejército de Liberación Nacional. (4 de julio de 2006e). Declaración Política del IV Congreso del Ejército de Liberación Nacional. *Revista Insurrección,* (066). Recuperado de http://www.cedema.org/uploads/INSURRECCION066.pdf

Ejército de Liberación Nacional. (2006f). *Táctica. Cuadernos del militante* No. 2. IV Congreso.

Ejército de Liberación Nacional. (2009). *Somos Pueblo y Revolución. Identidad.*

Ejército de Liberación Nacional. (31 de marzo de 2010). *Ratificamos la posición del eln sobre el narcotráfico*. Recuperado de http://www.cedema.org/ver.php?id=3853

Ejército de Liberación Nacional. (2011). ELN *47 años de historia*. Recuperado de http://www.cedema.org/uploads/ELN_47.pdf

Ejército de Liberación Nacional. (Abril-junio de 2012). *Colombia Rebelde* (1). [Video]

Ejército de Liberación Nacional. (Agosto-octubre de 2013). *Colombia Rebelde* (5) [Video]

Ejército de Liberación Nacional. (Diciembre 2013-marzo 2014). *Colombia Rebelde* (6) [Video].

Ejército de Liberación Nacional. (2015). *Guerra revolucionaria, poder popular y nueva nación.*

Ejército de Liberación Nacional. (4 de julio de 2015a). *Saludo del Comandante Antonio García al frente de Guerra Oriental*. Recuperado de http://www.cedema.org/ver.php?id=6821

Ejército de Liberación Nacional. (2015b). *V Congreso.* ELN *50 años: raíces, luchas y esperanzas junto al pueblo*.

Ejército de Liberación Nacional. (s.f.). *Reglamento interno*.

Ejército de Liberación Nacional. (s.f. a). *Reglamento comunitario para la explotación y comercialización de madera. Río San Juan y sus afluentes.* Recuperado de https://pares.com.co/wp-content/uploads/2017/02/Reglamento-madera.pdf

Ejército de Liberación Nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. (2013). *Normas unitarias de comportamiento y convivencia del Frente de Guerra Oriental Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño y del Bloque Comandante Jorge Briceño de las* FARC-EP.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. (10 de febrero de 2007). *Comunicado del Bloque Caribe de las farc*.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo [FARC-EP]. (6 de diciembre de 2005). *Carta de Manuel Marulanda Vélez al Comandante Nicolás Rodríguez*.

Lara, Parada Ricardo. (s.f.). Ricardo Lara Parada se dirige el ELN [Archivo de video].

Documentos y comunicados de organizaciones sociales

Asociación de Campesinos del Catatumbo [ASCAMCAT]. (18 de julio de 2020). *Alerta temprana sobre posible masacre en la vereda Totumito-Carboneras, municipio de Tibú*. Recuperado de https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article25662.

Comité de Seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡YA! en el Chocó y Secretaría Técnica del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó. (2019). *Primer informe de seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya¡ en el Chocó. Balance y análisis de la crisis humanitaria durante el 2018*. Quibdó: Suecia Sverige/Diakonia. Recuperado de https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2020/01/I-Informe-de-seguimiento-AHY-Feb-2019.pdf

Comité de Seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡YA! en el Chocó y Secretaría Técnica del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó. (2019a). *Segundo informe de seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya¡ en el Chocó*. Quibdó: Suecia Sverige/Diakonia. Recuperado de https://es.slideshare.net/ELMANDUCO/segundo-informe-de-seguimiento-acuerdo-humanitario-ya

Comité de Seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡YA! en el Chocó y Secretaría Técnica del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó. (2019b). *Tercer informe de seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya¡ en el Chocó*. Quibdó: Suecia Sverige/Diakonia. Recuperado de https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2020/01/III-Informe-de-seguimiento-AHY-Nov-2019.pdf

Ejército Nacional, Comando Segunda Brigada. (1998e). Oficio 002180. Barranquilla, octubre 30.

Ejército Nacional, Comando Cuarta Brigada. (2000b). Oficio 08273. Envío informe situación autopista Medellín-Bogotá. Medellín, 9 de octubre

Entrevistas

Entrevista 1: Carlos Velandia, exmiembro de la Dirección Nacional del ELN y gestor de paz, abril 8 de 2020.
Entrevista 2: Carlos Velandia, exmiembro de la DN del ELN y gestor de paz, mayo 14 de 2020.
Entrevista 3: grupo focal con mineros de la Serranía de San Lucas-Guayacanas, San Pedro Frío, Zona Baja de San José, Guamacó y el casco urbano de Santa Rosa, mayo 4 de 2016.
Entrevista 4: exconcejal de Simití (sur de Bolívar), mayo 3 de 2016.
Entrevista 5: cúpula del frente de Guerra Occidental, junio 2 de 2020.
Entrevista 6: exmando del frente 30 de las FARC, febrero 15 de 2020.
Entrevista 7: líder social del medio Atrato, septiembre 22 de 2019.
Entrevista 8: miembro de un Concejo Comunitario del municipio de Tumaco, marzo 2 de 2019.
Entrevista 9: representante de ASCAMCAT (Asociación de Campesinos del Catatumbo), agosto 23 de 2017.
Entrevista 10: excomandante del bloque Magdalena Medio, febrero 26 de 2019.
Entrevista 11: académica experta en el tema relaciones binacionales Colombia-Venezuela y exdelegada por el Gobierno en los diálogos de Quito y La Habana, 2019.
Entrevista 12: campesino del municipio de Simití, mayo 3 de 2016.
Entrevista 13: líder social de Simití, mayo 3 de 2016.
Entrevista 14: poblador de Santa Rosa del Sur, mayo 4 de 2016.
Entrevista 15: experto de la unidad de criminalidad de la Fiscalía, febrero 2 de 2019.
Entrevista 16: experto de la unidad de criminalidad de la Fiscalía, febrero 15 de 2019.
Entrevista 17: mando medio del frente décimo de las FARC, febrero 16 de 2020.
Entrevista 18: habitante del corregimiento La Guayacana (Tumaco), marzo 20 de 2020.
Entrevista 19: funcionaria de la Defensoría del Pueblo (Magdalena medio), abril 29 de 2020.
Entrevista 20: grupo focal con miembros de la asociación minera del Sur de Bolívar, marzo 7 de 2020.
Entrevista 21: exmando medio de las FARC residente en Cauca, febrero 15 de 2020.
Entrevista 22: Carlos Velandia, exmiembro de la DN del ELN y gestor de paz, junio 30 de 2020.
Entrevista 23: Luis Eduardo Celis, académico y experto en el ELN, julio 4 de 2020.
Entrevista 24: comandancia del frente de guerra occidental, junio de 2020.
Entrevista 25: Leyner Palacios, en el marco de Análisis de Coyuntura de *Semana*-Cinep, febrero 16 de 2020.

Prensa

Aldana, Andrea. (22 de enero de 2017). Viaje al frente del Eln que destrabó la negociación. *El Espectador*.
Ante Meneses, Rodrigo. (19 de diciembre de 2019). Reconfiguración del conflicto armado- Norte del Cauca y Buenaventura. *La Silla Vacía*.

Aponte, Andrés y Amaya, Daniel. (17 de diciembre de 2019). Descifrando al Eln ¿Por qué es tan difícil negociar con esta guerrilla? *El Espectador.*

Ávalos Flórez, Edison Duván (noviembre 2 de 2009). La invasión de los que huyen. *Verdad Abierta.*

BBC Mundo. (5 de mayo de 2018). Gobierno de Colombia y el ELN acuerdan retomar los diálogos de paz en una nueva sede tras el retiro de Ecuador.

Bolaños, Edinson. (13 de noviembre de 2017). Saravena, la última gota de dolor. *El Espectador*.

Bonilla, Laura. (7 de julio de 2014). Eln y el narcotráfico: una relación peligrosa. *El Espectador.*

Carvalho, Bruno Amaral de. (19 de junio de 2020). Colombia. La guerrilla fundada por sacerdotes no renuncia a las armas. Entrevista al comandante Uriel del Eln *Resumen Latinoamericano*. Recuperado de https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/06/19/colombia-la-guerrilla-fundada-por-sacerdotes-no-renuncia-a-las-armas-entrevista-al-comandante-uriel-del-eln/

Colprensa. (30 de agosto de 2005). Entrevista del comandante Antonio García.

Colprensa. (24 de junio de 2017). Eln cuestiona operaciones militares en El Catatumbo.

Colprensa/El País. (2 de mayo de 2020). Otros siete integrantes del Eln se desmovilizaron en el Cauca.

Díaz, Juan Carlos. (29 de mayo de 2012). En el sur de Bolívar se reactivó el cultivo de coca y la extorsión. *El Tiempo*.

Duque, Tatiana. (6 de diciembre de 2019). El Eln gana terreno en Nariño y pelea hegemonía en Chocó. *La Silla Vacía.*

EFE Noticias. (21 de enero de 2019). Eln se atribuye la autoría del atentado contra la Escuela General Santander. *El Espectador*.

El Colombiano. (14 de mayo de 2020). Dos cabecillas y al menos 20 guerrilleros muertos deja bombardeo contra el Eln en Bolívar.

El Espectador. (7 de julio de 2014). El Frente Domingo Laín, mitos y realidades de una máquina de guerra.

El Espectador. (12 de septiembre de 2016). Los alcances del paro armado del Eln.

El Espectador. (27 de julio de 2018). Muere supuesto líder de la dirección nacional del Eln en operación militar.

El Espectador. (4 de septiembre de 2018a). Secuestro, "el florero de Llorente" en los diálogos con el Eln.

El Espectador. (20 de septiembre de 2019). El histórico bloque del Eln que comandaba alias "El Perro".

El Espectador. (20 de enero de 2020). En Tumaco, declaran emergencia humanitaria por desplazamiento forzado de 3.000 personas.

El Espectador. (4 de febrero de 2020a). Paro armado: la pelea entre el Eln y el Epl en el Catatumbo.

El Espectador. (17 de febrero de 2020b). Hubo 117 intenciones terroristas durante el paro armado del Eln, según las FF. MM.

El Espectador. (16 de marzo de 2020c). Eln, dos meses de accionar político-militar eleno.

El País. (17 de julio de 2013). "Fue un baldado de agua fría para ellos": alias Tigre, desmovilizado jefe del ELN.
El Tiempo. (2 de abril de 1995). Domingo Laín, un frente poco sumiso.
El Tiempo. (26 de junio de 1996). Cayó en Bogotá cuarto jefe del ELN.
El Tiempo. (16 de julio de 1998). El acuerdo de Puerta del Cielo.
El Tiempo. (11 de abril de 2000). Primer muerto por paro armado.
El Tiempo. (22 de febrero de 2000a). Destruida alcaldía de La Jagua de Ibirico.
El Tiempo. (20 de julio de 2000b). Las rutas del secuestro.
El Tiempo. (18 de enero de 2000c). En el Chocó y Antioquia se inició apagón por voladuras.
El Tiempo. (22 de septiembre de 2002). Tres departamentos en zonas de rehabilitación.
El Tiempo. (30 de enero de 2003). Arauca: en el ojo del huracán.
El Tiempo. (14 de julio de 2003a). Balance de la operación Marcial.
El Tiempo. (3 de junio de 2003b). Los golpes militares a la guerrilla.
El Tiempo. (8 de junio de 2005). Sigue la desbandada del ELN.
El Tiempo. (23 de marzo de 2006). ELN se queda con clientes de FARC.
El Tiempo. (11 de diciembre de 2007). 'Rastrojos', grupo vinculado a narcos, se habría aliado con el Eln en Cauca para combatir a las Farc.
El Tiempo. (2 de febrero de 2007a). Exterminio al ELN.
El Tiempo. (9 de abril de 2008). El ELN está dividido: 'Francisco Galán'.
El Tiempo. (23 de enero de 2010). En tres citas se pactó la alianza entre el Eln y las Farc.
El Tiempo. (26 de enero de 2012). Golpe a 'Los Comba' deja en evidencia alianza con el ELN.
El Tiempo. (27 de febrero de 2016). Estos son los jefes del Eln que se le están atravesando a la paz.
El Tiempo. (10 de octubre de 2016a). ¿Quiénes integran el Comando Central del Eln?
El Tiempo. (24 de abril de 2018). ¿Por qué el conflicto en el Catatumbo y qué ha hecho el Gobierno?
El Tiempo. (23 de enero de 2019). Alias Uriel, el otro poderoso eleno que deja ver división interna.
El Tiempo. (4 de septiembre de 2019a). Mueren en combates dos cabecillas del ELN en el sur de Bolívar.
El Tiempo. (30 de abril de 2020). 20 guerrilleros del Eln se desmovilizaron tras combates en Cauca.
El Tiempo. (7 de julio de 2020a). Así se mueve el negocio finquero del Eln en la frontera con Venezuela.
Europa Press. (30 de marzo de 2017). El ELN anticipa que el 7 de abril firmará un acuerdo de desminado con el Gobierno. Recuperado de https://www.europapress.es/internacional/noticia-eln-anticipa-abril-firmara-acuerdo-desminado-gobierno-20170330174343.html
González, David. (20 de febrero de 2020). ELN: ¿Qué tan poderosa es la guerrilla que anunció un paro armado en Colombia? *France 24.*
Hernández Cifuentes, Yhoban Camilo. (22 de octubre de 2018). Víctimas entregaron informe sobre la Operación Orión al sistema integral de verdad, justicia y reparación. *Agencia de Prensa IPC.*

Hernández-Mora, Salud. (21 de abril de 2019). La guerra de los 'Caparrapos'. *El Tiempo*.
Johnson, Kyle. (15 de abril de 2020). Conociendo a Alfonso Cano. *La Silla Vacía*.
La Opinión. (20 de julio de 2014). La lista del holocausto paramilitar en Norte de Santander.
Laverde, Juan David. (10 de enero de 2015). Los documentos inéditos del Eln. *El Espectador*.
Macías, Javier Alexánder. (11 de julio de 2010). Mueren militares en combates en Arauca. *El Colombiano*.
Macías, Javier Alexánder. (22 de noviembre de 2018). ELN entrega mercados del Gobierno venezolano en la frontera. *El Colombiano*.
Méndez, Alicia. (15 de octubre de 2019). La lucha del Ejército para sacar al Eln del Bajo San Juan chocoano. *El Tiempo*.
Menéndez, Mario. (Primera quincena de agosto de 1967). El Ejército de Liberación Nacional de Colombia. *Revista Sucesos*, (34).
Molano Jimeno, Alfredo. (5 de febrero de 2018). El Carmen del Darién, centro del conflicto. *El Espectador.*
Molina, Tatiana. (2 de diciembre de 2013). El negocio de la coca, 20 años después. *El Espectador*.
Monsalve, Ricardo. (4 de enero de 2019). ¿Eln reclutó a los Caparrapos en Bajo Cauca? *El Colombiano*.
Noguera, Iván. (24 de septiembre de 2000). Cerco a Cali desde Los Farallones. *El Tiempo*.
Noticias Caracol. (30 de enero de 2018). Gigantesca operación contra el frente occidental del ELN en Chocó.
Ospina, Clara Elvira. (25 de junio de 1993). Brigadas móviles: objetivo del ELN. *El Tiempo.*
Páramo, Andrés. (6 de septiembre de 2014). Pacelli: ¿el camino del posconflicto? *El Espectador*.
RCN Radio. (6 de febrero de 2020). 'El Paisa' conformó el bloque 'Alfonso Cano' para delinquir en Nariño.
Rendón Marulanda, Olga Patricia. (18 de octubre de 2018). Machuca, el error del Eln que no ha obtenido perdón. *El Colombiano*. Recuperado de https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/masacre-del-eln-en-machuca-segovia-cumple-20-anos-IX9514921
Rubio, Miller. (5 de diciembre de 1992). Conmoción en el ELN por captura de Galán. *El Tiempo*.
Sánchez, Nicolás. (26 de marzo de 2019). El nuevo panorama de la guerra en el Catatumbo. *El Espectador.*
Semana. (31 de mayo de 1993). ¿Se desmoviliza el cura?
Semana. (26 de octubre de 1998). La Guerra de San Lucas.
Semana. (21 de febrero de 2000). En tinieblas.
Semana. (18 de diciembre de 2000a). Camino culebrero.
Semana. (27 de marzo de 2000b). La suerte del ERP.

Semana. (18 de mayo 2002). Las zonas de rehabilitación han producido sólo resultados negativos.
Semana. (27 de octubre de 2003). Gobierno tras las rejas.
Semana. (2 de marzo de 2007). Farc contra ELN.
Semana. (19 de enero de 2009). Cómo el Ejército se alió con el ELN en Arauca.
Semana. (26 de enero de 2009a). Todos contra las FARC.
Semana. (21 de noviembre de 2009b). La guerra por el coltán.
Semana. (20 de julio de 2013). Los 30 desmovilizados del ELN.
Semana. (7 de agosto de 2014). Es más rentable para los ilegales explotar oro que coca.
Semana. (8 de julio de 2014). Es más rentable para los ilegales explotar oro que coca.
Semana. (6 de febrero de 2016). El millonario complejo cocalero del ELN.
Semana. (9 de mayo de 2017). ¿De qué hablan las FARC y ELN en La Habana vestidos de civil?
Semana. (8 de diciembre de 2017). ELN se atribuye responsabilidad en masacre de Magüí Payán.
Semana. (28 de enero de 2018). Presidente Santos asegura que está confirmando la veracidad del comunicado del ELN.
Semana. (30 de enero de 2019). ¿Volvió la guerra al norte del Cauca?
Semana. (3 de julio de 2019a). Así se enfrentan el ELN, las AGC y las disidencias por el control de La Cordillera en Nariño.
Semana. (19 de febrero de 2020). Así se reparte el ELN y el Clan del Golfo el control de Chocó.
Semana. (25 de abril de 2020a). La nueva guerra entre disidentes y ELN que golpea al Cauca.
Semana. (19 de julio de 2020b). Asociación campesina denuncia masacre en Tibú.
Semana. (4 de enero de 2020c). El regreso del terror a Bojayá.
Trejos, Luis Fernando. (20 de mayo de 2020). ELN: entre lo político y lo delincuencial. *La Silla Vacía*.
Vanguardia. (10 de abril de 2017). Hace 18 años el Eln secuestró en pleno vuelo un Fokker de Avianca en Bucaramanga.
Velandia, Carlos. (2012). Los ajusticiamientos. *Semana*.
Velandia, Carlos. (8 de octubre de 2015). El ELN y la construcción de sus perfiles democráticos en 40 puntos. *Agencia Prensa Rural*. Recuperado de https://prensarural.org/spip/spip.php?article17900.
Verdad Abierta. (29 de junio de 2011). La batalla entre 'paras' y guerrilla por la Autopista Medellín-Bogotá.
Verdad Abierta. (28 de septiembre de 2011a). Un singular pacto de paz Eln-Farc.
Verdad Abierta. (15 de mayo de 2015). La petro-guerra del Eln en Arauca.
Verdad Abierta. (31 de agosto de 2015a). Ocho puntos para entender la guerra en Magdalena.
Verdad Abierta. (9 de enero de 2015b). 'Pablito': el fiel de la balanza en el Eln.
Verdad Abierta. (30 de agosto de 2018). Chocó, martirizado por expansión de 'elenos' y 'gaitanistas'.

Verdad Abierta. (26 de marzo de 2018). La nueva guerra ganó que se desató en el Catatumbo.

Verdad Abierta. (27 de julio de 2020). Las guerras del Eln por dominar la frontera venezolana en Norte de Santander.

Villamizar, Darío. (16 de febrero de 2016). Sotanas, política y fusiles. *El Espectador*.

Bibliografía

Acevedo Tarazona, Álvaro. (2017). *1968. Historia de un acontecimiento. Utopía y revolución en la universidad colombiana*. Bucaramanga: Ediciones Universidad Industrial de Santander.

Aguilera Peña, Mario. (2006). ELN: entre las armas y la política. En Francisco Gutiérrez y María Emma Wills (Coords.), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* (pp. 119-151). Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales/Editorial Norma.

Aguilera, Mario. (2014). *Contrapoder y justicia guerrillera: fragmentación política y orden insurgente en Colombia 1952-2003*. Bogotá: IEPRI y Debate Penguin Random House.

Amaya, Daniel y Ortega, Henry. (2019). Dinámicas de poblamiento, conflicto armado y formas de regulación de la minería en el departamento de Nariño. En *Escenarios de la minería artesanal y pequeña escala en Nariño: Ambiente, posconflicto y alternativas*. Bogotá: Cinep.

América Libre. (2009). *Camilistas. Vigencia de una tradición revolucionaria de nuestra América*. Buenos Aires: El Colectivo.

Aponte, Andrés. (2012). Cúcuta y el Catatumbo: entre la integración y la marginalización. Disputas territoriales, arreglos institucionales e imposición de un orden social de la guerra. En Fernán González, Omar Gutiérrez, Camilo Nieto, Andrés Aponte y José Cuadros, *Conflicto y territorio en el Oriente colombiano* (pp. 302-362). Bogotá: Odecofi-Cinep.

Aponte, Andrés. (2013). *Santa Rosa del Sur: el caso de un sincretismo institucional en medio de la lucha armada*. Mimeo.

Aponte, Andrés. (2019). *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016*. Bogotá: EDUCAPAZ/Cinep/Pontificia Universidad Javeriana (Cali).

Aponte, Andrés. (2020). *Orden social y fusiles en Colombia, 1952-2011. Gobernanza, población y territorio en la esquina sur del Tolima*. Mimeo

Aponte, Andrés. (9 de noviembre de 2020a). *La baja de "Uriel" y el futuro del eln: una mirada más honda. Razón Pública*. Recuperado de https://razonpublica.com/la-baja-uriel-futuro-del-eln-una-mirada-mas-honda/

Aponte, Andrés; Arboleda, Zohanny y Barrera, Víctor. (2016). *Ambiente, minería y posconflicto en Colombia: los casos de Catatumbo y Sur de Bolívar*. Bogotá: Cinep/ NIMD/Fescol/Cordaid.

Arenas, Jaime. (1971). *La guerrilla por dentro*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.

Arenas, Jacobo. (1985). *Cese al Fuego*. Bogotá: Editorial Oveja Negra.

Arjona, Ana. (2016). Institutions, Civilian Resistance and Wartime Social Order: A Process-driven Natural Experiment in the Colombian Civil War. *Latin American Politics and Society, 58*(3), 99-122.

Arjona, Ana. (2017). *Rebelocracy. Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ávila Martínez, Ariel y Núñez Gantiva, Magda P. (2013). *Expansión territorial y alianzas tácticas*. Recuperado de http://www.ideaspaz.org/tools/download/54293

Bakke, Kristin; Cummimgham, Kathleen and Symour, Lee. (2012). A Plague of Initials: Fragmentation, Cohesion, and Infighting in Civil Wars. *Perspectives on Politics*, *10*(2), 265-283.

Balcells, Laia. (June, 2011). Continuation of Politics by Two Means: Direct and Indirect Violence in Civil War. *Journal of Conflict Resolution*, *55*(3), Fighting and Voting: Violent Conflict and Electoral Politics (June 2011), pp. 397-422.

Barrera, Víctor. (2014). Las vicisitudes de la integración. Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar. En Fernán González, Diego Quiroga, Támara Ospina-Posse, Andrés Aponte, Víctor Barrera y Eduardo Porras, *Territorio y conflicto en la Costa Caribe*. Bogotá: Odecofi-Cinep.

Barrera, Víctor Andrés; García, Martha Cecilia; Coronado Delgado, Sergio Andrés; Hoyos, Carlos y Guzmán, Tania (2016). *Tendencias de la movilización social en municipios críticos para el posconflicto: principales hallazgos*. Documento Ocasional N. 80. Bogotá: Cinep.

Barrera, Víctor; Carvajal, Camila y Aponte, Andrés. (2016). *Viabilidad y alternativas para la implementación del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito. Una mirada regional desde el Catatumbo (Norte de Santander)*. Mimeo.

Barter, Shane J. (2014). *Civilian Strategy in Civil War, Insights from Indonesia, Thailand, and the Phlipines*. New York: Palgrave McMillan.

Bolaños, Graciela; Bonilla, Víctor; Fula, Jorge; Espinoza, Myriam; García, Vianney; Lara Jorge, … Bolaños, Libia. (2012). "*Nuestra vida ha sido nuestra lucha*"*: Resistencia y memoria en el Cauca Indígena*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Bonet, Jaime. (Abril de 2007). *¿Por qué es pobre el Chocó?* Recuperado de http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-90.pdf

Bonet, Jaime y Meisel, Adolfo. (2006). *Polarización del ingreso per cápita departamental en Colombia, 1975-2000*. Documentos de trabajo sobre economía regional 76. Cartagena: Banco de la República – Centro de Estudios Económicos Regionales.

Breslawski, Jori. (2020). The Social Terrain of Rebel Held Territory. *Journal of Conflict Resolution, 65*(2-3), 1-27.

Broderick, Walter J. (2013). *Camilo el cura guerrillero*. Bogotá: Editorial Icono.

Bultman, Daniel. (2018). The social structure of armed groups. Reproduction and change during and after the conflict. *Small Wars & Insurgencies, 29*(4), 607-628.

Cárdenas, Carlos Francisco y Duarte, Carlos Arturo. (2008). Fusiles de madera: rituales de paso y procesos de inserción simbólica en la guerrilla colombiana. *Maguaré*, (22), 293-338.

Celis, Luis Eduardo. (2019). *Una Paz sin dolientes. Diálogos Gobierno-eln, 1982-2019*. Bogotá: NC Producciones/Impresol Ediciones.

Celis, Luis y Gutiérrez, Omar. (2015). *Las dinámicas de colonización campesina del Sarare, la organización comunitaria, la acción colectiva y el devenir de parte de este movimiento campesino en guerrilla. 1959- 1980*. Mimeo.

Celis, Luis y Gutiérrez, Omar. (2019). “*Daniel*”, *Volvería a vivir la vida que viví*. Mimeo.

Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2014). “*Patrones*” *y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960-2012)*. Bogotá: Autor.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014a). *Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia*. Bogotá: Autor.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *Una guerra sin edad. Informe nacional reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano*. Bogotá: Autor.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). *Catatumbo: Memorias de vida y dignidad*. Bogotá: Autor.

Centro Nacional de Memoria Histórica, Comité de Integración del Macizo Colombiano y Fundación del Suroccidente Colombiano. (2018). *Crecer como un río. Jornaliando cuesta arriba por vida digna, integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia*. Bogotá: CNMH.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-Grupo de Memoria Histórica [CNRR-GMH]. (2011). *El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (atcc)*. Bogotá: CNRR-GMH.

Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR]. (18 de junio de 2018). *El origen de las restricciones en la guerra*. Recuperado de https://www.icrc.org/es/publication/el-origen-de-las-restricciones-en-la-guerra

Corporación Nuevo Arco Iris. (2008). Juan Carlos Cuéllar Victoria. Mimeo.

Cubides, Fernando (2005). *Burocracias armadas: el problema de la organización en el entramado de las violencias colombianas*. Bogotá: Editorial Norma.

Daly, Sarah Zukerman. (2012). Organizational legacies of violence: Conditions favoring insurgency onset in Colombia, 1964-1984. *Journal of Peace Research, 49*(3), 473-494.

De Currea-Lugo, Víctor (Ed.). (2015). *Negociación Gobierno-eln. Y, sin embargo, se mueve*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

De Currea-Lugo, Víctor (Comp.). (2016). *Historias del Sarare. De cómo el occidente de Arauca se fue poblando hasta convertirse en un sueño colectivo*. Bogotá: Ediciones Ántropos.

De Currea-Lugo, Víctor. (2018). *Historias de guerra para tiempos de paz. Relatos de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional*. Bogotá: Editorial Planeta.

Defensoría del Pueblo. (2017). *Grupos Armados Ilegales y nuevos escenarios de riesgo en el pos acuerdo*. Bogotá: Autor.

Defensoría del Pueblo. (2017a). *Problemática humanitaria en la Región Pacífica Colombiana*. Bogotá: Autor.

Duverger, Maurice. (1951). *Los partidos políticos*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Duarte, Carlos. (2015). *Desencuentros territoriales. La emergencia de los conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca*. Bogotá: Icanh.

Echandía, Camilo. (1992). *Los frentes del eln y las Farc*. Bogotá: Presidencia de la República, Consejería para la Paz.

Echandía, Camilo. (2013). *Auge y declive del Ejército de Liberación Nacional (eln). Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

Echandía, Camilo. (Abril de 2015). *El ABC del eln. Evolución del frente de guerra oriental (territorialidad, iniciativa armada y relación con la población y las economías ilegales)*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/553e5e1a837cd.pdf

Elías, Norbert. (2012). *La sociedad cortesana*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Escobedo, Rodolfo y Echandía, Camilo. (Diciembre de 2003). *Panorama actual del Chocó*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/319141466 _Panorama_actual_del_Choco

Espejo Germán y Garzón, Juan Carlos. (2005). *La encrucijada del eln*. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia.

Fiscalía General de la Nación [FGN] (2013). Conclusiones pleno del frente de guerra oriental del ELN, análisis DNCTI-DI-SAC-41200- 765337. Bogotá: Autor.

Fiscalía General de la Nación. Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), sección de análisis criminal, seccional Valledupar. (2011). Apreciación variable subversión y terrorismo. Bogotá: Autor.

Fundación Paz y Reconciliación [Pares]. (2020). *Sin Dios ni ley. Un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana*. Recuperado de https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DE-SEGURIDAD-EN-LA-FRONTERA.pdf

García, Antonio. (2019). *Historias de Gallero. Una vida en el eln*. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

García Durán, Mauricio. (2006). *Movimientos por la paz en Colombia. 1978-2003*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular/Colciencias.

García, Clara Inés. (1996). *Urabá: Región, actores y conflicto, 1960-1990*. Bogotá: Centro de Estudios de la Realidad Colombiana/Instituto de Estudios Regionales.

García, Clara Inés y Aramburo, Clara Inés (Eds). (2011). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueños*. Bogotá: Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional/Centro de Investigación y Educación Popular/Instituto de Estudios Regionales.

García Velandia, Martha Cecilia (2006). Barrancabermeja: ciudad en permanente disputa. En Mauricio Archila, Ingrid Bolívar, Álvaro Delgado et al., *Conflictos, poderes e intereses en el Magdalena Medio, 1990-2001* (pp. 243-312). Bogotá: Cinep-Colciencias.

Gates, Scott. (2002). Recruitment and Allegiance: The Microfoundations of Rebellion. *The Journal of Conflict Resolution, 46*(1), 111-130.

Gibson, Edward. (2012). *Boundary Control. Subnational Authoritarism in Federal Democracies*. New York: Cambridge University Press.

Gibson, Edward y Falleti, Tulia. (2007). La unidad a palos. Conflicto regional y los orígenes del federalismo argentino. *POSTData. Revista de Reflexión y Análisis Político*, (12), 171-204.

González, Fernán. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional/Centro de Investigación y Educación Popular.

González, Fernán; Vázquez, Teófilo y Aponte, Andrés. (2017). Acercamiento a la evolución territorial de los actores armados: sugerencias para la construcción de la paz territorial. En *La paz en el territorio. Poder local y posconflicto en Colombia* (pp. 70-148). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Gruber, Barbara and Pospisil, Jan. (2015). 'Ser Eleno': Insurgent identity formation in the ELN. *Small War & Insurgencies, 26*(2), 226-247.

Guarín, Sergio; Celis, Luis Eduardo y Velandia, Carlos (2018). *Reflexiones y perspectivas de los diálogos de paz con el eln*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

Guerra, Sebastián. (2020). *Oportunidad y obstáculo. La imposible convergencia entre los procesos de negociación con las Farc y el eln durante el gobierno de Juan Manuel Santos*. Mimeo.

Gutiérrez-Sanín, Francisco. (2007) *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia, 1958-2002*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Gutiérrez-Sanín, Francisco. (2012). The Dilemmas of Recruitment: The Colombian Case. In Yvan Guichaoua (Ed.), *Understanding Collective Political Violence* (pp. 175-195). London: Palgrave Macmillan.

Gutiérrez-Sanín, Francisco. (2017). *La destrucción de una República*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Gutiérrez-Sanín, Francisco. (2018). The FARC's militaristic blueprint. *Small Wars & Insurgencies*, *29*(4), 629-653.

Gutiérrez-Sanín, Francisco. (2019). *Clientelistic Warfare: Paramilitaries and the State in Colombia (1982-2007)*. Oxford: Peter Lang.

Gutiérrez-Sanín, Francisco and Wood, Elisabeth. (2014). Ideology in Civil War: instrumental adoption and beyond. *Journal of Peace Research, 51*(2), 213-226.

Gutiérrez-Sanín, Francisco and Wood, Elisabeth. (2017). What Should We Mean by "Pattern of Political Violence"? Repertoire, Targeting, Frequency, and Technique. *Perspectives on Politics*, *15*(1), 20-41.

Gutiérrez, Omar. (2003). La oposición regional a las negociaciones con el ELN. *Análisis Político*, (52), 34-50.

Harnecker, Martha. (1988). *Entrevista a dirigentes de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional*. Quito: Quimera Ediciones.

Harnecker, Martha. (1988a). *eln: unidad que multiplica. Entrevista a dirigentes máximos de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional sobre la historia del eln, y una reflexión sobre la situación de las guerrillas en ese momento (1988)*. Cuba: Biblioteca Popular.

Hernández, Fernando. (2006). *Negociación de paz con el eln: una aproximación metodológica*. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris/Friedrich Ebert Stiftung.

Hernández, Milton. (2006). *Rojo y negro: Aproximación a la historia del E.L.N.* Bogotá: Centro de Documentación de Movimientos Armados. Recuperado de http://www.cedema.org/uploads/rojoynegro.pdf

Hernández, Milton. (3 de abril de 2007). *Ni un tiro más entre los guerrilleros colombianos*. Recuperado de https://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Crisis%20en%20las%20FARC%20y%

Hernández, Milton. (s.f.) *Si las montañas callaran. Manuel Pérez Martínez, un hombre universal*. S.L.: Ejército de Liberación Nacional.

Hoover Green, Amelia. (2016). The commander´s dilemma: Creating and controlling armed group violence. *Journal of Peace Research*, *53*(5), 619-632.

Human Rights Watch [HRW]. (22 de enero de 2020). "*Los guerrilleros son la policía*". *Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure*. Recuperado de https://www.hrw.org/es/report/2020/01/22/los-guerrilleros-son-la-policia/control-social-y-graves -abusos-por-parte-de-grupos

Humphreys, Macartan and Weinstein, Jeremy. (2007). Demobilization and Reintegration. *The Journals of Conflict Resolution*, *51*(4), 531-567.

Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz [Indepaz]. (Diciembre de 2018). Conflictos armados focalizados. Informe sobre grupos armados ilegales. Colombia 2017-2018. *Revista Punto de Encuentro*, (74). Recuperado de http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads /2019/08/Conflictos-Armados-Focalizados-Indepaz.pdf

International Crisis Group. (10 de mayo de 2007). Los nuevos grupos armados en Colombia. *Informe sobre América Latina,* (20). Recuperado de www.crisisgroup.org/~/media/Files/latin-america/colombia/20_colombia_s_new_armed_groups_spanish.pdf

International Crisis Group. (26 de febrero de 2014). ¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de paz en Colombia. *Informe sobre América Latina,* (51). Recuperado de https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/left-cold-eln-and-colombia-s-peace-talks

International Crisis Group. (19 de octubre de 2017). Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz. *Informe sobre América Latina,* (63). Recuperado de https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace

International Crisis Group. (12 de julio de 2018). La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas. *Informe sobre América Latina,* (68). Recuperado de https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/68-missing-peace-colombias-new-government-and-last-guerrillas

International Crisis Group. (8 de agosto de 2019). Calming the Restless Pacific: Violence and Crime on Colombian's Coast. *Latin American Report*, (76). Recuperado de https://www.ecoi.net/en/file/local/2014211/076+Calming+the+Restless+Pacific.pdf

Jaramillo, Bernardo; Harnecker, Martha. (1989). *Colombia: Entrevista con la nueva Izquierda: Bernardo Jaramillo (Unión Patriótica), Nelson Berrío (A Luchar).* México, D.F.: Centro de Documentación y Ediciones Latinoamericanas.

Kaplan, Oliver. (2017). *Resisting War. How Communities Protect Themselves.* New York: Cambridge University Press.

Larrat-Smith, Charles. (2016). *Making CounterInsurgency Work: State Expansion, Order, and Violence in Arauca (2002-2010)*. Prepared for Presentation at the Latin American Studies Association Congress New York, NY (May 27-30, 2016).

Larratt-Smith, Charles. (2018). *Engendering Peace or Fortifying Resistance? The Role of Civil Society in the Colombian Armed Conflict*. Toronto: Yale Macmillan Center.

Larratt-Smith, Charles. (2020). *Agrarian Social Structures, Insurgent Embeddedness, and State Expansion: Evidence from Colombia*. [PhD Dissertation]. University of Toronto.

López, María. (1989). *Camilo camina en Colombia.* México, D.F.: Editorial Nuestro Tiempo.

Llorente, María Victoria y Garzón, Juan Carlos. (2020) *¿Qué hacer con el eln? Opciones ante una derrota militar lejana y un diálogo improbable*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz. Recuperado de http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_QuehacerELN_Final.pdf

Mampilly, Zachariah. (2011). *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life During War*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Mann, Michael. (2006). El poder autónomo del estado: sus orígenes, mecanismos y resultados. *Relaciones Internacionales*, (5), 1-43.

Mann, Michael. (2012). *The Sources of Social Power* (Vol. 2). Cambridge: Cambridge University Press.

Medina, Carlos. (1996). *eln: Una historia contada a dos voces*. Bogotá: Rodríguez Quito Editores.

Medina, Carlos. (2000). *Elementos para una historia de las ideas políticas del Ejército de Liberación Nacional. La historia de los primeros tiempos (1958-1978)*. Bogotá: Rodríguez Quito Editores.

Medina, Carlos. (2001). *Elementos para una historia de las ideas políticas del Ejército de Liberación Nacional. La historia de los primeros tiempos (1958-1978)*. Bogotá: Rodríguez Quito Editores.

Medina, Carlos. (2007). *Farc-Ep y Eln. Una historia política comparada (1958-2006)*. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, Bogotá.

Medina, Carlos. (2012). *E.L.N. Ejército de Liberación Nacional. Notas para una historia de las ideas políticas (1958-2007)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Medina, Carlos. (2019). *Ejército de Liberación Nacional (Eln). Historia de las ideas políticas, 1958-2018*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Medina, Carlos. (4 de febrero de 2019a). "Pablito": el hombre de Guerra del ELN. *Razón Pública.com*. Recuperado de https://razonpublica.com/pablito-el-hombre-de-guerra-del-eln/

Medina, Carlos. (15 de mayo de 2020). *Mis manos se llaman compromiso y conciencia*. Recuperado de https://www.justiciaypazcolombia.com/mis-manos-se-llaman-conciencia-y-compromiso/

Medina Gallego, Carlos. (2020). Ejército de Liberación Nacional (ELN). Historia de las ideas políticas (1958-2018). Táctica para el periodo por una nueva legitimidad. Presentación a manera de balance.

Metelist, Claire. (2009). Inside insurgency: Violence, Civilians, and Revolutionary Group Behavior. New York; London: NYU Press.

Millán, Santiago. (2011). Las variaciones regionales del ELN. En Andrés Vargas, David Aponte, Santiago Millán, Nicolás Chamat, Emilia Frost y Jorge Restrepo, *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el Eln* (pp. 111-173). Bogotá: Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el

Fortalecimiento Institucional/Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos/Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ministerio de Defensa Nacional. (Enero de 2019). *Política de Defensa y Seguridad pds. Para la legalidad el emprendimiento y la equidad*. Recuperado de https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf

Mosinger, Erik. (2018). Brothers or others in arms? Civilian constituencies and rebel fragmentation in civil war. *Journal of Peace Research*, *55*(1) 62-77.

Mouly, Cécile y Hernández, Esperanza. (2020). *Logros, desafíos y lecciones del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, 2010-2019*. Recuperado de https://www.instituto-capaz.org/documento-de-trabajo-capaz-1-2020-logros-desafios-y-lecciones-del-proceso-de-paz-entre-el-gobierno-colombiano-y-el-eln-2010-2019/

Naseemullah Adnan y Staniland, Paul. (2016). Indirect Rule and Varieties of Governance. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, *29*(1), 13-30.

Núñez, Magda y Vargas, Naryi. (2013). *¿Cómo llega el Eln a la mesa de negociaciones?* Bogotá: Fundación Paz y Reconciliación.

Ó Loingsigh, Gearoid. (2017). *Machuca*. Medellín: Corporación Periferia Comunicación Alternativa/Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Ortiz, Román. (2006). La guerrilla mutante. En Francisco Leal (Ed.), *En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI* (pp. 323-356). Bogotá: Grupo Editorial Norma/Universidad de los Andes.

Parkinson, Sarah. (2013). Organizing Rebellion: Rethinking High-Risk Mobilization and Social Networks in War. *American Political Science Review*, *107*(3), 418-432.

Parkinson, Sarah. (2016). Money Talks: Discourse, Networks, and Structure in Militant Organizations. *Perspectives on Politics*, *14*(4), 976-994.

Parkinson, Sarah and Zaks, Sherry. (2018). Militant and Rebel Organizations. *Comparative Politics*, *50*(2), 271-290.

Pearlman, Wendy. (2020). Mobilizing From Scratch: Large-Scale Collective Action Without Preexisting Organization in the Syrian Uprising. *Comparative Political Studies*. Recuperado de https://doi.org/10.1177/0010414020912281

Pérez, Andrea. (2008). *O sentido de ser guerrilheiro: Uma análise antropológica do Exército de Libertação Nacional da Colômbia* (Tese de doctorado). Universidad Federal de Santa Catarina, Programa de Pos Graduación em Antropología Social, Florianópolis.

Pérez, Andrea. (2016). La construcción social de una guerrilla. *Análisis Político, 29*(87), 77-94.

Peñate, Andrés. (1998). *El sendero estratégico del Eln: del idealismo guevarista al clientelismo armado*. Bogotá: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes.

Peñaranda, Daniel Ricardo. (2015). *Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín Lame*. Bogotá: CNMH.

Plank, Friedrich. (2017). When Peace Leads to Divorce. The Splintering of Rebel Groups in Powersharing Agreements. *Cavil Wars, 19*(2), 176-197.

Porras, Eduardo. (2014). Conflictos, violencias y resistencias en los Montes de María: un análisis de temporalidad extendida. En Fernán González, *Territorio y conflicto en la Costa Caribe*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular.

Quiroga, Diego. (2010). ¿Es posible hablar de gobernanza en zonas donde la administración pública está bajo la influencia de actores armados? El caso de la construcción de una orden social en la ciudad de Cúcuta. En Claire Launay-Gama y Fernán González (Eds.), *Gobernanza y conflicto en Colombia. Interacción entre gobernantes y gobernados en un contexto violento*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana/Centro de Investigación y Educación Popular/Instituto de Investigación y Debate sobre la Gobernanza/Colciencias.

Ramírez, María Clemencia. (2001). *Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Ramírez, Socorro. (12 de septiembre de 2018). *Colombia: lecciones de los diálogos por la paz con el Eln*. Recuperado de https://www.elespectador.com/colombia2020/politica/lecciones-de-los-dialogos -por-la-paz-con-el-eln-articulo-857124

Restrepo, Javier. (1995). *La revolución de las sotanas: Golconda 25 años después*. Bogotá: Planeta.

Restrepo, Juan Camilo. (2020). *Memorias de Cachapamba*. Bogotá.

Rettberg, Angelika; Leiteritz, Ralf; Nasi, Carlo y Prieto, Juan. (2018). *¿Diferentes recursos, conflictos distintos? La economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Rincón, John Jairo. (2003). *El Catatumbo: múltiples experiencias de trabajo asociativo y cooperativo, 1980-1990*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Rincón, John Jairo. (2009). Diversos y Comunes: elementos constitutivos del conflicto entre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas en el departamento del Cauca. *Análisis Político*, *22*(65). 53-93.

Rodríguez Bautista, Nicolás y García, Antonio. (2017) *¡Papá, son los muchachos! Así nació el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Colombia*. Bogotá: La Fogata Editorial.

Rodríguez, Alba Nubia. (2006). Acciones colectivas en el conflicto político colombiano: ¿De guerrilla a grupos terroristas? El caso del ELN. *Política y Sociedad, 42*(2), 133-147.

Rodríguez, Alba Nubia. (2009). *Acción colectiva, violencia política y género: el análisis de las organizaciones insurgentes político-militares en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (Eln) actor de referencia*. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.

Rodríguez Cuadros, José Darío. (2012). *Las transformaciones del conflicto en el Magdalena Medio: del control militar al dominio político*. En Fernán González, Omar Gutiérrez, Camilo Nieto, Andrés Aponte y José Cuadros, *Conflicto y territorio en el Oriente colombiano* (pp. 302-362). Bogotá: Odecofi-Cinep.

Rodríguez Cuadros, José Darío. (2015). *Génesis, actores y dinámicas de la violencia política nariñense*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular/ Observatorio para el Desarrollo, la Convivencia y el Fortalecimiento Institucional.

Romero, Mauricio. (20 de diciembre de 1998). Una mirada analítica sobre el ELN. *Revista Controversia*, (173). Recuperado de https://revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=335

Romero, Mauricio. (s.f.). *El conflicto político en el Magdalena Medio*. Recuperado de https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7ftgmBZYfM0J:www.pdpmm.org.co/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download-%26gid%3D432%26Itemid%3D14+&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESil8TvPWYyrZ5wgsiSHQkw6UjZ3zCVibCd6JDtFB6pTXL3UPsiS1EVlUKn3ksOPYYn8NHaR_i98C5g_idCTJo7s9kZULodu2fMzSOy_Bz9YumZLh9k-yWS_-H_9JcEn2WVTAPpM&sig=AHIEtbTCf0NXWgK-_vMFT4ZX2-s9ASmmsg

Rubin, Michael. (27 de julio de 2019). *Rebel Territorial Control and Civilian Collective Action in Civil War Evidence from the Communist Insurgency in the Philippines*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/334727539_Rebel_Territorial_Control_and_Civilian_Collective_Action_in_Civil_War_Evidence_from_the_Communist_Insurgency_in_the_Philippines

Sarbahi, Anoop. (2014). Insurgent-Population Ties and the Variation in the Trajectory of Peripheral Civil Wars. *Comparative Political Studies, 47*(10), 1470-1500.

Seimenis, Kimon. (2018). *Investigating Cohesion in Insurgent Groups: the Case of the Kosovo Liberation Army*. (Master Thesis). Universiteit Leiden, Netherlands.

Sharp, William. (1976). *Slavery in the Spanish Frontier: The Colombian Chocó, 1680-1810*. Norman, Okla: University of Oklahoma Press.

Slater, Dan and Kim, Diana. (January, 2015). Standoffish States: Nonliterate Leviathans in Southeast Asia. *TRaNS: Trans –Regional and –National Studies of Southeast Asia, 3*(1), 25-44.

Solarte, Benhur. (2003). Pasto en la guerra territorial del narcotráfico y los grupos armados. En *Academia Nariñense de Historia, Manual de Historia de Pasto* (t. VI, pp. 176-303). Pasto: Graficolor.

Staniland, Paul. (2012). Between a Rock and a Hard Place Insurgent Fratricide, Ethnic Defection, and the Rise of Pro-State Paramilitaries. *The Journal of Conflict Resolution*, *56*(1), 16-40.

Staniland, Paul. (2014). *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse*. Ithaca: Cornell University Press.

Ugarriza, Juan Esteban y Pabón, Nathalie. (2017). *Militares y guerrillas: la memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares 1958-2016*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Vargas Aguilera, Mario. (2006). ELN: entre las armas y la política. En Francisco Gutiérrez (Comp.), *Nuestra guerra sin nombre*. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales /Editorial Norma.

Vargas R., Andrés; Aponte, David; Millán, Santiago; Chamat, Nicolás; Frost, Emilia y Restrepo, Jorge A. (2011). *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el Eln* Bogotá: Cerac/Odecofi-Cinep.

Vargas Velásquez, Alejo. (1992). *Magdalena Medio santandereano. Colonización y conflicto armado*. Bogotá: Cinep.

Vásquez, Teófilo. (2006). Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990-2001. En Mauricio Archila, Ingrid Bolívar, Álvaro Delgado, Martha García, Fernán González, Patricia Madariaga,

Esmeralda Prada y Teófilo Vásquez, *Conflicto, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990–2001* (pp. 313–372). Bogotá: Cinep/Colciencias.

Vásquez, Teófilo. (2015). *Territorios, conflicto armado y política en el Caquetá: 1900-2010*. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Vásquez, Teófilo (Coord.). (2017). *Grupos armados posdesmovilización (2006-2015). Trayectorias, rupturas y continuidades*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Vásquez, Teófilo; Vargas, Andrés y Restrepo, Jorge (Eds.). (2011), *Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Vega, Renán y Aguilera, Mario. (1995). *Obreros, colonos y motilones: una historia social de la Concesión Barco, 1930-1960*. Bogotá: Fedepetrol-CISF.

Velandia, Carlos. (2020). *El comandante Daniel-Pablo Mateus. El comandante que yo conocí*. Mimeo.

Weinstein, Jeremy. (2007). *Inside Rebellion. The Politics of Insurgent Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.

West, Robert. (2000). *Las tierras bajas del Pacífico colombiano*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Wood, Elisabeth Jean. (2008). The Social Processes of Civil War: The Wartime Transformation of Social Networks. *Annual Review of Political Science*, *11*, 539-561.

Wood, Elisabeth Jean. (2018). Rape as a Practice of War: Toward a Typology of Political Violence. *Politics & Society*, *46*(4), 513-537.

Anexos

Tabla 1. Hitos organizacionales y apuestas revolucionarias elenas, 1962-2009

Período	Aprestamiento revolucionario, 1962-1965	Crisis y dispersión, 1966-1981
Estructura institucional y organizacional	• Adopción de teoría foquista. • Estructura armada jerarquizada y vertical. • Grupo guerrillero no mayor de 40 personas.	• Salida de Fabio Vásquez Castaño y desconocimiento de su jefatura (1974). • Replanteamiento (1978): crisis política. • La organización Oficial agoniza, mientras la simpatía crece y se estructura espontáneamente. • Primeros intentos de reestructuración orgánica y política: centralización política y orgánica. • Recomposición por agregación sin centralización. • Creación de la Dirección Nacional Provisional. • Primera reunión de responsables. • Impulso de la idea de combatiente de medio tiempo.

Recomposición y crecimiento por agregación sin centralizació, 1982-1991	Imposibilidad estratégica para la toma del poder, 1992-1997	Retroceso y marginalidad, 1998-2009
• Dirección Nacional asume control de la estructura armada. Reunión Nacional - 83 "Héroes y mártires de Anorí" (1983). • Centralización democrática e impulso de idea de Poder Popular. • Definición de elementos identitarios, tales como los iconos, símbolos y emblemas de identidad (himno, escudo, logotipo, juramento, uniforme, y la cultura popular y la revolución). • Definición de áreas estratégicas. • Creación de frentes de guerra y compañías. • Idea de centralismo democrático. • Conformación de la trilateral (espacio de coordinación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt), mir-Patria Libre y eln). • I Congreso (1986): • Nueva Dirección (colegiada) Nacional de 15 miembros, parte de los cuales conformarían el Comando Central (Coce). • Formación de cuadros, para lo cual se crea la Escuela Manuel Vásquez Castaño. • Fusión mir-Patria Libre. • Refrendación del ethos guerrero eleno. • Impulso de la idea de frente de guerra. • II Congreso (1989): • Definición del programa de Nuevo Gobierno. • Construcción del Poder Popular. • Cualificar el acumulado político militar rural. • Estrategias de construcción de nuevos gobiernos. • Deslinde frente al narcotráfico. • Construir guerrillas móviles a nivel nacional, destacamentos y compañías articuladas a los frentes guerrilleros. • Se ratifica el centralismo democrático y la Dirección Colectiva • Crecimiento del 500% de la tropa.	• Estrategia Vuelo de Águila. • Reunión Nacional (1993). • III Congreso (1996): • Se evalúan los resultados y las imposibilidades del salto estratégico. Se califica el contexto de contrarrevolucionario. • Se establecen el Código de Guerra y los Principios Revolucionarios.	• Muerte de Manuel Pérez (1998). • IV Congreso (2006). • Presencia diluida, normalizada y móvil (pdnm)

Período	Aprestamiento revolucionario, 1962-1965	Crisis y dispersión, 1966-1981
Trayectoria y apuestas armadas	• Preparación de brigada José Antonio Galán (1962). • Marcha a San Vicente de Chucurí (toma de Simacota) (1965). • Primeras acciones armadas y secuestros. • Expansión territorial a zonas de colonización (Opón).	• Proceso expansivo incipiente a zonas del nordeste antioqueño, sur del Cesar, sur de Bolívar y Santander. • Operación Anorí (1973). • Febrerazo (1977). • Dispersión de estructuras armadas y autonomización. • Inserción en Arauca. • Configuración de nuevos frentes: • El frente Domingo Laín se desdobla en frente Manuel Vásquez Castaño, en el Huila, y penetra el Caquetá; se creó la Comisión Luis Carlos Cárdenas Arbeláez (Valle del Cauca) Valle. 1979; se retoma la Central el frente José Solano Sepúlveda; y el José Antonio Galán se inserta en el bajo Cauca antioqueño y el nordeste.

Recomposición y crecimiento por agregación sin centralizació, 1982-1991	Imposibilidad estratégica para la toma del poder, 1992-1997	Retroceso y marginalidad, 1998-2009
• Auge del frente Domingo Laín. • Consolidación de frentes rurales (1982): • Frente José Antonio galán, en el bajo Cauca y el nordeste antioqueño; frente Camilo Torres Restrepo, en el Cesar y norte de Santander; frente Luis José Solano Sepúlveda, en la cordillera Central, sur de Bolívar y serranía de San Lucas; y el frente Domingo Laín en Arauca. • Campañas militares "Camilo Vive" y "Comandante Ernesto Rojas, cumpliremos". • Idea de formación de un ejército revolucionario. • Estrategia de lucha armada unida a la defensa de los recursos naturales y petroleros: "Despierta Colombia, nos están robando el petróleo". • Adopción de guerra popular prolongada como estrategia armada. • Creación de la Coordinadora General Simón Bolívar (cgsb) (1987). • Emergencia de nuevos frentes (1986-1989): • Frente Carlos Alirio Buitrago (oriente de Antioquia y Magdalena medio antioqueño); frente "6 de diciembre" (sierra nevada de Santa Martha); frente José Manuel Martínez Quiroz (norte del Cesar y sur del Magdalena); frente Jaime Bateman Cayón (sabanas de Sucre y Bolívar); frente Manuel Hernández (Córdoba y Urabá); frente Ernesto "Ché" Guevara (zona cafetera del sureste antioqueño); frente Bernardo López Arroyabe (nordeste antioqueño); frente María Cano (nordeste y Magdalena medio antioqueño); frente Claudia Isabel Escobar (Suratá, Matanzas y California, en santander); frente Luis Fernando Porras, (frontera colombo-venezolana); frente Armando Cacua (frontera colombo- venezolana); frente Capitán Parmenio (Anorí, Antioquia); frente Manuel Gustavo Chacón (zona rural de Barrancabermeja); frente Efraín Pabón Pabón (límites de Santander y Arauca).	• Nuevos frentes y compañías (1991-1992): • Frente Bolcheviques del Líbano (Tolima); frente La Gaitana (Huila); frente Jesús María Becerra (occidente de Cali); frente Comuneros del Sur (frontera con Ecuador, Nariño); frente Ramón Emilio Arcila (nororiente Antioqueño); frente Cacique Calarcá (viejo Caldas); frente Capitán Mauricio (nordeste Antioqueño); y frente Guillermo Bernal. • Emergen las compañías: Compañero Fercho (Urabá), José María Córdoba (oriente Antioqueño), Cimarrones (nordeste de Antioquia), Héroes de Santa Rosa (sur de Bolívar), Comuneros (Magdalena medio). • • Golpes militares: captura de Francisco Galán, Felipe Torres, Amilkar Grimaldos, entre otros. • Agotamiento del modelo de guerra. • Plan Estratégico 1997-2007.	• Retroceso militar y de control territorial a nivel nacional (1998-2005), marginalización como actor nacional de la guerra. • Confrontación con farc en diversos escenarios: Catatumbo, Cauca, Nariño, Arauca. • Deserciones e indisciplina de combatientes en zonas urbanas (Barrancabermeja, Medellín, etc.) y rurales (Arauca). • Retenes y secuestros contra sectores representativos de la sociedad (La María, Km. 18, etc.). • Derrota estratégica del proyecto armado. • Estrategia de repliegue y asentamiento en las periferias de sus retaguardias (guerra de guerrillas). • Atentados contra la infraestructura energética y contra oleoductos. • Uso de tácticas armadas no convencionales (campos minados, artefactos explosivos). • Llevar la confrontación y acción armada a las ciudades (2008 en adelante). • Apuesta por la Resistencia Armada.

Período	Aprestamiento revolucionario, 1962-1965	Crisis y dispersión, 1966-1981
Estrategia de trabajo político	• Problemas con las bases sociales por lectura de manual e indisciplina de los comandantes y combatientes. • Relación extractiva.	• Indefinición: debate en torno al trabajo político. • Tres líneas: una militarista, otra que cuestiona a la vía armada, y una última que aboga por replantear la estrategia e inclinarse por el trabajo político. • Busca influenciar e infiltrar a agremiaciones sindicales, el movimiento estudiantil y la recién creada Anuc. • Fortalecimiento del trabajo urbano en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Barrancabermeja, y surgen núcleos en Pasto, Popayán, Cali y Neiva.
Bases sociales	• Contactos con bases socials diversas: • Juventud Comunista, Movimiento Revolucionario Liberal, Frente Unido, Campesinos del Magdalena Medio, estudiantes, ciertos sectores del sindicalismo y grupo Golconda.	• Problemas en la estrategia revolucionaria y en el relacionamiento con las masas. • Incorporación y muerte de Camilo Torres. • Incorporación de sacerdotes españoles. • Influencia sobre campesinos de la Anuc en Arauca.
Debates y cismas internos	• N/A	• División entre urbanos y rurales. • Consejo de Guerra del Siglo (1969). • Campo Concentración (1970). • Campo Línea (1973). • Asamblea de Anacoreto (1974). • Grupo Replanteamiento (1976). • Julio Leguizamón y Claudio León Mantilla se desmovilizan y desmontan el frente de la central José Solano Sepúlveda.
Negociones e intentos de diálogos	• N/A	• Primer intento de diálogo con administración López Michelsen.
Fuentes de recursos de Economías regionales legales e ilegales	• Economía campesina de zonas de colonización. • Asaltos	• Secuestros. • Asaltos. • Robos a bancos.

Recomposición y crecimiento por agregación sin centralizació, 1982-1991	Imposibilidad estratégica para la toma del poder, 1992-1997	Retroceso y marginalidad, 1998-2009
• Plan Nacional de Trabajo. • Trabajo político con la Comisión Nacional Sindical, la Comisión Nacional de Trabajo Cristiano y la Comisión de Trabajo Internacional. • Control y arreglos con políticos locales y regionales (clientelismo armado). • Apuesta por la "humanización" de la guerra. • Refrendación de la idea de construcción de Poder Popular. • Construcción de bases revolucionarias de masas en las ciudades	• Apuesta por crear formas de gobierno alternativo. • Integración de la idea marxista-leninista como fundamento ideológico-político. • Obsolescencia y agotamiento de las formas tradicionales de relacionamiento con algunas élites territoriales (sur de Bolívar y No al Despeje).	• Impulsó a organizaciones realmente existentes en sus zonas de influencia: étnicas, cocaleras, campesinas, JAC, etc. • Poder popular
• Integración grupos urbanos (Bogotá, Medellín, etc.) y rurales por agregación sin centralización.	• Estudiantes y sectores urbanos organizados • Organizaciones campesinas • Sindicatos • Cooperativas agrarias	• Grupos universitarios.
• Escisión del prt. • Oposición del frente Domingo Laín a centralización económica y militar; lo mismo sucedió con el frente José Solano Sepúlveda, además de que no reconocía la dirección del frente de Guerra Norte, por diferencias en torno al funcionamiento interno, el enfoque, estilo y criterios de trabajo político-organizativo; y el José Antonio Galán y la Compañía Anorí tenían problemas de democracia interna.	• Desmovilización de la crs (1994). • Separación del frente Alfredo Gómez Quiñonez.	• N/A
• Auto-marginalización de los diálogos establecidos por Belisario Betancur.	• Intento de negociación (Caracas-Tlaxcala). • Problemas de acción colectiva en torno a la paz.	• Intento de diálogos con admón. Uribe Vélez (2004-2006) y reedición de problemas de acción colectiva en torno a la paz.
• Regulación minera en el sur de Bolívar. • Extorsión a compañías extranjeras (Mannesman y sicim). • Secuestros	• Inicio vinculación con la coca. • Secuestros. • Extorsiones. • Minería aurífera.	• Involucramiento con la economía de la coca. • Secuestros. • Extorsiones. • Minería ilegal (oro y coltán).

Tabla 2. Normas de convivencias pactadas por ELN y FARC-EP.

6. NORMAS DE CONVIVENCIA	
6.1	Se prohíbe asistir armados (con armas de fuego, machete, cuchillo) a fiestas, bazares y lugares públicos en que se expendan bebidas embriagantes en poblados y veredas.
6.2	En los centros poblados y caseríos solo podrán portar armas cortas las personas autorizadas por las instancias superiores respectivas. Las instancias superiores fiscalizarán efectivamente mediante la coordinación e intercambio de información oportuna.
6.3	En los establecimientos públicos se prohíbe la venta de bebidas embriagantes a personas armadas. Es prohibido expenderles bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabacos o chimú a los niños y niñas. Los niños v niñas no pueden permanecer después de las 10 de la noche deambulando por las calles y menos en establecimientos públicos donde se expendan bebidas alcohólicas.
6.4	Para el control de personas desconocidas se establece recomendar a la población no traer personas extrañas a la región como: Trabajadores, visitantes, familiares etc., si no están en condiciones de responder por su conducta. La violación a este numeral amerita la precisión y cuestionamiento ante las instancias superiores. Las instancias superiores vigilarán la estadía de desconocidos en nuestras zonas de control e influencia.
6.5	Quien produzca lesiones físicas a otra persona, ya sea directamente o con complicidad, se hará responsable de los gastos que ocasione, gastos médicos, hospitalarios, medicinas, tiempo perdido por el lesionado; a excepción de los casos de defensa propia.
6.6	El homicidio, complicidad con mismo, indefensión de la víctima, será castigado de acuerdo a las normas de cada organización siguiendo el debido proceso.
6.7	Las instancias superiores conjuntamente con los organismos comunitarios controlarán la buena inversión, los recursos propios de la comunidad y sancionarán la mala inversión y el despilfarro.
6.8	El traslado de una persona de una organización de masas a otra organización, es válido, cumpliendo con el mecanismo de la información correspondiente.
6.9	Se reafirma el horario de cierre de cantinas y lugares donde se vendan bebidas embriagantes. 9:00 de la noche entre semana y 10:00 de la noche en días festivos. Para bazares y fiestas comunitarias se coordinará su horario por las instancias del área.
6.10	Para mayor entendimiento las dos partes establecen, informe oficial debe darse por escrito, debe ser fundamentado y documentado.
6.11	Ninguna organización apoyará ni orientará a su acumulado ni a las masas, a invadir predios que estén destinados a los proyectos comunitarios que impulsa cada organización. Las invasiones serán el resultado del análisis y valoración respectiva de las instancias superiores.

6.12	Se establece que cuando se hagan negocios de fincas u otros bienes, entre compañeros de una u otra organización, o de una persona del acumulado social y de las masas con algún movimiento guerrillero, se debe dejar constancias por escrito y testigos, como pruebas de dichos negocios.
6.13	Frente a programas y planes trazados por el imperio, (USAID, DPS, entre otros), que distorsionen el plan de las masas, deberá ser consultado con la respectiva estructura interna para ser implementado en la región.
6.14	Se prohíbe terminantemente el expendio y consumo de alucinógenos y sustancias psicoactivas (bazuco, marihuana, cocaína, éxtasis, etc.). Las dos organizaciones desarrollarán campañas de persuasión, sensibilización y control para erradicar este flagelo.
6.15	Frente al fenómeno del hurto y abigeato son considerados como delito. Las dos organizaciones ejerceremos medidas de control aplicando sanciones ejemplarizantes, garantizando el debido proceso.
6.16	El acceso carnal violento, estupro y pederastia es considerado como un delito grave. En consecuencia, las instancias superiores darán tratamiento adecuado, garantizando el debido proceso.
6.17	Las instancias superiores ejercerán control, fiscalización y seguimiento, a las obras y suministros, haciendo que el contratista cumpla con el objeto contractual, en su defecto abrirá expediente de cargos y procederá de conformidad, de cara a la comunidad.
6.18	Se prohíbe los escándalos callejeros, riñas entre los miembros de la comunidad. Los daños y perjuicios ocasionados los asumen los implicados.
6.19	Es obligatorio para todo miembro de la comunidad participar un día al mes dedicado al trabajo comunitario.
6.20	Todo dueño de predio debe mantener limpia y encallejonada la vía, dejando un espacio mínimo de 5 mts. a lado y lado de la carretera. Las carreteras y cercas se arborizarán con mata ratón, teca, melina, menos con Zumbia o limoncillos. otros.
6.21	La difamación es considerada una actitud anti unitaria; será sancionada públicamente en el lugar que se comete el error.
6.22	La cultura y soberanía de los pueblos originarios, los lugares sagrados y zonas protegidas, serán respetados por las organizaciones. No se hará reclutamiento por fuera de sus normas ancestrales.
6.23	Las deudas morosas de los negocios legales. entre pobladores serán de obligatorio pago, mediante acta de compromiso.
6.24	Ninguna persona podrá arrendar o vender predios a las multinacionales o al Estado sin la autorización de las instancias superiores.
6.25	Respetar los bienes y familia de las comunidades, no tomar nada sin permiso de las masas.
6.26	En todas las carreteras los vehículos de la población civil deberán guardar una distancia de 500 metros con relación a las caravanas y vehículos militares.

ASPECTO RELIGIOSO	
1	Se prohíbe la construcción de nuevos templos, (casos excepcionales serán analizados y definidos por las instancias superiores).
2	Los pastores deben ser de la región, (casos excepcionales serán analizados y definidos por las instancias superiores).
3	No realizar evangelización casa a casa.
4	Todo creyente debe participar en el trabajo social y comunitario.
5	El ser creyente no define neutralidad, cada quien deberá definir su afinidad política e ideológica.
6	Las dos organizaciones harán seguimiento y control para impedir las prácticas de enriquecimiento de los pastores con la economía de los creyentes.
CULTIVOS	
1	Frente al tema de la coca se define que no incentivaremos su cultivo en las zonas donde no haya cultivos. se respetará a la gente que ha optado por la sustitución de cultivos, de igual manera con el proceso que se desarrolla desde el movimiento social.
2	Por la importancia estratégica que representa para la vida y los recursos naturales, tampoco se permitirá cultivos ilícitos en los parques naturales, páramos, nevados, cuencas hídricas y territorios indígenas.
3	Las partes lucharán decididamente contra los flagelos que desde la frontera amenazan al país vecino, como son el narcotráfico; impidiendo que por sus territorios sean rutas del narcotráfico de drogas ilícitas.
4	Desarrollar campañas ideológicas y de formación que permitan hacer conciencia de la inconveniencia de esta actividad.
5	Trabajaremos en una campaña conjunta de persuasión, para que el fenómeno de los cultivos ilícitos se ha erradicado.
ASPECTO AMBIENTAL	
1	Se declara zona de reserva forestal: la macro Cuenca del Orinoco y sus páramos, nevados, humedales, lagunas y cuencas hidrográficas.
2	Se prohíbe terminantemente la exploración (sísmica) y explotación minero-energética en territorios indígenas, zonas de reserva campesina y zonas de reserva forestal.
3	Con el propósito de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria se prohíbe la implantación de monocultivos (agrocombustibles).
4	Desarrollar campañas de sensibilización y persuasión para la protección y preservación de nacientes y vertientes hídricas (ríos, quebradas, lagunas, humedales), en las comunidades.
5	Se prohíbe la venta de fincas con fines de explotación comercial de maderables.
6	Toda fuente y corriente de agua debe protegerse dejando una franja natural de bosque. Si ha existido deforestación que afecta a la preservación del agua, promover la reforestación con las comunidades y entes ambientales.

7	SOBRE CORTE DE MADERA Y TALA DE BOSQUES: Se prohíbe el corte para fines comerciales, sólo se autoriza para el beneficio de cada parcela y lo de interés colectivo de la comunidad, previa autorización de la instancia superior donde se vaya a efectuar la actividad, en compensación, el propietario sembrar a 10 árboles por cada árbol tumbado garantizando su crecimiento. Se prohíbe la tumba de selva nativa y rastrojos de más de 3 años, cualquier orientación al respecto se dará a través de los canales internos establecidos, esta organización ejercerá el control y procederá de conformidad hacer los llamados de rigor. Se tendrá en cuenta a los campesinos que aún no han retornado a sus tierras por razones del conflicto.
8	Las islas que se conforman por efecto del cambio de curso de los ríos, serán en primer término, propiedad de la finca afectada y en segundo término reserva natural. De darse utilización productiva de estas en el primer término, debe dejarse margen a la rivera y cercar la porción cultivada.
9	En la zona de sabana los propietarios de los conucos deben mantener los cercados adecuadamente.
10	No se permite la caza de especies en vía de extinción (danta, chigüiro, vendados, lapas, pajuiles, guacamayas entre otras).
11	La población campesina puede realizar casa racional, siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios: hacerla en reserva de sus predios; No hacerla en predios ajenos y menos sin el consentimiento de sus dueños; no hacer convites con personas que no son de la zona campesina o comunidad; no permitir la caza a personas de otras comunidades. La caza no debe ser con fines comerciales, ni de manera indiscriminada.
12	Las quemas quedan prohibidas y quien lo haga responderá ante la comunidad por los daños causados.
13	Todo predio rural que no tenga una reserva natural forestal, debe asignar como mínimo el 20% del área total del predio, sin dejar de cumplir con la normatividad asignada a fuentes hídricas.
14	Se reforestarán los caños y nacimientos de agua que han sido talados. Se hará de la siguiente forma: 100 metros a orillas de los ríos, 100 metros en los nacederos de agua, 100 metros en morichales y humedales, 50 metros a orillas de los caños, y 20 metros en aguas menores.
15	Las fincas deben asignar un área para cultivos agrícolas de pan coger y huerta casera.
16	Se prohíbe la canalización de esteros para el uso agropecuario.
17	Se prohíbe arrojar productos químicos, combustibles, materiales inorgánicos o cualquier tipo de sustancia contaminante a las fuentes de agua.

18	Se prohíbe el uso de métodos no adecuados de pesca como chinchorros, lisas, pistolas de aire, barbascos, tóxicos, dinamita etcétera. Los pescadores del río Arauca, Casanare, Cravo, Lipa Ele, Vichada, Meta Ariporo, re regirán por las normas que tienen para la pesca.
19	Se prohíbe la pesca en tiempo de veda que comprende del 31 de marzo al 30 de julio de todos los años.
ASPECTO PECUARIO	
1	Prohibido mantener ganado y demás animales domésticos en las carreteras y camellones. Para el ganado en las playas se establece: quienes no tengan fincas adyacentes al río ni posición productiva en las islas no pueden tener ganado en la playa. Los cultivos agrícolas o fincas deben tener sus cercas correspondientes. Las fincas e islas con derechos a playas pueden aprovechar los pastos y aguas mediante el pastoreo y control de los semovientes.
2	Ganado, embarcaciones y otros bienes que se lleva el frío, de aparecer, corresponden a sus dueños, cualquier propina es voluntaria.
3	Desarrollar campaña para el incremento del hato equino y mular en el área.
4	Se prohíbe el contrabando con fines comerciales de: productos básicos de la canasta familiar, industrial, insumos agrícolas, combustible y ganado. El intercambio de productos de la canasta familiar debe fluir sin contratiempos. Las dos organizaciones se comprometen en hacer una campaña de persuasión y control frente al fenómeno del contrabando.

Fuente: ELN-FARC-EP. Normas Unitarias de comportamiento y convivencia del Frente de Guerra Oriental Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño y del Bloque Comandante Jorge Briceño de las FARC-EP, 2013. Elaboración propia.

Tabla 3. Ejes estratégicos de la lucha y acumulación del V Congreso (2015) del ELN

Lucha social y económica	Es tanto la lucha de los distintos sectores por sus reivindicaciones e intereses más inmediatos, como la lucha social de más profundidad expresada en sus plataformas nacionales y de configuración de transformaciones sociales y de futuro. También en este eje se trabajan los planes alternativos de vida. En lo económico es la dinámica por construir nuevas formas de organización de la producción, comercialización, consumo y circulación, que confronte y sustituya la lógica neoliberal y geste un nuevo sistema de economía social autogestionaria y de nación. En este eje deben construirse las expresiones de la lucha militar de masas, como elemento indispensable en el fortalecimiento del acumulado y herramienta necesaria para afrontar la complejidad de la lucha.
Lucha política	La lucha política trasciende la lucha reivindicativa y se libra desde distintos actores y escenarios para promover otro proyecto de país. Es la pelea por los idearios de soberanía nacional, la democracia, solución política, modelo económico y bienes comunes, entre otros. En esencia es la confrontación al régimen y tiene diversas expresiones cuando Mas masas acuden a la lucha directa por la construcción y disputa por el poder y gobierno.

Lucha ambiental	Es la que se desarrolla en confrontación al modelo depredador y consumista del capitalismo, construyendo otras formas de producción que armonicen la relación sociedad naturaleza. La lucha ambiental toma relevancia ante el desastre planetario que han generado las matrices industrial, energética y agrícola basadas en la ganancia y el despojo, que amenazan el futuro de la humanidad y el mundo
Lucha ideológica	Es la lucha por develar las verdades sobre la realidad económica, social y política en que vive la sociedad y las estructuras de dominación, a la vez señalar los caminos de liberación y las posibilidades reales de victoria. También apunta a crear identidad e idearios colectivos con base en raíces históricas nacionales y nuestro americanas, en diálogo creativo con el pensamiento y experiencia de luchas de los pueblos del mundo. Construye una corriente de opinión favorable a los cambios legitimando la necesidad de las acciones revolucionarias que nos permitan alcanzar los objetivos revolucionarios.
Lucha diplomática	Es la que se libra hacia la nación y la opinión pública internacional para dar a conocer las causas y justeza de la lucha del pueblo colombiano, convocando la solidaridad efectiva que contribuya a mejorar la correlación de fuerzas favoreciendo el campo de la retaguardia internacional.
Lucha armada	La lucha armada es la acción militar desarrollada por los componentes guerrilleros urbanos, suburbanos y rurales, así como las expresiones de insurgencia popular, que se articulan de manera integral y permanente a todas las expresiones de la lucha del pueblo para dinamizarlas

Fuente: V Congreso del ELN.

El ELN en el sur de Bolívar: la pérdida de un bastión militar

Daniel Ricardo Amaya Alba
Juan Diego Forero Pineda

Este capítulo presenta como estudio de caso las dinámicas del frente de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro en la subregión del sur de Bolívar. Con ello en mente, hace un análisis de la forma de operar de la guerrilla, su proceso de incursión y desarrollo en esta zona del país, con el fin de resaltar sus particularidades y comprender su papel en el conflicto armado. En ese sentido, los lectores se encontrarán con una exposición que aborda las formas de relacionamiento entre la guerrilla, el territorio, los pobladores y la economía. Se profundizará en las dinámicas locales, reconociendo las condiciones materiales, geográficas y políticas que dan luces sobre el panorama actual del ELN, con miras hacía una futura salida negociada del conflicto armado.

Configuración del territorio: breve recuento del proceso de configuración regional y dinámicas violentas

La subregión del sur de Bolívar hace parte de la región que ha sido denominada el Magdalena Medio. Se compone por los municipios de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Arenal, Río Viejo, Norosí, Regidor, El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio, Achí, Montecristo, Pinillos y San Jacinto del Cauca, los cuales ocupan más del 60 % del territorio del departamento de Bolívar.

A pesar de su extensión, su desarrollo se ha dado al margen de las dinámicas departamentales[1], debido principalmente a las condiciones adversas de su topografía y a la presencia diferenciada del Estado, esto ha

1 Desde el municipio de Barranco de Loba, ubicado en la parte norte de la subregión, hasta Cartagena existe una distancia de más o menos cuatrocientos kilómetros; mientras que

provocado que las poblaciones establezcan una relación más estrecha con las instituciones y dinámicas de las jurisdicciones limítrofes de Santander, Cesar y Antioquia (Viloria, 2009). La marginación de sus territorios con respecto de la capital y de la vida política del departamento ha dificultado su administración y la prestación de bienes y servicios, esto se ha visto reflejado en un alto índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI)[2] en la mayoría de sus municipios.

Sus territorios están conformados por una topografía variada que va desde las zonas altas y montañosas de las estribaciones de la serranía de San Lucas hasta las zonas cenagosas y ribereñas del Magdalena, la depresión momposina y La Mojana. Esta diversidad de pisos térmicos le ha dotado de rutas estratégicas por sus afluentes, ciénagas y caminos de herradura, los cuales, aunados a sus recursos naturales, en especial el oro de la serranía, le hicieron un terreno propicio para la extracción de rentas, la incursión de las insurgencias y la guerra de guerrillas.

Su proceso de configuración se dio por varias oleadas de poblamiento entre la época colonial y republicana, conformadas por esclavos provenientes de África y colonos campesinos de Sucre, Córdoba, Antioquia, Boyacá y Santander, debido a los diferentes auges de producción de la región del Magdalena medio (madera, pesca, oro, agricultura, hidrocarburos, tabaco y navegación a vapor), las dinámicas violentas (Guerra de los Mil Días y época de la violencia) y la consolidación de las economías informales (cultivos de marihuana, coca y minería informal).

Con la llegada de los españoles, el sur de Bolívar fue el lugar de asentamiento de esclavos negros, indígenas y zambos que huían del control de las directrices de la colonia en Cartagena, encontrando en estas zonas de precaria integración un espacio apto para su establecimiento. Estos pobladores se adentraron y conformaron caseríos y palenques en las zonas medias y altas de la serranía de San Lucas bajo sus propias pautas, al margen de las directrices coloniales y eclesiásticas (Murillo, 1999; Aponte, Arboleda y Barrera, 2016).

Con la explotación de las minas en la serranía por parte de la Corona, los negros, indígenas y zambos se vieron perseguidos por las autoridades coloniales y el asentamiento de comerciantes, propietarios de minas, burócratas y el clero en San Antonio del Toro de Simití, uno de los principales centros urbanos desde donde se administraron los recursos auríferos

---

desde el municipio de Cantagallo ubicado al sur de la subregión hasta el centro poblado de Barrancabermeja se está a tan solo una hora de distancia.

2 Según Viloria "la correlación entre el índice de NBI de los municipios del sur de Bolívar y su distancia con respecto a Bucaramanga resultó positiva […] a menor distancia de Bucaramanga, menores niveles de pobreza. Por el contrario, con Cartagena esta correlación fue negativa […]" (2009).

(Murillo, 1999; Arcila y Gómez, 2009; Alonso, 1997; Murillo 1999). Así, empezaron a establecerse fronteras entre las élites y los pobladores dedicados a la agricultura, la pesca y el barequeo, quienes desde muy temprano se vieron obligados a resistir y a disputar la tenencia de sus tierras.

Durante los siglos XVIII y XIX el auge del comercio por el río Magdalena, principal arteria de interconexión entre el Caribe y la zona andina, propició la migración en busca de tierras y oportunidades económicas. La gran mayoría de los colonos de esta época fueron provenientes de la sabana sucreña y cordobesa, debido a los desplazamientos que causaron la inundación de la parte baja de la depresión momposina y la consolidación de la hacienda costeña (Entrevista 4, 2020). Las principales actividades durante este periodo fueron el cultivo de tabaco en Simití, el leñateo para la combustión de los barcos a vapor y el comercio a las orillas del río, conformándose nuevos pueblos ligados a las actividades ribereñas como el corregimiento de Cerro de Burgos, desde donde se maneja actualmente el transporte hacia el departamento de Cesar (Viloria, 2009).

Dicho proceso de migración se acentuó con la Guerra de los Mil Días, pues muchos de los excombatientes liberales, tras su derrota por parte del gobierno conservador, se establecieron en diferentes áreas ribereñas y selváticas del Magdalena medio, donde se dedicaron a la pesca, la agricultura, la casa y la explotación maderera (Murillo, 1999). Posteriormente, entrado el siglo XX, llegaron más pobladores en razón de la época de la Violencia entre conservadores y liberales y las exploraciones de hidrocarburos en Barrancabermeja y Cantagallo. Estos colonos provenientes principalmente de Santander, Antioquia y Boyacá, al igual que los anteriores, buscaban suerte en las tierras fértiles de la parte norte del sur de Bolívar, en los recursos auríferos de la serranía, en el comercio del río, en la venta de madera o alguna actividad relacionada con la extracción de hidrocarburos (Aponte, Arboleda y Barrera, 2016; Viloria, 2009; Entrevistas 2, 4, 10, y 14, 2020), y terminaron por asentarse en pequeños caseríos sin ninguna relación con la institucionalidad, donde esparcieron las ideas liberales.

Durante este largo, heterogéneo y discontinuo proceso de colonización, se presentaron diferentes choques por el uso de la tierra entre los colonos, comerciantes, propietarios de minas y burócratas. Estos problemas por la tierra se vieron exacerbados con el establecimiento de la figura de Zona de Reserva Forestal en un 73 % de los territorios del sur de Bolívar, lo cual impidió a los pobladores el desarrollo de cultivos de manera legal y el acceso a títulos de propiedad, dejando a los colonos sin ayudas institucionales e incrementando la situación de pobreza (Viloria, 2009). Lo anterior sería una de las razones de la consolidación de las economías de la marihuana, la coca y la minería informal como única forma de subsistencia (Fonseca, Gutiérrez y Rudqvist, 2005) actividades que, a

su vez, atraerían población flotante a los territorios, factor que, además, configuró una compleja situación de desorden en algunas veredas y corregimientos que sería regulada por los actores armados.

Los problemas de la distribución de la propiedad y la concentración de la tierra por parte de sectores de las élites, alimentaron hacia finales de los años setenta y comienzos de los ochenta el desarrollo de jornadas de toma de tierras por parte de los colonos aglutinados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (Entrevistas 2 y 4, 2020). Esta capacidad de resistencia de los pobladores del sur de Bolívar tuvo una fuerte relación con el movimiento sindical del departamento de Santander, que, aunado a la herencia liberal de los colonos expulsados por la violencia bipartidista y su tradición organizativa de tipo autárquico, en conjunto con las luchas sindicales del movimiento petrolero y de otros sectores de la región, permitieron a las organizaciones sociales servirse de un fuerte andamiaje para la exigencia de sus derechos ante el Estado y los actores armados, de este modo lograron hacer multitudinarias movilizaciones sociales y paros con el fin de exigir el desarrollo de infraestructura local, el cese de la violencia y la defensa de los recursos.

Esta configuración territorial de carácter disperso, en ausencia de las instituciones estatales, departamentales y republicanas, con cierta base social campesina liberal y colonos que demostraron resistencia ante las directrices coloniales, ubicada en una geografía determinada por un entramado de ríos, ciénagas, selva y partes altas montañosas, convirtieron al sur de Bolívar en un escenario apto para la inserción y la consolidación del ELN. Esta guerrilla estableció lazos con las comunidades de tradición liberal, se nutrió del fuerte músculo organizativo de las luchas sociales y consolidó una retaguardia histórica en la teta de la serranía de San Lucas[3], un lugar prácticamente impenetrable para la fuerza pública donde resguardó su comandancia e hizo de la producción aurífera su principal sustento.

El sur de Bolívar y sus características geográficas y económicas no solo facilitaron la inserción del ELN, también llamaron la atención de otros actores armados que vieron la importancia estratégica de esta subregión con gran variedad de recursos económicos y rutas estratégicas que conectan el Caribe y el nororiente colombiano con la región andina y el Pacífico[4]. Así, a mediados de los años ochenta, haría presencia las

3 Según Antonio García (2019) la teta de la serranía de San Lucas además de ser una posición ventajosa para el desarrollo de múltiples actividades es una de las cunas del ELN, por lo tanto, su control lleva consigo toda una carga histórica y de honor.

4 La Misión MAPP-OEA detectaba lo que denominó un corredor crítico de afectación, que "partía desde Urabá en dirección hacia el oriente pasando por el sur de Córdoba, el bajo Cauca, el sur de Bolívar, Barrancabermeja y algunos municipios aledaños y el sur de Cesar, llegando hasta la provincia de Ocaña" (MAPP-OEA, 2009, p. 7, citada en CNMH, 2016, p. 158).

FARC-EP con los frentes 24 y 37 del Bloque Magdalena Medio, hasta su desmovilización; y hacia el año 1998 se daría la incursión de las estructuras paramilitares de la casa Castaño, organizaciones que se asentarían en la subregión y llevarían a cabo fuertes enfrentamientos contra las guerrillas, rompiendo con la hegemonía que el ELN había logrado establecer.

Es importante mencionar que la consolidación del paramilitarismo al igual que la inserción de las guerrillas, además de la importancia estratégica de la región, tuvo relación con lo heterogéneo y disperso del proceso de configuración territorial, pues si bien en el sur de Bolívar se asentaron grandes poblaciones liberales, también hubo migraciones dirigidas de tipo conservador (Aponte, Arboleda y Barrera, 2016), factor que amplió cada vez más la brecha entre las élites y los colonos. Fueron estas gentes conservadoras en conjunto con las élites económicas y del poder político a nivel local, quienes facilitaron el desarrollo del proyecto paramilitar cuando vieron amenazado su *statu quo* por la extorsión, el secuestro y la capacidad de control al poder político de las guerrillas, así, tras la obstrucción del ELN a las elecciones del año 1997, se terminaría de abrir la puerta para la llegada y consolidación del paramilitarismo, transformando completamente las dinámicas locales.

El ELN: su expresión, disputas y variación territorial

El frente de guerra del ELN que opera con estructuras en el sur de Bolívar es el Darío de Jesús Ramírez Castro (FGDRC)[5]. La presencia de esta guerrilla en la subregión data de finales de los años sesenta y está relacionada con su origen en San Vicente del Chucurí, Santander (ver capítulo “Descifrando al ELN”). El ELN comprende esta zona como una de las cunas de su proyecto, considerándola como un territorio de retaguardia, avanzada política y militar. Su ingreso al sur de Bolívar se entiende por: 1). La cercanía con su lugar de origen, 2). La tradición de lucha social y comunitaria de sus poblaciones, 3). El abandono estatal y 4). Su geografía estratégica.

El primer contacto que tuvo esta insurgencia con el sur de Bolívar se remite al momento previo del asentamiento del grupo guerrillero, durante el proceso de selección para el establecimiento del primer foco insurreccional. Tras la llegada de la brigada José Antonio Galán, Mario Hernández[6], uno de sus primeros integrantes, incursionó en el municipio de San Pablo, Bolívar, con el fin de analizar las condiciones sociales

5 El FGDR opera en el nordeste antiqueño y el sur de Bolívar.

6 Mario Hernández, junto con Fabio Vásquez Castaño, Víctor Medina Morón, Ricardo Lara Parada, Heriberto Espitia y Luis Rovira, sería uno de los primeros integrantes de la brigada pro-Liberación José Antonio Galana.

y políticas para la primera implantación. Sin embargo, la instalación del proyecto insurgente se dio en San Vicente de Chucurí, donde el ELN encontró un terreno más abonado (Medina, 1996).

Tras el desarrollo de la primera marcha guerrillera, llevada a cabo desde San Vicente de Chucurí hasta el Cerro de los Andes, el ELN hizo su presentación pública en la toma de Simacota, Santander, el 7 de enero de 1965 (ver capítulo "Descifrando al ELN"). Con esta acción logró generar simpatía y hacer que su nombre fuera conocido a nivel local, nacional e internacional, esto le fortaleció e incentivó a las personas con quienes ya había establecido contacto en Barrancabermeja, San Vicente y Bucaramanga[7] (Medina, 1996; Arenas, 2009). Serían estas personas y también el apoyo logístico que ofrecieron lo que facilitaría la consolidación de su proyecto en Santander y su posterior expansión hacia el sur de Bolívar.

Después de la toma de Simacota, con el fin de distraer a la fuerza pública, un comando de ocho guerrilleros dirigidos por Ricardo Lara Parada realizó la toma del corregimiento de Papayal, Santander, el 3 de febrero de 1965. Con el éxito de esta operación, el apoyo alcanzado con Simacota y la capacidad logística lograda, Fabio Vázquez impulsó un proceso de fortalecimiento y expansión al enviar a Ricardo Lara Parada, Luis Rovira y Mario Hernández a los límites del departamento de Santander con el departamento del Cesar, donde aportaron al trabajo desarrollado por Heriberto Espitia, dando vida al frente Camilo Torres Restrepo (FCTR).

Fue durante este proceso de expansión cuando la guerrilla empezó a forjar apoyos y bases sociales en el sur de Bolívar por medio del contacto con las poblaciones en sus travesías y marchas guerrilleras. De esta manera, el sur de Bolívar, un territorio de obligatorio paso en la región del Magdalena Medio, se vio abonado desde 1966 por la insurgencia, que posteriormente, en el año 1976, crearía en la serranía de San Lucas el frente madre de todas las estructuras de esta zona: el frente Luis José Solano Sepúlveda (FLJSS) (Hernández, 2006; García, 2019; ELN, 2011).

Si bien el ELN se movió por los territorios del sur de Bolívar desde finales de los años sesenta, fue a comienzos de los años setenta cuando proyectó su operación en la zona. Dicha decisión se dio cuando el FCTR dejó de existir y sumió sus restos en el frente José Antonio Galán (Hernández, 2006). En ese contexto, Fabio Vázquez dividió el frente en

7 Antes de la toma de Simacota, desde el retorno de la brigada José Antonio Galán en cabeza de Víctor Medina Morón y Heliodoro Ochoa, la guerrilla estableció redes de apoyo y núcleos urbanos con trabajadores de la Unión Sindical Obrera (USO) y habitantes de las comunas de Barrancabermeja; estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y trabajadores independientes en Bucaramanga; y antiguos militantes del Partido Comunista en San Vicente, quienes facilitarían el desarrollo logístico para el desdoble organizativo (Hernández, 2006; Arenas, 2009; Medina, 1996).

varias comisiones, llevando la organización desde Santander hacia el sur de Bolívar y el departamento de Antioquia. Así lo relató el comandante Rafael "Edgar Amilkar Grimaldos", exintegrante del COCE:

> Se hablaba del grupo de Fabio; del grupo de los hermanos Vásquez, que era el grupo más numeroso; del grupo de José Solano Sepúlveda, de Isidro, de Ricardo Lara [...] Los compañeros habían pensado que se podía extender, expandir el trabajo de la organización que iniciamos en Santander, y así fue como nos pasamos al Sur de Bolívar; y pensamos que se podía ir hacia el occidente de Antioquia, o sea, buscando el río Nechí, incluso pasando hasta el río Cauca. (Harnecker, 1988, p. 22)

En dicha división, Ricardo Lara Parada trabajaría en el área del municipio de Cimitarra, Santander; Manuel y Antonio Vázquez en Segovia, Puerto Berrío, Remedios y Maceo, Antioquia; y Fabio Vázquez oscilaría entre Yondó, Antioquia, y San Pablo y Santa Rosa del Sur, Bolívar (Medina, 1996). Sería durante este periodo cuando, bajo el mando de Fabio Vásquez, el ELN haría su primera toma en el sur de Bolívar, la toma del municipio de San Pablo, el 7 de enero de 1972 (Medina, 1996; Hernández, 2009; CNMH, 2016; Entrevistas 3 y 4, 2020).

En el periodo después de la toma de San Pablo, el ELN buscó consolidar la expansión de la organización. Sin embargo, su proceso de crecimiento se vio interrumpido por la operación de la fuerza pública en Anorí, en 1973. El golpe que recibió la insurgencia en Anorí, como se menciona en el primer capítulo, fue uno de los traspiés más duros que atravesó la organización en su primer periodo, a su vez, este hecho marcó el inicio de todo el proceso de reestructuración interna y de fortalecimiento organizativo.

Esta narración del exguerrillero Antonio Rodríguez facilita la compresión del contexto y el error estratégico del ELN bajo el cual se dio el golpe que sufrió:

> Existía una inmensa zona, entre los municipios de Puerto Wilches y San Pablo, regiones mineras en Antioquia y el Sur de Bolívar habitada por gentes que ya tenían una influencia y simpatía por Camilo Torres y el ELN, muy estratégica, situada en el centro del país, de difícil acceso y fácil de controlar militarmente con la serranía de San Lucas, un verdadero santuario natural, con un corredor que comunica las zonas bananeras del Urabá chocoano y antioqueño, en donde los caudalosos ríos desembocan en los océanos Atlántico y Pacífico, y hacia el oriente cruzando el país conecta a Urabá con la Serranía del Perijá y la hermana República Bolivariana de Venezuela, en donde también hay caudalosos ríos que sirven como frontera [...] El ELN, en esa zona asesorado por estrategas, sería invencible e indestructible, era un macroproyecto viable y a corto plazo, pero Fabio [...] lo mete en una trampa mortal en Anorí, en donde sin

> hacer un reconocimiento de la zona, de sus gentes, los envía a ciegas, los lleva a una ratonera […] Esto trajo como consecuencia el más duro golpe al ELN, en su historia, en donde perdieron su valiosa vida los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño. (Rodríguez, 2005, pp. 136-137)

Después de Anorí y la asamblea de Anacoreto, esta última llevada a cabo en 1974 (ver capítulo "Descifrando al ELN"), Fabio Vásquez distribuyó las fuerzas con el fin de evitar otro golpe militar. Ubicó tres núcleos: el primero en Segovia, Antioquia; el segundo en Morales, Bolívar y el tercero en San Pablo, Bolívar. El primer núcleo quedo conformado por Nicolás Rodríguez Bautista "Gabino"[8] y Fabio Vásquez; el segundo quedó al mando de Vidal en compañía del "Viejo Raúl"[9] y el sacerdote y comandante Manuel Pérez Martínez, quienes atacaron en 1975 el puesto de policía en Santa Rosa del Sur y se trasladaron al departamento de Cesar para refundar el FCTR en 1976; y el tercero quedo bajo el mando Luis Rovira, ubicándose en la serranía de San Lucas donde fundaría el FLJSS (Medina, 1996; Hernández, 2009; ELN, 2017).

El primer proceso de consolidación del FLJSS fue limitado, pues a pesar de su funcionamiento, hacia el año 1978, en el marco de la reestructuración que venía viviendo la organización (ver capítulo "Descifrando al ELN"), atravesaría por un proceso de desmovilización que lo llevaría a su fin. A saber, tras la primera reunión nacional de responsables después de la salida de Fabio Vázquez, en 1977, un sector optó por la dejación de las armas y la participación política electoral. Este grupo se autodenominó Comisión Coordinadora Nacional (CCN) durante el proceso de reestructuración, figura mediante la cual Claudio León Mantilla y Julio Aníbal Leguizamón, responsables entonces del Solano, aprovecharon la confusión en la guerrillerada sobre los órganos de dirección, debido a los cambios organizacionales, para desmovilizar el frente —compuesto en ese entonces por alrededor de 50 guerrilleros—, enterrar, vender y regalar las armas (Entrevista 1, 2020; Medina,1996; Hernández, 2009).

La importancia que tuvo la desmovilización del FLJSS no se limitó a un impacto local, pues, según las definiciones de la primera reunión nacional de responsables, en su zona de operación se establecería el Comando Central (COCE), razón por la cual también se le conocía como el frente de la Central (Entrevista 1, 2020). Este fragmento de entrevista al comandante y sacerdote Manuel Pérez Martínez permite comprender el revés que atravesó esta estructura y la organización a nivel nacional:

> Yo salí elegido para conformar el Comando Central. Debía viajar al Solano que iba a ser la sede de ese comando [...] Cuando llego a Bucaramanga me

---

8 Para los años setenta el nombre de guerra de Nicolás Rodríguez Bautista fue "Darío".

9 El nombre del "Viejo Raúl" era Lino Mercedes Ballesta Chacón, también fue conocido como "Eliseo" o "el Viejón".

> dicen que no hay condiciones para eso, que se ha creado una CCN y que ella es la que se encarga de orientar las definiciones. Los compañeros de Bucaramanga estaban en desacuerdo con esta determinación [...] la que por supuesto ninguno de nosotros aprobábamos; yo les digo que voy para el seno del COCE, que voy a reunirme con la tal coordinadora para puntualizarles que yo no he sido nombrado por ese organismo, que el FCTR no está de acuerdo con él y que ellos han pasado por encima de las conclusiones de la primera reunión de responsables. Esta situación generó un desorden muy grande, todo lo que se había avanzado en la reunión de responsables la tal CCN lo hizo a un lado, se inició el desmonte de la central (FLJSS), el cuestionamiento a la lucha armada, se habla de amnistiarse […] En medio de todo este revuelo tomamos la decisión de conformar la Dirección Nacional Provisional (DNP) con los compañeros que estuviesen nombrados por las estructuras y bases que habían. Se nombró esa dirección en 1978, conformada por un compañero de Medellín, uno de Bogotá, uno de Cali, uno de Bucaramanga y yo, cinco compañeros. Del frente Central no quedó ninguno porque estaba desmontado totalmente. Las armas se las entregaron a las FARC, eso lo mantuvieron en secreto, hasta hace poco yo viene a charlar con los compañeros del secretariado sobre esa situación. En mi concepto ese fue el momento más difícil de la organización, porque viniendo de una crisis, cuando pensábamos que ya íbamos a salir adelante, se nos viene todo este desbarajuste encima. (Medina, 2008, p. 231)

Hacia el año 1979, todavía en el proceso de reestructuración, al tiempo que el ELN daba vida a los frentes Domingo Laín Sáenz en Arauca, Manuel Vázquez Castaño en el Huila y Luis Carlos Cárdenas en el Valle, se dio el renacimiento del FLJSS (Hernández, 2009). En la reactivación del Solano jugó un papel fundamental el comandante Edgar Amilkar, quien, con el apoyo del COCE, se dio a la tarea de aclarar la situación de confusión generada por Mantilla y Leguizamón y movilizó comandantes y guerrilleros hacia la zona (ELN, 2011; Hernández, 2009).

Cabe mencionar que este momento de la historia es confuso en los documentos, sin embargo, Milton Hernández (2009) menciona la sagacidad de Amilkar para la reestructuración del frente Luis José Solano Sepúlveda y, al mismo tiempo, señala que el "Viejo Raúl" o "Eliseo" se trasladó desde el sur de Cesar a la serranía, donde fue establecido el FLJSS. Por otro lado, en un texto más reciente la organización menciona que el "Viejo Raúl" abandonó el FCTR por su añoranza de las tierras bolivarenses y se insertó en el sur de Bolívar con un revolver calibre 38, allí creó el FLJSS a través del trabajo comunitario y la mediación de conflictos entre cachacos y costeños, acto seguido el documento resalta:

> Los sueños de Raúl se fueron convirtiendo en realidad y aunque el resto de los guerrilleros del ELN no sabían que allí germinaba un frente

> guerrillero, no le disminuyeron a Raúl su condición de militante leal para fortalecer una importante región del país como bastión del ELN. Los años fueron pasando, el acervo guerrillero y revolucionario de Raúl le hizo comprender con humildad que aquella construcción guerrillera y revolucionaria era una expresión más del ELN, y por ello su encuentro posterior con el resto de las estructuras no presentó traumatismos. (ELN, 2017)

Con esto se puede entender que mientras Amilkar intentó calmar la marea a nivel nacional y gestionó el apoyo para recuperar la zona, el "Viejo Raúl" se encontraba trabajando en la creación de un proyecto político militar en el sur de Bolívar sin que el COCE estuviera enterado. Posteriormente, con la llegada de Amilkar el trabajo abonado por el "Viejo Raúl" sería encaminado al resurgimiento del frente y abriría las puertas al proceso de expansión eleno.

Desde la reactivación del FLJSS, el ELN empezó de nuevo a crecer en la subregión. El poco tiempo que le tomo engrosar sus filas se explica en parte por la capacidad de relacionamiento que alcanzó con las poblaciones, esto debido a que: 1). Muchos de sus comandantes eran natales del sur de Bolívar y 2). Se encargó de la provisión de bienes y servicios, supliendo el abandono del Estado (SAT, Defensoría de Pueblo AT n°. 002-04).

Para comprender lo anterior es imprescindible volver mencionar a Amilkar y al "Viejo Raúl", comandantes históricos de esta zona. Amilkar fue un estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Bogotá, quien durante el proceso de construcción y consolidación del frente prestó sus servicios médicos a las comunidades; y el "Viejo Raúl" fue un campesino del municipio de Pinillos, Bolívar, e integrante de la ANUC, quien entendía e intentaba dar solución a los problemas de la gente gracias a sus raíces ligadas al territorio. Así, el ELN logró desde esta segunda fase de consolidación del FLJSS ganar simpatía y legitimidad, lo que le facilitó su crecimiento y el desarrollo de operaciones militares, de esto dan cuenta los relatos de los comandantes Eliécer Erlinto Chamorro Acosta "Antonio García" y Fredy "Mocho Tierra":

> El "Viejo Raúl", más que un comandante guerrillero, era un líder. Él vivía pendiente de la población, ayudaba a solucionar los casos de salud de la gente, las situaciones que padecían las comunidades, sus problemas […] En estos rincones estaban sus raíces, por eso la gente confiaba mucho en él, eso nos sirvió para crecer como guerrilla. Más que política, veían en la guerrilla el afecto que se profesaba entre iguales, entre pobladores de una misma región, había respeto, fraternidad y solidaridad. El "Viejón" tenía muy buena forma de relacionarse con los campesinos, porque era uno de ellos, les hablaba de marranos, de gallinas, de maíz, de arroz, de yuca, porque de todo conocía; igual del agua y de la madera, conocía su mundo y se movía en el con mucha facilidad, todo se le facilitaba. Se relacionaba muy bien con la gente. (García, 2019, p. 51)

> Por entonces no era Raúl, sino don Eliseo y la gente le decía "don Eliseo" porque ya era respetado en el sur de Bolívar y la gente lo quería. A donde llegaba el "Viejo Raúl", era "don Raúl" el que se bajaba del carro, porque la gente lo quería […] había manes que eran natales de ahí, y había una relación directa. Ezequiel[10], por ejemplo, era santarroseño […] había respaldo de mucho pueblo. Por eso era que se tomaban todos esos puestos de policía; se tomaron Guaranda, se tomaron Simití, se tomaron San Martín de Loba en campaña con las FARC, se tomaron Santa Rosa, Morales, Puerto Rico. Todos esos puestos de policía se los tomaron siendo ellos Solano. (Entrevista al comandante Mocho Tierra por Medina, s. f.;)

La consolidación y el fortalecimiento del ELN también se apoyaron en las luchas sociales del sur de Bolívar y en especial en el trabajo abonado de la ANUC. Allí la insurgencia, al igual que en otras partes del país, apoyaría los procesos y las organizaciones sociales, nutriéndose a su vez de las experiencias políticas y las banderas de lucha locales. Al respecto, es importante mencionar el impacto que tuvo el cambio de percepción en torno al trabajo con las masas después del proceso de replanteamiento.

A saber, en la reestructuración el ELN privilegió el ámbito político sobre el militar (Entrevista a Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez en Vigil, 1989), reconociendo la importancia del trabajo de masas como uno de los pilares de la lucha revolucionaria, esto lo ratificó en el desarrollo de su primer y segundo congreso en los años 1986 y 1989. Desde entonces el trabajo de base eleno dejó de girar en torno al apoyo logístico que los pobladores le pudieran brindar (dar información, suministrar productos, facilitar contactos), dando un lugar importante al trabajo político organizativo, en este sentido intentó promover y aportar a las luchas locales en pro de la construcción de poder popular (esto, sin embargo, no quiere decir que los aspectos logísticos no siguieran siendo importantes).

Dicha transformación se hizo evidente en el sur de Bolívar debido a su temprana inserción, pues durante las primeras incursiones en la época de Fabio Vázquez y Ricardo Lara Parada, el papel del trabajo de masas se limitó a términos logísticos y de reclutamiento; en cambio, desde los años ochenta, en épocas de la segunda consolidación del FLJSS, fue evidente un mayor apoyo a las organizaciones sociales y a la expresión pública de los problemas locales.

Según un líder de Tiquisio y otro de San Pablo, así fue su relación con las organizaciones y las jornadas de movilización de los años ochenta:

> Con el ELN fue una relación amistosa, de mirar esas luchas que la gente por sí misma venía dando y se vio como una indicación de decirle a

10 Ezequiel fue por un tiempo el segundo al mando del FLJSS y comandante de la compañía Simón Bolívar (Medina, 2020).

> la gente que eso había que fortalecerlo. En ese sentido, uno podría decir que fue una relación política, no era ni de reclutamiento, ni de ese tipo de cosas, era más de orientar el tema de la JAC o los comités, como de decir "ustedes han llegado hasta aquí, den un salto más, organícense mejor", respetando la dinámica propia de las expresiones organizativas de las comunidades. (Entrevista 2, 2020)

> En las movilizaciones campesinas estaban presentes y era imposible que no estuvieran allí porque era su escenario de lucha, había una gente, un campesinado reclamando presencia del Estado, y qué más escenario para ellos que estar ahí. Yo conocí comandantes del ELN discurseando en las marchas, y ahí jugaban un papel de liderazgo, lo tenían porque tenían discurso, porque tenían cercanía con la gente, entonces ese era su escenario. (Entrevista 3, 2020)

Lo anterior hizo que la insurgencia robusteciera su arraigo social en los territorios, forjando lazos de familiaridad entre guerrilleros y pobladores. Sin embargo, esta capacidad de relacionamiento que alcanzó, dio origen a una frágil zona gris entre quienes convivieron con la insurgencia y quienes la apoyaron, pues condujo a la estigmatización de varios habitantes de sus zonas de operación, quienes sufrieron el flagelo de la violencia estatal y paramilitar. Así, en el sur de Bolívar las masacres de civiles perpetradas por los paramilitares fueron para el ELN uno de los golpes más duros, pues no solo vio caer a sus integrantes en combate intentado mantener el control de los territorios, sino también a sus familias, quienes nada tenían que ver con el proyecto. Según explica Carlos Velandia:

> El guerrillero *eleno* sube a la montaña, pero en la noche habla con sus parientes y conocidos; mantiene esos lazos de unidad filial o familiar que son muy importantes en un proyecto revolucionario. Para el ELN, su mayor capital era el trabajo político organizativo. En el ELN, de cada cien hombres y mujeres orgánicos, ochenta estaban dedicados al trabajo político organizativo y veinte al trabajo militar permanente, esta es una característica propia. Quizás en las FARC sea al contrario, de cada cien, casi que el cien por ciento están dedicados a la actividad militar permanente y las actividades organizativas las desarrollan de otra manera. Esto le marca al ELN otra característica, muy poco músculo militar, pero mucho músculo organizador. Esa gran fortaleza fue la que el paramilitarismo golpeó duramente en el sur de Bolívar, en el Nordeste Antioqueño, en el bajo Cauca, en el oriente Antioqueño, en el Magdalena medio. Esto fue terrible y allí es donde el ELN sufrió su mayor derrota. (Velandia, 2020, p. 115; las *negrillas* son nuestras)

A pesar del impacto de la arremetida paramilitar, la cercanía que logró el ELN con la población por medio del acompañamiento de las luchas sociales y su inmersión en la cotidianidad le dotó de legitimidad y apoyo, con lo

cual, de manera clandestina, logró forjar un gran andamiaje de masas que hasta el día de hoy continúa con fuerzas (Medina, s. f.; Entrevista 8, 2020).

Fue así como la facilidad para moverse por un territorio marcado por el abandono estatal, sus conocimientos de la zona, su capacidad de relacionamiento y de obtención de recursos económicos le permitieron al Solano desdoblarse rápidamente. En 1988, Jacob Acuña Gelis "Samuelito", quien integraba el FLJSS, dio vida al frente Héroes y Mártires de Santa Rosa; en 1989 el FLJSS fortaleció sus tropas especiales y creó a la compañía Simón Bolívar, y en el año 1997, durante el segundo pleno de la DN, se ordenó poner el nombre de frente Edgar Amilkar Grimaldos Barón a un frente que había sido implantado recientemente en Yondó, Antioquia; Cantagallo, Bolívar y Puerto Wilches, Santander (ELN, 2011, 2018; García, 2019).

El crecimiento del ELN en esta zona fue tal, que para mediados de los años noventa ya se habría conformado el FGDRC[11], el cual integró en el sur de Bolívar, además del Solano, a los frentes guerrilleros Edgar Amilkar Grimaldos Barón, Héroes y Mártires de Santa Rosa, Guillermo Ariza y Alfredo Gómez Quiñones, cubriendo los municipios de Montecristo, Arenal, Río Viejo, Tiquisio, Morales, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití y Cantagallo, con un pie de fuerza armado de más de mil guerrilleros[12] (García, 2019). Es de mencionar que al día de hoy todas las estructuras de esa época continúan activas a pesar de los golpes militares (Tabla 1).

Tabla 1. Estructuras del frente de guerra Darío Ramírez Castro con incidencia en la subregión del sur de Bolívar, 2010-2019

Estructura	Municipio
Frente Guerrillero Luis Guillermo Ariza	Montecristo (Bolívar) Arenal (Bolívar)
Frente Guerrillero Alfredo Gómez Quiñones	Arenal (Bolívar) Rio viejo (Bolívar)
Frente Guerrillero Luis José Solano Sepúlveda Compañía Simón Bolívar	Morales (Bolívar) Norosí (Bolívar)
Frente Guerrillero Resistencia Guamocó	El Bagre (Antioquia)
Frente Guerrillero Edgar Amilkar Grimaldos Barón	Cantagallo (Bolívar) Yondó (Antioquia)
Frente Guerrillero Héroes y Mártires de Santa Rosa	San Pablo (Bolívar) Santa Rosa del Sur (Bolívar)

Fuente: SIG, Cinep/PPP; Archivo de prensa Cinep/PPP. Elaboración propia.

11 El "Viejo Raúl", quien murió en el año 1998, además de ser fundador del FLJSS fue el primer comandante del FGDRC (ELN, 2011).

12 A pesar de no formar parte del FGDRC, es importante tener en cuenta los frentes Manuel Gustavo Chacón y el frente urbano Resistencia Yariguies en Barrancabermeja, pues su nivel de relacionamiento y coordinación con estas estructuras fue alto.

Para el segundo congreso se reconoció el crecimiento del FLJSS y su capacidad militar, lo cual alcanzó por su propia fortaleza política y capacidad de obtener recursos económicos provenientes, en gran medida, de la minería aurífera. Sin embargo, también resaltó la falta de reconocimiento a la dirección del Frente de Guerra Norte (FGN) por parte del Solano y el cuestionamiento de la centralización económica (Medina, 2008). Este desconocimiento a la dirección del FGN condujo al establecimiento del área Darío Ramírez Castro, la cual se convirtió en el frente de guerra que aglutinó las estructuras del nororiente antioqueño y el sur de Bolívar.

Si bien la insurgencia logró un acelerado proceso de crecimiento en esta subregión, después del desarrollo del tercer congreso nacional (ver capítulo "Descifrando al ELN") atravesó por otro retroceso cuando un sector del frente Alfredo Gómez Quiñonez liderado por los hermanos Simancas anunció su separación de la organización y creo el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (Entrevista 1, 2020; *Semana*, 2007a). El ERP fue una organización pequeña que operó en el departamento de Sucre y en el centro del departamento de Bolívar, esta es recordada por los pobladores como una insurgencia violenta y poco dispuesta al diálogo (Entrevista 4, 2020). Aunque no fue un actor protagónico en las dinámicas locales del conflicto, hizo parte del escenario de la guerra hasta su desmovilización en el año 2007, protagonizando confrontaciones con las FARC-EP, algunos ataques a la fuerza pública y secuestros bajo la modalidad de pesca milagrosa.

El sur de Bolívar fue para el ELN más que una de sus primeras zonas de expansión, pues, como ya se mencionó, la organización concentró la actividad del COCE en la serranía de San Lucas, dando al territorio una condición estratégica para el desarrollo de su proyecto político y militar (Entrevista 1, 2020). Lo anterior fue un aspecto sobresaliente durante los diálogos de paz con el expresidente Andrés Pastrana, cuando el ELN planteó el establecimiento de una zona de despeje en el sur de Bolívar con el fin de avanzar hacia la convención nacional.

La priorización estratégica del sur de Bolívar tuvo un impacto notable en las estructuras de la subregión, debido a que la operación y movilización constante de su alta comandancia por sus territorios dotó a la guerrilla de una arraigada disciplina y cualificación política. Sin embargo, la salida del COCE del territorio, los golpes propinados por los paramilitares y las bajas y capturas realizadas por la fuerza pública debilitaron sus estructuras empezaron a atravesar por un proceso de degradación, el cual ha intentado superar durante los últimos años hasta el día de hoy:

> El ELN ha estado aquí de toda la vida, es el grupo que más tiempo ha estado en el territorio, es más histórico [...] Para el ELN este era uno de sus territorios más fuertes, siempre se ha dicho que ha habido mucha presencia de comandantes en el sur de Bolívar, muchos comandantes del ELN

> reconocidos, o sea, han tenido como personas bien formadas, eso como hasta el 2007. Eran los comandantes lo que les permitía entender todas esas dinámicas de las comunidades y de la sociedad en general, pero hubo cambios, sentimos que se pasó de una guerrilla muy cualificada, muy política, a una guerrilla menos cualificada, de muchos jóvenes [...]. Bueno eso también por todas las capturas que ha sufrido [...] esta vaina quedo con pelados, pelados que lo que hacían era tomar cerveza y mujeres, entonces eso llevó a una crisis de la guerrilla en la región. Bueno en este momento la están retomando, esa crisis duro entre 2007 y ahorita, porque hubo un momento en el que ellos quisieron retomar, pero era muy complicado, ¿no te digo?, mataron a Samuelito. (Entrevista 5, 2020)

La concepción estratégica del territorio, aunado a su capacidad de despliegue político y de obtención de recursos económicos, hizo del ELN un actor protagónico en las dinámicas del conflicto hasta el año 2001, cuando su nivel de acciones bélicas disminuyó por la fuerte arremetida paramilitar que le obligó a replegarse (figura 1).

Su alto número de acciones armadas en los años noventa se relaciona directamente con la capacidad de desarrollo y aprovisionamiento bélico del FGDRC bajo la comandancia del "Viejo Raúl". Según varios relatos de guerrilleros[13], el sur de Bolívar se convirtió en un laboratorio para el desarrollo de armamento popular[14], lo cual dotó a las estructuras de una gran capacidad bélica. Así lo relataron Antonio García y Mocho Tierra:

> Nosotros mismos debíamos fabricar las armas. Pensó —el "Viejo Raúl"— primero en hacer las granadas, eso implicó construir los talleres donde se necesitaban tornos, equipos de soldadura, prensas, herramientas y materiales de todo tipo, como en una ferretería. Toda chatarra se recogía y la usaba para la guerra. El primer torno que se llevó para Campo Maíz, Micoahumado [...] Desbarataba las granadas para examinarlas, miraba sus partes, sus componentes y luego se daba las mañas para hacerlas como mejor podía. Primero usó fibra de vidrio, luego aluminio, siempre mejorando sus diseños; le gustaba que quedaran como si fueran industriales. El "Viejón" no descansaba buscando mejores resultados. Llegó el tiempo de darle nacimiento al famoso Cuturú, así lo bautizamos nosotros. Fue un camión ochocientos que se fue transformando en un vehículo blindado. Se le colocaron láminas de metal gruesas para proteger al chofer y las llantas, llevaba empotrados dos cañones dirigidos para tiro directo, que funcionaban como unas grandes escopetas. Se le hizo el sistema para colocar las

---

13 Para ver otros relatos a los citados en esta capítulo léase: *Historias de Guerra en Tiempos de Paz*, de Víctor de Currea Lugo.

14 Por armamento popular se hace referencia a la fabricación autónoma y de manera artesanal de las armas y demás componentes bélicos.

> dos ametralladoras punto treinta que teníamos. En el taller se hizo todo el montaje, dentro del camión funcionaba el armamento (García, 2019, p. 54). Considero al viejo un estratega militar en el armamento popular. Quizás es el único que ha consolidado la industria popular, la ha puesto en práctica, se ha empeñado en que todos se iniciaran en el aprendizaje del armamento popular. Eso nos ayudó mucho a mejorar en ese manejo, a desarrollar más en ese momento nuestra tecnología de minas, de artillería. Fuimos los primeros en tener la punto cincuenta, la punto treinta, ametralladoras, morteros hechizos y originales, carros blindados, navieras blindadas[15], todo eso. Eso se puso en práctica. El carro blindado se llevó a un ataque del Ejército […] el frente tenía buen armamento cuando yo llegué, buena fusilería, buenas ametralladoras, el arsenal era muy grande. El "Viejo Raúl" se preocupaba por que su guerrilla estuviera bien dotada". (Medina, s. f.)

Al respecto de su capacidad operativa, es importante mencionar el secuestro del avión Fokker de Avianca, llevado a cabo en abril de 1999. El avión fue retenido por comandos urbanos de la ciudad de Bucaramanga y posteriormente fue aterrizado en la vereda El Piñal, en el municipio Simití, dando cuenta de una alta coordinación entre los frentes rurales del sur de Bolívar y las estructuras urbanas del departamento de Santander. Esta acción tuvo como objetivo presionar al gobierno de Andrés Pastrana para el establecimiento de la zona de despeje. Sin embargo, fue un error estratégico de la guerrilla, pues propició la masacre en El Piñal, llevada a cabo por los paramilitares, esto, a su vez, condujo a la operación anaconda de la fuerza pública con el fin de acabar sus estructuras y las de las FARC-EP (ver capítulo "Descifrando al ELN"; Hernández, 2009; Chávez *et al*., 2016; *El Tiempo*, 2019a).

A pesar de las diferencias entre el ELN y las FARC-EP, y de manera distinta a como sucedió Arauca, Cauca y Nariño donde se vivieron cruentas guerras, en esta zona se establecieron relaciones de cooperación y alianzas estratégicas entre todas las estructuras del ELN en la zona y entre los ya mencionados frentes 24 y 37. Fue la cooperación entre las insurgencias lo que les permitió dar fuertes golpes militares y sobrevivir a la arremetida de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC y la fuerza pública.

El nivel de relacionamiento entre ambas guerrillas fue tal que no solo se limitó a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) ni tampoco a la época paramilitar (1998-2006), llegando a compartir espacios y desarrollar operaciones conjuntas hasta la desmovilización de las FARC-EP en el año 2017. Durante esta alianza, ambas organizaciones establecieron espacios de coordinación entre los comandantes de área donde se

---

15 Hacia el año 1995 la XI brigada del Ejército Nacional encontraría una lancha blindada con ametralladoras M60 incorporadas, de propiedad del ELN (*El Tiempo*, 1995).

planearon y diseñaron operaciones militares, el trabajo político y aspectos sobre las normas en los territorios.

Según lo narran dos exguerrilleros del Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP:

> Las relaciones fueron buenas, hubo contradicciones normales, las que se presentan entre dos ejércitos. Por la forma había contradicciones, pero acá no sucedió lo de Arauca, las diferencias las pudimos mediar. Nosotros tuvimos espacios de coordinación de comandantes, jefes de área, la mayoría de las veces las reuniones eran para coordinar acciones contra el paramilitarismo, el trabajo social también fue coordinado, aunque cada uno tuviera su línea política. En realidad, hasta la firma del acuerdo la relación fue buena, la de dos organizaciones hermanas. (Entrevista 11, 2020)
>
> Tuvimos la oportunidad de conocernos con los amigos que operaban y que dirigían el Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, con ellos trabajamos y compartimos muchos espacios, especialmente en el municipio de Simití y de Santa Rosa Sur […] ahí mismo conocimos otra unidad que se denominaba propiamente del área Darío Ramírez, más pegados a Antioquia sobre un sector intermedio entre Antioquia y Bolívar, en los límites, más exactamente entre la región del Cauca y de Bolívar, con ellos de hecho vivimos mucho tiempo, estuvimos pegados ahí con un comandante, al comandante nosotros le decíamos "El Mocho", cariñosamente, porque efectivamente le faltaba una mano; también conocimos las expresiones del frente José Solano Sepúlveda que operaba mucho más pegado a la región del Cauca en límites con Antioquia […] Nosotros estuvimos con El Mocho, con ese frente, prácticamente hasta el último día en el cual nosotros fuimos a ubicarnos en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN). (Entrevista 6, 2020)

Por otro lado, la llegada de los paramilitares al sur de Bolívar se encuentra ligada al surgimiento de los grupos de autodefensas bajo el modelo de Puerto Boyacá. Estos proyectos fueron apoyados por el Ejército Nacional y promovidos por las élites locales, quienes vieron afectados sus intereses de acumulación de capital por el accionar de las guerrillas en Santander, Antioquia, sur de Bolívar y sur de Cesar. Fue la casa Castaño la que impulsó por medio de las ACCU la unificación de las autodefensas en esta zona, con el fin de ampliar el proyecto paramilitar y acceder a los recursos económicos y las rutas estratégicas del sur de Bolívar (*Verdad Abierta*, 2011).

Antes del ingreso de las ACCU al sur de Bolívar la Casa Castaño hizo un intento de incursión en marzo de 1997 a través del municipio de Tiquisio, pero el poco conocimiento que tenía su personal sobre el territorio les hizo desistir. Las ACCU logaron ingresar al sur de Bolívar por el

corregimiento de Cerro de Burgos, Simití, en julio de 1998[16] e inauguraron su estadía con la masacre de Cerro de Burgos. Su incursión fue posible gracias al apoyo de las autodefensas de Juancho Prada, ubicadas en el departamento del Cesar y a Rodrigo Pérez Alzate "Julián Bolívar", quien fue designado por los Castaño para liderar la operación:

> Julián Bolívar, un muchacho que le decían "David", que había sido teniente del Ejército y otro muchacho que le decían "Gustavo" llegaron a San Martín (Cesar) con 70 hombres, se contactaron conmigo para que les ayudara a cruzar el río Magdalena, y quedaron en zona segura, porque por allá había mucha guerrilla, duraron como un mes y no podían pasar porque por los lados que lo intentaban hacer, el cruce, había mucha guerrilla que los esperaba, y como el cruce lo tenían que hacer en chalupa. Un día se consiguieron como diez chalupas y yo les presté un personal que les dijo cómo hacer el cruce, ellos fueron ese día y les indicaron cómo debían cruzar llegando al caserío de Cerros Burgos. (Declaración de Juancho Prada en Sala de Justicia y Paz, 2017, p. 67)

Tras el ingreso de los paramilitares por medio de las ACCU, se daría el establecimiento del Bloque Central Bolívar (BCB). El BCB fue el resultado de la integración de las autodefensas del bajo Cauca, Putumayo, Santander y sur de Bolívar mediante la cual los Castaño, además de buscar establecer rutas y controlar el desarrollo de actividades que les brindaran una mayor capacidad de control económico y político, intentaron demostrar fortaleza y unidad ante el eventual proceso de paz con el ELN.

El BCB quedó al mando de Julián Bolívar y Carlos Mario Jiménez "Macaco" en el bajo Cauca y sur de Bolívar, quienes, en conjunto con Iván Roberto Duque "Ernesto Báez", comandante político, establecieron en el sur de Bolívar uno de sus mayores centros de operación denominado "Casa Verde", ubicado en el corregimiento de San Blas, Simití (Entrevista 12, 2020). Desde los centros de operación los paramilitares iniciaron el desarrollo de escuelas políticas y militares, donde, además de la formación de sus integrantes, impusieron normas a la población. Sus fuertes controles sociales, aunado a su estrategia de expansión contrainsurgente y económica con el desarrollo de masacres, el fomento de la ganadería, el cultivo extensivo de palma, el control rutas del narcotráfico y la disputa por las finanzas de la minería, generaron grandes olas de desplazamiento (*Verdad Abierta*, 2014; Sala de Justicia y Paz, 2017).

Uno de los principales proyectos del BCB en esta zona fue el "Movimiento No al Despeje", el cual tuvo como propósito evitar que el ELN retornara a las

---

16 Si bien las estructuras de los Castaño ingresaron hacia julio de 1998, se tiene registro de grupos de autodefensas desde el año 1997, tal es el caso de la autodenominadas Autodefensas de la hacienda Bellacruz.

zonas del sur de Bolívar que había perdido en la disputa territorial con las ACCU y el BCB; es decir, demostrar la pérdida de su hegemonía en los territorios que consideraba su hogar y, por tanto, dar cuenta de su incapacidad para exigir una convención nacional y sostener diálogos con el Gobierno.

El "Movimiento No al Despeje", al igual que la organización ASOCIPAZ, fue promovido por el BCB de la mano de sectores empresariales y con la connivencia de poderes políticos locales. Con estas estructuras las élites y los paramilitares además de hacer frente a la posibilidad de una negociación con el ELN en el sur de Bolívar, buscaron forjar una plataforma de masas para el apoyo de candidaturas afines al paramilitarismo[17]. Fue así como, según declaraciones de integrantes del BCB, se daría origen al partido político Convergencia Popular Cívica con el cual resultaron electos varios candidatos del departamento de Santander, quienes luego fueron detenidos por tener presuntos nexos con las AUC (*El Espectador*, 2009; *Verdad Abierta*, 2013; *Semana*, 2007b).

Según la declaración de Ernesto Báez ante Justicia y Paz, así fue como él impulsó este movimiento:

> En 2001 me dedico a recorrer Santander, Puerto Berrio, Yondó, Bajo Cauca, Sur de Bolívar; a promover la conversión del "Movimiento No Al Despeje" [...] ha sido uno de los trabajos de carácter social más importantes que se desarrolló en esa región, de este Bloque, convertirlo en un movimiento político, hacer asambleas regionales con tres órdenes de captura encima, yo no tuve problema en pronunciar discursos en el concejo de Puerto Boyacá, en pronunciar discursos en el concejo de Puerto Triunfo, en el concejo de Yondó, fui al concejo de San Pablo, Bolívar [...] en las instalaciones del concejo, en la campaña política me presenté en escenarios públicos, en la plaza pública, recuerdo que el municipio de Cáchira Santander pronuncié un discurso en la plaza pública, exactamente diagonal a las instalaciones de la Policía. Siempre colocaba yo las notas del Himno Nacional y las notas del himno de las autodefensas al pueblo, todo el que escuchaba esos himnos debía estar de pie, firme escuchando fervorosamente los himnos de las autodefensas. Y hay una cosa bien especial, recuerdo que, en ese municipio, así como los guardias del INPEC están aquí reunidos haciendo sus labores de custodia, allá la Policía también salió a escuchar mi discurso público y entonces, en todo esto ve uno el Estado complaciente, el Estado connivente, el Estado fuertemente

17 Es importante mencionar que según información de la Sala de Justicia y Paz las AUC hicieron proselitismo político para la elección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a lo cual se añade similitudes entre las posturas y planteamientos plasmados en el Plan de Desarrollo del expresidente para los años 2002-2006 denominado "Hacia un Estado Comunitario" y el libro del BCB "Escenarios para la Paz a partir de la construcción de las regiones" (Sala de Justicia y Paz, 2017, p. 133).

> vinculado con nosotros, con recursos de la misma organización de las autodefensas. (Sala de Justicia y Paz, 2017, p. 131)

Es relevante mencionar que el BCB operó en el sur de Bolívar con tres frentes: el frente Vencedores del Sur en Santa Rosa del Sur, Simití, Regidor, Morales, Arenal y Río Viejo; el frente Libertadores del Río Magdalena en San Pablo y Cantagallo; y el frente Combatientes de la Serranía de San Lucas en el Peñón, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, San Martín de Loba, Tiquisio y Altos de Rosario. Estos tres frentes se convirtieron a inicios del 2006 en el Bloque Central Bolívar - Bloque Sur de Bolívar, de cara al proceso de desmovilización (Sala de Justicia y Paz, 2017, p. 98).

Desde el ingreso de los paramilitares, las dinámicas del conflicto se incrementaron. Las acciones bélicas de las insurgencias aumentaron y el repertorio de los paramilitares hizo que las infracciones al DIH llegaran a niveles que la subregión nunca había visto, tal como lo muestran las figuras 1 y 2.

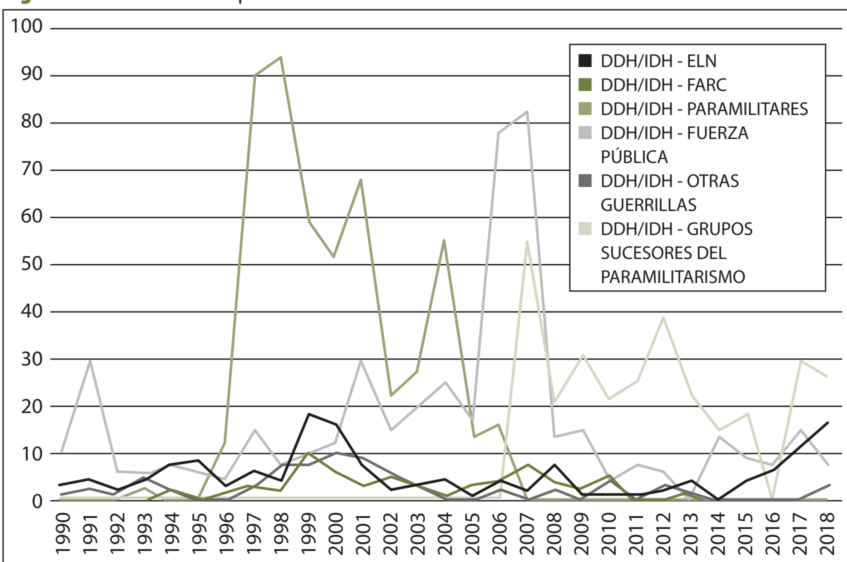
La figura 1 da cuenta de un alza en las acciones bélicas del ELN y las FARC-EP hacia el año 1998, como resultado del intento de repeler la avanzada las de las ACCU. Por otro lado, la figura 2 muestra un pronunciado incremento de infracciones al DIH, atribuido a los grupos paramilitares desde el año 1997; esto tiene que ver con su estrategia de tierra arrasada mediante la cual buscaron acabar con las bases sociales de las guerrillas, estableciendo a los civiles como objetivo principal de su repertorio violento.

La figura 1 muestra cómo después del año 2001 hubo una reducción en las acciones bélicas del ELN y las FARC-EP, lo que coincide con el desgaste y repliegue de las insurgencias por las confrontaciones con el BCB. Desde entonces, el ELN pasó de ser el actor principal en las dinámicas del conflicto en el sur de Bolívar a ser un actor secundario, pues tras la desmovilización del BCB se dio un incremento del pie de fuerza de la fuerza pública, el cual se venía fortaleciendo desde el año 2002 con la política de Seguridad Democrática, esto dificultó la recuperación militar de ambas guerrillas, particularmente la del ELN, organización que tuvo una significativa reducción de sus acciones bélicas hasta el año 2018.

Figura 1. Acciones bélicas por actor: sur de Bolívar 1990-2018

Fuente: SIG, Cinep/PPP. Elaboración propia.

Figura 2. Infracciones al DIH por actor: sur de Bolívar 1990-2018



Fuente: SIG, Cinep/PPP. Elaboración propia.

El control territorial de las ACCU y del BCB se consolidó en los centros urbanos con la connivencia de la fuerza pública (Entrevista 8, 2020) desplazando a las estructuras del ELN y las FARC-EP hacia las zonas rurales altas, ubicadas en el piedemonte de la serranía de San Lucas (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 055-03). Antes de la incursión paramilitar era común el ingreso de las compañías guerrilleras a los caseríos de las zonas medias y

bajas, pero con el control de los paramilitares y de la fuerza pública la guerrilla vio imposibilitada su movilidad y la de sus milicianos.

Si bien el ELN y las FARC-EP lograron dar fuertes golpes a las estructuras paramilitares a lo largo de estos años, como el ataque conjunto a la base paramilitar ubicada en El Helechal[18] en San Juan de Río Grande, municipio de Santa Rosa del Sur (Entrevista 7, 2020; García, 2019), el repliegue de las guerrillas fue inevitable.

La expansión de los paramilitares desembocó en el confinamiento y el señalamiento de los pobladores, en especial de quienes habitaron los corregimientos y las veredas en el piedemonte de la serranía, debido a que el BCB estableció puestos de control en las vías, regulando el ingreso y la salida de personas, medicinas y vivieres con el fin de limitar los recursos para la insurgencia, esto fue conocido como el bloqueo. El hacinamiento en estos años fue tal que hubo zonas donde la gente sobrevivió por el aprovisionamiento del ELN.

Estos relatos de dos lideresas de la subregión y del comandante Antonio García del ELN dan cuenta del hacinamiento que vivió la subregión en estos años:

> Allá en Agua Sucia había hasta cuatro retenes de los paramilitares en la carretera, cuando el carro llegaba a esos retenes esa gente trataba a los pasajeros de todo […] "que eran colaboradores de la guerrilla, que eran guerrilleros, que eran no sé qué". Lo que uno llevaba en el bolso se lo hacían botar todo al suelo, para revisar que no llevara medicina a los guerrilleros, que no llevara armas, que no llevara no sé qué […] y le tiraban todas las pertenencias de la persona al suelo, todo tirado y ellos mismos lo pateaban para revisar […] o sea trataban la gente horrible, es que ellos se la querían montar, como dice la palabra así vulgarmente, le decían: "usted se queda aquí porque usted es guerrillero" y de una vez lo dejaban, eso era seguro que esa persona uno no la volvía a ver. (Entrevista 8, 2020)
>
> […] en la época de la incursión paramilitar, avanzaba el paramilitarismo y hacía un bloqueo […] Porque hubo una época que no dejaban entrar alimentos, no dejaban entrar medicamentos, no dejaban pasar nada, hubo comunidades que vivieron con lo que la guerrilla les daba, entonces tú hablas con la gente de las comunidades altas y muchos de esos años pudieron sobrevivir con lo que el ELN compartía con ellos en términos alimentarios, porque no había comida. (Entrevista 9, 2020)
>
> La gente desamparada buscó refugio en nuestros campamentos, llegaron a ser más de trescientas cincuenta personas. Era un cerco completo a la región, no dejaban entrar comida y el Ejército estaba siempre apoyando

18 En la operación de El Helechal tropas especiales del ELN y combatientes de las FARC-EP dieron de baja a más de 20 paramilitares.

> a los paracos, eran fuerzas combinadas. La idea era diezmar a la guerrilla bloqueando los suministros. Llegó el momento en que la comida no alcanzaba, y tuvimos que priorizar la alimentación, por eso la panela, el aceite, el arroz y la leche era para la gente. Las carpas de la guerrilla se convirtieron en sus casas [...]. (García, 2019, p. 117)

Destaca en los relatos de esta época el desarrollo de acciones ofensivas conjuntas entre el BCB y la fuerza pública contra las insurgencias (Entrevista 10, 2020; Entrevista 2, 2020), cometiendo varias infracciones al DIH (figura 2). Esto causó que las comunidades campesinas y mineras se movilizaran en el éxodo campesino en 1998 y en la Caravana Internacional por la Vida en 2001, exigiendo garantías de seguridad para la permanencia en los territorios y buscando romper el bloqueo que vivía la subregión (Entrevista 9, 2020). Tras el desarrollo de estas movilizaciones hubo retaliaciones al retorno de los manifestantes, varios líderes fueron judicializados, otros fueron asesinados y otros amenazados teniendo que desplazarse (Entrevista 9, 2020; Prada, 2006).

Además de las movilizaciones en rechazo a la violencia, durante este periodo surgiría una de las iniciativas de paz más importantes a nivel nacional. En la segunda incursión paramilitar al corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales, la comunidad resistió a la violencia y luchó por la permanencia en el territorio con el apoyo de la diócesis de Magangué y el Proyecto de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, estableciendo una mesa interlocución con los paramilitares y el ELN. Después de la salida del BCB del corregimiento, hacia el año 2003, los pobladores crearon el Proceso Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado, así mantuvieron su lucha por la paz y la soberanía territorial rechazando tanto la violencia estatal como insurgente, logrando con ello acordar con el ELN un desminado unilateral a finales del año 2014[19] (Tovar, 2015; Osorio, 2018).

Con la desmovilización del BCB las insurgencias empezaron de nuevo a copar los territorios que habían perdido. Sin embargo, como ya se mencionó, se daría un incremento de la fuerza pública que dificultó su recuperación militar y afectó profundamente sus formas de trabajo, en especial las del ELN. En general, a pesar de la arraigada consolidación del FGDRC, su capacidad política y militar se vio reducida por el accionar paramilitar y de la fuerza pública.

---

19 Para profundizar en las particularidades del corregimiento de Micoahumado se recomienda revisar el trabajo denominado *Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento forzado e intervención psi como potencia política en Micoahumado*, de Claudia Constanza Tovar Guerra.

Durante los años del paramilitarismo el ELN perdió un gran número de combatientes, pero fue por causa de los múltiples operativos contrainsurgentes de la fuerza pública cuando resultó más afectado, esto debido a que la fuerza pública abatió a varios de sus comandantes, lo que, sumado a la salida del COCE de la zona, hizo que algunas de sus estructuras quedaran en cabeza de mandos con poca formación política, conduciéndolas hacia un proceso de degradación que han intentado superar infructuosamente durante los últimos años.

Ámbitos de regulación

La capacidad de despliegue que alcanzó el ELN en el sur de Bolívar le permitió regular aspectos políticos, sociales y económicos[20], entre los cuales resalta el establecimiento de marcos normativos, la distribución de recursos, la administración de justicia, el cobro de impuestos y la participación política. Sin embargo, con los golpes que sufrieron sus estructuras, su capacidad y formas de regulación han travesado por una serie cambios, los cuales se intentan hacer explícitos en este apartado.

En lo que respecta a la formulación de marcos normativos, el ELN demostró ser una organización abierta al diálogo. La definición de las normas fue el resultado de procesos de socialización, debate y concertación llevados a cabo en reuniones con las JAC y los diferentes comités (Entrevista 13, 2020). De manera general, se podría afirmar que algunas normas fueron impuestas por la guerrilla y otras consensuadas o apropiadas de las normas comunitarias.

En efecto, su particularidad de mediación permitió que las comunidades ejercieran contrapeso ante los visos autoritarios. Así, cuando los pobladores percibían que se imponía alguna sanción sin justificación o que la guerrilla se inmiscuía en un asunto que no le correspondía, la comunidad tenía la posibilidad de acercarse a las comandancias para abrir un espacio de discusión y solicitar la resolución de los conflictos (Entrevista 15, 2020).

La posibilidad de hacer llamados de atención al ELN y su apoyo a la consolidación de los procesos organizativos bajo la consigna de poder popular, profundizó el empoderamiento de las organizaciones sociales en los territorios, conformándose una suerte de gobiernos comunitarios autárquicos en constante debate y mediación con la insurgencia, la cual se erigió como autoridad armada ante la ausencia estatal. Estos dos relatos permiten comprenderlo mejor:

---

20 Este aspecto será abordado en profundidad en el sexto apartado.

> En todo eso del Gobierno de dejar abandonadas a las comunidades, lógico que la guerrilla era la autoridad en ese momento, la autoridad armada […] pero de todas formas se sentía que la autoridad era el pueblo, por eso cuando se empiezan a ver desmanes, que empiezan a hacer presencia dentro del mismo caserío y se principia a ver esas dinámicas de dejar la comunidad a un lado o pasar por encima de la comunidad para cosas como, por ejemplo: si la comunidad decidió que se iba a hacer minería y de pronto llega alguien de la guerrilla a decir: "ahí no se va hacer minería", entonces uno les decía: "¿cómo así? Vengan para acá". Entonces empieza una dinámica de "concertemos y hablemos" […] Dijimos: "acá no los vamos a desconocer, pero respetemos los espacios" […] Eso lo fue ganando la comunidad y creo que va en esa dirección que en un primer momento ellos llegaban a hacer reuniones para echar todo ese rollo político, ese cuento de hablar de la revolución, de la lucha, pero también en una forma de aconsejar, de prepararnos, porque ellos nos decían: "lo que se les viene es algo duro". Entonces creo que se fue capaz de captar y decir: "¡Ah!, vea, lo que están diciendo es que, si no nos preparamos como comunidad, cualquiera llega y nos pisotea", y eso fue lo que llevó también a tener los argumentos para cuando se dieron esos problemas donde el miliciano llegaba, tener esa capacidad de masivamente sentarlos y decirles: "¿Qué está pasando? Si ustedes nos decían cuando pasaban por acá que el pueblo tenía la palabra, que el pueblo mandaba y que el pueblo cuidaba. (Entrevista 10, 2020)
>
> El ELN fue escuela, nos enseñó a reclamar, pero cuando nos despertaron y aprendimos, bueno, dijimos, vamos a exigirles a ellos mismos lo que nos han enseñado. Y bueno, ellos dijeron que sí y abandonaron la presencia armada, y nos devolvieron la conducción de esto. Les reclamamos que les devolvieran las fincas a fulano de tal, y que les dieran reparación con los productos de esas fincas, y ellos dijeron sí, y les devolvieron 10 fincas a sus dueños. Nosotros les exigimos que desminaran la carretera… y bueno, la desminaron. (Entrevista citada por Tovar, 2015)

En la medida en que los procesos organizativos de las comunidades se fueron fortaleciendo, empezaron a ver en las armas de los guerrilleros un obstáculo para el desarrollo de la lucha social. Las comunidades optaron por poner límites a la guerrilla, dejando claro que su método de lucha sería a través de la resistencia civil, con el diálogo y las herramientas jurídicas. Con este distanciamiento las comunidades buscaron mantener la legitimidad de sus exigencias y entraron a disputar la autonomía de sus procesos, dejando claro que no permitirían su cooptación:

> — ¿Siempre hubo respeto de ellos hacia los procesos organizativos?
>
> Eso no se ganó así de la noche a la mañana. El primer paso fue un paso muy atrevido de nosotros, yo no sé por qué estamos vivos, o sea, nosotros en este proceso hemos sido muy atrevidos. Cuando yo llegué a este

> proceso había líderes que tenían pistola ¡lideres con pistola! [...] nosotros dijimos, ¡no!, acá este proceso es un proceso social desde la civilidad y el que quiera tener una pistola no tiene cabida, si usted quiere ahí están las filas de la guerrilla, pero acá no. Eso fue un paso duro.
> — ¿Cómo se dio el proceso?
> — No, eso había gente que nos frenteaba y la misma guerrilla hablaba de desconocimiento a ellos. Nosotros dijimos no, nosotros vamos a armar un proceso social, un proceso desde la civilidad y si ustedes tienen esos muchachos ahí, llévenselos, pero en el proceso no se admiten… Bueno y de ahí había jefes políticos, yo digo muy inteligentes, muy dados a conversar. (Entrevista 5, 2020)

Lo anterior da cuenta de lo complejas que han sido las relaciones entre la insurgencia, las comunidades y los procesos organizativos (campesinos, comunales, mineros, sindicales etc…), además del carácter reduccionista y poco acertado de las hipótesis de quienes proponen una conducción de las organizaciones sociales por parte de la guerrilla.

El caso del sur de Bolívar expone cómo las organizaciones sociales y las comunidades no son actores pasivos en las dinámicas territoriales, pues han limitado y condicionado el accionar de los actores armados. Es por esto que asumir los procesos sociales como parte de la organización guerrillera significa desconocer los impactos que han sufrido a causa de la violencia y el entramado de conflictos, dinámicas y negociaciones que se encuentran en la antesala territorial; pues se trata de organizaciones diferentes que comparten un mismo territorio, las cuales en algunas ocasiones coinciden en sus reclamos sociales y políticos y en otras no.

En términos utilitarios, se puede comprender que por medio del relacionamiento con las comunidades el ELN obtuvo la posibilidad de nutrirse y retroalimentar las banderas de lucha de las organizaciones sociales, hasta cierto punto. Las comunidades, por su parte, encontraron en el ELN un actor que contaba con experiencia política y que llegó a suplir la ausencia de instituciones que facilitaran la solución de problemas locales.

Así, aunque la insurgencia también fomentó el desarrollo de obras e infraestructura, se erigió principalmente como autoridad armada garante del cumplimiento de los marcos normativos de las comunidades, encargándose de dirimir problemas locales de tipo familiares, de linderos, vecinales y de negocios, cuando la JAC y/o los diferentes comités sociales no podían solucionar los problemas, de este modo garantizó por medio de la coacción la convivencia al interior de los territorios a la vez que promovía el desarrollo de trabajos comunitarios.

> En el caso de Santa Rosa, por ese entonces había mucha muerte, la gente se mataba mucho. Y eso ni se diga por el lado de las minas. Allá cada uno estaba armado, se robaban entre sí el oro y se mataban. A eso se le

> puso orden cuando llegó el ELN, pa' qué le voy a decir mentira, pero la cosa fue así. El ELN prohibió el uso de las armas. El que disparara sin permiso, hacía trabajo comunitario o tenía que aportar una docena de tablas para la escuela por cada tiro. Ellos llegaron a la zona hace como cuarenta años. Se metieron para los lados del canelo y lo que se conoce como San Lucas, a regular la minería. Ellos ayudaban a la gente y la formaban como se dice. (Entrevista 13, 2013)

En lo que respecta al cumplimiento de los marcos normativos, las penas impartidas por la insurgencia siempre han dependido de la falta cometida por la persona en cuestión; hubo casos en los que no era necesario llegar a instancias de la insurgencia y simplemente la JAC, el comité o la organización social respectiva ponía una multa a la persona implicada; mientras que, en otros, era la insurgencia la encargada directa de la administración de justicia. Entre las sanciones promulgadas por el ELN se daban las multas, el trabajo comunitario, el destierro y la muerte en los casos más extremos.

Las principales normas abanderadas por la insurgencia en los territorios (teniendo en cuenta que variaron entre algunas zonas) fueron las siguientes: límite para el consumo de alcohol; prohibición del uso de sustancias psicoactivas; castigo del hurto; propiciar el cierre de la frontera agrícola; prohibición el porte de armas; prohibición de la caza de la fauna silvestre; regulación de la pesca y prohibición del uso de trasmallo; regulación de la deforestación, limitando la tala y promoviendo la siembra de árboles; regulación de los cultivos de coca y, en zonas mineras, controlar la explotación y el ingresó de inversionistas, trabajadores y personas foráneas.

Figura 3. Normas comunitarias del comité ambiental de la JAC de Mina Vieja, Las Palomas.



Fuente: Equipo de comunicaciones de la Asociación Agro-minera del Sur de Bolívar Asamisur.

Es importante mencionar que algunas de las normas cobijadas por el ELN no fueron establecidas exclusivamente de manera colectiva con los pobladores o apropiadas de las normas comunitarias. Por el contrario, puede afirmarse que en los territorios compartidos con la guerrilla de las FARC-EP ambas organizaciones hicieron parte del proceso de concertación y salvaguarda de los marcos normativos. Así, ambas guerrillas, en conjunto con las JAC y la Mesa Comunal por la Vida Digna (MCPVD), serían garantes de la línea amarilla, una zona de reserva forestal de más de 60.000 hectáreas establecida por las comunidades en la serranía de San Lucas, donde prohibieron la tala de árboles, la caza, la minería, la contaminación de las fuentes hídricas, la construcción, y el cultivo de coca o cualquier otra forma de agricultura, de esta manera fomentaron la reforestación (Entrevista 15, 2020).

El ELN también ejerció control político sobre los funcionarios públicos por medio de amenazas e interceptaciones. La capacidad militar de sus estructuras y logística de sus milicianos en los cascos urbanos le permitió ejercer presión sobre los alcaldes para la consecución de recursos y el desarrollo de obras comunitarias:

> Acá hay vías que las inició a hacer la guerrilla, y no era que usted viera el guerrillero haciendo allá la trocha, acá iban y le decían al alcalde: "Señor alcalde, usted tiene allá un compromiso, vaya y haga eso". Bueno y también en parte iba la guerrilla abriendo sus trochas para poder moverse en la región. (Entrevista 10, 2020)

A lo anterior se sumó su capacidad de incidencia política, evidente con la obstrucción al desarrollo de las elecciones locales en el año 1997 por medio de secuestros masivos, solo por mencionar unos casos, en San Pablo retuvo a nueve concejales, un tesorero municipal y un candidato a la alcaldía, y en Simití a doce concejales, treinta y un aspirantes al consejo, cuatro candidatos a la alcaldía y el alcalde encargado Felix Gil (*El Heraldo*, 1997; *El Mundo*, 1998).

Para ese año, el número de retenciones fue descomunal, logrando impedir el desarrollo con normalidad de las elecciones en San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, entre otras partes de la subregión, pues, además del temor que generó, la insurgencia exigió como condición para la liberación de los secuestrados su renuncia a la candidatura. No obstante, algunos aspirantes hicieron caso omiso de la orden, por lo que, tras el desarrollo de las elecciones, el ELN secuestró al alcalde electo en San Pablo, Hugo Amador Méndez, y por medio de amenazas, retrasó la posesión del concejo (*El Espectador*, 1998).

Para las élites y la mayoría de los sectores urbanos, esta fue la gota que rebosó el vaso, lo cual no solo le arrebató algunos apoyos sociales a la insurgencia, sino que también condujo a que los sectores que vieron afectado su *statu quo*, en especial políticos tradicionales, personas acomodadas,

comerciantes, grandes propietarios y funcionarios electos, en conjunto con la fuerza pública, facilitaran la incursión de los paramilitares. Esto sería un punto de inflexión, pues con la llegada de los paramilitares, el incremento de la fuerza pública y los golpes que le propinaron ambos actores, su capacidad de despliegue se fue diezmando paulatinamente.

Con las fuerzas debilitadas y más recientemente con la dificultad para establecer campamentos por largos periodos de tiempo, debido al incremento de las operaciones aéreas y los bombardeos, se desconectó de las dinámicas sociales en algunas zonas. Así mismo, el repliegue de su comandancia y la captura y asesinato de sus mandos, le haría entrar en un proceso de degradación que rompería con su característica de mediación con las comunidades.

Ante las dificultades para su asentamiento, la insurgencia tuvo problemas para la aplicación de sanciones. Con su ausencia en algunas partes, las JAC quedaron encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas, pero su limitada capacidad de control ha resultado en el desacato por parte de varios pobladores:

> Lo que sí hay es mucho descontrol en el tema de la tala indiscriminada de bosques para la siembra sea de maíz, coca o potrero, pero se está tumbando mucha montaña, hay muchas quemas de bosque, hay mucha cacería […] Ellos regulan, pero es difícil […] con ellos es difícil porque se mueven mucho, no tienen como una estabilidad para el sistema de quejas y todas esas cosas, y entonces eso lo manejan las JAC, pero resulta que las juntas no son suficientes para eso. (Entrevista 7, 2020)

En lo que respecta a la mediación y diálogo entre la insurgencia y las comunidades, el constante movimiento del ELN, la salida, detención y muerte de varios de sus mandos, dificultó el llamado de atención de las comunidades ante el FGDRC por las actitudes autoritarias de los guerrilleros y comandantes en zona. Así, la escasa capacidad de dirección del frente de guerra sobre sus unidades, junto con comandancias nuevas de jóvenes sin formación política, hizo que, en varias ocasiones, se desconocieran los espacios autónomos de las organizaciones sociales y las autoridades comunitarias:

> Yo tuve un escenario a nivel personal en el cual un día, estábamos en un evento, una asamblea de la federación que, pues, el ELN en esos espacios nunca, jamás, y yo estaba tomando fotos con una cámara, cuando de repente una persona del ELN entró a quitarme la cámara y yo le dije: "¿usted me va a quitar la cámara? Es que yo no estoy en un espacio suyo" […] Yo ni lo había visto ni nada. Imagínese, estábamos en un escenario de asamblea, eso jamás había pasado, porque ellos los espacios de la federación los respetan absolutamente. (Entrevista 9, 2020)
>
> —¿Entonces dice usted que la dinámica cambio?
>
> —No, esos eran un desastre, nosotros hablamos con un tal Cusi, que está preso, eso fue hace unos 5 años más o menos. Él era un problema que

> teníamos acá y el tipo dijo: "mire, yo doy *órdenes*, yo no le recibo órdenes a ninguno" —nos dijo que él no escuchaba a nadie y esa era la actitud— "Yo soy el que tiene arma, entonces yo ordeno y nadie puede venir a decirme qué tengo que hacer o no". Eso era peligroso, supremamente peligroso. Cuando el Cusi, un muchacho mató a una muchacha, entonces nosotros como comunidad pusimos retenes, ellos también tenían sus retenes, pero ellos no lo capturaron, lo capturamos nosotros y nosotros lo retuvimos. La base militar estaba a kilómetro y medio, y el Cusi llegó con cinco guerrilleros enfusilados a quitarnos el man, y yo le dije: "no lo vamos a entregar para que usted lo mate, nosotros no vamos a ser cómplices de la muerte del pelado, nosotros lo vamos a llevar y a entregar a las autoridades que le hagan el debido proceso" [...] Vea, eso fue un embale con ese muchacho, lo llevamos a la fiscalía y no lo querían recibir porque no tenía orden de captura, tuvimos que ir en una comisión a Medellín donde estaban velando la muchacha para que comprobaran que la muchacha había sido asesinada, y finalmente, entregamos el muchacho, pero bueno, impedimos que lo mataran, ¡porque lo iban a matar! (Entrevista 5, 2020)

Esa escasa capacidad de dirección del frente de guerra ha generado cierto tipo de esquizofrenia en sus estructuras, haciendo que el cumplimiento de las normas se haga efectivo en algunas partes y sea más flexible en otras. A manera de ejemplo, hay comandantes que se han opuesto rotundamente a la violación de las normas ambientales, impidiendo cualquier tipo de actividad económica independientemente de quien la solicite; como hay otros que, ante la solicitud de un amigo o una propuesta económica, ceden fácilmente.

Sin embargo, como se mencionó en el segundo apartado, el ELN ha intentado retomar y regular sus estructuras en esta zona. En su intento más reciente, según los pobladores, la insurgencia había logrado insertar algunos cuadros políticos y había cambiado la composición de su personal guerrillero, empezando a demostrar ciertos cambios hacia la superación de su proceso de degradación.

Así describe el proceso un líder de la subregión:

> Hay como dos fases. Ellos se dan cuenta de eso y mandan a "Mario Marica" y como cuatro cuadros, y ellos son capturados inmediatamente, o sea, no demoraron un año, a unos los mataron y a otros los capturaron, entonces vuelve a quedar la zona nuevamente sin ningún cuadro político del ELN, y ahora en este momento es que vuelven y retoman. ¡Ahhh!, bueno, y también vino Samuelito, él era de la DN, y a Samuelito lo matan también, a ellos todos los esfuerzos que hicieron por cambiar eso se vieron golpeados por la fuerza pública. Samuelito era un cuadro [...] yo a él lo conocí cuando era joven y yo era joven, cuando el vino ya *él* estaba viejo y yo también [...] Pero él no demora en la región, llegó, y apenas llegó,

> lo mataron, y mataron también a Marquitos. Es que al ELN acá en el Sur de Bolívar le han dado duro hermano […] Aun así, se mantiene. O sea, Marquitos era un histórico. Lo que eran Marquitos; J. Mario, *él* se retiró y era un cuadro […] pero el hombre como que se enfermó; El Paisa se retiró también, o sea, los que no mataron se retiraron.
> —¿Se podría decir que el ELN está logrando superar su crisis política?
> Sí, yo creo que sí. Ya el orden que se adopta en la región […] es que claro, como son regiones tan ásperas, tan inmensas, a ellos les cuesta retomar todo, póngale usted unos dos años. Uno se imagina que todos los frentes están en la misma actitud, no solamente el Solano, sino que todos están retomando con cuadros y con personal, los que antes estaban aquí, no sé para dónde carajos se los llevarían, ni se imagina uno. Estos que traen ya vienen muy formados, literal, uno se da cuenta de la formación que hay detrás […] Ya hay una gestión más política en la región, hay una muchacha, yo tuve la oportunidad de encontrarme con ella, muy joven, pero es muy muy política a pesar de ser tan joven, y joven te estoy hablando 19, 20 años, creo yo. La pelada es muy estructurada, muy formada, ¿de dónde la trajeron? No sé, pero tiene aspecto paisa, esta muchacha que está comandando también es paisa. En estos sectores hay como tres nuevos que están cambiando las cosas, son más políticos. (Entrevista 5, 2020).

La cualificación política que ha venido haciendo el ELN a sus estructuras militares no es una tarea fácil. Los procesos de formación implican bastante tiempo, factor condicionado por las dinámicas de la guerra. La pérdida de un cuadro político significa la pérdida de años de capacitación, por lo cual basta con un golpe contundente a los responsables de cada frente para la desestabilización del proceso de reestructuración. Por esta razón al ELN le costó tantos años que las comunidades percibieran un cambio amigable en sus formas de relacionamiento, pues con los golpes que sufrió su comandancia, sus formas de regulación y de interlocución han fluctuado dependiendo del tipo de mandos (si es militar o político), así como su cualificación.

También es importante mencionar que se evidenció una relación entre las formas de regulación y la ubicación territorial de las estructuras elenas. Los frentes guerrilleros que operan en las partes altas de la serranía, lugar donde se les facilita replegarse, son más abiertas al diálogo y de más fácil acceso a las comunidades; mientras que los frentes ubicados en zonas medias, donde la topografía no se presta tan fácilmente para sortear a la fuerza pública, encuentran una mayor dificultad para ejercer su regulación territorial, lo que, a su vez, les hace menos abiertos al diálogo.

> Por Montecristo son más políticos, o sea, por Mina Walter, Norosí, allá ha sido como mejor, yo me relaciono arriba con los de Mina Walter porque me toca, yo trabajo con todo lo de Mina Walter. Por este lado, la zona de Buena Vista, sí es pesado, pero pues es por el mismo conflicto que hay,

> porque es que ellos puede que sí hablen con la gente y todo, pero para encontrarlos, a uno le toca es días de días, hasta que logre uno encontrar un personaje pesado de esos, es que ellos son de disciplina fuerte. O sea, allá son como más flexibles y acá son más radicales. Yo digo que también es por el problema que hay por este lado del choque que ellos tienen con las fuerzas militares, con la fuerza pública y con la misma gente, porque hay mucha gente infiltrada que de una cosa y de la otra, entonces hay mucha gente, que del Clan del Golfo, los Gomelos, que no se sabe si será de la DIJIN, entonces es también la desconfianza que hay, entonces es mucha prevención. A la guerrilla por ese lado (Buena Vista, Santa Rosa del Sur) le toca duro, en cambio por ese lado (Montecristo y Norosí) [...] y es que se resguarda más, el territorio se les presta. (Entrevista 7, 2020)

Al indagar por los ámbitos de regulación vigentes, a comienzos del año 2020, los pobladores mencionaron que, si bien el control de las normas territoriales no es igual de efectivo a como lo fue en sus primeros años, aún persiste. A saber, la guerrilla sigue ejerciendo veeduría sobre los marcos normativos, teniendo la capacidad de establecer impuestos a grandes propietarios, continúa regulando la minería y quizá uno de sus trabajos más importantes ha sido el desarrollo de toda una campaña de tipo ambiental en las partes altas de la serranía, la cual ha venido fortaleciendo a pesar de la crisis que ha vivido, esto se explica porque su control ha sido más pronunciado en esta zona debido a la facilidad de repliegue que le brinda la topografía (Entrevista 5, 2020).

Hoy el ELN sigue siendo la autoridad armada y la institución "neutra" que facilita la resolución de conflictos en la mayoría de los territorios marginados. Según un líder del corregimiento de Micoahumado, esto encuentra trasfondo en los tortuosos trámites y demoras de las instituciones gubernamentales y los múltiples casos de estigmatización, señalamiento y agresión que han ejercido instituciones como la Policía, el Ejército y la Fiscalía en contra de las comunidades y sus liderazgos, quienes han sido señalados constantemente de ser cómplices de la guerrilla (Entrevista 8, 2020). En ese sentido, continúa siendo la presencia diferencia del Estado y su exclusión de las comunidades, lo que ha permitido a la insurgencia erigirse en los territorios, pues la única presencia que ha fortalecido el Estado en las zonas rurales ha sido la de la fuerza pública, y esto no ha significado necesariamente una mejora en las condiciones de vida de la gente, al contrario, ha incrementado la violencia, como lo demuestra el número de Infracciones al DIH a cargo de la fuerza pública desde su fortalecimiento en el año 2006 (figura 2).

> Realmente la Policía en Buena Vista no ha hecho mayor cosa, a ellos los colocó el Gobierno ahí como para tener una presencia, como para mantener el gobierno en la zona después de los paramilitares, pero realmente que la Policía no ha servido de nada en el corregimiento de Buena Vista

> sino para atropellar la gente. En las requisas no más nos atropellan, le dan a uno con los fusiles, lo maltratan. Han capturado gente del corregimiento porque les ponen un falso positivo de que llevaban un arma, y eso, bueno y los trasladan y así". (Entrevista 5, 2020)

Por último, destacamos uno de los cambios más recientes que ha tenido el ELN en sus ámbitos de regulación. Para el ELN el consumo de sustancias psicoactivas significaba la pena de muerte, sin embargo, según mencionó un líder minero, esto ha dejado de ser visto como una falta grave y ha empezado a comprenderse como un problema de salud que requiere atención psicosocial, con lo cual se ha reducido el número de homicidios a jóvenes consumidores en los territorios. Esto último resulta de gran importancia, pues denota una retroalimentación política y social de las estructuras en el sur de Bolívar, lo que muy seguramente tiene que ver con el ingreso de comandancias con una mayor cualificación política.

Ahora bien, habiendo descrito parte del complejo mundo de las relaciones que establece el ELN con los territorios, prosigue a hacer un análisis sobre su repertorio armado reciente.

Repertorios, objetivos y lógicas

Al hacer una lectura de los patrones del accionar del FGDRC teniendo en cuenta sus repertorios de violencia, objetivos, técnicas y frecuencia como lo proponen Gutiérrez y Wood (2017), se da cuenta de un cambio significativo. El ELN en el sur de Bolívar pasó de ser un actor predominante en las dinámicas del conflicto a convertirse en un actor secundario, su frecuencia de acciones bélicas, desde la arremetida paramilitar y el incremento de la fuerza pública, se redujo notoriamente (figura 1) al igual que su repertorio y sus técnicas.

A saber, desde finales de los años 80 el ELN contó con una gran capacidad bélica, incluso intentó dar un salto cualitativo hacia la guerra de posiciones recurriendo al desarrollo de ataques constantes a la fuerza pública, la toma de cascos urbanos y el secuestro para la injerencia local y la consecución de recursos; sin embargo, comenzando el siglo XXI se vio forzado a retomar la estrategia clásica de guerra de guerrillas, con la cual había intentado evitar sufrir golpes en sus estructuras a la vez que propinaba ataques a la fuerza pública y disputaba el control sobre algunos territorios.

Es importante mencionar que, a pesar de los cambios que ha atravesado, sus objetivos se han mantenido constantes en el tiempo, siendo las fuerzas armadas estatales el principal foco de su accionar hasta el día de hoy. En efecto, dentro de su repertorio entre los años 2010 y 2019 se resalta que el 85 % de sus acciones se enfocaron en atacar a la fuerza pública, un 9 % en los sabotajes y un 6 % en los ataques a otros grupos armados (figura 3).

Según sus partes de guerra, en los ataques a la fuerza pública el ELN ha usado la técnica de emboscada y hostigamiento en un 74 %, minado al paso en un 11 %, granadas y explosivos en un 8 % y francotiradores en un 7 % (figura 4); estas han sido aplicadas al paso de unidades enemigas, en los puestos de policía y/o en acciones de repliegue cuando alguna de sus comisiones es perseguida. Con el uso de estas técnicas, características de la estrategia de guerra de guerrillas, la insurgencia ha logrado golpear a la fuerza pública resguardando sus unidades. Sin embargo, dada la capacidad militar de las fuerzas estatales con las unidades de inteligencia, fuerzas de tarea conjunta y el desarrollo de bombardeos, han sido varias las detenciones y bajas que ha sufrido el ELN durante los últimos años.

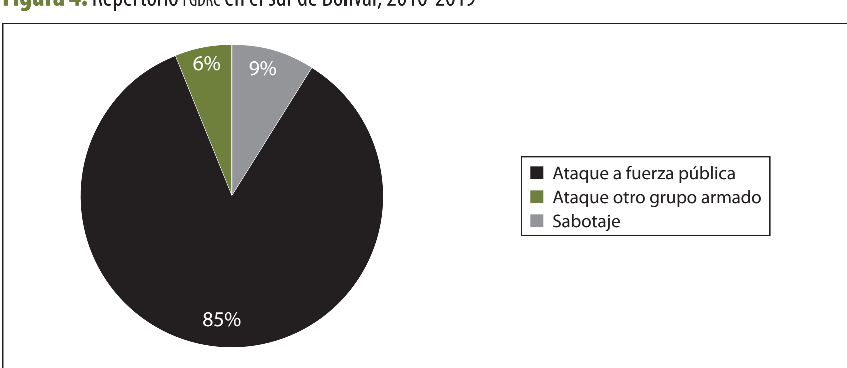
Sus acciones de sabotaje se han concentrado principalmente en contra de las grandes compañías mineras por medio del secuestro o la retaliación, con lo cual ha obstruido el desarrollo de concesiones a multinacionales en la serranía y ha buscado garantizar que las minas queden a manos de las comunidades. Muestra de lo anterior fue el secuestro de un ingeniero canadiense, dos peruanos y dos colombianos, empleados de la Bravel Mining Corporation, en enero del 2013, mediante el cual exigió a la empresa canadiense el retorno de cuatro títulos mineros a las comunidades de Mina Seca, La Nevera, Casa de Barro y Las Nieves, Este hecho hizo que la empresa decidiera cancelar los títulos y su proyecto en la serranía (Arango, 2013; *Semana*, 2013; ELN, 2013). También ha afectado la infraestructura de la industria de la palma y la infraestructura eléctrica, así mismo ha decretado paros armados y realizado retenes entre veredas y corregimientos (SAT, Defensoría del Pueblo NS007-17). Cabe mencionar que, al igual que en otras regiones, los paros armados los suele llevar a cabo en la conmemoración de las fechas fundacionales de la organización.

En lo que respecta a los ataques dirigidos contra otros grupos armados, desde la desmovilización del BCB el ELN ha entrado en confrontación con los Urabeños, grupo también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. No obstante, son pocos los ataques registrados, esto se debe a acuerdos de distribución territorial y económica que han establecido ambos grupos. Esta reducción en las confrontaciones con otros grupos armados, en contraste con los combates de la época paramilitar, encuentra lugar en la poca fortaleza de sus estructuras, pues actualmente, para el ELN en el sur de Bolívar resultaría demasiado costoso la incursión en una guerra con otros actores al tiempo que intenta sortear los operativos de la fuerza pública. Esto explica la distribución territorial con las AGC, de esta manera evita entrar en los costos que implica la confrontación a la vez que encuentra una posibilidad para mantener ingresos financieros estables.

Por otro lado, los datos muestran que el uso del secuestro como uno de sus principales repertorios —después de la amenaza— para el

hostigamiento a los grandes terratenientes, alcaldes, concejales y las empresas mineras, se ve representado en su autoría por un 45% del total de los casos del sur de Bolívar, esto entre 1982 y 2009 (figura 5). Sin embargo, a pesar de la persistencia del secuestro como método de financiación y mecanismo de presión para la expulsión de las empresas y el cobro de impuestos, esta técnica perdió protagonismo tras el debilitamiento que atravesó la insurgencia (figura 6). Actualmente la dinámica del secuestro por parte del ELN es bastante reducida, sin embargo, se han presentado casos relacionados con el funcionamiento de empresas mineras y más recientemente como forma de retaliación ante el incumplimiento de una norma ambiental que prohíbe el trasmallo a los pescadores, en este segundo caso, a diferencia del primero, la retención es temporal y no exige recompensas, pues su fin es hacer un llamado de atención a quienes incumplen la norma por medio de la coacción que representa la retención o la imposición de algún tipo de trabajo, como abrir trochas (*El Tiempo*, 2016; *Semana*, 2016).

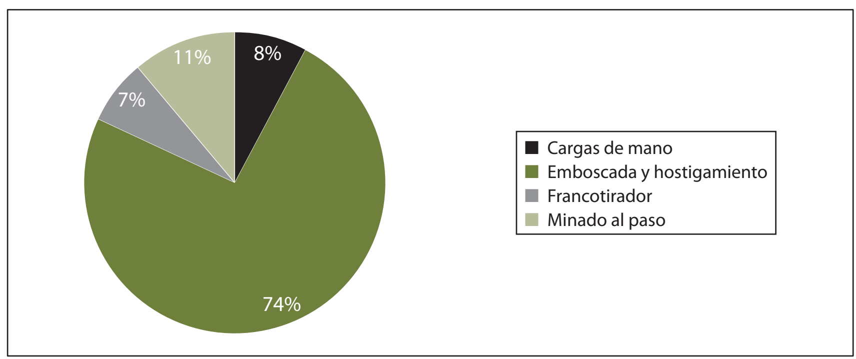
Figura 4. Repertorio FGDRC en el sur de Bolívar, 2010-2019



Fuente: SIG. Cinep/PPP. Elaboración propia.



Figura 5. Repertorio de ataque contra la fuerza pública del FGDRC, 2010-2019



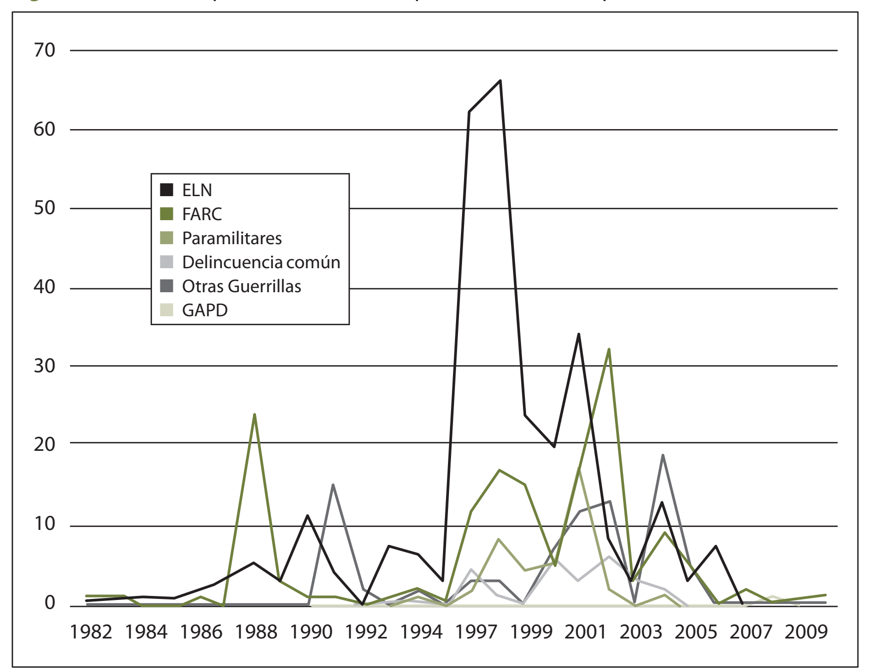
Fuente: SIG. Cinep/PPP. Elaboración propia.

Figura 6. Participación de actores en total de secuestros sur de Bolívar, 1982-2009

13%
8%
6%
4%
24%
45%
ELN
FARC
Paramilitares
Delincuencia común
Otras Guerrillas
Sin información

Fuente: CNMH. Elaboración propia.

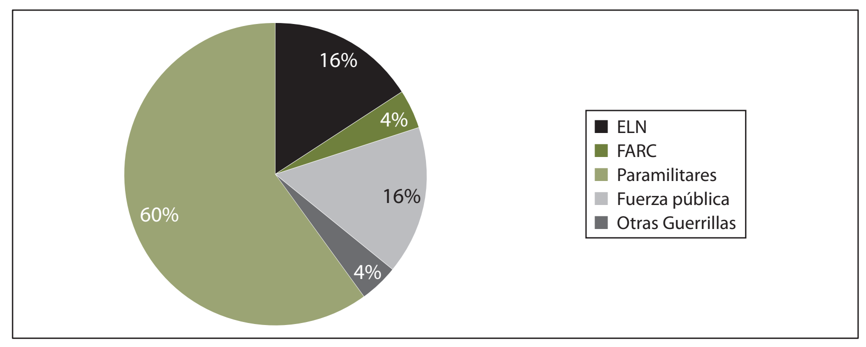

Figura 7. Línea de tiempo de secuestros en el departamento de Bolívar por actor, 1982-2009



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

Por último, cabe mencionar que, en correspondencia con la dinámica nacional del conflicto armado, el ELN en esta zona no ha tenido como repertorio principal el desarrollo de masacres. Según la base de datos de Cinep/PPP, entre los años 1974 y 2009, a esta insurgencia se le atribuye el 16 % de los casos registrados en la subregión (figura 7), siendo los grupos paramilitares el principal actor que recurrió a este repertorio, al que se le atribuye el 60 % de los casos.

Figura 8. Masacres por actor en el sur de Bolívar, 1974-2009



Fuente: SIG. Cinep/PPP. Elaboración propia.

Dinámicas recientes del conflicto armado

El conflicto reciente en el sur de Bolívar se encuentra atravesado por varios factores: la desmovilización paramilitar; el interés de los actores armados en las rentas de la minería, el clúster del narcotráfico y las rutas estratégicas; las disputas entre las multinacionales mineras y las comunidades en la serranía; la desmovilización de las FARC-EP; y por último, la victoria del Centro Democrático en los comicios para la Presidencia de la República (2018-2022) acompañada de la ruptura de la mesa de negociaciones con el ELN.

Antecedentes: la desmovilización paramilitar y la recuperación militar del Estado, el repliegue insurgente y el conflicto armado continúan, 2006-2016

Tras la desmovilización del BCB el 31 de enero del 2006, las insurgencias avanzaron hacia algunas zonas medias y bajas. Sin embargo, bajo la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se inició un proceso de recuperación militar del territorio, incrementando la ofensiva de la fuerza pública y obstaculizando su avanzada territorial (Valero, 2006). Es importante mencionar que este proceso de recuperación territorial, además de la agenda contrainsurgente y de lucha contra el narcotráfico, tuvo una fuerte relación con la hoja de ruta de confianza inversionista del Gobierno nacional, buscando prestar seguridad al desarrollo de las exploraciones mineras en la serranía.

La militarización de los territorios, en vez de traer tranquilidad para las comunidades, acarreó violaciones de derechos, estas se explican por dos razones: 1). Bajo la doctrina contrainsurgente para los mandos militares existía una relación directa entre las guerrillas y quienes habitaban las zonas medias y altas o se oponían al ingreso de las grandes empresas

y 2). Se presentaría una suerte de privatización de la prestación del servicio de seguridad con la firma de convenios entre grandes empresas mineras y el Ejército Nacional (*Semana*, 2009). Así, la fuerza pública llevaría a cabo detenciones arbitrarias, hostigamientos y ejecuciones extrajudiciales en contra de los liderazgos. Uno de los casos más representativos fue la ejecución extrajudicial en 2006 a manos del Ejército Nacional del líder de la Federación de Agro Mineros del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) e integrante de la JAC de Mina Gallo, Alejandro Uribe Chacón, quien se opuso al desarrollo de las actividades de la empresa Anglo Gold Ashanti (AGA) y su filial Kedahda S.A (*El Espectador*, 2010; Semana, 2009; Fedeagromisbol, s. f.).

A pesar del control militar, el sur de Bolívar atravesó por un proceso de rearme atomizado de las estructuras paramilitares; sumado a esto, hacia el año 2008 se asentarían las AGC y los Rastrojos (CNMH, 2014). Tanto las AGC como los Rastrojos se alimentaron de organizaciones reductos de los paramilitares e iniciaron un proceso de expansión para controlar los cultivos coca, las rutas del narcotráfico y la adquisición de recursos de la economía aurífera.

Bajo las lógicas expansionistas, hacia el año 2010 ambas organizaciones entraron en confrontación en el sur de Bolívar y sur de Cesar (CNMH, 2014), resultando diezmados los Rastrojos, grupo que desapareció de las dinámicas subregionales del conflicto. Uno de los lugares en disputa fue el corregimiento de Pueblito Mejía, jurisdicción del municipio de Barranco de Loba, donde buscaron controlar la regulación de la extracción aurífera en Mina Gloria[21] y el corredor estratégico por los municipios de Regidor, Río Viejo, Tiquisio y Altos del Rosario (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 008-11).

El proceso de expansión de las AGC en busca de rentas se vio acompañado de la coacción y señalamiento a las comunidades. Fue así como las AGC amedrentó hacia el año 2011 a la población de Mina Proyecto y Santodomingo, municipio de Arenal, bajo la consigna "Fuera o muerte para todo eleno guerrillero" (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 016-11).

Las AGC logaron controlar gran parte de la cadena del narcotráfico, regularon la producción aurífera de algunas zonas y manejaron rutas hacia Norte de Santander y el nordeste antioqueño. Es importante mencionar que su capacidad de despliegue se le facilitó por medio del establecimiento de un acuerdo de distribución territorial con las FARC-EP entre los años

21 Es relevante señalar que hacia el año 2003 alias "Macaco", integrante del BCB, propició el desplazamiento del Comité de Mineros de la Gloria (Mina Gloria). De esta manera, compró la mina y con el apoyo de las autoridades locales constituyó una nueva asociación de mineros que se encargó de explotarla. Esta asociación fue conocida como Grifos S.A, en ella figuraba como accionista Rosa Edelmira Luna Cardona, esposa de "Macaco". (*El Espectador*, 2019).

2012 y 2013. Según una entrevista a Joverman Sánchez Arroyave, alias "Manteco", comandante del frente 58 de las FARC-EP, realizada en 2016 por el portal *Verdad Abierta*, el pacto entre la insurgencia y las AGC fue de carácter nacional pero cada zona tuvo su particularidad en razón de la inexistencia de una unidad de mando en las AGC (*Verdad Abierta*, 2016).

Para el desarrollo del acuerdo, habrían sido las AGC quienes enviaron un mensaje a las FARC-EP proponiendo el cese del conflicto entre ambas organizaciones. Según "Manteco", quien fue uno de los delegados de la guerrilla para el relacionamiento, el acuerdo definió el establecimiento de límites territoriales y el respeto a las actividades de cada organización, es decir, que no se presentaran incursiones de las AGC que afectaran el trabajo político de la insurgencia, ni de la insurgencia que afectaran el negocio del narcotráfico de las AGC (*Verdad Abierta*, 2016). A esto se sumaría, según la relatoría de una reunión de las FARC-EP llevada a cabo en el nudo de Paramillo en 2013, el apoyo en avituallamiento bélico, la facilitación de información y asuntos entorno a la coca (*Verdad Abierta*, 2015).

En lo referente a la coca, se mencionó un incremento del impuesto a los productores de la pasta base por parte de FARC-EP y una solicitud a las AGC para que promocionaran a la guerrilla como sus aliados. La solicitud de promoción por parte de la guerrilla muy probablemente fue en búsqueda de obtener acceso a más productores de pasta base a quienes brindar seguridad y cobrar impuesto (*Verdad Abierta*, 2015) lo cual tiene relación con la forma de mencionar el pacto según la Defensoría del Pueblo, institución que señaló una repartición de labores para el manejo del negocio del narcotráfico donde la insurgencia se encargó de los cultivos y los Urabeños (AGC) de la transformación, transporte y comercialización (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 008-12).

Uno de los principales incentivos en ambas organizaciones para el desarrollo de este acuerdo, fue la posibilidad de evitar los costos humanitarios, económicos y de seguridad que implicaría una posible confrontación armada. Así, las AGC intentaron resguardar su maquinaria criminal; mientras la guerrilla encontró la posibilidad de obtener recursos al tiempo que reducía el impacto a sus estructuras, al respecto la citada relatoría de las FARC-EP consignó: "cualquier relación debe ser entendida como un alto al fuego en dirección a neutralizar su actividad criminal contra las masas y sus organizaciones" (*Verdad Abierta*, 2015). Desde entonces, esta subregión se ha caracterizado por el establecimiento de acuerdos económicos, territoriales y/o de no agresión entre los actores armados.

La capacidad operativa de la fuerza pública en este periodo hizo que las insurgencias se replegaran y usaran la táctica de guerra de guerrillas, operando en pequeñas comisiones con el fin de evitar los hostigamientos y bombardeos. A pesar de sortear a toda costa la confrontación directa,

los golpes propinados por la fuerza pública tanto a las FARC-EP como al ELN diezmaron sus estructuras paulatinamente. Las acciones bélicas de las FARC-EP tuvieron una reducción desde el año 2007 hasta su desmovilización y el ELN mantuvo el bajo nivel ofensivo que le caracterizó desde la época de confrontaciones con el BCB (figura 1).

Las dificultades operativas del ELN se intensificarían desde el año 2013 con el inicio de operaciones de la fuerza de tarea conjunta Marte, adscrita a la 5ta. Brigada del Ejército Nacional, y con la incursión de varios batallones de fuerzas especiales como respuesta al secuestro de los trabajadores de la Bravel Mining Corporation (RCN Radio, 2013). Entre los golpes más fuertes a su comandancia se encuentran: La muerte de María Orlinda Guerrero "la Negra Yesenia", en Morales, en el año 2011; la muerte del comandante Bernardo Enrique Jiménez "Familia", en el 2014, en la vereda la Gloria-municipio de Santa Rosa del Sur; y la muerte del comandante José Amnin Hernández Manrique, alias "Marquitos", en Antioquia, en 2015.

En general, durante este periodo ambas insurgencias atravesaron por un proceso de debilitamiento en la medida en que fue incrementándose la ofensiva y la tecnología de la fuerza pública, mientras tanto, fueron surgiendo varios grupos residuales del paramilitarismo tras las actividades económicas de la minería y la coca, los cuales fueron absorbidos en su mayoría por las AGC, actor que logró monopolizar gran parte del negocio del narcotráfico. A finales de este periodo, el Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP entró en proceso de desmovilización, sin embargo, a diferencia de las reconfiguraciones armadas que atravesaron otras partes del país, acá su salida del escenario de la guerra no tuvo un gran impacto en las dinámicas del conflicto armado.

El conflicto reciente: La desmovilización de las FARC-EP y la ofensiva Estatal, se perpetua de la crisis elena 2016-2020

La salida de los frentes 24 y 37 de las FARC-EP de las zonas medias y altas en San Pablo, Santa Rosa, Simití, Achí y Montecristo no generó un mayor cambio en las dinámicas del conflicto, pues la mayoría los territorios de las partes altas y medias de la serranía como Guamocó, Canelos y el Alto Caribona fueron zonas donde siempre operó con el ELN, por lo tanto, no se puede aseverar un mayor copamiento territorial eleno (Entrevista 11, 2020); por otro lado, algunas partes medias fueron capitalizadas por las AGC en su proceso de expansión en busca rutas estratégicas para el desarrollo del narcotráfico[22] (Entrevistas 5 y 7, 2020).

22 Según la Defensoría del Pueblo, con la desmovilización de las FARC-EP las AGC tuvieron acceso, por primera vez, a la zona rural de San Pablo por medio de la vereda la Esmeralda, desde donde avanzaron hacia Cañabraval, Canaletal, Carmen del Cucú y Caño Barbú, en un intento

En este periodo se acentuó el proceso el fortalecimiento de las AGC a pesar de las operaciones realizadas por la fuerza pública en su contra. Su constate crecimiento en el territorio ha sido tal, que hoy en día opera en el sur de Bolívar con dos frentes: el Luis Fernando Gutiérrez y el Luis Alfonzo Echavarría, cubriendo parte de los municipios de Achí, Tiquisio, Norosí, Montecristo, San Jacinto del Cauca y San Pablo (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 010-19; organizaciones del Magdalena Medio, 2018; La Silla Vacía, 2017). Dicho crecimiento le ha permitido extender sus tentáculos para la obtención de recursos financieros, regulando actividades económicas tanto en los cascos urbanos de las zonas bajas como en zonas mineras.

La forma de operar de las AGC se ha caracterizado por el desarrollo de homicidios selectivos y amenazas con el fin de garantizar la seguridad de sus actividades económicas. Si bien, esta organización en varias ocasiones ha intentado esgrimir un discurso político, su forma de relacionarse con el territorio permite comprender que sus intenciones son el usufructo de las actividades del microtráfico, narcotráfico y la extracción aurífera.

Las intenciones de las AGC, primordialmente económicas, le han configurado como un factor de riesgo para la labor de líderes y lideresas comunales, mineros, excombatientes y personas que promueven la implementación del acuerdo de paz, en especial en lo referente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), pues sus exigencias suponen una piedra en el camino en cuanto a la obtención de rentas ilegales. No obstante, estos mismos intereses financieros le han mantenido bajo la lógica del desarrollo de acuerdos, estableciendo una distribución territorial con el ELN tal como lo venía haciendo con las FARC-EP. Lo anterior se ha visto representado en un bajo número de acciones bélicas en la subregión (figura 1) y en un reducido porcentaje de ataques perpetrados por el ELN a otros grupos (figura 3). Esto ha dotado una particularidad al sur de Bolívar: Escasas confrontaciones armadas con altos índices de infracciones al DIH (figura 2).

La razón por la cual sus intereses económicos le han llevado a establecer acuerdos con el ELN tiene que ver con: 1). Evitar los costos de la confrontación, 2). Evitar llamar la atención de la fuerza pública y 3). Concentrar todo su esfuerzo en la obtención de rentas. Es importante comprender que, a pesar de su crecimiento, esta es una organización cuya estructura se basa en el control territorial por medio de la intimidación y el sicariato, no como los otrora paramilitares que contaban con batallones y se organizaban a manera de ejército, esto permite entender también por qué decide no enfrentarse al ELN, pues a pesar de que la guerrilla

por reactivar una vieja ruta del BCB desde Simití y Santa Rosa, pasando por San Pablo, Puerto Wilches y Papayal hacia la costa Caribe (SAT, Defensoría del Pueblo NS n°. 007-17).

se encuentra diezmada y está inmersa en un proceso de fortalecimiento, esta cuenta con una mayor capacidad bélica.

Según la periodista Salud Hernández:

> Ese pacto con la guerrilla evita atraer la atención del Gobierno, no les conviene una confrontación larga. Su intención es manejar los negocios sin interferencias, de ahí que quien quiera hacer política y ejercer liderazgo social en la zona, deba ignorar su presencia, mirar para otro lado y en caso de necesitarles, atender sus requerimientos. O los sacan del camino. (Hernández, 2019)

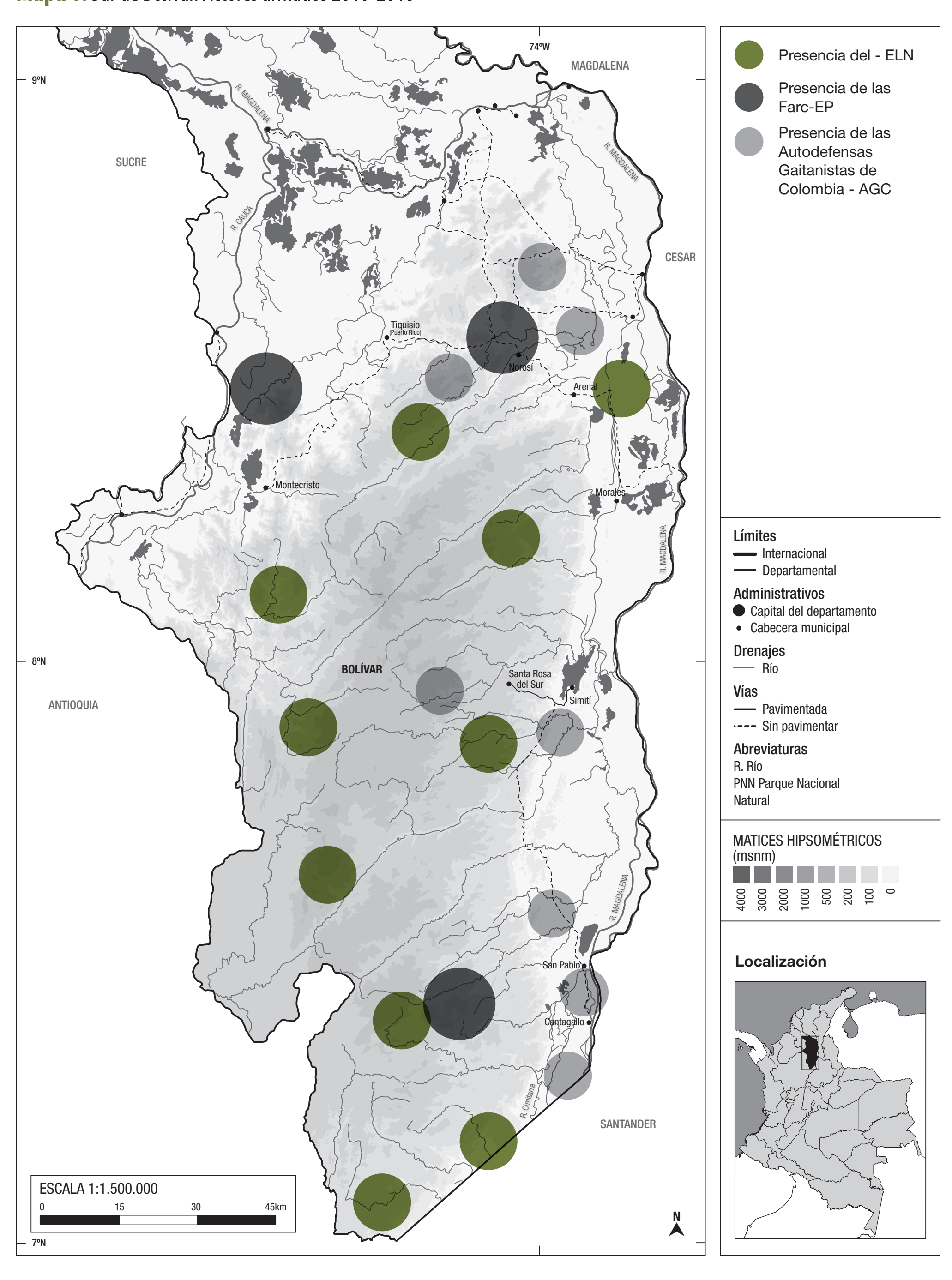
Ahora bien, este acuerdo no solo ha sido útil para las actividades financieras de las AGC, también le ha permitido al ELN fortalecerse y avanzar en su proceso de reestructuración, logrando así tener una mejor capacidad para sortear la persecución que ha esgrimido el Gobierno nacional en contra de sus estructuras.

A decir verdad, la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP no supuso ningún respiro para el ELN, pues con el fin de presionar la salida negociada, el Gobierno nacional puso en marcha la operación relámpago rojo. Con esta operación la fuerza pública se concentró en el desmantelamiento de las unidades elenas en el territorio nacional, estableciendo como objetivos, según el general Alberto Mejía, el desmantelamiento de su componente militar, redes de apoyo y fuentes económicas (Caracol Radio, 2017). Bajo esta directriz se llevarían a cabo judicializaciones masivas de manera irregular a líderes y lideresas sociales en la subregión.

Mientras la fuerza pública desarrollaba operaciones ofensivas a comienzos de este periodo, el ELN se encontraba atravesando por un proceso de reestructuración y fortalecimiento político militar, con el fin de responder a las nuevas técnicas contrainsurgentes de las fuerzas estatales y avanzar en la cualificación política de cara a la búsqueda de la salida negociada, siguiendo el mandato del quinto congreso. Este proceso de fortalecimiento lo llevó a cabo "Samuelito", a quien el quinto congreso le ordenó ponerse al frente del FGDRC debido a sus años de experiencia en la DN, su historia en esta zona y en otros frentes, llegando así a brindar herramientas de estrategia militar y a trabajar sobre los problemas de acción colectiva de la organización (ELN, 2018).

Con "Samuelito" el ELN se acercó a las comunidades, hizo pedagogía de paz, incentivó la participación activa de la gente en la mesa y cumplió a cabalidad el cese al fuego bilateral con el Gobierno nacional. Sin embargo, con su muerte y la ruptura de la mesa de negociaciones en razón de la negativa de reanudar los diálogos de paz por parte del presidente electo Iván Duque y el delegado alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, el ELN pasó tener a una actitud ofensiva (Entrevistas 5 y 9, 2020):

Mapa 1. Sur de Bolívar. Actores armados 2010-2016



Pie de imagen y crédito

Referencia, bibliografía, elaboración

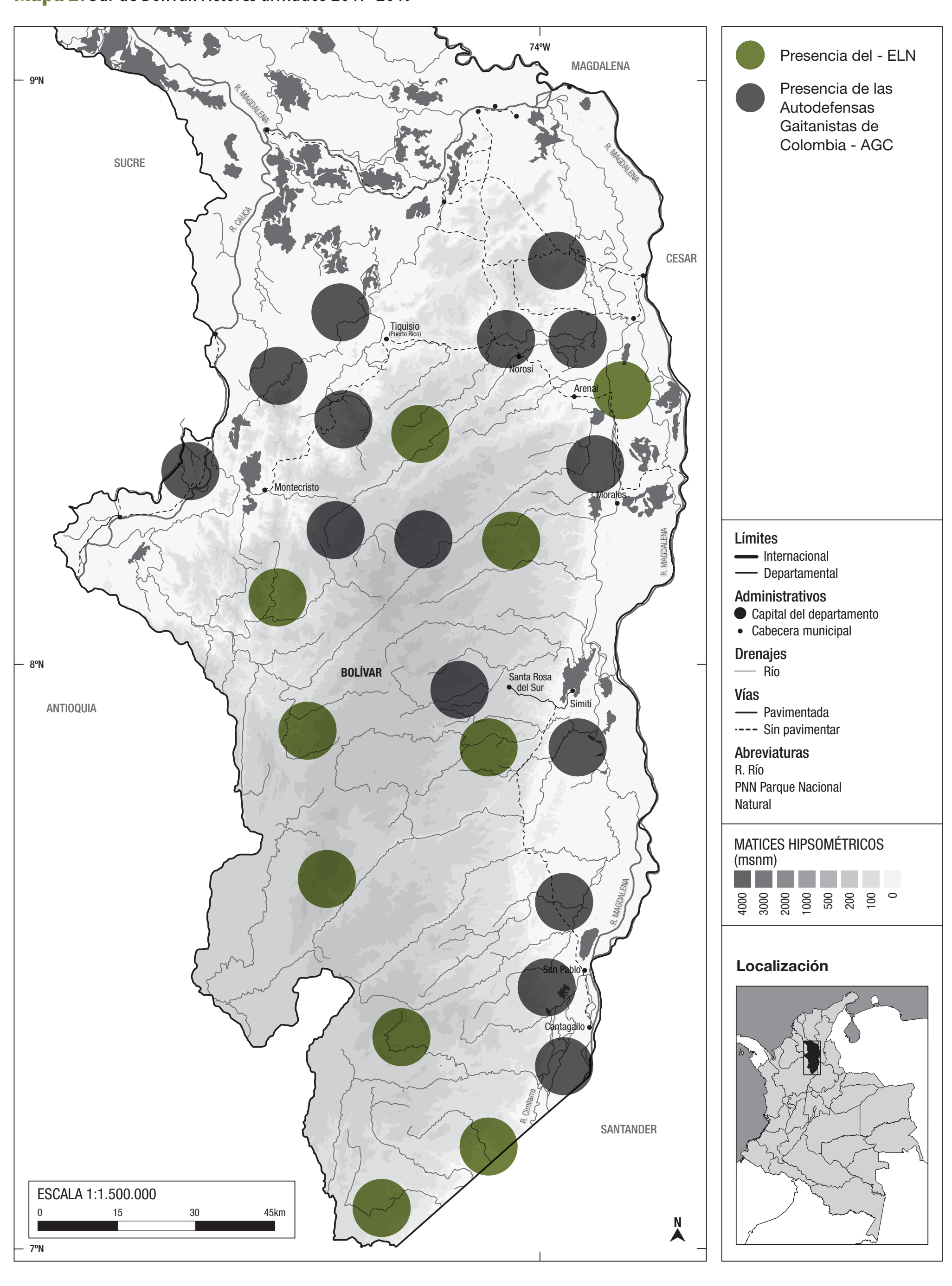
> El ELN estaba en otra dinámica, estaba socializando, nos llamó incluso a nosotros, los presidentes, yo fui 12 años presidenta de la JAC de Buena Vista [...] Bueno, entonces nosotros subimos en el 2016 a hablar con la gente del ELN a la Marizosa (corregimiento ubicado en la parte alta de Santa Rosa del Sur), eso fue una reunión con 24 juntas y nosotros fuimos, y allá nos dijeron que el tema del sistema ambiental, que iban a entrar en un proceso político de apoyo, que le iban a dar participación a las juntas y a las comunidades para participar en todas las propuestas del proceso de paz de ellos, que iban a llevar de verdad a líderes a participar en la negociación [...] Estaban en otra tónica, porque ellos ya no querían como pelear más, pero después de que se rompió esa vaina si no ha habido diálogos de nada, no, y es que tanto la fuerza pública como la insurgencia han implementado el pie de fuerza, o sea, les ha tocado duro. (Entrevista 7, 2020)

"Samuelito" cayó en una acción de francotirador el 17 de julio del 2018 en San Pablo, en medio de un procedimiento irregular, en el que el Ejército procedió sin hacer efectivas las órdenes de captura que tenía por homicidio en persona protegida y rebelión (Beltrán, 2018). Este fue un golpe contundente para el ELN a nivel nacional y subregional e hizo que los hostigamientos que venía realizando la insurgencia para presionar la mesa de negociaciones incrementaran (figura 1). Así, desde 2018 fueron constantes los ataques del ELN a las estaciones de policía y a las unidades del Ejército Nacional en Santa Rosa del Sur, Simití, Arenal, Morales, Norosí, entre otros municipios.

Por otro lado, si bien el Gobierno nacional ya venía ejerciendo operaciones, a comienzo del 2019 fortalecería la fuerza de tarea conjunta Marte, incorporando más de dos mil activos del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y expertos de la Policía antinarcóticos para golpear a las estructuras del ELN y las AGC (Montaño, 2019). Este incremento del pie de fuerza estatal ha sido cada vez más fuerte, mostrando varios resultados operativos, pero, a su vez, ha dejado a las comunidades en medio de las balas.

En el año 2020 la capacidad operativa de la fuerza pública de nuevo asestaría otro golpe a la estructura nacional y subregional del ELN. A saber, tras la muerte "Samuelito" los dirigentes de la organización decidieron enviar al territorio a Alejandro Montoya, alias "Gallero", quien integró la delegación de paz hasta 2018, hizo parte de la DN y había operado previamente en la subregión, siendo conocido, respetado y apreciado por la gente de las comunidades y la tropa guerrillera. "Gallero" se encargó de continuar con el proceso de orientación política y militar que venía impartiendo "Samuelito" con el fin de coordinar y evitar que el descabezamiento de las estructuras cayera en la degradación de la guerrillerada. Sin embargo, no duró mucho en el sur de Bolívar, fue dado de baja

Mapa 2. Sur de Bolívar. Actores armados 2017-2019



Pie de imagen y crédito
Referencia, bibliografía, elaboración

en un bombardeo a un campamento en la vereda la Cachaza, municipio de Montecristo, junto a otro comandante importante de la zona, Fredy "Mocho Tierra" (*El Colombiano*, 2020).

Las muerte de "Samuelito" y "Gallero" parecen sumir al ELN en una crisis subregional, con esto la reconexión política de sus estructuras militares sufre un gran golpe que puede desembocar en un incremento del militarismo, acompañado de violaciones a los derechos humanos por cuenta de la ausencia de algún comandante que cuente con la capacidad política y con el respeto de los mandos medios para conducir las estructuras hacia el cumplimiento de las directrices nacionales de la DN, el COCE y el quinto congreso. Según un exguerrillero del Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP, la muerte de "Gallero" fue una pérdida para la subregión, pues tenía la capacidad de mantener el control del FGDRC y su coherencia política (Entrevista 15, 2020).

Al día de hoy han sido muchos los mandos de connotación política y militar de gran importancia que han caído en combate en el sur de Bolívar, lo que da cuenta de la indiscutible pérdida de control territorial del ELN en la actualidad comparado con sus años de gloria en la década de los 90. Es inevitable relacionar esto con la nostalgia expresada por el comandante Nicolás Rodríguez Bautista "Gabino" (Anexo 1), la cual demuestra que esta insurgencia aún sigue viendo en el sur de Bolívar y Antioquia esa cuna que la vio nacer, sin embargo, esa misma cuna le ha visto padecer.

Ahora bien, que el ELN haya sufrido otro golpe no significa que haya desaparecido de las dinámicas del conflicto, de hecho, es el único actor en este momento, junto con la fuerza pública, que lleva a cabo acciones bélicas (las AGC se centran en el sicariato y las amenazas para controlar sus negocios), esto quiere decir que esta guerrilla buscará fortalecerse tanto económica como militarmente mientras no se avance hacia un cese bilateral para el desarrollo de la mesa de negociaciones.

El ELN y las economías territoriales

En el sur de Bolívar, al igual que en otras partes del país, el ELN se ha nutrido del cobro de impuestos a los diferentes mercados que se mueven en su zona de operación. La tributación la ha exigido especialmente a grandes ganaderos, la industria palmera, locales comerciales y bares. Según la insurgencia, quienes deben pagar son aquellos que poseen considerables ingresos financieros, sin embargo, el cumplimiento de esto se ha supeditado al tipo de comandancia en zona.

Si bien esta organización obtiene rentas de la mayoría de las actividades económicas, ha sido su relación con la economía minera en la serranía de San Lucas lo que ha mantenido en funcionamiento sus estructuras.

Su relación con la minería data desde comienzos de los años ochenta cuando se inició un proceso de colonización espontanea después del descubrimiento de las primeras minas de veta, Mina Azul y Mina Seca, proceso en el cual se encargó de dirimir los conflictos entre los mineros y fomentó el desarrollo y la consolidación de instancias de gobierno propio (Arenas, 1999). Desde entonces y hasta el día de hoy, el ELN ha sido un actor más en el paisaje de la serranía, acompañando a las comunidades en el control de los marcos normativos y en su lucha por la permanencia en el territorio, factor que le ha permitido esgrimir su discurso de "oro con beneficio social" a la vez que aprovecha los recursos financieros de la extracción mineral.

Su forma de adquirir rentas de la minería se basa en la exigencia de un porcentaje de las ganancias de la mina en cuestión. A saber, para empezar a trabajar una mina se necesita alrededor de seis o más socios, quienes se distribuyen las labores y al finalizar el trabajo reparten la ganancia de la cual un porcentaje previamente acordado es recogido por algún guerrillero de civil. Este tipo de relacionamiento no implica que la insurgencia haga una presencia constante de manera explícita, debido a que nadie quiere inmiscuirse en problemas que tengan que ver con la guerrilla (Entrevista 7, 2020).

Ha sido en la zona minera donde el ELN ha perdido menos capacidad de control, actualmente sigue haciendo veeduría de la extracción y cobra impuesto a las empresas que operan. Con su regulación ha buscado que las minas queden en manos de las comunidades, por lo tanto, controla cuáles empresas o inversionistas entran al territorio e impide el ingreso de quienes considera testaferros de grandes multinacionales (Entrevista 9, 2020). De esta manera, ejerce una constante veeduría a través de los milicianos en la zona, y cuando se entera del ingreso de algún inversionista no deseado o de un negocio mal hecho entre la comunidad y alguna gran empresa, interviene. Este fue el caso ya referenciado de la Bravel Mining Corporation. Así, además de garantizar sus ingresos, el ELN ha podido sostener un discurso de protección de los recursos naturales bajo la consigna de liberación nacional.

Sin embargo, el ELN no solo ha usufructuado el desarrollo de la minera comunitaria y de las empresas mineras, también se ha visto inmiscuido en el desarrollo de la minería mecanizada de foráneos con retroexcavadoras. Si bien, la práctica minera con retroexcavadoras no se encuentra en auge como sí lo estuvo en el 2009 (Entrevista 5, 2020), en algunas partes persiste y puede volver a incrementarse su uso debido al aumento del precio del oro durante el marco de la pandemia del covid-19, convirtiéndose en un foco de conflicto social y ambiental.

Los dueños de las retroexcavadoras, al igual que en otras partes del país, han ingresado al sur de Bolívar a través de pactos con diferentes

actores (la fuerza pública, los gobiernos locales, los paramilitares, los grupos ligados al narcotráfico, las insurgencias y las JAC), a cambio han ofrecido pagos a cada uno por permitirles el desarrollo de la explotación aurífera (Entrevistas 5, 7 y 9, 2020). En lo que respecta al ELN y el funcionamiento de las retroexcavadoras, se encontraron dos casos de conflictos de intereses: En el primero, algunas comandancias permitieron el ingreso de la maquinaria sin la autorización de las comunidades; y en el segundo, algunas JAC permitieron el ingreso de las maquinarias en zonas donde los marcos normativos lo prohíben.

Así lo explicó un líder del territorio:

> Nosotros estábamos mirando todos los días cómo se destruía la serranía y tuvimos la oportunidad de hablar con el jefe del FDGR en su momento, él se extrañaba muchísimo por lo que estaba pasando, lo que nos decía era que iba a remitir órdenes muy precisas para que eso parara, pero nunca sucedió […] Si usted tuviera la oportunidad de subirse a un helicóptero y dar un pasito por la Serranía, le aseguro que desde allá va a darse cuenta del desastre que hicieron. Entonces por ahí quedan retros haciendo cositas, pero ya hicieron el daño. Bueno, y ahorita esas zonas donde la guerrilla no dejó trabajar con retros, los de las retros le andan insistiendo a los líderes comunitarios que les den permiso para trabajar, y hubo sectores, por ejemplo, acá en Arenal se han metido a zonas donde la guerrilla prohibió, comprando a los líderes […] el tema del soborno es complicado. (Entrevista 7, 2020)

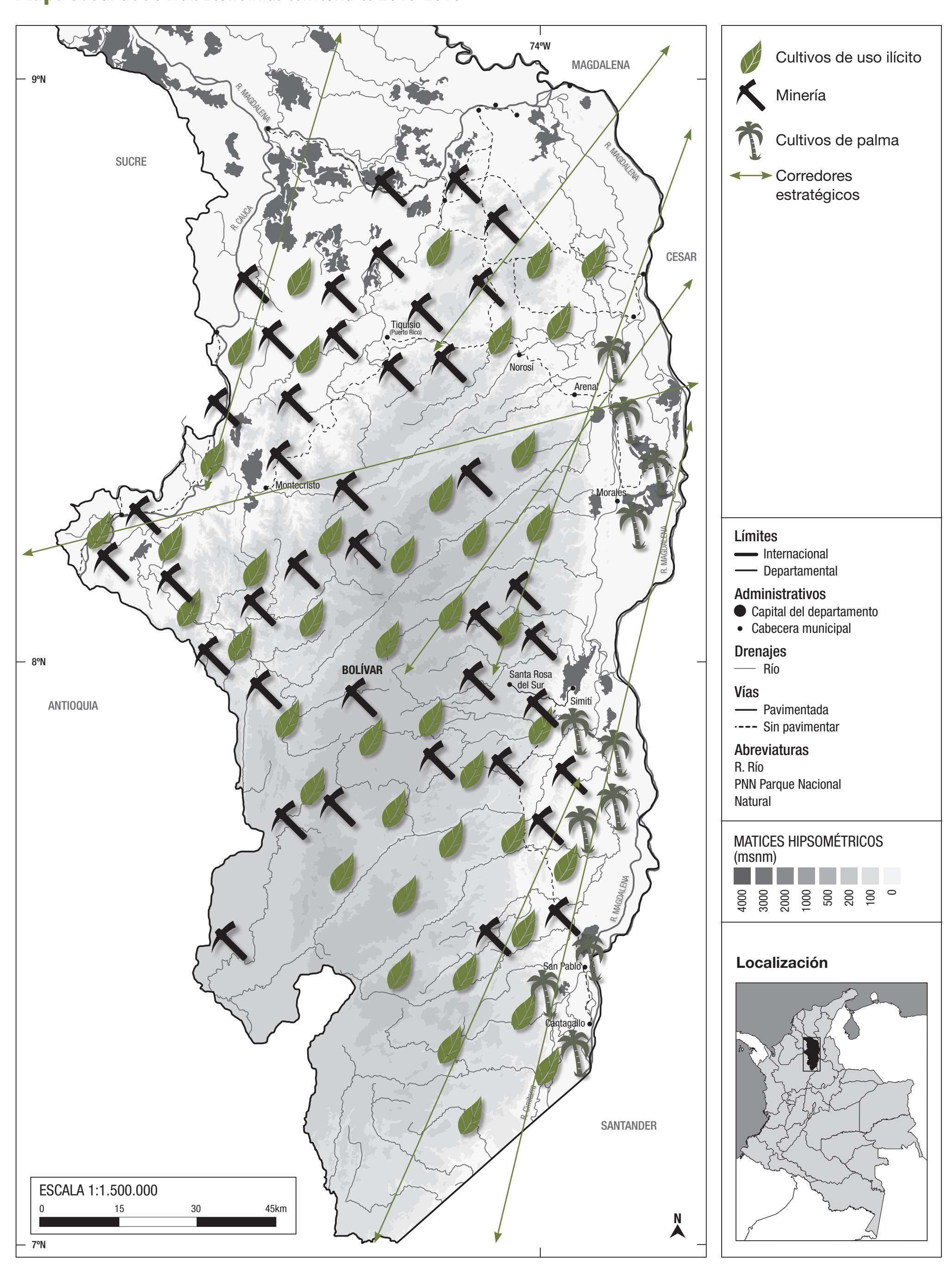
Lo anterior muestra de nuevo la complejidad de las relaciones locales, y a su vez, evidencia los problemas de coordinación que ha atravesado el FGDRC con sus estructuras.

La otra economía mediante la cual se han abastecido las unidades del frente de guerra es la economía cocalera, sin embargo, a diferencia de la minería, esta insurgencia no se inmiscuyó de manera temprana en los cultivos.

En el sur de Bolívar la coca logró asentarse en los años ochenta debido a la precaria integración social, los altos índices NBI y la dificultad para ejercer actividades legales, de esta manera se constituyó en una economía de "retaguardia" para los campesinos, pues les permitió adquirir recursos destinados a solventar sus necesidades básicas o sostener los ciclos de los cultivos tradicionales (Fonseca, Gutiérrez y Rudqvist, 2005; Romero, s. f.). En esta época el ELN prohibió el desarrollo de cultivos en sus zonas de operación, llegando a erradicarlos manualmente (Entrevistas 5, 8 y 11, 2020).

Su distanciamiento del cultivo le costó el apoyo social de los campesinos que buscaron en la coca el sustento para salir adelante; estos le recriminaron que a las FARC-EP sí les estaba permitido cultivarla (Entrevistas 8 y 11, 2020). A raíz de esto y en busca de acceder a

Mapa 3. Sur de Bolívar. Economías territoriales 2010-2016



Pie de imagen y crédito
Referencia, bibliografía, elaboración

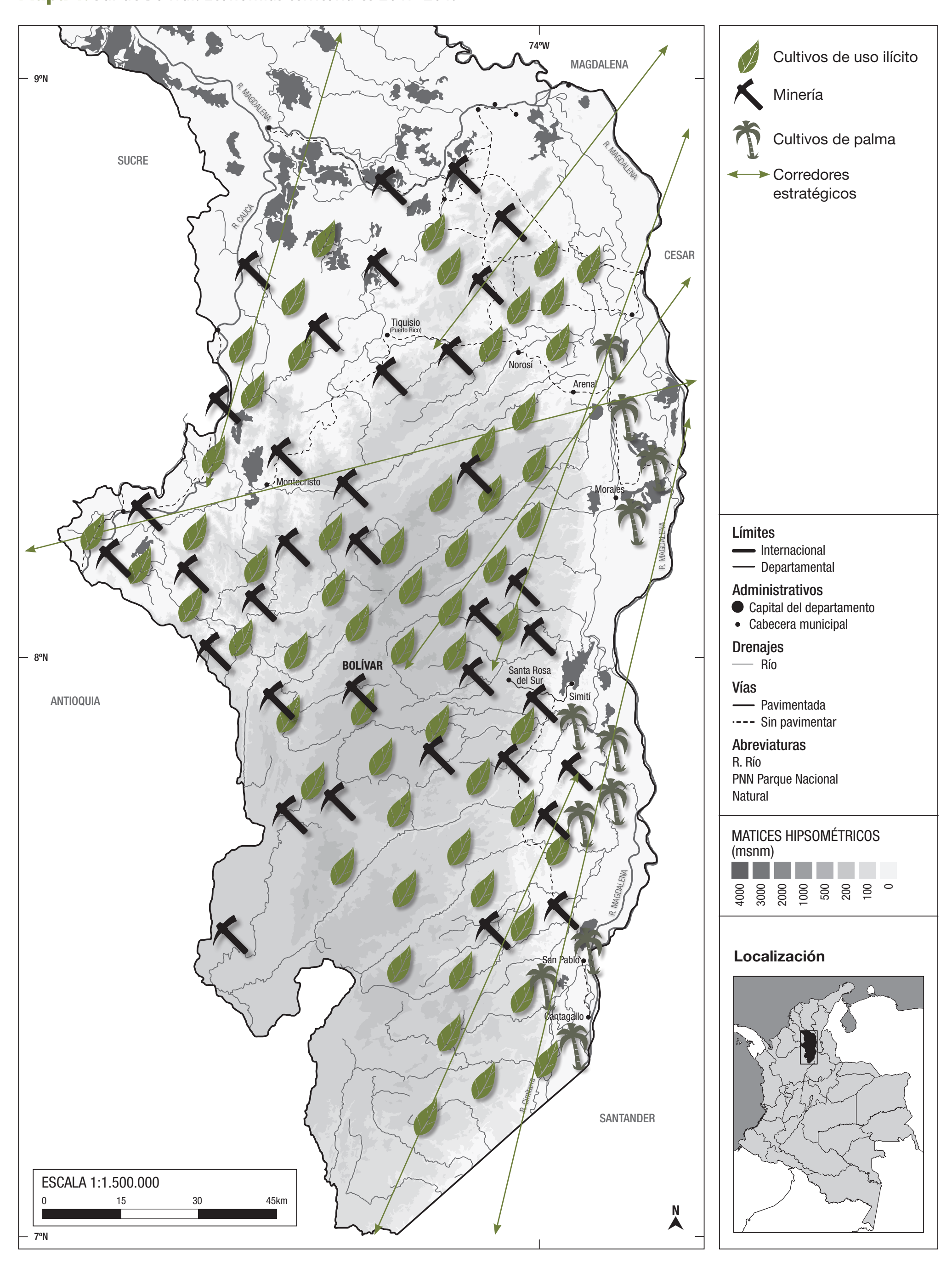
más recursos económicos, el ELN se fue acercando paulatinamente a la dinámica cocalera en sus zonas de operación, según algunos pobladores, la insurgencia permitió el cultivo, pero exigió a quienes lo ejercían el desarrollo de huertas agroalimentarias para su consumo propio (Entrevistas 8, 11 y 9, 2020).

En la actualidad, entendiendo que la mayoría de los entrevistados mencionaron que el ELN cobra un impuesto, se podría inferir que este grupo se encarga de la regulación de los cultivos de coca que se encuentran en su territorio y las AGC de la transformación y distribución, lo cual tiene concordancia con el mencionado pacto de distribución territorial entre ambos actores. Además, también se podría pensar que, al tener un mayor control de la zona rural, la insurgencia podría estar cobrando un peaje a las AGC por usar las rutas estratégicas que son de su dominio (Entrevista 15, 2020).

Aunque no fue posible corroborar esta información, según una lideresa de Santa Rosa del Sur, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP esta insurgencia habría prohibido el cultivo de coca en San Pablo, Simití y Santa Rosa, con el fin de apoyar la sustitución de cultivos, sin embargo, con los retrasos del PNIS, habría empezado a permitir que la gente cultivara e incluso más recientemente, tras la muerte de "Gallero", estaría promoviendo el cultivo en los territorios. Lo anterior muestra una extraña relación con la nota de seguimiento 007-17 del SAT de la Defensoría del Pueblo, donde se menciona que las FARC-EP prohibió el cultivo de coca antes de su desmovilización, al respecto hay que recordar la fraterna relación que existió entre ambas organizaciones.

En todo caso, lo cierto es que los cultivos de coca han tenido un incremento sustancial en la subregión desde la firma de los acuerdos de paz (figura 7), lo que significa que existen falencias en la implementación del acuerdo, especialmente por los retrasos que ha presentado el programa PNIS, esto, a su vez, ha abierto una ventana de oportunidad para las AGC, el ELN y otros grupos, quienes encuentran en esta economía un sustento para sus estructuras. Además, esta situación ha acarreado el señalamiento y asesinato de quienes promueven la sustitución de cultivos, como fue el caso del homicidio de Jorge Iván Ramos "Mario Morales", excomandante del frente 37 de las FARC-EP y encargado del PNIS, hecho en el cual, al parecer, hubo guerrilleros del ELN implicados (FARC, 2020).

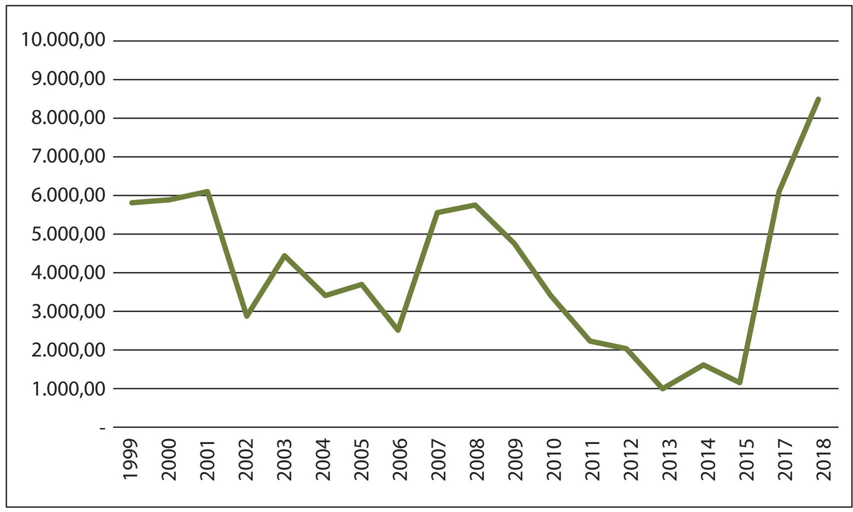
Mapa 4. Sur de Bolívar. Economías territoriales 2017-2019



Pie de imagen y crédito

Referencia, bibliografía, elaboración

Figura 9. Cultivos de coca en el sur de Bolívar, 1999-2018



Fuente: UNDOC. Elaboración propia.

Los liderazgos y las comunidades en el ojo de huracán

Bajo las dinámicas recientes del conflicto, —a pesar de la escasa confrontación entre las AGC y el ELN—, las operaciones de la fuerza pública, la normatividad minera y los intereses económicos de los diferentes actores que componen el panorama territorial, han dejado a los líderes y lideresas en el ojo de huracán.

Del entramado de problemas que padecen las poblaciones del sur de Bolívar sobresale la falta de garantías para el ejercicio de la participación y la permanencia en el territorio, esto por dos razones: 1). son varios los atentados, homicidios y amenazas a quienes promueven la implementación del acuerdo de paz, fomentan la sustitución de cultivos de uso ilícito y exigen el respeto y la soberanía de los recursos naturales y 2). las comunidades y liderazgos han sido objeto constante de estigmatización y criminalización por parte de la fuerza pública y funcionarios del Estado.

En lo que respecta al primer punto, actualmente el Gobierno nacional no ha logrado brindar garantías de seguridad para los liderazgos sociales y excombatientes de las FARC-EP, situación que no solo viven estos territorios y que de hecho se ha tornado mucho más compleja en otros lugares del país, como es el caso del departamento del Cauca.

En cuanto al segundo punto, en los últimos tres años han sido detenidos más de treinta líderes y lideresas de forma masiva e irregular en operativos contra la insurgencia, uno de los casos más emblemáticos fue el de la lideresa social Milena Quirós, a quien junto con otros líderes le

imputaron los cargos de rebelión y concierto para delinquir, vinculando el ejercicio de su liderazgo con el ELN. Milena quedó en libertad junto con cinco líderes por falta de material probatorio, mientras tanto saldría a la luz la noticia de que la Fiscal que emitió la orden de captura fue detenida por participar en una red de corrupción al servicio de una red criminal en la costa Atlántica (*Verdad Abierta*, 2017).

Si bien estos casos de judicialización a liderazgos sociales tienen relación con la mencionada frontera gris que ha demarcado la forma de operar del ELN, también son el resultado de una política de seguridad que recicla las lógicas contrainsurgentes que desde hace más de tres décadas han conducido al señalamiento y vulneración de los derechos humanos de las comunidades por inferencias espurias, debido a que no comprenden las dinámicas territoriales en las zonas donde confluyen actores armados con población civil. Este relato de una lideresa de Santa Rosa da cuenta de la encrucijada en la cual se encuentran las comunidades debido a que la autoridad armada en sus territorios sigue siendo la insurgencia, razón por la cual los liderazgos se ven obligados a convivir e interlocutar con el actor armado, convirtiéndose en objeto de investigaciones y procesos judiciales:

> A nosotros, a todos los líderes sociales de por acá, nos tienen como guerrilleros, que todos informamos a la guerrilla, que todos trabajamos para la guerrilla, que si no fuera así habría capturas del ELN, que nosotros no le colaboramos a la fuerza pública, que no los denunciamos, que no les decimos dónde están. Eso nos han abierto investigaciones, de todo. ¿Sabe qué le da a uno miedo?, que a veces la gente de la zona le manda mensajes a uno e incluso del mismo ELN lo llaman a uno y le dicen: "venga compañera súbase a una reunión en tal y tal parte porque necesitamos reunir a las comunidades para una situación", entonces a uno sí le da miedo eso, porque uno no hace parte de ellos, pero en tal situación, pues uno va a las reuniones de acuerdos de comunidades, entonces con eso ya dicen que no, que uno es de la guerrilla, porque dicen: "ustedes se comunican con ellos y no nos dicen dónde están" (Entrevista 7, 2020).

Ahora bien, la estigmatización y posible judicialización no se remite exclusivamente a la política de seguridad, pues en la normatividad minera se establece una serie de trámites y certificados que exigen los mismos requerimientos a los pequeños mineros y las grandes empresas para la consecución de títulos legales, dificultando así la formalización de las actividades de los pequeños mineros, quienes al encontrarse sumidos en la informalidad, por su escasa capacidad y bajos recursos, son criminalizados, al tiempo que ven amenazada su permanencia en los territorios por la adjudicación de títulos a grandes empresas en zonas donde han venido operando desde hace varios años. Por otro lado, por cuenta de la Resolución 1628 del 13 de julio del 2015 se inició un proceso de zonificación de la

serranía como área de protección, de este modo, el Gobierno nacional inició estudios para darle el carácter de Parque Nacional Natural (PNN). Si bien esto puede parecer positivo en términos ambientales, la figura de parque implica que no podría realizarse ningún tipo de actividad económica, lo que profundizaría la situación de pobreza de las comunidades y generaría grandes olas de desplazamiento. Por lo anterior, las comunidades se encuentran en un proceso de concertación, en el cual buscan garantizar su permanencia en el territorio al tiempo que se reduce el impacto ambiental.

Según cuenta un líder minero:

> Nosotros somos los más interesados en que haya una figura de protección en la serranía de San Lucas, nosotros no somos un único proyecto que está en el sur de Bolívar sino la construcción de un territorio de vida. Si la serranía no tiene una zona de protección, en 10 años o 20 años lo que quede de San Lucas será muy poco, y muy poco es muy poco. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, debe haber una figura de protección para la Serranía que no desplace a la gente que ya está en la Serranía, esa es la discusión que tenemos con Parques, con el ministro de Ambiente. Nosotros les decimos que somos los más interesados en que se construya una figura de protección y un área de protección, y eso por nuestra bandera de lucha, que es permanecer y tener una vida digna, y si no hay protección, pues San Lucas se acaba […] Ahora, el problema con la propuesta de Parques es que esa es la figura más restrictiva que hay, en un PNN no puede haber ninguna activada económica y todo mundo tiene que desplazarse, entonces nosotros contra eso sí peleamos, decimos: "Un parque no, porque se terminan 35 años de lucha que llevamos, y tendríamos que salir, ¿y para donde nos vamos?", o sea, pensar en construir un territorio en otra parte ya no se puede. Entonces nosotros seguimos en la lucha para que haya una figura de protección que no desplace a los campesinos y mineros de la región. (Entrevista 5, 2020)

De manera transversal a lo anterior, la ruptura de la mesa de negociaciones con el ELN y el fortalecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta ha incrementado las confrontaciones entre la guerrilla y el Ejército en inmediaciones de los caseríos, esto ha causado recientemente la denuncia de violaciones al principio de distinción, el uso de menores para el desarrollo de las dinámicas de la guerra por parte de la fuerza pública y el desarrollo de una ejecución extrajudicial llevada a cabo por el Ejército Nacional el 7 de marzo del 2019 en el corregimiento de Micoahumado (Colombia Informa, 2019; Pacifista, 2019; Comunidad de Micoahumado, 2019).

En definitiva, la perpetuación del conflicto armado y la nula implementación de las medidas de seguridad consignadas en el acuerdo firmado entre las FARC-EP y el Gobierno nacional han dejado a los liderazgos de las comunidades a la deriva, ante los intereses rentistas y territoriales de los

múltiples actores. A esto se suma la nula integración institucional de los territorios del sur de Bolívar, los cuales en vez de desarrollo de infraestructura social y prestación de bienes y servicios, han visto el incremento del pie de fuerza militar, factor que no solo ha dejado a las comunidades en medio de los fusiles, sino que también ha limitado su capacidad de participación política en razón de la estigmatización, el señalamiento y la judicialización a las comunidades y a sus liderazgos por parte del Gobierno nacional, el cual suele relacionarles con la insurgencia y la minería criminal.

Por lo anterior, a pesar de ser múltiples los temas de la agenda de exigencias de los pobladores, se puede establecer que una prioridad es la crisis humanitaria y de vulneración a los derechos humanos que han venido sufriendo las comunidades, teniendo en cuenta que las afectaciones a los procesos organizativos de las comunidades rompen el tejido social y limitan la capacidad de levantar la voz, esto hace que sus reivindicaciones históricas por la salvaguarda de los recursos nacionales y la necesidad de infraestructura e inversión social sean silenciadas.

En ese sentido, se puede afirmar que la injerencia del ELN en los conflictos sociales es transversal a las dinámicas del conflicto armado, pues es la forma de operar de la insurgencia y las operaciones de la fuerza pública, junto con los intereses de control territorial de los demás actores —los cuales se anclan en las economías informales e ilegales como resultado del abandono estatal—, lo que en efecto ha sumido a la subregión en la crisis humanitaria. Es por esto que, para gran parte de los pobladores y pobladoras de esta zona, resulta de especial interés el restablecimiento de la mesa de negociaciones entre el ELN y el Gobierno nacional, acompañado de un mecanismo de participación que le permita a las comunidades decidir sobre sus territorios, en aras de superar las condiciones de abandono a las que históricamente han sido relegadas.

A manera de conclusión

En el presente capítulo se han esbozado algunas características de las estructuras del frente de guerra Darío de Jesús Ramírez Castro, que operan en el sur de Bolívar. Se mencionó que los territorios de esta subregión se caracterizan por el abandono estatal, el asentamiento de poblaciones dispersas con una tradición de lucha social y una geografía variada. Estos elementos contribuyeron a la inserción del ELN, actor que consolidó su retaguardia histórica en la teta de la serranía de San Lucas donde se nutrió de la producción aurífera, realizó trabajo político organizativo, resguardo al COCE y proyectó su operación político-militar.

Hacia mediados los años ochenta el ELN logró instaurarse como el actor armado hegemónico de la subregión, sin embrago, el impacto de

su accionar en los sectores de las élites y la presión que ejerció para el establecimiento de una zona de despeje en la región, propicio la inserción del paramilitarismo y el incremento de las operaciones militares, lo que, en consecuencia, diezmo su estructura. Los impactos que sufrió, especialmente tras el fortalecimiento de la presencia de la fuerza pública, desencadenó un proceso de degradación, pues la captura y muerte de importantes comandantes hizo que sus unidades, en ocasiones, quedaran bajo mandos demasiado jóvenes sin cualificación política, situación que hasta el día de hoy ha intentado superar el grupo guerrillero.

Sobre la forma de relacionarse con la población civil, al principio se destacó que este grupo se ha caracterizado por la mediación y el diálogo, lo cual se atribuye a la presencia de comandantes de alto nivel. Sin embargo, los constantes golpes que ha sufrido han hecho que la mencionada degradación de sus estructuras le dote de una actitud autoritaria en algunos territorios, de ahí que se evidencien diferentes formas de relacionarse con la población dependiendo del tipo de comandancia a nivel de veredal o de corregimientos, así como de la percepción de seguridad que brinde el territorio y la topografía a las unidades elenas.

Ahora bien, algo importante a resaltar es la frágil frontera gris como resultado de su forma de operar, pues al mezclarse entre los civiles las comunidades que han tenido que aceptar su regulación, se han convertido en las princípiales principales víctimas del repertorio de otros actores armados y de la fuerza pública. Esto último se ha visto reflejado recientemente en la constante estigmatización y judicialización masiva de líderes y lideresas sociales.

En definitiva, en este caso nos encontramos con una estructura que logró establecer fuertes arraigos sociales desde su incursión al territorio y que gozó de gran capacidad militar hasta la arremetida paramilitar y de la fuerza pública, momento en el que vio diezmadas sus fuerzas. Tras la desmovilización de los paramilitares las operaciones realizadas por las fuerzas estatales hasta el día de hoy le han impedido reestructurar completamente sus unidades y recuperar la capacidad de coordinación y despliegue que tuvo en sus años de gloria, esto es evidente con las recientes bajas de “Samuelito” y “Gallero”. Por otra parte, es importante comprender que, a pesar de seguir inmerso en un proceso de reestructuración, el ELN continúa siendo un actor significativo en las dinámicas locales de los territorios al ser la autoridad armada de algunas zonas.

Dada la importancia que aún tiene el ELN en algunos territorios, a pesar de que el sur de Bolívar ya no es el bastión político militar que fue anteriormente, resulta imprescindible que ante una posible negociación de paz se garantice el andamiaje institucional para cubrir los vacíos que dejaría la ausencia de su regulación. Este andamiaje institucional debería ser

algo acordado con las comunidades, pues justamente ha sido debido a la presencia diferenciada del Estado (el cual se ha limitado a ejercer presencia principalmente a través de la fuerza pública) que la guerrilla ha actuado como autoridad armada. Es decir, si no se trata de fondo la ausencia de infraestructura a nivel local, no se solucionará la acumulación de tierras y tampoco se regulará la extracción aurífera de la mano de las comunidades, en esta zona los conflictos sociales van a perdurar y se abrirán ventanas de oportunidad para que otros actores interesados en las economías informales y en las rutas de interconexión de la subregión se asienten, haciendo que el flagelo que actualmente viven los territorios se perpetúe.

Para terminar, es significativo mencionar que si bien en el caso del sur de Bolívar puede parecer que cada baja de un comandante es un gran éxito, realmente esa estrategia puede llegar a tener resultados contraproducentes, pues ante la ausencia de mandos de carácter político se corre el peligro de que las unidades queden a manos de personas sin ningún tipo de convicción, lo que resulta bastante problemático a la hora de lograr un acuerdo de paz y concertar una desmovilización; serían estos mandos con escasa formación política aquellos que se aislarían y terminarían por reciclar la violencia en la región, esta vez sin ningún contrapeso a nivel nacional que intente regular su comportamiento como ha ocurrido en estas estructuras, pues a pesar de la degradación que han atravesado algunos frentes guerrilleros en el sur de Bolívar, el ELN nacional ha enviado comandantes a la zona para evitar el desarrollo de desmanes por parte de mandos sueltos.

Bibliografía

Aponte, Andrés; Arboleda, y Barrera, Víctor (2016). *Ambiente, minería y posconflicto en Colombia: Los casos del Catatumbo y sur de Bolívar.* Cinep/PPP.

Arcila, María Teresa y Gómez, Lucella (2009). *Libres, cimarrones y arrochelados en la frontera entre Antioquia y Cartagena*. Siglo XVIII. INER-Universidad de Antioquia. Siglo del Hombre Editores.

Arenas, Jaime (2009). ELN *La guerrilla por dentro*. Icono Editorial Ltda.

Arenas, Martha (1999). *Cerrando fronteras historias contadas del Magdalena Medio. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio*. Barrancabermeja.

Beltrán, Pablo (2018, 13 de agosto). En vez de asesinarlo ¿por qué no lo capturaron? ELN-*Voces*. https://bit.ly/3qNidBT

CNMH [Centro Nacional de Memoria Histórica] (2016). *Tomas y ataques guerrilleros (1965 - 2013)*. CNMH – IEPRI.

Chávez-Marín, Eliana; Carballo-Angarita, Carmen L y Quijano-Mejía, Claudia (2016). Reconstrucción de la memoria histórica de la masacre de El Piñal, Simití, sur de Bolívar. *Revista Eleuthera*, 14, 67-86. DOI: 10.17151/eleu.2016.14.5

CNMH [Centro Nacional de Memoria Histórica] (2014). *Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá D.C. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia Panorama posacuerdo con* AUC. CNMH.

Comunidad de Micoahumado (2019, 6 de marzo). La guerra en Mihoahumado tiene en peligro a las comunidades. CNA [Coordinador nacional Agrario]. https://bit.ly/2Yfwf2Z

ELN (2011). ELN 47 años de historia. Dirección del Frente de Guerra Central.

ELN (2013, 22 de enero). Contra el saqueo del oro en San Lucas. Dirección del Frente Darío Ramírez Castro. *Cedema*. https://bit.ly/3o5Tc34

ELN (2017, 27 de marzo). Historia de un Frente, Historia de un Héroe. ELN-*Voces*. https://bit.ly/3pdk1Uo

ELN (2018, 27 de agosto). Samuel un caribeño insurgente. ELN-*Voces*. https://bit.ly/2Y4rVDA

FARC (2020, 30 de agosto). Carta abierta al Ejército de Liberación Nacional -ELN-. https://bit.ly/3o6pmeG

Fedeagromisbol (s.f.). *Defendiendo la teta: Memoria de un proceso de resistencia y dignidad-Sur de Bolívar*. Kavilando.

Fonseca, Daniel; Gutiérrez, Omar y Rudqvist, Anders (2005). *Cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar: aproximación desde la economía política*. PNUD. Gente Nueva Editores.

García, Antonio (2019). *Historias de Gallero, una vida en el* ELN. Editorial El Colectivo.

Harnecker, Marta (1988). ELN*: Unidad que multiplica.* Ediciones Quimera.

Hernández, Salud (2019, 4 de marzo). El Clan del Golfo de Colombia: "Las masacres están abolidas". *El Mundo*. https://bit.ly/2MgL1mY

Hernández, Milton (2006). *Rojo y negro historia del* ELN. Editorial Txalaparta S.I.

López Vigil, María (1989). *Camilo camina en Colombia.* Editorial Nuestro Tiempo.

Medina, Carlos (1996). ELN*: una historia contada a dos voces Entrevista con "el cura" Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino"*. Quito Editores.

Medina, Carlos (2008). *Ejército de liberación nacional: notas para una historia de las ideas políticas (1958-2007)*. Universidad Nacional de Colombia.

Medina (s. f.). Mis manos se llaman conciencia y compromiso. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. https://bit.ly/2Y8TIT3

Murillo, Amparo (1999). Historia y sociedad en el Magdalena Medio. *Revista Controversia*, (174), 41-61.

Organizaciones del Magdalena Medio (2018, 16 de abril). Carta de las organizaciones. https://bit.ly/3o76TyG

Osorio Jiménez, Marlon (2018). "Sin Territorio No Hay Vida": Luchas y Resistencias en Micoahumado Sur de Bolívar. *Revista Kavilando*, *10*(1), 78-93. https://bit.ly/39X6ZDI

Prada, Esmeralda (2006). *Las luchas Campesinas en el Magdalena Medio. En conflictos poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001*. Ediciones Antropos– Cinep/PPP.

Rodríguez Antonio (2005). *La verdad sobre el Ejército de Liberación Nacional* ELN- *Sus orígenes y primeros años*. Editorial Marques.

Sala de Justicia y Paz (2017). Bloque Central Bolívar. Radicado 110016000253201300311 N.I. 1357.

Tovar, Claudia (2015). *Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento forzado e intervención psi como potencia política en Micoahumado* [Tesis doctoral]. Pontificia Universidad Javeriana.

Velandia, Carlos (2020). *Desatar un nudo ciego una mirada al ideario de paz del* ELN. ABC PAZ. https://bit.ly/3bZy5wG

Viloria de la Hoz, Joaquín (2009). *Economía y conflicto en el Cono Sur del departamento de Bolívar*. Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República.

Valero, Alejandro (2016). Informe regional nordeste antioqueño y sur de Bolívar. En *El conflicto en contexto: un análisis de cinco regiones colombianas, 1998-2014*, Salazar, Gonzales & Dávila editores. Pontificia Universidad Javeriana.

Prensa

Arango, Tatiana (2013, 24 de julio). Braeval Mining Corporation renuncia a contratos por retención de funcionario. *La República*. https://bit.ly/2Y2KAja

Caracol Radio (2017, 11 de agosto). El Ejército lanzó el plan "relámpago rojo" para combatir a los cabecillas del ELN. *Caracol Radio*. https://bit.ly/39Vu5ur

Colombia Informa (2019, 25 de julio). ¿Qué pasa en el sur de Bolívar? 4800 militares y un 'falso positivo". *Colombia Informa*. https://bit.ly/393pQOg

El Colombiano (2020, 16 de mayo). "Gallero", de la Dirección Nacional del Eln, también murió en bombardeo contra "Mocho Tierra". *El Colombiano*. https://bit.ly/3iE62En

El Espectador (2009, 3 de septiembre). Parapolítica en Santander. *El Espectador*. https://bit.ly/3625VgM

El Espectador (2010, 21 de septiembre). Por 'falso positivo' con líder comunal llaman a juicio a cuatro militares. *El Espectador*. https://bit.ly/3qGxHaK

El Espectador (2019, 16 de abril). Tribunal de Justicia y Paz reconoció como víctima a comité de mineros del Sur de Bolívar. *El Espectador*. https://bit.ly/2ZhgQQ9

El Tiempo (2016, 17 de enero). Pescadores fueron sometidos a trabajo forzoso por el ELN. *El Tiempo*. https://bit.ly/2Y1ytmj

El Tiempo (2019a, 12 de abril). Se cumplen 20 años del secuestro del vuelo 9463 de Avianca. *El Tiempo*. https://bit.ly/3sGWgpT

La Silla Vacía (2017, 11 de septiembre). Las mil caras del Clan del Golfo. *La Silla Vacía*. https://bit.ly/3p8CocO

Montaño, John (2019, 29 de enero). Fuerza de Tarea Marte llega a Bolívar para combatir al Eln y al Clan. *El Tiempo*. https://bit.ly/361D1NL

Pacifista (2019, 28 de marzo). El miedo a los 'falsos positivos' vuelve al sur de Bolívar. *Pacifista*. https://bit.ly/39X76PK

RCN *Radio* (2013, 20 de enero). Dos batallones más del Ejército se unen a la búsqueda de los 5 secuestrados por el ELN. RCN *Radio*. https://bit.ly/39532xA

Semana (2007a, 5 de mayo). La victoria de las palabras. *Semana*. https://bit.ly/2KBXdyt

Semana (2007b, 21 de junio). Revelan video en el que alias Ernesto Báez lanzó la candidatura de Carlos Clavijo al Senado. *Semana*. https://bit.ly/3pjdSpm

Semana (2009, 28 de julio). Oro y plomo. *Semana*. https://bit.ly/3oaHrYR

Semana (2013, 24 de julio) ELN tomó nota por salida de minera canadiense. *Semana*. https://bit.ly/3iyc3Cu

Semana (2016, 16 de enero). ELN habría secuestrado a 15 pescadores en el sur de Bolívar. *Semana*. https://bit.ly/39QXFBq

Verdad Abierta (2011, 11 de enero). Los tentáculos del Bloque Central Bolívar. *Verdad Abierta*. https://bit.ly/3p8uhwT

Verdad Abierta (2013, 20 de agosto). Parapolítica: Carlos Julio Galvis. *Verdad Abierta*. https://bit.ly/3c1Euru

Verdad Abierta (2015, 17 de febrero). ¿Está vigente agenda de las Farc en Nudo de Paramillo? *Verdad Abierta*. https://bit.ly/2Y0rPwq

Verdad Abierta (2016, 16 de abril). Especial Nudo del Paramillo: Las Farc y los Urabeños [video]. *Verdad Abierta*. https://bit.ly/3o1YEDP

Verdad Abierta (2020, 8 de noviembre). Operativo en el sur de Bolívar, más mediático que judicial. *Verdad Abierta* https://bit.ly/3a8orWj

Entrevistas

Entrevista 1. Carlos Velandia. Excomandante del ELN y promotor de paz, 2020.

Entrevista 2. Líder social de Tiquisio, 2020.

Entrevista 3. Líder social de San Pablo, 2020.

Entrevista 4. Líder social del sur de Bolívar y Cesar, 2020.

Entrevista 5. Líder social de federación minera, 2020.

Entrevista 6. Exguerrillero del Bloque Magdalena medio de las FARC-EP, 2020.

Entrevista 7. Lideresa social de Buena Vista y de Mina Walter, 2020.

Entrevista 8. Lideresa social de San Pablo, 2020.

Entrevista 9. Lideresa social de federación minera, 2020.

Entrevista 10. Líder social de los municipios ubicados en la parte norte del sur de Bolívar, 2020.

Entrevista 11. Lideresa de San Pablo y de Norosí, 2020.

Entrevista 12. Mujer habitante del corregimiento de San Blas, 2020.

Entrevista 13. Poblador de Santa Rosa, 2020.

Entrevista 14. líder social de San Pablo, 2020.

Entrevista 15. Exguerrillero del Bloque Magdalena medio de las FARC-EP, 2020.

Anexo 1.

Los que caen no están muertos

Por el comandante Nicolás Rodríguez Bautista "Gabino"

1
Dicen que murió Gallero
allá en el Sur de Bolívar
Pero en San Pablo lo ven
subir Cimitarra arriba.
2
Dicen que allí se encontró
con el compa Samuelito
y agarraron por el monte
buscando pa' Montecristo.
3
Dicen que en la Yanacué
le han dicho al compa Jesús
que prontico llegarán
muy cerca de Cerro Azul.
4
Dicen que en Cañabrabal
y en la loma de La Brava
va pasando esta guerrilla
porque los perros les ladran.
5
Dicen que allá en Vallecito
con Santiago se encontraron
tomando el camino real
para la mina de Amparo.
6
Del Diamante hasta La Gloria
Humadera y Paraíso
los campesinos se encuentran
a Gallero y Samuelito.
7
Que bajan hasta Aguas Lindas
encontrándose a Ezequiel
quien se une para marchar
con Gallero y con Samuel.
8
Llegan hasta Las Ahuyamas
y en Pozo Azul Otoniel
los conduce en su camión
al pueblo de Monterrey.
9
Dicen que de allí Gallero
va a la Ciénaga San Luis
a mirar los manatíes
que aún quedan por allí.
10
Que pasa por Cerro Burgos
en una chalupa blanca
y que todos ven muy claro
que su rostro está en el agua.
11
Cuando se une a Samuelito
y al resto de compañeros
va con Miguel y con Carlos
más otros tres guerrilleros.
12
Por San Blas y Santa Rosa
Por Simití y Arrayanes
Gallero sigue pasando
sin que los tiempos lo afanen.
13
Los vecinos de Canelos
y los de Mina Proyecto
siguen viendo guerrilleros
que otros dicen que están muertos.
14
Miren como son las cosas
la caminata que narro
se encuentra con el Viejón
muy cerca de Campo Barro.
15
A Tierra presta la guardia
por el camino que pasa
de los cerros a los planes
hasta el pueblo de La Plaza.
16
Vamos para Campo Picho
a remolcar el blindado
dice el Viejón a Gallero
porque se quedó enterrado.

17
Ya con la bandera izada
en la plaza Micoahumao
llega la negra Yesenia
me lo dice Estanislao.
18
En La Garita me cuentan
que por quebrada Arenales
caminan los que partieron
para ser los inmortales.
19
Y siguen los guerrilleros
por la inmensa Serranía
buscando el Caribona
de leyendas escondidas.
20
Cuentan allí los mineros
que a esta fuerza guerrillera
la escuchan pasar de noche
con rumbo a la cordillera.
21
En la mina San Luquitas
dicen que los que murieron
no son Samuel ni el Viejón
ni tampoco fue Gallero.
22
Ellos, me dijo un minero,
salieron a comisión
pero siguen con nosotros
en esta revolución.
23
Que marchan junto a Marquitos
y con Albeiro a la lucha
los acompaña Familia
por la Sierra de San Lucas.
24
Y toda la Serranía
sabe que son sus guerreros
invencibles y valientes
son sus mandos guerrilleros.
25
Las aguas del río Tigüí
las del Tamar y Manila
llevan mensajes rebeldes
y cantos de la guerrilla.
26
Campesinos y mineros
de estas tierras insurgentes
van con la bandera en alto
como un homenaje al Frente.
27
Y es que nunca nadie olvida
que Darío Ramírez Castro
por Amalfi y por San Lucas
sigue dejando sus rastros.
28
Son los rastros que siguiera
de maestros de otros años
los comandantes Manuel
y Antonio Vásquez Castaño.
29
Y a quienes marchando vamos
porque parar no se puede
hasta que la lucha triunfe
consigna del ELN.
30
Por todo ello compañeros
los caídos van al frente
y aquí seguimos con ellos
de Liberación o Muerte.
31
Siempre vamos junto al pueblo
leales hasta vencer
para seguir el ejemplo
de Camilo y de Manuel.

El ELN en Arauca: el fortín guerrillero en la sombra de los Andes

Charles Larratt-Smith

"No se les olvide, que el sol nace por el oriente".
Un dicho eleno

El departamento de Arauca está localizado a los pies de la cordillera oriental, una región de frontera que se ha visto fuertemente afectada por todos los conflictos violentos que Colombia ha experimentado desde la colonia hasta la república. Durante las últimas cuatro décadas, Arauca ha sido la casa de las estructuras armadas insurgentes pertenecientes tanto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque durante la mayor parte del tiempo el último grupo ha sido el actor más dominante de los dos. La estructura principal del ELN en Arauca es el frente Domingo Laín, una unidad de insurgencia formidable que nació en las poderosas movilizaciones cívicas regionales de campesinos de los años setenta. Históricamente y en la actualidad, este frente es la unidad subnacional más poderosa del ELN, que deriva mucho de su poder de su impresionante nivel de control sobre la economía regional, las instituciones políticas, la sociedad civil, el territorio y la población que lo habita.

En el transcurso de los años ochenta y noventa, el ELN en Arauca logró insertarse fuertemente en el terreno humano del departamento apropiando como suya la prolongada escisión entre la sociedad civil y el Estado colombiano. De este modo, estableció un sistema completo de "gobernanza anidada" que vio emerger al grupo armado como actor estructurante del territorio. Durante la primera década del siglo XXI, el dominio del frente Domingo Laín se vio puesto a prueba por sucesivos retos frente a paramilitares con el bloque Vencedores de Arauca (BVA), las fuerzas militares de Colombia y las FARC; sin embargo, el ELN logró resistir todas estas

amenazas a su existencia para poder gobernar en el departamento. En los últimos diez años, el ELN en Arauca ha experimentado un proceso de reestructuración interna y expansión externa como grupo insurgente, extendiendo su gobierno a través del nororiente colombiano y las profundidades de la vecina Venezuela, una transformación que ha visto convertirse a este grupo en uno de los actores armados más poderosos en Latinoamérica[1].

La configuración regional de Arauca

La región de los Llanos Orientales cubre alrededor de 253.000 kilómetros cuadrados de tierras tropicales bajas en el oriente de Colombia (Rausch, 2013). Dentro de la región, existen dos subregiones físico-geográficas distintas: la sabana y el piedemonte. La sabana se caracteriza por un relieve que es "tan plano que es raro encontrar tres pies (90 centímetros) de diferencia entre puntos adyacentes altos y bajos". El suelo es ácido e infértil, donde solo es posible la producción de pastos gruesos y la actividad agrícola moderna se limita a la crianza de ganado y poco más. Por otro lado, el piedemonte se caracteriza por "importantes abanicos aluviales formados por arroyos que corren hacia el oriente", desde la cordillera oriental, rodeados en su base por "cinturones amplios de aluviones de grano fino, retenedores de humedad" que contienen bosques húmedos con suelos adecuados para el cultivo de banano, algodón, maíz, tabaco, café, caña de azúcar, arroz y cacao, entre otros cultivos (Rausch, 1984).

Las sabanas de Arauca se ubican en el municipio de Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón, y también las secciones del Tame central y sur oriental. Desde la colonia hasta la actualidad, las sabanas han estado habitadas por grupos indígenas seminómadas, misioneros jesuitas, hacendados, ganaderos criollos y venezolanos y comerciantes europeos que han llegado a través de la cuenca del Orinoco. Por otro lado, en el piedemonte araucano se ubican los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y las secciones del occidente y norte de Tame[2]. Previamente a la coloni-

1 Este capítulo se sustenta en sesenta y cuatro entrevistas llevadas a cabo en el municipio de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Cúcuta y Bogotá D.C. entre enero de 2016 y febrero de 2020. La información adicional incluida proviene de trabajos académicos primarios y secundarios, artículos de los medios y documentos legales, así como también de una variedad de estadísticas descriptivas provenientes de diferentes fuentes institucionales. Todos los participantes entrevistados permanecen anónimos por su seguridad personal, de igual modo los nombres de varias organizaciones por razones similares.

2 El término *"el Sarare"* se refiere al corazón ancestral Tunebo (u'wa) en la región binacional que incluye Saravena, Cubará, Güicán y parte del Alto Apure en Venezuela. El piedemonte, al que se refiere este capítulo, cubre ampliamente la zona de colonización que se encuentra en Saravena, Fortul, Tame y Arauquita en lo que se refiere a su asentamiento en la tierra y no a consideraciones geográficas o topográficas.

zación masiva del piedemonte como consecuencia de *la Violencia*, la subregión estaba escasamente poblada por grupos indígenas, entre los que sobresalen los tunebos (u'wa) (Barona, Gómez y Domínguez, 2011). La colonización dirigida del piedemonte araucano comenzó en 1955 y estuvo administrada por la Caja Agraria antes de la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) según la Ley 135 en 1961 (Eidt, 1967; Stoddart y Trubshaw, 1962).

La primera ola de colonización bajo el *Proyecto Arauca Uno*, vio llegar, *grosso modo*, alrededor de cinco mil familias al piedemonte en el transcurso de los años sesenta, asentándose principalmente en Saravena y Fortul (*El Espectador*, 2014). Los inmigrantes viajeros hicieron su primera parada en Tunebia (Boyacá) donde presentaron a la oficina regional de la Caja Agraria los papeles necesarios para legalizar y reclamar cincuenta hectáreas, que era la unidad agrícola familiar estándar (UAF) para la zona de colonización (Entrevista 57, 2016). La segunda ola de colonización en los años setenta fue más espontánea, con la llegada de nuevos colonizadores que extendieron los límites de la zona de colonización a lo que es hoy la parte norte del municipio de Tame en todo el trayecto oriental hasta la frontera entre Arauquita y el municipio de Arauca (Entrevista 50, 2016). Muchos de los nuevos asentamientos ocuparon tierras indígenas históricas y grandes hatos improductivos encontrados en partes de Tame, generando nuevas tensiones entre los recientes habitantes y su contraparte llanera (Entrevista 23, 2016).

La trazabilidad del origen del mayor número de inmigrantes en la subregión se encuentra desde Norte de Santander, Boyacá y Santander (Rucinque, 1972). Según un líder religioso local, el piedemonte "tiene grandes influencias santandereanas, su población se caracteriza por ser muy activa y muy amiga de la organizatividad" (Entrevista 28, 2016). Mientras que Saravena y Fortul fueron fuertemente colonizados por inmigrantes de los santanderes, Arauquita poseía una influencia mayor de venezolanos y afrocolombianos provenientes de departamentos como Cauca y Antioquia, que se vieron atraídos por la región durante la bonanza binacional de comercio maderero (Entrevista 58, 2016). Por otra parte, Tame ha sido altamente influenciado por inmigrantes del vecino Boyacá, un departamento que durante la mayor parte del siglo XX fue el departamento más pobre de todo el país, lo que forzaba a muchos campesinos a buscar una mejor calidad de vida al otro lado de la cordillera oriental (Rausch, 2013; Pérez, 2015).

Las condiciones de la temprana sociedad del piedemonte fueron duras. Según un líder campesino de Arauquita rural:

> La pobreza era extrema. No teníamos vías de comunicación y todo se transportaba caminando. Esta falta de acceso no permitía que existiera el comercio. Pero la madre tierra nos daba todo para sobrevivir y

> alimentarse diariamente. El tejido social era fuerte, había un sentido de hermandad arraigado. (Entrevista 41, 2016)

La salud y la educación eran también precarias y la electricidad no estuvo disponible hasta finales de los años ochenta (Entrevista 46, 2016). Estas inmensas adversidades patrocinaron un nivel alto de autodependencia y colaboración entre los colonos campesinos, de quienes se esperaba que contribuyeran con actividades comunitarias, asimismo los intercambios locales, se fundamentaron frecuentemente en un sistema de trueque en lugar de la lógica del mercado (Entrevistas 44 y 54, 2016). Este nivel alto de acción colectiva nació de la necesidad, dado que, en ese entonces la presencia del Estado colombiano en el piedemonte era escasa y no había élites con tierras, ni gamonales para administrar la zona, todo esto generando una estructura social agrícola horizontal (Entrevista 38, 2016).

Aunque la ausencia del Estado colombiano era notoria en la zona, las políticas promulgadas por los sucesivos gobiernos del Frente Nacional se sintieron fuertemente a lo largo del piedemonte, principalmente la creación de tres organizaciones clave durante este periodo: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), las juntas de acción comunales (JAC) y las cooperativas. Durante esta década "todo el tejido social sí tuvo impulso desde el Estado" en zonas de colonización tales como el piedemonte (Entrevista 56, 2016). Bajo la guía del INCORA, todos los campesinos recién llegados al piedemonte fueron registrados en la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (COAGROSARARE), mientras que el instituto también patrocinaba activamente su participación en ANUC cuando fue establecida en el piedemonte más tarde en la década (Rivera Cusicanqui, 1987). Sin embargo, la influencia del INCORA comenzó a declinar a comienzos de los años setenta hasta que, pocos años después, dejara prácticamente de existir en la subregión debido a malos manejos y corrupción (Entrevista 23, 2016; tal y como se expone en el capítulo "Descifrando al ELN").

Complementando el crecimiento de la actividad de ANUC, se dio el surgimiento de las juntas de acción comunal (JAC) a mediados de los años setenta con la ayuda del clero católico de la localidad (Entrevista 41, 2016). A las JAC se les atribuye haber patrocinado el desarrollo de comunidades rurales a lo largo del piedemonte (Entrevista 32, 2016). Según un maestro retirado de Saravena, las densas redes de estas organizaciones a nivel de aldea, municipio y departamento

> [f]ueron vitales porque formaron tejido social y forjaron la lucha agraria y la obtención de escuelas, vías, electricidad y otras reivindicaciones. Con estas organizaciones lograron hacer la trocha hasta Arauca, Tame y Pamplona. Se erradicó en gran medida el paludismo y generaron un trabajo de conciencia entre la comunidad. (Entrevista 47, 2016)

Las JAC encabezaron la creación de "la nueva vereda", que consistía en comunidades que tienen "escuelas para niños y escuelas para reuniones, interlocución con todas las instituciones de las cuales se desprenden beneficios para las poblaciones veredales, como son las alcaldías, la iglesia o las petroleras" (Entrevista 28, 2016). Fuera de las ANUC y las JAC, un gran número de otras cooperativas agrícolas, gremios, sindicatos y otras asociaciones voluntarias se formaron entre las décadas de 1960 y 1970, en representación de todas las distintas actividades agrícolas y vocaciones practicadas en el piedemonte (Entrevista 46, 2016).

Esta red de organizaciones sociales se convirtió en el motor detrás de los paros cívicos de los años setenta y ochenta. En marzo de 1972, se calcula que 3.000 campesinos ocuparon la plaza central de Saravena con el respaldo por igual de líderes campesinos y clero local (Entrevista 28, 2016). Esta huelga, "representó las profundas tensiones existentes entre las comunidades organizadas y el Estado, que derivarían en unas desconfianzas mutuas enormes" (Entrevista 1, 2016). El fracaso del Estado colombiano para abordar adecuadamente las dificultades campesinas expresadas durante el paro cívico de 1972, llevó a que se diera un nuevo paro tres años después en 1975 (Entrevista 45, 2016). Ese mismo año, prácticamente todo el pueblo de Tame se movilizó para ocupar el aeropuerto municipal y protestar por la falta de maestros en la escuela superior local (Entrevista 51, 2016).

La incomprensión de los agentes del Estado frente a la movilización social y su estigmatización se hicieron evidentes cuando algunos funcionarios del piedemonte escribieron un borrador con la lista de subversivos sospechosos, incluyendo a los líderes campesinos Raymundo Cruz y Efraín Pabón Pabón, y aparentemente utilizaron asesinos encapuchados para eliminarlos (ELN, 2007). Como el ciclo de contención se intensificó dramáticamente, estos líderes campesinos específicamente, sintieron que su único recurso era armarse ellos mismos y sus comunidades; y en el proceso hicieron contacto con conocidos mutuos en Santander que eran miembros de largo tiempo del ELN tales como "Antonio García" y "Francisco Galán" (Plazas, 2017). En medio de este trasfondo de activismo campesino y represión del Estado, se formó el ELN en Arauca.

La formación y evolución del ELN en Arauca

Como consecuencia del casi exterminio del grupo insurgente por parte del Ejército de Colombia en Anorí, en 1973, el liderazgo del ELN reestructuró su estrategia y buscó expandirse a nuevos territorios tales como Arauca (Medina, 1996; Peñate, 1999; González y Gutiérrez, 2008; tal y como se expuso en el capítulo "Descifrando al ELN"). Como resultado, se fundó una incipiente célula guerrillera en el alto San Joaquín (Saravena)

en 1978, sin embargo, solo anunció su existencia al mundo algo así como dos años después cuando veinte guerrilleros atacaron sorpresivamente el puesto de policía en Betoyes (Tame), matando cuatro oficiales y forzando a ocho sobrevivientes a entregar sus armas, mientras que posteriormente llevaban a cabo una reunión en la plaza del pueblo para anunciar la formación del frente Domingo Laín (Celis, s. f.)[3].

En los años que siguieron, el ELN se atrincheró firmemente en la sociedad del piedemonte. Esto no fue difícil para la primera generación bajo el liderazgo del frente Domingo Laín. Los fundadores de la organización

> [f]ueron dirigentes campesinos de la ANUC y de las JAC, que decidieron volverse guerrilla por el abandono del Estado. La mayoría de los líderes de campesinos de Saravena y Fortul se fueron a la guerrilla o comenzaron a apoyar ese proyecto. (Entrevista 56, 2016)

Según lo recuerda un antiguo líder político en Tame: "Ante el absoluto abandono en el que se encontraba el departamento, sin educación, seguridad ni servicios básicos, la guerrilla encontró un discurso social para asentarse" (Entrevista 51, 2016). En una poco conocida entrevista, el antiguo jefe del ELN, Manuel "El Cura" Pérez, confirma la evolución insurgente en el piedemonte:

> El frente Domingo Laín tuvo un periodo de preparación bastante largo, casi de 14 años; antes de aparecer a la luz pública como frente guerrillero, libró toda esa batalla de lucha agraria en Arauca, desarrolló los paros cívicos del Sarare y acumuló una gran experiencia en el trabajo de masas. Ese trabajo surgió en el seno del movimiento campesino y en los procesos de colonización orientados por Lleras, allí llegó alguna gente que simpatizaba con la organización e incluso que se consideraban militantes. (Medina, 1996, pp. 201-202)

Los miembros fundadores del frente Domingo Laín contaban con numerosas redes locales en el piedemonte y con una fuerte capacidad de organización comunitaria. Después de que el Ejército mata a Efraín Pabón en una operación en Santander, dos de sus protegidos, Atilano y Daniel, asumen el comando del ELN en Arauca, y el frente insurgente rápidamente consolida el control de muchas comunidades rurales a través de la zona estableciendo un rígido código de conducta, que era aplicable a todos y desobedecido por ninguno. Como lo cuenta un servidor público de Saravena, "había cabida para el debate, pero igualmente si no se cumplía su ley, había muerte" (Entrevista 27, 2016). La severidad de esta reglamentación social sirvió. El ELN creció

3 El ELN en el piedemonte inicialmente quiso nombrar el frente en honor de Guadalupe Salcedo, pero las FARC ya habían reclamado ese nombre, entonces se decidieron por el de Domingo Laín Sáenz, un sacerdote español que había ingresado al grupo insurgente y había muerto en batalla en los años setenta.

rápidamente en el piedemonte desde su llegada en 1980 hasta 1982; el frente Domingo Laín se expandió a partir de un número aproximado de 25 combatientes iniciales hasta 150 miembros asignados a comisiones o unidades locales, con un número entre 12 y 15 combatientes estacionados en Saravena, Arauquita, Fortul y Tame. El rápido crecimiento del frente insurgente puede atribuirse al hecho que "[…] era una guerrilla de parientes, amigos, conocidos, vecinos, lo cual les permitió crecer fácilmente" (Celis, s. f.).

Inicialmente, el ELN se mantenía a sí mismo por medio de secuestros y extorsión de grandes ganaderos y terratenientes a ambos lados de la frontera, al mismo tiempo que asaltaba puestos de la Guardia Nacional de Venezuela para obtener armas (ELN, 2007). Sin embargo, el evento que impulsó el crecimiento del ELN en Arauca fue el ampliamente documentado secuestro extorsivo de cuatro ingenieros petroleros que fueron contratados por la firma de ingenieros alemana, Mannesmann A.G., para apoyar la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas en 1984 (Entrevista 64, 2020). Esta gran suma de dinero caído del cielo proveniente de este secuestro, fue dividido supuestamente entre las comunidades del piedemonte y utilizado para financiar la compra de armas adicionales, proporcionándole al frente Domingo Laín los medios financieros para expandirse al mismo tiempo que servían como un plan de acción para futuras extracciones rentables en el departamento y más allá (*El Tiempo*, 1996a). Con la terminación de la construcción del oleoducto y el inicio de la producción masiva en Arauca en el periodo 1985-1986, el ELN comenzó a atacar la infraestructura petrolera crítica y continuó secuestrando personal que trabajaba para las multinacionales petroleras y los contratistas que mantenían sus operaciones a cambio de remuneración financiera. El frente Domingo Laín enmarcó esta extorsión de la industria petrolera en un discurso nacional, ya que el grupo "tenía más tendencia a la defensa de la soberanía y con mayor tendencia a la autodeterminación, nacionalización de recursos y a la participación de la sociedad civil" (Entrevista 29, 2016; al igual se señala en el capítulo "Descifrando al ELN").

La estructura del ELN en Arauca

Durante la primera década de consolidación insurgente en Arauca, el ELN extendió su presencia con la creación de nuevas comisiones a lo largo del piedemonte y más allá. La clave del éxito del frente Domingo Laín fue la formación de cientos de milicianos que abarcaban más el departamento. Estos cuadros entrenados se vestían como civiles y operaban con mayor clandestinidad en pueblos más grandes y capitales municipales. Con frecuencia estaban armados y llevaban a cabo pequeños ataques u otros actos de violencia para la organización guerrillera, y quizás lo más importante era que

recogían inteligencia, enviaban y recibían mensajes entre las unidades de la guerrilla y los civiles, y ejecutaban otras tareas cruciales para el grupo armado (Entrevista 44, 2016). La importancia de estos militantes es enorme, según "[…] el miliciano viene de la población y se mueve con ella, pero es clandestino, es decir que no es fácilmente identificado" (Barbosa *et al.* 2017, p. 44).

De forma similar a las FARC, el ELN también se extendió a las comunidades llaneras en Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte y el municipio de Arauca en el transcurso de tiempo entre mediados y finales de los años 80 (Entrevistas 36 y 60, 2016). Las FARC establecieron una presencia más fuerte que el ELN en esta subregión, pero estos grupos no contaban con el mismo nivel de integración en estas comunidades como lo tenían en el piedemonte debido a condiciones históricas dramáticamente diferentes a las que había en la sabana (Entrevista 35, 2016). El frente Domingo Laín estableció la compañía Simacota en 1986, una unidad móvil altamente entrenada con comandantes aparentemente entrenados en Cuba y Vietnam, que fue fundada con el propósito expreso de llevar a cabo operaciones más grandes y con operaciones logísticas más complejas contra el Ejército de Colombia y la Policía Nacional en Arauca. El liderazgo del frente Domingo Laín cambió de manos alrededor de esta coyuntura con Armel "El Chino" Robles Cermeño, que toma el control del ELN en Arauca. Bajo su vigilancia, el ELN apretó su control sobre el piedemonte mientras que aumentó la violencia contra recalcitrantes jefes de autoridad local (Celis, s. f.)[4].

El frente Domingo Laín reclutó agresivamente a la juventud local en el piedemonte y estableció una red de campos de adoctrinamiento y entrenamiento para este propósito en la subregión. Aparentemente en algunas aldeas, la asistencia para adolescentes locales era obligatoria (Entrevista 19, 2016; Entrevista 59, 2016). El sistema escolar local también servía como tierra fértil para el reclutamiento por igual tanto de estudiantes como de maestros (Velasco, 2016). El ELN se diferenciaba de las FARC en lo que concierne al alistamiento. Según un activista de paz regional:

> En el ELN había una especie de servicio militar. El combatiente se podía retirar a los 5 años del brazo armado, pero no político. El incentivo principal para prestar este servicio era la falta de oportunidades, especialmente académicas y de empleo. Representaba una buena opción para obtener poder y dinero. (Entrevista 28, 2016)

Alineado con las finanzas y firmemente incrustado en el piedemonte, el ELN extendió sus estructuras en el departamento en el transcurso de los años noventa mientras que escalaba su conflicto con el Estado

4 Nació en Arauquita y creció en Tame, Robles era un maestro y un activista por el comercio que ingresó a la guerrilla después de que las FARC aparentemente intentara matarlo.

colombiano más allá de este departamento. Así, durante esta década, una segunda unidad especializada, la compañía Capitán Pomarés, fue establecida para reforzar la compañía Simacota y para cubrir en el área de frontera entre Casanare y Arauca. El resto de la presencia del ELN en el departamento, estaba dividida entre nueve comisiones separadas y amplias redes de miembros milicianos que estaban esparcidos a lo largo de cada municipio en Arauca (*El Tiempo*, 1996b). En 1996, la dirección del Comando Central (COCE) del ELN creó el frente de guerra Oriental (FGO) compuesto por todas las estructuras insurgentes del ELN que operaban en Arauca, el frente José David Suárez en Casanare, el frente Adonay Ardila en Boyacá y el frente Efraín Pabón en Norte de Santander (FIP, 2015).

En la mayoría de los casos, el ELN y las FARC coexistieron pacíficamente en el piedemonte. Según un antiguo comandante de las FARC que operaba en Fortul:

> Totalmente compartíamos territorio en esa zona, nos compartíamos varias cosas en el sentido de, de la misma colaboración de la gente, en el tema financiero, en el tema organizativo, había mucha coincidencia de las dos guerrillas originarias en el territorio. (Entrevista 61, 2020)

Mientras que había ciertas comunidades e incluso municipios en donde el ELN mantenía su hegemonía, especialmente aquellas donde se asentaron principalmente inmigrantes santandereanos como Saravena y Fortul, la mayoría fueron ocupadas muy de cerca por ambos grupos insurgentes (Entrevista 48, 2016). Por ejemplo, en Pueblo Nuevo, un caserío que abarca la frontera entre Tame y Arauquita, en un lado del poblado habitaban miembros y simpatizantes de las FARC, mientras que el otro lado, lo ocupaba el ELN (Entrevistas 4 y 59, 2016). Esta coexistencia territorial dinámica fue especialmente prevalente a lo largo del triángulo terrestre entre Fortul, Arauquita y el nororiente de Tame donde ambos grupos insurgentes dividían la población en lugar del territorio en sí mismo (Entrevista 54, 2016).

La creación y la reglamentación del código social de la insurgencia

Después de la consolidación del control territorial del piedemonte en el transcurso de los años ochenta, el ELN adoptó varias tácticas para demostrar su control sobre el espacio público en la subregión. A lo largo del rudimentario sistema vial, los grupos insurgentes establecieron una serie de bloqueos de las vías y retenes (Entrevista 31, 2016). Esta práctica fue ampliamente utilizada para la seguridad y las labores de inteligencia, al mismo tiempo y con frecuencia, los insurgentes transmitían mensajes a los civiles en estos retenes y daban a conocer sus reglas y reglamentos. De forma similar a los bloqueos viales y los retenes,

comenzaron a aparecer grafitis en todas partes con la llegada de las FARC y el ELN, que permanecieron omnipresentes en el piedemonte, desde los muros de las alcaldías municipales hasta los almacenes rústicos en aldeas rurales (Entrevista 46, 2016). Mientras que estos actos pueden parecer simbólicos, ciertamente sirvieron para enfatizar el verdadero control social que el ELN ejercía sobre el campesinado del piedemonte. Un expolítico de Tame describe esta dinámica:

> Las guerrillas tomaron el papel del Estado. Primero comenzaron a obtener información para controlar a los ladrones y robos, luego empezaron a manejar problemas matrimoniales y regulaba las relaciones sociales entre la comunidad y el núcleo familia. En un momento hubo simpatía por la guerrilla porque lideraban y llenaban espacios abandonados por el Estado. (Entrevista 51, 2016)

El aprovisionamiento de bienes públicos esenciales tales como justicia, seguridad y otros fueron de especial importancia para el ELN en Arauca, tanto para controlar a la población y al territorio como para legitimar y asegurar la autoridad verdadera del grupo en la zona. Una líder de derechos de la mujer en Fortul recuerda: "Las leyes que regían a la sociedad en esa época fueron creadas por la gente y por la guerrilla" (Entrevista 19, 2016). Con antelación a la militarización de la zona, los insurgentes tuvieron éxito al establecerse como árbitros de facto de la justicia en Arauca, un hito que estos grupos lograron alcanzar debido al despliegue insuficiente de fuerza de trabajo del Estado y la intención de la insurgencia para eliminar físicamente sin dudarlo, cualquier reclamación al poder de los rivales. La táctica ampliamente esparcida de asesinar inspectores de policía fue utilizada sistemáticamente por los grupos insurgentes a lo largo del piedemonte. En un poblado rural de Arauquita, una mujer de la localidad recuerda que:

> Había inspector de policía, el único y último que yo me acuerde se llamaba Pedro, no me acuerdo el apellido, pero debido al conflicto, él fue secuestrado y desaparecido y al sol de hoy no se sabe, después empezaron a prohibir que hubiera inspectores de policía. (Entrevista 59, 2016)

Aunque el Gobierno colombiano comenzó a intentar abordar los asuntos relacionados con el orden público y la justicia en Arauca una vez se dio el descubrimiento de petróleo allí a comienzos y mediados de los años ochenta, ese intento tardío del Estado colombiano para dictar y hacer cumplir las leyes en Arauca fue inefectivo frente al sistema bien establecido de justicia revolucionaria. Los esfuerzos por investigar legalmente y procesar a los insurgentes acusados de cometer varios crímenes nunca llegaron a ninguna parte debido a la habilidad del ELN para usurpar la autoridad judicial oficial en Arauca. El grupo insurgente forzó a innumerables jueces a renunciar a sus posiciones y dejar sus cargos en sitios como Saravena, Fortul, Tame y Arauquita durante los comienzos de los años noventa. El incumplimiento

venía acompañado por una pena de muerte segura. Los insurgentes buscaron evitar que se llevara a cabo cualquier orden judicial o investigación en contra de sus propios miembros. Este hecho se hizo evidente en 1991, cuando alrededor de 218 casos de los 248 pendientes en el departamento por crímenes graves tales como homicidio, secuestro, extorsión y otros cargos relacionados con terrorismo, eran cargos contra miembros conocidos del ELN y las FARC, mientras que los restantes implicaban a miembros de estructuras incipientes de paramilitarismo en Arauca. Muy pocos de estos casos, si es que hubo alguno, fueron investigados (Gonzalez, 1991).

La justicia insurgente administrada por el ELN era bastante severa y draconiana, pero resultaba más expedita que la proporcionada por el Estado, que en comparación era ampliamente percibida como engorrosa e ineficiente (Entrevista 29, 2016). Cualquier amenaza percibida contra la autoridad del ELN hacía que el denunciante fuera o expulsado del departamento o asesinado abiertamente, de igual manera, este tratamiento se extendía más allá de los funcionarios del Estado para incluir al clero religioso (Entrevista 55, 2016). Cuando el sacerdote católico de más alto rango en el departamento, el obispo Jesús Emilio Jaramillo, públicamente criticó al grupo insurgente a comienzos de octubre de 1989, tres militantes del ELN lo secuestraron, torturaron y asesinaron en Fortul rural (*Revista Semana*, 1989). El liderazgo del frente Domingo Laín asumió la responsabilidad, aunque simultáneamente declaró que el obispo había malversado fondos destinados para proyectos de desarrollo local y colaborado con destacamentos y grupos nacientes de paramilitares en el departamento (*El Espectador*, 2015). El asesinato del prelado de alto perfil llevó al aumento de tensiones entre el liderazgo del ELN en Arauca y el COCE que solo pudieron resolverse a través de la mediación de la dirección nacional (Entrevista 62, 2020)[5].

Según el código social del ELN, la homosexualidad, el hurto común, el robo de ganado y la violación eran todos crímenes que eran castigados con la muerte, así como cualquier interacción desaprobada con la policía o los militares que prestaban servicio en la región (Entrevistas 45 y 48, 2016). Apareció una práctica perturbadora en donde las mujeres que saludaban, conversaban con, o incluso intentaban salir con hombres que fueran ya sea de la policía o militares eran igualmente sentenciadas a muerte por los grupos insurgentes (Entrevistas 44 y 19, 2016). Durante el periodo entre 1994 y 1995, hubo entre una y dos docenas de niñas adolescentes que fueron ejecutadas por el ELN únicamente en Saravena, solo porque "las víctimas tuvieran alguna relación con miembros de las Fuerzas Armadas" (*El Tiempo*, 1995). En un caso particularmente

5 Para ampliar sobre esto, ver el capítulo "Descifrando al ELN".

espeluznante, una adolescente de 15 años fue torturada y recibió veintinueve disparos, supuestamente como venganza por la muerte de un líder miliciano local que fue muerto por la Policía (*Revista Semana*, 1994). Una trágica realidad del conflicto que tuvo lugar en el piedemonte, fue la transformación de jóvenes civiles de género femenino en objetivos militares, hecha por parte de las guerrillas. Un expolítico de Tame explica este fenómeno macabro:

> Las mujeres se convertían en objetivo militar cuando salían con alguien de la fuerza pública, ya que la guerrilla creía se podían volver informantes. En Tame había un guerrillero que le decían el "mata viejas", porque mataba a cualquier mujer que mirara a un soldado o a un policía. (Entrevista 73, 2016)

El estricto código social mantenido por el ELN en el piedemonte, vigente histórica y actualmente, fue diseñado para maximizar la seguridad (Entrevista 22, 2016). El grupo insurgente les suministraba seguridad y orden a las comunidades bajo su control mediante el despliegue de un sistema altamente desarrollado de control poblacional en donde cualquier violación al código social se hacía pública y era tratada como correspondía, a su vez que cualquier influencia externa era fuertemente censurada y reglamentada por la guerrilla (Entrevista 34, 2016). La gente de fuera de la región encaraba dificultades enormes para ingresar a comunidades del piedemonte sin pasar por ser investigados por los insurgentes antes de ser admitidos (Entrevista 32, 2016). Toda faceta de la sociedad campesina era mediada y regulada por las estructuras locales del ELN. Estas comisiones insurgentes oficiaban matrimonios, emitían permisos de trabajo, nombraban maestros en las escuelas locales y administraban la distribución local y el uso de la tierra en el departamento (Entrevistas 30 y 41, 2016). Las disputas entre vecinos sobre límites de propiedad, discusiones familiares y desacuerdos sobre deudas financieras eran resueltas por las guerrillas. En la ausencia de cualquier otra autoridad, muchos campesinos apreciaban el sentido de orden que el ELN proporcionaba a las comunidades del piedemonte, al tiempo que tampoco querían entrar en conflicto con sus códigos sociales. Según un líder campesino del piedemonte, una vez los límites fueron establecidos por las estructuras locales del ELN, los campesinos locales empezaron a sentirse tranquilos con la norma de la guerrilla:

> La comunidad al principio tenía mucho temor. Pero, en general, si uno no se mete con la guerrilla o si no hace nada malo en contra de la comunidad, ellos no se meten con uno. En algunas ocasiones tomaban acciones que le respondían al Estado y ponían orden dentro de la comunidad. Si uno jodía a alguien del pueblo, ellos lo jodían a uno. También si se violaba a una mujer era una muerte segura (Entrevista 43, 2016).

El ELN y la gobernanza anidada en el piedemonte

Según la Revista *Semana*, para los años noventa, Arauca era

> [...] un territorio controlado por el ELN, que tenía capturadas las alcaldías y la gobernación; recibía ingresos millonarios por extorsiones y secuestros a las compañías petroleras y ostentaba uno de los frentes guerrilleros más poderosos y mejor armados del país, el Domingo Laín. (*Revista Semana*, 2007)

El éxito del ELN en la construcción de un orden social insurgente robusto en Arauca creó un patrón que usó el Comité Central para la expansión a lo largo del resto de Colombia durante este periodo (Peñate, 1998; Gutiérrez, 2010; ver capítulo "Descifrando al ELN").

Sin embargo, el éxito del frente Domingo Laín en Arauca lo condujo al conflicto con el Comando Central (COCE) del ELN a principios de los años noventa en lo que se refería al control y distribución de las finanzas del grupo y las breves negociaciones de paz con el Gobierno colombiano en Caracas y Tlaxcala (ver capítulo "Descifrando al ELN"). Estas tensiones generaron especulación respecto a que las estructuras del ELN en Arauca estaban a punto de separarse completamente de la organización insurgente, una ruptura potencial que nunca prosperó debido a la concesión del COCE de dar mayor autonomía al frente insurgente en Arauca (López, 1989; *Revista Semana*, 1993).

El ascenso del frente Domingo Laín en Arauca, que llegó así a convertirse en el actor estructurante del territorio en la región, no se dio como resultado de la capacidad militar superior del grupo o su amplio despliegue de violencia. Más bien, el poder de la organización se derivó del sistema de "gobernanza anidada" que había establecido a lo largo de la zona[6]. Durante los años ochenta y noventa, el papel asumido por el ELN en Arauca "[...] era el servir como interlocutor e intermediario con respecto de las demandas sociales ante los gobiernos municipales, el departamento y las empresas petroleras" (CNMH, 2014, p. 62). El frente Domingo Laín se incrustó aún más adentro en la población del piedemonte mediante el desarrollo de la categoría de "lo amplio", o "[...] una estructura del ELN en la que convergen miembros de organizaciones sociales, dirigentes políticos y otro tipo de ciudadanos que no hacen parte en la estructura militar

6 El concepto de "gobernanza anidada" se refiere a "la manera como los actores armados no estatales se introducen entre las comunidades de personas y el estado con el propósito de controlar y regular los procesos formales e informales entre las dos partes de acuerdo con sus propios intereses y objetivos". De igual importancia, esta forma de gobernanza le permite a los actores armados "servir de puente entre los procesos informales típicos atribuidos a organizaciones criminales, tales como la regulación indirecta de la población local, el territorio y los chanchullos ilegales, con los procesos más formales centralizados en actividades económicas legales, la competencia electoral y las instituciones administrativas burocráticas, todas estas normalmente administradas por el estado" (Larratt-Smith, 2020, p. 4).

pero que prestan apoyo financiero, logístico, institucional, e inclusive relaciones internacionales" (*Revista Semana*, 2003). En la medida en que los civiles en el piedemonte intentaban aclimatarse a los profundos cambios traídos por el descubrimiento de petróleo y la subsiguiente militarización de la zona, el ELN emergió como verdadera autoridad en Arauca a través de una intensa regulación del territorio, civismo, declaraciones políticas y económicas, vinculando a los habitantes de la subregión a su formidable orden social (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012).

Cooptando la esfera cívica

La cooptación de la sociedad civil regional por parte del ELN fue fundamental para su capacidad de conseguir la gobernanza anidada en el piedemonte. Durante el transcurso de las primeras dos décadas de consolidación insurgente en Arauca, el ELN asumió el control de prácticamente todas las organizaciones sociales en el piedemonte como "las guerrillas se fueron apropiando en el discurso campesino" (Entrevista 27, 2016). Durante las décadas que precedieron, los colonos en el piedemonte habían formado una densa red de organizaciones sociales en respuesta a las condiciones precarias que se daban en la zona de colonización y la insuficiente presencia estatal para responder a las demandas básicas. En corto tiempo, el frente Domingo Laín se había tomado la esfera cívica a tal punto que "el ELN tenía control absoluto en todas las esferas sociales" (Entrevista 42, 2016).

Sin embargo, a pesar de que "todas las organizaciones en su momento tuvieron influencia de los grupos guerrilleros" (Entrevista 47, 2016), es importante resaltar que "la guerrilla no fue quien organizó ni empujó a la sociedad civil desde el inicio" (Entrevista 27, 2016). Al principio el ELN fue cooptando estas estructuras locales existentes, y luego promoviendo la creación de nuevas organizaciones sociales para administrar las comunidades locales en el piedemonte (Entrevista 29, 2016; algo parecido a lo que sucedió en otras áreas del país: consultar capítulo "Descifrando al ELN"). Los líderes comunitarios locales que se resistieron o manifestaron no estar dispuestos a trabajar dentro de la dinámica del nuevo poder, fueron rápidamente eliminados por el grupo insurgente (Entrevista 52, 2016).

Esta penetración en las organizaciones comunitarias se manifestó en que los paros cívicos de los años setenta continuaron durante los años ochenta con el respaldo completo del frente Domingo Laín detrás de estos. Según un exsindicalista del piedemonte, "a pesar de haber nacido después del movimiento social, el ELN ha sido una guía orientadora de las grandes posturas de dicho movimiento" (Entrevista 29, 2016). Mientras que los paros anteriores apenas habían resultado en promesas del Gobierno colombiano que nunca se materializaron, la presencia del

ELN aseguraba que el Estado comenzara a entregar concesiones concretas tales como la construcción tardía del puente sobre el río Bojabá en 1982, que había sido una demanda clave del paro de 1972 (Entrevista 45, 2016). Durante este periodo, la sociedad civil de piedemonte convocó paros cívicos en 1982, 1987, 1988 y 1989. Según un líder campesino de Arauquita rural, el ELN "ponía orden y coordinaba a la gente para pedir reivindicaciones. Es decir, ellos no hicieron nada en forma directa por la zona, no hacían puentes, ni vías, ni traían servicios públicos, pero enseñaban a la gente a reclamar" (Entrevista 41, 2016).

Junto con el Décimo frente de las FARC, el frente Domingo Laín aseguró que la participación en los paros cívicos fuera obligatoria y que ningún campesino obrara por sus propios intereses. Un activista comunitario de Saravena recuerda que "para esta época la participación era altísima, no importaba el sexo, la edad, la etnia o la religión, hasta los mismos discapacitados se movilizaban" (Entrevista 45, 2016). El ELN pudo utilizar los paros cívicos como un medio para retar al Estado mientras que le suministraba bienes y servicios de mucha necesidad para las comunidades campesinas locales en el piedemonte y más allá. Tal era su eficacia y la frecuencia de estas movilizaciones lideradas por la insurgencia, que para la segunda mitad de los años ochenta "[l]a competencia entre las FARC y el 'Domingo Laín' hizo que el Sarare se convirtiera en la región del país donde se produjeron más paros cívicos en todo el gobierno de Barco" (Peñate, 1998, p. 23). Los paros cívicos arrojaron resultados, en este sentido un activista en Fortul declara que "todo lo que tenemos en la región en temas de salud y educación se ha logrado aquí gracias a los paros y las movilizaciones" (Entrevista 23, 2016).

El aumento de poder del ELN durante finales de los años ochenta y comienzos de los noventa coincidió con un cambio en las movilizaciones de las masas, ya que los eficientes paros cívicos del pasado dieron paso a los paros armados en donde los insurgentes paraban todo el transporte local y regional, el intercambio comercial, y el comercio mediante un descarado despliegue público de su poder (Entrevista 44, 2016). Las organizaciones sociales locales estaban acostumbradas a coordinar y comunicar durante estos paros, porque si algún individuo era visto rompiendo los términos de la huelga armada, era castigado por la insurgencia (Entrevista 45, 2016). Como reflejo de esta intensificación en el repertorio de acción colectiva, estaba el cambio simultáneo de la naturaleza de sus demandas. Dadas las mejoras relativas en los servicios sociales básicos y la infraestructura gracias a las regalías petroleras y las ganancias conseguidas por las huelgas civiles de los años ochenta, la sociedad civil del piedemonte comenzó a incrementar en sus movilizaciones su interés por la protección de sus derechos básicos, un cambio que se dio

rápidamente por el aumento en la represión desplegada por el Ejército colombiano y la Policía en Arauca (Entrevista 29, 2016).

Se formaron numerosos comités de derechos humanos en Arauca durante este tiempo, aunque a estos inicialmente les estaba prohibido documentar y movilizarse en contra de las violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos insurgentes, y se veían forzados en cambio a enfocarse solamente en aquellas cometidas por el Ejército colombiano o por la policía nacional (Garay *et al.*, 2017). Para finales de los años noventa, muchas de estas organizaciones civiles habían desarrollado buenas redes transnacionales de apoyo con contactos a nivel nacional e internacional. El rol de las redes transnacionales de la sociedad civil de Arauca probó ser particularmente efectivo para condenar públicamente y frenar el comportamiento del Ejército colombiano y para evitar que los nacientes grupos paramilitares pusieran un pie en el departamento a finales de los años noventa (Carroll, 2011).

El clientelismo armado

Antes de la llegada de las FARC y el ELN al departamento, las instituciones políticas de Arauca estaban completamente dominadas por una facción del partido liberal de la sabana liderada por Alfonso Latorre Gómez, el gamonal regional que sirvió como senador intendente desde 1966 hasta 1980 (Pérez, 2015). Latorre mantuvo un fuerte control sobre las políticas de la región a expensas del piedemonte, manteniendo una distribución exclusiva de poder usando los presupuestos de la intendencia para mantener sus redes clientelistas en lugar de invertir en el desarrollo de las comunidades tanto de la sabana como del piedemonte (Entrevista 46 y 52, 2016). Sin embargo, esta dinámica política cambió dramáticamente a principios de los 80 debido a tres eventos clave: la llegada de las FARC y el ELN a la zona a comienzos de los 80, la construcción del complejo del oleoducto Caño Limón entre 1985-1986, y la elección directa de concejales municipales y alcaldes a comienzos de 1986 (Gutiérrez, 2010).

Después de dos décadas de inmigración sustancial al piedemonte, para los años ochenta, la población de la subregión sobrepasaba la de la sabana. Adicionalmente, la apertura democrática entre 1986 y 1991 le dio a la insurgencia la capacidad para intervenir directamente en las instituciones políticas municipales y departamentales (Entrevista 21, 2016). Las FARC entraron inmediatamente en la arena electoral, primero con el Partido Comunista de Colombia y luego con la Unión Patriótica (Entrevista 50, 2016). El ELN rompió con su política histórica de abstencionismo electoral en 1988 cuando comenzó a respaldar una facción política conocida como los liberales de Saravena (Entrevista 1, 2016). Esta facción política temía el ascenso de la UP en el piedemonte, y le ofreció

al frente Domingo Laín acceso a los presupuestos municipales si el ELN a cambio usaba su control local de las JAC en el piedemonte para suministrar votos a favor de sus candidatos" (Peñate 1991; Aguilera, 2006). A partir de ese momento en adelante, la estrategia del frente Domingo Laín "fue expandirse por las juntas y los gremios para multiplicarse en sus proyectos políticos" (Entrevista 38, 2016).

Para comienzos de los años noventa, la UP y los liberales de Saravena prácticamente controlaban los concejos municipales del departamento y las alcaldías hasta comienzos de los años 2000, aunque la UP disfrutaba de mayor respaldo electoral en Arauquita y Fortul, mientras los liberales dominaban Saravena, Tame y en menor extensión, Puerto Rondón, Cravo Norte y el municipio de Arauca (Entrevista 56, 2016). Se esperaba que los civiles votaran por cualquier candidato que el presidente de su JAC local decretara en representación de la opción preferida de cualquier grupo insurgente que controlaba su comunidad (Entrevista 36 y 51, 2016). Durante las primeras elecciones gubernamentales oficiales del departamento en 1991, el grupo insurgente movilizó suficientes votos en el piedemonte para elegir exitosamente al candidato liberal, Luis Alfredo Colmenares Chía, al cargo. En tres elecciones departamentales sucesivas hasta 2002, los candidatos escogidos a dedo por el ELN ganaron las sucesivas elecciones gubernamentales con José Vicente Lozano Fernández ejerciendo entre 1995 y 1997, Gustavo Carmelo Castellanos Beltrán desde 1998 hasta 2000, y Héctor Federico Gallardo Lozano desde 2000 hasta 2001 (Garay *et al.* 2017). Efectivamente, cuando el comandante del frente Domingo Laín, Armel "El Chino" Robles Carmeño, fue arrestado en Bogotá en octubre del 2000, estaba en compañía de Elías Matus Torres, quien era el representante a la Cámara por Arauca (*El Tiempo*, 2000).

A cambio del respaldo para el grupo electoral, se esperaba que los gobernadores designaran ciertos cargos del gabinete y ministerios para los insurgentes, y que se adhirieran al mismo tiempo a las demandas presupuestales del ELN (Celis, s. f.). La cooptación del ELN de las instituciones políticas municipales y departamentales forzó a los empleados públicos elegidos a enfocarse en "[…] la priorización y/o asignación de recursos públicos hacia proyectos sociales y de inversión en todos los municipios, incluso aquellos menos poblados y con escasa participación en las regalías" (CNMH, 2014, p. 62). El medio más usual para canalizar los recursos municipales y departamentales para las comunidades objetivo era a través de las JAC y otras organizaciones sociales. Sin embargo, el ELN también había dominado la capacidad para desviar fondos a través de la tercerización de contratistas y una serie de compañías de fachada, mientras que también perfeccionaban numerosos métodos cuestionables de contabilidad para evadir cualquier problema potencial con auditores externos (Duque,

2017). En algunos casos, los frentes del ELN y las FARC en Arauca mantuvieron la paz con sus competidores insurgentes compartiendo los botines de su éxito electoral mediante la asignación de cuotas fijas de los presupuestos públicos para la parte perdedora (Entrevista 38, 2016). Al mismo tiempo, los comandantes insurgentes escrutaban rutinariamente a los políticos municipales sobre cómo destinaban sus presupuestos y cualquier instancia de malversación o fraude que no habían sido aprobados por ellos mismos, eran juzgados y castigados bajo la justicia insurgente (Pérez, 2015).

La captura económica

La repentina transformación de Arauca en una zona principal de producción petrolera a mediados de los años ochenta, vio el surgimiento de un astronómico gasto público debido a la riqueza proveniente del dinero petrolero caído del cielo. Sin embargo, aunque la mayoría de la población del departamento vivía en el piedemonte, prácticamente todas las regalías del petróleo de Arauca estaban bajo la jurisdicción del supervisor presidencial designado en la intendencia y del concejo municipal de Arauca (Sarmiento, 2015). Esto significó que la mayoría de las regalías producidas por la infraestructura petrolera del departamento terminara en manos de los políticos de la sabana, un sistema altamente sesgado de distribución que invocó el descontento popular entre la población del piedemonte (Carroll, 2011).

El ELN pudo alterar esta dinámica a través de la hábil cooptación de la esfera política mediante el despliegue de las JAC bajo su control, con el fin de capturar las instituciones tanto municipales como departamentales, pero también para utilizar estas organizaciones sociales como medios para redistribuir las regalías petroleras en la forma de bienes y servicios públicos. La capacidad del ELN para capturar beneficios económicos para sus electores a través de las JAC fue "[u]n factor determinante del apoyo de los sectores populares a las guerrillas" (CNMH, 2014, p. 62). Por ejemplo, Arauca generó regalías por USD $1.2 billones entre 1986 y 2002, y de estos se calcula que $200 millones "[…] han llegado directamente a manos del ELN. Y sobre la inversión de los otros 1.000 millones de dólares ha tenido un control casi absoluto" (*Revista Semana*, 2002).

Mientras el ELN resolvía cómo obtener beneficios económicos de la industria petrolera en Arauca en el transcurso de los años ochenta y noventa, el grupo insurgente se insertó, de igual manera, en las economías agrícolas tanto del piedemonte como de la sabana durante este periodo de institucionalización insurgente. Con el fin de administrar y proteger a la economía minifundista campesina del piedemonte, el frente Domingo Laín supervisó toda la inmigración en la subregión y reguló fuertemente

el mercado local de finca raíz mediante la autorización de todas las compras locales de tierra. El grupo insurgente solo permitía comprar pequeños lotes en la subregión a aquellos que estaban emparentados o eran conocidos de tiempo atrás por los campesinos de la región, para impedir así la emergencia de latifundios basados en el sistema de tenencia de tierras (Entrevista 23, 2016). En lugares tales como Tame, donde varios colonos obtuvieron y desarrollaron sus pequeñas parcelas por medio de ocupación ilegal, estos grupos les ofrecieron respaldo crucial y protección a los inmigrantes campesinos sin títulos de propiedad legales (Entrevista 60, 2016). Simultáneamente, los insurgentes también lograron conseguir respaldo de muchos hacendados, ganaderos medianos y grandes, en la misma municipalidad mediante el riguroso combate de cuatreros que operaban en la región (Gutiérrez, 2010; Velasco, 2016).

Las estructuras del ELN en Arauca también desarrollaron organizaciones sociales locales a su disposición para regular las fuerzas productivas y para lavar activos del grupo. El frente insurgente protegía a los productores agrícolas locales de los especuladores externos y de la volatilidad del mercado a través del control de varias cooperativas campesinas y gremios comerciales en el piedemonte (Entrevista 29, 2016). La vasta red de cooperativas campesinas y gremios les garantizaba a los colonos campesinos el acceso a equipos, experticia, crédito y mercados, al mismo tiempo que evitaban que falsos intermediarios pudieran fijar precios injustos o evadir el pago completamente (Entrevista 58, 2016). La infiltración de cooperativas insurgentes y gremios se remonta atrás desde su aparición en 1980, cuando el grupo supuestamente invirtió mucho de su capital inicial en una prominente cooperativa local de piedemonte y luego pasó eventualmente a convertirse en el dueño secreto de esta empresa (Ospina, 1995). Después del surgimiento del frente Domingo Laín en 1980, el número de cooperativas y gremios aumentó en el piedemonte (Entrevista 43, 2016). En muchos casos, esto también se tornó en un negocio bastante lucrativo, según aparece en el portafolio legal del ELN, con una mayor extensión de estas organizaciones en el departamento, como resultado de estas iniciativas ellas le proporcionaban al grupo armado los medios para reinvertir los ingresos públicos generados en otros lugares (Ospina, 1995).

El control del frente Domingo Laín sobre la economía regional afectó las relaciones del grupo insurgente con las poblaciones civiles, debido a que “las relaciones eran muy complejas, pero eran poderosas porque cooptaron la economía de la región” (Entrevista 28, 2016). Con ese control tan rígido sobre toda la actividad económica, el ELN garantizaba que “la población se viera obligada a simpatizar de algún modo para comer o poder trabajar” (Entrevista 38, 2016). Según un servidor civil de Saravena, la relación entre el ELN y los líderes comunitarios en el piedemonte “era

más un proyecto económico que político" (Entrevista 27, 2016). El nivel de influencia de la guerrilla en la producción local, el intercambio comercial y el comercio engendraron una dinámica particular en Arauca, en donde los campesinos en la sabana y el piedemonte por igual, podían respaldar el proyecto insurgente y compartir los beneficios o permanecer neutrales —hasta el punto en donde existía la aceptación de permanecer neutral en el departamento en ese tiempo— y no recibir nada. Un activista de Arauquita explica esto con mayor claridad:

> Ser neutral era difícil, era optar por una vida muy pobre y sin muchas oportunidades. Era difícil ver a los vecinos con carros y mucha plata. Las personas se enfilaban o ayudaban a estos grupos porque no había oportunidades y era más fácil enriquecerse, otros lo hacían por convicción, pero muchos de ellos se aburrieron porque vieron que era un negocio. (Entrevista 38, 2016)

Control poblacional insurgente

El ELN en Arauca logró establecer un sistema de gobernanza anidada en Arauca y convertirse en el actor estructurante del territorio debido a la capacidad del grupo insurgente para "[…] fungir como intermediaria entre las poblaciones y los gobiernos locales y en no pocos casos, ser un ente de resolución de conflictos sociales" (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012, p. 75). Durante el transcurso de los años setenta, la percepción de la población del piedemonte del Estado colombiano cambió rápidamente de considerarlo como un terrateniente ausente para verlo como el principal enemigo del campesinado en la subregión. La creación del frente Domingo Laín y otras estructuras del ELN en Arauca, surgieron como una reacción orgánica frente al escalamiento del conflicto entre activistas campesinos y los representantes armados del Estado, del Ejército colombiano y la Policía. Por ende, la primera generación de militantes del ELN en Arauca encontró pocas dificultades para apropiarse de la escisión maestra entre sociedad y Estado, debido a que ellos mismos eran los productos directos del empeoramiento del conflicto socio político en el piedemonte. Previo a ser asesinado por el BVA en 2001, el muy estimado jefe político de la UP, Octavio Sarmiento, observó la división:

> Como ha reinado un sentimiento muy acendrado de que el Estado y las instituciones no sirven para nada, el ciudadano sigue dándole la espalda al criterio de las instituciones y el Estado, poco importa que el Estado resuelva o no resuelva, la población se siente al margen de las determinaciones del centro del país. La insularidad nos ha perjudicado, porque ha servido de grillete que impide andar con la necesaria velocidad hacia el progreso. (Pérez, 2015 p. 64)

La incapacidad del Estado colombiano para satisfacer las actividades básicas en el piedemonte, sumada a su reacción represiva a las demandas de los campesinos, generaron una amplia fractura entre el campesinado de la subregión y el gobierno central en la distante Bogotá, todo esto proporcionándole al ELN la oportunidad de insertarse en estas comunidades para llenar el vacío. Según Gutiérrez (2010): "Esta baja capacidad del Gobierno Central para controlar población y territorio era, de cierta forma, compensada por la guerrilla que hacia cumplir "acuerdos vinculantes" entre sectores y actores sociales y económicos" (p. 10).

Mediante la provisión de orden y otros bienes públicos a estas comunidades en formación, las estructuras del ELN ganaron mayor legitimidad y respaldo del campesinado local en el piedemonte. Un líder campesino de un poblado rural en Tame recuerda que: "El pueblo también sintió cariño por los insurgentes. Si alguien necesitaba una novilla se la regalaban o si alguien estaba enfermo le daban medicamentos o buscaban a algún doctor" (Entrevista 54, 2016). Un presidente local de una JAC de Arauquita lo recuerda que así: "nos enseñaron a inyectarse, ya que había mucha malaria por aquella época y también nos enseñaron a castrar a los animales y a producir nuestras fincas" (Entrevista 41, 2016). Según un excomandante de las FARC en Arauca, los civiles en el piedemonte se vincularon al orden social insurgente debido a éticas situacionales prevalecientes del periodo: "Y esto se dio ¿por qué? Por el abandono del Estado en los territorios, donde la gente acude a la primera autoridad, por eso se dio, no es porque la gente sea una colaboradora directamente de la guerrilla, ¡no! Y viven dentro de un contexto, que eso lo conocemos a nivel nacional (Entrevista 61, 2020, 2016).

El descubrimiento de petróleo y la subsiguiente llegada de corporaciones multinacionales extractivas a Arauca exacerbaron la división entre las comunidades campesinas y el Estado, mientras que se fortalecía el poder del ELN sobre el departamento. Aparte de proporcionarle al frente Domingo Laín los recursos monetarios que necesitaba para financiar su expansión y los diversos trabajos públicos que les suministraba a las comunidades del piedemonte, la prioridad del gobierno central de la industria petrolera sobre el desarrollo de la subregión, solo logró sostener estos reclamos que venían de largo tiempo. La industria petrolera en Arauca "[…] trajo consecuencias económicas lamentables para la región, generó corrupción, problemas de orden ecológico como en la laguna del Lipa e incrementó la violencia con la confrontación armada" (*El Tiempo*, 1998). En respuesta a los negativos efectos políticos, económicos, sociales y ambientales traídos por la producción petrolera en el departamento, el ELN logró justificar el escalamiento del conflicto en un discurso nacionalista, uno que puso a los grupos insurgentes y al campesinado regional

en contra del Estado colombiano y las multinacionales extranjeras tales como Occidental Petroleum (Entrevista 1, 2016). Al hacerlo, el grupo insurgente logró posicionarse a sí mismo como defensor del orden social agrícola local. Un activista regional de Saravena explica cómo esto llevó a que continuara el respaldo social a la regulación insurgente en Arauca:

> La misma guerrilla ha construido la infraestructura del departamento, por ejemplo, para hacer una vía estos grupos tomaban maquinarias de la multinacional petrolera y obligaban a quienes manejaban las maquinarias a abrir las vías. También hacen justicia, y es mucho más rápida y a la mano que la del Gobierno, la cual es muy lenta. Usurpan las funciones del Estado, entonces en este sentido la población ha aplaudido a los grupos subversivos. Además, han tenido la capacidad de estructurar políticamente al pueblo y han tenido en alta valoración las peticiones y reivindicaciones del pueblo, mientras que el Estado promueve cárcel y destierro. (Entrevista 29, 2016)

La capacidad del ELN para cooptar casi todas las facetas de la sociedad araucana creó un mecanismo de dependencia que solamente sirvió para cohesionar, más adelante, a la población civil en torno a su orden insurgente, sin que importaran los factores emocionales o psicológicos. El nivel de control poblacional no estaba limitado a ninguna comunidad rural o demografía especial en Arauca, sino que, más bien, estaba cruzada sectorialmente y totalmente acompasada, como lo anota Velasco (2016): "El ELN tuvo paralelamente aceptación y arraigo en sectores rurales y urbanos como los maestros, sindicatos, transportadores y algunos segmentos de la clase obrera" (p. 27).

Pero, aunque las relaciones entre civiles y el Estado colombiano eran tirantes en el piedemonte, esto no significaba que toda la población civil quisiera, respaldara o apreciara la presencia del ELN o las FARC en su vida cotidiana. Las relaciones campesinas insurgentes en Arauca eran extraordinariamente complejas y estaban fuertemente influenciadas por la amenaza omnipresente de violencia insurgente contra aquellos que infringieran su código social. Un residente que ha vivido en Tame toda su vida caracterizó estas relaciones en tres categorías diferentes —alineación, desplazamiento y mortalidad— todas estas de conformidad con lógicas distintas basadas en coerción, afectación, y/o ganancia financiera:

> La gente se tuvo que resignar a que había un nuevo orden. La guerrilla se incrustó en el seno de la sociedad para conformar una relación que oscilaba entre el sometimiento, la colaboración y el miedo. La población siempre ha tenido un grado de familiaridad con estos grupos, porque tienen familiares, amigos o conocidos metidos en los grupos. La guerrilla hizo cosas buenas como prohibir la pesca con dinamita o la caza de lapas y también arregló matrimonios. Pero, por otro lado, también generaron mucho sufrimiento,

> se volvieron unos instrumentos para matar personas y hacerles favores a sus allegados. Cobraron muchas víctimas. (Entrevista 50, 2016)

El escalamiento del conflicto armado en Arauca demostró ser un equilibrio reforzado en sí mismo que

> "[…] reforzaron los estereotipos de estigmatización de la población civil entre los miembros de la fuerza pública, lo que desencadenó acciones represivas no siempre en el marco de la ley como la persecución contra movimientos cívicos o movimientos políticos de izquierda mediante acciones de 'guerra sucia'" (CNMH, 2014, p. 41).

La capacidad del ELN para controlar completamente a la sociedad civil, llevó a que el Gobierno colombiano aumentara rápidamente la represión selectiva e indiscriminada contra la población fundamentándose en la equivocada concepción de que todos ellos eran participantes activos de la insurgencia regional. Irónicamente, el error estratégico del Ejército colombiano, al no comprender a fondo la situación real de la población del territorio, terminó por consolidar aún más la obediencia civil al orden insurgente, generando un mayor respaldo para el ELN en su lucha contra el Estado colombiano.

El conflicto armado en Arauca

Durante las primeras dos décadas de su existencia, el frente Domingo Laín estableció un sistema abarcador de gobernanza anidada a lo largo de Arauca, generando un alto nivel de control poblacional sobre los habitantes del departamento. Para desempeñar el rol como el actor estructurante del territorio, fue clave la profundización de la división entre civiles y el Estado colombiano, un conflicto sociopolítico que les permitió a las estructuras del ELN posicionarse a sí mismas como defensoras de las comunidades campesinas; no solo interesadas solamente en apoderarse del control del territorio, sino también en capturar el poder en términos cívicos, políticos y económicos. Sin embargo, el aumento de hostilidades entre la insurgencia regional y el gobierno central fue mucho más allá de asesinatos selectivos y paros cívicos armados. A medida que la fuerza del ELN crecía en Arauca, aumentó dramáticamente su nivel de combate violento con el Ejército colombiano, la Policía Nacional y las multinacionales petroleras en Arauca, una dinámica que solo cambió con una respuesta contra insurgente masiva desatada a principios de los años 2000 por las AUC y el Ejército colombiano.

Sin embargo, este intento tardío del Estado colombiano y sus auxiliares para asegurar el control de Arauca fue tan solo un precursor para la futura guerra entre guerrillas, entre el ELN y las FARC, una confrontación que marcó el periodo más violento del conflicto armado en el departamento. Mientras que los años 2000 representaron una década de declive y

supervivencia para el ELN en Arauca, la última década ha estado caracterizada por un periodo de reajuste estratégico y expansión territorial para el frente oriental de guerra, el FGO, un periodo que ha visto al grupo insurgente convertirse en uno de los actores más poderosos como grupo armado no estatal en Latinoamérica.

La belicosidad histórica del ELN

Durante sus años iniciales en Arauca, el ELN se dedicó a la organización y regulación de las comunidades bajo su control en el piedemonte. El frente Domingo Laín solo comenzó a escalar su confrontación armada con el Estado colombiano cuando el campo de producción del oleoducto Caño-Limón comenzó la producción de petróleo para exportación a mediados de los años ochenta (Gutiérrez, 2010). La llegada de la industria petrolera a este rincón olvidado en el nororiente colombiano no solo alteró las sociedades agrarias del piedemonte y la sabana, sino que también aceleró la tardía llegada del Ejército colombiano, como evidencia Gutiérrez (2010) (Entrevista 13, 2016). Este aumento dramático de militares colombianos y policía marcó la militarización de la zona, ya que a partir de este momento "todos los planes de ordenamiento territorial se han hecho en función del petróleo y para favorecer a las petroleras" (Entrevista 2, 2016). Según un sindicalista de la industria petrolera en el municipio de Arauca:

> El inicio de la extracción petrolera implicó la militarización de la zona, y a partir de ese despliegue de la fuerza pública en función de la salvaguarda de la infraestructura petrolera, las condiciones de seguridad empeoraron para la gente de la región. La expansión del Ejército coincide con la infraestructura del petróleo. El Ejército se volvió el que protege los intereses del petróleo. (Entrevista 8, 2016)

La repentina militarización de Arauca solo sirvió para exacerbar la separación entre la población civil y el Estado, mientras le proporcionaban a las estructuras del ELN los medios para escalar su conflicto con el gobierno central (Entrevista 26, 2016). O en las palabras de un exalcalde de Tame: "[…] el petróleo significó violencia, muerte y progreso material" (Pérez, 2015, p. 82). Para los años noventa, el ELN había consolidado el control de Arauca hasta el punto donde el Ejército colombiano y la Policía dejaron de ejercer sus funciones debido a la severidad de la amenaza impuesta sobre ellos por el grupo insurgente. El frente Domingo Laín se volvió muy beligerante "[…] al punto que la Policía tuvo que confinarse en su cuartel central entre 1995 y el año 2000. En estos años los hostigamientos en las plazas centrales de Saravena, Arauquita y Fortul eran de rutina" (Celis, s. f.). La situación en Tame era un poco mejor como lo recuerda un defensor de derechos humanos: "La fuerza pública se mantuvo al margen de la situación,

después de las 6 p. m. no salían a patrullar. Si había un robo tampoco iban porque muchas veces les hacían emboscadas. Casi siempre estaban encerrados en los batallones y estaciones" (Entrevista 49, 2016).

Para los militantes del ELN, los soldados activos en servicio y los oficiales de la Policía, eran sus principales objetivos militares, aunque en muchos casos sus familiares también fueron señalados como objetivo por los insurgentes para ejercer violencia sobre ellos. Una mujer que vivió en Tame durante este periodo experimentó esta crecida persecución insurgente simplemente porque su esposo era un oficial de la Policía:

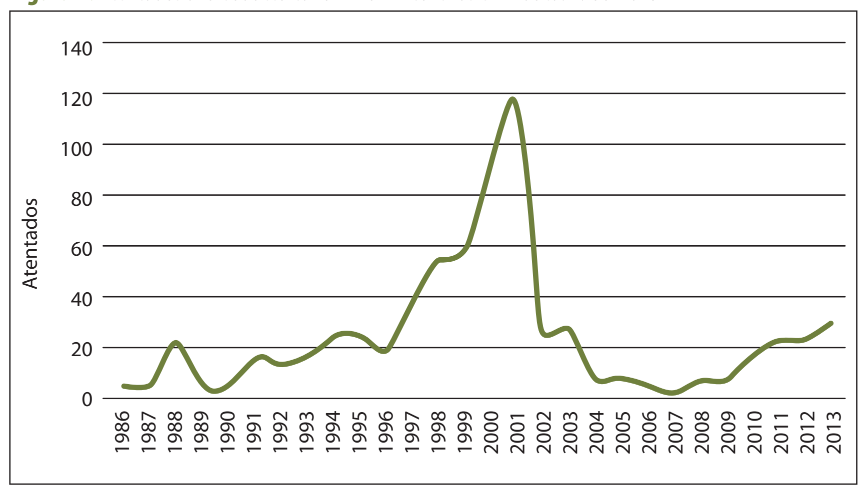
> Antes las esposas de los policías o militares éramos objetivos militares de la guerrilla, nos asesinaban en las carreteras enfrente de las personas para causar terror. Yo fui esposa de un sargento de la Policía en Tame. Allí fue donde perdí mi hijo porque vivíamos en la estación y nos bombardearon. Antes, la fuerza pública no podía salir a la calle, si patrullaban les tocaba en varias motos y a una velocidad entre 130 y 150 kilómetros. Al ser esposa de un sargento, yo no podía tener contacto con nadie de la población civil, no podía salir de cierto perímetro. (Entrevista 33, 2016)

Inmediatamente después del 14º pleno el ELN en 1995 y del III congreso en 1996, el frente Domingo Laín aumentó drásticamente sus ataques contra la infraestructura petrolera del departamento, específicamente contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas en el norte de Arauquita y Saravena. Los frentes insurgentes de las FARC en Arauca comenzaron simultáneamente a combatir con ataques similares contra el oleoducto durante este periodo, aunque el ELN continuó siendo el principal actor de estos ataques contra la infraestructura petrolera en el departamento (FIP, 2015). Durante este periodo, las estructuras del ELN en Arauca extendieron sus ataques hasta enfrentar a las autoridades venezolanas al otro lado de la frontera en Arauca. En marzo de 1995, la compañía Simacota del ELN atacó un puesto militar en Carabobo (Apure) dejando alrededor de 8 soldados venezolanos muertos (Cristancho, 1996). En el transcurso de los dos años siguientes, las estructuras del ELN, que estaban en Arauca, llevaron a cabo ocho ataques más dentro de Venezuela y dos ejecuciones separadas de civiles, aumentando el número de muertos atribuidos a 24, 19 de los cuales eran miembros del Ejército colombiano (Malaver, 1997).

Además del aumento en la belicosidad del frente Domingo Laín durante esta década, los frentes de las FARC en Arauca sobrepasaron los enfrentamientos violentos con el Ejército colombiano en Arauca para 1998 (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012). Reflejando una tendencia nacional, el repentino crecimiento de la capacidad militar de las FARC en Arauca se evidenció con la creación de la columna

móvil Alfonso Castellanos en 1997, un cambio en el liderazgo que vio a Germán "Grannobles" Briceño Suárez convertirse en el nuevo comandante del Décimo frente y la expansión del cultivo de coca en comunidades controladas por las FARC en Tame, Arauquita y Fortul (ACNUR 1997, 2007). Las negociaciones de paz en El Caguán hicieron muy poco para desescalar el desarrollo del conflicto en Arauca.

Figura 1. Atentados al oleoducto Caño Limón – Coveñas en Arauca: 1986-2013



Fuente: Elaborado por el autor (Datos de Gómez, 2016, p. 214).

En respuesta, el Ejército colombiano comenzó a desarrollar operaciones con mayor nivel de coordinación en el nororiente de Colombia. Impertérritos por el desastroso bombardeo aéreo sobre el poblado de Santo Domingo en el norte de Tame, un ataque que dejó 17 civiles muertos, los miembros de la brigada 18 del Ejército Nacional de Colombia iniciaron una serie de operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Colombiana durante 1999, que tenían como objetivos las estructuras de las FARC en el nororiente de Colombia (Carroll, 2011). El ELN en Arauca no fue dejado por fuera de los crecientes esfuerzos del Estado colombiano contra los grupos insurgentes. En noviembre del 2000 una redada de la Policía Militar en Bogotá capturó con éxito un comandante del frente Domingo Laín, Armel "El Chino" Robles, un arresto que llevó a Carlos ("Pablito") Emilio Marín Giraldo como su reemplazo a la cabeza del ELN en Arauca (Velasco, 2016).

El nuevo comandante de Arauca ha sido ampliamente acusado de ser el autor del controvertido asesinato del obispo Jaramillo en 1989 durante su continuo ascenso por los rangos de la organización insurgente, en un servicio militar que lo vio comandar la compañía Simacota en los años noventa antes de asumir el control completo del frente Domingo Laín a

finales de los años 2000. (InSight Crime, 2019c). Este cambió de liderazgo ocurrió en una coyuntura cuando el conflicto armado estaba escalando dramáticamente a lo largo del departamento y el ELN y las FARC por igual, comenzaban a imponerse aún más sobre la población civil tanto en el piedemonte como en la sabana (Entrevista 55, 2016). Frente al desarrollo de la confrontación con el Estado colombiano, el proceso de reclutamiento del ELN cambió de ser voluntario a cuasi obligatorio. Según una mujer de un poblado rural en Arauquita: “En mi infancia ellos enfilaban porque ellos querían o debido a las mismas necesidades en los hogares. Por 2000 ya sí empezó más como debe irse como obligación, debe acompañarnos, debe defender la patria, hay que prestar servicio obligado, que defender la tierra todo eso decían” (Entrevista 59, 2016).

En respuesta a las agresiones del Estado, el ELN intensificó la prohibición explícita contra cualquier forma de contacto con el Ejército de Colombia y la Policía Nacional. Una lideresa de derechos de la mujer del piedemonte describe el agudizado nivel de polarización: “La tensión de la guerra era terrible aquí. Tal es el grado de desconfianza que hasta los peluqueros eran asesinados porque les cortaban el pelo a los policías y al Ejército” (Entrevista 19, 2016). Ratificando esta extrema estigmatización, un líder religioso en Arauquita recuerda:

> Hablar con un militar era razón suficiente para matarlo a uno, también cualquier favor o trabajo que se hiciera para ellos era una muerte segura, por eso muchas lavanderas y emboladores fueron asesinados, tampoco se les podía vender nada. Por esta razón, la gente prefería mantenerse lejos de los militares, pero ellos a la vez comenzaron a ver a la población civil como cómplices de la guerrilla, ya que no les informaban sobre los atentados que tenían preparados para ellos. Sin embargo, el pueblo estaba contra la espada y la pared, si hablaban los mataban los guerrilleros. Es bajo este contexto, que la fuerza pública se fue llenando de resentimiento y comenzaron a estigmatizar al pueblo de guerrillero. (Entrevista 38, 2016)

Tanto el Ejército colombiano como la Policía persiguieron a los civiles fundamentándose en criterios arbitrarios en la medida en que el conflicto empeoraba. Como un exalcalde del piedemonte lo describe: “Es que bastaba con tener cédula de Arauquita para ser considerado guerrillero” (Entrevista 15, 2016). La estigmatización de comunidades campesinas en el piedemonte solo sirvió para separar aún más a la población civil de las unidades militares y policiales establecidas en la región, un error estratégico que fracasó al no entender que la obediencia ampliamente difundida al código social de la insurgencia se fundamentaba en la necesidad y no en una opción. Un maestro del piedemonte describe cómo el control poblacional insurgente sobre los civiles impedía cualquier forma de colaboración con la fuerza pública en esta coyuntura:

> Las relaciones no eran muy prósperas. Cuando el Ejército llegaba a una población con fuerte presencia guerrillera, los estigmatizaban fuertemente. Les daban mal trato, los sacaban de las casas a las canchas de fútbol y los acusaban. También cuando había choques entre la guerrilla y los militares, la población civil era la primera en afectarse, porque los militares los acusaban y los obligaban a dar información, pero si lo hacían, los guerrilleros los mataban. Quedaban en una encrucijada. (Entrevista 53, 2016)

La respuesta contrainsurgente

En la medida en que las fuerzas militares de Colombia empezaron a hacer retroceder a los grupos insurgentes en Arauca en los primeros años del nuevo milenio, los jefes paramilitares en el noroccidente de Colombia empezaron a mirar hacia el departamento como potencial de expansión. Mientras que los bloques paramilitares fueron expulsados con éxito hacia las vecindades de Casanare y Norte de Santander durante finales de los noventa, Arauca permaneció firmemente bajo el control del ELN y las FARC.

Pero, todo esto cambió debido a dos eventos en el transcurso entre 2001 y 2002: la llegada del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) en agosto del 2001 y el comienzo del primer periodo de Álvaro Uribe Vélez en agosto del 2002, una coyuntura que vio a Arauca convertirse en un laboratorio contrainsurgente para el nuevo presidente electo con su política de seguridad democrática (Leal, 2006; Kline, 2009; ver capítulo "Descifrando al ELN"). En el primer mes de ejercer como presidente, Uribe inició su campaña contrainsurgente en dos regiones muy separadas: Montes de María en el norte de Colombia y Arauca en el oriente, ambas señaladas como "zonas de rehabilitación y consolidación" para ser gobernadas bajo las normas de un estado de emergencia militar (Amnistía Internacional, 2004). La lógica detrás de esta estrategia en Arauca era rodear territorialmente a los grupos insurgentes: "[…] mientras el Gobierno nacional ordenó la militarización del corredor fronterizo (Saravena, Arauquita y Arauca), los paramilitares ingresaron al departamento desde el sur, y de ahí emprendieron su expansión hacia el norte, en dirección a Venezuela" (CNMH, 2015, p. 135).

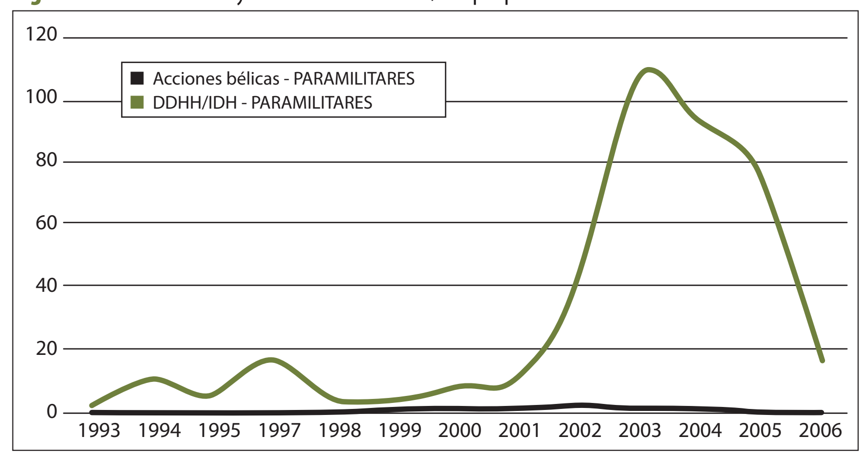
Varios grupos incipientes de paramilitares aparecieron esporádicamente en diferentes coyunturas en Arauca entre los años ochenta y noventa, aunque estos estaban conformados principalmente por soldados y criminales comunes que buscaban amenazar y eliminar líderes campesinos en el piedemonte (Gutiérrez, 2010; Carroll, 2011). En medio del escalamiento del conflicto en agosto de 2001, el BVA ingresó a Tame desde el Casanare y rápidamente consolidó el control de las planicies de este municipio (CNMH, 2014). Un año antes, la 'franquicia' del BVA había sido

vendida por la familia Castaño, por una suma que se cree estaba entre USD $2.5 y $4 millones a un par de gemelos traficantes de drogas del Valle del Cauca conocidos como "Los Mellizos", Miguel Ángel Múnera. "Pablo Arauca" y Víctor Mejía Múnera, "Sebastián". En realidad, los hermanos buscaban convertir sus mal habidas fortunas en estatus beligerante para poder legalizar sus activos y recibir unos términos favorables por sus numerosos crímenes, bajo un acuerdo con el Gobierno colombiano de una eventual desmovilización (*Verdad Abierta*, 2010b).

Inicialmente, tanto el ELN como las FARC fueron incapaces de repeler la incursión del BVA en ese momento exacto porque el Ejército colombiano había iniciado simultáneamente la Operación Arawak en el norte de Tame maniatando a las tropas insurgentes concentradas en las comunidades del piedemonte (*El Tiempo*, 2001). Durante el siguiente año, el BVA se expandió rápidamente a lo largo del resto de la sabana en Puerto Rondón, Cravo Norte y el municipio de Arauca, cometiendo innumerables atrocidades contra civiles al tiempo que desplazaban a los frentes insurgentes débilmente incrustados con la asistencia de la brigada 18 del Ejército colombiano (*Verdad Abierta*, 2010a). Una vez establecidos en la sabana de Arauca, las BVA infiltraron instituciones políticas municipales mientras asumían el control de actividades económicas ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el contrabando (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012; CNMH, 2015).

El inicio de la presidencia de Uribe vio a Arauca convertirse rápidamente en la zona más militarizada en Colombia. Alarmado por el número record de ataques insurgentes contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, Uribe declaró la militarización del departamento mediante decreto presidencial, cuya meta "era exterminar a los grupos armados organizados ilegales que hacían y hacen presencia en la región" (Entrevista 2, 2016). Durante este periodo, la presencia del Ejército colombiano en Arauca aumentó rápidamente su personal militar a 8.500 personas "[…] en un departamento con 7 municipios y cerca de 230 mil habitantes… lo que supone una relación de un militar por cada 27 habitantes, cuando en el ámbito nacional esa relación es de 1 a 100" (CNMH, 2014, p. 64). La asignación de unos 3.000 soldados fue contundente, específicamente para la protección de los campos petroleros, oleoductos y torres de transmisión eléctrica a lo largo del departamento (Gómez, 2016). Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia suspendió el decreto de la zona de rehabilitación y consolidación después de ocho meses de su vigencia, declarándolo como una iniciativa inconstitucional, pero esta sentencia solo tuvo como resultado el obligar a una reestructuración de la compaña contrainsurgente de Uribe; así, la Política de Seguridad Democrática continuó sin cesar en Arauca (Entrevista 24, 2016).

Figura 2. Acciones bélicas y violaciones de DD. HH./DIH por paramilitares en Arauca: 1993-2006



Fuente: Elaborado por el autor (Datos de Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep/PPP).

Los procesos casi simultáneos de expansión paramilitar en la sabana y la implementación de la Política de Seguridad Democrática en todo el departamento cumplieron funciones separadas, pero igualmente complementarias de la campaña contrainsurgente en Arauca como el BVA, que "[…] tuvo sus mayores réditos a partir del año 2002, coincidiendo con la ofensiva militar del Ejército Nacional de Colombia en el marco de la Política de Seguridad Democrática, a través de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación" (CNMH, 2014, p. 58). Entre la guerra sucia del BVA y la persecución judicial por el Ejército colombiano, miles de civiles inocentes fueron detenidos arbitrariamente en capturas masivas mientras docenas de servidores públicos elegidos, candidatos presidenciales, líderes cívicos y periodistas fueron detenidos, exiliados o asesinados durante este periodo (Amnistía Internacional, 2004; Garay *et al.*, 2017). La reconfiguración del equilibrio del poder departamental se explica mejor con la victoria electoral gubernamental de Julio Acosta Bernal en 2003, un político de la sabana que mantuvo el respaldo completo tanto de Uribe como de las BVA y cuyo triunfo en las urnas significó que "[…] el ELN por primera vez en muchos años estaba por fuera de cualquier acuerdo" (Celis, s. f.).

El éxito de la incursión del BVA y de la política de Seguridad Democrática en la sabana contrastaba fuertemente con las limitaciones de la estrategia contrainsurgente en el piedemonte. Mientras uno de los principales objetivos del BVA era capturar el lucrativo corredor de tráfico de drogas hacia la frontera con Venezuela, el bloque paramilitar también intentó penetrar el piedemonte para llevar a cabo masacres y forzar el desplazamiento de comunidades campesinas que clasificaba como si fueran bases sociales insurgentes. La incursión repentina del BVA en la implementación de la

política de Seguridad Democrática llevó a que, paradójicamente, se unieran temporalmente el ELN y las FARC, en un acuerdo conjunto de seguridad para impedir que las fuerzas contrainsurgentes penetraran al piedemonte (Entrevista 4, 2016). El frente Domingo Laín y el Décimo frente establecieron un cordón de seguridad en la frontera entre la sabana y el piedemonte en Arauquita y Tame y movilizaron estas comunidades y sus densas redes sociales para alertar cualquier avance del BVA o movimientos de tropas militares colombianas (Entrevista 23, 2016).

Según un líder religioso: "Cuando los paras quisieron entrar a Arauquita, la guerrilla hizo un cordón de seguridad. Cualquier extraño que entrara lo mataban, tenían todo muy vigilado y no dejaron entrar tantos infiltrados ni a los paras" (Entrevista 38, 2016). Un periodista establecido en la sabana confirma este proceso de barrido rígido llevado a cabo por grupos insurgentes: "Los paramilitares entraban a la zona como vendedores ambulantes y locos. A Saravena no podían llegar locos. La guerrilla los quemaba porque pensaba que ellos eran paramilitares o gente del Estado infiltrada" (Entrevista 9, 2016). En contraste con la sabana, en donde "la guerrilla no los enfrentó, fueron los primeros que se fueron", la alianza entre el ELN y las FARC combatió a sangre y fuego al BVA en su intento de incursión (Entrevista 34, 2016). Un excomandante de las FARC en la subregión dice que los grupos insurgentes coordinaron su respuesta frente a la incursión del BVA porque "todos los intereses entre económicos, políticos, sociales estaban amenazados" (Entrevista 61, 2020).

Entre 2001 y 2004, las estructuras del ELN y las FARC repelieron con ferocidad más de doce incursiones del BVA en comunidades rurales localizadas a lo largo de la frontera Llanos-piedemonte, donde la mayoría ocurrieron en Tame (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012). En una de esas confrontaciones, en febrero del 2003, el ELN y las FARC pelearon una larga batalla de días contra el BVA en La Cabuya, dejando docenas de bajas en ambos lados. Un exalcalde de Tame recuerda que "por la carretera de la Cabuya se veían camionadas de muertos por los enfrentamientos entre estos dos grupos, las luchas eran casi cuerpo a cuerpo" (Entrevista 51, 2016). La mayoría de los locales le dan crédito al cordón de seguridad insurgente en la prevención de la entrada del BVA al piedemonte, un sentimiento resaltado por Celis (s. f.):

> Los elenos lograron contener el avance paramilitar en lo que se conoce como la batalla de Corocito, corregimiento de Tame, donde, en una confrontación de cuatro días que dejó varios muertos de lado y lado, el frente Domingo Laín logró finalmente que los paramilitares se replegaran hacía la región donde tenían apoyo de la fuerza pública. Según Pablo, por esta batalla los paramilitares no lograron asentarse en las zonas históricas del Laín en el Sarare. (Celis s. f.)

Los sacrificios de los grupos insurgentes para proteger el piedemonte a todo costo fueron ampliamente reconocidos y apreciados por los civiles que habían oído de la brutalidad extrema de la actuación del BVA en la sabana (Entrevista 54, 2016). Sin embargo, estos conflictos insurgentes-paramilitares también encendieron actos retaliatorios de violencia indiscriminada contra civiles por igual de paramilitares e insurgentes por percepciones de colaboración con sus oponentes (*El Tiempo*, 2004). El BVA demostró su incapacidad para penetrar el piedemonte porque "la guerrilla conocía mucho más el territorio que es una zona hostil. Lo más lejos que llegaron fue a Corocito, donde hicieron una masacre" (Entrevista 42, 2016). La resistencia insurgente extrema en estas comunidades creó una dinámica donde "la población comenzó a ser objetivo militar porque eran estigmatizados de guerrilleros y se comenzaron a realizar las masacres más bárbaras en Tame" (Entrevista 30, 2016). Entre 2001 y 2005, el BVA esporádicamente ingresó a las primeras líneas de las comunidades en el norte de Tame y cometió masacres brutales contra civiles en pueblos como Betoyes, Flor Amarilla, Cravo Charro y Corocito, antes de retirarse rápidamente a sus bases en la sabana (CNMH, 2014).

Fuera de estas incursiones paramilitares en el norte de Tame y de un intento abortivo por exportar sicarios del BVA a la capital municipal de Saravena para ejecutar asesinatos selectivos allí, la tarea militar de confrontación con los grupos insurgentes en el piedemonte recayó principalmente en el Ejército colombiano (Entrevista 44, 2016). Mientras las FARC combatían al Ejército en Arauca durante este periodo, el ELN "se replegó y estuvo de cuatro a cinco años quietos para que no los acabaran" (Entrevista 32, 2016). Habiendo experimentado bajas territoriales debilitantes en el resto de Colombia a manos de las AUC, sumado al creciente dominio de las FARC en muchas de sus zonas históricas de influencia, la capacidad militar del ELN disminuyó sustancialmente en toda Colombia en la primera década del nuevo milenio. En respuesta, el COCE inició conversaciones exploratorias en 2002, que eventualmente se convirtieron en negociaciones de paz oficiales con la administración de Uribe entre 2006 y 2008, que todas ellas, a la postre, no resultaron en nada (FIP, 2009; ver capítulo "Descifrando al ELN").

En Arauca, las estructuras se enfocaron en mantener estricto control sobre la población y el territorio en el piedemonte para conservar el "Corredor ABC" geoestratégicamente importante, una codiciada franja de territorio para los grupos insurgentes, que abarca el estrecho de la cordillera oriental que atraviesa Casanare, Boyacá y Arauca antes de su descenso en Venezuela (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012). El ELN y las FARC recurrieron aún más al uso de minas antipersonal para impedir el avance de tropas militares y paramilitares al interior de las comunidades del piedemonte bajo su control, con el objetivo

de proteger este vital corredor de movilidad (FIP, 2014). El corredor ABC les proporcionaba a las estructuras del ELN en Arauca un puente terrestre para movilizar gente, armas y contrabando entre Venezuela y los departamentos del interior de Colombia. Esto era particularmente importante después de la elección de Hugo Chávez Frías en 1998, un cambio electoral que rápidamente le permitió al ELN consolidar una importante presencia en el distrito del Alto Apure en el costado venezolano del río Arauca (Entrevista 48, 2016). A partir de esta coyuntura, el ELN ejerció una autoridad y control considerables en Apure, controlando el tráfico binacional de contrabando de armas y de gasolina en colaboración con la Guardia Nacional de Venezuela (Entrevista 10, 2016). De igual importancia, el grupo insurgente utilizó la frontera como refugio para esconderse de las autoridades colombianas después de llevar a cabo operaciones militares y asesinatos selectivos al interior de Colombia (Entrevista 13, 2016).

Aunque la belicosidad del ELN y el compromiso militar disminuyeron drásticamente al encarar la respuesta insurgente, el frente Domingo Laín, reenfocó sus esfuerzos en regular las comunidades bajo su control, llevando a cabo "un trabajo importante de adoctrinamiento, la educación política en el campesinado, y la regulación de la vida comunitaria" (Entrevista 1, 2016). Los esfuerzos del Ejército colombiano para solicitar información y colaboración de civiles que habitaban el piedemonte tales como la red de cooperantes fracasaron casi instantáneamente, como "además de los afectos, el ELN extinguió casi todos los focos de cooperación de la población civil, hubo muchos muertos, el temor jugó un papel preponderante en el actuar de la gente" (Entrevista 29, 2016). Habiendo sido despojado de influencia política a nivel departamental, el ELN buscó asesinar políticos oportunistas que colaboraban con el BVA, a la vez que impidió la postulación del partido de la U y todos los partidos políticos que estaban alineados con el uribismo en Arauquita, Saravena y Fortul (Entrevista 11, 2016; Entrevista 22, 2016). Aunque su partido político aliado de vieja data, los liberales de Saravena, había sido diezmado por la persecución contrainsurgente, el frente Domingo Laín creó nuevas alianzas con una variedad de partidos emergentes para capturar poder político discretamente a nivel municipal a lo largo del piedemonte (Entrevista 14, 2016).

La guerra entre guerrillas en Arauca

La historia de las relaciones ELN-FARC en Arauca ha oscilado entre coexistencia pacífica y conflicto violento. Durante la primera década de consolidación en el piedemonte, los grupos insurgentes tuvieron dificultades iniciales al operar en las mismas comunidades hasta que alcanzaron un entendimiento tácito. Una líder comunitaria del norte de Tame recuerda esta dinámica

en su pueblo: "Primero entraron los elenos y después los farianos. En el inicio las dos guerrillas eran enemigas y no se podían ver porque se mataban, pero con el tiempo fueron dialogando y construyendo lazos, también se comenzaron a ganar al pueblo porque comenzaron a apoyar las luchas sociales" (Entrevista 54, 2016). En lugar de reclamar explícitamente un territorio específico en el piedemonte, las estructuras del ELN y las FARC dividieron a la población clasificando prácticamente a cada habitante rural como base social de uno de los dos grupos insurgentes (Entrevista 22, 2016). Luego de sus desacuerdos iniciales, el ELN y las FARC llegaron a establecer una relación más definida y con mayor claridad que permaneció relativamente en paz hasta 2005. Un líder campesino de un poblado rural en Arauquita describe este balance equitativo de poder en su comunidad: "Inicialmente, el ELN y las FARC convivían en buenos términos, podían comer o tomarse una gaseosa juntos en el caserío. Cobraban vacunas a los que tenían más riqueza o a los que tenían algunas cabezas de ganado, y en ocasiones a quienes les faltaba para comer los ayudaban" (Entrevista 41, 2016).

Durante un periodo de dos años iniciando en 1991, el ELN y las FARC unieron sus fuerzas temporalmente como la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y ejecutaron juntos numerosas acciones militares en Arauca (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012). Esto coincidió con breves negociaciones durante la administración Gaviria (1990-1994) con las FARC, el ELN y facciones disidentes del EPL que se llevaron a cabo en Cravo Norte. En el ocaso del rompimiento de estas conversaciones, la confederación guerrillera se disolvió y ambos, las FARC y el ELN, regresaron a su forma previa de operación independiente en Arauca y más allá. Durante el escalamiento del conflicto armado y las respuestas subsiguientes de contrainsurgencia a comienzos de los años 2000, el ELN y las FARC coordinaron por separado el cobro de impuestos a ganaderos, pimpineros, contratistas del Estado, empresas de transporte, supermercados y bares y discotecas en Arauca (Velasco, 2016).

Fuera de estos parámetros bien definidos, las tensiones entre los grupos aumentaron considerablemente debido al incremento de la extorsión de las FARC a multinacionales, que produjo un raudal de ingresos que le ayudaron al grupo a recuperar sus pérdidas financieras en las que había incurrido como consecuencia de la campaña de fumigación del Ejército que comenzó en 2002 (*Revista Semana*, 2002). Sin embargo, la presión ejercida tanto por el BVA como por la administración Uribe contra las insurgencias regionales, obligó a "Pablito" y a Grannobles a una alianza temporal producto de la necesidad para proteger el piedemonte. Cuando la colaboración estratégica dejó de ser necesidad debido al repliegue definitivo del BVA a la sabana en 2004 y las subsiguientes desmovilizaciones a finales de 2005, las tensiones entre guerrillas volvieron a ocupar el primer plano (Entrevista 13, 2016).

Aunque previamente el ELN en Arauca respaldó los esfuerzos del Ejército colombiano para la erradicación manual de coca en el piedemonte, el frente Domingo Laín rompió abruptamente este duradero mandato contra el tráfico de drogas en esta coyuntura y empezó a entrometerse en el monopolio de las FARC, y esto "comenzó una guerra de poder por el negocio de la coca" (Entrevistas 8 y 22, 2016). Mientras que las FARC cobraban impuestos por el cultivo, controlaban laboratorios de procesamiento y rutas de tráfico, el ELN solo buscó controlar y cobrar impuestos por las rutas de transporte (Velasco, 2016)[7]. La inmersión del frente Domingo Laín en el negocio llevó a más conflictos menores con estructuras de las FARC sobre recursos locales, control territorial y políticas municipales, asuntos todos sobre los cuales habían sido convenidos previamente arreglos de una manera relativamente pacífica en Arauca (Entrevista 26, 2016). Las tensiones finalmente explotaron a finales de 2005, cuando dos mandos medios de comandantes insurgentes —"El Che" del Décimo frente y "La Ñeca" del frente Domingo Laín— se encontraron en Botalón, un caserío en el norte de Tame, para resolver crecientes diferencias entre sus grupos. En la reunión acompañada de mucho licor, el comandante del ELN terminó disparándole y matando a su rival y una fuerte pelea a sangre y fuego se desató entre ambos bandos que se encontraban fuertemente armados (Entrevista 22, 2016). Como efecto de este encuentro mortal, los líderes de las FARC "[…] le dieron la orden a toda su gente en Arauca de acabar con cualquier vestigio de los elenos", iniciando el periodo más cruento del conflicto regional en el proceso (*Revista Semana*, 2006; ver capítulo "Descifrando al ELN").

El conflicto ELN-FARC escaló rápidamente más allá de los combatientes oficiales y afectó a comunidades rurales enteras donde estos grupos insurgentes habían cohabitado cercanamente durante décadas en Tame, Arauquita, Fortul y en menor extensión en Saravena. Según un líder político en Arauquita: "Primero se dieron entre ellos mismos, y luego comenzaron a darle a los campesinos, como en el 2005. Hubo veredas que quedaron solas después de que eso sucedió" (Entrevista 13, 2016). Antes, tanto el ELN como las FARC habían respetado a los civiles que estaban clasificados como respaldos del grupo opositor, incluso si eran de hecho neutrales (Entrevista 43, 2016). Sin embargo, este nivel de tolerancia cambió drásticamente durante el conflicto entre guerrillas como lo recuerda un líder político de Tame:

7 Al comenzar en 2007, el ELN volvió impartir directrices en materia de erradicación manual de los cultivos de coca en las zonas rurales del piedemonte, debido a que las fumigaciones de glifosato afectaron a los cultivos de pancoger de ciertas propiedades campesinas, lo cual crispó las tensiones con las FARC en Arauca.

> En un principio, en las zonas rurales le decían a la gente que podían ser simpatizantes de cualquiera de los grupos o que también podían optar por ser neutros. Pero cuando empezaron los conflictos entre los elenos y farianos, obligaban a las personas a "simpatizar" con uno y otro grupo sin darles la oportunidad de ser neutros, lo cual les causaba una muerte segura por parte del grupo por el que no "simpatizaban". (Entrevista 51, 2016)

El conflicto entre guerrillas tenía dos componentes estratégicos: el objetivo de eliminar las bases sociales del grupo rival y el combate militar directo. El último se alcanzó mediante la identificación de aquellos clasificados como respaldos del ELN o de las FARC, seguida por la sistemática limpieza de comunidades rurales mediante el asesinato selectivo y el desplazamiento forzado. Los líderes comunitarios y activistas cívicos fueron especialmente señalados por la violencia, como "los guerrilleros del Décimo Frente comenzaron a asesinar, a matar, bases del ELN, los del ELN también bases de las FARC y acabaron todo lo material y de cooperativas, asociaciones, todo lo desmantelaron, tanto de parte y parte" (Entrevista 61, 2020). A lo largo del piedemonte, miles de personas fueron forzados a abandonar sus fincas y a huir a la relativa seguridad de las capitales municipales más cercanas (Entrevista 16, 2016). Un líder campesino de un poblado rural en Arauquita recuerda el efecto de este conflicto en su comunidad:

> En este momento el pueblo queda entre la espada y la pared, ya que no podían tomar una posición neutra. Llegaban a las casas y les preguntaban qué a qué grupo iban a apoyar y si no apoyaban a ninguno, se tenían que ir. A la vereda la dividieron como si fuera el muro de Berlín, no se podía pasar de un lado a otro porque la guerrilla no quería que se filtrara información. Comenzaron a matar a mucha gente inocente y el sufrimiento y el miedo aumentaron, comenzaron a enterrar a sus amigos y familiares. El tejido social se deshizo, puesto que la gente comenzó a apartarse y a desconfiar de todo el mundo. (Entrevista 41, 2016)

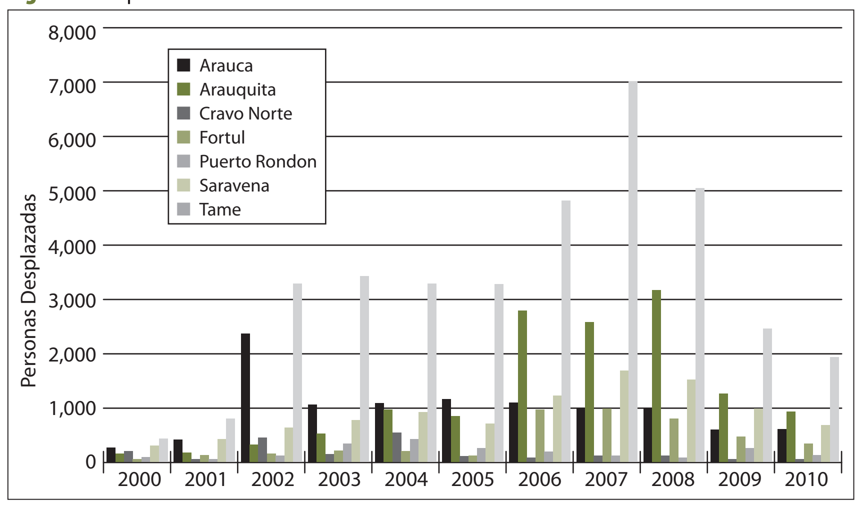
Tanto las estructuras de las FARC como del ELN en Arauca fueron respaldadas por la afluencia de fuerza de trabajo de los frentes insurgentes localizados en los vecindarios de Casanare y Boyacá, aunque las FARC destinaron considerables recursos a derrotar al ELN en el piedemonte. Grannobles fue encargado de comandar un "minibloque" de las FARC, el Bloque Oriental, compuesto por 4 frentes de insurgencia completos (10, 45, 28, 56) y 3 columnas móviles (*El Espectador*, 2012). Sin embargo, esta fuerza militar superior fracasó en su esfuerzo por compensar a las alianzas estratégicas y de movilización del ELN. Según un excomandante de las FARC en la zona:

> Cuando nosotros nos preparamos para combatir al ELN en el departamento de Arauca, el ELN se pasó para Venezuela y dejaron los pistoleros, simplemente, a este lado. Nos mataron las bases nuestras y nosotros no encontramos peleas con nadies (sic). Eso fue una estrategia del ELN y eso

> fue la realidad, se pasaron para Venezuela. Cuando nosotros comenzamos a desgastarnos, como frentes, persecuciones a nosotros, el Ejército se nos vino con toda, nos agarramos. Inclusive Uribe Vélez salió una vez, en un discurso dijo: "hacía un llamado al ELN para que no llegara a acuerdos con nosotros", mató a toda una cantidad. Cuando ya estábamos debilitados totalmente, ¿por qué? Porque se vino la racha de deserciones de las FARC, era muy difícil estarse enfrentando con una guerrilla hermana, donde sus familiares estaban metidos. (Entrevista 61, 2020)

La breve alianza entre el ELN y el Ejército colombiano en Arauca existió principalmente entre un comandante tanto de la comisión Martha Elena Barón como de la Brigada 18 del Ejército Nacional de Colombia, cuando ambos compartieron información sobre sus rivales mientras coordinaban ataques de tal manera que no interfirieran el uno con el otro (*Revista Semana*, 2009a). El avance en la capacidad de recolección de inteligencia del Ejército colombiano durante el segundo mandato de Uribe contribuyó a recalibrar el equilibrio de poder local en Arauca mediante el seguimiento explícito a estructuras de las FARC, mientras que efectivamente ignoraban completamente al ELN (Entrevista 26, 2016). En un corto tiempo, entre 2008 y 2009, el Ejército de Colombia asesinó o capturó a numerosos líderes de las FARC en Arauca, incluyendo a la cabeza de la columna móvil Alfonso Castellanos, tres comandantes de rango superior del Décimo Frente, el principal reclutador de las FARC en el piedemonte, y a treinta más, acusados de ser parte del centro financiero y logístico del bloque oriental de las FARC (*El Tiempo*, 2008a; *Revista Semana*, 2009b).

Figura 3. Desplazamiento forzado en Arauca: 2000-2010



Fuente: Elaborado por el autor (Datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República).

Estos triunfos oficiales del Ejército contra las FARC en Arauca coincidieron con el aumento de presión del ELN a partir de 2008, cuando el frente Domingo Laín "[…] retoma una ofensiva y realiza diversos asesinatos, en particular a civiles, en el marco del fin definitivo de las conversaciones con el gobierno de Álvaro Uribe y ante la escalada del conflicto con las FARC" (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012, p. 144). El amplio despliegue de milicianos del ELN fue particularmente útil para el establecimiento de perímetros de seguridad para impedir los intentos de incursión de las FARC a sus territorios fuertemente ocupados (Barbosa *et al*., 2017). El año siguiente, "Pablito" escapó dramáticamente en una fuga de la prisión en la capital de Arauca antes de huir a Venezuela, donde aparentemente permanece en la actualidad (Revista Semana, 2009c). Según un periodista regional: "El ELN repuntó en la zona después de la fuga de alias "Pablito" de la cárcel municipal de Arauca" (Entrevista 4, 2016). Después de este escape, el comandante de la comisión Martha Elena Barón, que aparentemente había hecho una alianza con el Ejército colombiano, fue enjuiciado y ejecutado por el liderazgo del frente Domingo Laín (*Verdad Abierta*, 2011).

Para 2010, el ELN y las FARC habían sido golpeados por esos cinco años de conflicto brutal, y unas pocas organizaciones sociales y líderes religiosos habían solicitado exhaustivamente a los grupos que terminaran ese enfrentamiento inútil (Entrevista 28, 2016). Fue solo hasta cuando el COCE y el secretariado de las FARC les dieron la orden a los comandantes locales de negociar un pacto de no agresión que terminó realmente la guerra entre guerrillas en Arauca (*El Espectador*, 2019a). Aunque la guerrilla del ELN "[…] se ha visto mermada… por la disputa directa que ha sostenido con las FARC", el grupo insurgente salió victorioso del conflicto y en una posición mucho más fuerte que su rival insurgente (ACNUR, 2007). Como parte del acuerdo entre los dos grupos, el ELN permaneció con el control del piedemonte y las FARC mantuvieron el control de la sabana y una franja del territorio en Arauquita a lo largo del río Ele (Entrevista 61, 2020). Según los términos del pacto, el ELN obtuvo una hegemonía casi total sobre la frontera binacional y todo el contrabando entre Alto Apure y Arauca, mientras que los dos grupos acordaron que se iban a adherir estrictamente a las nuevas demarcaciones territoriales y no permitir la entrada de combatientes a sus zonas de influencia (*Verdad Abierta*, 2011; ver capítulo "Descifrando al ELN").

Aunque el ELN en Arauca era considerablemente más débil en términos militares frente al poderoso minibloque de las FARC, los grupos insurgentes poseían una fluidez organizacional mayor que les daba una ventaja sustancial sobre su oponente, ya que sus constelaciones de comisiones y milicianos estaban altamente incrustadas en las comunidades locales a lo largo del piedemonte (*El Espectador*, 2019a). La mayoría de los miembros del ELN

—si no todos— eran del piedemonte, lo que proporcionaba a los grupos "el gran conocimiento del territorio y el factor familiar que no poseían las FARC" (Entrevista 27, 2016), mientras que el frente Domingo Laín "se apoderó del movimiento comunal mientras las FARC fueron descuidando paulatinamente la parte social y política" (Entrevista 14, 2016).

La victoria del ELN en la guerra entre guerrillas en Arauca cobró a un alto precio. No se conocen cifras exactas, pero cálculos conservadores estiman que el total de muertes producto del conflicto están por encima de mil, mientras que decenas de miles más fueron desplazados a la fuerza de sus hogares en comunidades rurales a lo largo del piedemonte (*Verdad Abierta*, 2011). Aunque el ELN y las FARC establecieron una comisión social para devolver las propiedades confiscadas a los civiles que habían sido victimizados durante el conflicto, las relaciones entre los grupos insurgentes y los civiles se dañaron considerablemente (Entrevista 61, 2020). Según un líder comunitario del norte de Tame: "Las relaciones terminaron por quebrantarse en cierta medida cuando se dio la guerra entre guerrillas" (Entrevista 54, 2016). Otro activista cívico de Arauquita rural hace eco a este sentimiento, declarando que "la población estaba totalmente cansada y los grupos perdieron legitimidad y respeto" (Entrevista 41, 2016). Las mismas redes sociales campesinas y su infraestructura organizacional que le habían permitido al ELN incrustarse en el piedemonte y establecer gobernanza anidada rápidamente se volvieron objetivos militares tanto para el ELN como para las FARC durante el conflicto desencadenando un aumento en las instancias de reclutamiento forzado, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado (Entrevistas 19 y 59, 2016).

La belicosidad reciente del ELN

Mientras que la primera década de los años 2000 representó el declive y la supervivencia para el ELN en Arauca, la última década se ha caracterizado por el resurgimiento de este grupo insurgente no solo como el más poderoso actor armado en el nororiente de Colombia, sino también en buena parte de Venezuela (ver capítulo "Descifrando al ELN"). Cálculos recientes sugieren que, al Frente de Guerra Oriental corresponde el 60 % de la membresía total del ELN, y que de estos una sorprendente mayoría está concentrada en Apure (*El Tiempo*, 2016; InSight Crime, 2018a). En 2015, "Pablito" fue ascendido al COCE a pesar de sus tensiones con otros miembros de largo tiempo —específicamente "Antonio García", a quien acusa de su captura en 2008—, lo que representa un reconocimiento tardío por parte del ejecutivo del ELN para reflejar el real equilibrio de poder al interior de la organización insurgente (Entrevista 64, 2020).

Durante este periodo, el Frente Oriental de Guerra, FGO, ha aumentado sus ataques contra sus adversarios en Arauca y más allá, mientras que el poder de "Pablito" al interior del COCE parece haber crecido considerablemente, como se evidencia mediante su influencia sobre la expansión reciente de los frentes de guerra nororiental, noroccidental y suroccidental en los espacios dejados por las FARC en Norte de Santander, Nariño, Cauca y Chocó (*El Tiempo*, 2016a; FIP, 2020).

La guerra entre guerrillas produjo un incremento en las violaciones de derechos humanos y otras infracciones al derecho internacional humanitario por parte del ELN y las FARC, pero estos grupos redujeron sustancialmente sus confrontaciones armadas con el Ejército colombiano en Arauca durante esta coyuntura (Entrevista 1, 2016). El alto grado de mejoramiento en la capacidad militar del Ejército colombiano obligó al frente Domingo Laín a llevar a cabo un reajuste estratégico durante el comienzo del mandato de Santos, un cambio que coincidió con las negociaciones de paz con las FARC y la expansión del FGO en la vecina Venezuela (Barbosa *et al*., 2017).

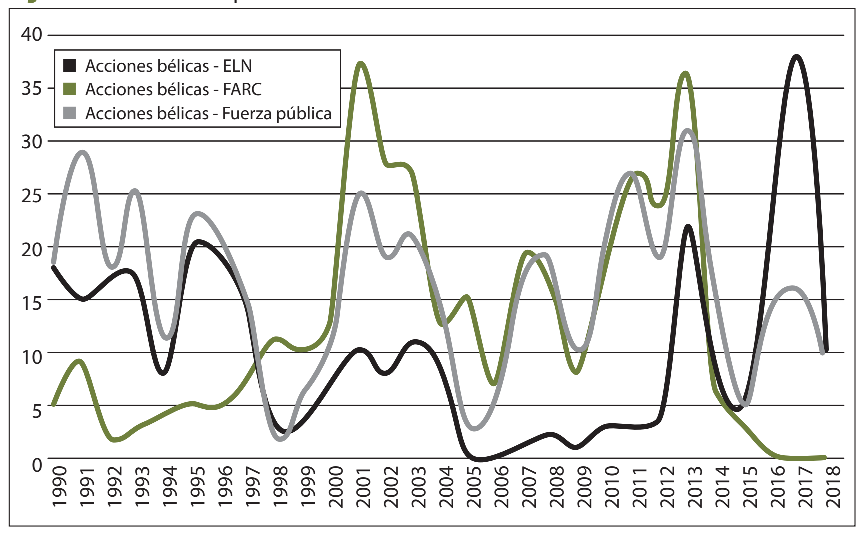
La disminuida belicosidad del ELN en Arauca reflejó una tendencia nacional, aunque terminó abruptamente en 2015 cuando el grupo insurgente aumentó drásticamente sus ataques militares contra el Estado colombiano en el departamento. Inmediatamente después del *détente* del ELN-FARC en 2010, y la subsiguiente ejecución de "Grannobles" por el secretariado de las FARC, el frente Domingo Laín y el Décimo frente coordinaron numerosas operaciones conjuntas contra el Estado colombiano a mediados de 2013, dejando docenas de bajas en soldados muertos y heridos en el piedemonte y el corredor ABC (*Prensa Libre Casanare*, 2013).

Entre 2014 y 2019, el nivel de belicosidad del ELN en Arauca estuvo fuertemente influenciado por las conversaciones exploratorias de paz y las eventuales negociaciones entre el COCE y las administraciones de Santos y Duque (ver capítulo "Descifrando al ELN"). Por ejemplo, durante un cese de fuego de 4 meses entre septiembre del 2017 y enero del 2018, el ELN prácticamente cesó todos sus ataques en Arauca y más allá, sin embargo, una vez terminó el acuerdo "[…] el ELN inició una arremetida violenta, atacando a objetivos militares y a la población civil en varios municipios, entre ellos la capital departamental" (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18, p. 4). Entre el fin del cese de fuego y mayo del 2019, las estructuras del ELN en Arauca desencadenaron ochenta y cuatro ataques contra el Ejército colombiano (Perdomo, 2019). Teniendo en cuenta que "Pablito" ha sido el miembro del COCE más crítico con respecto al diálogo con el Gobierno colombiano, no sorprende que muchos de los ataques más grandes durante este periodo hubieran sido cometidos por el FGO, incluyendo el infame bombardeo suicida de 2019 contra la Escuela de Cadetes General

Santander en Bogotá, que mató a veintidós cadetes y puso fin, desde luego, a las negociaciones entre el ELN y el gobierno de Duque (*El Tiempo*, 2020a).

El FGO no solo ha orquestado estos ataques desde Venezuela, sino que también ha aumentado el reclutamiento de nacionales venezolanos para llevar a cabo estos ataques como el bombardeo del 2019 a una estación de policía en Barranquilla, que mató a seis oficiales de la policía y dejó heridos a otros 40 (*El Tiempo*, 2018a). Al interior de Venezuela, la unidad militar creada por el FGO para supervisar su expansión en los estados de Bolívar y Amazonas y, más allá, el Frente Rafael Blanco Flórez, se ha involucrado recientemente en ataques violentos contra grupos rivales, la Guardia Nacional Bolivariana y civiles a lo largo del sur de Venezuela (*El Espectador*, 2018; *El Nacional*, 2018).

Figura 4. Acciones bélicas por actor en Arauca: 1990-2018



Fuente: Elaborado por autor (Datos del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, Cinep/PPP).

Mientras que uno de los éxitos inmediatos de la política de Seguridad Democrática en Arauca fue la disminución sustancial de ataques insurgentes a la infraestructura petrolera, esto ocurrió con mayor frecuencia durante el periodo de Santos, principalmente en Arauquita y Saravena (FIP, 2014). Este repunte en ataques coincidió con la extensión del oleoducto del Bicentenario de los campos petroleros en el noroccidente de Casanare hasta Tame, Fortul y Saravena, territorio controlado por estructuras del ELN en Arauca (*El Tiempo*, 2014; SJR, 2018). Estos ataques fueron ordenados durante los frecuentes paros armados lanzados por el FGO durante este periodo, no solo en Arauca sino en toda Colombia (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18).

En forma similar al uso del secuestro en los años ochenta y noventa, el ELN en Arauca continuó el secuestro de comerciantes y hacendados ganaderos que no cumplieron con el pago extorsivo al grupo insurgente, sin embargo, "[…] la mayoría de víctimas de secuestros han sido funcionarios de empresas extractivas o energéticas que operan en la zona… con el propósito de obtener rentas y afectar a la industria petrolera, que según comunicados realizados por la organización, es uno de sus principales objetivos militares" (FIP, 2014, p. 56).

A pesar de la renovada belicosidad del ELN en la década pasada, el Estado colombiano ha perseguido consistentemente al grupo insurgente en Arauca y más allá, asestando varios golpes al FGO en el proceso. El aumento de la eficiencia de las operaciones del Ejército colombiano contra los grupos insurgentes en Arauca, se debe en gran parte a la creación de la fuerza de trabajo Quirón en 2011, una unidad militar "[…] que desde su base principal en Tame (sector de Puerto Jordán) coordina alrededor de 5.000 efectivos, están adscritas las Brigadas Móviles nos 5 y 31" (FIP, 2015, p. 32).

Durante los dos mandatos sucesivos de Santos en el poder, el Ejército colombiano en Arauca dio de baja o capturó cientos de militantes del ELN en todo el departamento y en el corredor ABC, muchos de los cuales eran jefes militares, políticos y financieros de las muchas comisiones de los frentes Domingo Laín, José David Suárez en Casanare y Adonay Ardila en Boyacá (*El Espectador*, 2013; *Prensa Libre Casanare*, 2018). Solo en el primer semestre de 2019, unos trece desertores del ELN se entregaron y desmovilizaron, mientras que otros 130 militantes fueron capturados por la fuerza de tarea Quirón en Arauca (*El Tiempo*, 2019c).

Sin embargo, el incremento del éxito del Ejército colombiano para la captura o la dada de baja de líderes den ELN en Arauca, no parece haber debilitado la determinación militar del FGO de manera significativa, ya que el grupo continúa ordenando ataques en el corredor ABC y más allá (*Revista Semana*, 2019a; *El País*, 2020). Adicionalmente, a principios de 2019 se cree que el FGO ha implementado el "Plan Pistola", una campaña cuyo objetivo directo es la Policía Nacional en todo el país, con muchos oficiales asesinados en tan solo Arauca durante este periodo (*El Espectador*, 2019b; *Revista Semana*, 2019b). Según un líder religioso en el piedemonte, "la Policía es aquí el objetivo, el problema con todo esto es que uno sabe que en cualquier momento la situación estalla de nuevo" (Entrevista 11, 2016).

Pese a la dada de baja o captura de numerosos cabecillas del ELN en el nororiente de Colombia durante las últimas dos décadas, el FGO simplemente ha respondido reemplazando esas vacantes de liderazgo con promociones internas, pues no parece haber habido escasez de reclutas en la región (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18). La fuerte influencia del grupo insurgente sobre los gremios relacionados con la educación y las

iniciativas de jóvenes en el piedemonte han sido de gran ayuda para el reclutamiento, como lo han reportado las diversas comisiones del ELN que usan estos mecanismos para identificar cuadros con los perfiles deseados de carácter, que son entonces invitados a campos de adoctrinamiento localizados en el Alto Apure para mayor entrenamiento ideológico y militar (Entrevistas 23 y 30, 2016). Una residente de un poblado en el piedemonte rural recuerda cómo su hijo fue reclutado cuando estaba apenas a punto de graduarse del colegio:

> Mi hijo mayor salió bachiller del colegio de allá. Faltando medio día para la ceremonia de graduación, dijeron que él no se iba a graduar. Me llamó un profesor del colegio y me dijo: "Para que su hijo se gradúe, lo necesitamos con nosotros un año". Y eso pasa seguido: a los buenos estudiantes se los quieren llevar. A raíz de esa situación, me fui a ver a los supervisores de educación de Tame y del departamento, ambos me dijeron que fuera yo a poner la cara por allá, que porque a ellos los jodían. (Entrevista 22, 2016)

El ELN en tiempos de guerra y de paz

Durante la tumultuosa primera década del siglo XXI, el ELN en Arauca sobrevivió a retos considerables del BVA, del Ejército colombiano y de las FARC, emergiendo posiblemente como el actor armado más poderoso en el nororiente colombiano. Aunque estos conflictos cambiaron el equilibrio territorial y militar del poder en el departamento, el frente Domingo Laín mantuvo un fuerte nivel de control de la población, al mismo tiempo que reasumió una importante influencia en la región sobre su economía, instituciones políticas y sociedad civil. En los últimos diez años, el Frente de Guerra Oriental se ha embarcado en un proyecto de expansión territorial a lo largo de la cuenca del río Orinoco, consolidando su presencia en otros departamentos fronterizos como Vichada y Guainía, además de adentrarse más al interior de Venezuela.

Aunque lo peor del conflicto armado parece relegado al pasado, el frente Domingo Laín se ha transformado en un fuerte actor transnacional que ejerce una importante influencia sobre todas las facetas de la vida en la mayoría de las sabanas orientales y las regiones del Amazonas en Colombia y Venezuela. Pese a los avances logrados por el Estado colombiano contra los grupos insurgentes en las dos últimas décadas, el FGO continúa teniendo capacidad para ejecutar operaciones militares sofisticadas y permanece en la discusión de las negociaciones de paz como el mayor contrincante dentro de la organización insurgente frente al Gobierno colombiano. El piedemonte araucano ha producido contundentemente más informes de riesgo SAT que cualquier otra región en el país durante las dos últimas décadas (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 029-19).

Reestructuración interna y expansión

Como consecuencia de la victoria del ELN en la guerra entre guerrillas, el grupo insurgente visualizó un periodo de reestructuración y expansión mucho más allá del piedemonte. Dentro de Arauca, el frente Domingo Laín tenía seis comisiones que mantenían una presencia en los siete municipios del departamento. Cuatro de esas comisiones estaban también presentes al otro lado de la frontera en el vecino estado de Apure en Venezuela, en donde otra estructura, la comisión Maisanta, fue establecida para eventualmente transportar dinero, armas y comunicaciones entre los dos países (Barbosa *et al.*, 2017). Fuera de estas siete comisiones, se creó una unidad de fuerzas especiales, la del batallón de Héroes y Mártires, compuesta por las compañías Simacota, Los Tropos, y la Martha Elena Barón (Perdomo, 2019; FIP, 2019). Estas compañías no son estructuras estáticas ni permanentes, por el contrario "[…] se conforman de alrededor de 100 hombres previamente seleccionados de las diferentes comisiones, para cumplir acciones bélicas de gran trascendencia" en todo Arauca y el corredor ABC (Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2012).

Tabla 1. Estructuras armadas del frente Domingo Laín

Estructura	Zona de Operación
Comisión Ernesto "Che" Guevara	Saravena, Apure
Comisión Omayra Montoya Henao	Fortul, Arauquita, Apure
Comisión Camilo Cienfuegos	Arauquita, Apure
Comisión Rafael Villamizar/Frontera	Municipio de Arauca, Cravo Norte, Apure
Comisión Compañero Tomás	Fortul, Tame
Comisión Martha Elena Barón	Tame, Puerto Rondón
Comisión Maisanta	Apure

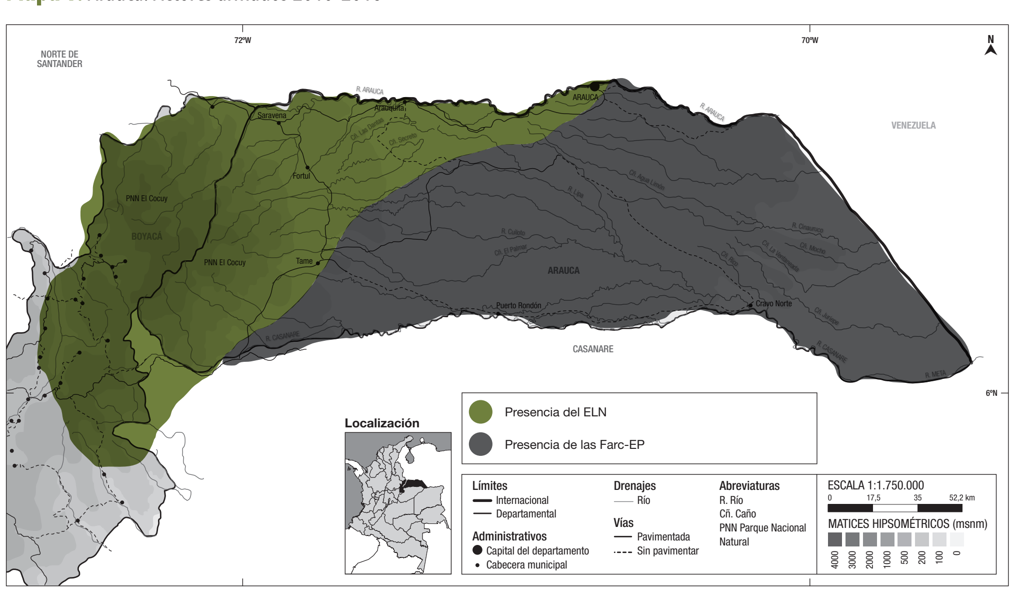
Fuente: Elaborado por el autor.

La vasta red del ELN y el despliegue de milicianos fueron factores determinantes en su victoria sobre las FARC en la guerra entre guerrillas, y como tal, se dice que estas estructuras milicianas se han extendido y se les ha dado un papel más importante durante la última década (Entrevista 5, 2016). Aunque los dos grupos tuvieron sus límites territoriales claramente demarcados después del conflicto, el ELN fue muy efectivo en la expansión clandestina de bloques de milicianos hacia sitios de las sabanas controlados por las FARC, principalmente en la capital de Arauca y sus alrededores (Entrevista 31, 2016). Aparte de la transmisión de mensajes, el suministro de inteligencia, el cobro y transporte de dinero, la ejecución de asesinatos y ataques a menor escala y la resolución de conflictos locales entre civiles,

los milicianos del ELN supervisan la gran red de testaferros que prestan servicio como frentes para todas las propiedades del ELN y los negocios en el departamento. Quizás lo más importante es que las milicias del ELN en Arauca desarrollan el concepto de *lo amplio*, el espacio "[…] donde se desarrolla el adoctrinamiento, en donde se organizan los apoyos, en donde se obtiene la adhesión de las personas a la organización guerrillera, en donde los milicianos cumplen un papel fundamental suministrando la información requerida" (Barbosa *et al.*, 2017, p. 44).

Pese al arreglo territorial acordado sobre el cese al fuego negociado entre el COCE y el secretariado de las FARC en 2010, y la más clara formalización de las normas unitarias de comportamiento y convivencia establecidas en 2013, el ELN y las FARC llevaron a cabo y coordinaron actividades conjuntas en el piedemonte y el corredor ABC (Entrevista 61, 2020). Como secuela inmediata del tratado de paz de las FARC, las estructuras del ELN en Arauca se movieron rápidamente para ocupar los espacios dejados por las FARC y asumieron el control de estas comunidades (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18; ver capítulo "Descifrando al ELN"). Sin embargo, después de la desmovilización de las estructuras de las FARC en Arauca y Casanare, en un campamento de los espacios territoriales de concentración de desmovilizados, ETCR, de la vereda Las Filipinas en Arauquita, un puñado de excomandantes de rango medio del

Mapa 1. Arauca. Actores armados 2010-2016



Fuente: Elaboración propia.

Mapa 2. Arauca. Economías territoriales 2010-2016

Fuente: Elaboración propia.

Décimo frente, respaldados por el primer frente disidente en Guaviare, abandonó el proceso para formar la disidencia conocida como el Frente Décimo Martín Villa, que está establecido principalmente en el norte de Arauquita y Apure (FIP, 2019). Eventualmente, otra estructura disidente de las FARC emergió en Apure, respaldada por los comandantes disidentes de alto rango de las FARC, Romaña y Aldinever, que se ha enfrentado violentamente con el Frente Décimo Martín Villa (*La Voz de Cinaruco*, 2019a). Temerosos de otra guerra entre guerrillas, el ELN y estas disidencias dispares coexisten temporalmente, mantienen un pacto de no agresión en Arauca y Apure y continúan reforzando sus normas conjuntas de convivencia (FIP, 2018).

La presencia del ELN en Apure se remonta a los últimos años de la década de los setenta, sin embargo, esto cambió drásticamente a partir de la elección de Hugo Chávez en 1998 y de la expansión contrainsurgente en Arauca a comienzos de los años 2000 (Entrevistas 4 y 10, 2016). Según un residente de un poblado remoto en la frontera con el municipio de Arauca: "En Venezuela mandaba el Estado. Pero ahora la guerrilla manda en Venezuela en la zona fronteriza" (Entrevista 36, 2016). Durante la administración de Uribe, el ELN consolidó su control sobre Alto Apure, principalmente el triángulo entre El Nula (Apure), Puerto Contreras (Saravena) y El Amparo (Apure), mientras las FARC mantuvieron una considerable presencia en Guasdualito y Bajo Apure (Entrevistas

12 y 48, 2016). Pese a la presencia en Apure de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), un grupo pequeño de guerrilleros venezolanos, que contó con el respaldo de Hugo Chávez, el ELN y las FARC rápidamente se convirtieron en los actores armados no estatales más dominantes en la región durante este periodo (InSight Crime, 2019b). Adicionalmente, después del escape de "Pablito" en 2009, varios comandantes de alto rango del FGO y del COCE han residido principalmente en Venezuela, ya que muchos de estos individuos tienen lazos con oficiales de alto rango del régimen en el gobierno de Venezuela y el Ejército (*El Tiempo*, 2019b). Las fuerzas armadas de Venezuela y la Policía presentes en Apure han sido altamente cómplices o coaccionadas para aceptar la presencia insurgente allá, aunque ha habido algunas instancias donde han ejercido su autoridad sobre los colombianos irregulares en su suelo (*Revista Semana*, 2019c).

Desde 2013 en adelante, el frente Domingo Laín inició la preparación de una ambiciosa expansión para establecer el control de la frontera colombo venezolana entre Catatumbo y San Fernando de Atapabo (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 048-17; International Crisis Group, 2019). Con la desmovilización de las FARC, el ELN en Arauca se extendió a lo largo de la cuenca del río Orinoco al interior del Vichada y del Guainía, además, penetró con mayor profundidad al interior de Venezuela (FIP, 2019, 2020), Antes del tratado de paz, el frente Domingo Laín permitía el paso de tropas de las FARC en Arauca a través del corredor de movilidad en los estados de Apure y Táchira hacia el Catatumbo y a cambio, las FARC le permitían al ELN atravesar a través de Puerto Páez, el pueblo de frontera de importancia geoestratégica localizado en el Orinoco entre Apure, Amazonas y Vichada (Entrevista 61, 2020). Para facilitar la expansión, el FGO fundó el Frente Rafael Blanco Flórez entre 2016 y 2017, que estableció su presencia en todos los pueblos clave de la frontera localizados sobre el río, incluyendo Puerto Ayacucho y San Fernando de Atapabo, al mismo tiempo que se extendía al interior de los ríos tributarios que alimentan el Orinoco localizados en Vichada, Guainía y Guaviare (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 048-17). Mientras continuó este crecimiento, el frente Domingo Laín envió varios comandantes de alto rango claves para liderar tanto el Frente Rafael Blanco Flórez como el Frente José Daniel Pérez Carreño, apenas acabado de crear en Cumaribo (*El Tiempo*, 2019a).

La expansión del ELN ha coincidido con el cuasi colapso económico de Venezuela, un fenómeno que ha debilitado sustancialmente la capacidad del Estado venezolano para ejercer control sobre la totalidad del territorio nacional. En muchas regiones periféricas, el repliegue de la guardia nacional bolivariana y el aumento de la depredación criminal ha generado una demanda por protección insurgente, un orden que el Frente Rafael Blanco Flórez ha suministrado rápidamente (Kurmanaev, 2020).

Durante este periodo, el gobierno de Maduro también creó el Arco Minero del Orinoco (AMO), una franja de territorio rico en oro, cobre, diamantes, coltán, hierro y bauxita abarcando 111.844 km2 a través de los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro (*Prodavinci*, 2016.; Tribunal Supremo de Justicia, 2018). De hecho, prácticamente todas las operaciones mineras en el AMO son informales y administradas por alianzas entre el FANB y grupos criminales locales conocidos como "sindicatos". En años recientes, el ELN ha ingresado violentamente a la región y ha establecido control sobre territorios clave, a la vez que ha extendido su alcance a la región fronteriza en disputa entre Venezuela y Guyana (FIP, 2019; InSight Crime, 2019a).

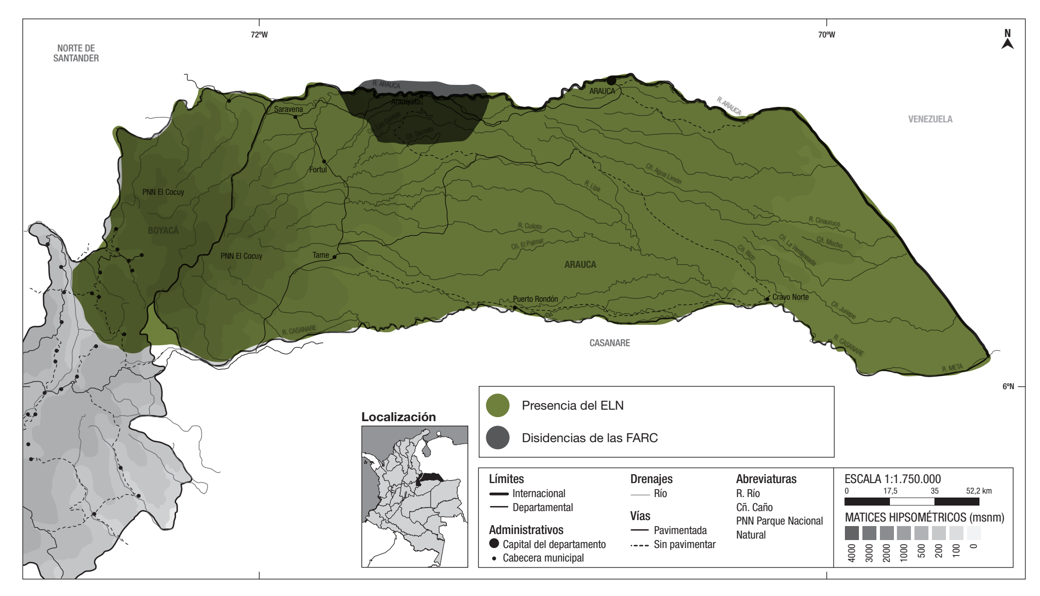
La diversificación económica del ELN

El crecimiento del ELN en Arauca estaba financiado principalmente por la capacidad del grupo insurgente para capturar regalías producidas por la industria petrolera regional desde mediados de los años ochenta en adelante. Con la implementación de la política de Seguridad Democrática en los años 2000, al FGO le fue negado el acceso directo a su flujo de mayor retorno lucrativo durante un periodo en el que los altos precios internacionales del petróleo estaban generando regalías sin precedentes para los presupuestos municipales y departamentales. El frente Domingo Laín continuó malversando fondos de contratos públicos en Arauca, pero las presiones de la estrategia de contrainsurgencia de Uribe comenzaron a hacer estragos sobre las finanzas insurgentes en el departamento, alimentando una fuerte competencia entre los dos grupos y abonando el terreno para la eventual guerra entre las FARC y el ELN.

En contraste, en la última década se ha visto el resurgimiento del frente Domingo Laín como el insurgente hegemónico en Arauca y el nororiente de Colombia, un regreso que se debe mucho a la capacidad del grupo insurgente para adaptarse al declive de la industria petrolera del departamento mediante la expansión de flujos de ingresos preexistentes tales como la extorsión, el secuestro, la malversación de fondos y el contrabando, al mismo tiempo que ha desarrollado nuevas fuentes de ingresos preexistentes como minería y tráfico de drogas.

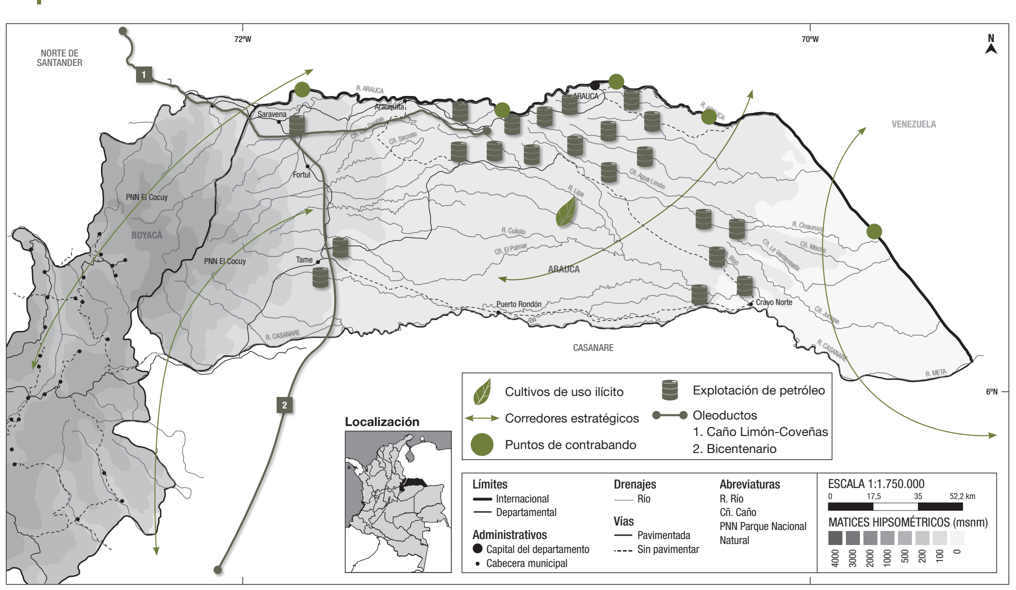
Creciendo en su estatus como un interlocutor de tiempo atrás entre la población civil y el Estado colombiano, el ELN en Arauca reaseguró el control de prácticamente toda la economía regional durante el periodo Santos y comenzó a exigir agresivamente el pago de impuestos a todas las industrias productivas en los sectores agrícolas y comerciales (Entrevista 58, 2016). Según un líder religioso en el piedemonte: "Todos rinden tributo y pagan la vacuna a la guerrilla" (Entrevista 40, 2016). Durante este periodo en Arauca "[…] los grupos armados han ejercido presión sobre distintos

Mapa 3. Arauca. Actores armados 2017-2019



Fuente: Elaboración propia.

Mapa 4. Arauca. Economías territoriales 2017-2019



Fuente: Elaboración propia.

gremios de la producción, con el propósito de obtener recursos que les permita sostener sus estructuras" (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18, p. 14). Productores locales de arroz, plátano, maíz y cacao se han visto obligados a pagar impuestos mensuales o anuales al ELN por cada hectárea cultivada, con una tasa impositiva que depende del cultivo particular que se siembra. Adicionalmente, agricultores que son de otras regiones de Colombia pagan vacunas dos o tres veces por encima del monto que pagan los campesinos de Arauca (Entrevista 23, 2016). De forma similar, el frente Domingo Laín ha exigido que los ganaderos a menor y mayor escala en el piedemonte y la sabana, paguen extorsión basados en el número de cabezas de ganado que poseen (Entrevistas 12 y 36, 2016). Esta práctica se ha convertido en algo tan ampliamente aceptado que, en algunos poblados ganaderos en la sabana, "la guerrilla hace sus vacunas en frente de los policías y ellos no hacen nada por fuera de su base" (Entrevista 34, 2016).

En forma similar, todas las actividades comerciales y los negocios en el territorio controlados por el FGO se han convertido en objetivo para exigirles pagos extorsivos, que se calculan en unos $2.000 millones de COP por mes, bajo la ilusión de estar pagando por protección en el nororiente de Colombia y Venezuela (*El Tiempo*, 2016b). También es el caso de todas las compañías de transporte que movilizan gente y otros materiales en todo Arauca; se espera que negocios fijos que operan en el territorio controlado por el grupo insurgente, hagan pagos mensuales o anuales a las estructuras locales del ELN. A diferencia de otros esquemas más fijos de extorsión establecidos para la agricultura, la producción petrolera o la contratación pública, las vacunas aplicadas al sector comercial dependen de la cantidad de ingresos generados por el negocio en cuestión. Mientras que muchos comerciantes en Arauca y Apure aceptan los montos demandados por *vikingos* oficiales del ELN sin protestar debido al miedo a represalias insurgentes, otros que han estado en la región por más tiempo, o aquellos que han tenido mayor cercanía con estas estructuras han podido negociar mejores términos para sus negocios (Entrevistas 9 y 23, 2016). Durante la década pasada, la capacidad extorsiva del FGO se extendió a lo largo de la frontera colombo-venezolana hasta Norte de Santander, Vichada y más adentro al interior de Venezuela (*El Tiempo*, 2016b).

Durante este tiempo, el ELN en Arauca ha ido reasegurando gradualmente su influencia sobre la economía petrolera regional infiltrando las instituciones políticas locales

> […] lo que le permite captar recursos de las actividades económicas de importancia local y regional, e interferir en los trabajos de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos del campo Caño Limón, y otros proyectos de exploración como el bloque Llanos 43 en las sabanas del corregimiento de Santa Bárbara. (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18, p. 4-5)

La construcción del oleoducto Bicentenario entre 2010 y 2013, solo fue permitida cuando la multinacional SICIM le pagó al FGO una considerable suma de dinero para construir una longitud de 230 kilómetros de oleoducto entre el noroccidente de Casanare y el caserío de Banadia en Saravena (FIP, 2015).

Para poder operar en Arauca, todas las multinacionales extranjeras son forzadas a pagar mensualmente "impuestos de guerra" que se calculan están entre $1.000 y $3.000 millones de pesos (*El Tiempo*, 2016b). De igual importancia es el hecho de que el frente Domingo Laín ha continuado con la captura de presupuestos públicos a través de un control sutil sobre las instituciones políticas municipales y departamentales (Entrevista 14, 2016). Previamente a la desmovilización de las FARC, ambos grupos insurgentes en Arauca mantuvieron un sistema de cuotas donde por cada contrato público emitido en el departamento, cada grupo recibía del contratista el 10 % de su valor total, muchos de los cuales estaban ya sea conectados con los políticos que asignaban el contrato o solo con los mismos frentes de grupos insurgentes (Entrevistas 10 y 48, 2016).

El ELN asegura ampliamente el cumplimiento a sus demandas extorsivas por medio del despliegue de amenazas, secuestros o asesinatos de individuos que se resisten o fallan en el pago de sus vacunas, sin importar si están contratados por la industria petrolera, el transporte, la agricultura o el sector comercial (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18). Aquellos que son secuestrados, son llevados a la fuerza al vecino Venezuela, donde deben negociar directamente con el liderazgo del ELN para su liberación (FIP, 2015). En un incidente de estos en 2016, el ELN secuestró once arroceros que habían viajado a Apure para pagar sus vacunas mensuales porque no querían o no podían pagar el incremento extorsivo que pedía el grupo insurgente (InSight Crime, 2016). Aquellos que se resisten al pago generalmente son forzados ya sea a salir de la región o son asesinados ahí mismo por el ELN (*La Voz del Cinaruco*, 2016). Dada la severidad de las sanciones del grupo insurgente por el incumplimiento, la mayoría de los civiles en el nororiente de Colombia perciben que "[…] el pago de extorsión es el mecanismo más efectivo para evitar ser objeto de amenazas, secuestros o atentados contra la vida y la integridad personal, de sus empleados o contra sus bienes" (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18, p, 14).

Con antelación al descubrimiento de petróleo, la economía de Arauca estaba más integrada al interior de Venezuela que al interior de Colombia, ya que el comercio binacional dependía de la tasa de cambio entre el peso colombiano y el bolívar venezolano (Carroll, 2011). Con la elección de Hugo Chávez en 1998, tanto el ELN como las FARC comenzaron a aumentar los impuestos al flujo masivo de contrabando entre las fronteras, incluyendo productos alimenticios esenciales subsidiados, gasolina venezolana con

altos descuentos, ganado y otros productos (Entrevista 10, 2016). Según un líder cívico en el piedemonte: "Con Chávez cambió todo. En primer lugar, dio la bienvenida a la guerrilla. Los elenos tienen influencia en la guardia venezolana y controlan el contrabando" (Entrevista 38, 2016). El contrabando se convirtió en una fuente clave de ingresos para los grupos insurgentes durante los años preponderantes de la política de Seguridad Democrática (Entrevista 48, 2016). Después de la victoria del ELN en la guerra entre guerrillas, al parecer, "Pablito" solo acordó el cese de hostilidades con la condición de que el FGO retuviera el control sobre todo el contrabando entre Puerto Contreras (Saravena) y El Amparo (Apure), una condición que se acordó hasta que el ELN y las FARC decidieron dividirse equitativamente el contrabando entre ellos en 2012 (Entrevista 61, 2020).

Pero, la reciente crisis económica de Venezuela y los cierres esporádicos de la frontera han llevado a un declive progresivo en el contrabando de gasolina; sin embargo, esto ha contrastado con el surgimiento lucrativo de un transporte ilícito de carne y productos lácteos a Colombia, debido a la falta de demanda doméstica y el reverso en el flujo de alimentos básicos esenciales en Venezuela (Entrevista 34, 2016). Esta dinámica le ha permitido tanto al ELN como a las estructuras disidentes de las FARC imponer impuestos a cada producto que cruce la frontera, no solo en Arauca, sino también en los cruces ilegales en Norte de Santander, Boyacá y Vichada (FIP, 2018; InSight Crime, 2020). Fuera de los impuestos que el ELN cobra por cada producto que cruza el río Arauca, el grupo insurgente también cobra vacunas a las numerosas embarcaciones informales que transportan gente y provisiones a través de la frontera (*Revista Semana*, 2019c). Pese al edicto contra el tráfico de drogas que el ELN ha mantenido por mucho tiempo, la organización insurgente ha incrementado su inmersión en esta economía ilegal en las dos primeras décadas del siglo XXI. La campaña de fumigación durante el periodo de Uribe redujo sustancialmente la cantidad de cultivos de coca que crecían en Arauca; sin embargo, el departamento mantuvo su enorme valor geoestratégico como ruta de exportación a numerosas pistas clandestinas en Apure, territorio controlado principalmente por el FGO (*El Tiempo*, 2016b). Mientras que la mayoría de las exportaciones ilegales de drogas desde Colombia salen por la costa pacífica en lugar de la costa del Caribe o a través de Venezuela, la importante "ruta de occidente" administrada por el Ejército de Venezuela se extiende desde Alto Apure hasta Caracas y el oriente de Venezuela, donde la cocaína es embarcada por último con destino a los mercados africanos y europeos (Entrevista 63, 2019). Dentro de Colombia, al parecer, "Pablito" ha enviado miembros importantes del frente Domingo Laín al corredor estratégico en el noroccidente de Colombia entre Medellín y Quibdó, donde "[…] de manera silenciosa están obteniendo dividendos por cuenta del

narcotráfico" (*El Tiempo*, 2016a). De forma similar, la expansión del ELN a lo largo de la cuenca del Orinoco ha llevado al grupo insurgente a asumir un papel más importante en la regulación de las exportaciones de drogas que salen desde la Amazonia colombiana, además del contrabando y la minería en la región (FIP, 2019).

La expansión del FGO en Venezuela ha sido motivada principalmente por oportunidades económicas, pero también hay un compromiso claro de la organización insurgente por apuntalar el gobierno de Maduro en regiones de frontera vulnerables geoestratégicamente. Según un exteniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB):

> El ELN trabaja más que todo en nuestro suelo fronterizo. El Gobierno le ha dado cierta prioridad dentro del territorio nacional y hemos recibido órdenes de no atacarlos. No podemos tener contacto con fuego de ellos, ni meterlos presos, tenemos que dejarlos en paz, es un convenio entre el Ejército y el ELN. El Gobierno venezolano le asignó la custodia de las minas de Tumeremo, Amazonas, Puerto Ayacucho, y en el Arco Minero del Orinoco desde Bolívar hasta Amazonas. Esas minas producen oro y diamantes y ellos están encargados de la minería ilegal, ese es el sustento de ellos. (Entrevista 63, 2019)

La creación y expansión del frente Rafael Blanco Flórez en los estados de Bolívar y Amazonas han coincidido con la incursión del FGO en el AMO donde el grupo insurgente cobra impuestos a las operaciones mineras, al transporte de personas y bienes y a otras empresas comerciales operando en zonas bajo su control (International Crisis Group, 2019; FIP, 2019). El alcance del FGO se extiende hasta la zona de frontera de Esequibo en Guayana occidental, ya que el ELN ha sacado ventaja de la ambigüedad legal de esa disputa territorial, para establecer una serie de retenes ribereños donde los insurgentes cobran impuestos por todo el contrabando y otras provisiones (InSight Crime, 2019a). Algunos cálculos sugieren que la minería ilegal de Venezuela y Colombia hoy día constituyen el 60 % del total de las finanzas del ELN (Center for Strategic and International Studies, 2020; ver capítulo "Descifrando al ELN").

Desde los años ochenta en adelante, el ELN ha financiado varias iniciativas empresariales y en muchos casos compró algunos negocios de inmediato a lo largo de Arauca. Un activista de derechos humanos describe la manera como el grupo insurgente se ha involucrado en la economía legal: "El ELN está muy incrustado en la sociedad. Es muy difícil detectar qué civil hace parte o no del ELN. Ellos tienen hoteles y casas y todos esos bienes" (Entrevista 30, 2016). Utilizando empresas fachada y simpatizantes individuales a su causa, el frente Domingo Laín controla un vasto imperio de negocios legítimos, ya que los miembros del grupo insurgente "toman dineros del petróleo, las drogas, vacunas, extorsiones e invierten su dinero

en el sistema capitalista, compran almacenes, droguerías y otros bienes" (Entrevista 50, 2016). Adicionalmente, se ha reportado que el FGO es dueño de compañías del sector de la construcción, finca raíz y seguridad privada en los estados venezolanos de Apure, Táchira y Barinas, ya que los comandantes insurgentes mueven dinero a través de intermediarios que usan casas de cambio tanto en Colombia como en Venezuela y docenas de cuentas bancarias pertenecientes a terceros en ambos países (*El Tiempo*, 2016b).

Entre el uribismo y el elenopolítica

Con el ascenso de Álvaro Uribe Vélez y el reto de la contraguerrilla contra la hegemonía insurgente en Arauca, el sistema de clientelismo armado del ELN fue parcialmente desmantelado bajo la política de la Seguridad Democrática. El Ejército de Colombia asumió rápidamente el control de las instituciones políticas municipales y departamentales, según un exsindicalista de la industria petrolera: "Entre el 2002 y el 2004 en Arauca gobernaban más las Fuerzas Militares que las alcaldías" (Entrevista 8, 2016). En las elecciones presidenciales de 2006, Uribe ganó su reelección con el respaldo de cinco de los siete municipios de Arauca (Municipios de Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón, Tame, Saravena), un cambio electoral que se reflejó en el éxito de nuevos partidos de respaldo a su gobierno en el departamento (Gómez, 2016). De 2002 hasta casi el 2008. "[…] estaba claro que el total de la fuerza electoral de la izquierda en Arauca había continuado perdiéndose" (Carroll, 2011, p. 266), un fenómeno que se hizo evidente en el marcado declive del Partido Liberal y prácticamente la desaparición de la Unión Patriótica en el departamento (Gutiérrez, 2010). En lugar de abandonar la esfera política, el ELN en Arauca cambió su estrategia y, no obstante, continuó infiltrándose a nivel político municipal y departamental a través de nuevos partidos políticos.

Tras la terminación del tiempo en el poder de Uribe y la posterior captura y encarcelación del exgobernador Julio Acosta Bernal, el ELN ha recuperado una considerable influencia en la política en Arauca, aunque el grupo insurgente también ha sufrido reveses electorales con la persistente popularidad de Uribe entre ciertos sectores de población en el departamento. Después del final de la guerra entre guerrillas, el ELN y las FARC comenzaron a infiltrar de nuevo la política en Arauca, compitiendo por el control de las alcaldías, aunque de forma más sutil y pacífica que antes. Un líder religioso en el piedemonte describe la influencia insurgente en políticas regionales entre 2010 y 2015:

> Estos grupos manejaban todo, especialmente la parte política. Los dos grupos se comenzaron a repartir la gente y los territorios. Los líderes políticos eran de esos grupos y conformaban una rosca. Si alguien más quería

> participar no podía meterse en las elecciones. Cuando los elenos ganan, les dan cierta participación a las FARC y viceversa. La misma gente de aquí no deja que entren nuevos candidatos, ya tienen conexiones con las guerrillas y sus estructuras. (Entrevista 38, 2016)

En las elecciones municipales de 2015, el frente Domingo Laín aparentemente respaldó candidatos a las alcaldías que ganaron en el municipio de Arauca, Arauquita y Tame, todos provenientes de diferentes partidos políticos, demostrando que la nueva flexibilidad partidaria adoptada por el ELN logró que sus candidatos favoritos fueran elegidos (Entrevistas 12 y 50, 2016). Según un funcionario público local: "Los políticos araucanos son aliados del poder de las armas para conservar el poder político. Muchos se arrimaron al árbol que mejor sombra daba en momentos específicos. En Arauca hay mucho oportunismo político" (Entrevista 24, 2016). Al igual que con el acuerdo anterior, el ELN respaldó ciertos candidatos y en contraprestación recibió el control de ciertos ministerios y acceso preferencial a contratos lucrativos en los sectores de transporte y salud pública (Entrevista 9, 2016).

Sin embargo, la tolerancia electoral del ELN no se extendió a candidatos uribistas pertenecientes al partido Centro Democrático, ya que esto generó un dilema para el grupo insurgente en 2015 cuando Yezid Lozano fue elegido como alcalde de su fortaleza histórica en Saravena. Mientras algunos creen que el ELN sostuvo una alianza secreta con el activista social anterior en el piedemonte que salió elegido como alcalde por el Centro Democrático, otros sostienen que el respaldo electoral por el Uribismo en Saravena es una protesta simbólica contra el persistente dominio del frente Domingo Laín en el municipio (Entrevistas 14 y 58, 2016). Según un empresario local en Fortul: "Ahora en Saravena la gente vota por los candidatos más lejanos del ELN. Ya no les importa si es bueno o no, sino que esté alejado de la guerrilla" (Entrevista 55, 2016). Los patrones de votación municipal en el referendo de paz de 2016 corresponden con el reciente rechazo electoral a los grupos insurgentes en Arauca. La mayoría de los votantes, especialmente aquellos en zonas rurales, se abstuvieron de votar arrojando un débil resultado donde se vio el rechazo de cuatro municipios al tratado de paz (Saravena, municipio de Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón), mientras que los otros tres respaldaron abrumadoramente el acuerdo (Arauquita, Fortul, Tame) (*El Espectador*, 2016).

Este relativamente fuerte respaldo para el uribismo en Arauca, no se ha trasladado en victorias electorales concretas para el Centro Democrático en el departamento. En la década pasada, el ELN ha hecho muy difícil que los candidatos del partido puedan presentarse físicamente y aún menos hacer campaña o gobernar, en ninguna parte del departamento (Entrevista 59, 2016). Los funcionarios públicos elegidos por el movimiento político

de Uribe, pasados y presentes, han experimentado ataques violentos por parte de las estructuras del ELN, destacándose el caso del exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán Tafur, que sobrevivió a cinco atentados para asesinarlo entre 1998 y 2017, y el exalcalde de Saravena, Yesid Lozano que fue el objetivo de un atentado con bombas en 2019 en Saravena rural (*El Tiempo*, 2018b, 2019d). Mientras que el ELN ha emitido amenazas contra candidatos provenientes de otros partidos, ha mantenido una prohibición estricta contra las campañas públicas de todos los candidatos del Centro Democrático en Arauca (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18). El grupo insurgente ha evitado que los candidatos uribistas se desplacen por tierra a cualquier parte dentro del departamento, especialmente a zonas rurales, y en algunos casos incluso ha impedido que estos se presenten físicamente en los municipios que esperan gobernar, forzándolos a hacer sus campañas solo por internet (*El Tiempo*, 2019e).

La durabilidad del orden social del ELN

La permanencia del orden social del ELN en Arauca le debe mucho a su alto nivel de inserción en las comunidades civiles en todo el departamento, una dinámica que ha dado origen a un robusto control poblacional insurgente en el nororiente de Colombia y más allá. Las relaciones del frente Domingo Laín con las poblaciones campesinas sufrieron daños por lo que fue, al parecer, una violencia innecesaria de la guerra entre guerrillas, aunque las normas sociales del grupo han seguido siendo ampliamente obedecidas y reforzadas durante la última década. En 2013, las estructuras del ELN y las FARC en el departamento establecieron las "Normas unitarias de comportamiento y convivencia", que han sido divulgadas posteriormente por las juntas de acción comunal a las comunidades en todo Arauca (Entrevista 61, 2020). Estas detalladas normas sociales incluyeron parámetros para el porte y uso de armas, el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alucinógenas, el ingreso de personas desconocidas a zonas rurales, los conflictos interpersonales, la violación sexual, el hurto y abigeato, la gestión de recursos públicos, las invasiones de predios y la regulación ambiental (ELN y FARC-EP, 2013).

Es de particular importancia el hecho de que el ELN en Arauca cuente con varias normas que regulan fuertemente la entrada y salida de personas en el departamento. Por ejemplo, aquellos individuos de otros lugares de Colombia o Venezuela que desean moverse a la región para trabajar en el sector agrícola, primero tienen que recibir una autorización por escrito del ELN en un formato oficial (Entrevistas 48 y 30, 2016). Adicionalmente, los presidentes locales de las JAC deben autorizar las visitas de no residentes a las comunidades rurales con anterioridad y también tienen la tarea

de solicitar al comandante local del ELN permiso para organizar un evento o una fiesta cuando las comunidades desean hacerlo (Entrevistas 40 y 38, 2016). Para aquellos que simplemente transitan por las comunidades rurales en motocicletas, el uso de casco está prohibido para que los miembros de las milicias insurgentes puedan identificar a aquellos que pasan a través de sus comunidades (Entrevista 23, 2016). Según un funcionario público de Saravena: "No se permite mucho la entrada de personas de otras regiones, con el fin de crear más seguridad" (Entrevista 32, 2016).

Para transgresiones serias al código social, tales como asalto sexual, involucrarse románticamente con un soldado o policía, o ser un informante, la sanción insurgente es la pena de muerte salvo muy pocas excepciones (Entrevistas 45 y 51, 2016). En el evento de otras ofensas menores, los comandantes del ELN frecuentemente dictan el castigo, que va desde un trabajo obligatorio a exilio forzado de la región (Entrevista 44, 2016). Cada mes, el ELN publica una lista con los nombres de personas consideradas indeseables en el departamento —incluyendo adictos a drogas, proveedores de drogas y homosexuales— y estos individuos tienen entre uno y tres días para salir de Arauca o corren el riesgo de perder la vida a manos de milicianos insurgentes (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 081-18; British Broadcasting Corporation, 2017). La alta tasa de homicidios prevaleciente en Arauca puede ser ampliamente atribuida al ELN en sus "limpiezas sociales" en el departamento, ya que en algunos casos las víctimas son dejadas con avisos pegados a sus cuerpos indicando la razón por la que fueron asesinados (Entrevista 28, 2016).

Los que se han visto involucrados en procesos judiciales también han sido señalados como objetivo militar como se evidencia con el asesinato público a manos del ELN de una jueza residente en Saravena, Gloria Constanza Gaona, porque se encontraba en el proceso de preparar casos contra varios miembros de rango medio del ELN (Entrevista 4, 2016). Siguiendo la práctica insurgente de ejecutar desertores, sostenida durante mucho tiempo, el frente Domingo Laín continúa persiguiendo agresivamente y castigando a antiguos miembros y a sus familias que se desmovilizaron sin el permiso del grupo (*El Tiempo*, 2008b; FIP, 2014). Antes de la desmovilización de las FARC en 2016, estructuras insurgentes de ambos grupos en Arauca detenían y devolvían desertores del grupo insurgente opositor para que pudieran ser juzgados por su respectiva organización (Entrevista 40, 2016).

El ELN en Arauca continúa infiltrando y regulando a la sociedad civil regional, aunque no con el mismo nivel de intensidad que antes. En años recientes, varias organizaciones sociales han podido obtener del ELN un grado limitado de autonomía (Entrevista 28, 2016). En un revelador incidente, se calcula que sesenta mil manifestantes se movilizaron a través de todos los siete municipios de Arauca en 2012 para rechazar públicamente

el surgimiento de ataques violentos perpetrados por las FARC y el ELN. Mientras que este tipo de protestas son indicadores de un creciente agotamiento público de su autoridad, debido a los excesos insurgentes en el departamento, el frente Domingo Laín continúa manteniendo una fuerte influencia sobre las JAC locales, las cooperativas y otras asociaciones en todo Arauca (Entrevistas 58 23 y 41, 2016).

Al igual que otras zonas de conflicto en disputa en Colombia, Arauca ha experimentado una ola de violencia cometida contra líderes cívicos como consecuencia del acuerdo de paz de las FARC. Desde 2017 en adelante, el FGO ha aumentado el número de amenazas contra diferentes líderes incluyendo representantes de las JAC, organizaciones de derechos de víctimas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, servidores públicos y periodistas que no se someten a sus normas y autoridad, en muchos casos forzándolos a salir del departamento (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 006-18, IR n°. 0013-18; FIP, 2019). Sin embargo, con la emergencia de las dos disidencias de las FARC, la represión en curso del Ejército colombiano contra líderes cívicos y las recientes amenazas de muerte emitidas por los neoparamilitares, —las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— hacen del ejercicio de liderazgos visibles de este rol, un papel de alto riesgo (*La Voz del Cinaruco*, 2019b).

La expansión del FGO por fuera de Arauca hacia la cuenca del río Orinoco en Colombia y Venezuela ha seguido un patrón similar de consolidación territorial seguida por una repentina imposición del código social insurgente en comunidades locales. Mientras que el ELN ha regulado comunidades en Alto Apure por largo tiempo mediante la resolución de disputas locales y ha mantenido la ley y el orden eficientemente, el FGO ha extendido en años recientes su sistema de gobernanza insurgente a Vichada y Guainía, adonde el grupo insurgente ha movilizado "[…] comisiones de trabajo político y social que realizan labores de inteligencia, acercamientos y trabajo político con las comunidades" (FIP, 2020, p. 18). Durante este mismo periodo el Frente Rafael Blanco Flórez empezó a implementar del código social del FGO en comunidades rurales en los estados de Amazonas y Bolívar (International Crisis Group, 2019; ver capítulo "Descifrando al ELN"). De forma similar, las estructuras del AMO y el ELN han llevado a cabo a través de la región de frontera la tarea del gobierno de Maduro, con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de distribución de raciones de alimentos a comunidades locales, al mismo tiempo que operan diferentes estaciones de radio e intervienen en la regulación del sistema educativo (FundaREDES, 2018; InSight Crime, 2018b). Sin embargo, la incursión repentina del FGO en el sur de Venezuela también ha coincidido con una fuerte alza en las tasas de homicidio, un fenómeno que se debe mucho a la competencia de

grupos insurgentes con sindicatos rivales y sus frecuentes "limpiezas sociales" en esas zonas (International Crisis Group, 2019).

Mientras que Arauca se ha caracterizado históricamente por un fuerte carácter binacional, la actual crisis de inmigración venezolana desde 2016 en adelante ha sido testigo de la llegada de decenas de miles de nuevos inmigrantes a Arauca. Para el final de 2019, se encontraban viviendo cerca de 44.000 nacionales venezolanos en el departamento, mientras que miles de otros han transitado, atravesando Arauca, hacia otros destinos en Colombia (Migración Colombia, 2019). La repentina llegada de miles de inmigrantes, muchos de los cuales son del interior de Venezuela y desconocen por completo el código social del ELN, ha llevado predeciblemente a un pico en el número de asesinatos selectivos cometidos por el frente Domingo Laín contra nacionales venezolanos que violan sus normas (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 029-19; Human Rights Watch, 2020). Se reporta que tanto el ELN como las disidencias de las FARC han intentado reclutar menores venezolanos, principalmente mujeres mediante el envío de milicianos a escuelas locales para seducirlos para las filas de la insurgencia (*Revista Semana*, 2019d). Sin embargo, se han destacado unos pocos incidentes de violencia perpetrados por inmigrantes venezolanos contra civiles en Arauca, que han disparado el aumento de xenofobia y una mayor demanda por justicia insurgente contra los perpetradores, una función que el ELN ha estado más que dispuesto a cumplir (*El Tiempo*, 2020b).

Explicando el control poblacional insurgente en Arauca

En las últimas dos décadas, el frente Domingo Laín ha mantenido un nivel alto de control poblacional en Arauca, pese a que el grupo insurgente no ha mantenido la absoluta hegemonía sobre el territorio del departamento que alguna vez tuvo (Entrevistas 13 y 23, 2016). La actual capacidad del ELN en Arauca para impedir la colaboración civil con el Estado colombiano, se debe mucho a la regulación despiadada del grupo insurgente con su código social, que sirve como un fuerte potencial disuasivo para el incumplimiento de las normas establecidas. Este fuerte control poblacional insurgente depende de éticas situacionales particulares de Arauca rural, donde el terreno humano está compuesto por densas redes organizacionales y comunitarias; y como tal, una desobediencia al orden social insurgente representa no solo una sanción potencial para un individuo recalcitrante, sino además una ruptura potencial de su propia familia o comunidad. Es de igual importancia, recalcar el hecho de que el Ejército colombiano continúa viendo la obediencia obligatoria de la población civil al orden social insurgente como un respaldo voluntario para el ELN, una concepción errada que ha llevado a la estigmatización de

todos los civiles como simpatizantes de la guerrilla, de tal manera que impiden cualquier mejora potencial en las relaciones.

El frente Domingo Laín construyó su legitimidad durante el transcurso de los años 80 y 90 sirviendo como un eficiente interlocutor de las demandas de la población civil frente al Estado colombiano y las multinacionales petroleras en el departamento, supervisando el rápido desarrollo de la sociedad del piedemonte mientras mantenían un alto grado de seguridad y orden. Adicionalmente, cuando se vieron ante una amenaza armada sin precedentes por la incursión del BVA entre 2001 y 2005, la defensa del ELN del piedemonte contra la violencia paramilitar fue ampliamente difundida y así, se ganó el aprecio de las comunidades civiles que estaban muy conscientes de las atrocidades que el bloque contrainsurgente había cometido en la sabana. Según un individuo de un poblado rural en la frontera piedemonte-Llanos:

> Nosotros escuchábamos de todas estas matanzas. Uno de cierta manera decía gracias a Dios están los Elenos y no dejan entrar a los paracos en ese entonces debido al mismo conflicto, aunque también nos han hecho cierto daño. Pero, gracias a Dios no entraron porque hicieron tanta matanza de que usted era mamá de alguien que estaba en la guerrilla mataban, mataban a su papá, mamá o hermanos, o a todos. En ese momento la gente prefirió que estuviera la guerrilla. (Entrevista 59, 2016)

Sin embargo, mucho del prestigio y legitimidad que el ELN adquirió durante las dos décadas previas se dañó considerablemente por la guerra entre guerrillas, señalada como innecesaria, que devastó a las comunidades rurales a través del piedemonte (ver capítulo “Descifrando al ELN”). Un líder campesino de un poblado rural devastado por este conflicto describe su efecto: “Cuando se enfrentaron entre ellos, perdieron mucha credibilidad y el pueblo ya no los apoyaba de la misma manera” (Entrevista 43, 2016). Adicionalmente, el frecuente saboteo del frente Domingo Laín de infraestructura clave tal como carreteras, puentes y torres de transmisión eléctricas durante este periodo, aumentó considerablemente la tensión en las relaciones campesinos-insurgencia en Arauca (Entrevista 38, 2016). Un líder comunitario del norte de Tame describe el impacto de estos ataques sobre la reputación del ELN:

> Después las relaciones se comenzaron a fragmentar. Cuando el pueblo ya había logrado obtener electricidad, carreteras y puentes, la misma insurgencia comenzó a volar y dañar puentes y torres de luz. Todo el esfuerzo colectivo, tantos muertos que pusieron para el desarrollo se fue al piso. (Entrevista 54, 2016)

El escalamiento del conflicto armado regional vio al ELN emerger triunfante, pero después de un costo muy alto para el tejido social de Arauca. Pese a esta degradación social, el FGO ha logrado seguir

vinculando a los habitantes de la región al orden social mediante el temor (Entrevista 49, 2016). Según un líder comunitario de Saravena: "Las relaciones en general no se han creado por un sentido mutuo. Las relaciones se basan por el temor y también como una obligación porque simplemente están presentes e intimidan" (Entrevista 45, 2016). Un maestro del piedemonte describe la relación en términos similares: "Las relaciones han sido más determinadas por la presión armada que por la conciencia. Se actúa más por el instinto de supervivencia" (Entrevista 53, 2016).

Además, cabe mencionar que el frente Domingo Laín siempre ha estado insertado en el piedemonte gracias al reclutamiento de jóvenes de estas mismas comunidades rurales, hecho usual desde hace mucho tiempo por parte del grupo insurgente (Entrevista 27, 2016). Como lo destaca un defensor de derechos: "Las relaciones, sin embargo, también han sido afectivas entre la población y las insurgencias, ya que muchas personas tenían y tienen parientes y amigos involucrados en estos grupos" (Entrevista 28, 2016). Este nivel de conectividad entre las estructuras del ELN y las comunidades civiles le ha dado al grupo acceso directo a información local para mejorar el monitoreo, impedir y eliminar cualquier colaboración potencial con el Estado colombiano (Entrevista 45, 2016). Otro individuo de Arauquita rural describe el control poblacional insurgente como producto de estas restricciones comunitarias: "La gente no colabora porque la gente de cierta manera vivió la buena experiencia de las buenas acciones que el ELN hacía en favor de la gente, y delatar a las otras personas es como delatar a mi vecino o a mi compadre o comadre" (Entrevista 58, 2016). Los frecuentes excesos del ELN son, por lo tanto, perdonados u olvidados con mayor facilidad que aquellos cometidos por el Ejército colombiano, que para muchos representa una fuerza ocupacional extranjera. Un defensor de derechos de Fortul hace eco a este sentimiento: "Los combatientes de las FARC y del ELN son hijos del pueblo, y son víctimas del Estado y del petróleo. El pueblo odia al Ejército y odia a la Policía aquí. Ellos compran a los niños y abusan sexualmente de las mujeres. Y ellos, los policías y los militares, le tienen miedo al pueblo" (Entrevista 19, 2016).

El Estado colombiano ha dado modestos pasos en la expansión de su presencia institucional a lo largo de Arauca durante las últimas dos décadas, pero sin comprender muy bien la situación concreta de la población: "[n]i Uribe, ni sus ministros ni los militares lograron entender que los orígenes del ELN en Arauca han marcado profundamente su forma de relación con la población y que romper el vínculo entre civiles y guerrilleros no sería una tarea fácil" (Celis, s. f.). Frente a esa rígida adherencia al código social insurgente, el Ejército colombiano y la Policía a su turno continúan desconfiando y abusando de civiles a través del departamento, perpetuando de esta forma lo que parece ser un ciclo sin fin de sospecha y

enemistad entre los civiles más vulnerables de Arauca y el Estado colombiano (*El Tiempo*, 2012; British Broadcasting Corporation, 2017).

Estas frágiles relaciones han reforzado la prohibición del ELN de cualquier interacción de la población con el Estado colombiano en el piedemonte. Un sindicalista regional enfatiza cómo estas precarias relaciones son producto de una estrategia deliberada del ELN: "Si algo ha hecho la insurgencia con la población civil ha sido entrenarla para generar la separación entre la comunidad y la fuerza pública, calificados por ser colaboradores del enemigo" (Entrevista 29, 2016). Otro residente de Tame confirma esto: "Hay tanta influencia de la guerrilla que nadie quiere tener ninguna conexión con el Gobierno. La zona rural también está altamente controlada, si se sapea es una muerte segura" (Entrevista 49, 2016).

La efectividad del código social del ELN en Arauca ha hecho que la tarea del Estado colombiano para establecer la legitimidad y administrar un aparato institucional burocrático efectivo sea muy difícil. Un líder joven del piedemonte comenta que en Arauca: "Se cree más en el mandato del ELN que en el del Gobierno y de cualquier miembro de la fuerza pública. Como no funciona la Fiscalía, ni la Personería, ni ninguna entidad estatal, la justicia ha sido impuesta por el ELN" (Entrevista 45, 2016). La última década ha visto al ELN y al Estado colombiano competir por el control y la legitimidad en este departamento volátil en el nororiente de Colombia, una batalla en donde el ELN parece tener la ventaja. Si la reciente cuarentena nacional en respuesta a la pandemia por covid-19 es un indicador, el frente Domingo Laín ha asumido mayor responsabilidad al reforzar el confinamiento en Arauca rural (esto mismo se señala en el capítulo "Descifrando al ELN" 1).

Durante la pandemia, el ELN en Arauca ha declarado públicamente que todos los vehículos no autorizados que viajen por Arauca durante la cuarentena tendrán reportadas sus números de placa para futuras represalias. Aparentemente, le ha asignado la tarea a la guardia interétnica campesina popular, una organización de nivel nacional, que históricamente ha mantenido una presencia importante en el piedemonte, el control del tráfico en las vías locales y carreteras, y también el de la regulación del tránsito de inmigrantes venezolanos que atraviesen Arauca en su camino de regreso a su país. Según un activista local: "La guardia campesina para ninguno es un secreto que es orientada por los elenos" (Entrevista 64, 2020). Aunque la organización se dedica principalmente a reforzar la cuarentena, también ha llevado a cabo "[...] jornadas pedagógicas acerca de cómo lavar manos, limpiar la casa, consumir alimentos, qué hacer con sus seres queridos mientras se desarrolla la cuarentena, qué alimentos ayudan a subir defensas" (Colombia Informa, 2020). El Ejército colombiano fue acusado en el último mes de abril por una importante organización de derechos humanos en el piedemonte, de amenazar verbalmente

y de disparar ráfagas a miembros de la guardia campesina en el norte de Tame, reflejando la forma en que se manifiestan el poder y la gobernanza en Arauca (Contagio Radio, 2020).

Conclusión: Una paz poco probable

Durante el transcurso de la guerra civil colombiana, pocos frentes insurgentes diferentes o bloques paramilitares han alcanzado el mismo nivel de inserción social que el frente Domingo Laín en Arauca. Durante cuarenta años, el ELN en Arauca ha servido como actor estructurante del territorio al mantener una fuerte influencia sobre la economía regional, las instituciones políticas, la sociedad civil y la regulación de las personas y el territorio en Arauca (acorde a lo expuesto en el capítulo "Descifrando al ELN"). Además de jugar un papel principal en el desarrollo histórico y la administración actual del departamento, el frente Domingo Laín también ha ejercido como eje del ELN de una organización insurgente a nivel nacional, suministrando el modelo organizacional y el legado material para otras estructuras del ELN para poder sobrevivir periodos de extrema adversidad.

Como lo describe un comandante de alto rango del ELN, el frente Domingo Laín es "el sol en torno al que giran alrededor todos esos planetas", operando como la fuerza centrífuga detrás del Frente de Guerra Oriental, como una unidad regional que a su turno le ha suministrado la mayoría de la fuerza de trabajo del ELN y de los recursos a nivel nacional (Entrevista 62, 2020). Desde su retaguardia estratégica en Apure, el FGO mantiene el control sobre Arauca y transfiere combatientes y recursos a otros frentes a lo largo de Colombia y Venezuela, ejerciendo su influencia sobre todos los otros frentes de guerra regionales.

El ascenso de "Pablito" al Comando Central en 2015, ha coincidido con la inserción agresiva del ELN en espacios dejados por las FARC y más adentro en Venezuela una expansión que ha visto a las estructuras del ELN asumir violentamente el control de comunidades rurales y recursos. El repentino retiro del Estado venezolano de zonas periféricas de frontera le ha proporcionado al FGO y al COCE una retaguardia extranjera estratégica desde donde pueden dirigir operaciones en ambos países fuera del alcance del Ejército colombiano.

Al otro lado de la frontera, el Ejército colombiano continúa capturando y dando de baja a cuadros a lo largo de Arauca y del corredor ABC, aunque no ha podido establecer una legitimidad territorial e institucional a los ojos de la población civil del departamento, una falla que en buena parte se debe al alto nivel de control poblacional del FGO. Igual de problemáticas son las perspectivas de una negociación de paz que no parecen estar dadas por la clara oposición de sectores clave del uribismo

a cualquier acuerdo potencial con el ELN. Pero, también el COCE ha encontrado sus propias dificultades, principalmente por la oposición de "Pablito" al proceso y su insistencia para que Duque negocie directamente con la sociedad civil regional, una condición que casi con seguridad resulta más difícil y compleja, que embarcarse en un posible acuerdo con los comandantes del ELN en persona.

Bibliografía

ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados] (2007). *Diagnóstico Departamental Arauca. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees*. ACNUR.

Aguilera Mario (2006). ELN: entre las armas y la política. En *Nuestra guerra sin nombre*, Francisco Gutiérrez (comp.). Iepri y Editorial Norma.

Amnesty International (2004). *Colombia: Laboratory of War: Repression and Violence*. Amnesty International UK.

Barbosa, Castillo Gerardo; Magdalena Correa Henao, y Andrés Rolando Ciro Gómez. (2017). *Milicias guerrilleras: estudios empíricos y financieros.* Universidad Externado.

British Broadcasting Corporation (2017, enero 16). Le dieron 24 horas para dejar la zona": cómo se vive en la región de Colombia donde sigue la guerra. BBC *News.* https://bbc.in/3pf9Mi9

Carroll, Leah (2011). *Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984–2008*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Center for Strategic and International Studies (2020). *Illegal Mining in Venezuela: Death and Devastation in the Amazonas and Orinoco Regions*. Washington D.C.: CSIS.

CNMH [Centro Nacional de la Memoria Histórica] (2014). *Recordar para reparar: Las masacres de Matal de Flor Amarillo y Corocito en Arauca*. CNRR.

CNMH [Centro Nacional de la Memoria Histórica] (2015). *Cruzando la frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela: el caso del río Arauca*. CNRR.

Colombia Informa (2020, abril 6). La Guardia Campesina en la prevención del coronavirus. *Colombia Informa.* https://bit.ly/3682aq7

Contagio Radio (2020). Ejército Nacional de Colombia disparó contra Guardia Campesina en Arauca. *Contagio Radio*. https://bit.ly/3qOrfi2

Duque Daza, Javier (2017, marzo 6). Arauca: el saqueo de las regalías entre el ELN, los paramilitares y los políticos. *Razón Pública.* https://bit.ly/3p7xsFb

Eidt, Robert (1967). Modern Colonization as a Facet of Land Development in Colombia, South America. *Yearbook of the Association of Pacific Coast Geographers,* 29, 21-42.

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2007, enero 14). *Crónica del surgimiento del frente Domingo Laín*. https://bit.ly/3c4bVJV

ELN [Ejército de Liberación Nacional] y FARC-EP [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] (2013). *Normas Unitarias de comportamiento y convivencia del*

Frente de Guerra Oriental Comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño y del Bloque Comandante Jorge Briceño de las FARC-EP.

FIP [Fundación Ideas para la Paz] (2014). *Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario*. FIP.

FIP [Fundación Ideas para la Paz] (2015). *El* ABC *del* ELN*: Evolución del frente de guerra oriental*. FIP.

FIP [Fundación Ideas para la Paz] (2018). *Inseguridad, Violencia, y Economías Ilegales en las Fronteras: Los desafíos del nuevo Gobierno.* FIP.

FIP [Fundación Ideas para la Paz] (2019). *Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las* FARC. FIP.

FIP [Fundación Ideas para la Paz] (2020). ¿Qué hacer con el ELN? Opciones ante una derrota militar lejana y un dialogo improbable. FIP.

FundaREDES (2018). Informe Anual. FundaREDES.

Garay Salamanca, Luis Jorge; Salcedo-Albarán, Eduardo y Duarte, Natalia (2017). *Elenopolítica: Reconfiguración Cooptada del Estado en Arauca, Colombia*. Vortex.

Gutiérrez Lemus, Omar Jaime y González Arias, José Jairo (2008) Situación actual de conflicto y exploración de escenarios posibles de paz y desarrollo en Arauca. Proyecto Políticas Públicas de Paz [Primer Informe Consultoría].

Gutiérrez Lemus, Omar Jaime (2010). Arauca: espacio, conflicto e institucionalidad. *Análisis Político,* 69, 3-34.

Human Rights Watch (2020, enero 22). *The Guerrillas Are the Police*. https://bit.ly/3sNGQQy

InSight Crime (2016, agosto 17). ELN *Kidnapping on Venezuela Border Could Impact Peace Talks*. https://bit.ly/3phnnpe

InSight Crime (2018a, mayo 21). *Colombia and Venezuela: Criminal Siamese Twins*. https://bit.ly/39XfbE3

InSight Crime (2018b, noviembre 13). ELN *Now Present in Half of Venezuela*. https://bit.ly/2YaBy3n

InSight Crime (2019a, diciembre 9). *Guyana's Mining Region is Open Door to Venezuelan Organized Crime*. https://bit.ly/369kE9N

InSight Crime (2019b, julio 15). FBL/*FPLN*. https://bit.ly/368zL3f

InSight Crime (2019c, septiembre 3). *Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito'*. https://bit.ly/2Y7WCHU

International Crisis Group (2019, febrero 28). *Gold and grief in Venezuela's Violent South*,. https://bit.ly/39bEKSH

SJR [Servicio Jesuita a Refugiados] (2018). *Informe de Contexto Frontera Colombo-Venezolana 2018.*

Kline, Harvey (2009). *Showing Teeth to the Dragons: State-Building by Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2002-2006*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Larratt-Smith, Charles (2020). Navigating Formal and Informal Processes: Civic Organizations, Armed Nonstate Actors, and Nested Governance in Colombia. *Latin American Politics and Society, 62*(2), 75-98.

Leal Buitrago, Francisco (2006). La política de seguridad democrática 2002-2005. *Análisis Político,* 57, 3-30.

López, María (1989). *Camilo camina en Colombia.* Ediciones rústicas.

Medina Gallego, Carlos (1996). ELN*: Una historia contada a dos voces. Entrevista con 'el cura' Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, 'Gabino'.* Rodríguez Quito Editores.
Migración Colombia (2019). *Total de Venezolanos en Colombia corte a 31 de octubre de 2019*. https://bit.ly/367lnbu
Peñate, Andrés (1999). El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado. *Working paper,* 15.
Perdomo, Paola Andrea (2019, agosto 15). *Arauca, una comunidad bajo la sombra del* ELN. PARES [Fundación Paz y Reconciliación]. https://bit.ly/3a2croW
Pérez Bareño, Leonel (2015). *Tame, Sarmientos y burros: Ex alcaldes de Tame, Arauca, recuerdan su gestión.* Taller de Edición Rocca.
Plazas Díaz, Leidy Carolina (2017). Los inicios del frente Domingo Laín del ELN en Arauca, 1970–1978. *Procesos Históricos, 31*(16), 4-16.
Rausch, Jane (1984). *The Tropical Plains Frontier: The Llanos of Colombia, 1531–1831.* University of New Mexico Press.
Rausch, Jane (2013). *Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos Orientales.* University of Florida Press.
Rivera Cusicanqui, Silvia (1987). *The Politics and Ideology of the Colombian Peasant Movement: the Case of* ANUC. Cinep/PPP.
Rucinque, Hector (1972). *Colonization of the Sarare Region of Eastern Colombia.* University of Wisconsin Press.
Sarmiento, Libardo (2015). *Arauca 1983-2015: Fin de un ciclo histórico y transición incierta* [Informe]. Fundación Paz y Reconciliación.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2017) Informe de riesgo n°. 048-17: Meta, Guainía, Vichada. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2018). Informe de riesgo n°. 081-18: Arauca. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2018). Informe de riesgo n°. 006-18: Saravena. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2018). Informe de riesgo n°.0013-18: Arauquita. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2019). Informe de riesgo n°. 029-19: Arauquita, Fortul, Saravena, Tame. Defensoría del Pueblo.
Stoddart, D.R., and J.D. Trubshaw (1962). *Colonisation in Action in Eastern Colombia*. *Geography,* 47, 47-53.
Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz (2012). Versión Libre: Orlando Villa Zapata.
Tribunal Supremo de Justicia (2018). "Decreto n°. 2.248, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco".

Prensa

Cristancho, María Victoria (1996, febrero 10). Guerrilleros colombianos famosos atacaron el puesto venezolano de Carabobo. *El Tiempo.* https://bit.ly/39YF86f
El Espectador (2012, 3 de septiembre). 'Grannobles' fue fusilado confirma Arco Iris. *El Espectador.* https://bit.ly/366Dtut

El Espectador (2013, mayo 15). Confirman muerte de alias 'Almeida', segundo cabecilla del ELN. *EL Espectador.* https://bit.ly/2KEXBMu
El Espectador (2015, octubre 28). A 'Pablito', jefe del ELN, no lo olvidan en EE.UU. El Espectador. https://bit.ly/399rv4Y
El Espectador (2016, octubre 8). Razones del No de los araucanos. *El Espectador*. https://bit.ly/3oaTkyd
El Espectador (2018, noviembre 25). ¿Cómo opera el Eln en minería venezolana? *El Espectador.* https://bit.ly/3iCRsx4
El Espectador (2019a, septiembre 24). La guerra entre ELN y FARC marcó la violencia en Arauca. *El Espectador.* https://bit.ly/3a1lxm3
El Espectador (2019b, mayo 5). Muere policía del Gaula atacado en Tame (Arauca). *El Espectador.* https://bit.ly/2NqcAuJ
El Nacional (2018, noviembre 4). Detención a líder del ELN habría provocado enfrentamientos en Amazonas. *El Nacional*. https://bit.ly/39fMzXP
El País (2020, enero 10). Duque atribuye al ELN un atentado contra una base aérea en Colombia. *El País.* https://bit.ly/2Y9PlqU
El Tiempo (1995, mayo 13). Asesinadas dos niñas secuestradas en Arauca. *El Tiempo* https://bit.ly/3c5XAfZ
El Tiempo (1996a, noviembre 24). Mannesmann pagó US$ 2 millones. *El Tiempo* https://bit.ly/364DFds
El Tiempo (1996b, mayo 5). Radiografía del Domingo Laín. *El Tiempo.* https://bit.ly/3iJN0wn
El Tiempo (1997, abril 15). Arremetida guerrillera en Arauca, Tolima, y Antioquia. *El Tiempo.* https://bit.ly/3sPRIxo
El Tiempo (1998, agosto 12). Sarare, Tres décadas de olvido. *El Tiempo.* https://bit.ly/3pejMIn
El Tiempo (2000, noviembre 10). Nexos de Matus con El Chino. *El Tiempo.* https://bit.ly/3iDPmgi
El Tiempo (2001, septiembre 29). Parálisis en Arauca por FARC. *El Tiempo.* https://bit.ly/3pgqe1Q
El Tiempo (2004, julio 21). El conflicto al borde de la vía. *El Tiempo.*
El Tiempo (2008a, agosto 3). Infiltrados de la Policía hasta tomaron cerveza con jefes de FARC. *El Tiempo*. https://bit.ly/2Y7iXW3
El Tiempo (2008b, diciembre 27). Familia asesinada por Eln en Arauca era desplazada. *El Tiempo.* https://bit.ly/2KLd6CO
El Tiempo (2012, septiembre 25). Subteniente (r.) Muñoz, condenado a 60 años por crimen de Arauca. *El Tiempo.* https://bit.ly/3c53jCJ
El Tiempo (2014, marzo 11) Atentado de la guerrilla a oleoducto contamina el río Arauca. *El Tiempo* https://bit.ly/3qMTVYE
El Tiempo (2016a, febrero 27) Estos son los jefes del Eln que se le están atravesando a la paz. *El Tiempo.* https://bit.ly/2Nv4xgq
El Tiempo (2016b, abril 17). Captura de tres mujeres de 'Pablito' destapó secretos del guerrillero. *El Tiempo.* https://bit.ly/3iDM5xs
El Tiempo (2018a, febrero 15). Colombia, inquieta por participación de venezolanos en ataques del Eln. *El Tiempo.* https://bit.ly/2Y7yFAu

El Tiempo (2018b, noviembre 26) ¿Quién es el hombre al que el Eln quiere matar con balas de cianuro? *El Tiempo.* https://bit.ly/3c8EUMy

El Tiempo (2019a, abril 11). Ejército captura a 11 presuntos guerrilleros del Eln en Vichada. *El Tiempo.* https://bit.ly/3sTAOxG

El Tiempo (2019b, septiembre 15). La poderosa mujer señalada de ser el enlace entre el Eln y Maduro. *El Tiempo.* https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/nexos-del-eln-con-el-regimen-de-maduro-412346

El Tiempo (2019c, julio 27). Cerca de 69.000 personas están en riesgo por grupos armados en Arauca. *El Tiempo.* https://bit.ly/3obMhoX

El Tiempo (2019d, febrero 1°). Dos soldados heridos tras atentado al Alcalde de Saravena. *El Tiempo.* https://bit.ly/3c68UbZ

El Tiempo (2019e, septiembre 3). Por amenazas, candidatos en Arauca hacen campaña solo por internet,. *El Tiempo.* https://bit.ly/2NvOMWx

El Tiempo (2020a, enero 15). Las heridas profundas que dejó el atentado contra la General Santander. *El Tiempo.* https://bit.ly/3qYHbyj

El Tiempo (2020b, marzo 11). Asesinan a joven y lo sepultan bajo cemento en su propia casa. *El Tiempo.* https://bit.ly/3sQLQDZ

Gonzalez, Jorge (1991, noviembre 13) En Arauca, la justicia soy yo. *El Tiempo.* https://bit.ly/3iR483D

Kurmanaev, Anatoly (2020, enero 13). Rural Venezuela Crumbles as President Shores Up the Capital and His Power. *The New York Times*. https://nyti.ms/39XMQO3

La Voz del Cinaruco (2016, septiembre 29). Asesinado el ganadero Jorge Gómez Daza. *La voz del Cinaruco*. https://bit.ly/3ocHK5N

La Voz del Cinaruco (2019a, septiembre 9). Capturado en Arauca cabecilla de las disidencias de las Farc. *La Voz del Cinaruco.* https://bit.ly/364NEzm

La Voz del Cinaruco. (2019b, mayo 13). Autodefensas Gaitanistas declaran objetivos militares a periodistas comunitarios y organizaciones sociales en Arauca. La Voz del Cinaruco. *La Voz del Cinaruco.* https://bit.ly/3odqkpB

La Voz del Cinaruco (2019, noviembre 29). Combates entre guerrillas dejan 6 muertos en población venezolana. https://bit.ly/368WRa1

Malaver, Ivonne (1997, marzo 16). La guerrilla calienta la frontera tensión en el lado venezolano II. *El Tiempo.* https://bit.ly/3c6lWGA

Ospina, Clara Elvira (1995, abril 2). El ELN maneja en Arauca 10 mil millones de pesos. *El Tiempo.* https://bit.ly/39QFPhO

Prensa Libre Casanare (2013, julio 21). 17 militares muertos en emboscada de la guerrilla en Arauca. *Prensa Libre Casanare.* https://bit.ly/39bHRdx

Prensa Libre Casanare (2018, noviembre 10). Capturados cinco guerrilleros del ELN que delinquían en Arauca y Casanare. *Prensa Libre Casanare*. https://bit.ly/3qDViJ4

Prodavinci (2016). El Arco Minero del Orinoco: ambiente, rentismo y violencia al sur de Venezuela" agosto 23. *Prodavinci.* https://bit.ly/3pd2mMs

Revista Semana (1989, noviembre 11). La ejecución de un monseñor. *Revista Semana.* https://bit.ly/3iEt2mE

Revista Semana (1993, mayo 31). ¿Se desmoviliza el cura? *Revista Semana.* https://bit.ly/39dN9oV

Revista Semana (1994, diciembre 26). Asesinos por naturaleza. *Revista Semana* https://bit.ly/2YaSlDs
Revista Semana (2002, septiembre 23). El Nuevo Narcotráfico. *Revista Semana. https://bit.ly/2Y6xrph*
Revista Semana (2003, noviembre 24). No se movía una aguja sin permiso de la guerrilla, *Revista Semana.* https://bit.ly/3phfKPC
Revista Semana (2006, abril 15). Enemigos íntimos. *Revista Semana.* https://bit.ly/3o6yTCs
Revista Semana (2007, febrero 3). FARC contra ELN. *Revista Semana*. https://bit.ly/3qMTUE8
Revista Semana (2009a, enero 19). Cómo el Ejército se alió con el ELN en Arauca, *Revista Semana*. https://bit.ly/39cJWWx
Revista Semana (2009b, abril 13). Capturado el "hombre de las finanzas" de las Farc en Arauca. *Revista Semana.* https://bit.ly/3iGyzJJ
Revista Semana (2009c, octubre 7). Se voló importante jefe del ELN. *Revista Semana.* https://bit.ly/3qLqoOP
Revista Semana (2019a, diciembre 12). Presidente Duque condena el "ataque cobarde del Eln" en Cubará, Boyacá. *Revista Semana*. https://bit.ly/3iJ3ncO
Revista Semana (2019b, febrero 20). Con el plan pistola, el ELN combina todas las peores formas de lucha. *Revista Semana.* https://bit.ly/3c764DM
Revista Semana (2019c, noviembre 23). El llano solitario. *Revista Semana.* https://bit.ly/3c5t6eb
Revista Semana (2019d, noviembre 2). Arauca: el río que impone los límites en la frontera. *Revista Semana*. https://bit.ly/3iF0c5L
Revista Semana (2011, septiembre 28). Un singular pacto de paz Eln-Farc. *Revista Semana.* https://bit.ly/2Y8KxCs
Verdad Abierta (2010a, julio 21). 'Mellizo' Mejía aseguró que entraron a Arauca con la complicidad de miembros del Ejército. *Verdad Abierta.* https://bit.ly/3iEwu0A
Verdad Abierta (2010b, marzo 15). Desmovilizados contaron cómo llegaron los 'paras' a Arauca. *Verdad Abierta.* https://bit.ly/3oiTtQk

Entrevistas

Entrevista 1. Investigador Regional, Bogotá D.C., enero del 2016.
Entrevista 2. Empleado de la Defensoría del Pueblo, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 3. Abogada, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 4. Periodista, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 5. Guardia de prisión, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 6. Trabajadora social, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 7. Comandante de policía, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 8. Sindicalista, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 9. Periodista, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 10. Periodista, Arauca capital, enero del 2016.
Entrevista 11. Líder religioso, Arauquita, enero del 2016.

Entrevista 12. Ganadero, Arauquita, enero del 2016.
Entrevista 13. Ex-alcalde, Arauquita, enero del 2016.
Entrevista 14. Líder social, Arauquita, enero del 2016.
Entrevista 15. Ex-alcalde, Arauquita, enero del 2016.
Entrevista 16. Ex-docente, Saravena, enero del 2016.
Entrevista 17. Periodista, Saravena, enero del 2016.
Entrevista 18. Líder indígena, Saravena, enero del 2016.
Entrevista 19. Defensor de los derechos humanos, Saravena, enero del 2016.
Entrevista 20. Docente, Saravena, enero del 2016.
Entrevista 21. Defensor de los derechos humanos, Saravena, enero del 2016.
Entrevista 22. Desplazado, Fortul, enero del 2016.
Entrevista 23. Activista, Fortul, enero del 2016.
Entrevista 24. Funcionario público, Saravena, enero del 2016.
Entrevista 25. Docente, Tame, enero del 2016.
Entrevista 26. Former Army General, Bogotá D.C., diciembre 2016.
Entrevista 27. Funcionario público, Bogotá D.C., julio 2016.
Entrevista 28. Defensor de los derechos humanos, Arauca capital, Julio 2016.
Entrevista 29. Activista de paz, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 30. Defensor de los derechos humanos, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 31. Defensor de los derechos humanos, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 32. Funcionario público, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 33. Desplazada, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 34. Desplazada, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 35. Desplazado, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 36. Campesino, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 37. Campesino, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 38. Líder religioso, Arauquita, julio del 2016.
Entrevista 39. Campesino, Arauquita, julio del 2016.
Entrevista 40. Líder religioso, Arauquita, julio del 2016.
Entrevista 41. Líder social, Arauquita, julio del 2016.
Entrevista 42. Defensor de los derechos humanos, Tame, julio del 2016.
Entrevista 43. Líder social, Arauquita, julio del 2016.
Entrevista 44. Líder social, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 45. Líder social, Saravena, julio del 2016.
Entrevista 46. Comerciante, Saravena, julio del 2016.
Entrevista 47. Ex-docente, Saravena, julio del 2016.
Entrevista 48. Defensor de los derechos humanos, Arauca capital, julio del 2016.
Entrevista 49. Defensor de los derechos humanos, Tame, julio del 2016.
Entrevista 50. Historiador, Tame, julio del 2016.
Entrevista 51. Ex-alcalde, Tame, julio del 2016.
Entrevista 52. Ex-alcalde, Tame, julio del 2016.
Entrevista 53. Docente, Tame, julio del 2016.
Entrevista 54. Líder social, Saravena, julio del 2016.
Entrevista 55. Comerciante, Fortul, julio del 2016.
Entrevista 56. Investigador Regional, Bogotá D.C., diciembre del 2016.
Entrevista 57. Desplazada, Bogotá D.C., diciembre del 2016.

Entrevista 58. Campesino, Fortul, diciembre del 2016.
Entrevista 59. Desplazada, Tame, diciembre del 2016.
Entrevista 60. Desplazado, Tame, diciembre del 2016.
Entrevista 61. Ex-comandante de las FARC, Bogotá D.C., febrero del 2020.
Entrevista 62. Ex-comandante del ELN, Bogotá D.C., marzo del 2020.
Entrevista 63. Desertor military de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Cúcuta, mayo del 2019.
Entrevista 64. Activista, Saravena, febrero del 2020.

Un ELN entre lo societal y militar: dinámicas y lógicas territoriales del conflicto en el Catatumbo

Henry Ortega Palacio[1]

El presente capítulo sobre las características de la inserción del ELN en la región del Catatumbo ilustra la manera diferenciada como se ha venido adecuando este grupo a las cambiantes circunstancias de esta zona. Así, tal como se señala en el capítulo introductorio del libro, este estudio de caso permite realizar una comparación entre las diferentes modalidades de presencia del ELN en determinadas regiones del país, para hacer evidente su naturaleza multiforme y su capacidad de adaptación a las realidades que encuentra en diversos territorios de Colombia.

Para ello, esta lectura territorial pretende analizar los cambios ocurridos en la reciente coyuntura, enmarcada por una negociación fallida con el Gobierno y un aumento de la cruenta confrontación entre las insurgencias, con el objetivo de presentar el panorama actual de la expresión territorial de este grupo, su relación con la población civil y la manera particular como participa en el conflicto armado en su expresión regional. Esto, teniendo como telón de fondo el hecho de que el ELN, el EPL e incluso las entonces FARC-EP (hoy disidencias), tienen al Catatumbo como un lugar de presencia de larga data donde se han ido acomodando con el tiempo en los diversos fenómenos político-sociales y económicos —legales e ilegales—, aprovechando las características propias de una de las regiones más convulsas del país.

---

1 El presente capítulo surge de acumulados previos realizados por Camila Carvajal Oquendo; a lo que se suman algunas salidas de campo realizadas junto a Edisantiago Gutiérrez y al autor. A ella se deben especialmente los contenidos en el apartado 3 sobre antecedentes y el conflicto reciente, así como las bases de los otros dos apartados introductorios.

Luego de hacer un recuento de la configuración regional y los antecedentes de la violencia en la región, se aborda la manera como se expresa el ELN en la zona, a partir de los frentes del grupo que allí actúan, los ámbitos donde ejerce regulación y sus repertorios de violencia. Para esto último, se toma como referente una mirada más amplia desde el concepto de *patrón de violencia* de Gutiérrez y Wood (2017), que toma en consideración los repertorios y objetivos, así como las técnicas y frecuencias del accionar violento, en este caso, del ELN.

A continuación, se introducen las expresiones recientes del conflicto armado en las que se ha inmiscuido esta guerrilla. Aquí se destaca por su impacto humanitario la confrontación armada que sostiene con el EPL desde marzo del 2018. A su vez, este escenario se ve alimentado por cambios en los otros grupos armados —legales e ilegales— en la región: la dejación de armas de las FARC-EP y la aparición de su disidencia, las transiciones al interior del EPL y la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido n°. 3 (FUDRA III) del Ejército Nacional. No obstante, a fin de hacer una lectura adecuada del papel del ELN en el conflicto reciente del Catatumbo, el periodo de análisis que nutre esta lectura de las expresiones territoriales comprende el periodo desde 2010 hasta 2019.

Posteriormente, se dedicará un apartado que detalla el rol del ELN en las economías lícitas e ilícitas de la zona, sus variaciones y las formas de regulación y división con otros grupos armados. Se finalizará con un apartado que resume las conflictividades del Catatumbo, más allá de las expresiones directas del conflicto armado, analizando allí la respuesta de la población civil a la guerra, pero también los cambios y las pugnas entre los distintos sectores sociales.

El abordaje metodológico se ha hecho a través de trabajo en campo y la revisión documental, que comprende la lectura del archivo de prensa y base de datos de actores armados de Cinep/PPP, los comunicados del ELN y de grupos de la sociedad civil, literatura especializada y portales virtuales relevantes[2]. El trabajo de campo recoge una visita a Tibú en la segunda mitad del 2018, a Cúcuta y Ocaña en mayo del 2019, y de nuevo a Tibú en junio del 2019. En la primera visita se hizo mayor énfasis en las conflictividades que diversos sectores de la población civil reconocían en el Catatumbo, incluyendo a integrantes del pueblo barí, funcionarios públicos, líderes de movimientos sociales y jóvenes. Las siguientes visitas se enfocaron en el ELN como estructura armada, indagando por su papel político y militar en la región. Se propiciaron acercamientos a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.

2 Insight Crime y *Verdad Abierta*, por ejemplo.

La información encontrada, sin embargo, no deja de ser escueta en muchos puntos: además de la incertidumbre y las diversas voces sobre el accionar de un grupo armado, el hermetismo que se le da al tratamiento de la información, por el riesgo que conlleva, dificulta su obtención. Pese a ello, la existencia de una confrontación vigente con el ELN como protagonista, facilitó la entrada en materia, pues esto ha despertado el interés entre los investigadores por la comprender el accionar de este grupo.

En síntesis, el lector se encontrará con un ELN central, aunque no estructurante de la realidad regional, con repertorios de violencia típicos de una guerra de guerrillas en la que evitan el combate directo, con variaciones en los últimos dos años, donde ha sostenido una confrontación directa con el EPL y la fuerza pública. Es también un ELN con arraigo y bases sociales, de acciones bienestaristas y regulador de algunas expresiones de la vida cotidiana: robos, control ante la llegada de extraños, entre otros. Con relación a la economía, es el principal regulador de contrabando, cobro por flujo de migrantes, y fabricación y comercialización de combustible artesanal —*pategrillo*— como precursor químico para la cocaína. Sin embargo, varias de estas relaciones sociales, roles y repertorios han variado frente a una realidad regional convulsa donde juegan un papel más protagónico como se observa en el desarrollo del capítulo.

Configuración del territorio: breve recuento del proceso de configuración regional y dinámicas violentas

El Catatumbo se ubica en el nororiente colombiano, en el departamento de Norte de Santander, en su mayoría está compuesta por un bosque tropical de alta pluviosidad, de alta vocación agrícola y con algunos enclaves petroleros y de minería de carbón. Posee características transfronterizas que prolongan su superficie regional desde la cordillera oriental colombiana hasta las inmediaciones del lago de Maracaibo en Venezuela. La porción del territorio ubicado del lado colombiano abarca once municipios del departamento mencionado, divididos a nivel subregional en dos áreas diferenciadas por variaciones geográficas: el alto Catatumbo, zona montañosa y selvática, que comprende los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, Ocaña, Ábrego, La Playa y El Tarra; y el bajo Catatumbo (más plano), donde se ubican Tibú y Sardinata[3].

3 Algunas lecturas territoriales hacen esta división en tres partes, indicando un *Medio Catatumbo* como zona intermedia compuesta por El Tarra y partes de Teorama (CNMH, 2018). Sin embargo, frecuentemente los sujetos de investigación hacían mención de estos municipios como parte de la primera subdivisión territorial.

La región limita en su costado occidental con Venezuela, al sur con municipios del área metropolitana de Cúcuta y al oriente con el sur del departamento del Cesar. Su posición geográfica la convierte en un área supremamente estratégica por su condición de frontera y su salida al Cesar, que le permite articularse a un corredor estratégico que transcurre por el Magdalena medio y el sur de Bolívar hasta el nororiente antioqueño y el Urabá. En términos económicos, el Catatumbo cuenta con petróleo, minerales y suelos con considerable capacidad productiva, usada para variedad de cultivos de uso lícito e ilícito; elementos estos que han jugado un papel fundamental en el devenir de su configuración territorial (Cinep/PPP, 2017).

El territorio ha sido habitado ancestralmente por la comunidad indígena barí, que en el presente ejerce jurisdicción sobre los resguardos Motilón-barí y Catalaura. Al tiempo, la región ha sido escenario de variados y desarticulados procesos de colonización de campesinos mestizos, que llegaron en búsqueda de tierras y en diferentes momentos de bonanzas económicas (Carvajal, 2016). La interacción entre estas dos poblaciones genera una alta conflictividad por la expansión de la frontera agrícola. En su momento, el proceso de ingreso del campesinado vino acompañado de campañas de pacificación, militares y misionales, dirigidas hacia los Motilón-barí (Aponte, 2012).

Estos primeros encuentros se dieron durante la época colonial en tres fases: de 1530 a 1662, que fue el periodo de las primeras incursiones y la fundación de poblados; de 1662 a 1772, cuando se incrementó la violencia contra la comunidad barí; y de 1772 a 1818, un periodo de incursión de grupos religiosos que intentaron una relación más pacífica con la comunidad afectada (Aponte, 2012). Posterior al nacimiento de Colombia como república, acontecen tres momentos de colonización dispersa, dinamizados por economías extractivas y al margen del acompañamiento del Estado. Cada uno de estos momentos gira en torno a un factor o recurso central, a saber: petróleo, violencia bipartidista y bonanza cocalera.

Dada la presencia de petróleo se da la primera oleada de colonización a inicios del siglo XX con la Concesión Barco; una concesión territorial entregada al general y líder regional cucuteño Virgilio Barco Martínez —cuyo hijo sería presidente en 1986—, cedida luego para la explotación a la empresa norteamericana Colpet (Colombian Petroleum Company). En esta etapa llegan campesinos en búsqueda de tierras, ampliando la frontera agraria, y como mano de obra seducida por la explotación de hidrocarburos. La concesión otorgaba a la empresa derechos de explotación, construcción y uso de la tierra, recibiendo protección policial y militar del Estado. La Colpet, en contrapartida, se encargaba de atender

las demandas sociales que fuesen surgiendo[4] (Aponte, 2012; Cinep/PPP, 2017; Carvajal, 2016; y CNMH, 2018).

En 1950, una segunda etapa tiene por protagonista la violencia bipartidista. Huyendo de estas tensiones hacia zonas periféricas, los campesinos llegaron a las partes bajas de la región en un proceso de colonización espontánea y anárquica. Durante los siguientes 20 años la población llegó a duplicarse y se consolidaron los asentamientos que darían forma a los municipios de Tibú y El Tarra (Aponte, 2012). En 1980 se da la bonanza cocalera como tercer y último *boom* de colonización de la región. Sus condiciones geográficas y climáticas hicieron posible la plantación masiva de la coca, además de contar con ventajas comparativas respecto a otras zonas que permitieron desarrollar todos los eslabones de la cadena productiva de la cocaína: áreas montañosas y selváticas donde construir laboratorios para su creación, y dada su condición de frontera, en la comercialización se reciclaron aprendizajes previos relacionados con el contrabando y el uso de antiguas rutas destinadas para este fin (Aponte, 2012; Aponte, Arboleda y Barrera, 2016 y Ávila, 2013, citados en Cinep/PPP, 2017).

Este proceso de configuración regional facilitó la entrada del ELN en los setenta, que fue el primer grupo guerrillero en llegar a la región. Su anclaje se vio favorecido por las condiciones de marginalidad económica, social y política que enfrenta el Catatumbo. Además, este contexto de rezago económico y la debilidad del Estado local —manifiestos en condiciones de pobreza, altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y una escasa integración productiva de los campesinos a la economía nacional—, son elementos que explican, parcialmente, el afianzamiento de las economías ilegales y de formas propias de consolidación estatal donde el conflicto ha jugado un papel preponderante.

Junto al ELN, en las décadas de los setenta y ochenta se da el arribo de los otros grupos guerrilleros (FARC y EPL). Estos llegan no solo a cubrir las demandas de seguridad y justicia de la población civil —lo que explica el inicial recibimiento favorable por parte de los pobladores—, sino también a apoyar las formas de asociatividad campesina y de formación política, de las que emergen plataformas de protesta y reclamos al gobierno central —muchos de los cuales se mantienen vigentes— (CNMH, 2018). Sin embargo, es importante subrayar el carácter previo y relativamente autónomo de la organización comunitaria de la región. Tal como lo expone John Jairo Rincón (2003), la configuración del Catatumbo como enclave económico petrolero y la necesidad de solventar necesidades de subsistencia

4 El pueblo barí fue particularmente objeto de las medidas de seguridad de la concesión. La propia Ley 80 de 1931, con la que se crea la concesión, les consideraba salvajes y hostiles, y por tanto debía repelérseles (CNMH, 2018).

dieron pie a una organización comunitaria sólida[5], en la cual, posteriormente, harían eco los proyectos políticos guerrilleros como el del ELN.

Es importante mencionar que la consolidación de un orden social armado por parte de las guerrillas no estuvo solo acompañado de expresiones desproporcionadas de violencia, por lo menos durante la primera década y media de su llegada[6]. Sin embargo, es claro que los procesos expansivos de estos grupos —junto a la llegada del paramilitarismo a final de los noventa— fueron factores que impactaron a la población civil por cuenta del conflicto armado desde entonces hasta la actualidad —con sus respectivas fluctuaciones— (ver figuras 6 y 7).

Uno de estos impactos es la constante reconfiguración forzada del territorio, aunado a otros elementos. En buena medida, el Catatumbo ha sido afectado por alta movilidad de la población a causa del desplazamiento en los últimos veinte años (CNMH, 2018), las variaciones regionales temporales en el negocio de la coca y los conflictos por el territorio entre comunidades —campesinos e indígenas—. Las dimensiones anteriores moldean un presente continuo en la configuración del territorio como elemento clave para la interpretación de sus conflictos regionales.

El ELN: su expresión y variación territorial

El frente de guerra Nororiental es la estructura armada del ELN que hace presencia en Norte de Santander. Esta guerrilla tiene influencia en tres zonas del departamento, que son circunscripciones de estructuras armadas más específicas con mayor o menor grado de interacción entre ellas: el sur del departamento, el área metropolitana de Cúcuta y el Catatumbo.

Desde 1986 estas estructuras son el frente Carlos Armando Cacua Guerrero con presencia en el Catatumbo, producto del desdoblamiento del frente Camilo Torres predominante en la serranía del Perijá; y el frente Efraín Pabón Pabón al sur del departamento, en Pamplona y municipios aledaños, producto del desdoblamiento del frente Domingo Laín desde el Sarare araucano (CNMH, 2018). En la década de los noventa sus estructuras armadas se expandieron. Así, en 1991 se crea el frente Juan Fernando Porras con presencia en Cúcuta, El Zulia, Sardinata y Ábrego; en 1995 se crea el frente Carlos Germán Velazco Villamizar, que se concentrará en el área metropolitana de Cúcuta.

5 En medio de la agudización del conflicto, de la interacción con los grupos armados y la subsiguiente persecución del Estado y entre organizaciones guerrilleras, estas formas organizativas fueron mutando: de solventar necesidades de subsistencia pasaron a la defensa de los derechos humanos en aras de salvaguardar su integridad (Rincón, 2003).

6 Ver también apartado tres.

Posteriormente, sobre todo para la región del Catatumbo, se crearon cuatro compañías: las compañías Héroes del Catatumbo, Comandante Diego, Colectivo Héctor y la Móvil Francisco Bossio[7]. Las dos primeras hacen presencia en Convención, Teorama y El Carmen; el colectivo Héctor en El Tarra y Teorama; y la Comandante Diego en Ocaña, San Calixto, esta expandió su zona de influencia al sur del Cesar en municipios como Aguachica (CNMH, 2018; Aponte, 2011).

Tabla 1. Estructuras del frente de guerra Nororiental "Comandante en Jefe Manuel Pérez Martínez", 2010-2019

Departamento	Frentes	Compañías
Norte de Santander	Frente Carlos Armando Cacua Guerrero Frente Efraín Pabón Pabón Frente Juan Fernando Porras	Compañía Héroes del Catatumbo Compañía Móvil Francisco Bossio Compañía Colectivo Héctor Compañía Comandante Diego

Fuente: Aponte, 2011; Aguilera, 2014 y CNMH, 2018. Elaboración propia.

En el 2006, el IV Congreso de la guerrilla decidió la conformación de una estructura que agrupara varios frentes urbanos cuyo criterio de asociación no fuera la proximidad geográfica, como todas las demás, sino el accionar en las ciudades escogidas para tal fin. En un proceso, que tomó hasta el 2014, se conformó el frente de guerra urbano Camilo Torres, del que hacen parte las estructuras presentes en Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Popayán y Cali (Pares, 2019)[8].

Con todo, la inserción del ELN en el Catatumbo se había producido siete años antes de la creación de estas estructuras. El 31 de enero de 1979 ingresaron al municipio de Convención 60 guerrilleros, en la que fue su primera toma guerrillera en la región, cuyos blancos fueron el Banco Agrario y la estación de la Policía Nacional. A pesar de hacerse recurrente esta práctica, la irrupción de las guerrillas durante estos años se dio a través de pequeños grupos con presencia esporádica y armamento precario (CNMH, 2019).

Las razones del arribo del ELN tienen que ver no solo con las condiciones propicias explicadas en el apartado anterior, sino también con la reconfiguración de esta guerrilla en respuesta a la crisis producida por la Operación Anorí en 1973, que estuvo a punto de aniquilarla. Tras buscar

7 Encargada en su momento del cuidado del Comando Central (COCE), que durante un periodo estuvo resguardado en el norte del Catatumbo (Aguilera, 2014).

8 El cambio de estas jurisdicciones tuvo dificultades, sobre todo por parte de los frentes a los que antes pertenecieron y no querían perder con ello capacidad de influencia. Este factor explica el tiempo prolongado para la conformación de este nuevo frente de guerra (Pares, 2019).

refugio en la cordillera oriental, los sobrevivientes del desastre llegaron hasta el Catatumbo, y en general a Norte de Santander, buscando acercarse a la frontera con Venezuela[9], para establecer un corredor con Arauca. También se vieron favorecidos en sus procesos de afianzamiento y expansión en la región por la construcción del oleoducto Caño Limón – Coveñas, que entró en operación en 1985, y atraviesa Norte de Santander (Aponte, 2012).

Además, en esa inserción contaron con la presencia de uno de los personajes más emblemáticos al interior del ELN: el sacerdote español Manuel Pérez Martínez. Allí él no solo fungió como ideólogo y líder del grupo, sino también como facilitador de interacción con la comunidad. Según se menciona, seguía ejerciendo su sacerdocio impartiendo sacramentos a la gente, al tiempo que lideraba la guerrilla (Entrevista 6, 2018). También jugó un rol relevante en el rechazo del narcotráfico por parte del ELN, una postura crítica que permanece vigente —según las posiciones oficiales de la dirigencia del grupo[10]—, a pesar de las múltiples referencias que señalan lo contrario, toda vez que es innegable su participación en eslabones de esta economía.

En los ochenta, el grupo inicia un proceso de expansión a todos los municipios del Catatumbo con la creación de las estructuras ya mencionadas. El movimiento de sus estructuras armadas se da desde el norte hacia el sur, desde El Carmen hacia Tibú y Sardinata; ubicándose en los corregimientos de Campo Dos y La Gabarra, y en el corregimiento de San Martín de Loba respectivamente (CNMH, 2018). En estas primeras décadas, el ELN logró establecer un orden social armado con ámbitos de regulación definidos e influencia en asuntos políticos, como se abordará en el subtítulo siguiente. Vale la pena aclarar, tal como lo explica Staniland (2012), que una lectura de presencia y control ejercido por un grupo armado requiere ser vista más allá del rastreo de actos de violencia[11]. Para el contexto del ELN en el Catatumbo, esta salvedad es relevante pues el control ejercido se inicia desde los ochenta con un trabajo político y coercitivo

---

9 Del uso de la frontera como comunicante con Arauca se pasa a una situación actual donde se debate un eventual carácter binacional del ELN, no solo por el uso de territorio venezolano como retaguardia, sino también por prácticas de orden social armado en zonas del vecino país. A esto se suman posibles connivencias con el Gobierno venezolano en interacciones que aún deben ser estudiadas a fondo.

10 Constatado en comunicados del ELN en los últimos nueves años. Ver en Cedema.org.

11 No toda presencia y control se expresa en altos niveles de violencia, por lo que hacer una lectura centrada en este único factor crea un vacío analítico. Los altos niveles de violencia, por otra parte, alertan sobre otros fenómenos relativos a la presencia y el control, pero que no los agotan como escenarios de disputa o cambios en las estructuras de autoridad ejercidas por un grupo armado. Por ello, para dar cuenta de manera más apropiada de los órdenes armados en tiempos de guerra, se requiere, por ejemplo, la inclusión de los ámbitos de regulación en el análisis (Staniland, 2012).

fuerte, a pesar de que las cifras de violencia en la región no alcanzan niveles considerables sino hasta el final de los noventa (ver figura 6).

Ámbitos de regulación

Por esa salvedad, en contra de la percepción simplista del caos y desorden, la investigación muestra que en el Catatumbo existen múltiples órdenes interpuestos, frágiles y variables en el tiempo, pero que imponen condiciones en el presente y el futuro inmediato sobre el quehacer de las comunidades y de la guerra misma, al tiempo que terminan imponiendo algunos límites al accionar de los grupos armados y del Estado. Omitir esta situación dificulta superar las expresiones violentas de los conflictos en la región.

Así, en los análisis sobre el papel de los grupos guerrilleros en la conformación de gobernabilidades armadas, han sido evidentes las expresiones diferenciadas según se trate de zonas de retaguardia o de disputa (González, 2016). El Catatumbo es una región con presencia histórica de las insurgencias, arraigadas gracias a las condiciones geográficas —propicias para mantener la confrontación—, a la existencia de recursos económicos, y a la creación de vínculos societales por su capacidad como reguladores de varios elementos de la vida política y social. Sin embargo, y quizá por la presencia misma de variados actores, posee la particularidad de ser una zona ambigua entre retaguardia y disputa. En algunos aspectos se presenta como retaguardia de un grupo, pero la no exclusividad de su control en el territorio genera variaciones entre sus niveles de influencia.

A nivel subregional existen ciertos repartos del control sobre los municipios donde prima la presencia de un grupo u otro, sin monopolios absolutos. Las divisiones son más evidentes a nivel veredal y en los corregimientos, y, aun así, cada grupo tiene bases sociales y acciones regulatorias, en mayor o menor grado, en todos los municipios, donde establecen reglas con las comunidades en un panorama frágil y variable. Las disputas se reactivan por rupturas en los acuerdos tácitos o explícitos previamente establecidos entre grupos armados o entre un grupo armado y los civiles, esto deriva en una imposición de nuevas reglas a través del uso de la fuerza[12].

Por su parte, el ELN ha ejercido regulación en asuntos políticos, sociales, de justicia y económicos[13]. Destacan el control de la vida cotidiana, donde infringen castigos a las riñas, robos y porte de armas. El castigo es proporcional al agravio cometido, pero de no cumplirse, se decreta el

12 Ejemplos de esto: la confrontación ELN-EPL desde marzo del 2018 y la entrada del paramilitarismo en 1999.

13 Este particular, que incluye la regulación a economías legales e ilegales, se abordará en el apartado cuatro.

destierro de la persona —en ocasiones con su familia— o incluso la muerte, en escenarios pocas veces antecedidos de un "juicio formal". Tras la crisis migratoria consiguieron controlar el paso y la presencia de población venezolana, quienes deben tener la recomendación de un poblador propio del Catatumbo para poder instalarse; esta recomendación trae consigo cierta responsabilidad compartida, pues, en el caso de que el recomendado cometa algún delito, su patrocinador también será castigado (HRW, 2019).

En general, este grupo controla y evita la aparición de nuevos pobladores en sus zonas de retaguardia (Human Rights Watch, 2019), y en los procesos electorales da el aval de participación a candidatos, sobre todo en municipios del alto Catatumbo (Entrevista 19, 2019). En la línea de frontera, regula la circulación de mercancías y combustible de contrabando, y también tasa el tránsito de mercancías y minerales en algunas rutas al interior de la región. En la economía de la coca ha jugado un rol más bien subsidiario, salvo en la regulación de los precursores químicos: gasolina contrabandeada y la fabricación artesanal de un combustible conocido como *pategrillo*[14].

Para el ELN, el Catatumbo es una zona de retaguardia[15] que le permite una conexión con el sur de Bolívar y el Magdalena medio a través del sur del Cesar. Esta condición de retaguardia queda en evidencia por su accionar. Tal como lo señala Aguilera (2014), el ELN practica en esta zona el cobro de impuestos a empresas extractivas; imparte "cátedras guerrilleras" a campesinos, profesores y estudiantes; realiza juicios públicos a acusados de delitos y funcionarios públicos que incumplan sus labores; y restringe el acceso a diversas zonas. Además, en su momento promovieron la organización de juntas de acción comunal con diversos comités que respondieran a diversos ámbitos de la vida social (Aguilera, 2014).

No obstante, en el Catatumbo no logra generar aparatos de masas plenamente supeditados a la guerrilla, y en su trabajo político-social no abandona su naturaleza coercitiva. Uno de los primeros hitos de la movilización social en la región así lo demuestra. En 1987 se realizó el Paro del Nororiente con una amplia participación de comunidades campesinas y movimientos sociales articuladores. En el paro, que tuvo como epicentro Ocaña y Tibú, se generó un primer pliego con peticiones regionales relacionadas principalmente con el acceso a servicios públicos básicos (CNMH, 2019). Este

---

14 Combustible artesanal derivado del petróleo extraído del oleoducto Caño Limón – Coveñas. Su producción es bastante contaminante y es usado como sustituto de la gasolina, especialmente como precursor químico en la fabricación de cocaína.

15 Las áreas de retaguardia son consideradas así por ser zonas que cuentan con gran influjo político de la organización guerrillera y con escasa o "esporádica" presencia del Estado; en ellas la guerrilla ha desarrollado sus cuadrillas, su infraestructura logística, sus zonas de producción agrícola, sus corredores de repliegue y algunos "órganos de poder popular" (Aguilera, 2006).

primer conjunto de reclamos se convirtió en una base de las subsecuentes movilizaciones de la región, cuyos pliegos de peticiones solo requerían actualizaciones puntuales, debido a la vigencia de los problemas y los continuos incumplimientos de los acuerdos que movilización tras movilización se lograron pactar con el Estado (Entrevista 20, 2019).

Precisamente, en este paro del nororiente el ELN[16] tuvo una participación protagónica en dos sentidos. Primero, a través de presión a la población civil. Si bien hubo promoción autónoma de la protesta por algunos sectores campesinos, en lugares como Campo Dos (corregimiento de Tibú) y Convención, se recuerdan las directrices por parte de la guerrilla: "la orden era que el que no iba al paro, no podía trabajar" (CNMH, 2019, p. 166), comenta un campesino recordando el acontecimiento. Segundo, la presunta relación entre el ELN y el movimiento *A Luchar*, que fue el mayor articulador de las organizaciones en el paro. En estas lecturas de influencia parcial o aparatización del movimiento por parte de la guerrilla se han realizado varios recuentos que apuntan a una dinámica de "influencia y tensiones mutuas" (Fajardo, 2017, p. 134), donde la separación de ambas organizaciones es central para el análisis, con lecturas de procesos y contexto precisas.

Por ejemplo, este caso de *A Luchar* refleja el contexto de una tensión entre una estrategia diseñada por el nivel nacional del ELN en los años ochenta —que buscaba construir poder popular a partir de las movilizaciones sociales de las comunidades—, y la organización comunitaria de las poblaciones campesinas, cuyas reivindicaciones podían coincidir en parte con los intereses de la guerrilla, sin que fueran impuestas por ella. Una tensión en muchos casos aún no resuelta, pero con variaciones significativas hacia el 2018 y 2019 como se verá en el apartado final de este capítulo.

Existen también otras expresiones del trabajo político del ELN en la región. En algunos lugares dirigieron espacios de reflexión política y propaganda —a través de periódicos cuya compra era obligatoria—, y fomentaron trabajos colectivos para la adecuación de vías y organización de fiestas. Esta injerencia, como se ha dicho, generó tensiones por la apropiación de agendas y procesos propios de las comunidades, pero, al mismo tiempo, su interacción con una base social le permitía hacer tangible su proyecto político en lo local, a la vez que le brindaba un potencial recurso humano para su proyecto militar; lo que, a su vez, posibilitó mantener activas las filas del grupo armado; se aduce que muchos jóvenes han

16 En el otro gran hito de la movilización de la región, el paro cocalero del 2013, fueron las FARC-EP las que mostraron su apoyo al poner en marcha su capacidad organizacional del trabajo de base. Esto se debe, entre otras cosas, a que fue esta guerrilla —y no el ELN— la que predominó en la interacción con los primeros eslabones de producción de la coca.

ingresado a sus filas debido al trabajo político de la guerrilla y no por imposición (CNMH, 2019).

Ya en asuntos de política electoral local, el ELN optó en sus inicios por el abstencionismo como "signo de identidad de aquel grupo guerrillero" (Aguilera, 2006, citado en CNMH, 2019). Un abstencionismo por demás activo a través del sabotaje de elecciones, con énfasis en las áreas rurales de los municipios, y el secuestro de candidatos, alcaldes, exalcaldes y concejales (CNMH, 2019). Esto se fue matizando, en especial cuando apareció la elección popular de alcaldes a finales de los ochenta. Durante esta época el ELN se presentó a sí mismo como un veedor de las administraciones locales, efectuando "juicios políticos" a alcaldes y concejales por corrupción en el manejo de recursos o funcionamiento "inadecuado" de sus administraciones.

De hecho, se sigue considerando requisito contar con el visto bueno del ELN para lanzarse a una campaña electoral, sobre todo en los municipios del alto Catatumbo[17]. Esto no supone necesariamente una vinculación de los candidatos con el proyecto político o armado del ELN, pues esta disposición es tan solo para aclarar que se permite la campaña, y aplica a los candidatos de todos los espectros políticos, estén o no, más o menos, vinculados a los intereses políticos de la guerrilla (Entrevista 19, 2019).

Ahora bien, hay una injerencia menor del ELN respecto al desarrollo de las administraciones locales del Catatumbo, más allá de su rol de "veedor", donde se omiten prácticas como la extracción evidente y significativa de recursos del erario. En buena medida, esto se debe a dos razones: primero, la construcción de Estado en el Catatumbo no está acompañada o influenciada por esta guerrilla, como sí ocurre, por ejemplo, en el caso araucano; segundo, también y a diferencia de Arauca, los ingresos de los municipios de la región son menores y existen otras fuentes de financiación suficientes por medio de economías legales e ilegales que hacen innecesaria la lucha por la cooptación del presupuesto de estos municipios (Entrevista 20, 2019)[18].

Por otra parte, la mencionada debilidad estatal termina por favorecer el papel regulador del ELN.[19]. Un rol que a su vez ha tenido variaciones en el tiempo y que indica un deterioro en la reputación de la guerrilla como garante de los órdenes sociales. Este giro reputacional, ya desde los ochenta, es propiciado por un cambio en las prioridades del ELN en la región cuando

---

17 Según el municipio, se menciona la necesidad de un visto bueno otorgado por *las guerrillas* en plural.

18 Ver informe regional del ELN en Arauca. Para profundizar en las deficiencias del análisis por *cooptación del Estado* en el Catatumbo, véase Ortega (2019).

19 El Estado allí, reciente y frágil, no monopoliza las funciones de regulación política y social dejando espacio a los órdenes sociales de los grupos armados. Estos múltiples órdenes de regulación política y social no siempre están en disputa. En la práctica estos órdenes conviven entre tensiones y acuerdos, a manera de lo que González (2016) enuncia como "gobernabilidades híbridas".

pasan de un accionar más político a centrarse en uno de carácter militar y económico (CNMH, 2019)[20]. Esto es un cambio muy reciente respecto a su llegada a la región (1979); sin embargo, este giro de prioridades se consolidaría hasta inicios del 2000, con su entrada en la economía de la coca, y entre 2018 y 2019 a propósito de su expansión militar en la guerra contra el EPL.

También hay cambios al interior de su ejercicio político y los órdenes sociales armados que propone. Las primeras manifestaciones del control social se dieron sobre el comportamiento de las personas —prohibición de riñas, robos, etc.—, cuyo incumplimiento daba lugar a castigos que en ocasiones terminaban en "ajusticiamientos"; un control, que a la postre es recordado de manera positiva porque hacía que "muchas cosas funcionaran" (CNMH, 2019, 231).

Con el tiempo, este control se afianzó con prácticas de regulación a poblaciones percibidas como indeseadas: ladrones, consumidores de drogas, trabajadoras sexuales, etc. A estas últimas se les hacía controles rigurosos de "sanidad", mientras que a los ladrones y consumidores de drogas se les practicaba la así denominada 'limpieza'; actividad que consistía en la expulsión y en otros caso en causarles la muerte (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-19; CNMH, 2019). El giro reputacional que advierte la población tiene que ver con cómo antes existía un proceso de verificación más riguroso para establecer la responsabilidad de los "acusados", mientras que al 2019 las investigaciones al momento de castigar eran más ligeras. Esta arbitrariedad es uno de los principales factores que achacan a la transformación y el detrimento del rol de garante del orden social en el territorio (CNMH, 2019).

Pero estas formas de control no son exclusivas del ELN. En general, en el Catatumbo se observa un orden social bastante conservador, regulado por la acción coercitiva de las guerrillas, cuyo impulso viene tanto de los grupos armados como de las mismas comunidades que así lo demandan. En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en 2019, se expresa que, hoy en día, relegando otras formas de autoridad, se sigue acudiendo a los actores armados para que regulen el comportamiento en sus comunidades, por ejemplo, para que "llamen la atención de los jóvenes considerados problemáticos" (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-19, p. 20). En esto no solo proscriben actos como el hurto y el consumo de drogas, sino que también imponen códigos de vestimenta para mujeres y

---

20 Las causas de esta variación pueden deberse al giro que supuso el descubrimiento del campo petrolífero de Caño Limón en Arauca. La extorsión por parte de las estructuras araucanas a la fortalecida industria petrolera le trajo al ELN recursos antes inexistentes. Se empieza un fortalecimiento de lo militar y lo económico, que trajo diferencias al interior de la organización, como muestran las críticas del mismo Manuel Pérez al descuido del actuar político, y las respuestas de otros sectores que tildaron al sacerdote español de moderado (Entrevista 9, 2019).

hombres, y la prohibición de llevar cabello largo o *piercings* y perforaciones por parte de estos últimos (Entrevistas 20 y 8, 2018)[21]. Entre tanto, ha operado siempre en estos órdenes una desconfianza frente a la persona "extraña", que se expresa en la estricta vigilancia de quienes entran o salen de sus zonas de influencia (CNMH, 2019).

Ahora, como se mencionó antes, la demanda por la regulación a los grupos armados sigue vigente, actuando incluso en el entramado de circunstancias que desencadenaron el conflicto entre el ELN y el EPL. Sin ser un factor causal único, en las entrevistas realizadas se dijo varias veces que la población civil requirió al ELN para que actuara frente a desmanes que el EPL, en pleno relevo generacional, estaba causando y que, junto con otras actitudes retadoras, fueron afectando la relación de ese grupo con la población (Entrevistas 20, 14 y 15, 2019).

Otras evidencias de los ámbitos de regulación del ELN aparecen al realizar una lectura de las alertas tempranas emitidas entre 2010 y 2019 para la región del Catatumbo. En primer lugar, aparecen como indicador de presencia los grafitis y banderas alusivas al ELN en casas, caminos o vehículos —en ocasiones incinerados—. En varios de estos lugares, este grupo realiza reclutamiento de menores (SAT, Defensoría del Pueblo, NS n°. 002-11, IR n°. 021-16 y AT n°. 014-19), siendo las inmediaciones de las escuelas zonas predilectas para tal fin; donde también realizan reuniones obligatorias con los profesores en las que incluso han solicitado los manuales de convivencia de los centros educativos para realizar *revisiones* de los mismos (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-19).

Más allá de las denuncias de reclutamiento forzado, existen métodos de reclutamiento diferenciados entre las guerrillas que afectan la relación con la población civil[22], pero que responden a las condiciones económicas e ideológicas de los grupos armados —determinantes también de su accionar armado—. Así, mientras el EPL ha aumentado sus filas a través de incentivos económicos, el ELN recurre al convencimiento y "encantamiento" justificatorio de su lucha armada (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-19; Entrevista 20, 2019).

La "limpieza social" también es mencionada, con el uso del WhatsApp como técnica para la emisión de las amenazas de estas prácticas (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16). En 2019, la población objeto del control se extendió a las personas en proceso de reincorporación y a las trabajadoras

---

21 Lo que, de entrada, atenta no solo contra criterios para el libre desarrollo de la personalidad, sino que representa un entorno hostil para la manifestación de diversas orientaciones sexuales y de género.

22 Una explicación más extendida de estas diferencias se encuentra en el subtítulo *Transformación de los órdenes armados* del apartado tres.

sexuales venezolanas[23] que han llegado por la crisis migratoria (Entrevista 20, 2019; SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-19). En las trabajadoras sexuales recae la amenaza de muerte o desplazamiento en caso de evidenciarse algún contagio de enfermedades de transmisión sexual, para estas mujeres no existe distinción de nacionalidad y su persecución se da en aras de un "control" de la salud pública[24], (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-19).

Sobre las mujeres en general recaen otras dos acciones de violencia: explotación sexual y laboral. Algunas mujeres son reclutadas de forma temporal imponiéndoles labores domésticas al servicio de escuadras u otros subgrupos de la guerrilla, trabajos en los que pueden sufrir violencia sexual. Posterior a su liberación, son objeto de amenazas que provocan su desplazamiento, o las obligan a mantener un vínculo con la organización cumpliendo el papel de informantes (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16).

El contacto que el ELN mantiene con la población y su presencia en áreas circundantes a viviendas de civiles pone de manifiesto otras intervenciones en la comunidad como el uso de espacios civiles para el tráfico de estupefacientes, almacenamiento de insumos y combustible, y el paso y ocultamiento de secuestrados[25] (SAT, Defensoría del Pueblo NS n°. 002-12)[26]. Para ello es clave la condición de frontera del Catatumbo, sobre todo para el contrabando de insumos y combustibles y, desde el 2015, para el control de la población migrante que viene desde Venezuela.

No obstante, hacia esta población no existe rechazo o prohibiciones absolutas por parte del ELN. Además de sacar beneficio de los cobros por atravesar trochas o pasos ilegales, se dice que el ELN muestra una postura condescendiente con la presencia de población venezolana en respuesta del buen trato recibido del otro lado de la frontera, donde también hace presencia (Entrevista 20, 2019)[27].

---

23 Sin embargo, en centros urbanos como Tibú existe la percepción de aumento en el consumo de drogas por parte de población joven, así como de aumento en los hurtos y la presencia de trabajadoras sexuales; situaciones que —según manifiestan— se debe a la llegada de población externa producto de la crisis migratoria venezolana.

24 Al mismo tiempo, se registra que en el corregimiento de Campo Dos fueron retiradas brigadas de salud por parte del ELN por no estar autorizadas para realizar sus actividades en la zona (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-19).

25 Este tipo de intervenciones también eran practicadas por las FARC-EP en su momento.

26 "[...] no puede desconocerse la influencia y control que ejercen las FARC y el ELN en caseríos y zonas rurales como San Pablo, El Aserrío y San Juancito, que se sabe son utilizadas, además del control del tráfico de estupefacientes, insumos químicos y combustibles, para el ocultamiento de rehenes y secuestrados, como es el caso de la pareja de ciudadanos alemanes tomados como rehenes, al parecer por guerrilleros del ELN en noviembre del año anterior, así como el secuestro extorsivo de que actualmente es víctima la joven Yusnei Rueda" (SAT, Defensoría del Pueblo, N S n°. 002-12).

27 La presencia del ELN del lado venezolano es un tema harto mencionado. Desentrañar la naturaleza de su presencia en este país requeriría de una lectura regionalizada desde la frontera en

Por último, cabe mencionar que la expresión territorial del ELN en el Catatumbo mantiene elementos de su adscripción temprana con la religión católica por el influjo de personajes como Camilo Torres o el padre Manuel Pérez, quien comandó al ELN en los municipios del alto Catatumbo. En el periodo analizado, destaca la mención reiterativa de la memoria de monseñor Jaime Prieto Amaya[28], obispo de Cúcuta, a quien recuerdan por su papel social en comunicados sobre su muerte y las cartas dirigidas a la Conferencia Episcopal de Colombia en los momentos en que se barajaba la opción de una salida negociada al conflicto (ELN, 2010, 2015; ELN-Voces, 2019).

Patrones de violencia

Los patrones de violencia del ELN en el Catatumbo reafirman su autodeterminación como grupo armado en resistencia, pues se mantiene en una lógica clásica de lucha de guerrillas que evita la confrontación directa —a diferencia del caso de las FARC-EP, que logró consolidar un ejército en estricto sentido para una confrontación directa—[29] (Aguilera, 2014; Entrevista 20, 2019). Para establecer una aproximación a estos patrones se tienen en cuenta las categorías propuestas por Gutiérrez y Wood (2017), las cuales consideran los repertorios de violencia, sus objetivos, su técnica y frecuencia.

De entrada, puede afirmarse que el ELN tuvo un papel importante en la incursión paramilitar de 1999, en la que se destaca su manera de responder ante este ataque. Después de este suceso se observan acciones armadas de baja intensidad con repertorios y objetivos estables en comparación con los demás actores presentes en la región. Apenas presenta un aumento significativo a partir del 2016 en acciones bélicas (ver figura 1), en las que empiezan a aparecer con más frecuencia los combates directos con el EPL como objetivo principal y eventuales confrontaciones con la FUDRA (Unidad de respuesta del Estado frente al conflicto entre estas

---

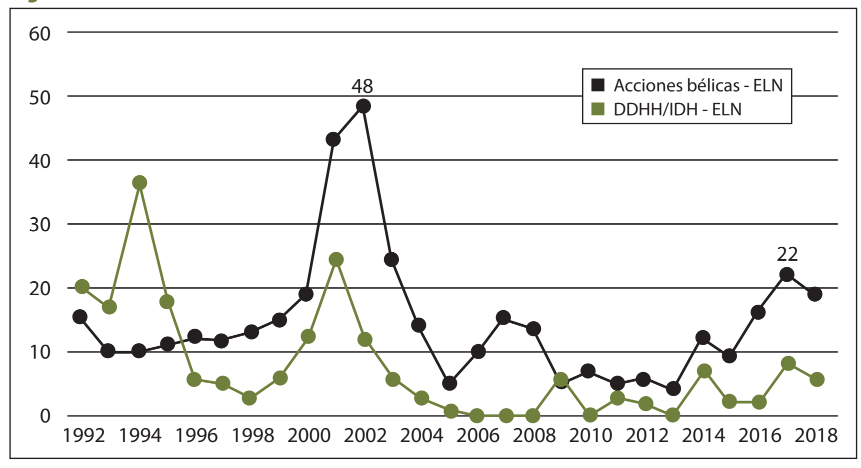
La Guajira hasta Guainía. La posibilidad de connivencia con el gobierno de Nicolás Maduro se inscribe como elemento importante. Por lo pronto, puede hacerse mención de ciertos ámbitos de regulación, por ejemplo, se ha registrado la participación del ELN en la entrega de cajas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en los estados de Táchira, Zulia y Apure; ayudas del gobierno venezolano para población vulnerable. En ciertos lugares, el ELN ejerce el control de su distribución eligiendo a quién se entregan o a quién no, esta mercancía es entregada con calcomanías alusivas al grupo armado e invitando a la escucha de sus emisoras de radio (InSight Crime, 2018).

28 Conviene recordar la importante participación de monseñor Prieto en la fundación del Programa de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio, del que fue fundador, con Francisco de Roux, y su labor en la presidencia de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Colombiana.

29 Salvo el conflicto con el EPL.

insurgencias). En este periodo también se presentan asesinatos selectivos y confinamiento de la población civil, como se observa en el apartado tres.

Figura 1. Acciones bélicas e Infracciones al DIH del ELN en el Catatumbo



Fuente: SIG-Cinep/PPP, elaboración propia.

La espacialidad de las acciones varía. De este modo, desde 2016 y en el marco de las disputas con el EPL, el ELN extendió su presencia hacia más territorios del alto Catatumbo; de igual manera, con la intención de llenar los escenarios abandonados por las FARC-EP[30], desplegó su presencia hacia el bajo Catatumbo. Sin embargo, al igual que la lectura realizada de repertorios y objetivos, puede evidenciarse que existe continuidad geográfica de sus acciones violentas principalmente en los municipios de Teorama, Convención y El Tarra, y en zonas puntuales de Tibú como La Gabarra y Campo Dos.

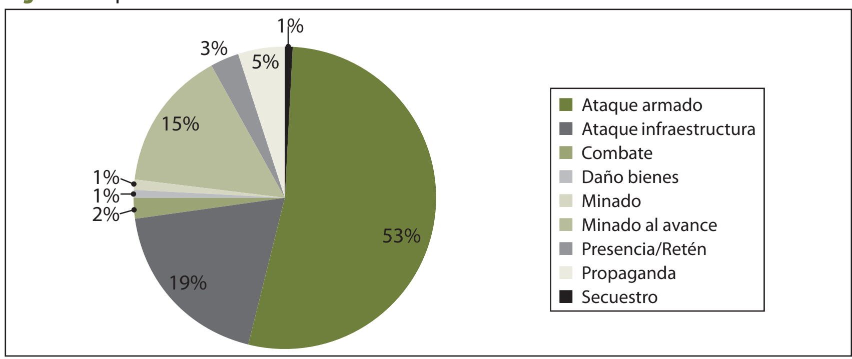
Los tres repertorios de violencia más significativos y frecuentes en el periodo del 2010 a 2019 han sido: ataques armados, ataques a infraestructura y minado en avance[31] (ver figura 2). En los ataques armados destacan como técnicas el uso de francotiradores al paso de unidades militares y los hostigamientos a puestos de policía con armas no convencionales. También se hace uso de planes "pistola"[32] contra la fuerza pública.

30 En aras de un proceso más extendido que deviene en cambios de estructura de autoridad.

31 "Plantación" de material explosivo en caminos, carreteras e inmediaciones donde se prevé el paso de la fuerza pública.

32 Asesinatos de despliegue rápido por medio de sicarios contra la fuerza pública. Se les aborda, se dispara y huyen. Muchas veces ocurre en momentos de descanso de quien es objeto de la acción armada.

Figura 2. Repertorios armados ELN 2010-2019



Fuente: Revisión informes de guerra del ELN[33].

Los ataques a la infraestructura son quizá uno de los repertorios con mayor cubrimiento mediático, en los que sobresale la voladura del oleoducto Caño Limón – Coveñas —sobre todo a la altura del municipio de Teorama—, y otras afectaciones a instalaciones de corriente eléctrica e internet. En el Catatumbo los daños al oleoducto no solo tienen como fin la extorsión de empresas petroleras —una constante del ELN en otras regiones de extracción de hidrocarburos (Aguilera, 2014)[34]—, sino también la extracción de crudo para someterlo a procesos artesanales de refinamiento y obtener el *pategrillo*, que posteriormente es usado en el mercado como combustible o precursor en la producción de cocaína.

El impacto ambiental de estas acciones es de gran envergadura. Las voladuras del oleoducto regularmente riegan el crudo sobre fuentes hídricas dejando sin agua a varias poblaciones, dañando fauna y flora y afectando actividades de pesca y de movilidad de la población civil por medio de los ríos. A su vez, la fabricación del *pategrillo* tiene impactos ambientales, pues los laboratorios construidos para este fin requieren de la tala de bosque, refinan a cielo abierto y no tienen manejo de residuos (Entrevista 8, 2018; *Semana*, 2019b).

33 Vale la pena aclarar el carácter de exaltación propia presente en estos partes de guerra. No solo se omiten los impactos a la población civil, para los años 2018 y 2019, sino que también se omiten las confrontaciones directas con el EPL. También se presenta un muy bajo impacto de la acción armada sobre sus filas, que no se corresponde con los reportes de prensa respecto a las bajas y capturas (Revisión de prensa Cinep/PPP, 2010-2018). El reporte del accionar que realiza el ELN parece responder a lo que se considera una matriz negativa por parte de los medios de comunicación y del Gobierno, y están ancladas a un propósito de mostrar superioridad estratégica y de efectividad en las acciones armadas. En ocasiones, esta capacidad de salir ilesos resulta excesivamente extraordinaria en la correlación fáctica de sus acciones versus su capacidad de incidencia militar real.

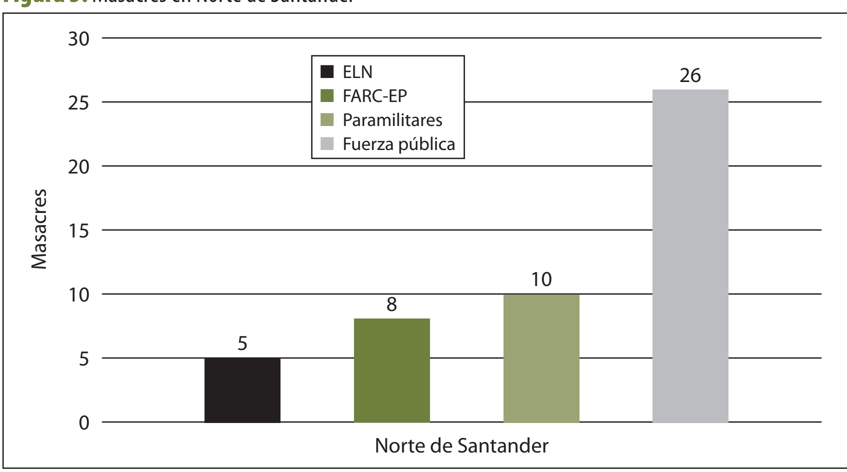
34 En particular cuando no pagan las extorsiones.

El minado en avance puede ser analizado como una técnica de los ataques armados, sin embargo, en la figura 2 se presenta de forma independiente para dar cuenta de la alta frecuencia de su mención. Este repertorio supone la implantación de minas de alto calibre que son accionadas al paso de unidades de la fuerza pública, actividad que responde a la estrategia de ataque sin confrontación, propia de la *guerra de guerrillas* del ELN.

A pesar de evitar los combates directos con la fuerza pública, algunos de los repertorios expuestos tienen implicaciones sobre la población civil, sobre todo el minado en avance —que tiende a dejar munición sin explotar—. Durante sus paros armados también se instalan explosivos en las carreteras, ello sumado a las restricciones a la movilidad que estos suponen y los hostigamientos a las estaciones de policía que pueden afectar viviendas aledañas. Además, existen patrones de violencia cuyo objetivo principal es la población civil misma, como la intimidación y las amenazas que producen desplazamiento forzado, y, entre 2018 y 2019, un crecimiento en asesinatos selectivos contra personas que señalan ser las bases sociales del EPL (Entrevistas 20 y 15, 2019; SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-19).

La temporalidad de las acciones no ofrece ciclos puntuales con preferencia de unos repertorios respecto a otros, salvo en fechas conmemorativas como el cumpleaños del ELN en julio o la conmemoración de la muerte de Camilo Torres en febrero, que se refleja en paros armados, hostigamientos a estaciones de policía y, en general, repertorios que repercuten en la población civil, sobre todo por restricciones a la movilidad, confinamiento y desplazamientos forzados.

Figura 3. Masacres en Norte de Santander



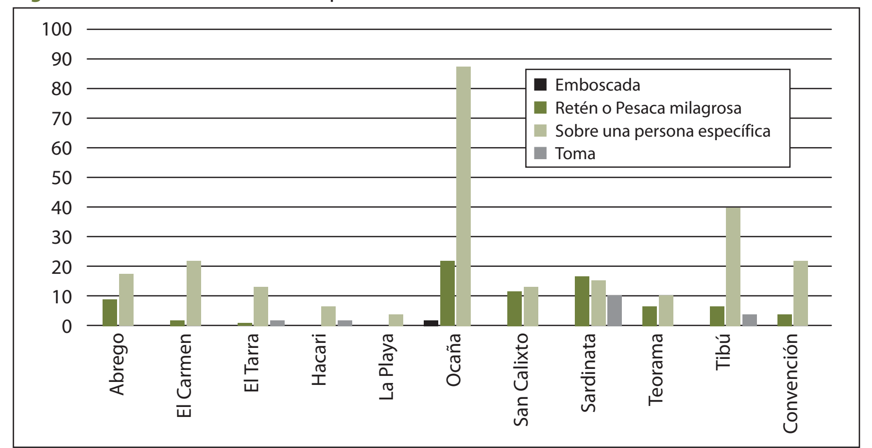
Fuente: SIG-Cinep/PPP, elaboración propia.

Figura 4. Participación de actores total de secuestros en Norte de Santander

10%
5%
16%
4%
28%
37%
ELN
FARC-EP
Paramilitares
Delincuencia común
Otras guerrillas
SI

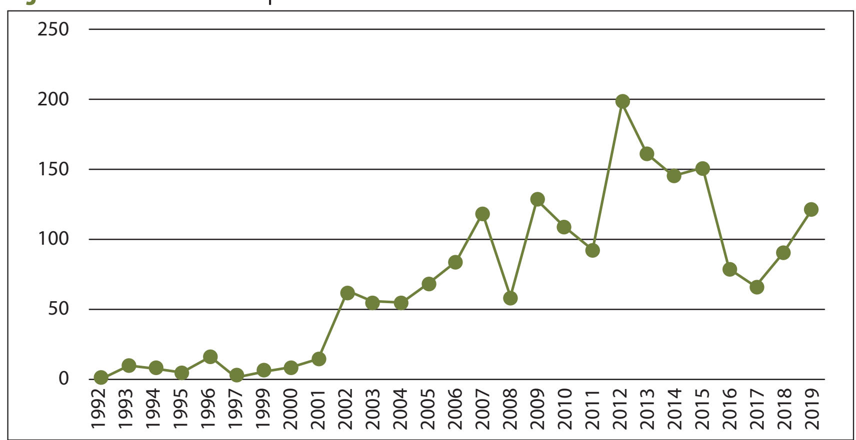
Fuente: CNMH. Elaboración propia.

Figura 5. Secuestros del ELN en municipios del Catatumbo



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

Figura 6. Tendencia Minas antipersona en Catatumbo



Fuente: OCHA. Elaboración propia.

Como repertorio de violencia, las masacres en Norte de Santander —en especial en los municipios del Catatumbo— fueron cometidas en su mayoría por los paramilitares en conformidad con su repertorio nacional. Algunas fueron puntos de quiebre en la región, como la masacre de La Gabarra el 21 de agosto de 1999, en la que murieron varias decenas de personas. En los demás registros, con todos los actores, prevalecen cifras de entre cuatro y ocho personas asesinadas, con lo cual logran los cometidos[35] propios de una masacre sin los efectos mediáticos de hacerla a gran escala.

Por otra parte, con respecto a los secuestros, el ELN aparece como uno de sus principales actores a pesar de la poca referencia que realizan de estos en sus reportes propios. Estas acciones han tenido como objetivo a ciertas personalidades[36], pero en general, las víctimas son trabajadores y contratistas de empresas petroleras (Revisión de prensa Cinep/PPP, 2010-2018). Su expresión geográfica mayoritaria es la ciudad de Ocaña —la segunda ciudad más importante de Norte de Santander[37]—. Allí, en los noventa, se da un periodo de secuestros con fines extorsivos de población civil con un carácter más indistinto, lo que produjo un fuerte rechazo por parte de la población civil a esta guerrilla (CNMH, 2019). A 2019, teniendo en cuenta la reconfiguración violenta de los recursos económicos en el Catatumbo y la degradación del conflicto con ELN como protagonista, existe una preocupación generalizada en estas áreas de que se vuelva a estas prácticas (Entrevistas 15 y 20, 2019).

Por último, en el acervo histórico de la población del Catatumbo se recuerda que hasta finales de los ochenta el ELN fue el mayor exponente de las tomas guerrilleras a los cascos urbanos. La primera toma en la región se dio en Convención en 1979, esta señala el momento en el que incursionó el ELN en la zona; a esta toma le siguieron la de Guamalito, corregimiento de El Carmen, en 1986, y en 1987, en acción simultánea, una toma del corregimiento de San Pablo en Teorama y de nuevo en Convención (CNMH, 2019).

Todo lo anterior demuestra que, en lo militar, el ELN se presenta como una guerrilla que opera de manera defensiva y reactiva, que ha venido abandonando acciones de peso como la toma de pueblos, y cuyos repertorios producen impactos sobre la población civil; especialmente el minado en avance, que restringe la movilidad, y la voladura de oleoductos que

35 En especial la de atentar contra la población civil con la excusa de desestabilizar las bases sociales de los grupos armados sin el desgaste de una confrontación con otro actor armado.

36 Como el secuestro del consejero de la gobernación de Norte de Santander Jesús Cabrales en 2016 (*La Opinión*, 2016a), el de la periodista Salud Hernández y otros dos reporteros de RCN Radio en este mismo año (*El Tiempo*, 2016).

37 Puerta o salida occidental del Catatumbo, según desde donde se le mire.

contamina fuentes de agua, alimentos y terrenos. Una vez establecidos estos patrones de baja intensidad, las nuevas acciones del ELN, entre 2018 y 2019, dan cuenta de un fortalecimiento en clave de desestabilización regional.

Trato con población civil y la estigmatización de movimientos

La prolongada presencia de grupos armados en el Catatumbo ha generado lazos de familiaridad con la población civil. Si bien es cierto que esta cercanía facilita la interacción entre el actor armado y ciertos grupos poblaciones, también lo es el hecho de que los civiles han sido estigmatizados por esta razón, haciendo de estos un blanco de la acción violenta de otros actores[38]. Para describir este fenómeno, un entrevistado relató que incluso existen "familias enguerrilleradas", refiriéndose a aquellas que no solo tienen familiares en la insurgencia, sino que además militan y transmiten la herencia de las estructuras de generación en generación (Entrevista 20, 2019)[39].

Pero más allá de los núcleos familiares, uno de los efectos principales de la interacción insurgencia-población civil es la estigmatización de la que son objeto algunos movimientos sociales, señalados como la expresión no armada del grupo insurgente en cuestión. Es claro que si bien pueden coincidir en posturas políticas, en una especie de círculos concéntricos de afinidad[40], el estigma pone en riesgo la legitimidad, legalidad e integridad de quienes conforman estos movimientos sociales.

Es así como desligarse de estas marcas se convierte, por lo menos en el discurso, en una tarea recurrente en el trabajo político y social de estos movimientos. Y no es para menos, pues las equivalencias entre la organización armada y la civil fungen como justificante de violaciones a los derechos humanos y el DIH, así como variadas consecuencias directas como la deslegitimación de la protesta social. Sin embargo, parece no

38 Como se verá más adelante en el conflicto entre ELN y el EPL.

39 Convendrían otras investigaciones que estudien las sociabilidades insurgentes que se transmiten por linajes.

40 Este concepto como una manera de representar y explicar la ambigüedad de la relación entre los movimientos sociales —y algunas organizaciones de izquierda— con el ELN u otros grupos armados. Existe así un núcleo fuerte de quienes integran la organización insurgente, cuya pertenencia es innegable, al que siguen círculos cada vez más alejados, pero que no salen de una zona de influencia o interacción. El principal indicador de la salida del núcleo es la no participación en el accionar violento del grupo, y su lejanía de este depende de los matices en la interacción con la organización nuclear: cooperación político-militar, cooperación solo política o simple simpatía. Así, estos matices desafían los marcos jurídicos que hacen una lectura legalista de la situación, y a las expresiones de violencia extrajudicial por parte de todos los actores armados, quienes justifican así la selección de la población civil como objetivo militar por considerarla la base social de su enemigo (esta lógica de violencia, si bien predomina en el paramilitarismo y la violencia desde el Estado, no es exclusiva de estas. Ha sido también una lógica de acción de los grupos armados de izquierda, como se verá en este capítulo con el ELN y el EPL).

importarle a los grupos armados, en este caso del ELN, evadir prácticas que alimentan y dejan en evidencia filiaciones con la población, aunque les expongan al riesgo. Después de todo, la llamada construcción del *poder popular* a partir de organizaciones políticas de masas es uno de sus pilares y, en últimas, uno de los indicadores que señala la naturaleza política de este grupo armado en particular.

En este sentido, en el Catatumbo se han identificado los tres principales movimientos sociales campesinos —ASCAMCAT, MPC, CISCA— con las respectivas tres principales guerrillas de la zona —FARC-EP, EPL, ELN—. Estos movimientos sociales promueven diferentes agendas de desarrollo territorial, recolección de datos y denuncia de violación de derechos humanos y DIH, así mismo han sido protagonistas de movilizaciones sociales en la región con variados repertorios de protesta. Los principales argumentos que esgrimen para marcar su autonomía frente a los grupos armados son sus posturas respecto a la promoción de una salida negociada del conflicto. Sin embargo, en algunas ocasiones estas vienen acompañadas de una justificación, tácita o explícita, del accionar armado de los grupos insurgentes, aunque esta, cabe decir, ha tenido cambios significativos sobre todo a partir de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, y los efectos de la escalada de violencia entre el ELN y el EPL[41].

El movimiento al que más señalan de pertenecer a los círculos concéntricos de afinidad del ELN es el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca). Conformado en 2004, es una organización de base campesina, enraizada en el movimiento comunal. Se encuentra conformado por 12 Asojuntas, 3 cooperativas, 1 asociación de ganaderos y 1 asociación de mujeres, pertenecientes a 7 municipios del Catatumbo. Cuenta con propuestas concretas alrededor de seis ejes centrales para la región: educación, salud, territorio, gobernabilidad territorial, cultivos de uso ilícito y bienes de la naturaleza (medioambiente), que se reúnen en su propuesta para consolidar territorios agroalimentarios en la región (FIP, 2016, citado en Cinep/PPP, 2017).

Sus precedentes organizativos se encuentran en *A Luchar*, movimiento político y social que estuvo activo entre 1984 y 1991. *A Luchar* se enunció a sí misma como una alternativa de poder popular, con la movilización social como forma de participación política, que buscaba la construcción de institucionalidad paralela a la estatal (Fajardo, 2019). Su desarrollo como movimiento político estuvo influenciado por el ELN, que tras la primera reunión nacional en 1983 empezó a replantear sus prácticas de poder político, propiciando formas organizativas campesinas y

41 Ver en el apartado 5, *La respuesta de la población civil a la guerra.*

urbanas en sus zonas de enclave. Estas debían construir poder extrainstitucional sobre la base de la autogestión y el control popular en el ámbito de la justicia (Aguilera, 2006). En efecto, en los noventa el Frente de Guerra Nororiental en el Catatumbo emprendió un proyecto experimental de alcaldes, posteriormente abandonado, pero que contribuyó con la elección de algunos dignatarios.

Las directrices dadas a los movimientos que confluyeron en estas estrategias estaban enfocadas en evitar la ilegalización de estas experiencias populares, para que no "se enrojecieran" las propuestas políticas, ni comprometieran el nombre del ELN en su quehacer político y electoral. Lo que se buscaba era que el apoyo a los candidatos saliera del movimiento social sin que "la vanguardia guerrillera" estuviera involucrada en el proceso (Aguilera, 2006). Sin embargo, este deber ser no estuvo exento de intromisiones del ELN que seguía la estrategia del "entrismo" o inserción en grupos sociales de izquierda, para imponer su hegemonía sobre ellos, con procedimientos poco democráticos y respetuosos de la autonomía de los grupos.

En el Catatumbo, estos procesos sucedieron de manera simultánea con otros proyectos políticos impulsados por actores que también apoyaban otras expresiones organizativas. La confluencia de estos procesos marcó el inicio de rivalidades y desencuentros aún vigentes. Para describir estos inicios, un campesino relata: "Había diferencias políticas, nos presionaban para cambiar de movimiento social. A Trino Torres lo mataron por diferencias del movimiento social. Las rivalidades políticas por Teorama, por ejemplo, dejaron muchos muertos" (Entrevista 2, 2017).

Sin embargo, los movimientos no fueron pasivos ni se estructuraron como una organización supeditada a los designios del grupo armado. Y esto, en buena medida, está marcado por las dinámicas de poblamiento de la región. En ellas ni el ELN ni los demás grupos ocuparon un papel de agente estructurante[42]. Por el contrario, el poblamiento de la región se dio a través de una colonización no asistida, ni por el Estado ni por las guerrillas, con arribo de población previa a la inserción de las insurgencias[43].

Lo anterior indica que el propósito político del ELN en la región ha consistido en un proyecto pensado por la dirigencia, que busca insertarse en las luchas concretas de la población, pero sin tener en cuenta que las condiciones estructurales y subjetivas de la población no corresponden por completo a su proyecto. Esto explica la relativa autonomía de los

---

42 Salvo, quizá, las FARC en la estructuración y regulación de la zona como región cocalera. Pero aún ella debió hacer frente a la regulación en diferentes eslabones de otros grupos armados, y de una relativa autonomía de algunos sectores de campesinos cocaleros.

43 En tres fases distintas ya mencionadas: *boom* petrolero, violencia bipartidista y *boom* cocalero. Ver apartado uno.

movimientos, pero que no se distancian lo suficiente de sus afinidades selectivas para no caer en la estigmatización de otros sectores; quienes instrumentalizan esta situación para justificar actos violentos.

No solo en la región se fueron exacerbando las diferencias, entre los movimientos sociales también estas crecían. Vino después la intervención paramilitar en los 2000, facilitada, apoyada y a veces dirigida por la fuerza pública (Entrevista 7, 2018). En este periodo, la violencia y sus impactos en la población civil y las organizaciones sociales del territorio marcaron la profundización de relaciones muy antagónicas entre el la fuerza pública y el campesinado: "Me contaba un amigo que lo citaron a la Fiscalía, allá le dijeron que si él podía hacer un cara a cara con los paramilitares… Por eso es que la gente no hace nada y se queda quieta, porque le da miedo denunciar" (Entrevista 2, 2017).

Los legados de esta violencia perviven por cuenta de los señalamientos de los que son víctima los miembros de las organizaciones campesinas de la región. De acuerdo con el testimonio de un campesino:

> Cuando un soldado dice: "El Cisca es del ELN", lo que hace es estigmatizarlo. El Estado usa la violencia y las consecuencias de ese mecanismo son políticas. Para algunas personas es más cómodo estigmatizarlo a uno, porque aquí hay violencia política, y nosotros exigimos la garantía de los derechos más básicos. (Entrevista 2, 2017)

De esta manera, el escenario de orden público se traduce en una amenaza evidente y grave a los miembros de estas organizaciones campesinas. La desprotección del Estado y la confrontación entre las insurgencias los expone a una grave vulnerabilidad. Ante esta situación, la respuesta de movimientos como el CISCA ha sido buscar el reconocimiento de su agencia política y de su autonomía de la insurgencia.

Ahora, en la compleja maraña de interacciones regionales, algunas fuentes mencionaron que la instrumentalización de población civil por parte de las insurgencias no ha sido unidireccional. De este modo, la relación de la población civil con la violencia no es solo de oposición a esta. En sucesos muy puntales se habló de casos en que se solicitó la intervención de los grupos armados, lo que significaría una instrumentalización de su poder coercitivo para dar trámite a conflictos propios y saldar desavenencias entre civiles.

Pese a ello, que la población pueda dejar de lado estas tensiones se ha hecho manifiesto en espacios como la Comisión por la Vida y la Paz; es por esto que, a pesar de los desencuentros evidentes entre las organizaciones del Catatumbo, existen posibilidades de articulación alrededor de varios temas: (i) la defensa de los derechos humanos; (ii) el reconocimiento del cultivo de la coca como expresión de condiciones estructurales más amplias relacionadas con un problema agrario no resuelto; (iii) la oposición a

las economías extractivas y la agroindustria; y (iv) la exigencia del reconocimiento político del campesinado como interlocutor válido y dinamizador protagónico del desarrollo regional (Entrevistas 1 y 2, 2017)[44].

En suma, el Catatumbo presenta un escenario de jurisdicciones superpuestas entre regulaciones armadas, regulaciones comunitarias e intentos de regulación del Estado que evidencian un contexto de gobernabilidades híbridas. Aquí, si bien existen ámbitos de regulación por parte de los grupos armados, estos dialogan y entran en conflicto con las comunidades que tienen sus propias reglas. De hecho, en el periodo analizado se evidencia la autonomización de procesos de regulación en comunidades que incluso proponen sus propios manuales de convivencia y hacen que sean respetados por todos los actores de la zona (ver apartado 5).

Relación con el pueblo barí

La primera interacción entre el pueblo barí y un grupo armado fue precisamente con el ELN. Este último fue el autor del secuestro, en 1988, del pastor evangélico Bruce Olson en la zona del Río de Oro del corregimiento de La Gabarra en Tibú. Olson llevaba viviendo con los indígenas por lo menos tres décadas cuando el ELN lo retuvo como prisionero político para ajusticiarle por participar presuntamente en el exterminio del pueblo barí, sin embargo, fue liberado por la protesta de la comunidad. Desde entonces los indígenas consolidaron una interacción de recelo con los grupos armados en general (CNMH, 2019).

A pesar de esos recelos, el ELN estableció con la población barí una serie de acuerdos tácitos y explícitos en los que se consagra el respeto de los espacios y la población del resguardo: la guerrilla, aunque usa el territorio como lugar de paso no entra a los caseríos, respeta sus lugares sagrados, tiende a respetar a las mujeres y no efectúa reclutamientos forzados (Entrevista 20, 2019)[45]. Esta sinergia del ELN con los territorios ancestrales se consolida en la época paramilitar, cuando los resguardos barí fueron zona de repliegue para esta guerrilla. A cambio de permitir su

44 Más adelante se expone el quiebre, cada vez más explícito, entre el Cisca como movimiento social y el ELN. Esta organización social en buena medida comprende el costo que posee la estigmatización, al tiempo que alcanza un nivel avanzado de organización propia. En el análisis, esto desdibuja la posibilidad de situar equivalencias de pertenencia entre un movimiento social y el trabajo político del ELN en la región.

45 El reconocimiento e independencia de los grupos armados se debe, en buena medida, al trabajo de sus autoridades propias. Sus intenciones han sido la pervivencia del pueblo barí, por lo que mantenerse al margen del conflicto armado, que no indiferentes, se convierte en una tarea capital. En este propósito, en el 2018 lanzaron la propuesta de reestructuración de la Nación barí, de carácter binacional, para el fortalecimiento de su identidad como pueblo (Entrevista 3, 2018).

presencia y el compromiso de respetar el territorio, el ELN ayudó a contener la entrada de la coca en los resguardos (Entrevista 21, 2020).

Así, en este periodo, se logró mantener el reducido papel del pueblo barí en la economía de la coca. Precisamente, no forzar la participación en esta economía se convierte en otro indicador del relativo respeto de todos los grupos armados por la autonomía del pueblo barí. Esta comunidad, por ejemplo, se opone a que sus jóvenes trabajen como raspachines ni que tengan cultivos de coca u otros diferentes a sus actividades agrícolas de subsistencia.

Sin embargo, esta relativa armonía, consolidada en los 2000, se rompe en febrero del 2018 cuando el ELN ataca una canoa donde se encontraba el líder indígena Leonardo Catsú en la zona norte del Río de Oro. En respuesta, el pueblo barí no solo intentó expulsar a los elenos, sino también a un grupo de campesinos acusados de condescendencia con los grupos armados, quienes, además, habían prolongado un acuerdo de permanencia en el territorio que estaba por vencerse en los momentos en que ocurrieron estos hechos (*Semana*, 2018a; Entrevista 3, 2018). Al tiempo, el EPL hizo presencia en zonas del resguardo, buscando, de manera arbitraria, rutas y control de pasos fronterizos. Esta presencia fue también conflictiva, pues actuaron desconociendo los acuerdos de relacionamiento establecidos antes con los otros grupos armados (Entrevista 20, 2019). Esta serie de acontecimientos además fueron desencadenantes del conflicto entre el ELN y EPL como se muestra en el siguiente apartado.

Para los barí, estas situaciones elevaron los riesgos de tránsito dentro del resguardo, por el incremento de combates y la posibilidad de encontrar campos minados y munición sin explotar. A su vez, las nuevas tensiones con el campesinado se sumaron a conflictos previos sobre la definición de límites entre los resguardos barí y la propuesta de zona de reserva campesina para el Catatumbo[46].

En medio de estas tensiones, la relación con la coca se hace primaria y se percibe una marcada diferencia: ante su postura más radical frente a esta, los indígenas observan en los campesinos una mayor tolerancia frente a estos cultivos y, por ende, de estos hacia los grupos armados (Entrevista 14, 2019). Además, la constante expansión de la frontera agrícola para el cultivo de la coca traspasa los límites del resguardo y trae consigo efectos colaterales como la aspersión aérea y la llegada de grupos armados para la regulación de sus diferentes eslabones (CESED, 2019; SAT, Defensoría del Pueblo, AT n°. 014-19); presencia que desencadena en acciones bélicas e infracciones al DIH como la expuesta contra el cacique Leonardo Catsú.

46 Conflicto que a 2019 se encuentra en trámites legales y administrativos.

Expresiones del conflicto armado en las territorialidades donde hace presencia el ELN (2010-2019)

Antecedentes

Antes de abordar los acontecimientos del conflicto durante el periodo 2010-2019, es importante establecer un marco de mediana duración, del que hablaremos enseguida en breve. Para empezar, debe admitirse que el conflicto armado en la región se transformó radicalmente con la incursión de los paramilitares de los bloques Norte y Catatumbo, entre 1999 y 2004-2006[47]. Las disputas desencadenadas entre estas estructuras y las guerrillas de la región, sumadas al aumento de la presencia de la fuerza pública, signaron masivas, sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH (Salinas, 2014; Aponte, 2012). La incursión paramilitar ocasionó el debilitamiento de las estructuras armadas de las FARC y el ELN —principalmente—, que se habían consolidado en la región varias décadas antes, implicando también su repliegue hacia las partes más altas del Catatumbo y la frontera colombo-venezolana (Ávila, 2012).

Una vez los paramilitares entregaron las armas, el Estado inició la coordinación de acciones militares y cívicas para la recuperación del territorio, fortaleciendo las operaciones contra las guerrillas y la erradicación de cultivos de coca[48]. Al tiempo fueron conformándose las Águilas Negras, los Urabeños, las Autodefensas Unidas de Norte de Santander Nueva Generación y los Rastrojos, que acogieron en sus filas a paramilitares desmovilizados y no desmovilizados que continuaron, ante todo, la disputa por el dominio de las economías ilícitas de la región (Salinas, 2014).

Aunque ambos aspectos determinaron la continuidad del conflicto armado durante los años siguientes —especialmente la ofensiva militar del Estado—, a partir del 2006 se presenció un relativo desescalamiento de la confrontación, que permitió a los grupos insurgentes fortalecerse, retomar los territorios y regular el retorno de las familias campesinas desplazadas durante la incursión paramilitar (Entrevista 6, 2018). En especial, fueron las FARC-EP las que desarrollaron una superioridad militar en la mayoría de los municipios del Catatumbo, especialmente en Tibú (FIP, 2015) (figuras 7 y 8).

47 Fecha de la desmovilización de estos grupos.

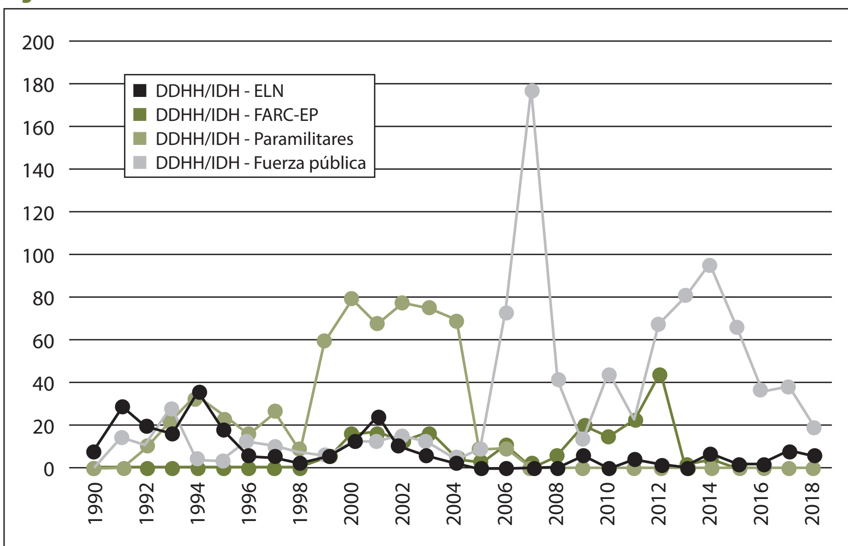
48 En la región se puso en marcha el Centro de Coordinación de Acción Interagencial, preámbulo de la Unidad de Consolidación y Reconstrucción Territorial (Salinas, 2014).

Figura 7. Acciones bélicas

Acciones Bélicas - ELN
Acciones Bélicas - FARC-EP
Acciones Bélicas - Paramilitares
Acciones Bélicas - Fuerza pública
80 70 60 50 40 30 20 10 0
48
67
22
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Fuente: SIG-Cinep/PPP. Elaboración propia.

Figura 8. Infracciones al DIH



Fuente: SIG-Cinep/PPP. Elaboración propia.

Sobre la relación entre las insurgencias, la ausencia de disputas territoriales entre estos actores armados implicó una coincidencia y cohabitación de las FARC-EP, ELN y EPL en la mayoría de los municipios, con veredas y corregimientos diferenciados en los que cada organización ejercía un poder hegemónico. Dicha coexistencia regulada por pactos de no agresión,

propició acciones conjuntas contra la fuerza pública y la coordinación para la fabricación y comercialización de pasta base de coca[49].

Dicha coordinación se tradujo en una división del trabajo en cada uno de los eslabones de la cadena productiva de la cocaína (FIP, 2015). Esta división se resume en que las FARC-EP y el ELN quedaban encargados de regular los primeros eslabones de la cadena productiva (gramaje y transformación); el EPL, de su transporte, y las bandas criminales, de la comercialización y el transporte al exterior. Con el tiempo, el EPL, bajo el mando de "Megateo", comenzó a manejar las líneas y las rutas internacionales del narcotráfico, entablando alianzas con organizaciones trasnacionales que sacaban la cocaína por Venezuela hacia Centroamérica y los Estados Unidos (FIP, 2015).

Ya en 2015, los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo advertían sobre el crecimiento del EPL y sobre su expansión dentro y fuera del Catatumbo, en un intento por ampliar su presencia a nivel nacional[50] (*La Silla Vacía*, 2016). Ante esa situación, la estrategia de combate contra "Los Pelusos" cambió. Con la Directiva 0-15 del 2016, el Gobierno nacional ordenó tratarlos como una banda criminal al servicio del narcotráfico y aplicar "toda la fuerza del Estado" contra sus estructuras[51].

Un año antes de la adopción de dicha directiva, el Ejército dio de baja a "Megateo", mientras que "David León" —su sucesor— fue capturado en Medellín, lo que ocasionó un reacomodo organizacional y una violenta crisis de jerarquía al interior del EPL (*La Opinión*, 2017). Es posible inferir que la necesidad de responder a la ofensiva de la fuerza pública y la disponibilidad de recursos para financiar el fortalecimiento de su capacidad bélica explique el engrosamiento de las filas de este grupo armado, que fue reclutando cientos de jóvenes de no más de 25 años en varios municipios de la región (Entrevista 20, 2018). A esto hay que sumar el rol de la guerrilla en estos territorios, como espacio de movilidad social ascendente que otorga prestigio y acceso a capitales a estos jóvenes.

En 2016, una fuente militar explicaba este fenómeno al portal *Verdad Abierta* en estos términos:

49 Dicha coordinación entre el EPL, el ELN y las FARC-EP habría sido propiciada por Yanith del Socorro Sepúlveda Quintero, alias "Yaqueline", compañera sentimental de alias "Megateo", máximo líder del EPL (FIP, 2015). Sin embargo, en una entrevista realizada a "Megateo" por la *Revista Semana*, el líder del EPL negó el involucramiento de su compañera en estos procesos (*Semana*, 2013).

50 Por ejemplo, en marzo del 2017, este grupo reconocería la creación del Frente Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez en el departamento del Cauca (ELN, 2017).

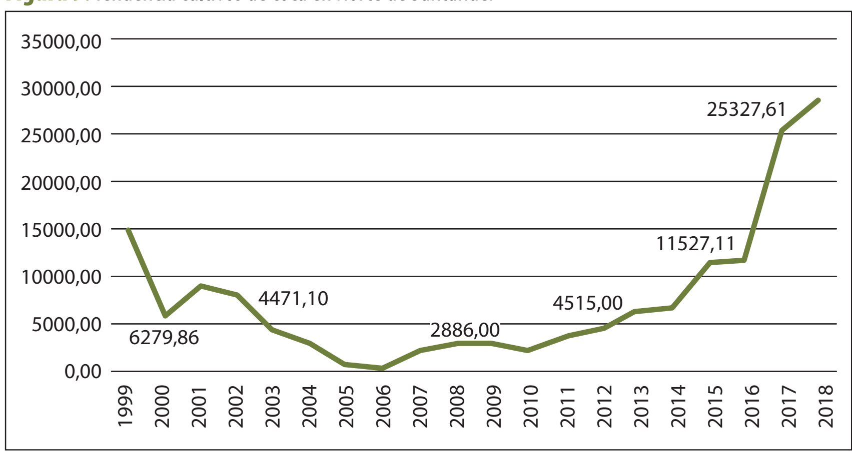
51 Lo que incluye estrategias de ataque aéreo. En consecuencia, el Ministerio de Defensa se comprometió a enviar más militares y a conformar un bloque de búsqueda para bandas criminales y un grupo del Gaula (*Verdad Abierta*, 2016a).

> El principal problema que vemos con "Los Pelusos" es que con los diálogos de paz se ha expandido muy rápidamente y eso es lo que se trata de combatir. Ante los ojos de los desmovilizados, quienes son los que nos cuentan, el EPL se desligó de la doctrina guerrillera para meterse de lleno con el narcotráfico, pues son ellos los que tienen los contactos al otro lado de la frontera. Hemos sabido que tienen nexos con narcos mexicanos, quienes serían sus principales socios. (*Verdad Abierta*, 2016a).

Varias fotografías del panorama anterior se traslapan entre sí, en ocasiones de manera contraintuitiva. Estas se enmarcan en un escenario que, a mediano plazo, da cuenta de las transformaciones e injerencias de los diversos grupos armados, pero, ante todo, de fuertes afectaciones a la población civil, como se verá a continuación.

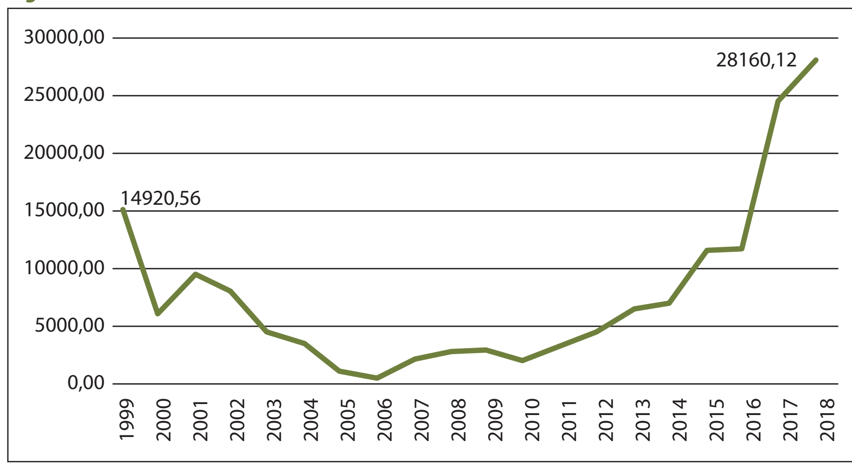
Las figuras 9 y 10 muestran la ya conocida preponderancia del Catatumbo como zona de cultivos de uso ilícito en Norte de Santander. Pero se hacen relevantes las variaciones en la tendencia de cultivos por municipio de la figura 11, que debe ser leída en relación con las cifras de desplazamiento de la figura 12.

Figura 9. Tendencia cultivos de coca en Norte de Santander



Fuente: OCHA. Elaboración propia.

Figura 10. Cultivos de coca en el Catatumbo



Fuente: OCHA. Elaboración propia.

Es evidente que las cifras más bajas de coca se alcanzan de 1999 al 2006, cuando empieza su crecimiento exponencial. Esta franja temporal coincide con la presencia paramilitar en la región[52], que genera fuertes oleadas de desplazamiento, sobre todo en Tibú (ver figura 12)[53]. Es allí donde se da la correlación: hasta 1999 Tibú concentró los cultivos de coca de la región, que, por la entrada paramilitar, causante de las oleadas de desplazamiento, quedan sin doliente y se produce su drástica caída.

Tras la salida del paramilitarismo en el 2004 y el posterior retorno de los campesinos, se evidenció un crecimiento de los cultivos únicamente en Tibú. Los desplazamientos, que también se dieron en zonas altas como Convención y Teorama, generaron rupturas y transformaciones en la economía campesina de la región, sobre todo de quienes aún no eran cocaleros. A su regreso, la falta de otras oportunidades fue tal, que trajo consigo la legitimación de la economía cocalera como mecanismo de subsistencia, y de allí la expansión del cultivo a las zonas más altas (Teorama, El Carmen, etc.) y zonas medias como El Tarra[54]. Un líder campesino lo narró de esta manera: "Antes de irnos teníamos de todo: frijol, yuca, plátano, de todo. Pero cuando volvimos del desplazamiento, que además no

52 Incursionan con la Masacre de La Gabarra (21 de agosto de 1999) hasta la desmovilización del Bloque Catatumbo en 2004.

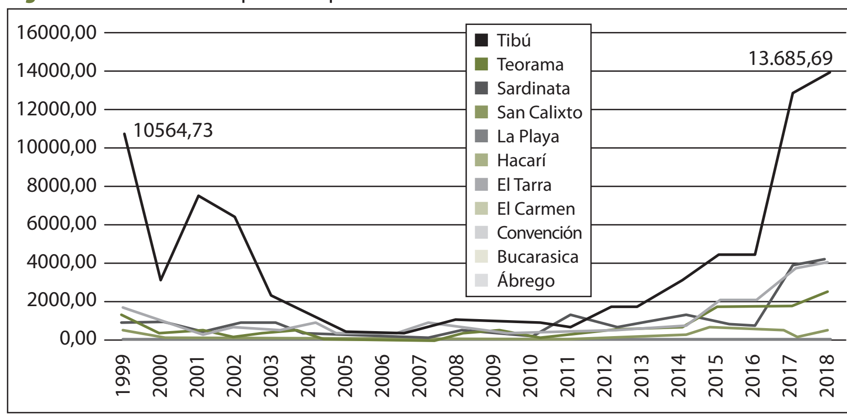
53 La lectura de la región como bastión guerrillero va a ocasionar altos niveles de violencia política y violaciones de derechos humanos y DIH por parte del paramilitarismo.

54 En esta dispersión, Tibú deja de ser el único municipio con presencia de cultivos, aunque o el mayoritario.

fue acompañado, ya la tierra estaba muy dejada y era muy difícil hacer otra cosa. No había más que cultivar coca" (Entrevista 8, 2018).

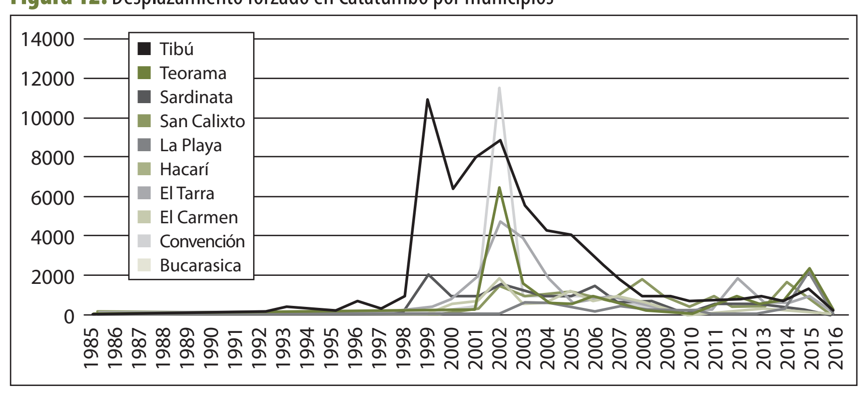
Sumado a lo anterior, en las planicies de Tibú apareció un nuevo fenómeno[55]: las plantaciones de palma de aceite. Estas han sido fuertemente cuestionadas por los impactos ambientales de su cultivo[56], pero sobre todo por la adquisición intensiva de tierras para las plantaciones. Algunas investigaciones dan cuenta de tácticas de compra masiva y acumulación por despojo, donde algunos comisionistas buscaban a las víctimas de desplazamiento, les ofrecieron dinero por sus terrenos, y posteriormente amenazaban a quienes se negaban a su venta, normalmente a un precio más bajo que el valor real de las tierras (CNMH, 2015; *El Espectador*, 2015).

Figura 11. Cultivos de coca por municipios



Fuente: OCHA. Elaboración propia.


Figura 12. Desplazamiento forzado en Catatumbo por municipios



Fuente: OCHA. Elaboración propia.

55 En particular en la entrada sur del municipio, corregimiento de Campo Dos y aledaños.

56 Alto consumo de agua e infertilidad del suelo después de su vida útil.

En este contexto, e incluso desde inicios de los 2000 —como lo señalan varios campesinos de la zona—, el ELN se vio obligado a variar su prohibicionismo frente al cultivo de la coca —regulado desde su llegada por las FARC-EP— para no perder los afectos de sus bases que estaban entrando a esta economía; además de hacerse necesaria y evidente su interacción en algunos de los eslabones de la producción y comercialización, como se verá en el apartado cuatro (ver ELN *y las economías territoriales*).

En suma, cuatro acontecimientos fueron moldeando la región en los últimos 20 años: i) la incursión y posterior desmovilización paramilitar, ii) la aparición de grupos residuales del paramilitarismo, iii) los cambios al interior del EPL con la muerte de su líder y su propuesta expansiva y iv) la dejación de armas de las FARC-EP. Estos sucesos generaron variaciones significativas en los órdenes políticos y sociales[57] existentes en el territorio. Un quinto acontecimiento, ya enunciado, tiene que ver con el conflicto ELN-EPL, y el protagonismo que esta primera guerrilla adquiere por su capacidad de desestabilización regional. A partir de estas transformaciones, se desarrollará la comprensión del conflicto reciente en el Catatumbo en el siguiente apartado.

El conflicto reciente (2010-2019)

Hasta el momento se han dimensionado cambios en el protagonismo bélico del ELN en la región. Las figuras 7 y 8 sobre las acciones bélicas e infracciones al DIH del apartado anterior, junto con la información sobre patrones de violencia, muestran la transformación entre un ELN más confrontacional de los 2000 —en lucha contra el paramilitarismo— y otro que se limita a la acción a distancia y el repliegue, con un renacer de su protagonismo bélico hacia 2018. Esta variación, sin embargo, es diferenciada según el contrincante, ya que mantiene sus repertorios de ataque a distancia con la fuerza pública, típico de su propuesta de *resistencia* contrainsurgente, pero se extiende a la confrontación directa contra el EPL en sus disputas por el territorio. Este último suceso es la centralidad de este apartado.

Las variables que explican el surgimiento del conflicto entre las dos guerrillas son variadas y apuntan a causales militares, sociales y económicas: en lo militar, la salida de las FARC-EP y las tensiones que venían dándose entre ambas guerrillas; en lo social, cambios en las relaciones entre las comunidades y los grupos armados, y en lo económico, la lucha por la

---

57 Orden político entendido como la estructura y distribución de autoridad en tiempos de guerra, cuyas dos variables son la distribución de control territorial y los niveles de cooperación (Staniland, 2012).

injerencia en diversos eslabones del narcotráfico, el contrabando y la extracción de petróleo y combustibles.

La disputa encarna una objetivación de diferencias políticas entre las guerrillas, aunque, para la mayoría de las personas entrevistadas, es evidente que la guerra se ha dado en función del control de territorios estratégicos para el desarrollo de economías ilegales y el de futuras operaciones guerrilleras (Entrevista 6, 2018). Su consecuencia directa ha sido una crisis humanitaria, intensificada con la ruptura de las negociaciones entre el Estado y el ELN en enero del 2019. Entre los mayores perjuicios se cuentan decenas de hechos de desplazamiento forzado[58], un alza en los asesinatos selectivos[59], confinamiento y contaminación de suelos con minas antipersonal[60].

Para los pobladores del Catatumbo participantes de este monitoreo, las consecuencias de esta confrontación han sido especialmente lesivas porque los combates son librados por jóvenes oriundos de la región, en ocasiones parientes entre sí:

> Es una guerra entre las familias, eso no es un secreto para nadie. Hay mamás que tienen un hijo en el ELN, otro en el EPL y el otro excombatiente de las FARC. Entonces, eso ha generado toda una tragedia humanitaria en la zona, y no han respetado el derecho internacional, han tiroteado casas con civiles a dentro, escuelas, minas antipersona, mejor dicho; y pues la economía no está bien en la región ¿no?... No está normal, ahí está ese escenario que preocupa mucho a los habitantes de la región del Catatumbo. (Entrevista 5, 2018)

Estas relaciones de familiaridad no están ausentes de disputas, ni se reducen a simple subordinación y complicidad en la interacción entre civiles y armados; no obstante, permiten la existencia de acuerdos tácitos frente a la selectividad de la violencia, en la que tratan de no convertir las familias en objetivos militares. Sin embargo, un hecho en particular rompe estos acuerdos y agudiza los efectos negativos de la confrontación: la llegada al ELN de integrantes desde Arauca y sur de Bolívar en su proceso

---

58 Según las cifras de Naciones Unidas y del Ministerio Público el desplazamiento forzado en la región se disparó en un 803,5 % en comparación con el año 2016; siendo los enfrentamientos entre el ELN y EPL la causa del 68 % de los hechos registrados. Durante 2018 se presentaron 19 hechos de desplazamiento masivo que involucraron a 13.136 personas equivalentes a 3.878 familias. El 30 % de estas personas no ha cumplido la mayoría de edad y el 0,9 % es indígena. Entre sus principales causas están las acciones bélicas en un 72 % y las afectaciones directas a la población civil en un 28 %.

59 A octubre 31 del 2018 la Policía ha registrado 157 homicidios en los municipios del Catatumbo. En la mayoría de estos casos no se tiene conocimiento de sus responsables y coinciden en que muchos de las víctimas no recibieron amenazas previas y fueron asesinados mientras transitaban en las carreteras que conectan los municipios de esta región.

60 Especialmente en los alrededores de las escuelas, caminos interveredales y centros poblados. En total, se han identificado 11 muertos y 35 heridos, incluyendo combatientes.

expansivo. Estos integrantes foráneos, desprovistos de anclajes sociales y familiares, desconocieron estos acuerdos tácitos, cometieron asesinatos selectivos contra familiares del EPL y confinaron a las poblaciones donde estas se encontraran (Entrevista 21, 2020).

Ahora, de regreso al contexto y otras causas de la confrontación, según Pablo Beltrán —miembro del COCE del ELN— el EPL trató de establecerse dentro del resguardo indígena Motilón barí, buscando controlar el paso fronterizo hasta el sur del Lago de Maracaibo. Allá —según Beltrán— habría llegado a reactivar y a multiplicar las pistas aéreas para sacar la coca:

> El incidente con los barí sucedió porque los que iban en la canoa no quisieron detenerse en uno de los retenes nuestros. Nosotros hemos sido muy críticos de las acciones de esa fuerza [EPL] que hoy se ha desfigurado. Hoy es un grupo al que le importa más la plata que el trabajo organizativo […] Esa frontera es una plataforma de exportación, y con la llegada de ellos allá, están justificando que se desarrolle la guerra contra las drogas, posicionando los intereses de los Estados Unidos en la zona. (Entrevista 4, 2018)

A raíz de este altercado, el lenguaje escaló y los señalamientos mutuos se transformaron en ataques. Este hecho, que detonó la confrontación, pone en evidencia el tipo de conflictos territoriales que dependen de procesos de mediana y larga duración, y terminan por manifestarse de manera violenta.

Por su parte, del relato de las personas entrevistadas y el seguimiento realizado por varias organizaciones al desarrollo de esta confrontación[61] pueden extraerse tres procesos de contexto, que ocurrieron entre 2015 y 2017, y que explican el progresivo escalamiento de las tensiones entre estas guerrillas.

1. *Cambios en las estructuras de autoridad por el repliegue del frente 33 de las* FARC, lo que alteró las formas de regulación en los territorios, así como los acuerdos de cooperación y no agresión que había entre las guerrillas y mantenían un "equilibrio" menos violento en la región (Entrevista 5, 2018; Aponte, 2012). Aunque el cese de actividades militares de las FARC-EP fue evidente y trajo consigo una desescalamiento del conflicto, personas entrevistadas en el bajo Catatumbo coincidieron en señalar que varias de las estructuras de esta guerrilla no interrumpieron su accionar ni dejaron de tener control del territorio (Entrevista 7, 2018). Una opinión similar fue la de algunos pobladores de la región del alto Catatumbo, que manifestaron que la salida de esta guerrilla no implicó, en principio, ningún cambio positivo significativo para la población. Incluso, hubo personas que opinaron que, con el proceso de paz, la situación de seguridad empeoró.

---

61 FIP, Defensoría, Pares, Indepaz, Cinep/PPP.

2. *Las transformaciones en la estructura y el accionar del* EPL a partir de la baja de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias "Megateo", quien había liderado la expansión y el fortalecimiento del EPL más allá de sus zonas de influencia histórica (Hacarí, La Playa y Ábrego) (*Verdad Abierta*, 2018d). Con su muerte y la captura de alias "David León" —un año después—, su sucesor como jefe de la organización, se acrecentó la tendencia hacia una ofensiva expansionista y un crecimiento de su pie de fuerza. El reclutamiento de jóvenes, que carecían de formación política, generó cambios en las formas de relacionamiento de este grupo con la población, dado que los nuevos mandos desconocían a las autoridades civiles y las normas que regulaban la vida cotidiana. Además, las tendencias autoritarias de esta agrupación son percibidas como fruto de su involucramiento en la economía del narcotráfico, lo que es usualmente asociado con la "degradación"[62] de sus estructuras.

3. *El despliegue de una ofensiva estatal contra los grupos armados,* que se compone de distintos planes, operaciones y fuerzas especiales creadas para la recuperación militar del Catatumbo[63], y enmarcadas en el Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación *Victoria*. Estas medidas han resultado ineficaces para el sometimiento de las insurgencias, en parte por la connivencia de la fuerza pública con las economías ilegales, pero también, por la falta de control territorial en la región, junto con la arraigada desconfianza de la población civil en sus efectivos. Entre los entrevistados, existe un consenso en torno a que el aumento del pie de fuerza y la ofensiva militar han agravado la emergencia humanitaria y enrarecido las condiciones de vida de las personas de la región.

Por otra parte, se han dado algunos intentos para desescalar el conflicto. En febrero del 2019, el EPL presentó un comunicado en el que manifestaba su disposición de dialogar para darle fin a la confrontación, previo reconocimiento del ELN de su función como grupo armado insurgente (EPL, 2019). Las exigencias del EPL para dicho diálogo —el levantamiento de vetos a la circulación de personas, el libre ejercicio de actividades económicas, políticas y sociales, la devolución de bienes— dan pistas sobre la forma como estas confrontaciones entrañan una disputa por órdenes políticos, perspectiva que, sin negarlo, va más allá de la noción de control por recursos de economías ilícitas.

La posibilidad de este diálogo, después de un año de combates, pudo deberse a reajustes más o menos satisfactorios en los mencionados órdenes en

62 EPL ¿Guerrilla o banda criminal?, sobre este particular se volverá más adelante.

63 Brigada n°. 30, Batallón Plan Energético y Vial n°. 10, Brigadas móviles (junto a la Infantería de Marina) en el río Catatumbo, Fuerza de Tarea Vulcano (2012), Operación Relámpago Rojo (2016) y Operación Esparta (2018).

disputa. Cabe también la posibilidad de que ambas guerrillas se hubiesen dado cuenta de los costos innecesarios y elevados relacionados con el capital humano, logístico y económico necesario para hacer frente al aumento en la contienda armada —abierta no solo entre ellos, sino también con la fuerza pública—, así como un impacto positivo de la presión civil que se manifestó en su contra desde el aumento de la violencia. Sin embargo, ni siquiera a mediados del 2020 se ha logrado alcanzar un acuerdo de este tipo.

Entre tanto, se vislumbran reconfiguraciones y nuevos escenarios en conexión con todo lo descrito. En primer lugar, la guerra se mantuvo, pero se dieron algunas variaciones y nuevas percepciones de inseguridad. En estos meses se profundizó el papel de la fuerza pública, como se verá en el siguiente apartado, pero aumentó la zozobra con relación a la participación de bandas criminales y la presencia de mexicanos que fortalecieron sus redes de narcotráfico. Algunos pobladores indican la percepción de prácticas similares a los momentos previos a la entrada del paramilitarismo en los noventa: mayor presencia de personas desconocidas; dificultad para la identificación de responsabilidad de un crimen; no identificación de los cuerpos en caso de asesinatos; pagos anticipados por la producción de coca —interpretado como un aumento en flujo de dinero de los grupos armados—, y presencia de unidades extensivas de cultivo de coca, con más hectáreas que las poseídas por las familias cocaleras (Entrevista 17, 2019).

Con todo, entrado el 2020, el balance de resultados militares para el ELN es favorable, pudiéndose considerar este periodo como el de mayor fortaleza en la región. Ante un EPL con varios flancos abiertos y golpes importantes de parte del Estado, aparece un ELN que copa territorios y arrincona a su adversario en sus retaguardias de Hacarí y Sardinata. La presión ha sido tal, que el EPL, en búsqueda de acuerdos de no agresión, intenta solventar problemas internos para cumplir con condiciones impuestas por el ELN de desligarse de grupos residuales del paramilitarismo en sus negocios de narcotráfico[64] (Entrevista 21, 2020), pero un alto al fuego entre ambas organizaciones aún no se materializa.

Ejemplos recientes corroboran la gravedad de la situación por su alto impacto sobre la población civil y reafirman dos de las ideas centrales presentadas hasta ahora: la primera, que el ELN es un actor determinante, pero no estructurante de la región, pues hay actores que le riñen su dominio—, se mantienen disputas territoriales sin un único actor hegemónico—; y la segunda, que la expansión del ELN está en franca lógica con su intento

64 Ejemplo de esto es lo ocurrido el 16 de mayo del 2020, momento en el que el EPL se atribuye la muerte de alias "Grillo", uno de sus comandantes considerado como disidencia y enjuiciado por alianzas con Los Rastrojos en la zona fronteriza de Puerto Santander (Entrevista 21, 2020; *La Opinión*, 2020).

por avanzar en eslabones de la cadena de narcotráfico, pasando de regular gramaje y precursores químicos a rutas de comercialización —para la cual busca corredores fronterizos—. Lo anterior se evidencia a inicios del 2021 con la agudización de confrontaciones entre el ELN y una alianza regional del Clan del Golfo y los Rastrojos. Dicha confrontación viene desde finales del 2019, cuando el fortalecido ELN incursionó en el área rural de Cúcuta, Puerto Santander y el sur de Tibú, lugares estratégicos por sus pasos fronterizos irregulares hacia Venezuela y las rutas de entrada hacia el Catatumbo[65]. La zona estuvo hasta entonces bajo control de Los Rastrojos, quienes desde diciembre del 2020 recibieron el apoyo de las Autodefensas Gaitanistas —Clan del Golfo— que incursionó con el ánimo de sacar al ELN y retomar control tradicional sobre la zona (*La Silla Vacía*, 2021)[66].

En suma, la escalada reciente de violencia del ELN en la región da cuenta de la capacidad de desestabilización regional que posee como grupo armado, sin convertirse de suyo en actor estructurante de la realidad regional. Lograr sostener una confrontación con tres actores (ELP, fuerza pública y alianza Clan del Golfo-Rastrojos) evidencia un fortalecimiento de las estructuras en la zona, con implicaciones diferenciadas en los ámbitos social, económico y militar.

Participación violenta del ELN

Como ya fue expuesto, la participación violenta del ELN en el Catatumbo entre 2010 y 2019 es protagónica, se registra un repunte de su accionar que empieza desde 2012 y se consolida en el 2018 (ver figura 7). Al detallar la participación violenta del ELN, en especial en el conflicto durante 2018 y 2019 con el EPL, se encuentra un escenario de fortalecimiento de esta estructura en su expresión territorial y en ella su capacidad de desestabilización regional. Esta afirmación se nutre de los cambios en sus repertorios de violencia que ya han sido mencionados. El ELN mantiene, por ejemplo, los ataques a infraestructura y arremetidas a la fuerza pública que evitan el combate —uso de francotiradores, minado al avance y emboscadas—. Ahora, en su arremetida contra el EPL se hacen recurrentes los combates y otras formas de violencia que apuntan a su expansión en el territorio y a un aumento de control en el mismo, como los paros

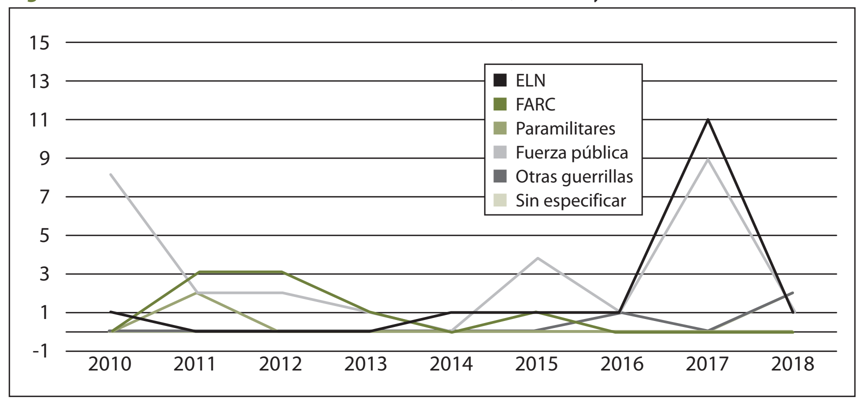
65 El lugar de las confrontaciones deja entrever un fenómeno al que prestar atención hacia el futuro: la imbricación de la violencia entre el bajo Catatumbo y el Área metropolitana de Cúcuta, en cuyos corregimientos rurales ha escalado la violencia y los cultivos de coca (*El Tiempo*, 2020).

66 La incursión del Clan del Golfo se anuncia el 28 de diciembre del 2020 con el desplazamiento de 53 familias en la vereda La Silla, municipio de Tibú, y su posterior confinamiento en una iglesia local resguardándose de los combates. El 6 de enero ocasionaron otro desplazamiento de 40 familias en la vereda El Ambato del mismo municipio (*La Opinión*, 2021).

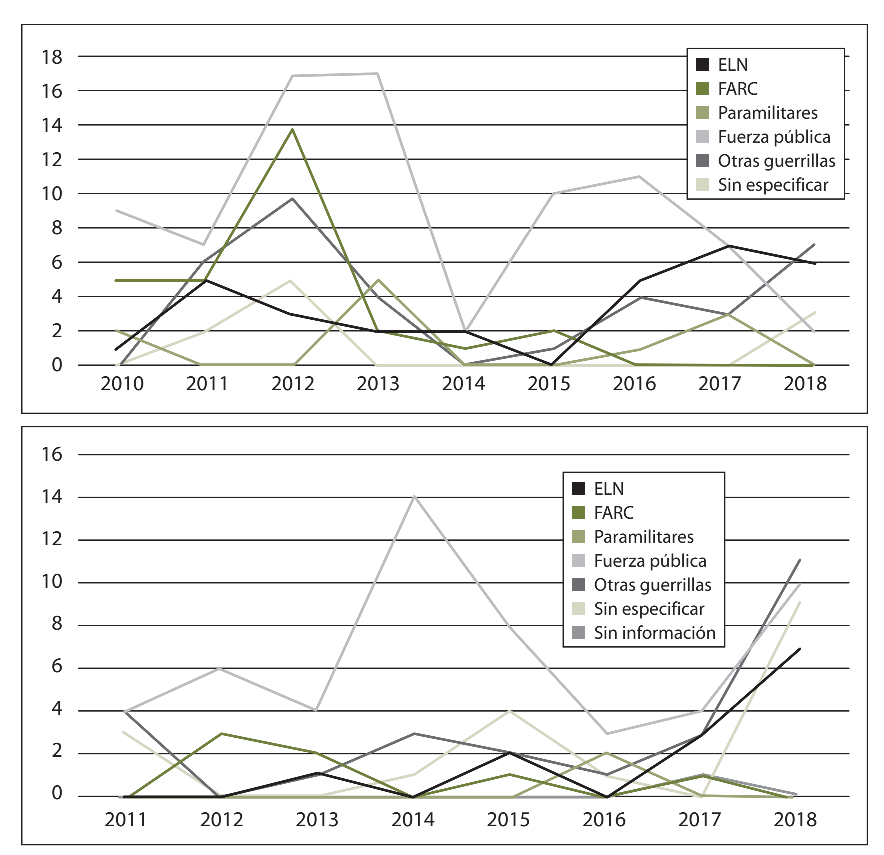
armados, retenes, citaciones a la población civil y la plantación de campos minados —estos han sido instalados, sobre todo, en las zonas altas de la región, afectando la movilidad de la población— (Entrevista 20; 2019; Comisión por la Vida, 2019).

La expresión geográfica de los combates también se manifiesta en las zonas altas de la región y de los municipios *per se*. Esto ha implicado que las acciones se den en inmediaciones de centros poblados como San Pablo en Teorama, San Calixto y Convención, y en zonas más apartadas como en poblados barí en el norte de Tibú, en las inmediaciones con la frontera venezolana (OCHA, 2018; Cinep/PPP, 2018). También ha habido una expansión del accionar eleno a municipios de la zona más sur del Catatumbo como Ábrego, La Playa de Belén y Hacarí; este último llama la atención por ser el bastión tradicional del EPL y el refugio de su anterior líder "Megateo"[67]. Cabe anotar que el aumento en las acciones en estos municipios es previo a la visibilización que tomaron por la confrontación abierta con el EPL desde marzo del 2018, sobre todo en los municipios de Convención, Hacarí y Teorama (ver figura 13 y anexos).

Figura 13. Acciones bélicas e Infracciones al DIH en El Carmen, Teorama y Hacarí



67 Sobre esta variación en las presencias municipales, hubo acciones del ELN en Hacarí hacia el 2015, año en que aún no se había iniciado el conflicto con el EPL y se presumían alianzas entre ambas guerrillas para hacer presencia conjunta en estos territorios (Entrevista 20, 2019; SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-18).



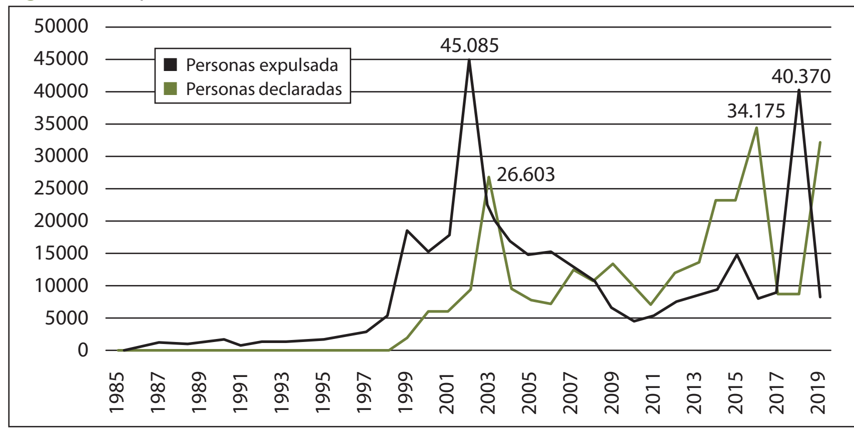
Fuente: SIG-Cinep/PPP. Elaboración propia.

Por su parte, el impacto humanitario de estas confrontaciones es bastante crítico. Basta con observar diversos informes que recogen sus repercusiones (Comisión por la Vida, 2019; Human Rights Watch, 2019) o centrarse en el factor desplazamiento para dimensionarlo. Así, por ejemplo, 2018 representa el segundo pico más alto de personas expulsadas en el departamento después de la violencia paramilitar a inicios de los años 2000 (ver figura 14). A pesar de que la gráfica muestra un descenso en el año 2019[68], la permanencia de los combates ha llevado a nuevos casos de desplazamiento que se prolongan hasta el 2020 (EFE, 2020). La respuesta de la población civil a esta situación, como se expondrá a profundidad en

68 Con un subsecuente aumento en casos de personas reconocidas. En los datos de la figura 12 los fenómenos del acto de desplazamiento y su reconocimiento son contrarios, lo que puede deberse a la temporalidad de las acciones burocráticas para lograr este reconocimiento ante la Unidad de Víctimas.

el apartado 5, es la construcción de refugios humanitarios que atienden la situación cuya naturaleza es, ante todo, de desplazamiento intrarregional.

Figura 14. Desplazamiento en Norte de Santander



Fuente: RNI-Unidad de Víctimas. Elaboración propia.

Al desplazamiento se suma su contraparte: muchas comunidades han sido obligadas al confinamiento y la obstrucción al paso de víveres, tanto por acciones de paro armado como por los combates. A su vez, varias de estas confrontaciones entre el ELN y el EPL se han dado en inmediaciones de escuelas y de refugios humanitarios, vulnerando aún más la integridad de estas personas (Cinep/PPP, 2018).

De igual manera, se ha afectado el ejercicio de la política y la comunicación local por parte de todos los actores. Por ejemplo, el ELN amenazó a algunos funcionarios públicos de Hacarí y San Calixto, señalándolos de asistir con víveres y atención médica a miembros del EPL en los refugios humanitarios (Cinep/PPP, 2018); mientras que diez presidentes de juntas comunales del casco urbano del Tarra renunciaron a su cargo por amenazas del EPL (Cinep/PPP, 2018), y los trabajadores de la emisora Manantial de Convención fueron acusados por la fuerza pública de ser facilitadores de la guerrilla, luego de que estos fueran obligados por el EPL a leer un comunicado.

El discurso ha sido otra estrategia para agudizar la confrontación y dificultar la salida negociada entre las guerrillas. El ELN niega el estatus político del EPL y se rehúsan a llamarles "Pelusos", como les denomina el Gobierno, por el contrario, el ELN ha optado por nombrarlos "ParaMegas". Ambas denominaciones insisten en ver al EPL en función de su relación con estructuras narcoparamilitares, alianzas que sirven de argumento para negarle a este grupo cualquier motivación y proyecto político (ELN, 2018a, 2019a).

Por otro lado, la confrontación ha dejado en evidencia el reciclaje de repertorios de violencia, con graves afectaciones a la población: varias

prácticas del ELN parecieran recoger aprendizajes del accionar del paramilitarismo en el pasado. Por ejemplo, sobresale la violencia directa contra las bases civiles de una organización armada, que incluye asesinatos selectivos a familiares de integrantes del EPL y confinamiento a comunidades consideradas como de base social de ese grupo armado, donde residen familiares de algunos de sus miembros. Incluso, varios integrantes del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) restringieron su participación activa en los comicios de octubre del 2019 por amenazas del ELN, los cuales son considerados como base social de EPL (Entrevista 15, 2019). En esto, como ya se mencionó, es clave la llegada al ELN, en el marco de este conflicto, de integrantes araucanos y del sur de Bolívar desprovistos de lazos de familiaridad en la región.

Por último, hay que anotar la eventual configuración de interacciones entre grupos armados bajo la lógica "el enemigo de mi enemigo es mi amigo". Una alianza entre el ELN y la disidencia de las FARC-EP surge como una posibilidad, si se tienen en cuenta las declaraciones de Iván Márquez el 29 de agosto y otros acontecimientos que relacionan agresiones a reintegrados de las FARC-EP por causa de estas alianzas[69]. De otro lado, la fuerza pública parece leer las posiciones en disputa en sentido similar, cuando habla de la puesta en marcha de una alianza con el EPL para atacar al ELN (*Semana*, 2019a), en el marco de una cuestionada intervención en el conflicto entre las insurgencias, como se presentará a continuación.

Respuesta del Estado

En las últimas décadas, el Estado ha comprendido las problemáticas del Catatumbo exclusivamente como un problema de orden público, por lo que su intervención en la zona prioriza la respuesta militar por sobre la inversión en materia de integración social. Esta percepción se evidencia en las condiciones precarias en el acceso a salud, educación, servicios públicos, etc. (Comisión por la Vida, 2019; Entrevista 7, 2018), y a su vez, en la continua participación de la fuerza pública como actor armado preponderante en la región, como puede observarse en las figuras 7 y 8.

Su respuesta, sin embargo, no es estática. Entre 2010 y 2019 se presentaron por lo menos dos cambios de enfoque de acción en respuesta a la

69 En la alocución donde Iván Márquez "formaliza" la existencia de disidencias de las FARC, se habla de la búsqueda de estas alianzas. Días antes, se realizó un atentado contra Rubén Zamora, antes comandante del Frente 33 de las FARC-EP y candidato a la asamblea de Norte de Santander por el partido político de la antigua guerrilla (*El Espectador*, 2019f). Algunos señalan que el desconocimiento de Zamora de la identidad de quienes se identificaron como miembros de la disidencia de las FARC en su detención, empieza a señalar el trabajo conjunto entre ambas agrupaciones (Entrevista 13, 2019).

presencia de los grupos armados y de los problemas generales de la zona. Como se observa en la figura 7, en el 2012 hay una reducción sustancial de las acciones bélicas tanto de la fuerza pública como de las FARC-EP gracias al inicio de los diálogos de paz de La Habana. Reducción que, a pesar del aumento en las cifras en los años siguientes, van preparando el terreno para el primer giro en la respuesta del Estado: la puesta en marcha del acuerdo final en el territorio.

El inicio de un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito en Caño Indio —corregimiento de Tibú— y de la construcción de un Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), suponía un cambio en la acción del Estado a los ojos de las comunidades, que valoraban positivamente las promesas y las variaciones en el trato hacia ellas en las que resaltan: una comprensión de sus condiciones históricas, un relativo mejor ambiente de confianza y la reducción, por lo menos desde el discurso, de las estigmatizaciones de las que han sido objeto (Ortega, 2018; Carvajal, 2019). Esta esperanza, nacida no sin cierto recelo, empieza a disminuir con las dificultades propias de la aplicación del acuerdo final desde el gobierno Santos y los virajes en esta materia generados por el gobierno Duque.

Ya en este gobierno se da el segundo giro: se retoma la prioridad de la fuerza pública y la respuesta en clave de orden público. En esto, según lo observado, cumple un propósito la renovada atención en el ELN, a saber: considerarle el enemigo prioritario en el nivel nacional[70]. Para el caso regional, la ruptura de la mesa de negociaciones en enero del 2019 prolonga la existencia del ELN como grupo armado, que ahora se plantea en un papel protagónico. La ruptura de las negociaciones se da en paralelo a la desestabilización regional producto del conflicto ELN-EPL, que llevó al Gobierno a poner mayor atención sobre la región, al punto de que lo que allí suceda, se asume como un asunto de interés nacional[71] (Entrevista 20, 2019).

Para esta priorización, el Gobierno nacional, previa aprobación de la Ley 1941 en diciembre del 2018 —que modifica algunos artículos de la Ley

70 Se evidencia también que, después de la ruptura de las negociaciones en enero del 2019, hay un cambio en las referencias nominales sobre el ELN por parte de la fuerza pública. Es así como aparecen referencias a esta guerrilla como Grupo Armado Organizado-ELN, GAO-ELN (CGFM, 2019).

71 Esto se evidencia, entre otras cosas, en las visitas del mismo presidente a la zona. En su segundo día de mandato, Duque hizo una visita a Tibú donde encabezó un consejo de seguridad e inauguró una planta procesadora de aceite de palma (*El Tiempo*, 2018a), en octubre del mismo año activó en Ocaña la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA III) (RCN Radio, 2018), y otro consejo de seguridad en enero del 2019 llevado a cabo en Tibú para la valoración de avances (*El Tiempo*, 2019). Tal es la comprensión de interés nacional en esta materia que, cuando se trata de hablar de la estrategia de seguridad y de acción de la fuerza pública en terreno, se ha vetado la presencia de otras autoridades regionales y locales como el gobernador de Norte de Santander William Villamizar. Los asuntos en los que sí son incluidas, son los relativos a la política social (Entrevista 20, 2019; *La Opinión*, 2019a).

418 de 1997 o Ley de Orden Público—, define al Catatumbo como una de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), que tienen como referente a las Zonas de Rehabilitación y Consolidación aplicadas por Álvaro Uribe en sus periodos presidenciales (Entrevistas 20, 14 y 15, 2019).

Una vez clasificado el Catatumbo como ZEII, y tras varias visitas del presidente Duque, se anunció el fortalecimiento de la fuerza pública con miras a enfrentar al ELN como uno de los objetivos principales[72]. Esto ha implicado que, en materia de pie de fuerza, se registre la presencia de 12.000 efectivos, sumados a los 5.000 que hacen parte, desde octubre del 2018, de la nueva Fuerza de Despliegue Rápido n°. 3 (FUDRA) (*Semana*, 2018b). Esta estructura refuerza las divisiones ya existentes en la zona, de las que resaltan la Fuerza de Tarea Vulcano y el Batallón de Ingenieros n°. 30.

El establecimiento de la ZEII pretende una intervención que articule, en su integralidad, no solo las mejoras en condiciones de seguridad, sino también la formalización de la propiedad de las tierras, la cofinanciación de proyectos con los municipios y el arreglo de vías secundarias y terciarias (*Verdad Abierta*, 2019). Con estos propósitos se crea el plan Catatumbo Sostenible para dar respuesta a estas necesidades. Al respecto, el Gobierno ha anunciado avances en materia de financiación para educación y salud, y su respaldo al proyecto de inversión para la carretera desde El Tarra hasta Convención (CPEC, 2019a; CPEC, 2019b). Esta última acción guarda relación con las formas propias de organización y trabajo comunitario que han mantenido mínimamente esta vía, eje central para la comunicación entre los municipios de la región, a través del cobro de peajes comunitarios, como se verá en el apartado cinco.

Ahora, la respuesta de la fuerza pública a la amenaza con que interpretan al ELN en el Catatumbo se ha desarrollado a través de varios planes y estrategias. Resaltan la operación Relámpago Rojo como respuesta nacional focalizada en los elenos; y, para el caso del Catatumbo, la operación Esparta, como trabajo conjunto entre fuerzas militares, Policía y Fiscalía; hoy en día enmarcada a nivel nacional en la operación Horus y el plan de campaña Bicentenario Héroes de la Libertad. Las intervenciones se han centrado en dos acciones puntuales: primera, en golpes directos a la estructura militar cuyo repertorio principal han sido las capturas de integrantes del ELN, con afectación especial a la compañía Héroes del Catatumbo (CGFM, 2019g); y segunda, en daños a la estructura económica del ELN por medio de golpes al narcotráfico con desmantelamiento de laboratorios e

---

72 En palabras del presidente Duque: “El mensaje es claro: en la región del Catatumbo, vamos a seguir fortaleciendo cada vez más las acciones de la fuerza pública para que este territorio deje de ser inclementemente perseguido por esos brazos asesinos de la criminalidad organizada, como el ELN”. (*El Tiempo*, 2019).

incautación de insumos y precursores químicos. Para la fuerza pública, la relación de la guerrilla con el negocio es innegable, precisando que dichas intervenciones son un golpe sobre todo contra el Frente Juan Fernando Porras (CGFM, 2019a, 2019d, 2019f). También han tenido cabida la incautación de material de guerra, la frustración de presuntos atentados y la liberación de personas secuestradas (CGFM, 2018, 2019b, 2019c, 2019e).

A pesar de esto, la entrada de la FUDRA-III ha tenido efectos negativos sobre la población civil, con denuncias correspondientes en mayor medida a los municipios del alto Catatumbo (*Verdad Abierta*, 2018b), en correlación directa con las zonas más afectadas por el conflicto entre el ELN y el EPL. En el marco de la Comisión por la Vida y la Paz del Catatumbo, se crea una misión de verificación que, en su segundo año, se encarga de evaluar esta situación. Luego de un primer informe que analiza los perjuicios de la lucha entre el ELN y el EPL, la segunda entrega de sus informes se centra en la respuesta del Estado, donde la intervención de la FUDRA es leída con preocupación. Entre los perjuicios, se señalan el uso indebido de las casas de los campesinos para la acampada de la tropa, el acaparamiento de provisiones, la contaminación de fuentes de agua usadas por los campesinos, la destrucción de cultivos de pancoger —causal de desplazamiento—, los señalamientos a la población civil, las detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales (*El Espectador*, 2019c; Comisión por la Vida, 2019; Cinep/PPP, 2018).

Los señalamientos a la población son producto, entre varias razones, de una de las prácticas de control y/o interacciones más comunes entre grupos armados y civiles en la región: las citaciones a encuentros y conversaciones. Esta práctica resulta riesgosa para la población civil por acción u omisión: si asisten son señalados de colaboradores del actor que los convoca, pero de no hacerlo, son señalados de auxiliadores del enemigo[73]; afectando así el principio de distinción entre civiles y combatientes. Tal falta de distinción, a causa de estos señalamientos, es ejercida por todos los actores armados sin distinción, incluida la fuerza pública como ya se mencionó en el accionar de la FUDRA en el Catatumbo (Comisión por la Vida, 2019; Entrevistas 20 y 15, 2019).

De entrada, este tipo de conductas van en contravía de una de las pretensiones estratégicas de la FUDRA en la región. Su accionar, que es de movilidad constante de la tropa, busca generar una reconfiguración social que permita crear las condiciones para una presencia permanente de la fuerza pública en los territorios. Para este propósito, es necesario

73 Ahora, visto desde afuera, acudir significa que se es "auxiliador" del convocante. La persona que acude a estas citaciones no está exenta de ser tratada con recelo por parte del grupo armado convocante.

generar confianza, pero todos los inconvenientes ya mencionados revierten esta intención (Entrevista 20, 2019). Adicionalmente, dos hechos que han marcado la desconfianza han sido la muerte del excombatiente de las FARC-EP, Dimar Torres, en abril del 2019 y el escándalo del New York Times sobre exigencias de bajas a la fuerza pública, como modelo de incentivos similares a los relacionados con los *falsos positivos* (*El Espectador*, 2019a; Casey, 2019). De suyo, acciones de apoyo comunitario a través de la acción integral[74], o la petición de perdón por el asesinato de Dimar Torres por parte de Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, se ven como intentos insuficientes por resarcir los agravios descritos (Entrevista 20, 2019).

Para muchos sectores, esta pretensión simbólica se deslegitima con denuncias como las registradas en el informe de la misión de verificación sobre la política de aumento de bajas y sus efectos, a lo que se suma los posibles nexos entre la fuerza pública y grupos armados ilegales. Como sustento de estos nexos, por ejemplo, en enero del 2019 la *Revista Semana* publicó que el mismo comandante Diego Luis Villegas se pronunció en una reunión a puerta cerrada sobre la necesidad de dar la mayor cantidad de bajas posibles, y de generar pactos con el EPL para atacar al ELN (*Semana*, 2019a).

Por último, hay que mencionar que la categoría del Catatumbo como ZEII responde a cambios frente a los cultivos de coca, tras el abandono de la sustitución como eje central de la política nacional antidrogas. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo se estipula que el Ministerio de Defensa asumirá responsabilidades primarias en el tema; para lo cual la creación de las ZEII resulta conveniente, pues se prioriza la erradicación y se condicionan los programas de sustitución a garantías previas de condiciones de seguridad para su puesta en marcha (González Posso, 2018)[75]. En últimas, a 2019, la respuesta del Estado muestra una reedición de estrategias de recuperación militar del territorio que desde antes se han demostrado ineficaces.

Transformación de los órdenes armados

Lo expuesto hasta aquí evidencia que comprender los acontecimientos descritos[76] a la luz de la explicación de *vacíos de poder* es una mirada errada y cortoplacista. Si se analiza con detenimiento, también dejando atrás

---

74 Brigadas de salud, campañas lúdicas, limpieza de parques, conciertos, proyecciones de cine, entre otras (CGFM, 2019j, 2019h, 2019i).

75 "Para la sustitución de cultivos se deben garantizar condiciones de seguridad y asegurar un adecuado control, seguimiento y verificación de los procesos de erradicación y de la implementación de las opciones lícitas alternativas" (DNP, 2018, citando en González, 2018).

76 Como la salida de las FARC-EP y la guerra entre el ELN y EPL.

el supuesto de desorden y anarquía de estos espacios, lo que se pone de manifiesto es un *cambio en las estructuras de autoridad* en diversos ámbitos de la vida regional; que a su vez puede ser leído como una transformación de los órdenes sociales armados previamente existentes[77]. Con estos cambios, lo que se verá a continuación es una clara tensión entre sus medios en la confrontación —que han sido excesivamente violentos, con rupturas tajantes en la relación entre la población y los grupos armados— y sus prácticas de regulación social y bienestar ofrecidas, que resultan útiles para ciertos fines de los pobladores.

Para su comprensión, estos recientes cambios en los órdenes sociales armados requieren abordarse a través de una lectura multiactor. El papel que el ELN va tomando en ellas depende de la forma como en el pasado se delimitaron las prácticas y rangos de influencia de los demás grupos armados y las relaciones entre estos. De aquí surgen factores vinculados a los conflictos ya descritos y el papel en las economías legales e ilegales. Esto último se expondrá a profundidad más adelante.

Por ahora, se mencionan las diferencias establecidas entre el ELN y el EPL en cuanto a su relación con la población, sus transformaciones y el papel que estas jugaron en la puesta en marcha de sus confrontaciones. En los últimos años, el EPL estableció un nexo con la población de corte bienestarista, favorecido por el influjo carismático de "Megateo". Esto estaba mediado por las reglas y pautas en el negocio de la coca, actividad en la que EPL se estableció como principal garante de las grandes negociaciones, generándole un mayor músculo económico y permitiéndole establecer ese tipo de interacciones con la población. Por su lado, las FARC-EP se mantuvieron como reguladores de los primeros eslabones de la cadena del negocio, con resultados favorables en el manejo de la protesta social ligada al tema cocalero. El ELN en ambos casos vino jugando un papel más secundario[78].

El bienestarismo, padrinazgo y el liderato del EPL en los asuntos del narcotráfico se veían reflejados en acciones puntuales. Por ejemplo, realizaban pagos de contado en las transacciones de hoja de coca o pasta base, mientras el ELN y las FARC podían tardar incluso meses en realizarlos (*Verdad Abierta*, 2016b). En sus zonas de influencia el EPL llegó a pagar los servicios públicos y las deudas, incluso suministró el dinero para la compra de alimentos y demás bienes. En este aspecto, la relación con la población civil para el mantenimiento de la tropa también se hizo disímil: mientras el ELN y las FARC-EP seguían reportando casos de "donaciones" o usos arbitrarios de semovientes y enseres para la alimentación

77 Entendidos a la luz de los postulados de Paul Staniland (2012).

78 Este se debe a su relación ambigua con el narcotráfico, que en todo caso condiciona su papel respecto a los otros grupos armados, pero no lo deja por fuera del escenario.

de su personal, la tendencia del EPL era a pagar, y al contado, por estos recursos (Entrevista 20, 2019).

Las formas de reclutamiento también fueron objeto de estas diferencias. A pesar del evidente uso del reclutamiento forzado por parte de todos los actores, como evidencian varios documentos de denuncia (SAT, Defensoría del Pueblo, NS n°. 002-11, IR n°. 021-16, AT n°. 014-19), el EPL se valía, para las formas no forzadas de reclutamiento, de la provisión de armas, motocicletas, dinero y demás símbolos de estatus a los jóvenes integrados (Entrevistas 15 y 20, 2019), mientras en el ELN primaba la disuasión y el convencimiento como formas de reclutamiento.

Gran parte de estas maneras de interacción del EPL con la población dependía del papel que "Megateo" jugaba en la organización con relación a la población en los lugares de retaguardia, y del desempeño en los negocios del narcotráfico. Su muerte, los sucesivos golpes a los altos mandos de la organización y el relevo generacional causaron una importante variación en las relaciones entabladas con las comunidades, que se fueron exacerbando con el tiempo hasta encontrar cabida en la confrontación con el ELN.

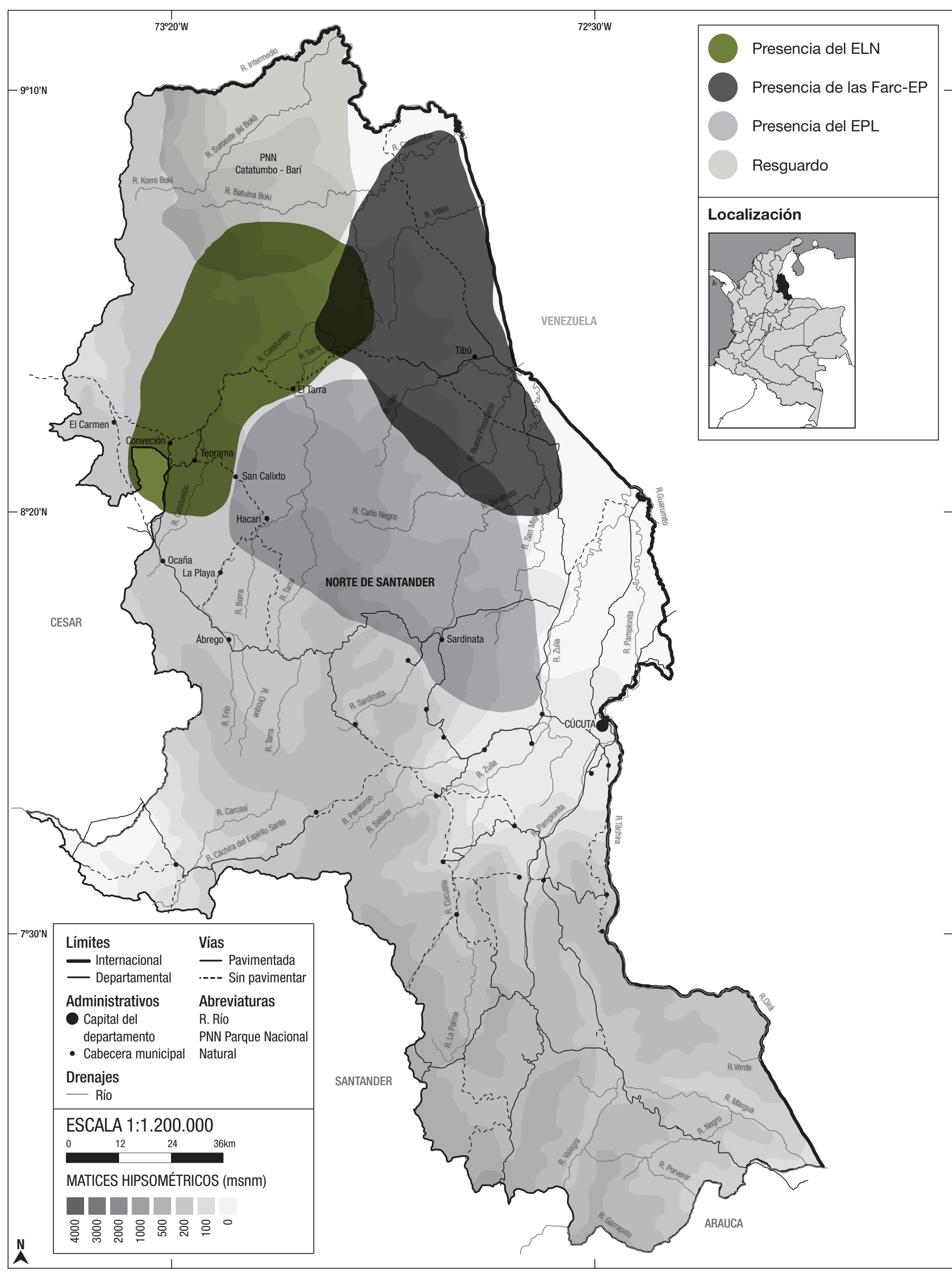
Estas variaciones se notan en cambios de actitud hacia la población. Primero, los descuidos del EPL en las relaciones bienestaristas y de padrinazgo en sus zonas de retaguardia; segundo, el aumento de duras imposiciones del EPL en los lugares donde llega, desconociendo acuerdos previos de las comunidades con los grupos armados, aplicando limpieza social e imponiendo restricciones a la movilidad y al desarrollo del comercio. Ante estos agravios, algunas comunidades hicieron un llamado al ELN para que entrara a mediar y confrontar los atropellos del EPL (Entrevistas 15 y 20, 2019); al inicio, esto dio más causales a la confrontación entre ambas organizaciones.

En el panorama aparecen también atropellos al pueblo barí. Está la ya nombrada muerte del cacique Leonardo Catsú por parte del ELN en la zona norte de Convención, lo que llevó a los barí a promover la expulsión de los grupos armados de sus territorios (*La Opinión*, 2018a). A parte de este particular, se dieron otros casos que tensionaron los arreglos tácitos con el pueblo indígena. En sus territorios, los grupos armados fueron configurando acuerdos que incluían el uso de estos solo como corredores hacia la frontera, sin el ingreso a los centros poblados indígenas ni a los lugares sagrados, la prohibición de reclutamiento y de maltrato a las mujeres y niños. Sin embargo, en el último año se reclamó el incumplimiento de estas reglas, en especial por parte del EPL (Entrevista 15, 2019)[79].

---

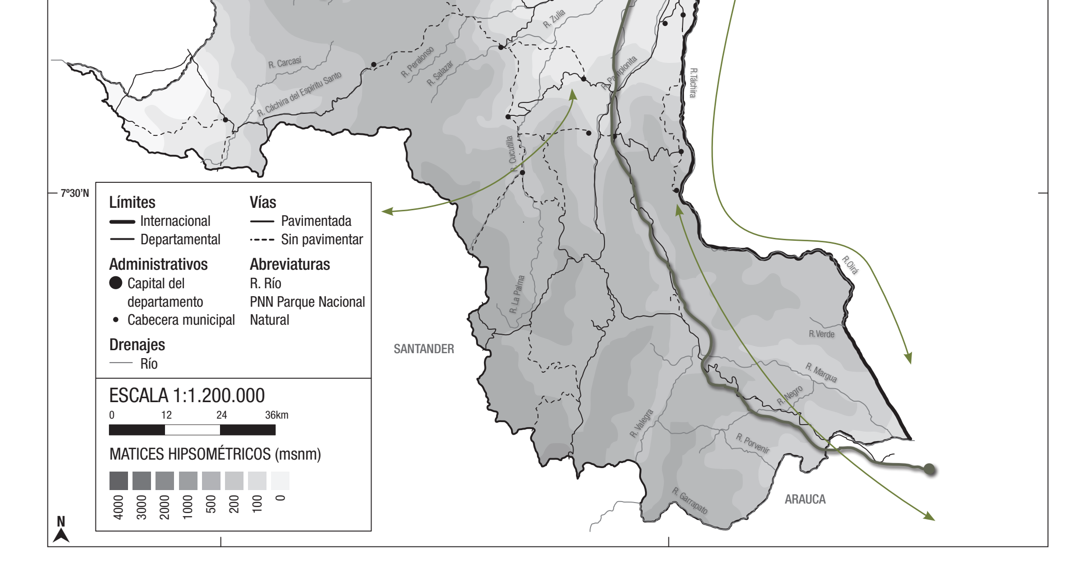
79 También existen tensiones con la fuerza pública. La instalación de bases militares para confrontar grupos armados que hace tránsito en el territorio aumenta las posibilidades de afectación a la población barí (Asociación Minga, 2019; Entrevista 20, 2019).

Mapa 1. Catatumbo. Actores armados 2010-2016



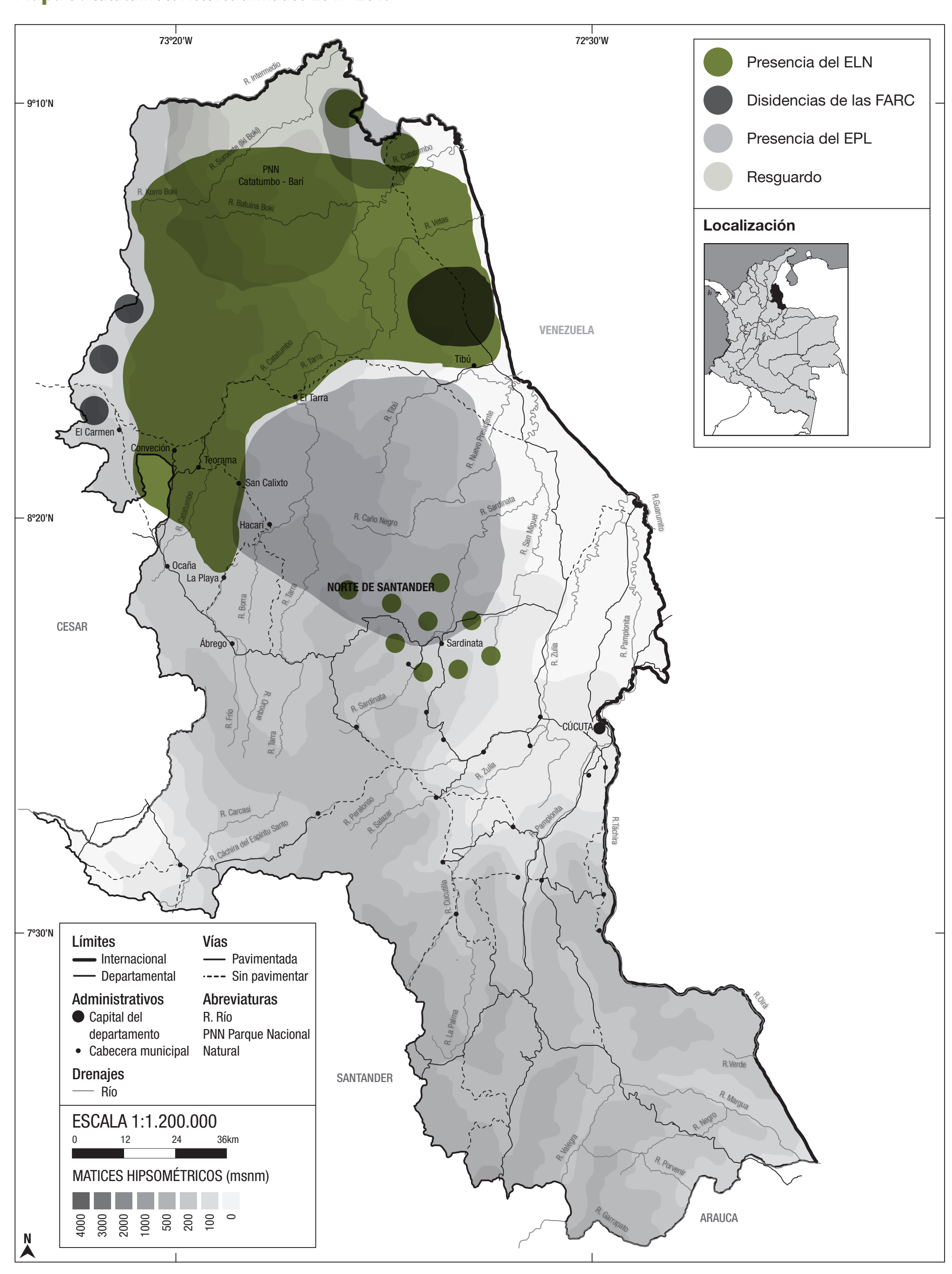
Fuente: Elaboración propia.

Mapa 2. Catatumbo. Economías territoriales 2010-2016



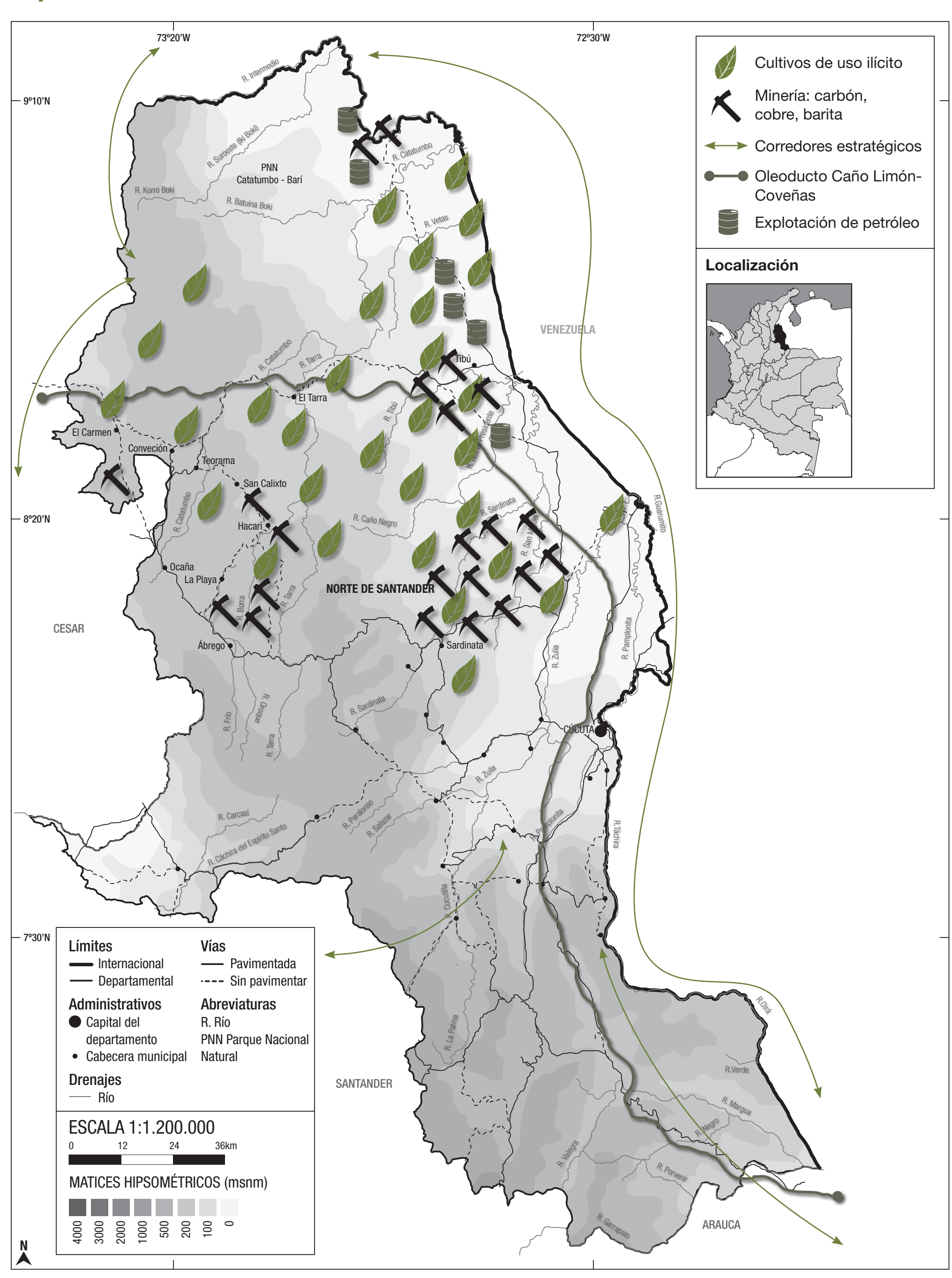
Fuente: Elaboración propia.

Mapa 3. Catatumbo. Actores armados 2017-2019



Fuente: Elaboración propia.

Mapa 4. Catatumbo. Economías territoriales 2017-2019



Fuente: Elaboración propia.

En general, los desenlaces del conflicto entre 2018 y 2019 generaron traumatismos bastante fuertes en la relación entre los grupos armados y la población civil. A esto súmese la carga simbólica negativa por la vinculación directa de los movimientos sociales con las insurgencias, lo que desencadenó el surgimiento de espacios como la Comisión por la Vida y la Paz, iniciativas que pretenden marcar una ruptura frente a ese escenario y mostrar el rechazo absoluto de la población a los últimos picos de violencia.

Este incremento de violencia resquebraja no solo el tejido social al interior de las comunidades, sino también la relación que estas fueron estableciendo en el tiempo con los grupos armados. Los últimos años en el Catatumbo muestran un aumento de la desconfianza entre ambos sectores y, por ende, una interacción más coercitiva por parte de los grupos armados, ante una población civil que, contrario al hábito de pensamiento, responde con mayor articulación de resistencia ante la guerra.

Ahora bien, el cambio en las estructuras de autoridad se gesta desde antes de la salida de las FARC-EP en febrero del 2017 y a la confrontación ELN-EPL en marzo del 2018. Por lo menos desde el 2015 e inicios del 2016, se vienen registrando variaciones en los mecanismos de control social (cobro de extorciones, entre otros); estas evidencian que, desde entonces, el Frente 33 de las FARC-EP había venido cediendo progresivamente su control al ELN y EPL. Para este segundo, su carácter móvil en muchos territorios, característica favorable a su función reguladora en el narcotráfico, le era más beneficioso en términos monetarios, sin entablar dominio sólido en estricto sentido. En esta primera fase existieron trabajos coordinados con el ELN, sobre todo para garantizar presencia en cascos urbanos como Tibú (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16), con desenlaces poco satisfactorios un par de años más tarde.

Así empiezan a configurarse los nuevos órdenes que tienen como último actor de este capítulo la disidencia del Frente 33 de las FARC-EP. Esta ha hecho su aparición en algunas zonas, sobre todo del área rural de Tibú, ejerciendo fuertes presiones sobre la población en aras de retomar su papel en la región y en la economía cocalera (Entrevista 10, 2019). Pese a ello, más allá de la extracción de recursos, el papel de dirección social sobre el primer eslabón de la cadena de la coca no tiene doliente definido. Ante la salida de las FARC-EP[80], el ELN intenta cooptar estos espacios de regulación en torno a la coca, pero la falta de experiencia le juega en contra, como se verá a profundidad en el siguiente apartado.

---

80 Su ausencia se sintió particularmente en algunos escenarios. Por ejemplo, en La Gabarra les decían a su salida hacía Caño Indio: "¿Por qué se van?, ¿acaso quieren que nos maten?" (Campo, 2019).

El ELN y las economías territoriales

La relación del ELN con la economía del Catatumbo responde al contexto regional y a su proceso de inserción y desenvolvimiento, así como a la interacción con la población civil y de esta con los demás actores. La disponibilidad de recursos y las variaciones en su proceso de inserción le diferencia del papel que juega en otras zonas del país como Cauca, Arauca o Chocó. Mientras en el primero existe coca, pero tiene una relación más ajena, en Arauca la coca no está presente como sí lo está la industria petrolera y la extracción por cooptación del Estado, además de una inserción estructurante; y en el Chocó se da un fortalecimiento más tardío donde prioriza la explotación de recursos mineros y maderables en detrimento del quehacer político y social. En el Catatumbo el control en las economías por parte del ELN no es pleno, aunque sí puede considerarse que es mayor su protagonismo según el eslabón de la economía en mención.

Aunque no es el único, el principal foco de regulación económica de los grupos armados en el Catatumbo es el narcotráfico, a lo que se suman otras actividades como el contrabando de combustibles y víveres desde Venezuela, y la tributación sobre actividades de comercio y tránsito de mercancías de todo orden. En relación directa con el narcotráfico, el papel del ELN en los diversos eslabones de esta economía está marcado por su proceso histórico de inserción en el territorio y la existencia de lineamientos doctrinales que en su momento bloquearon la intromisión del grupo en esta economía. Con el tiempo estos factores fueron determinando un papel secundario en el entramado de relaciones con la coca, con repercusiones negativas en el intento más reciente de convertirse en un mayor regulador de la producción y el sector social de esta economía.

Sobre el proceso histórico de inserción, el ELN en el Catatumbo atravesó una primera fase que le dio relevancia política y capacidad de movilización social en la zona[81]; sin embargo, a diferencia de otros casos como el araucano, no se estableció como un actor estructurante debido, entre otras cosas, a las condiciones previas de una colonización campesina diferente a la región llanera[82]. Aunque también acompañó colonizaciones, como en Arauca, las condiciones geográficas, económicas y el protagonismo de a poco adquirido por otros grupos armados, crearon rumbos distintos. Así, por ejemplo, en Arauca se sumergieron en diversos espacios de la vida económica que a la postre, con todo y las variedades entre un caso y el otro, lo llevaron a prácticas como la extracción de recursos del gobierno departamental y las alcaldías. En el Catatumbo hay un

81 Como se describió en el apartado dos.

82 Véase el apartado de inserción del ELN en el capítulo de Arauca.

panorama distinto, pues sus municipios son de ingresos bajos, por lo que estas prácticas son obsoletas o secundarias.

La economía regional se transformó a finales de los ochenta cuando se sumó la coca a la economía agraria y petrolera[83] (CNMH, 2018). La coca fue consolidándose a lo largo de la década siguiente, en un contexto en el que el ELN no monopolizó la regulación de la vida social, política y económica a pesar de su protagonismo inicial. En sus comienzos la guerrilla del ELN se mostró reacia a la coca, apartándola de sus espacios de influencia en procesos sociales, a diferencia de las FARC-EP, y distinto del EPL, no tomó provechó de la coca como fuente de cuantiosos recursos. Sin embargo, a inicios del 2000 el ELN dio un giro favorable hacia esta economía.

Las razones que explican este viraje, aunque en el discurso mantengan una posición ambigua, tiene que ver con, por lo menos, tres factores: primero, el costo político de rechazar una alternativa económica para los campesinos, alternativa que sí era aceptada por las FARC-EP. Esta situación hacía que las FARC-EP resultaran favorecidas frente al ELN en el juego de influencias y construcción de bases sociales. Incluso, la postura reacia del ELN en ocasiones resultó en confrontación directa con los campesinos[84] (Entrevista 10, 2019). Con el tiempo, en sus zonas de influencia asumieron la postura de dejarlo a voluntad del campesinado, sin hacer una promoción y regulación tan abierta como la que llevaban a cabo las FARC-EP, de este modo, el ELN prefirió hacerse partícipe en otros eslabones, sobre todo de los precursores químicos y la comercialización.

El segundo factor es la necesidad de una mejor fuente de financiación luego del desgaste y el retroceso que causó la confrontación con el paramilitarismo; y, tercero, un relevo generacional en estos años en el que imperó la racionalidad económica sobre la reflexividad moral frente a la coca. Este relevo generacional estuvo marcado por la muerte del cura Manuel Pérez, férreo contradictor de relacionarse con esta economía. Este escenario, sin embargo, no estuvo exento de contradicciones, ya que también trajo tensiones con algunas comunidades campesinas, sobre todo con aquellos que se mostraban aún favorables a mantenerse al margen de la siembra de la coca, mismos que reclamaban coherencia al ELN sobre sus principios doctrinales (Entrevista 11, 2019).

Actualmente, luego del abandono paulatino de las posturas contra el negocio, existe la intención, al menos desde el discurso, de mantenerse

---

83 Exigua en comparación con Arauca. Luego se convertirá no solo en lugar de extracción sino también de paso del oleoducto Caño Limón – Coveñas.

84 Practicaban erradicación forzada y quema de cultivos. Un campesino de la región recuerda que una de las frases de los elenos en ese entonces era: "Si va a sembrar coca, váyase pa' La Gabarra [zona de influencia fariana] que allá si lo dejan" (Entrevista 10, 2019).

limpios de la participación en la cadena de la coca (ELN, 2018b, 2018c). Sin embargo, se trata de una pretensión insostenible frente a los hallazgos, percepciones y realidades descritas por la población y los documentos sobre el territorio que señalan lo contrario.

En principio, la necesidad de acudir al narcotráfico por el desgaste en la lucha con el paramilitarismo y de responder a las demandas de regulación de la población respecto a esta economía pueden parecer explicaciones contradictorias. Pero estas versiones demuestran que, lejos de las lecturas monocromáticas de los grupos armados como depredadores de recursos, dadas ciertas condiciones, la consolidación de economías ilegales no es excluyente de la construcción de bases sociales, a la postre útiles para el fomento de un proyecto político.

Así, desde la primera década del 2000 se configuraron tres esferas de influencia, más o menos diferenciadas, entre las tres insurgencias de la zona en relación con los eslabones de la economía cocalera: la producción y gramaje de hoja de coca, controlada por parte de las FARC-EP; la consecución de insumos y precursores, por parte del ELN; y la comercialización, por parte del EPL. Los paramilitares y posteriormente sus grupos sucesores comenzaron a competir sobre todo en la comercialización y algunos elementos del gramaje, pero concentraron su influencia principalmente en el proceso de transformación (Entrevista 20, 2019).

En el eslabón de producción y gramaje de la coca por parte de las FARC-EP se incentivó la manutención de cultivos de pancoger, para hacer frente a la dependencia alimentaria que produce la economía cocalera una vez se consigue un flujo constante de dinero (Torres, 2011)[85]. En otras regulaciones del eslabón, los grupos armados en general determinaban a quién se entrega la cosecha, y, si un cultivador se rehusaba a hacerlo, podía ser desterrado o asesinado (*Verdad Abierta*, 2016b).

La manera en que las FARC-EP intermediaron fue asegurando las transacciones. A la garantía del pago que la guerrilla exigía al comprador en favor del campesino, se sumaba la garantía de la producción que la guerrilla exigía al campesino en favor del comprador. Así evitaba, entre otras cosas, que la carga se desviara a cualquier postor externo que hiciera una mejor oferta al campesino. Para esto se dieron prácticas como el cálculo anticipado de producción: al cultivo de una familia campesina se hacía un estimativo de la producción por hectárea, de esta manera era posible garantizar que, a la hora de la cosecha, se hiciera la venta de la cantidad esperada por el comprador (Entrevista 11, 2019).

85 Práctica que, a la postre, no estaba exenta de excepciones. “Llegó un momento en que se nos salió de control”, expresa uno de los excombatientes de FARC presentes en el ETCR de Caño Indio en Tibú (Entrevista 12, 2019).

Ya en los insumos y precursores para la producción, el ELN es protagonista en el contrabando de combustibles y la extracción ilegal de crudo en el tramo del oleoducto Caño Limón – Coveñas. La guerrilla ejerce control sobre una cantidad significativa de válvulas ubicadas a lo largo del tubo[86], de las cuales, una vez es extraído el crudo, este es sometido a un proceso de transformación rudimentaria de la que se obtiene el *pategrillo*, un combustible artesanal que sirve de precursor químico para la pasta base de coca y para el funcionamiento de máquinas cotidianas y vehículos (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16; Entrevistas 10, 11 y 20 2019). La relación del ELN con el *pategrillo* es criticada por considerar que se trata de una incoherencia con sus postulados en defensa del medioambiente, ya que en efecto se causan constantes daños al oleoducto y se afectan las fuentes de agua que abastecen a varios municipios. Para fabricar el combustible artesanal se requiere de la instalación de refinerías ilegales, para lo cual se deforestan sectores de selva, se hacen quemas al aire libre y los residuos químicos son dejados a la suerte sin mayor tratamiento (Entrevista 8, 2018).

Por su parte, el contrabando de combustibles ha tenido ciertas variaciones. Aproximadamente en el 2016 este hecho se reconoció, ya que gran parte del combustible es ingresado por redes independientes de los grupos armados que pagan una cuota para el tránsito, principalmente al ELN (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16). Mas en los años siguientes, la influencia sobre el contrabando de combustible mutó, pues el protagonismo quedó ahora en manos de los grupos sucesores del paramilitarismo "Los Rastrojos" y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Estos combustibles son usados no solo en el Catatumbo: parte de la rentabilidad de este negocio proviene de la circulación que hacen por el sur del Cesar a varios puntos de este departamento y municipios de Santander (*Verdad Abierta*, 2018a)[87].

El tercer eslabón de la economía de la coca, la comercialización, es dirigido por el EPL. Este grupo se valió de las capacidades ya mencionadas

---

86 Un reporte del SAT (2016) al respecto indica lo siguiente: "Entre diciembre de 2015 y lo que va corrido de 2016 se han hallado cuatro (4) refinerías ilegales en el corregimiento Campo Dos, veredas Galicia y Campo Seis, las que al parecer operaban bajo el control del ELN. De acuerdo con los cálculos del Ejército Nacional, en la zona se extraen ilegalmente cerca de 1.827 barriles semanales, por medio de válvulas que se instalan de manera irregular, comprometiendo la seguridad de la población que habita en los terrenos por donde pasa la tubería por el riesgo de posibles derrames de crudo".

87 Es importante hacer seguimiento al precio de insumos. Los precios de la pasta base se mantuvieron más o menos estables durante los últimos años, mientras que el precio de los insumos aumentó. Esta situación empezó a incomodar a los campesinos cocaleros puesto que el pago real que recibían se redujo. La presión que estos ejercieron, junto a otras variables del mercado, llevaron a los insumos a tener una subida de precio en el 2018.

de su líder "Megateo" para lograr este posicionamiento, junto a sus estrategias de control territorial. Esta guerrilla se ha caracterizado por no poseer predominio permanente en muchas áreas, salvo en zonas de retaguardia como Hacarí o los lugares donde intentó asentarse en el conflicto armado de 2018-2019. Por lo demás, su característica principal ha sido una alta movilidad en el territorio, lo que ha sido funcional a su papel de control de las rutas de tráfico de estupefacientes (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16). A esto se suma la diferencia en el manejo de los pagos a los campesinos, pues estos proporcionan pagos inmediatos. Esta práctica, por lo menos en áreas de Tibú, le permitió ganar terreno frente al ELN y las extintas FARC-EP, quienes al efectuar este tipo de transacciones terminaron adeudando cuantiosas sumas de dinero a los productores de base y hoja de coca (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16). De esta manera, el EPL fue llegando a nuevos municipios del Catatumbo por fuera de su zona de influencia histórica, ganándose a los cultivadores de hoja de coca al extender su oferta de servicios de corte bienestarista, y al negociar los cultivos pagando la cuenta de inmediato (*Verdad Abierta*, 2016a).

Continuando con el tráfico de drogas, al EPL le han sido funcionales las alianzas con las bandas criminales y grupos sucesores del paramilitarismo. Para esto se valen de intentar cooptar las rutas de acceso del norte del área rural del Catatumbo[88], y de su previa conexión por el sur hacia el municipio de Puerto Santander y el área rural de Cúcuta (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16). En estos canales comunicantes con el área metropolitana de Cúcuta también está presente el ELN, que participa del entramado de regulaciones para el caso de contrabando y paso de personas en la frontera del área metropolitana de la ciudad (Entrevista 14, 2019). Aunque este control lo hace el Frente Urbano Germán Velasco Villamizar, perteneciente al Frente Unido Urbano, existe una relativa interacción con las unidades del Catatumbo para transferir recursos económicos y coordinar el contrabando de víveres, coca y *pategrillo* por las trochas ilegales en la frontera. En este ir y venir, el Frente Urbano incluso se traslada hasta áreas de Sardinata y Tibú para estos fines (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-18; Entrevistas 14 y 15, 2019).

Volviendo a los eslabones de la economía de la coca, queda hasta ahora uno en el aire: la transformación de la hoja en pasta base. Se trata del punto siguiente a la producción de la hoja de coca y está en relación directa con la consecución de insumos y precursores; pero es quizá el de mayor ambigüedad frente al control de los grupos armados. Varios

88 Como la región del Río de Oro, en Tibú, donde se dio el incidente del asesinato del cacique del pueblo barí.

pobladores señalan la autonomía por parte de un sector del campesinado, quienes participan en estos procedimientos sin regulación directa de grupos armados (Entrevista 11, 2019); mientras que otras fuentes apuntan el control de laboratorios por parte de los grupos armados, y entre ellos, el ELN como uno de los principales (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16). Esto puede deberse, entre varios factores, al control que este posee sobre los insumos y precursores, lo que lo hace propenso a la intervención en el proceso mismo de transformación.

Pero los casos de autonomía en la transformación no otorgan tales beneficios en la venta. Antes y después del proceso, existen personas que hacen de intermediarios para la compra de la hoja y la pasta de base ya transformada. Para ello, usaban la etiqueta de los grupos armados para establecer su legitimidad y mostrar qué grupo les proveía la seguridad como garantía de la transacción, de su propia vida y la de los campesinos. Estos intermediarios pueden tener vinculación plena a las estructuras del grupo armado, aunque la regla general es la de funcionar como una red independiente, que se asocia con estos para garantizar seguridad en las transacciones.

Ahora bien, todo el panorama anterior se transformó entre 2018 y 2019. Al respecto conviene establecer como rupturas principales dos de los acontecimientos ya mencionados: la muerte de "Megateo" y la dejación de armas de las FARC-EP. Tras la muerte de "Megateo", se dio una primera transición en la comercialización de la coca, sin alteraciones significativas, sobre todo por el interés económico y la solidez previa de los acuerdos con bandas criminales como "Los Rastrojos" y las AGC (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 021-16). Sin embargo, más adelante, desde la asignación como jefe de Jader Navarro Barbosa, alias "Caracho" —hasta su muerte en octubre del 2016[89]—, y la captura del máximo cabecilla del EPL Guillermo León Aguirre, alias "David León", —en septiembre del mismo año—, se deja entrever el limbo en que queda el monopolio ejercido por el EPL sobre las rutas de comercio de la droga. Con la llegada de "Caracho", de carácter intransigente, también se recompuso negativamente la relación paternalista de esta guerrilla con la población civil, con significativas repercusiones al apoyo brindado por la misma y el eventual llamado a que interviniera el ELN (*Verdad Abierta*, 2016a; SAT, Defensoría del Pueblo, IR n°. 021-16; Entrevista 20, 2019).

Con estos cambios, la relación entre el EPL y el ELN también varió en función de sus intereses económicos. En el 2016, una alianza entre

89 Se especulan dos versiones de su muerte: una, que un cerco de la fuerza pública impidió el acceso a medicamentos necesarios para el tratamiento de una diabetes que padecía y otra, que habla de la traición de uno de hombres cercanos (*La Opinión*, 2016b).

ambas guerrillas buscaba fortalecer la presencia urbana y permanente del EPL para solventar su carácter de mayor movilidad (SAT, Defensoría del Pueblo, IR n°. 021-16), pero los mecanismos compartidos de control social se desmoronaron y el ELN entró a buscar mayor partida de la comercialización, sin buscar hacerse plenamente a ella, y causando tensiones que, con el tiempo, devinieron en los conflictos ya mencionados (Entrevista 20, 2019; *Verdad Abierta*, 2016a). En la comercialización también se habla, por ejemplo, de cómo algunas de las pistas de aterrizaje para el comercio de droga, que estaban bajo el control de las FARC-EP en la zona norte del Catatumbo, pasaron a manos del ELN por acuerdos previos entre estructuras de estas guerrillas (Entrevista 20, 2019).

Pero el desarme de las FARC-EP dejó libre, ante todo, el eslabón del gramaje de la coca en el que el ELN intentó tomar partida. Sin embargo, llegar a controlar este eslabón no es tarea fácil. La interacción directa con el campesinado cocalero para el gramaje de la coca implica no solo prestar el servicio de seguridad y garantía de las transacciones, sino también adaptar la propuesta política del grupo armado a los intereses de este sector del campesinado; por lo que ahora, una vez cambia el actor que controla el eslabón, también se generan rupturas de la relación política y social con el sector cocalero. Para generar o recomponer esta relación influyeron las posturas previas del grupo armado frente a la coca, y en esto las FARC-EP tuvo ventaja frente al ELN, pues la falta de experiencia en la interacción con este sector, en clave de construcción de base social, le ha jugado en contra en su pretensión de ampliar su poder hacia la regulación del gramaje.

Varios factores históricos mencionados en apartados anteriores han impedido que el sector cocalero respondiera a la influencia del ELN, aunque hay casos en que este grupo ha logrado interactuar como veedor de la producción de hoja de coca. A esto se agregan antiguos antagonismos entre el ELN y las FARC-EP, pero, sobre todo, el uso a conveniencia del poder coercitivo de estos grupos por parte de sectores de la sociedad civil, que llevaron al ELN a actuar contra el sector cocalero, visto entonces como base social de las FARC-EP (Entrevista 20, 2019). En el 2019 se añade que la disidencia de las FARC-EP ha vuelto a incursionar en muchos de estos territorios reclamando el rol de regulador del gramaje como propio.

En suma, el control de este eslabón de la economía cocalera no es fácil, pues también requiere de interacción permanente y una construcción sólida de bases sociales. No basta la capacidad coercitiva para asegurarse un éxito absoluto en esta tarea. Sin embargo, una mirada panorámica muestra que la expansión de la influencia elena en los demás sectores de la economía de guerra en la región es favorable. La capacidad de mantener una confrontación abierta con el EPL y la fuerza pública al tiempo, por los costos monetarios que implica, es otra demostración de esta favorabilidad.

Conflictividades recientes (2010-2019)

Es cierto que el concepto de *conflicto* no se limita a expresiones armadas entre grupos que optan por estos repertorios. Precisamente, este apartado intenta recoger el panorama más reciente de este tipo conflictos en el Catatumbo, más allá de las armas o *conflictividades* que se han venido configurando a la par del conflicto armado hasta ahora descrito[90].

En la región se manifiestan disputas y reclamos en materia medioambiental, lo mismo que en torno al modelo de desarrollo económico y de asistencia en salud, las vías, las acciones de grupos armados y de la fuerza pública y el uso colectivo de la tierra, entre otros. Todas estas conflictividades son abordadas por la población civil, que se organiza en movimientos sociales, comunales y asociaciones productivas. Estas expresan variadas agendas de reivindicación, que se concretan, a su vez, en acciones colectivas y espacios dinamizadores de su acción colectiva.

En términos generales, son cuatro las afectaciones y problemáticas que las organizaciones ponen recurrentemente sobre la mesa: i) Las afectaciones de la guerra, con los grupos armados y la fuerza pública como adversarios[91]; ii) La precariedad de las condiciones de vida, cuyo adversario es el Estado en sus diversas manifestaciones territoriales; iii) La vocación y titulación de la tierra, con múltiples adversarios dependiendo del caso; iv) Los programas político-sociales que recogen sus agendas de paz.

Este listado expresa una separación temática para efectos analíticos, pues sobre la marcha tienden a manifestarse de forma conjunta, sobre todo en las agendas político-sociales, y en ellas, las agendas de paz de estas organizaciones. Ejemplo de esto son los recientes informes de las misiones de verificación de la Comisión por la Vida y la Paz del Catatumbo, donde no solo se expresa el malestar por las confrontaciones del ELN y el EPL, sino que, además, ambos informes hacen explícita la situación de vulnerabilidad más allá de las afectaciones de violencia directa a la población civil. En relación con esta, actos como el confinamiento o la siembra de minas, se acompañan de denuncias por vulneración de derechos económicos, sociales y culturales cuyas falencias se reclaman principalmente al Estado. Con todo, este capítulo se centrará en mostrar cómo estas conflictividades se circunscriben a cambios recientes en las estructuras de movilización social, en las prácticas de resistencia a la guerra y en preocupaciones vigentes. En todo ello, el actuar del ELN hace eco.

---

90 Para profundizar en esto, ver el capítulo regional del Catatumbo en la publicación *Conflictos sociales y perspectivas sobre la paz completa en regiones con presencia del* ELN.

91 Es decir, aquellos hacia quienes van dirigidos los reclamos en sus múltiples repertorios.

Este eco se expresa de tres maneras: la primera, a partir de la interacción y promoción del proyecto político de la guerrilla, pues si bien es cierto que han ocurrido rupturas considerables a tener en cuenta, no se ha suprimido de pleno el carácter político de ciertas intervenciones del ELN en el Catatumbo; la segunda, la influencia en las conflictividades regionales tiene que ver con la generación de enemistades entre sectores de la población civil. Aquí las acciones deliberadas de los grupos armados, en función de sus propios intereses, exacerban conflictos latentes y previos entre los sectores de la población civil, o, según el caso, prestan su capacidad coercitiva para dirimir tales conflictos latentes y previos.

Quizá el mejor ejemplo esto es la disputa generada entre los indígenas barí y los campesinos a partir de la muerte del cacique Catsú en el Río de Oro, Convención. Aunque la muerte fue a manos del grupo armado, los indígenas interpretan la presencia y el accionar del mismo como efecto de la presencia campesina y sus previas interacciones con la guerrilla (Entrevista 3, 2018); además se recuerda el carácter estratégico de estos asentamientos al estar en zonas apartadas pegadas a la frontera.

Finalmente, una tercera manera es un eco desfavorable para las intenciones políticas del ELN. Estas intenciones se enfrentan a rupturas simbólicas considerables por la forma como la población civil concibe el accionar reciente de esta guerrilla. Como se ha mencionado, tal ha sido el impacto humanitario por causa de la escalada de violencia, que provocó que los movimientos sociales se agruparan en una comisión por la paz para mediar la reducción de la confrontación, haciendo explícito un rechazo unánime a la situación. Como resultado, algunos entrevistados hablan de cicatrices con las que algunas bases sociales miran ahora a esta insurgencia[92].

Cambios en las estructuras de la movilización social

Frente al eco que las conflictividades producen en el trabajo político del ELN, las comunidades responden de manera organizada tanto a esas tensiones como al accionar de los grupos armados, cuyos legados recogen, pero transforman según su propia experiencia organizacional. Es así como las comunidades del Catatumbo poseen capacidades organizacionales y de movilización en un proceso que ha implicado: i) adopción de legados organizacionales promovidos por los grupos armados en su función política, y ii) generación de sus propios repertorios organizacionales, con independencia de los grupos armados. La experiencia en

92 A esto puede sumarse en el análisis los costos que tiene mantener una posición ambigua con un grupo armado como el ELN, no solo para efectos políticos sino también en la interacción con el Estado, cuya respuesta es la estigmatización y la judicialización de estos movimientos y personas.

el Catatumbo muestra que en el último periodo ha primado el segundo elemento toda vez que: i) los legados organizacionales que los grupos armados promovieron, en varios factores, ya han sido adoptados y no necesitan de su regulación o promoción; ii) la estigmatización ha traído costos significativos para el trabajo comunitario, lo que los ha llevado a desligarse —por lo menos discursivamente— de los lazos con las insurgencias; y iii) la escalada en la violencia, la degradación del conflicto y su impacto a la población civil han hecho insostenible mantener vínculos orgánicos abiertos y sólidos sin afectar la coherencia interna de los grupos.

Sin embargo, la decisión de mostrarse desligados del grupo armado no basta para evitarse problemas de represión y estigmatización. Para observar la autonomización más allá de una adaptación a las nuevas circunstancias, faltaría explorar algunos sectores para conocer qué tanto se han distanciado realmente del ELN, Esto significa indagar en el contenido de sus posiciones políticas, sus modelos económicos, su posición frente al Estado y, ante todo, su valoración frente a la opción armada.

Con todo, en el periodo analizado ha habido cuatro transformaciones centrales de la acción colectiva en la región: i) el surgimiento de un espacio dinamizador integrador de los movimientos sociales, ii) el debilitamiento del movimiento cocalero, iii) el fortalecimiento del movimiento comunal y iv) el fortalecimiento de asociaciones productivas. Las cuatro se han visto impactadas en mayor o menor medida por la estructura de oportunidades políticas[93] o ventanas de oportunidad que surgieron de las variaciones del conflicto armado y de la puesta en marcha —o la esperanza de puesta en marcha— de múltiples programas y planes a partir de la firma del acuerdo final.

Nuevo espacio integrador de los movimientos sociales

En el Catatumbo se distinguen tres movimientos sociales de larga data: Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP). A lo largo de su actuar, han ido configurando agendas político-sociales diferenciadas con los temas de paz y desarrollo local como ejes de su trabajo. Los tres, a su vez, han sido objeto de estigmatizaciones al ser señalados como el ala político-social de las tres insurgencias en la zona: FARC-EP, ELN y EPL, respectivamente. Un cuarto actor que ha estado presente es el *movimiento comunal*, a través

93 Concepto de Tarrow: "Al hablar de estructura de las oportunidades políticas, me refiero a dimensiones consistentes —aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales— del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente" (1997, p. 4).

del trabajo de las juntas de acción comunal en los diferentes barrios y veredas. Estas se conglomeran en diversas asociaciones por territorios hasta llegar a una Asociación de Juntas de Acción Comunal del Catatumbo (ASOJUNTAS). Por su naturaleza de espacios de participación general y común a todos los lugares, la composición de las JAC no excluye la pertenencia de algunos de sus miembros en alguno de los tres movimientos mencionados; obviamente, esto provoca intersecciones, aunque no equivalencias, entre ellos, pero se mantienen como espacios diferenciados.

Estos cuatro movimientos son los protagonistas de la primera transformación de las estructuras de acción colectiva. El común denominador de estos grupos, sobre todo de los tres movimientos sociales, es el de ser campo de disputas por liderazgos y proyectos políticos diferenciados, lo que les dificulta hacer un trabajo articulado[94]. Estos movimientos, además, se fueron configurando como los interlocutores entre la población y el Estado en sus diversas manifestaciones territoriales; por lo que el protagonismo alcanzado por uno y otro en diversos espacios representa una lucha constante por recursos reducidos con los que favorecer a los integrantes de sus movimientos[95]. Por esto, llama la atención cuando el 6 de abril del 2018 establecieron la Comisión por la Vida y por la Paz del Catatumbo en respuesta a la intensificación de los combates entre el ELN y el EPL desde el 14 de marzo del mismo año (*Verdad Abierta*, 2018c)[96].

Ante la exacerbación de la violencia, que generó múltiples afectaciones a la población civil y detrimentos al tejido social y comunitario (desplazamiento masivo, asesinatos selectivos de líderes y lideresas, etc.); la respuesta fue aumentar las estrategias de movilización para adoptar un papel de interlocución y mediación. Para esto pusieron en marcha acciones conjuntas de comunicación de sus posturas, recolección de información de las condiciones de la población civil y otras acciones colectivas, como la veeduría sobre la administración pública, el acompañamiento de ambulancias en sus traslados, la construcción de albergues y otros —al respecto se hablará de manera más completa en el apartado de *Prácticas de resistencia a la*

94 Salvo puntuales acciones colectivas, en particular la emisión de comunicados conjuntos. A las disputas entre estos grupos se suma el mencionado uso de la acción coercitiva de los grupos armados para la tramitación de los conflictos, esto, a su vez, se superpone a casos de estigmatización por parte de los grupos armados en independencia y sin necesidad de ser llamados a intervenir por algún civil.

95 Si se remite a las definiciones clásicas de partidos políticos, estos movimientos ocupan la función de intermediar entre Estado y la sociedad civil. Están allí para "*representar* al pueblo al *expresar* sus exigencias" (Sartori, 2012, p. 64).

96 Existen otros espacios donde confluyen la participación de estos movimientos, como la Mesa de Interlocución y Acuerdo, MIA-Catatumbo, o el Consejo Departamental de Paz. Sin embargo, son espacios de otra naturaleza que, aunque permiten la interlocución y la demanda de sus reivindicaciones, son consultivos y de trabajo conjunto con la estatalidad.

guerra—. De este modo, paradójicamente, la necesidad de buscar mecanismos para mitigar la violencia desmesurada se convirtió en una ventana de oportunidad para el fortalecimiento de las capacidades de acción colectiva.

La interlocución y mediación con los grupos armados fue representativo. Para ello crearon una comisión mediadora, que buscó generar un espacio de interlocución entre las partes. Para hablar con el ELN fue favorable la existencia, en su momento, de las negociaciones de paz en el plano nacional. Así, fue posible que se reunieran, previa aprobación del Gobierno, con la delegación del ELN en La Habana para tratar directamente el asunto. Sin embargo, ampliar la negociación formal al EPL se vio dificultada por la negativa del Gobierno a permitirlo con un grupo armado al que se niega su estatus político[97] (*Verdad Abierta*, de 2018c), negación que a la postre es usada también por el mismo ELN para justificar las acciones contra su adversario (ELN, 2019). De todas maneras, en la práctica sí se generaron acercamientos para estos fines con ambas guerrillas (Entrevistas 15 y 20, 2019). Esta intervención conjunta y de impacto regional resalta a la luz de los acontecimientos, pero este caso, ante todo, da cuenta de la realidad microlocal a la que se enfrentan diariamente estos territorios y donde es frecuente la negociación con los grupos armados para disminuir el impacto de su acción violenta; fenómeno que merecería ser estudiado a profundidad.

Este papel de la Comisión fue respaldado por otras organizaciones y sectores como Naciones Unidas, MAPP-OEA, la Iglesia católica, y la Comisión de Paz del Senado. Ya en su labor de recolección de información y veeduría, la Comisión creo dos misiones de verificación para revisar los impactos de la confrontación armada. La primera entrega de su informe, en junio del 2018, expone los hallazgos de los efectos producidos por el conflicto entre el ELN y el EPL; mientras la segunda, de junio del 2019, se enfoca en los efectos de la respuesta militar del Estado para retomar el control de la zona. En suma, la Comisión por la Vida y la Paz ha representado un hito en la articulación de los movimientos sociales, aunque no está exenta de pugnas internas. Con esto en mente, ya que los escenarios de violencia parecen no disminuir con el tiempo, queda la pregunta por la capacidad de los movimientos para garantizar la continuidad de la Comisión como plataforma de articulación más allá del elemento circunstancial que los convoca.

Debilitamiento momentáneo del movimiento cocalero

Al tiempo que espacios de articulación como la Comisión por la Vida se generaron, otras circunstancias de impacto regional repercutieron

97 Para el Gobierno, su estatus es de narcotraficantes. A la postre, se trata del mismo calificativo usado por el ELN contra su adversario.

negativamente en la capacidad organizacional de algunos sectores: el movimiento cocalero en el Catatumbo ha sido uno de estos. En su momento, la puesta en marcha de los programas y planes del acuerdo final representaron una ventana de oportunidad para la participación y movilización del sector cocalero en el Catatumbo y el país (Ortega, 2018). Para hacer frente al Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, nace en enero del 2017 la Coordinadora Nacional de cultivadores de coca, marihuana y amapola (COCCAM), para agremiar el campesinado cocalero de 17 regiones del país en función de facilitar su participación en dicho plan (*El Tiempo*, 2017).

COCCAM recoge en el Catatumbo los legados organizacionales existentes del movimiento cocalero y se articula sobre todo con ASCAMCAT. El antecedente de movilización más importante que tienen es el paro cocalero del 2013, que tuvo una larga duración y repercusión de alcance nacional. La logística necesaria para mantener un paro de esta magnitud habla de la capacidad de la organización; capacidad en la que se señalaba, en su momento, el beneplácito de las FARC-EP por dicha protesta. No obstante, en un periodo de tiempo más corto, se da una articulación importante de este sector que se hizo cargo, entre otras cosas, del fomento y educación sobre el programa a las familias campesinas que iban a participar en el PNIS, y las que se prepararían para ello.

Sin embargo, en el transcurrir de las etapas del plan ha ocurrido un debilitamiento del movimiento cocalero en el Catatumbo en clave de promoción de esta política y otros planes autónomos de sustitución como en la capacidad de representación del sector ante el Estado. Ante los incumplimientos del PNIS, la falta de confianza en el Estado, indispensable para llevar a cabo políticas públicas de este tipo, le ha pasado factura también a estos movimientos por haber sido promotores de la misma[98] (Ortega, 2018; *El Espectador*, 2019d).

La dimensión subjetiva y endógena en la consolidación del movimiento también entra al ruedo con factores que le debilitan: la profesionalización y el protagonismo en la representatividad frente al Estado ha creado algunas brechas representacionales con algunos sectores de la población, toda vez que los líderes de estos grupos empiezan a tener comportamientos y maneras asociadas a políticos tradicionales, como establecerse en oficinas apartadas de los territorios, transportarse en camionetas, tener esquemas de seguridad, entre otros. (Entrevistas 10 y 20, 2019)[99]. Sin embargo, mu-

98 "Nos hacen quedar como mentirosos", señalan líderes y lideresas de la COCCAM en la región (Entrevistas16 y 17, 2019).

99 Incluso, los pueden asociar como más cercanos a la figura del político tradicional (Entrevista 20, 2019).

chos campesinos, entre estos los más afectados por los incumplimientos del Estado, se mantienen firmes en su decisión de generar alternativas de subsistencia, habida cuenta de la recurrente y compleja filiación a la que se han visto sometidos con los grupos armados (Ortega, 2019). Para muchos, vale la pena buscar alternativas productivas sin el riesgo de las estigmatizaciones que representa ser parte de la economía de la coca (Entrevista 12, 2019).

De este modo, queda en evidencia que la radicalización de las identidades políticas de la población ante los incumplimientos del Estado no basta para garantizar la fortaleza organizacional de los movimientos sociales: la confianza en acuerdos puntuales desde el Estado y el posterior incumplimiento del mismo pueden ser causas exógenas de debilitamiento del movimiento social, a la postre, genera un círculo de desconfianza que se retroalimenta. En este nuevo bucle, habría que ver si el costo de haber confiado es mayor, para efectos organizacionales, que el retorno a la radicalización de las identidades para reclamar por el nuevo incumplimiento. Ante un corto periodo de apenas dos años para analizar este proceso, predominan los efectos negativos sobre la COCCAM-Catatumbo. Queda dicho: cuando estos también apuestan por la implementación de una política que posteriormente es incumplida, pagan también un precio de favorabilidad y confianza; aunque el incumplimiento venga de parte del Estado[100].

Ahora, otro de los factores que se apuntan a sumar desbalances del movimiento cocalero es la salida del negocio por parte de las FARC-EP, con quienes los cocaleros tenían interacción al ser reguladores de los eslabones más cercanos a la siembra. Teniendo en cuenta los señalamientos del apoyo de las FARC-EP en su momento a las manifestaciones del 2012 y 2017 —sin detrimento de la compleja acción colectiva generada por el movimiento cocalero—, algunas lecturas apuntan a que la salida del grupo armado muestra la débil apropiación social de los legados organizacionales del proyecto político de la guerrilla, y a su vez un desgaste del proceso organizativo propio. Afirmación que sustentan con situaciones como la baja afluencia de varios sectores a la marcha del primero de mayo o al paro nacional del 25 de abril del 2019, cuando se presentaban ya las debilidades mencionadas y las faltas de garantías a la movilización social.

Por su parte, el ELN podría llegar a fortalecer su capacidad de regulación en el primer eslabón de la economía de la coca, en lo que implica el gramaje y la garantía de seguridad a los cultivadores, pero es menos

100 Este apartado muestra las pérdidas en capacidad organizacional que tiene un movimiento social por haber confiado en el Estado; sin embargo, el Estado en la posibilidad de generar confianza con la población civil se ve igual o peor de afectado perdiendo la posibilidad de fortalecerse en estas áreas y dar cumplimiento a sus responsabilidades bajo un modelo de política participativa (Ortega, 2019).

probable que logre cooptar el movimiento cocalero. Suponer que en corto tiempo la coerción podría llegar a establecer vínculos orgánicos desde lo político y lo social, es desconocer los tres factores enlistados al comienzo del apartado (legados organizacionales, estigmatización, escalada de la violencia), además de obviar el factor histórico de adscripción política del grueso del movimiento cocalero del Catatumbo, que no ha estado asociado ni a su grupo ni a movimientos políticos afines.

Fortalecimiento del movimiento comunal

En los giros descritos se da un proceso paradójico: al tiempo que se fortalecen espacios comunes, como la Comisión por la Vida y la Paz, se debilitan los movimientos sociales que los componen. Algunos sectores señalan cierto descontento ante los personalismos y los altos costos de la asociación de los movimientos con las insurgencias, no solo por la estigmatización del Estado, sino también por los problemas entre las guerrillas mismas. Así, por ejemplo, en este último periodo de violencia se hizo común que el ELN amenazara y asesinara a integrantes del MCP por asociarlos al EPL, y esta guerrilla hizo lo propio respecto al CISCA (Entrevista 20, 2019).

En este contexto, se habla entonces de un resurgir o recomposición del movimiento comunal. En su historia resaltan la promoción que el ELN hizo en los ochenta para su creación y fortalecimiento, y la acción paramilitar en los 2000 que estuvo a punto de hacer desaparecer las JAC como estructura organizativa (CNMH, 2018). Con el tiempo, la resistencia de este movimiento estuvo anclada a intersecciones con los otros movimientos sociales, pero un sector de los comunales empezó a reivindicar su capacidad organizativa sin adscripción política alguna.

Para ellos la no adscripción a un movimiento social no significa el abandono de posturas políticas, sociales y económicas respecto a lo que el campesinado y el trabajo colectivo implican para el Catatumbo; sino una propuesta cuya aparente ausencia de adscripción ideológica no implica neutralidad. Sobre todo, porque en muchos de los puntos de la agenda se encuentran con los demás movimientos sociales. Para los campesinos que reivindican estos escenarios es más bien una respuesta a la estigmatización y al desgaste de los movimientos. Lo evidente aquí es que, a pesar del alto impacto de la violencia sobre la población civil, el tejido social en medio de la guerra no se disuelve, sino que, por el contrario, se transforma. Pese a ello, para algunos de sus dirigentes preocupa la posibilidad de que este sector también sea objeto de cooptación reciente por parte de algunos grupos presentes en la región (Entrevista 11, 2019).

Ahora, como se dijo, el fortalecimiento de lo comunal no implica una separación absoluta frente a los otros movimientos. De hecho, el

movimiento comunal juega una función estratégica para los movimientos sociales, que ven en esta alternativa la posibilidad de asumir una posición más cercana a la institucionalidad. Esto, no tanto para su papel de interlocución con el Estado como para tener un estatus de legalidad que materialice la distancia frente a los grupos armados y ayude a hacer frente a las constantes estigmatizaciones de las que son objeto, como lo deja ver un líder de un movimiento social:

> Son los hechos los que dan fe de un proceso comunal actuante legal. ¡Todos los procesos somos parte de las Juntas de Acción Comunal! Mantenemos interlocución con la institucionalidad. Autogestión, poder popular y organizativo. Ha tenido que reemplazar a ese Estado, producto de los movimientos sociales de la región. Arreglar una vía en recaudo comunitario, autogestión de mano de obra de la comunidad, comités de conciliación de las JAC que hacen el papel de Comisarías de Familia, de Fiscalía, procuraduría, ordenamiento ambiental y territorial, hay comités. Pero en medio de un conflicto es bastante difícil de lidiar con eso. (Entrevista 18, 2019)

Fortalecimiento de las asociaciones productivas

Las asociaciones productivas en el Catatumbo han sido una respuesta de las comunidades campesinas en busca de alternativas productivas propias centradas en su quehacer como agentes económicos. Aquí es importante señalar la relación entre las formas de vivir en el campo y el modelo de producción, por lo que, al hablar del tema, aparecerán zonas grises aún sin resolver; como el papel de la agroindustria de la palma en el bajo Catatumbo[101]. Sin embargo, aquí se hará una presentación sucinta de las implicaciones de esas asociaciones productivas que se han venido fortaleciendo también bajo la ventana de oportunidad que representaron los acuerdos de paz.

La actividad de las mismas se ve fortalecida en tanto que su accionar responde a los objetivos de reducir y sustituir los cultivos de coca. Pero, habría que reconocer dos maneras de operar frente a la sustitución en este contexto: las alternativas productivas que existían previo al acuerdo y las que surgen de este. Ambas se aprovechan de la entrada de nuevos recursos y la potencialidad simbólica de sus productos. Sin embargo, varias iniciativas tienen una antigüedad de varios años como construcción de alternativas a la población desde la población misma, pero se presentan en geografías donde el PNIS como política de sustitución del Acuerdo no ha llegado y donde difícilmente llegará por las falencias en su ejecución.

---

101 Aunque no es la norma, también existen asociaciones de pequeños productores de palma pertenecientes a los movimientos sociales y comunales.

En este contexto, los liderazgos campesinos buscan hacer relevantes sus procesos ya existentes, en cuya gestión emerge un conocimiento relevante pero pocas veces tenido en cuenta: sus capacidades de interacción con los gobiernos locales y departamentales, las agencias del gobierno central y las agencias de cooperación internacional. Estas capacidades de negociación aparecen más como un resultado empírico, un aprendizaje por ensayo y error, que por formación académica en mediación o negociación. Y ya que responden a un contexto de alta violencia, estas capacidades también se usan para sortear la interacción con los actores armados en general. Aunque resulta lamentable que tales capacidades de negociación y autoprotección sean insuficientes de cara a los riesgos que tiene liderar este tipo de proyectos[102].

Para dar cierre a este apartado del capítulo, cabe mencionar que los procesos de movilización y sus reivindicaciones desde el campesinado se enfrentan a una paradoja muy propia de regiones como el Catatumbo: estas tienen apuestas progresistas e incluso una pugna por formas propias de vida al interior de sus comunidades (Segato, 2007). Y, en ocasiones, desde sus movimientos se promueven también órdenes sociales de corte conservador donde los grupos armados pueden jugar un factor de instaurador o regulador de dichos órdenes, rol que es aceptado e incluso demandado por el campesinado. Por lo que se observa, la existencia superpuesta entre el fortalecimiento de capacidades organizacionales propias, la resistencia a la guerra y la demanda por regulación a los grupos armados.

Sin embargo, también es claro que varios de los legados organizacionales que promovieron las insurgencias fueron apropiados por los movimientos sociales, al punto de poder prescindir de la regulación y promoción en algunos de estos casos[103]. En este panorama de posturas de la población civil, paradójicas y superpuestas, surgen acciones de resistencia a la guerra como parte de sus repertorios en sus agendas de paz, pero también como prácticas de supervivencia en un contexto hostil; acciones de las que ya se han dado pistas, pero serán profundizadas a continuación.

---

102 Entre 2017 y mayo del 2020 se registraron 30 líderes asesinados, además de 37 amenazas y 14 atentados a estos liderazgos (Sánchez, Árias, Mayorga y Gómez, 2020). La violencia tiene otras expresiones en algunos lugares, por ejemplo, grupos armados han prohibido el desarrollo adecuado de plantas de procesamiento de cacao al acusar a los campesinos de promover la entrada de la fuerza pública y el Estado por la gestión de recursos de cooperación y la promoción del abandono de la coca.

103 No se olvide que, aún en años recientes como el 2013, se habla del influjo de las FARC en las protestas cocaleras del Catatumbo. Este tipo de relaciones no significa plena identificación, ni involucramiento del movimiento social con el actuar de la guerrilla; la existencia de estos círculos de afinidad también puede ser momentánea y conflictiva, como lo señala María Clara Torres para el caso del Putumayo (2011). La complejidad de las motivaciones de este movimiento ha sido señalada en profundidad por el trabajo ya clásico de María Clemencia Ramírez (Ramírez, 2001).

La respuesta de la población civil a la guerra

La relación de la población civil con la guerra no ha sido estática ni neutral. Al categorizar varias situaciones se encuentran casos de indiferencia, victimización, resistencia o complicidad, sin ser categorías puras. Este panorama también recoge las demás conflictividades que no se limitan a la guerra. Sobre todo, en los temas de lo que se denominaría *resistencia*, también se incluyen pugnas contra los proyectos económicos desde los campesinos e indígenas barí, quienes son críticos con los cultivos de palma, la explotación minera y petrolera (Comisión por la Vida, 2019; Tobri, 2014).

La experiencia de las comunidades campesinas e indígenas en el Catatumbo marca una serie de relaciones ambiguas de la población civil con los escenarios de guerra. Varias de estas formas de relacionamiento pueden ser leídas en clave de perversión y complicidad de la población con los grupos armados, mientras que otras se presentan como acciones de resistencia, que no dejan de lado la necesidad de interactuar con estas estructuras. De suyo, esto no es nada nuevo. Una u otra forma de interacción responde, por lo menos, a la necesidad de supervivencia y a lecturas utilitaristas de los órdenes armados vigentes, como lo han señalado varias investigaciones sobre el conflicto[104].

Estos factores se expresan en prácticas como las que ha manifestado "El Iguano" en un encuentro de la verdad en Cúcuta: las personas mismas daban información sobre en quiénes debía caer la violencia paramilitar (*El Espectador*, 2019b). Esto puede responder a la necesidad de sobrevivir, porque alguien puede denunciar a otro para que no recaiga en él la violencia; y, al utilitarismo, porque muchas veces no corresponden las razones por las que se acusa al otro, o puede haberla, pero el motor de la denuncia es el deseo de saldar rencillas propias por medio del uso de la fuerza de los grupos. La experiencia seguramente puede dar cuenta de más casos similares, pero la centralidad del apartado son las respuestas a la violencia armada.

Téngase en cuenta que estas relaciones conducen a posturas diferenciadas según el sector poblacional al que se pertenezca: no es lo mismo, por ejemplo, el tipo de interacción y respuesta de los campesinos a la de los indígenas barí. Por ejemplo, la posición del pueblo barí ha sido la de expulsar a los grupos armados de su territorio, con tensiones añadidas; para estos indígenas, la presencia de las organizaciones se debe por lo menos a dos razones: i) al uso de sus zonas como corredores hacia la frontera y ii) la regulación de cultivos de uso ilícito en zonas de resguardo barí. Estos cultivos se producen gracias a la colonización activa de población campesina que busca nuevos

104 Véase, por ejemplo, el libro *Grupos Armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948*-2016 (Aponte, 2019).

territorios fuera del alcance estatal. Por esto, en esta lectura, sacar a los grupos armados también viene acompañada de la expulsión de la población campesina de sus territorios, pero también de la guerrilla y la propia fuerza pública (Entrevista 3, 2018; *La Opinión*, 2018b; Asociación Minga, 2019).

Ahora, en un marco amplio regional, las respuestas a la guerra superan las lecturas centradas en la *resistencia a la guerra*[105]. No obstante, esta lectura recoge otro espectro de prácticas expresadas en procesos de autogestión del territorio con las que no solo hacen frente a la acción inmediata de la guerra —la violencia—, sino que también intentan solventar elementos circunscritos a la misma como la pobreza, el rezago económico, social, etc. Cabe hacer mención de por lo menos tres prácticas que se traslapan entre sí: i) la autogestión de proyectos comunitarios, ii) la negociación diaria con grupos armados y iii) el trabajo de promoción y denuncia; esto último, descrito ya en el apartado anterior.

La autogestión de proyectos comunitarios es una respuesta a la falta de inversión social y de infraestructura, muchas veces justificada por el Estado como resultado del mismo contexto de violencia. En el Catatumbo existe un catálogo variado de estas autogestiones. Ejemplo de ello es el mantenimiento de la vía que conecta internamente al Catatumbo, que va desde El Tarra hasta Ocaña[106]. Sin lograr los cometidos de una pavimentación estricta, sin embargo, hay que señalar la existencia de un trabajo social y comunitario para el mantenimiento de esta vía. En este caso en especial, tiene un papel primario el Cisca, aunque también se han unido a estas prácticas los demás movimientos comunales y sociales. La informalidad con la que se asumen estas prácticas desde el Estado, pone en tensión este tipo de acciones que superan el trámite estatal propio, ante el cual se reclama su ayuda, pero sin la posibilidad de reconocimiento pleno de la práctica realizada hasta ese momento; tal como lo expresa un líder regional:

> La gente tiene un tema muy bonito con los peajes, esas carreteras son intransitables, y los municipios no tienen los dineros para satisfacer las necesidades de una infraestructura vial. CISCA hace peaje comunitario: motos 1.000; carros pequeños: 5.000; carros grandes: 20.000 o 30.000 y con eso ellos inclusive tienen volquetas y maquinarias; y vos te das cuenta que las mantienen. Ellos trataron de organizar el tema y lo hicieron interesante, solventaron una necesidad vial que nosotros teníamos en ese lugar. El Gobierno nacional ha

105 Obra notoria al respecto en los últimos años: *Resisting War: How Communities Protect Themselves,* de Oliver Kaplan (2017).

106 Desde hace unos años se viene anunciando la intervención de la gobernación para la adecuación del llamado Anillo Vial de la Paz, entre El Tarra, San Calixto y Hacarí. En enero de este año se anunció el proceso de adjudicación, pero hasta el momento no existe anuncio del inicio de estas obras (*La Opinión*, 2019b).

> tratado de quitarlo, pero no ha podido; el Ejército a veces ha tratado de quitarlo, pero no ha podido, porque contra el pueblo nadie puede. ¿Con qué excusa lo intentan quitar? Porque es ilegal, técnicamente es ilegal; es como las motos piratas aquí en Ocaña, pero quién puede contra ese movimiento de la gente. Que en su momento la fuerza del Estado claro que podría. El Estado no lo hace porque sabe que la está cagando, "la culpa es mía y me toca a mí invertir", entonces le toca que aguantarse. (Entrevista 15, 2019)

Las mismas formas de acción propia para resolver problemas centrales fueron evidentes en la oleada de violencia que trajo consigo el conflicto entre el ELN y el EPL, al respecto las comunidades asumieron la creación de albergues o refugios humanitarios para la población desplazada (*La Opinión*, 2018b). Allí también hubo tensiones con el Estado por el carácter de facto de estas autogestiones por parte de la población cuando de negociación con los grupos armados se trata. Sin embargo, en el Catatumbo la posibilidad de negociación con el ELN —a propósito de negociaciones de mediano y alto nivel— no ha sido negada totalmente como ocurrió en Chocó, con la Comisión Intereclesial Justicia y Paz[107] (ver apartado Chocó).

En el Catatumbo, como se mostró antes, se dio un espacio con el ELN en La Habana para hablar sobre el conflicto con el EPL. Con esta última guerrilla, sin embargo, el Gobierno no facilitó ningún encuentro por falta de estatus político de este grupo. Pero las razones del Gobierno son diferentes de aquellas en las que ha sustentado sus dificultades, argumentando que la potestad de negociación con grupos armados solo la posee la Presidencia de la República, como sucedió con los diálogos pastorales del Chocó[108]. En ambos casos se obvia que, en la práctica, la población negocia a nombre propio para mantener la violencia en mínimos soportables. Valdría la pena profundizar en las negociaciones civiles para desescalar la violencia y la postura del Gobierno frente a ellas.

En consecuencia, es en lugares como el Catatumbo, como lo plantea González (2016), que la hibridez entre formas regulatorias autoritarias, clientelistas y comunitarias pueden encaminarse hacia *gobernabilidades híbridas*[109]; donde el Estado, sobre todo el local, puede incluir estas otras formas regulatorias en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Para el caso de las negociaciones, la interacción entre el Estado y lo comunitario puede pasar primero por lo que pudiera denominarse *gobernanza de la negociación*. Sería una interacción entre Estado y comunidad donde el Estado reconozca las capacidades existentes en estas poblaciones, no solo en la participación para la construcción de políticas públicas, sino también en cuanto

---

107 Aunque los momentos en la mesa de La Habana eran distintos.

108 Ver capítulo de Chocó.

109 Ver González (2016).

a su rol para negociar el desescalamiento del conflicto en sus territorios. La propuesta puede ampararse en experiencias previas de *gobernanza para la paz* donde la interacción Estado-comunidad ha procurado la participación en políticas públicas, de monitoreo al conflicto y la promoción de la paz. Para el caso del Catatumbo un ejemplo de esto es el consejo departamental de paz, donde ha habido trabajo conjunto entre la gobernación de Norte de Santander y los movimientos comunitarios (Ortega, 2018, 2019).

Como se ha dicho, este conocimiento de la negociación de las comunidades campesinas ya existe en escenarios no institucionalizados. En estos han logrado establecer normas de convivencia y de relación con los grupos armados, resultado de negociación con ellos —y al interior de las comunidades—, pero no de imposición. Casos relevantes, pero poco estudiados, son los manuales de convivencia realizados por la población en los corregimientos de Pachelli, en Tibú y las Mercedes, en Sardinata; que nacen a mediados del 2015 como forma de arrebatar la capacidad de regulación de los armados sobre la vida social cotidiana (Entrevistas 11, 2019; Entrevista 21, 2020). Desde su creación, fueron aceptados por parte de los grupos armados de la zona, en parte por la validación que los líderes comunales realizaron de su contenido ante los comandantes de las organizaciones armadas, con normas que obligaban, por ejemplo, a no llevar armas al interior del casco urbano del corregimiento. El manual es de tal valor para la población, que hace parte de los contenidos impartidos en las escuelas.

Estos ejemplos tienen un fuerte poder simbólico y real, que indican la capacidad de agencia de la población civil frente a escenarios adversos. Se tiene entonces un panorama de negociación de la guerra como práctica cotidiana de la población civil. Esta práctica se ampara en acuerdos de vigencia constante como los manuales de convivencia o reglas consuetudinarias, pero también se da para negociar y mediar circunstancias en caliente, toda vez que el actuar de los grupos armados en el conflicto puede ser bastante voluble. Los liderazgos sociales y comunitarios que, en particular, encaran estas circunstancias acuden a la experiencia propia como fuente de conocimiento para realizar esta negociación; un conocimiento que, por lo menos en la región, se encuentra poco sistematizado y reconocido.

Preocupaciones vigentes

Las preocupaciones generales de la población civil responden a la agudización de la violencia y al incumplimiento del Estado de los múltiples compromisos que tiene con la región. La acción colectiva en clave de movimientos sociales y comunales también se ve afectada por los niveles de amenazas al ejercicio de sus actividades y la posibilidad que se mantengan las prácticas de judicialización desde el Estado.

El ejercicio de otras formas de participación como la política electoral, aunque es periódico, también aparece en el panorama. En las pasadas elecciones regionales del 2018 se sintió una parálisis en las formas y los tiempos que acostumbra el ejercicio electoral en la región. Además de empezar tiempo después de lo usual, a causa de las tensiones algunos grupos como el MCP[110] se negaron a participar en las elecciones no solo absteniéndose de presentar sus propios candidatos, sino también de apoyar otras candidaturas[111] (Entrevista 20, 2019).

De otro lado, la parálisis en el cumplimiento de las promesas del acuerdo y la nueva implementación de planes como Catatumbo Sostenible genera malestares. Sin embargo, por ahora, la posibilidad de reactivar la protesta social enmarcada en el repertorio de paro generalizado y prolongado se ve lejos, por lo menos en los próximos meses (Ortega, 2019). Esto, sin desmeritar que se han encontrado otros espacios y maneras para la manifestación de sus inconformidades y la capacidad de mediación, como lo demostró la ya tantas veces mencionada Comisión por la Vida y la Paz.

Con todo, la priorización de problemáticas ofrecida por la población muestra, en muchas de ellas, exigencias de regulación en temas de seguridad y orden, que reproducen la existencia de escenarios de gobernabilidad híbrida donde las guerrillas y demás grupos armados juegan un rol protagónico como oferentes de reglas de juego.

Conclusión

En el Catatumbo se tiene un ELN relevante pero no estructurante de la realidad regional. Aunque la estructura que se asentó en la zona llegó a la región en una fase relativamente temprana de su propia historia, a su llegada se toparon con estructuras sociales y organizativas campesinas preexistentes.

Este no es un dato menor, porque este grupo no fue un actor que impulsó y dinamizó los procesos iniciales, sino que, más bien, los permeó, y

110 Sobre este caso se habla de las amenazas por parte del ELN hacia esta agrupación al señalarla de aliada del EPL.

111 Valdría la pena analizar para futuras investigaciones las razones por la cuales no hay correspondencia suficiente entre la fortaleza de los movimientos sociales y su incidencia electoral directa, más allá del caso emblemático de Alberto Castilla, quien viene del CISCA. En varios de los municipios del Catatumbo, sobre todo los más próximos al municipio de Ocaña, siguen ganando los partidos tradicionales como las múltiples razones previas podrían explicarlo: falta de interés por los cargos de elección, clientelismo de partidos tradicionales, alta competencia de pertenencia de campesinos, falta de confianza de la comunidad, etc. Frente a casos como el Cisca, que posee amplio reconocimiento por su trabajo comunitario en el manteniendo de la escasa carretera que conecta El Tarra con Ocaña, una de las fuentes preguntaba: "¿por qué si tienen todo eso, no ganan en las elecciones municipales?, ¿será que es que no tienen candidatos de sus entrañas?" (Entrevista 15, 2019).

posteriormente tuvo que competir con otras agrupaciones armadas para tener mayor o menor influencia en la zona.

Con el paso del tiempo, este ELN regional se afianzó y pudo generar retaguardias sobre todo en la parte alta de la región, bajo un doble trabajo, considerable en lo político, pero de bajo perfil en lo militar; sobre todo luego del repliegue del que fue objeto con la expansión paramilitar y la pérdida de influencia en zonas de Tibú y El Tarra. Entre sus ámbitos de regulación se destacan el control de elementos de la vida cotidiana, infringiendo castigos a robos, riñas y porte de armas; además de la circulación de mercancías y combustible de contrabando, y el paso de personas migrantes desde Venezuela.

En la economía de la coca ha jugado un rol más bien subsidiario, lo que no quiere decir que haya sido estático —en esto tiene mucho que ver su guerra con el EPL—, lo anterior salvo en la adquisición de los precursores químicos, donde no solo es relevante la gasolina contrabandeada, sino también la fabricación artesanal de un combustible conocido como *pategrillo*. Para esto, entre otras cosas, controla puntos con válvulas ilegales puestas al oleoducto Caño-Limón Coveñas, que además es blanco de sus constantes voladuras con explosivos.

Sus repertorios de violencia son característicos de una guerra de guerrillas, con acciones militares que evitan la confrontación directa. Sin embargo, la evasión a enfrentamientos y el bajo perfil militar cambió entre el 2018 y 2019 cuando se dio una confrontación directa con el EPL, en un intento de expansión y fortalecimiento regional, que lo ha llevado a sostener confrontaciones de alto impacto contra este grupo y la fuerza pública. El balance de estas confrontaciones que siguen vigentes en el 2020 y que tenían como lógica de fondo copar los espacios, las bases sociales y las economías territoriales reguladas por las extintas FARC-EP, muestra un cierto posicionamiento de esta guerrilla como el actor de mayor predominio militar y social en el Catatumbo.

El resultado colateral de esta dinámica violenta ha sido un fuerte impacto humanitario, en la que ha sido la segunda escalada de violencia más álgida en la región desde la entrada del paramilitarismo en los años 2000. Con todo, los roles cambiantes del ELN en la región siguen en curso e incluso se adaptan a nuevas circunstancias ejerciendo roles más allá de uno puramente coercitivo. Por ejemplo, entrado el 2020, un equipo de 'Crisis Humanitaria ELN' llevó a cabo acciones bienestaristas en zonas de frontera haciendo las veces del Estado frente a la emergencia sanitaria del covid-19[112].

La investigación también permitió ver al ELN como generador de órdenes sociales y políticos, en un contexto de ambigüedades y cambios en

112 Campañas de prevención y entrega de mercados (ELN, 2020). Se registraron en lugares como La Cooperativa, en la zona más septentrional de Convención.

relación con los movimientos sociales de la región. Muchas veces, la realidad social ha impuesto límites a su deseo de intervención en las matrices de los movimientos. Sin embargo, con los cambios dados entre 2018 y 2019 persisten preguntas sobre los efectos de la escalada de violencia en su relación con sus bases sociales y la población civil en general: ¿cuál será el grado de autonomía de los unos frente a los otros?, ¿hasta dónde llegará la afinidad de quienes entran en sus círculos concéntricos? Sobre las disputas militares, ¿cómo seguirá fluctuando el balance de poder entre los actores armados de la región? Otras preguntas quedan en el tintero, y quizá la más difusa pero deseada respuesta positiva: ¿se logrará un acuerdo de paz con ELN, y la posibilidad de ampliar el papel del Catatumbo como escenario de paz?

Bibliografía

Aguilera, Mario (2006). ELN entre las armas y la política. En Gutiérrez, Francisco (Coord. Académico); Wills, María Emma y Sánchez, Gonzalo (Cords. Editoriales). *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia* (pp. 119-151). IEPRI.

Aguilera, Mario (2014). *Contrapoder y justicia guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952-2003).* IEPRI.

Aponte, Andrés (2012). Cúcuta y el Catatumbo: entre la integración y la marginalización. Disputas territoriales, arreglos institucionales e imposición de un orden social de la guerra. En González, Fernán *et al. Conflicto y territorio en el Oriente colombiano*" (pp. 363-428). Cinep/PPP-Odecofi.

Aponte, Andrés (2019). *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016*. Cinep/PPP.

Aponte, David (2011) Terminando el conflicto con el ELN: de la necesidad de finalizarlo más allá del recurso armado. En Aponte, David y Vargas, Andrés (Eds.) *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el* ELN. Cinep/PPP- Odecofi.

Ávila, Ariel (2012). *La frontera caliente entre Colombia y Venezuela*. Corporación Nuevo Arcoíris.

FIP [Fundación Ideas para la Paz] (2015). *Las Farc hoy en el Catatumbo*. FIP. https://bit.ly/3omvGP6

Carvajal, Camila (2016). *Lecturas territoriales en clave de paz. Región del Catatumbo*. Cinep/PPP, Redprodepaz.

Cañizares, Wilfredo (2018). La crisis social y humanitaria en Norte de Santander: Cúcuta y El Catatumbo. *Revista Noche & Niebla,* 57, 43-66.

CNMH [Centro Nacional de Memoria Histórica] (2015). *Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo*. CNMH.

CNMH [Centro Nacional de Memoria Histórica] (2018). *Catatumbo: memorias de vida y dignidad*, CNMH.

Cinep/PPP (2017). *Viabilidad y alternativas para la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito. Una mirada regional desde el Catatumbo (Norte de Santander).* Cinep/PPP.

Cinep/PPP [Centro de Investigación y Educación Popular /Programa por la Paz] (2018). Noche & Niebla Revista Noche & Niebla, 57. Cinep-PPP.

Comisión por la Vida (2018). *Informe final Misión de verificación humanitaria en el Catatumbo.* Comisión Por La Vida.

Comisión por la Vida (2019, mayo 14-18) *Segunda misión de verificación humanitaria – Región del Catatumbo.* Comisión por la Vida.

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2010, 6 de septiembre). *Monseñor Prieto seguirá acompañando al pueblo*. https://bit.ly/3qUANIg

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2015, 2 de noviembre). *Saludo a la Conferencia Episcopal.* https://bit.ly/3iZxBIJ

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2017, marzo 20) *Carta abierta al pueblo caucano.* [Comunicado de comité ejecutivo central del PC-ML]. https://bit.ly/3owmaZX

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2018a, 12 de noviembre). *En la provincia de Ocaña, defensa de la vida y el territorio*. https://bit.ly/2KTFenk

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2018b, 1° de mayo). *Nada tenemos que ver con el narcotráfico*. https://bit.ly/3qU3qoR

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2018c, 20 de mayo) *Alternativa de vida digna para el Catatumbo*. https://bit.ly/3pjJrQc

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2019, 14 de enero) *Convocatorio al* EPL. http://www.cedema.org/ver.php?id=8224

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2020). *Campaña de prevención y entrega de mercados, covid-19. Crisis Humanitaria* ELN [Video].

EPL [Ejército Popular de Liberación] (2019, 18 de febrero). *El pueblo la esencia de nuestras luchas.* https://bit.ly/3a4wMu3

Fajardo, Diego (2017). *Luchas, resistencias y genocidio del movimiento ¡A Luchar!* [Tesis para optar título de Magister en Historia]. Universidad Nacional de Colombia.

FIP [Fundación Ideas para la Paz] (2015). *Las Farc hoy en el Catatumbo*. FIP. https://bit.ly/3off104

González, Fernán (2016, 31 de mayo). ¿Gobernabilidades híbridas o gobernanza institucionalizada en Colombia? Elementos para pensar la paz territorial en un escenario de transición. *Revista Controversia*, 206. https://bit.ly/3ce2S9f

González, Camilo (2018). Sin pacto rural ni política sobre cultivos ilícitos. *Viva.* Ed. 617 [*Semana* del 7 al 13 de diciembre]. https://bit.ly/3sWkPiy

Gutiérrez-Sanín, Francisco y Wood, Elizabeth (2017). What should we mean by "pattern of political violence"? Repertoire, targeting, frequency, and technique. *Perspectives on Politics*, *15*(1), 20-41.

Human Right Watch (2019). *La guerra en el Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia.* HRW. https://bit.ly/36hTcGZ

Kaplan, Oliver (2017). *Resisting war: How communities protect themselves.* Cambridge University Press.

Ortega, Henry (2018). *¿Con las manos amarradas? Los retos para la participación de la sociedad civil en el Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito* [Tesis de pregrado]. Pontificia Universidad Javeriana.

Ortega, Henry (2019). Más allá de la Captura del Estado: formas hibridas de estatalidad desde el caso subregional del Catatumbo – Colombia. *Politai Revista de Ciencia Política*, 10, 169-197.

Ramírez, María Clemencia (2001). *Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*. Icanh.

Rincón García, John (2003). *El Catatumbo: Múltiples experiencias de trabajo asociativo y cooperativo 1980 – 1990*. IEPRI.

Salinas, Yamile (2014). *Catatumbo: análisis de las conflictividades y construcción de paz.* PNUD [Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo]. https://bit.ly/3plK63n

Sartori, Giovanni (2012). *Partidos y Sistemas de Partidos. Marco para un análisis.* Alianza editorial.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2011). *Nota de Seguimiento n°. 002-11. Cuarta al Informe de Riesgo Nº 006-08A.I.* Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2013). *Nota de Seguimiento n°. 002-12. Primera Nota al Informe de Riesgo N°004-12A.I.* Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2016). *Informe de riesgo n°. 021-16.* Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2018). *Alerta temprana de inminencia n°. 014-18- El Carmen, Teorama, Convención.* Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2019). *Alerta Temprana n°. 014-19. Teorama.* Defensoría del Pueblo.

Segato, Rita (2007b) Identidades políticas/Alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global pluralismo global. En Seagato, Rita, *La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de Identidad* (pp. 37-70). Prometeo Libros.

Staniland, Paul (2012). States, insurgents, and wartime political orders. *Perspectives on politics*, *10*(2), 243-264.

Tarrow, Sidney (1997) El poder en movimiento. *Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política.* Madrid: Alianza. 1-55

Tobri, Acei (2014). *Los barí y su resistencia a las compañías petroleras.* Editorial La Fogata.

Torres Bustamante, María Clara (2011). *Estado y coca en la frontera colombiana. El caso del Putumayo.* Cinep/PPP – Odecofi.

Prensa

Asociación Minga (2019, 22 de junio). Comunidades del Alto Bobalí logran acuerdo con Ejército para traslado de base militar que afecta su territorio. *Asociación Minga* https://bit.ly/3qXr3wD

Casey, Nicholas (2019, 19 de mayo). Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. *New York Times.* https://nyti.ms/3ckdnYR

CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2018, 21 de diciembre). Ejército Nacional neutraliza intenciones terroristas del Eln. CGFM. https://bit.ly/3a4JQzl

CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019a, 18 de enero). Desmantelados laboratorios del Eln en Tibú. CGFM. https://bit.ly/3olSC0Y

CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019b, 31 de enero). Depósitos ilegales con armas e insumos son hallados en Tibú, Norte de Santander. CGFM. https://bit.ly/3cjzXRn
CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019c, 18 de mayo). Ejército Nacional continúa su ofensiva contra el narcotráfico en la región de El Catatumbo. CGFM. https://bit.ly/36cCDw2
CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019d, 7 de junio). Desmantelados laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas y una refinería ilegal del Eln. CGFM. https://bit.ly/3a9hh3Z
CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019e, 10 de junio). Libres dos ciudadanos quienes habrían sido secuestrados por el GAO-Eln. CGFM. https://bit.ly/3ohTrbb
CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019f, 25 de junio de 2019). Desmantelados tres laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas en Norte de Santander. CGFM. https://bit.ly/3plXNQ2
CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019g, 28 de junio). Ejército Nacional captura 2 integrantes de GAO Eln en Norte de Santander. CGFM. https://bit.ly/3cdWiQ0
CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019h, 28 de marzo). Comunidad de Guamalito, Norte de Santander, disfrutó de cine al parque con el Ejército Nacional. CGFM. https://bit.ly/39jXY8V
CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019i, 24 de mayo). Comunidad de Tibú, en Norte de Santander, dice ¡No al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes! CGFM. https://bit.ly/3qRPGe9
CGFM [Comando General Fuerzas Militares] (2019j). Con el fin de crear espacios de sano esparcimiento soldados adecuan parque en Guamalito. CGFM. https://bit.ly/3t1IiPA
CPEC [Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación] (2019a, 11 de junio). Catatumbo Sostenible: 17 mil millones para mejorar la vía entre El Tarra y Convención. CPEC. https://bit.ly/3iKYxf2
CPEC [Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación] (2019b, 26 de enero). Catatumbo Sostenible: desde Tibú gobierno reporta avances en salud, educación, vías y parques nacionales naturales. CPEC. https://bit.ly/2YhzNBG
EFE. (2020, 6 de febrero). La guerra entre guerrillas dispara el desplazamiento en una zona fronteriza de Colombia. *El Diario*: https://bit.ly/3qRcevK
El Tiempo (2016, 30 de mayo). El diario del secuestro de Salud Hernández. *El Tiempo.* https://bit.ly/3oedhUQ
El Tiempo (2017, 17 de enero). En medio de polémica, nace red de cultivadores de coca y marihuana. Reúne a campesinos e indígenas de 14 departamentos. Preocupación en autoridades. *El Tiempo.* https://bit.ly/2M5uumk
El Tiempo (2018a, 9 de agosto). Duque visita el corazón del Catatumbo para tratar ola de violencia. *El Tiempo.* https://bit.ly/39k40qb
El Tiempo (2019, 21 de enero) Duque promete fortalecer fuerza pública para combatir al Eln. *El Tiempo.* https://bit.ly/3cf2OpU
El Tiempo (2020, 19 de junio) Cultivos de coca en el Catatumbo: entre la tensión y pocas soluciones. *El Tiempo.* https://bit.ly/3tNrI68

El Espectador (2015, 5 de octubre). El ingreso de los paramilitares al Catatumbo fue bestial. *El Espectador*. https://bit.ly/36bbAkM

El Espectador (2019a, 28 de abril). Homicidio de Dimar Torres fue una ejecución extrajudicial: Comisión de Paz. *El Espectador.* https://bit.ly/3qS4SYT

El Espectador (2019b, 16 de agosto). El perdón entre exparas y exfarc en Cúcuta. *El Espectador*. https://bit.ly/2KOLWL9

El Espectador – Colombia 2020 (2019c, 2 de mayo) Los otros cuestionamientos al Ejército en el Catatumbo. *El Espectador.* https://bit.ly/3t1TGuO

El Espectador – Colombia 2020 (2019d, 19 de agosto) En Caño Indio hacen un llamado al cumplimiento del Acuerdo de Paz en el Catatumbo. *El Espectador*. https://bit.ly/3t6AaNN

El Espectador – Colombia 2020 (2019e, 25 de agosto). Atentan contra dirigente del partido FARC en Norte de Santander. *El Espectador.* https://bit.ly/2NDNFEh

La Opinión (2016a, 29 de marzo) Cristo increpa al Eln por cobro millonario para liberar a Ramón Cabrales. *La Opinión*. https://bit.ly/3ok9IMV

La Opinión (2016b, 24 de octubre) Murió 'Caracho', el sucesor de Megateo. *La Opinión* https://bit.ly/2MscsKY

La Opinión (2017, 19 de febrero de 2017). Pácora vs. Pepe: pelea a muerte por el poder de Los Pelusos. *La Opinión.* https://bit.ly/3pycsHG

La Opinión (2018a, 8 de febrero) Los barí expulsaron al Eln. *La Opinión.* https://bit.ly/3pkbxdW

La Opinión (2018b, 18 de mayo) Refugios humanitarios en el Catatumbo, dilema en elecciones. *La Opinión.* https://bit.ly/2YujPEx

La Opinión (2019, 23 de enero) Un balance de gestión con sabor a llamado de atención. *La Opinión.* https://bit.ly/3cqKnyH

La Opinión (2019b, enero 17) Proyecto del Anillo Vial para la Paz para fin de mes. *La Opinión. https://bit.ly/3pDGmdO*

La Opinión (2020, 16 de mayo). Epl se atribuye muerte de uno de sus excomandantes. *La Opinión.* https://bit.ly/2NG5ORR

La Opinión (2021, 12 de enero) Denuncian afectaciones por incursión del Clan del Golfo en Norte de Santander. *La Opinión.* https://bit.ly/3tF34EK

La Silla Vacía (2016, 23 de octubre). La crecida silenciosa del EPL. *La Silla Vacía.* https://bit.ly/2NyM3vj

La Silla Vacía (2021, 01 de febrero) Alianza de sucesores paramilitares recrudece el conflicto con el ELN en Cúcuta. *La Silla Vacía.* https://bit.ly/3a7F2KU

OCHA [United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs] (2018, 16 de marzo). Restricciones al acceso, riesgo de desplazamiento y otras afectaciones humanitarias en el Catatumbo (Norte de Santander). OCHA. https://bit.ly/3pyg1xy

RCN Radio (2018, 29 de octubre). Las tareas claves de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA III) en Catatumbo. RCN *Radio*. https://bit.ly/3ojEpBN

Sánchez, Nicolás; Árias, Valeria; Mayorga Carlos y Gómez Juan (2020, 8 de mayo) *Líderes sociales del Catatumbo: todas las armas les apuntan. La paz en el terreno* https://bit.ly/36fxDXB

Semana (2013, 20 de julio). Megateo el capo del Catatumbo. *Semana.* https://bit.ly/3oj8amo

Semana (2016, 2 de noviembre). El ELN no se detiene y empezará un paro armado. *Semana.* Obtenido de https://www.semana.com/nacion/articulo/eln-anuncia-paro-armado-por-72-horas/460203

Semana (2018a, 14 de febrero). Las indígenas barí que desalojaron un campamento del ELN para sanear su espíritu. *Semana.* https://bit.ly/3pmzNfD

Semana (2018b, 29 de octubre). Con 5.000 militares más, Duque responde a la guerra que ahoga el Catatumbo. *Semana.* https://bit.ly/3d3MHMl

Semana (2019a, 25 de agosto de 2019). El general en su laberinto: los secretos de la cacería que involucra al comandante del Ejército. *Semana.* https://bit.ly/39l1pMp

Semana (2019b). Voladuras: una cruda arma de guerra. Obtenido de *Semana* Sostenible. *Semana.* https://bit.ly/2Yk3iCV

Verdad Abierta (2016a, 14 de junio). El Epl, a la conquista de la coca del Catatumbo. *Verdad Abierta.* https://bit.ly/2KRmkNV

Verdad Abierta (2016b, 25 de abril). La tensión armada en el Catatumbo. *Verdad Abierta.* https://bit.ly/3pnHSR1

Verdad Abierta (2018a, 25 de junio). La riqueza maldita del Catatumbo. *Verdad Abierta.* https://bit.ly/39im9Ve

Verdad Abierta (2018b, 15 de noviembre). Tensiones en el Catatumbo tras ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido. *Verdad Abierta.* https://bit.ly/36wJiSb

Verdad Abierta. (2018c, 23 de diciembre). El Catatumbo resiste a la guerra con su Comisión por la Vida. *Verdad Abierta.* https://bit.ly/3podru5

Verdad Abierta (2018d, 26 de marzo). La nueva guerra que se desató en el Catatumbo. *Verdad Abierta.* https://bit.ly/39j6HYJ

Verdad Abierta (2019, 18 de mayo) ¿El plan Catatumbo Sostenible saldará la deuda histórica con esa región? *Verdad Abierta*. https://bit.ly/3cb4W1O

Entrevistas

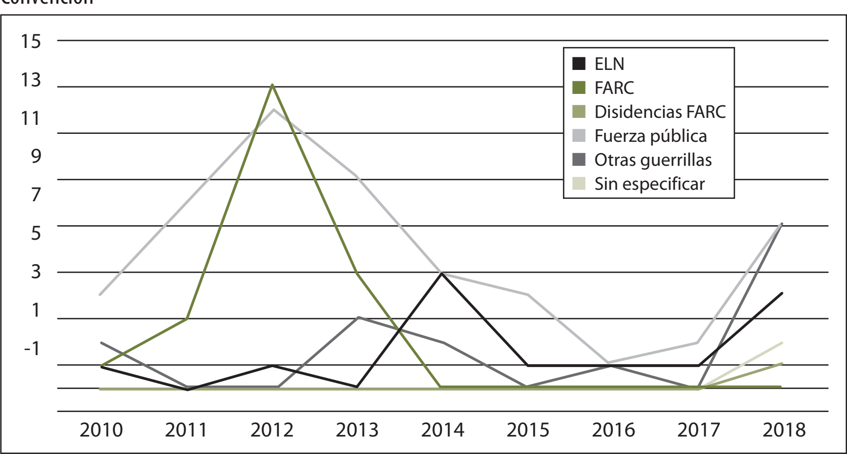
Entrevista 1. Entrevista integrante Ascamcat, 2017.
Entrevista 2. Entrevista integrante Cisca, 2017.
Entrevista 3. Entrevista a dirigente barí, 2018.
Entrevista 4. Entrevista a Pablo Beltrán, 2018.
Entrevista 5. Entrevista a líder social en Cúcuta, 2018.
Entrevista 6. Entrevista a promotor DD. HH., 2018.
Entrevista 7. Entrevista a poblador de Tibú, 2018.
Entrevista 8. Entrevista a Líder Catatumbo, 2018.
Entrevista 9. Entrevista a antiguo comandante ELN, 2019.
Entrevista 10. Entrevista a campesino 1, 2019.
Entrevista 11. Entrevista a campesino 2, 2019.
Entrevista 12. Entrevista en Caño Indio. 2019.
Entrevista 13. Entrevista a pedagoga, 2019.
Entrevista 14. Entrevista a funcionaria en Cúcuta, 2019.
Entrevista 15. Entrevista a funcionario en Ocaña, 2019.
Entrevista 16. Entrevista a integrante Coccam, 2019.
Entrevista 17. Entrevista a lideresa Ascamcat, 2019.
Entrevista 18. Entrevista integrante Cisca, 2019.

Entrevista 19. Entrevista a líder social, 2019.
Entrevista 20. Entrevista a promotor DD. HH., 2019.
Entrevista 21. Entrevista organización internacional, 2020.

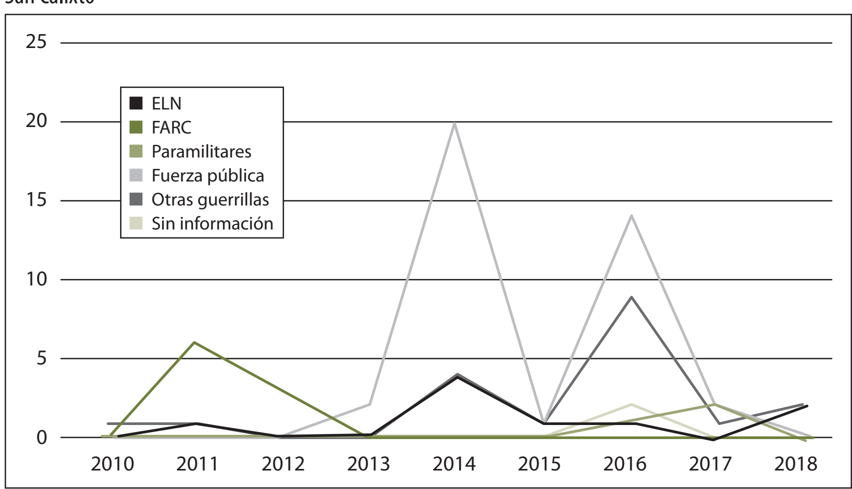
Anexos

Figuras de acciones bélicas e infracciones al DIH en los demás municipios del Catatumbo

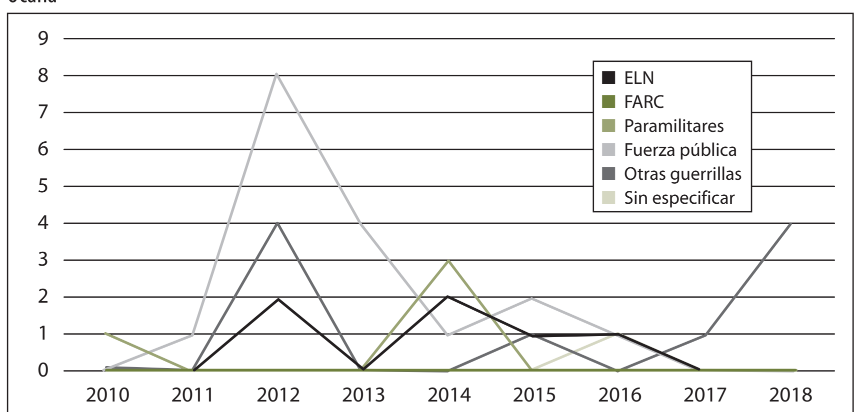
Convención



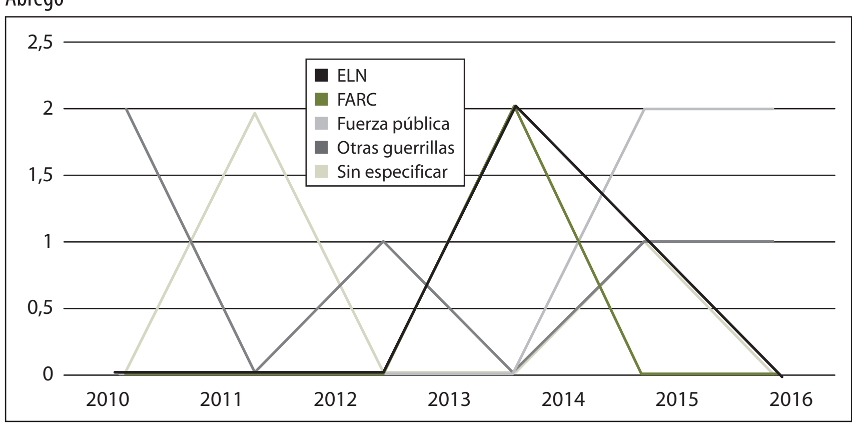
San Calixto



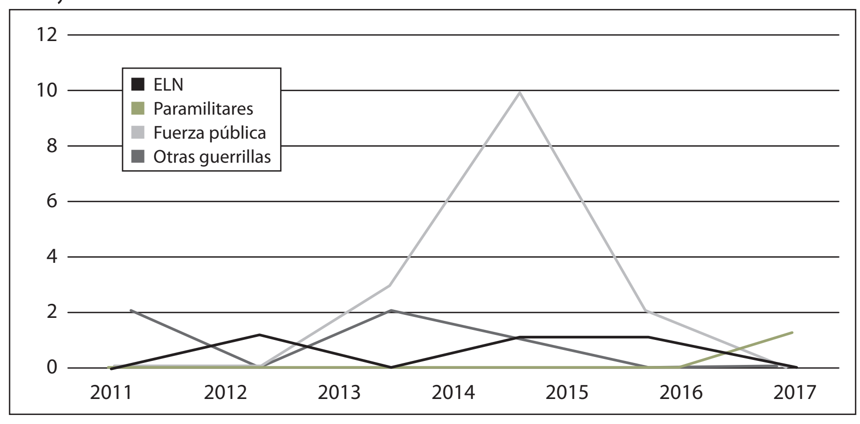
Ocaña



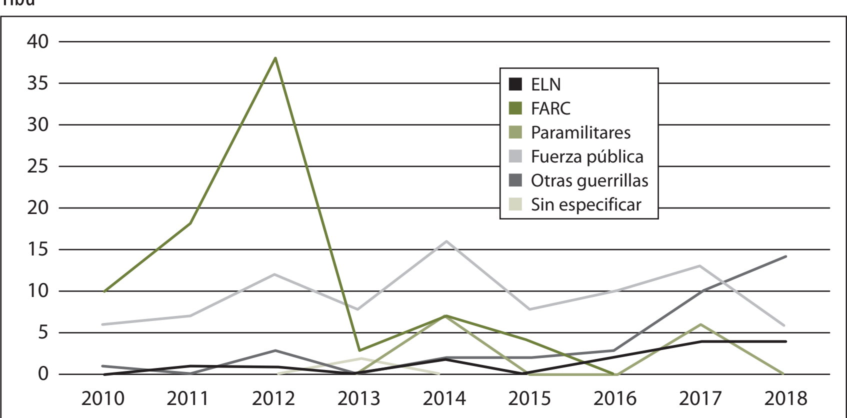
Abrego



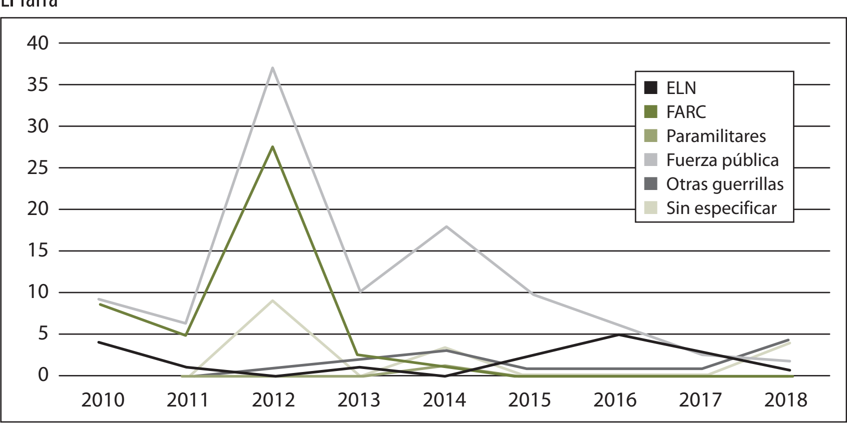
La Playa



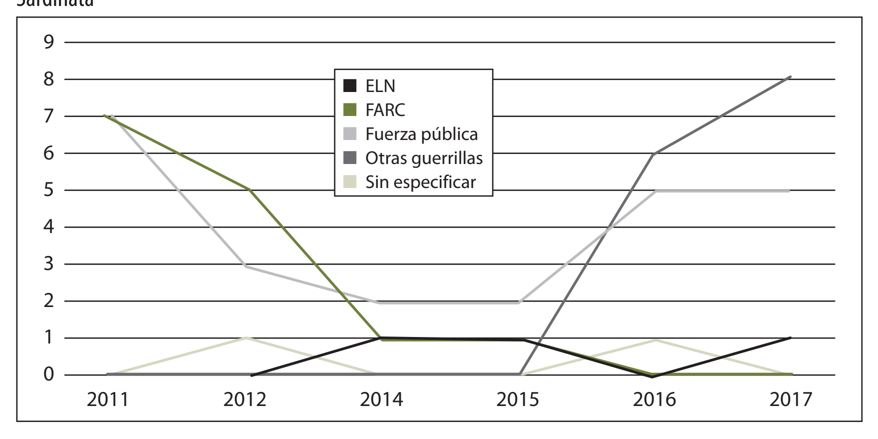
Tibú



El Tarra



Sardinata



Fuente: SIG-Cinep/PPP. Elaboración propia.

El frente de guerra Suroccidental: entre el arraigo social y la reconfiguración militar

Daniel Ricardo Amaya Alba

El presente capítulo establece como estudio de caso las dinámicas del frente de guerra Suroccidental del ELN en los departamentos de Cauca y Nariño. Para esto, hace un análisis de la forma de operar de la insurgencia desde su incursión a esta zona del país, con el fin de resaltar las particularidades de sus estructuras y comprender su papel en las dinámicas territoriales y del conflicto armado. Es así como este texto pretende aportar al análisis comparado que tiene como objeto este libro.

De este modo, los lectores se encontrarán con un amplio análisis que va desde las dinámicas del conflicto hasta las formas de relacionamiento entre la guerrilla, el territorio, las economías y los pobladores. Este trabajo se sumerge en las dinámicas microlocales y subregionales, desde la presencia diferenciada del Estado, reconociendo las condiciones materiales, geográficas y políticas de los territorios, para dar luces sobre las variaciones que han configurado el panorama conflictivo y de gran complejidad por el que atraviesan actualmente ambos departamentos, en este sentido hace énfasis en el impacto que tiene sobre el ELN y en una posible salida negociada del conflicto armado.

El suroccidente eleno, una retaguardia geográfica

La subregión del suroccidente colombiano abarca un territorio bastante amplio. Su delimitación varía dependiendo del estudio académico en cuestión, pero en términos generales, puede afirmarse que se encuentra conformada por los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Huila. Sin embargo, para efectos de esta investigación, centraremos nuestro análisis solo en los departamentos Cauca y Nariño,

en los cuales tiene incidencia el sujeto de estudio: el frente de guerra Suroccidental del ELN.

Los departamentos de Cauca y Nariño representan conjuntamente gran parte del territorio suroccidental. Si los comprendemos como una sola subregión (la subregión del suroccidente eleno), sus límites son: al norte con los departamentos del Valle del Cauca y Tolima; al oriente con los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo; al sur con la República de Ecuador y al occidente con el océano Pacífico.

El suroccidente eleno, a su vez, se encuentra conformado por múltiples subregiones, entre las cuales se encuentran, el macizo colombiano, el centro del Cauca, el Patía, parte del Andén Pacífico y el sur nariñense. Como resulta evidente, es una zona heterogénea, caracterizada por gran variedad de pisos térmicos, los cuales van desde las cadenas montañosas de las cordilleras Central y Occidental, pasando por los páramos en el macizo hasta las llanuras, los bosques y los mangles de la zona pacífica.

Su geografía ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las dinámicas del conflicto y las múltiples economías extractivas, debido a sus afluentes y cadenas montañosas. Por un lado, se encuentran los ríos Patía, Naya, Mira, Iscuandé, Telembí, Nulpe, Mataje, Rosario y San Juan, entre muchos otros, que sirvieron desde la colonia para el transporte de productos comerciales y contrabando, así como también para el desarrollo de la minería (Díaz, 1994). Por otro lado, las cadenas montañosas, formadas por las estribaciones de las cordilleras Central y Occidental, hicieron de las zonas altas un lugar propicio para la inserción de los grupos insurgentes debido a la facilidad para desarrollar la guerra de guerrillas en dicha topografía, pues permite hacer ataques y repliegues con gran facilidad.

Desde la Colonia, Pasto y Popayán se erigirían como centros de gran importancia de la gobernación de Popayán, por su conexión y cercanía con la Audiencia de Quito, hoy República de Ecuador (Díaz, 1994). A partir de este periodo, la minería jugaría un papel fundamental para el desarrollo de las capitales, Popayán[1] y Pasto, así como para el comercio en Barbacoas y el puerto de Tumaco, marginando otras zonas de la subregión.

Su proceso de configuración poblacional estuvo ligado al desarrollo de la violencia y a los diferentes ciclos productivos y extractivos. El punto de partida de su proceso de poblamiento se da tras el arribo de la minería en el siglo XVI, cuando la corona española, tras explotar y diezmar a las comunidades indígenas a través del trabajo forzado en las minas, trajo esclavos negros de África. Dichos esclavos, después de la manumisión de la esclavitud, se dispersarían por la subregión, principalmente hacia las zonas del Andén Pacífico.

1 Popayán fue uno de los principales centros esclavistas en la colonia.

Cabe aclarar que la zona del Macizo y la parte occidental de la cordillera Occidental fue poblada por procesos de colonización espontáneos, a diferencia de la zona central históricamente habitada. Después de la primera ola de colonización afrodescendiente, las diferentes zonas de la subregión se poblaron por la migración de liberales que huían de la Violencia desde la zona andina en busca de suerte. Posteriormente, empezarían a llegar nuevos pobladores tras los ejes de las diversas economías, tales como la tagua, el lulo, la silvicultura, la palma (Rodríguez, 2015) y la amapola.

La última oleada de colonización se dio por la economía de la coca[2]. Esta llegó a zonas de la subregión como el piedemonte caucano y el Pacífico nariñense, tras un proceso de migración de campesinos provenientes del Putumayo, en razón de los procesos de erradicación del Plan Colombia. La coca se asentaría concretamente en los territorios de Argelia, Bolívar y El Tambo en el Cauca y Tumaco en Nariño, propiciando la apertura de la frontera agrícola por constantes procesos de migración espontáneos tras los excedentes económicos del cultivo, es de aclarar que previamente en algunas zonas se presentó el cultivo de coca ligado a tradiciones culturales sin tener ningún nexo con el *boom* cocalero a nivel nacional.

En este sentido, la subregión se ha caracterizado por el desarrollo de economías extractivas, la existencia de históricas rutas para el contrabando, la salida al océano Pacífico, al Ecuador y al norte por el departamento del Valle, el abandono estatal de la mayoría de los municipios hacia la vertiente occidental de la cordillera Occidental y hacia el Macizo caucano y nariñense, y el desarrollo de las economías de la minería, la coca y la amapola. Estas características fueron configurando la región como una zona de alta importancia económica para los grupos armados.

En relación con el conflicto armado en la subregión, este se dio de manera tardía, al final del siglo XX. Las dinámicas del conflicto llegaron al suroccidente bajo sus lógicas y repertorios nacionales, tras el éxito parcial de las políticas contrainsurgentes desarrolladas por el Gobierno nacional (Sánchez, Vargas y Vázquez, 2011). Sin embargo, es importante aclarar que, desde antes de la inserción del conflicto, ya había presencia de actores armados, en especial de las insurgencias de las FARC-EP, el M-19, el EPL[3] y el ELN. Esta última encontraría en las zonas del suroccidente un territorio estratégico.

---

2 Hacia la zona del macizo colombiano también se desarrolló el cultivo de amapola, sin embargo, este no tuvo la misma importancia que la coca en la apertura de la frontera agrícola.

3 El Partido Comunista Marxista Leninista (PC-ML), plataforma política ligada al EPL, tuvo un trabajo político notable en el departamento del Cauca. De ahí saldría uno de los excomandantes elenos de importancia nacional y local, Juan Carlos Cuellar, quien nació en Popayán en 1960.

El ELN, su inserción y expresión territorial

La estructura del ELN presente en la zona sur del país es el frente de guerra Suroccidental. Su presencia en la subregión data de los años ochenta, tras la reestructuración que sufrió como consecuencia de las divisiones internas y los fuertes golpes propinados por las fuerzas estatales a lo largo de los años setenta (ver capítulo "Descifrando al ELN"). El ELN arribó al suroccidente gracias a su ubicación geográfico-estratégica, propicia para el establecimiento de retaguardias, conformando así los territorios periféricos de los departamentos del Cauca y Nariño como zonas en la que pudiese descansar, entrenar a sus combatientes y hacer trabajo político (Entrevista 5, 2019).

En un primer momento, el ELN ingresó al departamento del Cauca de manera exploratoria a través del municipio de Santa Rosa por el departamento del Huila, su establecimiento definitivo se daría con el Frente Manuel Vásquez Castaño hacia el año 1983. Es de resaltar que el Frente Manuel Vásquez Castaño antes de llegar al departamento del Cauca se insertó en el Huila en 1978, lugar donde la organización llevó a cabo la segunda reunión nacional de responsables y creó la DNP (Hernández, 2009). Su zona de operación en el Huila fue el municipio de Suaza, en la frontera con el departamento de Caquetá, desde allí desarrolló operaciones exploratorias hacia el occidente, llegando hasta Santa Rosa, municipio del Macizo caucano (Hernández, 2009; CNMH *et al.*, 2017).

Su consolidación se dio por medio de un fuerte trabajo organizativo en las veredas y corregimientos, donde buscó fortalecer y fomentar la organización y articulación de los pobladores, al tiempo que exacerbaba el desarrollo de la expresión pública de los disgustos sociales:

> El trabajo que ellos hacían era más que todo por veredas primero, luego por corregimientos y luego hacían ejercicios de asambleas ya municipales para plantear temas como el abandono del Estado, el por qué la comunidad no se pellizcaba, de que había que organizarse, de que había que hacerle escuchar al Estado de una manera directa la problemática y que había que tener una armonía no solo interna en la vereda, sino que había que tener una armonía organizativa ya con el corregimiento y con el municipio, o sea, ya se amplió o se abrió el espacio, diría yo, de la Junta Comunal. (Entrevista citada en CNMH *et al.*, 2017, p. 143)

Por otro lado, el ELN ingresó a Nariño a través de la cordillera Occidental con el establecimiento de varios núcleos guerrilleros y se consolidó el 13 de febrero de 1992 con el surgimiento del Frente Comuneros del Sur (FCS), por medio del proyecto *Santos*, con el cual las estructuras que hacían presencia en Nariño buscaron la aprobación del COCE para el establecimiento de un frente guerrillero en el occidente del departamento. Dicho proyecto fue abanderado por Toño "Jaime Obando", quien lideró los núcleos elenos

en Nariño desde finales de los ochenta. Toño, natal de departamento, habría ingresado al ELN en la ciudad de Bogotá, cuando cursaba la carrera de sociología en la Universidad Nacional (Sierra, 2006).

Al igual que en el Cauca, en Nariño el ELN se destacó por el desarrollo de un vigoroso trabajo político-organizativo con las comunidades. En cabeza del comandante Toño el ELN difundió las ideas latinoamericanistas y de liberación nacional, a través de la exaltación del general inca Rumiñahui, la conmemoración del levantamiento de los comuneros del sur y la solidaridad con el pueblo vecino de Ecuador (Sierra, 2006), dicha identidad se hace expresa en las canciones producidas por los militantes del frente (Anexo 1).

Cabe resaltar que el asentamiento del ELN tanto en Cauca como en Nariño se vio abonado por el trabajo que venía realizando la ANUC línea Sincelejo desde mediados de los años setenta, con el desarrollo de escuelas y un proceso de recuperación de tierras. A esto se sumarían las misiones sacerdotales bajo la teología de la liberación en algunas partes de la subregión (CNMH *et al.*, 2017). Sin embargo, esto no quiere decir que las misiones sacerdotales y las escuelas de la ANUC fueran del ELN, sino que estos fueron espacios capitalizados por la insurgencia.

Los territorios donde se insertó el ELN fueron zonas periféricas, en un principio del macizo caucano y nariñense, las cuales se caracterizaron por el abandono estatal en razón de la presencia diferenciada del Estado, el cual concentró la institucionalidad en las capitales Popayán y Pasto. Lo anterior gestó una amplia aprobación hacia la insurgencia debido a que los habitantes encontraron en la guerrilla una figura de autoridad:

> La mayoría del Macizo desde los años noventa carecía de fuerza pública, todos los municipios y cabeceras municipales contaban solo con unos pocos policías […] entonces estos territorios fueron la zona donde se establecieron las guerrillas. No podemos hablar de grupos armados delincuenciales, ni bandas, se establecieron guerrillas. (Entrevista 5, 2019)

El ELN fue ganando legitimidad en los pobladores. Sus discursos y proyecto, aunados a un papel de coordinación y mediación de conflictos sociales, le permitieron suplir el papel del Estado, fomentando el orden y la provisión de bienes y servicios:

> Hacían presencia en las comunidades, hacían reuniones con los presidentes de juntas, dictaban las normas de convivencia y de respeto, motivaban a las personas a participar de los diferentes grupos y trabajos comunitarios como la limpieza de vías y mantenimiento de puentes […] Ha sido la insurgencia quien ha mantenido la coherencia de los territorios, si los grupos armados no hubieran hecho una presencia tan fuerte, los problemas de robos, violencia, desintegración social, consumo de sustancias psicoactivas, todo hubiera sido un caos […] Se desarrollaban trabajos comunitarios al día, a las vías se les hacía mantenimiento permanente (Entrevista 1, 2019)

El nivel de tolerancia hacia la insurgencia y su acogida fue tal, que en zonas de influencia los pobladores se referían a los militantes y combatientes del ELN como *los muchachos* (Pérez, 2004; CNMH *et al.*, 2017), ello da cuenta de la percepción positiva que tuvieron de esta insurgencia, a la vez que demuestra la capacidad de integración que la guerrilla logró en los territorios y la vida cotidiana de los pobladores:

> Yo creo que se fue generando como cierta familiaridad y cierta aceptación de la presencia, ¿cierto? [...] uno veía por ahí a un guerrillo del ELN, por ahí en una esquina tocando guitarra, ¿sí? Y enseñándole a unos chinos ahí a tocar guitarra. Y la gente eso no le parecía malo. No le parecía extraño [...] yo creo que se fue generando como una comunicación; fueron explicando por qué estaban ahí; fueron reuniendo a la gente. También le fueron comentando desde su percepción de por qué estaban; qué opinaban de los problemas; de lo que estaba pasando. Se fue generando como una familiaridad. (Entrevista citada en CNMH *et al.*, 2017, p. 144)

La aceptación de la insurgencia y el abandono estatal de estas zonas permitieron al ELN tener un crecimiento exponencial en sus primeros años. Fue así como en el Cauca, hacia la subregión del Macizo, esta logró consolidar el frente guerrillero Manuel Vásquez Castaño sin mayor resistencia desde su arribo al municipio de Santa Rosa, llegando a copar gran parte del sur del departamento en su proceso de expansión por los municipios de San Sebastián, Bolívar, Almaguer, La Vega, Rosas, La Sierra y Timbío, entre otros, hacia el norte hasta Popayán.

Por otro lado, hacia la zona occidental del departamento, más tarde y tras una ardua disputa con las FARC-EP, el ELN logró establecer el frente guerrillero José María Becerra en zonas del municipio de El Tambo hacia el año 2007.

Cabe aclarar que el Frente José María Becerra arribó al piedemonte caucano desde el departamento del Valle, tras una acción de repliegue y desplazamiento, a causa del fuerte accionar del bloque Farallones (BF) de las AUC:

> Yo me acuerdo de la comandante Ana María del ELN, era hermana de la comandante Carolina. Ellas llegaron aquí cuando hubo esa arremetida en contra del ELN en Farallones, en Cali. De allá los sacaron [...] eran universitarios, vea todos tenían los cabellos loquísimos, llegaron enmontañados, ¡uyy no!, esa gente llegó mal, pues no estaban acostumbrados a estos terrenos. Habían dejado el asunto allá para venirse acá, eso había profesionales ahí, médicos, abogados e ingenieros civiles, se les tenía mucho respeto por eso, acá se aprendieron muchas cosas por eso, todos eran profesionales, todos venían de allá. [...] Llegaron aquí y pidieron permiso a las FARC para estar por aquí, pero venían era de pasada, estaban buscando un territorio, venían a unirse con otros de Nariño después de la arremetida en Cali ¡como este es el corredor de la pasada para allá! (Entrevista 7, 2019)

Los orígenes del Frente José María Becerra se remontan al desdoblamiento del frente guerrillero Luis Carlos Cárdenas, primer frente en asentarse en el Valle del Cauca. El frente Luis Carlos Cárdenas fue fundado en el año 1978 y operó en inmediaciones de los municipios de Tuluá, Bolívar, Primavera, Naranjal y Riofrío hasta el año 1993, cuando la política de copamiento territorial de la Dirección Nacional le ordenó trasladarse a la cordillera Central, sin perder su zona de trabajo. Fue así como surgió el frente guerrillero José María Becerra, el cual se ubicó en zonas tanto urbanas como rurales de Cali, Jumbo y Jamundí (Hernández, 2009).

Antes de la consolidación del frente José María Becerra en el piedemonte caucano, algunas estructuras de esta insurgencia ya hacían presencia en la zona, aunque de manera muy limitada, a través de la Compañía José Luis Cabrera Rúales, proveniente del departamento de Nariño y la Compañía Milton Hernández Ortiz, que venía del Cauca.

En el departamento de Nariño, el ELN logró hacer presencia desde el Macizo hasta la frontera con el Ecuador, posicionándose también a lo largo de la vía que va de Barbacoas a Tumaco. Su presencia se dio a través del FCS, en conjunto con varias estructuras móviles que surgieron desde finales de los años noventa tras la decisión del 14 pleno de la Dirección Nacional (DN) de dar un salto cualitativo en la estrategia de guerra, para intentar avanzar a la guerra de posiciones con la conformación de batallones y estructuras móviles (Ávila y Núñez, 2010). Así, en Nariño surgieron las compañías Héroes y Mártires de Barbacoas, Guerreros del Sindagua, Héroes de los Andes, José Luis Cabrera Ruales y Jaime Toño Obando.

Tabla 1. Estructuras del frente de guerra Suroccidental "Carlos Alberto Troches Zuleta", 2010-2019

Departamentos	Frentes	Compañías
Cauca	Frente guerrillero Manuel Vázquez Castaño Frente guerrillero José María Becerra	Compañía Camilo Cienfuegos Compañía Milton Hernández Ortiz Compañía Lucho Quintero
Nariño	Frente guerrillero Comuneros del Sur	Compañía José Luis Cabrera Rúales Compañía Guerreros del Sindagua Compañía Jaime Toño Obando Compañía Héroes de los Andes

Fuente: SIG, Cinep/PPP. Archivo de prensa Cinep/PPP. Elaboración propia.

A pesar de la consolidación del ELN en el Macizo, más tarde esta zona se convertiría en escenario de disputa por el control territorial,

particularmente entre ese grupo y la guerrilla de las FARC-EP[4]. Esto debido a la inserción tardía de las FARC-EP —hacia el año 1988— en zonas donde ya se encontraba consolidada la otra insurgencia.

> En esos momentos había disputas entre los dos grupos, el uno por mantener su territorio y el otro por posicionarse en los territorios donde ya había un trabajo de control territorial de la insurgencia del ELN. Las insurgencias comenzaron a disputarse los procesos organizativos, comunales, productivos etc. Un bando comienza a direccionar y obligar a la gente, que tiene que irse con ellos, y el otro bando, que ya había estado en la zona y tenía control —el ELN—, a no dejar. (Entrevista 5, 2019).

La disputa de los territorios entre ambas organizaciones afectó directamente a las comunidades, las cuales se vieron en medio de los conflictos de intereses:

> Nosotros como líderes sociales quedamos en la mitad de ese fuego. Al final lo que hicimos fue abrirnos de ese control de ambos y comenzamos a caminar solos en un proceso, eso no les gusto […] Dijimos que ni el ELN nos venga a imponer ni que las FARC nos venga a imponer. El ELN nos dejó actuar, pero las FARC comenzó a decir "bueno ustedes o se alinean o esto y lo otro". Un personero, muy buen personero, fue amenazado en el 2002, las gentes de las FARC lo sacaron amarrado para matarlo, nos tocó ir, no dejamos que lo mataran. Eso implicó que a un grupo de líderes las FARC nos considerara objetivo militar, muchos de esos líderes se atemorizaron, a mí me dieron un tiempo para salir. Eso debilitó y fraccionó los procesos, eso no fue solo en Santa Rosa, eso ocurrió en muchos de los municipios del Macizo colombiano. (Entrevista 5, 2019)

Aunado al conflicto entre ambas insurgencias, desde el año 2002 con la política de Seguridad Democrática, se presentaría un incremento en la ofensiva de la fuerza pública. En ese contexto la tercera división del Ejército Nacional desplegaría varias acciones militares bajo la operación "Consolidación del Territorio Caucano" e incrementaría su pie de fuerza en las zonas del Macizo a través de la operación "Alcatraz" (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 031-03), esto terminaría generando un incremento en las acciones bélicas e infracciones al DIH tal como lo muestran las figuras 1 y 2.

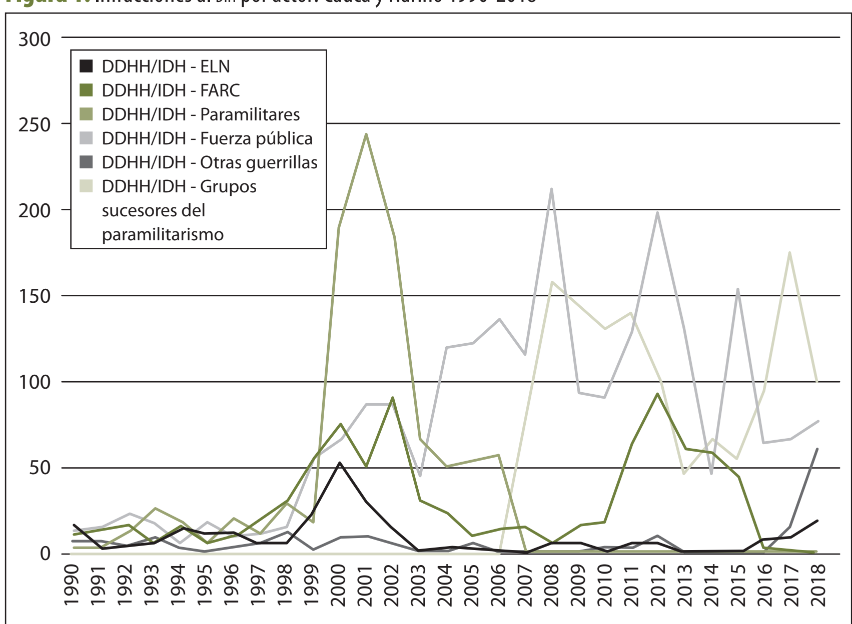
La figura 1 da cuenta del incremento de la ofensiva de la fuerza pública desde el año 2003, con el aumento en las infracciones al DIH, correspondientes a fuerzas militares y policiales en la subregión, quienes bajo las operaciones anteriormente mencionadas, redoblaron sus esfuerzos

4 A pesar de que los relatos de los pobladores resaltan la presencia del M-19 como primera insurgencia en la zona del Macizo y en su memoria tienen grabada la toma a San Sebastián como la primera toma guerrillera, el M-19 solo estuvo de paso en la subregión y no fue de gran importancia en el desarrollo de las dinámicas territoriales, en comparación con el ELN y las FARC-EP.

para desactivar las redes de las insurgencias, golpeando en la mayoría de las ocasiones a civiles inermes. Dicho incremento se ve acompañado de la reducción de las infracciones al DIH por parte de las insurgencias y de las acciones bélicas del ELN (Figura 2).

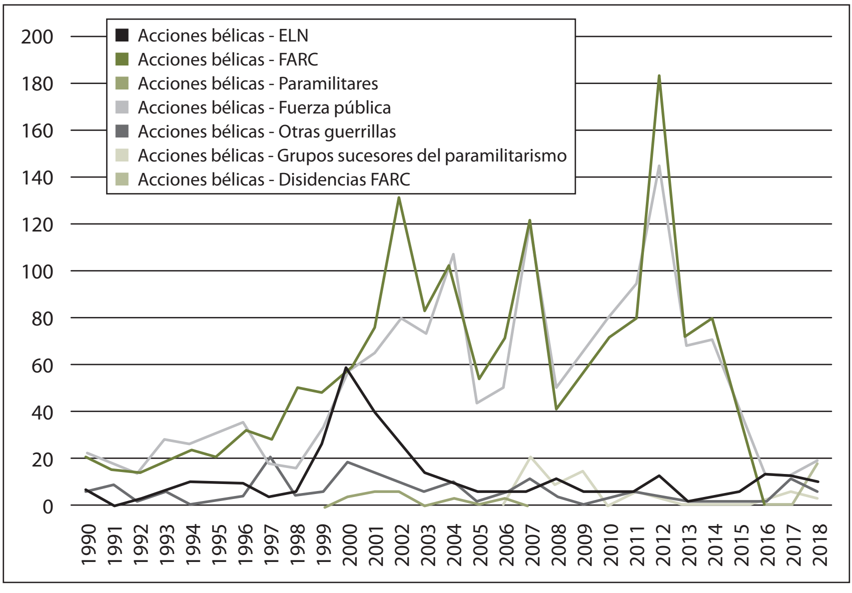
La figura 2 muestra una constante de acciones bélicas en este periodo cuyos actores principales fueron las FARC-EP y la fuerza pública. De hecho, puede observarse que no hay un incremento tan abrupto en las acciones bélicas de estos dos actores, ambas se mantienen oscilantes hasta los años 2004 y 2005, donde se reducen significativamente. Dicha reducción responde probablemente al repliegue de las FARC-EP y a que la fuerza pública se concentró en el intento de desactivación del aparato de la insurgencia golpeando a los pobladores bajo la estrategia de "quitarle el agua el pez", lo cual explica el contraste entre un alto índice de infracciones al DIH y una disminución de las acciones bélicas por parte de la fuerza pública para el 2004 y 2005.

Figura 1. Infracciones al DIH por actor: Cauca y Nariño 1990-2018



Fuente: SIG, Cinep/PPP. Elaboración propia.

Figura 2. Acciones bélicas por actor: Cauca y Nariño 1990-2018



Fuente: SIG, Cinep/PPP. Elaboración propia.

El desarrollo de operaciones militares sobre el Macizo obligó a las FARC-EP a retirarse hacia los departamentos de Putumayo y Huila, poniendo fin a la disputa entre ambas insurgencias en esta zona. El ELN, a diferencia de las FARC-EP, se replegó ante la avanzada militar sin abandonar el territorio, resistiendo en la cordillera. Su permanencia se explica por la priorización estratégica que estableció en los territorios del Macizo y su arraigada base social (Entrevista 5, 2019).

Las FARC-EP se instauraron en Cauca y Nariño para finales de los ochenta. En el departamento del Cauca se consolidó con la columna móvil Jacobo Arenas y los frentes 6, 13, 60 y 8. En Nariño arribó tras el desdoble del frente 8, para dar vida al frente 29, que se establecería con una fuerte presencia en Tumaco y Barbacoas. Además de dicho frente, también ejerció presencia a través de las columnas Daniel Aldana y Mariscal Sucre, la primera en las zonas rurales de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, y la segunda hacia la zona de cordillera en inmediaciones del municipio de Samaniego (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 024-03; Entrevista 13, 2020). Los frentes 6, 60 y 8 operaron específicamente en el nororiente del departamento del Cauca y en el Naya, Balboa, Argelia y las cuencas del Alto y Medio Patía (Defensoría del Pueblo, 2018). Es de resaltar que las FARC-EP contaron con una gran capacidad ofensiva, expresada en sus acciones bélicas (figura 1), así como una arraigada consolidación en ambos departamentos.

En el año 2007, las zonas del piedemonte caucano de influencia fariana fueron disputadas por el ELN, el cual logró ganar los corregimientos de Playa Rica, Huisito y San Juan del Micay del municipio de El Tambo.

> Entre el 2007, 2008 entra el ELN al territorio, empieza a hacer presencia. En el Tambo estaba las FARC también, entonces se da una disputa, un conflicto. Ese conflicto entonces nos pone a las organizaciones en el medio, las FARC nos amenazaba, amenazó a los compañeros de Asocomunal, Las FARC nos decía que no teníamos que hacer un consejo comunitario, sino que tenía que ser una zona de reserva campesina […] El ELN logró sacar a FARC de allá. Sin embargo, se daban señalamientos, decían que las organizaciones ya hacían parte del ELN (Entrevista 3, 2019).

Dichas confrontaciones se dieron por el deterioro de las relaciones entre las insurgencias y sus intereses de control territorial:

> Desde hace más de cuatro años, las FARC han venido hostigando nuestras unidades con el objetivo de sacarnos de la zona de Argelia, López de Micay, El Tambo y de varias zonas del Valle del Cauca. Hemos soportado malos tratos, difamaciones, retenciones de algunos compañeros, asesinatos, nos han desarmado a otros […] el 25 de septiembre del presente año, después de que las FARC agredieran a una escuadra nuestra, por los lados del Plateado-Argelia, nos vimos obligados a responderles, originándose los combates que no han cesado desde esa fecha […] Denunciamos que las FARC vienen cometiendo todo tipo de atropellos contra la población civil, amenazando con asesinarlos si prestan algún tipo de ayuda al ELN; al igual que han causado destierro y desplazamientos de las comunidades de varios lugares (ELN, 2007).

A pesar de las afectaciones que generaron los choques entre ambas guerrillas, algunos pobladores mencionaron sentir un alivio con la salida de FARC-EP y la consolidación del ELN, debido al carácter impositivo de los primeros en comparación con el carácter mediador de los segundos:

> Las comunidades anteriormente ya habían vivido una experiencia muy dura porque, cuando estaba, la FARC desapareció y mató mucha gente, entonces la gente en un momento manifestó y agradeció que el ELN hubiera hecho presencia. El ELN dijo: "nosotros respetamos lo de ustedes, pero haremos presencia en el territorio". Nos decían: "ojalá los recursos de las comunidades sean bien manejados, se queden en las comunidades". (Entrevista 3, 2019)

El posicionamiento del ELN en la zona de control territorial de las FARC-EP se facilitó debido a que los territorios del Tambo y Argelia, los cuales estaban bajo control fariano, se configuraron como zonas de disputa por grupos relacionados con el narcotráfico, y a su vez sufrieron una fuerte arremetida de la fuerza pública en razón de su economía cocalera. Dicha dinámica de confrontaciones tuvo como resultado el repliegue de las FARC-EP, el cual, además de ser capitalizado con la avanzada territorial del ELN, fue aprovechado por los Rastrojos, quienes obtuvieron acceso a

los recursos económicos de la coca y a los corredores estratégicos a través subregión del Patía hacia Nariño y la costa del Pacífico.

Para ganar este territorio, tras el repliegue de las FARC-EP, el ELN se acercó a las comunidades rurales de El Tambo, buscando suplir el vacío dejado por la otra insurgencia, ganando así el respeto y el afecto de las comunidades para quienes ellos no eran una organización ajena.

> Ellos nos abandonaron por un tiempo —FARC-EP—, porque salieron y se fueron, y en esta zona uno se acostumbra a que alguien lo ande presionando a hacer las cosas […] llega el ELN y avanzamos porque el desarrollo de esta comunidad y de lo que tiene que ver con construcciones se ve cuando ellos llegan, empiezan a traer profesionales para que actualicen, porque vivíamos acá los mismos con las mismas y no pasaba nada, entonces vimos que necesitábamos gente que viniera y que nos diera otra proyección […] Llega que el abogado, antropólogos, psicólogos, una cantidad de gente. (Entrevista 7, 2019)

Los pobladores de estas zonas, en varias ocasiones, intentaron mediar el conflicto entre ambas insurgencias, con el fin de poner un alto al fuego. Sin embargo, ante la imposibilidad de cesar las confrontaciones y tras la insistencia en que las comunidades decidieran de qué lado estaban, los locales decidieron expulsar a las FARC-EP de sus territorios:

> En estas confrontaciones quienes llevan lo peor es la gente, entonces buscábamos espacios para que el ELN y el comandante de las FARC hablarán, decían que no iban a arremeter contra la comunidad, pero eso cuando empezaron a matarse entre ellos se encontraban en un camino y se daban plomo […] La comunidad empezó a cogerle cariño al ELN, entonces empezamos a organizarnos y a decir que nosotros como comunidad íbamos a revirar, que si ni el uno ni el otro nos servían, pues que se abrieran del parche, porque era la comunidad la que mandaba, pero estaba ese agradecimiento para el ELN que había hecho muchas cosas por nosotros (Entrevista 7, 2019).

Las confrontaciones entre ambas guerrillas se mantuvieron hasta finales del año 2009, cabe aclarar que, tras perder los territorios de El Tambo, las FARC-EP se establecieron en los municipios de Argelia y Balboa.

En general, a pesar de la arraigada consolidación del frente de guerra Suroccidental y sus grupos guerrilleros, el desarrollo de sus diversas actividades económicas, políticas y militares se dieron bajo constantes choques y mediaciones con las FARC, organización preponderantemente militar, económica y territorialmente debido al vigoroso crecimiento que le permitió la economía cocalera con la que alimentó el bloque occidental y engrosó sus filas (Entrevista 5, 2019).

El desarrollo del ELN en la subregión no solo se supeditó a sus relaciones y disputas con la otra insurgencia, sino que también estuvo sujeto a la confrontación constante con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),

desde que estas llegaron a los territorios adyacentes a la vía Panamericana y las zonas del Pacífico con los bloques Calima (BC) y Farallones (BF), en el Cauca, y Libertadores del Sur (BLS), en Nariño.

El ingreso de las AUC en ambos departamentos se dio bajo su lógica de expansión y con el apoyo y la connivencia de la fuerza pública y poderes políticos locales, extendiéndose desde el departamento del Valle hacia el sur hasta Nariño, a través de la vía Panamericana. En su proceso de inserción, las AUC se implantaron, hacia finales del año 2000, en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Morales, Cajibío, El Tambo, Argelia, Popayán, Timbío, Patía, Balboa, Bolívar, Mercaderes y Florencia en el Cauca, para avanzar posteriormente hacia los municipios de Nariño como La Unión, San Pablo y La Cruz en el año 2003 (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 033-03, AT n°. 056-03) hasta llegar, luego, a disputar los ejes territoriales que van de occidente a oriente en la vía que comunica a Tumaco con Pasto y de la frontera del Ecuador hasta la subregión del alto Patía.

Cabe aclarar que el control territorial de las AUC se consolidó en los centros urbanos, desplazando a las unidades de las FARC-EP y el ELN —que hacían presencia en dichos territorios— hacia las zonas rurales de los municipios: así ocurrió en Samaniego y La Llanada, Nariño, donde se asentaron en las cabeceras municipales, haciendo que las insurgencias se relegaran hacia las estribaciones de las montañas. De la misma manera, en el Cauca se establecieron en las cabeceras del municipio de El Tambo, obligando a las insurgencias a recluirse en la zona rural, hacia el occidente de la cordillera Occidental, por mencionar solo unos casos (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 066-03; Entrevista 6, 2019).

La expansión de las AUC hacia zonas donde ejercían control las FARC-EP y el ELN, no solo suscitó el desarrollo de confrontaciones, también condujo al incremento de señalamientos y ataques en contra de civiles a quienes las autodefensas señalaban como colaboradores de las insurgencias. En varios casos, los pobladores se vieron recluidos en sus veredas y corregimientos, no solo por el temor a ser señalados a la hora de salir a los cascos urbanos, sino también por el control impuesto por las AUC, como ocurrió en el municipio de El Tambo, donde, además de revisar quién entraba y salía de las zonas rurales, las AUC regulaban la cantidad de alimentos que ingresaba al territorio cada una de las familias, esto con el fin de limitar los recursos para las insurgencias:

> En el tiempo de los paramilitares, lo que fue hacia el 2001, 2002, 2004 fue muy duro, porque el ejército paramilitar, que se ubicó en fondas, acá atrás en el pueblo, optaron por quitar los víveres, eso fue muy duro para mi vereda [...] En los carritos en donde echábamos los víveres, nos quitaban la ropa, si encontraban la peinilla (el machete) la quitaban, lo que traíamos en las mulas, la carguita, nos quitaban lo que era el arroz, la panela, las

> medicinas, todo eso se lo quitaban a uno porque decían que eso sin duda venía para algún grupo armado, que uno qué se iba a comer toda esa comida. (Entrevista 8, 2019)

De este contexto se puede inferir lo siguiente: primero, que facilitó diferentes tipos de alianzas estratégico-militares entre FARC-EP y ELN, con el objetivo de combatir a las estructuras de las autodefensas y repeler la arremetida de la fuerza pública. Y, segundo, es de suma importancia señalar la situación de la población, la cual ha tenido que aceptar la regulación guerrillera ante la ausencia de la regulación estatal, pero esta aceptación termina siendo estigmatizada cuando hacen presencia las AUC o la institucionalidad del Estado.

Es importante mencionar que el incremento de los cultivos de coca y amapola, tanto en Nariño como en Cauca, fue un factor clave para el posicionamiento y el fortalecimiento de las AUC hasta su desmovilización, pues estas coparon varios territorios en procura de las rentas del negocio del narcotráfico (Millán, 2011). Dicho incremento en los cultivos se dio en función de los procesos migratorios de campesinos cocaleros desde el departamento del Putumayo, tras las aspersiones aéreas dirigidas bajo el marco del Plan Colombia. La coca se asentó en la zona del Andén Pacífico en Nariño, en el Cauca se consolidó en Argelia y El Tambo. El establecimiento de los cultivos abrió la frontera agrícola por medio de constantes procesos de migración espontánea, los cuales fueron conformando el clúster del narcotráfico actual.

Tras la desmovilización de las AUC en el año 2005, ambas insurgencias empezarían a copar de nuevo los territorios que habían perdido. Sin embargo, hubo varios sectores de las autodefensas que no se acogieron a la desmovilización y siguieron ejerciendo control territorial económico a través de la cooptación de recursos de la minería informal, los cultivos de coca y amapola. Lo anterior propiciaría el incremento de las disputas y daría paso a las futuras reconfiguraciones territoriales, con impactos para el ELN, tales como sus alianzas estratégicas con FARC-EP para repeler a los Rastrojos, los Urabeños y la fuerza pública.

Ámbitos de regulación

El ELN ha ejercido regulación sobre aspectos políticos, sociales y económicos[5]. Estableció manuales de convivencia, el cobro de impuestos, la distribución de recursos y la administración de justicia, promovió la

5 Este aspecto será abordado a profundidad en el cuarto apartado.

organización de las comunidades, la participación política e hizo las veces de veedor de funcionarios públicos.

En lo que respecta a la formulación de marcos normativos, esta insurgencia demostró ser una organización con un carácter mucho más *mediador*[6] que las FARC-EP. El establecimiento de los manuales de convivencia, en vez de ser algo impuesto unilateralmente por el ELN, tuvo la particularidad de ser construido a través de diferentes procesos de diálogo y debate entre pobladores e insurgencia, donde los primeros de alguna manera tuvieron la capacidad de incidir en su construcción:

> Siempre hacían las asambleas […] le decían a la gente: "tiene que ir a la asamblea, tiene que ir a la reunión". […] Ellos daban unas pautas y la gente tenía un margen de opinión sobre algunas, por ejemplo, ponían a discusión lo siguiente: "Ustedes qué dicen, ¿que las cantinas permanezcan abiertas toda la noche o no?" Entonces la gente decía: "No, pongámosle un horario", entonces iban conformando un manual de comportamiento de acuerdo con opiniones de la gente. También había cosas que imponían, por ejemplo, los campesinos que se emborrachen entre semana pagarán una sanción […] se construyeron cosas en lo ambiental, bueno en muchos aspectos, pero ellos dieron margen a que la gente participara en eso, los otros (FARC-EP) no, solo imponían. (Entrevista 5, 2019)

La mediación como particularidad de esta organización ha permitido que las comunidades ejerzan como veedoras, tanto de su accionar como de las mismas normas establecidas, así lo expresan dos lideresas El Tambo, Cauca:

> Cuando ocurre algo a las comunidades, ahí mismo se manda un comunicado para que respondan, digamos, si de pronto el ELN hace algo malo, las comunidades tenemos la capacidad de ejercer veeduría sobre el grupo. En el marco del respeto se ha logrado que las comunidades les diga: "Bueno, esto no está bien, esto no funciona, etc.". (Entrevista 3, 2019)
>
> Ellos en varias ocasiones mandaron comunicados a la comunidad de sus miembros y cuáles eran sus comportamientos con la población civil, si alguno de sus miembros tenía una intolerancia con algún comunero, la comunidad misma se podía dirigir al mando de zona para no darle alas a una persona para que cometa injusticias a nombre de ellos. Uno de los comportamientos de ellos decía: "ningún militante debería estar armado en un establecimiento público, ni estar ingiriendo licores, ni faltarle el respeto la gente". (Entrevista 6, 2019)

---

6 Es de aclarar que, si bien la mediación es una generalidad en la forma de relacionamiento de esta insurgencia para con la población civil, en algunos casos el cumplimiento de esta depende de los mandos.

Esta insurgencia, más que imponer normas, ha ejercido como garante de su cumplimiento, haciendo las veces de fiscalía y policía, siendo buscada por la comunidad como un agente "neutro" con la posibilidad de brindar soluciones ante diversos problemas locales de tipo familiares, vecinales, de negocios y/o linderos. En ese sentido, una lideresa del municipio de El Tambo mencionó al respecto: "En caso de algún incidente de borrachos o de comunidad, que la misma comunidad no pudiera controlar, si la comunidad pide ayuda, ellos deben ayudar a solucionar el problema" (Entrevista 6, 2019).

Lo anterior ha fomentado el empoderamiento de las comunidades, las cuales, a través de procesos de diálogo, debate, concertación e incluso en ocasiones confrontación, han logrado imponer a la insurgencia marcos de acción en los territorios. Es así como han impedido el reclutamiento de menores de edad y han logrado, en algunas zonas, mediar ante proyectos de extracción de recursos naturales (Entrevista 3, 2019). De forma concreta, podemos estar hablando de una especie de autogobierno local, garantizado coercitivamente por el ELN.

En lo que respecta a la administración de justicia, el ELN también ha estado supeditado a las decisiones comunitarias. En varias ocasiones, las mismas comunidades han impedido el desarrollo de ajusticiamientos por parte de la insurgencia. En ese sentido, si bien el ELN aplica y ejerce procesos sancionatorios en los territorios, estos no suelen ser definidos de manera unilateral en la mayoría de los casos, sino que, por lo general, los líderes y lideresas son informados previamente en espacios asamblearios antes de que se dicten las sanciones correspondientes, como ocurrió en San juan del Micay:

> Hace poco cogieron a un muchacho del Putumayo, él era del Ejército y estaba haciendo inteligencia, entonces cuando lo cogieron llamaron a los líderes para decirles que iban a ajusticiarlo, se hizo una reunión con la comunidad y se les pidió que no, que se lo entregaran a unos pastores, al final se decidió que se lo entregarían a la Defensoría y a la Personería. Lo que se hizo fue que lo entregaron a nosotros —la comunidad— y nosotros lo entregamos a la Defensoría". (Entrevista 3, 2019)

Previo al desarrollo del juicio, la insurgencia suele desplegar todo un mecanismo de investigación en torno a la falta cometida por la persona, con el fin de evitar falsas denuncias entre los mismos pobladores, sorteando también el posible desarrollo de actos unilaterales por integrantes de la insurgencia. Lo anterior hace que las comunidades tengan la percepción de que la administración de penas es justa, por lo que los juicios juegan un papel fundamental a la hora de mantener una imagen positiva con los pobladores:

> Primero hacían una investigación, no sé cómo lo hacían, pero, mejor dicho, eso era cosa de televisión. Sucedía un caso, ellos investigaban un mes completo, y ya capturado el "paciente", reunían a la comunidad y le

> decían: "tal situación ocurrió en tal fecha", cosas que coincidieran fechas y todo, y bueno […] No lo dejaban luego por ahí botado, sino que lo hacían en el cementerio, y le pedían al personal de salud que lo llevaran y eso, y pues le daban una muerte digna. (Entrevista 7, 2019)

Cabe resaltar que el desarrollo de los juicios públicos se encuentra supeditado a la capacidad organizativa de los pobladores y al tipo de comandancia encargada de la zona: si la comandancia de la zona es autoritaria y los pobladores son pasivos, lo más probable es que la insurgencia desarrolle ajusticiamientos sin algún tipo de rendición de cuentas; si la comunidad es organizada y la comandancia es autoritaria, la comunidad podrá confrontar y exigir el cumplimiento de las normas, bien sea directamente o dirigiéndose a la comandancia de área; y si la comunidad es organizada y la comandancia no es autoritaria, es más que seguro el desarrollo de los juicios para los procesos sancionatorios. Por tanto, se debe comprender que, si bien la interlocución con las comunidades y el desarrollo de un juicio público es una particularidad del ELN, y en varios casos la insurgencia lo realizó sin necesidad de que los pobladores lo exijan, esto varía en cada territorio.

Aunque las indagaciones que realiza el ELN giran en torno a casos en concreto de violaciones a las normas establecidas, también ejerce una vigilancia constante sobre el quehacer diario para hacer los llamados de atención que considere necesarios:

> Ellos vienen de civil, nosotros no sabemos identificarlos y ellos obviamente no van a decir "vea somos guerrilleros y nos mandan a hacer una investigación". Eso sí, cada fin de semana hay uno aquí mirando quién se pasa de las horas, quién vende bebidas después de los cierres, quién hace desorden, en cualquier momento le va a llegar su sanción. (Entrevista 9, 2019)

Como se ha hecho explicito, el cumplimiento de las normas, la asistencia a reuniones y la aceptación de sanciones ha sido acatada por el carácter simbólico y coactivo que tiene la insurgencia como autoridad armada. Su simple presencia, así no sea continua en veredas y corregimientos, ha facilitado el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas por parte de los pobladores, debido a que estos intentan no estar inmersos en problemas que tengan que ver con la guerrilla, por la coerción que representan las armas y los casos de ajusticiamiento —homicidios— realizados.

De alguna manera, la posición de autoridad de la insurgencia ha resultado funcional para los territorios, ya que, cuando se les ha dificultado a líderes y lideresas la aplicación de los marcos normativos en algunas zonas, la apropiación, por parte de la insurgencia, de una norma comunitaria, "que nadie cumplía", fomentó su cumplimiento, como muestra el siguiente ejemplo:

> Nosotros creamos la norma de no tumbar más montaña, la de no construir entorno a la fuentes hídricas y bueno mucha gente no acataba, nosotros colocamos un mínimo de multa para que la gente cumpliera y de

repente, de la nada, llegó el ELN y puso una pancarta gigante "prohibido tumbar montaña, multa de cien millones de pesos. Y pues ayudó en últimas. (Entrevista 3, 2019)

Por otro lado, en lo que respecta a lo económico-administrativo, el ELN ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura local. Por medio de su inserción en las diferentes actividades productivas como autoridad fiscal, con el cobro de los impuestos revolucionarios, las vacunas y la extorsión, no solo se ha financiado la guerrilla, sino que también ha construido un erario colectivo para la construcción de obras, como puentes, carreteras, salones comunales y escuelas. La insurgencia también ha fomentado de alguna manera el flujo de capital en lo local con el uso del dinero recaudado para la adquisición de sus implementos como ropa, alimentos, transporte, medicinas etc.

Su capacidad de convocatoria tanto orgánica como coactiva, en conjunto con los recursos públicos recolectados, ha sido la vía principal para el desarrollo de algunas veredas y corregimientos. Lo anterior, aunado al trabajo político que realizó desde su llegada a cada uno de los territorios, fomentó de algún modo el arraigo comunitario de los pobladores, quienes, ante el llamado a una minga, asistían; algunos por miedo a represarías, pero otros por convicción propia, así lo relatan un líder y una lideresa de zona rural de Bolívar y El Tambo:

> Allá cuando se hacía limpieza de caminos salían 500 personas, allá se decía "sábado limpieza vía Bolívar - San Lorenzo", y 500 personas limpiando […] el que no iba lo mandaban digamos para San Pablo a limpiar, y ya no era un día, sino tres días. (Entrevista 1, 2019).

Eso ayudaba toda la gente, en esa época construimos el polideportivo, el puesto de salud, y ese camino que hay ahí, de la alcantarilla hasta allá adelante. Un día llegó la comandante Carolina y dijo: "vamos a trabajar el viernes, necesito que Raymundo y todo el mundo se ponga pilas porque vamos a pavimentar los sitios públicos". Salimos 400 personas y eran las 12 del día y ya estaba pavimentado eso. Y así ha sido todo, mancomunadamente. (Entrevista 7, 2019)

Según la investigación de Pérez (2004), en Guachucal, Nariño, los aportes económicos fueron establecidos por esta guerrilla dependiendo de la capacidad adquisitiva de la persona y/o el negocio afectado. Sin embargo, sus cálculos no han estado exentos de equivocaciones, llegando a establecer cuotas bastante altas a personas naturales y jurídicas, cuyos niveles adquisitivos eran apenas los suficientes para subsistir. Por otro lado, durante el desarrollo del trabajo de campo en El Tambo, Cauca, los pobladores locales mencionaron que los aportes económicos a la insurgencia no eran obligatorios para ellos, sino solo para las grandes empresas; también mencionaron que la guerrilla no tocaba los rubros económicos

de los territorios, sino que, al contrario, aportaba a ellos en la medida de lo posible y cuando lo creía necesario:

> Aquí más que todo se pagan los impuestos, ellos lo cobran, pero lo devuelven porque traen cosas, les cobrarán a empresas, a cosas grandes.
>
> Entrevistador: ¿Entonces la guerrilla no viene a tocar los rubros, no le dice: "ustedes me tienen que pagar tanto por seguridad"?
>
> Entrevistado: No, ni a los locales. Es que todo lo que nos cobran acá es voluntario, cada uno aquí maneja su dinero, el ELN ha estado muy pendiente de que se maneje bien. (Entrevista 7, 2019; el resaltado es propio).

Desde que el ELN se asentó en los territorios como parte de su formación política, con miras a desarrollar su idea de trabajo político-organizativo, se esforzó por potenciar la construcción de gobiernos propios comunales. Para tal objeto, llevó profesionales a las veredas y corregimientos a que instruyeran a los pobladores en diferentes áreas del conocimiento que les fueran funcionales, en especial en temas relacionados con la construcción de obras y salud. En este sentido, según una pobladora encargada de la prestación del servicio de salud, el ELN decía: "Queremos que ustedes se formen porque pueden hacer un gobierno interno acá, porque la misma comunidad tiene que tener autonomía y sentido de pertenencia de las cosas y empezar a solucionar asuntos (Entrevista 6, 2019).

lo anterior se enmarca en la táctica elena de construcción de poder popular, bajo la estrategia de guerra popular prolongada, donde el ELN buscó crear formas de gobierno comunitarias, relativamente autárquicas, siguiendo la consigna "el pueblo habla, el pueblo manda" (ver capítulo "Descifrando al ELN").

En Cauca y Nariño, dicha estrategia, aunada al carácter de mediación del ELN, fue uno de los factores que llevó paulatinamente a la autonomía de pobladores, pobladoras y organizaciones sociales. Las comunidades y sus organizaciones con el tiempo abanderaron sus propias luchas hasta llegar al punto de debatir y confrontar a la insurgencia cuando consideraban que no reconocía los órganos de poder y las instituciones comunitarias.

En efecto, varias metodologías en la organización del trabajo colectivo de los pobladores y pobladoras en zonas rurales se pueden leer como un "legado de la insurgencia". Los pobladores de las zonas abandonadas por el Estado aprendieron del funcionamiento del ELN en términos administrativos, técnicos y políticos, para empezar a establecer autónomamente sus denuncias, planes, proyectos y sus propios impuestos comunales, con el fin de financiar sus obras y garantizar la prestación de servicios. Esto no quiere decir que previo a la insurgencia no existiera una estructura organizativa e instituciones propias en los territorios, sino que el ELN, a través de los espacios de formación, logró fomentar el intercambio de saberes fortaleciendo las instancias organizativas comunitarias a través de las sinergias.

Además de los aprendizajes organizativos y administrativos de las comunidades, la estrategia de poder popular logró fomentar una mayor articulación en las luchas sociales locales, departamentales y nacionales. El impulso de la insurgencia para la cualificación de los pobladores y pobladoras, aunado al auge de las luchas sociales, y por medio de los diferentes encuentros nacionales y departamentales de organizaciones sociales, aportó a la cualificación de las agendas comunitarias. Dicha cualificación, por medio de la cooptación, también dotó al ELN de una mayor articulación a nivel nacional a través de sus milicianos infiltrados en las organizaciones de las comunidades y el reclutamiento. Lo anterior, aunado a la capacidad de despliegue de las acciones de propaganda realizadas por este frente, las cuales rebasan, y por mucho, la subregión en términos geográficos, demuestra la capacidad de relacionamiento a nivel nacional que le brindó la utilización de dicha estrategia a la insurgencia en estas zonas, al tiempo que demarcó unas fuertes fronteras grises donde la población ha sido víctima de señalamientos y estigmatizaciones.

Ahora bien, la insurgencia no solo ha regulado en términos económicos y de justicia, también se ha encargado de fomentar una agenda cultural y educativa. El ELN ha impulsado el establecimiento de casas culturales, la disminución de la deserción escolar y el desarrollo de fiestas y carnavales. En ese sentido, se refería una educadora de zona rural de El Tambo:

> Cuando llegue acá ellos colaboraban mucho con nosotros, con la institución, apoyaban bastante la educación, estaban pendientes de lo que se necesitaba, incluso nos reunimos con ellos. Cuando yo llegué acá tenía una visión muy diferente de ellos, yo venía de otros lugares donde se decía "¡no!, ¡esa guerrilla! ¡Qué miedo!, ¡qué susto". Me di cuenta de que no eran así, ellos eran muy colaboradores, ayudaban a organizar grupos de danza, de música, ayudaron mucho en un espacio que se llamaba la casa de la cultura, nos decían: "¿Bueno, necesitan instrumentos? Tomen acá están. Acá se hacían celebraciones del día de la familia, de la madre, etc. Ellos eran muy participativos en eso y con la escuela, para nosotros era muy bueno porque teníamos un apoyo que no nos daba el Estado. (Entrevista 10, 2019)

Por lo anterior, ante su presencia surgieron dos posiciones:

> Por un lado, que donde hay guerrilla, hay progreso, porque realizan trabajos comunitarios en lo relacionado con el arreglo de vías, construcción de puentes; además invierten en suministros, como alimentación, vestido, transporte y otros de su utilidad, los cuales representan una inversión alta. De otro lado, existe la posición de que donde hay guerrilla, no hay buenas garantías para el comercio. (Pérez, 2004 p. 64).

Su relación con el desarrollo local no se quedó en el ámbito económico y administrativo, sino que también resultó de vital importancia su capacidad de incidencia política en dos sentidos. Por un lado, desde la

descentralización administrativa, política y fiscal, con la constitución de 1991 buscó aumentar la participación directa de los pobladores en los escenarios de toma de decisión, a través de la formación de líderes locales y el fomento de la construcción de planes de gobierno propios.

> En el 91 con la elección popular comienzan a surgir muchos candidatos, en el 2000 más o menos ya había muchas aspiraciones. El ELN hacia asambleas y le decía a la gente: "Bueno, ¿qué van a hacer ustedes de cara a la elección de la alcaldía?, miren bien, quién será el que los va a representar en la administración y el consejo, son ustedes los que tienen que construir su propio plan para que esa persona no entre a diseñar un plan, sino que ya lo lleve y se atenga a ejecutar eso que ustedes han mandado. (Entrevista 5, 2019)

Por otro lado, ejerció control político sobre los funcionarios públicos. El ELN logró interceptar alcaldes y concejales con el fin de hacerles saber que los estaban vigilando. La guerrilla impuso a los funcionarios el desarrollo de gobiernos transparentes so pena de retención, reconvención, amenaza e incluso muerte. Por medio de este control político, la insurgencia no solo logró la cooptación de dineros públicos, también pudo incidir en la agenda de planes, programas y proyectos a nivel local:

> A mi parecer, a partir del 93 o 94 todos los alcaldes han sido reconvenidos por la guerrilla, a todos se los ha llevado para darles charlas y mostrarles cómo deben comportarse con la alcaldía y con la gente, a ellos les interesa que hagan obras, que no se roben la plata. (Entrevista a poblador de Guachucal, Nariño, citado en Pérez, 2004).

En general, la guerrilla del ELN se convirtió en la autoridad política local de algunos territorios. Sin embargo, se han presentado cambios en la regulación de cara a las variaciones de las dinámicas del conflicto armado a lo largo del tiempo, que han llevado a la insurgencia a replegarse en algunas zonas y por tanto han dificultado su ejercicio de regulación y cambiado sus formas de relacionamiento con los pobladores, como se verá en el quinto apartado de este capítulo.

Repertorios, objetivos y lógicas

Los repertorios, objetivos y lógicas del frente de guerra Suroccidental se han caracterizado bajo la estrategia clásica de guerra de guerrillas, con la cual ha evitado el combate a la vez que propina golpes y gana territorios. Su accionar bélico no ha sobresalido en comparación con los demás actores que han hecho presencia en la subregión. De manera particular, se ha distinguido por tener un nivel bajo pero constante de acciones bélicas, salvo el año 2000 cuando presentó un alza (figura 2) debido a las confrontaciones que produjo el ingreso de las AUC a Cauca y Nariño.

El poco protagonismo de ELN en las dinámicas del conflicto armado del suroccidente se explica por dos motivos: primero, el ya mencionado establecimiento de las zonas de Cauca y Nariño como retaguardias y segundo, la decisión nacional de la insurgencia de privilegiar el ámbito político sobre el militar, tras el proceso de recomposición de finales de los años setenta, tal como se explicó en el capítulo uno de este libro (Entrevista a Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez, citado en Vigil, 1989; figuras 1y 2).

Al hacer una primera lectura de los patrones del accionar del frente de guerra Suroccidental, teniendo en cuenta sus repertorios de violencia, objetivos, técnicas y frecuencia como lo proponen Gutiérrez y Wood (2017), es notable que el ELN mantiene dinámicas cuya frecuencia es baja pero constante, con mucha estabilidad en repertorios, objetivos y técnicas, pero que presentan microvariaciones entre frentes guerrilleros en razón de su ubicación geográfica.

Dentro de su repertorio resaltan los ataques armados, la propaganda y el sabotaje (figura 3). Los tres principales objetivos de sus acciones armadas (ataques y sabotaje) han sido la fuerza pública, la infraestructura vial, las operaciones de fumigación de cultivos de coca, la infraestructura petrolera y otros grupos armados.

Para los ataques armados, el ELN ha usado las técnicas de emboscada y hostigamiento en un 55 %, francotiradores en un 35 % y minado al avance en un 4 % (figura 4); las tres técnicas las desarrollan al paso de unidades de policía o militares, así como también en torno a estaciones de policía en corregimientos y veredas. Con el uso de estas técnicas, la guerrilla ha logrado golpear a sus adversarios en varias ocasiones, evitando al máximo los costos operativos que implica el combate. Cabe aclarar que, según los partes de guerra del frente y las notas de prensa, en las emboscadas y los hostigamientos hace uso de ráfagas de fusil, granadas y en ocasiones morteros.

Dentro de las acciones de propaganda, el ELN ha hecho grafitis y puesto banderas en sus zonas de influencia, también ha repartido boletines, panfletos, revistas y discos compactos de audio. Los materiales que reparte han estado relacionados con las condiciones de abandono que viven los territorios, las necesidades de cambio, los acuerdos de paz y música de la organización. Una particularidad de este tipo de acciones es su capacidad de despliegue, pues logra llegar a desarrollarlas fuera de la subregión; muestra de lo anterior son las jornadas de propaganda llevadas a cabo por el frente guerrillero José María Becerra en el año 2011 en Cali, Valle; Popayán, Cauca; Ipiales y Pasto, Nariño; Ibagué, Tolima; Pereira, Risaralda y Bogotá, donde repartieron un

video sobre la propuesta de paz de la insurgencia, un numero de la revista *Insurrección* en físico[7] y música de la organización (ELN, 2011).

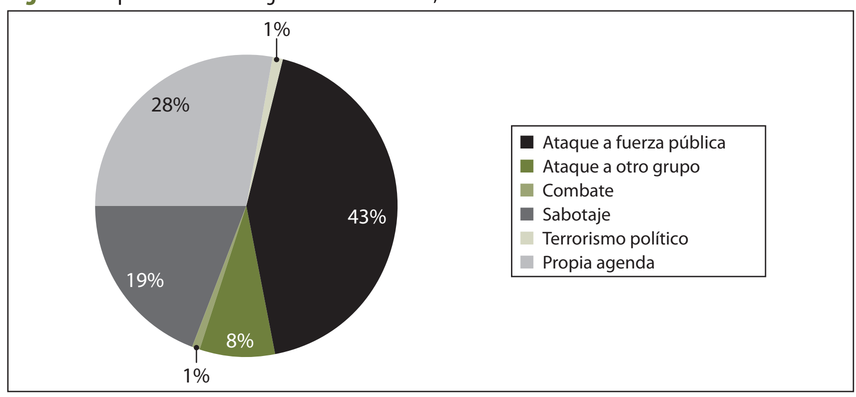
En lo que respecta a las acciones de sabotaje, han realizado voladuras en el oleoducto transandino (OTA), hostigamiento y destrucción de avionetas de fumigación, bloqueos y retenes en la vía panamericana y la vía al mar. Los ataques al OTA los ha llevado a cabo el frente guerrillero Comuneros del Sur y las compañías móviles de Nariño, en razón de su ubicación geográfica. Los últimos sabotajes al oleoducto los realizaron a la altura de los municipios de Barbacoas, Ricaurte, Pupiales, Mallama y Guachucal entre marzo y julio del 2019 (ELN, 2019). Por último, los bloqueos y retenes los suelen desarrollar cuando anuncian paros armados o en fechas especiales, tales como las conmemoraciones del nacimiento de la guerrilla en julio o el aniversario de la muerte del cura Camilo Torres en febrero.

La principal diferencia en el repertorio de los frentes guerrilleros de la subregión reside en los objetivos de sus acciones de sabotaje. La estructura de cada frente enfoca su accionar dependiendo del tipo de actividad económica que se asienta en su zona de influencia; es así como las acciones de sabotajes, diferentes del bloqueo y los retenes, dependen de que la zona sea cocalera o petrolera, en razón de los hostigamientos a avionetas de fumigaciones o ataques al oleoducto, como es el caso de los municipios de Nariño por los que atraviesa el OTA.

En lo que respecta al repertorio de su accionar contra otros grupos armados, según sus partes de guerra, el ELN ha realizado ataques y entrado en confrontación con los Rastrojos, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), la Banda de Alexis, los Guachos y otros grupos dedicados al narcotráfico. Este tipo de ataques y confrontaciones con otros grupos armados ha visto un incremento en los últimos años con la salida del ajedrez territorial de la extinta guerrilla las FARC-EP, como se verá en el siguiente apartado. Cabe mencionar que los últimos combates entre el ELN y otros grupos durante el 2019 se dieron en Argelia y López de Micay, en el Cauca; y en inmediaciones del río Tapaje y Magui, en Nariño (ELN, 2019).

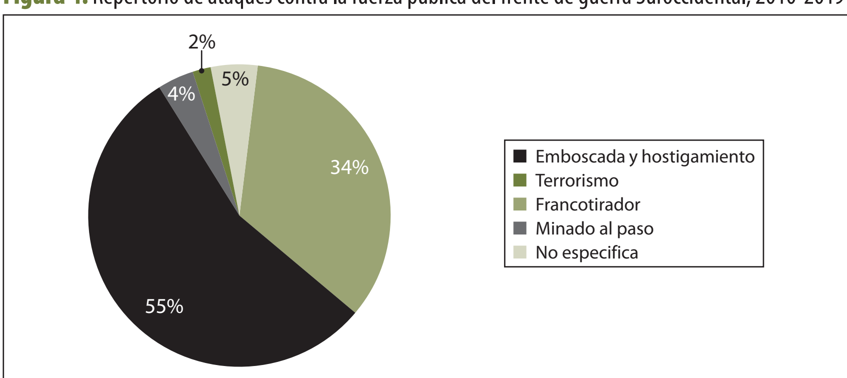
7 La revista *Insurrección* es un semanario del COCE de la insurgencia que se publica cada lunes.

Figura 3. Repertorio frente de guerra Suroccidental, 2010-2019



Fuente: Partes de guerra frente de guerra Suroccidental y sus Frentes Guerrilleros. Elaboración propia.

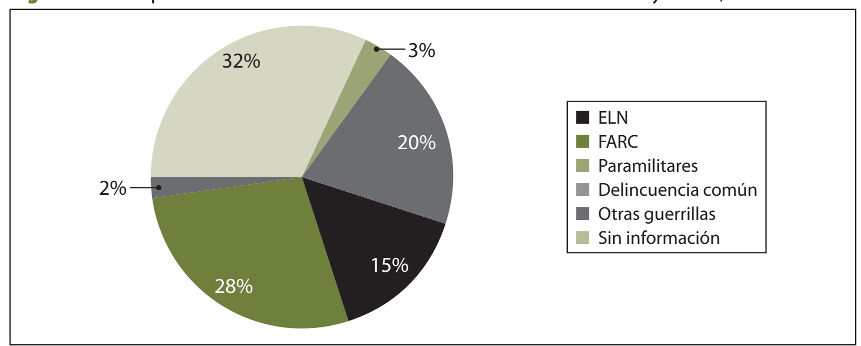
Figura 4. Repertorio de ataques contra la fuerza pública del frente de guerra Suroccidental, 2010-2019



Fuente: Partes de guerra frente de guerra Suroccidental y sus Frentes Guerrilleros. Elaboración propia.

Por otro lado, el secuestro, denominado por ellos como retención, ha sido uno de sus repertorios constantes a nivel nacional. Sin embargo, en la dinámica de la subregión no ha sido el actor principal, siendo el autor de tan solo el 15 % de los casos ocurridos entre 1975 y 2010 en el total de Cauca y Nariño (figura 5).

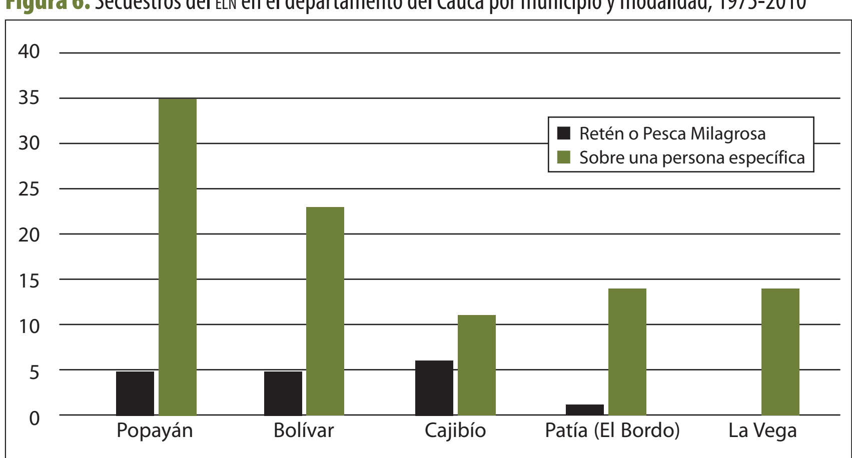
Figura 5. Participación de actores en el total de secuestros ocurridos en Cauca y Nariño, 1975-2010



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

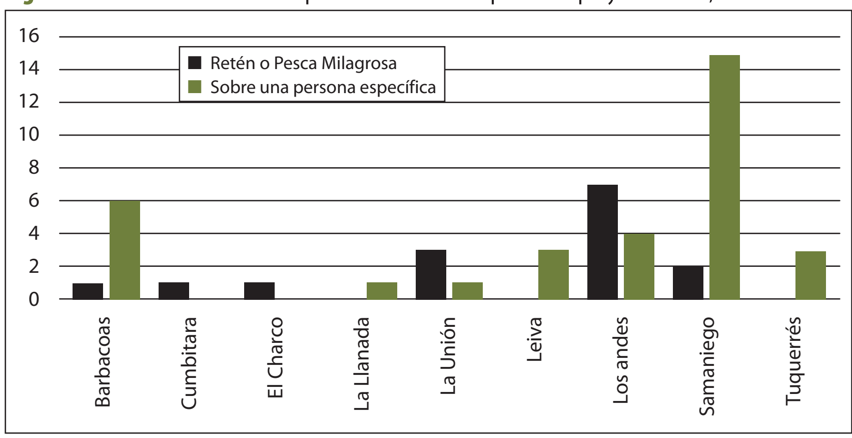
A pesar de ser marginal, para la insurgencia esta actividad ha sido un método de financiamiento, tanto por el cobro para la liberación de la persona secuestrada como por su uso como mecanismo de presión para el pago de los impuestos establecidos a los entables mineros y los diferentes sectores comerciales. Lo anterior se refleja en el hecho de que el mayor número de casos registrados como de su autoría en la subregión, fueron realizados en la ciudad de Popayán, en el Cauca, y en el municipio minero de Samaniego, en Nariño, zonas de importante flujo de personas y capital; a lo cual se suma que, en ambos departamentos, resaltó como modalidad el haber sido perpetrados en contra de personas específicas, factor que demuestra la planeación y lo poco aleatorio de los hechos (figuras 6 y 7).

Figura 6. Secuestros del ELN en el departamento del Cauca por municipio y modalidad, 1975-2010



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

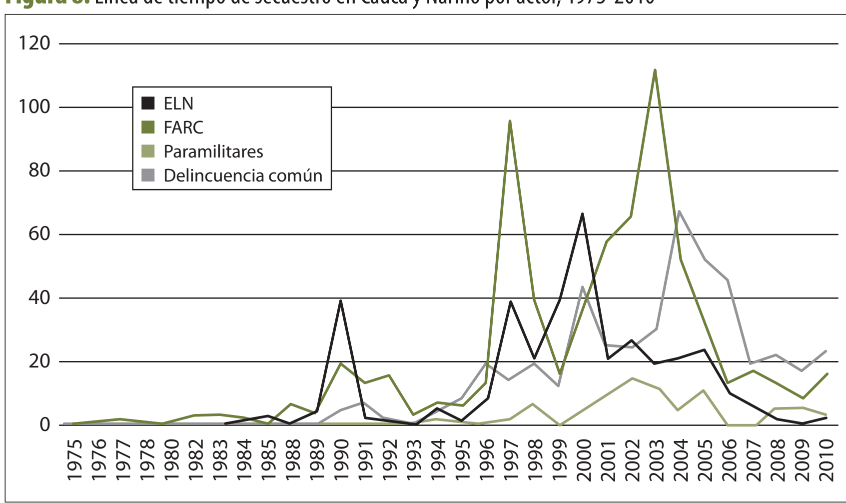
Figura 7. Secuestros del ELN en el departamento de Nariño por municipio y modalidad, 1992-2010



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

Es importante mencionar que las acciones de secuestro perpetradas por el ELN en ambos departamentos tuvieron una reducción considerable entre los años 2000 y 2010 (figura 8); esta dinámica responde, muy probablemente, a la confrontación activa que tuvo en varias zonas con la insurgencia de las FARC, con los grupos paramilitares y residuales, como se explica en el siguiente apartado.

Figura 8. Línea de tiempo de secuestro en Cauca y Nariño por actor, 1975-2010

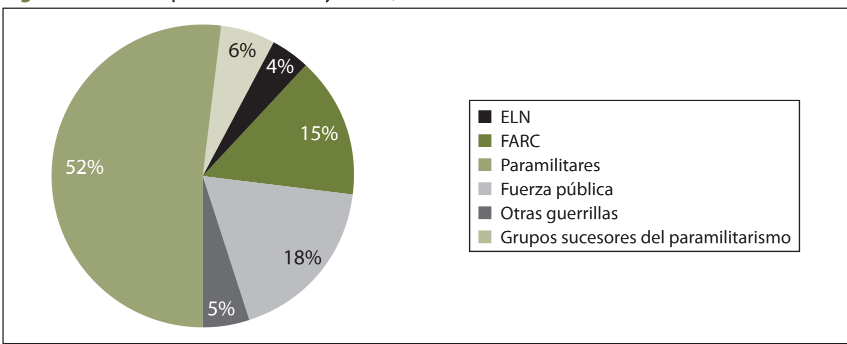


Fuente: CNMH. Elaboración propia.

Por último, cabe decir que las masacres no han hecho parte de su repertorio. Del total de los casos registrados en la subregión por la base de datos del Cinep/PPP, al ELN solo corresponde el 4 %. Lo anterior se explica tanto

por las dinámicas nacionales del conflicto, donde esta no ha sido una modalidad de las insurgencias, como por su relación con los territorios de la subregión, en los cuales más que buscar producir miedo, desde su llegada buscó fomentar el trabajo y la organización de las comunidades (figura 8).

Figura 9. Masacres por actor en Cauca y Nariño, 1974-2009



Fuente: SIG, Cinep/PPP. Elaboración propia.

Expresiones recientes del conflicto armado en las territorialidades donde hace presencia el ELN

El conflicto reciente en Cauca y Nariño se encuentra atravesado por varios factores: la desmovilización paramilitar; el establecimiento territorial de nuevos grupos armados, la consolidación y el constante crecimiento de la minería informal y del clúster del narcotráfico; la mesa de negociaciones y desmovilización de las FARC-EP; la victoria electoral del Centro Democrático en cabeza de Iván Duque para el periodo 2018-2022; y por último, tras la negativa del gobierno de Iván Duque de reanudar los diálogos de paz con el ELN, la ruptura de la mesa de negociaciones con dicha insurgencia.

Antecedentes: de la desmovilización paramilitar y el reacomodo territorial, 2005-2010

En diciembre del 2004 y julio del 2005, respectivamente, se desmovilizaron los bloques Calima y Libertadores del Sur de las AUC, dejando a la deriva los territorios y las actividades económicas que regulaban (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 055-05). Las zonas abandonadas entrarían a ser disputadas entre las insurgencias, que buscaban recuperar territorios, y las organizaciones disidentes del acuerdo con las AUC[8], las cuales

8 Entre los grupos disidente se mencionaban los siguientes: Mano Negra, Nueva Generación, Bloque Sur Independiente y Águilas Negras.

ya conocían las zonas, sus ámbitos de regulación y en especial el manejo del mercado de la producción, transformación y distribución de coca.

En este contexto de desmovilización, reacomodo y rearme, se sumó a las disputas el grupo armado organizado de los Rastrojos, organización de seguridad privada proveniente del cartel del norte del Valle, al mando de Wilber Varela, alias "Jabón". Los Rastrojos llegaron a Cauca y Nariño con el fin de coordinar zonas estratégicas para consolidar el negocio de la coca, nutriéndose de varias alianzas estratégicas establecidas con las Autodefensas Campesinas Nueva Generación (ACNG) y demás grupos disidentes del BC y BLS (Insight Crime, 2016; Bolaños, 2019).

El intento de los Rastrojos por copar las rutas para el tráfico de narcóticos en El Plateado, Argelia y Bolívar en Cauca y en Nariño a lo largo de la cordillera y el Andén Pacífico, aunado al rearme de los demás grupos, suscitaría el desarrollo de varios choques y alianzas entre los diferentes grupos con el fin de mantener y ganar control territorial, social y económico. Las disputas armadas entre los grupos residuales de las AUC y los Rastrojos, con FARC-EP y ELN, produjeron un alza en las infracciones al DIH por parte los grupos sucesores del paramilitarismo entre 2005 y 2007, debido al desarrollo constante de señalamientos y asesinatos selectivos a pobladores y pobladoras considerados bases sociales de las insurgencias (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 018-06; figura 1).

El reacomodo territorial hacia las zonas del piedemonte caucano dio paso a varias disputas con las FARC-EP, organización anteriormente consolidada en gran parte de las zonas rurales, cuyo control pasó a manos del el ELN y los Rastrojos. El primero ocupó las zonas rurales de El Tambo, tales como Huisito, Playa Rica, La Paloma y los Andes; mientras que los segundos se establecieron en las zonas rurales de Argelia, obteniendo acceso a los cultivos de coca y a los corredores estratégicos hacia Nariño y el Pacífico por el Patía (SAT, Defensoría del Pueblo NS n°. 022-08).

Es importante mencionar que, según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y Ávila y Núñez (2010), la avanzada elena sobre las zonas del municipio del piedemonte caucano se dio bajo una alianza militar entre la insurgencia y los Rastrojos para copar los territorios de FARC-EP[9]. Sin embargo, tras una lectura cuidadosa, se observa que el repliegue de FARC-EP en el piedemonte fue el resultado de varias confrontaciones simultaneas: La arremetida de la brigada 29 del Ejercito Nacional, en el marco de las operaciones Espada I, II y III (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 017-08, AT n°. 021-10); los choques con el ELN por el control territorial

9 Citando la Alerta Temprana n°. 004-07 "Las FARC acusan al ELN de realizar alianzas con bandas al servicio del narcotráfico, concretamente con "Los Rastrojos", y estar profundamente infiltrados por la inteligencia militar".

en lo local e ideológico político en lo nacional, pues ambas guerrillas libraban una guerra; y las disputas con los Rastrojos, quienes buscaban avanzar hacia los territorios de importancia para la producción y distribución de narcóticos.

Siguiendo lo anterior, resulta difícil aseverar la existencia de algún acuerdo militar entre los Rastrojos y el ELN, teniendo en cuenta que, durante el trabajo de campo realizado, ningún poblador o pobladora del piedemonte caucano mencionó alguna cercanía entre sus estructuras, a lo cual se suma que después del copamiento de los territorios, hacia el año 2010, el ELN y los Rastrojos entraron en conflicto y mantuvieron choques constantes. En ese sentido, solo se podría suponer que, durante la avanzada y el reacomodo, ambos actores establecieron algún tipo de distribución territorial y un acuerdo temporal de no agresión.

En Nariño, hacia la zona de cordillera en los municipios de Leiva, Los Andes, La Llanada, Rosario, Samaniego, Policarpa, Cumbitara y Santa Cruz, al igual que en Cauca, las ACNG, las Águilas Negras y los Rastrojos, empezaron, durante la reconfiguración, a copar los espacios abandonados por las AUC, específicamente las cabeceras municipales y corredores principales de movilidad entre veredas y corregimientos, retomando las extorsiones, el cobro de impuestos y el control de la producción y distribución de narcóticos.

La avanzada de los grupos residuales y los Rastrojos en busca del control de las salidas a través del piedemonte nariñense se extendió hacía el océano Pacífico a través de las zonas del Patía, en conexión con el sur del Cauca, las zonas de Barbacoas y la vía Pasto-Tumaco, para desembocar luego en varias confrontaciones con las insurgencias. Durante dicho contexto, las insurgencias incrementaron sus medidas de seguridad tales como el control local[10], la plantación de minas y el número de milicianos en las cabeceras municipales para desarrollar labores de inteligencia, con el fin de repeler la avanzada de la fuerza pública y los demás grupos (SAT, Defensoría del Pueblo NS n°. 021-10, NS n°. 003-09).

En los municipios ubicados en la subregión del Pacífico nariñense, concretamente en La Tola, Olaya Herrera, Barbacoas, Roberto Payan y Magui Payan las acciones de la Brigada Móvil 19 y el batallón fluvial de la Infantería de Marina 70, aunadas al avance de los Rastrojos y demás grupos posdesmovilización, producirían el repliegue de las insurgencias hacia las zonas altas y alejadas de los cascos urbanos por el Patía y el Telembí. Durante el mencionado proceso de reacomodo, se presentaron confrontaciones entre el ELN y las FARC-EP, que, en la medida que se desplazaban para resguardarse de la arremetida de la fuerza pública y los

10 Con estas medidas se hace alusión a una exigencia estricta del cumplimiento de los manuales de convivencia y la limitación de movilidad a pobladores y pobladoras.

otros grupos, buscaban mantener el control territorial en sus zonas de influencia. (SAT, Defensoría del Pueblo NS n°. 001-09)

Hacia la zona de frontera con Ecuador, las FARC-EP protagonizaron una avanzada, copando algunos territorios pertenecientes al BLS donde establecieron confrontaciones con los grupos residuales en disputa de zonas de antigua influencia del ELN. Para el año 2006, el Frente 29 de las FARC se estableció en Miraflores, San Juan de Mayasquer y Chiles, corregimientos del municipio de Cumbal y zonas históricas de incidencia de la compañía José Luis Cabrera Rúales del ELN (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 019-07).

Como se observó, durante este periodo las confrontaciones entre las insurgencias, los grupos residuales y la fuerza pública fueron una constante, pues al tiempo que el reacomodo propiciaba el surgimiento de alianzas entre los Rastrojos y los grupos residuales, se libró una guerra entre las FARC-EP y el ELN (ELN, 2015).

De la paz insurgente a la desmovilización de las FARC, 2010-2016

El conflicto a nivel nacional entre el ELN y las FARC-EP acabó en el año 2010, permitiendo un acercamiento entre ambas organizaciones. Fue bajo dicho contexto nacional, y en razón de la avanzada de los Rastrojos, de los grupos residuales y las operaciones de la fuerza pública a nivel subregional, que las estructuras de las insurgencias en Cauca y Nariño establecieron acuerdos de no agresión y el desarrollo de operaciones conjuntas.

En el piedemonte caucano, el ELN y las FARC-EP acordaron un cese de hostilidades entre sí desde el mes de enero del 2010, pacto con el cual ambas organizaciones se repartieron el territorio. Las alianzas entre las guerrillas en estas zonas, al tiempo que le permitieron a las FARC-EP recuperar territorios y posicionarse en la zona del Patía[11], también provocaron el repliegue de las estructuras de los Rastrojos que se habían establecido en Argelia en el año 2007 (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 017-10, AT n°. 021-10).

Ante las operaciones conjuntas de las guerrillas, los Rastrojos se desplazaron de las estribaciones de la cordillera Occidental hacia la zona del Pacífico, ubicándose en las cuencas bajas por los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay; mientras tanto, en su avanzada, las insurgencias se ubicarían en las zonas medias y altas de estas cuencas (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 019-11). La repartición territorial, el cese de hostilidades entre las insurgencias y el repliegue de los grupos residuales y los Rastrojos generaría cierta calma para los pobladores. Sin embargo, estos se verían implicados en medio del desarrollo de las operaciones de

11 La avanzada de FARC-EP en esta zona se dio con ayuda de la columna Milton Hernández Ortiz del ELN, ubicada en zonas rurales del Tambo.

la fuerza pública en contra de las guerrillas, aquí es importante mencionar específicamente las operaciones contra el ELN llevadas a cabo en el municipio de El Tambo (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 017-10).

En Nariño, al igual que en el Cauca, las insurgencias desarrollaron acuerdos e iniciaron una avanzada. El ELN y las FARC-EP, desde el año 2010, llevaron a cabo operaciones conjuntas en contra de los Rastrojos y la fuerza pública. Muestra de lo anterior fue el registro de un ataque conjunto al campamento de los Rastrojos en inmediaciones del municipio de Barbacoas, más exactamente en el río Guelmambí; y el constante hostigamiento a las estaciones de Policía y tropas del Ejército (SAT, Defensoría del Pueblo NS n°. 013-12).

Las alianzas insurgentes en el departamento de Nariño se dieron específicamente entre el Frente Comuneros del Sur del ELN con sus respectivas compañías y el Frente 29 de las FARC-EP con las columnas móviles Daniel Aldana y Mariscal Sucre. Los acuerdos establecidos les permitieron tener acceso a varias zonas: por un lado, las FARC-EP ingresaron a territorios cercanos al casco urbano de Magüi Payan, por el occidente; y, por otro, el ELN pudo establecer los ríos Magüi y Patía como rutas claves para su movilidad, para lograr ejercer cierto control en los municipios de Olaya Herrera y Santa Bárbara, incidiendo también en el municipio de Barbacoas tras el fortalecimiento de la Compañía Héroes y Mártires de Barbacoas (SAT, Defensoría del Pueblo NS n°. 013-12).

La consolidación de las FARC-EP en el noroccidente del departamento y del ELN en el río Patía, el municipio de Olaya Herrera, Santa Bárbara y El Charco —este último por medio de la compañía Guerreros del Sindagua—, al igual que en el Cauca, produjo el repliegue de las estructuras de los Rastrojos (SAT, Defensoría del Pueblo NS n°. 020-15).

En la zona de cordillera nariñense, la dinámica fue similar al resto de la subregión: ambas insurgencias fortalecieron sus controles territoriales al tiempo que desplazaron a los Rastrojos. Las FARC-EP adquirieron fuerza en los municipios de Leiva y El Rosario, en conexión con el municipio de Argelia, logrando controlar el corredor de la cordillera Occidental hasta el bajo Patía, así obtuvieron acceso a los municipios de Cumbitara y Policarpa. Por otro lado, el ELN se mantuvo en Cumbitara, Los Andes, La Llanada y Samaniego con mayor facilidad tras el repliegue de los Rastrojos, de este modo, con el fin de desarrollar operaciones, ataques y repliegues, lograron que sus estructuras informaran desde los cascos urbanos a las unidades rurales sobre los movimientos de la fuerza pública (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 027-13).

En este periodo, se empezó a conformar un nuevo escenario para las disputas territoriales. Aunado a la avanzada de las insurgencias, los Rastrojos atravesaron por un cambio de liderazgos entre el 2012 y 2015 en razón de la

muerte, entrega y captura de algunos de sus líderes, de esta manera propiciaron el surgimiento e ingreso de nuevos grupos a Cauca y Nariño. Hacia el año 2013, los pobladores y pobladoras denunciaron la presencia de un grupo de personas que se autodenominaron Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Urabeños, también conocidos como Clan del Golfo. El arribo de las AGC a Nariño se fortaleció con la integración de algunas estructuras de los Rastrojos[12] (Bolaños, 2019) y entró en disputa con las insurgencias por en el control territorial y las economías de las zonas.

En este panorama de control preponderantemente insurgente, a pesar del incremento de operaciones militares y el ingreso de un nuevo actor armado, el *statu quo* se mantuvo en los territorios. Sin embargo, con el desarrollo de la mesa de negociaciones, la concentración y desmovilización de las FARC-EP se dio fin al *statu quo* insurgente en varias zonas de la subregión, lo que condujo a un nuevo escenario de disputas armadas locales en ambos departamentos.

El conflicto reciente: de la desmovilización de las FARC-EP, el recrudecimiento del conflicto armado y la crisis elena, 2016-2020.

Como resultado de la desactivación del componente armado de las FARC-EP y la reducción de las operaciones de la fuerza pública, las acciones bélicas disminuyeron en ambos departamentos (figura 2). Sin embargo, de la extinta guerrilla surgieron organizaciones disidentes y se dio un proceso de rearmarme que[13], junto a la pretensión de expansión territorial de otras organizaciones armadas, la ruptura de la mesa de negociaciones con el ELN y el incremento de operaciones de las fuerzas estatales configuró un escenario de gran complejidad.

Los territorios que anteriormente eran de dominio fariano se convirtieron en focos de disputa. Los grupos disidentes buscaron mantener y expandir el control logístico de las economías de las antiguas FARC-EP, mientras el ELN, las AGC y otras organizaciones intentaron copar espacios en búsqueda de adquirir un mayor dominio territorial e incrementar sus rentas.

A este proceso de reacomodo y de disputas territoriales se sumó, a comienzos del año 2020, el grupo rearmado la Nueva Marquetalia (La Silla

---

12 Según la Defensoría del Pueblo, en los retenes realizados en la vía Junín-Barbacoas, la comunidad reconoció a algunos integrantes de dicho grupo como integrantes de los Rastrojos (SAT, Defensoría del Pueblo NS 013-14).

13 Las disidencias son aquellos sectores de la extinta guerrilla que no se acogieron al proceso de paz con el Gobierno nacional, mientras que los rearmados son aquellos que se acogieron al proceso de paz, pero tras el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional decidieron volver a tomar las armas esgrimiendo un discurso político, este es el caso de "la Nueva Marquetalia", el intento de refundación de las FARC-EP en cabeza de Iván Márquez, el Paisa y Jesús Santritch.

Vacía, 2020), organización que intentó capitalizar el control territorial de las disidencias proponiéndoles que se integraran a su estructura. Sin embargo, las unidades disidentes aglutinadas en el Comando Coordinador de Occidente[14] (CCO) respondieron negativamente a sus intenciones y le señalaron como una organización traidora por estar conformada por quienes se acogieron y jalonaron el proceso de paz, así lo explican en un comunicado:

> La segunda Marquetalia es una organización creada en septiembre del año pasado, comandada por quienes hasta el final fueron impulsores y firmantes del acuerdo de paz, quienes fueron consientes en todo momento del engaño e incumplimiento que se vendría contra los excombatientes y el pueblo colombiano y aun así firmaron el acuerdo. Con ellos intentamos unificarnos, pero su jefe Iván Márquez pretendió que nuestro trabajo de organización de más de cuatro años se lo entregáramos a sus demás jefes que solo están acostumbrados a comandar tropas y quienes llevaron en sus manos el fracaso de las FARC-EP [...] En la semana anterior sostuvimos y seguiremos sosteniendo confrontaciones armadas contra este grupo, no podemos permitir que descaradamente venga a decirle a Colombia que ellos son las FARC-EP cuando fueron ellos precisamente los que intentaron destruir nuestra organización revolucionaria. (CCO, 2020)

Con lo anterior, la dinámica de las disputas territoriales, que de por sí ya era bastante compleja, se profundizó, desembocando en constantes confrontaciones y el señalamiento de los diferentes actores armados y las fuerzas estatales a las comunidades.

En el norte del Cauca se dieron confrontaciones entre las estructuras disidentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos con las AGC y el Frente Andrey Peñaranda del EPL, organización que llegó desde el Catatumbo a través del departamento del Valle tras la economía cocalera (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 001-18; AT n°. 033-19).

El EPL se vio diezmado en la confrontación con las disidencias, quienes lograron avanzar y se fortalecieron desde su unificación como CCO, controlando territorios hacia el corredor del Naya y también atravesando por los municipios de Suarez, Cajibío y Morales hasta llegar a los municipios del Tambo y Argelia en el sur del departamento. Sin embargo, a pesar de su avanzada, el control territorial del CCO en el norte del Cauca se encuentra en disputa con la Nueva Marquetalia, las AGC y la fuerza pública.

14 El CCO está conformado por los frentes Carlos Patiño, Rafael Aguilera e Ismael Ruiz; las columnas móviles Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Franco Benavides y Urías Rondo; y la Compañía Adán Izquierdo. A la fecha no se tiene claridad si la disidencia denominada Estiven Gonzales que opera entre Nariño y Cauca se encuentra adscrita al CCO, tampoco se tiene total certeza de la relación del CCO con las disidencias de Miguel Botache Santillana "Gentil Duarte", aunque parece ser que el CCO hace parte de su estructura.

Es importante mencionar que, a comienzos de este periodo el ELN intentó avanzar hacia el norte del Cauca, lugar donde no había tenido presencia explicita, pues era una zona de control preponderantemente fariano. Esto fue evidenciado por el boletín del tercer trimestre del 2018 de la Red Por la Vida y Los Derechos Humanos del Cauca, en el cual las comunidades mencionaron que en Santander de Quilichao y Caloto aparecieron grafitis y entre los municipios de Corinto y Padilla banderas izadas, a esto se sumó el desarrollo de hostigamientos con ráfagas de fusil en contra de la fuerza pública en fechas de conmemoración de la insurgencia y la condena de ocho años de prisión y 37 fuetazos que decretaron las autoridades ancestrales del Guanábano a dos presuntos guerrilleros de dicha organización. Cabe resaltar que la incursión elena en esta zona no ha sido fructífera, pues el despliegue del CCO y de los demás actores ha obstruido su consolidación. Al parecer su objetivo era establecer un corredor de comunicación entre el frente de guerra Suroccidental y el frente de guerra Occidental.

En el sur del departamento, hacia la zona del piedemonte, la avanzada de las disidencias suscitó el desarrollo de confrontaciones con el Frente José María Becerra del ELN, estructura hegemónica en el municipio del Tambo desde el 2007 y que tras la desmovilización de las FARC-EP habría adquirido territorios en Argelia. La disidencia que inició el proceso de copamiento territorial fue la Carlo Patiño, hoy reconocida como frente del CCO. La incursión de la disidencia en un comienzo no representó mayor amenaza para ELN, sin embargo, cuando se sintió lo suficientemente fuerte, inició una guerra contra la insurgencia con el fin de controlar el cañón del Micay y la ventaja comparativa que brinda para el desarrollo del negocio del narcotráfico, hostigando a las unidades elenas y señalando a comunidades y procesos organizativos de ser parte de la guerrilla; a estas confrontaciones producidas por la disidencia Carlos Patiño, se sumó la incursión de operaciones militares con bombardeos tras las estructuras elenas. Lo anterior ha adquirido cada vez una mayor complejidad, pues recientemente en las zonas del Tambo y Argelia se ha incrementado del pie de fuerza de las disidencias con su unificación en el CCO, a lo cual se añade la llegada de la nueva Marquetalia, organización que al parecer ha buscado una alianza con el ELN para enfrentar al CCO y las fuerzas estatales.

Como resulta explicito, el piedemonte caucano pasó de ser una zona sin confrontaciones a ser una zona en disputa. Con toda certeza se puede afirmar que el ELN perdió uno de los anclajes territoriales más fuertes que tenía en la subregión, quedando las comunidades a merced del señalamiento de las disidencias y de las fuerzas estatales, quienes han demostrado no distinguir entre combatientes y civiles causando afectaciones, como fue el caso del Consejo Comunitario Afro renacer del Micay, organización que se vio obligada a salir del territorio por el

asesinato de varios de sus integrantes a manos del Frente Carlos Patiño. Cabe mencionar que, según integrantes del consejo, los golpes a los liderazgos sociales por parte de la organización Carlos Patiño se dieron con la connivencia de la fuerza pública, como un intento de romper el tejido social para dar paso a la construcción de la represa Arrieros del Micay (Entrevista 14, 2020).

La dinámica en la zona del Pacífico caucano no dista mucho de la del norte del departamento y el sur, pues el control de sus territorios garantiza el acceso al océano para la comercialización de las economías ilícitas. Así, la confrontación y la coacción armada por el control territorial ha sido el común denominador. En la zona rural de Timbiquí se han presentado amenazas por parte de la disidencia Rafael Aguilar y en el municipio de Guapi y López de Micay se han presentado combates, allí hacen presencia las AGC, los Rastrojos y el frente José María Becerra del ELN; a ello se suma le denuncia que vienen haciendo las comunidades de toda la subregión por la influencia de carteles mexicanos en las dinámicas del territorio, en relación con la producción y distribución de narcóticos (Red Por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, 2020a).

Hacia el macizo, además de la presencia del frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, en el año 2019 los lideres mencionaron la aparición de varios grupos sin identificación, lo que ha hecho sentir a las comunidades una mayor incertidumbre. Según señalaron, a diferencia de los periodos pasados, cada vez que se encuentran un grupo armado los pobladores no saben que actor es:

> Por el Macizo, desde la Panamericana hacia la izquierda se han conformado unos grupos a través de la extorsión alrededor de las vacunas, el control de la minería ilegal, son grupos que un día tienen brazaletes de AUC, otro día de ELN, otro día con brazaletes de FARC, otro día te salen todos de negro y uno no sabe qué son, eso opera en la Sierra, Almaguer, Bolívar y hasta San Sebastián, Santa Rosa afortunadamente no, y en Piamonte lo que operan son los disidentes que bajo la misma línea de FARC-EP ejercen control en esa zona, también hay paramilitarismo, que allá si hubo con fuerza. (Entrevista 5, 2019)

En el departamento de Nariño, tras la desmovilización de las FARC-EP, también se daría una avanzada de las disidencias, del ELN y de grupos ligados al narcotráfico hacia los territorios abandonados por la insurgencia (Entrevista 11, 2019). Hacia la cordillera nariñense, en la zona adyacente a los municipios de Los Andes, La Llanada, Samaniego, Cumbitara y Policarpa, han operado el Frente Comuneros del Sur del ELN, las AGC, la disidencia de las FARC-EP denominada Estiven Gonzales y varios grupos pequeños que buscan ejercer cierto control en las rentas de la minería y el narcotráfico.

Desde un principio en los municipios de Santa Cruz, Samaniego, Los Andes y La Llanada, el ELN llegó a copar algunos territorios, cabe mencionar que a esta insurgencia se le facilitó el control de estas zonas debido al trabajo conjunto que había ejercido previamente con las FARC-EP, actor con el cual compartía y regulaba algunos territorios, así hasta el año 2019 un entrevistado mencionó cierta calma:

> Se ha notado como cierta calma en las comunidades, porque el ELN es un grupo conocido, ellos tenían una serie de pactos con FARC-EP en que ellos podían pasar por esas zonas, ellos llegaban a los caseríos, compraban sus víveres y seguían su camino, entonces no son gente desconocida. (Entrevista 11, 2019)

Sin embargo, como consecuencia de las dinámicas del conflicto y las disputas territoriales entre los múltiples actores, la violencia al igual que en el resto de la subregión empezó a incrementarse.

En el municipio de Policarpa, el actor armado que ha detentado el control territorial son las AGC, aunque también se ha mencionado la presencia de la disidencia Estiven Gonzales. Esta zona resulta de particular interés, pues, además de estos grupos, en los municipios de Cumbitara y el Rosario empezó a denunciarse la existencia de varios grupos nuevos que estarían causando un impacto importante en la población (Entrevista 11, 2019).

Hacia la zona del Pacífico nariñense han resaltado las disidencias denominadas Frente Oliver Sinisterra (FOS) y Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). En el municipio de Tumaco, el control principal lo ha tenido el FOS, mientras que, hacia la zona de Barbacoas, se presentaba una incidencia media del ELN, en zonas rurales, y una fuerte de las AGC hacia los cascos urbanos (Entrevista 11, 2019).

Cabe aclarar que la dinámica reciente del conflicto se encuentra en constante cambio, por lo que ha sido una tarea titánica intentar hacer una radiografía acercada a la realidad. Sin embargo, lo cierto es que los territorios de Cauca y Nariño se han configurado en un foco de confrontaciones armadas por las rutas para el narcotráfico, la presencia de cultivos de amapola, coca y minería informal, que representan altos ingresos económico para las disidencias, los rearmados y demás grupos ilegales que van tras fines rentistas. Esta ventaja comparativa del suroccidente para el desarrollo de economías ilícitas, se ve acompañada de la llegada de nuevos actores, la influencia de redes internacionales del narcotráfico las cuales incluso han llegado a permear a la fuerza pública[15], el surgimien-

---

15 Durante el trabajo de campo la gente mencionó en varias ocasiones la existencia de relaciones entre el Ejército y la Policía con la minería ilegal, redes del narcotráfico y las disidencias. Estos relatos encuentran trasfondo en uno de los testimonios presentados por la comisionada de la Comisión de la Verdad Alejandra Miller, en el cual un oficial del Ejército menciona la existencia de nexos

Mapa 1. Cauca y Nariño. Actores armados 2010-2016

Límites
- Internacional
- Departamental

Administrativos
- Capital del departamento
- Cabecera municipal

Drenajes
- Río

Vías
- Pavimentada
- Sin pavimentar

Abreviaturas
R. Río
Cñ. Caño
PNN Parque Nacional Natural

ESCALA 1:1.200.000
0 12 24 36km

MATICES HIPSOMÉTRICOS (msnm)
4000 3000 2000 1000 500 200 100 0

Localización

Presencia del Frente de Guerra Suroccidental - ELN

Presencia de las Farc-EP

Otros actores armados:
- Los Rastrojos
- Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC
- Águilas Negras
- Otros grupos ligados al narcotráfico

Fuente: Cartografía social, SIG Cinep/PPP. Elaboración propia.

to de varias disidencias y la incursión del proceso de rearme (La Nueva Marquetalia), estructuras que se fortalecen cada vez más por el retraso en el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, y la nula presencia de instituciones estatales para solventar la falta de infraestructura y la prestación bienes y servicios.

Ahora bien, además de tener en cuenta la salida de las FARC-EP de los territorios, para terminar de dibujar el panorama del conflicto reciente, también debe tenerse en cuenta el desarrollo y la ruptura de la mesa de negociaciones con el ELN.

Según los relatos de los pobladores, las comunidades sintieron cierta calma durante los primeros ciclos de la mesa de conversaciones entre el ELN y el Gobierno nacional. En este periodo, la insurgencia redujo la frecuencia de sus actividades y cambió su repertorio cualitativamente, dando una mayor fuerza a las acciones de propaganda. Lo anterior permitió que la fuerza pública desplegara cada vez más tropas en los territorios, desembocando, en un primer momento, en el repliegue de las estructuras elenas, como lo expresaron los siguientes relatos de Nariño y Cauca, respectivamente:

> No han ocurrido por el momento paros armados, pero sí se ha visto un cambio importante en la estrategia del ELN; es un cambio que se ha direccionado mucho a que ya no hay tanta presencia de personal armado en los centros poblados, simplemente se sabe que están por los grafitis y las banderas que ellos dejan. Llama mucho la atención la cantidad de banderas que se han encontrado en Samaniego, Santacruz, La Llanada, Los Andes y otros municipios como Acuña, Linares y El Tambo, Nariño (Entrevista 11, 2019).

> El Cese al Fuego Bilateral Transitorio y Nacional (Cese entre ELN y Gobierno nacional) fue positivo, pero nos preocupó que el Gobierno empezó a hacer más militarización, a meterse más en el territorio, como haciendo más copamiento, ellos aprovecharon como para hacer ataques porque en esos días de los ceses las fuerzas militares hicieron acciones. La gente estaba preocupada porque sobrevolaban mucho, entonces la gente se encontraba al Ejército acantonado en las montañas cuando salían a cazar su comida, se los encontraban escondidos. (Entrevista 3, 2019)

Esto explica parcialmente la razón por la cual en la mayoría de los relatos los pobladores mencionaron un abandono del territorio por parte de la insurgencia, no solo de las FARC-EP, sino también del ELN.

Ante el estancamiento de la mesa de negociaciones, lo anterior empezó a cambiar, pues la insurgencia comenzó a avanzar de una manera más visible, hasta decretar un paro armado entre el 15 de julio y el 19 de julio del año 2019 en el departamento de Nariño (SAT, Defensoría del Pueblo

---

entre algunos militares con mexicanos, quienes también han robado municiones y armas para armar nuevos grupos paramilitares en el norte del Cauca (Comisión de la Verdad, 2020).

Mapa 2. Cauca y Nariño. Actores armados 2017-2020

Límites
- Internacional
- Departamental

Administrativos
- Capital del departamento
- Cabecera municipal

Drenajes
- Río

Vías
- Pavimentada
- Sin pavimentar

Abreviaturas
R. Río
Cñ. Caño
PNN Parque Nacional Natural

ESCALA 1:1.200.000
0 12 24 36km

MATICES HIPSOMÉTRICOS (msnm)
4000 3000 2000 1000 500 200 100 0

Localización

Presencia del Frente de Guerra Suroccidental - ELN

Otros actores armados:
1. Disidencias de las Farc
2. Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC o Rastrojos
3. Ejército Popular de Liberación - EPL
4. Grupo rearmado Nueva Marquetalia
5. Otros grupos ligados al narcotráfico

Fuente: Cartografía social, SIG Cinep/PPP. Elaboración propia.

AT n°. 032-19). Así mismo, hizo acciones de propaganda en el Cauca durante el paro nacional que decretó en febrero del 2020, esto mostró un incremento de su accionar. Un poblador del Cauca explica:

> Al romperse los diálogos vuelve la incertidumbre y el temor porque la guerrilla tiene que entrar en una fase de confrontación y no de quietud en los territorios y someterse a la incursión de la fuerza pública, entonces las comunidades quedan entre ese fuego cruzado. (Entrevista 5, 2019)

A pesar de la reciente ofensiva, el momento de repliegue bajo la dinámica actual del conflicto hizo que los ámbitos de regulación de esta insurgencia se redujeran en algunas partes, dejando a las veredas y corregimientos, según los pobladores, en el abandono y a la merced de la delincuencia común y el consumo de sustancias psicoactivas.

El avance de la fuerza pública bajo el marco de los planes Victoria Plus y Bicentenario logró golpear de tal manera sus estructuras que afectaron su capacidad de respuesta, desdibujando varios de sus comandantes y dejando en algunos casos estructuras sueltas y/o bajo líneas de mando muy autoritarias o inexpertas que no han sabido responder ante las necesidades de las comunidades. Un líder de Bolívar mencionó:

> Lo que ha pasado es que no hay mandos definidos, entonces los que quedaron allá están sueltos, uno no sabe si pertenecen al ELN o están trabajando por cuenta de ellos. Siempre había una persona encargada —un comandante—, ya no se sabe quién es la persona encargada. Nosotros siempre hemos buscado con quién interlocutar más que todo con el problema de la minería, pero no, no se ha podido, eso viene así hace más o menos tres años. (Entrevista 4, 2019)

El repliegue de la insurgencia ha generado la difusión de la comandancia al punto que los pobladores mencionan que quienes en estos momentos se hacen pasar por el ELN y regulan la economía local, realmente no son parte de la organización.

> Anteriormente, el ELN se encontraba en el sector urbano, hacía presencia en las comunidades [...] En ese entonces —hace más o menos 2 o 3 años— la presencia del Ejército no era tan fuerte, pero con la creación de un batallón de montaña en Bolívar, el ELN se replegó, entonces para las comunidades en este momento es muy difícil tener acceso a ellos cuando se presenta un problema [...] en este momento no están los propios guerrilleros, son delincuentes disfrazados que pretenden sacar provecho económico
> Entrevistador: ¿O sea que no hay una estructura del ELN operando en estos momentos en Bolívar?
> Entrevistado: En el casco urbano no. (Entrevista 1, 2019).

Lo anterior demuestra que su control territorial se ha vuelto difuso, diluyendo la posibilidad de mediación a la que estaban acostumbradas las comunidades y, por ende, dejándolas sin una autoridad externa "neutra"

que resuelva los conflictos comunales. En efecto, hacia la zona de Bolívar, Cauca, los liderazgos sociales mencionaron un cambio profundo en su relacionamiento con la insurgencia, al punto de llegar a recibir amenazas por temas relacionados con la minería (Entrevista 4, 2019).

Ahora bien, si la guerrilla ya venía atravesando por un proceso de degradación en su comandancia, dejando unidades sueltas por cuenta de la arremetida de la fuerza pública, la dinámica del conflicto actual con la multiplicidad de actores ha hecho que las formas de regulación que se mencionaron anteriormente en este capítulo sean algo del pasado.

Esto no quiere decir que el ELN hubiese tenido la capacidad de regulación anteriormente descrita de manera homogénea en toda la región a lo largo de su historia, pues esta ha estado supeditada a las dinámicas del conflicto y el tipo de población presente, pero sí denota que en sus bastiones históricos, como es el caso del occidente del departamento del Cauca, más específicamente el municipio del Tambo, donde hasta hace poco se mantenía como autoridad armada de las zonas rurales, perdió toda capacidad de regulación y le fue imposible brindar seguridad a las comunidades dejándolas a la merced de los demás actores, que al igual que en épocas del paramilitarismo llegaron a señalar y golpear los tejidos sociales.

Por tanto, en el suroccidente la dinámica del conflicto ha dejado un ELN debilitado, que a lo largo del tiempo se ha visto obligado a cambiar sus modos de operar, haciendo cada vez menos presencia explicita y teniendo una menor capacidad de control en los territorios. Cabe mencionar que hacia el mediados del año 2019 las comunidades señalaron que el ELN ya no hacia una presencia constante en los corregimientos, sino que se mantenía oculto entre la sociedad civil manifestándose solo en ocasiones muy excepcionales, también a través de grafitis y carteles, como el que realizaron para apoyar la norma comunitaria de cerrar la frontera agraria.

Esta dificultad, que ya venía atravesando durante los últimos años, se ha marcado mucho más con la salida de las FARC-EP, la multiplicidad de actores y la ofensiva militar, dejándole a la deriva, pues las fuerzas exógenas han sobrepasado su capacidad de respuesta bélica.

Aun cuando ya vimos el origen de las estructuras, sus ámbitos de regulación, repertorios y la dinámica del conflicto reciente, todavía nos hace falta analizar la relación del frente de guerra suroccidental con las economías territoriales, factor imprescindible para terminar de comprender este ELN.

El ELN y las economías territoriales

Las dos economías territoriales —diferentes de la agricultura— que sobresalen actualmente en la subregión son la coca y la minería; por tanto,

el frente de guerra Suroccidental se ha nutrido de estas[16]. Cabe aclarar que el aprovechamiento de cada una de estas economías corresponde a la ubicación geográfica de la estructura insurgente en cuestión.

En lo que respecta a la relación del ELN con la coca, desde los territorios se mencionó que no ha tenido una relación directa con su distribución. En el caso del departamento del Cauca, en el municipio de El Tambo, la zona con más hectáreas de coca sembrada (figura 9), los campesinos y campesinas mencionaron que el ELN solamente se ha encargado de cobrar un impuesto y regular al comprador; de la misma manera lo mencionó un líder del departamento: "Ellos acá no tienen cultivos ni cocinas, pero son los que cobran los impuestos" (Entrevista 5, 2019); otro entrevistado agregó:

> El ELN ha manifestado que no tiene relación con el narcotráfico, y en efecto no tiene relación, solo cobra el impuesto, y bueno eso se nota en el territorio porque uno no los ve con temas de cocina ni usando el corredor, solo piden el impuesto, lo cobrarán al mafioso. (Entrevista 3, 2019)

Aunado a lo anterior, en el municipio de El Tambo se mencionó un intento del ELN por aportar a los campesinos y campesinas para la sustitución de los cultivos y el establecimiento de cultivos agroalimentarios. Dichas medidas, que intentó tomar la insurgencia, iban de la mano con las normas ambientales que impulsaba, entre las cuales se mencionó un intento de cierre de frontera agraria: Sin embargo, ese tipo medidas no se ha visto en los últimos años debido a que para el ELN ha sido más difícil regular explícitamente el territorio, por motivo del cerco militar de la fuerza p*ública*:

> Cuando llegó el ELN retomó esas buenas normas que tenía las FARC y además nos hicieron sembrar comida, y ahora sí, ya había platanitos que vender cultivados en la zona, porque antes no [...] Ellos estuvieron en una época colaborándole a toda la gente económicamente para los que querían sustituir la coca. Pero ahí es donde vamos, ellos tenían unos correctivos para plantearnos a nosotros y nosotros no los cumplimos, entonces el ELN dice: "ya no hay con quién contar". (Entrevista 7, 2019)

Por lo anterior, han sido los gobiernos propios de las comunidades los que han abanderado el impulso de la situación de cultivos, como ocurrió en Playa Rica, con el Sacha Inchi, donde la Asociación Campesina Ambiental del Playa Rica (ASCAP), de la mano del Coordinador Nacional Agrario (CNA), realizaron algunos talleres sobre la importancia de los cultivos agroalimentarios y de las semillas del Sacha Inchi como economía alternativa. Si bien la insurgencia ha intentado acompañar las normas

---

16 Cabe resalar que el ELN, tal como se mención en el apartado tres, no solo se nutre de estas economías pues se relaciona con los diferentes mercados legales e ilegales que le rodean, jugando en ocasiones un papel parasitario y en otras uno de inversionista.

comunitarias, su reducción en la capacidad del control ha dejado a las comunidades en medio de choques de intereses comunitarios entre los campesinos que quieren sustituir y los que no. Cabe mencionar que dichos conflictos intracomunitarios han empezado a ser aprovechados por actores poco interesados en la sustitución de cultivo como la disidencia Carlos Patiño, la cual ha llegado a romper los tejidos comunales, generando nuevos ciclos de violencia en aras de acceder a rentas económicas:

> […] como que nos acostumbramos tanto a que nos estén diciendo qué es lo que tenemos que hacer, que cuando nos quedamos solos[17], nos quedamos así: sigamos tumbando montaña y hagámonos daño, y sembremos coca. Tan así que cuando queremos meter un cultivo alternativo, entonces algunos nos ven como enemigos. Porque nosotros ahora, por ejemplo, queremos trabajarle bastante a lo de Sacha Inchi, que es una alternativa, pero no, la gente está metida en la coca que se disparó, la gente quiere sembrar coca hasta en la casa en las materas, pero nosotras con lo de economía solidaria decimos, hay una cosa equilibrada entre cultivar coca, que nos da el sustento, pero además cultivar comida, o sea, más comida y menos coca. (Entrevista 7, 2019)

En el departamento de Nariño, se señaló algo muy similar a lo que ocurre en el Cauca: el papel del ELN allí es igualmente el cobro de un impuesto a la compra (Entrevista 13, 2019). También se mencionó la regulación por preocupaciones ambientales relacionadas con los cultivos de coca por parte de la insurgencia, donde, de la mano de la prohibición de construir a menos de 30 metros de las cuencas acuíferas y de la pesca con dinamita, resaltó la restricción de los laboratorios en las partes altas:

> A los coqueros, los que tienen laboratorios de coca que sea en la parte plana, así les gaste más. Que sea en la parte plana y que entierren todos esos materiales que se pudren y no coger como hacían en las quebradas. (Entrevista 12, 2019)

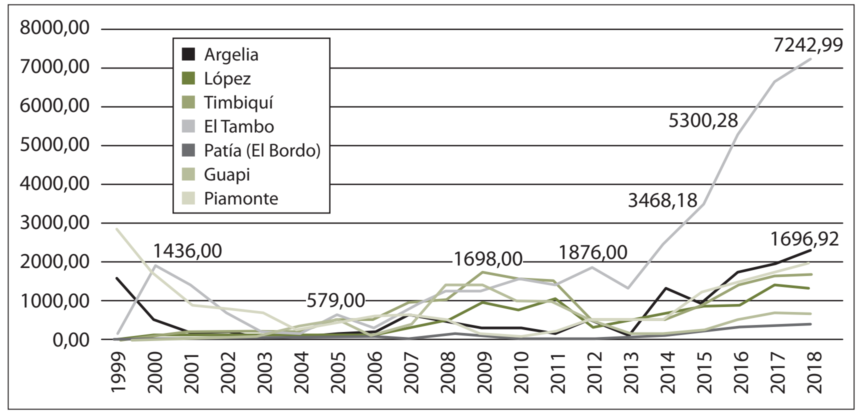
Cabe destacar que en este departamento su presencia no es preponderante en las zonas de mayor producción cocalera (figura 11), en comparación con su presencia en el departamento del Cauca, por lo cual mencionó que su papel, además de la regulación de los cultivos, se ha centrado en el

---

17 Es importante aclarar que la zona del piedemonte caucano, a pesar de contar con la regulación del ELN, la cual hasta el 2019 se puede confirmar que controlaba ámbitos tales como los horarios en los bares, la administración de justicia entre otros, ha visto recientemente afectada la capacidad de comunicación entre las comunidades y los mandos, debido a que a estos se les ha dificultado mantener campamentos estables durante periodos de tiempo prolongados. Lo anterior explica por qué en ocasiones las comunidades mencionan haberse quedado "solas" durante ciertos periodos. Durante estos lapsos de tiempo y ante la difusión de la insurgencia como agente de coacción, parece ser que las normas comunitarias terminan siendo incumplidas por algunos pobladores, hasta el regreso de la insurgencia y sus llamados de atención, los cuales son posibles tanto por las denuncias de la comunidad misma como por parte de sus milicianos.

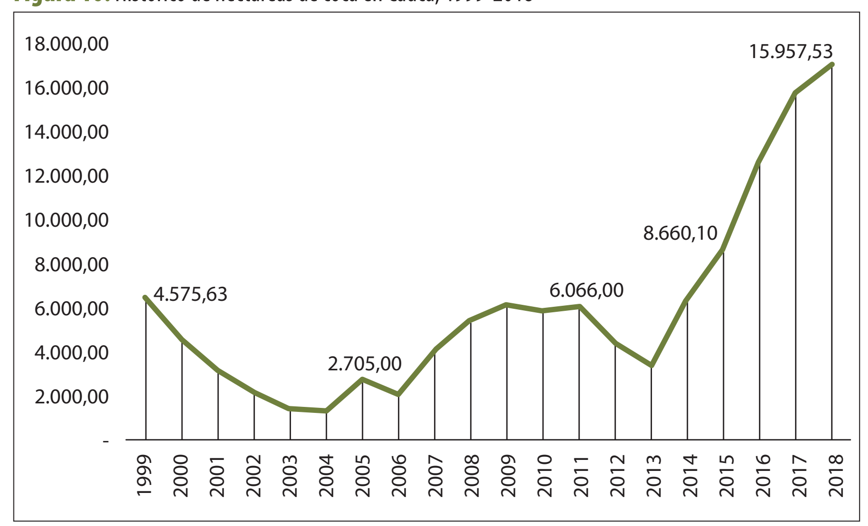
cobro de seguridad y peaje a los actores armados que pasan por las rutas estratégicas en las que tiene control (Entrevista 11, 2019).

Figura 9. Principales municipios con cultivos de coca en Cauca 1999-2018



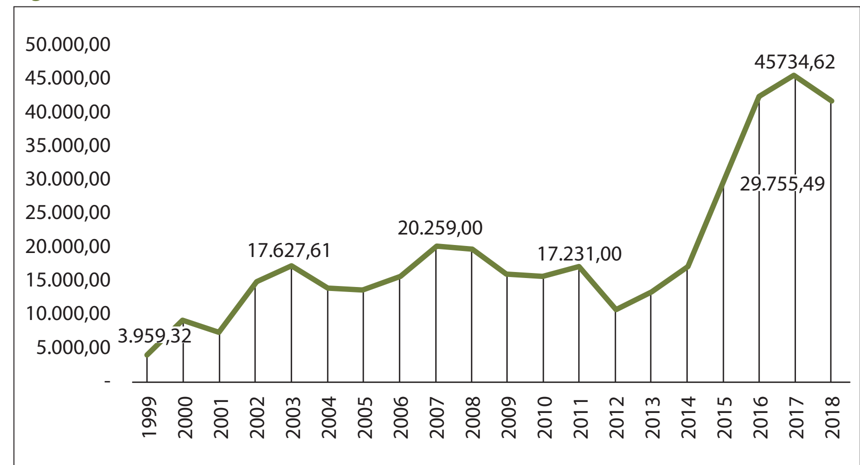
Fuente: UNDOC. Elaboración propia.

Figura 10. Histórico de hectáreas de coca en Cauca, 1999-2018



Fuente: UNDOC. Elaboración propia.

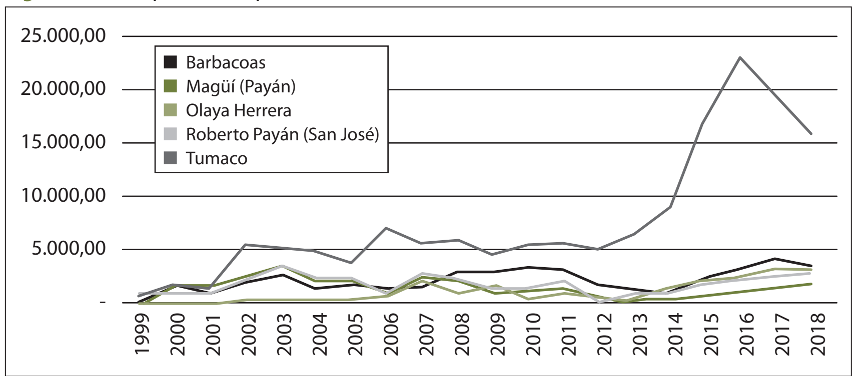
Figura 11. Histórico de hectáreas de coca en Nariño, 1999-2018



Fuente: UNDOC. Elaboración propia.



Figura 12. Principales municipios con cultivos de coca en Nariño 1999-2018



Fuente: UNDOC. Elaboración propia.

En lo que respecta a la minería, en la subregión se presentan la minería tradicional, artesanal y comunitaria, por un lado, y la minería mecanizada, por el otro. La primera es aquella que ha sido desarrollada por las comunidades tradicionalmente y/o aquella que es desarrollada por parte de asociaciones mineras comunitarias, dentro de esta se encuentra tanto el barqueo ancestral realizado por las comunidades afro en la cuenca del Micay como la extracción mineral con el uso de motobombas y elevadores hidráulicos de las asociaciones comunitarias en Nariño.

La minería mecanizada se caracteriza por ser desarrollada por foráneos, la gran mayoría provenientes de Antioquia, quienes ilegalmente y a través de redes de acuerdos, ingresan máquinas pesadas (retroexcavadoras, motobombas y dragas) para extraer el oro. Esta minería se ha

caracterizado por generar diferentes tipos de conflictos en los territorios, en términos sociales, económicos y ambientales. Por tanto, la oposición contra la minería mecanizada ha sido una de las banderas de lucha de las organizaciones comunitarias.

El establecimiento de la minería mecanizada pasa, en un primer momento, por una serie de acuerdos ilegales e informales con los diferentes actores locales. Sin embargo, en la mayoría de los casos no tiene en cuenta a las comunidades. Según Amaya y Ortega (2019), los dueños de las maquinarias pesadas hacen acuerdos ilegales con la Policía, el Ejército, los grupos armados y en ocasiones las organizaciones comunitarias para poder ingresar a los territorios. Estos acuerdos constan de una serie de pagos, respecto del porcentaje de oro extraído, realizados por los dueños de la maquinaria ante los diferentes actores.

En lo que respecta al ELN y su relación con la minería, se evidenció que la insurgencia no es propietaria ni de las minas ni de las retroexcavadoras, como en ocasiones se suele mencionar en prensa. Sin embargo, esta organización al ser uno más de los actores que configura algunos territorios mineros, sí ha tenido un papel fundamental regulando la entrada y salida de la maquinaria y de los trabajadores.

En el departamento del Cauca, en el municipio de Bolívar, zona de extracción aurífera, los pobladores mencionan que el ELN suele cobrar a los mineros foráneos diez millones de pesos por el ingreso de máquina y dos millones de pesos mensuales por el funcionamiento de maquina (Entrevista 4, 2019). Al igual que en el departamento del Cauca, en Nariño mencionaron que el ELN no es propietario de las minas, tan solo cobra impuestos sobre la explotación minera, y también cobra por la seguridad a los grupos que trafican con los recursos minerales, según mencionó un funcionario: "Lo que hace el ELN es decir 'bueno, usted me paga tanto y yo me encargo de que pueda salir tranquilamente, ya sea con la mercancía o con la plata'" (Entrevista 11, 2019).

Un poblador minero de Nariño mencionó que, en las zonas de extracción de recursos el orden lo impone la insurgencia, es decir, que el ELN es el encargado, al igual que en el Cauca, de controlar la entrada y la salida de la maquinaria. En este caso, la regulación fue incluso más allá del cobro de impuesto, ya que la insurgencia se encargó de establecer y exigir métodos de extracción para reducir el impacto ambiental en la extracción del mineral (Entrevista 12, 2019).

Siguiendo lo anterior, según Amaya y Ortega (2019), la insurgencia no solo ha establecido normas al respecto de la extracción mineral, también ha gestionado la presencia de expertos para la capacitación de la extracción, con miras a reducir las implicaciones medioambientales y de salud a las que conlleva el uso del mercurio; ha establecido zonas de

regeneración ambiental en las orillas de los ríos, donde ha prohibido el desarrollo de prácticas mineras y pesca con dinamita; además ha jugado un papel activo a la hora dirimir los conflictos sociales entre trabajadores, población y dueños de socavones.

En relación con la imposición tributaria, la guerrilla suele partir de la diferenciación entre los mineros de bajo, medio y alto rango. Los de medio y alto rango suelen ser mineros mecanizados, los cuales cuentan con un alto flujo de capital, por tanto, deben pagar un mayor tributo; de no pagarlo, se ven ante las amenazas de la expulsión, el decomiso de las maquinarias o el secuestro (Amaya y Ortega, 2019). Por otro lado, la relación del ELN con los mineros de bajo rango, en su mayoría integrantes de la comunidad, suele ser menos impositiva, para estos, el cobro de impuestos es mucho menor y es cobrada a cada minero individual, pues la insurgencia no toca los rubros de las asociaciones y/o cooperativas comunitarias.

Es importante mencionar que la regulación de la minería mecanizada le ha traído al ELN ciertos problemas con las comunidades, pues estas, la mayoría de las veces, no suelen avalar ningún tipo de extracción mineral diferente de la tradicional, artesanal y comunitaria. En ese sentido, el ELN se ha visto en la encrucijada, entre obtener las altas rentas de la minería mecanizada, realizada por foráneos, o mantener el respeto y evitar conflictos con las comunidades. Dicho conflicto se ve reflejado en el relato de una lideresa:

> Hacia el año 2012, 2013, por López de Micay lograron meter una retroexcavadora grande para minería, afectaron la cuenca del río hacia la parte baja, casi diez máquinas trabajando. Nos tocó desde el Consejo Comunitario ir a hablar con el ELN y decirle que exigíamos que esas maquinarias las sacaran porque nos iban a afectar. Los dueños eran unos paisas, entraron por el río y nadie vio nada, ni la fuerza pública, ni el alcalde, nada.
>
> Entrevistador: ¿El ELN no los detuvo?
>
> Entrevistado: No, porque ellos siempre han dicho que piden el impuesto de lo que llegue. Pero las comunidades le dijimos al ELN: "Bueno, ustedes hacen parte del territorio, entonces necesitamos que los saquen. (Entrevista 3, 2019)

En definitiva, la regulación territorial del ELN en zonas de estas economías le ha suscitado el desarrollo de confrontaciones constantes, ligadas, por un lado, a los conflictos sociales inherentes a las economías y sus relaciones con los territorios, y, por el otro, a los choques armados con la fuerza pública y otros actores interesados en intervenir, regular y/o extraer ganancias.

Así, la llegada de otros actores en disputa por la minería y la coca sumergen al ELN en disputas territoriales donde no solo ve en juego su posicionamiento económico en los territorios, sino también su estatus político, militar y social.

Mapa 3. Cauca y Nariño. Economías territoriales 2010-2016

Límites
Internacional
Departamental

Administrativos
Capital del departamento
Cabecera municipal

Drenajes
Río

Vías
Pavimentada
Sin pavimentar

Abreviaturas
R. Río
Cñ. Caño
PNN Parque Nacional Natural

ESCALA 1:1.200.000
0 12 24 36km

MATICES HIPSOMÉTRICOS (msnm)
4000 3000 2000 1000 500 200 100 0

Localización

Cultivos de uso ilícito
Minería
Corredores estratégicos
Oleoducto Trasandino

Pie de imagen y crédito
Referencia, bibliografía, elaboración

Mapa 4. Cauca y Nariño. Economías territoriales 2017-2020

Límites
Internacional
Departamental

Administrativos
Capital del departamento
Cabecera municipal

Drenajes
Río

Vías
Pavimentada
Sin pavimentar

Abreviaturas
R. Río
Cñ. Caño
PNN Parque Nacional Natural

ESCALA 1:1.200.000
0 12 24 36km

MATICES HIPSOMÉTRICOS (msnm)
4000 3000 2000 1000 500 200 100 0

Localización

Cultivos de uso ilícito
Minería
Corredores estratégicos
Oleoducto Trasandino

Pie de imagen y crédito
Referencia, bibliografía, elaboración

Conflictividades sociales recientes

En los departamentos de Cauca y Nariño, los conflictos sociales son diversos y latentes, de cara a la reconfiguración del conflicto armado y el escaso cumplimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) y la Reforma Rural Integral (RRI) firmados en los acuerdos con las FARC-EP.

Por un lado, ambos departamentos se encuentran bajo una situación humanitaria de gran complejidad, en razón de: primero, los múltiples actores armados que ahora componen el territorio, cuyos intereses se ven afectados por el quehacer diario de los líderes y lideresas sociales; y segundo, por la dinámica que ha puesto en la agenda la política de seguridad del gobierno de Iván Duque.

Recientemente, se han presentado varios atentados y asesinatos a líderes y lideresas indígenas, campesinos y afro, así como también varias amenazas a ambientalistas que se oponen al desarrollo de la minería en sus territorios:

> Los líderes empezaron a pronunciarse por las actividades mineras. En Mercaderes, Almaguer y El Bordo hay desplazados, amenazados y muertos. Oponerse a la minería y el narcotráfico es un tema complicado para los líderes, las amenazas se han presentado por múltiples actores, la mayoría de ellos no se identifican. (Entrevista 5, 2019).

A esto se ha sumado el desarrollo de masacres en diferentes partes de la subregión, lo que da cuenta del complejo panorama que vienen atravesando los territorios con la multiplicidad de actores, pues cada grupo ha desplegado violencia hacia los pobladores para romper sus tejidos sociales, controlar sus comportamientos y garantizar el monopolio sobre la minería informal, los cultivos de coca, marihuana y las rutas del negocio del narcotráfico.

Aunado a esto, las comunidades que habían sentido alivios humanitarios y veían esperanzas con la desmovilización de las FARC-EP y la mesa de negociaciones con el ELN, han empezado a sentir temor de nuevo debido a la ruptura de la mesa de negociaciones y la política de seguridad del gobierno Duque.

Con la reciente arremetida de las fuerzas militares y el regreso de los combates en los territorios, se ha profundizado la estigmatización y el confinamiento. Muestra de lo mencionado anteriormente es la situación que vivió la comunidad de San Juan del Micay, Cauca, a comienzos del año 2020 cuando el Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Despliegue Rápido 4, adelantó operativos contra el ELN, pasando por alto el principio de distinción entre combatientes y civiles y dejando un saldo de civiles afectados:

> Las comunidades de San Juan de Micay, campesinos, afros e indígenas ante los enfrentamientos y bombardeos indiscriminados sucedidos en la jurisdicción de la vereda Betania, desde el sábado denuncian que,

> como resultado de esto a la fecha hay un muerto en medicina legal [...] quien pertenecía a la comunidad e integraba la junta del consejo comunitario; al menos tres civiles retenidos por el Ejército, nueve personas desaparecidas y un número indeterminado de heridos. (Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, 2020b).

Por otro lado, el atenuado cumplimiento del PNIS y de la RRI en ambos departamentos, ha generado un clima de desconfianza. Para las diversas comunidades del suroccidente, el tema de la coca es un tema fundamental. Sin embargo, debido a la escasa respuesta del Gobierno nacional y las nulas garantías para la sustitución, esta se ha mantenido como el único medio de subsistencia en algunas comunidades, las cuales se encuentran confinadas por la escasa infraestructura vial, institucional y por el actuar de los actores armados.

Muestra de la relevancia que tiene este tema para los pobladores son sus propuestas para buscar alternativas económicas al cultivo de la coca, como la *propuesta alternativa sobre reducción y transformación progresiva para los territorios con presencia de cultivos de coca en la cordillera caucana*, presentada el 22 de abril del 2019 por Asocomunal Argelia, ASBECOF, ASCAP, ACAAMI y el Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay articulados con el CNA. Y, la *propuesta del suroccidente para la audiencia de sustitución de cultivos de coca, marihuana y amapola* en mayo del mismo año. En ambas, las comunidades, por un lado, del Cauca y por el otro, del suroccidente en general, rechazaron la posibilidad de que se realizara de nuevo la aspersión aérea con glifosato e hicieron el llamado al Gobierno nacional para que se garantice la integración de los territorios abandonados históricamente, con el establecimiento de garantías infraestructurales y técnicas para la sustitución de cultivos, instando al cumplimiento del PNIS y de la RRI.

En la cordillera caucana, las comunidades propusieron la disminución gradual y voluntaria de las áreas sembradas, empezando con el 5 % de los cultivos de acuerdo con las condiciones de las y los inscritos en el proceso. Las comunidades, en concreto, piden apoyo para la consolidación de procesos de soberanía alimentaria y proyectos de agregación de valor bajo la fórmula 2tc-1a-1tp: dos proyectos de transformación de la hoja de coca, con énfasis en la elaboración de productos; un proyecto ambiental para recuperar las zonas deterioradas por las malas prácticas productivas, tales como cuencas acuíferas; y un proyecto de transformación productiva para la agregación de valor a cualquier producto rural.

Como ya se anunció, otra de las luchas de los pobladores es en contra de la minería. En razón de esta, tanto en su forma ilegal como legal, las comunidades han visto afectados sus entornos y recursos naturales. Los pobladores de varias zonas han incitado al desarrollo de consultas previas y se han movilizado para sacar a los entables mineros, tanto formales como informales.

Por lo anterior, para las comunidades de estas zonas hay cuatro temas fundamentales en la agenda: primero, el cumplimiento a cabalidad del punto cuatro sobre sustitución de cultivos de uso ilícitos y del punto uno, sobre la reforma rural; segundo, las garantías y medidas de protección para el ejercicio de los liderazgos sociales; tercero, el reconocimiento de la autonomía y el respeto de los territorios y el medioambiente; y cuarto, la continuación de la mesa de negociaciones con el ELN, acompañada de la desactivación de los grupos residuales del paramilitarismo y de la extinta guerrilla de las FARC-EP GAPD, con el fin de conseguir alivios humanitarios a través del silencio de los fusiles en los territorios.

En ese sentido, el ELN no tiene una injerencia directa en los conflictos sociales que viven los pobladores y pobladoras, salvo en las ocasiones en que algunas comisiones se han visto inmiscuidas en conflictos de intereses relacionados con la minería. En general, esta organización solo tiene una responsabilidad transversal al quedar las comunidades en medio de las disputas que tiene con los demás actores, pues estas siguen siendo objeto de agresión, estigmatización y de procesos judiciales, por un lado, por parte de actores armados y, por el otro, por parte de las fuerzas gubernamentales.

A manera de conclusión

En el presente capítulo se han apreciado varias características del frente de guerra Suroccidental Carlos Alberto Trochez Zuleta. Hemos visto cómo los territorios de los departamentos de Cauca y Nariño se conformaron como zonas estratégicas útiles en el momento de repliegue y reestructuración que empezó a vivir el ELN después de la crisis de los setenta y a lo largo de los ochenta.

Las áreas periféricas de los departamentos de Cauca y Nariño, caracterizadas por el abandono estatal, que expresaba la presencia diferenciada del Estado, permitieron al ELN posicionarse como un ente regulador, legítimo para pobladores y pobladoras a través de su discurso, proyecto y agenda de fomento del orden y provisión de bienes y servicios locales. En razón de esto, esta insurgencia logró crecer significativamente desde su llegada a cada uno de los departamentos, logrando conformar tres frentes guerrilleros y más de siete compañías móviles, eso, sin mencionar las redes de apoyo que demostraron un despliegue mayor al delimitado geográficamente por la subregión.

Es importante resaltar que en dichas zonas donde la población tuvo que aceptar la regulación guerrillera debido a la ausencia del Estado, se desencadenó una fuerte estigmatización contra las comunidades por parte de algunas instituciones del Estado y de otros aparatos armados como las AUC. Lo anterior dejó a las comunidades a la merced de la violencia.

También se expuso que este frente no se ha caracterizado por su fortaleza militar, sino que, por el contrario, se ha mantenido a lo largo de la historia del conflicto en la subregión como un actor armado secundario. En efecto, su desarrollo estuvo supeditado a la interrelación que tuvo con otros grupos armados, como los choques con los bloques de las AUC y Los Rastrojos, sus disputas y alianzas con las FARC-EP, y ahora con las disidencias y su relación con el grupo rearmado la Nueva Marquetalia.

Se observó que esta insurgencia, a diferencia de las FARC-EP, se ha caracterizado por tener una naturaleza de regulación social mucho menos militarista, más abierta al diálogo, la concertación y el debate con las comunidades que habitan en estos territorios. Lo anterior resaltó como una característica de las zonas donde el frente de guerra ha tenido incidencia, un margen mucho mayor de autonomía por parte de las organizaciones, quienes en ocasiones han tenido la posibilidad de hacer llamados de atención ante las faltas graves cometidas por la insurgencia. Siguiendo lo anterior, se puede afirmar que en las zonas donde los frentes guerrilleros del ELN lograron establecerse, se consolidó una especie de autogobierno local comunitario, garantizado coercitivamente por el ELN.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las dinámicas del conflicto reciente han dificultado la capacidad de control comunitario ante el accionar de la insurgencia. Lo anterior se desarrolla en el marco de la reconfiguración armada que han venido sufriendo los departamentos tras la salida de las FARC-EP. Bajo esta a reconfiguración, el frente de guerra Suroccidental en los últimos años se ha vuelto mucho menos visible en términos sociales, debido a la avanzada de la fuerza pública durante y después del desarrollo de la mesa de negociaciones entre ELN y Gobierno nacional, lo que le ha dificultado el mantenimiento de campamentos durante largos periodos, rompiendo las comunicaciones entre pobladores y comandancia a la hora de solucionar abusos de fuerza por parte de milicianos en los territorios; a lo cual se ha sumado la incursión de las disidencias en sus zonas de operación, esto no solo le ha dificultado su capacidad de regulación, sino que también le ha hecho perder paulatinamente su papel de autoridad armada.

También pudo observarse el papel que juegan las economías territoriales para este frente. Por un lado, se destaca su relación ambigua con los cultivos de coca, lo que rompe con la idea generalizada de la opinión pública al respecto de su control total en la cadena del narcotráfico. Esto no quiere decir que no saque provecho de esta economía, sino que en estos frentes guerrilleros no cuentan con la capacidad para ejercer el control de esta economía, más allá del gramaje, salvo en ciertos lugares de Nariño donde se ha encargado de regular el paso de los narcotraficantes por rutas estratégicas.

Lo anterior quiere decir que el ELN no está obteniendo mayores ganancias de la regulación de la coca, como sí las obtuvo las FARC-EP al

inmiscuirse en varios eslabones de la cadena del narcotráfico. En razón de su escasa capacidad de aprovechamiento, la coca le ha traído más problemas que beneficios, pues por un lado le ha significado grandes costos en términos humanos debido a las confrontación con otros grupos interesados en monopolizar toda la cadena del narcotráfico; y por el otro, la coca no solo ha traído las dinámicas del narcotráfico y de consumo excesivo de alcohol, las cuales afectan la seguridad de sus unidades y dificultan el trabajo político, sino que, además, ha tocado algunos de sus milicianos y/o mandos medios costándole legitimidad tanto a nivel local como nacional.

Por otro lado, al respecto de la minería, se reconoció el papel fundamental que juega esta actividad económica para sus finanzas internas, así como su papel en la regulación del trabajo de las minas, en algunas ocasiones con resultados positivos para la mediación de conflictos. Sin embargo, cuando esta actividad es desarrollada por foráneos que llegan a ejercer la minería con retroexcavadoras, la insurgencia ha llegado a chocar con las comunidades que se oponen a todo tipo de minería diferente a la tradicional, artesanal y comunitaria. Lo anterior ha conducido a que el ELN se encuentre en la encrucijada entre obtener las rentas que dejan las retroexcavadoras de los foráneos o perder la credibilidad de las comunidades.

Para finalizar, cabe resaltar que se observó una completa unidad al interior de las estructuras del frente de guerra Suroccidental, por lo menos en lo que respecta a los modos de hacer la guerra y en cuanto a relacionamiento social. Es decir, el ELN del suroccidente del país no mostró grandes diferencias entre sus frentes, sin embargo, esto no es un dictamen final, pues la degradación en sus tropas y los milicianos sueltos que operan a nombre de la insurgencia, sin tener órdenes directas, dan cuenta de un problema de acción colectiva y de coordinación interna.

En definitiva, en este caso nos encontramos ante un frente de guerra que logró establecer fuertes arraigos sociales, pero que paulatinamente los ha ido perdiendo ante la dinámica del conflicto, su escasa capacidad militar y su precario desarrollo económico. Lo anterior explica por qué no juega un papel tan importante al interior del ELN nacional a pesar de ser un proyecto cuyos primeros focos fueron orientados desde la Dirección Nacional en tiempos de reestructuración en los años ochenta, sin embargo, aunque no juegue un papel fundamental actualmente dentro de la organización, su posición en zona de frontera es estratégica para el desarrollo de la guerra del ELN nacional, pues a pesar de que actualmente no logra obtener gran cantidad de rentas, estos territorios sí cuentan con economías que le pueden brindar una gran capacidad adquisitiva.

Ahora bien, esta estructura se encuentra en un contexto bastante complejo ante el reacomodo armado de la subregión. Por un lado, si busca incrementar sus rentas por medio de la minería y el control de otros eslabones

de la cadena del narcotráfico, puede perder los arraigos sociales con los que cuenta; pero, por otro, si no incrementa sus rentas y, por tanto, su capacidad militar, no solo continuará perdiendo territorio ante otros actores o la misma fuerza pública, sino que, al no poder brindar seguridad a las comunidades, las dejaría en vilo, a merced de otros actores que llegarían a estigmatizarlas, criminalizarlas y perseguirlas. Respecto a esto último, es importante tener en cuenta que, para incrementar sus rentas, el ELN debe entrar a disputar los territorios con otras organizaciones, lo que le supondría engrosar sus filas militarmente, esto también le podría acarrear problemas, pues podría dejar como resultado una gran cantidad de jóvenes armados sin la formación política suficiente, llevando así a que se cometan violaciones a los derechos humanos en contra de las comunidades a su nombre, lo cual le significaría la perdida de la poca legitimidad con la que aún goza.

Es por eso que, ante una posible negociación con el ELN, en el suroccidente del país se debe tener en cuenta a las comunidades, pero no solo eso, debería igualmente garantizarse todo el andamiaje institucional para cubrir los vacíos que dejaría la ausencia de la regulación del ELN. Es decir, si no se tratan de fondo los problemas de la distribución de la tierra, los recursos minerales y la sustitución de cultivos con plenas garantías para las comunidades, ante un escenario de desarme del ELN, estas zonas y conflictos ampliarían sus brechas y problemas con la consolidación de nuevos actores en busca de rentas.

Además, debido a lo complejo y cambiante de este lugar del país, se requiere cambiar los marcos cognitivos cuando uno se acerca a esta región, ello implica que debe tenerse en cuenta para la construcción de paz y el desarrollo de políticas de seguridad en los departamentos de Cauca y Nariño: 1. La autonomía de las comunidades frente a los actores armados 2. La naturaleza de regulación del ELN, en contraste con la mirada militarista que tuvo las FARC-EP y el carácter delincuencial del actuar de los grupos paramilitares y los GADP, incluidas las recientes disidencias de las FARC-EP y 4. La gran incomprensión que han mostrado los funcionarios públicos y la fuerza pública sobre las necesidades de las comunidades y sus relaciones reales con los grupos armados y con el narcotráfico, lo cual ha llevado a inferencias espurias y estigmatizaciones que han puesto en vilo las luchas sociales campesinas, estudiantiles, indígenas y afro.

Bibliografía

Amaya, Daniel y Ortega, Henry (2019). Dinámicas de poblamiento, conflicto armado y formas de regulación de la minería en el departamento de Nariño. En *Escenarios de la minería artesanal y pequeña escala en Nariño: Ambiente, posconflicto y alternativas.* Cinep/PPP.

Ávila, Ariel y Núñez, Magda (2010). *Las dinámicas territoriales del Ejército de Liberación Nacional: Arauca, Cauca y Nariño*. Corporación Nuevo Arcoíris.
Bolaños, Edinson (2019). Las células vivas de los Rastrojos. *El Espectador.* https://bit.ly/2MEU3un
CNMH [Centro Nacional de Memoria Histórica]; CIMA [Comité de Integración del Macizo Colombiano] y FUNDESUMA [Fundación del Suroccidente Colombiano] (2017). *Crecer como un río. Jornaliando cuesta arriba por vida digna, integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia.* Vol. 1. CNMH.
CCO [Comando Coordinador de Occidente] (2020). *Claridades necesarias sobre nuestra confrontación con el* ELN*, la Segunda Marquetalia y grupos paramilitares en el occidente colombiano*. CEDEMA. https://bit.ly/39ASNle
Comisión de la Verdad (2020). *Presentación de comisionada Alejandra Miller "Por qué continua la guerra en el Cauca"*. https://bit.ly/3akekgT
Defensoría del pueblo (2018). *Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgos en el posacuerdo* [Informe especial]. Bogotá D.C. https://bit.ly/3r2zpDk
Díaz, Zamira (1994). *Oro, sociedad y economía el sistema colonial en la gobernación de Popayán: 1533-1733*. Banco de la República.
Duque, Tatiana (2019). El ELN gana terreno en Nariño y pelea hegemonía en Chocó. *La Silla Vacía.* https://bit.ly/2Yvd3OP
ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2007). *Las* FARC *continúan sus ataques contra revolucionarios*. CEDEMA. https://bit.ly/3cs7PLL
ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2011). *Parte de Combate frente de guerra Suroccidental*. CEDEMA. https://bit.ly/3pABHsZ
ELN [Ejército de Liberación Nacional] (2015). *Quinto Congreso Guerra Revolucionaria, Poder Popular y Nueva Nación*.
ELN [Ejército de Liberación Nacional] – Voces (2019). Últimas acciones elenas en Cauca y Nariño. ELN-Voces. https://bit.ly/3j2aWeN
Hernández, Milton (2006). *Rojo y negro historia del* ELN. Editorial Txalaparta S.I.
InSight Crime (2016). Los Rastrojos. *InSight Crime.* https://bit.ly/3j6AkjC
La silla vacía (2020, 4 de febrero). Iván Márquez hace su primara movida militar en Colombia. *La Silla Vacía.* https://bit.ly/3reXKWR
López Vigil, María (1989). *Camilo camina en Colombia*. Editorial Nuestro Tiempo.
Millán, Santiago (2011). Variaciones regionales de la presencia del ELN. En Aponte, David y Vargas, Andrés, *No estamos condenados a la guerra Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el* ELN (pp. 111-174). Cerac, Cinep/PPP-Odecofi.
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca (2018). Boletín segundo trimestre.
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca (2018). Boletín tercer trimestre 2018. Popayán, Cauca, Colombia. https://bit.ly/3tgPYxa
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. (2020a). Boletín segundo trimestre 2020. Popayán, Cauca, Colombia. https://bit.ly/39yuO5W
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca (2020b). *Crítica situación humanitaria en el cañón del Micay, municipio de El Tambo (Cauca)* [Comunicado público]. https://bit.ly/3pAjrQI

Rodríguez, José (2015). *Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense*. Cinep/PPP-Odecofi.

Organizaciones sociales de la cordillera Tambo Argelia Articuladas al CNA-Cauca (2019). *Propuesta alternativa sobre reducción y transformación progresiva para los territorios con presencia de cultivos de coca en la cordillera Caucana.*

Organizaciones sociales del Suroccidente Colombiano (2019). *Documento de propuesta sur occidente. Para la audiencia sobre sustitución de cultivos de Coca, Marihuana y Amapola*. Presentado en la casa de la moneda, Popayán, Cauca.

Sánchez, Vargas y Vázquez (2011) Las diversas trayectorias de la guerra: un análisis subregional. En Restrepo, Jorge; Vásquez, Teófilo y Vargas, Andrés, *Una vieja guerra en un nuevo contexto: conflicto y territorio en el sur de Colombia* (pp. Xx-xx). Cinep/PPP-Odecofi.

Sierra, Andrés (2006). Compañero Toño siempre presente. *El insurgente* [periódico del área de frontera del frente de guerra Suroccidental]. https://bit.ly/36x2bnY

Pérez, Carlos (2004). *Grupos armados e impactos políticos, sociales y económicos en el orden Municipal: El caso del Ejército de Liberación Nacional* ELN, *en el Municipio de Guachucal, Departamento de Nariño 1990-2000* [tesis de pregrado]. Universidad del Cauca.

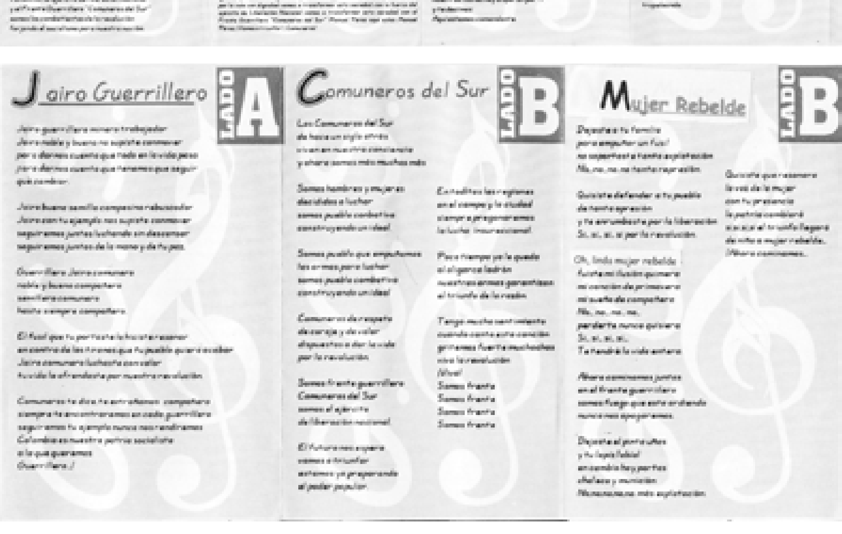
Entrevistas

Entrevista 1. Líder social de Bolívar, Cauca, 30 de mayo de 2019.
Entrevista 2. Lideresa social de Cajibío, Cauca. 1° de junio de 2019.
Entrevista 3. Lideresa social de San Juan del Micay, Cauca, 1° junio de 2019.
Entrevista 4. Líder social de Lerma, Bolívar, Cauca, 5 de junio de 2019.
Entrevista 5. Líder social de Santa Rosa, Cauca, 7 de junio de 2019.
Entrevista 6. Lideresa social de zona rural del Tambo, Cauca. 20 de julio 2019.
Entrevista 7. Lideresa social de zona rural del Tambo, Cauca. 22 de julio 2019.
Entrevista 8. Líder social de zona rural del Tambo, Cauca. 24 de julio 2019.
Entrevista 9. Lideresa social de zona rural del Tambo, Cauca. 26 de julio 2019.
Entrevista 10. Educadora de zona rural del Tambo, Cauca. 29 de julio 2019.
Entrevista 11. funcionario Nariño. 4 de enero 2019.
Entrevista 12. Minero Nariño. 6 de enero 2019.
Entrevista 13. Exguerrillera de la compañía Mariscal Sucre de las FARC-EP, Nariño. 5 de febrero 2020.
Entrevista 14. Líder de San Juan del Micay, El Tambo, Cauca, 12 de septiembre 2020.

Anexo 1.


LADO A
1 QUE SERA
2 MUJER COMUNERA
3 SEMILLA COMUNERA
5 FUSILES POR LA PAZ
6 JAIRO GUERRILLERO
Para las mujeres y los hombres
más esclarecidos de la especie
y para los que aún permanecen
en la obscuridad
con mayor RAZON.
LADO B
1 COMUNEROS DEL SUR
2 MUJER REBELDE
3 SOLDADO MILITAR
4 VAMOS A TRANSFORMAR
5 MANUEL PEREZ COMANDANTE
6 CAMILO COMUNERO
EN EL SUR LA PATRIA VIBRA
BUSQUEDA
FRENTE GUERRILLERO COMUNEROS DEL SUR
De la Resistencia al Poder Popular!


Soldado Militar
LADO B
Vamos a Transformar
LADO B
Manuel Pérez Comandante
LADO B
Camilo Comunero
LADO B


Jairo Guerrillero
LADO A
Comuneros del Sur
LADO B
Mujer Rebelde
LADO B


Mujer Comunera
LADO A
Semilla Comunera
LADO A
Soldado Brabucon
LADO A
Fusiles por la Paz

Un poder popular distorsionado: madera, oro y coca como determinantes organizacionales y armados del ELN chocoano

Andrés F. Aponte González
Valentina González Ramírez

Esta lectura territorial tiene como objeto explicar cómo se ha materializado la presencia del ELN en el departamento del Chocó y cuál es específicamente el rostro territorial que ha asumido el frente de guerra Occidental, en el marco investigativo de los equipos del Cinep/PPP sobre las diferencias entre la inserción y el relacionamiento de los diversos grupos del ELN en las diferentes regiones, según las particularidades de sus configuraciones sociales.

En ese marco comparativo, como lo indica el título de este capítulo, esta lectura territorial pretende caracterizar la particular estructura regional del ELN como vigorosa en términos militares, pero famélica en términos políticos y sociales.

Lo anterior quiere decir que, a diferencia de lo que sucede en otras regiones (Arauca, por ejemplo), nos topamos con un ELN que cuenta con escasos apoyos sociales, que actúa más como un ejército de ocupación, con visos criminales, debido a que sus inéditas capacidades y apuestas militares se muestran estrechamente vinculadas con las economías territoriales que pretende monopolizar. Con esta idea nos referimos a sus impulsos e intentos de acaparar y regular la economía de la coca, la extracción maderera y la minería artesanal y criminal.

Esta premisa implicaría decir y señalar que este ELN territorial expone una estrategia de construcción de poder popular distorsionada y criminalizada, en razón de que ha adecuado más su estructura organizacional a las economías territoriales que pretende monopolizar, que a ganar y generar poder político y a enraizarse en los procesos organizativos endógenos, para impulsar

las demandas y reivindicaciones que tienen los actores locales en torno a la manera como se materializa el Estado en el Chocó. Esto involucra un evidente distanciamiento de este frente de la tradición histórica del ELN en las otras regiones donde hace presencia, especialmente desde su reconfiguración después de Anorí (1974) (ver capítulo "Descifrando al ELN").

Esta ruptura con la tradición reciente del ELN tiene mucho que ver con el proceso de configuración regional del Chocó, que, en poco o nada, le abrió una ventana de oportunidad al ELN, cuando se insertó, en los años ochenta, para que esta insurgencia pudiera incrustarse e incidir en los procesos sociales tal y como lo hizo en áreas del sur de Bolívar, el Sarare o el Catatumbo, para dar unos ejemplos.

¿Cuáles son las razones y variables en juego?

Primero, a diferencia de otras experiencias del nivel nacional, la emergencia de este emprendimiento armado es bastante particular, porque fue fruto de esfuerzos inconexos de otros frentes regionales (Domingo Laín, el Bloque Norte y de la Dirección Nacional-DN), que buscaban implantar un emprendimiento armado propio en esa área del país; y, luego de varios años de estar desarticulados, lograron que las estructuras existentes se reorganizaran y crearan el frente que conocemos en el presente.

En segundo lugar, las proclamas revolucionarias del ELN no encontraron eco en las organizaciones sociales preexistentes del Chocó: mientras el ELN quería cambiar la idea de Estado y sociedad, estas lo que demandaban era reconocimiento e integración por parte de ese Estado que la insurgencia quería suplantar. No debe olvidarse que, a pesar de las grandes carencias y precariedades que tiene el Estado colombiano en el departamento, sus habitantes han exigido —y logrado— tramitar algunas figuras de reconocimiento étnico, que afirman e incluyen las pautas de apropiación territorial de las comunidades indígenas y negras; las cuales son, en el presente, el andamiaje de la vida organizativa en este departamento. Así, en cierta forma, los consejos comunitarios y los resguardos indígenas deben ser vistos como avances y logros conseguidos de cara al Estado y sin ayuda alguna de la insurgencia. De ahí que el ELN haya tenido muy pocos espacios para incidir e impulsar los procesos organizativos existentes. Además, a diferencia de las FARC, esta insurgencia no dirigió un proceso de colonización de población nativa, que le hubiera dado mayor arraigo dentro de los locales.

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, las posibilidades y los horizontes temporales del ELN parecen ser bastante limitados en el Chocó, pues las demandas de las organizaciones sociales están dirigidas por un llamado a exigir más presencia por parte del Estado. Este asunto

no es trivial, ya que en un futuro cercano el ELN podría ser percibido más como un obstáculo en el proceso de integración, que como un catalizador de la inercia de esta dinámica de integración a la vida política y económica de la Nación, debido a que la confrontación armada y el orden guerrillero retrasa la llegada de la cara amable del Estado a zonas de dominio insurgente (por Estado nos referimos a la prestación de servicios básicos, construcción de infraestructura, planes de desarrollo, etc.).

En cuarto lugar, se puede concluir, con base en los anteriores puntos, que el conflicto armado no es endógeno al Chocó. El relato nacional de la guerra y las escisiones nacionales que generaron la emergencia de las guerrillas, nunca han estado vinculados ni con el proceso de configuración regional ni con los problemas, tensiones y demandas de los habitantes chocoanos. Por tal razón, este ELN tiene una incidencia tangencial en las agendas territoriales, en los procesos organizativos y en las problemáticas y tensiones de los nativos. En efecto, su estrategia de incidencia en estos asuntos evidencia que lo que ha hecho esta guerrilla es meterse por las grietas de los procesos organizativos para incidir en las dinámicas locales. Con esto hacemos referencia a la gestión y tratamiento que ha hecho este grupo con la llegada de gente foránea ("blancos paisas"), el auge de la extracción aurífera con nuevas y modernas técnicas de producción, y con la inserción y configuración de un clúster cocalero en el territorio chocoano.

Por otro lado, el escaso enraizamiento social al que nos referimos explica varios asuntos: uno, que el proceso de expansión reciente del ELN no es tan consistente como se suele señalar, en razón de que esta insurgencia muestra flaquezas en sus dominios territoriales y en sus capacidades militares, a pesar de la supuesta renovación y modernización de su fuerza. Dos, y más importante aún, es el hecho de que esta guerrilla exhibe unas limitadas y escasas posibilidades de instaurar orden en las localidades donde hace presencia (cabría, también, preguntarse si tiene interés en hacerlo dadas las características de los nativos y la propia naturaleza del frente); en particular, en las que son de reciente expansión, luego de la desmovilización de las FARC (2016), debido a que la historia es totalmente opuesta en las zonas de presencia tradicional como el San Juan y el alto Atrato.

Esta imposibilidad explica el carácter autoritario de las normas de convivencia que tratan de instaurar los diversos frentes, compañías y batallones que integran el frente de guerra Occidental Omar Gómez, que, además, muestra una textura militarizada en las relaciones entre armados y civiles. Esta característica es algo que contrasta con otras áreas del país, donde esta guerrilla es reconocida por concertar y acordar las normas con los grupos locales. En cambio, en Chocó este ELN territorial muestra una similitud con el estilo del momento expansivo de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando estas salieron de

su entorno original para proyectarse en regiones donde no tenía bases sociales consistentes y por lo tanto no se había incrustado en los procesos territoriales. De tal forma, ese tipo de FARC, al igual que este ELN, no consultaba las normas ni los ámbitos de regulación, sencilla y llanamente las imponía. Al respecto, puede recordarse lo que hizo la extinta guerrilla en el Pacífico nariñense (Aponte y Benavides, 2016).

Así, con esta imposición autoritaria frente a las normas comunitarias, el ELN, cuando no asume una postura draconiana, busca infiltrar y alterar los procesos organizativos para incidir en variados aspectos de la vida social, económica y política de las comarcas rurales. En cierta manera, esta construcción de poder popular se muestra bastante "distorsionada o desviada", pues la única ventana de oportunidad que tiene el frente Omar Gómez de afectar los procesos territoriales, salvo en sus zonas de presencia tradicional (alto Atrato y en el San Juan), es aprovechar las grietas que muestran los procesos organizativos e incidir en actividades que se realizan fuera de las jurisdicciones de los consejos y resguardos, por ejemplo con la coca, la madera, la explotación aurífera criminal y poco más.

Lo anterior da lugar a que determinadas intuiciones realicen una interpretación propia de la estructura organizacional elena en el Chocó, a saber, que el perfil de este frente tiende sobre todo a monopolizar ciertas economías territoriales. Si bien el ELN tiene incidencia y capacidad de ordenamiento sobre actividades circunscritas (oro, extracción maderera, coca, etc.), con las cuales ha obtenido importantes recursos, su músculo tributario es bastante restringido, sobre todo si se mira comparativamente con otras áreas del país (Arauca o Catatumbo)[1]. No obstante, esto le ha servido para convertirse en un actor importante en las dinámicas armadas del departamento, y también para figurar en el nivel nacional del ELN, posicionándose dentro de la correlación de fuerzas entre los frentes de la organización nacional: ya no se habla de este frente como el más marginal en términos militares, políticos y económicos; sino todo lo contrario, se concibe como un actor importante para negociar y hablar de paz con esta guerrilla.

Para cerrar este capítulo, se hablará de cómo estás lógicas y dinámicas han posicionado al ELN como uno de los principales generadores de las conflictividades sociales existentes en el Chocó, al lado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la fuerza pública. No en vano esta organización tiene una alta incidencia, así como una responsabilidad en el impacto humanitario como consecuencia, en los años recientes, de las disputas territoriales que libra con las AGC, las cuales

1 El carácter exógeno del grupo se corresponde con la economía extractiva impulsada por agentes exógenos, mientras que el músculo tributario del ELN en otras regiones depende de la tributación sobre las economías locales.

afectan de forma importante y contundente a los nativos (masacres, desplazamientos, casos de confinamientos, amenazas, etc.). Tales hechos han sucedido en función de copar los espacios dejados por las FARC y las economías territoriales que regulaban y ordenaban, así como las bases sociales vinculadas a estas actividades económicas.

Las claves del proceso de configuración regional que enmarcan la inserción armada y revolucionaria

Anotaciones básicas sobre la geografía del Chocó

El Chocó está situado en el occidente colombiano, específicamente, en la región de la llanura del Pacífico[2]. Este departamento limita al sur con el Valle del Cauca, al oriente con Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca y hacia el occidente con el océano Pacífico. Además, es el único departamento del país que limita con Panamá y que posee acceso a dos mares (el Caribe y el Pacífico).

Su extensión total es de 46.530 km2 y está constituido por 30 municipios[3], 147 corregimientos y un sinfín de centros poblados y caseríos, en su mayoría habitados por comunidades negras (75,68 % del total de la población) e indígenas (11,9 % del total de la población); los cuales se ubican, en su mayoría, a lo largo de las riberas de los diversos ríos que atraviesan este departamento (IGAC, 2011; Gobernación del Chocó, s. f.). Estas cuencas hidrográficas se desprenden en su mayor parte de la cordillera occidental, la cual separa geográfica y climatológicamente al Chocó del mundo andino.

Respecto a las comunidades indígenas, hay que señalar que existen tres grupos mayoritarios que habitaban las tierras chocoanas: los kuna, los chocó (embera) y los waunana. Los cuna ocupaban la mayoría de la zona del oriente panameño, entre el área del canal y el golfo de Urabá,

---

2 Este departamento hace parte de la llamada región pacífica colombiana, la cual está integrada por territorios comprendidos entre el piedemonte de la rama occidental de la cordillera de los Andes y la costa del océano Pacífico. Es una zona que comprende cerca de 1000.000 km2, cerca del 8 % del territorio nacional. Como conjunto biográfico es un área baja en casi su totalidad de selva húmeda tropical que se extiende del Darién panameño hasta Esmeraldas en Ecuador. Es un ecosistema frágil, con gran biodiversidad. Administrativamente está comprendido por los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, Antioquia y Chocó. Su población se estima en un 90 % de negros, 6 % blancos y mestizos y 4 % indígenas. Los principales centros urbanos son Buenaventura, Tumaco y Quibdó (Rueda, 1993 y Villa, 2001).

3 Acandí, Alto Baudó (Pie de Pepe), Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó (Pizarro), Bojayá (Bellavista), Cantón de San Pablo, El Carmen de Atrato, Cértegui, Condoto, El Carmen del Darién, Istmina, Juradó, Litoral del San Juan, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó (Puerto Meluk), Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Riosucio, Riofrío, Río Quito, San José del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía, Unión Panamericana.

incluyendo la provincia del Darién y la parte extrema del bajo Atrato. Por otra parte, los waunana y los chocó eran los más numerosos y habitaban gran parte de lo que hoy es el departamento, incluido el alto y medio Atrato, al igual que la cuenca del río San Juan (West, 2000).

En términos generales, la economía territorial está poco integrada a la vida nacional y se caracteriza por sus bajos niveles de industrialización. Históricamente, esta se constituyó a partir de dinámicas extractivas, las cuales se han desarrollado desde la época colonial. Al lado de las pequeñas propiedades y los territorios colectivos, donde se practica la agricultura (plátano, maíz, arroz, cacao y coco) y la ganadería en pequeña escala. Debido a la alta pluviosidad de la región —se estima que es una de las áreas con mayores índices de lluvias en el mundo—, también tienen lugar la actividad minera, la explotación forestal y la pesca, las cuales pueden ser catalogadas como las principales fuentes productivas de los lugareños del departamento (Defensoría del Pueblo, 2017a).

La minería se centra principalmente en la extracción de oro, en yacimientos de aluvión (particularmente en el San Juan), al lado de algunas minas de plata y platino (Condoto). La explotación forestal ha sido intensa desde inicios del siglo XX y la extracción de minerales se realiza de forma desmedida y sin política alguna de reforestación (Gobernación del Chocó, s. f.; Defensoría del Pueblo, 2017a). Actualmente esta situación representa una amenaza para los ecosistemas del departamento, ya que se encuentra poco regulada por el Estado y no existe una normatividad clara y efectiva de protección medioambiental.

En parte, esta condición se ha visto perpetuada por dos factores. Uno, el Chocó presenta difíciles condiciones geográficas y climáticas, pues al ser un territorio cubierto de bosques húmedos, con una alta intensidad pluvial, las obras de infraestructura son costosas y demandan importantes esfuerzos en materia de ingeniería. Y, dos, el Estado colombiano en poco o nada se ha preocupado por integrarla, lo que se materializa en una precariedad de la infraestructura vial, la oferta institucional y la prestación de servicios públicos (Gobernación del Chocó, s. f.).

La mejor manera —pero no la única— de llegar y desplazarse al interior al departamento es por vía aérea. Sin embargo, también es posible trasladarse a través de las numerosas cuencas hidrográficas que favorecen la movilidad tanto por vía marítima (sus bahías facilitan la construcción de puertos marítimos) como fluvial. Esta última ha servido a los locales como un importante canal de comunicación desde la parte interior hasta la zona costanera[4]. Al respecto basta recordar la importancia de ríos como

4 El transporte de Juradó, Bahía Solano y Nuquí hacia la ciudad de Quibdó, capital del Chocó, "sólo es posible por vía aérea, mientras que las vías de comunicación entre los municipios

el Atrato, el San Juan, el Baudó, el Truandó, el Pavarandó y otros, los cuales hacen las veces de vías de importante flujo de personas y mercancías[5] (IGAC, 2011); y por los cuales se han desplazado los actores armados en los últimos treinta años: "el Chocó se conecta por vía acuática por 3 ríos principales: Atrato, San Juan y Baudó. Eso guarda correlación porque si miramos geográficamente todo el Chocó, está conectado y eso también nos da indicios de cómo se movieron esos grupos armados" (Cartografía 3).

Estos afluentes con sus innumerables brazos terminan conectando a las diversas subregiones y localidades chocoanas, pues vinculan o atraviesan de forma natural importantes accidentes geográficos como la serranía del Baudó, la cordillera occidental o el alto Puna, etc.; es así como los lugareños y los grupos armados han podido sortear y mitigar las precariedades que hay en materia de infraestructura vial, pues del brazo de un río, que se desprende del afluente principal, "se puede saltar" a otra cuenca u otra localidad en cuestión de horas (Entrevista 1, 2020).

De manera que, viendo la posición geográfica del departamento del Chocó, sus recursos naturales, el difícil acceso que tiene por la precariedad de sus vías, la poca penetración estatal que presenta, etc., hacen de este lugar un espacio idóneo para que contrabandistas, actores armados, narcotraficantes, etc., no solo hayan tomado este espacio del territorio nacional como un lugar de refugio, sino también de operaciones para el desarrollo de actividades semilegales e ilegales (contrabando, narcotráfico, tala indiscriminada de bosques, minería criminal, etc.), con las cuales generan y extraen recursos.

La "clave" chocoana: una integración territorial a través de instituciones extractivas

El proceso de configuración regional del departamento del Chocó es de largo aliento y las estructuras económicas y sociales que ostenta este territorio obedecen a la forma como se configuró, articuló e integró esta área al centro andino (Cali, Popayán y Medellín) y caribe (Cartagena y Panamá) de la nación y a la economía del mundo.

De entrada, es imprescindible señalar que dicho proceso se ha caracterizado por su carácter conflictivo y ha estado signado por una condición de

---

mencionadas son principalmente fluviales y marítimas, lo que aumenta su costo y dificultad para transitar en diferentes horas. Muchos caseríos afrocolombianos y territorios indígenas están ubicados en las playas y las comunidades indígenas dentro de los ríos, lo que genera dificultades para el acceso a la zona y por consiguiente la reducida presencia estatal, esto se expresa en exclusión y pobreza de las comunidades, y desatención en materia de salud y educación" (SAT, Defensoría del Pueblo, Informe de Riesgo 014, 2013).

5 Andágueda, Bebará, Bebaramá, Bojayá, Docampadó, Domingodó, Munguidó, Opogodó, Quito, Salaquí, Sucio y Tanela.

marginalidad y exclusión histórica. Esta particularidad, como indicamos atrás, ha dado pie al desarrollo de actividades semilegales e ilegales, tanto por parte de sus habitantes como de foráneos, que han venido en busca de fortuna. No en vano, desde la colonia hasta el presente dicha condición no ha cambiado por la calidad de las instituciones desarrolladas (extractivas), lo mismo que por unas serias limitaciones del Estado para regular y ordenar a sus habitantes, entre estas, por ejemplo, la resistencia que han adoptado, la dispersión de los asentamientos y las condiciones geográficas y climatológicas (Muriel, 2008; Bonet, 2007; West, 2000).

Lo que se conoce como el actual departamento del Chocó, que, en su momento, durante la colonia hizo parte de la gobernación de Popayán[6], fue un lugar bastante inaccesible y poco articulado a las dinámicas sociales y políticas de ese entonces. El punto de partida del poblamiento actual fueron las labores misioneras y la explotación aurífera, luego del agotamiento de los distritos de Cáceres, Zaragoza, Nechí y Remedios, con mano de obra esclava traída del continente africano en el siglo XVII (West, 2000; Sharp, 1976; Colmenares, 1973, 1979, 1997; Maya, 1998). El recurso a esta fuerza de trabajo se debió a la feroz resistencia que desarrollaron los chocó y los cuna a la empresa conquistadora, pues lograron retrasar la inserción y conquista española del territorio, en específico del Darién durante buena parte del siglo XVI. Por tal motivo, los primeros asentamientos y los intercambios comerciales con la ciudad de Popayán y Cali fueron bastante intermitentes (hasta el siglo XVIII).

La lógica de ocupación de estos años (siglos XVI-XVIII) se basó en la apropiación y explotación de diversos distritos mineros por parte de terratenientes y mineros de Cali y Popayán. Con esto los propietarios, a través de sus capataces, marcaron las pautas de poblamiento según la disponibilidad de minerales tales como el oro y platino en zonas del San Juan y Atrato (Colmenares, 1979; 1997).

Los nuevos asentamientos no se poblaron con nativos sino con personas foráneas. Los recién llegados del continente africano fueron puestos a trabajar en las minas auríferas[7] y "su buen desempeño" hizo que arribara más mano de obra africana. En efecto, esto explica el cambio en la balanza demográfica en la región, sin embargo, fueron las epidemias (viruela, gripe, etc.) las que transformaron de manera más considerable el paisaje demográfico, esto porque terminaron por reducir a la población aborigen a sus mínimas proporciones y obligaron a los sobrevivientes a refugiarse en las zonas más inaccesibles para evitar cualquier contagio y quedar

6 Esto no quiere decir que no existiera una fuerte disputa con Antioquia por el dominio del territorio.

7 La minería se concentra especialmente en la extracción de oro, seguida por la plata y el platino.

sujeto a los tributos de la corona española (West, 2000; Bonet, 2007). De esta manera, para el siglo XVIII, las comunidades negras ya eran el grupo poblacional más numeroso en el Chocó. Según cálculos de William Sharp (1976), ascendieron a 7.088 personas en 1782, representando así dos terceras partes de los habitantes de la región.

Esta recomposición demográfica incidió en dos dimensiones del proceso de configuración regional. En cuanto a la primera, las dinámicas productivas (explotación minera) enmarcaron el desarrollo de un patrón de poblamiento desorganizado, que respondió casi que exclusivamente a la existencia de minerales en la zona (Sharp, 1976); y, con respecto a la segunda, la emergencia de estos asentamientos estuvo, casi siempre, guiada por las directrices de una población blanca, la cual era propietaria de la mano de obra existente y de los yacimientos minerales, mas cuya presencia en el lugar era bastante intermitente (en su mayoría estaban asentados en Buga, Cartago, Cali, Anserma, Popayán y Santa Fe de Bogotá), pues no tomaron la zona como lugar de asentamiento definitivo: llegaron a explotar y no a colonizar (Colmenares,1979, 1997; Bonet y Meisel, 2006).

Esta configuración poblacional responde a las dinámicas productivas de la región, al tipo de asentamiento impulsado por las élites coloniales y al carácter de la relación de estas con el territorio. Lo anterior daría paso a la configuración, durante la colonia española, de unas estructuras económicas distinguidas por su carácter extractivista, que se consolidarían durante el periodo republicano y que se mantienen en la actualidad. En efecto, se configuraron unas relaciones económicas verticales, que impregnaron la estructura social y política del lugar, bajo una condición de marginalización y exclusión de los nativos (Bonet y Meisel, 2006).

Este asunto no es menor, porque fue así como se constituyó y sedimentó, de manera paulatina, la sociedad local, con base en unas estructuras sociales poco dinámicas y frágiles, y con unas instituciones débiles, sin capacidad de respuesta ante los conflictos sociales y políticos que emergían para ese entonces (Sharp, 1976), otro hecho que explica este fenómeno social tiene que ver con que la élite estuvo poco interesada en la construcción del capital social en la región (Bonet y Meisel, 2006), dada su condición de propietarios absentistas.

Con la manumisión (1853) y la disolución de la minería esclavista (siglo XIX), se alteraron las pautas de poblamiento vinculadas al oro, ya que antes de estos años, todas las actividades económicas, sociales y políticas giraban en torno a Nóvita, en el área del río San Juan, y Quibdó, o Citará, en el área del río Atrato (Bonet, 2007), pero estos cambios hicieron que muchas de las familias propietarias blancas abandonaran las minas y se desplazaran a Popayán u otros polos económicos; además, los negros libertos se desperdigaron por todo el departamento en busca de libertad y tierras.

Esto produjo un cambio en los patrones tradicionales de poblamiento, porque los nuevos centros poblados no se desarrollaron en función de la actividad aurífera, sino bajo la lógica de búsqueda de tierras y un espacio para desarrollarse de forma autónoma como comunidad, basado en los usos y costumbres raizales negras. Así, muchos de los nuevos asentamientos ribereños desarrollaron una organización de campesinado libre, autárquico y bastante rural (Villa, 2001), sostenido por una compleja red de parentelas sobre las que se articulan las nociones de territorialidad y que dan fuerza al conjunto social (Whitten, 1992; Friedeman y Whitten, 1974).

Este asunto tuvo lugar, principalmente, con las familias que se desplazaron desde el Alto San Juan hacia el bajo San Juan, al Baudó, a la costa del Pacífico y, sobre todo, a Quibdó y al Medio Atrato (con esto Nóvita perdió su importancia como centro político y económico) (Bonet, 2007; Meza, 2010; Aprile-Gniset, 1993). En la segunda mitad del siglo XIX, esta dinámica de poblamiento se ha profundizado hasta convertirse en la base económica del departamento gracias al auge agromonoexportador, pues muchas de las materias primas requeridas por la economía mundo (caucho, tagua, ipecacuana, etc.) (Leal y Restrepo, 2003; González, 2003) estaban ubicadas en los nuevos espacios de asentamiento.

Para finales del siglo XIX e inicios del XX, esta parte del país exponía una cierta continuidad en términos de ausencia estatal y marginalidad, pero, esta condición cambió un poco con la elevación del territorio del Chocó a intendencia en 1907 y, posteriormente, con el Movimiento de Acción Democrática (MAD), a departamento en 1947. Así, se fue terminando la hegemonía cartagenera y la importante vinculación de este espacio con el Caribe colombiano (Cartagena), porque los intereses del mundo paisa empezaron a ser más prominentes, máxime, con la construcción y apertura de la carretera Quibdó-Medellín (1936), la cual abrió un boquete para una nueva ola colonizadora blanca (Villla, 2001; Bonet, 2007; Aprile-Gniset, 1993).

En efecto, esta mayor integración y las positivas expectativas económicas enmarcan la fundación de la Colonia Humboldt (Juradó) y la colonia agrícola de Bahía Solano, con el arribo de gente del Valle del Cauca, Antioquia y el Viejo Caldas, con el objetivo de desarrollar la economía azucarera (Ingenio Sautatá), minera, maderera, ganadera y turística (Meza; 2010; Tapia, 1999). Y, claro está, para blanquear la raza chocoana (Hermosillo, 1992). Sin embargo, el impulso y la prosperidad fueron bastante pasajeros: los precios de los metales preciosos cayeron en los mercados internacionales, en los años treinta. Por lo tanto, las familias colonizadoras desistieron de su empresa, algo en lo que ayudaron las difíciles condiciones climáticas y unas tierras poco aptas para la agricultura. Y, como corolario, los iniciativas nacionales e internacionales (Compañía Minera Chocó Pacífico S.A),

que buscaron explotar las minas de platino y oro, no dejaron infraestructura instalada y solo engancharon a los locales como mano de obra, por lo cual los métodos y las formas de extracción siguieron siendo bastante artesanales (González, 2003; Bonet, 2007); además, estas dinámicas económicas no permitieron cambiar la relación de subordinación y exclusión en la que estaba este territorio (Villa, 2001). No obstante, permitió, por primera vez en la historia, la emergencia de una élite negra que fue reemplazando de una vez por todas al notablato blanco (Meza, 2010).

Para mediados del siglo XX, el departamento del Chocó era considerado como una de las zonas más marginadas y excluidas del territorio nacional, lo que se expresaba no solo en una ausencia de la batería estatal y los servicios básicos; sino también, en un alto índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), pocas posibilidades de ascenso social por vías legales y, más importante aún, en la emergencia de una serie de procesos organizativos de base que reclamaban un mayor reconocimiento a la cultura, tradiciones e identidad de las comunidades chocoanas. En esto tuvieron un rol previo, nada despreciable, los procesos organizativos de los indígenas con OREWA (Asociación de Cabildos Indígenas Embera Wounann) y la organización campesina de ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato, considerada la primera organización social de base de negritudes), debido a que estas dos experiencias organizativas marcaron un rumbo en la lucha negra e indígena y generaron intercambios de experiencias y aprendizajes con el naciente movimiento cimarrón (Villa, 2001; Pardo, 1997).

De ahí que emergieran, en los años setenta y ochenta, núcleos de negros radicalizados, que, tomando como asiento previo las anteriores experiencias organizativas, empezaron a exigir el reconocimiento de sus tradiciones ancestrales en el territorio, pues el Estado y la sociedad colombiana no solo eran excluyentes racialmente, sino que también invisibilizaban a la población negra y sus tradiciones culturales, lo cual mantenía a este espacio en marginalidad estructural. En esto tuvo mucho que ver la Ley 2 de 1959 (Ley de Zona Reserva Forestal) y las concesiones que hizo el Estado para que empresas internacionales extrajeran madera (Pardo, 2001; Agudelo, 2004). Así, el movimiento cimarrón orientó su trabajo a la defensa y reconocimiento de sus pautas y agendas de apropiación territorial, y a la demanda de servicios públicos y sociales, como lo expuso el paro cívico de 1987 (Pardo, 2001). Como muy bien lo expresa Peter Wade (1996), en estas décadas (1960-1980), las iniciativas organizativas que emergieron se caracterizaron por la reivindicación del lugar y la identidad de las culturas negras, en lo que se puede tipificar como la emergencia de la ideología del cimarronismo.

En las décadas recientes (1980-2020) esta condición de marginalidad y exclusión se ha mitigado un poco, pero esta mayor integración y

articulación del territorio chocoano no se ha dado por canales virtuosos ni armónicos. Lo que ha acontecido desde los años ochenta ha sido un proceso continuo de integración y articulación territorial bastante conflictivo y violento por cuenta de tres elementos:

1. La inserción del narcotráfico le abrió paso a un nuevo mecanismo de ascenso social al margen de los tradicionales canales que ofrecían la minería, el Estado y la extracción maderera (Villa, 2001). De tal forma que la llegada de personas del mundo paisa, al lado de ciertos locales, configuró una nueva ventana de ascenso social, al aprovechar e insertar la economía cocalera para utilizar las facilidades geográficas que otorga el lugar (salida a dos mares, zona de frontera, bosques espesos, etc.) como zona de ruta para la comercialización de drogas y de entrada de armas, al apalancarse en las rutas coloniales de contrabando, ubicadas en la frontera con Panamá y en dirección hacia los dos mares (Laurent, 2008; García, 2013).

2. La inserción tardía de los grupos armados (el Movimiento 19 de Abril – M-19, las FARC-O el ELN, entre otros) también contribuyó a la conflictiva integración del departamento, pues obligó al Estado a hacer presencia en la zona para contrarrestar su accionar. Estos grupos, al igual que los narcos, fueron conscientes de las ventajas estratégicas del área, cuya conexión directa con zonas del mundo andino (Antioquia, Risaralda y su salida al sur occidente vía Valle del Cauca), permite ser utilizada como lugar de refugio y abastecimiento.

Debido a esa situación, antes de los años noventa, el Chocó era uno de los espacios que estaba en el margen de las dinámicas y del relato nacional de la guerra (Echandía, 1998; Cubides, Olaya y Ortiz, 1998; Wouters, 2001). Sin embargo, esta condición ha cambiado en el pasado reciente, pues tanto el conflicto armado como la economía cocalera se han vuelto elementos estructurantes del territorio. En efecto, la verdadera inserción del ELN o las FARC no se puede comprender sin los éxitos parciales que la expansión paramilitar de los años noventa y la Seguridad Democrática, que, al securitizar las zonas más integradas del país, terminó trasladando la guerra a los márgenes de los límites del país (Vázquez, Vargas y Restrepo, 2011).

3. Luego de años de lucha por el reconocimiento y la inclusión en términos culturales, identitarios, sociales, organizativos, etc., las comunidades negras lograron, con el artículo transitorio 55 y la Ley 70 de 1993, la titulación colectiva y cierta integración a la vida nacional y política, pues, si bien esta ley ha tenido serios problemas en su aplicación, propició la apertura de espacios democráticos (representación en el Senado y reconocimiento a las formas organizativas endógenas), dio paso al reconocimiento de los títulos colectivos de las negritudes y reconoció el carácter multiétnico del país, entre otros. Esto les ha dado herramientas a las comunidades negras para cualificar su lucha (Arocha, 2004; Agudelo, 2004;

CNRR, 2010). Actualmente se estima que 3.039.601 hectáreas pertenecen a las comunidades negras, las cuales están organizadas en 58 consejos comunitarios (Defensoría del Pueblo, 2017a).

Lo que exponen estos tres procesos, que se conjugan en las últimas 4 décadas, es que las inserciones de las lógicas del conflicto armado en esta parte del país no tienen relación o vínculo alguno con el proceso de configuración regional. Las proclamas de cambiar la idea del Estado, de transformar la sociedad o de redistribuir la tierra no tienen cabida en los habitantes de esta área, ya que lo que ellos demandan y reclaman, más que combatir al Estado colombiano para implantar un Estado socialista —o lo que sea—, es una mayor integración al Estado realmente existente y, especialmente, el reconocimiento, por parte de él, de sus tradiciones, formas organizativas y apuestas de apropiación territorial (lógica étnica-territorial) (Arocha, 2004; Pardo y Álvarez, 2001; Jaramillo, 2001; Meza, 2010).

Estos elementos explican la poca acogida que han tenido las insurgencias en los procesos étnicos territoriales; además, evidencian que la inserción de las FARC y el ELN, para dar dos ejemplos, estuvo más vinculada a una decisión estratégica de la preservación de sus fuerzas, el uso de una zona estratégica en términos militares y de movilidad y de extracción de recursos, que a un fuerte enraizamiento social sobre una población que se hubiera conectado con sus apuestas revolucionarias. En otras palabras, esta lógica supone la prevalencia de las apuestas de dominio territorial de un agente externo, de corte jacobino, con incidencias sociopolíticas violentas y nocivas para la población, que contribuyen al aprovechamiento de ciertas ventajas territoriales para potenciar apuestas armadas concretas exógenas al territorio y muchas veces vinculadas a economías ilícitas (CNRR, 2010).

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que en algunos lugares estas insurgencias no hayan sido o sean un factor de orden, lo que es indudable, pero sus ofertas bienestaristas de regulación y de gobernanza se encontraron o se encuentran limitadas por los caracteres generales de las poblaciones (caracteres demográficos, su grado de cohesión social, la fortaleza de sus organizaciones comunitarias, la calidad de sus instituciones preexistentes, su grado de articulación a las redes políticas, agravios, etc.) y las actividades económicas que desarrollan (minería, coca, pesca, etc.). En este orden, como veremos a continuación, el proceso de configuración regional no solo constriñe la acción de los actores armados, sino que, además, muestra que su accionar y sus lógicas territoriales han estado encaminadas a responder a los propósitos de su agenda: los intentos de imponer su regulación para tramitar problemas que están por fuera de las jurisdicciones de los procesos étnico territoriales imprime a su accionar unos visos bastante criminalizados, ya que sus medios (dominar un territorio estratégico militar y económicamente) se ven justificados por

el fin político. En ese sentido, en la presente lectura territorial nos toparemos con un ELN que se comporta como un actor exógeno al proceso de configuración regional, con tintes criminales y lógicas comportamentales propias de un ejército de ocupación.

En resumidas cuentas, el Chocó es una zona que podemos catalogar en el presente como un territorio que sintetiza el revés de la Nación colombiana (Serge, 2011): es la periferia de otros polos económicos, donde el Estado no ha podido extender su dominio, bien por imposibilidad o por desinterés político, en consecuencia, se le asocia a una tierra de nadie, remota y salvaje. Además, los modelos de desarrollo impulsados se han caracterizado históricamente por la exclusión de la región, o por su inclusión funcional a los intereses de estos centros (CNRR, 2010).

Lo anterior ha configurado las condiciones idóneas para que el conflicto armado se haya vuelto estructurante del territorio. Por un lado, el Estado no es un referente simbólico de estructuración y regulación social; y, por el otro, la ilegalidad está asociada con la posibilidad de desarrollar actividades que permiten un ascenso social. De tal forma, la marginalidad chocoana ofrece ventajas comparativas que potencian las ventajas competitivas (CNRR, 2010), las cuales son explotadas por los actores armados, quienes gobiernan, ordenan y extraen recursos de las poblaciones que están vinculadas a los circuitos económicos semilegales e ilegales (minería y coca). Esto no solo permite que actores como el ELN se mantengan en pie, sino que también les da poder político y posibilidades de seguir con sus apuestas armadas, porque el Estado solo se manifiesta bajo una sola cara: la militar y represiva.

Una máquina de guerra con visos predatorios: la expresión y variación territorial del frente de guerra Occidental, 1987-2020

Antecedentes y desarrollo del frente de guerra Omar Gómez: un emprendimiento armado multifacético 1987-2009

La inserción del ELN en el Chocó (1987) se dio en el marco de su proceso expansivo y de recomposición nacional, a través de la centralización por cooptación de diversos emprendimientos armados, que se fueron articulando a la organización nacional en los años ochenta (ver capítulo "Descifrando al ELN").

Inicialmente, la presencia e influencia de este grupo armado fue bastante marginal en la vida de los chocoanos, y su accionar estaba más vinculado con las dinámicas y apuestas que tenía la organización nacional, lo mismo que sus estructuras regionales, las cuales pretendían ubicarse en zonas estratégicas del país para la toma del poder. Para esto, la DN o sus

frentes de guerra oriental y del norte buscaron, mediante el envío de comisiones, compuestas por foráneos o nativos de la región, iniciar la implantación y consolidación de un emprendimiento armado.

El anterior punto no es anecdótico, porque explica y encuadra los primeros años de existencia del frente de guerra Occidental y una trayectoria particular en su génesis y configuración: el punto de partida de este emprendimiento armado estuvo más vinculado a una lógica exploratoria y de búsqueda de áreas de refugio y de extracción de recursos, que a una apuesta decidida, centralizada y cohesionada que buscara conectarse e insertarse en las dinámicas territoriales, que les permitiera, a su vez, a través de la muy referenciada apuesta de construcción de poder popular, configurar una importante base social (construcción de poder popular), con el objetivo de convertirse en un actor estructurante del territorio.

Justamente, esta trayectoria, en comparación con otras zonas del país, le imprimió una impronta bastante singular a este frente, ya que además ser una acción o apuesta territorial armada que se integró al ELN nacional, después de lograr y generar ciertos acumulados políticos, sociales y militares; esta experiencia estuvo constituida por la confluencia de las diversas apuestas estratégicas por parte de los distintos frentes de guerra que componían el proyecto nacional (Carlos Alirio Buitrago, Domingo Laín, el frente de guerra Norte).

El resultado de esta iniciativa fue la emergencia de diversas experiencias armadas inconexas, que buscaban realizar la revolución en la periferia del país y que se fueron articulando e integrando, con el paso del tiempo, en lo que hoy en día se conoce como el frente de guerra Occidental, que en el presente, tiene como nota singular una lógica bastante extractiva que le ha permitido adelantar una apuesta de reposicionamiento al interior del ELN nacional, después de ser un actor marginal al interior de esta insurgencia.

Respecto a este último punto, intuimos que su naciente conexión con el frente de guerra Oriental, las experiencias y acumulados de otras estructuras, que han adoptado posiciones beligerantes frente a la DN y el COCE para reposicionarse el interior del ELN nacional, y la mayor capacidad de extraer recursos, tienen papel muy importante a la hora de entender el presente del frente Omar Gómez. Esto es, la configuración de un proyecto territorial distinto, de corte más expansivo y militarista, que está articulando los frentes duros, en contraste a un proyecto más societario del COCE, que buscaría insertarse en movimientos sociales relativamente autónomos para articularlos a su proyecto nacional, siguiendo las ideas del cura Pérez después de Anorí.

Lo planteado hasta ahora en esta lectura territorial, tiene asiento en las ideas consignadas en los planes estratégicos nacionales del ELN relacionadas con ubicarse en zonas de importancia económica y estratégica (ELN, I

Congreso, Asamblea Nacional Camilo Torres, 1986 y II Congreso, Poder Popular y Nuevo Gobierno, 1990). El departamento del Chocó cumplía con las condiciones planteadas en las directrices por dos razones. La primera, es un territorio que ofrece la posibilidad de extraer recursos de sus yacimientos mineros (oro-platino), los cuales podían nutrir las arcas de la organización; y, la segunda, daba la posibilidad de configurar una serie de corredores de movilidad, que les permitía asediar y extraer recursos en áreas de interés económico y político nacional (Antioquia, eje cafetero y el valle del río Cauca) para la toma del poder. En este orden, esta nueva retaguardia se ideó como un espacio para refugiarse, descansar y reabastecerse, y para incursionar en los territorios que consideraban de suma importancia para para su estrategia como organización (Cartografía 1).

Esta "posición privilegiada" del departamento enmarcó, en la década del noventa, así como en el presente, la continua inserción e integración de este territorio al tablero nacional de la guerra; pues, si bien esta área del país podía ser calificada como un remanso de paz, ajena al relato nacional de la guerra, tanto guerrillas como paramilitares y fuerzas del Estado fueron trasladando su accionar a este escenario. Por un lado, las guerrillas buscaban evadir el desgaste militar que planteaba la expansión paramilitar y la Seguridad Democrática; y, por el otro, las fuerzas del Estado y los paramilitares buscaban atacar a las insurgencias en sus retaguardias.

En particular, este proceso se dio en medio de dos coyunturas críticas. Primero, con la expansión nacional paramilitar y la elongación de la interacción armada del Urabá antioqueño (entre las FARC y las AUC) (1996-2001) (Suárez, 2007; García, 2011 y 2014). Y, segundo, con los éxitos parciales de la Seguridad Democrática (2002-2010), la cual marginalizó la presencia territorial de las guerrillas, con su expulsión de áreas de interés económico y político nacional, en localidades de Antioquia, y del valle del río Cauca y de Risaralda (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011; Granada, Restrepo y Vargas, 2009).

Así, paulatinamente, lo que era una zona marginal y poco conflictiva, terminó siendo un área estructurada por las economías ilegales y el conflicto armado, al punto que este cubrió prácticamente todas sus subregiones (Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz, 2003); además, al depender de las coyunturas, en esta parte de la geografía colombiana se dieron interacciones armadas entre guerrillas y paramilitares, entre fuerza pública y guerrillas, entre las mismas guerrillas e incluso entre guerrillas contra grupos sucesores del paramilitarismo (GSP) y fuerza pública, todo por el control de diversas localidades que eran estratégicas en términos de recursos y movilidad.

La confrontación ha estado localizada, como se mostrará a lo largo de la lectura territorial, en zonas del bajo y medio Atrato, medio San Juan, Juradó

y el eje vial Quibdó-Medellín (Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz , 2003), estas zonas tienen o son puntos clave, en términos militares, económicos y estratégicos. No en vano, establecer y controlar ciertas localidades y espacios geográficos (montañas, serranías, cuencas hidrográficas, zonas costeras, etc.), que hacen de bisagra entre el mundo andino y el mar Caribe y el océano Pacífico[8], es del todo central en este territorio, puesto que es evidente, además, que las dinámicas e interacciones armadas están en función de dicha lógica.

En resumidas cuentas, dominar y controlar estos espacios ha significado para los actores armados la posibilidad de expansión hacia otros departamentos, donde pueden regular y extraer recursos de diversas actividades económicas (extracción maderera, minera y de narcotráfico) que le dan rostro y forma a la confrontación armada en el departamento del Chocó (Defensoría del Pueblo, 2017a).

Retomando el hilo de la inserción elena en el departamento del Chocó, puede afirmarse que los primeros años de existencia de las nacientes estructuras armadas se caracterizaron por una posición marginal e irrelevante en términos militares y políticos en el departamento. En lo que atañe a la primera arista, este grupo siempre estuvo agazapado en las partes más inaccesibles del departamento y fue más un espectador, que un actor central de la interacción armada que tuvo lugar en los años noventa entre las FARC y los paramilitares y el Estado colombiano (1996-2005) (figura 1). Esto además explica por qué este frente ha sido, salvo los últimos años, una de las estructuras más débiles en términos militares, económicos (extracción de recursos) y sociales (anclajes territoriales) del ELN nacional, pues a diferencia de otras insurgencias, ha ostentado problemas y limitaciones estructurales en el tipo de orden y la forma de relacionamiento que ha establecido con las masas chocoanas.

Este último factor se explica no solo porque este frente se topó con procesos organizativos previamente configurados, sino también porque las demandas y apuestas de apropiación territorial de esos grupos estaban poco vinculadas a las proclamas revolucionarias elenas. De igual manera, salvo en la regulación de la minería y la extracción maderera, al ELN le ha costado incrustarse en los procesos e instancias organizativas de los chocoanos. Evidencia de lo anterior, y como punto de comparación, es que las extintas FARC se apalancaron en el trabajo político previo del Partido Comunista Colombiano (PCC), con lo cual pudieron intervenir en dimensiones y ámbitos más variados de lo que ha hecho el frente de guerra

8 Un ejemplo son los farallones de Citará y el cerro Caramanta, los cuales a través del cruce de la hoya hidrográfica que da nacimiento a los ríos Atrato, San Juan y Andágueda, permiten llegar en cuestión de horas a Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda (Defensoría del Pueblo, 2017a).

Occidental. No es casualidad, que los farianos ayudaron e impulsaron el trabajo político-organizativo de ciertas poblaciones e incluso dirigieron ciertos procesos de colonización en zonas de Riosucio, Unguía o Acandí (Suárez, 2007; García, 1996; Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz, 2003).

La "temprana inserción" fariana (años setenta), con el arribo de la estructura Alberto Martínez y su desdoblamiento en los frentes V y XVIII, le permitió cubrir importantes zonas de Chocó, Antioquia, Córdoba y Risaralda. Y, con la creación de los frentes LVII y XXXIV no solo se estableció de forma permanente en el departamento, sino que también profundizó su trabajo organizativo, con el cual establecieron ciertos acuerdos con los pobladores de las zonas bajas y altas del Atrato y Baudó en torno a las normas y reglas de convivencia (Cartografía 1).

De forma análoga, el ELN creó sus estructuras, pero a diferencia de las FARC, su inserción se dio desde variadas e inconexas iniciativas. Desde el inicio, este emprendimiento armado tuvo problemas de coordinación con las bases heterogéneas. El primer proyecto se asentó en la parte suroccidental del Chocó y estaba constituido por el plan guerrillero Luís Carlos Cárdenas Arbeláez, adscrito al actual frente de guerra Suroccidental[9]; el segundo, fue *El Turpial*, que estaba vinculado directamente al frente José Antonio Galán, con el objeto de tener presencia en Bajirá, Riosucio y Murindó; y, el tercer proyecto hizo parte de una comisión logística del ELN nacional, la cual se insertó en la parte costanera (Bahía Solano y Juradó) en el marco de una estrategia de logística internacional de la comandancia:

> El ELN hace presencia en el departamento del Chocó, para la década de los ochenta, por la parte suroriental del Chocó, lo que es conocido como el cañón del Garrapata, con el proyecto guerrillero Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, adscrito al actual frente de guerra Suroccidental Carlos Alberto Troche.
>
> Por la parte nororiental del Chocó, lo que es conocido como el Urabá chocoano: Bajirá, Riosucio, Murindó, entre otros; hace presencia a través del proyecto guerrillero El Turpial, comisión del emblemático frente Guerrillero José Antonio Galán, el cual hacía parte al actual frente de guerra Darío Ramírez Castro.
>
> Por la parte centro hacia el Pacífico chocoano, entre los municipios de Bahía Solano y Juradó, hace presencia una comisión de logística nacional del ELN. (Entrevista 2, 2020).

9 El frente Luis Carlos Cárdenas fue fundado en el año 1978 y operó en inmediaciones de los municipios de Tuluá, Bolívar, Primavera, Naranjal y Riofrío (Valle del Cauca) hasta el año 1993, cuando la política de copamiento territorial de la Dirección Nacional le ordenó trasladarse a la cordillera central.

Para mediados de los años noventa, esta estructura profundizó su anatomía organizacional polimorfa e inconexa. Al nordeste del departamento, desde Sucre y Córdoba, se insertó el frente Astolfo González, el cual era una escisión de la Corriente de Renovación Socialista (CRS); además, el frente de guerra Norte creó la compañía Manuel Hernández "el Boche", en su búsqueda de vincular sus acciones en la costa del Caribe con el Chocó: "Por el nordeste, hace presencia el frente Guerrillero Astolfo Gonzáles (este frente se abre [escinde] de la organización conformando la CRS (Corriente de Renovación Socialista), que posteriormente se desmovilizó) y la compañía Manuel Hernández, "el Boche", pertenecientes al frente de guerra Norte [posteriormente al FG noroccidental, actualmente FGOC-OG]" (Entrevista 2, 2020). Finalmente, en el oriente chocoano apareció el Benkos Biohó, el cual se desprendió del Luís Carlos Cárdenas Arbeláez, para hacer presencia en los ríos San Juan y Baudó; situación similar experimentó el "Che" Guevara, del cual emergió el Cacique Calarcá para insertarse en la parte oriental del departamento, en los límites con Risaralda y Caldas:

> […] en los límites de Antioquia y Risaralda hace presencia el frente Guerrillero Ernesto "Che" Guevara, adscrito al actual frente de guerra Occidental.
>
> Para esta década el frente Guerrillero Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, se desdobla en el frente Guerrillero Benkos Biojó, que hizo presencia sobre las cuencas de los ríos San Juan y Baudó. Desdoble similar ocurrió con el frente Guerrillero Ernesto "Che" Guevara, que se desdobla en el frente Guerrillero Cacique Calarcá, haciendo presencia sobre la parte oriental del Chocó, límites con Risaralda y Caldas. De igual forma, aparecen los proyectos de compañía Néstor Tulio Durán y Omar Silgado" (Entrevista 2, 2020).

El proyecto del Benkos Biohó merece especial atención, porque ilustra dos elementos organizacionales de crucial importancia. Primero, el juego tras bambalinas y en paralelo al COCE, que tenían algunos frentes de guerra para extender sus tentáculos a otras latitudes del país. Atrás se expusieron las apuestas del frente de guerra Suroccidental y Norte para insertarse en el Chocó, y, en el caso en cuestión, el del frente de guerra Oriental. Y, segundo, este proceso exhibe las dificultades que tenía no solo el ELN nacional, sino, de igual forma, las de sus estructuras territoriales para controlar y direccionar sus emprendimientos armados en territorios alejados de su radio de acción e influencia. No en vano, "Américo" (un integrante del Domingo Laín) fue enviado por la comandancia de esa estructura, para que emprendiera un proyecto armado, pero al poco tiempo se declaró en disidencia y propuso la creación de una guerrilla netamente negra:

> Por la región del centro oriente del Garrapatas, uno de los mandos fueron los compañeros Alfredo, Elías, Arlington, "Noas", "Américo"; estos dos

> últimos de origen afro. "Américo" fue el primer mando del Benkos Biojó. Este se hizo como guerrillero en el frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Para mediados de la década de los noventa, se declaran como disidencias y se proponen la construcción de una guerrilla netamente afro. En esta misma década "Américo", quien se fue erigiendo como referente de la resistencia armada de los pueblos afros que moran las riberas y afluentes de los ríos San Juan y Baudó. (Entrevista 2, 2020)

Otro entrevistado profundizó en este suceso y expuso lo infructuoso que fueron algunos esfuerzos del ELN nacional, para insertarse en ciertos territorios y para conectarse con las demandas y los procesos organizativos de las poblaciones donde se implantaba. No por nada, el naciente proyecto Benkos Biohó no quedó sino en solo eso, porque terminó siendo absorbido y "neutralizado" por las propias comunidades negras:

> [...] el ELN había enviado a una comisión al Chocó; una comisión integrada por negros, y esos negros que venían de otras estructuras del ELN, conformaron el frente Domingo Biojó. Este frente Domingo Biojó, integrado únicamente por negros, terminó abriéndose del ELN, quedándose con las armas, quedándose con los equipos de radio, quedándose con unos dineros y dijeron: "no, nosotros somos otra cosa. Nosotros no queremos ser ya del ELN, nosotros queremos ser negritudes" y se articularon y se disolvieron en el movimiento social. Allá había un movimiento de negritudes que se llamaba "Las Tigritudes", creo que era, "Tigritudes" se llamaba. En ese movimiento terminaron disolviéndose, este esfuerzo de guerrilla composicionista de negros para el Chocó, que hizo el ELN; incluso, posteriormente hubo una reunión nacional, que hubo en 1991 [...] se terminó, como por dejar así las cosas [...]. (Entrevista 3, 2020)

Era tal la complejidad y los problemas de coordinación de los emprendimientos armados existentes, que de los seis frentes de guerra que había para ese entonces, cuatro tenían injerencia en esta zona del país. Además, la misma dirección nacional (DN) tenía sus propias comisiones para sus apuestas y estrategias con Centroamérica. De ahí que, en un esfuerzo para reorganizar, sincronizar y articular las estructuras armadas existentes la DN realizó un pleno para enderezar el rumbo, y entre varias de las determinaciones adoptadas se retomó el proyecto Cimarrón, el cual recogió los pocos acumulados dejados por "Américo":

> Por cuestiones logísticas, también operaron algunas comisiones articuladas desde la Dirección Nacional. Estas estaban más en torno al enlace con Centroamérica. Desde el frente Guerrillero Carlos Alirio Buitrago, de la entonces existente área Industrial, adscrita al entonces frente de guerra Noroccidental [hoy FGOC-OG], se puso una comisión sobre el Pacífico, municipio de Nuquí; de igual forma, se mantenía la presencia del Boche por la región de Juradó. Un pleno de la DN del ELN, toma la decisión de

> juntar los dos esfuerzos y dan origen al frente Guerrillero Resistencia Cimarrón, sobre la región del Pacífico-Baudó. (Entrevista 2, 2020)

Hacia mediados de la mitad de la década de los noventa, el ELN tenía presencia en un número importante de municipios del departamento: hacia el suroccidente, en el San Juan, en los municipios de San José del Palmar y Nóvita; hacia el Baudó y la costa del Pacífico, se pueden señalar los municipios de Nuquí, Bahía Solano, Alto Baudó, y en el alto y medio Atrato, los municipios de Quibdó, Unión Panamericana, Cantón de San Pablo, Atrato, Lloró, Cértegui, Bagadó, Tadó, Carmen de Atrato y Río Quito (Defensoría del Pueblo, 2017a; SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 015-16). Sin embargo, a diferencia de las FARC, tanto su protagonismo militar como político seguía siendo bastante limitado y muy acorde a los acumulados desarrollados (figura1). Esto explica el hecho de que solo tardíamente el frente Noroccidental logró su incorporación al ELN nacional.

Además, a estas aristas se sumó que el Chocó no era una zona central en los planes estratégicos de la organización a nivel nacional, esto hizo que este frente de guerra siempre anduviera a la sombra de otras estructuras, como una especie de rueda suelta: subsistía en precarias condiciones (recursos, armamento y hombres), pues subsistía de recursos provenientes de otros frentes elenos.

Sobre este último punto, los líderes de este proyecto, cuando no usufructuaron los trabajos previos de otras insurgencias, simplemente se insertaron en las tensiones y dinámicas económicas del oro y la madera. Esos trabajos previos de otros grupos eran el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (*Revista Semana*, 2008; *El Tiempo*, 2008), pero también otros emprendimientos armados endógenos como el FARIP (Fuerza Revolucionaria Indígena del Pacífico)[10].

La particularidad de este asunto fue que esta insurgencia influyó y reguló aspectos tangenciales de los procesos organizativos y de la vida cotidiana de los nativos, pero, salvo en ocasiones puntuales, no fue un agente dinamizador de las demandas de las organizaciones de base. Esto muestra lo marginal que era, en cambio, tuvieron más éxito con los asentamientos e instancias organizativas de los colonos ("blancos") venidos del mundo paisa, los cuales llegaban en busca de fortuna en las minas de oro (Entrevista 3, 2020).

10 En palabras de los comandantes del frente de guerra occidental: "[…] era el símil de la de guerrilla afro, pero versión indígena. Sus máximos jefes fueron Enrique Arce o Borojó y Joaquín, pero además gran parte de la dirigencia de la OREWUA; ya que, era un proyecto legítimo de las comunidades, para la defensa y seguridad de sus territorios. Finalizando la década del noventa, esta fuerza se extingue y se desintegra en sus respectivas comunidades. Con ellos estuvimos excelentes relaciones de solidaridad e intercambio político y logístico" (Entrevista 2, 2020).

Así, en vez de lograr insertarse en las dinámicas territoriales de los chocoanos, el ELN fue más "hábil" en las áreas que constituyen los intersticios donde confluyen el mundo andino y el mundo negro, ya que sus proclamas, arengas y experiencias regulatorias tenían mayor recepción. Estas posibilidades marcan un claro contraste con los anclajes sociales que desarrolló las FARC, pues esta insurgencia sí se incrustó de manera más profunda en los procesos organizativos y de titulación de las comunidades negras, al influir en las pautas y demandas que tenían de apropiación territorial (García, 1996; Suárez, 2007).

Evidencia de lo dicho hasta acá es que esta insurgencia tuvo la habilidad y capacidad de ordenar la extracción aurífera y maderera, nada más; y, como corolario, el resultado de este tipo de inserción fue que los caracteres organizacionales de este frente se fueron moldeando a partir de una economía revolucionaria estrechamente vinculada a la extorsión de enclaves extractivos (posteriormente lo harán, también, con la coca). Adicionalmente, este proceso de consolidación e incrustación en estas dinámicas territoriales tampoco estuvo exento de dificultades, pues las incursiones y operaciones del Ejército terminaban por impactar las llamadas bases sociales elenas, y sus métodos extractivos generaron, desde un inicio, el rechazo de comerciantes, agricultores y pequeños ganaderos. A esto se sumó el hecho de que sus proclamas y discurso político se toparon con la indiferencia de la población nativa (Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz , 2003).

Por eso, el ELN siempre tuvo un rol más que secundario en las disputas armadas de los años noventa: siempre se mantuvo agazapado y replegado a las zonas limítrofes con Antioquia y el eje cafetero (Risaralda), como estrategia para evadir tanto la iniciativa militar del Estado como las interacciones armadas en las que estaban enfrascados los paramilitares y las FARC, en las áreas del bajo y medio Atrato (Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz, 2003; García, 2011, 2014): "Ya ellos, para evitar confrontaciones acá, para hacer algún recorrido tenían que consultarnos a las direcciones de los frentes, no podían llegar hasta esa zona porque podían abrir la confrontación y muertos tanto de los unos como de los otros" (Cartografía 1).

Esta marginalización geográfica y territorial también es confirmada por la comandancia del frente de guerra Occidental, al señalar que para inicios del milenio se apostaron hacia los intersticios entre Chocó y el mundo andino en Antioquia y Risaralda y la parte más apartada del Baudó:

> A principios de la década del 2000 se corrió más hacia la carretera Medellín-Quibdó (en referencia al frente Guerrillero Manuel Hernández, "el Boche") y luego a la Pereira-Quibdó en donde se encontró con el frente Guerrillero Cacique Calarcá y el frente de guerra Ernesto "Che" Guevara.

> Además, a principios del 2000 el frente Guerrillero Resistencia Cimarrón se instaló en la zona del Alto Baudó y el Pacífico colombiano, hasta la desembocadura del Baudó en este océano. (Entrevista 2, 2020)

Estos elementos enmarcan la inserción definitiva del Chocó a la geografía nacional de la guerra, en particular, cuando fuerzas paramilitares se adentraron por el Urabá antioqueño al bajo Atrato (Riosucio) y al Alto San Juan por el Valle del Cauca; y, cuando el Estado desarrolló las emblemáticas operaciones militares de Salaquí y Cacarica (1997). El objeto y la apuesta de estas dos fuerzas era golpear a los frentes XXXIV (con presencia en Murindó, Mutatá, Dabeiba, Urrao y otros en el departamento de Antioquia y en el río Atrato, sobre los municipios en dirección a Vigía del Fuerte y hacia Bahía Solano[11]), el LVII (con radio de acción en el Urabá, el litoral y en la parte alta y media del río Atrato[12]) y la compañía Aurelio Rodríguez (las cual tenía incidencia en los departamentos de Risaralda y Caldas, y actuaba junto con el frente XXXIV en el alto Atrato entre Quibdó, El Carmen, Tadó, Bagadó y Lloró, y sobre la herradura que forma la carretera que desde El Carmen conduce a Quibdó, Istmina, Nóvita y San José del Palmar) (Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz, 2002, 2003; Echandía, 1998; Wouters, 2001).

La apuesta de esta incursión conjunta, premeditada o impremeditada (sobre eso hay un amplio debate), era atacar una zona de retaguardia fariana, luego de la conquista paramilitar del Urabá (Defensoría del Pueblo, 2017a; Suárez, 2007). No obstante, a diferencia de lo que sucedió en Urabá, la guerra en el Chocó no cambió la correlación de fuerzas entre insurgencias y paramilitares (Suárez, 2007; García, 2011), pero sí tuvo un alto impacto en los procesos organizativos preexistentes, pues las interacciones armadas coincidieron con el proceso de fortalecimiento de los procesos de base y el auge de la movilización campesina y étnica, las cuales demandaban el reconocimiento, defensa y autonomía de sus pautas de apropiación territorial, frente a los procesos extractivos y de despojo amparados por las políticas gubernamentales (Defensoría del Pueblo, 2016, 2018) o por intereses privados ligados a la gran propiedad.

---

11 Esto garantiza otro corredor de comunicación entre el interior del país y el mar. En la serranía del Darién, en la frontera con Panamá y parte norte del río Atrato, se estableció un corredor entre Panamá y el llamado paso de Frontino, que le permitía a este frente desplazarse hasta el occidente antioqueño, en especial los municipios de Frontino, Abriaquí, Caicedo y Urrao (Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz, 2002).

12 Con esta cobertura geográfica lograban tener presencia en los municipios de Riosucio, Juradó y Bojayá, además, garantizaban su tránsito por el Atrato y por el corredor entre los municipios de Mutatá y Dabeiba en el departamento de Antioquia y el municipio de Juradó en la costa, a través de los ríos Jiguamiandó y Salaquí, principalmente, para entrar armas y sacar droga (Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz, 2003).

Este "empate mutuamente horroroso" redundó en la inserción definitiva del ELN en el Chocó, pues esta insurgencia fue expulsada, en el avance nacional paramilitar, de las zonas adyacentes al departamento del Chocó. En este orden, las estructuras que estaban apostadas entre los intersticios del mundo andino y pacífico (Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca) fueron desalojadas de una vez por todas de estos espacios, lo que las obligó para sobrevivir y a recluirse definitivamente en el departamento.

Este proceso de marginalización territorial del ELN puede catalogarse como el punto de inicio del actual frente de guerra, ya que fue en los intersticios del mundo andino y chocoano, donde las fuerzas guerrilleras se encontraron, reagruparon y se integraron en la estructura armada que se conoce en el presente:

> A principios del 2000 llega a la zona de la carretera Quibdó-Medellín, la fuerza guerrillera que estaba al norte de departamento, para ese entonces, hacia parte al área estratégica noroccidental, estos junto a los acumulados del área cafetera, donde operaban los frentes guerrilleros Cacique Calarcá y Ernesto "Che" Guevara y el frente Urbano Martha Elena Barón; dando origen más adelante a lo que hoy se conoce como el frente de guerra Occidental Omar Gómez. (Entrevista 2, 2020)

Además, estos elementos también explicarían el carácter exógeno del frente, porque se origina en la búsqueda de refugio después de su forzado repliegue de la zona andina más integrada, en ese sentido sería semejante a la llegada a Tumaco de las FARC. Los campesinos cocaleros, por su parte, fueron desplazados de la zona andina y el piedemonte amazónico (Aponte y Benavides, 2016; Ramírez, 2001).

Este proceso tuvo como resultado la configuración de unos dominios territoriales, más o menos claros y estables, que incidió más tarde, de manera particular, en las posibilidades y la trayectoria que tomó el frente de guerra Occidental. En el bajo Atrato, las FARC quedaron dominando el costado izquierdo del río hasta la frontera con Panamá, y los paramilitares en el costado derecho, incluido el casco urbano de Riosucio. En las partes medias y altas de esta misma subregión quedaron las FARC y el ELN, con un claro predominio de la primera insurgencia sobre la otra (Cartografía 1). No en vano, el ELN estaba casi reducido a las partes altas del Atrato: Carmen de Atrato, Quibdó, Istmina, Bagadó, Lloró, El Carmen y Tadó (Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz, 2003).

En el Baudó, las AUC quedaron al mando de las zonas medias (Pie de Pepé, bocas de Pepé, Puerto Meluk, etc.) y bajas (Pizarro, por ejemplo), y las FARC y el ELN quedaron recluidos en las partes altas (Alto Baudó) (Castro, 2004); con mayor precisión en la serranía de Baudó.

El frente Manuel Hernández, "el Boche" y la Resistencia Cimarrón se dedicaron a controlar la movilización de los locales hacia las partes bajas

y cabeceras (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 037-06); y, de vez en cuando hacían una que otra incursión en la parte costanera, como cuando se produjo un secuestro masivo que tuvo lugar en 2002, en la ensenada de Utría, entre Bahía Solano y Nuquí (*Caracol Radio*, 2002). Y, finalmente, en el San Juan, el ELN quedó compartiendo espacio con las FARC, en particular en las partes altas y medias.

La situación descrita permaneció más o menos estable hasta la desmovilización de las AUC, en 2006, debido a que la intensidad de la confrontación armada se atenuó en el departamento durante estos años[13] (figura 1). Este proceso fue aprovechado por las guerrillas (ELN y FARC) para recuperar espacios estratégicos de los que habían sido expulsados por los paramilitares y el Estado (2006-20011). Si bien, hicieron presencia esporádica en el territorio las Águilas Negras, los Rastrojos, la Oficina de Envigado y las AGC, esta última fue quien predominó en el departamento, ya que aniquiló —y en otros casos absorbió— a las otras estructuras de los GSP, en particular, a los Rastrojos, que fueron avanzando desde el Valle del Cauca hasta el Baudó (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 08-14). Así, este hecho marcó el punto final de los acuerdos que tenía el ELN (particularmente el frente Resistencia Cimarrón) con los Rastrojos, en función de los diversos circuitos de narcotráfico en el alto, medio y algunos territorios de la zona del bajo Baudó; esto daría inicio a una nueva confrontación armada entre esta insurgencia y las AGC en las partes bajas del Baudó[14] (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 08-14).

De esta forma, las FARC, el ELN y las AGC quedaron con unos dominios ciertamente concretos, pero inestables, en función a la economía de la coca (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-13). De acuerdo con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, este suceso les representó un gana-gana tanto a las FARC como al ELN: a la vez que ensancharon sus dominios territoriales, tomaron control de ciertos corredores de movilidad, esto les permitió el tráfico de insumos, procesamiento y comercio de coca, realizar secuestros, prácticas extorsivas y regular la explotación maderera y minera (Defensoría del Pueblo, 2017a, 2018; SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 05-11; 2011).

Para conseguir sus objetivos, las dos insurgencias establecieron pactos de repartición territorial, realizaron operaciones armadas conjuntas (*El País*, 2005) y empezaron a acordar la división del trabajo en torno a los eslabones de la coca y los negocios a los que esta da lugar (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 014-13). No obstante, al poco tiempo hubo tensiones

13 Las acciones bélicas de las que eran responsables grupos como las FARC, La fuerza pública y el ELN disminuyeron en más de la mitad.

14 Concretamente en la cuenca del río Dubasa y los corregimientos costeros de Virudó, Abaquía, Pavasa, Cuevita, Terrón, Cantil, Purricha y Pilizá en el norte del municipio de Pizarro.

por los incumplimientos elenos en torno a lo pactado, esto debido en gran parte a las dificultades generadas por el comportamiento de esta insurgencia con las masas (Cartografía 1), y, más importante aún, por los acuerdos paralelos que entabló con las nacientes expresiones rearmadas sucesoras del paramilitarismo, como fueron Los Rastrojos (Defensoría del Pueblo, 2017a; Escobedo y Guío, 2015).

Es importante destacar que, al poco tiempo de la desmovilización paramilitar (2006-2007), se constató un proceso de rearme en las AUC, lo que daría pie para pensar que se trató en realidad de una desmovilización incompleta. Sin embargo, ahora las estructuras emergentes se mostraban mucho más narcotizadas y no tan vinculadas a la lógica contrainsurgente tradicional del paramilitarismo de la década del noventa (CNMH, 2017a):

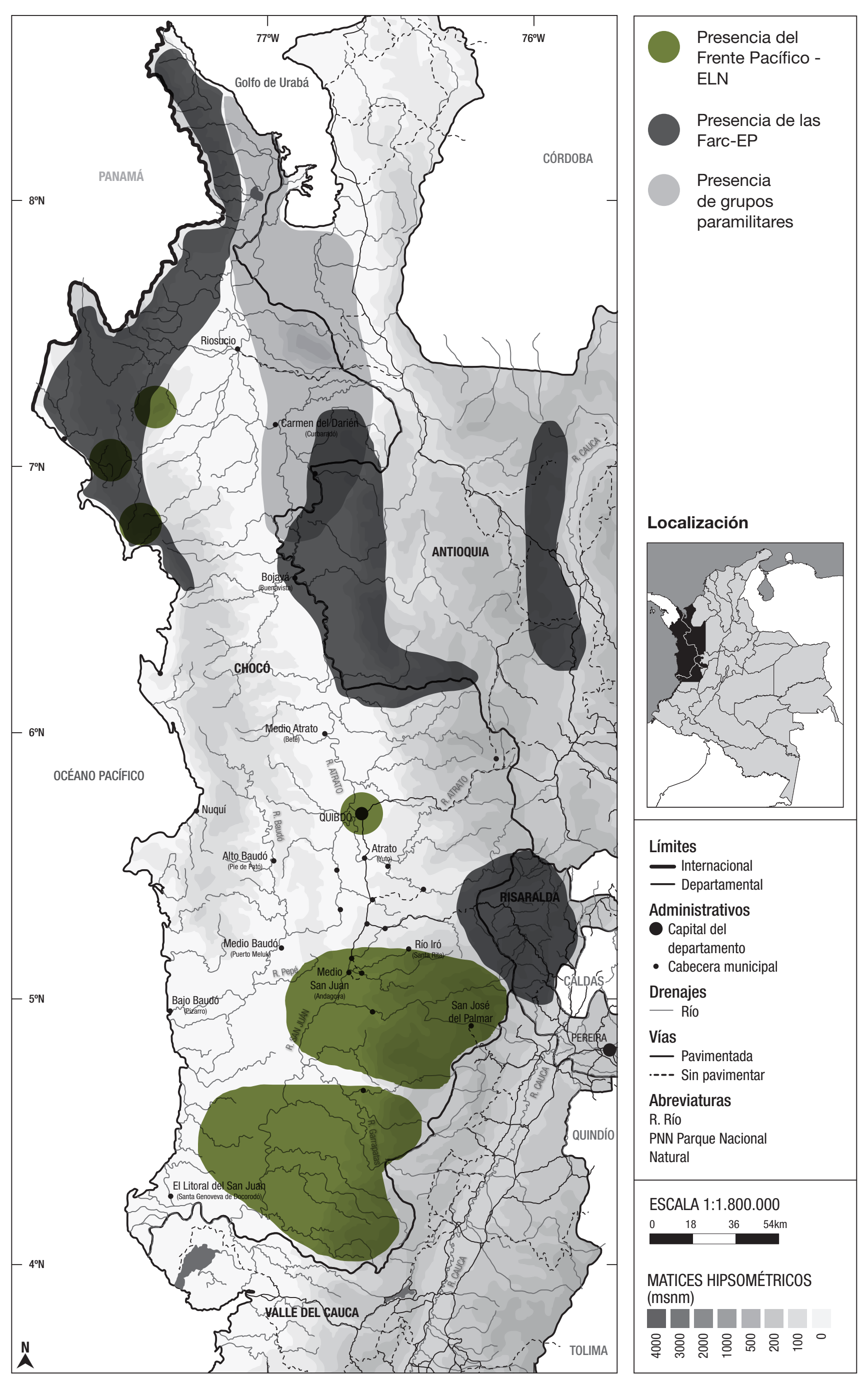
> Te digo la verdad, que yo esa desmovilización (paramilitar) yo no la he sentido mucho porque ellos hicieron un pare en el campo, en la zona rural, pero acá uno sigue viendo lo mismo con las mismas. Sí […] entran, salen, entran, salen, pero aquí siguen masacrando jóvenes, matando el uno al otro; es decir yo no he visto pues el cambio muy notorio, la cosa ha seguido igual […] andan en el campo, andan aquí, andan en todas partes, no con el nombre de las AUC sino con otros nombres, pero siguen siendo lo mismo. Llegan aquí con un nombre y después llegaba el jefe con otro nombre. […] Unos se llamaban Clan del Golfo, otros las Águilas Negras y otros Los Urabeños. (Entrevista 4, 2019)

Por otro lado, la aparición de grupos como los *Rastrojos*, *Renacer* y las Águilas Negras y las AGC-*Urabeños* muestra que el conflicto armado llegó para quedarse e incrustarse en el Chocó. Las nuevas dinámicas armadas evidenciaron que los intereses económicos como la minería, la explotación maderera, los cultivos de uso ilícito, los laboratorios y las rutas de movilidad y tráfico de drogas y armas estaban en el centro de las apuestas del control armado de la parte media de la cuenca del Atrato[15], de las zonas medias y bajas del Baudó, y de la parte costanera (Defensoría del Pueblo, 2017a), esto debido a que todas estas áreas permiten una fácil y ágil movilidad hacia ambos mares.

---

15 Según la Defensoría del Pueblo, el medio Atrato constituye una zona estratégica en tanto ofrece: "ventajas estratégicas, al proyectarse a corto plazo la explotación de recursos naturales asociados al cerro Careperro (proyecto Mandé Norte); la articulación vial en la que el río Atrato se presenta como el eje principal que facilita el flujo de mercancías (proyecto Arquímedes); el dominio de los corredores naturales de movilidad y vías de acceso que facilitan la comunicación entre el sur de Antioquia, el Chocó y el océano Pacífico (salida al mar) a través las cuencas de los ríos Murrí, Arquía, Napipí, Bojayá y Opogadó y con la capital de Quibdó, ingresando por los ríos Bebará, Bebarama, Neguá, para la movilización de insumos químicos, droga y armas (SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 015-10 A.I, p. 10).

Mapa 1. Chocó. Actores armados 2010-2016



Fuente: Elaboración propia.

En este contexto de auge de expresiones sucesoras del paramilitarismo y de ciertas escaramuzas armadas del ELN con las FARC, esta insurgencia se refugió en el sur del departamento, quedando este espacio como su único bastión en el Chocó para los años 2007 a 2009:

> Llegó un momento donde, claramente, se lograron poner de acuerdo en su presencia en cada una de las regiones. Las FARC logró imponerse en el Medio Atrato, básicamente, desde Munguidó hasta Riosucio y ahí se dieron algunas confrontaciones, incluso, que hicieron salir al ELN en ese momento, de esos territorios. Y luego el ELN empieza a hacer un poquito de presencia en algunas partes del San Juan y, sobre todo, esta parte del municipio de Lloró. (Entrevista 5, 2019)

Acorde a la dinámica nacional de cese de toda hostilidad entre estas dos insurgencias (ver capítulo "Descifrando al ELN"), tanto el ELN como las FARC aprovecharon estos pactos de paz locales para conectar sus zonas de dominio con los corredores de movilidad, que fueron consolidando desde el Eje Cafetero y Valle del Cauca (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 011-09). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, uno de estos corredores comenzaba en la parte media del río San Juan, en la zona rural de los municipios de Istmina, Medio San Juan y Sipí y surcaba la cordillera Occidental, a través de los afluentes hídricos de los ríos Garrapatas, Sipí, Fujiadó, Cucurrupí y Tamaná (SAT, Defensoría de Pueblo AT n°. 019-10 A.I). Al norte sucedió algo parecido, debido a que las dos insurgencias comunicaron al Baudó y el Medio Atrato con zonas del sureste del departamento de Antioquia (SAT, Defensoría AT n°. 012-09).

Esta serie de movimientos y reacomodos territoriales, que fueron pactados y consensuados, constituyen los escenarios de la paz caliente en el Chocó, ya que, con la salida de las FARC y la pérdida de vigencia en los acuerdos en torno a la repartición territorial, tanto el ELN como las AGC pretenden monopolizar esas áreas en función de sus intereses militares y económicos (2016-2020).

La militarización y ¿degradación? del "poder popular" eleno, 2010-2020

Si bien desde 2010 el frente de guerra Occidental empezó a exhibir un renovado accionar e ímpetu militar, solo fue hasta la segunda mitad de la década (2015), cuando esta estructura se tornó en un actor del todo relevante y decisivo no solo en el Chocó, sino también en el nivel nacional, por el tipo y los niveles de violencia que empezó a desplegar (figura 1).

Esta mayor figuración militar, que devela unas apuestas y unos objetivos territoriales, no puede entenderse sin tener en el horizonte, por una parte, el proceso de diálogos que emprendió el Estado colombiano con las FARC, en La Habana (Cuba), y la posterior desmovilización de esta guerrilla; y,

por la otra, la mesa de diálogos que entabló el ELN con el gobierno de Juan Manuel Santos (2016-2018). Estos dos procesos hizo posible que tanto la organización nacional como esta estructura regional se toparan con una ventana de oportunidad para expandirse territorialmente mediante el copamiento de los espacios de la extinta guerrilla. De igual modo, para ordenar ciertas bases sociales vinculadas a algunas economías territoriales, las cuales son susceptibles de regulación por su carácter ilegal o semiilegal.

Desde el año 2016, esta guerrilla ha establecido tres rutas de avanzada, las cuales muestran los ejes de la disputa armada con las AGC. La primera es por el norte del departamento, desde Bojayá hasta Riosucio. La segunda es por el sur del departamento, a través del río San Juan hasta llegar a las partes más bajas de esta subregión, buscando comunicación con el Valle del Cauca (Buenaventura y norte del Valle); y, una última, por la región del Baudó, para alcanzar, por el costado occidental de la Serranía, la zona del litoral (Bahía Solano) (Revista semana, 2020a). Respecto a este último lugar, cabe acotar que sus esfuerzos han sido infructuosos porque no han podido descender (Entrevista 23, 2020).

La desmovilización de las FARC en el Chocó introdujo una serie de nuevas y complejas dinámicas a la confrontación armada en este departamento, debido a que actualmente se presentan constantes y reiteradas interacciones entre las AGC, el ELN y la fuerza pública, cuyo propósito es controlar los espacios dejados por la extinta guerrilla (figura 1). Por ejemplo, el ELN y las AGC llevan más de cinco años disputándose ciertas zonas de antiguo dominio fariano, como el bajo Atrato y Darién. El resultado de estas disputas territoriales han sido unos profundos impactos humanitarios sobre las poblaciones, ya que los dominios territoriales no se han definido del todo; algo que contrasta con las FARC, pues esta insurgencia dominó la zona por más de una década:

> En la preparación de las FARC para la dejación de armas, llegan los elenos y penetran en el río Truandó y desde esa fecha hasta hoy están en esa cuenca en la parte alta. Y seguidamente entran las AGC y se empiezan a darse combate entre ellos, a minar por parte del ELN el territorio a orillas de las comunidades y empieza un confinamiento en muchas comunidades, especialmente en las comunidades indígenas en el Truandó. (Entrevista 14, 2019)

La llegada del ELN a estas áreas, de las cuales se había ausentado por más de una década, se enmarca en la dinámica nacional de pactos de no agresión y acciones colaborativas entre esta insurgencia y las extintas FARC (ver capítulo "Descifrando al ELN"). Cabe señalar, que esta experiencia concreta fue inaugurada con la paz araucana y, debido a su éxito, fue replicada en todos los territorios donde coincidían las dos guerrillas. Así, en la medida en que las FARC se fueron agrupando en los puntos de concentración, los frentes del ELN se fueron insertando en las antiguas zonas de dominio fariano. Esta situación, sin embargo, dio lugar a problemas

relacionados con las poblaciones y sus procesos organizativos, debido a unas diferencias bastante marcadas a propósito de las maneras de instaurar orden y gobernanza por parte de los elenos (*El Tiempo*, 2017b).

La inserción elena no solo tenía como fin proteger y acordonar a los farianos luego de su concentración, también iban detrás de las bases sociales y las economías territoriales que regulaba la extinta guerrilla (*El Espectador*, 2010), esto debido a que los comandantes territoriales sabían de los buenos dividendos que dejaban la tala maderera, ciertas rutas de drogas y las minas de oro. Por esta razón, las estructuras existentes del frente Omar Gómez descendieron del alto Atrato a las partes medias y bajas de la misma subregión (Riosucio, Juradó, Vigía del Fuerte, etc.); lo mismo sucedió en el Baudó, debido a que buscaron adentrarse en las partes medias (Pie y Boca de Pepé, Puerto Meluk, etc.) e incluso en la parte costanera (Bahía Solano y Nuquí, para dar dos ejemplos); y en las partes bajas del San Juan (Litoral del Bajo San Juan[16]):

> Los que estaban acá (ELN) en Juradó se fueron corriendo, se fueron corriendo, aparecieron en los lados del Carmen del Darién, las primeras tropas, otros en Jurindó, se fueron metiendo a la zona, Urrao donde no estaban, aquí en Mandé, La Blanquita, hasta copar con grupos muy pequeños las áreas donde nosotros teníamos influencia. No llegaron con tropas suficientes, sino que comandos, de a seis, de a nueve integrantes, se fueron haciendo en la zona, yéndose a las zonas, hablando con la gente. (Cartografía 1).

Este reacomodo e inercia expansiva es confirmada por una alerta de la Defensoría del Pueblo en el medio San Juan, donde advierte que el frente Ernesto "Che" Guevara del ELN estaba buscando, para el año de 2015, hegemonizarse en la zonas rurales de los municipios de Istmina, Medio San Juan y Sipí; concretamente en las áreas donde predominan los cultivos de uso ilícito, la minería informal y en las zonas que tenían corredores naturales entre el San Juan y la cuenca del Baudó (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 027-15).

En este orden, el frente Benkos Biohó o Resistencia Cimarrón, hizo nuevamente presencia en Nuquí, Bahía Solano y, desde 2015, en Juradó. El frente Manuel Hernández, "el Boche", se apostó en zonas del Urabá antioqueño y chocoano, y el frente Ernesto "Ché" Guevara descendió al medio y

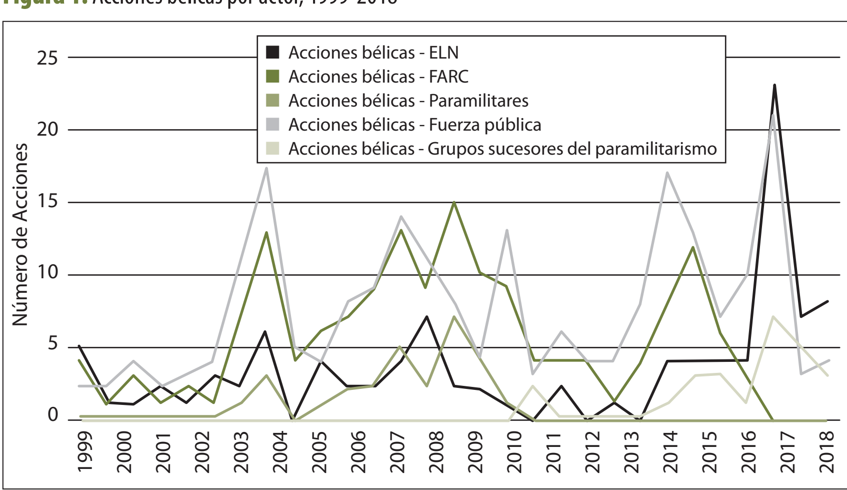
16 De acuerdo al sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, todo este litoral es bastante estratégico porque su posición geográfica, su geomorfología marina y fluvial asociada al océano Pacífico y al río San Juan, ofrece ventajas estratégicas por la salida al mar y las posibilidades de comunicación con el distrito de Buenaventura (Valle del Cauca); los cuales están comunicados por los afluentes hídricos del río San Juan y su extenso delta conformado por siete bocanas conectadas a partir de una compleja red de esteros que permiten una ágil y rápida movilidad para los grupos armados, el tráfico de armas, el establecimiento de rutas comercialización de la pasta de coca, clorhidrato de cocaína y marihuana por los mercados centroamericanos de Panamá, Honduras, Guatemala, México (Defensoría del Pueblo, 2017a; SAT, Defensoría del Pueblo IR n°. 1 001-13).

bajo San Juan. Ahora bien, en el San Juan, el control de San José del Palmar es vital, ya que este municipio sería el eje articulador entre el mundo andino y chocoano, debido a que su posición geográfica permite la conectividad entre las diferentes sublocalidades del San Juan chocoano y el mundo andino. En la primera arista, por vía fluvial, se empalma con el medio San Juan chocoano; en la segunda, hacia el sur, se conecta con la serranía de la cordillera occidental que llega al cañón de las Garrapatas; y de allí, hacia al pacífico vallecaucano; por el norte, comunica con el centro del país por el departamento de Risaralda (Santuario y Pueblo Rico), hacia Caldas y Antioquia (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 066-18). Por último, utilizaron el Baudó, por la parte alta de los ríos Napipí y Opogadó, para llegar a zonas de Beté y al municipio de Bojayá, así como a la parte alta del río Truandó en Riosucio (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 015 -16).

Las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó serían la bisagra entre zonas del mundo paisa (bajo Cauca y el noroccidente antioqueño) y Caribe (sur de Córdoba), con las zonas costeras del Golfo de Urabá y el mar pacífico, ya que conecta los municipios de Mutatá, Dabeiba, Murindó (Antioquia), Belén de Bajirá y Bojayá, (Chocó) y se extiende por el occidente hasta del municipio de Tierralta (Córdoba) en inmediaciones del Parque Natural de Paramillo (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 040-04).

Ahora bien, este despliegue de fuerzas y la apuesta expansiva que lo enmarcó, demandó a esta estructura un despliegue de violencia como nunca antes lo había hecho; al punto que se convirtió en el actor militar más activo, superando con creces sus picos históricos, si se mira de forma retrospectiva con décadas pasadas (figura 1).

Figura 1. Acciones bélicas por actor, 1999-2018



Fuente: SIG-Cinep/PPP. Elaboración propia

De acuerdo con fuentes en terreno, el cambio es tan abrupto, que las estructuras del frente Occidental pasaron de estar mal vestidas, con un armamento viejo y pocas personas en armas, a exhibir un pelotón de guerra bastante amplio, más que bien armado, con indumentaria nueva, moderna, (Entrevista 5, 2019) y con una tropa engrosada con jóvenes combatientes. Esto explica la iniciativa expansiva y bélica que ha ostentado desde hace 8 años (*DW Español*, 2019; *El Tiempo*, 2018a). No en vano, esta es una de las zonas del país que registra mayores tasas de reclutamiento por parte de los actores armados, cuyo principal protagonista es el ELN (*El Colombiano*, 2013a; *El Mundo*, 2014; también se pueden ver los diferentes informes del Acuerdo Humanitario ¡Ya! en Chocó, 2019a, 2019b, 2019c y 2020).

El tema del reclutamiento no es asunto menor, ya que parece ser que este nuevo ELN recompuso sus fuerzas y pie militar con jóvenes chocoanos (indígenas y negros), los cuales han ingresado a las filas a través de falsas promesas o por el prestigio que significa, en algunos escenarios, portar un arma. De acuerdo con el relato de las personas de la región, la adhesión de jóvenes a la guerrilla es "voluntaria", y obedece a que la guerrilla los persuade de enlistarse ofreciéndoles comida y dinero; los adoctrinan y les imponen tareas de inteligencia. Otra modalidad mencionada es el enamoramiento de civiles y guerrilleros: "Cargan billete para convencer a los niños, uno los ve uniformados de negro, con fusil, en grupos de 20 personas. Van por ahí, enamoran a las muchachas y se las llevan" (Entrevista 18, 2019).

La anterior entrevista daría pistas de algo novedoso y que rompe con la forma tradicional de reclutamiento del ELN, a saber, que este frente estaría ofreciendo remuneraciones a los nuevos reclutas. Este asunto es algo inédito en la historia insurgente (CNMH, 2017b) y podría dar visos de los nuevos filtros de reclutamiento de este frente: la adscripción ideológica no sería ya un factor importante, sino la destreza para matar y desplegar violencia. Todo indica que la principal población afectada es la indígena, ya que además de tener un excelente conocimiento del terreno, posee buenas destrezas guerreras (la mayoría se inicia como mensajeros o campaneros y luego pasan a ser milicianos) (*El Tiempo*, 2017c). Y, si bien las comunidades aborígenes han buscado pactar con la insurgencia el cese este fenómeno, se han presentado incumplimientos por parte de las estructuras elenas, ya que han seguido con el reclutamiento de miembros de la comunidad:

> Ellos han venido reclutando algunos jóvenes, sobre todo en las comunidades indígenas y en la comunidad de Pogue han reclutado como a seis jóvenes también. Estos jóvenes pues se los han llevado ofreciéndoles, diciéndoles que les van a pagar de a cinco millones de pesos, en algunos casos eran jóvenes que estaban en la escuela [...] están utilizando, más bien, la modalidad de involucrar a la misma población para que les compre las

> cosas que ellos necesitan y les pagan a muy buen precio" (Entrevista 6, 2020; al respecto, la entrevista 13 también toca este punto).

Además, el ingreso de estos nuevos reclutas no solo tiene componentes estratégicos y militares, también son de utilidad en términos políticos y regulatorios, porque pueden servir de intérpretes frente a las comunidades indígenas y tienen la posibilidad de acceder a información completa y de primera mano sobre lo que sucede en las localidades[17] (Entrevista 13, 2019). Así, no es extraño toparse con noticias sobre reclutamiento de menores por parte de la guerrilla (*El Colombiano*, 2013a), o con videos donde se aprecia claramente la existencia de menores de edad en las filas elenas (*El Colombiano*, 2013a); (*El País*, 2019a).

Ahora bien, que el ELN haya engrosado su tropa, tenga mejor armamento y gente más uniformada, no implica que esta guerrilla haya perdido su tradición de camuflarse entre los civiles, ya que suelen estar vestidos como cualquier campesino de las zonas rurales para pasar desapercibidos:

> Entrevistador: ¿Y el tema de los uniformes, ahorita todos los grupos que hay ahorita como el ELN y el resto de grupos que surgieron de la desmovilización de los paramilitares andan uniformados, brazalete y eso?
>
> Entrevistado: Mira, hay una cosa que es muy clara, tu por ejemplo distinguías a una persona del ELN porque muy poco utilizaban uniforme completo, el grupo que más uniforme completo utilizaba era las FARC; el ELN utilizan sudadera gris, verde y un suéter y las botas y un arma; los grupos de Autodefensas eran mucho más militar, las FARC de repente mezclaba con un uniforme de policía. Los de la Autodefensas eran prendas 100 % militares y el ELN siempre era mucho más boticas, sudadera, y tu conseguías uno que otro con camuflado.
>
> Entrevistador: ¿Y eso ha cambiado?
>
> Entrevistado: Ahorita tú los consigues mucho más uniformados, pero vuelvo y te digo el fuerte de ellos no es tener mucha gente, a ellos no les conviene dentro de una lógica andar uniformados, porque tú con una sudadera y unas botas, ¿tú te quitas el arma y qué eres?
>
> Entrevistador: Un campesino.
>
> Entrevistado: Ya, tú con un camuflado tienes que empezar a dejar ropa regada, pero tu acá coges el arma la tiras, sí. Si llevas un suéter verde te lo quitas y es mucho más fácil disimular eso. (Entrevista 16, 2019)

La calidad de este tipo de combatientes le acarrea problemas a los pobladores donde el ELN opera, porque el Estado colombiano tiende integrar

17 Las comunidades están siendo obligadas a ser informantes, violando así sus derechos fundamentales. Una de las denuncias que hicieron tres obispos desde la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá en 2018 lo confirma y asegura que esta violación de derechos afecta sobre todo a los jóvenes.

en una sola matriz al combatiente eleno con el habitante del común; sobre todo, cuando los integrantes de una determinada estructura dejan sus armas entre la espesura del monte, luego de una operación militar:

> Entrevistador: ¿y ellos se intentan siempre camuflar entre el civil?
> Entrevistado: Sí. Cuando, por ejemplo, hay bombardeo o enfrentamiento, siempre llegan a las comunidades. Y ahí es donde tenemos la discusión siempre.
> Entrevistador: O sea, cualquier operación, cualquier bombardeo, cualquier cosa te dejan los fusiles y…
> Entrevistado: Y salen a las comunidades. Entonces esos son temas que nos han puesto en riesgo, pero también influyen porque la fuerza pública nos ve, como que nosotros somos los que protegemos a ellos, pero la realidad no es esa.
> Entrevistador: ¿Cuando ustedes le plantean eso?, ¿qué les dicen?
> Entrevistado: ¿La guerrilla?
> Entrevistador: Sí, ¿no les han dicho: mira hombre?
> Entrevistado: No. La guerrilla lo que siempre ha planteado es que tenemos que ser parte de la guerra, porque ellos, bueno como siempre con sus mentiras, que ellos son el ejército del pueblo y que son los que defienden los derechos y defienden el territorio de las comunidades. Nosotros siempre hemos dicho: "nosotros respetamos esa forma de ser". Es más, últimamente se ha dicho: "¡No! Es que ustedes ya no están ahí por ideología, ustedes están es por intereses económicos", entonces ahí es donde se ponen bravísimos con nosotros". (Entrevista 21, 2019)

Para hacer más complejo este asunto, el fortalecimiento eleno en el Chocó, por ejemplo en zonas del bajo y medio Atrato, no solo responde a la facilidad que tuvo para ingresar a los territorios con poca presencia estatal[18]; sino que, también, esta posibilidad ha estado vinculada a la oportunidad que tuvo esta guerrilla para recoger militantes y estructuras farianas que no se acogieron al acuerdo entre las FARC y el Gobierno nacional. Se señala que, en diversas localidades, los pobladores han reconocido a quienes portan brazaletes del ELN como antiguos integrantes de las FARC; de hecho, en algunas zonas, antiguos mandos farianos han logrado escalar de forma rápida dentro de la estructura; es decir, se han convertido en mandos militares, debido a su conocimiento del terreno y las dinámicas territoriales, etc.; cualidades de las que carecen, comparativamente, los mandos recién llegados del ELN.

En otras palabras, y realizando una analogía con el proceso de rearme de las desmovilizadas estructuras paramilitares (2006-2010) (CNMH,

18 Los pobladores presumen que las FARC invitaron al ELN a que se quedara en el territorio. Pues la presencia de la fuerza pública e instituciones estatales es mínima para "avanzar" en esta región.

2017a), en el Chocó se puede estar dando un reciclaje y usufructo de ciertas destrezas guerreras y regulatorias de antiguos militantes farianos —que son personas que saben gobernar y ordenar a la población—, que ahora se ponen al servicio del mercado criminal o de otras insurgencias, frente a la amenaza que representa el avance de las AGC, pero motivadas también por los incumplimientos o retrasos del Estado en materia de implementación de los acuerdos de La Habana:

> También tenemos que reconocer que las FARC sí dejó personas que, históricamente eran reconocidos, y dijeron esas personas "no vamos a meternos a ese proceso", y como no se acogieron al proceso con las FARC, en ese momento, se pasaron al ELN desde antes de la negociación, tenemos varios casos así en esa línea. (Entrevista 6, 2020)

Pero, no solo ha sido hacia el ELN que se ha dado el reciclaje de los excombatientes, también las AGC han usufructuado el contingente de guerreros disponibles, con lo cual han emprendido el proceso de expansión territorial aludido. La importancia de este proceso es que la incertidumbre en las localidades ha crecido, pues las proliferaciones de nuevas estructuras han cambiado las reglas de juego para los pobladores, como ha sucedido en las localidades del Baudó:

> "[…] lo que sí hemos notado es que después de la firma del acuerdo estos grupos se han fortalecido, tanto los grupos paramilitares como el ELN. Fue justo ahí cuando cogieron más fuerza en el territorio, porque anteriormente sí había presencia, pero de una forma más oculta o más moderada, es decir, había más poquitos. Cuando se firma el acuerdo, muchos de los que estaban en las FARC que no quieren estar en la vida pública se anexaron a estos grupos donde ahora están fortaleciendo a uno o a otro en forma de alianza, y siempre se han bajado más al territorio y es ahí donde uno es el afectado, porque ahora con ese grupo de los Gaitanistas, que antes no existía, ya no sabemos si es la misma estructura que le cambian de razón social y el nombre, pero el hecho es que hay nuevos grupos ahora. (Cartografía 3)

Otra arista, que ayuda a entender este proceso de cambio de brazaletes, el cual es mucho más complejo de lo que se cree, es tener presente que las identidades y adscripciones generadas durante la guerra, aunque pueden ser un mecanismo protector cuando un grupo armado tiene el control del área, también pueden convertirse en un lastre o una especie de letra escarlata cuando el grupo se desmoviliza, ya que sus miembros pueden ser declarados como objetivo militar por los pobladores y/o los miembros de otros grupos, para saldar cuentas del pasado relacionadas con las maneras como se impartió justicia o tramitó un problema en un determinado momento. Estos hechos podrían ayudar a develar otra de las razones para que los excombatientes y ciertos no combatientes sigan atendiendo los llamados a rearmarse o para ingresar a las filas rojo y negro:

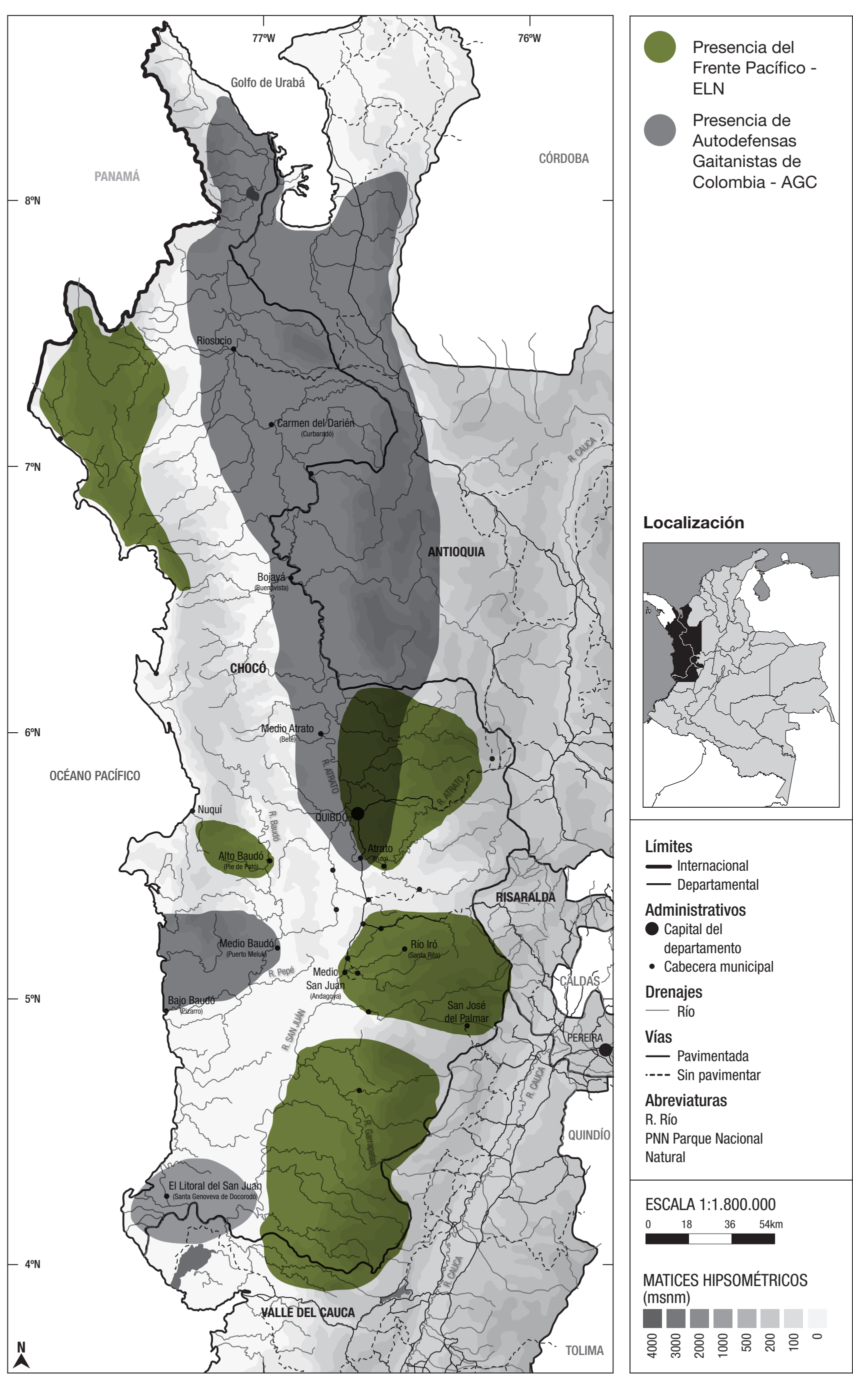
> También porque han empezado pugnas entre estos miembros que están ahora con los paramilitares y están queriendo pasar cuentas a miembros de la misma FARC y también a miembros de las mismas comunidades que saben que por alguna u otra razón, cuando ellos estaban allá, les hicieron algún favor. Entonces también conocen los caminos, las trochas, digamos que este es un ingrediente que también se suma. (entrevista 6, 2020)

El crecimiento cualitativo y cuantitativo del frente de guerra Occidental no se explica por un mayor arraigo social y territorial de esta organización, aunque este es un componente importante. Lo que observamos es que esta estructura ha mostrado una mayor capacidad militar gracias a sus mayores y mejores capacidades de extraer recursos de las economías territoriales del departamento. Su portafolio revolucionario no solo se ha diversificado, bajo la misma lógica de otros frentes de guerra, como se señala en el capítulo uno, sino que, además, se ha ampliado, ya que esta estructura ha pasado de la tributación sobre la extracción maderera y algunas rutas y laboratorios y del oro, a tener sus propios laboratorios y rutas y a exigir tributación sobre actividades comerciales como el transporte terrestre y fluvial, el comercio local, el pequeño campesinado, etc. (Entrevista 13, 2019; *El País*, 2012; Crisis Group, 2017).

En efecto, este proceso explica en parte su renovada capacidad militar, el escalamiento de las interacciones armadas en el Chocó y el importante impacto humanitario que generan las disputas por el control de las economías territoriales (*El Colombiano*, 2017a). Desde el año 2015 este ELN exhibe una capacidad bélica inédita (figura 1) que, como hemos señalado, no se explica sin la ausencia de las FARC, porque, en primer lugar, los pactos de repartición territorial entre los actores armados dejaron de tener validez y desestabilizaron los dominios que ostentaban quienes restaron en armas (*El Colombiano*, 2014; *El Heraldo*, 2014). En segundo lugar, esta pérdida de la vigencia de los acuerdos o vencimiento de los mismos facilitó que tanto el ELN como las AGC midieran fuerzas y esfuerzos buscando controlar los espacios "vacíos"; y, en tercer lugar, en estos planes tuvo mucho que ver las percepciones en los balances de poder, las apuestas locales y regionales de cada grupo, e, incluso, la relación que cada grupo sostenía con organización nacional a la que pertenece (Aponte y Alba, 2020).

Ahora bien, la particularidad de la imbricación y conjunción de estos factores es haber desarrollado una disputa estratégica por el territorio y sus pobladores, en donde los métodos y las formas implementados son bastante brutales y letales, pues los objetivos son, en primer lugar, ganar las adhesiones y el apoyo de las masas a través de un ejercicio y despliegue puro y duro de violencia (*El Nuevo Siglo*, 2017b), En segundo lugar, monopolizar y extraer recursos de las actividades económicas, que tienen

Mapa 2. Chocó. Actores armados 2017-2019



Fuente: Elaboración propia.

lugar en ciertas subregiones y, en tercer lugar, regular y controlar a las poblaciones vinculadas a estas actividades para hacerse al poder político.

En efecto, es muy diciente que los mismos dirigentes del frente de guerra Occidental destaquen la riqueza y la posición estratégica que tiene el departamento como un botín de guerra (es una buena despensa de recursos):

> […] sabemos de la importancia geoestratégica (es el único departamento de Colombia con dos océanos), riquezas en materias primas, biodiversidad, minerales […] y, obvio, estas abundantes materias primas lo caracterizan al Chocó como un importante botín económico. Por tal razón, es mirado con la codicia de las multinacionales y algunos sectores de la narcoburguesía y oligarquía colombiana, se amangualan para desarrollar proyectos de infraestructura, de monocultivos, agroindustria, que desplazan y empobrecen más a los y las habitantes de los territorios. El ELN ha sido, y pretendemos seguir siendo, una piedra en el zapato que torpedee los planes que hace el capital internacional; sea para impedirlos, ralentizarlos y, por lo menos, buscar mejores condiciones para las comunidades y que les cumplan lo que acuerden. (Entrevista 2, 2020)

La comandancia de esta estructura brinda mayores luces sobre la importancia de este territorio en términos logísticos y militares: "Si bien el Chocó adolece abandono, falta de infraestructura; en cuanto a nuestra estructura guerrillera, no podemos negar que es una retaguardia geográfica, sus selvas, paramos, esteros, ciénagas, nos permiten realizar las actividades revolucionarias, sobre todo de conducción estratégica" (Entrevista 2, 2020).

Mas lo que no dice esta versión, y como hemos venido destacando, es que las interacciones armadas con las AGC y el Estado colombiano están vinculadas a la consolidación de un corredor de movilidad nacional y regional del ELN, pues se presume que uno de los principales objetivos de la estrategia expansiva del frente de guerra Occidental es avanzar en la habilitación de un corredor de movilidad nacional e interregional. En el primero, se busca establecer una conexión y corredor de movilidad que vaya desde la costa del Pacífico chocoano hasta el territorio venezolano, el cual atravesaría al departamento de Antioquia (por el noroccidente, bajo Cauca y nordeste antioqueño), para llegar al sur de Bolívar y dirigirse a Norte de Santander (Catatumbo) y de ahí poder bajar hasta Arauca; esto es denominado como "La ruta bolivariana". Y en el segundo, el control de zonas aledañas y de la carretera Quibdó-Medellín y la subregión del medio Atrato, hacia los municipios de Urrao, Frontino, Dabeiba y Ramita sería el corredor subnacional (*El Colombiano*, 2019b).

En la consolidación de estos dos corredores tendría mucho que ver la creciente comunicación del Omar Gómez con el frente de guerra Oriental, como se señaló en la parte primera; esto muestra, a su vez, que

sus apuestas armadas están trascendiendo el ámbito departamental, en función de sus pretensiones de monopolizar el clúster cocalero que inicia en noroccidente hasta terminar en las costas del Chocó.

Por otro lado, la conexión "natural" del Chocó con áreas cocaleras de departamentos vecinos, el *boom* de la extracción aurífera criminal y el uso de las rutas coloniales de contrabando para el tráfico de drogas, la llamada trata de blancas y la entrada de armas explican dos cosas: la inédita figuración de este frente, tanto al interior como el exterior del ELN; y, las dinámicas y lógicas violentas recientes de esta estructura armada, la cual se asemeja más a un ejército de ocupación con visos criminales y predatorios, pues su forma de actuar y el tipo de violencia que ejerce exhiben tanto problemas como un desinterés explícito para conectarse con las poblaciones chocoanas.

Respecto al primer punto, en el siguiente acápite explicaremos —como se apreció en la figura 1—, por qué este grupo es un actor central a nivel departamental a propósito de la lucha a muerte que libra con las AGC por los territorios de ciertas subregiones del Chocó, las cuales son cruciales para tener el control y monopolio de los laboratorios y las rutas de drogas[19]. Pero esto no es todo, además, se hará énfasis en cómo este frente ha utilizado la nueva ola de recursos a disposición, para reposicionarse al interior del ELN nacional, al erigirse como el principal saboteador de los más recientes diálogos que entabló esta guerrilla con el gobierno de Juan Manuel Santos (*Caracol Radio*, 2017).

Con relación a este último punto, una persona entrevistada señaló la importancia que han tenido ciertas economías territoriales en el reposicionamiento del Omar Gómez tanto al interior de la organización nacional como en el plano regional, generando profundos impactos sobre las poblaciones que intentan regular y ordenar:

> Entrevistador: Nosotros interpretábamos mucho la cuestión del secuestro de "Uriel" y toda esta gente era una estrategia de reposicionamiento de ese frente al interior de la estructura armada por su condición de marginalidad histórica.
>
> Entrevistado: En parte eso, en parte porque están en una dinámica de crecimiento significativo y querían mostrar en el país también de su nueva significación, también de cara a poner reglas en la región y a "aconductar" a comunidades. Los indígenas y comunidades negras han estado muy incómodos con su presencia porque ellos no regulan la explotación minera, no de cara a los dueños del territorio ni de cara a la biodiversidad, sino de

19 Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia comenzaron a llegar a las zonas de la costa del Pacífico chocoano (*Verdad Abierta*, 2018) y, al parecer, el copamiento de espacios por parte del ELN puede deberse a acuerdos alcanzados con las FARC para no dejar los territorios a la merced de las Autodefensas Gaitanistas.

> cara a quien más le genere beneficios, incluso si es a costa de las comunidades. Entonces hay comunidades que hoy han precarizado su vida por la dinámica de la explotación maderera y minera, al punto en que ellos continuaban a orillas de los ríos; bueno, con la explotación minera ya no hay orillas a los lados de esos ríos cultivables y con la sacada masiva de madera los bosques con los que construían sus casas están destruidos, eso al ELN no le importa. (Entrevista 7, 2019)

Ahora bien, el proceso descrito ha puesto de relieve los variados problemas y limitaciones que tiene para conectarse con las demandas de los locales, prueba de ellos son los asesinatos de líderes locales y gobernadores indígenas que se han dado (*El País*, 2017b). A esto se añade su carácter impositivo y fiscalizador de la vida política local y el tipo de normas que establece para regular la vida de los locales (*El Tiempo*, 2015). Esto explica que, si bien el ELN se ha tornado en un actor central de las dinámicas armadas, su proceso expansivo no es tan consistente como se cree (Entrevista 6, 2020; *Revista Semana*, 2020b; SAT, Defensoría del Pueblo AT N°. 030-20), esto debido a que adolece de una consistente base social sobre la cual apalanque su orden armado y el proceso expansivo reciente. Por ejemplo, ha ido perdiendo la guerra en el Medio Atrato y, en consecuencia, ha tenido que retroceder por el río Bojayá hacia el Alto Baudó:

> Entrevistador: Una pregunta, ¿el ELN hacia qué parte está replegándose? ¿Qué subregión o qué zona?
>
> Entrevistado: Bojayá, por acá arriba, hace conexión con el Baudó, el Alto Baudó. El ELN este territorio lo conoce muy bien, de hecho, ellos después de la firma del acuerdo de paz, el ELN no hacía presencia en estos territorios, todos estos territorios eran controlados por las FARC. El ELN después de la firma del acuerdo y la salida de las FARC, el ELN lo que hizo fue entrar, precisamente, por esa ruta por la parte alta del río Bojayá y por esa misma se han venido replegando. (Entrevista 6, 2020)

Igual situación se ha registrado en Riosucio y Carmen del Darién, donde las AGC se han posicionado como actor hegemónico en las localidades, al lograr expulsar a las estructuras elenas que se han expandido en años recientes (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 009-20); también podemos señalar las zonas del litoral, como Juradó y Bahía Solano, donde esta insurgencia ha incursionado desde del río Salaquí–Riosucio Chocó, arrebatándole terreno al ELN. Esta zona es una importante ruta de salida de drogas y entrada de armas por su cercanía a Panamá y por su condición de zona costera (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 012-20, AT n°. 016-20). Incluso, para mostrar las magnitudes del alcance de las AGC sobre las zonas de influencia elena, se han registrado, en el último tiempo, acciones armadas en zonas que han sido de tradicional presencia y donde se pensaría que es más fuerte esta insurgencia, como algunas localidades del alto y medio San Juan

(Cértegui, El Cantón de San Pablo y Río Quito) (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 21-20). Y, como corolario, se ha advertido de la incursión de las disidencias de las FARC (exintegrantes del frente XXX) por el municipio del litoral de San Juan (bajo San Juan), lo que evidenciaría que el ELN puede estar enfrentando dos enemigos a la vez y desde dos posiciones diferentes, esto lo único que lograría sería arrinconarlo en su bastión tradicional y exacerbar los posibles efectos humanitarios que tengan las confrontaciones armadas (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 025-19, AT n°. 301-19).

Los locales resienten, sobre todo los de las partes de reciente expansión, que la presencia del ELN los deja expuestos cuando llega un actor armado que busca disputar sus dominios, pues contrario a defender las zonas bajo su influencia, cuando se inserta la organización enemiga, lo único que hacen estas estructuras es retirarse. Por eso, este tipo de actuar afecta las relaciones que teje el grupo con los pobladores, debido a que crea incertidumbre, mientras que el ELN lo único que hace es minar el territorio para supuestamente defenderlo:

> Las FARC nunca dejó subir a las autodefensas a los territorios donde estaban las comunidades. Pero los elenos sí, porque que a lo que ellos se daban de cuenta que los que acá iban, ellos se corrían más arriba. Hubo un momento en que se empoderaron los paramilitares en las comunidades. ¿Qué hicieron los elenos? Se quitaron. […] Se quitan los paramilitares y volvieron los elenos. ¿Qué hicieron los elenos? Minaron todos los territorios, las comunidades de por ahí todas las minaron. […] las comunidades […] ya no pueden trabajar como antes hacían allá, ¿por qué? Porque está minado. Hubo personas que han muerto trabajando en su parcela, hay otros que les han partido la pierna, que un brazo. […] Entonces por eso yo diría de que no hubo una calma. Sino que se formó más conflicto. (Entrevista 9, 2019)

La anterior idea remarca que los actores armados no son extraterrestres o llegan en paracaídas a los territorios; o, en otras palabras, no llegan a espacios vacíos donde actúan a su libre albedrío. En efecto, lo que muestra la estrategia elena de copar los territorios dejados por las extintas FARC y la disputa que ha mantenido con las AGC, desde 2016, son unas evidentes e importantes dificultades militares y organizacionales para hacerle frente a este embate violento.

Eso quiere decir que el Acuerdo de paz para el Chocó no significó un descenso en los niveles de violencia ni el fin de las interacciones armadas; en efecto, fue todo lo contrario, la salida de las FARC del tablero de la guerra lo único que dejó fue incertidumbre y una ausencia de orden que los actores que persisten en armas buscan suplantar frente a la evidente incapacidad estatal:

> La situación de seguridad está muy jodida para nosotros. Las amenazas cada día son más fuertes y a la tercera, la bala no avisa. La Unidad de

> Protección nos dio un celular, que en el mejor de los casos toca hacer rezar para que sirva de protección, porque en la mayoría de comunidades no hay señal. Desde que las FARC salieron de nuestro territorio no hemos tenido un día de paz. Tenemos miedo y llevamos desplazados desde el 27 de marzo. (Líder afro del Medio Atrato, citado en *El Espectador*, 2018a)

Según algunos habitantes del departamento, existe una connivencia entre la fuerza pública y las AGC, pues este grupo ha incursionado, en los últimos años, en zonas donde no solo no tenía presencia, sino que además son de áreas en las que es necesario atravesar diversos puestos de control —antiguos y recientes—, que tiene la fuerza pública sobre ríos, pueblos y carreteras[20]. Aun así, se señala que su presencia es demasiado intermitente, lo que ha facilitado el desplazamiento y la expansión de los grupos armados, de ahí que algunos habitantes del Medio Atrato los responsabilicen de cualquier tragedia que llegare a ocurrir:

> El Ejército se comprometió a mantener tropas en la desembocadura del río Domingodó, donde se están dando duro los paras y el ELN, pero al poco tiempo las quitó. Quiero dejar constancia de que, si alguna tragedia ocurre, como lo que sucedió en Bojayá, será responsabilidad del Ejército (Entrevista a líder afro, citado en *El Espectador*, 2018a).

Se comenta que en el río Arquía los pobladores responsabilizan a la fuerza pública y las decisiones del Estado por la presencia de las AGC, pues tras la salida de las FARC, el Estado se retiró de estas áreas dejando el territorio a merced de quien llegara o facilitaron la entrada al hacerse los de la vista gorda a su paso:

> Es como cuando uno abandona la casa, cualquier extraño se puede meter. La presencia del Estado en estas zonas estuvo pactada en la negociación con las FARC y no se cumplió; además, que hay graves señalamientos de que la fuerza pública actúa de la mano de los AGC. Eso todo el mundo lo sabe por acá, porque cómo se explica que se transporten y avancen tan rápido, por río o tierra, como lo hemos visto en estos años. A las zonas que llegan, la gente del lugar siempre comenta que para llegar a sus lugares de residencia siempre hay que pasar por los retenes que tiene la fuerza pública, porque ellos están en los puntos estratégicos de ríos y carreteras (Cartografía 2).

Ahora bien, a pesar de los problemas señalados y la pérdida de terreno militar del ELN a costa de las AGC, en la actualidad (año 2020), la distribución territorial del frente de guerra Occidental no es nada despreciable y se puede señalar, sin pudor alguno, que este es el momento de mayor

---

20 En los últimos años el Estado colombiano ha tratado de fortalecer la presencia militar con las tropas de la Brigada de Infantería de Marina n°. 2, Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, la 7ª división del Ejército. Además, la Fuerza Naval del Pacífico también adelanta desde entonces operaciones conjuntas con la Policía Nacional.

presencia en toda su historia en el departamento, ya que ocupa importantes espacios en áreas del San Juan, el alto, medio y bajo Atrato, en el Baudó, en la zona costanera e incluso en partes del suroeste y occidente de Antioquia y al norte del Valle del Cauca:

> El frente de guerra Occidental Omar Gómez cuenta, a este momento con: el frente Guerrillero Manuel Hernández "el Boche", que tiene como zona de operación el medio y bajo Atrato en su margen oriental, hasta La Llorona y algunos municipios del suroeste y occidente antioqueño; el frente Guerrillero Resistencia Cimarrón que hace presencia en el Baudó, la costa del Pacífico centro y norte, y en Quibdó y sus alrededores al margen occidental del río Atrato; el frente Guerrillero Cacique Calarcá que opera en la zona entre las carreteras Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira; el frente Guerrillero Ernesto "Che" Guevara que tiene como zona de influencia la subregión del río San Juan, la costa del Pacífico y el norte del Valle del Cauca. También se cuenta con un batallón, que está conformado por compañías que son unidades militares sin limitaciones de jurisdicción territorial; destacan la compañía Néstor Tulio Durán, actualmente en el norte del Chocó en medio de la confrontación más álgida y la compañía Omar Silgado que opera en el sur, en conjunto con el frente de guerra Suroccidental. (Entrevista 2, 2020)

Tabla 1. Estructuras del frente de guerra Occidental Omar Gómez, 2010-2019

Departamento	Frentes	Batallón	Compañías
Chocó y Valle del Cauca	Ernesto "Che" Guevara. Manuel Hernández "el Boche". Cacique Calarcá. Resistencia Cimarrón.	Carlos William Rentería.	Compañía Néstor Tulio Durán. Compañía Omar Silgado.

Fuente: Entrevista 2, 2020. Elaboración propia.

Estas distintas unidades han exhibido, en el tiempo reciente (2015-2020), que sus diversas acciones y desplazamientos territoriales están enfocados en posicionarse y hegemonizarse en diversas localidades chocoanas. De tal forma que las interacciones armadas que tienen lugar en un rincón del departamento, por ejemplo el Alto San Juan, pueden estar vinculadas con otras movidas estratégicas que acontecen en la parte costanera o del bajo Atrato; en particular, en la intensa y degradada confrontación que tiene con las AGC por amplios espacios del Chocó:

> Las unidades militares han estado itinerantes por el territorio. Haciendo apertura del norte del Valle y empalme con el suroccidente, apoyo en la confrontación, expulsión de paramilitares de la región del San Juan-hacia

> el Pacífico, apoyo al Cimarrón, retoma del norte del Chocó y expansión del FGOC-OG hacia el sur y empalme con suroccidente. (Entrevista 2, 2020)

Las lógicas territoriales bajo las que se mueve el ELN y las AGC, enmarcan el carácter impositivo de estas insurgencias en su trato con las masas: no consensúan ni acuerdan las reglas de convivencia con las comunidades, sino que las imponen; y, como corolario, su lógica violenta tiene un importante impacto humanitario, que le da visos de un ejército de ocupación con una lógica bastante predatoria (*El Espectador*, 2015). En efecto, cada subregión del departamento permite posibilidades de extracción de recursos y muestra lo importante que son en términos estratégicos y militares:

> Estas organizaciones armadas han buscado el dominio de sectores que representan amplias ventajas económicas, a saber, las cuencas de San Juan y Atrato por la explotación aurífera, de platino y maderas; la cuenca del Baudó en términos de producción de estupefacientes. Además, dichas cuencas son importantes en tanto les permiten movilidad hacia ambos océanos, con la posibilidad de intercambio y transporte intercontinental de mercancías. Este panorama se ha traducido para la población civil en vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que profundizan las brechas de desprotección y miseria y agravan sus condiciones de vulnerabilidad. (Defensoría del Pueblo, 2016, pp. 25-26).

De esta manera, como veremos en un apartado más adelante, esta guerrilla descendió y empezó a operar, consciente de las bondades geográficas del lugar, en las riberas de los ríos y las zonas rurales, que se conectan a través de los diversos brazos de las distintas cuencas hidrográficas que tiene el Chocó. Además, en los cascos urbanos empezaron a intervenir en la vida cotidiana de las cabeceras municipales por medio de milicias que implementan prácticas autoritarias de control social y mantienen una red de informantes y de apoyo logístico para la construcción de poder popular y la fiscalización de la vida política y económica de las áreas donde tiene presencia (*El Tiempo*, 2015).

¿La vía militar "compensa" lo que no se puede por la vía política-organizativa? Repertorios y lógicas violentas

Como hemos venido señalando, las apuestas expansivas del frente de guerra Occidental evidencian su protagonismo militar durante la última década. No obstante, el despliegue de violencia que ha implicado este proceso no ha sido del todo proyectado con precisión; todo lo contrario, este se ha caracterizado por su carácter indiscriminado o por estar dirigido hacia la población civil. Esto ha generado un importante impacto humanitario (confinamientos, desplazamientos, asesinatos en personas

protegidas, casos de violencia sexual, amenazas, instalación de minas antipersonales, etc.) en el departamento del Chocó.

En su discurso, la dirigencia del Omar Gómez argumenta que este tipo de acciones están legitimadas y justificadas por su lucha contra el Estado y su macabra alianza con los paramilitares (es decir, con las AGC), esta manera de proceder, sin embargo, polariza a las comunidades:

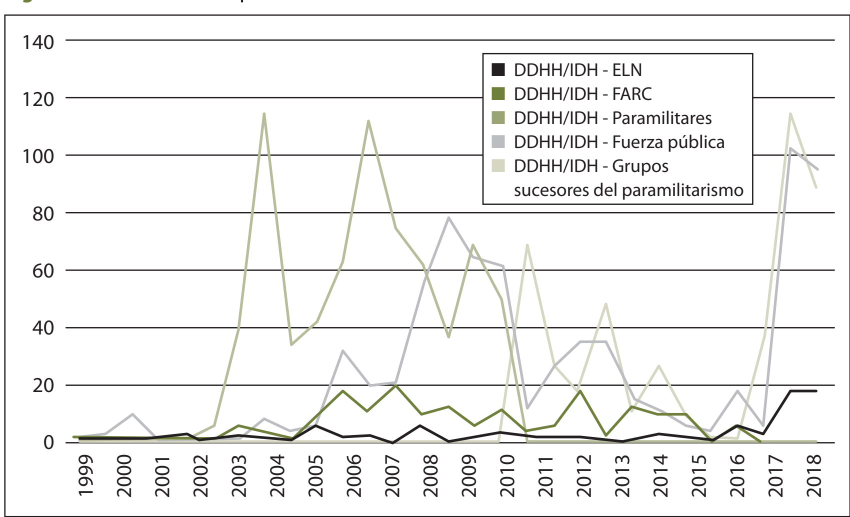
> Chocó es uno de los departamentos de Colombia más olvidados y ninguneados por el Estado. Su forma más común y casi única de hacer presencia en las comunidades de estos territorios es a través de las fuerzas militares y paramilitares, generando la represión y empobrecimiento, lo que polariza a las comunidades. (Entrevista 2, 2020)

Esta afirmación tiene cierta veracidad, pero no es justificatoria, ya que si se revisan las tendencias históricas y se examina el comportamiento violento de los GSP en las zonas donde tienen presencia, es perceptible que esta agrupación tiene unos legados y un *know how* en la forma de ejercer violencia; las AGC son el actor armado, al lado del Estado colombiano, que mayores afectaciones e impactos humanitarios generan en el departamento del Chocó, y muestra cierta tendencia y continuidad con el tipo de acciones que ejercieron los paramilitares.

Las violaciones al DIH y los DD. HH. que generan estos actores armados en los últimos años muestran las mismas tendencias y patrones que expuso tanto el paramilitarismo como la fuerza pública en los años noventa. Sin embargo, la alianza, real o supuesta, del Ejército con las autodefensas, no podría justificar acciones indiscriminadas contra la población civil como asevera el ELN.

Respecto al primer actor, podemos señalar las torturas, amenazas, asesinatos en persona protegida, desplazamientos colectivos, etc., y, en cuanto a la fuerza pública, el uso de la población civil como escudo, amenazas a colectivos, ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, confinamiento, etc. (figura 2). Al respecto cabe recordar la denuncia de ciertas comunidades indígenas por la muerte o la afectación de ciertos miembros de su comunidad en acciones o planes contrainsurgentes (*El Tiempo*, 2018f; *El Espectador*, 2019c); o, el irrespeto de miembros de la fuerza pública hacia su autonomía y espacios ancestrales (Entrevista 13, 2019).

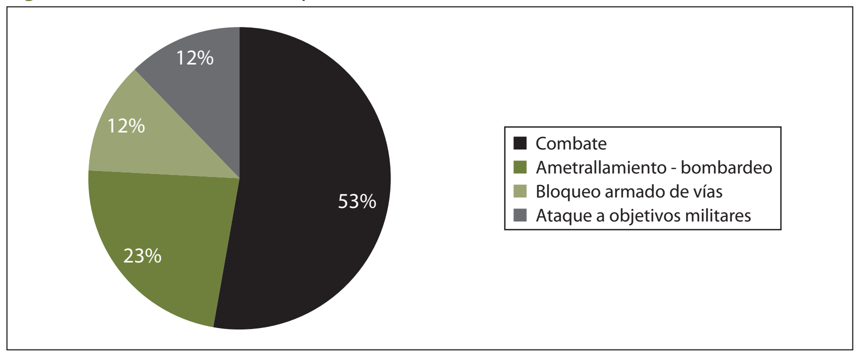
Figura 2. Infracciones al DIH por actor: Chocó 1999-2018



Fuente: SIG-Cinep/PPP. Elaboración propia.

Ahora bien, que la fuerza pública y las AGC sean los principales agentes que generan impacto humanitario, no invisibiliza el que el ELN haya tendido a responder y a desplegar una serie de acciones que impactan directamente a los pobladores chocoanos. En algunas ocasiones, estos impactos están asociados a las acciones armadas que desarrolla este grupo, tales como combates, emboscadas, ataques a objetivos militares, ametrallamientos, etc. No en vano, en la última década, este frente acumula ¡el 41 % del total de sus acciones armadas! Y en los últimos cinco años el 17 % del total de la muestra (figuras 1 y 3). Además, por la predominancia del tipo de acciones que realiza, las estructuras que lo componen no están exentas de causar daños e impactos colaterales sobre los lugareños, ya que los combates, ataques a objetivos militares o acciones de ametrallamiento, los bloqueos y paros armados y la instalación de minas antipersonales pueden dejar entre el fuego a los civiles o afectarlos de forma directa y contundente.

Figura 3. Acciones armadas del ELN por modalidad, 2010-2019



Fuente: SIG-Cinep/PPP. Elaboración propia.

Podemos empezar señalando cómo los paros y bloqueos armados de vías, los cuales se inscriben dentro del ADN del ELN nacional como factor de cohesión y tradición, no solo restringen el uso de servicios de transporte terrestre y fluvial, con intimidaciones a través de panfletos (*El Colombiano*, 2013b), sino que además, producen millonarias pérdidas, escases de alimentos en las poblaciones más apartadas e importantes restricciones en la movilidad[21], y numerosos desplazamientos (*Hoy Diario del Magdalena*, 2013).

En efecto, dos de las principales afectaciones que padecen los habitantes chocoanos en los últimos cuatro años son el desplazamiento y confinamiento, debido a que las interacciones armadas entre el ELN y las AGC y la fuerza pública se producen, de manera recurrente, en los espacios rurales donde tiene asentamiento numerosos pobladores o rutas bastante transitadas. Por eso, a diferencia de la década pasada donde se daba un desplazamiento gota a gota, y casi imperceptible, los enfrentamientos e interacciones armadas de los últimos lustros hacen que este fenómeno tenga un carácter masivo.

De hecho, es muy diciente que, en marzo del 2019, la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para la Coordinación de Asuntos Humanitarios denunciara que al menos 356 indígenas estaban confinados por enfrentamientos entre el Ejército y el ELN en zona rural de Jiguamiandó (*El Espectador*, 2020). Igual situación se ha experimentado en el litoral del San Juan (*El Espectador*, 2019a), o en zonas rurales de Bojayá, Juradó, el Carmen del Darién y Bahía Solano (*Blu Radio*, 2019).

Una situación similar se ha presentado con las comunidades negras, las cuales han padecido circunstancias de confinamiento o desplazamiento forzado para evitar caer en medio de las confrontaciones armadas

21 Entre las prohibiciones también está no permitir tropas militares cerca a sus viviendas, no movilizar personal armado o con prendas militares en canoas, motos o carros y acatar las órdenes dadas por la guerrilla en los retenes.

que se dan entre la fuerza pública y el ELN, entre el ELN y las AGC (*El Colombiano*, 2019a; también, se pueden consultar los tres informes del Acuerdo Humanitario ¡Ya! en Chocó, 2019a, 2019b, 2019c y 2020) o entre las AGC y la fuerza pública contra el ELN. Respecto a este último caso, es bastante llamativo cómo diversas organizaciones sociales del Chocó denuncian la connivencia entre estos dos actores, al punto de que llegan a rememorar las denuncias y los casos de acciones conjuntas entre las AUC y las fuerzas militares en los años noventa (*Verdad Abierta*, 2017a; *Contagio Radio*, 2020). Lo más grave es que este tipo de impactos no distinguen entre grupos poblaciones y muestra unos guarismos considerables, ya que se registraron, solo durante 2019, más de 11.000 personas desplazadas en el departamento (RCN *Radio*, 2020).

En cuanto a los procesos de confinamiento, estos se dan como resultado de los combates y de la instalación de minas antipersonales por parte de los grupos armados, las cuales las utilizan como medidas de protección. Así, numerosas comunidades indígenas como los emera-soquerré y los de Unión-Chogorodó han tenido severas restricciones para desplazarse de sus zonas por la posibilidad de caer en un campo minado (*El Colombiano*, 2019c); lo mismo ha sucedido en el Medio Atrato (La Fm, 2020) y en zonas medias y altas del Baudó, San Juan y la costa del Pacífico (*Verdad Abierta*, 2019).

A pesar de que el ELN convoca a reuniones para informar del lugar y la ubicación precisa de los campos minados, con el objeto de que los locales no caigan presa de estas trampas, esta medida no solo es infectiva; sino que además, compromete y estigmatiza a los pobladores, pues los integrantes de esta guerrilla los responsabilizan de que el Estado pueda evadirlas o desactivarlas:

> Y el tema de las minas, es que es maquiavélico reunir a una comunidad y decirle: "Aquí tenemos unas minas" […] el ELN ha reunido a los consejos comunitarios, les ha manifestado, incluso, en dónde están las minas antipersonales y ha hecho un listado de las personas de los consejos comunitarios que han asistido a esas reuniones, con la obligación de que si esas minas, si el Estado se da cuenta dónde están ubicadas esas minas, pues automáticamente ellos infieren de que han sido las personas que fueron a esa reunión que tuvieron, que estuvieron presente en esa reunión. (Entrevista 6, 2020)

El uso de los campos minados puede dar pistas y señales de cuán frágiles son los dominios territoriales de las AGC y el ELN, ya que, de acuerdo con los relatos de personas del bajo Atrato, estos son utilizados como forma de protección y contención frente al posible avance del enemigo. Además, esta práctica dejaría en evidencia dos cosas. Uno, cuán endebles son los anclajes territoriales de cada bando, pues más que apoyarse en los pobladores y sus procesos organizativos, para defender los espacios que regulan y controlan, el mecanismo idóneo para hacerlo han sido las minas antipersona:

> A lo que se quitan los elenos, se quedaron los paramilitares. Se quitan los paramilitares y volvieron los elenos. ¿Qué hicieron los elenos? Minaron todos los territorios, las comunidades de por ahí todas las minaron. Hubo un combate en donde le tocó salir a las comunidades y ya no pueden trabajar como antes hacían allá, ¿por qué? Porque está minado. Hubo personas que han muerto trabajando en su parcela, hay otros que les han partido la pierna, que un brazo. Entonces ya le da miedo a la gente de esa comunidad de ir a trabajar, porque no saben en dónde se puede sembrar. Entonces por eso yo diría de que no hubo una calma. Sino que se formó más conflicto. (Entrevista 9, 2019)

Y segundo, sobre todo para el ELN, se puede intuir que el crecimiento de su pie de fuerza tampoco es tan grande como se suele pensar, ya que esta estructura sigue reconociendo la superioridad militar del Estado colombiano en relación con sus fuerzas y señala una imposibilidad para cubrir más territorios de los que puede abarcar con sus estructuras armadas:

> El grupo es menor en cantidad de miembros que tienen en sus filas, y ellos dicen que para poderse cubrir de las fuerzas militares, tienen que hacer uso con mayor frecuencia de las minas, de las bombas y esas otras cosas, porque dicen que como son tan poquitos, una forma de protegerse de las fuerzas oficiales del Estado es colocando esas barreras porque no alcanzan a cubrirlo con hombres. (Entrevista 11, 2019)

En las cuentas de la base de acciones armadas del Cinep/PPP, se percibe el peso que tiene esta técnica de protección por parte del ELN, ya que esta representa un 5 % del total de la muestra y su tendencia va en aumento. Lo que se evidencia, con el paso del tiempo, es que la instalación de minas antipersona responde a una estrategia de disputa por control territorial entre el ELN y las AGC. No por nada, estos dos grupos han decidido tomar como táctica de contención la siembra de minas antipersonales en trochas aledañas a las comunidades afro e indígenas de una forma indiscriminada (*El Colombiano*, 2017b).

De modo que, estos dos fenómenos, asociados a las dinámicas armadas, generan un importante impacto humanitario que se extiende sobre la mayor parte del departamento del Chocó (la cuenca del Baudó, la cuenca del río San Juan[22] y la región del bajo Atrato). Esto responde

---

22 De acuerdo a un entrevistado: "El San Juan tiene ocho desembocaduras diferentes, que no las cubre la infantería de marina [...] y aparte de esas ocho está el bajo del río Calima, que conecta a Buenaventura por otro lado [...] y está el norte del valle, la entrada por Sipí, está el Baudó, es como una estrella que comunica todo [...] por eso los grupos se disputan la zona, porque saben que estando allí interrumpen o facilitan sus cosas, por cualquiera de las rutas que hay" (Fragmento de entrevista a líderes de ACADESÁN, 2014, citado en Defensoría del Pueblo, 2017a, pp. 99-100).

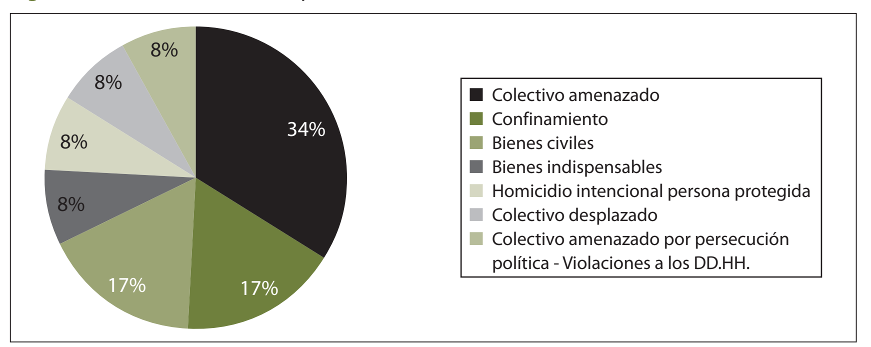
a la disputa que tienen las AGC con el Estado y el ELN por el control de territorios y espacios que revisten una importancia estratégica para el desarrollo y control de ciertas economías territoriales como el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de personas, el ingreso de armas, vituallas, etc. (Defensoría del Pueblo, 2017a). En su defecto, estas actividades están vinculadas por una serie de rutas y corredores naturales, que comunican diversas localidades del departamento, entre estos: el corredor de Riosucio, Bojayá y Alto Baudó —zonas donde se cultiva y se procesa la cocaína— con Juradó, Bahía Solano y Nuquí —zonas de embarque y exportación— (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 020-16; Entrevista 19, 2019); o el que se desprende de Ituango, pasa por Dabeiba y desciende hasta el bajo Atrato; o los que están conectados con el cañón de las Garrapatas (norte del Valle), para, desde ahí, descender por todo el litoral del San Juan.

De ahí que, para algunos, estas interacciones armadas tienen que ver más con temas económicos y con la posibilidad de extraer recursos, que por asuntos políticos y sociales:

> Nosotros diríamos que ellos están peleando es como por el territorio y peleando los derechos, pues usted sabe que las tierras de por acá son unas tierras fértiles, que es lo que uno siembra, produce, no necesitamos abono ni nada de eso. Y ahora que algunas comunidades pues están sembrando sus hierbas ilícitas, eso es lo que están cuidando, porque no vemos ningún otro interés. (Entrevista 9, 2019)

Por otro lado, el confinamiento y el desplazamiento forzado son solo dos aristas de las diversas modalidades que asume el impacto humanitario causado por el ELN. De igual forma, sobresalen las amenazas sobre colectivos, ataques a bienes civiles y el homicidio en persona protegida (figura 3, ver, además, los informes del Acuerdo Humanitario ¡Ya! en Chocó, 2019a, 2019b, y 2019c); estos muchas veces están vinculados a la estigmatización y señalamientos que hacen las estructuras del Omar Gómez a la población, pues los sindica de ser colaboradores de otros grupos o de la misma fuerza pública. Justamente, este tipo de señalamiento se extiende a todos los liderazgos de las zonas en disputa bajo la modalidad de listado de personas, quienes generalmente no denuncian ni acuden a institución alguna por temor a las posibles represalias (Entrevista 6, 2020).

Figura 4. Infracciones del ELN al DIH por modalidad, 2010-2019



Fuente: SIG-Cinep/PPP. Elaboración propia.

En consecuencia y como parte y prueba de la capacidad de coerción latente que tiene el ELN en las zonas de reciente expansión, la población se ve obligada a desplazarse "voluntariamente"[23] (*El Tiempo*, 2017a), porque las autoridades son incapaces de desarrollar soluciones de fondo, y para garantizar la seguridad individual y colectiva de los asentamientos rurales. En algunos casos, las administraciones municipales no tienen recursos para proteger y atender a las víctimas; y, en otros, se muestra la desidia del Estado central para atender dichos sucesos (RCN *Radio*, 2014). Además, la actitud poco conciliadora del ELN, la cual contrasta con la postura asumida por este grupo en otras regiones, agudiza la situación. No en vano, sorprende que para algunos pobladores no haya distingo alguno entre los llamados paramilitares (las AGC, en realidad) y el ELN:

> Pero era un poco más miedoso cuando se daba cuenta la comunidad que llegaban los paramilitares porque tenían una forma muy agresiva de entrar [...] Es como algo más preocupante ahora porque tanto como los elenos como los paramilitares que hay, las comunidades no tienen esa misma confianza de llegar a decirle algo, en cambio con las FARC sí se podía dialogar. (Entrevista 8, 2019)

Pero esto no es todo, pues otra de las dimensiones donde se materializa el importante impacto humanitario que ha tenido el proceso expansivo eleno, son los señalamientos que se le hacen a algunos integrantes de esta insurgencia de realizar prácticas de violencia y abuso sexual en contra de la población chocoana, al punto que para algunos la situación es dramática (*El Nuevo Siglo*, 2019a), esto debido a que, este tipo de acciones no distingue entre los pobladores (afecta de manera análoga a indígenas y negros) y tiene un cobertura espacial considerable (*La Opinión*, 2020).

23 Las comunidades de las veredas La Pava, Truandó, Clavellino y La Nueva completan hasta cinco desplazamientos forzados.

El siguiente relato denuncia los atropellos, las labores y tratos a los que están expuestas algunas mujeres del departamento del Chocó, que no solo deben complacer y satisfacer las demandas sexuales de los integrantes elenos, sino que también, da cuenta de las obligaciones domesticas que tienen en ciertos campamentos. Parece ser que es tal el nivel impositivo de estas demandas que, incluso, los pobladores chocoanos se refieren a que este tipo de prácticas no las vivieron ni siquiera con el paramilitarismo de los años noventa:

> Ellos nos dicen: Mire compañera, le tocó estos dos meses. ¿Pero estos dos meses qué?, pues que le toca venir con nosotros. Pero yo no puedo ir, tengo hijos. Los trae. Pero yo tengo marido, tengo casa, tengo unos trabajitos. ¡Ah, no! Le toca, compañera. Ellos son aparentemente muy feministas y en la mesa nos corregían cuando no hablábamos de las y los, pero entonces las mujeres ¿para qué los acompañan?, para hacer el aseo, para cocinar y para estar disponibles sexualmente. Ellas me decían llorando: estamos de esclavas de estos tipos. Eso ni con los paramilitares lo vivimos. Entonces no solo no se juegan en la lógica indígena o negra de relación del territorio o de defensa del mismo, de donde derivan su subsistencia, sino que han ido en una dinámica tremenda. (Entrevista 7, 2019)

Para algunos, el proceso expansivo del ELN lo único que ha acarreado son hechos atroces con los pobladores, al punto que la gente le tiene bastante temor a esta insurgencia:

> […] el ELN allí ha cometido unas atrocidades tremendamente graves. Por ejemplo, el ELN entró a "Buey", y el ELN allí violó a mujeres delante de los hijos y el marido, tenemos casos documentados sobre eso. Incluso, esto se le hizo conocer a la mesa de conversaciones cuando se trasladaron a La Habana, por las mismas comunidades y la Diócesis de Quibdó, el ELN en Pogue asesinó a un joven en el marco justo de una fiesta de la madre, y así, hay una cantidad de situaciones, incluso de reclutamiento, que se han venido dando, que las comunidades les ha tocado estar yendo a recuperar a los jóvenes.
>
> La relación de entrada fue mala, terrible, porque el ELN, incluso, la gente cuando el ELN entró a esos territorios, la gente le tenía más miedo al ELN que a los mismos paramilitares, dicho por las mismas comunidades. Porque el nivel de agresividad con que actuaron fue tan fuerte que la gente les cogió pavor. (Entrevista 6, 2020)

En parte, como veremos en el siguiente acápite, estos elementos, aunados a una capacidad limitada de conectarse con las demandas de tramitación y gestión de conflictos de este ELN con los pobladores chocoanos, explican que el proceso expansivo de esta guerrilla sea más endeble de lo que usualmente se estima. No es casualidad, que ciertas estructuras hayan perdido terreno en las zonas de reciente expansión, como el Medio Atrato, la zona de Pacífico y partes medias del San Juan; además han llegado a

perder terreno o a ver cuestionado sus tradicionales dominios territoriales en el área del alto Baudó, la cual es considerada como una zona de retaguardia (*Vanguardia Liberal*, 2020). Todo indica que esta estructura no tiene la capacidad de repeler ni defender sus dominios territoriales frente a las recientes incursiones de las AGC (*Revista Semana*, 2020b; *El País*, 2020).

De nodal importancia es la reciente dada de baja de Andrés Felipe Vanegas "Uriel" (2020), quien era el encargado de formar y adoctrinar a los nuevos combatientes. Este cuadro era importante para los guerrilleros del frente Ernesto "Che" Guevara y para las comunidades, por ser la figura "benevolente y bienestarista" de la organización. La pérdida de "Uriel" puede tener implicaciones territoriales de consideración, porque con su muerte la formación de los nuevos reclutas puede ser más precaria, lo cual tiene implicaciones para la acción del combatiente raso y el tipo de violencia que ejerce (Wood, 2018; Hoover Green, 2018). No en vano, un precario adoctrinamiento puede incentivar el aumento de casos de indisciplina por la prevalencia de intereses personales (las llamadas desviaciones revolucionarias: codicia, indisciplina, consumo de alcohol, drogas, etc.); de igual modo, puede dificultar la capacidad de trámite y resolución de los problemas de las comunidades a causa de la escasa formación del guerrillero (Aponte, 2020).

En el caso del Chocó este no es un asunto menor, porque el frente de guerra Oriental es quizás el frente de guerra que mayor impacto humanitario produce en el territorio nacional, debido a las lógicas criminales y extractivas a las que se encuentra atado. Por eso, la ausencia de "Uriel" podría agravar la violencia en el territorio y militarizar y criminalizar más la textura de las relaciones entre civiles y armados (Aponte, 2020).

Para cerrar, la narrativa que nos lleva a intuir este recuento, se resume en que consideramos que este frente de guerra ha adecuado su organización, sus repertorios y lógicas violentas a las disputas territoriales en torno a las economías territoriales chocoanas, prestando menos atención a atender las demandas y necesidades de tramitación de las organizaciones sociales, e impulsar las dinámicas organizativas, las cuales, en la jerga elena, son presentadas, nada más y nada menos, que como la construcción de poder popular.

¿Un poder popular en sus mínimas proporciones? Orden social y ámbitos de regulación del ELN

Como hemos señalado, el tipo de orden social[24] impuesto por el ELN —que ha acompasado su proceso expansivo—, expone una capacidad para

24 Con esto nos referimos a las instituciones formales e informales que ha desarrollado para regular y tramitar, dimensiones y aspectos de la vida cotidiana, política y social de los lugareños y de las instancias organizativas.

ordenar bastante limitada, por no decir precaria y bastante impositiva, y un fuerte acento militarizado, salvo en sus zonas de presencia tradicional.

Estos caracteres no solo muestran un importante contraste con otros frentes de guerra que componen al ELN nacional, sino que también evidencia cómo estos han marcado un punto de ruptura en las relaciones que sostienen armados y no combatientes en el departamento del Chocó; debido a que los lugareños, según sus remembranzas y experiencias, consideran que ningún otro grupo armado, en la historia del departamento, había tenido esos atributos, ¡lo cual incluye a los paramilitares de la década del noventa!

En el trabajo de campo realizado, nos topamos frecuentemente con referencias al tipo de relacionamiento que existía con las extintas estructuras farianas, ya que con su desmovilización se marcó un antes y un después: con ellas no solo se negociaban y acordaban las normas y reglas de convivencia; además, se referenció que los canales de comunicación, las formas de regulación y el tipo de normas entabladas por los frentes, compañías, etc., eran eficaces y consistentes en el tiempo. No obstante, esta situación ha dado un giro completo con el ELN, porque en el presente hay poca claridad en lo que se pacta y con quién se pacta:

> Los acuerdos entre las organizaciones y el ELN son inciertos: por un lado, el ELN dice que se entiende bien con los consejos comunitarios y, por el otro, las comunidades dicen que no es así. Así, se muestra que no hay una claridad en la forma cómo arreglan o pactan. (Entrevista 10, 2019)

Precisamente, el proceso expansivo eleno ha tenido como consecuencia importante el acrecentamiento y profundización de la incertidumbre sobre los mecanismos, las formas y las instancias de gestión de conflictos, esto debido al carácter impositivo de las reglas de juego que han pretendido establecer en los diversos territorios donde se han insertado recientemente, pues quienes no se acogen a ellas, se ven desterrados, asesinados o amenazados (*El Tiempo*, 2018b).

Para algunos, esto está vinculado al rol que juega la ideología en todo proyecto armado, en el sentido según el cual la estructura organizacional, la forma de ejercer violencia, los tipos y formas de regulación, etc., están permeados por esta variable. En otras palabras, la ideología tiene tanto un valor instrumental (da cohesión a los integrantes del grupo, atenúa los problemas de agente y coordina actores externos, como los civiles) como un aspecto restrictivo, pues limita las elecciones estratégicas (hay compromisos normativos que constriñen a los integrantes), tal y como señalan agudamente Francisco Gutiérrez y Elisabeth Wood (2014).

Por eso, para algunos de los habitantes locales, el reclutamiento de personas menores de edad, la desaparición de ciudadanos sospechosos de cumplir tareas para las AGC, el uso de la violencia sexual contra las

mujeres, el tránsito y la instalación de minas en resguardos y consejos comunitarios, las restricciones a la movilidad, los asesinatos selectivos, etc. (Entrevista 18, 2019; SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 069-18) está asociado a una percepción de que las estructuras del ELN "no guían su accionar en función de un proyecto ideológico, pues ya no tienen el respeto por las comunidades que solían tener cuando tenían una agenda política más explícita" (Entrevista 20, 2019).

Además, a ese proceso de desideologización, se suma que la gente siente que con el ELN no hay seguridad, en el sentido en que esta insurgencia pueda proveer protección:

> Entrevistador: ¿Quién imponía el orden ahí? O lo que hablábamos, dependiendo de quién lo viera a uno, se comportaba de tal manera.
>
> Entrevistado: Mira uno lo puede decir porque hay un comportamiento hacia los grupos armados y tu acá llegas y ves a las FARC en un pueblo y la gente se siente más segura con las FARC que con cualquier otro grupo. El ELN no ha sido sinónimo de seguridad para la gente.
>
> Entrevistador: ¿Y el ELN ha tratado de emular comportamientos de las FARC; ahora que las FARC no está?
>
> Entrevistado: No, porque el nivel de aceptación de la gente al ELN ha sido muy a distancia. (Entrevista 16, 2019)

De este modo, la diferencia entre orden fariano y aquel promovido de forma más reciente por el ELN, particularmente por el frente de guerra Occidental, tiene que ver con que la matriz ideológica de la extinta guerrilla se reflejaba mucho más en las relaciones con las organizaciones sociales y los pobladores. Además, a la incongruencia en la retórica y el discurso eleno, se suma un desorden organizacional para atender las demandas y los trámites de gestión de conflictos de la vida social de los chocoanos:

> ELN y FARC se diferencian en el tema de disuasión, con la presencia física. Con las FARC, cuando hacíamos presencia en el territorio no se mostraban, no refutaban ni realizaban otras acciones; mientras con el ELN, ha habido ciertas manifestaciones de mayor intento de influir el trabajo. En la práctica el ELN no se guía de tanto por las líneas ideológicas, uno veía que las FARC eran más alineada con eso. El ELN muestra una cierta retórica que no se observa en la vida. También el ELN es difícil porque no se sabe con quién hablar, qué hacer, y los locales lo identifican con línea ideológica, y los pobladores no saben con quién hablar, etc. Es mucho más impredecible en ese sentido. (Entrevista 10, 2019)

Igualmente, en el caso de las poblaciones indígenas hay una brecha lingüística y discursiva con la insurgencia, que no les permite a las estructuras del ELN insertarse adecuadamente en los resguardos:

> Entrevistador: ¿Por ejemplo todas esas cosas que usted ahorita decía: que son el ejército del pueblo, que luchan por el pobre, que bueno […]

¿la gente de la comunidad sí entiende eso? ¿Sí entienden todos esos discursos, ¿sí entienden?

Entrevistado: La gente no entiende. La gente empezando que no entienden. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entiende la gente? Porque ellos no saben qué es eso. ¿Sí? Cuando ellos hablan del ejército del pueblo, ellos dicen: "Pero, ¿para qué nosotros?" Y empezando, pues que eso en traducido en lengua, eso no nos da ninguna garantía. [...] Y segundo, es que nos ponen es en peligro con eso, porque cuando llega la fuerza pública [...] Nosotros somos los que vamos a llevar, entonces eso siempre con la guerrilla se da, por eso es que, en esta zona, no se ha podido la guerrilla arrimarse dentro de la comunidad como ha pasado en otras comunidades, que ellos se dan cuenta y se quedan. (Entrevista 21, 2019)

Para complejizar más la situación y exhibir la incertidumbre que hay en algunas localidades chocoanas, habría que agregar que las mismas normas impuestas por este grupo guerrillero son transgredidas por los integrantes y cuadros medios de la organización. Esto crea un desconcierto entre los locales y debilita la legitimidad del orden eleno (Entrevistas 10, 2019; 6, 2020). Lo pobladores hablan de un (des)orden eleno que se manifiesta particularmente en acciones armadas para patentar sus ámbitos de regulación y extracción de recursos, por lo cual sus formas regulatorias tienden a ser percibidas como si solo estuvieran encaminadas al lucro económico y personal de los integrantes de esta insurgencia:

Entrevistador: ¿Cómo se da, digamos, ese fortalecimiento del ELN?, ¿se han visto repercusiones en la gente y en el tipo de orden que hay?

Entrevistado: Pues orden no hay. El ELN se volvió un grupo para la gente, es más, su actuar es más delincuencial que para la gente. O sea, es de quemar buses, de llegar a una comunidad y saquear, de llevarse a la gente, en esa línea de esos actos que no tienen nada que ver con una organización popular, sino que, con el lucro económico y personal, entonces ahí hay unas dragas y entonces nos tienen que pagar a nosotros, ¿sí?, o sino, se las quemamos; tienen como unas acciones con una línea delincuencial muy marcada. Es como esa mirada. (Entrevista 16, 2019)

Por ejemplo, en el Baudó, particularmente en las partes medias, se comenta que el arribo eleno no fue solo para ponerle orden a las localidades, luego de que quedaran ausentes de regulación con la desmovilización de las FARC; también, esos impulsos reguladores estuvieron vinculados a las rutas de coca, exponiendo un tinte impositivo:

Al llegar ellos bajan a las comunidades y ya empiezan a establecer control. Acá las rutas del narcotráfico que se mueven, al llegar ellos al territorio comienzan a controlarlas también, cobran impuestos y todo ese tipo de cosas. Comienzan a ejercer autoridad en los pueblos, montan controles

para que supuestamente no entren los bandidos y dicen que a partir de ahora ellos son los que van a mandar en el territorio. (Cartografía 3)

Se tiende a señalar que, en la textura de las relaciones tejidas con las comunidades, en particular en las zonas de reciente expansión, tiene mucho que ver el arribo de cuadros medios ajenos a las dinámicas locales. Además de no ser locales, están excesivamente militarizados en su trato con los pobladores; algo que contrasta claramente con las zonas del San Juan:

> […] el por qué en la subregión del San Juan sí les ha funcionado, y que va por ejemplo también, con una lectura acompañada de la renovación de liderazgos de las estructuras o de los frentes que operan en cada una de las subregiones del departamento. […] la subregión del Baudó, en el Bajo Baudó, tenía por lo menos tres años operando un liderazgo de origen indígena y digamos, pues que todo marchaba más o menos, era llevadero con las comunidades allá asentadas y demás y […] ¿qué ocurrió ahorita en el 2020? Hay un cambio de mando en esta zona del Bajo Baudó, con un liderazgo que, de entrada, bueno, ya no es indígena, es afro y caracterizado por ser sumamente violento, con un nivel de violencia exacerbada y muy acentuada hacia comunidades indígenas que preocupa y que mantienen prácticamente con un nivel de afectaciones muy, muy alarmante a las comunidades allá asentadas. (Entrevista 23, 2020)

Parece ser que hay una alta rotación en los mandos que dificulta que las comunidades conozcan las formas y reglas de juego de cada comandante, con relación a las normas de convivencia, así como de las economías territoriales que regula esta guerrilla:

> […] esta constante rotación de mandos y que se acentúan cuando pareciera que lo que ha ocurrido en el Bajo Baudó, que fue el ejemplo que referí, de un liderazgo ostentado por un indígena que había logrado digamos este nivel de consenso, para evitar mayores afectaciones en torno a la ruta por el puerto de Pizarro, por las cuestiones del narcotráfico y demás economías ilícitas. (Entrevista 23, 2020)

Por otro lado, se tiende a creer que la postura militarizada y poco concertadora que ha exhibido el Omar Gómez es un fenómeno de años recientes, y que está relacionada con la firma del Acuerdo paz entre el Gobierno y las FARC, la cual llegaba a un punto irreversible en año 2015 (más o menos). En efecto, mientras este acuerdo se concretaba, las estructuras del frente de guerra Occidental aumentaron su capacidad bélica y número de acciones armadas, y también aumentó el nivel de agresividad y la militarización en su trato con las masas:

> Porque el nivel de agresividad con que actuaron fue tan fuerte que la gente les cogió pavor. Incluso en Bojayá, nosotros como […] en esos momentos, hasta nos empezó a generar una tensión, porque como nosotros jugamos un papel importante en la negociación con las FARC, y sobre

> todo el tema del plebiscito, entonces la gente nos empezó a cuestionar y muchos testimonios nos dijeron es que ustedes nos perjudicaron, porque "mejor estábamos con las FARC", así nos dijeron algunos, cuando entra el ELN, con ese nivel de agresividad. (Entrevista 6, 2020)

Es tal el nivel de comparación con las extintas FARC, que los pobladores del Chocó sí identifican y son capaces de señalar que la estructura organizacional guerrillera tenía las capacidades y posibilidades de controlar, tanto el comportamiento de sus integrantes como el tipo de violencia que ejercían. Esto es algo que no sucede en el presente con el ELN, que no solo impone las normas de convivencia, sino que también se muestra más preocupado por ordenar lo económico, que lo organizativo y social. De ahí que su capacidad de influenciar los procesos de base y de erigirse en una instancia tramitadora efectiva y legítima sea bastante escasa.

A diferencia de las FARC, el ELN le brinda una sensación de poca claridad a las comunidades respecto a las instancias a las cuales deben acudir, lo cual se ve agravado por el comportamiento de los combatientes, porque pocas veces es alineado y corregido por la organización guerrillera cuando afecta directamente a los lugareños de una localidad:

> Las FARC cometían el error e inmediatamente era castigado (en referencia al miliciano o combatiente), porque lo que hacía no era ninguna orden, entonces teníamos esa confianza más con la FARC, ahora es muy difícil hablar con los paramilitares y con los elenos. (Entrevista 8, 2019)

De acuerdo con otros relatos de pobladores del Chocó,

> […] la relación de la comunidad con el ELN es de temor, de menos confianza que con las FARC, pues es un grupo que no permite diálogo, sino que impone la fuerza; las FARC cuando estaba, en ocasiones antes de asesinar a una persona, se permitían reuniones para sugerir que la persona debía salir del territorio y que fuera ajusticiada, en cambio, el ELN asesina sin mediación. (Entrevista 1, 2020)

Además, a la poca claridad sobre las reglas de juego para tramitar y gestionar los problemas de la vida cotidiana, se le suma que los líderes elenos desconocen las normas y reglas preexistentes, como los reglamentos internos de los consejos comunitarios y de los resguardos indígenas: en lugar de desempeñar un rol de veeduría, como lo hacía las FARC, llegan a las localidades desconociendo los acumulados organizativos e imponen una serie de normas y reglas, que van más acorde a sus intereses, que a las necesidades y demandas de los locales.

No en vano, un líder del Medio Atrato señaló que muchas de las normas estaban encaminadas a la seguridad de las rutas del narcotráfico y a mantener invisibles los corredores de movilidad (Entrevista 6, 2020), Y, cuando eran más explícitas y concretas, decían que ellos habían llegado a poner orden con su control sobre los ladrones, el consumo de

estupefacientes; pero, a cambio, la comunidad debía evitar cualquier contacto con las AGC y la fuerza pública. (*El Tiempo*, 2020).

Otra singularidad de estos casos y de los acuerdos "construidos" con los lugareños es que, a diferencia de otros lugares del país, los pactos y las reglas de juego son poco visibles y no muestran cierto grado de institucionalización. A diferencia del Catatumbo, del macizo caucano, Arauca, etc., donde esta guerrilla tiene y hace valer un manual de convivencia, el cual fue construido de la mano de la comunidad, en Chocó no solo fue difícil acceder a un documento como estos; sino que, además, esos acuerdos en torno a las reglas y normas de convivencia, impuestos a la fuerza, tienen la particularidad de que deben ser y permanecer en secreto. Este asunto no solo revela que las instancias de regulación y tramitación son bastante limitadas, sino que también obedecerían a temas estratégicos y militares. De tal forma que, no debe extrañar que lo que para el frente de guerra Occidental se llama influencia y construcción de poder popular, para lo habitantes del Chocó "son unos acuerdos forzados":

> El ELN se refiere a unos acuerdos que son no más que reuniones forzadas: llegan con su armamento y le dicen a la comunidad: nos vamos a reunir para llegar a unos acuerdos y eso son los mensajes que mandan: acuerdos de forma forzada. Esos acuerdos "pactados" de manera impositiva no se revelan porque pueden afectar la integridad de las personas de las juntas de los Consejos Comunitarios (Entrevista 10, 2019).

Aun así, los habitantes del Chocó reconocen y señalan que esta es la única autoridad y oferta de regulación que tienen. No obstante, también son conscientes de las implicaciones que tienen los intentos expansivos y de instaurar un modelo de gobernanza para los nativos, ya que la influencia y posible presencia de un actor armado los convierte, a los ojos del bando enemigo, en un objetivo militar y legítimo, al igual que pasó en los años noventa con las AUC:

> En Domingodó, la cosa está grave. Aquí mandan más los actores ilegales que la fuerza pública, hay más presencia de armados que de soldados, hay más narcos que Estado. El trabajo lo ofrecen ellos, la autoridad la ponen ellos, y entonces qué va a hacer la gente. Pero lo único que le pedimos al país es que no vaya a haber otro 96. (Líder del Medio Atrato, citado en *El Espectador*, 2018a)

La textura descrita del tipo de relacionamiento entre el ELN y las organizaciones sociales en el Chocó, permite intuir que la incidencia que tiene esta insurgencia en los procesos organizativos es más que limitada. No en vano, más que ser un agente que los impulse o dinamice, como puede suceder en otras áreas del país, el Omar Gómez se muestra como un vigilante y fiscalizador de la vida política y organizativa; debido a que su estrategia y la textura en la relación con los locales se ha basado exclusivamente en la

intervención e infiltración en las instancias organizativas. La táctica adoptada ha consistido en tratar de imponer representantes y líderes, que sean afines a sus intereses y apuestas, en las localidades donde recientemente se han expandido: "Hace tres años se hicieron unas elecciones, porque cada tres años se hacen las elecciones de consejo comunitario de (se omiten los nombres por seguridad) y ellos se metieron armados en las elecciones, a imponer los representantes, los líderes" (Entrevista 8, 2019).

Cuando no es posible desarrollar este tipo de apuestas, sus integrantes han asumido conjuntamente posturas draconianas y violentas en contra de algunos personajes representativos de la vida comunitaria, para buscar influir en la vida política y organizativa. Tal es el caso del juicio político que le hizo el frente Resistencia Cimarrón a Fredys Palacio, alcalde del Alto Baudó, para que rindiera cuentas del uso de recursos del municipio durante su administración (*El Tiempo*, 2015); igualmente, se puede señalar el asesinato de dos líderes en San José del Palmar (*El Tiempo*, 2018c); las amenazas hechas a propósito de los procesos sociales en zonas del medio Atrato, por su imposibilidad de incidir en los organismos internos de deliberación y cuando estos personajes ilustres de sus localidades no cumplieron la función de bisagra que ellos esperaban que tuvieran con el pueblo (*El Espectador*, 2018c). En el caso concreto del Bajo Baudó, el ELN recurre a estas prácticas mencionadas, donde más que arreglar y concertar, impone lo que quiere ordenar, y cuando no lo logra, utiliza el brazo armado:

> Entrevistador: Y, una pregunta, ¿el ELN en qué trata, por lo menos la guerrilla, en qué trata de influir en la vida de ustedes? ¿Les ponen normas o les dicen cómo se circula por el territorio, les saca plata, comida? [...] ¿En qué tratan de influir? ¿Y ustedes cómo perciben esa influencia?
>
> Entrevistado: La influencia es el ejercicio del gobierno propio. Porque ellos dicen: "No. Vamos a colocar este reglamento que ustedes van a cumplir".
>
> Entrevistador: O sea, ¿ellos no hacen el reglamento con ustedes?
>
> Entrevistado: No.
>
> Entrevistador: O sea, les dicen: "Estas son las reglas que hay y así es como se tienen que comportar". ¿Y ustedes qué dicen?
>
> Entrevistado: Entonces frente a eso es donde tenemos las diferencias y tenemos las discusiones y ahí es donde viene el señalamiento hacia nosotros porque decimos: "No aceptamos eso, porque eso no es el ejercicio nuestro. El ejercicio nuestro es acá de nosotros, la autonomía y el gobierno propio que trabajamos como 'Autoridades étnicas' del territorio, que somos dueños, ustedes son llegados. Nosotros respetamos su reglamento que tienen, pero nosotros no podemos acatar eso, porque eso va en contra de la autonomía nuestra.
>
> Entrevistador: ¿Y qué dicen?

> Entrevistado: Entonces ellos siempre han dicho que sí, 'sí vamos a respetar' […] pero siempre ellos siguen insistiendo. Entonces esa es la forma de influir a la vida de los pueblos indígenas. Y, por otro lado, precisamente cuando hay eso, es donde, pues vienen las amenazas: "Que ustedes son los que son los informantes con el Ejército, con el Gobierno y todo eso.
> Entrevistador: ¿Y han matado indígenas por eso?
> Entrevistado: Claro.
> Entrevistador: ¿Y sigue sucediendo?
> Entrevistado: Hace poquito sí, hace unos seis meses teníamos compañeros amenazados, unos siete líderes amenazados, siete líderes amenazados […]
> Entrevistador: ¿Y ustedes identifican que esas amenazas son sencillamente por no cooperar?
> Entrevistado: Por no cooperar. Sí señor, eso es claro. Eso es claro, por no cooperar y por no obedecer a las órdenes que ellos colocan, y, por otro lado, pues siempre hemos dicho, no. No pueden estar en la comunidad. (Entrevista 21, 2019)

Así, contrario a lo que gente comenta que sucedió con las FARC, el actuar y el proceso expansivo del ELN ha afectado los procesos organizativos, tanto de indígenas como de las poblaciones negras, pues las demandas de autonomía y reconocimiento de sus instancias organizativas se han visto frenados, cuando no impactados y fuertemente afectadas; en razón de que sus cabezas más visibles han debido huir de las diversas localidades por las amenazas proferidas por los comandantes del ELN, al desconocer que ellos como representantes de las comunidades deben dialogar y establecer acuerdos y canales de comunicación con otros actores armados:

> Si le tocó hablar con alguno, hable, si le tocó hablar con el otro, hable, pero no casarse uno con los actores. Hacer su papel de defensa de las comunidades y ya, porque a medida que tú te cases con un actor, pues ya el otro te pilla, te marca, entonces ya tú eres colaborador de ese otro actor, entonces si no te matan, te toca ya es salir del territorio corriendo. (Entrevista 12, 2019)

La estrategia que han utilizado para saber de los movimientos, encuentros, espacios propiciados por las poblaciones y sus instancias representativas ha sido instalar informantes o milicianos, quienes, por estar vestidos de civil, pasan desapercibidos y dan información en todo lo concerniente a los movimientos militares y las dinámicas de las comunidades. Para eso, se ubican en la entrada de los ríos y en lugares estratégicos que les permiten ejercer un control total:

> Y la otra estrategia que han empezado es que, al interior de las comunidades, han ido dejando personas de civiles al servicio de ellos. Entonces, eso está limitando que cualquier posibilidad de denuncia

> o posición crítica de los miembros de alguna comunidad, pues tienen efectivamente el control en el día a día de las actuaciones de los miembros de la junta del consejo comunitario, o lo que sea. Porque desde que usted entra al río Bojayá y llega a (se omite el nombre por seguridad), de ahí para arriba, en todas las comunidades hay personas de ellos de civil. (Entrevista 6, 2020)

Ahora, no debemos creer que por el alto grado de violencia que ejerce el ELN y el carácter impositivo de sus normas, todos los habitantes de las localidades siguen al pie de la letra sus instrucciones. En parte, esto se debe a que no las consideran legítimas, pero, de igual forma, esta capacidad de maniobrabilidad de los locales se debe a que esta insurgencia no tiene la capacidad organizativa para hacerlas cumplir. Tampoco tiene el pie de fuerza para cubrir los territorios ni una capacidad de monitoreo tan desarrollada como la tuvo las FARC:

> Entrevistador: ¿Y qué partes de la vida tratan de regular? Es decir, lo que hablábamos por ejemplo en el taller, ¿ellos arreglan problemas de parejas, linderos o qué?
>
> Entrevistado: Normalmente el ELN no tiene mucha fuerza en esas cosas porque ellos como no tienen la posibilidad de estar tan presentes en los territorios sino en la selva, precisamente por el número de miembros que tienen en sus filas, entonces ellos hacen control, pero ya hacen un control con menos fuerza que como lo hacía las FARC, por ejemplo, la confinación que dicen aquí no sale nadie, pero en el momento en que se retiran igual la gente sale, con las FARC no era así, usted no puede salir y es que no sale porque yo lo estoy vigilando permanentemente. (Entrevista 11, 2019).

En estas interacciones entre armados y civiles, que van desde la negociación, sometimiento, adopción pragmática de las reglas, resistencia, etc., tanto los pobladores del común como las cabezas de los procesos organizativos no encuentran garantías ni confianza en la institucionalidad y los funcionarios del Estado colombiano, en particular de la Fiscalía y la Policía; pues, cuando han acudido a ellas, más se demoran en regresar a sus lugares de residencia, que los actores armados en enterarse de sus acciones. Esto evidencia que son pocas las herramientas y los espacios institucionales que les sirve de respaldo para esquivar los impulsos reguladores y ordenadores del ELN y de otras organizaciones armadas en diversas localidades del Chocó:

> Nosotros hemos manifestado que como nosotros hemos visto que compañeros han ido a decir algo y antes de venir, ¿la Policía, qué hace, a ver? Los compañeros salen de la fiscalía, y antes de llegar al otro lado del pueblo, unos dos kilómetros, ya sabe el otro grupo quién dijo y por qué, cómo lo dijo. Entonces es como incómodo eso, porque no entra la confianza, porque sabemos que hay más confianza entre ellos que entre la Policía y población civil. (Entrevista 8, 2019)

Ahora bien, retomando el hilo del argumento general de este acápite, este evidente cortocircuito del ELN con los procesos organizativos y los liderazgos locales no obedece únicamente a un alejamiento e incapacidad de sus comandantes de acoplar su discurso y acciones a las necesidades y demandas concretas de los chocoanos. Y, más, importante aún, es que los mismos pobladores son conscientes y tienen la capacidad de tomar distancia de sus contextos, para ver que las dinámicas armadas del ELN, sus proclamas revolucionarias y el tipo de gobierno y normas que quieren implantar no solo no casan con las apuestas y agendas territoriales de los procesos organizativos, sino que, además, aluden a que las dinámicas y los procesos recientes, en poco o nada han contribuido al trabajo de las comunidades:

> Acá tuvimos la oportunidad de hablar con el mismo "Uriel", porque él hizo una reunión en donde llamó a los líderes de acá. Llamó por partes, de a cinco. Y nos manifestaba eso, que no habían podido hacer tregua con los paramilitares en la zona del bajo Atrato. Decía que esas zonas no se las iban a dejar a ellos, pero tampoco han querido hacer negocio con nosotros.
>
> […] No, pues que la lucha de ellos (decía "Uriel"), seguía siendo por las comunidades, por la gente menos favorecida, pero no, eso se tiene que ver en los hechos no en palabras, porque nosotros vemos al ELN en el territorio, pero no sabemos cómo han contribuido a las comunidades, no hay forma de mirar uno eso como sí se podía en parte con las FARC. (Entrevista 8, 2019)

Estas elocuentes y brillantes palabras muestran que, si el grupo armado no proyecta y da la impresión de que su presencia, regulación y orden benefician a las comunidades, su dominio territorial no solo es endeble; sino que también, su conexión con los locales, las personas representativas del lugar, etc., es más que frágil. En consecuencia, esto además de no permitirle desarrollar unos sólidos anclajes sociales, puede significar que sus horas están contadas, porque su influencia en la vida local y cotidiana puede tomar visos y ser percibido como un ejército de ocupación: es una estructura potente militarmente, pero débil en términos societales y políticos, debido a que el orden impuesto es acatado sobre todo por el miedo que genera por cualquier retaliación, y no por una obediencia y una disciplina vinculada a su legitimidad y ascendencia política.

De lo anterior, también podemos destacar cómo el relato de este entrevistado expresa la manera en que el orden armado eleno convive con otras jurisdicciones (estatales, armadas, comunitarias) y gobernanzas de diversa índole, las cuales los comandantes de estas guerrillas omiten, no visibilizan o sencillamente desconocen, pero que los habitantes chocoanos sí tienen leídas de forma muy clara y saben cómo interactuar y negociar con los actores que las sostienen.

Para cerrar, hay que decir que las dinámicas descritas, en lo que atañe a los problemas y limitaciones que ha tenido esta guerrilla, no son espacialmente homogéneas. En su defecto, este relato solo está vinculado a las zonas de reciente expansión, en particular, de las zonas del medio y bajo Atrato y Baudó, en partes de la costa del Pacífico y en las zonas bajas del litoral del San Juan, donde los diversos frentes, compañías y batallones se han insertado y expandido en la última década. Mas, si nos remitimos a las dinámicas y el tipo de enraizamiento en las zonas de presencia tradicional elena, donde esta guerrilla sí ha podido conectarse con los pobladores y sus instancias organizativas, la cosa es a otro precio y en otra dimensión.

En el alto San Juan y el alto Baudó, el ELN cumple con funciones bienestaristas y tiene mucho tacto en el tipo de relacionamiento que establece con la población; por eso, los habitantes de ciertas localidades tienen a este grupo en otra estima y percepción:

> Pero si uno se viene a una zona como el San Juan, por ejemplo, es probable que pobladores de allí tengan un concepto distinto, porque el ELN en todos los territorios del Chocó no se ha relacionado de igual manera con la población, ha tenido distintas formas de, según la zona, distintas maneras de relacionarse con el pueblo. Entonces, por ejemplo, en algunas partes, ustedes vieron por ahí el año pasado, en el Baudó, les hicieron hasta regalos a los niños, hicieron unas actividades lúdicas y no sé qué, no sé cuánto, con la población y de cierta manera involucrando, terrible eso, pero eso evidencia que el relacionamiento con esta población ha sido un poco distinto. Lo que quiero señalar es que en el Chocó no hay una sola forma de actuar del ELN según el territorio. (Entrevista 6, 2020)

Las estructuras del ELN que hacen presencia en esta zona tienen una importante capacidad de ordenamiento: vigilan y regulan los movimientos por todo el río San Juan, poseen un buen control sobre los motoristas, regulan la caza y la extracción de animales silvestres, controlan y regulan las actividades comerciales de los cascos urbanos, determinan las formas de explotación pesquera (está prohibido el uso de dinamita); e, incluso, es común ver a los integrantes de esta guerrilla por los cascos urbanos haciendo cumplir las normas, pero, también, departiendo con los pobladores como un mundano más (Entrevista 13, 2019). Esto no solo contrasta con lo expuesto en las zonas de reciente expansión, sino que también expone otro rostro territorial, mucho más arraigado y con mayor capacidad de ordenamiento.

Así, es común que en zonas como San José del Palmar y otras del San Juan, arreglen problemas de parejas, controlen el consumo de estupefacientes y microtráfico, y la comunicación de la población con la comandancia sea más que fácil y clara, lo que marca un claro contraste con otros lugares del departamento:

> Entrevistada: […] ahí veces ellos dan unas reglas (en referencia al ELN), ellos las reglas que tienen allá es el que fuma marihuana algo así, ellos no les gustan eso, ellos dicen no se puede terminar a la persona que la fuma sino al que la expende, ellos tienen ese sector así, sin expendedores, también ellos colaboran mucho en la solución de las peleas.
> Entrevistador: ¿Cómo es eso, puedes profundizar?
> Entrevistada: Por ejemplo, si usted le está quitando un bien y saben que ese bien sí le pertenece a usted, ellos meten ahí la mano, los llaman a los dos a una reunión y los hacen entrar en razón, y si usted se ve que no tiene la razón ni nada, entonces le dicen "o se compone o se va", en ese sentido también ellos colaboran.
> Entrevistador: Ok, ayudan a conciliar los conflictos, y ellos ¿cómo se enteran de estos conflictos, o cómo terminan conciliando estos conflictos?
> Entrevistada: Porque es que ellos regaron un número, entonces casi todos los municipios y veredas tienen ese número y ellos se comunican con ellos por medio de ese número.
> Entrevistador: Pero es un número de Whatsapp o…
> Entrevistada: Sí, exacto. (Entrevista 17, 2019)

La anterior versión es complementada por la siguiente cita, que muestra desde qué momento empezó dicho tipo de regulación, los ámbitos de regulación, que llegan hasta la vida política local y organizativa, el desplazamiento de personas, entre otras cosas:

> […] a partir de la salida de las FARC, es uno de los municipios en donde logró posicionarse y robustecer su operación, ¿por qué? Porque por el lado de Nóvita, tienen […] los campamentos de reclutamiento y en San José del Palmar, lo que hacen ya es una operación más para la cuestión del control de hoja de coca, y ahí es en donde digamos que es un centro de mando. […] inclusive se ha reconocido el tema de […] un control social hacia los liderazgos de las Juntas de Acción Comunal. Están regidas prácticamente por el ELN en San José del Palmar, tienen hasta una injerencia también en la definición político formal del municipio, entonces es prácticamente ahí el nivel de injerencia y para la toma de decisiones en todos los sentidos, es muy marcada, ellos llegan incluso a tener controles de censos, a decir quién entra, quién sale […] (Entrevista 23, 2020)

Todos estos factores y facultades inciden en una percepción radicalmente opuesta a la que tiene el ELN en zonas del medio o bajo Atrato, para dar dos ejemplos; ya que en el Alto San Juan sí el frente de guerra Omar Gómez si se muestra y actúa como la guerrilla conciliadora que, primero busca concertar y tramitar, y cuando esta instancia no funciona, ahí sí es justificable y legítimo el ejercicio de la violencia:

> Entrevistada: ¿Y tú, cómo sentiste ese cambio, de que se va la FARC y llega el ELN, este grupo es diferente a las FARC?

> Entrevistada: Sí, ese grupo ELN es diferente a las FARC, porque él antes de hacer ejecuciones o de llamar a la gente para decirle váyase, le damos tanto tiempo de estar acá, él coge y averigua primero, investiga, y entonces ya cuando investiga y ve que ya es verdad lo que se han dicho de la persona, pues ya lo llaman a rendir cuentas y le dicen si es muy grave, pues lo que la persona hizo, le dicen: "Tiene tanto tiempo para retirarse del municipio" y si es gravísimo, lo ajustician.
> Entrevistador: ¿Y las FARC no hacían eso?
> Entrevistada: No, ellos de una mataban a la persona, nunca indagaban nada ni nada de eso; en cambio estos sí, y por si tienen más o menos el apoyo del campo, por lo que ellos le colaboran mucho al campesino. (Entrevista 17, 2019)

Entonces, en zonas como San José del Palmar, la estrategia de poder popular tradicional estaría plasmada, debido a que el ELN es la 'policía', la 'notaría' y la 'fiscalía'; una instancia tramitadora y de gestión de conflictos efectiva que hace ver innecesarias e ineficaces la institucionalidad del Estado local, regional y nacional:

> Entrevistador: ¿Cómo ha sido el tema de manejo de esta línea de denuncias?, ¿si ha sido efectiva la línea en que usted puede llamar a la guerrilla y decirle: Oiga pasó esto, pasó aquello, si ha dado resultado efectivo para la comunidad?
> Entrevistada: Todo el mundo casi nunca recurre a la Policía. ¿Por qué? Por ejemplo, un caso en que la mujer le golpea [...] el hombre golpea a la mujer ¿cierto? Van a la comisaria de familia a [...] sí, que tal y tal cosa y hasta ahí llegó todo, ¿cierto?, en cambio van donde ellos y ellos le cobran una multa al marido, si usted vuelve a golpear a su mujer tiene que pagar tanto, o si usted vuelve y repite después de la multa se va. Hay veces ellos dicen, no nos gusta meternos en cosas de líos de mujeres porque están peleando ahorita y por la noche están en la cama, entonces no, pero sí en cosas de terreno, así que usted le va a quitar el terreno a tal persona y usted no es el dueño y ella ha vivido tanto tiempo acá, entonces sí, ellos se meten. (Entrevista 17, 2019)

De esta manera, las aristas descritas y expuestas permiten pensar que los repertorios violentos y el proceso expansivo del frente de guerra Omar Gómez están sobre todo en función de su lugar y posición como estructura regional en la organización nacional del ELN, y en franca conexión con las lógicas y disputas armadas que se vienen dando con las AGC en torno al control y la monopolización de las economías territoriales y las bases vinculadas a ellas. En otras palabras, la adecuación y modernización organizacional de la cual ha sido objeto este ELN territorial, para emprender su proceso expansivo y lograr una mayor y mejor figuración dentro de la organización nacional, se muestra mucho más vinculado con sus apuestas y posibilidades de regular y extraer recursos de

ciertas economías territoriales, que con la consolidación de ciertos acumulados políticos y sociales sobre los que apalanca su accionar armado.

¿Una insurgencia predatoria? Entre el oro, la madera y la coca

En sintonía con lo expuesto hasta acá, el frente de guerra Occidental Omar Gómez actúa como un actor predatorio y rentista de las economías territoriales presentes en el Chocó; en particular, de aquellas que son más susceptibles de ordenar y extraer recursos por parte de ciertas organizaciones armadas, tales como la economía cocalera, la minería artesanal[25] y criminal[26] y la extracción maderera. El músculo tributario de esta estructura evidencia que, en comparación con otros frentes de guerra, no solo es limitado, sino que, además, es bastante acotado y casi que se circunscribe a las actividades mencionadas atrás. Hacemos esta referencia, porque en contraste con el Sol de Oriente o incluso con el frente de guerra Nororiental, encontramos que estos ELN territoriales tienen una mayor capacidad de tributación de las actividades económicas en sus zonas de influencia (ver lectura territorial de Arauca y Catatumbo). En efecto, si bien en el tiempo reciente el Omar Gómez ha intentado regular y tributar

25 De acuerdo a la Defensoría del Pueblo (2016, pp. 61-62) hay los siguientes métodos de explotación:

a) "Mina de agua corrida: este sistema utiliza el agua de las quebradas para desprender y lavar la grava. Con la ayuda del agua, el material cae en un canalón abierto a lo largo de la terraza en explotación. Mediante la separación de piedras se llega a la concentración de arenas que contienen oro que después es beneficiado mediante el proceso de lavado en bateas.
b) Guache: Se construye un pozo vertical y galerías o túneles subterráneos horizontales por donde se encuentra la cinta aurífera. Estos túneles se soportan con madera y se inyecta aire mediante ductos de ventilación. Esta estructura puede durar 20 años en operación.
c) Hoyadero: Técnica de excavación donde se hace un pozo vertical, hasta alcanzar el depósito aurífero, que puede estar a 15 metros de profundidad. La explotación se hace manualmente.
d) Mazamorreo: Se desarrolla a través de la gravilla de las terrazas y de los bancos en el río durante la época de verano. El concentrado de la gravilla se lava en bateas para obtener una refinación manual mediante la selección de la arena. Los autores señalan que en su mayoría esta técnica es desarrollada por mujeres.
e) Zambullidero: Consiste en extraer manualmente los metales que están en el fondo del río o quebrada, sumergiéndose con una piedra sobre la espalda (lastre), la cual ayuda a alcanzar el fondo".

26 En esta lectura se utilizará el termino de minería informal o ilegal para referirse a la actividad minera realizada sin una licencia formal, minería formal para la actividad realizada con licencia de explotación, minería tradicional para la actividad realizada por los pobladores ancestrales de las regiones y que realizan minería a pequeña y mediana escala, minería a mediana escala o mediana minería se refiere a los entables mineros de personas externas a la región que utilizan masivamente retroexcavadoras, minería a gran escala para la actividad realizada por empresas mineras formales tanto nacionales como extranjeras. No se utilizan los términos de minería ilegal o criminal para referirse a la presencia de actores armados en la cadena extractiva, pues este rol varía en cada región y entable (Aponte, Arboleda y Barrera, 2016).

otras actividades económicas como el transporte fluvial, el comercio, etc., sus posibilidades han sido exiguas cuando no infructuosas, debido a que la capacidad de extracción de recursos que tiene un actor armado depende, en buena medida, del tipo y forma de enraizamiento social tejido en los territorios. Esto podría indicar que este ELN regional no solo adolece de la falta de un andamiaje amplio para extraer recursos, sino que, además, tiene una capacidad limitada y pocos vínculos para insertarse en la vida económica chocoana, salvo en la coca, el oro y la madera.

Iniciemos por la minería. Esta es la actividad económica que ha estructurado los procesos de configuración territorial en el Chocó y sobre la cual se apalancaron, desde un inicio, los actores armados que han hecho presencia en el departamento. En efecto, consideramos que la cualidad de las instituciones extractivas conformadas, en el proceso de configuración regional, ha facilitado la inserción de los actores armados, debido a que pueden estar al servicio de quienes las regulan, pues quien establece las reglas de juego en torno a la explotación aurífera tiene un terreno ganado en los procesos territoriales donde sucede dicha actividad.

No en vano, desde los años ochenta, los noventas y aún en épocas recientes, se ha señalado el papel regulador y bienestarista que cumplen agentes como las extintas FARC, las AUC, los GSP y el ELN en esta actividad. A cambio de ordenar y regular las explotaciones artesanales y criminales (dicho de forma castiza, la posibilidad y capacidad de establecer reglas y normas claras en torno a la actividad), estos grupos han extraído recursos de la actividad minera y han ganado cierta ascendencia sobre las poblaciones vinculadas a esta actividad económica. Esto ocurre, en particular, en las subregiones del San Juan, Baudó y medio y alto Atrato, las cuales pueden ser catalogadas como los distritos mineros del departamento del Chocó (Defensoría del Pueblo, 2017a).

Por otro lado, de acuerdo con el relato inicial de esta lectura territorial, es posible señalar que la actividad minera no es algo reciente, sino que es una parte constituyente del territorio chocoano, pues desde tiempos coloniales viene desarrollándose. Lo que sí ha cambiado al interior de esta actividad, y que es clave para entender el presente de esta economía territorial, son las prácticas de explotación; en razón de que la lógica, modos producción y los agentes no han permanecido estáticos en el tiempo.

Para el caso que nos ocupa, podemos poner como punto de inicio los años setenta, cuando personas provenientes de la región paisa, gracias a la construcción de la carretera que viene de Medellín y que conduce al mar, llegaron a los ríos San Pablo y Quito (Atrato) (Meza, 2010). La particularidad de los recién llegados fue que la explotación del oro no la hicieron con las prácticas tradicionales de los nativos, sino que, vinieron con nuevas y mejores herramientas que permitían racionalizar y potencializar la

explotación del oro. Tal fue la introducción de las motobombas (1978), con las cuales empezaron a explotar las propiedades familiares de los nativos, con la constitución de sociedades (Meza, 2010; Meza y González, 2008). La particularidad de estos acuerdos era su carácter informal y los constantes cambios en las reglas de juego entre los involucrados, debido a la ausencia de un ente institucionalizado que regulara y dirimiera las tensiones que emergían en los distritos mineros.

Para la década del noventa, esta forma de explotación volvió a dinamizarse cuando llegaron personas del bajo Cauca antioqueño, las cuales fueron expulsadas por la inserción paramilitar y las interacciones armadas que tuvieron lugar en este proceso (Mosquera, 2009). El nuevo impulso consistió en que los foráneos introdujeron las dragas, las cuales eran mucho más eficaces que las motobombas en la extracción del oro de aluvión. No obstante, esta racionalización en la explotación no allanó el camino para transformar la condición de informalidad de la actividad, debido a que la escasa presencial estatal siguió facilitando los arreglos informales entre las partes. Además, en muchas ocasiones, esos arreglos dieron rienda suelta al recurso de la violencia privada para dirimir las tensiones y disputas alrededor del tema.

En efecto, cuando se insertaron los actores armados al departamento (años ochenta), se toparon con esta ventana de oportunidad para empezar a regular el negocio y asentarse de forma permanente en el territorio. No en vano, desde los años noventa hay referencias a las capacidades regulatorias de las FARC y el ELN sobre esta actividad económica y los dividendos que esto les representó (Entrevista 1, 2020).

El tercer punto de ruptura se dio al inicio del segundo milenio, por dos asuntos vinculados entre sí. El primero, por el aumento los precios de los mercados internacionales del oro; y el segundo, por los esfuerzos del Estado colombiano por institucionalizar, racionalizar e impulsar la actividad minera en el territorio nacional.

En el caso del Chocó, esta acción se llevó a cabo de manera inconsulta con los pueblos negros e indígenas, ya que el Ministerio de Minas y Energía reactivó la explotación aurífera, a través de concesiones a empresas mineras nacionales e internacionales, como la Anglo Gold Ashanti, en los municipios de Río Quito, Cantón de San Pablo, Condoto, Unión Panamericana, Istmina y Tadó (Cinep/PPP, 2015). De tal modo, las zonas mineras creadas en del departamento del Chocó terminaron superponiéndose sobre territorios ancestralmente ocupados y titulados colectivamente, algo que ya en sí mismo es bastante problemático y crea una serie de tensiones en las agendas de apropiación territorial (González, Expitia, Munar, De la Hoz y Sánchez, 2012).

La oportunidad que percibieron los mineros locales en los precios internacionales y la llegada de empresas mineras, crisparon los ánimos de

los pobladores chocoanos, quienes vieron reducidas sus posibilidades de explotación y usufructo, debido el arribo de propietarios e inversionistas ausentitas de Medellín, Cáceres, Zaragoza y El Bagre (Antioquia), con sus administradores y dragas; y, de compañías mineras del Brasil, las cuales empezaron a realizar explotaciones en condición de ilegalidad y sin contraprestaciones económicas significativas para los municipios (Colectivo Territorial Afrochocó, 2009; Escobedo y Guío, 2015).

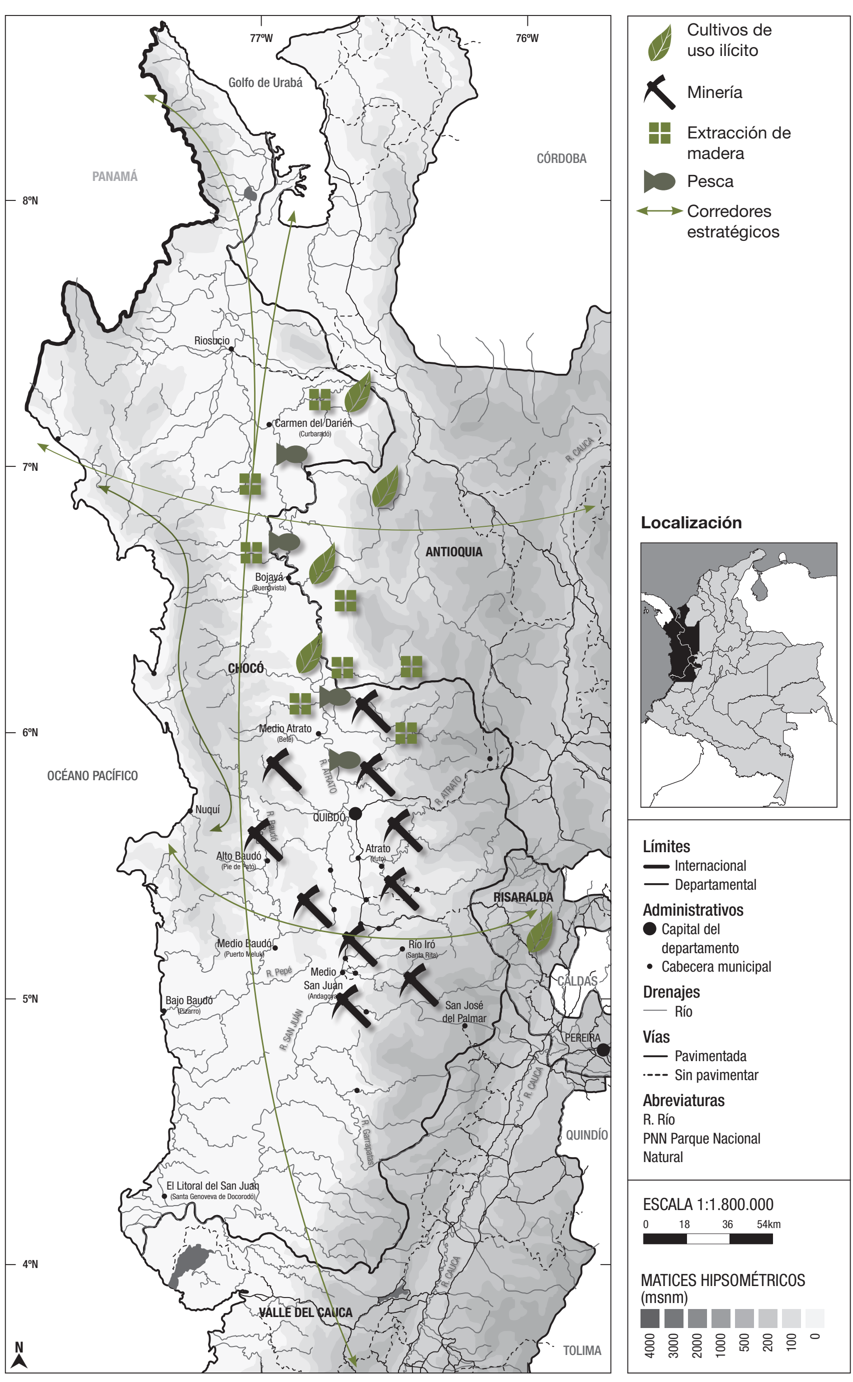
Subyacente a este agravio económico, las comunidades negras e indígenas se sintieron invisibilizadas y desconocidas por el Estado colombiano, en razón de que la concesión de títulos mineros no solo desconocía el usufructo ancestral que tenían estas poblaciones de las minas y el territorio; sino que también, su oposición a la llegada de intereses foráneos enmarcó la emergencia de amenazas contra líderes de los consejos comunitarios y las autoridades indígenas (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 004 –012).

En el caso de los indígenas, en zonas como Acandí y Unguía, los colonos habrían permitido el ingreso de maquinaría a las áreas de actividad minera sin consentimiento de los resguardos y sus autoridades; además, las pautas indígenas de territorialización se vieron trastocadas con una nueva carretera, cuya construcción tuvo el apoyo de las FARC. En el caso de los consejos comunitarios, se denuncia el impacto que ello tuvo en el seno del proceso organizativo, ya que se crearon divisiones internas en los consejos por acuerdos monetarios entre personas particulares de la comunidades negras y mineros específicos, relacionados con el ingreso de maquinaria pesada para la explotación en las zonas étnico-territoriales (Cinep/PPP, 2015; Defensoría del Pueblo, 2018).

El resultado de este tercer momento y de las escisiones que se produjeron al interior de los procesos organizativos, fue un aumento en el poder regulatorio de los actores armados, en especial de las FARC y el ELN, ya que estos grupos no solo trataron de darle claridad a las diversas formas de explotación (artesanal, criminal y legal), sino que también, empezaron a terciar en algunos conflictos derivados entre estos distintos actores y los intereses por los cuales estaban mediados. Respecto al primer punto, las tensiones y rupturas al interior de los consejos comunitarios emergieron porque se puso en jaque a la minería artesanal y tradicional de la zona; además, porque las negociaciones se dieron de forma puntual con ciertas familias y no con todo el consejo. Esto trajo como corolario, que muchas veces se terminase beneficiando a los representantes legales y no a toda la comunidad[27] (Meza, 2010; Cinep/PPP, 2015).

27 Este fragmento de una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo da indicios de esta dinámica: Esta situación había sido manifestada por la Defensoría del Pueblo en el año 2012: "[…], la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de que empresas mineras como la

Mapa 3. Economías territoriales 2010-2016



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al segundo punto, esta condición de mediador les posibilitó a los actores armados erigirse como una instancia regulatoria y "defensora" de los intereses de las poblaciones vinculadas a esta actividad, como muy bien lo expresa la dirigencia del Omar Gómez (Entrevista 2, 2020), A la vez, esto aumentó su capacidad extractiva de esta economía: empezaron a controlar y cobrar por el flujo y uso de insumos, personal y maquinaria, a cambio de ser una instancia clarificadora de la actividad económica (Defensoría del Pueblo, 2018). Un dato bastante diciente sobre las ventanas de oportunidad configuradas en las zonas mineras del Chocó es que se estimaba, para el año 2011, que el 99,2 % de las unidades productivas mineras del Chocó operaban de forma ilegal, según el censo minero departamental realizado por el Ministerio de Minas y Energía (*Revista Semana*, 2017). Esta situación, lejos de mitigarse, se mantuvo en los siguientes años, porque de las 527 unidades mineras existentes en 2016, el 99 % no estaban legalizadas; es decir que no contaban con los títulos mineros que otorga la autoridad competente para ejercer (Defensoría del Pueblo, 2016).

Así, a la falta de regulación y un alto grado de informalidad existente en las explotaciones, se suma otro factor fundamental para entender y analizar las posibilidades regulatorias que han tenido los actores armados sobre la minería aurífera en el Chocó: el arribo de gente foránea (colonos, en su mayoría de la región paisa). Precisamente, fueron estos contingentes poblacionales los que trastocaron el tejido social y las formas tradicionales de relacionarse con el entorno, así como los modos y las formas de producción (daños ambientales y menor espacio para el minero artesanal). En particular, la introducción de nuevas técnicas de explotación y el usufructo de la bonanza dorada, abrieron una serie de grietas en las organizaciones locales para que los actores armados intervinieran y extrajeran recursos de dicha actividad. De este modo, si bien los márgenes de utilidad de la actividad aumentaron, la ausencia de claridad en las instituciones mineras derivó en una serie de conflictos que, salvo las organizaciones armadas, ningún otro actor podía dar orden y certidumbre a estas instituciones por su carácter informal.

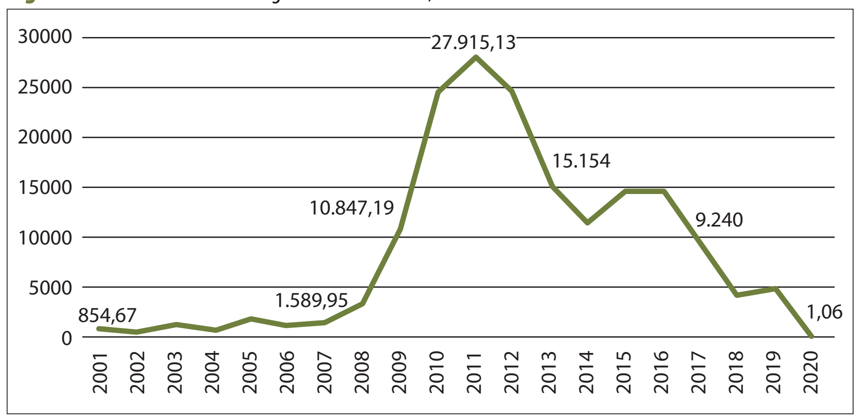
Condoto Platinum Limitada ha realizado acuerdos con algunos consejos comunitarios para la explotación de minerales, a través de una figura denominada 'Memorando de Entendimiento'. Mediante este procedimiento se nos ha informado que la empresa evita realizar un proceso de consulta previa toda vez que son los miembros de los Consejos Comunitarios los que hacen la solicitud del título minero, la empresa se encarga de respaldar todo el trámite administrativo cuando este se consigue, la empresa es finalmente la que realiza la explotación minera. Cabe agregar que las comunidades que resultarán afectadas por dichas explotaciones [...] desconocen las negociaciones (SAT, Defensoría del Pueblo AT NS n°. 017-012 a IR 019 10 A.I., p. 9).

De acuerdo con lo expuesto hasta acá, la actividad minera en el Chocó se encuentra atravesada por cuatro factores que se refuerzan mutuamente y explican las dinámicas en torno a ella. Primero, la llegada de grandes proyectos mineros que han generado conflictos con las comunidades. Segundo, es el arribo de población foránea que buscaba aprovechar los yacimientos minerales de manera ilegal, los cuales se extienden más allá de las zonas tradicionales de explotación. Tercero, la presencia e influencia de organizaciones armadas que aprovechan los dos primeros factores, para regular e imponer orden, y exigir tributación a dichos yacimientos para financiar el funcionamiento de las estructuras armadas sobre las que se sostienen (Massé y Camargo, 2012; Defensoría del Pueblo, 2018); y, por último y en cuarto lugar, el vencimiento de algunos acuerdos previos que se habían dado entre grupos armados en torno al negocio y el reparto de las unidades productiva (*El Nuevo Siglo*, 2013).

Para darse una idea del potencial productivo y la importancia que tiene la minería en esta área del país, especialmente de los distritos mineros del departamento, se debe señalar que esta es una de las ocho zonas donde más oro se extrajo entre los años 2001 y 2015 (Defensoría del Pueblo, 2017a). Y, todo parece indicar que el impulso que le dieron al negocio los armados y criminales, los nativos, las multinacionales y el Estado, llevaron a que, para los años 2010 y 2011, el departamento se posicionara como el mayor productor nacional (¡superando a Antioquia!). Ese aumento se explica porque las técnicas empleadas por estos agentes fueron las idóneas para la explotación de oro por aluvión (dragas y retroexcavadoras) (figura 5). No por nada, el departamento concentra el 46 % de este tipo yacimientos en el territorio nacional, con particular acento en los municipios de Nóvita, Istmina y Condoto (Defensoría de Pueblo, 2018; UNDOC, 2016; Cinep/PPP, 2015); pero, con el auge minero, las zonas de explotación se han expandido hasta el bajo Atrato, lo que muestra el dinamismo de esta actividad. Según uno de los entrevistados:

> Aparecen estas dragas o dragonas y la gente dice: "No es que el Chocó tiene mucho oro", y una parte donde más se trabajaba minería y era la parte del San Juan o Baudó, entonces la gente termina trayendo al Atrato toda esta manifestación, entonces, claro, la guerrilla empieza a darse de cuenta del oro. Entonces lo que te digo, el río Atrato se divide de un lado para el oro y del otro para la coca. (Entrevista 15, 2019)

Figura 5. Producción de oro en gramos en el Chocó, 2001-2020



Fuente:

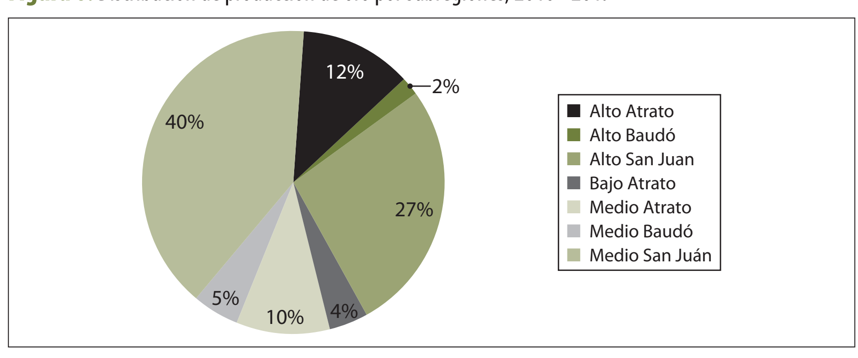
Así, una vez explicitados los factores, agentes y procesos que han facilitado la regulación armada de la minería aurífera, procedemos enseguida a exponer los atributos y el punto de partida de la regulación elena. Comencemos por señalar que, para inicios del 2010, la actividad minera ilegal estaba concentrada en los territorios colectivos y resguardos indígenas del Medio Atrato, los cuales eran de dominio fariano, en concreto, del frente XXXIV. Este no es un dato anecdótico, ya que permite intuir y refuerza una de las ideas esgrimidas en este texto, a saber, que el proceso expansivo del ELN se apalancó en los pactos previos entablados con la extinta insurgencia y ha ido buscando copar los territorios "vacíos" de regulación. Para tener idea de su alta rentabilidad en el presente, para ese entonces, se calculaba que la extinta guerrilla cobraba $2.000.000 de pesos mensuales por cada draga o retro y $10.000.000 por la entrada de una maquina nueva (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 004 –012).

El anterior punto da una idea de qué ámbitos regula y sobre cuáles impone tributos el ELN, que, con la salida del tablero de la guerra de las FARC, ha copado los espacios dejados por la extinta guerrilla y ha asumido sus funciones tramitadoras y exigencias tributarias en áreas del Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Riosucio, así como en los municipios del medio Atrato como Bojayá o del San Juan como Istmina, Medio San Juan y Sipí. Las estructuras elenas cobran cuotas de seguridad a los mineros por prestar servicios de protección a las explotaciones ilegales y tramitan las tensiones que se dan en los yacimientos auríferos, pues se encargaban de mediar en los conflictos entre trabajadores mineros y la comunidad, y aplicaban restricciones a la actividad. Asimismo, regulan y cobran por el flujo y desplazamiento de las personas y maquinarias vinculadas a la actividad y sobre lo producido (gramaje al oro) (Defensoría del Pueblo, 2018). Un buen

indicio de las posibilidades que ha tenido el frente de guerra Occidental de extraer recursos de esta actividad, es que esta insurgencia tiene presencia de larga data o no tan reciente en las zonas de mayor capacidad productiva del Chocó —como se ilustra en la siguiente figura—, ya que el medio San Juan y el Alto San Juan concentran más del 65 % del total productivo de los últimos diez años en el departamento (figura 6).

Especial atención merecen los municipios de Istmina y Nóvita, ambos registran el 32 % del total de la producción departamental. El primero con un total de 25.431.577,81 gramos producidos y el segundo con un total de 22.042.744,14 (figura 6). Estas dos cantidades no son nada despreciables y pueden dar indicios de la capacidad productiva de estas áreas, pero también de las posibilidades de consecución de recursos por parte del ELN, ya que debe ser evidente el subregistro de lo producido, debido a la alta informalidad en las explotaciones, la cual llega al 99 %, como señalamos anteriormente.

Figura 6. Distribución de producción de oro por subregiones, 2010 - 2019



Fuente: Sistema de información Minero Colombiano (SIMCO) y Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) (2020). Elaboración propia.

Incluso algunos registros de prensa señalan que esta insurgencia ya no solo se limita a ofrecer y cobrar por estos servicios, sino que también tiene a su disposición las herramientas y personas para realizar la actividad aurífera por sí misma. De ahí que en el año de 2018 se hayan incautado 44 máquinas para la extracción de oro en los ríos Cabí, Tamaná y Quito, las cuales supuestamente eran propiedad del ELN (*El Colombiano*, 2018a), y cantidades importantes de gasolina que sirven para el funcionamiento de la maquinaria que realizan las explotaciones (*El Tiempo*, 2018e).

Sin embargo, de manera similar a como sucede con el tipo de orden social impuesto por esta guerrilla, son notorias las falencias y las grietas que ensombrecen las reglas de juego, lo cual ha ido generando mayores tensiones y fraccionamientos de los procesos organizativos étnico-territoriales. Si bien la dirigencia de este frente de guerra sostiene que se oponen a la presencia de multinacionales y buscan defender a las comunidades

locales (Entrevista 2, 2020), el tipo de regulación y control que han establecido para el desarrollo de esta actividad tiene un tinte impositivo, ya que muchas veces prescinde de lo que puedan decidir los consejos comunitarios o resguardos con relación al desarrollo e impulso de dicha actividad (Defensoría del Pueblo 2017a, 2017b).

Un ejemplo de la dinámica descrita ocurrió en 2012, cuando las FARC aún existían y ordenaron suspender la actividad minera en Sipí, mientras ellos hacían un inventario de la actividad. Aprovechando este suceso, el ELN invitó a los dueños de las dragas y retroexcavadoras a trasladarse a las quebradas Santa Ana, río Taparal, Charco Hondo y Charco Largo (Sipí), al prometerles mayores garantías y seguridad para la explotación, sin haber realizado consulta alguna con los procesos organizativos y los mineros artesanales locales (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 017-012).

Esto claramente contrasta con lo que hacían las FARC, quienes, según los testimonios de ciertos mandos de esta extinta guerrilla, concertaban con la comunidad y buscaban que algunos dividendos se invirtieran en la precaria infraestructura de algunas localidades o distritos mineros:

> La única diferencia de nosotros con lo que los camaradas han dicho es la cuestión de la reglamentación minera que se dio sobre esta zona, la reglamentación minera, donde nosotros cuadramos en común acuerdo con las comunidades que la minería había que reglamentarla, donde se le daba el 18 % a la comunidad de todo lo que producía, que evitar que se dañaran los ríos, cuidar el medioambiente, todo ese tipo de cosas, eso ahí de esa situación (Cartografía 1).

Por otra parte, la poca claridad en la manera de actuar y regular por parte del ELN ha llevado a que, en ciertas ocasiones, ocurran tensiones y rupturas dentro de las mismas sociedades locales chocoanas. Según un expersonero del San Juan:

> Personas del mismo pueblo comenzaron a ejercer la minería, pero ya no la artesanal, sino con las retroexcavadoras de la gente, y son más ilegales que cualquiera. Entran con un permiso, creo que del presidente del consejo comunitario mayor, pero no sé en qué fundan ese permiso. (Fragmento entrevista, funcionario público del San Juan, 2014, citado en Defensoría del Pueblo, 2017a).

El papel que ha asumido el ELN y el vínculo que ha establecido con la explotación aurífera, permiten pensar que esta insurgencia ha ido adecuando su estructura organizativa para exigir tributación y monopolizar las diferentes cadenas del negocio. No por nada, en los últimos diez años, pasó de tramitar y regular aspectos puntuales de esta actividad (brindó seguridad, definió zonas de explotación, etc.), por su carácter informal, a ofrecer servicios bienestaristas y a involucrarse de lleno en la explotación aurífera, cuando empezó a controlar el desplazamiento de las

personas vinculadas a la actividad, la maquinaria y a cobrar un gramaje (Defensoría del Pueblo, 2017b), hasta que, en el presente, ha buscado llegar a apropiarse de los medios de producción. Así, estos impulsos monopolizadores explican unas de las aristas de la confrontación armada y abre al abanico de los factores que enmarcan las interacciones armadas con las AGC, pues queda demostrado que la disputa en el Chocó no solo es por la coca; también es por el oro y las bases sociales que están vinculadas a esta actividad económica (*El Espectador*, 2017a).

La madera

En cuanto a la extracción maderera, se trata también de una actividad que se ha configurado bajo una lógica extractiva desde décadas atrás y que representa otra fuente de ingresos para el ELN. Justamente, al igual que el oro, esta es otra de las economías territoriales que se disputa con las AGC, en particular, desde la salida de las FARC (2016), cuando varias familias chocoanas hicieron el tránsito de la economía de la coca hacia la extracción y comercialización ilegal de madera.

Todo indica que la situación se estaba saliendo de control, lo que obligó al ELN a actuar para darle coherencia y claridad a dicha actividad; y, a diferencia de otros ámbitos, todo apunta a que esta guerrilla sí contó con la aprobación de la comunidad para su control, pues fueron los mismos representantes de algunos consejos los que la contactaron para que pusiera orden sobre el tema (Pares, 2017). En parte, consideramos que esta ventana de oportunidad se debe a que la insurgencia fue capaz de convocar y dirigir un espacio con todos los agentes involucrados; a lo que se sumó que los acuerdos alcanzados no se hicieron en las zonas de reciente expansión, sino en áreas donde ya registraban presencia de larga data, como son las zonas del San Juan y alto Atrato.

De tal manera, en el año de 2016 se realizó una reunión entre los líderes de los consejos (48 comunidades), los representantes e intermediaros del corte y los encargados de la comercialización de la madera y la guerrilla, con la firme intención de sentar e instaurar unas reglas y pautas claras, que no solo fueran validadas y confirmadas por los asistentes, sino que, de igual manera, sirvieran como hoja de ruta para el desarrollo de esta actividad para los tiempos venideros. De esta manera, emergió el "Reglamento comunitario para la explotación y comercialización de madera río San Juan y sus afluentes", el cual instituyó una serie de normas en torno a las áreas y agentes de la explotación, el rol de comunidad en las tareas de conservación, la forma y los modos de comercialización, e incluso las sanciones correspondientes para quienes no cumplieran los parámetros establecidos (Reglamento comunitario

para la explotación y comercialización de madera río San Juan y sus afluentes, 2016; Anexo 1).

Con esto, el rol de intermediación y de instancia validadora de las reglas de juego por parte del ELN, al igual que las AGC, le permite "definir reglas en el tema de aprovechamiento forestal: dicen dónde aprovechar, dónde no aprovechar, qué especies, qué personas pueden explotar, y con esto limitan la autonomía de las comunidades para el aprovechamiento del recurso forestal" (Entrevista a un funcionario de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco), citado en *Verdad Abierta*, 2011). Con esto se han establecido en una instancia legítima para solucionar los problemas que emergen en torno a la actividad; y, de esta forma, tiene la capacidad de incidir de manera más profunda en los procesos de base de las localidades donde cumplen esta función.

En particular, podemos señalar que este tipo de acuerdos con las comunidades sí muestran una mayor capacidad de enraizamiento comparado con otras economías territoriales, pues acá su papel no solo contrasta con el carácter impositivo que tiene en otros ámbitos, sino que, además, evidencia que su forma de actuar en las zonas de presencia tradicional dista mucho de las áreas de reciente expansión, donde no negocia ni acuerda, solo impone.

El clúster cocalero chocoano

En lo que atañe a la economía cocalera, el involucramiento del ELN no ha sido estático en el tiempo, todo lo contrario, pues al igual que en otras regiones del país (ver capítulo "Descifrando al ELN"), la situación se ha ido transformando de la mano de las posibilidades o ventanas de oportunidad con las que ha topado esta guerrilla, al punto que en el presente pretende abarcar todos los eslabones de la cadena (cultivos, transformación y comercialización).

Este frente, de manera similar a otros casos en la escala nacional, inició una vinculación con esta economía de forma no solo tangencial, sino también insubordinada, con respecto del ELN nacional. Como punto de inicio podemos establecer el filo de los noventa, cuando las estructuras de los frentes que componen el actual Omar Gómez se insertaron definitivamente en el Chocó y, como forma de supervivencia y estrategia de recomposición, empezaron a realizar una serie de alianzas y acuerdos de no agresión y repartición territorial con los frentes farianos que hacían presencia en el Chocó (Defensoría, 2018).

Inicialmente pudieron vincularse al negocio, como en otras áreas del país, prestando y cobrando un monto de dinero por el uso de sus dominios territoriales o brindando seguridad a las rutas. No obstante, este rol ha cambiado, pues cada vez más el Omar Gómez se ha venido insertando en

los diversos eslabones que componen la economía de la coca. Esto explica, en parte, su disputa armada con las AGC, ya que pretende monopolizar las zonas de cultivos, los laboratorios y las rutas y zonas de comercialización y embarque. De ahí que este análisis sobre la vinculación con la economía cocalera tiene dos ejes de análisis: el primero está ligado a la importancia que tiene el dominio de ciertos espacios y áreas geográficas en la economía cocalera; y, el segundo se refiere a las capacidades de ordenamiento, regulación, extracción de recursos y las adecuaciones organizacionales que ha hecho esta estructura para buscar monopolizar dicha economía.

En lo tocante al primer punto, no sobra recordar que el Chocó tiene las condiciones idóneas para dicha actividad, y también que las campañas de erradicación forzosa de los inicios del milenio obligaron a los actores armados a trasladar sus estructuras armadas a zonas más seguras de refugio. Estas trajeron consigo los cultivos de coca y las bases sociales atadas a esta actividad. De tal manera, terminaron de configurar todo un clúster cocalero en este departamento, el cual es uno de los ejes centrales de la disputa entre el frente de guerra Occidental y las AGC (Defensoría del Pueblo, 2017a, 2017b).

Respecto a la configuración de este clúster cocalero, hay que señalar varias cosas. Primero, como mencionamos atrás, se dio la inserción definitiva de los cultivos de coca. Como se puede apreciar en la siguiente figura, pasaron de registrar cero hectáreas a tener un número importante en la segunda mitad de la década del 2000, mostrando una tendencia de aumento en los últimos años. En su mayoría estos están ubicados en las áreas más montañosas del departamento, que son precisamente las que tiene presencia y control del ELN: zonas rurales de Istmina, medio San Juan, San José del Palmar, Sipí, y Carmen del Darién, entre otros (figura 7).

Particular referencia habría que hacer al municipio de San José del Palmar, donde el ELN tiene un control absoluto sobre los cultivos de coca:

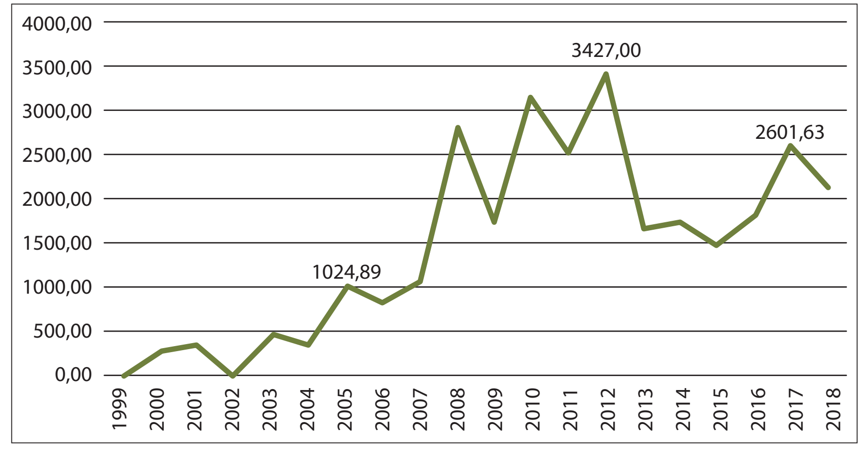
> […] este municipio en donde es de los pocos del departamento en donde el uso de cultivos, los cultivos de uso ilícito, tienen una acentuación particular que deriva en el control social exacerbado por parte del ELN y cómo han llegado incluso al tema de regular, por ejemplo, el personal que labora en las fincas cocaleras de San José del Palmar. Esto no se ve en ningún otro municipio. (Entrevista 23, 2020)

Segundo, la promoción de los cultivos por parte del ELN ha creado escisiones y tensiones al interior de las instancias organizativas. En particular, en los consejos comunitarios, ya que algunos de sus miembros han tomado la decisión de tener sembradíos de coca en el interior de sus propiedades, incluso siendo conscientes de lo que estiman las autoridades tradicionales:

> Entrevistador: ¿Y cómo es esa relación entre ellos y el ELN? ¿Con los consejos comunitarios allá?

> Entrevistado: Yo creo que ellos no tienen esa relación, siempre ha habido diferencias.
> Entrevistador: ¿Es igual que ustedes más o menos?
> Entrevistado: Sí, sí, igual.
> Entrevistador: ¿Y cómo hacen ellos para negociar, ¿qué se oye?, ¿qué se comenta?
> Entrevistado: Eso es un poquito difícil porque, pues, como el consejo comunitario allá es grande, acá ellos entonces, ellos tienen los dos municipios: el Medio y el Alto Baudó. Entonces ahí tienen sus dificultades también.
> Entrevistador: ¿Cómo cuáles?
> Entrevistado: Dificultades pues, hay unos que no están de acuerdo con eso, pero hay otros que sí, que le copian.
> Entrevistador: ¿Y por qué esos le copian? ¿Qué se oye?
> Entrevistado: Porque vuelvo y repito, se escucha es que algunos cultivan. Algunos cultivan, entonces este proceso para mí es bastante delicado, es muy delicado uno no puede estar […]. (Entrevista 21, 2019)

Figura 7. Tendencia hectáreas de coca en el Chocó, 1999-2018



Fuente: UNDOC. Elaboración propia.

Tercero, cabe decir que no todo es agencia de las organizaciones armadas, sino que, más bien, ellas han potencializado y usufrutuado ciertas condiciones estructurales del Chocó para desarrollar este tipo de economía. Por ejemplo, a la precaria presencia estatal, el poco control de las costas y los bajos índices en la calidad de vida, se le suman la existencia de rutas coloniales de contrabando y la comunicación natural que tienen las diversas cuencas hídricas, que atraviesan este departamento en sentido sur-norte (río Atrato); pero también, de otros que los atraviesan en dirección oriente-occidente (ríos Baudó o San Juan, para dar dos ejemplos).

De tal manera, se está en pocas horas en el mar Caribe o en el océano Pacífico para transportar la coca a EE. UU. vía Centroamérica.

Así, habría que señalar que la economía cocalera, más que crear o configurar rutas que tienen la función única de transportar la droga, se apalanca en las redes de comunicación tradicionales, pero que son estratégicas para el negocio en términos de comunicación y movilidad. Este es el caso de la ruta que utiliza toda la cuenca del Pepé hasta llegar a su desembocadura en el Baudó: esta cuenca hidrográfica, en particular Bocas de Pepé es un nudo de intercambios comerciales entre la zona alta y la zona costera y de comercio maderero, porque está ubicada estratégicamente entre la zona occidental y el oriente chocoano por la ruta del río Pepé (Arocha, 1998; Meza, 2010). Lo mismo sucede con la cuenca del Atrato en su parte media, la cual sirve para llegar al océano Pacífico y salir al mar Caribe:

> Entonces muchos de los narcotraficantes buscan la parte de Mutatá, desde Mutatá a bregar a cruzar. El cruce se hacía por ríos o las rutas de contrabando. Entonces, por un río se bajan, siguen por el Atrato y se meten por la desembocadura de otro hacia arriba y salen al pacífico o Caribe o sirve para meterse al monte (Cartografía 1).

Los ríos del departamento del Chocó son las rutas y los corredores naturales con los cuales los actores armados encadenan los cultivos, los laboratorios y las rutas de comercialización. Acá, la coca tiene una vida anfibia, pues a la vez que utiliza las selvas como vías terrestres, hace uso de los diversos ríos (Atrato, Baudó, San Juan, etc.) y sus afluentes para llegar a las zonas de embarque (Golfo de Urabá y la costa del Pacífico). Por tal motivo, hacer presencia y controlar un brazo o un tramo de una cuenca resulta de suma importancia para tener injerencia y control sobre ciertos eslabones de la droga, en especial, el que más rinde recursos como es la comercialización:

> Entonces, por ejemplo, como el Truandó, ríos como el Truandó, entonces, la coca la traen de Antioquia, la cruzan al Atrato, la bajan por un afluente del Atrato, la caminan por el Atrato, la suben por otros afluentes, hasta tirarla cerca al Pacífico, u otras las despiñan por el Atrato hacia lo que es el Golfo (de Urabá). Entonces ese es el control. Inicialmente, en la parte de Riosucio, luego se extendió hacia Carmen del Darién, luego se fue extendiendo hacia Vigía del Fuerte, luego se va extendiendo hasta el Medio Atrato, ahora ya lo hacen, incluso, desde el mismo Quibdó. (Cartografía 1)

Parece ser que uno de los puntos más importantes en las apuestas de reposicionamiento de los actores armados, algo que ayudaría explicar el descenso del ELN al bajo Atrato, es el municipio de Riosucio, debido a que es una bisagra natural entre el mar Caribe y la costa del Pacífico. Esto explicaría las recientes y cruentas interacciones armadas entre esta insurgencia y las AGC, que se materializan en el minado del territorio, los

asesinatos selectivos, los procesos de desplazamiento y los casos de confinamiento (*El Espectador*, 2019b). De acuerdo con un entrevistado:

> El ELN en este momento tiene la presencia más hacia arriba en las cabeceras en el río Chintadó, el río Truandó, porque es la conexión con Juradó. Y de ahí se conecta hacia Napipí del Bojayá. Entonces su concentración de los que están acá del sur al norte del Chocó, se concentran más de Bojayá hacia acá, al margen derecho del río Atrato por lo que le queda más cercano al Pacífico. De todas formas, como Riosucio tiene la conexión al Darién y del Darién a Panamá, entonces este es un territorio que es muy importante para los actores ilegales. (Entrevista 12, 2019)

La salida al océano Pacífico y al golfo del Urabá no es lo único que importa, la frontera con Panamá también es de interés, porque facilita el tráfico de armas y permite tener injerencia en una naciente y creciente actividad económica ilegal: el tráfico de inmigrantes provenientes del mundo Caribe, asiático y africano (RCN *Radio*, 2019).

La ubicación de los laboratorios de transformación de la hoja de coca, en particular, que estarían en manos del ELN, expone dos puntos. Uno, refuerzan nuestra intuición de que el posicionamiento y proceso expansivo hacia las partes bajas y costaneras del Atrato, Baudó y San Juan tienen como fin controlar y llegar a las rutas de comercialización y hacia los puertos de embarque. No es casualidad que, de la totalidad de cocaína incautada, entre los años 2010-2015, los municipios que encabezan la lista con mayores incautaciones sean los que están ubicados en las costas de los dos mares: Bahía Solano (26,1 %), Acandí (24,5 %), Litoral del San juan (20,5 %), Juradó (16,6 %) y Bajo Baudó (5,6 %) (Defensoría del Pueblo, 2017a). Esto explica que las autoridades hayan decomisado importantes cantidades cocaína (1.580 kilogramos) listas para ser enviadas en zonas de Bahía Solano, las cuales, presuntamente eran de propiedad de la compañía Néstor Tulio Durán del frente Resistencia Cimarrón (*El Nuevo Siglo*, 2017a).

Y, dos, que los laboratorios se ubican de acuerdo al enraizamiento que tiene este grupo en las zonas de presencia tradicional; es decir, donde más tiempo y mejor destreza ha mostrado esta insurgencia para incrustarse en los procesos territoriales. No por nada, las acciones de desmantelamiento de este tipo de infraestructura, por parte de la fuerza pública, se han dado y focalizado en áreas del San Juan y del alto Atrato. Asimismo han sido destruidos laboratorios en Istmina, con capacidad de producir dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína (*El Tiempo*, 2018d), en el corregimiento de Ingara (San José del Palmar), donde estaban ubicados 21 laboratorios para el mismo fin (*El Nuevo Siglo*, 2019b); en zona del Guachal, Copomá y las Peñitas, en el Litoral de San Juan, y en el río Baudó (*Chocó 7 Días*, 2020; CGFA, 2018).

Mapa 4. Chocó. Economías territoriales 2017-2019

Cultivos de uso ilícito
Minería
Extracción de madera
Pesca
Corredores estratégicos

Localización

Límites
Internacional
Departamental
Administrativos
Capital del departamento
Cabecera municipal
Drenajes
Río
Vías
Pavimentada
Sin pavimentar
Abreviaturas
R. Río
PNN Parque Nacional Natural

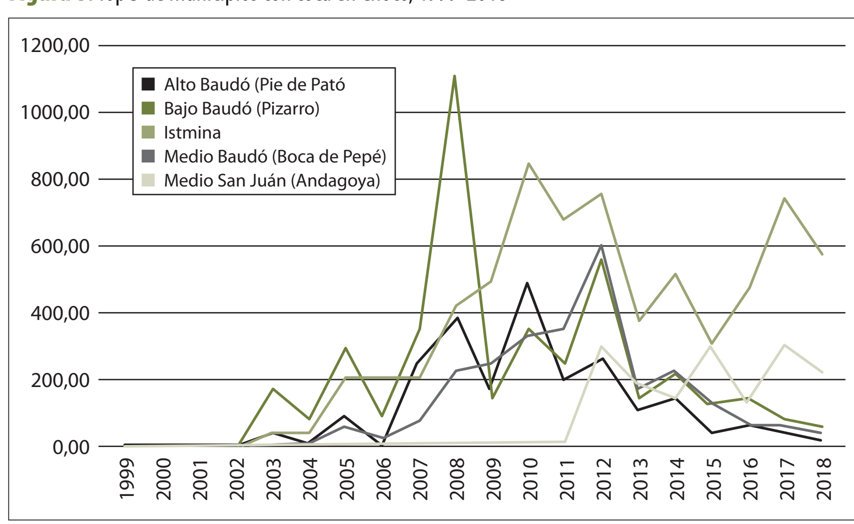
ESCALA 1:1.800.000
0 18 36 54km

MATICES HIPSOMÉTRICOS (msnm)
4000 3000 2000 1000 500 200 100 0

Fuente: Elaboración propia.

Lo resaltado atrás se refrenda en la siguiente figura, la cual enseña cómo la presencia territorial del ELN se solapa con los municipios que mayor presencia y extensión de cultivos de coca han tenido históricamente en el departamento del Chocó. Tales son los casos del Alto Baudó, medio San Juan e Istmina (figura 8). Así, se ratifica la idea de que esta guerrilla está ampliando su presencia hacia los eslabones superiores del negocio, ya que su reposicionamiento territorial muestra claramente la intención de vincular las zonas de cultivos con los laboratorios de coca y las rutas de comercialización.

Figura 8. Top 5 de municipios con coca en Chocó, 1999-2018



Fuente: UNODC. Elaboración propia.

Por otro lado, respecto al involucramiento del ELN con la economía cocalera, hay que remarcar que, en el presente, el frente de guerra Occidental se encuentra completamente implicado en el negocio. Esto no solo contradice los matices y justificaciones señaladas por "Antonio García", quien indicó que el involucramiento de esta insurgencia solo estaba constituido por un cobro de un impuesto revolucionario; o, de Ramiro Vargas, quien sigue negando tajantemente cualquier vinculación, como se mostró en el capítulo uno de este libro. En cambio, la información recolectada muestra el papel activo que asumido este frente y cómo su estructura organizacional se ha ido adecuando para dicho fin. Veamos.

Un aspecto a señalar de primera mano, es que esta estructura haya asumido, presuntamente, una posición antisustitución, ya que todo indica que fue el responsable del asesinato de Wilson Quetama y Claudio

Chávez (2018). El primero era excoordinador de la Mesa municipal de participación de víctimas del conflicto armado y adelantaba acercamientos con instituciones del nivel nacional y organizaciones no gubernamentales para que las familias del corregimiento de la Italia fueran incluidas en los PNIS. No obstante, este fue ultimado por el ELN, cuando personas armadas de esta insurgencia lo retuvieron (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 066-18; *El Espectador*, 2018b). Y Chávez, quien también fue ultimado, al parecer por las mismas causas (*La* FM, 2018). Así, estos dos eventos frenaron cualquier promoción o impulso del programa de sustitución. Lo mismo se puede decir del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, el cual fue ultimado por el Omar Gómez, en un comunicado la dirección señaló: "la dolorosa muerte del gobernador Aulio Isaramá nos afecta como ELN, nos comprometemos a un ejercicio de reflexión a todos los niveles internos para que hechos como este no se vuelvan a repetir" (*Verdad Abierta*, 2017b).

En el presente, se señala que el frente de guerra Occidental controla el transporte de insumos y sus rutas al tiempo que brinda seguridad a la cadena productiva de la coca y exige tributación a cada uno de sus eslabones. La participación de la población se limita a recibir órdenes o sugerencias del eslabón de la cadena productiva en el que debe trabajar y recibe el dinero que corresponde:

> El actor armado te maneja todo, entonces ellos qué dicen: ¿quién quiere ir a raspar? Ellos van y llevan sus químicos, tú vas y ayudas en el proceso. Y ahora, bueno, ¿quiénes la quieren sacar? Entonces tú también decides. Ahorita como son grandes extensiones de tierra, lo que ellos utilizan son a las personas de la comunidad como venga siempre, venga desyerbe y eso a usted se le devuelve. (Entrevista 12, 2019)

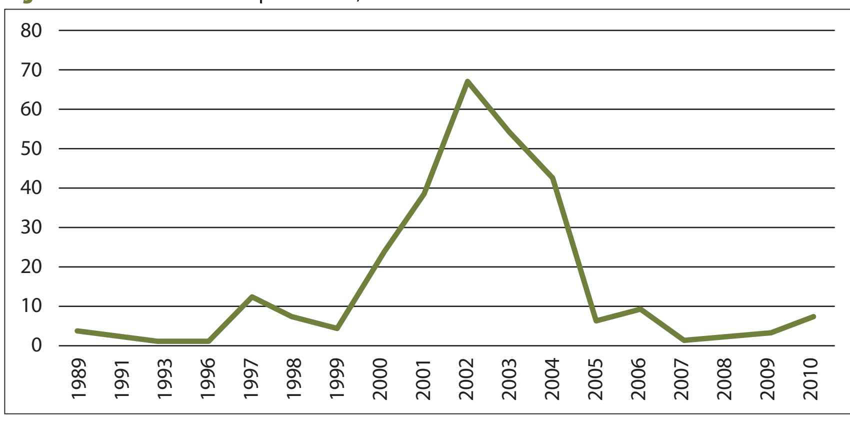
Es tal el alto nivel de involucramiento de este ELN territorial con el negocio de la coca, que se lo señala de ser propietario de medios de transporte tales como sumergibles o avionetas que son utilizados para el transporte de la cocaína. Por ejemplo, con la operación en desarrollo de La Barbudo, las autoridades localizaron un sumergible en la vereda El Limón, del municipio de Istmina, que, según fuentes de inteligencia de la fuerza pública, habría sido presuntamente construido por el frente "Ché" Guevara (*El Nuevo Siglo*, 2017c). También, en otro operativo las autoridades encontraron una fábrica artesanal de avionetas, durante una operación realizada en el municipio de Condoto. En el campamento se hallaron pequeñas aeronaves que podrían ser utilizadas para transportar la droga hacia Centroamérica (*El Tiempo*, 2011). En el lugar se encontraron y decomisaron motores, manuales técnicos de aviación, geoposicionadores y equipos de comunicaciones para acondicionar la aeronave (*El Colombiano*, 2011).

El secuestro más allá de los recursos

Para cerrar este apartado, hay que señalar que una última fuente de ingresos del Omar Gómez son los secuestros, pues a la resonada y publicitada retención de Odín Sánchez Montes de Oca, se suman otros casos que no están tan vinculados a fines políticos, pero sí económicos.

En efecto, lo que se observa en cierta tendencia estadística es que este grupo armado ha sido el principal responsable de este tipo de retenciones económicas en el departamento, ya que no solo concentra la mayor tasa entre todos los actores armados, sino que también es señalado de ser el principal perpetrador de ciertos hechos emblemáticos en el Chocó que han involucrado secuestros masivos en zonas turísticas o lugares recreativos como clubs o fincas en zonas rurales. Basta recordar los secuestros masivos que tuvieron lugar al inicio del milenio, tales como el de la ensenada de Utría, en el año 2001; el del coordinador científico del Instituto de Investigaciones del Chocó, Jairo Miguel Guerra, el presidente de la Asociación Campesina del Alto San Juan, Aristarco Mosquera y de tres mineros en la vía Quibdó-Istmina (*El Tiempo*, 2002); o el secuestro de seis personas en el club social Selva Resort de Quibdó (*El Tiempo*, 2001).

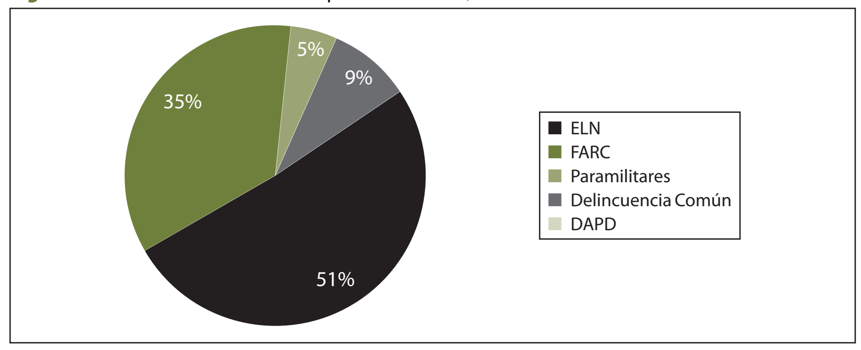
Figura 9. Secuestro en el tiempo en Chocó, 1989-2010



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

De tal manera, no debe extrañar que esta insurgencia tenga los más altos registros históricos en las tasas de secuestro en el departamento, ya que acumula el 51 % del total de la muestra; algo que va explicar en el presente la persistencia de este tipo de prácticas, tanto para fines políticos como económicos.

Figura 10. Distribución de secuestros por actor armado, 1989-2010



Fuente: CNMH. Elaboración propia.

En los últimos años este frente se ha mostrado como una de las estructuras que más ha recurrido a los secuestros masivos y a particulares como forma de financiación. Por ejemplo, en el año 2017 se presentó el secuestro del señor Genarino Gamboa, líder comunitario del Corregimiento de la Loma Pueblo Nuevo y minero de dicha localidad, un año después, en Riosucio, el de Edwin Octavio Sánchez (SAT, Defensoría del Pueblo AT n°. 012-18; *El Espectador*, 2018d). También, se presentó un secuestro masivo (8 personas) en Nóvita (*El País*, 2017a), e incluso, han llegado a tener en cautiverio a personas menores de edad, como fue el caso de Mayerly Cortés al ser acusada de ser informante de la fuerza pública (*El Heraldo*, 2018).

Conflictividades recientes

Con la narrativa construida hasta acá, es posible indicar que no es un gran hallazgo el hecho de remarcar que el frente Omar Gómez es uno de los principales agentes y factores generadores de las conflictividades sociales en el Chocó.

Este rol se explica porque sus apuestas armadas, y las interacciones violentas que se derivan de estas, han redundado en un importante impacto humanitario sobre los pobladores chocoanos, que, muchas veces, se ha materializado en casos de desplazamientos masivos, confinamientos, exposición de los no combatientes al fuego cruzado o a los artefactos explosivos (minas antipersona) que utilizan tanto esta guerrilla como las AGC para defender sus dominios territoriales.

Evidencia de lo esgrimido son todos los informes del Acuerdo Humanitario ¡Ya! en Chocó, los cuales han sido referenciados a lo largo de esta lectura territorial, allí se expone cómo el Estado colombiano y la inoperatividad de la institucionalidad han llevado a que sean los propios habitantes chocoanos (las autoridades de los consejos comunitarios y de los

resguardos indígenas), los que deben interactuar y negociar cotidianamente con los actores armados, para delimitar y reclamar las acciones y estrategias de las organizaciones armadas que hacen presencia en sus territorios.

Ahora bien, esta capacidad de negociación y adaptación no implica que no se hayan mitigado de forma certera los efectos directos y colaterales de las acciones que desarrollan los armados en el Chocó. Las condiciones económicas, ambientales y sociales de las poblaciones han sufrido importantes trasformaciones, debido a que la presencia del ELN, las AGC y la fuerza pública han dejado grandes pérdidas y consecuencias humanitarias que hoy se evidencian en fracturas organizativas, temor y desconfianza generalizada y desplazamientos masivos, con la consiguiente afectación de la autonomía y organización al interior de las diversas organizaciones de base (Defensoría del Pueblo, 2017a).

Vale la pena recordar lo resaltado por las diócesis de Quibdó, Istmina y Apartadó, las cuales señalan que el ELN, las AGC y otros grupos menores continúan con su operar bélico y delictivo en casi todo el departamento, y este accionar impacta de manera directa e indirecta a la población civil. Esta dinámica puede verse en la extracción de recursos de economías ilegales (minería, coca, explotación maderera, etc.), las extorsiones directas a ciertos renglones económicos como el comercio y el transporte; e incluso, de forma directa y contundente, en la instalación de minas antipersonales que limitan la movilidad en el territorio, el reclutamiento de personas menores de edad, el hurto de animales domésticos para alimentar la tropa y la realización de convocatorias para que las comunidades participen bajo mecanismos de presión en reuniones, entre muchas otras.

Para algunos, es tal gravedad la situación, que el Chocó presenta casi todo el repertorio de los posibles hechos victimizantes que tiene el lugar en un conflicto armado, y, en particular, aquellas acciones que generan mayor impacto humanitario y destrucción del llamado tejido social:

> Aquí el problema de seguridad es enorme y está a punto de haber una tragedia. Tenemos comunidades confinadas, desplazadas, crecen las amenazas, los asesinatos, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, la utilización de menores en actividades ilícitas, y todo agravado por la pobreza y el abandono. (Entrevista a alcalde de El Carmen del Darién, Herlin Ibargüen, citado en *El Espectador*, 2018a).

Las preocupaciones de las comunidades también tienen que ver con el incremento de cultivos de uso ilícito que se registra en ciertas localidades del departamento, pues esta ha representado en el último tiempo una amenaza para sus habitantes, el medioambiente y una profundización de la crisis humanitaria. Según ONUDC, y como se pudo apreciar en las figuras 7 y 8, se ha registrado un aumento en las hectáreas sembradas con hoja de coca: en 2016 se pasó de tener 1.803 hectáreas a 2.611 hectáreas en 2017.

Asimismo, a lo anterior se suma la explotación minera que continúa sin freno en las selvas chocoanas, bajo una lógica armada de regulación y extracción. Si se toma en cuenta el informe de monitoreo de deforestación, se puede establecer que la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito ocasionaron la deforestación de por lo menos 10.000 hectáreas de selvas y bosques chocoanos en todo el 2018, lo cual convierte a este departamento en el sexto con mayores afectaciones por este proceso en el país.

Por otro lado, uno de los principales aspectos que se ha visibilizado con las conflictividades sociales generadas por las dinámicas violentas recientes, es que el papel del Estado en este proceso es de considerable importancia. Las operaciones armadas que han desplegado no solo han generado algunos impactos humanitarios, sino que, además, otro de los aspectos que sale a la luz es su incapacidad para sustituir los órdenes erosionados de las extintas FARC; ya que esto está en estrecha relación con las conflictividades sociales señaladas atrás.

De acuerdo con el cuarto informe del instituto Kroc (2018-2019)[28], hay cuatro preocupaciones derivadas de los vacíos y las deficiencias del proceso de implementación: en primer lugar, la falta de garantías efectivas de seguridad y protección para líderes sociales, defensores de DD. HH y excombatientes de las FARC en los territorios priorizados; la segunda, se refiere a una preocupación por la incertidumbre y los retrasos en el proceso de reintegración política, social y económica de los excombatientes; la tercera, tiene que ver con la ausencia de ajustes normativos y legislativos necesarios para la implementación de lo acordado; y finalmente, llama la atención sobre la necesidad de dar una mayor atención a la llamada "paz territorial" y a los enfoques transversales de género y lo étnico.

Respecto al último este último punto, en el caso chocoano es muy visible y evidente cómo la crisis humanitaria ha afectado de sobremanera a las mujeres, personas menores de edad y población LGBTI. En el caso de las mujeres, se destacan como acciones victimizadoras la violencia sexual y el uso de estas labores domésticas en los lugares campamentarios; en el caso de los menores, se alerta sobre situaciones donde se da constantemente la utilización y el reclutamiento de este grupo etario; y, en la población LGBTI, se dan casos de intolerancia sexual y de amenazas constantes. No obstante, poco se sabe de estos eventos, porque la mayoría de hechos son llevados a cabo por grupos armados, por lo cual no son denunciados por la comunidad por temor a ser asesinados.

Según datos de OCHA, la guerra entre el ELN y las AGC ha dejado más de 15 líderes asesinados en 5 años y generó —solo durante el primer

---

28 Segundo informe sobre el estado efectivo de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Diciembre del 2016 a mayo del 2018.

semestre del 2018— el éxodo forzado de 1.074 personas y el confinamiento de 5.000 más, siendo los pueblos indígenas, con el 62 % de los casos, los más afectados. Esto puede deberse a que los indígenas se muestran más recios y más renuentes a entablar cualquier diálogo con los actores en disputa, de acuerdo con un líder indígena, este es su diagnóstico del asunto:

> [...] hay mucha diferencia entre las comunidades negras y las comunidades indígenas. Los indígenas no cultivamos la coca ni tampoco hacemos parte de ellos. Cuando me refiero de ellos, es de la guerrilla o de los paramilitares; no hacemos parte. Mientras las comunidades negras siempre, siempre hay 3, 5 que son auxiliadores, que son los campaneros, que son los que llevan la ruta, que son los que siembran, son los que llevan la alimentación, todas estas cosas. Entonces, ahí hay una diferencia bastante grande".
>
> Entrevistador: Claro, ¿Usted consideraría que eso también hace que los afecte menos el conflicto?
>
> Entrevistado: Menos no. Nos afecta más. Nos afecta más porque los negros nos conocen y nosotros conocemos a ellos, entonces, pues los negros nos conocen cuáles son nuestro fuerte, y por ahí nos atacan. Por ejemplo, los negros saben que nosotros tenemos un reglamento interno, un reglamento interno que trabajamos fuertemente y que tampoco, no dejamos que recluten los jóvenes y nosotros denunciamos lo que [...] por ejemplo: si estamos confinados, nosotros denunciamos. Si hay enfrentamientos, nosotros sacamos comunicados. No decimos, en tal parte están, no, pero simplemente decimos que hay un confinamiento o que hay un desplazamiento o que hay unas amenazas. Nosotros no nos quedamos callados, siempre ponemos en conocimiento de las autoridades. Entonces esa es la situación que hay entre con las comunidades negras. Pero las comunidades negras no nos dicen nada. Puede haber muertos y no dicen. (Entrevista 21, 2019)

Ahora, a pesar de que la anterior cita es veraz, también es necesario matizar la opinión de la persona consultada, por dos razones. Uno, su visión muestra que su narrativa está construida a anclada y a partir y de los diversos problemas y tensiones interétnicas existentes; y, segundo, lo que dice puede tomarse como parcialmente cierto. En algunas zonas del Chocó el ELN "tiene estructuras armadas o frentes 'completos' compuestos por población indígena que ha logrado reclutar" (Entrevista 22, 2020). No sobra recordar que la mayoría de titulares de prensa relacionados con este proceso en el Chocó siempre tiende a señalar casos de reclutamiento o deserción de miembros de las diversas comunidades aborígenes (*La* FM, 2019; *La Opinión*, 2018).

De ahí que no deba extrañar, que instancias o plataformas organizativas como la Mesa Indígena del Chocó, con el respaldo de la Organización Indígena de Colombia, le exigió al ELN en 2017:

> [S]u salida inmediata de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, respeto a nuestras leyes propias enmarcadas en la autonomía y gobernabilidad, para no ser víctimas del reclutamiento; desaparición, amenazas, detenciones, confinamiento, desplazamiento, asesinato y su negocio de cultivos, producción y comercialización de ilícitos. (*El Tiempo*, 2017d)

Es tal el impacto humanitario de esta insurgencia en años recientes, que ha logrado llamar la atención de entes judiciales nacionales como la Fiscalía General de la Nación, la cual puso en su mira a varios jefes regionales del ELN por concurso delictual penal de rebelión, secuestro extorsivo y homicidio agravado, pues fueron acusados de reclutamiento de menores y asesinato de un gobernador indígena (*El Tiempo*, 2017e).

Y, en el caso de las comunidades negras, las cuales no se quedan atrás, se denunció la crítica situación que estaban viviendo, a lo largo del 2019 e inicios del 2020, poblaciones asentadas en el medio Atrato, con mayor precisión en la población de Bojayá. De acuerdo con sus residentes, las disputas armadas entre el ELN y las AGC llevaron al confinamiento de miles de personas, las cuales quedaron en medio del fuego cruzado y en estado de confinamiento total; al punto que algunos recordaron con estos eventos los trágicos hechos del 2001:

> Para decir que en Bojayá se está consolidando, digo yo, un genocidio y, anterior a eso, también se ha presentado que ha habido múltiples denuncias y se reconocen alrededor de siete mil personas en confinamiento, de una población que está integrada, más o menos, de once mil habitantes, de once mil habitantes, siete mil están en estos momentos en confinamiento. (Entrevista 6, 2020)

Por eso, todas o al menos la mayoría de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo citadas en esta lectura territorial señalan y dan cuenta del riesgo persistente que corren las diversas poblaciones negras e indígenas, por cuenta de las interacciones armadas entre el ELN y las AGC en sus apuestas por copar los territorios dejados por las FARC. No es casualidad que sean reiteradas las denuncias y apremios que viven los chocoanos, por cuenta de los constates señalamientos que se dan de lado y lado en contra de líderes, lideresas y autoridades de pueblos indígenas y afros, por la incursión, ocupación y minado de los territorios étnicos, por la utilización de niños y niñas para labores militares, por casos reclutamiento forzado, y casos de violencia sexual, entre otros. Evidencia de las presiones y riesgos es que algunos catalogan la situación como una olla de presión:

> Domingodó es una olla de presión. O el Estado asume o va correr sangre. Los paras están dentro del casco urbano, igual que aquí en El Carmen del Darién, y el ELN ha dicho que, si no salen, los van a sacar a bombazos. La fuerza pública se hace la de la vista gorda para esperar a ver qué curso toman las armas. Ayer, los paras hicieron una reunión para invitar a

> nuestros jóvenes a sumarse a ellos. Están pagando buenos sueldos. A los exmiembros de las FARC les ofrecen entre $1 millón y $8 millones, dependiendo del rango. Esto está muy hijueputa para vivir. (entrevista a líder afro, citado en *El Espectador*, 2018a)

Este tipo de eventos y hechos enmarcan la emergencia de iniciativas como la que ha venido desarrollando el Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó, el cual insta al establecimiento del cese bilateral entre el ELN y el Gobierno nacional y propender por la permanencia de las partes en la mesa de negociaciones, pues la confrontación armada lo único que ha traído es un alto impacto humanitario para los chocoanos:

> […] el FISCH avanzó en la consolidación de una propuesta de Acuerdo Humanitario Ya, ahí están once puntos e, incluso, el primer punto, precisamente, tiene que ver con una salida negociada al conflicto armado. […] a todos los gobiernos le hemos planteado esa y, más ahora, cuando estamos sufriendo en carne propia la degradación del conflicto armado, pues nosotros sí que tenemos legitimidad y autoridad moral para pedir una salida negociada al conflicto, porque los muertos los estamos colocando somos nosotros, los reclutamientos los estamos, es a nuestros familiares que se nos están llevando, a nuestras mujeres es a las que están violando. (Entrevista 6, 2020).

Era tal la situación humanitaria para el año 2018 y el protagonismo eleno que, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) estaba adelantando los diálogos con esta insurgencia, los suspendió por los impactos humanitarios que estaba generando su actuar en el departamento. Al incumplimiento de este frente del cese al fuego bilateral, se sumaron casos que afectaron de forma directa a las organizaciones sociales existentes en el territorio: continuaron los procesos de reclutamiento, amenazas a líderes de procesos organizativos, etc. Por ejemplo, en el alto Baudó fue asesinado Aulio Isararama Forastero, gobernador de la comunidad Catru Dubaza Ancoso a manos del frente de guerra Occidental del ELN. Este crimen provocó el desplazamiento forzado de 100 personas según organismos humanitarios. Igualmente, se dieron acciones armadas en en la región del San Juan, en áreas de la gente del pueblo wounaan (*El Tiempo*, 2017e).

Así, este frente logró que el Estado no solo lo tuviera en cuenta, sino que el mismo ELN nacional lo reposicionó al interior de la organización, y como una manera de subvencionar su subrepresentación en los diálogos de Quito-La Habana, propuso incluir un delegado de este frente en la Mesa Territorial de Garantías para Organizaciones Sociales y defensores de DD. HH en Chocó[29]. De este modo, el gobierno tenía la cer-

29 Por la grave situacion de orden público que ha generado, es urgente que en los diálogos esté presente el jefe del ELN en el Chocó (Noticia 227).

teza de que estaba negociando con todo el ELN y no solo con una parte de este (*El Tiempo*, 2017).

De tal forma, lo que se pudo observar a lo largo de esta lectura territorial es que esta estructura del ELN no es ni un catalizador ni un impulsador de las conflictividades sociales presentes en el Chocó, sino, todo lo contrario, es un agente que las genera, ya que sus apuestas armadas y sus ínfulas de dominar ciertas economías territoriales y las bases sociales ligadas a estas, terminan por afectar y causar un impacto humanitario de importantes proporcioens en el departamento del Chocó.

Anotaciones conclusivas

En esta lectura territorial expusimos y explicamos las razones subyacentes al rostro territorial que tiene este frente de guerra del ELN en la actualidad.

Primero, advertimos y señalamos las razones por las cuales el proceso de configuración regional no facilitó ni la inserción ni el asentamiento inicial del ELN: sus discursos y proclamas revolucionarias en nada compaginaron con las agendas y demandas de los locales respecto a las formas en que se ha integrado territorialmente este espacio a la vida nacional. Además, esta insurgencia tampoco ha incidido de forma determinante en las comunidades, impulsándolas o dinamizándolas, en las instancias organizativas locales; y, menos aún, alcanzó a dirigir un proceso de colonización a semejanza de lo que hizo las extintas FARC, salvo el ordenamiento que ha hecho de colonos venidos de la región paisa, que se ubicaron en los intersticios de los mundos pacífico y andino.

Otra particularidad a resaltar es que el Omar Gómez es el resultado de un esfuerzo descoordinado e inconexo de diversos frentes de guerra del ELN nacional y de la DN. Esta realidad dio lugar a una estructura fragmentada y marginada política y organizacionalmente de la organización nacional. En efecto, durante las décadas del ochenta, noventa e inicios del milenio, este emprendimiento armado fue el más marginal en su organización y en el territorio.

Producto de algunos procesos de la escala nacional (fin a toda confrontación armada entre FARC y ELN, fin de la Seguridad Democrática, entrada al juego democrático de las FARC y negociaciones de Quito-La Habana), así como de dinámicas internas organizacionales de esta guerrilla (estrategia de recomposición por marginalización y vinculación de economías territoriales y apuesta de reposicionamiento al interior del ELN), el frente Omar Gómez ha mostrado un protagonismo inédito en años recientes, sobre todo desde el inicio de la presente década.

Lo anterior se ha materializado en que es el actor armado más activo, en términos militares, en todo el departamento del Chocó, con lo cual inició un

proceso de expansión inédito en toda la historia de esta estructura y se ha dedicado a copar los territorios dejados por las extintas FARC en zonas del medio y bajo Atrato, en el medio y Alto San Juan, en el alto y medio y bajo Baudó y en algunas zonas del litoral. El resultado de esto ha sido la emergencia de unas interacciones armadas con las AGC que han arrojado un alto e importante impacto humanitario; en particular, en las zonas de reciente expansión.

Además, hay que señalar, estableciendo una comparación odiosa con el antiguo orden de las FARC, que las reglas de juego con esta guerrilla no solo son inciertas y poco claras, sino que además se perfilan con un carácter bastante impositivo: no se consensúan ni acuerdan con la comunidad, sencillamente se establecen. Igualmente, esas normas, más que buscar clarificar la vida de los habitantes, se muestran más en función de las economías territoriales (minería y oro, principalmente) que quieren regular y controlar.

Por eso, consideramos que el actual proceso de expansión del ELN muestra una correlación importante con los espacios y las actividades económicas que le han permitido a este frente renovar su pie de fuerza y aumentar el poderío armado que ostenta. Esto explica que los órdenes configurados por esta guerrilla, en las zonas de reciente expansión (medio Atrato, Litoral, medio San Juan, etc.), se muestren bastante endebles por los escasos apoyos sociales configurados. De tal manera, esa condición enmarca que en el tiempo reciente las AGC estén avanzado sobre sus dominios territoriales y exponga que el proceso expansivo es menos consistente de lo que se suele señalar.

La única excepción a este caso sería las zonas altas del San Juan y del Atrato, donde el ELN es un actor estructurante del territorio, debido a que se logró incrustar en los procesos sociales y económicos. Evidencia de lo expuesto es que allá sí consensúa la reglas, los pobladores tiene fácil comunicación con la comandancia e incluso hay reglas de juego claras y duraderas en torno a las actividades productivas y la vida organizativa, como lo prueba el manual de convivencia en torno a la explotación maderera.

Dadas todas estas aristas, consideramos que este ELN territorial sería la versión criminalizada y militarizada del poder popular eleno, pues más que incidir e impulsar los procesos organizativos para condicionar la manera como el Estado se proyecta e integra los diversos territorios del país, este frente lo que muestra es que ha adecuado su estructura organizacional en función de los recursos a disposición y las bases implicadas a estas actividades económicas, ya que su vinculación con las economías territoriales pasa por la coca, el oro y la madera, y no mucho más allá.

Por eso y dada cuenta de este comportamiento, el ELN en esta parte del país, y contrario a lo que sucede en otros escenarios regionales, es uno de los principales agentes que propician las conflictividades sociales en el Chocó: su actuar y lógica violenta repercute de tal manera en la vida

de los chocoanos, que plataformas de segundo nivel y organizaciones sociales de base han desarrollado e impulsado espacios para visibilizar el impacto humanitario que tiene su disputa con las AGC. Desde hace cinco años son comunes los desplazamientos y confinamientos masivos, los asesinatos selectivos, casos de violencia sexual, de reclutamiento de personas menores de edad, la afectación de los lugareños por la instalación de artefactos explosivos, entre muchas otras prácticas.

Para cerrar, este reciente protagonismo militar le ha permitido a esta estructura reposicionarse al interior del ELN nacional y se sabe que, en el futuro para hablar de paz con esta guerrilla, es necesario que esta organización territorial tenga representación y esté sentada en la mesa, pues de lo contrario puede perfilarse como un saboteador, a semejanza de lo que hizo con los diálogos del gobierno Santos, cuando se convirtió en la piedra en el zapato en el avance de las conversaciones.

Bibliografía

Agudelo, Carlos (2004). La Constitución de 1991 y la inclusión ambigua de las poblaciones negras. En Arocha, Jaime (Comp.), Utopía para los excluidos. El multiculturalismo en África y América Latina. Universidad Nacional.

Aponte, Andrés y Benavides, Javier (2016). Las FARC y las organizaciones comunitarias en San Andrés de Tumaco. *Revista Controversia,* 206. 99-148.

Aponte, Andrés (2020). "La baja de "Uriel" y el futuro del ELN: una mirada más honda. *Razón Pública*. https://bit.ly/2MZkmeY

Aprile-Gniset, Jacques (1993). *Poblamiento y hábitat del Pacífico*. Universidad del Valle.

Arocha, Jaime (1998). La inclusión de los afrocolombianos, ¿meta inalcanzable? En Maya, Adriana (coord.), *Geografía humana de Colombia*. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional y Centro de Estudios Sociales.

Arocha, Jaime (2004). Ley 70 de 1993: utopía para afrodescendientes excluidos. En Arocha, Jaime (comp.), *Utopía para los excluidos. El multiculturalismo en África y América Latina*. Universidad Nacional.

Aponte, Andrés; Arboleda, Zohanny y Barrera, Víctor (2016). *Ambiente, minería y posconflicto en Colombia: Los casos de Catatumbo y Sur de Bolívar.* Cinep/PPP, NIMD, FESCOL y CORDAID.

Aponte, Andrés y Alba, Daniel (2020). ¿Para dónde vamos con el ELN? Análisis en medio de la cuarentena. *Cien Días.* https://bit.ly/3jnucmW

Bonet, Jaime (2007, mayo 10). ¿Por qué es pobre el Chocó? Banco de la República. https://bit.ly/3cMFT5r

Bonet, Jaime y Meisel, Adolfo (2006). *Polarización del ingreso per cápita departamental en Colombia, 1975-2000. Documentos de trabajo sobre economía regional*, 76. Banco de la República – Centro de Estudios Económicos Regionales, Cartagena.

Castro, Rudesindo (2004). Etnia, cultura, territorio y conflicto armado en el pacífico colombiano. En Arocha, Jaime (comp.), *Utopía para los excluidos. El multiculturalismo en África y América Latina*. Universidad Nacional.

Colectivo Territorial Afrochocó (2009). *Caracterización económica, social y etnocultural del corredor terrestre Ánimas-Nuquí.* Informe técnico para el Instituto Nacional de Vías (Invías) para solicitar la licencia ambiental de la Vía al Mar.

Colmenares, Germán (1973). *Historia económica y social de Colombia, 1537-1719*. Universidad del Valle.

Colmenares, Germán (1979). *Popayán: una sociedad esclavista, 1600-1800.* La Carreta Editores.

Colmenares, Germán (1997). *Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII.* Tercer Mundo Editores, Universidad del Valle, Banco de la República y Colciencias.

CNRR [Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación] (2010). *Bojayá. La Guerra sin límites.* Taurus.

CNMH [Centro Nacional de Memoria Histórica] (2017a). *Grupos Armados Posdesmovilización (*GAPD*), Trayectorias, rupturas y continuidades*. CNMH.

CNMH [Centro Nacional de Memoria Histórica] (2017b). *Una Guerra sin edad. Informe nacional reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano.* Panamericana.

Cinep/PPP [Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz] (2015). *Alimentando el Conflicto en Colombia: El Impacto de la Minería de Oro en Chocó*. Tierra Digna, ABColombia, Cinep/PPP, Unión Europea. https://bit.ly/3ryxTcx

Cubides, Fernando; Olaya, Ana y Ortiz, Carlos (1998). *La violencia y el municipio colombiano, 1980-1997*. Universidad Nacional.

Defensoría del Pueblo (2016). *La minería sin control. Un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos.* Imprenta Nacional. https://bit.ly/3tBrPBF

Defensoría del Pueblo (2017a). *Problemática humanitaria en la región Pacifica colombiana. Subregión Pacífica Chocó*. Imprenta Nacional.

Defensoría del Pueblo (2017b). *Problemática humanitaria en la región Pacífica colombiana.* Imprenta Nacional.

Echandía, Camilo (1998). Evolución reciente del conflicto armado en Colombia: la guerrilla. En Arocha, Jaime; Cubides, Fernando y Jimeno, Myriam (comps.), *Las violencias: inclusión creciente.* CES.

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (1986). I Congreso, Asamblea Nacional Camilo Torres.

ELN [Ejército de Liberación Nacional] (1990). II Congreso, Poder Popular y Nuevo Gobierno.

Escobedo, Rodolfo y Guío Nadia (2015). *Oro, crimen organizado y guerrillas en Quibdó.* FIP [Fundación Ideas para la Paz]. https://bit.ly/36QTmpb

FISCH [Foro Interétnico Solidaridad Chocó] y Mesa permanente de diálogo y concertación los pueblos indígenas en el Chocó (2019a). *Primer informe de seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó. Balance y análisis de la crisis humanitaria durante el 2018.* Diakonia.

FISCH [Foro Interétnico Solidaridad Chocó] y Mesa permanente de diálogo y concertación los pueblos indígenas en el Chocó (2019b). *Segundo informe de seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó.* Quibdó: Diakonia.

FISCH [Foro Interétnico Solidaridad Chocó] y Mesa permanente de diálogo y concertación los pueblos indígenas en el Chocó (2019c). *Tercer informe de seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó.* Diakonia.

FISCH [Foro Interétnico Solidaridad Chocó] y Mesa permanente de diálogo y concertación los pueblos indígenas en el Chocó (2020). *Cuarto Informe de seguimiento al Acuerdo Humanitario ¡Ya! en el Chocó.* [Documento Síntesis: Informes de las cinco Subregiones]. Diakonia,

Friedeman, Nina y Whitten, Norman (1974). La cultura negra del litoral ecuatoriano y colombiano: un modelo de adaptación étnica. *Revista Colombiana de antropología*, 17, 75-115.

García, Clara (1996). *Urabá: región, actores y conflicto, 1960-1990*. INER y CEREC.

García, Paola (2011). *La paz perdida: territorios colectivos, palma africana y conflicto armado en el Pacífico colombiano* [Tesis doctoral]. Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales con Mención en Ciencia Política; FLACSO México.

García, Paola (2014). Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. Una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción. *Estudios Socio-Jurídicos, 16*(1), 209-244. dx.doi. org/10.12804/esj16.1.2014.05

Gobernación del Chocó (s. f.). *Información del departamento del Chocó.* https://bit.ly/3ayvtn6

González, Luis Fernando (2003). *Quibdó Contexto Histórico Desarrollo Urbano y Patrimonio Arquitectónico*, Centro de Publicaciones, Universidad Nacional de Colombia, Medellín.

González, Leonardo; Expitia, Carlos.; Munar, Pedro; De la Hoz, Antonio y Sánchez Luís (2012). *Impacto de la minería de hecho en Colombia. Estudios de caso: Quibdó, Istmina, Timbiquí, López de Micay, Guapi, El Charco y Santa Bárbara*. Indepaz. http://www.uis.edu.co/webUIS/es/catedraLowMaus/lowMauss13_1/terceraSesion/Impacto%20

Granada, Soledad; Restrepo, Jorge y Vargas, Andrés (2009). El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes, en el conflicto armado colombiano. En Restrepo, Jorge y Aponte, David (eds.), *Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones* 1a ed. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Gutiérrez, Francisco y Wood, Elizabeth (2014). Ideology in Civil War: instrumental adoption and beyond. *Journal of Peace Research,* 51, 213.

Jaramillo, Orlando (2001). Del tiempo cambiado a la titulación colectiva; movimiento social y comunidades negras del Alto San Juan. En Pardo, Mauricio (ed.), *Acción Colectiva, Estado y etnicidad en el pacífico colombiano*. ICANH.

Jimeno, Myriam.; Sotomayor María y Valderrama, Luz María (1995). *Chocó diversidad cultural y medio ambiente.* Fondo FEN Colombia

Hermocillo, Julio (1992). *El Chocó, una historia permanente de conquista, colonización y resistencia.* Casa Episcopal.

Hoover Green, Amelia (2016). The commander´s dilemma: creating and controlling armed group violence. *Journal of Peace Research, 53*(5), 619-632.

[IGAC] Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2011). *Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Chocó*. IGAC.

International Crisis Group (2017). *Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz*. https://bit.ly/3cO5F9C

Laurent, Muriel (2008). *Contrabando en Colombia en el siglo XIX: prácticas y discursos de resistencia y reproducción*. Ediciones Uniandes.

Leal, Claudia y Restrepo, Eduardo (2003). *Unos bosques sembrados en aserríos. Historia de la extracción maderera en el Pacífico colombiano.* Universidad de Antioquia, Universidad Nacional e ICANH.

Massé, Frédéric y Camargo, Johanna. (2012). Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia, [V informe]. https://bit.ly/2YR7sCt

Maya, Adriana (1998). Demografía histórica de la trata por Cartagena, 1533-1810. En Maya, Adriana (coord.). *geografía humana de Colombia. Tomo Vi: Los afrocolombianos* (pp. 9-52). Instituto de Colombiano de Cultura Hispánica.

Medina, Carlos; Beltrán, Santos Alonso; Moreno, Diana Marcela; Caicedo, Eder Maylor; Rodríguez, Carolina; Gómez, David Felipe; Ávila, Ariel Fernando; Peña, Nicolás; Leal, Nelson; Manosalva, Andrés Felipe; Álvarez, Elizabeth (2011). FARC-EP *flujos y reflujos: la guerra en las regiones*. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS).

Meza, González, Sofía (2008). *Dragas y Catangas: memorias del cambio y de la permanencia cultural en el Río Quito.* Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Bogotá) y Centro de Estudios y Documentación de las culturas Afrocolombianas.

Meza, Carlos (2010). *Tradiciones elaboradas y modernizaciones vividas por pueblos afrochocoanos en la vía al mar*. ICANH.

Mosquera, S (2009). *El Istmo de San Pablo: recreación de una cultura* [Documento para de trabajo para la caracterización económica, social y etnocultural del corredor de ánimas-Nuquí] Colectivo territorial Afrochocó.

Pardo, Mauricio y Álvarez, Manuela (2001). Estado y movimiento negro en el Pacífico colombiano. En Pardo, Mauricio (ed.), *Acción Colectiva, Estado y etnicidad en el pacífico colombiano*. ICANH.

Paz y Reconciliación (2017). *El reglamento del* ELN *para explotar madera en el Chocó.* https://bit.ly/3pXKIwD

Reglamento comunitario para la explotación y comercialización de madera río San Juan y sus afluentes, 2016.

Ramírez, María Clemencia (2001). *Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*. ICANH.

Rueda, O (1993). Población y poblamiento. En Leyva, Pablo, *Colombia Pacífico*, FEN. Vol. II.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2004, mayo 21). SAT n°. 040-04. Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2006, agosto 31). SAT n°. 037-06. Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2009, abril 29). SAT n°. 011-09. Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2009, mayo 4). SAT, Alerta n°. 012-09. Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2010). SAT n°. 015-10. Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2010, noviembre 12). SAT, Alerta n°. 019-10A.I. Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2011). SAT n°. 05-11. Defensoría del Pueblo.

SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2012). SAT n°. 004 –12. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2012). SAT n°. 017-12. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2013). SAT n°. 014-13. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2013). SAT n°. 014-13. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2014, mayo 16). SAT n°. 008-14, 2014. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2015, diciembre 18). SAT n°. 027-15. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2016). SAT n°. 015-16. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2016). SAT n°. 020-16. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2018, enero 24). SAT n°. 012-18. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2018, agosto 21) SAT n°. 066-18. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2018, agosto 27). SAT n°. 068-18. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2018, agosto 27). SAT n°. 069-18. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2019, junio 12). SAT. n°. 025-19. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2019, julio 19). SAT. n°. 301-19. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2020, mayo 14). SAT n°. 21-20. Defensoría del Pueblo.
SAT [Sistema de Alertas Tempranas] (2020, julio 9). SAT n°. 030-20. Defensoría del Pueblo.
Sharp, William (1976). *Slavery in the Spanish frontier*. Oklahoma University Press.
Serge, Margarita (2011). *El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie*. Bogotá: Uniandes.
Suárez, Andrés (2007). *Identidades políticas y exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá, 1991-2001*. La Carreta Editores.
Tapia, Carlos (1999). *Territorio, recursos naturales y organización social entre la comunidad negra de Tribugá, municipio de Nuquí, costa Pacífica chocoana*. Fundación Natura.
Vásquez, Teófilo; Vargas, Andrés y Restrepo, Jorge (2011). *Una vieja guerra en un nuevo contexto: Conflicto y territorio en el sur de Colombia.* Pontificia Universidad Javeriana.
Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz (2002). *Panorama actual de los Parques Nacionales Naturales. https://bit.ly/3oTWxTe*
Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz (2003). *Panorama actual del Chocó*. https://bit.ly/3tyRdbm
Villa, William (2001). La sociedad negra del Chocó: Identidad y movimientos sociales. En Pardo, Mauricio (ed.), *Acción Colectiva, Estado y etnicidad en el pacífico colombiano*. Bogotá: ICANH.
Wade, Peter (1996). Identidad y etnicidad. En Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, Capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano. En

Escobar, Arturo y Pedrosa, A (eds.). *Pacífico, desarrollo o diversidad? estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. Bogotá: CEREC.

West, Robert (2000). *Las tierras bajas del Pacífico colombiano*, Imprenta Nacional de Colombia.

Whitten, Norman (1992). *Pioneros Negros; la cultura afrolatinoamericana del Ecuador y Colombia*. Centro cultural afroecuatoriano.

Wood, Elizabeth (2018). Rape as a Practice of War: Toward a Typology of Political Violence. *Politics & Society*, *46*(4), 1-25.

Wouters, Mieke (2001). Derechos étnicos bajo fuego: el movimiento campesino negro frente a la presión de grupos armados en el Chocó: el caso de la ACIA. En Pardo, Mauricio (ed.), *Acción Colectiva, Estado y etnicidad en el pacífico colombiano*. ICANH.

Prensa

Blu Radio (2019, marzo 12). Denuncian confinamiento de indígenas en Chocó por enfrentamientos, *Blu Radio*.

Caracol Radio (2002, agosto 21). Vuelve preocupación por secuestros masivos del ELN. *Caracol Radio.*

Caracol Radio (2017, diciembre 5). Frente del Eln en el Chocó desmiente que esté apartado de los diálogos. *Caracol Radio*.

Chocó 7 Días (2020, mayo, 11). Destruyen laboratorio de coca en el Litoral del San Juan. *Chocó 7 Días*.

CGFM [Comando General de las Fuerzas Militares] (2018, agosto, 23). *Operación 'Barbudo' afecta estructuras narcotraficantes del Eln, en Chocó*.

Contagio Radio (2020, enero 13). Con derecho de petición, Ejército exige a líderes del Chocó demostrar lo que denuncian. *Contagio Radio*.

DW *Español* (2019, junio 18). El ELN se hace fuerte en el Chocó. DW *Español.*

El Colombiano (2011, agosto 18). El Ejército decomisó coca y capturó a cinco del Eln. *El Colombiano.*

El Colombiano (2013a, abril 14). Tropas rescatan a cinco menores tras combates con Eln en Chocó. *El Colombiano.*

El Colombiano (2013b, octubre 13). Farc iniciaron paro armado en región de Atrato, Chocó. *El Colombiano.*

El Colombiano (2014, enero 5). Mensajes secretos revelan nexos de Farc con narcotraficantes. *El Colombiano.*

El Colombiano (2017a, marzo 6). Más de 300 desplazados en Alto Baudó. *El Colombiano.*

El Colombiano (2017b, agosto 8). Chocó aún sufre siembra indiscriminada de minas. *El Colombiano.*

El Colombiano (2018a, mayo 14). Incautan maquinaria para minería del Eln. *El Colombiano.*

El Colombiano (2019a, marzo 17). Chocó, Intimidado. *El Colombiano.*

El Colombiano (2019b, agosto 18). El Eln busca colarse del Chocó a Venezuela. *El Colombiano.*

El Colombiano (2019c, marzo 13). Con explosivos, ilegales confinan a comunidades. *El Colombiano.*

El Espectador (2010, enero 18). ELN se rearma en Chocó. *El Espectador*.
El Espectador (2015, diciembre 7). Alerta en Chocó por violencia del Eln. *El Espectador.*
El Espectador (2017a, marzo 17) Al Chocó no ha llegado la paz. *El Espectador.*
El Espectador (2018a, febrero 5). El Carmen del Darién, centro del conflicto. *El Espectador.*
El Espectador (2018b, abril 18). Líder social en Chocó habría sido asesinado por el Eln. *El Espectador.*
El Espectador (2018c, mayo 26). En Bojayá, la guerra no acaba. *El Espectador.*
El Espectador (2018d, julio 18). El Eln secuestró a un comerciante en Chocó. *El Espectador.*
El Espectador (2019a, julio 4). Advierten confinamiento y desplazamiento de 1.506 indígenas en Chocó. *El Espectador.*
El Espectador (2019b, noviembre 18). Un recorrido por la guerra en el Bajo Atrato. *El Espectador.*
El Espectador (2019c, noviembre 19). No es la primera vez que mueren niños en bombardeos de la Fuerza Pública. *El Espectador*
El Espectador (2020, enero 12) Bojayá. *El Espectador.*
El Heraldo (2014, marzo 14). Las Farc y Bacrim crean alianza delincuencial contra el Chocó: Policía. *El Heraldo.*
El Heraldo (2018, septiembre 16) Eln confirma el secuestro de una menor de edad en Chocó. *El Heraldo.*
El Mundo (2014, febrero 12) En el Chocó. *El Mundo.*
El Mundo (2017, febrero 09) Detenidos. *El Mundo.*
El Nuevo Siglo (2013, marzo 14). Minería ilegal unió a las Farc con las Bacrim en el Chocó. *El Nuevo Siglo.*
El Nuevo Siglo (2017a, marzo 24). Decomisados 1.580 kilos de coca al Eln en Chocó. *El Nuevo Siglo.*
El Nuevo Siglo (2017b, marzo 27). Ataque del Eln deja 5 personas muertas y 55 desplazadas. *El Nuevo Siglo.*
El Nuevo Siglo (2017c, julio 28) Decomisan al Eln sumergible eléctrico con capacidad para llevar 4 toneladas de coca. *El Nuevo Siglo.*
El Nuevo Siglo (2019a, marzo 20) Mujeres, víctimas de crisis humanitaria en Chocó. *El Nuevo Siglo.*
El Nuevo Siglo (2019b, septiembre 18). Desmantelan 21 narco-laboratorios del Eln. *El Nuevo Siglo.*
El País (2005, octubre 3). Cinco muertos y 40 desaparecidos tras un ataque de las FARC. *El País.*
El País (2012, diciembre 21). Mueren en Bombardeo dos cabecillas del ELN. *El País.*
El País (2017a, mayo 8). Mindefensa realiza consejo de seguridad en Nóvita, Chocó, tras secuestro masivo, *El País.*
El País (2017b, octubre 31). Violaciones inaceptables. *El País.*
El País (2019a, julio 5). El Gobierno repudia video del ELN con menores en el Chocó. *El País.*
El País (2020, mayo 17). Al menos tres mil desplazados dejan combates en Alto Baudó, Chocó. *El País.*

El Tiempo (2001, abril 16). Guerrilla secuestró a 6 personas en chocó. *El Tiempo.*

El Tiempo (2002, abril 10). Secuestro masivo en el chocó. *El Tiempo.*

El Tiempo (2008, agosto 16). Se desmoviliza el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), conformado por los hermanos Sánchez Caro". *El Tiempo.*

El Tiempo (2011, agosto 17). Hallan fábrica artesanal de avionetas del ELN". *El Tiempo.*

El Tiempo (2015, marzo 3). El alcalde del Alto Baudó cuanta que el Eln le hizo juicio político de 4 días. *El Tiempo.*

El Tiempo (2017a, abril 17). Desplazamiento afecta a 350 familias en Chocó. *El Tiempo.*

El Tiempo (2017b, mayo 1). Yo la paz aún no la veo, lo que tenemos es más desorden. *El Tiempo.*

El Tiempo (2017c, diciembre 6). Chocó, en alerta por crímenes del Eln pese a cese bilateral. *El Tiempo.*

El Tiempo (2017d, diciembre 16). Urgen decisiones. *El Tiempo.*

El Tiempo (2017e, diciembre 22). Por crisis humanitaria en Chocó, Fiscalía va por tres jefes del Eln. *El Tiempo.*

El Tiempo (2018a, marzo 5). Ejército incauta municiones de armas del Eln, en Chocó. *El Tiempo.*

El Tiempo (2018b, abril 12). Eln estaría tras asesinato de dos líderes sociales en el Chocó. *El Tiempo.*

El Tiempo (2018c, abril 13). Eln sería el autor de crimen de dos líderes. *El Tiempo.*

El Tiempo (2018d octubre 9). Ejército desmantela laboratorio de coca del Eln, en Chocó. *El Tiempo.*

El Tiempo (2018e, noviembre 11). Ejército incauta 36.000 galones de combustible ilegal en el Chocó. *El Tiempo.*

El Tiempo (2018f, febrero 7). Muere en Buenaventura menor que fue víctima de bombardeo en Chocó. *El Tiempo.*

El Tiempo (2020, enero 2). ¿Cuál es la situación en Chocó, donde denuncian toma paramilitar? *El Tiempo.*

La FM (2018, abril 11). ELN habría asesinado a dos líderes sociales en San José del Palmar, Chocó. *La Fm.*

La FM, (2019, noviembre 19). Así funciona el reclutamiento masivo de indígenas en el Chocó, *La Fm.*

La FM (2020, enero 3). ELN dejó Bojayá sembrado de minas: Paz y Reconciliación. *La Fm.*

La Opinión (2018, febrero 7). Desertaron cuatro indígenas reclutados por el Eln. *La Opinión*.

La Opinión (2020, enero 4). Urgen atención a violencia en Chocó. *La Opinión*.

Hoy Diario del Magdalena (2013, febrero 09). En cinco municipios de Chocó no hay clase por paro armado. *Hoy Diario del Magdalena*.

RCN (2019, febrero 12). Radio Preocupación en Acandí (Chocó) por paso de unos 700 migrantes irregulares. RCN *Radio*.

RCN *Radio* (2020, enero 25). Chocó registra unos 11.000 desplazados desde 2019. RCN *Radio*.

Revista Semana (2008, agosto 23). El ERG: la guerrilla que se rindió en el Chocó. *Revista Semana*.
Revista Semana (2017, diciembre 15). Lo que le ha hecho la explotación de oro al Chocó. *Revista Semana*.
Revista Semana (2020a, febrero 19). Así se reparte el ELN y el Clan del Golfo el control de Chocó. *Revista Semana*.
Revista Semana (2020b, marzo 18). Alto Baudó en crisis: crece desplazamiento tras decapitaciones. *Revista Semana*.
Vanguardia Liberal (2020, enero 08). Líder Bojayá insiste en que el Gobierno retome diálogos con el Eln. *Vanguardia Liberal.*
Verdad Abierta (2011, septiembre 19). La madera, otro negocio de grupos armados ilegales. *Verdad Abierta.*
Verdad Abierta (2017a, abril 27) ¿'Gaitanistas' avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?". *Verdad Abierta.*
Verdad Abierta (2017b, octubre 26) Eln, responsable de asesinato de líder indígena en Chocó,
Verdad Abierta (2018, agosto 5). Bloque Calima, un 'depredador' paramilitar marcado por el narcotráfico. *Verdad Abierta.*

Entrevistas y talleres de cartografías

Entrevista 1. Líder social de la zona del río Pepé (Medio Baudó). 2020.
Entrevista 2. Cuestionario enviado a la comandancia del frente de guerra Occidental, junio, 2020.
Entrevista 3. Carlos Velandia, exmiembro de la DN del ELN y gestor de paz, 15 de mayo, 2020.
Entrevista 4. Educador de Riosucio, bajo Atrato, septiembre, 2019.
Entrevista 5. Conversación con un miembro de la misión de verificación de la ONU, 26 de febrero, 2019.
Entrevista 6. Conversatorio con reconocido líder del Medio Atrato, en el marco del análisis de coyuntura de la Semana Cinep/PPP, 16 de febrero, 2020.
Entrevista 7. Académica experta en el tema y exdelegada por el Gobierno en los diálogos de Quito y La Habana, 2019.
Entrevista 8. Líder de plataforma organizativa de segundo nivel y miembro de un Consejo Comunitario del bajo Atrato, 29 de septiembre, 2019.
Entrevista 9. Pobladora del bajo Atrato, 30 de septiembre, 2019.
Entrevista 10. Conversación con miembros de una organización internacional de cooperación, 5 de octubre, 2019.
Entrevista 11. Miembro de un Consejo Comunitaria del Medio Atrato, 9 de octubre, 2019.
Entrevista 12. Líder social de Riosucio, 30 de septiembre, 2019
Entrevista 13. Funcionario de OCHA, 4 de octubre, 2019.
Entrevista 14. Líder social del bajo Atrato, 28 de septiembre, 2019.
Entrevista 15. Educador del Medio Atrato, 6 de octubre, 2019.
Entrevista 16. Profesor de Quibdó, 8 de octubre, 2019.
Entrevista 17. Habitante de San José del Palmar, 10 de octubre, 2019.

Entrevista 18. Indígena del municipio de Nuquí, 11 de octubre, 2019. Realizada por Camila Carvajal.

Entrevista 19. Líder del litoral Pacífico, 12 de octubre, 2019. Realizada por Camila Carvajal.

Entrevista 20. Mujer habitante de Quibdó, 9 de octubre, 2019. Realizada por Camila Carvajal.

Entrevista 21. Líder indígena del bajo Baudó, 5 de octubre, 2019.

Entrevista 22. Persona vinculada a la cooperación internacional. 15 de Septiembre, 2020.

Entrevista 23. Mesa de intercambio con enlaces territoriales de la MAPP-OEA. 25 de Septiembre, 2020.

Cartografía 1. Taller de cartografía con mandos medios del frente XXXIV de las FARC, 4 de febrero, 2020.

Cartografía 2. Ejercicio de cartografía con líderes y representantes de los consejos comunitarios del Medio Atrato, 2019.

Cartografía 3. Ejercicio de cartografía para la región del Baudó, 7 a 10 de octubre, 2019.

Anexos

Anexo 1.

REGLAMENTO COMUNITARIO
PARA LA EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE MADERA
RÍO SAN JUAN Y SUS AFLUENTES
(MUNICIPIOS SIPÍ, MEDIO SAN JUAN, ISTMINA, LITORAL DEL SAN JUAN Y NÓVITA)

A mediados de noviembre de 2016 se realizó una reunión a la que asistieron delegados de 48 comunidades, representantes de compradores e intermediaros del corte y comercialización de la madera, con la intensión de regular dicha actividad y de buscar, en el ejercicio de su gobierno propio, que las comunidades puedan ejercer un papel más activo en este proceso.

El presente reglamento debe ser acatado por todos, sin excepción. Diversas autoridades de la región se han comprometido en su cumplimiento.

1. Se trabaja con veda, es decir, tiempos donde se permite corte, y tiempo donde queda prohibido. De marzo a octubre es permitido cortar. Madera cortada por fuera de este tiempo acarreará multa, incluso hasta perder la totalidad del lote.
2. Todo corte de madera debe ser previamente autorizado por el consejo o cabildo.
3. Solo se autoriza el corte a quien demuestre suficiencia en pancoger, sea cortero o dueño de dominio. Mínimo una hectárea de cementera permanente en el tiempo. Si es necesario resembrar o abrir nuevo tajo, deberá hacerlo. Esto es aparte de los cultivos de cosecha como arroz o maíz.
4. Consejo o cabildo que no cumpla con la exigencia de los requisitos para la autorización de la actividad maderera, sus directivos deberán responder con una multa equivalente al aporte a la comunidad.
5. Quienes exploten madera sin la previa autorización de la autoridad comunitaria o soliciten el permiso sin cumplir con todos los requisitos, serán multados hasta con la mitad del lote.
6. Ninguna comunidad puede firmar un permiso por madera extraída en otras comunidades. Los directivos del consejo o cabildo corrupto que incurran en esta falta deberán pagar una multa a la comunidad de origen de la madera, equivalente al aporte que debe recibir esa comunidad; quien saca la madera, paga su aporte normal. Tener en cuenta el caso excepcional de Bebedó y Barranconcito que pueden dar el aval de la madera que sale por sus cauces.
7. El tope que se permite cortar por cada familia es de 50 trozas. Hasta no terminar de sacarlas, no se puede tumbar un palo más. Cada familia puede sacar, máximo 4 veces en el tiempo apto para la corta al año. Quien por alguna razón no pueda sacar directamente sus trozas, tiene derecho a delegarlo en otra persona, cumpliendo el tope de 50 trozas.

8. Está prohibida la venta del frente (bosque). Quien incurra en esta falta será multado, al igual que quien compre; cada uno deberá pagar la mitad del valor del negocio.
9. Quien deje trozas en el monte será multado con un salario mínimo mensual vigente (1 smmv) y sancionado con un año sin cortar.
10. No se puede dejar ninguna troza en el caudal de las aguas, sin excepción se deben sacar o acerrar. Si se detecta a tiempo, se impedirá el avance de las trozas, si no, el responsable deberá cumplir así sea pagando a alguien para que lo haga. Hasta no cumplir, el infractor será incluido en la Lista de Vetados, quedando inhabilitados en todas las comunidades para la explotación de madera. También aplica para quien deje tranques.
11. Quien trabaje estando en la Lista de Vetados se expone a perder hasta la totalidad del lote.
12. Cada comunidad en cabeza de sus líderes debe mantener actualizada la "Lista de Vetados" de corteros, compradores e intermediarios que hayan sido irresponsables, incumplidos, corruptos o mala paga o que hayan dejado trozas en los caños. Se debe enviar la denuncia a todas las comunidades y darla a conocer públicamente en reuniones, panfletos y murales. Cuando sea levantado el veto, igualmente, se deberá socializar.
13. Consejo o cabildo que no cumpla con lo anterior se convierte en alcahuete y cómplice del infractor y asume las deudas y pendientes de éste.
14. El aporte económico a la comunidad será de una pulgada por troza.
15. Madera acerrada para la venta, paga una pulgada por bloque y de Chanul paga un metro por cada 100 metros.
16. El que no pague será metido a la Lista de Vetados. Si la deuda se mantiene sin justificación, le será cobrado el doble.
17. El árbol maderable apto para cortar debe tener mínimo 19 pulgadas en la pata. No se deben dejar perder los cogollos.
18. No se permite que foráneos a la comunidad exploten madera en su jurisdicción, la única excepción es en caso que alguien que quiera explotar madera en su dominio no encuentre algún miembro de la comunidad que lo haga.
19. Solo se puede mover madera en la noche si va con alguien pendiente, con mínimo cuatro mechones o luces bien visibles, y distribuidos en el chorizo. De lo contrario, serán decomisados y multado hasta con la mitad del lote. En caso de accidentes, deberá acarrear con los costos e indemnización.
20. Cada comunidad determina áreas de reserva en las que se prohíbe el corte. Los nacimientos de agua son reservorios que deben ser protegidos y cobijados por esta regla. Quien corte madera en áreas de reserva será multado hasta con la totalidad del lote.

(Pendiente por reglamentar reforestación y otros particulares que la experiencia vaya arrojando).

A manera de síntesis conclusiva: las dificultades del "federalismo insurgente" del ELN para una salida negociada al conflicto

Por Fernán E. González G.[1]

La lectura comparada de los capítulos de este libro gira en torno a una idea central: las tensiones entre dos tendencias contradictorias dentro de la organización que conocemos como el ELN. Desde sus inicios, se hizo evidente la oposición entre la unidad y la multiplicidad, que la caracteriza: sus comienzos están marcados por el choque del liderazgo personalista de Vásquez Castaño con sus aliados originales; pero, en un segundo momento, esta tensión trata de ser equilibrada por la propuesta federalizante de "el Cura" Pérez y compañía, con su estilo de crecimiento organizativo por adhesión de organizaciones regionales autónomas. Sin embargo, en los tiempos más recientes este arreglo empieza a entrar en crisis debido al diferente desempeño de los frentes, tanto en lo militar como en lo financiero, que va produciendo un desequilibrio interno de fuerzas, que no se expresa adecuadamente en los organismos de coordinación del grupo.

En ese sentido, gran parte de los problemas que actualmente afronta el ELN y de las inquietudes que despiertan algunas acciones terroristas —como el atentado contra la Escuela de la Policía General Santander—, que parecen ir en contravía con la disposición de su comando central para explorar posibilidades de negociación, encuentran su explicación en su trayectoria histórica.

La idea central de este libro es que estos problemas, que obstaculizan un eventual regreso a las negociaciones de paz, proceden del mismo estilo organizativo de su mando central, como resultado de la ruptura y recomposición que emprendió a partir del desastre de Anorí. Por eso, los capítulos del

1 Investigador del Cinep/PPP durante más de 49 años, politólogo e historiador, profesor en varias universidades del país y del exterior.

presente libro muestran la transición del primer ELN, centrado en el mando autoritario y personalista de Vásquez, a un segundo ELN, basado en la resignificación de su discurso y reagrupación confederada, liderada por "el Cura" Pérez y sus allegados, para terminar insinuando una posible evolución a un tercer ELN, hegemonizado por el frente Domingo Laín y sus aliados.

Así, el fracaso del estilo caudillista de los orígenes y la derrota de Anorí llevaron al intento del "Cura" Pérez y sus aliados a proponer una estructura federal, con gran autonomía de los frentes, que traía consigo una gran capacidad para lograr la adhesión de emprendimientos regionales autónomos en torno a una mirada bipolar de la sociedad, caracterizada por el enfrentamiento de una oligarquía nacional al servicio de intereses transnacionales con un pueblo representado en organizaciones sociales de diferente índole y orientación ideológica. Este enfrentamiento no se reducía exclusivamente al enfrentamiento entre el proletariado y el capital, ni se identificaba del todo con la mirada campesinista enfrentada al latifundio tradicional y la agroindustria.

Sin embargo, en los años recientes esta recomposición federalista ha empezado a desdibujarse por el desequilibrio de fuerzas producido por el diferente desempeño de los frentes en los aspectos militares y financieros, que lleva a la creciente influencia del frente Domingo Laín dentro del conjunto de los frentes elenos, cada vez más sujetos al deslumbramiento frente al éxito del llamado "Sol de Oriente", que no se corresponde con su representación en los organismos centrales del ELN ni con su relación de apoyo a frentes más débiles. Este movimiento hacia la hegemonía de sectores más militaristas no encuentra una expresión adecuada en la organización formal del conjunto de los frentes, lo que conduce a la realización de hechos violentos no consultados con esa organización para colocar sus posiciones dentro del debate interno de la organización (el llamado "debate en caliente"). El atentado del Frente Domingo Laín contra la Escuela de Policía General Santander y las actividades terroristas del frente chocoano son buenos ejemplos de esa tendencia.

Pero, este diferente desempeño de los frentes y el desequilibrio de fuerzas que produce tienen que ver con la otra cara de la moneda: el diferente tipo de relación de los frentes con las poblaciones de las regiones donde se insertan, que plantea un problema poco estudiado por la academia colombiana: la existencia de una gran capacidad de organización social espontánea de los pobladores de las regiones de colonización periférica, con grados variables de autonomía, cuyas autoridades informales se han venido encargando de suplir las funciones estatales de regulación de la convivencia social. Esta labor de suplencia ha convertido a esas organizaciones y a sus liderazgos en un escenario de relaciones ambiguas con las redes de poder tradicional ligados a los partidos políticos

organizados y sus múltiples facciones, que constituían tradicionalmente sus lazos de interacción con el centro político de la nación.

Esa ambigüedad de las relaciones de esas organizaciones sociales con las redes de los partidos se refleja en algunas tensiones con las administraciones estatales del orden regional y local, en las cuales las poblaciones de esas regiones no se sienten adecuadamente representadas, por considerarlas dominadas por las redes locales y regionales de poder. De ahí el recurso de esas poblaciones a la protesta social para hacer visibles sus demandas y forzar a las instituciones estatales del orden nacional a unas negociaciones que no pasen por la mediación de los poderes locales y regionales ni por las administraciones locales y regionales dominadas por ellas.

Pero estas protestas sociales de las comunidades se encuentran normalmente con la incomprensión de los funcionarios estatales del orden central, que tienden a estigmatizar a esas movilizaciones y a sus líderes, identificándolos con organizaciones de izquierda o grupos guerrilleros, que, con frecuencia, están también presentes en esas movilizaciones. Por eso, la reacción normal de las autoridades locales y regionales es el recurso a la represión por parte de las fuerzas estatales de seguridad, no siempre respetuosas de las normas legales de moderación.

Pero, incluso, cuando se logra superar esa estigmatización y llegar a la negociación de algunos acuerdos, los funcionarios del Estado central encuentran grandes dificultades para operar directamente en los ámbitos locales y regionales, dada su dependencia de la mediación de los poderes y las administraciones de esos niveles. Esto trae como resultado el incumplimiento casi sistemático de los acuerdos logrados con el gobierno central, lo que da lugar a nuevas protestas.

En ese contexto, es bastante lógico que los grupos guerrilleros encontraran en esas protestas y su represión por la fuerzas del Estado un escenario propicio para su inserción, pero con resultados diversos según el grado de autonomía de las organizaciones comunales: algunas de ellas terminaron instrumentalizadas de manera hegemónica por el grupo armado correspondiente, mientras que otras lograron mantener cierto grado de autonomía que permitía exigir condiciones al grupo; algunas aceptaron pragmáticamente la autoridad que ejercía de hecho el grupo armado, mientras que otras aprovecharon la coerción guerrillera como instrumento para exigir el cumplimiento de las decisiones de las autoridades comunales.

La ambigüedad y complejidad de las relaciones de las comunidades con los grupos guerrilleros se ve reflejada en la polémica sobre las curules adicionales que el acuerdo de La Habana había otorgado a las zonas periféricas de las regiones afectadas por el conflicto interno. Al parecer, las FARC tenían la ilusión de encontrar en las organizaciones sociales de esas regiones algún apoyo político para su nuevo partido, mientras que los sectores de la

derecha se oponían rotundamente a ellas porque consideraban que serían bases sociales del proyecto fariano. Es más, la ola de asesinatos de líderes de esas organizaciones responde a la misma compleja y ambigua situación.

La necesidad de un acercamiento diferenciado a los frentes del ELN

Esta variedad de situaciones regionales hace necesario un acercamiento diferenciado a las relaciones de los frentes del ELN con las poblaciones de las regiones, lo mismo que un contexto mucho más concreto a las problemáticas específicas de cada región. De ahí el enfoque necesariamente comparativo de las regiones donde han venido operando los respectivos frentes del ELN, donde se contrastan las experiencias del sur de Bolívar, antiguo bastión militar ahora de poca relevancia con el aumento y reposicionamiento del frente araucano en el conjunto de la organización. Entre esos dos extremos, se pueden ubicar los casos del Catatumbo, —que mantiene cierto protagonismo en lo militar, sin lograr la hegemonía en su territorio—; el de Cauca y Nariño, —cuya fuerte influencia en los procesos organizativos de las comunidades contrasta con su marginalidad en lo militar—; y, el del Chocó, anteriormente bastante marginal, pero que ha venido cobrando mayor relevancia y presencia mediática, gracias al aumento de sus recursos, que le han permitido irse imponiendo violentamente en su región con una lógica de ejército de ocupación.

Estos territorios tienen algunas características comunes: están ubicados en zonas fronterizas con Venezuela, Ecuador y Panamá, con salidas al Caribe o al Pacífico, o en los límites entre el mundo caribe y el mundo andino de Antioquia y el centro de los Santanderes, cuyos pobladores tienen poca relación con las autoridades de sus departamentos y de la nación y poca integración a la economía del conjunto integrado del país.

Este contraste entre la unidad del discurso del ELN y la multiplicidad de su presencia regional hace necesario analizar tanto el llamado “ethos” eleno —su definición ideológica original— como sus anclajes sociales y sus vínculos con las economías dominantes en sus territorios (coca, minería del oro, explotación maderera, petróleo, contrabando), que inciden tanto en su relación con los pobladores de las regiones donde se inserta como en sus complejas relaciones con las instancias centrales de la organización, el Comando Central (COCE), y la Dirección Nacional (DN).

Sin embargo, frente a la mirada tradicionalmente centrada en los aspectos ideológicos del ELN, el capítulo introductorio de Andrés Aponte[2]

2 Andrés Aponte, 2021, “El rompecabezas del ELN”, introducción a este libro, ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020.

(Aponte, 2021), inspirado en los trabajos de Paul Staniland (2012, 2014), sostiene que las bases sociales de la organización guerrillera y de las redes de poder previamente existentes de las regiones donde se insertan esos grupos son más importantes que los factores programáticos para determinar tanto su organización interna como el tipo de relacionamiento que establecen con el entorno social, económico y político de la región y del conjunto de la nación. Así, según la base social que encuentre el grupo, se va a delinear un particular proyecto de lucha militar y política, que se va a reflejar en su relación, tanto con la población de la región donde se inserta como en sus lazos con el orden nacional de la organización subversiva, frente al cual cada grupo puede mostrar una mayor o menor autonomía, según su situación particular y su peso regional.

Así, la posibilidad de implementar objetivos de mediano y largo plazo en el orden nacional dependerá de la habilidad del grupo para insertarse y gestionar los conflictos preexistentes entre los pobladores, de manera que su apropiación de las escisiones microlocales pueda articularse con las escisiones maestras expresadas en el discurso oficial del grupo (Kalyvas, 2001a, 2004, 2006; Larratt-Smith, 2020; Aponte, 2021; Gutiérrez y Wood, 2017).

De ahí los marcados contrastes que muestran los estudios regionales de este libro entre los casos de Arauca, sur de Bolívar, Catatumbo, Cauca-Nariño y el Chocó, que llevan a algunos a preguntarse cómo se mantienen unidos, a pesar de las diferencias, en torno a la que podríamos denominar, en términos de Stathis Kalyvas, una "escisión maestra" que articule las micromotivaciones locales y regionales que expresan los diferentes desarrollos de los frentes.

Para identificar esa eventual escisión maestra, se hace necesario subrayar las diferencias del "ethos" eleno con el "ethos" fariano, cuyos orígenes diversos no son tenidos suficientemente en cuenta por la opinión pública, ni por algunos de los funcionarios estatales involucrados en las negociaciones con dicho grupo. Esto hace que algunas veces traten de replicar los modelos que fueron exitosos con las FARC, pasando por alto las enormes diferencias entre los dos grupos. Por eso, insisten los autores de este libro, es necesario leer al ELN desde su experiencia histórica para no ofrecer la misma receta de tierras para la "guerrillerada" y curules para los dirigentes, que no responden a las demandas ni al discurso eleno.

Hacia los orígenes del primer ELN

Buena parte de esa experiencia histórica tiene que ver con la referencia a sus orígenes, que marcan, desde el comienzo, una clara diferenciación con el surgimiento de las FARC. Estas últimas se inician con la radicalización de

las guerrillas campesinas de zonas periféricas a las economías del mundo andino, influenciadas por el trabajo político del Partido Comunista tradicional, que habían terminado por enfrentarse con las guerrillas del Partido Liberal, antiguos aliados suyos en el enfrentamiento con los gobiernos conservadores de Ospina Pérez, Laureano Gómez, Urdaneta Arbeláez y Rojas Pinilla. Esos enfrentamientos entre "limpios" y "comunes" reflejaban ya una ruptura con la tradicional adhesión de los colonos campesinos a los partidos tradicionales, casi siempre al Partido Liberal; esta ruptura traía como consecuencia su exclusión de las agencias del Estado, ya que eran las redes clientelares de los partidos el canal normal de acceso de este tipo de poblaciones y regiones al conjunto de la nación (Aponte, 2019).

Obviamente, el surgimiento de estas organizaciones al margen del bipartidismo y del Estado responde a un proceso histórico de mediana y larga duración: la combinación de la concentración de la propiedad de la tierra en las cercanías de los centros urbanos de consumo y el crecimiento demográfico de la población campesina, que produce la expulsión continua de la población rural excedente hacia los márgenes de la frontera agraria, la cual solamente de manera subordinada y marginal se vincula al conjunto de la economía rural. En este escenario, los grupos guerrilleros cercanos al Partido Comunista se van distanciando de sus aliados liberales en la lucha contra el gobierno conservador en la época de la Violencia y de las políticas de reinserción política y económica de los gobiernos del Frente Nacional, que tendían, naturalmente, a privilegiar a los campesinos cercanos a los partidos tradicionales, especialmente al liberal (Aponte, 2019). Esta dificultad de insertarse en un sistema político diseñado en torno al predominio del bipartidismo, lleva a estos grupos a alinearse con la facción disidente del Partido Liberal, el MRL, que les servía de puente para mantener cierta relación con el Estado, la cual desaparece cuando el MRL rompe sus relaciones con Cuba y se integra al partido liberal oficialista.

En cambio, el ELN surge (casi paralelamente al EPL) de grupos urbanos radicales, provenientes del mundo estudiantil y sindical, que se distancian tanto del reformismo político del partido comunista, reflejado en su participación en las elecciones y los cuerpos colegiados, como de la pasividad de los grupos armados cercanos a este partido, en momentos en que los triunfos de la revolución campesina en China y la guerrilla castrista en Cuba mostraban la posibilidad de nuevos enfoques más radicales de revolución: la guerra popular prolongada, inspirada en el maoísmo, y la teoría del foco, inspirada en la revolución cubana-tematizada por Regis Debray (González, 2014). Así, como insiste Alejo Vargas (Vargas, 1998, 1992), se trata de un movimiento guerrillero revolucionario, de tintes voluntaristas, distinto de las autodefensas en las que se originan las FARC.

Ese voluntarismo de clases medias urbanas radicalizadas insistía en la crítica al imperialismo norteamericano y a sus aliados internos, los miembros de la oligarquía colombiana, y en el rechazo a la vía electoral ("El que escruta elige"), defendida por el Partido Comunista, al que consideraban partidario de un reformismo gradual y muy tibio frente a la opción armada. Lo mismo que por los incipientes grupos juveniles de una democracia cristiana, que nunca logró consolidarse ni distanciarse del todo de los sectores reformistas y progresistas del Partido Conservador. Y por el MRL, que servía de puente entre los grupos de izquierda y el Partido Liberal, hasta que López Michelsen se distanciara de la revolución cubana.

Estas posiciones del ELN hacían imposible el llamado de Camilo Torres a conformar una alianza de las fuerzas de izquierda, en el Frente Unido, porque excluía de antemano a los grupos distintos del ELN, al que Camilo Torres se había acercado casi desde sus inicios, contrariando el pluralismo que defendía teóricamente y apoyándose en grupos supuestamente no alineados y confiando, con poco fundamento en la realidad, en la capacidad revolucionaria que el campesinado había supuestamente demostrado en la Violencia de los cincuenta (González, 2019).

Este carácter voluntarista del liderazgo de tipo jacobino partía de considerar que estaban agotadas las vías democráticas de corte reformista, dado el monopolio de la vida política otorgado a los partidos liberal y conservador por el régimen del Frente Nacional, cuyos gobiernos compartidos hacían que sus propósitos de civilización de la vida política terminaran neutralizando sus programas desarrollistas y reformistas, como ha evidenciado Francisco Gutiérrez (Gutiérrez, 2007). Esta incapacidad del régimen bipartidista para incluir en el régimen político a los grupos organizados al margen del bipartidismo y de desarrollar programas de reforma y desarrollo rurales que insertaran a sus bases campesinas en el conjunto de la economía nacional, es la base del argumento de esos agentes de corte jacobino para concluir que estaban cerradas las vías democráticas para el cambio social y optar, en consecuencia, por la opción armada.

Precisamente la consideración de esta opción armada, de corte jacobino, ha llevado a los autores del libro a distanciarnos, al menos parcialmente, del enfoque de Staniland: el ELN no se configura como un grupo guerrillero de carácter endógeno, que partiera de las bases sociales, sino de un grupo salido de las clases medias urbanas y de las directivas de algunos sindicatos, que buscan insertarse en grupos campesinos a los que tratan de radicalizar.

La opción armada de esos sectores busca integrar las tensiones de las comunidades locales y regionales en una escisión maestra basada en una mirada bipolar de la sociedad, propia de la mentalidad de la Guerra Fría, que se refleja en la contraposición maniquea entre amigo y enemigo. Esta

lucha se concreta en el enfrentamiento entre un Estado —considerado como un bloque homogéneo y monolítico de poder, esencialmente maligno, sin matices ni fisuras— y una sociedad buena, compuesta por los sectores afines a las posiciones que el ELN representa, que excluye tanto a los grupos de la oligarquía dominante, como los gremios y las organizaciones que apoyan al establecimiento, pero también a los otros grupos de izquierda que no comparten sus planteamientos. Esta visión bipolar del mundo estaba acompañada por una postura claramente antiimperialista y un marco cognitivo cercano a una inclinación más democrática popular —cercana a un anarquismo popular y comunitario y a formas de democracia directa—, que a una opción socialista clásica (Aponte 2021, apoyado en su interpretación de autores como Jaime Arenas, 1971; Medina, 2000, 2006; Harnecker, 1988a; Cubides, 2007).

Esta inclinación nacionalista y popular se hacía evidente en sus propuestas de revolución agraria y desarrollo de la industria nacional, favorecidas con políticas proteccionistas y un adecuado sistema de vías, la nacionalización del subsuelo con una adecuada explotación al servicio de la economía nacional, una reforma urbana, un sistema popular de crédito, un plan de vivienda, un plan nacional de seguridad pública, una reforma educativa que promoviera la educación en el campo e impulsara la defensa, difusión y desarrollo de la cultura nacional (Medina, 2000)

Obviamente, esta opción del ELN no puede entenderse fuera de los contextos internacional de la Revolución cubana y nacional de las restricciones del Frente Nacional contra opciones alternativas al bipartidismo, que enmarcan el voluntarismo de Fabio Vásquez Castaño y sus seguidores: su opción de transformación del Estado y de la sociedad colombiana por la vía armada desde la idea del foco hacía innecesaria la previa existencia de condiciones estructurales al considerar que el grupo armado podría crearlas.

Así, se pretendía que un foco de pocos guerrilleros podría radicalizar el descontento de zonas campesinas y lugares próximos a las grandes ciudades para ir desgastando, militar y políticamente, a las fuerzas estatales de seguridad. De acuerdo con este manual revolucionario, basado en la experiencia del "Che" Guevara, —expresada sistemáticamente por Roger Debray—, el grupo de Vásquez escogió como el sitio inicial de su lucha el Magdalena Medio, que reunía ciertas condiciones favorables como un conjunto de redes sociales que habían apoyado a las guerrillas liberales en la época de la Violencia bipartidista y una cierta cercanía al movimiento sindical de la industria petrolera (Aponte, 2021).

Pero no fueron fáciles las relaciones de los líderes de procedencia urbana con los grupos campesinos, como relata Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino", en sus recuerdos de los inicios del grupo, que mostraban las dudas de los guerrilleros campesinos sobre la capacidad de liderazgo de

Víctor Medina Morón para asumir la dirección de los combates: no se movía con agilidad en el monte ni se orientaba bien en el terreno, sus ideas eran ininteligibles para el campesinado y era torpe en sus movimientos e indisciplinado en los entrenamientos (Rodríguez, 2017).

A pesar de las esperanzas de difusión, basadas en la idea del foco, los desarrollos iniciales del ELN fueron lentos y difíciles; ahí radica la importancia del reclutamiento de Camilo Torres, cuyos manifiestos del Frente Unido dotaban de contenido a la vaga plataforma inicial y cuya figura mesiánica se esperaba daría mayor impulso al movimiento para superar el marcado localismo de sus comienzos y el escaso número de sus adherentes. A pesar de ciertos recelos de Vásquez Castaño, que no parecía percibir las potencialidades de su trabajo político (Arenas, 1971), su discurso nacionalista y antioligárquico en contra de los gobiernos bipartidistas del Frente Nacional tenía cierto calado en sectores universitarios y abría la posibilidad de una alianza entre sectores católicos y marxistas. Sin embargo, su rápida desaparición por la muerte en su primer combate (en 1966) creó algunas tensiones internas, sin despertar, inicialmente, mucha repercusión en el ámbito nacional (Guzmán y otros, 1967; Medina, 2012; Broderick, 2013; Vargas, 1992; González, 2014; Aponte y Vargas, 2011).

No obstante, su espíritu revolucionario terminó impactando a varios sectores progresistas de la Iglesia católica, especialmente en el Cono Sur y en Lovaina, al ser apropiado por grupos de sacerdotes radicalizados, que llevaron al surgimiento, en Colombia, de movimientos como el de Golconda (1969) y SAL (Sacerdotes para la América Latina, 1971), que pretendían reivindicar el pensamiento de Camilo Torres (Restrepo, 1995; González, 2019).

Algunos de estos grupos llevaron a las formulaciones de la llamada Teología de la Liberación[3], cuyas facciones más radicales partían de la existencia de una violencia estructural para justificar el derecho a la toma de las armas (Aguilera, 2006; Celis, 2006; Aponte y Vargas, 2011; López, 1989). Entre los sacerdotes, seminaristas y monjas inspirados por la experiencia de Camilo Torres se cuentan los casos de Manuel Pérez Martínez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez Comín (Villamizar, 2016; Medina, 2012; Harnecker, 1988a). Según uno de los entrevistados por los autores de este libro, fue "el Cura" Pérez, como comandante del ELN, uno de los autores más determinantes para la creación del mito camilista.

3 Conviene aclarar que la Teología de la Liberación está lejos de constituir una tendencia homogénea en favor de la lucha armada, pues dentro de ella existen varias corrientes, con énfasis diferentes (cultura popular, trabajo educativo, diferentes referencias teológicas, al lado de visiones más estructurales y cercanas al marxismo). Y recordar también que los textos iniciales de esta corriente solo aparecen en los años setenta, con referencias a la teoría de la dependencia, la Conferencia episcopal de Medellín en 1968, la educación liberadora de Paulo Freire en los años sesenta y setenta, cuando el ELN había nacido en 1965 y Camilo había muerto en 1966.

Pero las dificultades para la inserción del naciente ELN en nuevas áreas evidenciaban los problemas que encontraba para conectarse con los campesinos, que facilitaba el que algunas de sus comisiones, como la denominada de Camilo Torres, en los límites entre el Cesar y Santander, fueran fácilmente desarticuladas por la fuerza pública (Medina, 1996, 2012; Ugarriza y Pabón, 2017). Incluso, esto también ocurrió en la zona del Opón, en 1966, donde se había logrado, por primera vez, cierta articulación con la población campesina (Entrevista a Nicolás Rodríguez, miembro del Comando Central, Medina, 1996).

El resultado de estos exiguos comienzos fue una mayor militarización de las relaciones con el campesinado, que condujo a la profundización de las tensiones internas entre comandantes urbanos (como Víctor Medina Morón, Juan de Dios Aguilera, Heliodoro Ochoa y Julio César Cortés) y rurales (como Fabio Vásquez, José Ayala, Luis José Solano Sepúlveda y Julio Portocarrero), que no encontraron la posibilidad de tramitarse pacíficamente.

Esto condujo a una serie de intrigas y complots que desembocaron en una serie de fusilamientos y ajusticiamientos de militantes de base y algunos dirigentes, muchos de ellos cofundadores del grupo, como Jaime Arenas Reyes, Ricardo Lara Parada, Víctor Medina Morón, Julio César Cortés, Heliodoro Ochoa, Hermídas Ruiz, Carlos Uribe Gaviria, Juan de Dios Aguilera y otros (Aponte, 2021, apoyado en textos de Aguilera, 2006; Arenas, 1971; Medina, 2012; Hernández, 2006; Velandia, 2012; González, 2014). Como muestra el capítulo de Aponte, la jefatura de Vásquez Castaño inauguró la tradición de solucionar las contradicciones políticas por la vía de la ejecución de los opositores y disidentes (Aponte 2020, citando a Harnecker, 1988a, 1988b; Medina, 2000, 2012). Según A. Vargas, estos abusos de poder no eran únicamente producto del estilo personalista y caudillista de Vásquez Castaño, sino que, también se reproducía en las estructuras de mando de la organización (Vargas, 1998).

Además de estas dificultades internas, el ELN encontraba dificultades para consolidar su expansión, que se proyectaba, entre 1969 y 1972, hacia el sur de Bolívar, el bajo Cauca y el nordeste antioqueño, y, a San Vicente de Chucurí, en el Magdalena Medio santandereano. Estos avances demandaban grados mayores de coordinación interna y de consecución de recursos, cuya necesidad llevó a que el grupo incrementara los secuestros y robos, afectando aún más a los pocos lazos que tenían con los pobladores de esas regiones.

Esta debilidad de sus relaciones con la población significaba una mayor exposición del grupo a la respuesta militar del Estado: en 1972 fueron desmanteladas sus redes urbanas de apoyo en Aguachica (Cesar), Charta, Bucaramanga, Socorro, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja (Santander), Bogotá y Medellín. Pero de mayor gravedad fue el desastre de la Operación Anorí en 1973, donde murieron dos hermanos de Vásquez

Castaño y varias decenas de combatientes. Y en 1974 fueron dados de baja algunos comandantes como José Solano Sepúlveda y el cura Domingo Laín, mientras que Lara Parada, segundo al mando del ELN desconoció la autoridad de Vásquez para crear la tendencia Camilo Torres Restrepo.

Según algunos testimonios recogidos por Andrés F. Aponte González, estos avatares del ELN mostraban un excesivo localismo, con grandes dificultades para consolidar una base social entre la población campesina, ya que su supervivencia se debía más a los apoyos que había logrado en los espacios urbanos. Por eso, alguno de los entrevistados caracteriza la historia de este grupo durante los años sesenta y setenta como "una década perdida", la década de los fusilamientos, las derrotas militares, la dispersión y la crisis. Nunca logró el ELN asentarse en una región, a pesar del trabajo político con las comunidades: ni siquiera en la zona de su origen se logró realizar lo que planteaba el "Che" Guevara: consolidar una base fija de grupos campesinos de día, que fueran guerrilleros clandestinos de noche y tuvieron que dedicarse a apoyar a la organización campesina (Entrevista a Manuel Pérez, miembro del Comando Central, en López, 1989, citada en el capítulo de Andrés Aponte, 2021).

Estos problemas llevaron a que, al final de la década de los setenta, la mayoría de las estructuras rurales y urbanas quedaran golpeadas y dispersas, con una débil articulación con la comandancia central. Por otra parte, el liderazgo de Fabio Vásquez empezó a ser cuestionado por parte de algunos comandantes y mandos medios, debido a su actitud militarista y caudillista, así que aprovecharon su viaje a Cuba por una enfermedad para relevarlo (1975).

Esto llevaría a que el ELN emprendiera la búsqueda de un nuevo rumbo, que superara su fragmentación en mil pedazos, que cada uno se proclamaba como el auténtico ELN, al tiempo que se distanciaba del liderazgo personalista de Fabio Vásquez Castaño. Se emprendió así un intento de reingeniería del proyecto del ELN, bajo la dirección de Manuel, "el Cura" Pérez, y Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino", que buscaba recomponerlo desde las cenizas. Esta recomposición partía de una resignificación del desastre de Anorí, que empezó a verse, según "el Cura" Pérez, no como un momento de crisis y derrota, sino como la oportunidad para darle un nuevo significado a la lucha de los guerrilleros elenos con un símbolo de su entrega incondicional a la causa (Entrevista a Manuel Pérez, en Medina, 2006, citado en el capítulo primero de este libro, por Andrés Aponte, 2021).

Hacia la federalización y recomposición del ELN a partir de emprendimientos regionales

Este nuevo rumbo del ELN significaba un cambio trascendental: corregir el mando unipersonal de Vásquez Castaño para sustituirlo por un

liderazgo más democrático y colectivo, de tipo federal y colegiado, al tiempo que se proponía una reestructuración orgánica en la concepción política y el trabajo de masas, con base en el concepto del poder popular[4], que partía de que no era necesario esperar a tener el poder total del Estado sino que se podía comenzar a construirlo desde abajo, desde las organizaciones sociales de las zonas donde el ELN tenía presencia.

De ahí las consignas de inclusión del "Pueblo": "El pueblo habla, el pueblo manda", que hacían referencia a la soberanía popular en el ámbito local, basada en las organizaciones comunitarias de base, pero manteniendo el discurso bipolar sobre el Estado y la sociedad, basado ahora en la contraposición entre Pueblo y Oligarquía, Y, asumiendo, además, la causa de la ecología, la nacionalización de la explotación de los recursos naturales y la humanización de la guerra, al tiempo que se elevaba la imagen de Camilo Torres como tipo ideal del guerrero eleno, que daba cohesión a todo el movimiento.

Además de esa reorganización de la estructura del mando central, se definieron las áreas estratégicas de su expansión: se dejaron de lado las zonas de colonización campesina donde había nacido el ELN, para insertarse en zonas de interés socio-económico como las zonas de explotación petrolera, verbigracia Arauca-Catatumbo y áreas atravesadas por importantes vías, que tenían mayores capacidades para extraer recursos y representaban algunas ventajas estratégicas.

Sin embargo, sostiene Andrés Aponte en el primer capítulo de este libro, los evidentes avances del grupo en su expansión territorial y aumento del pie de fuerza en los años ochenta (1978-1990), producidos por estos giros organizacionales y estratégicos, tuvieron su lado oscuro: la recomposición del proyecto nacional no logró homogenizar ni centralizar los diversos emprendimientos armados del orden regional que se fueron integrando al proyecto nacional del ELN. Para algunos de los entrevistados, las decisiones asumidas por la nueva dirigencia de esos años fueron el origen de los problemas organizacionales que impiden hoy la posibilidad de una acción colectiva consensuada.

Así, señala Aponte, la organización central del grupo en sus comienzos, después de liquidar las tendencias disidentes y los matices internos representados por líderes urbanos del mundo estudiantil y sindical, estaba dominada por el estilo caudillista y personalista de su jefe. Este llevó al ELN

4 Esta idea y estrategia se acuñó en 1986 en la Asamblea Nacional "Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo". La táctica de construcción de poder popular partía de la creación de una especie de democracia directa, de carácter local, basada en el control de las organizaciones sociales y la cooptación de las autoridades del orden local, muy distinta del campesinismo maoísta y de la mirada de la dictadura del proletariado.

al borde de la extinción, que dio lugar, como reacción, a la estructura extremadamente federalizada que lo caracteriza hasta el día de hoy. Ese estilo federalista de organización se vería profundizado todavía más con la posterior expansión del nuevo ELN por medio de la adscripción de movimientos sociales de diversa índole y orientación a la estructura nacional del grupo. Esta transición entre el proto ELN, más plural, al primer ELN centralizado bajo el mando de Vásquez Castaño y al segundo ELN, inspirado por "el Cura" Pérez, ha marcado la historia de este grupo hasta el momento actual.

Pero, según Aponte (2021), estos cambios no estaban exentos de fricciones: el liderazgo de Pérez y "Gabino" no estaba del todo consolidado, ni reflejaba adecuadamente el equilibrio de poder concreto de los diversos frentes de las regiones, bastante desperdigados y con bastante autonomía, que facilitaba el comportamiento más belicoso de algunos frentes como el Domingo Laín y el surgimiento de facciones disidentes.

A finales de los setenta, muchos de los trabajos de masas en el ámbito rural y urbano emergieron de forma espontánea y poco articulada con el ELN nacional, como el caso de las zonas de colonización de campesinos boyacenses y santandereanos promovidas por el Estado colombiano en el Sarare (Arauca) o los varios grupos de redes urbanas de Bogotá, que carecían de coordinación interna y articulación con los frentes rurales: se hablaba de la república federal del ELN, donde los grupos competían por quién tenía más trabajo político en el barrio o la universidad (De Currea Lugo, 2018, citado en Aponte, 2021).

Por eso, el proceso de recomposición de este segundo ELN estaba marcado por esfuerzos incesantes, pero poco exitosos, de la Dirección Nacional por frenar las fuerzas centrífugas de las organizaciones regionales, puesto que cada estructura manejaba sus propias finanzas y recursos (hombres, armas, bases, etc.), y, desarrollaba su propio discurso, sus formas de socialización, su tipo de trabajo político (Medina, 1996, 2007, 2012; Harnecker, 1988a, 1998b; Medina, 2007). Para escapar a los intentos de coordinación de la Dirección Nacional, cada grupo alegaba que su emergencia, desarrollo y supervivencia no se debían a la comandancia nacional, sino a sus propios esfuerzos y a los de sus líderes en los territorios, que respondían no a las directrices del comando central sino a los contextos de las regiones donde habían surgido los procesos organizativos preexistentes para responder a los agravios que habían sido su base social.

En ese sentido, son muy dicientes las palabras sobre la creación del frente Domingo Laín en el Arauca, como un "proyecto que se hizo solo", según cuenta Medina (Medina, 2006). Recuerda Correa de Lugo, que Pérez y "Gabino" no prestaron, inicialmente, mucha atención a los deseos de los organizadores de ese grupo de ser parte del ELN, cuando buscaban entrar en contacto con los frentes del ELN en el Magdalena Medio

y Bucaramanga (De Currea Lugo, 2018). Esta actitud reticente es refrendada por el testimonio de "Danielito", fundador del frente, cuando afirma que la dirección provisional les proponía, más bien, sumarse a los frentes Camilo Torres y José Antonio Galán, que necesitaban fortalecerse, en vez de conformar un frente independiente (Entrevista a "Danielito", en Celis y Gutiérrez, 2019, citado por Aponte, 2021).

De ahí la importancia de la experiencia del caso araucano, analizado en este libro por Charles Larratt-Smith, en el capítulo "El ELN en Arauca: El fortín guerrillero en la sombra de los Andes", que muestra cómo la trayectoria de un emprendimiento armado —creado como respuesta a los agravios sentidos por los pobladores—, terminó incidiendo en el discurso nacional del ELN, que asumió el discurso de la nacionalización de los recursos naturales.

Pero, también ilustra la dinámica nacional de recomposición del ELN a partir de la adhesión de un frente territorial al mando central, no a partir de una estrategia de expansión diseñada desde el centro con el envío de comisiones, sino desde los propios acumulados. Caminos similares fueron seguidos por las experiencias de Nariño, Cauca, Costa Caribe, Huila, Caquetá, entre otras. Esto significaba que, fuera de acogerse a una especie de paraguas ideológico pensado desde el centro, las estructuras de comando regional nunca se integraron en una organización central conjunta. Sin embargo, la combinación de estos esfuerzos conducía a un crecimiento espontáneo del movimiento, a pesar de la debilidad del mando central.

Este crecimiento espontáneo respondía entonces a la existencia de grupos pequeños, formados al margen de la organización, gracias a trabajos políticos anteriores, que esperaban la ocasión de "encontrarse algún día con la organización", y se agrupan ahora en torno a la plataforma nacional reconociendo cierto grado de autoridad al comando central (Medina, 2006, citado en Aponte, 2021).

Así, estos procesos no se daban "en tierras desiertas" sino en terrenos abonados previamente por "el viejo ELN", que había dejado en ellos algunos contactos que servirían de base para las comisiones de este segundo momento del ELN. En otros casos aprovechaban el trabajo previo de grupos originados en la Iglesia católica, como el del pbro. Bernardo López Arroyave, que estaban siendo perseguidos por las fuerzas estatales y los narcotraficantes. Mientras que otras comisiones buscaban aprovechar la tradición de lucha guerrillera y la existencia de "fierros" en regiones como la provincia santandereana de García Rovira, para fundar el frente Efraín Pabón (Entrevista recogida por Aponte, 2021).

Pero la consecuencia de este tipo de desarrollos era que cada frente tenía orígenes y concepciones distintas de la lucha, con una relativa autonomía, porque cada uno tenía que valerse por sí mismo. Aunque la

adscripción al ELN del ámbito nacional suponía cierta cesión de autoridad al mando central, en la práctica cada frente respondía más a las dinámicas de sus territorios, según eran interpretadas por los respectivos comandantes, que a una estrategia de corte nacional. De ahí la importancia de considerar los grupos poblacionales en los que se basaba cada frente y de analizar las tensiones sociales y políticas que motivaban las protestas de las organizaciones comunitarias de sus regiones. Estas diferencias explican tanto las dificultades de la organización central para coordinar las actividades de los frentes en torno a una estrategia común como el marcado parroquialismo de la mayoría de los frentes.

La importancia de las diferentes motivaciones de las poblaciones que servían de base a la inserción del ELN

El estilo antes descrito, —de crecimiento por cooptación de movimientos regionales relativamente autónomos—, condujo a la decisión del grupo de investigadores del Cinep/PPP de optar por un análisis comparativo de las experiencias de los grupos del ELN en Arauca, sur de Bolívar, Catatumbo, Cauca-Nariño y Chocó, seleccionados como casos representativos de las diferentes tendencias de esta organización. Para este enfoque comparativo, se prestó atención especial a la ubicación geográfica, las condiciones topográficas de los territorios, la configuración espacial producida por el encuentro de estos espacios y de sus ocupantes originales (indígenas o mestizos) con diferentes olas de colonización, provenientes de diferentes regiones del país, que no encontraban mayor apoyo de las agencias estatales.

De ahí la importancia creciente de las movilizaciones sociales y de sus organizaciones para exigir la presencia eficaz de las agencias del Estado que, tendían, normalmente, a estigmatizar a esas organizaciones como subversivas y recurrir en consecuencia a un manejo represivo de las protestas. Estos rasgos representan la historia de las regiones donde el ELN encontró escenarios propicios para su inserción: esta interpretación de la inserción de los movimientos guerrilleros y de las movilizaciones sociales en las regiones precariamente articuladas a la vida política y económica de la nación, donde la presencia de las instituciones estatales es profundamente diferenciada, prolonga las orientaciones de las investigaciones previas del Cinep/PPP y de ODECOFI, que enmarcan esos desarrollos de la protesta social y de la presencia guerrillera en el proceso de integración territorial del país y de la articulación política de sus poblaciones, como componentes esenciales, pero esencialmente conflictivos, de lo que denominamos la historia de la construcción del Estado.

Para ilustrar el contraste entre distintos estilos de organizaciones que confluyen en la estructura federada del ELN es muy útil la comparación

entre los desarrollos en el sur de Bolívar, uno de los bastiones históricos de los inicios del grupo, y el caso del Arauca, considerado actualmente el caso paradigmático de la organización. El inicio exitoso y la ulterior decadencia de los grupos presentes en el sur de Bolívar son analizados por el capítulo de Daniel Ricardo Amaya Alba y Juan Diego Forero, "El ELN en el sur de Bolívar: La pérdida de un bastión militar", mientras que las características que explican el auge y predominio del frente Domingo Laín en el Arauca son estudiadas por Charles Larratt-Smith en el capítulo "El ELN en Arauca: El fortín guerrillero en la sombra de los Andes".

Como es habitual en el estilo de las investigaciones de nuestro grupo en el Cinep/PPP, el capítulo de Amaya y Forero parte de la difícil topografía y escasa comunicación de la subregión del sur de Bolívar con la capital departamental, que contrastaba con un mayor relacionamiento con las dinámicas de los departamentos limítrofes de Santander, Cesar y Antioquia. En este sentido, los autores se refieren luego al poblamiento también marginal, basado, inicialmente en los esclavos fugados de las haciendas más integradas a los centros urbanos y los negros libertos, desde los tiempos coloniales, que se encuentran con poblaciones indígenas de la zona, cuyo resultado es el proceso de zambaje. A eso se añadirían los procesos de colonización de los siglos XVIII y XIX, con el auge del comercio del río Magdalena, el cultivo de tabaco y las migraciones de excombatientes liberales de la guerra de los mil días y de la violencia bipartidista, que desarrollaron procesos de poblamiento sin ninguna vinculación con la institucionalidad estatal.

Este proceso de poblamiento estuvo acompañado por enfrentamientos por el uso de la tierra, exacerbados por el establecimiento de una zona de reserva forestal en buena parte de su territorio, que impidió el desarrollo de cultivos legales, con títulos formales de propiedad y una relación legal con la institucionalidad estatal. De ahí deducen algunos las razones para la consolidación de las economías ilegales de la marihuana, coca y minería artesanal, lo mismo que para la situación de desorden y de población flotante en algunas veredas y corregimientos. Este contexto es el escenario de algunas jornadas de toma de tierras por campesinos agrupados en la ANUC, que recogía la tradición organizativa, un tanto autárquica, de la población campesina, los recuerdos de las luchas bipartidistas y el ejemplo de las luchas sindicales de la vecina zona petrolera. Esto condujo a una fuerte movilización social para exigir del Estado el desarrollo de infraestructura local, el cese de la violencia y la defensa de los recursos.

Así, estas condiciones sociales, aunadas a una geografía determinada por un entramado de ríos, ciénagas, selva y partes altas montañosas, convirtieron al sur de Bolívar en un escenario apto para la inserción y la consolidación del ELN, que estableció lazos con las comunidades de tradición

liberal y consolidó una retaguardia histórica en la teta de la serranía de San Lucas, un lugar prácticamente impenetrable para la fuerza pública, donde se resguardó su comandancia, sustentada por la producción aurífera.

Pero, por otra parte, esta ubicación geográfica, que conectaba el Caribe y el nororiente del país con la región Andina y el Pacífico, y sus condiciones sociales y económicas atrajeron también la atención de las FARC y de los paramilitares de Castaño, que buscarían romper la hegemonía que el ELN había logrado establecer en ella. Esto explica el porqué de los enfrentamientos violentos con estos grupos, pero también el ulterior decaimiento de la importancia de este grupo, al debilitarse la relación con las bases sociales en las que se apoyaba, al perder el olfato y tacto en las relaciones entabladas para controlar la vida política y extraer recursos.

Este desarrollo contrasta con el caso del Arauca, estudiado por Charles Larratt-Smith (Larratt-Smith, 2021), que parte, igualmente, del heterogéneo proceso de poblamiento de la región, con olas de colonizadores de diferentes regiones del país (campesinos mestizos de Boyacá y los Santanderes, afrocolombianos del Cauca y Antioquia, que se encuentran con poblaciones originales de indígenas y mestizos llaneros). La escasa e ineficaz presencia de las instituciones estatales, compensada inicialmente por los esfuerzos del INCORA, con su impulso a los movimientos cooperativos y a la organización de la ANUC, fue disminuyendo con la decadencia de este instituto, cuyos malos manejos y corrupción hicieron que prácticamente dejara de existir en la subregión desde los años setenta.

Sin embargo, este fracaso fue compensado por el desarrollo de las organizaciones de las comunidades rurales del piedemonte, impulsado por las juntas de acción comunal y el clero de la Iglesia católica, que fueron construyendo una densa red de organizaciones de nivel local y regional, que lograron obtener la construcción de escuelas y vías, como la trocha hacia Arauca, Tame y Pamplona, lo mismo que consiguieron la erradicación del paludismo y la electrificación de la subregión. Pero, además de estos logros, esas organizaciones sociales generaron una toma de conciencia comunitaria en torno al tejido social de la "nueva vereda", que dio lugar al surgimiento de muchas cooperativas, asociaciones voluntarias y organizaciones gremiales y sindicales.

Estas redes sociales fueron el motor organizador de los paros cívicos de los años setenta y ochenta, que evidenciaron las brechas existentes entre las comunidades organizadas y el Estado, con movilizaciones masivas en Tame y Saravena, respaldadas por líderes campesinos y el clero local. Las desconfianzas mutuas entre pobladores y funcionarios del Estado llevaron a la estigmatización de la protesta social, algunos de cuyos líderes fueron incluidos como sospechosos de subversión por las autoridades. Y la intensificación de la represión estatal hizo que algunos líderes resolvieran que su

único recurso era armarse ellos y sus comunidades; para ello, recurrieron a sus contactos en el ELN en Santander, como "Antonio García" y "Francisco Galán", para crear el Frente Domingo Laín en el Arauca.

Entre el contraste de estos dos casos regionales, se ubica el de Catatumbo, donde las tensiones entre las dinámicas societales y militares del ELN son analizadas por Henry Ortega Palacio en el capítulo "Un ELN entre lo societal y militar: dinámicas y lógicas territoriales del conflicto en el Catatumbo", para mostrar también la importancia de la organización comunal espontánea, cuya existencia es también previa a la inserción del grupo guerrillero.

Obviamente, el capítulo también se inicia con la ubicación geográfica de la región, que la convierte en un área supremamente estratégica por ser fronteriza con Venezuela y tener salida al Cesar; esto la articula al corredor estratégico que comunica el Magdalena Medio y el sur de Bolívar con el nororiente antioqueño y el Urabá, facilitando la comercialización de la coca, que se apoya en la tradición de redes y rutas de contrabando que acompañan la historia de esta área. Por otra parte, la configuración montañosa y selvática de su territorio es muy apta para el cultivo de la coca, que se suma a las bonanzas previas del petróleo y el carbón como focos de atracción de sucesivas oleadas de colonos campesinos mestizos que llegaban en busca de tierras o buscando escapar de las violencia bipartidista. Esto llevaría a los enfrentamientos de estos campesinos mestizos con la población ancestral de los indígenas barí, en cuyos conflictos terminarían involucrados los grupos guerrilleros.

Esas ventajas de la región para el cultivo, la transformación y comercialización de la coca y los conflictos en torno a la explotación petrolera, con escasa presencia de las instituciones del Estado central y una gran debilidad del Estado local, junto con una situación de enorme marginalidad económica y social, desembocaron en movimientos de protesta, apoyados en formas espontáneas de asociación, que se verían más tarde apoyadas por el ELN, pero cuyo origen es anterior a la presencia guerrillera, frente a la cual muestran cierto grado de autonomía.

Otro estudio de caso regional, que contrasta con los anteriores es el del Cauca-Nariño, analizado por Daniel Ricardo Amaya Alba en el capítulo, "El Frente de Guerra Suroccidental: Entre el arraigo social o la reconfiguración militar": a diferencia de los casos anteriores, la presencia del ELN y el mismo conflicto armado en la región son de carácter tardío. Sin embargo, inicialmente, algunos grupos del ELN habían asumido los territorios periféricos de los departamentos del Cauca y Nariño como zonas de reserva estratégica para el descanso y entrenamiento de sus militantes, pero desde donde podían realizar algún trabajo de agitación política, aprovechando tanto la ubicación geográfica con salida al Pacífico y al valle del

Cauca como las tensiones internas resultantes de un complejo proceso de población en el que confluían poblaciones indígenas ancestrales con afrocolombianos y campesinos mestizos. Por otra parte, su diversidad regional y de pisos térmicos facilitaba el desarrollo de las economías extractivas como el oro, mientras que sus cadenas montañosas eran muy aptas para la inserción y la actividad guerrillera de los grupos insurgentes, al tiempo que su ubicación geográfica era ideal para el contrabando.

La inserción más permanente del ELN se realizó hacia 1983, con el frente Manuel Vásquez Castaño, pero cuya presencia solo se consolidaría más tardíamente, a partir de operaciones exploratorias y de un fuerte trabajo organizativo en veredas y corregimientos, que exacerbaba el descontento social frente al abandono del Estado, cuya presencia se concentraba en las capitales, Pasto y Popayán y otros centros poblados. Esa consolidación se concretó en el surgimiento y desarrollo del Frente Comuneros del Sur, en 1992, conformado por las estructuras organizativas de Nariño y Cauca, producto de un vigoroso trabajo organizativo en las comunidades. Este trabajo organizativo se desarrolló bajo el liderazgo de un joven universitario, que pretendía recoger la tradición del movimiento comunitario de fines del siglo XVIII en la región, así como el trabajo político y organizativo de la línea Sincelejo de la ANUC en los años setenta y de algunos sacerdotes católicos, inspirados en la teología de la liberación. El grupo hacía también referencia constante a la escasa presencia de la institucionalidad estatal, que el nuevo grupo quería suplir, de alguna manera. Para eso, buscaron la aprobación del COCE para crear el Frente Occidental.

Este origen del frente, que combinaba la agencia de grupos de corte jacobino con tensiones regionales producidas por el abandono estatal, puede compararse con el caso del Chocó, estudiado en este libro por Andrés F. Aponte y Valentina González, "Un poder popular distorsionado: madera, oro y coca como determinantes organizacionales y armados del ELN chocoano". Estos autores señalan el contraste de una cierta fortaleza militar del grupo con su gran escasez de lazos sociales, que tratan de compensar con una mayor vinculación a las economías de la coca, la explotación maderera y la minería tanto artesanal como criminal. Por eso, algunos llegan a caracterizar su accionar como el de una especie de ejército de ocupación, que contrasta con el estilo tradicional del ELN, apoyado normalmente en organizaciones endógenas con cierto grado de autonomía; en cambio, este frente pretende enraizarse desde arriba en los procesos organizativos existentes.

Según los autores, este distanciamiento de la tradición elena obedece al hecho de que la configuración regional del Chocó no ofrece las oportunidades de otras regiones, por lo que las proclamas revolucionarias del grupo no encuentran eco en las organizaciones sociales de la región, más

interesadas en integrarse al Estado que en reemplazarlo. De ahí que la dinámica de este frente obedezca, más bien, a los proyectos expansivos de otros frentes como el Domingo Laín y el bloque norte o la Dirección Nacional del ELN, que desconocen los logros de estas organizaciones en materia de reconocimiento étnico, el reconocimiento de los territorios de los resguardos indígenas y consejos comunitarios de pobladores afrocolombianos. Además, a diferencia del estilo fariano, el frente no impulsó tampoco movimientos de colonización campesina que le hubieran servido de base social. Por eso, la presencia de este frente suele percibirse más como obstáculo para los procesos de integración de la región a la nación y al Estado, que como catalizador de las transformaciones que perciben como necesarias.

En otras palabras, este frente no ha logrado insertarse en las dinámicas endógenas de las organizaciones de esta región. Esto hace sospechar a los autores de este capítulo (Aponte y González, 2021) que la expansión reciente del ELN en el Choco es menos consistente de lo que parece. Lo que explica, según ellos, el carácter autoritario del manejo de las relaciones de este frente con las poblaciones locales, semejante a las de las FARC en su momento de expansión, que contrasta, incluso, con el comportamiento tradicional del ELN en otras zonas del mismo Chocó con el San Juan y alto Atrato.

Obviamente, esta situación tiene sus explicaciones en una mirada de larga duración de la configuración territorial y social de la región, donde los procesos organizativos encontraron un cauce institucional por el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y las leyes favorables a los territorios poblados por afrocolombianos, a pesar de la histórica marginalidad económica y social y la escasa regulación estatal de las tensiones que se derivaban del tipo de economía de la región, donde la pequeña agricultura convive con la minería aurífera, la pesca y la explotación forestal.

Las diferencias de los desarrollos regionales del ELN

El tema de la sintonía entre los grupos armados y los problemas endógenos expresados por las autoridades, formales o informales, de las comunidades es un factor clave para la comparación de los desarrollos diferentes de los frentes regionales. Así, en el caso del Chocó, el desencuentro del frente con las tendencias de la movilización social lo lleva a asumir una posición autoritaria, centrada en el control de las economías extractivas del territorio para obtener recursos tributarios, que explica su insistencia en la dimensión militar. Por eso, su reposicionamiento militar lo convierte en un actor importante del conflicto armado en el territorio, que trae consigo, además, un mayor peso en el conjunto de los grupos que componen al ELN.

En contraste, los frentes del Cauca y Nariño tendían a sintonizarse más con los problemas de los pobladores para ir ganando legitimidad

social al asumir un papel de mediador y regulador de los conflictos de las comunidades, que representaba cierta labor de suplencia frente a la ausencia de la regulación estatal. Sus miembros participaban en las reuniones con los presidentes de las juntas comunales, dictaban normas de convivencia e impulsaban la participación de los pobladores en los trabajos comunitarios, al tiempo que respaldaban coactivamente las regulaciones de las autoridades comunitarias.

De ahí que gozaran de bastante acogida entre los pobladores: esta legitimación social del ELN permitió consolidar su presencia en algunas de las subregiones del Cauca y Nariño, como el macizo y el piedemonte caucanos. Allí llegó otro frente, procedente del norte del Valle del Cauca, desplazado por la presión del bloque Farallones de las AUC, que se había ubicado en las zonas urbanas y rurales de Cali y sus municipios vecinos como Yumbo y Jamundí. El autor del capítulo correspondiente (Alba, 2021) subraya la composición de los miembros de este frente, profesionales y universitarios, no acostumbrados al terreno, que ilustran la presencia de agentes de corte jacobino en el ELN.

Pero, la región del macizo se convertiría en zona de disputa con la llegada de las FARC hacia 1998, empujadas por los avances de la fuerza pública y las campañas de erradicación de la coca en el Putumayo; esto llevaría a una competencia por el control del territorio y de su población, que puso a los líderes comunitarios en la mitad del fuego cruzado entre los dos grupos. Es importante recalcar, como muestra Alba (2021), la decisión de los dirigentes sociales de aislarse de la confrontación entre esos dos grupos, para caminar por su cuenta, sin dejarse imponer condiciones de ninguno de los dos. El hecho de que el ELN aceptara esa decisión de las comunidades mientras que las FARC siguieran intentando forzar su adhesión y los considerara como otro objetivo militar, ilustra las diferencias de comportamiento de las dos guerrillas con la población civil. Por eso, según algunos entrevistados, las comunidades sintieron cierto alivio cuando las FARC se replegaron y agradecieron el regreso del control eleno.

Así, uno de los puntos que subraya el autor es el carácter regulador de la convivencia comunitaria, de un carácter más mediador, a diferencia de las imposiciones de las FARC, que se manifestaba en la elaboración conjunta, con la comunidad, de los manuales de convivencia en asambleas que decidían sobre aspectos de la vida cotidiana, como el horario de las cantinas, las multas a los borrachos, la protección del medioambiente, los problemas de intolerancia, la ausencia de militantes armados en reuniones públicas.

Por su parte, el grupo guerrillero se encargaba de ser garante del cumplimiento de las normas establecidas por esas asambleas, que fomentaban el empoderamiento de las comunidades, que lograban, incluso, imponer normas a la guerrilla, impidiendo, por ejemplo, el reclutamiento de

menores de edad y algunos ajusticiamientos decididos por esta. Algunos de los entrevistados hablan incluso de una especie de autogobierno local, garantizado coercitivamente por el ELN, cuya administración de justicia estaba supeditada a las decisiones comunitarias: sus procesos sancionatorios no eran definidos unilateralmente, sino informados previamente a los líderes en asambleas, antes de ser llevados a cabo. Y para evitar que los procesos fueran instrumentalizados por algunos pobladores con falsas denuncias o por algunos insurgentes, se desarrollaba un proceso de investigación, que era comunicado a las comunidades. De ahí la percepción positiva de los pobladores sobre la justicia de las decisiones de los jefes guerrilleros, a pesar de los casos de ejecución, en los que se procuraba, según un entrevistado, darle "una muerte digna".

Obviamente, el autor de este capítulo (Alba, 2021), reconocía que el desarrollo de estos juicios públicos dependía, en coincidencia con los planteamientos de Ana Arjona (2008, 2016, 2017), de la capacidad organizativa de las comunidades y del tipo de la comandancia encargada de la zona; así, si el comandante era autoritario y la población pasiva, eran probables los ajusticiamientos sin esos procesos públicos, pero, cuando no era así, los procesos sancionatorios dependían de los juicios, incluso sin que fueran exigidos por las comunidades.

Esta particularidad del comportamiento del ELN como elemento de coerción y de control social, que garantizaba el cumplimiento de las regulaciones comunitarias de la vida cotidiana de las poblaciones, gozaba de cierta aceptación de las comunidades. Según algunos entrevistados, la simple presencia de sus miembros en las veredas y corregimientos facilitaba el cumplimiento de las normas comunitarias, que eran, incluso apropiadas por la insurgencia. El caso del control de la deforestación y la prohibición de construir viviendas en las cuencas de los ríos son ejemplo de esta convergencia.

Pero, además de esta función coercitiva, la intervención del grupo guerrillero en el desarrollo de la infraestructura vial y educativa de las veredas con la inversión de "los impuestos revolucionarios" recuerda el papel de constructores de la guerra que Kalyvas concedía a los señores de la guerra en China por su desempeño como autoridades fiscales (Kalyvas, 2001a, 2001b, 2004, 2006). En ese sentido, el cobro de vacunas y extorsiones no solo servían para la financiación del grupo armado, sino también para crear, en palabras de algunos entrevistados, "un erario colectivo para la construcción de obras" de carácter público como puentes, carreteras, salones comunales y escuelas.

En algunos sitios, como en Guachucal (Nariño), la guerrilla llegó incluso a crear un sistema de cobros según la capacidad adquisitiva de la persona y la situación del negocio afectado, aunque a veces se cometían errores de cálculo, que llevaban a sobreestimar la capacidad económica de personas y

empresas. No faltaban casos como en El Tambo, donde la guerrilla no solo no extraía recursos de la comunidad, sino que, más bien, aportaba recursos cuando era necesario y solo extorsionaba a las grandes empresas. Según algún entrevistado, todos pagaban "impuestos" de manera voluntaria, pues consideraban que la guerrilla devolvía lo recaudado en materia de servicios y seguridad y vigilaba para que el gasto fuera adecuado.

Así, su capacidad de convocatoria, orgánica y coactiva, y su recolección de "recursos públicos", llevaron, según este testimonio, a convertirse en "la vía principal" del desarrollo de algunas veredas y corregimientos: además, siguen afirmando estos líderes y lideresas, el trabajo político del ELN fomentó "el arraigo comunitario de los pobladores" que asistían a las mingas convocadas por la guerrilla, algunos por miedo a las represalias, pero otros por convicción propia. Por eso, afirma otro testimonio, el trabajo político organizativo del ELN se esforzaba en "la construcción de gobiernos propios comunales", llevando a las veredas y corregimientos a profesionales expertos en las áreas del conocimiento que fueran funcionales para sus pobladores, como en los temas de salud y de construcción de obras. Estas estrategias se enmarcaban, según algunos entrevistados, en la idea elena de construcción de poder popular, con gobiernos de corte comunitario —relativamente autárquico—, bajo la estrategia maoísta de guerra popular prolongada. Según el autor de este capítulo, la estrategia del poder popular logró una mayor articulación de las luchas locales con las departamentales y nacionales.

En el caso de Cauca y Nariño, estas estrategias del ELN fueron llevando a cierta autonomía de las poblaciones y organizaciones en torno a sus propias luchas, que las llevaron, incluso, a confrontar al mando central de la insurgencia, cuando consideraban que los órganos de poder de sus instituciones comunitarias no eran reconocidos —y fomentaron una agenda cultural y educativa, en colaboración con los maestros locales, algunos de los cuales confesaban que habían cambiado su percepción negativa del grupo armado—.

De ahí, concluye el autor del capítulo (Alba, 2021), se presentaban dos posiciones: una, que identificaba el papel positivo de la guerrilla en el progreso de las veredas y otra, que subrayaba que su presencia no daba garantías para el comercio. Pero, también subrayaba el autor, la importancia de su accionar para el aumento de la participación política de los pobladores en las tomas de decisión en el marco de la descentralización y elección popular de alcaldes, buscando despertar la conciencia de elegir un representante de sus intereses. Lo mismo que el control político que el ELN ejercía sobre los funcionarios, a los que hacía saber que los estaba vigilando y a los que imponía la necesidad de transparencia "so pena de retención, reconvención, amenaza e incluso muerte".

Así, reconocía un entrevistado, todos los alcaldes de Guachucal, entre los años 1993 y 1994, habían sido "reconvenidos por la guerrilla" para enseñarles cómo deberían comportarse. Por eso, concluye el autor de este capítulo, la guerrilla del ELN llegó a convertirse en la autoridad local en algunos territorios, aunque señalando que la dinámica del conflicto armado lo había obligado a replegarse en ocasiones, lo que dificultaba su regulación y relacionamiento con las comunidades.

Aunque es bastante obvia la idealización de la regulación del ELN por parte de algunos entrevistados, que, no obstante, reconocen algunos aspectos negativos como el caso de los fusilamientos, es clara su diferencia con el comportamiento de otros grupos armados. Por lo demás, esta situación ideal se modificó con la competencia de las FARC en algunos territorios, que, además, condujo a la intensificación de la ofensiva militar de las fuerzas estatales, ya bajo la política de la Seguridad Democrática, y a la llegada de grupos narcotraficantes a la subregión como Los Rastrojos.

La ofensiva del Ejército obligó al repliegue de las FARC al tiempo que se concentraba en la desactivación de las bases sociales de las guerrillas, con la estrategia de "quitarle el agua al pez", que trajo consigo el aumento de las infracciones al derecho internacional humanitario, entre el 2004 y 2005. La estigmatización de la población aumentó con la llegada de los paramilitares, que señalaban como colaboradores de la guerrilla a los pobladores que se habían visto obligados a aceptar, a veces con cierta reluctancia, la regulación de los guerrilleros, al tiempo que controlaban la movilidad y la cantidad de alimentos de los pobladores, para dejar sin recursos a los insurgentes.

Pero esta situación facilitaría algunas alianzas estratégico-militares entre FARC-EP y ELN, que recobrarían luego el control de sus territorios tradicionales con la desmovilización de los paramilitares, De todos modos, conviene recordar que la presencia de las AUC y de las fuerzas estatales se concentraba normalmente en las cabeceras municipales, mientras las FARC y el ELN se replegaban a las zonas rurales, en las estribaciones de las cordilleras.

Esta situación evidenciaba el contraste, señalado por el autor, entre el fuerte arraigo social del ELN en algunas zonas de la región y su debilidad en términos militares, en comparación con otros grupos armados. Este poco posicionamiento en la dinámica del conflicto armado se debió, en primer lugar, a la condición inicial de la región como retaguardia, pero, principalmente, a la decisión de la Dirección Nacional del ELN de privilegiar la dimensión política sobre la militar, siguiendo la lógica de crecimiento por adhesión de emprendimientos regionales.

Sin embargo, la frecuencia relativamente baja de acciones se mantuvo bastante constante, con acciones contra la fuerza pública, como emboscadas, asesinatos con francotiradores, hostigamientos y ataques a puestos

de policía, sabotajes a las vías de comunicación, al oleoducto y las operaciones de erradicación forzada y fumigación de los cultivos de coca. Esto significaba una opción por reducir los costos que implican los combates directos y su concentración en labores de propaganda, que se extendían más allá de los límites de la región.

Pero, tuvo que afrontar la ofensiva de grupos como los Rastrojos, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), la Banda de Alexis, los Guachos y otros grupos dedicados al narcotráfico, cuyas confrontaciones con el ELN aumentaron con el retiro de las FARC del territorio con el proceso de paz. Esta situación contrasta con el desarrollo del grupo en el Chocó, donde el narcotráfico impulsó una mayor integración al territorio nacional al aprovechar las rutas del contrabando, tradicionales desde la época colonial, para la comercialización de la droga y el tráfico de armas, favorecidas por el acceso a los dos océanos. Esta mayor integración del territorio se vio profundizada por la llegada tardía de los grupos armados (M-19, FARC, EPL y ELN) y el arribo de los narcotraficantes, que también querían aprovechar la ubicación estratégica de la región, con salida a los dos mares y su conexión con el mundo andino (Antioquia, Risaralda y norte del Valle). Obviamente, esto trajo como respuesta la mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad y puso fin a la tradicional ausencia de la región de las dinámicas nacionales de la guerra.

En ese contexto, la llegada de las FARC y el ELN a la región no puede entenderse sin los avances de la Seguridad Democrática y los grupos paramilitares en las zonas más integradas del país, que obligaron a estos grupos a replegarse hacia las zonas más periféricas (Vázquez, Vargas y Restrepo, 2011). Sin embargo, a diferencia de otras regiones del país, este repliegue hacia las zonas periféricas se encontró con un escenario inesperado, producido por el auge de las comunidades negras en sus luchas por conseguir su reconocimiento identitario y la titulación de tierras, que estaba logrando cierto reconocimiento institucional. Esto hizo que el proceso habitual de la expansión de las guerrillas no encontrara sintonía con la lógica interna de los habitantes de la región, que no estaban interesados en combatir al Estado sino en integrarse mejor a él, para lograr su reconocimiento y medidas legales favorables.

Debido a esta falta de sintonía de los grupos armados con las tensiones endógenas de la población, los grupos armados llegaron a la región buscando preservar sus fuerzas frente al avance de las fuerzas estatales, conseguir recursos y aprovechar la ubicación estratégica de la región, pero sin lograr conectarse con las necesidades de los pobladores. Esto conllevaba el predominio de la dinámica militar, impulsada por un agente exógeno, de corte jacobino, que buscaba controlar coercitivamente la región y aprovechar los recursos de las economías ilícitas; esto no obstaba

para que, en casos raros, pudiera funcionar como regulador del orden social de algunas comunidades, pero no de manera habitual.

Por eso, en esta región el ELN tiende a comportarse, generalmente, como un agente exógeno a la región, qua adopta conductas más propias de un ejército de ocupación, con visos criminales, que contrasta con el tradicional estilo de expansión societaria de este grupo, que, normalmente, buscaría insertarse en movimientos relativamente autónomos para articularlos al proyecto nacional. En cambio, en el Chocó, el Frente Omar Gómez se inserta, más bien, movido por una decisión voluntaria de adentrarse en zonas de importancia económica y estratégica, que ofrecían recursos (minas de oro y platino), junto con la oportunidad de configurar un corredor estratégico con acceso a los dos mares y a zonas del mundo andino de interés económico como Antioquia, el eje cafetero y el Valle del Cauca.

Este cambio estratégico transformó una zona de retaguardia para el descanso y reabastecimiento, adonde llegaron los grupos guerrilleros para escaparse de los avances de las fuerzas estatales y paramilitares del mundo andino integrado, en un nuevo escenario del conflicto entre las mismas guerrillas, pero también entre estas, los grupos paramilitares de primera y segunda generación y las fuerzas del Estado.

Sin embargo, a diferencia de las dificultades del ELN para insertarse en la región, las FARC lograron apalancarse en el trabajo político previo del Partido Comunista en zonas de colonización campesina de Riosucio, Unguía o Acandí, para cubrir importantes zonas de Chocó, Antioquia, Córdoba y Risaralda, y lograr algunos acuerdos con los pobladores de las zonas bajas y altas del Atrato y Baudó en torno a las normas y reglas de convivencia.

En cambio, el ELN afrontaba dificultades para articular iniciativas inconexas, que respondían a la estrategia internacional de la comandancia nacional, que pretendía proyectarse hacia Centroamérica: una en el suroccidente del Chocó, otra en el Urabá chocoano (Bajirá, Riosucio y Murindó); y, una tercera, la parte costanera (Bahía Solano y Juradó). Luego, el ELN impulsó la creación de algunos frentes en el nordeste y norte, como el Astolfo González y la compañía Manuel Hernández, "el Boche", que intentaban conectar los grupos del Chocó con los de la Costa caribe. Pero de mayor interés son el frente Benkos Biohó, que funcionaba entre los ríos San Juan y Baudó, y el Cacique Calarcá, escindido del Frente "Che" Guevara (entre Antioquia y Risaralda), que operaba en los límites del Chocó con Risaralda y Caldas.

El caso del Benkos Biohó es destacado por los autores (Aponte y González, 2021), porque ilustra la voluntad expansiva de algunos frentes de proyectarse más allá de su radio tradicional de acción y la concepción más amplia de la lucha de la Dirección Nacional del COCE, pero también las dificultades del ELN para integrarse en la problemática regional, de

carácter étnico. Así, el grupo se originó con el intento expansivo del Frente Domingo Laín, que envió una comisión al Chocó, compuesta por guerrilleros negros, dirigidos por "Américo", para crear un frente chocoano subordinado al Laín. Pero, tuvo el resultado inesperado de que el grupo se declarara en disidencia y propusiera crear una guerrilla exclusivamente negra: se quedaron con el dinero, las armas y equipos de radio y manifestaron que eran "otra cosa": dejaban de ser parte del ELN para articularse al movimiento social, en el grupo "Tigritudes". Finalmente, el proyecto Benkos Biohó terminó siendo absorbido y "neutralizado" por las propias comunidades negras, aunque algunos de los acumulados de "Américo" fueron luego recogidos por el Frente Cimarrón, en la región del Pacífico-Baudó.

Además, sostienen Aponte y González, esto mostraba que el Chocó no era considerado como una zona importante en la estrategia de la Dirección Nacional: por eso, los grupos del ELN eran allí una especie de rueda suelta, que no habían logrado conectarse con las dinámicas de la región, sino que solo subsistían gracias a los recursos enviados por otros frentes o cuando se apoyaban en trabajos previos de otros grupos de izquierda, que habían regulado las tensiones en torno a las explotaciones del oro y la madera. Esta debilidad social del ELN entre la población afro contrastaba con sus relativos éxitos entre las organizaciones de los colonos ("blancos") del mundo paisa, que buscaban fortuna en la minería de oro. En ese sentido, concluyen los autores, el ELN fue más "hábil" para insertarse en los intersticios donde confluían el mundo andino y el mundo negro, en contraste con el anclaje social que lograron las FARC en los procesos organizativos en pro de la titulación colectiva de las comunidades negras (Aponte y González, 2021).

A pesar de estas dificultades, a mediados de los noventa, el ELN había logrado cierta presencia en algunos municipios, como San José del Palmar y Nóvita en el San Juan; Nuquí, Bahía Solano, Alto Baudó, hacia el Baudó y el Pacífico; y Quibdó, Unión Panamericana, Cantón de San Pablo, Atrato, Lloró, Cértegui, Bagadó, Tadó, Carmen de Atrato y Río Quito, en el alto y medio Atrato. Sin embargo, a diferencia de las FARC, tanto su protagonismo militar como político seguía siendo bastante limitado y su presencia seguía siendo muy marginal, reducida a los intersticios entre el Chocó y el mundo andino de Antioquia y Risaralda y las zonas más apartadas del Baudó. Este replegamiento hacia los límites con Antioquia y el eje cafetero se traducía en el papel muy secundario del ELN en el conflicto armado, pues se limitaba a evadir tanto el avance de las fuerzas estatales como el involucramiento en los enfrentamientos de las FARC con los paramilitares en el bajo y medio Atrato.

Por eso, la inserción definitiva a la dinámica nacional de la guerra sería más tardía, con la llegada de los paramilitares al bajo Atrato (Riosucio), desde el Urabá antioqueño, y al alto San Juan, desde el Valle del Cauca,

pero también con la ofensiva de las fuerzas del Estado (las operaciones Salaquí y Cacarica, en 1997) contra los frentes de las FARC que operaban en las fronteras entre Antioquia y Chocó y entre Chocó, Risaralda y Caldas. La consiguiente expulsión de las FARC y el ELN de los intersticios entre el mundo andino y pacífico (las fronteras con Risaralda, Antioquia y Valle) condujo a la inserción definitiva del ELN en el Chocó, que coincidió con el fortalecimiento organizativo de las poblaciones campesinas y étnicas en contra del despojo de sus tierras y la economía extractiva.

En ese contexto, llegan, a principios del 2000, los frentes que operaban en la zona cafetera y el norte del departamento a la zona de la carretera Quibdó-Medellín, para configurar el actual Frente Occidental Omar Gómez. De ahí el carácter predominantemente exógeno de esta fuerza, que provenía de su forzado repliegue de la zona andina más integrada, pero cuyos desarrollos llevaron a un reparto del territorio con las FARC, —que dominaban la margen izquierda del bajo Atrato hasta la frontera con Panamá—, los paramilitares que controlaban la margen derecha, incluido el casco urbano de Riosucio, mientras que las FARC y el ELN quedaban relegados a las partes medias y altas de la subregión: el ELN se reducía a las partes altas del Atrato: Carmen de Atrato, Quibdó, Istmina, Bagadó, Lloró, El Carmen, Tadó (Vicepresidencia de la República, 2003).

Algo parecido sucedía en el Baudó, donde las guerrillas quedaban recluidas en la serranía del Baudó, y solo ocasionalmente incursionaban en la zona costanera, como con el secuestro masivo en la ensenada de Utría, en 2002. Finalmente, en el San Juan, el ELN quedó compartiendo espacio con las FARC, en particular en las partes altas y medias.

Esta situación se mantuvo estable hasta la desmovilización de las AUC, en 2006, que fue aprovechada por las FARC y el ELN para intentar recuperar los territorios de los que habían sido expulsados. Esto trajo consigo la reanudación de los enfrentamientos con las AGC, que lograron aniquilar o absorber a otros grupos paramilitares (como los Rastrojos) con los que algunos grupos del ELN, como el frente Resistencia Cimarrón, habían logrado acuerdos relativos en los circuitos de narcotráfico en el alto, medio y algunas partes de la zona del bajo Baudó; en este contexto, las FARC y el ELN lograron ampliar sus dominios territoriales y controlar algunos corredores de movilidad para el negocio del narcotráfico, la explotación maderera y la realización de secuestros y extorsiones.

Para este objeto, las dos insurgencias establecieron pactos para repartirse el territorio y dividirse el trabajo en los eslabones del narcotráfico, pero también para realizar operaciones armadas conjuntas. Sin embargo, pronto se presentaron tensiones porque el comportamiento de los elenos con la población y sus acuerdos paralelos con grupos sucesores del paramilitarismo, como Los Rastrojos, significaba un incumplimiento de lo pactado. Pero,

además, los conflictos reflejaban también algunos cambios de lógica de esos actores: una lógica más narcotizada por parte de los elenos se encontraba con una lógica menos contrainsurgente por parte de Los Rastrojos.

No obstante, la permanencia de grupos paramilitares, con nombres distintos de las AUC, pero con la misma lógica (los Rastrojos, Renacer y las Águilas Negras y las AGC-Urabeños) y el nuevo estilo del grupo eleno, evidenciaban que el conflicto armado se estaba profundizando en el Chocó, en torno a intereses económicos como la minería, la explotación maderera, los cultivos de uso ilícito, los laboratorios y las rutas de movilidad y tráfico de drogas y armas. Especialmente en la parte media de la cuenca del Atrato, de las zonas medias y bajas del Baudó, y de la parte costanera.

Como resultado de estos enfrentamientos, el ELN terminó refugiándose en el sur del departamento, donde logró mantener, entre los años 2007 y 2009, su único bastión en algunas partes del río San Juan, especialmente en Lloró; en cambio, las FARC lograron imponerse en el medio Atrato, desde Munguidó hasta Riosucio, de donde hicieron salir al ELN.

Sin embargo, a pesar del repliegue del ELN, los pactos locales de paz entre las dos guerrillas permitieron que ambas conectaran sus zonas de dominio con los corredores de movilidad tanto con el eje cafetero y el Valle del Cauca, en el sur, como con el Baudó y el medio Atrato y el sureste de Antioquia, hacia el norte. Pero estos acuerdos perderían su vigencia con el retiro de las FARC con los acuerdos de La Habana, lo que llevó a un mayor conflicto con las AGC en torno al control de estos territorios.

Esta comparación entre los estilos de los frentes del Chocó y Cauca Nariño, —poca capacidad y mucha legitimidad social en Cauca-Nariño, y poco entronque social con mayor capacidad militar en el Choco—, puede introducirnos al acercamiento a la evolución del ELN en el sur de Bolívar, que muestra cómo se pierde el dominio social, político y social en una zona considerada como bastión y área de retaguardia. Allí, esta guerrilla había tenido una de sus primeras zonas de expansión, donde se había ubicado, tiempo atrás, la Dirección Nacional, que llegó, incluso, a plantear la posibilidad de crear allí una zona de despeje para avanzar hacia su propuesta de convención nacional.

Esta transición entre el auge y la decadencia de este frente es el tema central de Daniel Ricardo Amaya Alba y Juan Diego Forero, en el capítulo "El ELN en el sur de Bolívar: La pérdida de un bastión militar". Después de haber analizado la configuración territorial de la subregión donde surgió, desde finales de los años sesenta, los autores se refieren al proceso de la selección de San Vicente del Chucurí, Santander, como foco inicial del grupo, que se prefirió al sur de Bolívar, el cual era otra posible alternativa para comenzar sus acciones, debido tanto a su ubicación estratégica como a la tradición de lucha social y comunitaria de sus poblaciones.

Por eso, poco después de la presentación pública del ELN en la toma de Simacota, el 7 de enero de 1965, se realizó la toma del Papayal, Santander, para impulsar una expansión hacia los límites del departamento de Santander con el departamento del Cesar, donde aprovecharon el trabajo político previo, para fundar el frente Camilo Torres Restrepo y buscar bases sociales en el sur de Bolívar, cuya ubicación era muy estratégica: era un paso obligado para llegar desde el Magdalena Medio hasta occidente de Antioquia, a las zonas bananeras del Urabá chocoano y antioqueño, con acceso al Caribe y el Pacífico, pero también, al oriente, con la serranía del Perijá y Venezuela.

Así en 1976, surge allí el frente Luis José Solano Sepúlveda, que sería el frente madre de todas las estructuras de esta zona, que aprovechaba las simpatías despertadas por la figura de Camilo Torres. Pero la primera aparición militar en la subregión se había dado antes, en 1972, con la toma de San Pablo por el grupo comandado por Fabio Vásquez, que funcionaba entre Yondó, Antioquia, y San Pablo y Santa Rosa del Sur, Bolívar. De ahí había partido el esfuerzo expansivo que se vio interrumpido por el golpe que la fuerza pública había propinado al ELN en Anorí, el cual marcaría el inicio de la reestructuración y fortalecimiento organizativo del segundo ELN. Por eso, según el exguerrillero Antonio Rodríguez, el sur de Bolívar constituía una especie de santuario natural, de difícil acceso y fácil de controlar militarmente, donde el ELN sería invencible (Rodríguez, 2005).

Pero los comienzos no resultaron fáciles: después de Anorí, Fabio Vásquez trató de redistribuir sus fuerzas para evitar otro golpe militar, ubicando un núcleo en la serranía de San Lucas con la creación del Frente Luis José Solano Sepúlveda, donde se había decidido establecer el comando central, COCE. Pero esta decisión fracasó por el desarme y la desmovilización de un importante grupo de guerrilleros de ese frente. Esto llevaría al ELN a conformar una Dirección Nacional Provisional (DNP), en 1978, con representantes de las estructuras que quedaban. Y en 1979, se organizarían los frentes Domingo Laín Sáenz en Arauca, el Manuel Vázquez Castaño en el Huila y el Luis Carlos Cárdenas en el Valle y se reactivaría el Solano Sepúlveda, que reintegraría los trabajos comunitarios de mediación de conflictos entre cachacos y costeños dentro de las demás estructuras del ELN.

Con esto, se empezó a expandir nuevamente el ELN, aprovechando las relaciones de sus comandantes, muchos de ellos nativos de la subregión, con las poblaciones, y el tradicional abandono del Estado en materia de bienes y servicios. En ese sentido, hay que mencionar que Amilkar, uno de los comandantes históricos del frente, como antiguo estudiante de medicina prestaba servicios médicos a las comunidades mientras que el "viejo" Raúl, otro comandante histórico, había sido un líder campesino de la ANUC, con raíces en el territorio donde había nacido, en el

municipio de Pinillos, Bolívar. En ese sentido, este fortalecimiento del ELN en la región recogía las luchas sociales del sur de Bolívar y en especial el trabajo abonado de la ANUC.

Así, en la reestructuración de este segundo ELN, se privilegiaba el ámbito político y el trabajo de masas sobre el militar: las actividades de los elenos dejaron de girar en torno al apoyo logístico que los pobladores le pudieran brindar (dar información, suministrar productos, facilitar contactos), para dar mayor importancia al trabajo político organizativo y para aportar a las luchas locales en pro de la construcción de poder popular. Este estilo se hizo manifiesto en el sur de Bolívar, como reconocen líderes de Tiquisio y San Pablo, entrevistados por los autores, que señalaban el impulso del ELN a la mejor organización de las comunidades y su respeto por la dinámica propia de las expresiones organizativas de las comunidades.

Este impulso le permitió al ELN regular aspectos políticos, sociales y económicos por medio del establecimiento de marcos normativos, elaborados conjuntamente con las juntas comunales y los comités veredales: según los autores, se podría afirmar que algunas normas fueron impuestas por la guerrilla y otras consensuadas o apropiadas de las normas comunitarias. Para ellos, el ELN demostró ser una organización abierta al diálogo, porque su estilo de mediación permitía que las comunidades ejercieran contrapeso frente a los visos autoritarios de algunos comandantes, que a veces imponían sanciones injustificadas o se inmiscuían en asuntos que no les correspondían.

Esta posibilidad de reclamar a los comandantes y el apoyo del ELN a los procesos organizativos de las comunidades llevaban, según los autores (Amaya y Forero, 2021), a la conformación de una suerte de gobiernos comunitarios autárquicos, concertados con la insurgencia, que, ante el abandono estatal de las comunidades, funcionaba como autoridad de hecho. Según un entrevistado, se sentía "que la autoridad era el pueblo", que concertaba con la guerrilla la regulación de asuntos como los límites a la explotación minera. Las reuniones eran convocadas, inicialmente, para "echar todo ese rollo político, ese cuento de hablar de la revolución, de la lucha", pero terminaban por impulsar la organización de la comunidad para afrontar los problemas. Y permitían que las comunidades confrontaran a los milicianos en nombre de su discurso: "ustedes nos decían cuando pasaban por acá que el pueblo tenía la palabra, que el pueblo mandaba y que el pueblo cuidaba" (Amaya y Forero, 2021)

Así, según los entrevistados, el ELN se convirtió en la escuela que les enseñó a las comunidades a reclamar, pero estas, cuando ellos las despertaron, resolvieron a exigirles a ellos mismos lo que les habían enseñado. Y lograron que les devolvieran el control de la comunidad, la devolución de las fincas de las que se habían apropiado, con la consiguiente reparación por su producido, y el desminado de la vía. Por eso, sostienen los

autores, las comunidades empezaron a ver la presencia de actores armados en sus reuniones como un obstáculo para la lucha social y decidieron que su método de lucha se concentraría en la resistencia civil, el diálogo y las herramientas jurídicas (Amaya y Forero, 2021).

Pero ese distanciamiento y autonomización de las comunidades, que buscaban mantener la legitimidad de sus exigencias, fue resultado de un complejo proceso, según los entrevistados, que "no se ganó así de la noche a la mañana". Los primeros pasos fueron muy atrevidos como el de prohibir la presencia de líderes armados en las reuniones, para destacar que se trataba de "un proceso social desde la civilidad": un entrevistado decía que no sabía cómo estaban vivos, había gente que los "frenteaba" y la guerrilla se quejaba de que los estaban desconociendo, pero se encontraron con jefes inteligentes, dispuestos a conversar.

Estos testimonios ilustran la complejidad de las relaciones entre la guerrilla y las comunidades, que contradice la mirada reduccionista de los que las consideran como meros instrumentos de la insurgencia. Y evidencia que ellas no son actores pasivos sino que se vieron obligadas a convivir con las guerrillas, pero intentando limitar y condicionar su accionar. Obviamente, en ese relacionamiento el ELN conseguía retroalimentar las banderas de lucha de las organizaciones sociales, mientras las comunidades encontraban en el ELN un actor que contaba con un discurso y una experiencia política, que suplía, de alguna manera, la ausencia de instituciones estatales que facilitaran la solución de problemas locales.

Por eso, muestran los entrevistados, que el papel principal de la insurgencia, más allá del fomento a obras de infraestructura, fue el de funcionar como autoridad armada garante del cumplimiento de los marcos normativos de las comunidades, que dirimían problemas locales de tipo familiares, de linderos, vecinales y de negocios. Además, limitaban el consumo de alcohol, prohibían el uso de psicoactivos, el porte de armas y la caza de fauna silvestre, al tiempo que regulaban la minería, la pesca, el cultivo de coca y la deforestación al limitar la tala y promover la siembra de árboles y propiciar el cierre de la frontera agrícola. En cierto sentido, el ELN operaba como aparato coercitivo de las autoridades comunales, para imponer el orden evitando que la gente, que vivía armada, se matara, robara el oro, por medio de la imposición de sanciones, multas, trabajo forzado, e, incluso, en casos extremos, la muerte.

Sin embargo, señalan los autores que este robusto arraigo social del ELN en los territorios tenía un lado oscuro, porque creaba una frágil zona gris entre los guerrilleros y la población que, o los apoyaba, o, simplemente convivía con ellos. Esto traía como resultado la estigmatización de los pobladores de la región, que los convertía en objetivo de la violencia estatal y paramilitar. Así, en el sur de Bolívar las masacres de civiles

perpetradas por los paramilitares afectaron no solo a los integrantes del ELN y sus bases sociales, sino también a sus familiares y conocidos, aunque no tuvieran nada que ver con el proyecto de la guerrilla.

Además, las estrategias contrainsurgentes, centradas en la idea de "quitarle agua al pez", afectaban el propio estilo de trabajo del ELN, basado en el trabajo político organizativo que aprovechaba precisamente los lazos familiares y sociales. El hecho de que la mayoría de sus miembros se dedicaran al trabajo organizativo imprimía al ELN una característica especial, que, como confiesa uno de sus dirigentes, le daba muy poco músculo militar, pero mucho músculo organizador. Y fueron precisamente esos rasgos los que permitieron que el paramilitarismo golpeara a las bases sociales, reales o supuestas, del ELN en el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño, en el bajo Cauca, en el oriente antioqueño y el Magdalena Medio.

El crecimiento organizativo del grupo en la región fue notable a finales de los ochenta y durante los noventa, cuando logró extender su cubrimiento a los municipios de Montecristo, Arenal, Rio Viejo, Tiquisio, Morales, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití y Cantagallo y alcanzar un pie de fuerza armado de más de mil guerrilleros, apoyados en recursos económicos provenientes en gran parte de la minería aurífera. Esto se reflejó en un alto número de acciones armadas en los años noventa, que evidenciaban una gran capacidad bélica, con un notable desarrollo de armamento popular, con talleres artesanales para fabricar granadas, minas, morteros hechizos, ametralladoras y un vehículo blindado con las dos ametralladoras punto treinta que tenían.

Estos logros convirtieron al ELN en un actor protagónico en la dinámica del conflicto en las regiones: la importancia estratégica del sur de Bolívar llevó a que la actividad del COCE se concentrara en la serranía de San Lucas, como se evidenció en la propuesta, durante el gobierno de Andrés Pastrana, de crear una zona desmilitarizada en la región. Pero la estrategia del secuestro del avión Fokker de Avianca, en abril de 1999, que evidenciaba una alta coordinación entre los frentes rurales del sur de Bolívar y las estructuras urbanas del departamento de Santander, fue contraproducente: terminó propiciando la masacre, perpetrada por los paramilitares, en la vereda El Piñal, —en Simití, adonde había sido conducido el avión y llevando a la ofensiva militar de la fuerza pública en contra de sus estructuras y las de las FARC-EP—.

Estos contrastes de las situaciones de Cauca-Nariño, el Choco y el sur de Bolívar en cuanto a las relaciones entre los frentes elenos y las comunidades, pueden profundizarse con el análisis de los casos regionales del Catatumbo, estudiado por Henry Ortega Palacio y el Arauca, analizado por Charles Larratt-Smith, que giran en torno a la relación entre las dimensiones societales y políticas de la presencia de estos frentes.

Así, Ortega, después de haber señalado la importancia del Catatumbo por su ubicación fronteriza y su conformación social, destaca el papel de la protesta social, que es anterior a la llegada del ELN en los años setenta, aunque será apoyado luego por él. De este modo, el ELN es el primer grupo insurgente en llegar a la región, favorecido por su marginalidad económica, social y política, reflejada en la precaria presencia de las instituciones estatales, seguido, poco después, por las FARC y el EPL. Como muestran algunos estudios previos, las asociaciones campesinas, centradas en las tensiones de las regiones como enclave petrolero, eran bastante autónomas frente a los grupos armados, que terminarán apoyándolas para insertar en ellas sus proyectos políticos.

Esto lo demuestra el paro del nororiente, en 1987, con epicentro en Ocaña y Tibú, con una amplia participación de comunidades campesinas y movimientos sociales, cuyas peticiones estaban relacionadas con el acceso a servicios públicos básicos, que se irían reiterando en las subsecuentes movilizaciones de la región por los continuos incumplimientos de los acuerdos pactados. En este paro, el ELN tiene cierto protagonismo, al presionar a la población de algunos lugares para que participara con directrices de no dejar trabajar al que no fuera al paro, pero, sobre todo por la presencia del movimiento A Luchar como articulador del paro. El autor habla aquí de una presunta relación de este grupo con el ELN, lo que plantea la discusión sobre la relación entre este grupo guerrillero y la movilización social: ¿se trata de influencia, aparatización o instrumentalización, influencias y tensiones mutuas?

Por otra parte, el autor (Ortega, 2021) insiste en que, a pesar de esta presión del ELN en algunos lugares, la movilización había sido promovida mayoritariamente por sectores campesinos de manera autónoma. Pero, la presencia de A Luchar en este paro ilustra, según él, la tensión clásica entre los niveles nacionales del ELN, cuya estrategia de los años ochenta buscaba construir poder popular a partir de las movilizaciones sociales de las comunidades, y la organización comunitaria de las poblaciones campesinas, cuyas reivindicaciones, las cuales se mantiene casi que intactas, podrían coincidir en parte con los intereses de la guerrilla, sin que necesariamente fueran impuestas por ella.

Según Ortega, en los primeros años, el orden social armado impuesto por el ELN se basaba en un trabajo político intenso con un cierto nivel de coerción para la regulación social, pero sin que se presentaran altos niveles de violencia, que solo se mostrarían hacia el final de los años noventa. La regulación del ELN se hacía manifiesta en el control de la vida cotidiana: se castigaban las riñas, robos y porte de armas llegando, cuando se incumplía el castigo, hasta el destierro del culpable, a veces con su familia, o la muerte, a veces después de un “juicio formal”; sin embargo, según

algunos entrevistados, este control draconiano era recordado de manera positiva, pues hacía que las cosas "funcionaran".

También se controlaba la llegada de nuevos pobladores, especialmente los venezolanos, que debía contar con la recomendación de un poblador, lo mismo que la circulación de mercancías y combustibles de contrabando. Sin embargo, el trato del ELN con los migrantes tendía a ser condescendiente, porque se beneficiaba del cobro por el paso de trochas y pasos ilegales y respondía al buen trato recibido al otro lado de la frontera, donde también hacía presencia.

Y el ELN jugaba un papel más bien subsidiario en el negocio de la coca al regular el ingreso de los precursores químicos y la fabricación artesanal de un combustible conocido como *pategrillo*[5]. Y también cobraba impuestos a empresas extractivas al tiempo que fomentaban los trabajos colectivos para la adecuación de vías y la organización de fiestas.

Otras expresiones del trabajo político del ELN eran los espacios de reflexión política y las "cátedras guerrilleras" para campesinos, profesores y estudiantes, la compra obligatoria de los periódicos de propaganda, la realización de juicios públicos a funcionarios públicos que incumplieran sus labores y la evolución frente a la política electoral, en la que fue pasando de un "abstencionismo", —asumido como "signo de identidad de aquel grupo guerrillero" (Aguilera, 2006, citado en CNMH, 2019), reforzado por el sabotaje a las elecciones en las áreas rurales de los municipios y el secuestro de candidatos, alcaldes, exalcaldes y concejales— a una posición de veeduría de las administraciones locales, al establecerse la elección popular de alcaldes.

En este contexto, el ELN efectúa *juicios políticos* a alcaldes y concejales por corrupción o funcionamiento "inadecuado" de sus administraciones y exige su visto bueno para que los candidatos puedan hacer campaña, especialmente en el alto Catatumbo; sin embargo, esto no implica, necesariamente, una vinculación al proyecto político de la guerrilla. No obstante, su injerencia en las administraciones locales para extraer recursos del presupuesto es menor que en otras regiones como Arauca, porque en el Catatumbo los ingresos municipales son menores y hay otras fuentes de financiamiento por la posibilidad de recurrir a otras fuentes legales o ilegales.

Pero, sobre todo, porque la guerrilla influyó mucho menos en la configuración social de la región, aunque había promovido, en su momento, la organización de juntas de acción comunal con la creación de comités que respondieran a diversos ámbitos de la vida social (Aguilera, 2014). Pero,

5 Se trata de un combustible artesanal derivado del petróleo extraído del oleoducto, cuya producción es bastante contaminante, que se usa como sustituto de la gasolina, especialmente como precursor químico en la fabricación de cocaína.

tal vez por esta menor influencia, el ELN no logró generar en el Catatumbo aparatos de masas plenamente supeditados a la guerrilla; por eso, a la fecha no abandona su naturaleza coercitiva en su trabajo político-social.

Pero, ese tipo de actividad, más política que militar, tenía consecuencias menos positivas: la prolongada presencia del ELN había generado, inicialmente, muchos lazos de familiaridad con la población, que llevaron a un entrevistado a hablar de "familias enguerrilleradas", con familiares en la insurgencia y con vínculos con esta, que se transmitían de generación en generación. Esto, sin embargo, traía consigo un aspecto negativo: la estigmatización que convertía a los pobladores en el blanco de la acción violenta de los opositores, tanto de las fuerzas estatales como de las paraestatales. Y esta estigmatización se hacía extensiva a algunos movimientos y organizaciones sociales, que eran consideradas el brazo desarmado de los insurgentes.

Obviamente, en algunos de ellos podían encontrarse coincidencias o cercanías con el ELN, en lo que algunos denominan "círculos concéntricos de afinidad selectiva", para expresar la ambigüedad de las relaciones entre los grupos guerrilleros y los movimientos sociales. Así, el grupo armado tendría un núcleo fuerte de integrantes de tiempo completo, alrededor del cual girarían grupos con distintos grados de cercanía y adhesión al discurso del núcleo, que se reflejarían, a su vez, en el grado de participación, directa o indirecta, en las acciones del grupo insurgente, las cuales podrían ir desde la complicidad y cooperación hasta la mera simpatía por su discurso o acciones.

Estos matices y ambigüedades representan problemas para la lectura de esta situación desde la legalidad, así como serias consecuencias para la estigmatización de los pobladores por parte de las agencias estatales de seguridad, que tienden a considerarlos, indistintamente, como bases sociales de la guerrilla. Y, mucho más, por parte de los grupos paramilitares, y, también, de manera paradójica, por parte de los otros grupos guerrilleros.

Esta estigmatización se extendió a los movimientos y organizaciones sociales de la región, como los movimientos sociales del campesinado —por ejemplo, ASCAMCAT, MPC, CISCA—, que han sido relacionados de alguna manera con las FARC-EP, el EPL y el ELN— Así, el CISCA (Comité de Integración Social del Catatumbo), conformado en 2004 como una organización campesina, con raíces en el movimiento comunal, se considera cercano al ELN: sus orígenes se remontaban a las luchas del movimiento A Luchar entre 1984 y 1985, que se presentaba como una alternativa de poder popular que pretendía construir una institucionalidad paralela a la estatal, donde era evidente la influencia del ELN. Este movimiento reflejaba el replanteamiento que el ELN estaba desarrollando, desde 1983, en sus prácticas de acción política en las zonas donde tenía presencia: partía de la idea

de construcción de poder institucional desde abajo, con base en la autogestión comunitaria y el control popular de la justicia local (Aguilera, 2006). Esto se concretó en la participación del Frente de Guerra Nororiental en la elección de alcaldes en el Catatumbo en los años noventa.

De ahí el desafío que afrontan estas organizaciones para deslindarse, al menos en el discurso, del proyecto político de los grupos insurgentes, para evitar su señalamiento como justificación de las violaciones de los DD. HH. y DIH en contra de la población, que deslegitimaba la labor de esas organizaciones en esos temas. El problema era que la reivindicación de la autonomía de estos grupos sociales frente a los grupos armados con base en su apoyo a la solución negociada del conflicto, se veía acompañada, en ocasiones, de justificaciones, tácitas o explicitas, del accionar de los grupos armados, por parte de algunos de ellos.

Y, por parte del ELN, tampoco aparece, afirma el autor de este capítulo (Ortega, 2021), una clara intención de evitar las prácticas que ponen en riesgo a las poblaciones, cuando evidencian ciertas filiaciones de ellas a su proyecto político, Obviamente, esto tiene que ver con el hecho de que su idea de construir poder popular a partir de las organizaciones de masas que controla es parte de la naturaleza misma del ELN.

Sin embargo, algunas directrices del ELN a los movimientos sociales buscaban evitar la ilegalización de estas experiencias populares, para que no "se enrojecieran" las propuestas políticas, ni comprometieran el nombre del ELN en su quehacer político y electoral, sino que sus acciones salieran del movimiento social sin que "la vanguardia guerrillera" estuviera involucrada en el proceso (Aguilera, 2006). Sin embargo, este deber ser no estuvo exento de intromisiones del ELN que seguía la estrategia del "entrismo" o inserción en grupos sociales de izquierda, para imponer su hegemonía en ellos, con procedimientos poco democráticos y respetuosos de la autonomía de los grupos.

Por otra parte, hay que destacar que la evolución de los movimientos sociales de la región mostraba que no eran totalmente pasivos frente a los grupos armados y que su origen no era el de una organización supeditada a los designios del grupo armado. Y esto, en buena medida, está marcado por las dinámicas de poblamiento de la región, originada en una colonización espontánea, sin apoyo estatal, y anterior a la llegada de los grupos guerrilleros que no jugaron, en la región, el papel estructurante de la configuración social que desempeñaron en otras regiones. Allí el ELN llegó como un proyecto de corte jacobino, diseñado por su dirigencia, que buscaba insertarse en las luchas concretas de la población, pero sin tener en cuenta que las condiciones estructurales y subjetivas de la población no correspondían por completo a su proyecto. Esto explica la relativa autonomía de los movimientos, pero que no logran distanciarse lo suficiente de sus afinidades

selectivas para no caer en la estigmatización de otros sectores; quienes instrumentalizan esta situación para justificar actos violentos.

Esta caracterización del accionar del ELN en el Catatumbo contrasta con el caso del Arauca, que también se enmarca dentro del proceso de reestructuración del ELN después de su casi exterminio en Anorí (1973). Así se formó, en 1978, un foco guerrillero incipiente en el alto San Joaquín (Saravena), pero, solo dos años después aparecería como grupo armado con la toma del puesto de policía de Betoyes (Tame), cuando anunciaron públicamente la formación del Frente Domingo Laín. Su fuerte presencia en el piedemonte se facilitó porque los fundadores de grupo fueron antiguos dirigentes de la ANUC y de las juntas comunales, de Saravena y Fortul, que lograron una rápida expansión del grupo: de 25 combatientes iniciales en 1980 pasó a 150 en 1982, gracias a que “era una guerrilla de parientes, amigos, conocidos, vecinos” (Celis, s. f.).

Pero, la formación del frente tuvo un largo periodo de preparación, de casi 15 años, que recogía los acumulados de las luchas del movimiento campesino, provenientes de los procesos de colonización de la reforma agraria de los años sesenta y los paros cívicos del Carare. De ahí que el frente contara con numerosas redes locales en el piedemonte y con una fuerte capacidad de organización comunitaria, que se articuló en torno al discurso del abandono estatal en lo relativo a educación, seguridad y servicios básicos.

Para la creación del Domingo Laín fue determinante la percepción de que las instituciones del Estado no servían para nada, pero también la respuesta agresiva del Estado frente a las demandas de los movimientos: la combinación de ambos factores produjo una profunda fractura entre el campesinado de la subregión y el gobierno central. Esta escisión representó una oportunidad para que la primera generación de los militantes del Domingo Laín se insertara en las comunidades para llenar el vacío de las instituciones estatales, ya que ellos mismos eran el producto directo del escalamiento del conflicto entre activistas campesinos y los representantes armados del estado, del Ejército colombiano y la Policía.

En sus primeros años, el ELN se financiaba mediante los secuestros y las extorsiones a ganaderos y terratenientes de ambos lados de la frontera, mientras conseguía armamento en asaltos a los puestos de la policía venezolana. Pero el evento que permitió el crecimiento exponencial del grupo fue la extorsión de los ingenieros contratados por la Mannesmann para la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas en 1984, cuyos enormes recursos hicieron que el frente se expandiera en el departamento y siguiera extorsionando a la industria petrolera. Además, el Domingo Laín logró introducir estas actividades extorsivas en el discurso de la defensa de la soberanía del país con su insistencia en la autodeterminación, la participación de la sociedad civil y la nacionalización de los recursos.

Esta combinación de bases sociales y el discurso nacionalista permitió la rápida expansión del frente más allá del piedemonte por medio de comisiones, basadas en cientos de milicianos, vestidos como civiles pero armados. Estos grupos clandestinos llevaban a cabo pequeños ataques, mientras hacían labores de inteligencia y de intermediación entre el núcleo de los combatientes y sus apoyos civiles. Así logró el Domingo Laín extender su influencia a las comunidades llaneras en Tame, Puerto Rondón, Cravo Norte y el municipio de Arauca, entre mediados y finales de los ochenta. Aunque las FARC tenían una presencia más fuerte que el ELN en esta subregión, su grado de integración con las comunidades era menor, que contrastaba con su mayor dominio del piedemonte, cuyas condiciones históricas eran diferentes a las de la sabana.

La opción por una mayor actividad militar se hizo evidente con la creación de la compañía Simacota en 1986, que era una unidad móvil altamente entrenada con comandantes aparentemente entrenados en Cuba y Vietnam, que pretendía realizar operaciones más complejas contra el Ejército y la Policía. Bajo el nuevo liderazgo de Armel "El Chino" Robles Cermeño, el frente aumentó su control sobre el piedemonte y acrecentó la violencia contra las autoridades locales reacias a su dominio. Además, incrementó de manera agresiva el reclutamiento de jóvenes aprovechando su influencia en la red escolar local, al tiempo que creaba una red de campos de adoctrinamiento y entrenamiento, a los que los adolescentes eran obligados a asistir. Según uno de los entrevistados, el ELN había establecido una especie de servicio militar, del cual los jóvenes se podían desvincular a los cinco años, pero sin retirarse del brazo político de la organización. Esto reflejaba, obviamente, la falta de oportunidades académicas y de empleo.

En los años noventa, el ELN continuó expandiendo su dominio: creó entonces una segunda unidad especializada, la compañía Capitán Pomarés, para reforzar a la Simacota y cubrir la frontera entre Casanare y Arauca. En 1996, la dirección del Comando Central (COCE) del ELN creó el Frente de Guerra Oriental (FGO), compuesto por todas las estructuras insurgentes del ELN que operaban en Arauca, Casanare, Boyacá y Norte de Santander. Y, que, en la mayoría de los casos, coexistía pacíficamente con las FARC en el piedemonte, respetando el reparto previo del territorio.

Esta expansión del control territorial del ELN se expresaba en el control de la rudimentaria red vial, por medio de bloqueos y retenes, que servían, además, para labores de inteligencia y transmisión de sus reglamentos a la población civil. Y se evidenciaba, simbólicamente en los grafitis en los muros de las alcaldías y hasta en los almacenes rústicos de las aldeas rurales. Según un entrevistado, las guerrillas tomaron el papel regulador del Estado en la vida comunitaria y familiar, lo que despertaba

cierta simpatía en las comunidades, a las que ofrecía justicia y seguridad, como árbitros de facto, pero con las cuales creaba normas de convivencia.

Obviamente, es claro que la presencia de la justicia estatal fue tardía, pues solo con el descubrimiento de petróleo en los comienzos y mediados de los ochenta el Estado empezó a intentar abordar los asuntos relacionados con el orden público y la justicia, sin poder competir con el sistema ya establecido de justicia revolucionaria, bastante severa y draconiana, pero, mucho más expedita que la proporcionada por el Estado, que era percibida como engorrosa e ineficiente.

Sin embargo, el argumento de la ausencia de la justicia estatal no siempre respondía del todo a la realidad, porque una de las tácticas de la guerrilla era eliminar la escasa presencia de las autoridades, como lo evidenciaba el asesinato sistemático de los inspectores de policía y la posterior prohibición de su presencia en la región. Así, los esfuerzos de la justicia estatal para investigar y procesar a los insurgentes acusados de crímenes, como homicidios, secuestros y extorsiones, se veían frustrados por la usurpación de la autoridad por parte de la guerrilla, que obligaba a los jueces a renunciar a sus cargos, en sitios como Saravena, Fortul, Tame y Arauquita, so pena de muerte, durante los comienzos de los años noventa.

Estas amenazas no se limitaban a los funcionarios estatales, como mostró el asesinato del obispo del Arauca, Jesús Emilio Jaramillo, que había criticado públicamente al grupo insurgente, pero que fue acusado de malversación de los fondos públicos para la educación, que la diócesis administraba, y de tener vínculos con el paramilitarismo. Este asesinato fue uno de los puntos del aumento de tensiones entre el liderazgo del ELN en Arauca y el COCE que solo pudieron resolverse a través de la mediación de la Dirección Nacional.

Pero, de todos modos, la fortaleza social del ELN residía en la oferta de seguridad y orden que suministraba a las comunidades bajo su control, que castigaba públicamente cualquier violación al código de comportamiento, elaborado conjuntamente con la población. Así, las estructuras locales del grupo insurgente regulaban todos los aspectos de la sociedad campesina: problemas matrimoniales y familiares, permisos de trabajo, nombramientos de maestros, disputas sobre límites de las tierras, desacuerdos sobre deudas financieras. Por eso, en ausencia de cualquier otra autoridad, muchos campesinos apreciaban el sentido del orden proporcionado por el ELN y se sentían tranquilos con las normas de la guerrilla, después del temor inicial.

Además de estas medidas de control interno, se establecían fuertes controles a cualquier influencia externa: el ingreso de gente externa al piedemonte era permitido solo después de una severa investigación por parte de los insurgentes. La supervisión de la migración tenía como objeto la protección de la economía del campesinado minifundista del piedemonte.

El código del ELN castigaba con la muerte la homosexualidad, el hurto común, el robo de ganado y la violación, pero también cualquier interacción con miembros de la Policía o el Ejército, lo que convertía a muchas mujeres adultas o adolescentes en objetivo militar, por conversar, saludar o salir con ellos. Así, entre 1994 y 1995, fueron ejecutadas casi dos docenas de adolescentes, solo en Saravena, por este motivo: la guerrilla suponía que se podían volver informantes; a veces, eran ejecutadas como represalia por las acciones del Ejército o la Policía.

Por esta razón, algunos hablan de "gobernanza anidada" del ELN en el piedemonte araucano: en los noventa, se hablaba de Arauca como un territorio bajo su control, donde había capturado alcaldías y la gobernación, recibiendo ingresos millonarios por extorsiones y secuestros a las compañías petroleras, que le permitían, al Domingo Laín, consolidarse como "uno de los frentes guerrilleros más poderosos y mejor armados del país, el Domingo Laín" (Larratt-Smith, 2021).

Pero el éxito de este frente, que se convirtió en el actor estructurante del territorio, no se debió a su capacidad militar ni a su amplio despliegue de violencia, sino a su "gobernanza anidada", conseguida gracias a su papel de intermediación de las demandas sociales frente a las autoridades municipales y departamentales, pero también frente a las empresas petroleras. Este papel de interlocución le permitió incrustarse en la población desde el desarrollo del concepto de "lo amplio", que representaba la convergencia de miembros de organizaciones sociales, dirigentes políticos y otro tipo de ciudadanos, que, sin hacer parte de la estructura militar, le prestaban su apoyo financiero, logístico, institucional, e inclusive relaciones internacionales.

Para el logro de esta gobernanza anidada, el ELN se basó en la cooptación de la sociedad civil de la región, al asumir el control de prácticamente todas las organizaciones sociales y apropiarse del discurso campesino de la densa red de organizaciones que los colonos habían construido como respuesta a la insuficiente presencia estatal, que no respondía a las demandas básicas de los pobladores de la zona de colonización y la insuficiente presencia estatal para responder a las demandas básicas. En corto tiempo, el frente Domingo Laín se había apropiado de la esfera cívica de la región, aunque resalta uno de los entrevistados, que no fue la guerrilla la organizadora de la sociedad desde sus inicios, sino que fue cooptando las organizaciones existentes y promoviendo otras nuevas. Sin embargo, este proceso de cooptación de las organizaciones no fue del todo pacífico, ya que el grupo guerrillero eliminaba a los líderes que se resistían a trabajar bajo las dinámicas del nuevo poder.

Esa penetración de las organizaciones sociales se hizo evidente en el respaldo del Domingo Laín a los paros cívicos de los años setenta y

ochenta, que fueron orientados por el grupo, que había encontrado un movimiento social ya consolidado. Pero, a diferencia de los paros cívicos anteriores, que no habían logrado resultados, la participación del ELN en los paros cívicos de 1982, 1987, 1988 y 1989 consiguió resultados concretos como la construcción tardía del puente sobre el río Bojabá en 1982, que había sido una demanda clave del paro de 1972.

Por eso, según un líder campesino de Arauquita rural, el ELN "ponía orden y coordinaba a la gente para pedir reivindicaciones. Es decir, ellos no hicieron nada en forma directa por la zona, no hacían puentes, ni vías, ni traían servicios públicos, pero enseñaban a la gente a reclamar". Además, participaba coactivamente al asegurar, junto con las FARC, que la participación en los paros cívicos fuera obligatoria y masiva. La eficacia de esta convocatoria conjunta con las FARC hizo que en la segunda mitad de los años ochenta, el Sarare fuera la región del país con más paros cívicos en el gobierno de Barco (Peñate, 1998). Y que los paros y movilizaciones lograran conseguir todo lo que la región demandaba en temas de salud y educación en esos años.

Estos paros cívicos dieron luego paso a un cambio en las movilizaciones de masas, como muestra el surgimiento de los paros armados que paralizaban el comercio, el transporte local y regional para hacer despliegue de su poder, con el apoyo de las organizaciones sociales. La movilización fue enfocándose ahora en la protección de sus derechos básicos frente al aumento de la represión del Ejército y la Policía en Arauca, con comités locales de derechos humanos, que aprovechaban las redes transnacionales de apoyo construidas en los años noventa.

La construcción de esta gobernanza local, basada en la captura de las organizaciones sociales, tuvo su repercusión en el llamado "clientelismo armado" del ELN, que reemplazó, junto con las FARC, el dominio tradicional de Alfonso Latorre Gómez, el gamonal liberal de la región, cuyo dominio desapareció con la elección popular de alcaldes y la mayor importancia económica de la región con la construcción del oleoducto Caño Limón. Esto atrajo una importante ola de migrantes a la región, pero también un gigantesco aumento del gasto público proveniente de las regalías petroleras, que terminó profundizando la división entre las comunidades campesinas y el Estado, que priorizaba el desarrollo de la industria petrolera sobre el desarrollo tradicional de la subregión. Estos cambios le sirvieron al ELN para justificar su intensificación del conflicto con un discurso ecologista y nacionalista, en contra de las multinacionales aliadas con el Estado colombiano, al tiempo que se posicionaba como defensor del orden social agrícola local.

Sin embargo, el ELN también sacó ventajas políticas de la nueva situación, en contra de la concentración de los nuevos recursos en la sabana y

de la corrupción que favorecía a los políticos de esa zona, aunque la mayoría de la población del departamento vivía en el piedemonte. Pero, el ELN, con su hábil cooptación de la esfera política logró modificar esta distribución, gracias a su control de las juntas comunales, que servían, además, como medios para redistribuir las regalías petroleras en la forma de bienes y servicios públicos, en beneficio de sus seguidores. Obviamente, esta capacidad del ELN para capturar beneficios económicos para sus seguidores por medio de las JAC, fue un factor determinante del apoyo de los sectores populares a las guerrillas (CNMH, 2014).

Este cambio de la situación económica de la región y la llegada de nuevos migrantes se conjugaron para que las FARC y el ELN encontraran condiciones favorables para su inserción en la región. Las FARC entraron a la arena electoral, primero con el Partido Comunista de Colombia y luego con la Unión Patriótica. Por su parte, el ELN se apartó de su tradicional abstencionismo para respaldar, en 1988, una facción del Partido Liberal, "los Liberales de Saravena", que ofrecieron al Domingo Laín, —para frenar el avance de la UP— acceso a los presupuestos municipales del piedemonte, a cambio del apoyo de las juntas locales controladas por este grupo a sus candidatos (Peñate, 1991; Aguilera, 2006).

Así, en los comienzos de los años noventa y hasta los comienzos de la década de los 2000, la UP y los liberales de Saravena prácticamente controlaban los concejos municipales del departamento y las alcaldías. En 1991, los votos del ELN ayudaron a la elección del candidato liberal, Luis Alfredo Colmenares Chía, al cargo; y las elecciones departamentales sucesivas hasta 2002, los candidatos escogidos a dedo por el ELN ganaron las sucesivas elecciones gubernamentales con José Vicente Lozano Fernández (1995 y 1997), Gustavo Carmelo Castellanos Beltrán (desde 1998 hasta 2000), y Héctor Federico Gallardo Lozano (desde 2000 hasta 2002). Los nexos entre el ELN y el Partido Liberal en Arauca se hicieron manifiestos cuando el comandante del frente Domingo Laín, Armel "El Chino" Robles Carmeño fue arrestado en Bogotá, en octubre, cuando estaba en compañía de Elías Matus Torres, el representante a la Cámara por Arauca.

Este respaldo permitía el acceso de los insurgentes o sus amigos al gobierno departamental y los recursos públicos del departamento, que obligó a priorizar proyectos sociales en todos los municipios, a través de las juntas comunales y otras organizaciones sociales influenciadas por el frente Laín. Además, el ELN desviaba también fondos por medio de la tercerización de contratistas y una serie de compañías de fachada, junto con el uso de métodos cuestionables de contabilidad para evadir cualquier problema potencial con auditores externos. A veces, compartían con sus competidores de las FARC el botín de su éxito electoral, asignándoles cuotas fijas de los presupuestos públicos para mantener la paz con ellos.

Además, los comandantes insurgentes supervigilaban sistemáticamente la destinación de los presupuestos por parte de los políticos municipales: cualquier instancia de malversación o fraude que no hubiera sido aprobada por ellos mismos, eran juzgada y castigada por la justicia insurgente.

Pero los recursos del Frente Domingo Laín no provenían solo del petróleo, sino que también eran producidos por su inserción en las economías agrícolas del piedemonte y de la sabana. Desde su aparición en 1980, el Domingo Laín había invertido mucho de su capital inicial en una prominente cooperativa local de piedemonte, de la cual se convirtió en su dueño secreto. Pero, luego, también impulsó la creación de gran número de cooperativas y gremios en el piedemonte, que era un negocio bastante lucrativo, según aparece en el portafolio legal del ELN, pues sus ganancias le proporcionaban al grupo armado los medios para reinvertir los ingresos públicos generados en otros lugares.

Este control insurgente de varias cooperativas campesinas y gremios comerciales en el piedemonte protegía a los productores locales de los especuladores externos y de la volatilidad del mercado, al tiempo que garantizaba a los colonos campesinos el acceso a equipos, experticia, crédito y mercados. Además, el frente Domingo Laín regulaba el mercado local de finca raíz mediante la autorización de todas las compras locales de tierra: solo permitía comprar pequeños lotes en la subregión a aquellos que estaban emparentados o eran conocidos de tiempo atrás por los campesinos de la región, para prevenir así la emergencia de latifundios. Y apoyó, en sitios como Tame, la ocupación ilegal de parcelas por parte de inmigrantes campesinos sin títulos de propiedad legales. Pero, al mismo tiempo, el Laín consiguió el respaldo de muchos hacendados ganaderos de Tame, medianos y grandes, por su persecución de los cuatreros que operaban en la región.

Ese control riguroso de la economía regional por parte del Laín hacía, según un entrevistado, que la población se viera obligada a simpatizar de algún modo con él para comer o poder trabajar. Incluso, permanecer neutral significaba, según un entrevistado, optar por una vida pobre, sin oportunidades, al lado de vecinos que ayudaban al grupo para enriquecerse, aunque no faltaban los que lo hacían por convicción, movidos por la legitimidad que le proporcionaba su capacidad de proveer seguridad y orden. Por eso, un líder entrevistado reconocía cierta simpatía del pueblo campesino por los insurgentes, por los favores que les proporcionaban, especialmente en materia de salud y técnicas productivas. Mientras que un antiguo comandante de las FARC justificaba ese apoyo a la guerrilla por el hecho de que era la única autoridad existente en esos territorios y no porque fuera colaboradora directa de la insurgencia.

Por eso, sostenía un poblador, que las relaciones de las comunidades con las guerrillas oscilaban entre tres categorías: alineación, desplazamiento y

mortalidad, que respondían a lógicas distintas, de coerción, afectación, y/o ganancia financiera. Según él, la gente se resignó al "nuevo orden" con actitudes entre "el sometimiento, la colaboración y el miedo". Y destacaba la familiaridad de la población con los grupos guerrilleros, donde tenían familiares, amigos o conocidos involucrados en los grupos, al tiempo que reconocía las cosas buenas que hacían como la prohibición de la pesca con dinamita y de la caza de lapas, e incluso el arreglo de matrimonios, pero criticando también los sufrimientos que generó al volverse instrumentos para matar personas en favor de sus allegados (Larratt-Smith, 2021).

Pero, estas fluidas y complejas relaciones produjeron un resultado negativo para la población de la región, porque el control del ELN sobre ella condujo al aumento de la represión, a veces selectiva y a veces indiscriminada, basándose en la percepción equivocada de que la forzada ambigüedad de las comunidades frente a los insurgentes significaba una participación activa en su proyecto. Irónicamente, el error estratégico del Ejército colombiano —al estigmatizar de manera homogénea a la población como auxiliar de la guerrilla y considerar a los movimientos cívicos o los grupos de izquierda como el brazo desarmado de la subversión— terminó, paradójicamente, por fortalecer los lazos de las comunidades con la guerrilla y justificar la guerra sucia contra los dirigentes sociales, algunos de los cuales se dedicaban, precisamente, a tratar de deslindar sus acciones frente a las acciones de los grupos subversivos.

Pero, además, este éxito del Domingo Laín en la construcción de un robusto orden social insurgente en Arauca llevó a que el Comité Central adoptara su experiencia como patrón para su posterior expansión en el resto del país (Peñate, 1998; Gutiérrez, 2010). Sin embargo, esto produjo, como consecuencia, el surgimiento de algunas tensiones sobre el control y la distribución de los recursos del grupo, pero también con respecto a las negociaciones de paz en Caracas. Estos conflictos llevaron incluso a pensar en la posibilidad de que el Domingo Laín se escindiera completamente de la organización nacional, pero esta ruptura no prosperó porque el COCE terminó concediéndole mayor autonomía a este frente.

Sin embargo, esta situación traía consecuencias posteriores para el conjunto de los frentes regionales, que se sentían un tanto deslumbrados por la experiencia exitosa de construcción de poder local en Arauca, "el sol de oriente", que intentaban reproducir con acciones voluntarias de corte jacobino, que no tenían en cuenta que el contexto de sus regiones era muy diferente. Por otra parte, este deslumbramiento generaba en la opinión pública y en las organizaciones sociales cercanas al ELN una sobreestimación del poder de este frente, que, por otra parte, estaba subrepresentado en los organismos de coordinación nacional del ELN, en parte, por la negativa de los dirigentes del Domingo Laín a

hacer parte de ellos, para seguir manteniendo un cierto margen de autonomía para su accionar en Arauca.

Las consecuencias de esta actitud se reflejarían en los años siguientes y en la situación actual: la autoexclusión del Domingo Laín de los organismos de Dirección Nacional, para no perder su autonomía, traería como consecuencia el que esos organismos no representaran adecuadamente los acumulados de los frentes regionales. Pero, también, en el presente, a sabiendas de sus acumulados territoriales han buscado influir y ganar mayor representación en la organización nacional para influir en su trayectoria o apuestas armadas y en temas de paz.

Por ejemplo, uno de los fundadores del frente, "El viejo Daniel", vio desconocida su autoridad por los comandantes locales del Frente Domingo Laín, cuando fue elegido, en 1983, miembro de la Dirección Nacional: los mandos de la base se quejaban de que "el Cura" Pérez estaba llevando al ELN "de la ternilla por las sendas del cristianismo", según contaba un antiguo comandante en su entrevista. Al parecer, según el mismo entrevistado, el llegar a ser parte de la coordinación nacional era considerado un síntoma de aburguesamiento y burocratización que acarreaba la pérdida de influencia en su frente, porque dejaba de tener mando militar directo. Las difíciles relaciones entre el Laín, el COCE y la misma Dirección Nacional se hicieron evidentes cuando la sanción al Domingo Laín por el asesinato de monseñor Jaramillo tuvo que ser asumida por el Congreso del movimiento y no por el COCE, ni por la Dirección Nacional (Velandia, entrevista recogida por Aponte, 2021).

Las dificultades para la acción colectiva: el fracaso del plan "Vuelo del águila"

El contraste de los diferentes desarrollos regionales de los frentes, antes descritos, explica las dificultades que encontraba el ELN para una acción colectiva de carácter nacional. En 1989, el ELN se sentía capaz de tomarse el poder por las armas y emprender una ofensiva general, desde una concepción de insurrección popular, bajo el plan "El vuelo del águila", que partiría de la lucha en el campo, considerado como retaguardia estratégica, esencial para la acumulación de fuerzas. La campaña por la nacionalización del petróleo y el impulso a la movilización en los paros del nororiente (1987) y el de mayo de 1988, impulsados por el movimiento A Luchar (1984), hacían manifiesta, a los ojos del Estado y los nacientes grupos paramilitares, la vinculación entre la movilización social y la insurgencia del ELN.

Según Andrés Aponte, en el primer capítulo de este libro (Aponte, 2021), los dirigentes del ELN estaban obnubilados por los éxitos logrados en la década de los ochenta, cuando contaban con redes urbanas en 16

departamentos y cuatro frentes rurales, hacia 1983, que tenían unos 350 militantes. Para 1986, el ELN tenía 600 combatientes en 8 frentes y 200 más en las ciudades. Y, para 1990, contaba con 18 frentes rurales y 18 estructuras urbanas. La mayor parte de su crecimiento se concentraba en el oriente del país, en el eje de la frontera con Venezuela, pero se extendía luego a las zonas vecinas al piedemonte araucano, como el norte del Casanare y el nororiente de Boyacá. Por otra parte, los grupos del sur de Bolívar se vincularon con los del nordeste antioqueño y el bajo Cauca, mientras en el sur, el ELN consolidaba su presencia en el piedemonte de Nariño y el sur del Cauca, y empezaba a incursionar en Chocó y Tolima.

Sin embargo, la realidad era muy distinta de los sueños del "Cura" Pérez, ya que las voces autocríticas señalaban que el proceso de unidad estaba muy incompleto y que el ELN carecía de poder real para desarrollar un proyecto nacional, ya que cada comandante regional solo acataba las directrices del centro selectivamente y se resistía a actitudes "hegemonistas". Esto respondía a la misma organización federada adoptada, cuyas fuerzas centrífugas neutralizaban los intentos de coordinación central. Esto se reflejaba, en las áreas urbanas, según las críticas internas, en la falta de enraizamiento de la propuesta política con las masas, que hacía evidente que no se había logrado la acumulación esperada de fuerzas. Y en los ámbitos rurales, el problema era más complejo: no existían cuadros medios de líderes, que pudieran canalizar el crecimiento espontáneo por cooptación, que estaba desbordando la capacidad de la organización.

En resumen, el poco control de la comandancia central sobre las estructuras regionales hacía que no hubiera un seguimiento de la ejecución de las directrices del comando central, que eran interpretadas y desarrolladas según las experiencias de cada frente y cada comandante. Esta precaria comunicación entre la cúpula y la base impedía desarrollar operativos militares de gran envergadura; así, los planes nacionales se ejecutaban, confiesa un antiguo dirigente entrevistado, según las condiciones de cada grupo. Era evidente la ausencia de relación directa de las direcciones con sus bases, confesada por el II Congreso del ELN, que seguía reflejando una lectura manualesca de la realidad, que venía de su etapa fundacional (ELN, II Congreso, Poder Popular y Nuevo Gobierno, 1990, citado por Aponte, 2021).

Así, concluye Aponte, el COCE nunca tuvo mecanismos institucionales sólidos para integrar los proyectos de cada grupo en torno a una estrategia común, sino que cada organización emprendía trabajos aislados, inconexos, sin perspectiva alguna, como sucedió con el asesinato de monseñor Jesús E. Jaramillo en Arauca (1989). O, que pudiera ejecutar algunas acciones para romper los exiguos consensos con el llamado "debate en caliente", que combinaba la pretensión de autonomía con el debate político interno, sin tener suficientemente en contra las repercusiones

nacionales que traía consigo, como hacía ver un excomandante entrevistado (citado en Aponte, 2021).

El análisis de estos sucesos hizo que Andrés F. Aponte en el primer capítulo de este libro, expresara su distancia de la narrativa heroica que se refería a estos años como una especie de edad de oro, representada en el crecimiento exponencial registrado por el ELN durante este periodo, para mostrar un lado oscuro de ese crecimiento, que sería la génesis de sus ulteriores limitaciones para cohesionar las acciones de sus diferentes grupos. De ahí que se refiera luego a los años entre 1991 y 1998 como "la década perdida", cuando se evidenció la incapacidad del ELN para dar un salto estratégico, como el inicio, lento pero constante, del desmoronamiento de este grupo, a pesar de que, al principio del periodo, presentaba aún cierto vigor militar, evidenciado en el desdoblamiento de sus frentes.

Así, al iniciar la década, su mayor presencia territorial y aumento del pie de fuerza hacía que el ELN fuera considerado la principal amenaza que enfrentaba el Estado colombiano, por el aumento de los combates en Arauca, Catatumbo, sur de Bolívar y Cauca-Nariño, mientras que el Chocó era solo utilizado como zona de refugio y reabastecimiento. Pero este mayor protagonismo militar no podía ocultar sus problemas de acción colectiva: el Domingo Laín empezó a desarrollar su propio trabajo político y militar en Bogotá al tiempo que creaba un mando político militar estratégico para evitar ser controlado por el COCE. Por su parte, tampoco el Frente José Solano Sepúlveda, en el sur de Bolívar, aceptaba la centralización del manejo de los recursos, ni tampoco las directrices del Frente de Guerra Norte, que también tenía contradicciones internas con otros frentes.

Esas dificultades de coordinación son reconocidas por el "el Cura" Pérez, cuando señalaba que la expansión de la organización hacia algunas regiones como las de la Costa Caribe no había modificado las estructuras que ya existían en ellas. Este problema es similar al señalado por Michael Mann a propósito de la centralización del Estado, que nunca suprimía, sino que articulaba de otra manera los poderes locales previamente existentes.

Esta desarticulación entre el mando central y los frentes regionales reflejaba la ausencia de una instancia nacional que unificara las iniciativas nacionales, pero también la constante indisciplina de los comandantes y la escasa conexión con los procesos organizativos de las regiones. El resultado de esta desconexión fue que algunos frentes regionales resultaron más endebles de los que se creía, y se mostraron incapaces de consolidar anclajes sociales más sólidos en sus regiones, como fue el caso de los grupos en Montes de María (Sucre y Bolívar), Cesar, sur de Córdoba, Magdalena y sur del Chocó.

Debido a estos problemas, el ELN no logró dar el anhelado salto estratégico al tiempo que descubrió que los mayores recursos humanos y materiales que exigían las necesidades de expansión territorial tenían un efecto contraproducente para sus relaciones con las poblaciones, pues los obligaba a cambiar las reglas del juego de las relaciones con ellas para intensificar su control de la política local y aumentar las contribuciones exigidas. Además de estas fricciones internas y tensiones con las comunidades, el ELN recibió golpes severos en el campo militar, con la captura o dada de baja de importantes cuadros y comandantes, como Mario Pieschacón, "Francisco Galán", y otros jefes.

En ese contexto, el ELN asumió la participación en los diálogos de Caracas-Tlaxcala (1991-1993), como un espacio pensado estratégicamente para oxigenar políticamente su proyecto, al tiempo que preparaba los frentes para su expansión territorial con el plan Vuelo de Águila de 1993. Pero el contexto era percibido de manera distinta por las partes negociadoras: el Gobierno se sentía fortalecido tanto internacional como nacionalmente; en el ámbito internacional, por la caída de la cortina de hierro en Europa oriental y, en el nacional, por el entusiasmo despertado por la constituyente de 1991; pero, en cambio, el ELN no estaba del todo convencido de su participación, que estaba lejos de lograr un consenso interno, como mostraba la oposición del Laín, que, al parecer, estaba pensando en escindirse. Sin embargo, los diálogos representaban una innegable oportunidad política para situar al ELN en el debate nacional.

Esta dualidad se evidenciaba en el hecho de que el COCE seguía impulsando la creación de nuevos grupos mientras hablaba de paz y aumentando sus acciones bélicas. En este contexto se empezó a desarrollar el plan Vuelo de Águila, basado en las experiencias de las guerrillas vietnamitas, que utilizaba métodos poco convencionales, por ejemplo trampas como el sombrero chino y minas antipersonal, contra las brigadas móviles y los batallones de contraguerrilla. En ese entonces se planeaba llegar a formar 25 frentes que cubrirían casi todo el territorio del país, los cuales servirían de base para formar compañías, que serían, a su vez, el embrión de los "Batallones" para emprender la guerra móvil.

Sin embargo, un año después (en 1994), se había hecho evidente la incapacidad militar del ELN y la insuficiencia de sus combatientes, al lado del creciente protagonismo militar de las FARC. Esto obligó a que la primera conferencia militar del grupo, en 1995, tuviera que redefinir sus áreas estratégicas y priorizar la consecución de mayores recursos, por medio del aumento de las extorsiones y secuestros, con el propósito de que los territorios costearan la expansión.

Obviamente, esto generó dificultades con las bases sociales de la guerrilla, porque los comandantes tuvieron que asumir una actitud más depredadora;

como respuesta, las élites locales empezaron a acercarse al proyecto paramilitar. El mejor ejemplo es el del sur de Bolívar, donde el frente había descuidado el trabajo político y organizativo y la población se cansó del aumento de las vacunas, para preferir la vía paramilitar de integración de la región a la vida nacional (Gutiérrez, 2004; Bolívar, 2006; Aponte, 2013).

Esta llegada de los paramilitares al sur de Bolívar estaba ligada al desarrollo de grupos de autodefensas, inspirado en el modelo de Puerto Boyacá, jalonado por las élites locales, con el apoyo del Ejército Nacional, cuya unificación fue impulsada por el clan Castaño. Desde 1997, las gentes de Castaño habían intentado incursionar en Tiquisio, pero su poco conocimiento del territorio los hizo desistir; no obstante lograron, en 1998, establecerse en el corregimiento de Cerro de Burgos, en Simití, donde inauguraron su estadía con una masacre, gracias al apoyo de las autodefensas de Juancho Prada, ubicadas en el departamento del Cesar. Finalmente, la integración de las autodefensas del bajo Cauca, Putumayo, Santander y sur de Bolívar logró la configuración del Bloque Central Bolívar (BCB), para operar en el bajo Cauca y sur de Bolívar.

En el corregimiento de San Blas, en Simití, este bloque estableció uno de sus mayores centros de operación, denominado "Casa Verde", donde desarrollaron escuelas políticas y militares, para la formación de sus integrantes y la imposición de normas de control social sobre la población. Se evidenciaba así un elaborado proyecto contrainsurgente, con el desarrollo de masacres, pero también de expansión económica, basado en el fomento de la ganadería, el cultivo extensivo de palma y el control de las rutas del narcotráfico y las finanzas de la minería.

Uno de los principales proyectos del BCB en esta zona fue el "Movimiento No al Despeje" y la organización ASOCIPAZ, en colaboración con sectores empresariales y poderes políticos, para evitar que el ELN retornara a las zonas del sur de Bolívar que había perdido en las disputas territoriales con las ACCU y el BCB, por medio de una zona de despeje que facilitara la negociación de paz con el gobierno Pastrana y sentara las bases de su propuesta de convención nacional. Pero, el proyecto iba más allá, ya que los paramilitares pretendían, como confiesa Ernesto Báez, convertir ese movimiento en un partido político, con una plataforma de masas, basado en candidaturas afines al paramilitarismo, como el partido político Convergencia Popular Cívica, con el cual resultaron electos varios candidatos del departamento de Santander.

Con la llegada de los paramilitares, las dinámicas del conflicto vieron un incremento tanto de las acciones bélicas de las insurgencias como de las infracciones al DIH por parte de los grupos privados de violencia, aunque, normalmente el control de los paramilitares se concentraba en los centros urbanos con la connivencia de la fuerza pública, mientras el ELN y las FARC

mantenían su presencia en las zonas rurales altas, ubicadas en el piedemonte de la serranía de San Lucas. Sin embargo, la movilidad y las actividades de sus milicianos en los caseríos de las zonas medias y bajas se veía muy limitada, porque el BCB estableció puestos de control en las vías para regular el ingreso y la salida de personas y controlar el acceso de medicinas y víveres para limitar los recursos para la insurgencia. Este bloqueo desembocó en el confinamiento y el señalamiento de los pobladores, en especial de quienes habitaban los corregimientos y las veredas en el piedemonte de la serranía, —que eran señalados como "colaboradores de la guerrilla"— donde la población solo lograba sobrevivir refugiándose en los campamentos del ELN, en los que recibían provisiones por parte de este grupo.

En esa ofensiva contrainsurgente, se juntaban los golpes propinados por los paramilitares con las bajas y capturas realizadas por la fuerza pública, para ir debilitando las estructuras del grupo: los antiguos comandantes, muy calificados políticamente, que entendían muy bien las dinámicas de las comunidades, tuvieron que ser reemplazados por muchos jóvenes, poco calificados: "pelados que lo que hacían era tomar cerveza y mujeres". Según los autores de este capítulo, se produjo entonces un proceso de degradación que el ELN ha intentado superar infructuosamente durante los últimos años.

Esta crisis hizo disminuir su nivel de acciones bélicas entre el 2001 y el 2007, pero obligó al ELN a establecer alianzas estratégicas con las FARC, que permitieron sobrevivir a los ataques de los paramilitares, —las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC—, e incluso confrontar a la fuerza pública, que había venido incrementando sus acciones con las políticas de la Seguridad Democrática. Esta colaboración permitió compartir espacios y desarrollar operaciones conjuntas para afrontar el incremento de acciones de la fuerza pública tras la desmovilización del BCB.

Sin embargo, en esos años, el ELN pasó de ser el actor principal en las dinámicas del conflicto en el sur de Bolívar, a ser un actor secundario, con una significativa reducción de sus acciones bélicas hasta el año 2018. Con la desmovilización del BCB las insurgencias empezaron de nuevo a copar los territorios que habían perdido. Sin embargo, como ya se mencionó, se daría un incremento de la fuerza pública que dificultaría su recuperación militar y afectaría profundamente sus formas de trabajo, en especial las del ELN.

Por otra parte, las infracciones al DIH en las ofensivas de la fuerza pública y de los paramilitares produjeron como respuesta la movilización de comunidades campesinas y mineras para romper el bloqueo de la subregión y exigir garantías de seguridad en sus territorios. Sin embargo, esto trajo consigo la persecución de los líderes de las comunidades: unos fueron judicializados, otros fueron asesinados, algunos amenazados y otros

forzados a desplazarse. No obstante, se generó entonces una de las iniciativas de paz más importantes en el nivel nacional: la comunidad del corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales, que, después de haber sufrido otra incursión paramilitar, logró establecer, con el apoyo de la diócesis de Magangué y el Proyecto de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una mesa de interlocución con los paramilitares y el ELN.

Después de la salida del BCB del corregimiento, hacia el año 2003, los pobladores dieron vida al Proceso Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado, manteniendo su lucha por la paz y la soberanía territorial, rechazando tanto la violencia estatal como la insurgente, así lograrían acordar con el ELN un desminado unilateral a finales del año 2014. Pero, obviamente, era claro que, a pesar de su arraigo social en las comunidades, su capacidad política y militar había quedado severamente golpeada por la combinación de las fuerzas estatales y paramilitares.

La evolución negativa de este frente contrasta con el éxito del caso araucano, aunque, como señala Aponte en el primer capítulo, los orígenes de ambas experiencias eran semejantes: los procesos de colonización de campesinos santandereanos, boyacenses, conservadores o liberales en la serranía de San Lucas, fueron acompañados por el ELN de manera similar, pero terminaron acercándose a los paramilitares. Y algo parecido sucedió en el norte del Valle, los Montes de María (entre Sucre y Córdoba), sur de Córdoba, oriente antioqueño, bajo Cauca antioqueño, Urabá y Barrancabermeja, etc.

Este cambio reflejaba una de las contradicciones estructurales del ELN, cuya fortaleza se basaba en las buenas relaciones con las comunidades rurales, —que aprendieron a coexistir con el grupo, que le ofrecía seguridad y orden a cambio de algunas contribuciones—, pero que empezaron a entrar en crisis cuando las necesidades de la planeada expansión nacional obligaron a los comandantes guerrilleros a aumentar sus exigencias y adoptar posturas más autoritarias.

En contraste con la situación del sur de Bolívar, la evolución fue más compleja en Arauca, cuando, un poco tardíamente, el Ejército colombiano y las AUC emprendieron una contraofensiva masiva, a principios de los 2000, que representó la militarización de la zona, que buscaba proteger la industria petrolera. Pero que trajo, consiguientemente, un empeoramiento de las condiciones de seguridad para la población y la profundización su distancia frente al Estado. Y, también le proporcionaba al ELN condiciones para escalar su enfrentamiento con el Estado central.

Así, este periodo evidenció una mayor belicosidad del grupo, cuyo control del territorio obligaba al Ejército y la Policía a confinarse en sus cuarteles, sin poder salir a patrullar en las noches y tener que enfrentar los hostigamientos en las plazas centrales de poblaciones como Saravena,

Arauquita y Fortul. Esto hizo que el Frente Oriental de Guerra, considerado en esos años uno de los grupos insurgentes más poderosos del continente latinoamericano, obligara al Ejército a desarrollar operaciones militares más coordinadas con la fuerza aérea, con bombardeos como el de Santo Domingo en el norte de Tame.

Esto hizo que el conflicto armado se escalara dramáticamente en este periodo: consiguientemente, el reclutamiento del ELN cambió de ser voluntario a cuasiobligatorio, al tiempo que intensificaba la prohibición explícita contra cualquier forma de contacto con el Ejército de Colombia y la Policía Nacional: hasta los peluqueros, emboladores y lavanderas que les prestaban servicios a los policías y soldados eran ejecutados. Como contraparte, la población era severamente estigmatizada por la Policía y el Ejército, con criterios arbitrarios como simplemente tener cédula de Arauquita. Y el resultado de esta estigmatización era ahondar aún más la separación entre las comunidades y la fuerza de seguridad del Estado: los militares maltrataban indiscriminadamente a los pobladores y los forzaban a dar información sobre los insurgentes, que, en represalia ejecutaba a los informantes, reales o supuestos.

Y a la ofensiva contrainsurgente de las fuerzas estatales, impulsada por el presidente Uribe —que escogió, desde agosto del 2002, el Arauca como zona de rehabilitación y consolidación—, se sumaba la llegada del Bloque Vencedores de Arauca (BVA), desde agosto del 2001, para rodear militarmente a los insurgentes; mientras el gobierno militarizaba el corredor fronterizo con Venezuela (Saravena, Arauquita y Arauca), los paramilitares ingresaban por el sur para expandirse hacia el norte, en dirección a Venezuela. Desde antes, en los años ochenta y noventa, se habían presentado, esporádicamente, grupos incipientes de paramilitares, conformados principalmente por soldados y criminales comunes que buscaban amenazar y eliminar líderes campesinos en el piedemonte (Gutiérrez, 2010; Carroll, 2011). Pero, en el escalamiento del conflicto, el BVA logró consolidar su control en las planicies de Tame. Aparentemente, la "franquicia" de este grupo había sido vendida por la familia Castaño a los mellizos Mejía Múnera, traficantes de drogas del Valle del Cauca, que buscaban convertir sus mal habidas fortunas en estatus beligerante para poder legalizar sus activos y recibir unos términos favorables por sus numerosos crímenes, bajo un acuerdo con el gobierno colombiano de una eventual desmovilización.

Inicialmente, el ELN y las FARC fueron incapaces de reaccionar frente a estas ofensivas simultáneas: los paramilitares lograron expandirse rápidamente a lo largo del resto de la sabana en Puerto Rondón, Cravo Norte y el municipio de Arauca, donde infiltraron instituciones políticas municipales mientras asumían el control de actividades económicas ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el

contrabando. Por su parte, el fuerte aumento de la presencia del Ejército colombiano, a partir del 2000, respondía a la creciente preocupación del gobierno por los ataques a la infraestructura petrolera. Así, la combinación de la ofensiva del Ejército, militar y judicial, con la guerra sucia de los paramilitares, produjo como resultado la exclusión del ELN de la política departamental con la elección de gobernador, en 2003, de Julio Acosta Bernal, un político de la sabana, apoyado tanto por Uribe como por los paramilitares.

Sin embargo, el éxito de la estrategia contrainsurgente de la Seguridad Democrática en la sabana contrastaba con las limitaciones que encontraba en el piedemonte, donde el bloque paramilitar intentaba establecer un corredor para el tráfico de drogas hacia la frontera con Venezuela. Allí, su incursión produjo una alianza temporal del ELN y las FARC, que establecieron un cordón de seguridad entre la sabana y el piedemonte en Arauquita y Tame, donde lograron movilizar las densas redes sociales de las comunidades para alertar sobre cualquier avance del grupo paramilitar y del Ejército. No se permitía la entrada de ningún extraño: se eliminaba cualquier posible infiltrado de los paramilitares y el Ejército, que a veces se hacían pasar por vendedores ambulantes o habitantes de la calle.

En contraste con la situación de la sabana, donde la guerrilla se retiró, en el piedemonte, la coordinación entre el ELN y las FARC logró, gracias a su mejor conocimiento del territorio, repeler, entre 2001 y 2004, más de doce incursiones del grupo paramilitar, a veces en combates prolongados como el de La Cabuya, en febrero del 2003, el ELN y las FARC pelearon una larga batalla de días contra el BVA en La Cabuya, dejando docenas de bajas en ambos lados. La mayoría de los combates se dieron en Tame, como la batalla de Corocito, uno de sus corregimientos, que duró cuatro días. Como resultado, las insurgencias obligaron a los paramilitares a replegarse a la sabana, donde tenían el apoyo de la fuerza pública.

Este triunfo contra los paramilitares fue reconocido por los pobladores, que eran conscientes de la brutalidad extrema de la actuación de los paramilitares en la sabana. Sin embargo, estos conflictos trajeron consigo la reacción de actos retaliatorios de violencia indiscriminada, tanto por parte de los paramilitares como de los insurgentes, contra los civiles que supuestamente eran colaboradores de los adversarios. Todo esto derivó en que la población fuera considerada objetivo militar y víctima de bárbaras masacres de los paramilitares en Tame, Betoyes, Flor Amarilla, Cravo Charro y Corocito, antes de retirarse rápidamente a la sabana.

Pero, fuera de estas fracasadas incursiones paramilitares, la mayor parte de la lucha contrainsurgente en el piedemonte recaía en el Ejército, que obligó al ELN a replegarse aprovechando las bajas propinadas anteriormente

por los paramilitares, mientras las FARC evidenciaban una mayor capacidad militar, que llevó a aumentar su influencia en zonas de dominio histórico del ELN. Este reflujo llevó al ELN a iniciar, entre 2006 y 2008, conversaciones de paz con el gobierno Uribe, que no resultaron en nada.

El interés del ELN en la defensa del piedemonte se debía a que quería mantener el control del corredor ABC, un estrecho de la cordillera que le proporcionaba un puente terrestre para movilizar gente, armas y contrabando entre Venezuela y los departamentos del interior de Colombia, cuya importancia se hizo mayor con la elección de Chávez en 1998, que le permitió al ELN consolidar una importante presencia en el Alto Apure y utilizar la frontera como refugio.

Por eso, a pesar de su disminución militar, el Domingo Laín concentró sus esfuerzos en el trabajo de adoctrinamiento político del campesinado y la regulación de la vida comunitaria. Esto hacía fracasar cualquier esfuerzo del Ejército para recabar información y lograr cooperación por parte de la población, como la creación de la red de cooperantes. Al tiempo, el ELN se dedicaba a asesinar a los políticos oportunistas que colaboraban con los paramilitares e intentaba bloquear la actividad política de los grupos que se habían alineado con el uribismo en Arauquita, Saravena y Fortul, como el Partido de la Unidad Nacional, mientras buscaba alianzas con grupos emergentes que reemplazaran a su viejo aliado, los Liberales de Saravena, que había sido diezmado por la persecución contrainsurgente.

Por otra parte, esta evolución de la situación se reflejó en las relaciones del ELN con las FARC, que había oscilado entre la coexistencia pacífica y el enfrentamiento violento: inicialmente, la llegada de las FARC representó problemas para el ELN, ya que operaban con las mismas comunidades, pero con el tiempo fueron dialogando y construyendo lazos hasta llegar a un reparto de los pobladores y sus territorios, por lo menos hasta el 2005. Entre 1991 y 1993, unieron temporalmente sus fuerzas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar durante las negociaciones con el gobierno Gaviria (1990-1994). Incluso, emprendieron acciones conjuntas en Arauca, pero este experimento terminó cuando se disolvió la confederación. En la década del 2000, durante el escalamiento del conflicto y la consiguiente respuesta contrainsurgente, cada grupo coordinaba por separado el cobro de contribuciones, pero el incremento de las extorsiones de las FARC a las multinacionales, que recuperaban así sus ingresos, y la inserción de los cultivos de coca llevaron a un aumento de las tensiones entre las dos guerrillas.

Es más, esas tensiones aumentaron cuando el frente Domingo Laín, que había respaldado inicialmente los esfuerzos del Ejército para la erradicación, rompió abruptamente ese acuerdo y empezó a competir con las FARC en el negocio, buscando el control y el cobro de impuestos sobre las

rutas de transporte, mientras las FARC cobraban impuestos a los cultivadores y controlaban el procesamiento y el tráfico. Esto condujo al enfrentamiento armado de dos mandos medios de los dos grupos, a finales del 2005, que llevó a las FARC a ordenar acabar con cualquier vestigio de la presencia de los elenos en Arauca.

Además, este conflicto fue más allá del enfrentamiento entre los combatientes para afectar a las comunidades de Tame, Arauquita, Fortul y Saravena, donde habían coexistido anteriormente. Eso violaba el acuerdo tácito de respetar a los civiles que respaldaban al opositor o se mantenían neutrales: ahora, cada grupo obligaba a "simpatizar" con él, sin dar la oportunidad de ser neutrales, lo que acarreaba la muerte segura por parte del otro grupo, Se buscaba así eliminar, mediante asesinatos colectivos y desplazamiento forzado, a las bases sociales del grupo rival, que habían sido previamente clasificados, por medio de la sistemática limpieza de comunidades rurales. Según contaba un poblador, el pueblo quedaba entre la espada y la pared, mientras las veredas quedaban divididas por una especie de muro de Berlín, para evitar que se filtrara información de uno u otro lado. Los dos grupos empezaron a matar mucha gente inocente y se deshizo el tejido social porque la gente empezó a desconfiar de todos los demás (Larratt-Smith, 2020).

Para empeorar la situación, el conflicto terminó involucrando a los frentes insurgentes de las regiones vecinas de Casanare y Boyacá: las FARC destinaron considerables recursos, bajo el liderazgo de Grannobles, para derrotar al ELN en el piedemonte. Pero esta fuerza militar fracasó, porque el ELN desplazó sus fuerzas a Venezuela, dejando solo pistoleros para eliminar bases sociales de las FARC, que no encontraron a nadie con quién combatir. Además, los frentes de las FARC comenzaron a desgastarse frente al aumento de la ofensiva del Ejército: aumentaron las deserciones y los combates afectaban especialmente a la población civil.

Entre tanto, se produjo, una inesperada pero breve alianza del ELN con el Ejército, específicamente entre comandantes de la comisión Martha Elena Barón y de la Brigada 18, que compartieron información mientras procuraban que sus acciones no se interfirieran entre sí. Este acuerdo produjo un reequilibrio de fuerzas, que evidenciaba avances relacionados con la capacidad de recolección de inteligencia del Ejército durante el segundo mandato de Uribe, cuando capturó o eliminó a numerosos líderes de las FARC, mientras tendía a ignorar casi completamente al ELN, según cuenta un entrevistado (citado por Larratt-Smith, 2020).

Esta circunstancia fue aprovechada por el Domingo Laín para retomar su ofensiva a partir del 2008, enfocada principalmente en las bases sociales de las FARC, para restablecer el control de sus milicias que impidieran las incursiones de ese grupo. Este repunte coincidió con la fuga de alias

"Pablito"[6] de la cárcel de Arauca, y con el juicio y la ejecución del comandante de la comisión que supuestamente había pactado con el Ejército.

Según el autor del capítulo sobre el Arauca (Larratt-Smith, 2021), estos enfrentamientos entre las FARC y el ELN, que habían sido criticados por algunas pocas organizaciones sociales y líderes como una lucha inútil, solo finalizaron cuando los organismos centrales de ambos grupos, el COCE y el Secretariado de las FARC ordenaron a los comandantes locales que negociaran un pacto de no agresión. Por este acuerdo, el ELN quedó con el control del piedemonte y las FARC con la sabana y una franja de Arauquita, que dejaba al ELN con una posición más fuerte, porque se quedaba con casi toda la frontera con Venezuela y el control del contrabando. Esto se debía a que, aunque el ELN era militarmente más débil, tenía mayor peso social, gracias a la incrustación de sus comisiones y milicianos en las comunidades locales del piedemonte, de donde eran oriundos casi todos los miembros del ELN, lo que les propiciaba gran conocimiento del territorio y lazos familiares. En cambio, las FARC habían descuidado paulatinamente la parte social y política, según contaba un entrevistado (Larratt-Smith, 2021).

Pero esta victoria del ELN tuvo un alto costo de muertes en combate y desplazamientos forzados, que trajo como consecuencia el deterioro de las relaciones de ambos grupos con la población civil. Esto evidenció la pérdida de respeto y legitimidad por parte de las respectivas bases sociales.

Este resultado dramático del conflicto en el Arauca y el deterioro de la situación del ELN en el sur de Bolívar y Arauca permiten enmarcar, entre esos extremos, el desarrollo de la situación del ELN en Cauca-Nariño, donde la disputa con las FARC evidenciaba el diferente estilo de relación de las dos guerrillas con las comunidades y su lógica consecuencia: la fragmentación de los procesos organizativos. Pero estas disputas fueron clausuradas por el incremento de la ofensiva de las fuerzas estatales, desde el 2002, en el marco de la Seguridad Democrática, que traería consigo un considerable aumento de las infracciones de la fuerza pública al DIH, ligadas a los intentos de desactivar las redes sociales que eran consideradas bases sociales.

Pero la reacción de los dos grupos fue diferente: las FARC se retiraron hacia el Putumayo y Huila, mientras el ELN se replegó a la cordillera, para tratar de mantener su ubicación estratégica en el macizo y sus relaciones con sus bases sociales, e incluso tratar de suplir el vacío que habían dejado las FARC en a las comunidades rurales de El Tambo y San Juan del Micay. Pero estos avances territoriales de ELN se veían amenazados por la llegada de Los Rastrojos, que lograron el acceso a los corredores estratégicos a través subregión del Patía hacia Nariño y la costa del Pacífico. Además, al lado

6 "Pablito" es el nombre de guerra de Carlos Emilio Marín Giraldo, comandante del frente araucano desde el 2000.

del incremento de los cultivos de coca y amapola en Nariño y Cauca, se daba la llegada de una ola de migración, compuesta por campesinos cocaleros desde el departamento del Putumayo, desplazados por las aspersiones aéreas, que significaba una ampliación de la frontera agraria de la región.

Sumado a lo anterior, otros grupos paramilitares, como los bloques Calima, Farallones y Libertadores del sur, llegaron a los territorios adyacentes a la vía panamericana, las zonas del Pacífico y la cordillera nariñense, dentro de la lógica de expansión desde el Valle hasta Nariño. Estos grupos lograron implantarse, hacia finales del año 2000, en Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Morales, Cajibío, El Tambo, Argelia, Popayán, Timbío, Patía, Balboa, Bolívar, Mercaderes y Florencia (Cauca). Luego pasaron, hacia el 2003, a La Unión, San Pablo y La Cruz, en el norte de Nariño, para disputar luego el eje territorial entre Tumaco; Pasto, la frontera con Ecuador y la subregión del alto Patía.

Sin embargo, el control territorial de las AUC se limitaba a las cabeceras municipales, mientras el ELN se recluía en las estribaciones de la cordillera: tales son los casos de Samaniego y La Llanada (Nariño) y El Tambo (Cauca). Esta situación incrementaba los señalamientos y ataques en contra de civiles a quienes las autodefensas señalaban como colaboradores de las insurgencias, que se veían obligados a recluirse en sus veredas y corregimientos, dado el control impuesto por las AUC sobre sus movilizaciones y la cantidad de alimentos de que podía disponer cada familia, con el fin de limitar los recursos para las insurgencias.

Este control paramilitar condujo, entre 2001 y 2004, a alianzas estratégico-militares entre las FARC y el ELN, como un intento de aprovechar la desmovilización de las AUC en 2005, para recuperar los territorios que habían perdido y enfrentar a la fuerza pública. Sin embargo, estas dos guerrillas tendrían que afrontar algunos sectores de las autodefensas que no se habían acogido a la desmovilización, sino que seguían ejerciendo control sobre los recursos de la minería informal y los cultivos de coca y amapola. Y también a grupos delincuenciales como los Rastrojos y los Urabeños.

Estos diferentes desarrollos del ELN en las regiones analizadas muestran ya la imposibilidad del ELN para dar un salto estratégico desde su tercer congreso, en 1996, se evidenciaba la preocupación por tratar de alinear todas las estructuras armadas en torno a un horizonte común y la conciencia creciente de que sus anclajes sociales en los territorios eran menos sólidos de lo que pensaban sus comandantes, como mostraban los golpes que les habían propinado los grupos paramilitares. Para algunos, estos problemas eran el resultado del voluntarismo de los comandantes, que se habían obnubilado por los avances de los años ochenta.

Por otra parte, era también evidente el escaso poder infraestructural de la comandancia para incidir en los frentes regionales de guerra, como

mostraban los resabios autonomistas del Domingo Laín, especialmente en el tema del manejo de los recursos, pero también en los temas de paz, estrategia armada y los mecanismos que intentaban darle coherencia al accionar de los frentes. Al lado del Laín, el frente Alfredo Gómez Quiñonez (1996) y su comandante rompieron con el ELN nacional por considerar inadmisibles las políticas en torno a la redistribución del personal de guerrilleros. Además, había quejas por falta de atención de los mandos nacionales y regiones, al lado de las rivalidades entre los frentes y disputas entre los miembros de la dirección, por ambiciones personales, pero también por diferentes criterios sobre el funcionamiento, la incorporación y salida de los guerrilleros y los criterios sobre el cobro de las contribuciones.

Estos problemas internos se profundizaron con la muerte del "Cura" Pérez en 1998, junto con la baja de otros comandantes, que le abrieron camino a los intentos del Frente Domingo Laín: de los comandantes de la época fundacional, solo quedaba "Gabino", quien tenía que compartir la comandancia con "Antonio García", considerado representante de la línea más dura; y, con otros personajes como "Pablo Beltrán" y "Ramiro Vargas", quienes representaban posiciones distintas (Crisis Group, 2007). En efecto, estas diversas tendencias se hicieron sentir en el V pleno de la Dirección Nacional (1998), donde emergieron algunos cuestionamientos de la tradicional oposición a los cultivos de uso ilícito, por parte de algunos frentes del Cauca.

Estos frentes, por obligación, codicia o por pragmatismo (o una conjunción de las tres), empezaron a cuestionar las directivas del COCE en esta materia, que los alejaba de los intereses de las comunidades: por eso, frente a la competencia de las FARC, que impulsaba los cultivos, decidieron aceptarla, aunque sin estar del todo de acuerdo. Y, en materia de las negociaciones de paz de las FARC con el gobierno de Pastrana, (1998-2002), el sector mayoritario del COCE, con el apoyo de los voceros presos en Itagüí ("Felipe Torres" y "Francisco Galán"), era partidario de buscar un acercamiento a la salida negociada, mientras que los frentes Domingo Laín, Carlos Alirio Buitrago y el Bernardo López Arroyave se oponían.

Estos enfrentamientos empezaban a mostrar que la estrategia, que había sido exitosa en los años ochenta, se había convertido en un obstáculo organizacional para los noventa, porque impedía que el ELN pudiera dar un salto estratégico. Como resultado, el ELN terminó convertido en un actor de segundo plano en el tablero nacional de la guerra, con una presencia reducida al nororiente del país, gracias a los acumulados por el frente Domingo Laín, cuya experiencia exitosa deslumbraba al resto de los frentes y cuyos recursos serían el sostén del ELN en varias regiones en los años siguientes. En otras palabras: el "Sol de Oriente" se elevó como el metarelato de la construcción del poder popular eleno.

Como muestra Andrés F. Aponte en el primer capítulo de este libro, estas dificultades del ELN son muy similares a los que había enfrentado Carlos Castaño para cohesionar a los grupos paramilitares en la AUC, e incluso a las relaciones de las facciones de los partidos tradicionales con el Estado central. Según él, a diferencia de las FARC, el ELN nunca logró crear una estructura militar a semejanza del Ejército Nacional, como lo había logrado las FARC, pero, ellas nunca lograron el tipo de relación con las comunidades que tuvo el ELN, sino que su relación era más de corte militarista. Otra diferencia era la vinculación con la economía cocalera, que le permitió a las FARC ampliar su base social, incrementar su reclutamiento y modernizar su tropa, algo que no permitía la extorsión a la industria petrolera, los secuestros y la minería artesanal (Aponte, 2021).

Este contraste es subrayado por un líder eleno entrevistado, que compara la situación de ensimismamiento del ELN con la epopeya militar de las FARC con sus triunfos en Puerres, Miraflores, Mocoa y El Billar: aunque el ELN no había sido derrotado militarmente, era clara su incapacidad estructural para mantener el esfuerzo que estaba haciendo. Así, reconocía este jefe que se habían equivocado: estaban lejos de una situación prerrevolucionaria (Entrevista citada por Aponte, 2021).

La inserción del ELN en las márgenes del país como estrategia de conservación (1999-2009)

Además de las dificultades en el terreno militar de esos años, el ELN experimentó un desdibujamiento del perfil humanitario y político que había construido cuidadosamente en los años ochenta y noventa. Este cambio fue resultado de la acentuación de la línea militarista impuesta por las nuevas directrices de la dirección, que afectaban sus relaciones con las comunidades locales. Así, se hizo evidente que sus frentes no respetaban ya el derecho internacional humanitario: no cesó el reclutamiento de menores, ni los secuestros indiscriminados, ni tampoco se suspendieron las voladuras del oleoducto, ni las minas antipersonales, a pesar de las directrices del COCE.

Eventos como la voladura de Machuca, los secuestros masivos de la iglesia La María (1999) y del kilómetro 18, en Cali (2000); el de la ciénaga del Torno, cerca de Barranquilla (1999); y el del vuelo 9463 de Avianca (1999) evidenciaban acciones desesperadas que pretendían ganar oxígeno político y compensar así su declive militar: el mejor ejemplo es el del sur de Bolívar, pero también se evidenciaba la misma situación en el nororiente, oriente y bajo Cauca de Antioquia, la Costa Caribe (Cesar, Magdalena, Montes de María en Córdoba y Sucre, sur de Córdoba), Catatumbo (Norte de Santander) o en el suroccidente del país (Farallones de Cali, norte del Valle, Cauca, Nariño).

En Antioquia, donde el ELN amenazaba tanto la comunicación con Bogotá con retenes y secuestros en la autopista como la infraestructura eléctrica en el oriente, sus frentes se vieron severamente golpeados por el Ejército en 2003. Esto llevó a muchas deserciones del frente Carlos Alirio Buitrago, uno de los frentes más opuestos a la salida negociada y de los más cercanos a las posiciones radicales y militaristas del Domingo Laín, que perdió así uno de sus aliados más importantes. Pero también fue prácticamente desmantelado el frente de Anorí, por las acciones del Ejército y los paramilitares. Los sobrevivientes de los frentes Héroes de Anorí y Carlos Alirio Buitrago tuvieron que replegarse a los espacios más apartados e inaccesibles del oriente antioqueño, al sur de Bolívar y a los intersticios de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por el occidente.

Algo parecido sucedió en la costa caribe: en el Cesar, los frentes elenos fueron expulsados de las partes planas del departamento (La Jagua, Aguachica, Gamarra o La Gloria) por el Bloque Norte de las autodefensas y los sobrevivientes tuvieron que refugiarse en las partes más altas de la serranía del Perijá. En el Magdalena, la combinación de la acción contrainsurgente del Ejército y la consolidación paramilitar llevó a los frentes sobrevivientes a recluirse en la Sierra Nevada. En el occidente del Caribe (en el sur de Córdoba, La Mojana y Montes de María, Sucre), el ELN se retiró de las áreas donde tenía presencia y tuvo que recluirse en el bajo Cauca antioqueño, en límites con el sur de Bolívar. En el Catatumbo (Norte de Santander) las estructuras presentes perdieron presencia en sus bastiones históricos, Tibú y El Tarra, para recluirse en las partes altas y más apartadas de Hacarí, San Calixto y Convención.

Por su parte, en el suroccidente colombiano, los elenos perdieron espacio en el norte del Valle y los farallones (Dagua, Jamundí y Cali), para replegarse en el Cauca (El Tambo y algunas áreas de Argelia y Patía). Finalmente, en el piedemonte y el andén del Pacífico nariñense perdieron presencia con la incursión de las AUC y la entrada de las FARC, que obligaron a los elenos a recluirse en las partes rurales de Samaniego.

En los sectores urbanos, el ELN perdió uno de sus bastiones históricos tradicionales: Barrancabermeja, conquistada por las fuerzas de Castaño, pero también el control de las comunas de Cúcuta, mientras el Frente Urbano José Manuel Becerra era expulsado de Cali (1999), y, la Comuna 13 de Medellín era conquistada por la combinación de las fuerzas militares con elementos paramilitares.

En suma, el retroceso militar se concretaba en la pérdida de presencia en las ciudades y en la Costa Caribe, pero especialmente en su repliegue hacia la zona fronteriza con Venezuela, con su fortalecimiento en Arauca, desde donde se intentará una nueva recomposición. Pero más allá de la

derrota militar, se concluía que el ELN había descuidado su forma de relacionamiento con sus bases sociales; sus procesos de reclutamiento de milicianos urbanos fueron descuidados: por carencia de filtros adecuados, se terminó recogiendo delincuentes y viciosos, jóvenes un tanto lumpenescos en Medellín y Barrancabermeja. El reflujo se manifestó en una reducción considerable de su pie de fuerza; en 1998, se calculaban 15.000 armados, que se habían reducido a 4.500 para el 2005. Además, el retroceso hizo ver que su modelo de guerra se mostraba incapaz de canalizar sus recursos de manera equitativa para que todos sus frentes pudieran dar el salto estratégico planeado y la dirección se mostró incapaz de direccionar efectivamente a los frentes.

Todo este proceso evidenciaba la imposibilidad de la organización del ELN para resistir la ofensiva de las fuerzas estatales y paraestatales: el carácter de combatientes de medio tiempo de sus miembros los hacia vulnerables frente a los paramilitares, que los eliminaban cuando estaban dedicados a sus actividades civiles o políticas. Y su íntima y ambigua relación con su base social hacía imposible proteger a sus miembros de las incursiones paramilitares: algunos de ellos se vieron obligados a cambiar de bando y a convertirse en informantes sobre sus antiguos compañeros. Y la creciente militarización de sus relaciones con los no combatientes generaba rupturas con sus bases sociales. Además, el petróleo y los secuestros generaban menos recursos que la coca.

Paralelamente a este retroceso, los líderes empezaban a plasmar un lenguaje que exaltaba la capacidad de resistencia de los elenos frente a la adversidad, al tiempo que decidían internarse en las periferias de las periferias de sus zonas de influencia con el fin de evitar el embate paramilitar y apostar por la conservación de sus fuerzas. Al tiempo, se pensaba en "llevar la guerra a las ciudades", y dedicarse a la infiltración de los procesos organizativos (es decir, persistir en la idea de construcción de *Poder Popular* a partir de la toma de las organizaciones sociales). Todo esto mostraba la renuncia a toda acción que mostrara una voluntad de tomarse el poder: de ahí su insistencia en las minas antipersonales y acciones de baja intensidad como los atentados a la infraestructura petrolera, que demandaban pocos recursos materiales y humanos.

Esta actitud más defensiva se reflejaba en su posicionamiento geográfico; los frentes se ubicaban en zonas fronterizas, pero vinculadas entre sí por medio de corredores estratégicos, vinculadas a economías que les generaban abundantes recursos como la coca, el oro, el coltán, la madera, etc. Por ejemplo, el corredor Samaniego-Tumaco (Nariño), la ruta de la zona central del Catatumbo y la frontera venezolana, cerca de Cúcuta, el corredor que atraviesa Tame y algunas vías fluviales que conducen a la frontera venezolana y el Chocó.

Pero, al lado de esta marginalización y vinculación a las economías territoriales, se evidenciaba el reposicionamiento interno del Frente Domingo Laín, el único que no había retrocedido en lo político, social ni militar, cuya experiencia exitosa deslumbraba a los otros frentes, a los cuales extendía su influencia cada vez más. Esto significaba tanto la reconsideración de su posición abstencionista en las instancias nacionales de la dirección del ELN, pero también el ascenso de nuevos líderes con ínfulas políticas, pero más militaristas y criminalizados.

En esta recomposición, las discusiones del IV Congreso del 2006 evidenciaron los disensos en torno a las negociaciones de paz, que explican las vicisitudes de las negociaciones del ELN con los gobiernos de Uribe (2002-2010): por esas contradicciones, Francisco Galán fue relevado de su cargo por haber condenado la lucha armada. Se adoptó entonces la idea de la resistencia armada, que hacía explícita la renuncia a toda perspectiva de toma del poder: la resistencia no equivalía siempre a pelear, pues podría consistir en adoptar una postura de resiliencia, que consistía en ocultarse para esperar sobrepasar la amenaza de aniquilamiento frente a la mayor fortaleza del adversario e irse recuperando para continuar la lucha, sin rendirse.

De ahí la priorización de los espacios urbanos, dado el despoblamiento del campo: el nuevo frente urbano nacional tendría como objetivo la coordinación de las milicias y la mimetización clandestina en las luchas campesinas, obreras y estudiantiles.

Otro de los puntos de controversia era el relativo a la coca, dado el evidente involucramiento de algunos frentes en ese negocio, que iba en contravía de la tradicional directriz prohibicionista del COCE. Esas tensiones se manifestaban en el discurso de "Gabino" en ese congreso, en el que reiteraba su deslinde con las diferentes cadenas del negocio del narcotráfico, aunque aceptaba que algunos frentes cobraran gramaje a las comunidades productoras (Revista Unidad, 2006, citada por Aponte, 2021). Sin embargo, la ratificación de esta actitud fue acatada de manera selectiva, ya que los frentes del Catatumbo y Nariño iban mucho más allá del cobro de gramaje, al regular los cultivos y el procesamiento, al tiempo que protegían las rutas. En cambio, el Domingo Laín mantenía su prohibicionismo radical, mientras otros frentes como los del Chocó, Cauca y sur de Bolívar, se vinculaban tangencialmente según sus posibilidades y alianzas con otros grupos armados.

Además de la financiación cocalera, el ELN aprovechaba los recursos de economías legales, como la extracción maderera en el Chocó, la agricultura y el comercio, pero también semilegales como la minería en el Chocó, sur de Bolívar y bajo Cauca y el coltán en Guainía, Vichada y Vaupés, la gasolina artesanal, el contrabando y las trochas de migrantes en el Catatumbo. En Arauca, se beneficiaba de la tributación sobre los pasos fronterizos para el contrabando de víveres y la llegada de migrantes

venezolanos, lo mismo que sobre la producción agrícola, el comercio. Este control de las economías regionales permitía no solo la consecución de recursos sino también la ampliación de sus bases sociales, gracias a su función de tramitación de las tensiones que se presentaban en ellas y de la creación colectiva de normatividad para su resolución.

Pero la creación de este dominio territorial traía consigo complejas relaciones con otros actores armados, que oscilaban entre acuerdos tácitos, alianzas y enfrentamientos directos: así, en el Cauca, la compañía Milton Hernández se alió, en 2007, con los Rastrojos en contra de las FARC, lo que llevó al rompimiento de los acuerdos de reparto territorial que tenían con el ELN en el piedemonte y el andén del Pacífico nariñense. Según la correlación local de fuerzas, las trayectorias fueron diferentes: en el Cauca el ELN logró el control de El Tambo y sus áreas vecinas, pero en Nariño tuvo que replegarse a Samaniego, dejando a las FARC con el control de la mayor parte del departamento. En el Catatumbo, la confrontación fue indirecta, mediada por las organizaciones de las bases sociales de las dos guerrillas, que se tradujo en la victimización de líderes sociales de uno u otro lado.

Pero los enfrentamientos más violentos se presentaron en Arauca, con una guerra desatada entre las dos guerrillas, por la muerte de un miembro del estado mayor de un frente fariano y las acusaciones contra el ELN por sus contactos con el Ejército y los paramilitares en contra de las FARC. En la confrontación, que duró dos años, salió triunfador del ELN, como se mostró antes. La confrontación concluyó con un pacto local de paz, que se replicó en otras regiones donde competían las dos guerrillas, como Cauca, Nariño, Chocó, Catatumbo y sur de Bolívar, que buscaban aprovechar las fortalezas de cada organización, aumentar las fuentes de financiación y realizar acciones armadas contra la fuerza pública. El consiguiente reparto del territorio estaba acompañado de un manual de convivencia entre las dos guerrillas, que insistía en el respeto por la cultura y autonomía de los pobladores (campesinos, indígenas y otras minorías), el fomento de la camaradería entre las dos organizaciones, la prohibición de asesinatos de pobladores: no se permitía el proselitismo y el trabajo político en el territorio del otro grupo, ni tomar decisiones en contra de los militantes o simpatizantes del otro.

Pero, además de la diferencias cognitivas y organizativas de los dos grupos y su lucha por el control de los mismos territorios, aparecía un malestar de la comandancia fariana con el ELN, que les dejaba todo el peso de la guerra a las FARC al tiempo que mantenía comunicaciones con el Ejército para que las golpeara. Se quejaban también de cierto puritanismo eleno contra los campesinos cocaleros, el robo de ganado a sus simpatizantes, el cobro de contribuciones a las mismas personas por ambos grupos, como aparece en la carta de Manuel Marulanda a Nicolás Rodríguez, en diciembre del 2005 (citada por Aponte, 2021).

Esta confrontación y acuerdo entre las dos guerrillas muestra lo inadecuado que fue pensar que el ELN terminaría por supeditarse a las FARC, como algunos esperaban, pero también que esta guerrilla estaba próxima a su fin, dado su declive militar y marginalidad territorial. En contravía con esto, el ELN evidenció una gran capacidad de adaptación y recomposición: el número de sus miembros capturados o dados de baja, junto con las deserciones, hubieran significado la muerte del grupo si no hubiera contado con una gran capacidad de reclutamiento de nuevos miembros, pues se calcula que perdió 9.000 militantes en menos de diez años, entre 2001 y 2010.

Sin embargo, para 2009, se calculaba que el grupo todavía tenía presencia en trece departamentos del territorio nacional (Arauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Nariño, Cauca, etc.), desde los cuales se empezó, lentamente, a reposicionar en las partes donde solían estar presentes (zonas periféricas) y en nuevas áreas, como son los casos de las zonas fronterizas con Venezuela por la subregión del Catatumbo o en la frontera con Arauca; en partes del bajo Cauca antioqueño y del piedemonte nariñense (La Llanada); o en zonas del Cauca y Chocó.

Este proceso de recomposición, caracterizado por la marginalización territorial y la vinculación con las economías territoriales, permitió que el ELN profundizara su trabajo político en las periferias de sus periferias, para ampliar sus bases sociales, gracias a su tramitación de las tensiones en las economías de esas regiones, cuya vida cotidiana regulaba. A partir de eso, empezaba a recomponer sus estructuras armadas, pero sin poderlas vincular a la Dirección Nacional, porque los mayores recursos conseguidos en esas economías les permitían mayor autonomía frente al COCE, como se evidenció en el debate en torno a la coca y las negociaciones de paz.

En esos debates, se evidenció el surgimiento de una nueva camada de líderes, con distintas raíces sociales y posiciones ideológicas, que se enfrentaba a la vieja guardia de "Gabino", Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, etc., y que giraba cada vez más en torno al "Sol de Oriente", pero sin llegar tampoco a un proceso de integración bajo su hegemonía, similar a las FARC bajo Marulanda. Pero, que permitía vislumbrar una organización más compleja y variopinta que la anteriormente coordinada por "el Cura" Pérez, como un paraguas ideológico que vinculaba reivindicaciones distintas de los frentes regionales.

¿Hacia un tercer ELN, que representaría nuevas conflictividades regionales?

El último aparte del capítulo inicial de Andrés F. Aponte, un tanto provocador, insinúa un cambio de orientación con respecto al estilo de coordinación federada de movimientos regionales bastante autónomos, para

sugerir un movimiento con mayor unidad de mando y coherencia para la toma de decisiones políticas. En ese sentido, presenta a "Pablito", como el fiel de la balanza en el nuevo ELN, con un mando militar que cubriría un 60 % del ELN, según los estimativos de Carlos Medina (Carlos Medina, "Pablito": el hombre de guerra del ELN, febrero 4, 2019, citado por Aponte, 2020). Sin embargo, según algunos, no se puede subestimar la importancia simbólica del liderazgo de "Gabino", el único de los fundadores históricos que sobrevive y a quien "Pablito" reconoce.

El nuevo contexto de expansión territorial del ELN, en su intento por copar los antiguos dominios farianos, aparecía vinculado a su interés por visibilizarse para presionar su inclusión en las negociaciones de paz con la administración Santos (2012-2018). Y aprovechaba los acuerdos previos con las FARC en las zonas donde habían coincidido. Sin embargo, los diferentes frentes se movían en diferentes trayectorias según sus diversos acumulados: el frente del Cauca y Nariño era casi fantasmagórico y la actividad del Frente Darío Martínez se hizo casi imperceptible: se replegó a las partes altas de la cordillera, entre Bolívar y Antioquia. En cambio, en el Chocó, el Frente Occidental de Guerra logró insertarse en el alto y medio San Juan, Atrato y Baudó, gracias a los recursos de la coca, la minería criminal y artesanal y la industria maderera, pero su mayor protagonismo militar estaría acompañado de visos criminales y predatorios y por una mayor cercanía al Domingo Laín. En una situación intermedia, en el Catatumbo el ELN revitalizó su presencia militar, gracias a los recursos de la coca, el contrabando y el control de los pasos fronterizos, que le permitieron descender de las partes altas y ampliar sus bases sociales.

Por su parte, el Frente Oriental del Arauca seguía mostrándose como la estructura más fuerte y con mayor protagonismo militar, con sus combates, ataques a la infraestructura y convoyes militares, pero también con mayor capacidad de obtener recursos de su control de la vida económica, tanto legal como ilegal, gracias a su control social. Este frente se había adentrado profundamente en el territorio venezolano, pero también incursionaba en el Vichada. La importancia de Venezuela como sitio de refugio y de reclutamiento de nuevos miembros —que hacen que algunos se refieran al ELN como una guerrilla colombo-venezolana o binacional—, pero también como fuente de nuevos recursos económicos, como los provenientes del coltán, se hace cada vez más evidente.

En el conjunto nacional se percibía el contraste entre la expansión del ELN desde el Chocó y Arauca, con la reducción de su presencia en zonas del sur de Bolívar, nordeste antioqueño y bajo Cauca: algunos de los sobrevivientes migraron al Catatumbo, para reintentar recomponer sus fuerzas y evitar el ser totalmente aniquilado por las fuerzas estatales. Del balance comparado se puede decir que el reposicionamiento del ELN en algunas

regiones no significaba una amenaza real para el Estado en términos militares, como mostraba su opción por la estrategia defensiva, pero que tampoco significa la pérdida de su capacidad de desestabilización. Esta capacidad se deriva de sus abundantes recursos financieros, tradicionales y nuevos, gracias a su control de las economías de las regiones donde tiene presencia, en las cuales cada vez se hacen más importantes los dineros del narcotráfico, a pesar de la actitud prohibicionista del discurso oficial, en el que se contrasta el pragmatismo de la mayor parte de los frentes con la oposición radical del frente araucano, que disponía de amplias fuentes de financiación, que le permitían prescindir de la coca.

Claro que las relaciones de los otros frentes con la economía del narcotráfico variaban según sus circunstancias: en el Chocó, los elenos cobraban gramaje a cambio de seguridad a los cultivos y laboratorios, mientras que en el Catatumbo se acordó un reparto del trabajo con las FARC: el ELN se encargaba de los insumos para el procesamiento, pero las negociaciones de paz de las FARC llevarían a otra guerra entre las insurgencias. Por otra parte, en el sur de Bolívar, la desmovilización de los paramilitares, en 2006, permitió un pacto con las FARC para repartirse el cobro del gramaje y las extorsiones. Y, en el Cauca, los acuerdos del ELN con Los Comba, para cuidar laboratorios en Balboa Argelia y el corregimiento El Plateado y las rutas hacia Tumaco y Buenaventura, produjeron fricciones internas pero también tensiones con las FARC. Sin embargo, sus mejores relaciones con las comunidades lograron el control de Huisito, La Paloma, Playa Rica y San Juan de Micay (El Tambo). Como resultado de este reacomodo, algunos frentes aumentaron su actividad en zonas como Chocó, Cauca, La Mojana (Sucre), Catatumbo, bajo Cauca antioqueño y Nariño.

En ese contexto, se llevó a cabo el V Congreso (2015), que buscaba redefinir el horizonte de acción en la coyuntura de la salida de las FARC de la guerra: se insistió nuevamente en integrar la lucha armada con la movilización social, otorgando un papel crucial a las ciudades y los espacios suburbanos bajo la coordinación del frente de guerra urbano nacional. Se aprovecharía el auge de la movilización social de los estudiantes (2011) y del Paro Agrario (2013), que eran percibidos como expresiones colectivas que legitimaban su opción por la lucha armada, vista casi como situación prerrevolucionaria. Y, en el plano interno de la organización, hay que subrayar que se integraron al COCE "Pablito" y otros dos miembros del Frente Oriental, lo que significaba una nueva distribución del poder en las instancias centrales del ELN y un reconocimiento del peso creciente del Domingo Laín.

Sin embargo, esta recomposición tampoco reflejaba la diversidad regional del ELN sino que mostraba una tendencia hacia una lógica más jacobina de centralización, que buscaría aprovechar la supuesta situación prerrevolucionaria y parecía remitir al mito fundacional del primer ELN,

sin considerar que se carecía de una estructura nacional de finanzas, y de una posición unificada frente a la economía de la coca.

Para ese entonces, eran claras la creciente preminencia del frente araucano y la intención de usufructuar la coyuntura de la negociación de las FARC con el gobierno de Santos (2010-2018), pero con muchas dudas y precarios consensos, dada la resistencia de algunos frentes a entrar de lleno en un proceso de negociaciones. Después de muchas exploraciones, de corte confidencial, en 2016 se iniciaron formalmente los diálogos, que se desarrollaron en Quito y La Habana entre 2017 y 2018. Pero las expectativas de las partes eran diversas: para el gobierno, se trataba de conseguir la paz completa, pero el ELN veía la negociación como una oportunidad para oxigenarse políticamente y demostrar su vigencia pública. Por eso, hay que destacar que el ELN no estaba de acuerdo con dialogar en medio del conflicto, que permitía al gobierno seguir buscando asestar golpes para ablandar a los sectores más duros y al ELN realizar ataques en centros urbanos y atentados contra la infraestructura, al tiempo que combatía con otros grupos armados por el control de los territorios de los que las FARC se estaban retirando.

Obviamente, las prioridades del Gobierno estaban concentradas en el proceso con las FARC, que, de alguna manera, quería reeditar con el ELN, sin caer en la cuenta de que ese esquema de negociación era completamente inadecuado, dada la diferente naturaleza de las dos guerrillas, que se reflejaba en sus correspondientes reivindicaciones políticas.

Para empeorar más la ya difícil situación, el consenso interno del ELN era bastante precario en materia de paz: a los frentes tradicionalmente reacios a la idea de la negociación, se sumaba el que otros estaban más interesados en las dinámicas de sus regiones que en el proceso nacional: de ahí su reivindicación del secuestro como medio de financiación y control político.

Sin embargo, después de más de tres años, las partes acordaron una agenda y unas reglas de funcionamiento como hoja de ruta, con un temario de carácter muy general y ambiguo, que reflejaba más las posiciones del ELN que las del Gobierno (Guerra, 2020; Ramírez, 2018; Celis, 2019). Además, es importante señalar la creación de mesas de trabajo con sectores sociales de los territorios donde la guerrilla tenía presencia: esto hacía más lento el desarrollo de la negociación central, pero respondía más adecuadamente a la diversidad regional del ELN y a sus relaciones con la movilización social de esas regiones.

Pero, tal vez el punto más crítico residía en la insistencia del gobierno en dejar consignada explícitamente la voluntad de dejación de armas por parte de la guerrilla como condición necesaria para un acuerdo, y la resistencia del ELN a hacerlo, que hizo extender la etapa exploratoria más allá de lo previsto (Ramírez, 2018; Guerra, 2020). Este desacuerdo reflejaba

la diferente percepción que tenían las dos partes: el ELN se consideraba en igualdad de condiciones con el Gobierno, con cierta posición simétrica con el Estado, que, obviamente, no compartían los negociadores del Gobierno. Este contrapunteo perjudicó la imagen de las negociaciones, dada la convicción dominante en la opinión pública de que se estaba negociando con una guerrilla menor. Sin embargo, se alcanzaron algunos logros como el cese al fuego bilateral, las acciones humanitarias y la liberación de unos secuestrados, que hizo posible cierta construcción de confianza entre las partes (Mouly y Hernández, 2020).

Sin embargo, este buen ambiente se fue diluyendo por varias razones, como la alta rotación de los miembros del equipo negociador del Gobierno y la falta de apoyo técnico recibido. Pero, sobre todo la derrota del gobierno Santos en el plebiscito del 2016 y la agenda maximalista del ELN, que dejaba poco espacio para mostrar avances. A esto se sumaban los asesinatos de líderes sociales, considerados por el ELN como la continuación de la guerra sucia, la lenta implementación de los acuerdos y la captura de Jesús Santrich. En este punto, conviene destacar, como hace el autor del capítulo inicial (Aponte, 2021), la autopercepción del ELN como una guerrilla no derrotada, sustentada en la idea de resistencia armada, que llevaba a privilegiar las dinámicas de las regiones donde eran fuertes sus frentes.

Obviamente, un problema de fondo era que la correlación política favorable a los acuerdos se estaba desvaneciendo, como mostraba el trámite de la refrendación de los acuerdos de La Habana en el Congreso, que despertaba desconfianzas en el ELN. Pero, el golpe final vino con el triunfo de Duque y Uribe en las elecciones presidenciales, que insistían en modificar lo acordado con las FARC al tiempo que endurecían las condiciones de las negociaciones con el ELN, a las que se quería someter a una serie de inamovibles como el fin de los secuestros y del reclutamiento de menores, y el cese bilateral del fuego.

Y, por parte del ELN, el golpe provino de una acción, decidida inconsultamente por el Frente Oriental, que hizo uso del llamado *debate en caliente*, para zanjar las tensiones internas del ELN en materia de paz al tiempo que se posicionaba frente al nuevo gobierno de Duque. Así, el atentado contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá (2019) buscaba atravesarse en la política nacional decidida, aunque por mayoría exigua, por el V Congreso del 2015, en contra de las posiciones de los frentes Oriental, Nororiental y Occidental, que se mostraban partidarios solo de explorar las posibilidades de negociar (cabe recordar que los frentes del Catatumbo y Chocó eran los mayores receptores de las ayudas del Frente Oriental).

En conclusión, la naturaleza federalizada del ELN, junto con la nueva distribución de fuerzas en el interior del COCE y el mayor interés de los

frentes por las dinámicas de sus territorios, se conjugaban con el cambio de gobierno para cerrar las puertas a una posible salida negociada.

Por parte del ELN, su debilidad militar en el conjunto de la nación, el carácter circunscrito de su tipo de violencia, —que generalmente casi nunca enfrenta a las fuerzas estatales sino a otros grupos armados con los que compite por el control de territorios— la tendencia a una mayor criminalización de sus estructuras, pero que no niega el carácter político del grupo, se conjugan con la permanencia de su discurso bipolar sobre la sociedad y el Estado y las apuestas particularistas de sus frentes, para bloquear un diálogo nacional de paz.

Y en las regiones, la situación permanece sin cambios mayores; en el Chocó, el conflicto del ELN con los grupos privados de violencia y las fuerzas estatales se ha venido incrementando a partir del 2015, con su esfuerzo por copar los territorios farianos, que ha traído como resultado el deterioro de la situación humanitaria del departamento. Su desinterés por enraizarse en la vida local hace que los pobladores añoren la regulación que les proporcionaban las FARC: las comunidades indígenas y afrodescendientes se quejaban de que la regulación de la minería por parte del ELN estaba al servicio del mejor postor, sin tener en cuenta a las comunidades ni a la biodiversidad, como comentaba un entrevistado a los autores del capítulo del Chocó (Aponte y González, 2021).

Pero, por otra parte, este cambio ha llevado al ELN chocoano a posicionarse mejor dentro del conjunto de la organización, donde ocupaba una posición marginal, como demuestra su manejo del secuestro de Odín Sánchez Montes de Oca como estrategia para ganar terreno al interior de la organización. Al parecer, este grupo estaría replicando la estrategia del Domingo Laín, de no participar en los organismos centrales de la dirección para no ver limitada su autonomía. Pero su presencia más reciente, desligada de los problemas endógenos de la organización social del territorio, responde más a las dinámicas de la expansión territorial sobre los terrenos tradicionales de las FARC, en competencia con los grupos de violencia privada. Esto explica su estilo más militar de relación con la población, casi como ejército de ocupación, por el estilo de violencia que genera, y su menor énfasis en lo ideológico.

En cambio, el Frente de Guerra Suroriental, aunque su intento de controlar los corredores de movilidad y las rutas del narcotráfico en Cauca y Nariño es similar al del Chocó, emprende un proceso muy distinto de expansión: los acuerdos con las FARC habían permitido su inserción en las zonas del norte y sur, lo mismo que en la costa del Pacífico, pero sus esfuerzos por infiltrar los movimientos indígenas y campesinos para regular la minería, tanto artesanal como criminal, y los cultivos cocaleros no

tuvieron pleno éxito entre los pobladores, a pesar de su estrategia de concertación sobre las normas comunitarias.

Esta situación empeoró con la llegada de las disidencias, que afectó también los intentos de expansión hacia los municipios fronterizos del piedemonte y andén del Pacífico (Barbacoas y Tumaco, alto Mira, Frontera, Llorente y La Guayacana), de donde el ELN fue expulsado por el frente Oliver Sinisterra y algunos grupos ligados al narcotráfico. Además, la situación parece que tiende a empeorar con la llegada del bloque Alfonso Cano, conformado por "El Paisa". En contraste, la proyección del grupo hacia el andén pacífico nariñense muestra un relativo éxito en la zona colindante con el Cauca y el valle del Patía, donde logró el control de algunos puntos fluviales claves para el transporte de la coca desde sus dominios del Cauca, donde alcanzó a derrotar a los grupos de violencia privada que competían con ellos y conseguir mayor injerencia en la minería de aluvión y la comercialización de la coca.

Por su parte, en el Catatumbo el grupo eleno logró imponerse, con una importante ayuda del Frente Oriental en recursos y hombres, en la disputa con el EPL por el control del territorio, surgida por la ruptura de los acuerdos entre los comandantes después de la muerte de "Megateo" (2015) y los intentos de copar las zonas de antiguo dominio fariano. Después de algunos enfrentamientos violentos, junto con desplazamientos, confinamientos y asesinatos selectivos, el EPL tuvo que replegarse, en 2019, hacia Convención, Sardinata y la frontera venezolana. Sin embargo, la alianza del EPL con algunos grupos de violencia privada amenaza con extender la confrontación en el departamento, especialmente en el área metropolitana de Cúcuta. Pero el triunfo del ELN le ha permitido ampliar su participación en el tráfico de drogas y en el control de las rutas de tráfico hacia Venezuela, lo mismo que mayor control sobre la minería ilegal, los pasos fronterizos, la entrada de migrantes venezolanos, Su administración local de justicia en la frontera ha llegado hasta el punto de prestar servicios de bienestar propios del Estado como la entrega de mercados a personas vulnerables, como señala Henry Ortega en su capítulo (Ortega, 2021).

Muy distinta del Chocó y Catatumbo es la situación del ELN en el sur de Bolívar, bajo Cauca y nordeste antioqueño: allí, aunque el grupo logró recuperarse del embate paramilitar, gracias a los recursos del oro y de la coca, su incidencia en la región sigue siendo muy marginal: desde 2014 han sido capturados o dados de baja muchos combatientes y comandantes.

Esta situación hizo que el COCE intentara reforzarlos con una nueva camada de cuadros y comandantes, provenientes del Frente Oriental, que buscaba aprovechar la ubicación estratégica de esta región puente entre el oriente del país y la costa del Caribe, pero también los recursos de la

minería del oro. Pero, además, evidencia un paso más del Frente Domingo Laín en su proceso posicionamiento en el conjunto nacional del ELN.

Este frente ha seguido consolidando su presencia en el piedemonte araucano y fortaleciendo los procesos organizativos de sus bases sociales, gracias a su capacidad de obtener recursos más allá de la extorsión a la industria petrolera, con su acceso a los recursos de las administraciones locales y departamentales, sus impuestos a la gasolina de contrabando, las rutas cocaleras y los pasos fronterizos, el contrabando de toda clase de bienes e incluso de las actividades agrícolas y ganaderas.

Estos recursos permitieron financiar su expansión a otras regiones del país, como Casanare y Vichada, y de Venezuela, como Apure y Amazonas, pero, especialmente, ganar mayor representación en los organismos centrales del ELN, el COCE y la DN, con su proyección hacia los frentes Occidental, Nororiental y Suroccidental, que cada vez más giran deslumbrados por la experiencia del sol del oriente. Sin embargo, la tradicional autonomía de los frentes regionales podría representar un obstáculo para la expansión de un estilo diferente de acción guerrillera en condiciones regionales que son muy distintas de las que hicieron posible su éxito en Arauca.

Sin embargo, es evidente que esta expansión y consolidación del Domingo Laín lo ha convertido en una especie de "metafrente", que domina la mayor parte de la narrativa elena, pues allí se han venido concretando sus ideas de poder popular y acumulación de fuerzas desde las localidades, gracias a su incrustación en los procesos organizativos de la región. Por eso, consideran algunos, que este frente tendría más que perder que ganar en una eventual negociación, ya que sus estructuras están profundamente incrustadas en el orden regional y perderían mucho más de lo que lograrían con una posible desmovilización. De ahí que, como afirma uno de los entrevistados por Larratt-Smith, sus comandantes se muestren tan renuentes a la negociación, ya que se muestran cómodos con el orden regional del que hacen parte, por haberlo ayudado a construir; y, más bien, perderían el cogobierno que ya poseen en el territorio (Larratt-Smith, 2021).

Por otra parte, esta renuencia de los líderes del Frente Oriental está evidenciando el perfilamiento, dentro de la estructura de mando, de una nueva camada de comandantes y cuadros medios, que se están distanciando de los dirigentes históricos y de sus referentes fundacionales, como "Gabino", "el Cura" Pérez, e incluso la figura de Camilo Torres y de las experiencias de Anorí y el Febrerazo. Algunos entrevistados critican a la dirigencia como vieja, con seis de sus nueve miembros elegidos en 1983: se mantienen Pablo Beltrán, Antonio García y "Gabino", El caso más significativo de este ascenso es el de "Pablito", quien se había negado sistemáticamente a hacer parte del COCE para evadir el control de la dirección y evitar que su separación del mando militar directo afectara su

posición en el frente. Sin embargo, señalan algunos, su reconocimiento del liderazgo histórico de "Gabino", podrían contrarrestar su tendencia a desconocer la autoridad central del COCE.

Esta mayor representatividad del Frente Oriental puede ayudar a contrarrestar los problemas de acción colectiva, lo que permitiría presentar una posición más cohesionada en materia de paz y manejo de recursos, pero no necesariamente más dúctil en unas eventuales negociaciones. De todas maneras, el recorrido que hemos hecho en esta comparación del desarrollo de los distintos frentes muestra que es necesario tener en cuenta a este frente y al nuevo grupo de líderes que está emergiendo para cualquier tipo de exploración de conversaciones que busquen construir un consenso más general del conjunto de los frentes. Y, obviamente, tener en cuenta que la "comodidad" que encuentran estos comandantes en el orden social que han construido en sus territorios, hace evidente que los incentivos ofrecidos a las FARC —representación política para los jefes con curules en el Congreso e integración económica para las bases, que evitaría su regreso a la guerra— son completamente inadecuados para el caso del ELN, mucho más interesado en conservar el poder local y regional que han conseguido en sus zonas. Así, cualquier esfuerzo de negociación tendría que buscar, necesariamente, algún tipo de articulación de la especie de cogobierno que detentan en sus territorios con la lógica y el funcionamiento de las instituciones del orden nacional.

Unas sugerencias a modo de conclusiones

La conclusión que se desprende lógicamente del aparte anterior, lo mismo que del conjunto de estudios regionales que hemos venido comparando, es que el punto de partida de cualquier acercamiento al ELN con respecto a la paz debe arrancar del reconocimiento de las esenciales diferencias de este grupo con las FARC. Así, el ELN dista mucho de ser una guerrilla de campesinos colonos de la periferia del mundo centroandino, radicalizados por el discurso político de algunos miembros y sectores del partido comunista, que se expande, desde las zonas de colonización periférica del mundo andino hacia zonas en rápida expansión económica con grandes desigualdades sociales y una precaria regulación estatal, con un discurso de toma del poder por las armas.

En ese sentido, hay que recordar que las FARC surgieron de la radicalización de guerrillas campesinas, —originadas en la lucha contra los gobiernos conservadores en la Violencia de los años cincuenta con la ruptura con sus aliados iniciales, las guerrillas liberales— que encuentran, gracias al influjo de miembros del Partido Comunista, de línea moscovita, un discurso que los proyecta hacia la expansión hacia

regiones más integradas al conjunto del país con un proyecto de toma del poder nacional (Aponte, 2019).

De ahí que los incentivos que se ofrecieron a las FARC para su desarme e integración, —participación política para sus líderes, desarrollo rural integral y garantías para la movilización social— no representen ventajas para los comandantes del ELN, más interesados en mantener su control del orden local y responder a las tensiones endógenas de sus territorios que en un proyecto político de orden nacional. Las FARC esperaban, tal vez con excesivo optimismo, que las movilizaciones sociales de grupos alternativos y las curules de las regiones marginadas les iban a permitir avanzar en su camino hacia el poder. Y que su insistencia, un tanto tímida, en que unas medidas de reforma y desarrollo rurales permitirían que los campesinos de las zonas de colonización periférica, —donde se originaron y que constituyen, supuestamente, su base social—, pudieran irse integrando en la economía legal de esos territorios. De ahí su propuesta de las curules adicionales de paz para esos territorios, que tanta controversia han despertado.

En cambio, el ELN no considera que la mera inclusión de los líderes en los cuerpos colegiados y la concesión de algún acceso a la propiedad de la tierra para algunos campesinos colonos constituyan una respuesta suficiente a los problemas estructurales del país; por otra parte, sus dirigentes han afirmado con frecuencia que no tienen pretensiones de acceder a instancias de representación nacional, pues se consideran solo como interlocutores bisagras entre el Estado y las sociedades de las regiones que dicen representar. De ahí su rechazo inicial a la participación electoral, al considerar que estaban ya agotadas las vías democráticas para la reforma del Estado, caracterizado como un mero instrumento de las oligarquías nacionales al servicio de los intereses imperialistas, en una concepción bipolar de la sociedad, muy ligada a la mentalidad de la Guerra Fría de los años sesenta y setenta.

Pero, tampoco es el ELN actual el movimiento guerrillero de su etapa fundacional, cuando líderes de sectores medios, —casi siempre de origen urbano, provenientes del mundo sindical y estudiantil, que buscaban insertarse en las luchas del mundo campesino marginal, aprovechando los residuos de antiguas guerrillas liberales con dificultades para insertarse en las jerarquías del liberalismo tradicional— decidieron, frente a las limitaciones del sistema político para tramitar las necesarias transformaciones sociales que exigían los profundos cambios que experimentaba la sociedad colombiana en los años sesenta, que estaban cerrados los caminos para las reformas democráticas que el país necesitaba.

Precisamente, fue el fracaso de este esfuerzo de cambio revolucionario de estilo jacobino, el que condujo a la recomposición que se refleja en lo que conocemos como el ELN de hoy, objeto del análisis de este libro. Este

fracaso se debió a los problemas que el liderazgo autoritario de entonces, con una posición campesinista radical e intolerante frente a los sectores sindicales y estudiantiles del mundo urbano, produjo, al sobreestimar las capacidades revolucionarias de sus seguidores y desconocer las limitaciones que los contextos locales y regionales de las regiones escogidas como escenarios de su opción violenta. De ahí la recomposición, liderada por "el Cura" Pérez, basada en una estructura muy descentralizada, de carácter federal con un mando colegiado, que se expandía a las regiones a partir de una adhesión de organizaciones sociales relativamente autónomas, surgidas como respuesta a sus problemas concretos, que se reconocen en el discurso voluntarista del ELN.

Sin embargo, estas opciones voluntaristas de estirpe jacobina encontraban, todas ellas, un contexto estructural favorable en las tensiones de larga duración de un problema agrario nunca resuelto. Así, la geografía de los hechos violentos de las últimas décadas, desde los conflictos agrarios de los años veinte y la Violencia de los años cincuenta, evidencia, en primer lugar, las dificultades históricas del sistema político colombiano para tramitar las tensiones sociales de los pobladores de las regiones en procesos de integración gradual al conjunto de la nación colombiana. Esta incapacidad conduce a la tendencia normal a la represión estatal de las movilizaciones sociales de protesta que están expresando esa incapacidad y exigiendo la presencia directa de las agencias del Estado central que no esté mediada por los poderes locales y regionales previamente existentes, normalmente representados en las redes de los partidos tradicionales y de sus facciones (Bolívar, 2006).

Por otra parte, estas tensiones, junto con la incomprensión de las agencias del Estado y su estigmatización de la protesta social, se convierten en un escenario favorable a la inserción de grupos de corte jacobino, en este caso de inspiración marxista-leninista, que deciden que la opción armada es la única solución posible para esas tensiones, pues consideran que están cerradas las vías democráticas para las indispensables reformas. Por eso, estos grupos insertan las luchas de las comunidades en una escisión maestra, que parte de una lectura bipolar de la sociedad, basada en la confrontación amigo/enemigo, muy propia de la Guerra Fría de décadas pasadas.

Por eso, nuestra propuesta de mirada interactiva del conflicto, que interrelaciona los llamados factores estructurales con las motivaciones subjetivas de los agentes, enmarca el desarrollo de los hechos violentos de las décadas recientes en el proceso de larga duración de la construcción gradual del Estado, especialmente en lo que tiene que ver con sus dimensiones de integración territorial y articulación política. En esas dimensiones, nuestro equipo insistía en considerar las dificultades del sistema político, —basado durante siglo y medio en las redes de los partidos tradicionales

como confederaciones laxas de poderes regionales y locales— para articular a los grupos organizados al margen del bipartidismo en las zonas fronterizas de colonización campesina a la lógica del Estado (González, Bolívar y Vásquez, 2002).

Pero la inserción de grupos de orientación jacobina e inspiración marxista leninista de diferentes corrientes, que aprovechaban las limitaciones del reformismo estatal, tuvo aspectos diferentes según las particularidades de las regiones, sin lograr nunca afectar la totalidad del territorio nacional. Esas diferencias de los tipos y momentos de los hechos violentos respondían, de alguna manera, a la presencia diferenciada de las instituciones del Estado, que actuaban de manera diferente según la relación que tuvieran con los poderes previamente existentes en localidades y regiones (González, Bolívar y Vásquez, 2002).

Esta diferenciación se reflejaba en cierto carácter híbrido de las instituciones estatales realmente existentes, algunas de las cuales tenían un comportamiento relativamente cercano a la normatividad formal, que mostraban cierto dominio directo de la sociedad, en contraste con el dominio indirecto en algunas regiones y localidades, donde el Estado funcionaba por mediación de los poderes de hecho previamente existentes. Pero, ambos tipos de dominio se encontraban con zonas donde la autoridad estatal estaba en disputa con otros actores que le pugnaban su soberanía (Uribe M.T. 2001).

De ahí que cualquier proceso de paz tenga que tener, como insistía Sergio Jaramillo (Jaramillo, 2014), un enfoque territorialmente diferenciado según las circunstancias de cada región y según la realidad concreta de las relaciones que los diferentes grupos armados han construido en ella (Vásquez, 2015, 2016). En algunos sitios, habría que ir civilizando y democratizando, gradualmente, las relaciones de los actores armados con las poblaciones de las regiones donde tienen dominio o influencia, mientras que, en otras, bastaría con articular las organizaciones comunales, relativamente autónomas, con la lógica de las instituciones estatales (Arjona, 2008) .Y esta rearticulación también debería aplicarse a las regiones en las cuales la presencia del Estado aparece mediado por las redes clientelistas, normalmente bastante corruptas, de los partidos, tanto los tradicionales como los nuevos y sus respectivas facciones (González, 2020).

Este enfoque territorialmente diferenciado implicaría la necesidad de que cualquier negociación de paz deba tener en cuenta a las poblaciones de las regiones afectadas por el conflicto. En ese sentido, la creación de mesas regionales paralelas a las negociaciones de paz en Quito y La Habana, donde participaban diferentes organizaciones sociales, ofrecía algunas ventajas al buscar salidas concretas a las diversas problemáticas regionales. Incluso, se podría pensar en una especie de asamblea nacional

de esas distintas organizaciones con alguna cercanía al ELN, para tratar de articular las tensiones que representan en las regiones en un proyecto de negociación de carácter nacional[7].

Obviamente, este tipo de asamblea obligaría a muchas organizaciones a hacer públicas sus relaciones de afinidad selectiva con el ELN, haciendo visible el sistema de círculos concéntricos en torno al sistema central del ELN, que caracteriza a este grupo, con las lógicas consecuencias de estigmatización de esas organizaciones que traerían consigo. Para hacer más viable esta propuesta, deberían tenerse en cuenta los acumulados logrados en las negociaciones anteriores, como han señalado algunos de los negociadores (por ejemplo, Socorro Ramírez, que es la prologuista de este libro), y los informes de la MAPP-OEA, que permiten tener alguna idea de las demandas de las organizaciones sociales de las regiones donde tiene presencia el ELN.

Y, por parte del Gobierno, se podría pensar en crear una especie de consejerías territoriales de paz que tendría a su cargo zonas de intervención integral del Estado (ZIIES), que agruparían a los municipios, corregimientos y veredas de los territorios donde funcionan los diferentes frentes del ELN para intentar responder de manera articulada a los problemas concretos de cada sitio. Serían agrupaciones de municipios, al estilo de los actuales PDETS, pero en los que se buscaría atender integralmente a los problemas de infraestructura vial, salud, educación, asistencia técnica y especialmente de administración de justicia: se podría pensar en estructuras móviles de fiscales, jueces y policía, el estilo de los jueces pedáneos de los tiempos coloniales y aprovechar los mecanismos locales de justicia desarrollados en algunas regiones (como los logrados en algunas zonas del Catatumbo con apoyo de la cooperación internacional). Esto respondería a las carencias de regulación social que legitiman de alguna manera el orden social construido por las guerrillas, que responde a la debilidad manifiesta de las instituciones estatales del orden local, que normalmente reducen su acción al ámbito de las cabeceras municipales.

Pero, habría que pensar también en estructuras de participación y representación ciudadana de las áreas periféricas de los municipios, ya que normalmente las agencias de administración local se concentran en las cabeceras municipales, que suelen estar sobrerrepresentadas en los concejos municipales. Habría que revitalizar las inspecciones de policía y los corregidores, pero pensar también en la creación de ediles semejantes a los de las alcaldías locales de las ciudades. En ese sentido, iría la creación de las curules de paz, acordadas en La Habana, pero entorpecida sistemáticamente por los sectores uribistas y sus aliados, por considerar,

7 En ese sentido, se podrían recuperar aspectos de la propuesta de convención nacional, que impulsaba el ELN en 1996 y 1997, en el contexto de las negociaciones de entonces (Vargas, 1988).

equivocadamente, que quedarían en manos de simpatizantes de las FARC; desconociendo la situación concreta de esas comunidades periféricas, que estuvieron inmersas en el juego cruzado de los combatientes y se vieron obligados a aceptar, muchas veces en contra de su voluntad, la autoridad detentada, de hecho, por los grupos guerrilleros. Por eso, unas elecciones locales, bajo supervisión internacional, harían evidente esta situación, muy lejana de representar ventajas electorales para la FARC, como esperaría este nuevo partido.

En cambio, una mirada más compleja y menos estigmatizante de esas organizaciones permitiría aprovechar el potencial que representan las organizaciones comunitarias espontáneas de las zonas periféricas de municipios y corregimientos, que compensan en algo la falta de regulación social que deja la precariedad de las instituciones estatales (Arjona, 2008). Esas organizaciones, de diversa índole y orientación, como juntas comunales de veredas, asociaciones de colonos vecinos y otras semejantes, se organizan para solucionar problemas como la falta de escuelas y la mejora de caminos en zonas lejanas de las cabeceras municipales. Sin embargo, con frecuencia algunas de estas organizaciones, especialmente las más aisladas del centro, son miradas con suspicacia tanto por las administraciones locales como por las fuerzas estatales de seguridad, que tienden a considerarlas como cómplices o aliadas de los grupos guerrilleros (Aponte, 2019).

Esta tendencia a la estigmatización no tiene en cuenta la complejidad de la situación de esas organizaciones comunales y sus pobladores, que se encuentran inmersas en la competencia entre soberanías, en la que la presencia de las instituciones estatales es escasa, en circunstancias donde les toca negociar o aceptar con la autoridad de los comandantes guerrilleros, sin que esto suponga necesariamente compartir su proyecto político. Obviamente, en algunos casos puede haber cierta simpatía o afinidad selectiva con los grupos insurgentes, especialmente si se tiene en cuenta su organización en círculos concéntricos, que muestran diferentes grados de cercanía con ese proyecto. Y estas diferencias ponen en riesgo precisamente a las poblaciones ubicadas en los círculos más exteriores de la organización, que suelen ser los menos involucrados en ella.

Las ambigüedades de ese tipo de organizaciones, que se desprenden del estilo propio de funcionamiento del ELN en los territorios, ponen a sus pobladores en la mira de los grupos de violencia privada e inducen un comportamiento de las fuerzas estatales de seguridad cercano al de un ejército de ocupación, con conductas represivas y autoritarias, que producen el efecto contraproducente al planeado: la profundización de la división de la población y las autoridades estatales.

Esta visión estigmatizante corresponde, a veces a una visión complotista de la situación, que agrupa, en un todo homogéneo e indiferenciado

a todos los opositores o críticos del Estado que comprende desde los participantes en las protestas sociales, los defensores de derechos humanos y los miembros de los grupos de izquierda legal hasta los grupos guerrilleros insurgentes, como si hicieran parte de una estrategia unificada en contra del sistema, que combina todas las formas de lucha. En el fondo, esta visión complotista responde a una visión bipolar de la sociedad y de la historia, basada en la contradicción amigo/enemigo, que no reconoce matices sino el contraste blanco/negro.

Curiosamente, esta visión complotista y bipolar de la historia es compartida también, desde la izquierda, por grupos como el ELN, que precisamente tienden a enmarcar las micromotivaciones de las regiones y localidades donde se inserta con una escisión maestra, en la que se contrapone un pueblo en una sociedad organizada que este grupo pretende representar a un Estado, representante de las oligarquías y aliado de los intereses imperialistas de los Estados Unidos, que lucha contra los procesos organizativos de la clase popular.

Así, el ELN concibe su lucha como el enfrentamiento total con un Estado homogéneo, que representa de manera automática los intereses de una oligarquía, mirada igualmente como un conjunto homogéneo sin contradicciones internas, que está al servicio de las multinacionales del sistema imperialista y no tiene en cuenta las necesidades del conjunto de la población colombiana. En ese discurso nacionalista y antioligárquico se destaca el tema de la defensa de los recursos naturales, especialmente los petroleros, pero también la construcción de poder popular desde la base, que expresaría formas de democracia directa del nivel local, más cercano al socialismo utópico de Saint-Simon y Fourier que a la contradicción esencial de capital y trabajo de Marx.

Sin embargo, habría que empezar por señalar un acercamiento diferenciado y desagregado a los problemas presentados por las asociaciones regionales y que implica, al menos inicialmente, cierto distanciamiento con respecto a la mirada bipolar de la sociedad, al mostrar tanto la heterogeneidad interna de los grupos que se consideran parte del polo popular como la presencia diferenciada de las instituciones estatales según sus relaciones con las situaciones locales y regionales. Esta mirada desagregada de las instituciones estatales debería estar acompañada por una percepción más realista de la correlación de fuerzas, que está lejos de representar una situación simétrica, de igualdad de condiciones frente a las fuerzas estatales: una cosa es mantener cierta capacidad de resistencia local, gracias a su característica de “guerrilla miliciana”, con alguna capacidad de desestabilización con golpes de mano y ataques terroristas, y otra, ser capaz de desafiar a las fuerzas estatales de seguridad y la idea de Estado y sociedad imperante.

Pero ese distanciamiento tendría que llevar al ELN a ir desmontando su discurso totalizante y bipolar, para reconocer que no todas las situaciones regionales permiten reproducir las condiciones que llevaron a su éxito en Arauca. No es lo mismo insertarse en zonas de reciente colonización de un campesinado andino a hacerlo en territorios con poblaciones ancestrales, ni tampoco aplicar modelos extraídos del mundo andino a campesinos del Caribe, que provienen de una historia de inclusión subordinada a la estructura hacendataria y una participación en las luchas campesinas de la ANUC; pero, menos aún, en el Catatumbo que ha recibido diversas oleadas colonizadoras de gentes de varias zonas del país. Por eso, "Danielito", uno de los fundadores del frente, era muy consciente de que la historia del ELN era muy distinta de los demás frentes: "Hay unas razones muy concretas porque sucede eso. Indudablemente que no surge porque a alguien se le antojó" (Entrevista a "Danielito", en Celis y Gutiérrez, 2019, p. 37).

Hay que tener siempre en cuenta que el éxito o fracaso de la inserción de los frentes depende, como han señalado varios autores, de los procesos organizativos endógenos de los pobladores y de la calidad de las redes sociales e instituciones preexistentes, sus agravios, etc. (Arjona, 2016; Kaplan, 2017; Breslwaski, 2020), que, además, se van modificando a lo largo del tiempo (Aponte, 2021; Arjona, 2016). Pero no bastan los procesos previamente existentes, sino que es necesaria la interacción entre la agenda voluntarista de los líderes, que logran movilizar las agendas de esas diferentes organizaciones, que terminan representando anclajes territoriales y proporcionando bases sociales a la insurgencia

Así, en el posicionamiento del segundo ELN después de Anorí, se lograron articular las movilizaciones de los campesinos del bajo Cauca antioqueño, las de los campesinos pauperizados de las zonas cafeteras de Trujillo, Primavera y Bolívar en el Valle del Cauca y los colonos del campesinado andino que se asentaban en el piedemonte caucano con sus tensiones de los territorios colectivos de indígenas y afros. Además, en el Cesar, buscaron intervenir en los problemas de los trabajadores de la palma y de los campesinos expropiados por el Cerrejón; en el sur de Bolívar, se vincularon con los procesos organizativos comunitarios y la minería artesanal de pobladores antioqueños y santandereanos recién llegados. En el Catatumbo, se vincularon a las demandas de las familias colonas de los obreros petroleros y de la gente que venía del mundo andino huyendo de la Violencia (Hernández, 2006; Barrera, 2014; Gutiérrez, 2012; Escobedo, 1992; Echandía, 2013; Rincón, 2009; Espejo y Garzón, 2005; Aponte y Vargas, 2011).

Sin embargo, esta presencia del ELN en todas estas movilizaciones regionales no logró nunca traducirse en un plan estratégico de carácter nacional: los esfuerzos por incrementar sus recursos financieros u militares fueron llevando paulatinamente al deterioro de sus relaciones con las comunidades

locales, que empezaron a resentir el aumento de las extorsiones y del control del grupo guerrillero. Este deterioro y las acciones de los paramilitares para golpear a las bases sociales (reales o no), junto con el descuido del trabajo político con las comunidades y los problemas del reclutamiento de jóvenes no muy aptos para la lucha, produjo la pérdida de influencia del ELN en varias regiones, como el caso del sur de Bolívar y Barrancabermeja.

Por otra parte, a los problemas derivados de la excesiva explotación de las poblaciones sujetas a su influencia, una de las principales críticas al estilo de relación de este grupo con sus bases sociales, reales o supuestas, se refiere a la estrategia del llamado "entrismo": la inserción en las justas propuestas de las movilizaciones sociales en contra del abandono estatal, para ir colocando sus fichas claves en sus organizaciones para imponer su dominio hegemónico sobre ellas, cooptando o eliminando (incluso físicamente) a los posibles rivales, y conseguir así convertirlas en instrumentos subordinados a su proyecto político.

Tanto esas críticas, como el deterioro de la influencia del ELN en algunos territorios, conducen a la necesidad de considerar el éxito del caso araucano, donde el frente Domingo Laín evidenció su capacidad para insertarse en el movimiento de colonos campesinos que demandaban cumplimiento de las promesas del Estado en su proceso colonizador y proyectarse luego a la arena pública, mediante la promoción de cabildos abiertos en los municipios y de procesos asamblearios populares en el Arauca de los años ochenta. Esa capacidad de movilización se hizo visible en las marchas del nororiente colombiano (1987), para las cuales fortalecieron instancias organizativas de base como las agremiaciones, juntas de acción comunal, asociaciones de productores, etc. Y terminó por lograr una importante presencia en los poderes locales de la región, incluido el poder judicial, con un acceso importante a los presupuestos de los municipios, que le permitió jugar, en varios momentos, un papel como intermediario político y social frente al Estado realmente existente.

Por eso, autores como Mario Aguilera (2006, 2014) sostienen que el Frente Domingo Laín se convirtió en la mejor expresión de la estrategia de poder popular, que sería adoptada como parte medular del proyecto del ELN en su etapa de reconstitución, gracias a que modelo responde la pregunta sobre como una estructura armada debía insertarse e incrustarse en los procesos territoriales de manera exitosa. Sin embargo, convendría preguntarse si ese éxito hubiera sido posible sin los recursos proporcionados por la Mannesmann, que permitió mejorar su armamento y proyectar su influencia a frentes con menos recursos, y la cual fue definitiva para la expansión del modelo de cooptación de los diversos proyectos armados que confluían en el ELN. Y sin la posibilidad de refugiarse en Venezuela, para reclutar nuevos miembros y conseguir mayores recursos.

Pero, de todas maneras, el éxito de esta experiencia regional posicionó al Frente Domingo Laín en el conjunto de los frentes elenos, pues lo convirtió en su hoja de ruta hacia el futuro, que haría de la narrativa araucana el punto de referencia para los otros frentes y de sus simpatizantes en el resto del país, que han quedado deslumbrados por los logros del llamado “Sol de Oriente”, cuya autonomía frente al comando central ha constituido un obstáculo para cualquier negociación de paz, pero también para cualquier acción colectiva.

Por eso, la importancia determinante de sus opiniones hace que sea indispensable vincular a este frente a la búsqueda de salida negociada al conflicto, sin desoír tampoco a otras voces más moderadas, pero teniendo en cuenta que estos sectores “blandos” no poseen ya la hegemonía tradicional de los viejos comandantes aliados del “Cura” Pérez. Sin embargo, anotan algunos, persiste aún cierto respeto por el liderazgo histórico de “Gabino”, el único de los líderes que sobrevive de la época fundacional. Pero, al lado del reconocimiento del nuevo equilibrio interno de fuerzas dentro del ELN, es urgente la creación de un espacio democrático de dirección colectiva, que represente más adecuadamente el equilibrio realmente existente en el conjunto de los frentes y evite las acciones unilaterales que se aparten de las decisiones acordadas colectivamente. Solo así sería posible recomponer el consenso interno indispensable para emprender una negociación de paz que involucre a todos los frentes.

Pero, en esa negociación hay que tener en cuenta el peso creciente del Domingo Laín en el conjunto del ELN y su importante influencia en el Arauca, donde en algunos aspectos y zonas ejerce una especie de cogobierno. De ahí surgen varios interrogantes sobre lo que podría significar una negociación con este grupo, que, según algunos de sus miembros, tendría que buscar un cierto reconocimiento del poder local y regional que ya posee, y que competiría con los poderes locales y regionales vinculados al Estado central. Pero este reconocimiento debía considerar la manera transicional de ir logrando ciertas formas de vinculación de esta autoridad de hecho a la lógica del Estado, cuya soberanía en esos territorios estaría todavía en vilo, en palabras de María Teresa Uribe (Uribe M.T, 2001)

Esto no será una tarea fácil como han demostrado las dificultades encontradas para implementar el acuerdo pactado en La Habana en lo que se refiere a las curules adicionales para la representación de las regiones marginales, que todavía está pendiente de la decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, la hibridez tradicional del funcionamiento concreto de las instituciones estatales de Colombia, donde siempre han coexistido formas de dominación indirecta del Estado, mediada por las redes clientelares de los partidos tradicionales con formas más burocratizadas de dominio estatal directa, hace que esta combinación de poderes no sea del todo imposible.

Obviamente, habría que aprender de los errores de experiencias pasadas como la del despeje de Pastrana en El Caguán para buscar formas de regulación compartida entre las autoridades guerrilleras de hecho existentes y las autoridades estatales en proceso de conseguir el monopolio de la fuerza y de la administración de la justicia. En ese sentido, se podrían aprender las lecciones de la transición entre comandantes guerrilleros y comandantes militares al final de la Violencia de los cincuenta, relatados de manera magistral por las crónicas de Alfredo Molano.

Este proceso gradual y conflictivo debería estar acompañado por un proceso de educación política de todas las partes implicadas: el Estado, además de impulsar procesos de intervención integral de los territorios que supere su tradicional estilo diferenciado de presencia y articule los diferentes ámbitos de poder, debería superar la mirada criminalizante de la protesta social para aceptar, no solo de palabra, la legitimidad de la protesta social, Incluso, reconocer el papel positivo que juega tanto para mostrar las deficiencias que debe corregir en su funcionamiento como para interpretarlas como un llamado de la sociedad a ejercer un dominio directo de sus instituciones en el territorio, que supere la mediación tradicional de la clase política tradicional.

En ese sentido, la protesta sería un instrumento del fortalecimiento de las instituciones estatales, que reconocería que muchos de los movimientos insurgentes se generaron, en buena parte, por la incapacidad del Estado para emprender a tiempo las necesarias reformas. En ese sentido, la poca resonancia que encuentran los frentes guerrilleros en las tensiones sociales del Chocó —por no tener en cuenta la dimensión étnica, que, de alguna manera ha recogido la institucionalidad estatal, así sea limitadamente—, puede ser una buena lección para mostrar que las instituciones estatales pueden sintonizarse con las expectativas de las comunidades.

Es más, las instituciones estatales podrían aprovechar el rico potencial que representan las organizaciones espontáneas que han ido construyendo los pobladores de las regiones y articular las regulaciones comunitarias a la lógica estatal, en vez de imponerles formas de participación pensadas desde el centro. Esas organizaciones espontáneas de los pobladores y de sus organizaciones regulatorias, pueden servir como freno o equilibrio a la imposición del orden social guerrillero y lograr aterrizar las normas pensadas desde el centro a la realidad de regiones y localidades. Muchas veces, la tendencia a la represión estatal indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas estatales de seguridad responde a la incapacidad o debilidad de las autoridades locales y a la desconfianza frente a las organizaciones sociales que no pasan por la intermediación de las redes de los partidos tradicionales y sus facciones.

Pero, por parte del ELN, este grupo debería reconocer su inferioridad de condiciones frente al Estado para reconocer que las exigencias del

cese de los secuestros y de la voluntad de dejar las armas (no solo de explorar las posibilidades de hacerlo) no son condiciones unilaterales del Estado, sino el requisito indispensable para que las conversaciones tengan un mínimo de legitimidad para la opinión pública de la sociedad general. En su mayoría, este grupo debería dejar de menospreciar el papel de la opinión pública en la vida política, superando la tendencia a suponer que las opiniones críticas contra sus acciones son solo el producto de la manipulación de los grandes medios de comunicación y de las empresas encuestadoras, a las que acusa de ser simplemente instrumentos de las oligarquías al servicio de los intereses imperialistas.

Por otro lado, otra condición sería que el ELN comenzara a repensar su estilo de relacionamiento con las comunidades que dice representar, empezando por reconocer la existencia y legitimidad de grupos sociales distintos de aquellos que están bajo su control. En ese sentido, conviene destacar el creciente distanciamiento de sectores sindicales y gremiales, que representan opciones de cambio social, frente a la opción armada, que han ido dejando solo al ELN, cuyos apoyos se van reduciendo a las organizaciones que controla. En segundo lugar, el ELN debe empezar a cuestionar la manera autoritaria como impone su hegemonía sobre aquellas donde influye con maniobras poco democráticas y a veces violentas, que llegan a la eliminación de posibles rivales. Ese estilo autoritario, que no respeta la autonomía relativa de las comunidades organizadas, construidas algunas veces con la colaboración de los grupos guerrilleros, estaría mostrando que responde al intento de imponer un proyecto de inspiración jacobina, pensado por una élite de iluminados, que puede resultar tan oligárquico y opresivo de las comunidades como el proyecto de las clases dominantes que pretende combatir.

En ese sentido, el ELN debería ir superando las tensiones internas de su propio proyecto político, que oscila entre el poder popular de organizaciones autogestionadas bajo formas de democracia directa y un proyecto nacionalista de lucha antioligárquico y antiimperialista, al cual se subordinan las luchas populares para la gestión de los problemas concretos de sus comunidades. Y sopesar las consecuencias que tiene su estrategia de “entrismo” para penetrar y hegemonizar los movimientos para la deslegitimación de esas protestas y movilizaciones, que llevan a poner en riesgo la vida de sus líderes y militantes, que son puestos en la mira de la represión estatal y de la violencia de grupos privados.

En correspondencia con lo anterior, las comunidades y sus líderes deben considerar también el riesgo que conlleva su “deslumbramiento” por la experiencia exitosa del caso araucano y su correspondiente opción por la lucha armada, incluso con su estrategia recientemente adoptada de resistencia. Y, consiguientemente, asumir clara y explícitamente una

actitud de claro deslinde de sus luchas sociales frente a la opción armada, recordando las consecuencias de fórmulas como "la combinación de las formas de lucha" para la estigmatización de toda forma de protesta, que es mirada desde el enfoque bipolar de la Guerra Fría.

Pero, por parte de la sociedad colombiana en general, es necesario que sea consciente de la necesidad de superar estas tendencias estigmatizantes de la protesta social, para apreciar su lado positivo; el señalamiento de las fallas del Estado para responder a las tensiones sociales de las poblaciones marginales, que son aprovechadas por los grupos insurgentes para conseguir bases sociales en apoyo de su proyecto político. Pero, además, tanto los formadores de opinión como la generalidad de la opinión pública deben tratar de comprender la complejidad de las situaciones que enfrentan las comunidades en medio del conflicto de legitimidades y del fuego cruzado entre los combatientes, en regiones necesitadas de una intervención estatal de carácter integral que afronte, de manera diferenciada, los problemas que han llevado a las organizaciones de protesta.

Esta comprensión más compleja de las situaciones que enfrentan las poblaciones de la periferia (y de la periferia de la periferia) debería conducir a la superación de las mutuas estigmatizaciones, que reflejan la concepción maniquea de dos polos enfrentados (buenos y malos), que obstaculizan la búsqueda de una salida negociada al conflicto, Y esta superación de la mirada maniquea de la sociedad debería llevar al conjunto de la sociedad colombiana a apreciar los esfuerzos y logros de los negociadores de procesos pasados, que han mostrado la necesidad de enmarcar tanto los movimientos de protesta social de los pobladores de estas regiones marginales como los movimientos insurgentes que se apoyan en ellos en el proceso gradual de integración de estos territorios y sus poblaciones en la lógica de la nación y del Estado. Mucha de la resistencia de algunos sectores de la sociedad civil, como gremios empresariales y organizaciones sociales del país integrado, pero también de sectores del mundo político, tanto nacional como regional y local, se debe a la incomprensión de las situaciones que afrontan esas poblaciones de regiones de la periferia y de "la periferia de la periferia", que sirven de caldo de cultivo para la inserción de grupos jacobinos, que encuentran en él la justificación de su opción armada.

Por eso, el regreso a las negociaciones sería la mejor demostración de que no están cerradas las vías democráticas de la necesaria transformación social que el país necesita con urgencia. Sin embargo, para ello, se necesita el involucramiento de los diversos sectores de la sociedad, para que aporten, desde sus respectivos puntos de vista, soluciones concretas para los problemas que afrontan esas tensiones, que no son normalmente percibidas desde el centro del país, donde las instituciones estatales responden, de alguna manera, así sea limitada a los llamados de la sociedad.

Pero, en las márgenes de la sociedad se percibe lo que hemos denominado "presencia diferenciada del Estado", que hace que algunos hablen de "dos o tres Colombias". El desafío es ir construyendo juntos una nueva Colombia, que combine los esfuerzos del Estado central con las fuerzas políticas de regiones y localidades, sean formales o informales, para la construcción de una sociedad plural y menos desigual, donde quepamos todos, y un Estado más democrático, que exprese las heterogeneidades de nuestra nación, con una imagen de futuro compartido.

Bibliografía

Como este capítulo conclusivo no hace sino intentar articular de manera coherente los diversos estudios regionales de caso y el capítulo inicial, y completarlos con algunas reflexiones adicionales, la bibliografía de este capítulo recoge, la mayoría de las veces, la de los capítulos anteriores, pero, añade algunas referencias propias.

Aguilera, Mario (2006). ELN*: entre las armas y la política.* En Gutiérrez, Francisco (comp.), *Nuestra guerra sin nombre.* IEPRI y Editorial Norma.

Aguilera, Mario (2014). *Contrapoder y justicia guerrillera: fragmentación política y orden insurgente en Colombia, 1952-2003*. IEPRI.

Amaya Alba, Daniel Ricardo (2021). El Frente de Guerra Suroccidental: Entre el arraigo social o la reconfiguración militar. En Aponte, Andrés y González, Fernán (eds.), *¿Por qué es tan difícil negociar con el eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020.* Cinep/PPP.

Aponte, Andrés (2012). Cúcuta y el Catatumbo: entre la integración y la marginalización. Disputas territoriales, arreglos institucionales e imposición de un orden social de la guerra. En González, Fernán y otros, *Conflicto y territorio en el Oriente colombiano*. Odecofi-Cinep/PPP.

Aponte, Andrés (2019). *Grupos Armados y construcción de orden social en la esquina sur del sur del Tolima, 1958-2016*. Cinep/PPP-EDUCAPAZ-PUJ-Cali.

Aponte, Andrés (2021). El rompecabezas del ELN. En Aponte, y González, Fernán [eds.], *¿Por qué es tan difícil negociar con el eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020*. Cinep/PPP.

Aponte, Andrés (2021). Descifrando al ELN: Un federalismo insurgente, génesis y desarrollo de sus constreñimientos organizacionales, 1964-2020. En Aponte, Andrés y González, Fernán (eds.), *¿Por qué es tan difícil negociar con el eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020*. Cinep/PPP.

Aponte, Andrés y González Ramírez, Valentina (2021). Un poder popular distorsionado: madera, oro y coca como determinantes organizacionales y armados del ELN chocoano. En Aponte, Andrés y González, Fernán (eds.), *¿Por qué es tan difícil negociar con el eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020*. Cinep/PPP.

Aponte, Andrés (2013). *Santa Rosa del Sur: el caso de un sincretismo institucional en medio de la lucha armada*. Mimeo.

Aponte, Andrés (2019). *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1948-2016*. Educapaz-Cinep/PPP-PUJ Cali.

Aponte, David y Vargas, Andrés (2011). *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el* ELN. CERAC, Odecofi-Cinep/PPP, Editorial Códice.

Arenas, Jaime (1971). *La guerrilla por dentro*. Editorial Tercer Mundo.

Arjona, Ana (2008). Grupos Armados, comunidades y órdenes Locales: Interacciones complejas. En González, Fernán (ed.), *Hacia la reconstrucción del país. Desarrollo, Política y Territorio en regiones afectadas por el conflicto armado* Odecofi-Cinep/PPP.

Arjona, Ana (2016). Institutions, civilian resistance and wartime social order: A process-driven natural experiment in the Colombian Civil War. En *Latin American Politics and Society*, *58*(3), 99-122.

Arjona, Ana (2017). *Rebelocracy. Social order in the Colombian civil war*. Cambridge University Press.

Barrera, Víctor (2014). Las vicisitudes de la integración. Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar. En González, Fernán y otros, *Territorio y conflicto en la Costa Caribe*, Odecofi-Cinep/PPP.

Bolívar, Ingrid (2006). Transformaciones de la política: movilización social, atribución causal y configuración del Estado en el Magdalena Medio. En Archila, Mauricio y otros, *Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio 1990-2001.* Colciencias, Cinep/PPP.

Breslwaski, Jori (2020). The Social Terrain of Rebel Held Territory. *Journal of Conflict Resolution*, 65(2-3), 1-27.

Broderick, Walter Joseph (2013). *El cura guerrillero.* Editorial Icono.

Carroll, Leah (2011). *Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008* University of Notre Dame Press [Democratización violenta. Movimientos sociales, élites y política en Urabá, El Caguán y Arauca, Colombia 1984-2001]. Ediciones Uniandes, 2015.

Celis, Luis (2019). *Una Paz sin dolientes. Diálogos Gobierno-*ELN*, 1982-2019.* NC Producciones-Impresol Ediciones.

Celis, Luís y Gutiérrez, Omar (2015). *Las dinámicas de colonización campesina del Sarare, la organización comunitaria, la acción colectiva y el devenir de parte de este movimiento campesino en guerrilla. 1959-1980*. Mimeo.

Currea-Lugo de, Víctor (2018). *"Historias de guerras para tiempos de paz. Relatos de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional*. Planeta.

Echandía, Camilo (2013). *Auge y declive del Ejército de Liberación Nacional (*ELN*). Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación*. FIP [Fundación Ideas para la Paz].

Espejo, Germán y Garzón, Juan Camilo (2005). *La encrucijada del* ELN. Fundación Seguridad y Democracia.

González, Fernán (2014). *Poder y violencia en Colombia.* Odecofi-Cinep/PPP.

González, Fernán (2018, octubre 26). Las Violencias de monseñor Guzmán [Conferencia en la presentación del Archivo Guzmán, en la Universidad del

Valle, Cali] (inédita). Disponible en la página web del Archivo Guzmán, en la Universidad del Valle.
González, Fernán (2020). Llevar el Estado a las regiones o las regiones al Estado. En González, Fernán, *Más allá de la coyuntura-Entre la paz territorial y "la paz con legalidad"*. Cinep/PPP.
González, Fernán; Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo (2002). *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado.* Cinep/PPP.
Guerra, Sebastián (2020). *Oportunidad y obstáculo. La imposible convergencia entre los procesos de negociación con las* FARC *y el* ELN *durante el gobierno de Juan Manuel Santos*. Mimeo.
Gutiérrez, Francisco (2012). The Dilemmas of Recruitment: The Colombian Case. En Guichaoua, Yvan (eds.), *Understanding Collective Political Violence.* Palgrave Macmillan UK.
Gutiérrez, Francisco (2007). ¿*Lo que el viento se llevó? Los partidos y la democracia en Colombia, 1958-2002.* Editorial Norma.
Gutiérrez, Francisco (2014). *El orangután con saco de leva, Cien años de democracia y represión en Colombia, 1910-2010.* Universidad Nacional de Colombia, IEPRI.
Gutiérrez, Francisco (2018). The FARC's militaristic blueprint. *Small Wars & Insurgencies, 29*(4), 629-653.
Gutiérrez, Francisco (2017). *La Destrucción de una República*. Universidad Externado- Taurus.
Gutiérrez, Francisco (2019). *Clientelistic warfare: Paramilitaries and the State in Colombia (1982-2007)*. Oxford: Peter Lang.
Gutiérrez, Francisco y Wood, Elizabeth (2014). Ideology in Civil War: instrumental adoption and beyond. *Journal of Peace Research*, 51, 213.
Gutiérrez, Francisco y Wood, Elizabeth (marzo de 2017). What Should We Mean by "Pattern of Political Violence"? Repertoire, Targeting, Frequency, and Technique. *Perspectives on politics*, 15(1) 20-41.
Guzmán, Germán, Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo (1967). *La Violencia en Colombia.* Tercer Mundo editores.
Harnecker, Martha (1988a). *Reportajes sobre Colombia. Entrevista a dirigentes de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional*. Quimera Ediciones.
Harnecker, Martha (1988b). ELN*: unidad que multiplica. Entrevista a dirigentes máximos de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional sobre la historia del* ELN*, y una reflexión sobre la situación de las guerrillas en ese momento (1988).* Biblioteca Popular.
Hernández, Milton (2006). *Rojo y negro historia del* ELN. Editorial Txalaparta S.I.
Hernández, Fernando (2006). *Negociación de paz con el* ELN*: una aproximación metodológica*. 1a ed. Corporación Nuevo Arcoíris.
Kaplan, Oliver (2017). *Resisting war. How communities protect themselves.* Cambridge University Press.
Kalyvas, Stathis (2001a). La violencia en medio de la guerra civil Esbozo de una teoría. *Análisis Político,* 42, 1-25.
Kalyvas, Stathis (2001b, octubre). New and Old Civil Wars: a valid distinction? Research Note. *World Politics*, *54*(1).

Kalyvas, Stathis (2004). "La ontología de la "violencia política": acción e identidad en las guerras civiles. *Análisis Político*, 52, 52-76.

Kalyvas, Stathis (2006). *The logic of violence in civil war.* Cambridge University Press

Molano, Alfredo (2017). *Trochas y fusiles.* Debolsillo.

Larratt-Smith, Charles (2021). El ELN en Arauca: El fortín guerrillero en la sombra de los Andes" En Aponte y González (eds.), *¿Por qué es tan difícil negociar con el eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020.* Cinep/PPP.

López Vigil, María (1989). *Camilo camina en Colombia*. Editorial Nuestro Tiempo.

Mampilly, Zachariah (2011). *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life During War*. Cornell University Press.

Mann, Michael (2006). El poder autónomo del estado: sus orígenes, mecanismos y resultados. *Revista Académica de Relaciones Internacionales,* 5, 1-43.

Mann, Michael (2012). *The sources of social Power II*. Cambridge University Press [Las fuentes del poder social, El desarrollo de las clases y los estados nacionales, 1760-1914. Alianza editorial, 1997.

Medina, Carlos (1996). ELN*: Una historia contada a dos voces.* Rodríguez Quito Editores.

Medina, Carlos (2000). *Elementos para una historia de las ideas políticas del Ejército de Liberación Nacional. La historia de los primeros tiempos (1958-1978).* Vol. 1. UNAL-Rodríguez Quito.

Medina, Carlos (2007). FARC-EP *y* ELN*. Una historia política comparada (1958-2006).* [Trabajo de grado presentado para optar por el título de Doctor en Historia]. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia.

Medina, Carlos (2012). ELN*: Notas para una historia de las ideas políticas (1958-2007).* Universidad Nacional de Colombia.

Medina, Carlos (2019). *Ejército de Liberación Nacional (*ELN*). Historia de las ideas políticas, 1958-2018.* Universidad Nacional.

Mouly, Cécile y Hernández, Esperanza (2020). *Logros, desafíos y lecciones del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, 2010-2019* [Documento de trabajo]. https://bit.ly/37czIEg

Peñate, Andrés (1998). *El Sendero Estratégico del* ELN*: Del Idealismo Guevarista al Clientelismo Armado* [Documento de Trabajo nº. 15] Paz Pública, Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia, Universidad de Los Andes.

Ramírez, Socorro (2018, septiembre 18). Lecciones de los diálogos por la paz con el ELN. *El Espectador.* https://bit.ly/2N25mNG

Restrepo, Javier (1995). *La revolución de las sotanas: Golconda 25 años después.* Planeta.

Rincón, John Jairo (2003). *El Catatumbo: múltiples experiencias de trabajo asociativo y cooperativo, 1980-1990.* Mimeo.

Rodríguez, Nicolás y García, Antonio (2017). *¡Papá, son los muchachos! Así nació el Ejército de Liberación Nacional (*ELN*) en Colombia*. Ocean Sur editores.

Rodríguez, Alba (2005). Acciones colectivas en el conflicto político colombiano: ¿De guerrilla a grupos terroristas? El caso del ELN. *Política y Sociedad*, *42*(2), 133-147.

Rodríguez, Alba (2009). *Acción colectiva, violencia política y género: el análisis de las organizaciones insurgentes político-militares en Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (*ELN*) actor de referencia.* Universidad Complutense de Madrid.

Rodríguez José (2015). *Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense.* Odecofi-Cinep/PPP.

Staniland, Paul (2012). Between a rock and a hard place insurgent fratricide, ethnic defection, and the rise of pro-state paramilitaries. *Journal of Conflict Resolution*, *56*(1), 16-40.

Staniland, Paul (2014). *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse.* Cornell University Press.

Ugarriza, Juan y Pabón, Nathalie (2017). *Militares y guerrillas: La memoria histórica del conflicto armado desde los archivos militares, 1958-2016.* Universidad del Rosario.

Uribe, María Teresa (2001). Las soberanías en disputa: ¿conflicto de identidades o de derechos? En Uribe, María Teresa, *Nación, ciudadano y soberano.* Corporación Región, Medellín.

Vargas Mario (2006). ELN: entre las armas y la política. En Gutiérrez, Francisco (comp.), *Nuestra guerra sin nombre*. IEPRI y Editorial Norma.

Vargas, Alejo (1992). *Magdalena medio santandereano. Colonización y conflicto armado,* Cinep.

Vargas, Alejo (1998). Una mirada analítica sobre el ELN. *Controversia,* 173.

Vásquez, Teófilo, Vargas, Andrés, y Restrepo, Jorge (2011). *Una vieja guerra en un nuevo contexto: Conflicto y territorio en el sur de Colombia.* Pontificia Universidad Javeriana.

Vásquez, Teófilo (2006). Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el Magdalena Medio, 1990–2001. En Archila, Mauricio y otros, *Conflicto, poderes e identidades en el Magdalena Medio, 1990-2001.* Cinep/PPP.

Vicepresidencia de República de Colombia – Fondo Inversión para la Paz (2003). *Panorama actual del Chocó.* https://bit.ly/3tyRdbm

Villamizar, Darío (2016, febrero 16). Sotanas, política y fusiles. *El Espectador.*

Velandia, Carlos (2012). Los ajusticiamientos. *Revista Semana.*

Wood, Elisabeth (2008). The Social Processes of Civil War: The Wartime Transformation of Social Networks. *Annual Review of Political Science,* 11, 539-56.

Autores

Andrés F. Aponte González. Politólogo e historiador de la Universidad de los Andes. Maestro en Sociología General por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París, Francia). Investigador y coordinador del equipo de Conflicto y Paz del Cinep/PPP. Interesado en el análisis de las dinámicas y lógicas del conflicto armado en diversas regiones del país, en particular, desde una perspectiva de trayectoria organizacional y territorial de los grupos armados y los órdenes sociales que establecen en ciertas localidades del país.

Fernán E. González González. Investigador del Cinep/PPP por más de cuarenta años, donde ha sido coordinador de investigaciones, subdirector y director general. Además de sus pregrados en Filosofía y Letras y Teología, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes y master of arts en Historia de América Latina de la Universidad de California en Berkeley, donde realizó estudios de doctorado. Profesor en varias universidades dentro y fuera del país. Su especialidad es la historia política de Colombia y de América Latina, con énfasis en las relaciones entre Iglesia y Estado, la formación del bipartidismo en Colombia y el seguimiento a la violencia reciente en relación con el proceso de construcción del Estado colombiano. Autor de varios libros y artículos, entre los que se destaca *Poder y violencia en Colombia*, considerado uno de los libros más importantes de los últimos años en el país y declarado fuera de concurso en la categoría Ciencias Sociales y Humanas en los Premios Nacionales de Ciencias y Solidaridad (2015) de la Fundación Alejandro Ángel Escobar.

Juan Diego Forero Pineda. Economista. Estudiante de maestría en economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Con interés en el área de análisis económico de conflictos y desarrollo económico. Con publicación en el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado de la Universidad del Rosario "A criminal Peace: Mapping the murders of ex-FARC combatants".

Daniel Ricardo Amaya Alba. Politólogo con énfasis en paz y resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, maestrante en Ciencia Política de la Universidad de los Andes e investigador de la línea de Estado, Conflicto y Paz del Cinep/PPP.

Henry Ortega Palacio. Politólogo de la Universidad Javeriana con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz. Sus temas de especialización son el conflicto armado, la diplomacia rebelde y la construcción de paz desde la educación popular. Ha publicado sobre el Catatumbo en la *Revista Politai* y en colaboraciones con *El Espectador*.

Charles Larratt-Smith. Politólogo con un doctorado de la Universidad de Toronto. Sus áreas de especialización son la contrainsurgencia, el conflicto armado, y el crimen organizado. Sus trabajos han sido publicados por *Latin American Politics and Society*, *Revista Controversia* y Cambridge University Press.

Valentina González Ramírez. Economista. Estudiante de maestría en economía en la Pontificia Universidad Javeriana. Interés en análisis económico de conflictos, gestión pública y género.

El presente libro, resultado de tres años de investigación interdisciplinaria del Cinep con el apoyo de Diakonia, revela las dificultades del "federalismo insurgente" del Ejército de Liberación Nacional (eln) para una salida negociada al conflicto y ofrece una juiciosa revisión histórica de su organización a escala local-regional desde sus caudillismos iniciales, pasando por una resignificación de su discurso y reagrupación confederada, hasta una tercera versión de esta guerrilla hegemonizada por uno de sus frentes y sus aliados.

Las tensiones entre dos tendencias contradictorias dentro del eln y las actuales posibilidades y limitaciones de este ejército rebelde —tanto para la guerra como para intentar hacer la paz— se describen en esta obra que, además, ofrece un aporte académico para comprender esta organización insurgente. Las conclusiones y recomendaciones que se ofrecen al final recogen, además de un gran acervo investigativo, el clamor de las comunidades y regiones por avanzar en la construcción de paz y proteger sus vidas, territorios y dignidad.

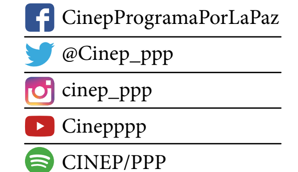






ISBN 978-958-644-292-3





Colección Territorio, Poder y Conflicto